ENCICLOPEDIA ESPAÑOLA

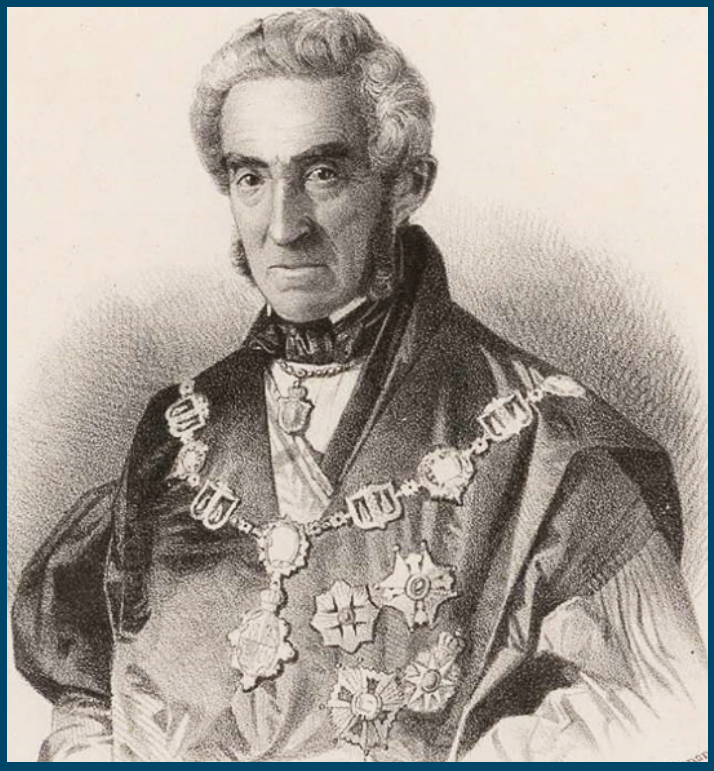
DE

DERECHO Y ADMINISTRACIÓN

O

Nuevo teatro universal de la legislación de España e Indias

Lorenzo Arrazola



TOMO VIII

Casquete - Ciudades de voto en Cortes

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

ENCICLOPEDIA ESPAÑOLA DE DERECHO Y ADMINISTRACIÓN

ENCICLOPEDIA ESPAÑOLA DE DERECHO Y ADMINISTRACIÓN

o

Nuevo teatro universal de la legislación de España e Indias

Por Lorenzo Arrazola

Tomo VIII

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Madrid, 2024

Primera edición: abril de 2024.

En cubierta: *Grabado que muestra a Lorenzo Arrazola con el collar e insignias de presidente del Tribunal Supremo, c.1860.*

© Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, para esta edición.

Esta obra está sujeta a licencia Creative Commons-Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional-CC BY-NC-ND 4.0



https://cpage.mpr.gob.es

NIPO AEBOE: 144-24-090-0 (edición en línea, PDF)
ISBN: 978-84-340-2972-9

Imprenta Nacional de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54. 28050 MADRID

ÍNDICE

Tomo I

Prólogo
Abacerías-Adoración

Tomo II

Adquirir-Anata

Tomo III

Anatema-Arrendatario

Tomo IV

Arrepentimiento-Ausente

Tomo V

Austria (Casa de)-Benefactoría

Tomo VI

Beneficencia- Buzo

Tomo VII

Cábala-Casos

Tomo VIII

Casquete-Ciudades de voto en Cortes

Tomo IX

Ciudadela-Colegios singulares o especiales

Tomo X

Colegislador-Compeler

Tomo XI

Compensación-Compraventa mercantil

Tomo XII *

Compraventa de bienes nacionales-Contabilidad mercantil

Tomo XIII (inacabado)

Contador-Cosa litigiosa

* El tomo XII incluye el índice general de la Enciclopedia, en el que se relacionan todas las voces analizadas, y para cada una tomo y página.

ENCICLOPEDIA ESPAÑOLA

DE

DERECHO Y ADMINISTRACION,

Ó

Nuevo Teatro Universal de la Legislacion

DE ESPAÑA É INDIAS.

POR

D. Lorenzo Arrazola.

D. José Romero Giner.
D. Ruperto Navarro Zamorano.
D. Joaquin José Casaus.
D. Joaquin Aguirre.
D. Miguel Puche y Bautista.
D. Pedro Gomez de la Serna.
D. Fernando Alvarez.
D. José de Mesa.

Indocti discant, et ament meminisse periti.

Tomo VIII.

MADRID.
IMPRENTA DE F. ANDRES Y COMPAÑIA,
Plazuela del Duque de Alba, núm. 4.

1855.

ENCICLOPEDIA ESPAÑOLA

DE

DERECHO Y ADMINISTRACION,

Ó

NUEVO TEATRO UNIVERSAL DE LA LEGISLACION DE ESPAÑA É INDIAS.

C

CASQUETE. Estando prohibido por los cánones y disposiciones pontificias que ningun sacerdote celebre con la cabeza cubierta (*velato capite*); la prohibicion alcanza hasta el casquete y la peluca, en cuya razon dice el misal romano: *Nemo audeat uti pileolo in celebratione missæ, sine expressa licentia Sedis apostolicæ.* Pero sobre esta prohibicion, su dispensa, y demas pormenores, véase PELUCA, dejando aqui sentado que el uso del *casquete* está sometido á las mismas prohibiciones y formalidades que el de aquella.

CASTELLANIA. En lo antiguo el cargo de *castellano, alcaide* ó gobernador de un castillo. Y tambien el distrito, ó territorio jurisdiccional de un castillo. Como está en la naturaleza de las cosas, los gefes militares superiores han tenido en todos tiempos autoridad disciplinaria y jurídica sobre sus subordinados, y en este concepto no podian menos de tenerla los *castellanos*; ó gobernadores de los castillos. Hablando de ellos y de los hombres de guerra, ó guardadores de castillos, dice la ley 9, tít. 18, Part. 2: «E el que fallare que non face bien aquello que debe en el logar do lo posiere, *debe facer justicia del*, asi como de ome que le quiere facer traicion.» Se comprende tambien, que en tiempo de guerra, y en un castillo ó fortaleza sitiados, el castellano ó alcaide ejerciere, no solo la jurisdiccion penal, sinó la civil entre los defensores y familias ó vasallos guarecidos al castillo. Pero estos no se hallaban siempre en estado de sitio, ni de guerra. Tal jurisdiccion era en todo caso la militar ó castrense, y habia ademas de ella la ordinaria *real*, ó *señorial*. Los castillos, y pricipalmente las casas fuertes, contenian considerable número de familias, y aquellos guarecian á veces á diversos pueblos y aldeas. El castillo entonces con su *alfoz*, ó territorio formaba la *castellania*, ó distrito jurisdiccional, regentado ya por el mis-

mo señor, que residia en la fortaleza, ó ya por su alcaide ó gobernador de esta.

CASTELLANO, CASTELLANA. V. **CASTILLA.**

CASTELLANO. Una de las especies de monedas usadas en lo antiguo en España. V. **MONEDA.**

CASTELLANO. En lo antiguo el que gobernaba un castillo, y tenia el cargo personal de defenderlo, ora fuese el mismo señor, como feudatario del rey, ora un encargado suyo. *Castellanus* era la voz usada por los tratadistas latinos; mientras en *romance*, aunque se dijo tambien *castellano*, prevaleció la voz de *alcaide*. Tratan latísimamente de este cargo el tít. 18 de la Partida 2, con otras muchas leyes del reino, segun queda espuesto en su artículo correspondiente, y solo notaremos en este el escesivo rigor á que llevaban las costumbres y leyes antiguas el deber del *castellano*; rigor á que no alcanza la legislacion militar del dia. El *castellano* no debia entregar el castillo, ó incurriria, de lo contrario, en la pena de traicion, que era la de muerte y confiscacion de bienes; no podia entregar, ó rendir el castillo, teniendo fuerza de hombres con que defenderlo, por ningun género de causas, ni motivos, hasta tocar las prescripciones sobre este punto en una repugnante inhumanidad y crueldad: inhumanidad y crueldad, por otra parte, inútiles; pues con matar, ó vender á su propio hijo, ni quedaba abastecida la guarnicion, privada absolutamente de víveres, ni el padre mismo lo quedaba, sinó momentáneamente, si es que no hallaban preferible la propia muerte por hambre al feroz parricidio. La ley 5, pues, del título y Partida citados, establecia; que si á un castellano ó alcaide «le cercasen el castillo, ó gelo combatiesen, debelo amparar *fasta la muerte*. E por *tormentar, ó ferir, ó matar á la muger, é los hijos*, é otros omes que el amase, nin por ser el preso, nin tormentado, nin ferido de muerte, ó amenazado de matar, nin por otra razon que ser pudiere de mal, ó de bien que le ficieren, ó le prometieren de facer, non deben dar el castillo, nin mandar que lo diesen. Ca si lo ficieren, caeria por ello en *pena de traicion*, como quien entrega castillo de su señor.»

Y todavía la ley 8, tít. 17, Part. 4, despues de asentar que el padre, en caso de necesidad, y no teniendo bienes, ni otros medios con que ocurrir al hambre, podria vender ó empeñar al hijo, añade: «E aun hay otra razon por que el padre podria esto facer; ca segund el fuero leal de España, seyendo el padre *cercado* en algun castillo, que toviesse de señor, si fuere tan cuitado de fambre, que non oviesse al que comer, *puede comer al fijo*, sin mala estanza, *ante que diesse el castillo*, sin mandato de su señor.» Lo mas estraño es, que comentando Gregorio Lopez estas disposiciones en el tiempo en que lo hacia, dé por sentado con otros autores, que, estando prohibido el matar por los preceptos del decálogo, el padre no puede matar al hijo, *salvo en este caso*; lo cual es decir que en este caso podia, y esto ya en el siglo XVI. Véase **ALCAIDE, CASTILLO.**

CASTIDAD. Del latin *castitas*, pureza de costumbres en lo relativo á los vicios carnales, constituyendo la virtud que se contrapone al de la lujuria. V. **VOTO DE CASTIDAD.**

CASTIGO. CASTIGAR. Del verbo latino *castigo*, y con las mismas significaciones. Espresa la accion de *castigar*, y tambien el *castigo* mismo, esto es, el medio ó medios, ya persuasivos ya aflictivos, empleados para conseguir la enmienda, ó correccion del que se aparta de su deber, es tibio en cumplirlo, ó de otro modo se hace *reprensible*. Pero ¿cuál es la significacion propia, estricta, de las voces con que se encabeza el presente artículo, sobre todo en lo jurídico?

Castum llamaban los romanos al hombre de costumbres puras, al hombre *irreprensible*, si bien despues se aplicó y aplica por *antonomasia* al que rehuye y detesta los deleites de la carne. Asi dice Covarrubias en su Tesoro de la lengua, que *castigare* es *cuasi castum agere*: enmendar, corregir; y aplícase en tal sentido, no solo á las personas, sinó á las obras de la inteligencia, y

á las obras de la naturaleza. Asi castigar un libro es purificarlo de errores morales ó científicos: deciase tambien de la poda de árboles: *formæ castigatissimæ mulier* era la muger de hermosura acabada.

De todo esto parecce inferirse que el castigo no debia confundirse con la *pena jurídica*, ó judicialmente impuesta; y sin embargo con frecuencia, y por lo menos en términos generales, se toma uno por otro, no solo en el lenguaje comun; sinó en el legislativo, en el derecho y en la jurisprudencia, mientras otras veces parece se procuran distinguir hasta con cuidado.

Y con efecto: tenemos por una parte que la significacion etimológica y cardinal de *castigo*, es la de *enmienda*, *correccion*, como fin; *reprension*, *amonestacion*, empleo de medidas, mas ó menos aflictivas, *como medio*. Los romanos aplicaban dicha denominacion con preferencia á las medidas disciplinarias y correccionales; mientras la palabra *pena* la aplicaban á las *aflictivas*, ó que se imponian por delitos ó crímenes. Las leyes de Partida parecen admitir esta diferencia. Las del tít. 28, Part. 2, que hablan de las faltas y delitos militares, cometidos en tiempo de guerra, la admiten espresamente, llamando *castigo* á las correcciones disciplinarias; y *escarmiento* y *pena* á las condenas judiciales por verdaderos delitos. «Como se deben *castigar*, *é escarmentar* los omes que andan en guerra por los yerros que ficieren;» es el epígrafe del título. Despues dice su ley 1: «*Castigo* es *ligero* amonestamiento de palabra, ó de ferida, ó de palo, *que face el cabdillo* contra algunos, cuando fuesen demandados... *Escarmiento es pena que manda dar* el cabdillo, contra los que errasen, como en manera de *justicia*.» La misma ley esplica con las siguientes los casos en que proceden el *escarmiento* y la *pena*, y son verdaderos delitos militares. Las leyes 48 y 56, tít. 5: y la 32, título 8, Part. 1: la 9, tít. 7, Part. 2: la 18, título 18, Part. 4: la 9, tít, 8, Part. 7 con otras muchas hablan del *castigo* de los obispos á sus clérigos, de los abades á sus monges, del rey á los súbditos que erraren, ó le faltaren, de los padres á los hijos, y de los maestros á sus discípulos, no como de una pena en el rigor de la palabra; sinó de una correccion, reprension estrajudicial, gubernativamente impuesta, y aun por autoridad privada, como los padres y maestros; mientras las multiplicadas leyes estendidas en las Partidas 1, 2, 3, 4, 6 y 7, tratando de verdaderos delitos, siempre llaman *pena* á la judicialmente impuesta por ellos. El propio sistema se observa en general en las leyes recopiladas. El nuevo Código penal declara en su artículo 22 que *no se reputan penas* la restriccion de la libertad de los procesados: la separacion ó suspension de los empleados, acordadas por las autoridades gubernativas en uso de sus atribuciones, ó por los tribunales durante el proceso, ó para instruirlo: ni las multas y demas correcciones que los superiores impongan á sus subordinados en uso de su jurisdiccion disciplinal. Y bien: si las antedichas demostraciones *no son penas*, serán *castigos*, á menos de sostener que no es castigo la correccion, demostracion agravatoria impuesta por autoridad competente; pero no por sentencia. Por otra parte es de notar que estas mismas demostraciones, la privacion de libertad, de empleo, las multas, etc., son penas, ó dejan de serlo, segun el Código, segun que se impongan por sentencia judicial, ó por providencia gubernativa ó disciplinal. De todo ello parece inferirse, que ya desde la legislacion romana hay una diferencia, no *real*; pues una misma demostracion agravatoria es á su vez, como vemos, materia de *castigo* ó de *pena*; sinó *formal*, pues el decirse *pena* ó *castigo* pende, como vemos tambien, de la forma en que se impongan, esto es, por *sentencia*, ó por providencia gubernativa, disciplinaria.

Y sin embargo: aun entre los romanos vemos que el *castigo* equivalia alguna vez á *pena*, judicialmente impuesta, como sucedia, por ejemplo, en la *verberacion*, en la *furtigacion* (*castigatio furtium*): véase AZOTES. Si las leyes recopiladas, las de los títs. 5 y 6, libro 12, por ejemplo, llaman castigo al mal que deben sufrir los blasfemos y perjuros; delitos que se prestan á ser penados, sinó correccionalmente, con menos severidad que

otros; las del título 8 llaman *castigo* á la *pena* que deben sufrir los *falsarios*; siendo de notar, ademas, que impuestas todas judicialmente, en juicio criminal, y no correccional, todas son *penas* en el sentido mas estricto. El Código penal, en fin, en todo el contesto de sus libros 2.° y 3.° usa constantemente de la fórmula *castigar con la pena de...* segun la que, *castigar* y *penar* son en aquel una misma cosa.

De todo ello es preciso inferir que en la *tecnología* jurídica, y ni aun en el lenguaje comun, es posible determinar con precision la diferencia entre *castigo* y *pena*, que vemos llamarse con frecuencia uno por otro. Asi la Academia de la lengua, prescindiendo de la etimología, y atendiendo al uso, dice ser el *castigo*, *la pena que se impone á alguno por haber cometido algun delito ó falta*, y en lo antiguo *reprension*, *amonestacion*, *correccion*. Asi, en fin, en el uso comun y forense se llama castigo ejemplar el que por su severidad deja honda memoria, ó sirve por mucho tiempo de ejemplo ó de escarmiento, y no se negará que estos caractéres cuadran á la *pena*, y aun con mas propiedad que no á la mera correccion.

Pero si en términos generales castigo y pena se toman uno por otro: si asi se verifica tambien muchas veces, aun en los términos estrictos de la pena jurídica: si admitida en lo forense la clasificacion de penas *correccionales*, y disciplinarias, el *castigo* se equipara con ellas; con todo, en los casos de autoridad privada, de correccion por hechos reprensibles, pero que no constituyen *delitos* ni *faltas* en el sentido del Código penal, como sucede respecto de las correcciones de los padres, maestros, superiores de ciertas corporaciones, etc., todavia, hablando de sus medios represivos, y correccionales, diremos mejor *castigos* que *penas*, como asimismo respecto de las calamidades con que Dios aflije á la humanidad; y no ciertamente sin motivo, siendo, como es, infinitamente justo.

La *pena*, por otra parte, tomada en sentido estricto la voz, se presta mejor que no el castigo á comprender, ó llevar implícitos los tres fines del juzgador al condenar en materia criminal; y la publicidad y solemnidad del juicio contribuye mas á que sea ejemplar, á que sirva de escarmiento á los demas. Y es lo cierto, que en materias de jurisprudencia criminal, la palabra *pena* se ha hecho mas técnica que la de *castigo* para fundar y esponer la teoría penal: asi decimos Código penal, sistema penal, penalidad, pena de muerte, etc., con mas propiedad que lo diriamos de otro modo, haciendo servir para ello la voz *castigo* en vez de la de *pena*, en cuyo caso esta se hace específica como se ve. Bajo la misma, por lo tanto, espondremos en materia penal cuanto la teoría requiere, y asi véase PENA.

CASTILLA. En sentido natural, cada una de las dos provincias de España que llevan ese nombre: por antonomasia la mas antigua de ellas, la tierra clásica, denominada asi desde un principio por los muchos castillos que cubrian su suelo. Por antonomasia tambien se toma algunas veces por todo el reino: asi decimos armas de Castilla, por las reales: pendon de Castilla, por el nacional: leyes de Castilla, por las comunes, en contraposicion á las forales de algunos de los antiguos reinos y provincias.

CASTILLAJE: CASTILLERIA. Tributo que se pagaba por estantes y transeuntes al señor de un castillo, por la seguridad y defensa que prestaba en el territorio de la *castellanía*.

CASTILLO. Del latin *castellum*, y con la misma significacion; punto ó edificio murado ó fortificado para la ofensiva y defensiva en lances y empresas de guerra.

Desde luego se comprende que este género de fortificaciones y medio de seguridad y defensa, se habrá multiplicado en razon de la necesidad; y en España por esta razon lo fué tanto, durante la reconquista y guerra de siete siglos contra la invasion sarracénica, que su multiplicidad dió denominacion clásica y gloriosa á una de sus provincias, y cuya denominacion se hizo despues estensiva á otra. Verificada la reconquista palmo á palmo, y encomendada la defensa y conservacion de lo conquistado a alguno de los

caudillos de la guerra, era una necesidad, hasta imperiosa, contra la movilidad, *razias*, y escursiones frecuentes de un enemigo audaz, y pronto siempre, no solo á recobrar, sinó á invadir, la construccion de castillos, muros y ciudadelas, que ofrecieran, al mismo tiempo que amparo y defensa de gentes y ganados, un medio eficaz de resistencia, y de adelantar la conquista sin retroceder.

En este concepto, como testimonio insigne de un teson ejemplar, de una empresa heróica en sostener una guerra de siete siglos, nacional y religiosa, llevada al fin á gloriosa cima, es como los *castillos* dieron memorable y clásica denominacion á una de las provincias de la Península; denominacion que otra emuló luego, resultando las dos Castillas; y en el propio concepto los castillos son una de las empresas gloriosas en el escudo de las armas reales de España, y en la bandera ó pabellon nacional. Pero la rapacidad, la avaricia, la ambicion, los rencores y venganzas, la deslealtad, por último, en proporcion que iba cediendo el peligro comun, y á veces sin tomarlo bastante en cuenta, el antiguo medio de guerra y de seguridad, fué convertido á tan depravados fines, que muchos de los antiguos castillos de particulares se convirtieron en alcázares de tiranos y guaridas de bandidos. Erigiéronse otros, y otros géneros de fortificaciones adecuadas á los propios dañados intentos, y tuvimos *castillos*, *fortalezas*, *casas fuertes*, *torres*, *peñas bravas*, *cuevas*, *oteros*, etc., cuyos multiplicados géneros de fortificaciones servian con frecuencia para hacerse la guerra los señores entre sí; para hacerla á la sociedad y hasta á la humanidad, tiranizando al pais, infestando á mansalva los caminos y contornos, arrebatando cosas y personas que trasladaban sin moralidad, ni clemencia al *castillo*, á la *torre*, á la *peña brava*, para servir allí á la codicia, á la venganza, á las pasiones brutales ó salvajes del dueño ó usurpador, el cual reducia á una sola cifra el conjunto de sus feroces instintos, denominándose á sí mismo *corazon de bronce*, *corazon de tigre*, *corazon de leon*: servian, en fin, no sin frecuencia, tales fortificaciones para imponer y sojuzgar al monarca y arrebatar sus estados y riquezas á la nacion.

Resultado necesario del uso y abuso de los castillos, casas fuertes, fortalezas, etc., se verá á la legislacion, unas veces protegiéndolos, y otras recelosa, restrictiva y opuesta, por último, á su ereccion, ó reedificacion sin real permiso: unas veces realzando la importancia de los castillos, y donándolos como señalada honra, honor, y merced; otras teniendo que confundirlos en un mismo título en los códigos con los *robos* y *fuerzas*.

Y con efecto: el Fuero Viejo de Castilla determina con minuciosidad las formalidades con que debian ser conservados y entregados á otro alcaide ó castellano, los castillos dados en guarda ó *fieldad*, por el rey, ó por señores particulares. En cuanto á los primeros es singular que no podian ser entregados sinó á *portero de la casa del rey*, y mas singular la razon de esto, que despues dán las leyes de Partida, y es, que por tal cargo era el portero mas conocido, y conocia mas á las gentes (1).

El título 18, de la Partida 2, en sus 32 leyes, está consagrado á tratar de los castillos. En él se sienta que todos los castillos son del rey, ó de las personas á quienes hiciere merced de ellos: el que usurpase un castillo al rey, y los que lo aconsejasen ó consintiesen, eran traidores, como si matasen al rey, é incurrian en pena de *muerte* y confiscacion de bienes: lo mismo el alcaide que perdiese por culpa un castillo del rey: los que tuvieren, en fin, castillo por donacion ó merced real, debian tenerlo provisto de armas, víveres, y gentes de guerra: no podian enagenarlo, y menos á enemigos del reino, sin prévio conocimiento del rey, que en todo caso tenia el derecho de tanteo; y el que lo contrario hiciere, cometia traicion, ó incurria en la pena de confiscacion y estrañamiento, debiendo ademas reverter el castillo á la corona (2). Entre las leyes de este título es notable particularmente la 32, la cual

(1) Fuero Viejo de Castilla, tit. 2, lib. 1.°
(2) Ley 1, tit. 18, Part. 2.°

dispone; que todo castillo ó fortaleza que ganen en conquista los vasallos, y aun los no vasallos, pero que van al servicio del rey, es de este: que los naturales no deben querer para su seguridad personal, y de sus cosas y familias, otros castillos que *su lealtad* y la *confianza* en su rey, por lo cual no tendrian mas castillos que los que el rey les diera, y los que *de nuevo les dejase labrar*, resultando por tanto que sin licencia del rey no podia ya entonces en España labrarse castillo, ni casa fuerte; si bien en compensacion, y por resultado de la anterior teoría, *las casas de los nobles* serian en adelante guardadas y consideradas *como castillos, pues que la seguranza del rey tenian por fortaleza*, incurriendo en pena arbitraria por tanto el que las *forzare* ó *allanare*. Véase CASTELLANO.

Ni los castillos, cuanto mas las casas fuertes, fueron respetados, sin embargo, y los nobles y ricos hombres tuvieron que recurrir al rey, para que tomase bajo su amparo y *guarda*, ó sea *bajo seguro* los de dichas clases, ya para que los robadores y bandidos no hiciesen de ellos su criminal guarida, ya para que los mismos nobles no se las arrebatasen y usurpasen unos á otros. El rey don Alonso el Onceno, en las Córtes, y por las leyes del Ordenamiento de Alcalá, lo estimó y sancionó asi, y como era consiguiente, el que faltase *al seguro real* se hacia traidor, é incurria en las penas de muerte y confiscacion de bienes. Ya antes se habian dado otras leyes sobre robos y violencias cometidas desde los castillos y casas fuertes (1).

Acudieron los nobles al rey; los sumisos y bien intencionados, por no aparecer confundidos con los culpables de los antedichos crímenes: otros, aterrados por la severidad del monarca, y del reino reunido en Córtes, pues á peticion de estas en las de Valladolid de 1325, el rey habia mandado derribar los castillos y fortalezas levantados sin licencia real, que hemos visto era necesario por costumbre y antiguo derecho. Lo propio tuvo que ordenar Enrique II en 1371. Pero la osadía iba en aumento, y llegó á su término, como es sabido, en tiempo de Enrique IV, quien en las Córtes de Nieva de 1473, reprodujo la misma prohibicion á peticion de aquellas, mandando en 1474 fuesen demolidos los castillos y fortalezas edificados, con licencia real ó sin ella, desde el año de 1463.

Todavia los Reyes Católicos tuvieron que reproducir la prohibicion de fundar, escitando sobre el cumplimiento de lo mandado el celo de los asistentes, gobernadores y corregidores (1). Cárlos IV recopiló y renovó las anteriores prohibiciones, estensivas á *castillos, fortalezas, casas fuertes, peñas bravas, cuevas y oteros*, y por tanto hoy el derecho comun es que nadie puede edificar ningun género de fortificacion de guerra sin autorizacion real, concedida con acuerdo del Consejo, y prévia audiencia de los pueblos circunvecinos al fuerte, muro ó castillo que haya de levantarse (2).

En las donaciones de castillos que lleven aneja poblacion, ó lleguen á tenerla, no se entienden concedidas las cosas pertenecientes al señorío del reino, como *moneda* ó *justicia* de sangre, ó sea jurisdiccion criminal, como no se espresen, y aun en este caso no se entenderá nunca la justicia *superior*; sinó que siempre habrá alzada y recurso al rey de los fallos y abusos de los señores (3), como mas ámpliamente tratamos en su lugar oportuno.

En casos de duda el rey ó el reino fundan *su intencion* en derecho á los castillos y fortalezas (4). Mas como los reyes han acostumbrado á donarlos, y tambien á dar permiso para construirlos: y como el fin ordinario en la construccion de ellos, era en tal caso defender sus villas y tierras los que los construian, los autores opinan que en el mismo caso dudoso, cuando un castillo ó fortaleza estén dedicados conocidamente á defender ó guarecer una villa ó poblacion, esta, ó su dueño, fundan su intencion en

(1) Ordenamiento de Alcalá, tit. 30; ó ley 2, tit. 15, lib. 12 Nov. Recop.: leyes 1 y 4 del mismo título y libro.

(1) Ley 6 id. id.
(2) Ley 8 id. id.
(3) Ley 9, tit. 4, Part. 5.
(4) Ley 1.ª, tit. 18, Part. 2.

derecho al castillo, fortaleza, muros, etc. (1).

De uno y otro principio sale la solucion á la duda á que dán lugar nuestras leyes sobre reparacion y conservacion de castillos y muros, pues que unas leyes mandan se reparen á costa de los pueblos, otras á costa del rey. La ley 20, tít. 33, Part. 3, mira bajo un mismo punto de vista los castillos, fortalezas, muros, puentes, fuertes y calzadas: establece que es decoro de la nacion y utilidad general el mantenerlos: utilizando á todos, esto es, á la nacion y á los particulares, asienta ser de todos el deber de repararlos; y por lo tanto, primero del rey, y luego de las villas y ciudades, mandando que cuando estas hayan de hacerlo, se verifique con fondos de propios; y sinó los hubiere, por derrama ó repartimiento, en que ninguno de los moradores se esceptúe.

A su vez don Juan II, á peticion de las Córtes de Burgos y de Zamora, ordenó que los castillos y fortalezas de las fronteras se reparasen á costa del Erario, y que las torres y muros de las ciudades, villas y lugares, lo fuesen por los vecinos y moradores de ellos, *segun que son tenudos á ello, y á costa de los que han costumbre de contribuir á los dichos reparos* (2).

En la ordenanza, en fin, de intendentes de 1749, cap. 33, y en la célebre instruccion de corregidores de 1788, art. 59, se encargó á unos y otros la conservacion de los muros y cercas. Y así debiera de ser, salvo un caso de utilidad pública estimada y declarada por quien puede y debe. La España histórica que sobrevivió á la abrumadora conquista, opresion y lucha de 700 años, no debia desaparecer al arbitrio, ordinariamente vandálico, de los que no estiman en mucho, ni tienen á su cargo la conservacion de sus glorias; pero no solo desaparece; sinó que vá quedando sepultada bajo informes ruinas. Al furor de edificar ha sucedido el vicio y la estéril fruicion de destruir.

Hemos hecho esta lijera reseña de fortalezas y castillos bajo el punto de vista histórico-legal, que es el que nos compete, y por lo que dice relacion á derechos señoriales y feudales, castillos y pleitos antiguos. Los castillos y fortalezas modernas en su construccion y conservacion, como correspondientes á otro género de guerra, se rijen por otras leyes y reglas: en vez de ser objeto del derecho comun, como los antiguos, lo son del derecho especial militar; los construye el Estado, y ni los dona á particulares, ni fia á estos su conservacion y reparacion. Así por la diversidad específica del fin, son diversas, esencial ó muy notablemente, disposiciones legales que tienen un mismo objeto genérico. La ley 22, tít. 32, Part. 3, por ejemplo, para que no se embarace la defensa y servicio de los castillos, establece que no pueda edificarse contiguo á ella, ni á menor distancia que á 15 pies, mientras hoy el uso de armas de fuego y diversos medios de guerra, de ataque y defensa, requieren mucha mayor distancia, y así se halla establecido. La ley de minería, por ejemplo, de 11 de abril de 1849, previene en su artículo 9, que no podrán, sin licencia del rey, obtenida por el ministerio de la Guerra, abrirse pozos ni galerías á menos distancia que la de 4,500 piés de las plazas y puntos fortificados.

Concluiremos esta materia con una observacion sobre la conocida ley 46 de Toro (6, tít. 17, lib. 10 Nov. Recop.). En ella los Reyes Católicos dispusieron con las Córtes del reino, que «todas las fortalezas que de allí en adelante se hicieran en las ciudades, villas, lugares y heredamientos de mayorazgo, y todas las cercas de las dichas ciudades, villas y lugares de mayorazgo, así las que de allí adelante se hicieran de nuevo, como lo que se reparare, ó mejorare en ellas..... fueran ansi de mayorazgo, como lo eran las ciudades, villas, lugares y heredamientos en que se hiciesen..... sin que el poseedor sea obligado á dar parte alguna de la estimacion ó valor de dichos edificios á las mugeres del que los hizo, ni á sus hijos, ni á sus herederos, ni sucesores.....» Mucho ha dado que discurrir la determinacion de esta ley, sin que realmente se halle dada

(1) Gregorio Lopez, glosa 2 á dicha ley 1.
(2) Ley 5, tít. 1, lib. 7 Nov. Recop.

por los autores solucion suficiente á la duda.

Y en efecto: los Reyes Católicos en 1500, dejamos dicho, dictaron la pragmática de como Sevilla (ley 6, tít. 1, lib. 7 Nov. Recop.) reproduciendo las disposiciones restrictivas de los reyes sus antecesores, sobre construccion de castillos y fortalezas; disposiciones que se habian dictado á peticion de las Córtes: y cinco años despues de la mencionada pragmática de Sevilla, el mismo Rey Católico y las Córtes del reino tambien, establecen una medida que parece adoptada para favorecer el levantamiento de castillos y casas fuertes. La mayor razon que se ha creido poder dar para conciliar el derecho y los fines y consecuencia del legislador, es que tal vez este se propuso evitar por un medio indirecto la ereccion y reparacion de fortalezas, pues la consorte, ó el consorte, no poseedor del mayorazgo, emplearia viviendo, todo el influjo de su posicion con el otro consorte, para que de ninguna manera invirtiese en tales obras, lo que por tal medio, y en virtud de la ley de Toro, no seria luego gananciał á la defuncion del mismo, ni por tanto pasaria nada de ello á dicho consorte no vinculista, ni á los hijos de aquel matrimonio. Ciertamente que la razon no satisface, pues no es cierto que siempre hubiera de prevalecer la influencia y resistencia del cónyuje opuesto á la fuerza de voluntad del cónyuje mayorazguista: no habiendo hijos comunes en el matrimonio, faltaba una de las causas mas eficaces para la resistencia: el cónyuje mayorazguista tendria ademas mil medios de aquietar ó acallar con otro género de ventajas, mandas, ó beneficios al otro cónyuje: y aun por mortificar ó damnificar á este, podria en ocasiones adoptarse la idea de levantar ó reparar los castillos y casas fuertes; siendo inverosímil por lo tanto, que ese fuese el motivo que determinó á unos legisladores, en cuyas determinaciones la razon y el buen sentido presidieron hasta el punto que es sabido. Tocaba tambien en lo ridículo el motivo y la determinacion, pues ridículo era hacer depender del capricho de los particulares, y de tantas razones contingentes en un matrimonio, lo que con mas seguridad se hallaba completamente en manos del legislador, sin mas que negar la autorizacion que era necesaria, y era preciso pedirla para levantar ó reparar castillos, fortalezas, muros, etc.

Parécenos, en vista de ello, que no se ha hallado solucion suficiente en el caso antedicho, porque se ha planteado con error la cuestion. Se ha supuesto que el objeto, el fin de los legisladores de Toro, fué relativo á castillos y fortalezas; y no fué sinó relativo á mayorazgos. En el supuesto de que lo accesorio, en principios incontestables de derecho, atrae siempre lo principal, lo que se levantase, ó añadiese, edificando, ó reparando en suelo y edificio de mayorazgo, era ya del mismo mayorazgo, sin necesidad de que lo declarasen los legisladores de Toro; y para que no lo fuese, para que no prevaleciesen los principios generales de que lo *accesorio atrae lo principal*, *lo que se edifica en suelo ageno cede* al suelo, etc., era necesario que se declarase lo contrario. La cuestion que quedaba siempre en pié era la de los perjuicios evidentes del cónyuje no mayorazguista, y de los hijos comunes, ó lo que es lo mismo, la defraudacion de uno de los fines de la sociedad conyugal. Ofrecia gravísimas dificultades el evitarlo por aplicacion de los principios generales del derecho. Si se suponia que el consorte vinculista habia edificado de mala fé, perderia lo invertido. Pero ¿qué equidad habia en que lo lucrase el sucesor, que tampoco era dueño; sinó usufructuario del castillo ó casa fuerte? ¿Qué razon de equidad para que lo perdiese la consorte y los hijos de aquel matrimonio? Suponiendo la construccion ó reparacion de buena fé, lo edificado cedia al suelo; pero el dueño tendria que abonar las impensas, en principios generales. Mas, ¿quién es en un mayorazgo el verdadero dueño, ó el dueño de la propiedad? ¿Qué razon habria para hacer entrar al inmediato en pleitos de indemnizacion á que él no habia dado causa? ¿Con qué justicia se exigirian de él todas las impensas que podrian esceder á los productos del mayorazgo en su vida? ¿En qué proporcion se compartirian dichas impensas entre los su-

cesores futuros; con arreglo á qué leyes y principios; y de qué serviria ya la indemnizacion de los mas remotos á la consorte ó hijos perjudicados? La separacion de lo construido seria en los mas de los casos la demolicion: de este modo no serviria, ni para el mayorazgo, ni para la consorte y sus hijos. Los principios generales del derecho no podian tener aquí adecuada aplicacion, y decidiendo una cuestion, no de castillos, ni casas fuertes, sinó puramente civil y de mayorazgos, se tomó el camino menos malo que se podia tomar, evitando la demolicion, ó el pago de impensas indebido, ó violentísimo, como hemos visto, en la mayor parte de los casos, confiando tal vez en que el amor de padre y de esposo en el mayorazguista, y los esfuerzos contrarios de la muger y de los hijos, prevendrian el mal en la construccion, la cual, por lo tanto, tendria lugar asi en menor número de casos. Y la prueba concluyente de que tal fué la cuestion que resolvieron los legisladores de Toro, y no la de prohibir indirectamente la construccion de castillos, muros, etc., está en la misma ley citada, en cuyo final se previene, que no por la anterior disposicion habia de entenderse «que se daba licencia, ni facultad para que sin permiso real... puedan hacerse ó repararse las dichas cercas ó fortalezas; mas que sobre esto se guarden las leyes del reino, como en ellas se contiene.»

Esplicar, sin embargo, la mente de los legisladores de Toro, partiendo del principio ó supuesto en que aquella descansa, no es aprobar el principio, ó convenir en él. Al contrario: la cuestion desaparecia con haber ordenado, que no se concederia real autorizacion para edificar, ó reparar castillos ó fortalezas de mayorazgo. Y si alguna vez esto, ó por lo menos la reparacion, seria necesaria, no por eso se sigue que habria de hacerse á costa agena, á costa del gananciał; sinó en la forma ordinaria con que siempre se practicó, esto es, con los escedentes de productos, cubiertas las atenciones relativas del poseedor, ó enagenando fincas amayorazgadas, con real licencia. Partiendo de tal supuesto, esto es, de que no habia necesidad de crear ni suponer la cuestion que se resolvió, pues que podia evitarse, dicha ley, á pesar de todas las esplicaciones, participará, en el terreno de la *apreciacion*, de enigmática y de injusta en su primera parte, salva su aplicacion en el terreno jurídico.

Hay un considerable número de voces en lo jurídico y administrativo que traen su etimología de *castillo*, y esta misma voz tiene metafóricamente algunas otras acepciones, como CASTELLANO, CASTELLANIA, CASTILLA, etc., que pueden verse en sus artículos.

CASTILLO. En alusion á los castillos y fortalezas de que trata el artículo anterior, y que dieron denominacion á *Castilla*, es una de las *empresas*, *piezas*, ó figuras del escudo de armas de *Castilla*, y despues del escudo de armas de España. En este son dos, contrapuestos á dos leones: en la bandera nacional, y en la de comercio española, es solo uno contrapuesto á un leon. Véase BANDERA, ESCUDO DE ARMAS.

CASTRACION: CASTRAR. En el sentido de este artículo, *castrar* significa lo mismo que *capar*, por lo que hemos reservado el tratar de las dos voces, como objetos del derecho, bajo un mismo contesto. *Castracion*: tomada activamente esta voz es, segun los casos, el acto, la operacion quirúrgica, lícita ó ilícita, el hecho criminal de castrar: tomada pasivamente es el efecto de tales operaciones, esto es, la eliminacion ó anulacion de los órganos sexuales en los individuos del reino animal; si bien contraemos el presente artículo al varon y á la muger.

La castracion en tal supuesto, segun los casos, y como despues espondremos, en la legislacion criminal es un delito: en la civil, un impedimento dirimente para el matrimonio: en el canónico, el mismo impedimento, y una *irregularidad* para la ordenacion: en la ciencia, un caso, una cuestion, algunas veces difícil por demas, facultativa y de *medicina legal*: en las costumbres, en fin, y en la jurisprudencia ha sido cuestion en algunos tiempos si ocasionaba ó no *deses-*

timacion en lo social, é *incapacidad* ó falta de aptitud para ciertos servicios, profesiones y sucesiones, como diremos.

Bajo todos estos puntos de vista la *castracion*, inocente ó culpable, activa ó pasiva, es objeto del derecho. Pero ¿qué es *castracion*? Algunos de nuestros códigos la han definido: otros, como el Código penal vigente, hablan de ella en términos abstractos y absolutos, haciendo supuesto del significado y de las difíciles y multiplicadas cuestiones á que dá lugar, haciendo asi indispensable el buscar la esposicion y solucion de ellas en otra parte. Pero es el caso que apenas hallaremos fuente bastante autorizada de que poder deducir por completo esta esposicion y solucion. Ordinariamente la castracion, que en rigor etimológico no es, como veremos, sinó un caso específico, uno de los diversos modos de la eliminacion ó privacion de los órganos sexuales, se toma por la eliminacion ó anulacion de tales órganos por cualquier modo de los que han sugerido la ciencia, la malicia, la ignorancia, la perversidad y otras causas; al paso que hay legislaciones, como la romana, que distinguen y especifican, no todos; pero si la mayor parte de estos medios, por mas usuales. Aun las legislaciones mas específicas y prolijas en esta materia, como la romana y la canónica, dejan mucho que suplir á la ciencia: y los diccionarios, los testos oficiales de la propiedad del lenguaje, si pueden ser exactos en este punto en cuanto al lenguaje comun, no lo son de ninguna manera en el técnico y jurídico, segun tendremos que notar. Como demostracion incontestable de ello, si para la aplicacion del Código penal, que simplemente dispone que *el que de propósito castrare á otro*, será castigado con la pena de cadena temporal á la de muerte, hubiéramos de acudir al Diccionario de la lengua, *castrar* seria «*capar*, *cortar*, *ó quitar los testículos*:» y *capar*, «*sacar los testículos al hombre*, *dejándole inhábil para la generacion.*» De las dos definiciones comparadas seria preciso inferir: que mientras se presentan como idénticos y recíprocos los hechos ú operaciones de *castrar* y *capar*; se los define de diverso modo, pues no es lo mismo *sacar* en este caso, esto es, estraer por incision, que *cortar*, ó sea amputar, mutilar: que si á pesar de esta diferencia, entre otras, todavia *castrar* y *capar* son una misma cosa; en este caso no hay mas que un medio de incurrir en la pena del Código, esto es, *sacando* las glándulas sexuales por incision; cuando el arte, la especulacion y el crímen han dado á conocer otros muchos, de algunos de los cuales dá razon el Diccionario mismo en la voz *castrar*, y los mencionan las diversas legislaciones, de que tendremos que hacernos cargo, y lo propio la ciencia *médico-legal*: que no habrá castracion, ni por tanto contravencion al Código, cuando se inhabilite á un hombre para la generacion por la amputacion criminal, *de propósito*, de otro órgano viril, dejando intactas las glándulas sexuales: y, en fin, que no seria punible por el Código, y como delito específico de *castracion*, la de la muger, habiendo para ello la misma razon legal, y aun mayor criminalidad, pues espone mas su vida. Se vé claro por otra parte, y aun mas aparecerá en el resto del artículo, que la cuestion filológica, que entra por tanto, cuando se trata nada menos que del impedimento ó disolucion de un matrimonio, de las penas de cadena temporal á la de muerte, no es espedita, ni se halla prefijada con precision: que no es puramente filológica, sinó que lleva en sí una cuestion de medicina legal: y que esta arrastra la cuestion de derecho, pues en caso de duda el juzgador tiene que recurrir á dictámen facultativo.

Sin tan grave motivo no descenderíamos á muchos de los pormenores que ya ván mencionados, ni estenderíamos este artículo á otros muchos de que no es posible prescindir, pues, como hemos indicado ya, no es solo el lenguaje de los legicones oficiales el que no sufraga para la acertada aplicacion del derecho en lo civil y canónico; sinó que por regla general, lo propio hay que decir del testo mismo de las leyes. Porque es cosa singular, que hasta el Código penal de 1822, ni el derecho romano, ni el canónico con

Lorenzo Arrazola

toda la prolijidad con que tratan de esta materia, ni el derecho español, ni sus comentadores, espresan, ni dán por supuesta para sus respectivas sanciones otra castracion que la de varones, y de ninguna manera la de la muger, como en breve veremos.

Y la razon de ello parece comprenderse. La castracion del varon, ya provenga de motivos de venganza, de especulacion ó de piedad, es mas espedita y ha sido por todo ello la mas comun. Sabido es á que punto llegó el infame tráfico de esclavos *espadones*, para el servicio de *eunucos*, ó guardas de aposentos y personas; por lo cual el desgraciado esclavo tenia que agregar este vejámen, y la naturaleza este ultraje mas á la ya degradante condicion de *cosas*. No es menos notorio, ni fué menos comun en ciertos tiempos, el criminal abuso, aun no estirpado, de hacer *espadones* á los niños, consintiendo en ello sus propios padres, y otras veces á los adultos, consintiendo en ello el paciente mismo, para asegurar así un porvenir por el canto ó por otros medios. Con motivos mas disculpables mezclóse tambien en ello la piedad, y muchos se hacian á sí mismos *eunucos*, para ser mas castos. *Sunt eunuchi*, dicen los libros santos, *qui se ipsos castraverunt propter regnum cœlorum* (1). Conocido es en este punto el motivo de la desgracia del célebre Orígenes: los herejes *valerianos*, en fin, no solo con el propio objeto se mutilaban á sí mismos, sinó que, aprendiendo un mérito en ello, sometian al mismo suplicio á los demas. Si con este motivo se multiplicaron las prohibiciones y penas civiles y canónicas, claro es que habian de tener por objeto la castracion de varones. Lo propio sucedia, y en esto esclusivamente, en cuanto á las irregularidades canónicas. Es notorio, por último, que por mucho tiempo en el terreno de la ciencia no fué bien comprendido, ó no fué debidamente apreciado, el concurso de la muger en los actos que producen la maternidad, por lo cual el vicio de impotencia por el motivo que es objeto de este artículo, se circunscribia de ordinario al varon. Por todas estas razones, repetimos, y que aun podrian ampliarse, se comprende bien el lenguaje legal y comun, segun dejamos indicado. Pero como una esplicacion no es siempre una razon que justifique, de aquí la necesidad de buscar, ora en la ley, ora en la ciencia, la que sufrague para la mas adecuada aplicacion del derecho.

En tal supuesto diremos, que *castrar* se dijo del latin *castrare*, separar alguna parte del cuerpo por acto violento, como *abscision*, amputacion, torsion: *capar*, del hebreo *capo*, que tiene las mismas significaciones. Aplicáronse estas voces en un principio á la amputacion, ó *abscision* de partes en cualesquier cuerpos, y aun hoy decimos *castrar* las colmenas, *capar* la viña, etc.; pero fuéronlo despues, y aplícanse hoy por antonomasia, á la castracion *sexual*, ó eliminacion de los órganos genitales: y aunque etimológicamente no podrian tener aplicacion dichas voces, sinó cuando media amputacion, *abscision*, ú otra operacion violenta; en el uso se han generalizado, ó con frecuencia hay que tenerlas por generalizadas, por reglas de buena interpretacion, á todo medio de realizar la castracion, por ejemplo, como en los nombrados *thlibias* y *thlarias*.

Los sometidos á esta privacion se llaman en los respectivos derechos, y en el lenguaje, ora comun, ora forense, ora científico, *castrados*, *capones*: *espadones*, del griego *spao*, arrancar, estirpar.: *thlibias* del griego *thlibo*, comprimir, frotar, triturar, macerar, ó destruir frotando, como se practicaba en la infancia de los niños; siendo muy de notar aquí el error é inconsecuencia de la glosa romana, á la ley *Ii quoque qui thlibias faciunt* (3, §. 4, tít. 8, lib. 48 del Digesto), asentando allí, que *thlibias* era *instrumentum, quo quis castratur*, para decir despues á la ley *Spadonum* (128, del propio Código, *De regulis juris*), que *thlibias* y *thlarias*, eran voces de significacion incierta. Desde luego se vé claro, que al hablar la ley de los que *thlibias faciunt, vel thlarias*, trataba de los que castraban por estos medios, ó sin ampu-

(1) San Mateo, cap. 19, vers. 12.

tacion; no de los que labraban instrumentos para verificarlo; cuando ademas no media en ambos casos otro instrumento que la mano, que realiza la presion ó maceracion. *Thlarias*, se dijo asi bien del griego *thlao*, arrancar, como por torsion, ligadura, adelgazamiento, etc., en *abscision*, ó *amputacion*: *eunucos*, en fin, del griego igualmente *euris* aposento, y *echô* custodio, vigilante ó guarda. La opinion de Gregorio Lopez (1) de ser el *castrado* lo mismo que el nacido casto, «castrado, *id est, castè natus,*» puede inducir á error, pues no se dirian castrados, segun ella, mas que los que naciesen con ese defecto; cuando estos precisamente, en el rigor de la espresion, no son castrados; si bien es verdad que el mismo publicista se esplica en otras glosas de diferente manera.

La *castracion*, como aberracion de las costumbres, como crímen, como especulacion, como refinamiento del vicio, como movimiento de la supersticion, ó la piedad; tomada la voz en su acepcion mas genérica, es tan antigua, que prescindiendo del testimonio de diferentes escritores, segun los que fué Semiramis la que para impedir la reproduccion de razas raquíticas, inició este abuso respecto de los varones (2): los reyes de Lidia, respecto de las mugeres, para hacer impunes é indefinidos los escesos del vicio (3): de haber tenido Ciro su guardia personal de eunucos (4): y de que los sacerdotes de Cibeles, en fin, se castraban á sí mismos en obsequio á la deidad; prescindiendo, decimos, de estos testimonios, hallamos ya mencion de los eunucos en el *Pentateuco*, no habiendo bastado las prohibiciones y penas mas severas de ambos derechos, de los Pontífices y Concilios para estirpar el abuso, ni aun en el dia.

Todo asi supuesto, y por las razones ya indicadas de ser la castracion en sus respectivos casos y conceptos, objeto del derecho civil y canónico, de la ciencia *médico-legal*, y aun de las buenas reglas y principios sobre costumbres, procedemos á esponer lo que sobre el particular se halla establecido, ó recibido, y en lo que son cuestionables las razones y principios mas seguros, á que deberán atenerse el juzgador y el legislador.

Para la debida esplicacion de la materia, recorreremos por su órden, *el Derecho romano*: *las leyes de Partida*: *el Código penal*: *los códigos estranjeros*: *las costumbres y la ciencia de curar*: *el derecho eclesiástico.*

Derecho romano. Nos es indispensable hablar de este derecho antes que de otros, porque derivando de él una gran parte de las disposiciones del civil y canónico, y estando en este punto por demas diminutos, como ya queda indicado, y veremos en breve, por ningun otro cuerpo de doctrina pueden ser mejor comprendidos y esplicados. El derecho romano, pues, comprende y espone la cuestion general en la conocida regla: *Spadonum generalis appellatio est, quo nomine, tam ij, qui á naturâ spadones sunt, quàm thlibiæ et thariæ, sed, et si quod aliud genus spadonum est, continetur.*

Ya antes, diferenciando la castracion por amputacion, ú otro modo violento, de la verificada por maceracion, lenta trituracion, ó *evulsion*, impone en cualquiera de los dos casos la pena de muerte, comprendiéndolos en la ley Cornelia *de Sicariis*, y eso por la mera castracion, como hoy nuestro Código penal, siguiérase ó no la muerte. *Item*..... dice la ley 3, §. 4, tít. 8, lib. 48 del Digesto, *et qui hominem libidinis, aut promercij causâ castraverit, senatus-consulto pœna legis Corneliæ punitur* (la de muerte).

Ii quoque, qui thliblas faciunt, vel thlarias, añade la ley 5 del propio título y libro, imponiendo la misma pena.

Si quis, post hanc santionem, dice la ley 1, título 42, lib. 4 del Código, *in orbe romano eunuchos fecerit, capite puniatur*... Esta ley, como se vé, comprende el objeto de las dos anteriores, osto es, la castracion violenta por amputacion ó mutilacion, y la lenta por maceracion, trituracion, ú otro medio sin

(1) Glosa 2, á la ley 6, tít. 2, Part. 4.
(2) *Semiramis teneres mares castravit omnium prima.* Amiano Marcelino, lib. 16, núm. 6.
(3) Xanthum, *De rerum lydarum*, lib. 1: Athen., lib 2, capítulo 4: Polyb. *De inventione rerum*, lib. 1, cap. 4: *Alexander ab Alex.*, lib. 2, cap. 23.
(4) *Cirus custodes corporis eunuchos habuit, quo magis in officio essent, eos, præter illecebras voluptatum firmissimum præsidium, ratus.* Alexander ab Alex. lib. 6, *dierum gener.*, cap. 23.

herir, ó amputar. Ademas de la pena de muerte añade todavia la ley la confiscacion del esclavo sometido á dicho suplicio, y del lugar en que se verificó, si la castracion se realizaba con conocimiento, ó noticia del dueño ó señor.

La ley 2, en fin, del propio Código, título y libro, establecia, que el que importase, ó trajese á su domicilio, ó al ageno, dentro del imperio romano, *varones* romanos (*romanæ gentis homines*) castrados en tierras del imperio, ó en paises estranjeros, fuese castigado con las penas mas graves (*gravissima pena*), quedando sometido á la misma el notario que autorizase la escritura de la compra-venta, ú otro género de enagenacion del *eunuco*, y el que percibiese la octava, ó cualquier otro género de tributo con ocasion de la misma. Es singular que en la propia ley se autorizaba el libre tráfico y comercio de *eunucos*, con tal que no fuesen romanos, ni hubiesen sufrido la operacion en los dominios del imperio.

Leyes de Partida. El derecho antiguo, anterior á las Partidas, no penaba específicamente la castracion. Hablan las leyes del Fuero Juzgo y las del Fuero Real con minuciosa proligidad de toda clase de heridas, lesiones y amputaciones: enumeran con su pena correspondiente, ora del talion, ora pecuniaria, segun el caso, la pérdida de los dientes, de los dedos, manos y pies, de una oreja, de la nariz, de casi todas las partes y estremos del cuerpo, uno por uno, y no mencionan testualmente la castracion, que por tanto habria que referir, segun el caso, á las *feridas*, y lesiones, ó al homicidio.

Pero las leyes de Partida ya hablan de la castracion en términos específicos. Cuando la consideran como impedimento para el matrimonio, comprenden, como era de necesidad, la privacion culpable, ó á mano airada, de los órganos sexuales, y la inculpable, ó que sobreviene por accidente, ocasion, ú operacion quirúrgica inevitable (1): por separado tratan de la castracion, como delito. Asi la ley 13, tít. 8, Partida 7, despues de referir que, «antiguamente los gentiles castraban *los mozos*, porque les guardasen sus mugeres, é sus casas: é porque valian mucho á vendida estos á tales, los mercaderes compraban, los siervos, é castrábanlos, é traíanlos á vender, bien asi como las mercaderías:» y despues de consignar que á pesar de las prohibiciones de los emperadores y de los sábios, el abuso continuó, añade la propia ley: «E por ende defendemos, que de aquí adelante ninguno non sea osado de castrar á *home libre nin siervo*. E si alguno contra esto ficiere, que castrare, ó mandare castrar *ome libre*, mandamos que haya pena por ello, tambien el que lo ficiere, como el que lo mandase facer, bien *como si lo matasen*. E si fuere siervo el castrado, que lo pierda el señor que lo fizo castrar; é non haya otra pena, é sea de la Cámara del Rey. Pero el físico, ó el cirujano, que lo castrare, debe haber pena de *homicida*; fueras ende, si castrare alguno para guarescer de enfermedad que oviese, ó que temiese haber.» Nada diremos de la incomprensible lenidad de la ley respecto del señor que hacia castrar á su esclavo.

La ley 4 antes citada, tít. 8, Partida 4, en fin, define de este modo la castracion: «*Castrados* son los que pierden por alguna ocasion, que les aviene, aquellos miembros que son menester para engendrar: asi como si alguno saltase sobre algun seto de palos, que trabase en ellos, ó gelos rompiese: ó gelos arrebatase algun oso, ó puerco, ó can: ó gelos cortase algun ome, ó gelos sacase: ó por otra manera quier que los perdiese.»

Código penal. El Código penal trata tambien específicamente de la castracion. La refiere á las *lesiones corporales*; pero hace de ella un delito especial, y la castiga en el último caso con la pena del homicidio, y eso sin esperar á que de la operacion se siga, ó no, la muerte del castrado; lo contrario á lo que en este punto establecen, como veremos, algunos códigos modernos. El artículo, pues, 341 del Código español, dice asi: «El que *de propósito* castrare á otro, será castigado

(1) Ley 4, tit. 8, Part. 4.

con la pena de cadena temporal en su grado máximo á la de muerte.»

Desde luego se nota, que si la moderna legislacion, como la antigua, hace de la castracion un delito especial; y si una y otra llevan el rigor hasta la pena de muerte, hay notable diferencia entre ambas. La legislacion de Partidas imponia desde luego, y como única, la pena de muerte: el Código penal la impone; pero combinada con otras penas menores, dando asi lugar al arbitrio prudente del juzgador; impidiendo asi que este justo temperamento, mas necesario en el delito de que tratamos que en muchos otros, sea arbitrario de todo punto. Por otra parte, la ancha escala de penas que media desde la cadena temporal en su grado máximo á la de muerte, revelan bien, que el legislador, á pesar del aticismo de su lenguaje al enunciar el delito, comprendió bien lo complejo de sus circunstancias, las dudas y dificultades que dejaba que resolver á la jurisprudencia y á la ciencia, como asi es en verdad: y si ya no lo hubiesen demostrado las indicaciones hechas, y dudas apuntadas hasta aquí, lo verificara muy ámpliamente el resto del artículo. Hay que notar ademas, que si la castracion es en lo criminal un delito, en lo civil un impedimento para el matrimonio, y en lo canónico el propio impedimento y una irregularidad para la ordenacion, segun ya antes hemos espresado, hay que tratar de este objeto, comun de todos los derechos, con la mayor precision posible para armonizarlos entre sí, mas bien que para aumentar las dificultades en cada uno, tanto mas, cuanto que las funciones naturales de los órganos de cuya eliminacion ó anulacion se trata, el fin natural que cumplen en órden á la reproduccion de la especie humana, es el fundamento de las prescripciones y sanciones de todos ellos; por lo cual, mientras la castracion se trata y espone aquí, bajo el punto de vista de su penalidad, se trata y espone en gran parte por lo que mira á los demas derechos. En tal supuesto, las principales cuestiones que hay que que resolver para la debida inteligencia y justa aplicacion de los mismos; pero especialmente del artículo del Código penal, son las siguientes:

1.ª Del propósito.

2.ª Del valor legal de la voz *castrar*.

3.ª De los órganos sobre que puede recaer este delito.

4.ª Castracion de la muger.

5.ª Cuándo este delito se reputará consumado para el máximum de la pena.

6.ª Coautores y cómplices.

7.ª De la penalidad.

8.ª Connivencia del ofendido.

Y 9.ª Del que se castra á sí mismo.

1.ª *Del propósito.* «El que *de propósito* castrare á otro,...» dice el art. 341 del Código penal. Desde que se trata de un delito *específico*, hay que suponer el *propósito* de cometerlo. En ese caso se hallan ademas todos los delitos *premeditados*, pues la premeditacion no es otra cosa que el *propósito* mas ó menos *anticipado*, y mas ó menos perseverante. La violacion, el incendio, el homicidio premeditados, suponen de necesidad el *propósito*, esto es, la intencion y fin de hacer á un tercero ese mal, solo, ó acompañado de otros males; pero ese precisamente. ¿Qué puede significar, pues, respecto de la castracion el *propósito*; y por qué la ley lo espresa en este delito, y no igualmente en todos los demas delitos específicos, en que tambien interviene, es necesario, é inseperable de ellos, pues sinó, no serian específicos, sinó males genéricos? Si en todos ellos no se exige espresamente porqué se supone, ¿por qué no se supone tambien, y por tanto se calla, respecto del delito de *castracion*? No hemos de suponer que el legislador ha procedido sin razon; y entonces es preciso inquirirla. En el presente caso era necesaria la mencionada espresion, por razon de sistema. El legislador pudo tratar de la castracion en capítulo aparte, limitado á ella, pues que se proponia hacer de la misma un delito específico, y como lo hace con todos los de esta clase, sin necesidad de exigir espresamente el *propósito* que en ellos y por su misma naturaleza específica se supone. Tratando asi de la castracion, no tenia que haberlo exigido espresamente, como no lo

hace en el parricidio, infanticidio, violacion, etc. Pero creyó que debia comprender la castracion entre las *lesiones*; y sinó habia de castigarse con la misma pena que estas, segun que la reputase *grave* ó *leve*, era ya necesario estraerla del género,. en que el sistema y division artística del Código, el capítulo y su epígrafe la confundian, presentándola como delito específico por el fin, no de ocasionar una lesion cualquiera; sinó esa precisamente: precisamente la privacion ó anulacion de esos órganos, y no otros: idea y distincion que diferencian y clasifican adecuadamente los diversos comentadores del Código. Porque en efecto: en el atentado á que nos referimos, pueden darse y se conciben dos intenciones, y por tanto suponer animado de una sola, ó de ambas, al autor del delito: por venganza, por cálculo, ó por otro móvil de la voluntad humana, puede proponerse golpear, herir, lisiar á otro, dirigiendo para ello el golpe ó la accion sin eleccion de miembro ó parte determinada, quedando satisfecho con conseguir su fin de dañar, cualquiera que sea la parte del cuerpo que reciba el daño: puede proponerse precisamente la amputacion ó anulacion de los órganos sexuales: puede, en fin, proponerse ambos fines; irrogar una lesion, y aumentar el daño de esta irrogándola sobre los órganos mencionados. En el primer caso hay solo el delito genérico de *lesion*: en el segundo y tercero hay el delito específico de *castracion*, que será consumado ó frustrado, segun el resultado; pero siempre delito específico, constituido tal por el *propósito* de irrogar esa lesion, y no otra.

Pero todavia esta esposicion parece dejar algo que desear. Al proponerse el delincuente irrogar un mal corporal, una lesion física á un tercero, puede haber el *propósito* de realizarlo precisamente por la mutilacion de un brazo, de una mano, de una pierna, por la estraccion de un ojo, etc.: ¿cómo en estos casos se castigan tales lesiones, como delitos específicos, sí; y exigiendo espresamente en tal caso el *propósito* determinado, único modo de estraer el hecho del complejo genérico de *lesiones*; pero comprendidas las demas *amputaciones* bajo esta fórmula compleja, y con mucho menor pena? Preciso es buscar la razon de diferencia, y es muy para tomada en cuenta, para resolver otras cuestiones, sobre todo la que inmediatamente sigue á esta: es preciso, repetimos, buscar la razon de diferencia, *en la de las funciones* de los órganos y estremos respectivos del cuerpo humano. Y decimos de propósito *diferencia de funciones*, y no importancia de los órganos y estremos respectivos; porque ¿cómo desconocer la de un ojo ó los dos, la de uno, ó los dos brazos, ó manos, etc.? Y mas que la importancia de estos órganos y estremos del cuerpo humano, aumenta, y en la misma proporcion, el daño que, amputándolos, ó anulándolos de otro modo, puede irrogarse, tomando en cuenta la ocupacion, arte, ó profesion del ofendido. Para todos tienen justo valor é importancia la integridad y espedicion de sus miembros; pero la pérdida de las manos tiene una importancia relativa ademas, respecto de un artista mecánico, que libra en eso su subsistencia y la de su familia, tal vez numerosa: la de la lengua en un orador afamado: la de los pies en una saltatriz, que no conoce ya otra profesion, etc. Y con todo, la importancia de tales órganos *no es trascendental* á la especie, sinó personal, y digámoslo asi, doméstica: sus funciones se reemplazan muchas veces por medios mecánicos: el daño que ocasiona su pérdida se repara en cuanto á sus efectos por otros medios: *no afecta la base cardinal de la sociedad*, uno de los fines capitales de la creacion, que es la reproduccion. Relativamente á estos fines, relativamente á la base cardinal de la sociedad humana, hallaremos la diferencia capital de funciones orgánicas, de su índole trascendental, comparando la lesion que recibirian *la sociedad y el género humano* por el accidente ó el crímen dé un millon de individuos lisiados, mutilados en sus estremos, é igual número de lisiados en el sentido de este artículo. Asi se comprende bien el rigor escesivo de todas las legislaciones en este punto: y si la delincuencia ha de medirse por el *propósito* del agente y el *daño* irrogado á la sociedad, ciertamente

que tal severidad, prescindiendo de pormenores, está justificada, quedándolo por tanto la del Código penal y la exigencia especial del *propósito*, ademas de la razon indicada de sistema, como medida en parte de una lesion orgánica, que se castiga de un modo especial y estraordinario sobre las demas lesiones. Tal reputamos la gravedad de la pena, y de la materia justiciable: tal es la diferencia entre el castigo de esta lesion corporal y el de otras, que aun suponiendo redundancia en la redaccion del artículo del Código, la hallaríamos justificada: lo seria tambien la exigencia y prescripcion del *propósito*, aun como mera esplicacion de la diferencia de la diversa penalidad entre una y otras lesiones.

Dificultades de otro género ofrecerá en la práctica la prueba del *propósito*. Pero no es diferente de la relativa á otros actos internos tambien, como la *voluntad*, sin la cual no hay imputacion, ni responsabilidad: de la *premeditacion*, que agrava la delincuencia y la pena, etc. Estos actos, aunque internos, se revelan por hechos ú omisiones, se deducen por conjeturas; y si el Código de procedimientos no prescribiere medios especiales para la difícil prueba del *propósito* en el delito de castracion, el propósito se probará como los actos internos antes indicados y demas de su especie. Sinó se arribare á prueba absolutamente, el delito no se castigará como de castracion; sinó como lesion, y aun como homicidio en el caso de realizarse.

Pero el delincuente puede proponerse la castracion, como *medio* y como *fin*. Puede proponerse simplemente castrar á otro, sin ninguna mira ulterior, por venganza, por malignidad, por envidia ó rivalidad de amor propio, por capricho tal vez: y puede hacerlo con el fin de deshonrarlo, de impedir un casamiento, de impedir la ordenacion, de asegurar una herencia por falta de sucesion, etc. ¿Sobre cuál de estos estremos versará el propósito que requiere la ley? En el segundo ejemplo la castracion es el fin secundario; y puede serlo hasta el punto de que si el delincuente hubiera tenido otro medio seguro de conseguir dicho fin, no hubiera recurrido á la castracion. Con todo, recurrió á ella: recurrió porque quiso, y por tanto con eleccion y *propósito*; el cual ha de resultar únicamente y prescindiendo de todo fin, de haber preferido la mutilacion de los órganos sexuales, la lesion en los mismos, ó su anulacion de cualquier modo, sobre la de cualesquier otros órganos. Si el fin para el que la castracion sirve de medio, fuese otro delito, los artículos 76 y 77 del Código disponen lo que procede en estos casos; si no fuese delito, no puede tomarse en cuenta sinó como circunstancia atenuante, ó agravante, segun el caso. Ciertamente que hay gran diferencia entre el padre, por ejemplo, que castra, ó hace castrar un hijo á fin de habilitarle para el canto; y el estraño que lo verifica para el mismo fin, ó el de venderlo como *eunuco*: y entre ambos, y el que, escogitando tal vez el medio mas violento y doloroso, castra á otro por inferirle un mal, por satisfacer una pasion, cediendo á un instinto maligno ó brutal. En el primero de los casos propuestos ¿quién irá á suponer que un padre se decida á la castracion del hijo por daño y para mal de este? Y con todo; el Código no distingue: hace un delito de la castracion: aprecia en ella lo abominable del abuso, y el daño trascendental de la sociedad, que son siempre seguros, cualquiera que sea el fin ó motivos del agente, no siendo de los motivos que escusan, conforme al Código mismo, y allí debe aplicarse su sancion penal, donde hay castracion punible ó no lícita. El fin del delincuente en estos casos, sinó constituye otro delito ó falta, no puede entrar en el juicio del juzgador, mas que como circunstancia atenuante ó agravante, segun el caso.

Pero en la castracion hay el hecho material y sus efectos: la operacion, eliminacion ó anulamiento de los órganos, y la inhabilitacion del castrado para los fines del matrimonio. ¿Sobre cuál de estos estremos habrá de recaer el *propósito* exigido por el Código? Difícil seria la prueba en cuanto al segundo estremo, y por otra parte no es necesaria. Siempre entre el efecto y la causa hay conexion natural, que por ser *necesaria* en la

acepcion ontológica, está en la naturaleza de las cosas, y no en la voluntad del agente, que por tanto, no puede impedirla, ni está en su arbitrio. Asi el *propósito* respecto de la causa envuelve el del efecto, y de aquí el principio de que, *qui est causa causæ, est causa causati.* Asi el testo del Código *el que de propósito castrare á otro*, tiene completa aplicacion al *propósito*, eleccion y voluntariedad en el primer concepto, esto es, en cuanto al hecho material de la castracion, de la amputacion ó anulacion de los órganos sexuales, y porque esa es tambien la acepcion comun y general de la voz castrar.

Mayor dificultad ofrece la inteligencia y aplicacion del Código en las castraciones *por incidencia*, y digámoslo asi *subseguidas*. ¿Cómo se concibe en ellas el *propósito* esplícito? ¿Cómo se las considera de todo punto estrañas á él, por las razones que en seguida diremos? Un propósito en duda ¿será el propósito del Código, al constituir en delito específico la castracion? O de otro modo: el propósito de que habla el Código ¿habrá de ser precisamente directo, ó bastará que sea indirecto? ¿Habrá de ser formal y voluntario en cuanto á la causa y al efecto; ó bastará que sea voluntario sin causa? Si se tratara solo de una cuestion puramente moral, la solucion no ofrecia duda: *el que quiere la causa, quiere el efecto.* Pero se trata de una cuestion jurídica: de derecho humano: de derecho positivo, que la ha formulado su precepto y sancion, como espresa el art. 341 del Código, y pudo formularla de otro modo, como lo hacen otros Códigos. El romano no exigia testualmente el *propósito*, como el Código español: ni lo exigen en dicha forma el francés ni el napolitano. El austriaco y aun el del Brasil, dejan confundida la castracion con las demas mutilaciones, heridas y lesiones, sin mencionarla específicamente. Los mismos códigos españoles formulan ó consideran la castracion de diversa manera: el Fuero Juzgo y Fuero Real la dejan confundida, sin mencionarla, como ya hemos visto, entre las demas amputaciones y lesiones, lo propio que los Códigos de Austria y del Brasil. Las Partidas hacen de ella un delito específico; pero no exigiendo testualmente el propósito: tampoco lo exigia en dicha forma el Código de 1822: la Recopilacion no hace mencion de ella; y en todos ademas, nacionales y estranjeros, era diversa la penalidad, en sí misma, en su escala ó en sus accidentes. A una resolucion, pues, de derecho positivo, en sí misma y en su sancion penal, corresponderia, para completa seguridad en las dudas, una solucion de la misma índole. Pero el Código no la ofrece, ni consigna esplícitamente; y por ello, y porque el propio dispone no se castiguen otros delitos qne los que menciona, como asi bien que ningun tribunal se abstenga de formular sentencia por falta de ley positiva; el mismo autoriza á procurarla en los principios generales y en las buenas reglas de interpretacion y de jurisprudencia. Sabido es, por ejemplo, que la perversidad de los bandidos los lleva á atormentar de mil modos horribles y repugnantes á las víctimas desgraciadas de su rapacidad y ferocidad, suspendiéndolas unas veces por los órganos que son el objeto material de la castracion, otras sometiendo al cauterio y á otro género de tormentos y violencias dichos órganos, de lo que muchas veces ha resultado la *inhabilitacion* generativa, y aun la muerte. Es cosa indudable que los foragidos no se propusieron la castracion, y sí solo ocasionar el mayor dolor posible para arrancar la confesion que buscan; y á comprender que en otros órganos ó estremos del cuerpo, era mas seguro este fin criminal, en ellos ejercerian el ultraje y la violencia. Si de ello resulta la muerte de la víctima, la cuestion es mas espedita, pues siendo un delito que tiene mayor pena, ó el máximum de la pena del de castracion, esta no quedaba impune, ni esplícitamente escluida. Pero queda aun una dificultad en las formas, con trascendencia al fondo, pues el ministerio fiscal tiene que especificar el delito y la ley infringida, en sus cargos y peticion, y lo mismo el juzgador en la motivacion; y la dificultad queda en pié en toda su estension, cuando de las indicadas violencias, no resulta la muerte, pero sí la castracion, comple-

ta ó incompleta. ¿Qué hará el juzgador en este caso? Es verdaderamente dudoso. No ha habido en los foragidos la intencion de castrar precisamente; pero sí la de comprometer los órganos insinuados, pues *voluntariamente* y *á sabiendas* han preferido maltratar en ellos á maltratar en otros. Sinó hay *propósito* en lo *formal*, lo hay en lo *material*, de donde podia resultar, y segun el supuesto habrá resultado, la castracion. Asi la duda, en buena jurisprudencia, se resolverá contra el crímen y en favor de la víctima; y pues hay un *propósito*, *genérico sí*; pero propósito, deliberacion, eleccion para ese género de lesion orgánica mejor que para otra, en ese sentido será castigada la misma, y el género de duda á que se presta el caso, se resolverá aprovechando el juzgador la ancha escala que la ley confia á su prudencia para elegir aquel grado que mas adecuado parezca, segun las circunstancias. Si el delito coincidiera con el de robo, ó si hubiera de reputarse como medio para consumar este, los artículos 76 y 77 del Código ya citados, previenen lo que en tales casos ha de hacerse. Por lo demas, si en la *suspension* pudiera ofrecer mayor duda la calificacion del atentado que en el caso supuesto produjo la castracion, casi no la ofrece de la destruccion de los órganos el *cauterio*, asi como no ofrece ninguna que *á sabiendas con pleno conocimiento y libre eleccion*, se consuma el criminal atentado de irrogar una herida, una lesion, é irrogarlas en esos órganos precisamente y no en otros. Si se infirió mayor daño que el que se meditaba, ese es caso prevenido en el Código.

Concluiremos notando que el *propósito* de que habla el art. 341 del mismo, es menester que sea ilícito, culpable, punible, aun cuando el artículo no lo espresa; pues es indudable puede *de propósito castrarse á otro* impunemente, por motivos lícitos, como se verifica por causa de enfermedad, de lo cual hablamos en su lugar.

2.° *Del valor legal de la voz castrar.* Si la determinacion del *propósito*, ofrece dificultades para el juzgador, como hemos visto, las ofrece no menores el supuesto de la ley, la *castracion*. ¿Cuál es el valor, la significacion precisa y taxativa de esta espresion en lo legal? La parte ofendida, ó el ministerio público acusan por delito de castracion: el acusado se defiende negando merecer ese concepto la lesion de que se trata. El tribunal tiene que sentenciar, declarando, por lo que hace á este punto, que el caso es, ó no es, el prevenido por el artículo 341 del Código penal. Pero ¿cuál es la regla segura á que habrá de atenerse, y lo propio el ministerio público al acusar, ó escusar, que no debe hacerlo al arbitrio, dubitativamente, con inseguridad; sinó que, como representante de la ley, debe hablar con seguridad y verdad en el sentido de esta? En un delito en que la pena puede llegar hasta la de muerte, ¿puede haber nada mas desconsolador en su género, mas disonante despues de reformada nuestra legislacion criminal, mas depresivo del prestigio de la ley y de los tribunales, mas contrario al respeto religioso con que debe ser acatada la cosa juzgada, que el que en un mismo caso un tribunal falle de una manera, y otro de otra; y aun uno mismo de diverso modo en distintas sentencias, ó por distintas salas; y el que el acusador, el ministerio público, el reo, y el tribunal califiquen el hecho de opuesto, ó diverso modo, y todos con buenas razones? Pues la verdad es que todos pueden hacerlo, supuesto el hecho incontestable de que los legicones oficiales, las leyes y la ciencia de curar, comprenden la castracion de diverso modo; de donde puede resultar, y de seguro resultará muchas veces, que teniendo duda el juzgador sobre el verdadero significado de la voz, y considerando el caso como de *pericia*, ó facultativo, no siendo sinó jurídico, lo consultará á los profesores, ó corporaciones autorizadas para emitir juicio sobre ello, las cuales pueden darle, y sin duda le darian en esta parte, el dictámen y concepto de la ciencia, que ciertamente no es, á lo menos en todos los casos, el de la ley, ora por error de las tecnologías respectivas, ora por la índole y diferencia de ellos, nacida de la diversidad de miras y de fines entre la ciencia y el derecho.

Quedan apuntadas ya parte de las dificultades de este caso; pero sin que nos escuse el esplanarlas y resolverlas con la conveniente amplitud, y puesto que no hallamos haya sido, ni esplanada, ni resuelta esta cuestion por completo, por ninguno de nuestros autores. Siendo compleja la duda, y abrazando los estremos de lo que ha de entenderse por castracion, esto es, qué órganos habrán de perderse, y ademas por qué modos, ó género de lesiones habrán de perderse, ó anularse, para que el caso se diga comprendido en el art. 341 del Código, bajo estos dos conceptos la esplanaremos.

Nos es preciso repetir á este propósito, que segun el Diccionario de la lengua, *castrar* es «*capar, cortar, ó quitar los testículos*:» y capar «sacar los testículos *al hombre, dejándole inhábil para la generacion.*» Segun Covarrubias, en su Tesoro de la lengua, *castrar, «vale tanto, como sacar... al hombre... los testículos...*:» y capar, *«vale castrar.»*

En cuanto á la ciencia de curar, es menester distinguir entre la ciencia *absoluta*, y la *relativa* ó *mista*, esto es, entre la pura ciencia de curar, y la *medicina legal*. Esta segunda, sin abandonar sus principios facultativos, los concierta con el tenor de las leyes, y por tanto participan entonces del fin y miras de estas. La ciencia absoluta se atiene solo á sus principios y fines, y por eso no siempre vá de acuerdo con las leyes, como sucede en este caso. La castracion es considerada por ella, únicamente bajo el punto de vista *facultativo*, esto es, *fisiológico, anatómico, patológico, operativo*, etc., y en estos casos, dominando en su juicio los conceptos operativo y de curativa, que por su gravedad, dificultad, é importancia son de los muy notables en la ciencia, limita de ordinario la castracion á las glándulas sexuales únicamente, calificándola de castracion *completa*, é *incompleta*, ó *semicastracion*, segun que la eliminacion, mutilacion, etc., es de las dos, ó de una sola de ellas. El *Diccionario de los diccionarios* de medicina y cirujía, reasume en el particular el juicio y tecnología de la ciencia y de los autores, consignando la doctrina de *Romo* y dice con este: «Castracion: la acepcion *rigorosa* de esta palabra es la *ablacion de los dos testículos, de cualquier manera* y en cualquier circunstancia que esta ablacion haya sido hecha. Pero olvidando el sentido natural de la espresion, se designa frecuentemente bajo el nombre de castracion la ablacion *de un solo testículo*, sobre todo cuando esta ablacion tiene lugar por una operacion quirúrgica. De aquí resulta la necesidad de distinguir la castracion en *completa* é *incompleta*, ó bien en castracion, propiamente dicha, y en *semicastracion.*»

Aquí se vé claro el fin y el concepto, bajo los cuales la ciencia absoluta, ó limitada á sus miras facultativas, considera y define la castracion: y se vé, ademas, que si el juzgador, para esplicar y aplicar el supuesto del artículo 341 del Código, que es la castracion, que este ni esplica ni define, hubiera de atenerse á las fuentes y autoridades antes citadas, esto es, á la norma del lenguaje, á los que podemos llamar legicones oficiales de este, y á la ciencia; en la mayor parte de los casos quedaria sin aplicacion el Código penal, en el punto que es objeto de este artículo. Y como no es posible que tal fuese la mente del legislador, ni en tal caso merecia la pena el haber separado la castracion de las demas lesiones y mutilaciones, haciendo de ella una escepcion, un delito especial, castigado con distintas y severísimas penas, es preciso que uno sea aquí el juicio de la ciencia, y otro el de la ley. Esta sola reflexion convence, que el juzgador en la aplicacion del art. 341 del Código, no puede atenerse á las autoridades antes alegadas, y que tiene que buscar en otra parte la regla de su conducta, y deducirla de otros principios.

Nacen esta necesidad y esta diferencia, pues que el laconismo del Código obliga á interpretarlo, del diverso fin de la ciencia de curar, y el de la ley: el de la primera *facultativo*: el de la segunda *moral, social, jurídico*. El fin de la ley, por consecuencia, es mas ámplio, no conviniendo con ella, como hemos dicho, la ciencia absoluta, y sí

solo la ciencia relativa, la *medicina legal*, como vamos á ver.

Y con efecto: si la ciencia considera los órganos sexuales bajo los puntos de vista que hemos indicado, y con relacion á su influencia en la organizacion, propensiones y mecanismo, á la economía animal; la ley lo verifica con relacion al alto fin, natural y social, entre otros, de la reproduccion. En esta especialidad y trascendencia de funciones, hemos fundado, y no puede fundarse en principio mas cardinal, la especialidad del delito de castracion, constituido tal por el Código penal español y por otros. En tal caso, *la castracion, no solo habrá de comprender las glándulas sexuales, meramente; sinó que habrá de estenderse á todos los órganos esencialmente necesarios para el fin de la generacion.* Llevado este fin natural é institucion social, civil y canónica; garantida esta institucion, la institucion del matrimonio, por uno y otro derecho, la castracion, segun el fin de la ley, y sea la que quiera la tecnología de la ciencia, habrá de estenderse *á toda mutilacion, destruccion orgánica, é inhabilitacion absoluta, que haga imposible este fin.* Y asi, y con esta fórmula general, mas adecuada por cierto para los fines legales, no solo en este, sinó en otros estremos, como veremos y en un principio hemos insinuado, que la del Diccionario de la lengua, y la tecnología de la ciencia de curar, es como la define la ley de Partida, antes citada. «Castrados son, dice, los que pierden, por alguna ocasion que les aviene, *aquellos miembros, que son menester para engendrar*: asi como... si gelos rompiere... ó gelos cortare algun ome, ó gelos sacare, ó *por otra manera cualquier que los perdiere.*» Esta es, sin duda, pues la ley no está derogada ni modificada por otra, la medida del daño en el delito de castracion: en su *máximum*, si la *ablacion*, mutilacion, ó destruccion criminal fuere de todos los órganos indispensables para este fin de la generacion, ó de alguno de ellos, si su pérdida causare la *inhabilidad* absoluta; en menor escala, si solo fuere de alguno, ó algunos de ellos, como por ejemplo, de una sola glándula sexual. Pero desde luego tenemos que el juzgador no puede reputarla limitada, segun espresan el Diccionario de la lengua, y la tecnología de la ciencia, absolutamente considerada, á las glándulas sexuales; sinó á otro, ú otros «*de aquellos miembros que son menester para engendrar*,» y por decontado al denominado *viril* por antonomasia, precisamente por esa circunstancia, por sus funciones, de todo punto necesarias, para el indicado fin natural, y legal. Es de notar aun: que si la ley de Partida (ley 4, tít. 8, Part. 4) habla de la castracion con ocasion del *matrimonio*, y para presentarla despues como impedimento dirimente de este, la definicion de la castracion no la dá con relacion á él; sinó en términos absolutos, como puede verse; como se trae un principio general para base de una ley, ó una ley para fundamento de otra. En ese sentido ya, y supuesta la antedicha definicion general, es como el legislador de las Partidas la presenta en diversas otras leyes, como impedimento, como contraria al fin natural y legal de la reproduccion, elevada á institucion civil y canónica en el matrimonio. «Otro si: el que fuere *castrado* (dice la ley 6, tít. 2, Part. 4, y habla de los que no se pueden casar), *ó que le menguasen aquellos miembros, que son menester para engendrar*,» cuyo concepto esplican los autores en nuestro sentido (1).

Este es el tenor de leyes vigentes, lo cual bastaria. Pero todavia puede tenerse por cierto que ese es el espíritu del mismo Código penal en su art. 341, pues, como hemos notado con repeticion, se hace un delito especial de la castracion, precisamente por las funciones de los órganos, que son objeto de ella; que no son otras que las de la reproduccion de la especie; ni la ley puede protejerlas sinó en el terreno lícito y moral, precisamente en el matrimonio, que en uno de sus tres fines, en el fin *sobolis*, recibe aquí una eficaz garantía en la sancion penal del artículo 341, y esta, por tanto, es, y debe

(1) «*Dic, ergo, quód cum illo, cui omnia virilia sunt abscisa, tam testiculi, quam virga, non potest contrahi matrimonium... cum sit impotens ad copulam, et generandum...*» Gregorio Lopez, glosa 2ª dicha ley.

ser la clave, la regla fundamental del criterio jurídico.

Contra tales disposiciones y principios legales no pueden prevalecer, ni el tenor de diccionarios, por mas autorizados que sean; pero formados para el lenguaje comun, y no para la tecnología jurídica, que solo procede de la ley y de la jurisprudencia: ni la tecnología quirúrgica, encaminada á fines peculiares de la ciencia y del arte: ni el suponer que la cuestion en este caso es *facultativa* ó *pericial*; pues no lo es. Cuestion facultativa será el determinar qué órganos, ó segun la ley, *qué miembros son menester para la generacion*: si por el atentado de la castracion ó de las lesiones inferidas para ello, se hace esta imposible, ó no; pero de ninguna manera el estimar y decidir sentenciando, que hay *castracion* en el sentido del árt. 341 del Código penal, allí en donde resulta que por un medio ilícito, y por tanto punible, han sido destruidos *de propósito, órganos ó miembros necesarios para la generacion*, y por tanto no solo glándulas sexuales.

Asi lo establecia, y por lo mismo no hacia punto facultativo, sinó decision judicial, la declaracion jurídica, el Código penal de 1822 que en su notable artículo 638 decia entre otras cosas: «El que, no siendo cirujano, y por razon de enfermedad que lo requiera, castra voluntariamente y á sabiendas, ó inutiliza de cualquier modo *alguno de los órganos de la generacion...*»

Asi tambien algunas legislaciones estranjeras. El Código francés en sus artículos 316 y 325, pena en sus respectivos casos la castracion. No la define: no la determina: hizo de ella supuesto, como el Código español vigente: y hallando peligroso el dejarlo al criterio del juzgador por las muchas razones que quedan espuestas, por decreto de 1.° de setiembre de 1814 se declaró *ser castracion* «la amputacion de un órgano *cualquiera* necesario á la generacion.» Declaracion importante, adecuada á todas luces, y á todas luces la doctrina mas segura, á que en defecto de ley, y ya hemos visto que no hay entre nosotros ese defecto, pueden recurrir los tribunales. Diremos ahora, que insistimos tan de propósito en esta cuestion, y de propósito la hemos planteado y dado al artículo la forma y estension que se echan de ver, porque hemos visto algun caso, en que para la inteligencia del citado art. 341, y su aplicacion, se insistia en el tenor del Dicccionario de la lengua, y en la tecnología quirúrquica, y como que faltaba valor para no obtemperar á tanta autoridad; cuando, quedando esta ilesa, y tan acatada como sea justo, pero solo en aquello en que pueda ser autoridad, á lo que se faltaba, ó habia grave peligro de faltar, era á la ley.

La ciencia misma, descendiendo al terreno de la ley, la medicina legal, comprende que se modifica su objeto, habla el lenguaje de la ley, y corrobora cuanto dejamos espuesto.

Y con efecto: «No parece haber limitado el legislador la palabra *castracion*; (dice Raigé Delorme, aplicando la medicina legal á los artículos del Código francés, que tratan de aquella), á la *ablacion* de los testículos, que *para el médico es el carácter esclusivo*. Para el primero *la amputacion de un órgano cualquiera, indispensable para la generacion, es una castracion*. Asi, la *ablacion del pene*, que no fuese acompañada de la pérdida de los órganos secretorios del sémen, *no reclama menos la aplicacion de los artículos precedentes* (del 316 y 325, que penan la castracion) puesto que *esta mutilacion es un obstáculo irremediable para la funcion de la reproduccion* (1).»

Peiró y Rodrigo, entre las causas *ciertas* de impotencia para la reproduccion, enumeran como primera «la falta del miembro viril:» como segunda «la de los testículos.» Los mismos asientan en otra parte: «La estirpacion de estos órganos (las glándulas sexuales) y del miembro viril, constituyen el crímen de castracion (2).»

Ultimamente, y para evitar prolijidad, el célebre Orfila acoje la opinion y doctrina de Mr. Devergie, que con ocasion de las

(1) Repertorio de Medicina, por Fabre, Roux y otros profesores.

(2) Medicina legal, cap. 10, núm. 1: cap. 11, de las heridas, número 5.

disposiciones del Código francés sobre la castracion, y el decreto de 1.° de setiembre de 1814, que ya hemos citado, para la acertada inteligencia y aplicacion de aquellos, dice: «En efecto: en la herida hecha con el objeto directo de destruir la facultad procreatriz de la persona á quien se hiciere, ya haya amputado un miembro, ó un testículo, la accion responde á la intencion en los dos casos, y por consiguiente la ablacion de una ú otra de estas partes debe constituir ante la ley la castracion, que en cirujía no es mas que la ablacion de los testículos. Asi, pues, cuando el magistrado pregunte á un médico *si ha habido castracion, este deberá responder afirmativamente*, cuando ha sido amputado el miembro ó uno solo de los testículos, aparte de la exactitud de los hechos (1).»

Puede asentarse, pues, que para los efectos del Código penal, *castracion es la ablacion, destruccion ó incapacitacion de los órganos indispensables para la reproduccion, ocasionada ilícitamente, de propósito y por cualquier medio.*

Asi en la definicion queda resuelto tambien el segundo estremo de la dificultad que venimos examinando. Ya habíamos notado que segun los Diccionarios de la lengua, en sus términos *sacar, cortar, quitar* las glándulas sexuales, la castracion, ya limitada por dichos diccionarios en cuanto al número de los órganos, habria de serlo tambien en los modos de practicarse, para reputarla contenida en el art. 341 del Código, no pudiendo estos medios ser otros que por *incision, amputacion, evulsion*, por lo cual el equivalente latino de las definiciones en los espresados Diccionarios es *virilia amputo.*

El mismo Código penal dá tambien lugar á la duda en el propio sentido. Comprendiendo la castracion en el género de las lesiones, y pudiendo estas inferirse de infinitos modos, eso se tendria entendido para la castracion. Pero si ese es el lenguaje del epígrafe del cap. 4, tít. 9, lib. 2 y el del art. 341, se añade en seguida en el 342, que «*Cualquiera otra mutilacion*, ejecutada igualmente de propósito....» pareciendo indicarse, en fuerza de esta correlacion entre este artículo y el que le precede, que la castracion ha de ocurrir por *mutilacion*, ó que solo se reputará tal, para los fines del Código, cuando ocurra de este modo. Y ahora bien, mutilar es *separar un miembro del cuerpo* cortándolo ó amputándolo. En vista de ello un abogado defensor podria sostener con buenas razones, aunque no suficientes, como diremos, que no hay delito de castracion, cuando no hay *mutilacion*, esto es, desaparicion *absoluta, material y formal* del órgano, verificada precisamente por *amputacion* ó *mutilacion.* Llamamos desaparicion *absoluta y material* del órgano, la que consiste en la ablacion omnímoda de este, y la de sus tegumentos, envoltorios y aderencias, como sucede en la amputacion, mutilacion, evulsion, ligadura: y desaparicion solo *formal, la anulacion, inutilizacion, destruccion* del mismo, como órgano, ó en cuanto á sus funciones generativas; pero subsistiendo en su aspecto ó forma material, ó en sus tegumentos y aderencias. La historia de la medicina y los anales del crímen, dán á conocer infinitos de estos casos, y la ciencia demuestra su posibilidad; y asi, en efecto, sucedia y sucede en los *thlibias* y *thlarias*, y en la anulacion de los órganos, como tales, por trituracion, presion, cauterio, *puncion*, etc.

Y con todo eso ha de entenderse, y la jurisprudencia ha de encaminarse á que se entienda que el Código, con alguna impropiedad, si se quiere; pero sin dejar duda en su sentido y propósito, toma en dicho artículo 342, la *mutilacion* en la acepcion latísima y compleja de *pérdida, destruccion, anulacion* de los órganos; pues que á la cabeza del capítulo anuncia su propósito, y es evidente el de *castigar toda lesion*, y no habia de querer, contradiciéndose, que la anulacion, pérdida ó destruccion orgánica de un miembro de otro modo que por mutilacion, no fuera punible como delito especial por el citado art. 342, porque la pérdida, *ablacion* ó destruccion no se realizase cortando precisamente, ó amputando, que

(1) Orfila, Medicina legal, tomo 5, tratado de las heridas.

es la acepcion rigorosa y única, propia de *mutilacion*.

La castracion, por tanto, y á pesar de los términos del mencionado artículo, se reputará comprendida en la fórmula genérica *lesiones corporales* del capítulo á que corresponde, pero como *delito específico*, comprendido en el art. 341, y no como mera lesion genérica, de cualquier modo que se verique *de propósito*. Asi hemos visto que lo consigna la ley de Partida (4, tít. 8, Part. 4); «*é por otra manera cualquier que los perdiere:*» asi lo estableció, segun hemos notado, tambien el Código de 1822 (art. 638); «el que castre..... ó inutilice *de cualquier modo* alguno de los órganos de la generacion...:» asi, en fin, los autores de medicina citados, y cuantos pudiéramos citar.

Queda aun que resolver una grave dificultad sobre este punto, que reservamos para la cuestion 5.ª y allí ha de verse.

3.º *De los órganos sobre que puede recaer este delito.* Segun la doctrina que queda sentada, hay castracion en el sentido legal, desde que una persona es reducida á impotencia generativa, por *anulacion* de los órganos indispensables para este fin, verificada de propósito y por un motivo criminal. Pero á dicho estado puede llegarse por sola la anulacion, destruccion ó ablacion de algunos órganos; no de todos los que sirven como indispensables á dicho fin natural; como por ejemplo, la primera causa *cierta* de anulacion generativa, que asientan Peiró y Rodrigo, y la segunda asentada por los mismos sin la primera, ó aislada cada una de ellas. El delito en estos casos ¿se reputará parcial; y solo completo, cuando se eliminen ó anulen todos los órganos de la generacion? El delito es completo, por sola destruccion de un órgano, cuya falta haga imposible la reproduccion de la especie. De este modo puede haber castracion, quedando intactas ambas glándulas sexuales, y eliminando ó anulando solo un tercer órgano, el órgano viril; para que se vea hasta que punto es para lo legal, en este caso, no solo inadecuados, sinó erróneos, el testo de los legicones oficiales del lenguaje, y la tecnología quirúrgica, puramente facultativa. En estos casos, cuando se ha consumado el delito de castracion por destruccion de un solo órgano indispensable para la reproduccion; la destruccion de todos, por ensañamiento ó por otras causas, es solo una circunstancia agravante.

Pero ¿y si únicamente se hubiese eliminado ó destruido un órgano, indispensable, sí, para la reproduccion; pero cuya pérdida por sí sola no impide esta, como sucede en la pérdida de una sola de las glándulas sexuales? Si se prueba el *propósito* de castrar, el caso es el de haber el delincuente ocasionado menos daño que el que se propuso, y habrá delito de castracion con circunstancias atenuantes. Pero como el *propósito de castrar*, vá implícito, y debe reputarse asi segun la doctrina asentada, en el de maltratar, herir, dañar precisamente en los órganos mencionados, y no en otra parte; será difícil al reo probar esta distincion de propósito, y los tribunales deberán dar siempre por supuesto el *propósito* de castrar, ó anular la potencia generativa.

Pero *probado* ó *supuesto* el propósito de castrar, siempre es una verdad que la anulacion generativa no se ha seguido, y parece que en este caso hay mas bien *delito frustrado*, que no delito de castracion con circunstancias atenuantes. De ninguna manera. El hecho criminal ha pasado de sus preliminares, consumando la ablacion de un órgano generativo. Seria muy difícil probar si el delincuente no pasó adelante en la eliminacion de todos los órganos porque no tuvo propósito de hacer mas daño; ó por creer, como es muy posible, sobre todo en el que no es facultativo, que con el hecho bastaba para la castracion: porque si no se propuso la inhabilitacion absoluta del individuo ¿qué se propuso con la eliminacion de sola una glándula, cuya eliminacion no conduce sinó á causar una lesion? Mas en este caso ¿qué significa, segun las leyes del buen sentido, y aun el testo legal, elegir *de propósito* para dañar, ese órgano, y no otro estremo ó parte del cuerpo?

Aun en el lenguaje quirúrgico en la anu-

lacion de una sola de las glándulas sexuales hay ya *castracion*, si bien incompleta; pero hay aquí ademas, que es evidente la castracion completa de la glándula, y el aniquilamiento de la potencia generativa de la misma. El testo genérico de la ley de Partida y del Código penal de 1822; si bien considerado este como doctrina, aunque muy autorizada; el testo genérico, decimos, *destruccion de los órganos indispensables para la generacion*, puede entenderse, lo mismo de todos ellos, que de cada uno, toda vez que sea órgano generativo; y no habia de interpretarse la ley, precisamente contra su fin general y en favor del crímen. Por todas estas razones hay en el caso espuesto *crímen consumado de castracion*, si bien incompleta ó parcial; ó no en toda la estension de que es capaz; aplicable á la misma, por tanto, la ancha escala de penalidad que la ley, con prevision, confia á la prudencia jurídica del juzgador, y que indudablemente la ha establecido y sancionado en su notable latitud para casos como el presente, ó de análoga dificultad, á que el delito de castracion se presta mas que otros. Otra cosa seria si no resultase la eliminacion, la anulacion completa de la glándula, sinó su dilaceracion, alguna lesion en ella, no habiéndose realizado la destruccion por motivos independientes de la voluntad del agente: en estos casos habrá, como es sabido, delito frustrado.

4.ª *Castracion de la muger.* Cuanto hemos dicho hasta aquí con relacion á los Diccionarios del lenguaje, á la tecnología quirúrgica, y, lo que es mas, á las leyes mismas, inclusas las canónicas, como luego veremos, parece referirse ó realmente se refiere á la castracion de varones, lo cual ya notamos al principio del artículo. ¿Es qué la de la muger, por rara ó por difícil, no es objeto del Código penal? De ninguna manera; ni habria despropósito jurídico mas estraño é injustificable. ¿Qué? ¿Habria delito específico de castracion, con la notable estension y gravedad de sus penas, por la destruccion de un órgano generativo en el varon, solo por esa circunstancia de ser órgano indispensable para la reproduccion; y esta sancion penal no seria estensiva á la castracion de la muger, sin el concurso de cuyos órganos es la generacion, por lo menos, igualmente imposible?

La ciencia quirúrgica tiene por poco menos que impracticable la castracion de la muger; pero es en primer lugar, porque, como la relativa al hombre á las solas glándulas sexuales, aquí la limita á los *ovarios*: y en segundo lugar, porque trata en ese concepto de la castracion *metódica*, de la que se emprende por motivos de curacion, y se realiza y lleva á terminacion perfecta por las reglas del arte; mas no habla de la castracion *criminal*; y precisamente de esta, y no de aquella trata el Código, por lo cual aquí la ley no sigue tampoco á la ciencia; sinó al revés.

Y con efecto: el Código penal habla de la castracion criminal; y por desgracia todavia no son conocidos los últimos caminos del crímen, que puede *de propósito* proponerse la castracion, sin detenerse en reglas, ni medios; al través de otras lesiones igualmente criminales y violentas; añadiendo daños á daños, y proponiéndose menos la perfeccion de la operacion, que el realizar de cualquier modo el daño de su *propósito*; la anulacion de la muger para la reproduccion. Puede por ese camino llegarse á la muerte; pero la muerte entra, segun veremos, como *subentendida* en el delito específico de castracion, y por eso el máximum de la pena es la muerte; pero la muerte impuesta por delito de castracion, pues que solo en este caso se llegará al último grado de la ancha escala de penalidad. Fuera de que para la ley, y la sociedad, es lo mismo que el homicidio se pene por el concepto de castracion, que por el de tal homicidio.

Ademas, es un hecho constante que se ha dado, y es por tanto posible, no ya la castracion criminal; sinó aun la castracion *metódica* de la muger. Sobre la indicacion histórica, hecha á la cabeza de este artículo, los anales de la ciencia de curar dan razon de varios casos. Boerhave, Pablo Zaquías y otros autores médicos hacen mencion de al-

gunos ocurridos en Alemania. Y es por otro lado incontestable que la ciencia misma, si bien tiene por difícil, no reputa imposible, y al revés, la castracion *metódica*, ó artística; como asimismo que tiene por equivalente la castracion de la muger á la del varon (1), lo cual bastaria, aun dando al dictámen de la ciencia el valor que ya hemos visto no tiene en este punto; pues que el Código no distingue en su sancion, ni escluye, por tanto, á la hembra.

Por otra parte, el criminal podrá, ó no, llevar á cabo su dañado *propósito* de castracion; pero es lo cierto que puede intentarlo: que puede empezar á ponerlo por obra, con lesiones, y mas ó menos daños incidentales; y en tal caso podrá no haber sinó delito frustrado; pero lo será de castracion, en virtud del *propósito* y órganos, sobre cuya lesion, ó destruccion recae; siendo en virtud de ello justiciable el delincuente por el artículo 341 del Código.

Debe serlo tambien, conforme á la ley de Partida antes citada (4, tít. 8, Part. 4); y aquí se presenta una nueva dificultad, en que la ley no puede marchar de acuerdo con la ciencia en este punto; ni podrian, teniendo muy diverso fin, como hemos demostrado, hablando de la castracion respecto del hombre. Lo propio que en este, respecto de las glándulas sexuales, el delito de castracion no se circunscribirá en cuanto á la muger á los *ovarios*; sinó á todos «*los miembros que son menester para engendrar*,» segun la espresion de la ley. Pero ¿cuáles son estos nominativamente? Esta es ya cuestion facultativa, y aun mas en la muger que en el hombre, como bien se comprende. En el procedimiento judicial por castracion; cuando el delito ha pasado de tentativa, mediando, por consecuencia, lesiones que revelan el *propósito* de castrar; el juzgador preguntará á la ciencia, si los órganos dañados ó destruidos *son de los necesarios para la generacion*: si la destruccion de ellos es completa, ó incompleta, como órganos generativos: *si de ello se sigue la inhabilitacion absoluta de la muger para la reproduccion*; pues es cierto que, aun dejando intactos los *ovarios*, la incapacitacion absoluta de la muger se seguirá, ó puede seguirse, por anulacion, ó destruccion de otros órganos. De todos es conocido el célebre dicho de Hipócrates *mulier propter uterum est id, quod est*; y es cierto, aun para los no peritos, que el útero y los ovarios son cosas distintas; asi como es evidente, aun por sentido comun, por los conocimientos del derecho y de la jurisprudencia, que destruido el útero, ora por ocasion, ora por medios criminales, la incapacitacion generativa de la muger es tan inevitable, como por la destruccion de los ovarios. Pero, repetimos, que esta es, y, tratando de atentado de tanto escándalo, de lesiones y daños de tal índole, de penas de tal gravedad, debe reputarse cuestion *facultativa* ó de pericia; y aun cuando seria posible, y habrá sido necesario ver en las obras de medicina legal las causas *ciertas* de la incapacitacion generativa de la muger (1), ha de oirse el dictámen pericial. Véase todavia la cuestion 5.ª

Hé aquí ahora el testo notable del Código penal español de 1822, único de los nuestros que menciona esplícitamente la castracion de la muger.

«Art. 638. El que no siendo cirujano, y por razon de enfermedad que lo requiera, castre voluntariamente y á sabiendas, ó inutilice de cualquier modo alguno de los órganos de la generacion á niño, ó niña, que no haya llegado á la pubertad, ó cometa con violencia igual delito contra una persona mas adulta, aunque no llegare á causar la muerte, sufrirá la pena de trabajos perpétuos. Si lo hiciere en persona que haya pasado de la pubertad, consintiendo ella, sufrirá diez años de obras públicas, y des-

(1) «La castracion *podria estenderse* ademas *á la estirpacion de los ovarios*: al menos no se sabrá designar con un término *mas propio* esta operacion, *comparable*, en efecto, *á la ablacion de los testículos*, pues que las hembras quedan *inhábiles* para ser fecundas, *así como los varones* pierden la facultad de reproducirse.. Sin embargo, la estirpacion de los ovarios está puesta en uso en los animales solamente..... En los últimos tiempos *se ha practicado* la ablacion de los ovarios enfermos con un objeto terapéutico.» Roux, Repertorio de medicina, ya citado.

(1) Peiro y Rodrigo, Medicina legal, cap. 1, núm. 6: Capítulo 11, núm. 1, § 7, y 5, §. 1.°

pues será deportado. Pero el que cometa esta accion provocado por algun ultraje violento, que se haga á su pudor en aquel acto mismo, sufrirá un arresto de seis meses á dos años. Y si la hubiere cometido por la necesidad de defenderse, y por no tener otro medio para ello, no quedará sujeto á responsabilidad alguna.»

5.ª *Cuándo este delito se reputará consumado.* Siendo la pena de muerte el *máximum* de la del delito de castracion; y no imponiéndose este grado de pena sinó al delito consumado (art. 60 del Código penal), no puede ser mas grave la cuestion de decidir cuando se consuma el delito de castracion. Algunas indicaciones quedan ya hechas sobre este punto, en las cuestiones anteriores; pero que, si previenen, no escusan el completo desenvolvimiento en asunto de tal entidad, y cuando, segun vamos á ver, la cuestion es compleja, dudosa, y tal, que no admite una solucion absoluta. Porque en efecto: ¿diremos que hay delito consumado, ó que solo se consuma con la ablacion, ó destruccion de *todos* los órganos generativos? Entonces la de alguno solo de ellos no seria nunca delito *consumado*, ó bien seria delito *frustrado*; cuando hay órganos, cuya falta, la del órgano *viril*, por ejemplo, causa la castracion, material y formal, en todos sus resultados, en el hecho y en el efecto, pues hay *ablacion* de órgano generativo, é *inhabilitacion* para el fin natural y legal de la reproduccion. Entonces habria delito de castracion, sin la pena del art. 341. Menos aun seria el delito castigado con ella, ni conforme al propio artículo, si solo se reputaba delito frustrado, pues habria que buscar el grado inferior de pena, correspondiente á este, fuera del artículo. ¿Se dirá *consumado* por la ablacion, ó destruccion de *solo alguno* de los órganos? Mas este podria por sí solo no ocasionar la castracion completa, ni la incapacitacion generativa, como, por ejemplo, la eliminacion de una sola glándula sexual; y seria inadecuado, injusto por demas, castigar el delito en este caso con la acervísima pena del *máximum*. ¿Se dirá que cuando concurren y tienen efecto la *intencion* y el *hecho*? Hay inconvenientes no menores. Pudo ser la intencion la de incapacitar para la generacion, y realizarlo por ablacion ó destruccion de *todos* los órganos: podria por circunstancias independientes de la voluntad del delincuente no consumarse la ablacion de todos, sinó de algunos, y ser estos de aquellos, cuya falta por sí sola ocasiona la inhabilitacion generativa: tal seria la destruccion de ambas glándulas sexuales. Tendríamos entonces castracion *material*, en todo el rigor de la palabra: castracion *formal*, ó en todas sus consecuencias; y sin embargo, no podria ser penada, sinó como delito frustrado. Por otra parte, el *hecho* y el *propósito* podrian limitarse, por ignorancia, ó por otras causas, á la eliminacion de una sola de las glándulas sexuales, en cuyo caso, sin haber castracion absoluta *material*, ni en el *efecto*, pues no se seguia la inhabilitacion generativa, habria de aplicarse el *máximum* de la pena. Cualesquier otras hipótesis y combinaciones que se formen del hecho y la intencion, darán el mismo resultado, lo cual nace de la índole peculiar del delito. Los hay ciertamente en que la consumacion, consistiendo ellos en un solo y simple hecho, es tambien simple, absoluta; y se puede circunscribir y formular su consumacion en el hecho, en el tiempo, y en el efecto, de un modo absoluto tambien, con una sola palabra: de esta índole son el homicidio, infanticidio, violacion, etc. Pero la castracion no es asi, y la ley misma lo ha reconocido, en el hecho de penarla con pena compuesta en la mayor amplitud empleada por el Código en tales casos, como lo verifica en los delitos *complejos*, que por tanto pueden ser consumados de diversas maneras, con mayor ó menor amplitud, mas ó menos completamente: clasificacion, que hemos visto verifica en la castracion, la ciencia misma quirúrgica.

En vista de ello diremos que el delito de castracion no tiene solo una consumacion simple, única, absoluta, sinó mas ó menos plena, y digámoslo asi, gradual, á lo cual responde en el Código la ámplia graduacion en la pena; y el juzgador aplicará esta prudencialmente, segun el caso y circunstan-

cias, segun que la castracion sea parcial, ó completa; pero siempre *castracion*, correspondiéndole esta calificacion específica por el Código, y no otra, en la escala de delitos.

La misma jurisprudencia tendrá que aplicar el juzgador en la castracion, que no es omnímoda en el hecho, ni en el efecto, desde luego, sinó que subsigue, ó se consuma por consecuencia. El mismo delito, que en el momento de su perpetracion no puede reputarse, sinó como frustrado, llegará á veces á consumarse, siguiéndose, como consecuencia necesaria de las lesiones, la *pérdida* de los órganos maltratados, por ejemplo, por atrofiamiento, canceracion, ó de otro modo, y la completa *inhabilitacion* generativa.

En este caso se hallarán, por último, las lesiones, heridas, destruccion de tejidos que puedan verificarse, en la muger sobre todo, antes de llegar á la material destruccion de ningun órgano generativo, y que aisladas, podrán, segun el caso, considerarse, como inherentes, ó inseparables del delito de castracion, como circunstancias meramente agravantes; como delito particular de lesiones, si bastan á constituirlo (arts. 67 y 68 del Código); pues es indudable que estas lesiones, calificadas asi en un principio, variarán de concepto y de penalidad, si por consecuencia necesaria de ellas, á juicio pericial, sobreviene la castracion, hasta absoluta, en el *hecho*, y en el *efecto*, por la pérdida de órganos é incapacitacion generativa; asi como sobreviene la muerte, de la cual hablaremos despues.

6.ª *Coautores: cómplices.* Adoptado por las leyes de Partida, en lo penal, el sistema de igualar en la pena á los autores de un delito y á los cómplices, era consiguiente esta disposicion; aun sin espresarla, en cuanto al delito de castracion. Pero además la espresion: «Si alguno castrare, ó *mandare* castrar..... que haya pena por ello, tambien el que lo ficiere, como el que lo mandó facer, bien como si lo mataren..... El físico, ó cirujano que lo castrare (al siervo) debe haber pena de omicidio.....» Verdad es que aquí todos podian decirse *coautores* del hecho; aunque siempre es verdad que el *propósito* era del que mandaba y pagaba, ó inducia; y el inducido obraba como mero instrumento de pensamiento ageno. Pero el Código penal en el artículo 341 no hace mencion ni diferencia. ¿Quién, por lo tanto, se reputará aquí *autor* del delito? ¿El que concibe el *propósito*, aunque otro lo ejecute? ¿O este; toda vez que ejecuta, con *propósito propio*, pues lo verifica á sabiendas, y deliberadamente, y ademas á él parece poderse aplicar, hasta testualmente, el tenor del Código, *el que de propósito castrare á otro.....*? Ciertamente *los dos*; y aquí vemos una nueva fase de la *consumacion* en este delito, sobre las mencionadas en la cuestion 5.ª Y decimos los dos, porque ambos, y cuantos participen del propio modo, tienen el concepto y responsabilidad de autores del hecho, de principales responsables; y justamente. No lo espresa el art. 341; pero sí el 11 y 12 del Código, señaladamente este último, con arreglo al cual «se *consideran* autores, los que *inmediatamente toman parte* en la ejecucion del hecho; los que *fuerzan* ó *inducen directamente* á otros á ejecutarlo: los que cooperan á la ejecucion del hecho *por un acto sin el cual no se hubiera efectuado.*» ¡Cuántas veces el delito de castracion, como el de asesinato, aborto, y otros, no se realizarian si la depravacion no vendiera, ó facilitara sus servicios! Alvarez y Vizmanos en su juicioso comentario al Código, dicen en este art. 12, que tal vez la definicion de *autores* no es filosófica; sin que tengamos por absolutamente infundado su juicio, aunque cada uno es autor de sus propios hechos. Pero hay, ademas, que el Código, con esa misma conviccion, sin duda, no dijo *son autores*; sinó *se consideran autores*, lo que basta para la penalidad, ó lo que es lo mismo, si pudiera dudarse de la propiedad de la calificacion; no del sentido de la disposicion.

7.ª *Penalidad.* Gravísima es la establecida por el Código para el delito de castracion; y con todo eso, no nos parece escesiva, si bien con la modificacion que espresaremos. Gravísima ha sido siempre la establecida en todos tiempos y por todas las legislaciones.

La de las Partidas, hemos visto, que era la pena de muerte, impuesta siempre, en todos los casos, sin distincion de que en el ofendido se siguiera la muerte, ó no; pues aun sin eso, por la mera castracion, el que la mandase y el que la ejecutase, serian castigados, *bien asi como si matasen* al paciente. Lo propio sucedia en la legislacion romana. Las modernas legislaciones han sido y son menos severas, y véase sobre ello la inmediata *subdivision* de *Códigos estranjeros*; pero siempre graves las penas. Eranlo las del Código de 1822, aunque no absolutas; sinó graduales y relativas, segun los casos, y las circunstancias de sexo, edad, connivencia, etc., como se espresa en su art. 658. Sónlo, y mucho, las del Código penal vigente; puesto que, á pesar de la amplitud de la escala penal, y del ancho arbitrio prudencial que asi se permite al juzgador, siempre resultará que el grado mas ínfimo de la pena que puede imponerse, es el de *cadena temporal* en su grado *máximo*. Hay crímenes, que ademas de su gravedad y perjuicios, llevan en sí una insaciable repugnancia; que se siente hasta al tratar de ellos, por mas que no pueda evitarse. Y con todo, repetimos, que la penalidad del Código en este caso nos parece escesiva, si el *máximum* de la pena, esto es, la pena de muerte, ha de imponerse por la *mera castracion*, sin que de ello se siga la muerte del paciente, y puesto que asi parece inferirse de los términos absolutos del artículo 341, que sin distinguir las consecuencias de la castracion, limitando á esta su sancion, establece por pena la de *cadena temporal en su grado máximo á la de muerte*. Como vemos en la *subdivision de Códigos estranjeros*, algunos no penan especialmente la castracion: otros la penan especialmente; pero sin llegar á la pena de muerte: otros, en fin, llegan á ella; pero con la restriccion de que se haya de verificar, por supuesto, como consecuencia necesaria de la castracion y lesiones, dentro de los cuarenta dias siguientes, lo que dá lugar á no pocas, ni poco graves consideraciones, de que tendremos que hacernos cargo.

Pero el Código español no hace ni siquiera esa distincion: no menciona el seguimiento, ó no seguimiento de la muerte: es, por otra parte, incontestable, que esta no se sigue *siempre de necesidad* á la castracion, como lo prueban, sin necesidad de conocimientos periciales, los multiplicados casos, que aun en nuestros dias se han presenciado, y presencian en los dedicados por tal circunstancia al canto, en las capillas de música vocal, y otros puestos de su clase; y es preciso deducir, por tanto, que segun el Código, por la mera castracion, sin mas consecuencias contra la vida del paciente, se puede llegar hasta la pena de muerte; asi como es evidente que esta en tal caso es escesiva. Nadie puede vituperar mas que nosotros este delito, que revela y lleva en sí un género de perversidad por demas repugnante: pero con todo, hay cuestiones, que son de sentido comun; y aun opinando como nosotros todos los hombres, y con el mismo rigor que los autores del Código; todavia es incontestable que el buen sentido, con la ciencia general ha de encontrar cierta repugnancia, ha de surtir en su fondo, aun sin quererlo, ni filosofar sobre el caso, una insensible desaprobacion en ver conducir á un reo al patíbulo por el delito de mera castracion, sin que se haya seguido la muerte del paciente, pudiendo muy bien suceder, que este, convalecido ya de sus lesiones, formara parte del concurso.

Es este, pues, un punto digno de toda atencion y de esquisito criterio por parte de la jurisprudencia. Aplicar una pena indudablemente repugnante, es desacreditar la ley que la impone: no imponerla, estableciéndola la ley, es todavia mas disonante y de peor efecto, pues revela el peor de los males jurídicos, la arbitrariedad. Los autores y espositores del Código han comprendido bien esta dificultad; y unos no la han tocado en sus comentarios, y otros la resuelven del modo que les ha sugerido su buen criterio; del modo mas adecuado para salvar el prestigio del Código, pero no convincentemente. Haciéndose cargo de esta cuestion los escritores Alvarez y Vizmanos en su comentario al art. 341, y notando que otros códigos es-

tranjeros, si llegan hasta la pena de muerte en el delito de castracion, es espresando, que haya de entenderse cuando la del paciente se sigue á las lesiones, y eso con la limitacion de tiempo que ya hemos indicado, dicen que esta distincion en el Código español «báse creido innecesaria, y aun perjudicial... primero, porque si la muerte ha sido consecuencia de la castracion, el autor de esta será castigado como *homicida*; y segundo, porque si en casos concretos es dudoso, mucho mas en regla general el determinar, cuando la muerte haya de ser considerada, como consecuencia precisa de la castracion. Estas cuestiones deben quedar á los hombres del arte, y resolverse en cada caso conforme á las circunstancias del mismo.»

Pero la cuestion capital queda en pié; porque cada caso y sus circunstancias han de apreciarse conforme á la ley, que si no puede formular su sancion en abstracto, y en pormenor, ha debido hacerlo en principio general, dando asi una regla al criterio del juzgador, que escluya la arbitrariedad, mucho mas en una legislacion oportuna y completamente sistematizada, tanto en la escala de penas, cuanto en la de delitos y faltas, como la del Código penal.

Porque en efecto: si la muerte del paciente, simultánea ó subseguida al delito de castracion, se castiga como *homicidio*, la pena de muerte en este caso es testual y específicamente diversa, en su composicion, razon y fundamento casuístico, de la misma pena de muerte por delito de castracion. Por homicidio siempre se impondria, y tiene su artículo especial en el Código. Mas en ese caso ¿á qué, si como comprenderla; ó qué significa el comprenderla en el art. 341 como parte integrante, formando precisamente un grado de la pena compuesta y *especifica* del delito de castracion? La solucion, dada por dichos comentadores, esplicaria bien el no haberse hecho mencion en el art. 341 de la pena de muerte, y cuya mencion efectivamente era ociosa si la mente del legislador fué, que la muerte se castigara separadamente por homicidio; y pues que la muerte voluntaria y deliberada siempre se castigaria como tal, como *homicidio*, por otro artículo; y mas si al cabo, segun los mencionados espositores, se impone en el caso supuesto, por el artículo 333, y no por el 341 y el 77; por el delito de *homicidio*, y no por el de castracion. Pero entonces, repetimos, que la dificultad capital queda en pié, y siempre habrá que preguntar: ¿es cierto que la pena de muerte forma parte y constituye grado en la del delito de castracion? A esto responde el tenor del art. 341. ¿Es cierto en virtud de ello, que, segun este artículo, la pena de muerte se impondria por el delito complejo de castracion, aun cuando, por un supuesto, no estuviera penado el *homicidio* simple con pena de muerte al tenor del art. 333? Es evidente tambien.

Mientras no se modifique, pues, el artículo 341, eliminando, como ocioso ó redundante en el mismo, el grado máximo de pena *de muerte*, si al cabo esta ha de imponerse siempre al homicidio voluntario con circunstancias agravantes, por cualquier motivo y medio que se verifique, es preciso decir, que la muerte del paciente, ya simultánea, ya *subseguida*, ya *subentendida* en el delito de castracion: que constituye en este el mayor grado de estension en los daños irrogados, al que corresponde el grado máximo tambien de la pena: que solo en este caso, por lo tanto, se impondrá dicho grado máximo, en cuyo supuesto desaparece la invencible repugnancia de ver á un reo conducido al cadalso por *mera castracion*: sí, lo será, en este caso, por delito de *castracion*; pero llevado en su índole compleja á la mayor amplitud de sus daños. Y es de necesidad jurídica el hacerlo asi, porque siendo tan diversa como demuestran los arts. 333 y 341, la composicion de la pena en los delitos de *homicidio* y de *castracion*, es diversa tambien su graduacion respectiva al determinar sus grados *mínimo*, *medio* y *máximo*; y diversa al aplicarlas en cada uno de los dos casos, al delito frustrado y á la tentativa, á la proposicion y á la conspiracion. Nuestra opinion es que debió y debe componerse la pena compleja de la castracion sin el grado

de la de muerte, dejando este en su caso para el delito de homicidio, y puesto que el sistema del Código no es, como el de la legislacion romana y de Partidas, de imponer en todo evento por la mera castracion la pena de muerte: que no hay inconveniente en ello, ni daño para la sociedad, pues siempre la muerte queda castigada: pero que es una necesidad jurídica el sostener que en el delito de castracion la muerte en su caso se impone por el art. 341 y no por el 333, por la razon dicha de ser diversa la composicion de las penas en ambos casos, y diferente la graduacion de las mismas.

Es una cuestion si conviene, ó no, fijar un plazo, dentro del cual únicamente pueda preguntarse si la muerte, que puede sobrevenir al castrado, es ó no consecuencia necesaria del delito. Los dos estremos tienen no leves inconvenientes. Si no se fija término ¿quiere decir que en cualquier tiempo en que la muerte ocurra podrá preguntarse á la ciencia, si es, ó no, como consecuencia necesaria de la castracion? Que la muerte puede seguirse *necesariamente* de aquella, en el sentido de que sin la castracion, sus inevitables lesiones, y las complicaciones é incidencias ordinarias ó estraordinarias, no se hubiera verificado, es incontestable; como lo es que esta lamentable incidencia no tiene, ni puede tener un período determinado; en cuyo caso, pudiendo ocurrir á los sesenta dias, lo mismo que á los cuarenta que prefijan algunos códigos estranjeros, seria una repugnante injusticia que quedase sin castigo un homicidio, mas ó menos deliberado; pero voluntario por lo menos en su causa. Mas ¿quién puede tener esa certeza al través de un período de tiempo indefinido, y por tanto interminable? ¿Cuántas veces para ello habria que abrir un juicio cerrado, so pena en otro caso de no cerrarlo nunca, ó en un tiempo tambien indefinido, esperando el éxito incierto de si á la castracion se seguirá la muerte? ¿Qué facultativo puede tener conocimiento, por otra parte, de los escesos á que puede entregarse el paciente, y á los que sean debidos cambios perjudiciales en la marcha del mal, y en el progreso de la curativa? Por otra parte seria ocioso para los fines de la justicia el esperar indefinidamente, pudiendo tener por cierto que si á la raiz de los hechos hay dificultades, insuperables á veces, para declarar con seguridad sobre las consecuencias de una lesion, y mas si son de muerte; si aun en ese caso, bajo las impresiones de sentimiento é indignacion inseparables de los primeros momentos, todavia por motivos de conciencia, y por no aumentar daños á un tercero, se adopta el término mas seguro de una declaracion negativa ó dubitativa, todo sucede mas por completo al término de un plazo prolongado, en que hasta los estímulos de sentimiento y justa indignacion han perdido su energía, ó se han cambiado en compasion inversa mas ó menos prudente. Si por otra parte se fija un término cualquiera, el de cuarenta dias ¿quién puede tener seguridad de que á los cuarenta y uno no se verificará la muerte, necesariamente subseguida? ¿Quién por otra parte, en caso de índole tan incierta, puede poner término á las observaciones y accidentes naturales? Parécenos, por tanto, que el partido mas prudente es el adoptado por el Código español, dejando el resultado, pues tanto hay que dejar en tales casos, á la prudencia judicial, al buen sentido.

El Código no menciona las circunstancias de sexo y edad, como el de 1822; pero en virtud de su sistema de circunstancias *agravantes* y *atenuantes*, no hay duda en que el juzgador tendrá que tomarlas en cuenta alguna vez, ora por abusar de superioridad, como sucederia respecto de un niño, niña, muger ó anciano; ora por ensañamiento, ó especial inmoralidad y depravacion, como se podria interpretar en un anciano, en que ya á ningun fin esplicable de otro modo puede conducir el delito.

En el mismo caso de prudencia jurídica están los medios empleados. No nos referimos á los medios comunes de mayor ó menor crueldad, prepotencia, astucia, alevosía, etc.; sinó á los peculiares ó específicos de ejecutar la operacion, como sucede respecto de los llamados *thlibias* y *thlarias*; aunque por regla general diremos, que el prefe-

rir un medio específico á otro; la presion, por ejemplo, á la amputacion; no modifica la gravedad del delito, cuando no conste se hizo la preferencia por aumentar el padecimiento.

De mayor influencia son, y deben ser en la calificacion del delito, los motivos que han determinado á realizar el hecho. Y decimos el *hecho*, y no desde luego el *delito*; porque en muchos casos el hecho deja de ser delito en fuerza de los motivos, que unas veces atenúan la responsabilidad, otras la agravan, y otras relevan totalmente de ella, como en teoría general lo establece el Código para todos los delitos. Algunos códigos espresan motivos específicos para el caso de castracion. Segun el Código penal de 1822, atenuaba la pena el ejecutar el hecho provocado á ello el agente *por algun* ultraje violento hecho á su pudor en el acto mismo: y escusaba totalmente de responsabilidad, si el hecho *se cometiese por la necesidad legítima de defenderse, y por no tener otro medio para ello.* El Código francés consigna la primera de estas escepciones. El español reformado en de 1850 no hace ni indica ninguna en su artículo 341, y antes el testo del mismo requiere una inevitable esplicacion, pues, como ya hemos indicado, el *propósito* de castrar puede ser culpable, y puede ser inocente. ¿Diremos que el Código adolece en esta parte de imprevision ó de crueldad? De ninguna manera. En virtud de su lógico y bien combinado sistema, el valor de cada artículo del libro 2.° y 3.° ha de buscarse en los temas generales del libro 1.°; y en este, en el cap. 2 se verán los motivos y causas que eximen de responsabilidad; en el 4.° los que la agravan; en el 3.° los que la atenúan; mecanismo en que el Código español aventaja, ó iguala por lo menos, á los mejores códigos de Europa. Hay dos casos, sin embargo, uno de relevacion absoluta de responsabilidad, otro de atenuacion de ella, que merecen alguna indicacion especial. Es el primero el del facultativo que verifica la castracion por motivos inevitables de curativa, de lo cual hablamos mas adelante: el otro es relativo á los padres que castran ó hacen castrar á sus hijos á fin de habilitarlos para el canto. Haciendo justicia á los impulsos y sentimientos de la naturaleza, es imposible suponer, como evidentemente no resulte lo contrario, que los padres se decidan á este fin, sinó por motivos, mejor ó peor comprendidos, del bien y ulterior prosperidad de sus hijos; asi como es evidente la diferencia que hay, en todo caso, entre estos motivos y los de una especulacion, los de brutal venganza, los de pura depravacion ó disolucion de costumbres. Y sin embargo, atento el legislador á estirpar el reprobado y repugnante abuso, á evitar el escándalo de parecer que hallaba disculpa para el crímen de los padres, y aun de que lo autorizaba, dispensándole indulgencia, no ha distinguido, ni de las bases generales de penalidad del libro primero puede iuferirse especial diferencia, que seria perniciosa, ni mas que la comun de circunstancias *atenuantes* y *agravantes*; y todavía en muchos casos el juzgador ha de verse perplejo al determinar por reglas de prudencia judicial, si la cualidad de paternidad y filiacion, y los vínculos y respetos sagrados que en ello median, son mas bien una circunstancia agravante que atenuante; lo propio que el motivo, supuesto y suponible de la felicidad del hijo, pues que hay infinitos otros medios lícitos de procurarla. Posible es que en muchos casos el juzgador halle motivos de agravacion; dolorosa, ciertamente; pero que no podrá escusar, como no siempre puede hacerse, por ejemplo, en el parricidio é infanticidio, mediando los mismos vínculos y sentimientos sagrados.

Concluiremos notando en cuanto á la atenuacion ó relevacion de responsabilidad por ofensas contra el pudor y fidelidad conyugal, que no solamente aquellas descansan, segun el caso, sobre las disposiciones de los citados cap. 2 y 3, lib. 1 del Código, sinó tambien sobre las disposiciones del art. 348, pues si el marido puede matar ó herir á los adúlteros, y el padre á los que por medios inhonestos ajan ó arrebatan el honor de sus hijas, con relevacion ó atenuacion de pena, segun las circunstancias, eso mismo se veri-

ficará aunque estos males se irroguen en el sentido del art. 541.

8.° *Connivencia.* No parece podia suponerse para un daño y abuso de tal género, y sin embargo, no sólo puede darse y se ha dado el caso, y ha sido objeto del derecho; sinó que, si ha habido quienes han ejercido la ablacion sobre sí mismos, menos repugnancia ofrece el comprender que hayan sido conniventes, ó asentido al hecho. Segun el Código penal de 1822, el asentimiento ó connivencia del paciente, atenuaba, segun vemos en el art. 638, la responsabilidad y pena del ejecutor. El Código de 1850 no distingue, y parécenos que con sobrado fundamento. Ciertamente arguye menos perversidad el ejecutar el hecho criminal con asentimiento del paciente, pues media menos violencia y atenúa las ideas de crueldad y padecimientos, puesto que son queridos por el que los sufre: y con todo, mas bien habria que cuestionar si el connivente incurre en responsabilidad, que no si el ejecutante ha de librarse de ella, perpetrando voluntariamente, *de propósito*, un hecho reprobable y reprobado por las costumbres y las leyes. El que se decide y tiene bastante crueldad é inmoralidad para insultar á estas con asentimiento del que tambien las insulta en su persona, no se detendria mas, ni cambiaria siempre de sentimientos y de resolucion, sin la connivencia. Seria por otra parte sumamente peligroso admitir esta como medio de escusar la responsabilidad del delincuente, que ensayaria, y no siempre seria sin resultado, el convertir la violencia, el terror en connivencia, que tal haria aparecer el testimonio arrancado á la víctima. El delito, pues, de castracion, se reputará tal, pues el Código no distingue, por parte del ejecutor *de propósito*, á pesar del asentimiento, efectivo ó supuesto, del paciente; y cuando mas, la connivencia probada podrá ser tomada en cuenta alguna vez para atenuar las circunstancias agravantes de crueldad. Si el connivente ha de ser ó no irresponsable, lo veremos en la cuestion siguiente. Concluiremos repitiendo, primero, que el Código de 1850 lleva en esto ventajas al de 1822, y que hay menos disonancia é inconvenientes en dejar el caso á la apreciacion judicial, segun las demas circunstancias del mismo, que no en establecer testualmente atenuacion de pena por la connivencia, pareciendo que así se autoriza esta, cuando, ya que pueda haber razones para no penarla espresamente, moralmente debe ser reprobada por la ley y las costumbres: y segundo, que el juzgador ha de ser mas bien estricto y severo, que no lapso en su juicio, al apreciar la connivencia como atenuante, en su caso, de la responsabilidad del ejecutor.

9.° *Castracion por sí mismo.* El derecho canónico la castiga indirectamente, por la *irregularidad*. En la jurisprudencia romana se castigaba tambien, pues lo mismo era castigar la *connivencia*, que equivale al asentimiento y propósito de ser castrado. Gregorio Lopez, en la glosa 2.ª á la ley 15, tít. 8, Partida 7, haciéndose cargo del tenor de la ley Cornelia (tít. *Ubi vi*, §. *Constitutum*), en lo relativo á la confiscacion de bienes, dice en esta razon: *Quod habet locum, sive volens, sive invitum quis castretur; imo, et ipse, qui patitur se castrari, punitur: castrans hominem dicitur inimicus naturæ, secundum Baldum.* Y ciertamente, cuando se castigaba el suicidio, nada mas consiguiente que el castigar la castracion por sí mismo, y lo propio la connivencia, ó asentimiento. Pero cambiado este sistema, buscando en la perturbacion mental una esplicacion y disculpa para este abuso; reputado, por tanto, mas bien desgracia, y aberracion de la inteligencia, que delito; era consiguiente el silencio de las modernas legislaciones sobre la castracion por sí mismo y la connivencia. Por otra parte, segun la letra del Código, no se castigará como delito, ni como falta, ningun hecho que no se halle calificado de lo uno ó de lo otro por el mismo; y por tanto, su silencio hace que dichos escesos ó demasías, no sean objeto directo de la legislacion criminal.

Códigos modernos estranjeros. Código francés. Art. 316. *Toda persona culpable del crímen de castracion sufrirá la pena de trabajos forzados perpétuos. Si sobreviniere la muerte dentro de los cuarenta dias si-*

guientes al crimen, se impondrá al reo la pena de muerte.

Art. 325. *Si el crimen de castracion fuere inmediatamente provocado por un ultraje violento contra el pudor, será considerado como homicidio, ó lesiones escusables.*

Homicidio *escusable*, por supuesto. En el cuerpo del artículo dejamos notado el testo del decreto de 1814, esplicando el valor legal de la voz castrar.

Código de Nápoles. Art. 364. *El delito de castracion será castigado con la pena de trabajos forzados de cuarto grado. Si sobreviniere la muerte antes de cumplirse cuarenta dias, se impondrá al culpable la pena de muerte.*

El Código austriaco no hace delito específico de la castracion, dejándola, por lo tanto, confundida con las demas lesiones, de cuya penalidad tratan sus arts. 136 y 137.

El Código del Brasil la deja asimismo confundida con las demas mutilaciones y destrucciones de órganos, ó miembros determinados, de las que trata en sus arts. 202 y 203.

Costumbres, jurisprudencia, ciencia de curar. Sin darse razon de ello, por una razon instintiva, que se identifica con la cardinal, y como ingénita de la reproduccion de la especie, las costumbres encuentran ésta rebajada, aun en la víctima, que ninguna participacion ni connivencia ha tenido en su desgracia, y como degradacion; y hay ejemplares de instituciones corporativas que les han cerrado el acceso; y aun en las leyes de Moisés hallaremos vestigios de ello, si bien por razones peculiares á ella, análogas á las que hacian que, segun la misma, la esterilidad fuese notada de infamia.

En los siglos medios fué tambien cuestion si el eunuco, ó castrado, podia ser admitido caballero, y si podia suceder en el feudo (1), si bien resolviendo las dos afirmativamente; como debieron, y hoy mas que nunca, segun la índole de las modernas legislaciones, deben serlo en lo civil, político y administrativo las análogas, que pudieran suscitarse.

(1) Gregorio Lopez, glosa 4, á la ley 13, tit. 21, Part. 2.ª glosa 9.ª, á la ley 6, tit. 26, Part. 4.

En cuanto á la ciencia de curar, hemos visto que, absolutamente considerada, ó cuando la misma se ciñe á sus propios fines, la tecnología en el asunto que es objeto de este artículo, no vá de acuerdo con la tecnología jurídica, ni el juzgador, por tanto, ha de preocuparse por las tésis y consecuencias de esta.

Pero hay un terreno en que una y otra se hermanan: en que se prestan mútuo ausilio: en que si unas veces la ley se subordina á las prescripciones de la ciencia; otras la ciencia se subordina á las prescripciones de la ley, como esplanaremos en su artículo correspondiente. Este terreno es el de la *medicina legal*. El juzgador no consultará á la ciencia en aquellos puntos que, facultativos, ó no, decide la ley, segun hemos dicho. La ley ha declarado ser castracion la ablacion, destruccion, anulacion, *amenguamiento de los miembros que son menester para la generacion*, y de cualquier modo, por cualquier medio, «*de otra manera* cualquier que (dichos miembros) *se perdieren*,» y sobre ello no cabe cuestion de pericia. Es de rigor, sin embargo, sobre si tal órgano *es menester* para la reproduccion: si ha sido ó no anulado; ó destruido: si directa, ó subsecuentemente, por causa de las lesiones y malos tratamientos: si á su pérdida se sigue la incapacitacion absoluta: si la muerte, simultánea, ó subsecuente, proviene por necesidad de las heridas, ó lesiones, etc.

Hay, en fin, un asunto que es del resorte de la ciencia absoluta y de la medicina legal. Tal es el relativo á la responsabilidad de un facultativo que practica la castracion llamada *metódica*, ó ejercida segun las reglas del arte, como medio curativo. Grandes errores cubre en este punto la tierra, y grande ha sido la tolerancia, ó la indiferencia de las legislaciones, sobre tales errores. Cométense á veces por intrusos en la ciencia de curar, ó por empíricos audaces é ignorantes. La crónica de los errores, y crímenes materiales en esta parte, cita hechos que parecen increibles. Ha habido tiempos, en efecto, en que se ha prodigado la castracion, ora *metódica*, ora rutinaria, y morti-

fera para la curativa de la lepra, y otras enfermedades cutáneas: para la locura; y sobre todo para la curativa de la *hernia*: medio confiado y permitido de ordinario á la ignorancia, y que es el que mas víctimas ha costado á la humanidad. Si alguna vez la administracion, ó la ciencia han fijado, mas ó menos momentáneamente, su atencion en ello, no puede leerse, sin cierta indignacion y estremecimiento, el catálogo de las desgracias. El número de curanderos, y el abuso de lo que la ignorancia, como parece, llamó *cortar la tripa*, y no era otra cosa que la amputacion de las glándulas sexuales, llegó á tal punto en Francia en el último siglo, que se aseguró haber practicado uno de ellos en solo la ciudad de Breslaw mas de doscientas amputaciones. El gobierno en 1776 se creyó en la precision de consultar sobre ello á la real Academia de Medicina, la cual, segun su dictámen, publicado en sus memorias en 1779, declaró tal práctica absurda y criminal. Hoy la ciencia ha reducido los casos de castracion *metódica*, y por curativa, casi á uno únicamente, y eso con suma circunspeccion, y sobre el mismo principio que las leyes lo autorizan, cuando de lo contrario haya de seguirse la muerte del paciente, no habiendo otro medio de evitarlo. En este caso las leyes escusan de toda responsabilidad, lo mismo las de Partida, como ya hemos visto, que las disposiciones del cap. 2, libro 1 del Código penal. Pudiera haber que exigir la responsabilidad al facultativo operante, por no estar la operacion indicada, ó de otro modo haber faltado á las prescripciones de la ciencia. Este punto es del todo facultativo, y el juzgador no puede dictar sentencia sin dictámen pericial sobre ello.

Derecho canónico. Hemos indicado en el cuerpo del artículo, que ya las leyes de Moisés hacian mérito de la castracion. Y, con efecto, el Deuteronomio, en el lugar ya citado, ordenaba: *Non intrabit eunuchus, attritis, vel amputatis testiculis, et absciso veretro, in Ecclesiam Domini.*

La Iglesia conservó despues y siempre este mismo espíritu, y de ello son testimonio, entre otras infinitas disposiciones, que aquí no corresponde esplanar, los siguientes cánones de los Apóstoles:

Cánon 22. *Qui sibi virilia amputavit, clericus non efficitor: sui enim ipsius homicida est, et inimicus creatione Dei.*

Cánon 23. *Si quis, cum clericus esset, virilia sibi amputavit, deponitor: homicida enim sui ipsius est.*

Cánon 24. *Laicus, qui se ipsum mutilavit, per tres annos á communione ejicitor: puta, quia ipse vitæ suæ possuit insidias.*

A pesar de todo, el abuso continuó, recibiendo aun nuevo incremento con el género de inhumana especulacion de castrar á los niños, y aun á los adultos, á fin de habilitarlos para el canto en cierta cuerda. La Italia se distinguió en esta inmoral y bárbara costumbre, en esta incomprensible aberracion del amor y solicitud paternal. Habia en las poblaciones, y vagaban por los pueblos considerable número de hombres, no cirujanos, ni facultativos, que hacian profesion de este abuso vituperable, y á la vista de las primeras autoridades: en las ciudades mas populosas, como Nápoles, se leian sobre algunas puertas los rótulos que anunciaban este oficio, como se hacia de cualquier otra profesion lícita, ó plausible. Los Papas, y señaladamente Clemente XIV, tronaron contra este abuso, asi como antes lo habian verificado contra el abuso en general Inocencio III y otros, y entre los Concilios el de Nicea (cap. 1), el arelatense 2 (cap. 7), y el arelatense 3 (cap. 3); pero tronaron casi en vano, si bien hoy las costumbres, y el progreso de las ciencias, y la diversa tendencia de las cosas ván coronando su obra. Véase **IMPOTENCIA, IRREGULARIDAD, MATRIMONIO, ORDEN SACRO**: y en el cuerpo del derecho canónico la distincion 3, part. 1 del decreto de Graciano; el tít. 20, lib. 1 de las Decretales: y el capítulo *Ex parte* de las Estravagantes, *De corpore vitratis.* Véase, ademas, **EUNUCO, ESPADON.**

CASTRENSE. Del latin *castrum*, campamento militar; reales en el mismo sentido; punto fortificado en sentido y para usos de guerra. Aplícase, por tanto, la calificacion de *castrense* á algunas de las cosas

de la milicia, como capellan castrense, peculio castrense, vicario general castrense. Véanse estos artículos.

CASUAL. En Aragon suele llamarse asi la *firma*, decreto judicial, ó providencia precautoria, que dá á peticion de parte, para prevenir el mal de que esta se cree amenazada. Si el mal viene de las cosas, la providencia es análoga á la que se dictaba entre los romanos, á consecuencia de la accion *de damno infecto*: si se toma de las personas, es análoga asimismo á la caucion *de non lædendo*; ambos medios conocidos en los tribunales de Castilla. La providencia precautoria se llama *casual*, no porque lo sea; y antes es deliberada, y prevista; sinó porque se dicta para prevenir *un caso*; por *si acaso* pudiera ocurrir el mal que se teme. Apartándose aquí la voz de su significacion propia y comun, véase lo que sobre la misma, y la falta de exactitud en este punto en la tecnología del derecho, decimos en el artículo siguiente.

CASUAL: CASUALIDAD. Si el hombre es *sujeto de ley* por la *inteligencia* y *el libre albedrío*, preciso es que en su destino *racional*, *moral* y *social*, tengan grande importancia las cosas que sean *objeto* de dichas potencias, y que por este medio vengan con frecuencia á ser tambien *objeto* del derecho; del *constituyente* para establecerlo; del *constituido* para ilustrarlo, y esplicar las infinitas cosas y acontecimientos naturales, muchas cuestiones filosóficas, aun las mas ontológicas, y abstractas, ó que lo parecen; y en ese caso se encuentra la eminentemente filosófica de la *casualidad*, en su trascendental correlacion con el *curso universal de las cosas*.

Preciso era tambien, por lo tanto, que las leyes todas descansasen sobre sólidos principios filosóficos: que fuese asimismo exacta, y severamente filosófica la tecnología de las mismas, y mas aun la de la jurisprudencia, destinada á ilustrarlas; fundada y autorizada por corporaciones y personas de estudio y ciencia; alguna vez mas todavía, y aun por regla general, que por los legisladores; pues que en estos es la *autoridad* lo que en el jurisperito, y jurisconsulto la ciencia. Y sin embargo, bien puede sostenerse que en multiplicados casos la tecnología legal no es asi. Desde luego, por razones que en su lugar espondremos, no puede serlo siempre; pero lo es en general menos aun de lo que puede serlo; y de ahí la verdad, sensible, pero incontestable, de que en el derecho *toda definicion es peligrosa*.

Y cabalmente asi sucede en la materia que es objeto de este artículo y sus correlativos, aun mas que en otras. No tenemos autoridad, ni menos pretensiones para mudar la tecnología en este punto; pero si para censurarla, si es viciosa, como lo es, y para procurar su reforma, esponiendo las razones que á ello conduzcan. Por la primera de las indicadas, por no tener autoridad para mudarla, nos hemos acomodado á ella respecto del presente asunto en los artículos **ACASO**, **ARRENDAMIENTO**, **CASO**, **CASO FORTUITO** y otros; pero indicándolo ya asi en algunos de ellos, en el de **CASO FORTUITO** sobre todo, en que espresamente manifestamos, nos ceñíamos en él á lo recibido; si bien reservando la esposicion mas ámplia de la teoría filosófica y filológica de la *casualidad* para el presente, que por tanto es un complemento de dichos artículos, motivo por el que nos es preciso hablar de ellos nuevamente, y con alguna estension; con especialidad de los casos *fortuito* é *incierto*, de tanto uso é influencia en el órden moral y jurídico. Por eso, repetimos, en varios de ellos hemos concluido con una remisiva al presente, en que creemos indispensable consagrar algunas líneas á desenvolver, aunque lijeramente, la teoría de la *casualidad*, ya que asi lo reclaman, en una obra enciclopédica de consulta, insignes y funestos errores filosóficos, y no poca incorreccion, como hemos dicho, en la tecnología del derecho, bajo cuyo doble punto de vista espondremos las consideraciones que nos proponemos consignar.

Porque en efecto, apenas hay palabra de que se haya abusado mas en daño del género humano, y de la buena moral, razon fundamental y decisiva de la eficacia de las le-

yes, que de la palabra *casualidad*, que con sus análogas ó derivadas, *acaso*, *casual* y otras; con apariencias de teoría y razon filosófica, ha sido, y es aun, la fórmula, absurda; pero funesta, de un *ateismo* ciego, y de sus secuelas el *materialismo* y el *sensualismo*.

Casualidad, como sus análogos *acaso*, *caso*, *casual* y otros, vienen, como hemos dicho en sus respectivos artículos, del latin *cado*, *casus*, caer, suceder, acontecer, sobrevenir: cosa sobrevenida, ocurrida, sucedida: y de ahi *caso*, cuanto ocurre, acontece, sucede, ha sucedido ó sucederá, ora realmente; ora, por traslacion, hipotéticamente, por ficcion, ó supuesto. Aunque con otra razon etimológica, significan lo mismo las voces suceso, acaecimiento, acontecimiento, evento, é infinitas otras análogas.

Desde luego se vé, y casi por intuicion se conoce, que estas enunciativas, que espresan precisamente el *hecho* y el *momento* en que las cosas *empiezan á existir*, en que *varian en su modo de ser ú obrar, se cambian, degeneran y dejan de existir*; como señalan tambien dichas enunciativas *el momento en que tales sucesos y vicisitudes llegan á nuestro conocimiento*; desde luego se vé, decimos, hasta por intuicion, que las mismas se refieren de necesidad, y sin que pueda ser otra cosa, á seres *finitos*, *variables*, destructibles; á los séres contingentes y causas secundarias; pues solo lo *contingente*, lo finito es lo que empieza, varia, se transforma, acaba, por la razon fundamentalísima *de no tener en su esencia la razon de su existencia*; pues á tenerla, no serian finitos, variables, destructibles; sinó *infinitos*, *sin principio*, *alteracion*, *ni fin*; *eternos*; pues de nadie, podian recibir *el principio de ser*, *la alteracion*, *ni la destruccion*.

Infiérese tambien en el segundo concepto que dejamos mencionado, que dichas enunciativas se refieren de necesidad á las inteligencias, *finitas* tambien, y que *empezando*, por tanto, á existir, desconocen la inmensidad de hechos y casos que les han precedido; y que siendo *limitadas*, ni comprenden con un solo y simple acto la inmensidad de los coexistentes y futuros, de los reales y posibles; ni en su totalidad las leyes porque empiezan, subsisten, se deterioran, trasforman y acaban; ni por último el órden, ni el tiempo de estas vicisitudes.

Dedúcese por todo ello, primero: que si todos los séres, á ser asi posible, que no lo es, fueran *infinitos*, *no habria casos*; pues no empezarian á existir, ni variarian en su modo de ser ú obrar, ni perecerian.

Segundo: que si en esta universalidad de cosas hay alguna que sea infinita, *que tenga en su esencia la razon de su existencia*, que sea eterna; para esta, anterior á todo, trascendental sobre todo; y mas allá de todo; todo es conocido; pretérito ó presente, futuro, real, posible; y conocido en la *potencia* y en el *hecho*. Antes del tiempo la *posibilidad* del ser y de sus vicisitudes existió en esa inteligencia infinita; pues que no siendo posibles dos, ni mas infinitos, tiene que ser única: el *decreto* de las vicisitudes, ó *casos* en esa voluntad única, infinita y eterna tambien: la *presciencia* absoluta, universal, infinita, de lo *necesario* y *contingente* en esa inteligencia, única, infinita tambien.

Dedúcese en tercer lugar, que para ese ser infinito y *respecto de él*, *nada*, ni en la *posibilidad*, ni en el *hecho*, es anterior, ni posterior: nada desconocido, ni dudoso: nada ocurrirá sin su *presciencia* y *poder*: *nada*, pues, *respecto de él sucederá por acaso*. Para esta *causa universal no hay casos inciertos*, *fortuitos*, *hipotéticos*.

En cuarto: que por razones totalmente inversas solo respecto de la humana inteligencia, como *finita*, puede haber *casos imprevistos*, con sus diversas clasificaciones de reales, necesarios, contingentes, *inciertos*, *fortuitos*, de pretérito, de presente, de futuro, etc.

En quinto, en fin, que *casualidad* no es, ni espresa otra cosa que la indicada calidad de los séres secundarios, que por lo mismo que no son infinitos, ni necesarios metafísicamente, son *contingentes*, pueden existir ó no; y sus vicisitudes, de principiar á ser, variar, trasformarse, perecer, *pueden ser-*

nos, ó no, conocidas, y previstas por efecto necesario de la limitada naturaleza y alcance de nuestra inteligencia. En suma la *casualidad*, como principio, en términos metafísicos y absolutos, puede reducirse á esta *síntesis*, ó estriba en estos dos estremos: *naturaleza contingente* de las cosas secundarias; *limitacion de la humana inteligencia*. ¡Contingencia, limitacion, caducidad de las cosas! ¡Carencia en sí del principio de su existencia! ¡Eventualidad para existir: existencia precaria: destruccion infalible!!!..... Este conjunto de negaciones y mutuaciones para ser: mutuaciones, contingencia para subsistir: seguridad absoluta de perecer, no siendo á favor de otra mutuacion, como, en fin, sucede hasta en el espíritu; ese conjunto, decimos, ese empezar á ser, subsistir, y desaparecer por *casos*, es la *casualidad*. Y sin embargo, hé ahí la potencia formidable con que el ateo, el materialista, el sensualista, reemplazan á una causa infinita, simple, universal, suprema. Hé ahí el fundamento y demostracion todo á un tiempo, de los sistemas *ateos*. Ese es en suma el *génesis* de Demócrito, de Calistenes, de Epicuro, de Lucrecio, y de tantos como les han seguido despues: la sucesion admirable: el órden de las cosas: esa índole de las cosas en sucederse: ese movimiento, y vicisitudes: esa eventualidad, es la *casualidad*! Nadie lo ordena, ni predetermina: nadie lo dirige, impulsa ó detiene: ese giro, ese movimiento ciego, produce sin otra razon, ni poder los casos y las cosas: las destruye y reemplaza: como produjo el órden de cosas, la universalidad compleja de los séres, pudo y puede producir otras diversas ú opuestas; y cuando al acontecer, al aparecer destruida, al presentarse un caso, preguntamos por su causa y razon; la causa y razon, la voluntad y la inteligencia: la causa ejemplar, y la final, son... ¡*la casualidad*!...

Si el ATEISMO ciego repugna; si el *sentido íntimo*, la *conciencia universal*, la *intuicion*, que se identifica con el principio inteligente de nuestro sér; si el *sentimiento*, la *esperiencia* del género humano rechazan ese *dios casualidad*, esa *razon sin razon*, ese *efecto sin causa*; entonces se toma otro camino, *se animan* á capricho los átomos y elementos, lo *inerte* se convierte en *activo*, lo *contingente* en *necesario*, el *efecto* en *causa*, la *materia* y el *movimiento* en *inteligencia*, la *confusion* en *órden*, y tendremos el *dios universo*, el *panteismo*; no mas comprensible; pero igualmente funesto que el ateismo, y por diverso camino causas infalibles ambos, é igualmente directas, del *escepticismo*, del *materialismo*, del *sensualismo*. La administracion y el derecho verán por cuál de estos caminos han de guiar al género humano, ó si su mision es dejarlo derrumbarse en el hondo abismo y por los aciagos senderos de la *casualidad*.

Hemos reseñado ligeramente, y espuesto por principios rigorosamente filosóficos, el sistema, y aunque se quiera llamar la teoría de la *casualidad*: hemos dejado traslucir de propósito nuestra opinion, que aun espresaremos mas: *no conocemos despropósito filosófico mayor*; y si errásemos, por esta vez habria de ser con Bayle, y Voltaire. «Si un reloj, dice este último, presupone un relojero, si un palacio supone un arquitecto ¿cómo el universo no ha de demostrar *una inteligencia suprema*? ¿Cuál es la planta, el animal, el elemento, el astro, que no lleve gravado el sello de aquel á quien Platon llama el *Eterno geómetra*? Mi opinion es *que el cuerpo del animal mas pequeño*, prueba *tal inmensidad y tal unidad de designio*, que deben á la vez *admirarnos y asombrarnos*. Ese miserable insecto, no solo es una máquina, cuyos resortes se hallan perfectamente combinados entre sí; y no solo ha nacido y vive por virtud de un arte, que no podemos, *ni imitar*, *ni comprender*; sinó que su vida está en relacion inmediata *con la naturaleza entera*, con todos los elementos, con todos los astros... *Quien no descubra en él inmensidad y unidad de designio, que prueban la existencia de un artífice inteligente, inmenso, único; es preciso que esté completamente ciego*... Nunca se nos ha dado la prueba de la no existencia de una inteligencia suprema (1).»

(1) Voltaire, Notes sur les cabales.
«Bayle halla la doctrina de Espinosa *contradictoria y ridícu-*

De lo dicho se infiere, que la *casualidad* puede ser considerada bajo un doble punto de vista:

1.° En rigor *ontológico*, ó como *casualidad*, esto es, como *causa universal*, y hemos visto con Voltaire el absurdo á que conduce.

Y 2.° En sentido mas práctico, bajo el punto de vista de la *efectividad*, como *causalidad*, ó sea *tomada la casualidad por ese conjunto de efectos, por ese movimiento, por ese sucederse, verificarse, realizarse los fenómenos que llamamos casos, acontecimientos, sucesos, en virtud de leyes, que desconocemos casi en su totalidad; y que por lo incesante de dicho movimiento,* POR LA CONSTANCIA DE LA VARIEDAD, hace que lo tomemos, como causa de sí mismo, denominándole á la vez *fuerza de las cosas, curso natural de las cosas, naturaleza, acaso, hado, azar, suerte,* y en el lenguaje de nuestras leyes *natura, aventura, ocasion*, y de otros modos análogos.

Y ahora bien: en este curso natural de las cosas, en esta inmensidad de eventos, hay algunos cuya aparicion, ó realizacion es para todos *cierta*, ó porque han llegado á conocerse, lo bastante á lo menos, las leyes de su existencia y sucesion; ó porque la regularidad y constancia en esta, las hace suponer, y equivale á conocerlas. Tales son, por ejemplo, la salida y postura diaria del sol, el dia y la noche, el curso de las estaciones, las fases de la luna, el flujo y reflujo del mar, etc. De la *realizacion*, de estos *casos*, ó eventos, se tiene tal *seguridad*, tal *certeza*, que justamente en el órden natural son calificados de *necesarios*, en el rigor filosófico de esta palabra, conforme á las leyes y reglas de la filosofía, segun las que *necessarium est id, cuyus oppositum est imposibile*; porque en efecto, sin un trastorno, sin una perturbacion radical en las leyes del universo, lo que no puede suponerse, ni temerse, sin absoluta arbitrariedad, é inseguridad, es *imposible, física y moralmente* que tales eventos dejen de realizarse. *Todos los demas acontecimientos naturales, todos los casos*, de cuya realizacion no puede tenerse esa certeza; son *contingentes*, pueden acontecer, ó no; son, por tanto, *inciertos, eventuales, fortuitos*; pues que segun dejamos espuesto en el artículo **CASO FORTUITO**, se dijo asi del latin *forté*, cuya conocida significacion es *por casualidad, por eventualidad, por acaso.* Pero ya dejamos demostrado, lo hemos hecho antes en el artículo **ACASO**; y es ademas un principio de buena filosofía, un supuesto de toda polémica de buena fé, que para la *causa suprema universal* no hay *acaso*: esto tiene lugar solamente respecto del hombre, porque él; y no el supremo sér, ignora la mayor parte de las leyes y causas de los efectos naturales. En su innata soberbia el hombre, antes que reconocer estos efectos, como providenciales: antes que confesar que no conoce sus leyes; muchas veces ha dado por supuesto que no las tienen; y entonces, viniendo su orgullo en ausilio de su impotencia, dando leyes al universo el que no pudo criarlo ni puede conservarlo, destruirlo, ni aun comprenderlo, tales casos suceden *porque suceden*: han sucedido asi, como pudieron suceder de otro modo; esos, como pudieron suceder otros, y todo sin designio de nadie, *por evento, por acaso, por casualidad, fortuitamente.* Asi en el supuesto movimiento *eterno, ciego*, tumultuario de los *átomos*, segun la filosofía corpuscular de Demócrito, de Epicuro, y de Lucrecio: segun la filosofía atea, y materialista de todos los tiempos, asi, decimos, resultó por *casualidad* el universo que conocemos, como pudiera haber resultado otro diverso, y aun contrario: con arreglo á cuyos principios es preciso que la razon humana no halle repugnancia en admitir, que de la misma manera, *siguiendo el movimiento de los átomos*, y bajo el poder de la *casualidad*, puede el actual universo ser destruido, y reemplazado por otro y otros: cambiada la naturaleza de las cosas y sus leyes, sin hallar repugnancia tampoco en que pensase la materia, y no el espíritu; en que lo corpóreo no fuese grave:

la. Y efectivamente ¿en qué imaginacion cabe un dios, del cual todos los séres fuesen modificaciones y que por lo mismo, *seria á la vez jardinero y planta, médico y enfermo, asesino y víctima, destructor y destruido?* » Voltaire, Notes sur les systemes.

Lorenzo Arrazola

el calórico, el lumínico, el sol, los astros, la materia eléctrica faltarian, y sin embargo habria luz y vida en el universo: no seria filosófico, en fin, ni aun estrañar, que el mas imbécil de los hombres, en fuerza de agitar en un saco y arrojar incesantemente á la aventura las letras de un alfabeto que no conociese; del *chino* ó del *sanscripto*; produjese en estas lenguas, la Jerusalen del Taso, ú otros poemas mas admirables; y lo mismo las sátiras de Volney, que las cartas de Santa Teresa: la filosofía de Platon, que la de Epicuro: el génesis de Moisés; ó el poema de Lucrecio.

Tal es el *sistema*, mas bien que *teoría* de la *casualidad*, como *causa*, que es el primer objeto del presente artículo. Réstanos considerar la *casualidad* en su relacion con el derecho.

El derecho no lleva tan al estremo las consecuencias del sistema de la casualidad. Segun ya hemos indicado, considera á este bajo el punto de vista práctico: como *casualidad*; ó solo bajo el de los efectos, segun que estos pueden ser previstos, ó no, por el hombre, y hacerle, ó no, responsable.

Bajo este concepto todos los casos ó sucesos que pueden ser objeto del derecho, son en teoría general, y por parte de las cosas que están fuera del hombre, *necesarios* y *contingentes*; á que hay que añadir por parte del hombre los *racionales* ó *potestativos*. Estos y los necesarios comunes son siempre previstos: los contingentes, y por tanto *fortuitos, inciertos, eventuales*, solo cuando, por ser *ordinarios*, pueden ser ó suponerse previstos. Ultimamente, aun estos, aun los que pueden ser, y suponerse previstos, pueden realizarse con circunstancias estraordinarias, con tal violencia, ó intensidad, que aunque previstos, no pueden ser remitidos; y es lo que en el derecho constituye lo que se llama *fuerza mayor*, porque es mayor sin duda que lo previsto, y que la resistencia que podia oponer el sujeto de cuya responsabilidad se trata.

Tal es la teoría combinada de la filosofía y del derecho; fijando este su consideracion únicamente, así como las leyes y reglas de la moralidad y las costumbres, segun debe ser, en el principio filosófico de la imputabilidad, en lo que la filosofía llama, *no acto del hombre*; sinó *acto humano*, reputando solo tal aquel en que interviene *advertencia de parte del entendimiento, deliberacion de parte de la voluntad*, positiva esta, ó presunta, *antecedente, concomitente, ó subsecuente*. Fundados sobre este principio el derecho y las leyes de la moralidad: estrivando justamente en la regla filosófica *ignoti nulla cupido*, que no puede haber *asenso ni disenso*, deseo, ni aversion en lo que no es conocido; reputa los sucesos en tal supuesto, *imprevistos, inopinados*, y les llama, segun el caso, *inciertos, eventuales, fortuitos*, prescindiendo de la cuestion filosófica de si tienen *causa* ó no; y atendiendo únicamente á que, no siendo conocida esta en sí, ó en sus efectos, ni pudiendo serlo por el sujeto de la ley, las cosas pasan respecto de él, y para el efecto de la responsabilidad, del mismo modo que si no la tuvieran; esto es, *eventual, casual, fortuita, inopinadamente*; y este solo es el valor que tienen en el derecho las enunciativas de *casualidad, eventualidad, hado, acaso, suerte, azar, ocasion, naturaleza*, etc.

Limitándose estos efectos y calificaciones al *sujeto* de cuya responsabilidad se trata; pueden ser *fortuitos, eventuales* para él, no solo los sucesos inopinados, que provienen del *hecho de la naturaleza*, sinó los que provienen de un hecho humano, del hombre, con plena ciencia en el autor, ó agente, como sucede en los que promueven y llevan á cabo guerras, incendios, etc., inopinadamente para las víctimas de estos sucesos.

Pero bajo este concepto jurídico y moral aun los mismos casos *necesarios* no lo son todos, ó no lo son siempre absolutamente, esto es, no son necesarios *en aparecer* ó realizarse, *en el tiempo* y *en el modo*. La salida diaria del sol, por ejemplo, es caso *necesario* en los tres conceptos, pues necesariamente en las regiones intertropicales saldrá, ó superará el horizonte cada dia, y saldrá al mismo *tiempo* y del *modo* que le corresponde salir segun las leyes astronómicas y físi-

cas en cuanto á sí; pues no han de referirse al *astro*, ni al fenómeno astronómico los accidentes atmosféricos: las estaciones son *necesarias* en *realizarse* cada año, y en el *tiempo*; pero no en el *modo*, en cuanto á los efectos físicos, y meteorológicos, y antes muchas veces vienen trastornadas: la muerte, en fin, de todo ser viviente es *necesaria* en el efecto; pero no en el *tiempo*, ni en el *modo*.

Lo propio sucede respectivamente en cuanto á los casos *contingentes*, ó no *necesarios*. Los hay que son absolutamente eventuales, esto es, *en realizarse*, ó no, y aun dada esa primera circunstancia, *en el modo* y *en el tiempo*. ¿Quién puede tener seguridad, por ejemplo, de que aparecerán una, ó diez auroras boreales; y aun apareciendo; de cuándo será, ni de qué modo? En otros eventos falta la certeza solo en alguno de los dos últimos conceptos. Puede darse por cierto, por ejemplo, que en cada año lloverá, helará, habrá escarchas, rocíos, etc.; pero no del *tiempo* en que ocurrirán, como ni tampoco del *modo*, esto es, de la intensidad y circunstancias de tales fenómenos.

De lo espuesto hasta aquí derivan las siguientes deducciones en el terreno de la moral, de las costumbres y del derecho.

1.ª Que todos los *casos*, todos los hechos y acontecimientos en el inmenso é incesante curso de la *naturaleza* y del *libre albedrío*, bajo el punto de vista en que aquí tratamos de ellos, que es el de la *imputabilidad*, y consiguiente *responsabilidad*, son, ó *necesarios*, ó *contingentes*, ó *potestativos*.

2.ª Que no constituyen clase diversa de los *contingentes*; sinó que son una misma cosa con ellos, los denominados *eventuales*, *inciertos*, *fortuitos*, ó de otro modo análogo, fundado meramente en razones etimológicas, como aquí se vé, ó como se realiza, por ejemplo, en las enunciativas *eventual*, *casual*, *fortuito*, etc.; ó bien por conceptos puramente lógicos, ó relativos á la inteligencia humana, como sucede en las calificaciones de casos *inciertos*, *imprevistos*, *inopinados*, etc.

3.ª Que así los casos *necesarios*, como los *contingentes*, son *ordinarios* y *estraordinarios*, segun que se realizan siempre, y de un modo ostensible para todos, y al alcance del comun sentido y de todas las inteligencias.

4.ª Que aun los casos *necesarios* pueden ser *contingentes*, ó *fortuitos*, respecto del hombre, en alguno de los tres conceptos antes espresados, esto es, en cuanto al tiempo y al modo de realizarse; y que en este sentido, aun los casos *ordinarios* pueden resultar estraordinarios. Así la lluvia, el frio, el calor, etc., son, segun hemos dicho en el artículo CASO FORTUITO, eventos ordinarios; pero puede la intensidad del fenómeno, el aumento ó decremento de su fuerza, el tiempo en que ocurra, retrasándose, como en las grandes sequías; precipitándose, como en los grandes temporales; puede, decimos, salir tanto de lo acostumbrado, que constituya en ello, en lo que presenta inusitado, un caso *estraordinario*, que por lo tanto no se supondrá previsto, y podrá con propiedad llamarse en este sentido *fortuito*, *estraordinario*, y aun *fuerza mayor*.

5.ª Que solo cabe seguridad ó certeza moral respecto de los casos *necesarios*, y de los *contingentes ordinarios* en lo que lo sean ó mientras no salen de su tipo, al tenor de la regla 4.ª: que solo de estas dos especies de casos, y en el espresado concepto, cabe *prevision*, y por tanto *imputabilidad*: y por consecuencia necesaria, que cuando faltan los antedichos conceptos de *necesarios*, y *ordinarios*, sea en el *tiempo*, sea en el *modo*, tales casos revisten en ello el carácter de *estraordinarios*, é *imprevistos*, y aun los necesarios el de *contingentes ó fortuitos*.

6.ª Que á veces aun en los casos *necesarios absolutos*, y en los contingentes ordinarios, cabe solo *certeza relativa*; y únicamente apreciando esta circunstancia, se determinará con justicia la responsabilidad. Tal sucederá en el primer caso en los eventos y fenómenos, digámoslo así, *periciales*, *científicos*, *facultativos*, ó no comunes. Un eclipse, la aparicion de un cometa, la conjuncion de dos astros, son casos *necesarios*; ciertos para un astrónomo; *inciertos*, *fortui-*

tos para el comun de los hombres. La lluvia es un evento, un caso *ordinario*, comun en Europa; y no es sinó *estraordinario*, *incierto*, *fortuito* en los paises en que nunca llueve ó llueve rara vez, como, por ejemplo, en algunas regiones de Egipto. Por un principio análogo, la ley, con justa oportunidad, niega al alarife en el precio de sus contratas el remedio de la *lesion*, que concede á los imperitos.

7.ª Infiérese, por último, de todo lo espuesto hasta aquí, y es muy para tenido en cuenta: es la parte práctica de la teoría de los eventos *físicos* y *racionales*: es la aplicacion en este punto de la filosofía al derecho; á las costumbres, á las reglas de moralidad: infiérese, decimos, y resultan de todo, como consecuencias indeclinables:

1.ª *Que si en principios filosóficos todos los eventos naturales, que pueden ser objeto de las leyes y de las reglas de las costumbres, se reducen precisa é inevitablemente á tres categorías originarias, fundamentales, á saber*, necesarios, contingentes, y espontáneos ó potestativos; *todos los que no corresponden á la primera y tercera de estas categorías, forman necesariamente la segunda, á la cual pertenecen por lo tanto, ó no son sinó variaciones de enunciativa de ella* por razones filológicas, ó etimológicas, *los acontecimientos denominados* eventuales, casuales, inciertos, fortuitos, etc.

2.ª *Que no hay verdad filosófica en esta proposicion, admitida como un principio por la jurisprudencia*, fortuiti casus á nullo præstantur; *pues á ser cierta en la generalidad de la fórmula, no se prestarian los casos contingentes ó fortuitos* ordinarios, *y por tanto* previstos, *ó que justamente se suponen tales; cuando sucede todo lo contrario; y cuando por la razon natural y por la ley es un principio, que* in contractibus ea tacitè veniunt, quæ moris sunt, et consuetudines. *Por una razon inversa, no es tampoco verdadera ni filosófica esta otra enunciativa de la jurisprudencia:* casus fortuitus est, qui præviderí non potest; aut cui, præviso, non potest resisti. *En esta enunciativa se confunde la especie con el género, asi como en la anterior se involucra el género con la especie; no siendo verdad en el primer caso, que* ningun caso contingente ó fortuito se presta, *pues á eso equivale; ni en el segundo, que* no hay mas casos fortuitos que los que no pueden ser previstos, ni resistidos, *á lo cual equivale la misma. Lo único que es verdad, y lo que espresa el verdadero espíritu de las leyes, es esta proposicion*: los casos fortuitos ó contingentes, que no pueden ser previstos, ó que aunque lo sean, no pueden ser resistidos, no se prestan por nadie; *pero bien evidente es la diferencia que hay entre esto, y entre reducir á esta sola clase la inmensa de los casos contingentes ó fortuitos.*

Y 3.ª *Que la tecnología del derecho y de la jurisprudencia en este punto no es filosófica; y sí, por el contrario, inexacta y espuesta á error en justicia.*

Puede decirse que la locucion *casos fortuitos*, usada ciertamente con falta de exactitud filosófica, tiene, sin embargo, en el derecho y en la jurisprudencia como un valor entendido. Eso servirá justamente para autorizar y tolerar la tecnología; pero no para evitar los errores é inconsecuencia legal á que dá lugar, como demostraremos, ni para dejar por tanto de corregirla.

El valor entendido está en efecto, ó es preciso suponerlo en que, mientras por los términos generales de la enunciativa *fortuiti casus à nullo præstantur*: *nemo præstat casum*: *casus fortuitus est, qui prævideri non potest*: *aut cui, præviso, non potest resisti*, y otras semejantes; mientras en tales enunciativas, principios y definiciones se dá á entender que se habla de *todos* los casos *contingentes, eventuales, fortuitos*; es preciso entender, que solo se habla de los que *no pueden prudentemente preveerse ni resistirse*; los cuales son por cierto un gran número de los que ocurren; pero no en verdad *todos* los que ocurren y pueden ocurrir, segun lo demostrado. Pero apreciando en todo lo que se quiera ese valor entendido, es menester reconocer que en eso precisamente está la inexactitud de la tecnología. En tal caso, sin necesidad de ficcion, ni valor entendido: sin recurrir al lenguaje figurado, precisamente

en una materia rigorosamente filosófica: en una materia en que la calificacion se trae; no como en la poesía ó la elocuencia, para un fin oratorio; sinó para un fin puramente moral, y estrechamente jurídico; cual es la *imputabilidad* y *responsabilidad*: pues que esta no procede sinó interviniendo, y en cuanto se reputa intervienen la inteligencia y la voluntad, positivas, ó interpretadas: en tal caso, decimos, la clasificacion segura, la tecnología filosófica y exacta, en el completo objeto de la moral y del derecho, seria, la de casos *ordinarios* y *estraordinarios*. Los primeros pueden *preveerse*, y por tanto en toda transaccion social, en todo acto *humano* se darán por previstos, y en su consecuencia por cometidos; sin necesidad de estipulacion especial: los segundos superan á la humana prudencia y esperiencia, no pueden preveerse, ni se prestarán, sinó estipulándolo espresamente. Aun en este caso, en el de estipular que se prestarán los casos contingentes, eventuales, se entenderá de los conocidos, de los que en su cualidad de estraordinarios han acontecido algunas veces y son conocidos del género humano; pero no de los estraordinarísimos, si asi no se estipula tambien espresamente, cuya teoría dejamos sentada en el artículo **ARRENDAMIENTO**, tomo 3, sec. 5, pág. 730. *Et quamvis quis in se receperit casus fortuitos*, dice Heineccio, *meritó tamen excepti censentur insolentissimi, de quibus singularis, eaque pererudita dissertatio Ever. Ottonis exstat* (1). En esta exacta y simplicísima tecnología, ni aun habia que hacer mérito de la *fuerza mayor*, pues no es otra cosa que un caso *estraordinario*.

Es lo singular que este es, y fué siempre á pesar de su letra, alguna vez contraria, el espíritu de las leyes: y sin embargo, la nomenclatura, la tecnología errónea ha arrastrado consigo la idea: los autores, sin cuidarse de la nomenclatura, han dejado arraigar en la jurisprudencia y en las leyes un motivo de error, cayendo ellos, como las leyes, no solo en oscuridad; sinó en contradiccion, pues motivo de error es, en primer lugar, tomar la *especie* por el *género*, la *parte* por el *todo*; *algunos* de los *casos fortuitos*, por la inmensa categoría y número de estos; eso sin necesidad, sin exactitud absoluta, y sin guardar en ello completa consecuencia: y es contradictorio, asimismo, asentar como principio, que *nemo præstat casum*; para venir luego á asentar y reconocer que muchas veces *se presta el caso fortuito*, y eso considerado como tal, sin mediar pacto especial, sin consideracion á las circunstancias de culpa, dolo, ó morosidad del agente, como lo vamos á demostrar; y en el concepto de que en estos últimos supuestos, como espresa muy bien el derecho, y dejamos asentado en otro lugar, no es el *caso fortuito* el que se presta; sinó la culpa, el dolo, etc. (1).

Tal es para nosotros la importancia y conveniencia de hermanar el derecho y la filosofía: tal es la que lleva siempre consigo cuanto concierne á la responsabilidad del hombre, ora en el terreno moral, ora en el jurídico; que no queremos concluir este artículo sin añadir algunas consideraciones sobre el testo y espíritu de las leyes y de la jurisprudencia, en lo que es objeto de él, y como última demostracion de cuanto dejamos espuesto.

Dos son principalmente las leyes romanas que parecen autorizar en esta legislacion la tecnología que censuramos. Una es la 2, libro 50, tít. 8, párr. 7 del Digesto, y la otra la 6, lib. 4, tít. 24 del Código: la primera de ellas, adoptando la opinion de Ulpiano, dice: *Fortuitos casus nullum humanum consilium providere potest*: la segunda dice asimismo, *Quæ fortuitis casibus accidunt, cum prævideri non potuerint (in quibus etiam aggressura latronum est), nullo bonæ fidei judicio præstantur*. Sin duda ninguna estas dos leyes sientan teóricamente ser *caso fortuito el que no puede preveerse*. Con cuanta mas exactitud se diga en términos absolutos *que no basta la prudencia humana á prevecer* los casos for-

(1) Elementa juris, lib. 3, tit. 25 de las Instituciones.

(1) *Potest tamen contingere ut alicui et casus noceat: nempé, si quis cum sponté in se receperit: si in mora tradendi, vel restituendi fuerit: si culpa sua occassionem casui dederit. Has exceptiones addunt doctores; quamvis, si vera fateri velimus, hisce tribus casibus, non* casus *sed* culpa *præstatur*. Vinio al lib. 3, tit. 14, §. 766 de las Instituciones de Justiniano.

tuitos (*nullum humanum consilium prævidere potest*), queda ya antes demostrado. Si despues vemos que, segun la misma legislacion romana, aun esos mismos casos se prestaban alguna vez, tendremos demostrada sobre la inexactitud, la oscuridad y la contradiccion que antes hemos mencionado.

Fuera de esas dos leyes, apenas se hallará alguna otra que teóricamente, como ellas, hable del caso fortuito. Las innumerables que tratan de la materia lo verifican bajo el punto de vista de *fuerza mayor*, y eso casuísticamente, *ejemplarizando. Si por acometida de ladrones, por robo, por incendio, por tempestad*, etc., *ocurriese*, etc.: este es su lenguaje. Esta circunstancia violenta del caso contingente se espresa, casuísticamente, como hemos dicho, ó bien con la fórmula general, *vis major*, *casus majores*, *fatum*, *damnum fatale*, *vis naturalis*, *vis divina*, *cœli vitium* y otras análogas (1). Es bien de notar que este cúmulo de leyes son todas casuísticas. En la forma casuística en que se espresan, su lenguaje es propio y exacto, aun filosóficamente. Ni aun la dada como regla general del derecho, y que, por tanto, las reasume á todas, formula la proposicion absoluta y teórica, ó sea la definicion viciosa del caso fortuito, contenida en las leyes que dejamos copiadas. La espresada regla del derecho (ley 23, tít. 17, lib. 50 del Digesto), dice meramente asi: *Animalium vero casus, mortes, quæque sine culpa accidunt, fugæ servorum, qui custodiri non solent, rapinæ, tumultus, incendia, aquarum magnitudines, impetus prædonum, á nullo præstantur.* Este sistema de la legislacion romana, cuidadosamente casuístico, y que no puede suponerse sinó empleado de propósito, como seguro, exacto, y fundado: esta terminología, usada por punto general; mientras solo alguna vez se usa, segun hemos visto, de la contraria, de *casos fortuitos*, como forma teórica y doctrinal, no autorizaba seguramente á establecer estos principios: *nemo præstat casum: fortuitus casus est, qui prævideri non potest; aut cui, prævisо, non potest resisti*: sinó meramente este otro: *fortuiti casus, qui prævideri, aut resisti non possunt, á nullo præstantur; nisi expressè in contrarium stipulatio interveniat.*

Este último principio, claro, preciso, que encierra en sí el espíritu y hasta la letra de la legislacion romana, asi como las prescripciones mas severas de la filosofía sobre el particular, descansa en estos otros, bases inflexibles de toda moralidad y de toda responsabilidad: *nihil vólitum; quin præcognittum: ignoti nulla cupido: ad imposibilia nemo tenetur.*

Los anteriores de la jurisprudencia romana dán lugar á la oscuridad y contradicciones, no ya filosóficas, sinó filológicas y jurídicas, con que no podia menos de tropezarse en la práctica. Asi, cuando se dice, con verdad, que ninguno presta la *fuerza mayor*, por la regla de derecho de que *la escepcion prueba la regla general en contrario*, se reconoce en el hecho *que todos prestan la fuerza menor*; que, siendo por necesidad del mismo género que *la mayor*, pues sinó, no podrian ser términos lógicos de una comparacion, no es otra cosa que una fuerza *fortuita* como aquella. Lo mismo hay que decir en cuanto al testo de las Instituciones (lib. 3, tít. 15, §. 2), *propter majorem vim, majoresve casus non tenetur*; pues si el que contrae solo se libra de responsabilidad por los casos *mayores*; incurre en ella por los *menores*, eventuales, ó fortuitos como aquellos; y si pueden prevecerse, no es porque no sean contingentes, fortuitos, como los mayores; sinó porque son *ordinarios*. Esa es precisamente la inmensa mayoría de casos que forman la materia de todas las transacciones sociales, como que corresponden á ella todos los que no son *necesarios* ó *potestativos*, y que por ser *ordinarios* pueden *preveerse*. ¿Cómo dudar que las lluvias, el frio, el calor, las heladas comunes y todos los eventos y vicisitudes naturales de igual género, no siendo *necesarios* absolutamente en los tres

(1) Instituciones de Justiniano, lib. 3, tit. 15, §. 2: leyes 23, lib. 3, tit. 5: 3, lib. 4, tit. 9: 5, tit. 5, §. 2; y 6, tit. 7, lib. 13: 26, lib. 17, tit. 1: 31, tit. 1; y 11, 15, 25 y 35, tit. 2, lib. 19: 50, lib. 26, tit. 7: 1, tit. 1, lib. 44: la ya citada 2, tit. 8, lib. 50; y 25, tit. 17 del mismo libro del Digesto: y 1, tit. 13: la 2 ya citada, tit. 14: 1, tit. 34; y 8, tit. 45, lib. 4 del Código.

conceptos de *realizacion*, *tiempo* y *modo*; pues á serlo no fallarian en ninguno de ellos; ni siendo tampoco *potestativos*; pues entonces se realizarian ó conducirian á nuestro arbitrio, ¿cómo dudar, decimos, que son fenómenos eventuales, contingentes, fortuitos? Y sin embargo, se prestan, á pesar de la viciosa terminología *fortuiti casus á nullo præstantur*.

Sabido es, que el dueño ó capitan de nave (*nauta*): los mesoneros, posaderos, *estabularios* (*caupones*, *stabularii*): los batanéros (*fullones*): y los tragineros ó porteadores (*sarcinatores*); sabido es, decimos, que estos respondian del *hurto*, y de *todo daño*, aun ocurrido *sin su culpa* (*hoc edicto omnimodo qui recepit, tenetur, etiamsi sine culpa ejus res periit, aut damnum datum est*: non solum á furto; *sed etiam á damno*: leyes 1, 3 y 5, tít. 9, lib. 4 del Digesto). Esceptuábase únicamente la *fuerza mayor*, y eso no como principio de estricto derecho; sinó por vía de equidad, y aun en casos determinados: *si quid naufragio, aut per vim piratarum perierit, non esse iniquum exceptionem ei* (*nautæ*) *dari*. Es decir, que todas las clases mencionadas prestaban todos los casos *eventuales simples*, ó sin fuerza mayor, los *imprevistos*, los fortuitos, aun en la inexacta tecnología del derecho. Para salvar este contraprincipio, fué necesario desfigurar el contrato *operum*, ó meramente de servicios personales, mecánicos, ó periciales, atribuyéndoles los efectos de otros contratos específicos, ó nominados, como el de *locacion-conduccion*, *mandato*, ó *depósito*. *Nauta, et caupo*, dice la ley 5 antes citada, *stabularius.... et sarcinator, non pro custodia*, sed pro arte, *mercedem accipiunt: et tamen custodiæ nomine ex locato tenentur*: y eso, no solo por las cosas que habian entrado en la nave, sinó aun por las colocadas en la playa para embarcarlas (ley 3 citada). La ficcion anterior, era violenta: no satisfacia al legislador ni á los jurisconsultos romanos, y aun se recurria á otra razon: á la de precaver que las mencionadas clases se concertasen con los ladrones: *nisi hoc esset statutum, materia daretur eos..... cum furibus coeundi; cum nec nunc quidem abstineant hujusmodi fraudibus*. El motivo es, como se vé, aun mas violento que la antedicha *ficcion de contrato*. Podia autorizar una medida de buen gobierno, *escepcional* en circunstancias dadas; pero no establecerse *como ley perpétua general*, contrariando de plano el principio tambien general *fortuiti casus á nullo præstantur*, pues que se prestaban, no *por culpa, morosidad*, etc., sinó *etiamsi sine culpa res perierit* (dicha ley 3). Todavía, ni los antedichos *ficcion* y *motivo*, cada cual mas violento, satisfacian, ni podian satisfacer al legislador, cuando se recurria, reconociendo la violencia y dureza, á una tercera razon, aun mas violenta, que todo lo dicho: *Ne quisquam putet*, dice la ley 1 citada, *graviter hoc adversus eos* (*nautas, caupones*, etc.) *constitutum*: NAM EST IN IPSORUM ARBITRIO NE QUEM RECIPIANT. Es decir, que las clases mencionadas abandonaran sus oficios. Ciertamente que en absteniéndose de vender y arrendar los dueños de fundos, de dar en depósito, en comodato, en prenda, en mútuo, etc. los demás hombres, se libraban en sus casos de que les fuese gravoso el caso fortuito, ó la fuerza mayor; pero eso, mas bien que esplicar y salvar el principio general *nemo prestat casum*; es falsearlo: es convencer lo que venimos demostrando, y es, que la terminología en este punto es por demas inesacta y errónea. La última prueba de ello es, que las leyes antes citadas basaron sus determinaciones, falseando, como hemos visto, el sistema general de casos fortuitos, sobre la doctrina del mismo jurisconsulto Ulpiano, en la cual fundó tambien la suya una de las dos que hemos citado, como mas decisivas, sobre la irresponsabilidad por *casos fortuitos* en el sentido romano (ley 2, tít. 8, lib. 50 del Digesto).

En la *dacion in noxam*, se salvaba en algunos casos con igual dificultad el principio absoluto *nemo præstat casum*. Lo propio en otros contratos: en el de depósito, por ejemplo, cuando el depósito cede en utilidad del depositario: y solo nos fijaremos para concluir, en cuanto á la legislacion y jurisprudencia romana, en la *locacion-conduccion*,

entre otras cosas, porque la doctrina que citaremos, y que la ley convirtió en decision de derecho, es del autorizado jurisconsulto Ulpiano. En este contrato, en los arriendos de tierras, segun el tenor espreso de la ley 15, tít. 2, libro 19 del Digesto, era á cargo del colono; y no del señor del fundo, el daño de viciarse el vino, como convirtiéndose en agua: si los insectos (*rauca*) maleaban los frutos; ó las malas yerbas se apoderasen de la heredad: si los ejércitos hiciesen daño á su paso, siendo sin ánimo de destruir: *si vinum coacuerit; si raucis, aut herbis segetes corruptæ sint..... si exercitus, prætereuns, per lasciviam aliquid abstulit.* Lo propio si las olivas se arrebatasen, ó agostasen por la enfermedad vejetal llamada *fuego*, ó quemazon (*uredo*): si los frutos se malean por el calor no desacostumbrado del sol: últimamente en todo daño que no provenga de causa desacostumbrada. Algunos de los mencionados daños no son *necesarios*, pues no ocurren infaliblemente y siempre: no son potestativos, pues entonces se evitarian, y en no hacerlo habria *dolo*: son por tanto, *contingentes*, *fortuitos*, no solo filosóficamente, sinó aun en la tecnología romana, porque no todos pueden *preveerse*, ni nacen del vicio de la cosa, pues no es *preciso*, *ni comun*, el que el insecto, por ejemplo, dañe las mieses, puesto que no las daña siempre; ni el vicio nace, decimos, de la naturaleza de las mieses, y antes el insecto es un accidente esterno, perjudicial que viene sobre estas. Si, pues, en estos casos el colono habia de pagar la renta; es visto que *prestaba el caso*, y no era cierto siempre respecto de el que *nemo præstat casum*. Verdad es que aun en estos casos *fortuitos simples*, ó sin *fuerza mayor*, se libraba, si llegaba á ser destruida toda la cosecha; pero la exencion entonces no procedia en rigor del sistema *nemo præstat casum*, sinó del principio de equidad de que harto perdia perdiendo la simiente, y las labores. Si esta no fuera la razon, no habia para que la adujera la ley, y bastaba sostener el principio y sistema general de *casos fortuitos*.

Notaremos, últimamente, que aun en el caso estremo, en el mas perjudicial al colono, y por tanto el de mayor favor de la ley para él, prestaba alguna vez el caso. Segun la que vamos esponiendo y la 8, tít. 45, libro 4 del Código (copiadas por nuestras leyes de Partida), el colono se libraba de pagar la renta, pereciendo por evento toda la cosecha; pero si en los años de arriendo venian otros abundantes; *no por su industria, y esmero de cultivo, sinó por acaso*, tenia entonces que pagar la del año, y ademas la antes perdonada; y seria preciso cegarse para no conocer que aquí se presta el caso fortuito, propia y absolutamente tal, aun en el sentido de la tecnología romana, pues por *caso fortuito* falló la cosecha en el año, cuya renta no se pagó, y se paga despues; y por caso fortuito ha sobrevenido la abundancia, que obliga al pago. Si no se quiere que el colono preste el caso dañoso, ó que arrebató la cosecha; prestará el favorable que con su abundancia le obliga á pagar; pero siempre paga *prestando un caso*, ó por causa de un *caso fortuito*.

En cuanto á nuestra legislacion, en diciendo que por regla general nuestras leyes de Partida copiaron las leyes romanas; y que nuestros jurisconsultos las esponian é interpretaban con la tecnología romana, llevada algunas veces hasta el estremo, como es sabido, está dicho que es aplicable en lo que forma el segundo punto de vista del presente artículo cuanto dejamos espuesto; y lo es aun en mayor escala.

Y ciertamente con menos motivo. Cualquiera habrá notado que nuestras antiguas leyes hasta las de Partida, ni el Fuero Juzgo, ni el Fuero Viejo, ni el Fuero Real usan jamás de la locucion *casos fortuitos*, siendo esto mas notable en la primera de estas colecciones, estando su testo primitivo en latin, y siendo dicha sancion de origen rigorosamente latino. Las leyes de Partida la usan una sola vez, y eso anotándola en el catálogo de las palabras *dubdosas*. Verdad es que al esplicarlas, ó definirlas, lo hizo segun la tecnología romana. «*Casus fortuitus* (dice, en efecto, la ley 11, tít. 33 *del significamiento de las palabras é de las cosas dubdosas*, Par-

tida 7), tanto quiere decir en romance, como ocasion que acaesce por aventura de que non se puede antever.»

Por el vicio, ya espuesto de la terminología, la legislacion de Partidas no irá consecuente en la teoría que encierra esta definicion, como hemos visto no lo fué la romana. Asi la vemos adoptar las mismas escepciones y contraprincipios de esta en todas las leyes sobre contratos, mientras por otra parte domina en ellas el mismo espíritu justo de no establecer responsabilidad donde no hay consentimiento, real ó presunto, buscando la regla, no en la teoría y filológia romana, que define y esplica, para no usarla nunca, como es sabido y dejamos dicho, sinó en la mas filosófica y segura de casos *ordinarios*, y *estraordinarios*, *acostumbrados*, ó *no acostumbrados*. Y todavía en algunos casos las leyes de Partida se apartan mas que las romanas del sistema general *nemo præstat casum*: *fortuiti casus á nullo præstantur*, definido, y adoptado al parecer por la preinserta ley 11, tít. 33, Part. 7.

En la 4, tít. 3, Part. 5, hablando del depósito ó condesijo, establece, como escepcion al principio *res domino suo perit*, y á la mencionada teoría romana de los casos fortuitos: «La cuarta (escepcion) es, cuando la cosa es dada en guarda, *principalmente* por pró de aquel que la recibe en depósito, é non por el que la dá en cualquiera de estos casos (los *fortuitos*, *fuerza mayor* ó *vicio de la cosa*), magüer la cosa dada en condesijo se pierda, ó muera por ocasion, ó se empeore por ocasion, tenudo es aquel que la rescibió en guarda de la pechar á aquel que gela dió en condesijo, ó en guarda, ó á su heredero.»

La ley 23, tít. 8, Part. 5, es una reproduccion de las romanas, antes citadas y espuestas, sobre pago, ó no, de rentas por el colono en caso de desgracia (15, tít. 2, libro 19 del Digesto, y 8, tít. 45, lib. 4 del Código).

Y esta misma ley 23, en fin, establece ademas el nuevo caso de «que si *por aventura* acaesciere que la heredad ó la casa arrendada rindiere tan abondadamente un año, que pueda montar mas del doblo de lo que solia rendir un año con otro comunalmente, que estonce debe otro sí, el que la tiene arrendada, *doblar el arrendamiento, si esta abundancia vino por aventura*, é non por acucia del que la labrare, dé mas labores que solia, ó por otras mejorías que ficiese en la cosa.» Que aquí se trata de un *caso fortuito*, en la verdad filosófica, y en la misma tecnología romana, nadie puede ponerlo en duda; como ni tampoco que *este caso fortuito impone al colono la responsabilidad de una doble renta, sobre la estipulada.*

Por todo ello hace tiempo que la jurisprudencia española debió rectificar la errónea tecnología de la romana. De todos modos, hoy menos que nunca puede sostener nuestra jurisprudencia la clasificacion romana, despues de los progresos de la ciencia y de los empeñados estudios sobre la filosofía del derecho: hoy menos que nunca puede sostener nuestra jurisprudencia, decimos, «que caso fortuito *es solo aquel* que no puede preveerse, ni resistirse: que nadie está obligado por la naturaleza de un contrato á prestar el caso fortuito: *que no hay contrato en que el uno de los contrayentes tenga que responder al otro de las pérdidas y daños causados por caso fortuito*, etc.....» Cuando hemos visto, lo que, aun segun la errónea jurisprudencia romana, sucedia y sucede por aquellas leyes y por las nuestras en los contratos de *depósito*, arrendamiento, y otros, entre ellos los relativos á trasportes de mar y tierra, alberguería, obras y servicios de arte, los relativos á las clases de capitanes ó dueños de naves, hostaleros, *estabularios*, bataneros, y tragineros: y cuando, en fin, las nuevas vías, fines y medios de la industria y del comercio, multiplican cada dia los *contratos de seguros mútuos*, *marítimos*, *terrestres*, *contra incendios*, *contra tempestades* y de tantas otras denominaciones, en los cuales *en virtud precisamente del contrato*, y no *por pacto aditicio, culpa, mora*, ni otra causa agena ó accesoria al contrato mismo, se responde *precisa* y por lo comun *esclusivamente del caso fortuito*, aun en el mayor rigor de la tecnología romana.

Por el sistema que censuramos, por se-

guir el derecho distinto camino que la filosofía, cuando la obra del jurisconsulto es hermanarlos, los nuestros tienen que contradecirse en la aplicacion de una terminología insostenible, como se contradijeron los jurisconsultos romanos y las mismas leyes. Así el laboriosísimo y atinado Gregorio Lopez, despues de haber adoptado la tecnología romana, recomendando en su glosa 2 á la ley 3, tít. 2, Part. 5, la definicion del *caso fortuito* dada segun ella por Bartulo: adoptando por tanto el principio general y absoluto que de ella se deriva, á saber, *nemo præstat casum: fortuiti casus á nullo præstantur*, viene á reconocer á bien poco, y á asentar con la ley, que alguna vez se prestan, como vamos á ver, y con lo cual vamos á poner fin á este artículo.

Y con efecto, estableciendo la ley 22, tít. 8, Part. 5, que el colono se libra de pagar la renta, destruyéndose, ó perdiéndose los frutos de alguna heredad por alguno de los muchos eventos que cita, y conduce el enumerar, á saber: *avenidas*, *muchas lluvias*, *granizo*, fuego, *hueste* que los asolase, *asonadas*, *sol*, vientos *muy calientes*, *aves*, *langostas*, *insectos*, y otros semejantes, exije para la exaccion de pago que estas calamidades no hayan de ser *muy acostumbradas*; de donde se deduce, que siéndolo, el colono pagará, no obstante que todos son casos *fortuitos*, y lo que es mas, *fuerza mayor*. Gregorio Lopez, haciendo reflexion sobre la palabra *muy acostumbrada*, dice: *Nota hoc verbum*, NAM SI EX CONSUETO CASU FORTUITO CORRUMPUNTUR (los frutos) *non tenebitur dominus ad remissionem mercedis: solum ergo tenebitur propter casus insolitos*. El mismo, en fin, añade en la glosa á la palabra *hueste*, usada en la misma ley: *Limita, et intellige, quando supervenit guerra et incursus hostium post contractum locationis; secus, si antea erat guerra, quia imputandum est eis, qui sciverunt statum et conditionem rei, et non providerunt*, etc. Dedúcese de lo dicho, que el mismo jurisconsulto que asienta con Bartulo y los jurisconsultos y leyes romanas ser *caso fortuito solamente el que no puede preverse, ni resistirse, aunque se prevea*, reconoce ahora, y tambien el legislador que en la citada ley 11, tít. 33, Part. 7, habia adoptada la tecnología romana, que *hay casos fortuitos* que *pueden preverse*, *por acostumbrados*, y aun *fuerza mayor*, que se presta como aquellos, resultando de ello, segun habíamos asentado, 1.°: contradiccion, inseguridad y falta de exactitud en la definicion de caso fortuito: 2.° falseamiento del principio *nemo præstat casum fortuitum*: 3.° inexactitud y vicio en la tecnología; oscuridad y contradiccion en la jurisprudencia y en las leyes.

Véanse los artículos ACASO: ARRENDAMIENTO, tomo y página ya citados: ACCION (por las acciones humanas), tom. 1, pág. 271: CASO: CASO FORTUITO: CASO INCIERTO: DEFINICION: IMPUTABILIDAD, y todos los relativos á la responsabilidad moral y legal del hombre: TECNOLOGIA.

CASUISTA. El autor que trata una materia por cuestiones y casos determinados, en vez de hacerlo en teoría, y por principios generales. La *casuística*, y la *teoría* tienen sus ventajas respectivas, y sus inconvenientes. La casuística está mas al alcance de las medianas capacidades: instruye con facilidad: no necesita grandes estudios preparatorios, ni auxiliares; pero alcanza poco: la teoría por la inversa, alcanza indefinidamente, pero requiere mejor capacidad, mas estensa preparacion y estudios auxiliares. La casuística es siempre practicable: la teoría degenera alguna vez en *utopia*. Entre la *casuística* y la teoría hay una diferencia análoga á la que media en materias jurídicas entre las escuelas llamadas *histórica* y *filosófica*. El Matheu, por ejemplo, *De re criminali*, es casuista: Heinecio, en sus admirables Instituciones, teórico, en lo que permite serlo la necesidad de ceñirse á testo ó principios determinados. La legislacion *casuística* es en general infecunda, autoriza la arbitrariedad al apreciar la identidad de casos, y es por tanto espuesta á error é injusticia. En ello puede servir de ejemplo la antigua legislacion *de fazañas* y *al edrios*. Hemos llamado *casuística* á la práctica, modo, ó sistema de tratar las materias por *casos*: casuístico es por

tanto lo tratado en dicha forma. Las obras que se llaman de *moral*, y tienen por objeto la fácil enseñanza de confesores, son *casuísticas*. El derecho canónico lo es en gran parte. La combinacion de la *teoría* y la *casuística*, hace desaparecer los defectos respectivos de una y otra, y asegura sus ventajas. En esta forma era misto el método de los jurisconsultos romanos, y no hay quien no reconozca la grande utilidad. Lo que la teoría deja en ellos oscuro, el ejemplo lo aclara, si bien no ha de confundirse la *casuística* ejemplar ó hipotética, con la histórica. La jurisprudencia es en gran parte una casuística histórica. Véase TEORIA: SISTEMA: PRACTICA.

CASULLA. Véase VESTIDURAS SAGRADAS.

CASUS BELLI. Frase latina, que se ha hecho técnica en el lenguaje diplomático general, y espresa una cuestion, fácil de concebir, y aun de convenir, ó concertar en los pactos, ó tratados entre soberano y soberano, entre nacion y nacion; pero difícil de realizar, ó hacer efectiva, como pacto. Porque, en efecto, espresa el pacto, que suele intervenir en las alianzas políticas, *defensivas* ú *ofensivas*. Cualquiera de estos dos caractéres revelan que se busca el concurso de fuerzas ajenas, ordinariamente de fuerzas *armadas*, y por lo menos de socorros, y medios de guerra, aun cuando solo consistan en la mera declaracion de hostilidades contra la nacion de quien teme el que estipula el auxilio y concurso para un caso. Puede este consistir en un contingente de tropas, en ciertas fuerzas marítimas de guerra, ó trasporte, en *comboyes*, en armas, municiones, empréstitos de guerra, bloqueos, ocupacion militar, declaracion de hostilidades, con los efectos consiguientes de cesar las relaciones diplomáticas y comerciales, los tratados mercantiles, de paz, ó de amistad, armar en corso, secuestros, en una palabra, en algunos ó en todos los medios positivos de guerra y hostilidad, para en el caso de *agresion* de un tercer Estado, si la alianza es *defensiva*; para en el de agresion de alguno, ó algunos de los aliados, si es *ofensiva*, y para uno y otro caso, si los dos los abraza la alianza, ó tratado. Determinar, despues que ha llegado el caso de tal auxilio, de cumplir este pacto por la nacion, ó naciones que lo han estipulado y convenido, es lo que técnicamente se llama *casus belli*.

Desde luego se comprende bien que el que hace tal alianza, se halla en necesidad de adelantarse á estipular un ausilio, que de otro modo puede darse por cierto no solicitaria, pues que tales ventajas no se consiguen nunca gratuitamente; sinó que realizan un convenio *do ut des*, ó *do ut facias*. La nacion concesionaria tiene tambien un interés de actualidad, algun interés de hecho, ó de esperanza, miras, en fin, de actualidad, ó de porvenir, una necesidad, bien disimulada tal vez; y aquí la mayor facilidad en que dos, ó mas naciones convengan en este género de compromisos.

Pero andando el tiempo, subsistiendo, ó aumentando la necesidad de la nacion que estipuló el ausilio, se atenúa ó desaparece la utilidad de la otra; varian sus circunstancias, relaciones ó posicion con la potencia agresora; se atraviesa un interés contrario; ha sufrido realmente un cambio su posibilidad, ó por alguna razon se ha hecho mas arriesgada, ó gravosa la empresa: entonces se pide el cumplimiento de lo pactado; y con frecuencia, sobre todo si es débil la nacion que reclama, y poderosa la aliada, se contesta no ser aquel el caso estipulado, no haber llegado el *casus belli*, ó el *casus fœderis*; porque la reclamante ha dado por su culpa y por hechos posteriores al convenio, lugar á la guerra; porque á la coaliada la ligan compromisos posteriores, que han sobrevenido sin culpa propia; ó por otros motivos que nunca faltan que alegar, para rehusar ó atenuar el ausilio estipulado. Algunos proponen que en tales estipulaciones se consigñe espresamente la esclusiva del derecho de *exámen* por parte de la potencia que prometió el socorro ó cooperacion; y la prueba mayor de que la cuestion es árdua en la práctica, es que se propone como solucion un dislate; pues en ese caso no conservaria la nacion aliada el carácter de aliada y concepto de soberana; sinó seria en ello una potencia

que se ponia con sus fuerzas y tesoros á las órdenes de otra. La prudencia y la perspicacia del agente diplomático sugieren en tales casos las seguridades y condiciones que solo hacen efectivas, llegado el momento, la buena fé, ó el poder relativamente preponderante de la aliada que estipula y reclama á su tiempo el ausilio, alegando y sosteniendo ser llegado el *casus belli*. Véase ALIANZA: TRATADO.

CASUS FŒDERIS. De *fœdus*, el pacto, alianza, convenio solemne, como suelen ser los tratados. Es tambien locucion técnica en la diplomacia, como la anterior de *casus belli*; y es con frecuencia á esta lo que el género á la especie. *Casus fœderis* es el fin general, ó el conjunto de casos y fines estipulados, y cada uno de ellos pueden ser relativos á la guerra, á la paz, al comercio, alianzas de familia, etc., mientras el *casus belli* es solo relativo á la guerra. Cuando se invoca el cumplimiento de este fin, como de aquel, y de cualquiera de los fines principales, y aun no principales estipulados, se funda la justicia de la reclamacion en que ha llegado el caso estipulado, el *casus fœderis*, que ademas de lo dicho, es, ó puede ser estensivo á la duracion de la alianza, á su disolucion, á la adhesion á casos pendientes ó hipotéticos al contraer. Está sujeto á los mismos inconvenientes, aunque relativos, que el *casus belli*. Véase.

CATACUMBAS. Desde la mas remota antigüedad se conocen á la inmediacion de algunas ciudades, y aun bajo de ellas mismas, ó bien en el seno de algunas montañas, inmensos subterráneos, que se han llamado á su vez *criptas* (*criptæ*, cuevas ó cabernas), *hipogeas*, *cementerios*, y por último, *catacumbas*. Todavia se asombra el viajero que visita las del alto Egipto, Sidón, Malta, Siracusa, Agrigento, Nápoles, y entre otras aun las de Roma. Todavia está por resolver, para qué los antiguos escavaron esos mundos subterráneos; queriendo unos fo hayan sido desde luego para enterramientos; otros para habitacion de los vivos; otros, en fin, meramente para la estraccion de piedra y materiales de construccion, habiendo buenas razones para todo, y que nosotros no nos detenemos á esponer por no ser de nuestro propósito. Solo notaremos, aunque de paso, que galerías tan espaciosas é interminables: de una altura que llega en algunas á 16 piés por 18 de anchura: de tal regularidad algunas, que segun Vaulch, en su viaje al alto Egipto, en una de las de la Tebaida, podrian formar en línea mil soldados de á caballo: que en algunos parajes están entrecortadas de anchos espacios, ó centros á manera de plazas, que parecen revelar un cierto sistema: que siendo constante en todas, en fin, el de haber conducido la escavacion con prevision, y precauciones de perpetuidad, y esa la testifican ya los dos mil años que por lo menos cuentan de existencia, pues todas son anteriores al establecimiento del cristianismo; y el haberlas conducido sin nunca destrozar, ni deformar el suelo, bien al contrario de como hoy, y de muchos tiempos ha, se abren las canteras; todo parece demostrar que no se escavaron esos inmensos espacios para la estraccion de materiales de construccion meramente.

Hacemos esta pequeña digresion, porque liga á otra cuestion que se ventila, y de que nos es preciso hacernos cargo, al hablar de las catacumbas de Roma, que son el objeto del presente artículo. Porque en efecto, las catacumbas de Roma no son para el pueblo cristiano un objeto, ora histórico, ora arqueológico, de mera curiosidad: son por el contrario, ó mas bien, ademas de eso, un objeto piadoso, de respeto y veneracion, como el mas vasto de los cementerios de los mártires, como *el gran relicario de la cristiandad*, bajo cuyo concepto se ligan á lo eclesiástico y canónico, por la veneracion y culto de las reliquias y cuerpos de los santos.

Las catacumbas de Roma, asi como las de París, parecen presentar una escepcion en la cuestion que dejamos apuntada sobre el fin ú objeto originario de estos vastos subterráneos; y que solo fueron abiertos para la estraccion de piedra y arena. En cuanto á las de Roma ese es el sentir de Benedicto XIV, y hay en este punto el grande hecho histórico sobre otros; de que para la es-

cavacion y estraccion de materiales en la construccion de las célebres *termas* de Diocleciano, *amasadas*, segun la invectiva dolorosa y fundada de algunos autores, con sangre de mártires, se empleó por Maximiano tal número de cristianos, que despues de los infinitos que sucumbieron al rigor y á la fatiga, todavia de los que sobrevivieron á esta prueba, el desapiadado César hizo morir diez mil y mas al filo de la espada.

Los primitivos cristianos hallaron ya practicadas estas escavaciones, y buscaron en ellas un asilo contra la persecucion de los Césares. En estos subterráneos se albergaban con frecuencia: en ellos tenian sus reuniones y celebraban los misterios de la religion: allí enterraban á sus muertos y depositaban los cuerpos de los mártires; y segun espresion de Benedicto XIV en estos templos subterráneos se celebraron y ejercieron hasta las funciones pontificales. En ellos tambien fueron depositados los cuerpos de San Pedro y San Pablo, y segun algunos autores, estos sepulcros, ó *criptas*, fueron los primeros que se llamaron *catacumbas*, cuyo nombre se aplicó despues á aquel interminable cementerio.

No es, por tanto, sinó muy natural y fundado el alto respeto de los cristianos á estos lugares sagrados. Sabido es que de ellos se han estraido y se estraen, con la debida intervencion pontificia, la mayor parte de reliquias y cuerpos de santos, que reciben culto y veneracion de tales en toda la cristiandad. Y aquí se presenta ya la cuestion *crítico-canónica* que antes hemos mencionado; doblemente delicada, despues de las disposiciones del Concilio de Trento sobre *reliquias*; y las decisiones pontificias sobre el mismo fin, y sobre *beatificacion* y *canonizacion*. La cuestion es, pues: todos los cuerpos depositados en las catacumbas romanas ¿son de mártires ó santos? Por lo menos ¿son todos de cristianos? En cuanto al primer estremo la opinion negativa es general é incontestable, si bien eso aumenta la dificultad canónica en la clasificacion de los cuerpos y reliquias en cuanto á su adoracion, segun espondremos; y mas la aumenta todavia la solucion perpleja en cuanto al segundo estremo; pues si bien, segun unos, entre ellos escritores tan competentes, aun sin su categoría pontificia, como Benedicto XIV, opinan y tienen por cierto que en las catacumbas solo se enterraban cristianos; Basnagio con otros sienten lo contrario.

Y ciertamente: sea lo que quiera del fin ó destino originario de las catacumbas; siendo indudable que con el tiempo se destinaron á enterramientos ó cementerios; será imposible demostrar que, con las vicisitudes de los tiempos no se enterrasen en ellas cristianos y gentiles, sobre todo en paises en que, ya absolutamente, ya con intervalos haya predominado sobre el cristianismo cualquier otra creencia. Cítase el caso de haberse hallado sarcófagos y lápidas con el monógrafo gentílico D. M., esto es, *diis manibus*: y lápidas asi bien, por un lado con esta *singla*, ó alguna inscripcion pagana; y por otro con signo ó inscripcion cristiana.

Pero si todo esto puede decirse en cuanto á las *criptas* y vastos cementerios subterráneos en general; no parece igualmente aplicable á las catacumbas de Roma; y en cuanto á ellas nos parece fundada, aun aparte de su autoridad, la opinion de Benedicto XIV. Convenciendo todos los datos geológicos y arqueológicos, que hasta hoy es dado examinar, que estas se escavaron para la estraccion de materiales de construccion, y no para enterramiento, nada mas verosímil que el que los cristianos las hallasen desocupadas y desamparadas, al guarecerse en ellas en los primeros tiempos del cristianismo, como es un hecho histórico que lo verificaron. Contaban ya entonces las catacumbas con siglos, muchos sin duda, de existencia, pues no se fundaba entonces Roma, y por otra parte escavaciones tan vastas no se improvisan, ni podian ser obra sinó del tiempo: y bien se hubieran practicado en su orígen para enterramiento; bien se hubiesen utilizado para ello despues, es incontestable, que al establecerse en ellas los cristianos las habrian hallado tan ocupadas y frecuentadas de los gentiles, que hubiera hecho imposible tal establecimiento. ¿Cómo buscar por asilo

un lugar conocido y frecuentado de sus enemigos? ¿Cómo buscar secreto para los misterios y prácticas religiosas dónde vendrian á ser tan públicas, como celebradas á la luz del dia? ¿Cómo, en fin, enterrarse en ellas los cristianos, y depositar en los propios lugares tan infinito número de cuerpos de mártires, sin trastornar, sin destruir los enterramientos gentílicos, lo que inevitablemente hubiera ocasionado conflictos, pugna, delaciones, castigos, persecuciones y venganzas con este motivo, de que no dá razon la historia? Establecidos ya los cristianos, es menos verosímil que los gentiles adoptasen para enterramiento los mismos lugares; lo uno porque nunca tuvieron necesidad de guarecerse en ellos por motivos de persecucion, como los cristianos: lo otro porque hubieran creido profanados, contaminados y espuestos á ultrajes los restos de sus muertos en contacto con los de los cristianos, lo cual por otra parte fué menos necesario y menos posible con el tiempo, pues preponderó el cristianismo, Roma fué toda cristiana, y las catacumbas conservadas y veneradas, como el panteon de los mártires, y de todos modos como un lugar sagrado.

Están en ellas escavados los nichos, ó colocados los sarcófagos en el muro, ó macizo de las galerías, habiendo hasta cinco y seis filas sobrepuestas en algunas. Muchos enterramientos carecen de inscripcion, y signos. Otros, por la inversa, tienen leyendas latinas talladas, espresivas del nombre, y aun calidad del finado, y de la edad, acompañando con frecuencia estas cifras, ó *singlas*: PS. MS., es decir, *plus*, *nimusve*. Tienen otros tallada una cruz, un cordero, una palma, ú otro signo cristiano. Los reputados, en fin, de mártires, suelen tener, ademas de la palma, el *monograma* de Jesucristo, unidos ó separados los dos signos, en esta forma P. X., ó ☧, es decir, *pro Cristo*, conteniendo ademas el sarcófago una ampolla vitrea, tinturada de encarnado por el interior, significando, ó representando la sangre del mártir. Otras urnas, en fin, contienen estas leyendas, indudablemente cristianas: *Requiescit in pace*: y *in fede* (esto es, *in fide*) *constitutus*, lo que solo se decia en los primeros siglos de los confirmados, ó por lo menos bautizados; y no de los meros catecúmenos: ó este monograma general A. Ω. esto es, *Dios es principio y fin de todo*, alusivo al testo bíblico, en que Dios dice de sí, *Ego sum alpha et omega*, pues dichos signos son estas dos letras del alfabeto griego.

Las catacumbas de Roma, constituidas unas bajo la misma ciudad y otras en su alrededor, fueron numerosas, asi como inmensas. El martirologio romano hace conmemoracion, como de una de las mas célebres, de la llamada *Prætextati*, ó sea de *San Pretextado*. Los hundimientos naturales hicieron desaparecer, ó inutilizaron algunas. Los lombardos, durante el sitio puesto á Roma, destruyeron muchas. Hoy las mas célebres y notables son las llamadas de Santa Inés, San Pancracio, San Calisto y San Prisciliano ó San Marcos: y todavia á principios del siglo pasado se descubrió la llamada de San Trasonio.

San Gerónimo trató de propósito y con sumo respeto de este gran cementerio romano. Véase ademas á Juan Botario, *Roma Soterránea*: á Marco Antonio Bolderto, *Osservazione sopra i cimiteri de Sancti martiri*: Benedicto XIV, *De canonizatione sanctorum*, edicion patavina, ó la romana: el mismo en sus letras apostólicas de 20 de abril de 1745, que empiezan *Jam dudum nobis*, dirigidas al cabildo de Bolonia, remitiendo al mismo el cuerpo de San Proco, estraido de las catacumbas: y véanse los artículos BEATIFICACION, CANONIZACION, RELIQUIAS y demas análogos al culto de los santos.

CATASTRO. Divagan los autores sobre la etimología de esta palabra; pero lo natural es que se derive de la voz latina *catastrum*, ó de la italiana, *catasto*, con las que se designa, lo mismo que con aquella, el registro público, libro ó padron en que se anotan la cantidad, clase y valor de los bienes raices, el nombre de cada uno de sus poseedores, sus productos, los de la industria, y todos los demas bienes sobre los cuales gravitan los impuestos públicos, asi como tambien el número de vecinos de cada pue-

blo, provincia ó estado. Tambien se espresa con ella el mismo censo de poblacion ó de riqueza, que sirve de base para el reparto de las contribuciones de sangre y de dinero. *Becerro*, ó *libro becerro* suele llamarse tambien en algunos puntos al *catastro* ó padron antedicho; pero en rigor tecnológico son cosas diferentes, como puede verse comparando la definicion ó esplicacion que acabamos de dar con la que de aquella voz tenemos consignada en su artículo correspondiente. (Véase BECERRO).

Catastro, pues, segun su verdadera significacion, y bajo el objeto de este artículo, es lo mismo que *estadística*. Bajo tal supuesto, y siendo esta la voz técnica adoptada en el dia por la ciencia y por el derecho para espresar el censo de poblacion y de riqueza; las operaciones para ejecutarlo; el registro ó padron en que se consigna, y todo lo demas que á ello hace relacion, nos ha parecido mas propio y conveniente reservar intacta esta materia para tratarla en el artículo ESTADISTICA. Véase, como tambien CONTRIBUCION DE INMUEBLES, CULTIVO Y GANADERIA.

CATASTRO DE CATALUÑA. Se daba este nombre á la única contribucion que se pagaba en todo el principado de Cataluña. Se estableció en el año de 1716 en equivalencia de los impuestos que en Castilla se llamaban *rentas provinciales*; y subsistió hasta que por el establecimiento del nuevo sistema tributario, creado por la ley de presupuestos de 23 de mayo de 1845, quedó abolida como todas las contribuciones antiguas, refundiéndose en la nueva, llamada de inmuebles, cultivo y ganadería la parte correspondiente á la riqueza territorial y pecuaria, y la parte restante en la de consumos (1). A su semejanza en el siguiente año de 1717 se planteó en Mallorca la llamada *talla*, y en 1718 el *equivalente* en Valencia y la contribucion real en Aragon, que han sufrido igual suerte. El catastro gravitaba sobre todos los haberes y ganancias de cada vecino, computándose á los menestrales el valor de sus jornales; pero con tal equidad, que no pasaba del diez por ciento de las utilidades en los bienes raices, ni del ocho y un tercio en los demas; y los gastos de su recaudacion, que estaba á cargo de las justicias, se hacian con tanta economía que no llegaban al uno por ciento.

Como ya se ha indicado, todos los vecinos, inclusos los menestrales, estaban sujetos al pago del catastro: sin embargo, por resolucion á consulta del Consejo de Hacienda, de 9 de julio de 1776 (1), se declaró, que estaban exentos de este tributo personal los bachilleres en leyes y medicina, que con la correspondiente aprobacion superior ejerciesen estas facultades, y los empleados en rentas reales; pero solamente con respecto á los sueldos y emolumentos que devengasen por razon del ejercicio de su profesion ó empleo, quedando sujetos al pago del servicio por las otras granjerías y comercio que tuvieren, á no ser que fuesen nobles ó graduados de doctores ó licenciados en alguna de las universidades mayores, en cuyos casos la exencion era completa. Y por real cédula de 15 de agosto del mismo año (2) se concedió tambien igual exencion personal á los mozos naturales del principado de Cataluña, que por sorteo saliesen á servir los ocho años de ordenanza. Todos estos privilegios caducaron desde que por la Constitucion política se declaró, que todo español está obligado á contribuir en proporcion de sus haberes para los gastos del Estado.

Bastan las anteriores noticias para el objeto de esta obra: el que desee adquirirlas con mas estension sobre el establecimiento y vicisitudes de la contribucion de que se trata, puede ver, entre otros, á Zavala, *representacion dirigida á Felipe V.*

CATECISMO. Del latin *catechismus*, y originariamente del griego *katechius*, y *katechizo*, enseñanza y enseñar, como decimos en sus artículos respectivos y los derivados de ellos. Trasladadas estas voces de lo profano á lo místico, son relativas, ó se

(1) Arts. 5.° y 7.° de la ley citada del presupuesto de ingresos para el año 1845.

(1) Ley 29, tit 18, lib. 6 de la Nov. Recop.
(2) Nota 11 al tit. y lib. citados de id.

concretan siempre en este sentido á la enseñanza de la doctrina cristiana, y verdades eternas.

Catecismo significó en un principio la *doctrina* enseñada: despues el cargo eclesiástico, ó profesion de *enseñarla*, y en este sentido dice el cánon 87, *dist.* 4. *De Consecrat*, que los sacerdotes de cada iglesia pueden hacer el catecismo de los que han de bautizarse: «*Catechismi baptizandorum á sacerdotibus uniuscujusque ecclesiæ possunt fieri.*» Es sabido, como decimos en su artículo correspondiente, que en los primitivos siglos habia sacerdotes particularmente encargados de hacer esta enseñanza, llamados por eso *catequistas*: en el segundo estado de la disciplina, sin el cargo especial de *catequistas*, podian hacer de tales los sacerdotes de una iglesia; lo cual en el último y actual estado de la misma se ha circunscrito á los párrocos, ó sacerdotes por ellos encargados.

Llamóse, en fin, *catecismo* el libro en que se contenia ordenada la doctrina que habia de enseñarse; y ese es el objeto principal de este artículo; notándose, sin embargo, que en los primeros siglos el catecismo comprendia solo la doctrina que habia de enseñarse á los catecúmenos; y en el dia la que conviene saber á todo cristiano, como veremos.

En el primer sentido es clásico el catecismo de San Agustin, escrito como espresa el mismo santo, para uso de un *catequista*, y que luego, por la doctrina y prudencia que en él dominan, se generalizó en la Iglesia.

Pero varió la disciplina: varió, ó se sustituyó la *categnesis* cristiana: segun las nuevas necesidades lo iban exigiendo, los Papas y los concilios, los obispos y prelados á su vez prescribieron reglas sin cesar para hacer mas y mas útiles la predicacion y la enseñanza, hasta que por último el Concilio de Trento prescribió y recomendó su última forma. Asi que, despues de ordenar lo conveniente sobre la predicacion y el pasto espiritual de la divina palabra por obispos, prelados y párrocos, con tal prevision, insistencia y solicitud, que, segun la espresion del mismo Santo Concilio, nunca pueda decirse con verdad en la Iglesia, *parvuli petierunt panem, et non erat qui frangeret eis* (*Ses.* 5, *cap.* 2: y *Ses.* 22, *cap.* 8, *De sacrificio missæ*), en la 24 *De reform.*, cap. 7, ordenó que los obispos y párrocos espliquen convenientemente la *categnesis* de cada sacramento, segun la prescrita por el Concilio, y que ademas los párrocos en los dias festivos espongan la doctrina en lengua vulgar, y al alcance de todos. Desde luego se entendió en este precepto, no solo la predicacion y esposicion de la categnesis cristiana; sinó la formacion de un catecismo adecuado, y que asegure la unidad de Doctrina. Comprendiéndolo asi el mismo Papa San Pio V, dispuso la formacion y publicacion del catecismo que lleva su nombre, ó sea *de San Pio V*, dicho tambien *Catecismo romano*. Estensivo este catecismo á instruir al cristiano acerca de *lo que ha de creer*, *lo que ha de orar*, *lo que ha de obrar y lo que ha de recibir*, contiene la esposicion del *Credo*, del *Padrenuestro*, de los *Mandamientos* del Decálogo y de los siete *Sacramentos*.

No consiguió San Pio V el buen designio del Concilio, de uniformar la *categnesis* general; y antes pulularon los diversos catecismos, con que cada uno creia responder mas adecuadamente á la mente del Concilio, ó servir mejor á su vanidad, segun espresion de Clemente XIII. En vista de ello este Pontífice, y para atajar el mal, haciendo levísimas correcciones en el Catecismo general romano, ó de San Pio V, por sus letras de 14 de junio de 1761, que empiezan, *In dominico agro*, lo publicó nuevamente, recomendando su uso á los párrocos, por lo que hoy lleva tambien el nombre de *Catecismo de párrocos*. Su estension, y el hallarse en lengua latina, sin quitarle el ser muy útil, y adecuado como lo es, para dicha clase; impide que lo sea para el pueblo en general; por lo que se han multiplicado los epítomes, ó sumarios en lengua vulgar, que nunca pueden, ni deben circular, ni ser permitido su uso, sin que se hallen aprobados por la autoridad superior eclesiástica, al menos diocesana.

CATECUMENOS. Los adultos

que en la primitiva Iglesia, y segun la disciplina de aquellos tiempos, estaban sometidos en los casos ordinarios á la *categnesis*, esto es, á la enseñanza y preparacion cristiana, establecida por los cánones para recibir el bautismo. Y decimos en los casos ordinarios, porque en los estraordinarios, entonces, como ahora, en las misiones entre infieles, por ejemplo, en las conversiones *in articulo mortis*, la urgencia del caso y la prudencia del apóstol, ó sacerdote, decidia y decide de la preparacion. Cuando S. Pedro en Jerusalen bautizó en un solo dia cinco mil personas, teniendo que apelar al medio de verificarlo *per aspersionem*, la *categnesis* se redujo á la eficacia momentánea de la palabra, y al movimiento de la gracia, impetrado é interpretado por el fervoroso apóstol.

Nos referimos tambien á los primeros siglos de la Iglesia; pues sabido es cuanto ha variado posteriormente la disciplina; y aunque hoy pudieran llamarse aun catecúmenos los adultos que, convertidos al cristianismo, estan el tiempo que se estima necesario en enseñanza, no seria sinó en un sentido lato. La antigua disciplina de la Iglesia llevó en esto su prescripcion, y pruebas hasta el mayor rigor: circunstancia que es muy de notar por todo creyente y escritor cristiano; pues mientras todas las creencias facilitan la adquisicion de *neófitos*, como si temiesen la prueba; la Iglesia católica parecia dificultarla de propósito; como si ya la dificultase poco el rigorismo de sus preceptos, la *ascética* estremada de sus doctrinas, que no es menos que una guerra abierta contra todas las pasiones, contra todos los goces inhonestos del *sensualismo*; mientras todas las sectas y creencias los halagan de estudio.

El *neofitismo*, pues, ó la larga *categnesis* cristiana, combinacion austera, é interminable de enseñanza, privaciones y pruebas á que todos no resistian, abarcaba cuatro periodos a que correspondian otras tantas clases, ó categorías de *catecúmenos*, á saber: *audientes*, *genuflectentes* ú *orantes*, *competentes*, y *electos*; clases que no tenemos inconveniente en admitir por las buenas razones en que se fundan, aunque otros quieren constituyan una sola, las de *electos* y *competentes*.

El que anunciaba su deseo de ser cristiano, era puesto bajo la direccion de un *catequista*, quien le instruia en los rudimentos del cristianismo. Cuando lo hallaba regularmente instruido, y adquiria la posible seguridad de su vocacion, ó conversion, elevaba de ello noticia y testimonio al obispo, por cuya circunstancia, y con antelacion á este acto los *catequistas* se llamaban *spromisores*, y *fidejussores*. Hasta entonces la *categnesis* al catecúmeno habia sido privada; pero el obispo bajo la fé y testimonio del *sponsor*, lo admitia en el templo á la *categnesis* pública hecha por el mismo prelado: hecha la esplicacion doctrinal, y leidas las escrituras antes, se retiraba. Esta inscricion pública en el gremio de los cristianos, y esta asistencia á la *categnesis* pública en el templo, le constituía en la clase llamada de *audientes*.

En la doble *categnesis* privada y pública continuaban por tiempo indefinido, hasta que el *catequista* declaraba al obispo creerlos dispuestos para entrar en la segunda clase, lo cual se verificaba, estimándolo asi el obispo. Desde entonces continuaban en el templo, aun leidas las escrituras, y empezando las oraciones y exorcismos empleados para catecúmenos mas adelantados, oraban y se postraban cuando estos, y correspondian por ello á la clase llamada de *orantes*, y tambien *de genuflectentes*.

En ella continuaban hasta que el *catequista* los declaraba, y el obispo estimaba *competentemente* instruidos y preparados: quedaban en el templo hasta el ofertorio de la misa, ó sea á la llamada *misa de catacúmenos*, segun diremos: daban su nombre, pidiendo el bautismo, y constituían la clase tercera, ó de *competentes*.

No porque se hallasen en esta clase, y hubiesen precedido la presentacion del catequista, el juicio del obispo, y la *dacion de nombre*, tenian todavía la seguridad de entrar en el gremio de la Iglesia en el primer bautismo general, ó de catecúmenos. Empezaba entonces una inquisicion severa sobre instruccion, vocacion, vida y costumbres.

Segun el antiguo *Ritual romano* (*Ordo romanus*) que suele referirse á los tiempos de San Gregorio el Magno, se requerian *siete escrutinios*, para que un catecúmeno *competente*, quedase inscrito en la nómina, catálogo, ó clase de *electos* para recibir el bautismo (1); si bien puede entenderse los siete escrutinios, y parece mas cierto, no acerca de cada uno; sinó de la totalidad de *competentes*, de suerte que unos saldrian electos al primer escrutinio; otros al 2.°, 3.°, 6.°, etc.

La dacion de nombre tuvo lugar unas veces en la primera semana de cuaresma; otras en la cuarta, y asi lo prescribia el antiguo *Ritual romano*.

El bautismo tenia lugar el Sábado Santo, administrado por el obispo. Al salir el *neófito* ó nuevo cristiano de la fuente bautismal, era despojado de sus vestidos usuales, y vestia una *alba*, ó ropa blanca talar, que no desnudaba hasta el sábado siguiente, cuya dominica se denominó, por tanto, *in albis*.

Si los catecúmenos pecaban, ó abandonaban su vocacion, y despues la renovaban, eran sometidos á mas duras pruebas aun; y segun el Concilio de Nicéa, cán. 14: «*De catechumenis qui lapsi sunt, visum est, et sanctæ, et magnæ synodo, ut tribus tantum annis audientes; postea orent cum catechumenis.*»

Ha de notarse en esta espresion del Concilio, *orent cum catechumenis*, que en rigor no parece reputar *catecúmenos* sinó á los comprendidos en la clase de *orantes*, y desde ahí en adelante. Y en efecto, fundado en esta razon, por antonomasia, ó por otras razones análogas, debe tenerse muy presente que algunos conceptos y enunciativas, relativas á *catecúmenos*, se limitan á los que habian tenido *iniciacion* en el gremio de los *cristianos*, como sucedia, respecto de la *misa de catecúmenos*, y en la calificacion *de cristianos*. En cuanto á lo primero, como el *sacrificio* empieza en el *ofertorio* de la misa; como en el augusto sacrificio los fieles, en la primitiva Iglesia sobre todo, segun la liturgia de aquellos tiempos, aunque uno solo era el celebrante, todos eran cooferentes: como es tal la asistencia mística de la Iglesia universal al sacrificio, y los catecúmenos no eran todavía *miembros* de esta Iglesia: por eso al ofertorio, á la fórmula pronunciada en alta voz por el diácono, y que era esta, ú otra análoga, *quicumque catechumeni discedite*, todos salian del templo, pues era concluida la misa llamada *de catecúmenos*; asi como la de los *fieles* terminaba con la fórmula conservada por la actual liturgia, *ite, missa est*.

Empero, si los catecúmenos no eran *fieles* todavía, pues llevaban este nombre los que ya habian recibido la fé, esto es, el bautismo, segun el espíritu del cánon onceno antes citado, los catecúmenos constituidos en la clase de orantes y sucesivos en la enunciativa general, se reputaban ya cristianos: cuestion importante en la *arqueología* sagrada, en que tan severo criterio se necesita para clasificar las reliquias y cuerpos de los santos, segun hemos insinuado en el artículo CATACUMBAS. La inscripcion, ó leyenda sepulcral, *in fide mortuus; in fide constitutus*, indica un cristiano que habia recibido ya el bautismo: *requiescit in pace*, y los signos de la cruz, del cordero y otros del cristianismo, pueden significar que aquellos restos mortales son de un *fiel*, ó bautizado, y tambien de catecúmeno, *orante*, por lo menos, porque en un sentido lato, por lo que ya profesaban en deseo, por lo que creian, practicaban y pedian, eran reputados cristianos. Todos los autores canónicos han escrito sobre catecúmenos. Véase entre ellos á Van-Espen, *Jus. Eccl. Part.* 2, cap. 3.

CATEDRA. Voz griega, que tomada en un sentido originario y material significa silla, asiento. Metafóricamente ha venido á tener muchas y muy importantes acepciones en uno y otro derecho, y que se han multiplicado, aunque solo en la terminología, por haber aceptado en el uso, y para significar las mismas cosas, ademas de la traduccion, la voz misma original en las lenguas griega, latina, y castellana. Asi decimos *cátedra* de San Pedro, *sede* pontificia,

(1) *Præscribuntur septem scrutinia catechumenorum à die, quo nomina dederunt, usque ad vigiliam Paschatis, qua baptismus conferendus erat.* (Vetus ordo romanus).

y *silla* pontificia ó de San Pedro, para espresar lo mismo.

Cátedra en lo eclesiástico. Desde un principio los apóstoles y obispos, por solemnidad, por fatiga, para poder prolongar mas sus tareas interminables en el templo, durante la *categnesis*, administracion de algunos sacramentos, y en algunos períodos de la misa y actos religiosos, se sentaban en el presbiterio en lugar preeminente, entre los sacerdotes que se sentaban tambien, aunque en lugar inferior, por lo que en lo antiguo, y con relacion á esta práctica se les llamaba *assesores* del obispo. Desde entonces la voz *cátedra* se hizo metafórica, llevando siempre anejas las ideas de *enseñanza*, *autoridad* y *dignidad*. En estos conceptos se tomó desde luego por la iglesia mayor, asiento y residencia ordinaria de los príncipes de la Iglesia, en sus respectivas gerarquías de cabezas de la misma, apóstoles, obispos, prelados, etc., y en tal sentido la Iglesia universal celebra la *cátedra de San Pedro* en Antioquía. En el mismo sentido se dijeron *catedrales* tales iglesias mayores, ó *prelaciales*, como veremos: *cátedra del Espíritu Santo*, por el púlpito ó lugar prominente destinado á la predicacion y enseñanza de los dogmas santos y de la divina palabra: *cátedra de la verdad y cátedra de San Pedro*, por el cargo y ministerio *supra eminente* de gefe y cabeza visible de la Iglesia universal: y de aquí la distincion conónica y doctrinal, en uno de los asuntos mas capitales de doctrina católica, á saber, de la *infalibilidad*; de aquí, decimos, la fórmula de *controversia*, para determinar el valor dogmático de lo decidido y declarado por el Papa, segun que lo verifique *ex cathedra loquens*, ó por el contrario *non ex cathedra*. No es este el lugar de penetrar en esta controversia; y solo indicaremos la sabida distincion de que en el primer caso la decision es *dogmática*; en el segundo puramente *disciplinaria*. Véase CATEDRAL.

Cátedra en lo académico. Decir cátedra en lo *académico*, es decirlo en lo civil, administrativo, y canónico, asi bien, ó sea en sentido *canónico-civil*. En los mencionados conceptos, *cátedra* es la silla material ó lugar preeminente del maestro ó profesor público de las artes y ciencias sagradas y profanas: el local en que se hacen las esplicaciones á los discípulos reunidos: el cuerpo ó conjunto de estos con su catedrático ó profesor: la asignatura ó materias que se enseñan, como cátedra de lógica, de ética, de derecho, etc.: el cargo, en fin, del profesor de enseñanza, principalmente pública, y asi decimos *oposicion á cátedras*, *haber obtenido una cátedra*, etc.

Despues de la cuestion *filológica*, la de *derecho* es inmensa, y apenas podria tratarse en este lugar, sin perjudicar á su mayor oportunidad en otros artículos.

Diremos solo que en España las cátedras, ó enseñanzas, las han provisto por regla general los que las costeaban. Asi, en los seminarios y colegios eclesiásticos las proveian los obispos: en las Universidades y establecimientos generales, el rey: en los pueblos, cuyos propios ó arbitrios sostenian algunas cátedras de latinidad, humanidades, agricultura, etc., los pueblos mismos.

Las cátedras se obtenian de ordinario por oposicion: otras veces, sin regla fija en ello, por nombramiento espontáneo, ora del todo gratuito; ora convocando aspirantes y eligiendo entre ellos.

La duracion del cargo era en algunas *trienal*, como en las cátedras de filosofía de las Universidades. En las llamadas facultades mayores, solia ser vitalicio, salva jubilacion, caso de imposibilidad, por longevidad ú otra causa. Las comunidades religiosas disfrutaban por gracia especial de algunas cátedras, que se denominaban por lo mismo *cátedras pro religione*. En la corporacion era perpétuo el derecho; pero ellas presentaban al individuo de las mismas que habia de esplicarlas, y le removian tambien. Las cátedras *pro religione* eran en teología.

En la retribucion habia la misma desigualdad, ó falta de uniformidad y proporcion Las cátedras *pro religione* no devengaban nada de fondos de la Universidad. Las de seminario solian tener de asignacion 300 ducados, ó 500, casa y mesa al catedrático en

Lorenzo Arrazola

el colegio. Las de facultad mayor estaban clasificadas sobre el sistema y terminología de las prebendas catedrales, y asi se llamaban *cátedra de prima*, *de vísperas*, etc., y otras veces se denominaban por la asignatura, como cátedra de *Decreto* (cánones), de *Código*, etc. La dotacion de estas cátedras era en general considerable. Dotadas las universidades con diezmos, y pensiones sobre mitras, prebendas, etc., sin perjuicio de algunos bienes propios; las dotaciones estaban calculadas sobre bases ó cantidades relativas, que llamaban *millares*, representando cada millar una del mayor número de partes en que se suponia dividido el acervo decimal ó comun de productos. La cátedra de *prima*, pues, que era la superior en cada una de las cuatro facultades mayores, solia estar dotada, ademas de lo eventual por grados y asistencia á funciones de cuerpo, con quince *millares*: once la de *vísperas*, y asi bajando la escala en las demas: queria decir, que el fondo líquido anual se distribuia, decrecia, ó acrecia sueldo á libra segun su respectiva asignacion de millares. Las de filosofía no tenian dotacion: solo sí una *propina* de 320 reales hasta el plan de 1824: por este plan les fueron asignados 4,000 reales de dotacion.

En el dia, mejorada la condicion del profesorado español de un modo considerable por el plan general de 1845, despues de varias y no pocas vicisitudes en el transcurso de 24 años de transicion que aun no ha terminado, pues el plan de estudios generales pende de un mero real decreto y no de una ley, rije en cuanto á cátedras y demas pormenores académicos el *plan* y *reglamento* de estudios de 28 de agosto de 1850.

Cátedra episcopal. En los antiguos documentos se llama asi, y tambien *sedes episcopalis*, la silla y dosel que se coloca para el obispo en el presbiterio cuando celebra de pontifical. Si era patriarca, metropolitano, ó de jurisdiccion muy estensa, la *cathedra* ó *sedes* se denominaba *trono*. En el dia se llama, como hemos indicado, *silla* y *dosel*.

CATEDRAL. Voz derivada de *cátedra*. Se subentiende iglesia, y se dice de aquella iglesia en cada diócesis, en que supone asentada la cátedra del obispo, y por tanto la iglesia superior, sita en la capital de la diócesis, en que el obispo con su cabildo ejercen de asiento, ú ordinariamente los oficios divinos. En lo antiguo se llamaba iglesia *mayor*, no solo porque lo era material y moralmente sobre las demas de la diócesis, sinó porque en ella resplandecia, ó debia resplandecer mas la solemnidad, y magestad del culto. Aunque la denominacion, derivando de *cátedra*, en el sentido esplicado, es *prelacial*, y lleva en sí la idea de esta jurisdiccion y dignidad, no todas las iglesias de los prelados, y príncipes de la Iglesia, se llaman catedrales. La del Papa se llama mas bien *Vaticano*, é iglesia de San Pedro. Algunos patriarcas, como por ejemplo, el de las Indias, no tienen catedral con ese nombre: lo propio se verifica con los prelados *nullius*, ó con jurisdiccion episcopal ó *cuasi episcopal*. Pero es constante llamarse catedrales las iglesias de los obispos, y arzobispos. Tambien lo es que en cuanto á prerogativas, prohibiciones, restricciones y reglas canónicas disciplinarias, tienen efecto lo mismo en la escala respectiva de cada iglesia prelacial, lleve ó no el nombre de *catedral*, con tal que sea la *iglesia cátedra* del prelado jurisdiccional con jurisdiccion episcopal *vel cuasi*. Las iglesias de los arzobispos suelen llamarse *metropolitanas*; pero es con relacion á las *sufragáneas*: mas por lo que hace relacion al arzobispo, en el concepto de obispo, ú ordinario diocesano, son y se denominan *catedrales*.

Desde el principio de la Iglesia la union mística del obispo con la suya se equiparó al matrimonio. Como contrario á esta unidad de comercio, se prohibió espresamente por los concilios que hubiese dos obispos en una iglesia, esto es, en una catedral y diócesis: *ne in una sint duo*. Aun sin contravenir al concepto místico indicado, razones de mucho peso hubieran aconsejado la misma prohibicion: asi como razones análogas, pero contrarias, esto es, la falta de energía, languidez consiguiente en el culto, y disciplina, etc., ademas de la falta de unidad

mística indicada, hicieron mirar mal el que á un mismo obispo se encomendasen dos ó mas catedrales, no ya en propiedad, pero ni aun en *encomienda*.

A pesar de ello, por razones de utilidad y necesidad perentoria de la Iglesia, y alguna vez por el abuso, nacido y robustecido por las turbulencias de los tiempos, se faltó con frecuencia á este buen principio, á pesar de las prohibiciones y prescripciones de los Papas y Concilios, á que últimamente fué preciso se agregasen las del Concilio de Trento. Este, en efecto, en los términos mas preceptivos y terminantes, dice en el cap. 2, ses. 7 *de reform.* «Ninguno, cualquiera que sea su dignidad, grado, ó preeminencia, presuma poder *conservar* ni *recibir* por *título*, *encomienda*, ó con cualquier otro nombre muchas iglesias metropolitanas, ó catedrales, contra lo dispuesto por los cánones; cuando puede tenerse por muy feliz el que acertase á regir bien, y con utilidad y provecho espiritual de las almas que le estén confiadas, una sola. Por tanto, los que en la actualidad tienen muchas iglesias, contra el tenor de este decreto, reteniendo una, la que eligieren, dimitan las demas, dentro de seis meses, si la provision de ellas corresponde á la libre provision de la Sede apostólica; y en el caso opuesto dentro de un año. Si asi no lo verificaren, por el hecho se reputen vacantes todas las iglesias que obtuvieren, menos la última que hubieren recibido.»

El capítulo revela el grande abuso, que no habia parado en la obtencion simultánea de dos; sinó aun de mas iglesias (*plures*). La mente del Concilio no puede estar mas manifiesta; asi como es justa y conveniente su disposicion. Pero es de notar que en ella habla solo, no al *colador universal*, que lo es en último término el Papa por la *confirmacion*, *preconizacion*, y *espedicion de bulas*, aun en las mitras de patronato, como lo son todas en España; sinó á la conciencia de los *obtinentes* y *retinentes*, á los obispos y arzobispos. *Testualmente* no condena ni prohibe la *provision*, y *presentacion* en su caso; sí la *obtencion sucesiva*, y la *retencion* actual ó de aquellos momentos: hay preterition *testual* indudable respecto de los coladores, general y particulares: de los reyes y del Papa. ¿Es qué el Concilio, no pudiendo sujetar las circunstancias, y prevenir desde entonces, porque no estaba en su poder, como no lo está en el de ningun legislador, las necesidades de la Iglesia, y los azares de los tiempos, quiso dejar á salvo el sumo poder pontificio discrecional, el poder de acudir en los casos con aquel remedio que la índole, urgencia y violencia de la necesidad requiera ó permita? Sin duda ninguna, y en otros decretos se vé que esplícitamente, despues de establecer el Concilio lo que en materias de disciplina cree mas oportuno, si sus disposiciones pueden rozarse, como casi es inevitable, con la autoridad suprema disciplinaria del Papa, terminantemente espresa, *salva la autoridad y atribuciones pontificias.* Por eso se vé que despues del Concilio ha continuado la acumulacion de catedrales por título de *encomienda*, aunque es verdad que en casi todos los casos es notoria y perentoria la necesidad.

La historia de la Iglesia española presenta en el particular casos bien singulares; pero siempre de la índole indicada. Tales son las *encomiendas* de catedrales que en diversos tiempos han tenido lugar, y habrán de tenerlo, en unas y otras Indias. Pero el que hace época en la historia y disciplina particular de la Iglesia de España, es el ocurrido en 1846. Sabido es que en España compete á sus reyes el patronato universal, y en virtud de él la presentacion para todas las mitras. Es fácil comprender que la *confirmacion* y *preconizacion* dada por la Santa Sede á estas presentaciones, implica el reconocimiento de la legitimidad del monarca, pues solo á los legítimos reyes, esto es, á los reyes por derecho, y no por intrusion, compete el patronato. Sabido es, ademas, que trabada la guerra de sucesion dinástica á la muerte de Fernando VII entre Isabel II y su tio el infante don Cárlos, el Papa, por razones que no son parte en la cuestion, se abstuvo de reconocer á ninguno de los contendientes, y como una consecuencia de ello, no espedia bulas á los obispos presentados por uno, ni

por otro. La reina Isabel II, reconocida y proclamada legítima sucesora de su padre el rey Fernando, y reputándose tal por tan poderosos títulos, desde el palacio de los reyes y desde la corte de la monarquía hacia presentaciones para las mitras vacantes. No pudiendo estas ser remitidas á Roma, porque lo serian inútilmente, se continuó la antigua práctica de espedir las cédulas llamadas de *ruego* y *encargo*, dirigidas á los cabildos *sede vacante* para que quisieren elegir por gobernador del obispado, hasta la congregacion de nuevo obispo, al electo. Muchos habian sido nombrados asi gobernadores por los cabildos; pero los fieles levantaron, digámoslo asi, contra ello una protesta, que consistia en evitar su trato como de escomulgados, y abandonar la Iglesia cuando entraban en ella los electos á celebrar. No examinaremos el motivo ni la justicia del escándalo, no siendo este su lugar: solo sí diremos que fué tal, que en unas diócesis el gobierno tuvo que mandar á los electos retirarse de la diócesis y presentarse en la corte con cualquier pretesto decoroso, y á falta de otro con el de recibir órdenes de S. M.: en otras los electos mismos tuvieron que solicitar permiso para retirarse, á fin de evitar escándalos y el vituperio y menosprecio de sus personas y representacion. Este estado tenian las cosas, cuando terminada la guerra dinástica, y atenuándose mas cada dia sus consecuencias, se creyó llegado el caso de poder empezar á tratar con éxito sobre el reconocimiento de la reina Isabel por el Papa, y la consiguiente confirmacion de bulas. Las negociaciones podrian por su índole misma no ser perentorias, y el Papa creía tal acudir con remedio al estado de las indicadas iglesias, que lo eran las de Oviedo, Huesca, y otras. Entonces S. S. espidió *rescriptos*, que llegaron á ser *célebres* por las circunstancias, y por el modo con que fueron resueltas las dificultades que ofrecian. Por ellos se nombraban *vicarios apostólicos* de las iglesias mencionadas á varios obispos titulares de las suyas, como el de Pamplona y otros, los cuales recibian aquellas en *encomienda*. Los breves ó rescriptos se espidieron *motu propio*, pues estaban aun interrumpidas las relaciones diplomáticas con la corte de Roma. No habian sido, pues, solicitados ni obtenidos conforme á las leyes del reino. ¿Y cómo en vista de ello se les daria el *pase*? ¿Que iba á ser de los electos, presentados por la corona, y á causa y por gestion de ella, por las cédulas reales *de ruego* y *encargo* nombrados *gobernadores* por los cabildos catedrales? Las circunstancias pudieron mas que tantas y tan fuertes consideraciones: los electos recibieron insinuacion, segun unos *pontificia*; segun otros *real*; segun algunos de ambas clases, y renunciaron, habiéndoles el gobierno asignado una pension adecuada: los *rescriptos pontificios* obtuvieron el *pase régio*, si bien con la salva ritual de *sin perjuicio de las regalías*, etc.: y los *vicarios apostólicos*, recibieron y rigieron las catedrales y diócesis encargadas en *encomienda*; sin que por otra parte pueda decirse realmente que por ellos, ni por *la Santa Sede* se contravino al decreto del Concilio.

Hay en España otros casos de acumulacion, union ó agregacion de catedrales en que tampoco se contraviene al decreto. Si razon de esto es, como debe inferirse, la de inconvenientes de disciplina, la union prohibida de *catedrales*, no habrá de entenderse material; sinó formalmente; esto es, no del edificio que conserve y lleve ese título; sinó siendo anejas á este la organizacion capitular completa, y la jurisdiccion diocesana independiente ó distinta, resultando asi dos ó mas cabildos catedrales distintos é independientes, con una sola cabeza, ó un solo obispo, ó dos diócesis, ó mas, con un solo obispo. Nada de lo cual sucede en España respecto de *diócesis refundidas*, conservando por honor y recuerdo su antigua denominacion cada una de las respectivas catedrales, como sucede, por ejemplo, respecto de las de Calahorra, La Calzada y Santo Domingo, que á pesar de las denominaciones, la diócesis es una sola, con una sola cabeza, y eso aun cuando esta haya de alternar en la residencia capitular por épocas en el año; como sucede, por ejemplo, en Zaragoza. Hay las catedrales del Pilar, y de *La Seo*

(*La Sedes, ó Silla*): el arzobispo con el mismo cabildo alterna en dos épocas del año en residir y oficiar en cada una; pero hay un solo prelado, un solo cabildo, y una sola diócesis. El título de la catedral, agregada en estos casos, es de puro honor y justo recuerdo. Tal es, por lo comun, el sistema que se sigue, y el que se siguió en el Concordato de 1851, en la supresion de diócesis. Por el sistema y costumbre de la corte romana, cuidadosa, y diremos que justamente observado, de no renunciar nunca á título y derecho adquirido que pueda conservarse, ó alegarse, como sucede en los obispados *in partibus infidelium*, al unir por supresion de uno de ellos dos obispados, ó catedrales, conserva el título honorario y de recuerdo histórico de la suprimida: y en esta razon, suprimiéndose por dicho Concordato varias diócesis, quedando refundidas en otras, como sucede con la de Ciudad-Rodrigo unida á la de Salamanca, Albarracin á Teruel, Barbastro á Huesca, Ceuta á Cádiz, Ibiza á Mallorca, Solsona á Vich, Tenerife á Canarias, y Tudela á Pamplona, el art. 5.° en que asi se dispone, añade: «Los prelados de las sillas á que se reunen otras, añadirán al *título* de obispos de la iglesia que presiden el de aquella que se les reune:» es decir que no será *titular* de dos distintas, sinó de una compuesta de dos que lo fueron. Despues en el artículo 21 se dispone: «Las catedrales de las sillas espiscopales que se agreguen á otras, en virtud de las disposiciones del presente Concordato, se conservarán *como colegiatas.*» Como se vé, no hay prohibicion de que se les siga denominando *catedrales*: pero *ad honorem*, tradicionalmente, en recuerdo; y sin organizacion de catedral, lo cual coincide con nuestro modo de comprender el capítulo del Concilio, segun dejamos espuesto.

Segun el cap. 1, ses. 7 del Concilio de Trento, « no podrá ser nombrado para el régimen de ninguna iglesia catedral, sinó el que sea nacido de legítimo matrimonio, de edad madura, de gravedad de costumbres, y adornado de ciencia literaria, conforme á la constitucion de Alejandro III, *Cum in cunctis*, publicada en el Concilio de Letran.»

Todavía el mismo sagrado Concilio contiene otras muchas disposiciones relativas á realzar el prestigio religioso de las catedrales, que asi como sobresalen en honores, deben sobresalir en esplendor, santidad y buen ejemplo sobre las demas iglesias. Tal es, entre otras, la del cap. 2, ses. 22 *de reform.* que prescribe las dotes, virtud y ciencia de los que han de pertenecer á una catedral; pero sobre ello corresponde tratar en otros diferentes artículos, como los de **CANONIGO, CAPITULO, DEAN, OBISPO, PREBENDADO**, etc.

Sobre creacion de catedrales y varios otros conceptos relativos á ellas, véase el Concilio de Trento por Gallemart, y en las anotaciones el discurso 8, núms. 4, 5 y 33: dic. 7, núms. 1, 2, 3 y 4: dic. 16, núms. 6 y 7.

CATEDRATICO. El profesor ó maestro que tiene este título ó cargo en alguna Universidad, colegio, ú otro establecimiento público. En las comunidades religiosas se llamaban lectores: en algunas enseñanzas, como la de latinidad, por ejemplo, se llamaban de otro modo. El desenvolver y esponer todo lo correspondiente á catedráticos ó maestros públicos, como lo relativo á su edad, pruebas de su ciencia, calidad de sus títulos, modos de obtener y perder sus cargos, prerogativas, derechos y obligaciones, etc., corresponde á diferentes artículos como **CATEDRA, ENSEÑANZA, ESCUELAS, INSTITUTOS, MAESTROS, UNIVERSIDADES**, etc. Véase en ellos.

CATEDRATICO (subentendiéndose *censo, derecho*). Se llamaba asi en lo antiguo un derecho que en la visita percibian los obispos de los párrocos, y aun de todos los eclesiásticos. Se pagaba *pro honore cathedræ*. La cuota variaba segun la costumbre: solia ser de dos, tres y cuatro ducados. Se llamaba esta prestacion personal *sinodática*, cuando se pagaba á los que concurrian á los sínodos. Abusóse de ello, é Hincmaro de Reims increpó á los obispos porque convocaban con frecuencia los sínodos para poder cobrar este derecho (1). El Concilio de

(1) Can. *Conquerente, De offic. ordin.*

Braga en 172 decia ya de este derecho: *Placuit ut nullus episcoporum, cum per diœceses suas ambulant, præter honorem cathedræ suæ, id est, duos solidos, aliquid aliud per ecclesias tollat* (1). Los monges estaban esentos (2). Véase **VISITA**.

CATEGNESIS. Hemos dicho en el artículo **CATECISMO** ser una palabra griega, que, tomándose activa y pasivamente, significa unas veces *enseñar*, y otras lo enseñado, ó la *doctrina*. En lo eclesiástico se contrae á la enseñanza de las verdades cristianas, y á las mismas verdades enseñadas. Bajo uno y otro punto de vista la *categnesis* cristiana, tomada en un sentido lato, comprende el cargo y mision apostólica en toda su estension: *docete omnes gentes*: la predicacion, la enseñanza suministrada de cualquier modo, predicando, enseñando, por la lectura, ó la palabra, en público, ó en secreto. Pero en sentido estricto se contrae á la enseñanza oral, hecha pública ó privadamente, segun las reglas de la Iglesia. Bajo este punto de vista la *categnesis* se limita á la enseñanza de los rudimentos del cristianismo, relativamente á lo que se ha de *creer*, á lo que se ha de *obrar*, lo que se ha de *orar* y lo que se ha de *recibir*, como hemos visto estar ordenado el *catecismo romano*.

Aunque formulada de esta manera la *categnesis*, todavia ha habido siempre y hay que confiar mucho á la prudencia y discrecion del enseñante, segun las circunstancias de lugar, tiempo, y personas. La *categnesis* ejercida por un párroco, por ejemplo, en una grey ya cristiana, é instruida en los rudimentos del cristianismo, es por necesidad muy diferente de la que tiene que ejercer un misionero entre infieles, lo cual ha de entenderse por supuesto, no en cuanto á la doctrina y verdades; sinó en cuanto á la forma, trámites y estension de aquellas.

Considerada la *categnesis* cristiana en sus circunstancias y tiempos mas normales, subsigue á la *predicacion* para convertir, y á la conversion al cristianismo, esto es, á la resolucion de hacerse cristiano. En este caso la *categnesis* privada se encomendaba á un sacerdote, llamado por ello *catequista*: la pública la ejercia el obispo en la iglesia: despues, como decimos en el artículo **CATECISMO**, sin necesidad de cargo especial, por disposiciones canónicas generales (1), la podian ejercer todos los sacerdotes de una iglesia: posteriormente, sobre todo, despues del Concilio de Trento, el cargo incumbe de derecho á los párrocos y sacerdotes que ejercen cura de almas. Aunque mas abandonado este grave cargo de lo que debiera, los modos ordinarios de ejercerlo segun la actual disciplina, son por la enseñanza ó esplicacion oral durante la cuaresma en cada año en el templo, y por las pláticas dominicales y de dias solemnes que encarga el Concilio. En casos estraordinarios hemos dicho que la regla principal en cuanto al modo y tiempo es la prudencia. Respecto de misiones en paises infieles véase **MISIONES**. En cuanto á casos aislados de conversion al cristianismo, el obispo la practica por sí, ó la encomienda á sacerdote determinado. No siendo raro por desgracia realizar como una especulacion y modo de vivir la conversion al cristianismo, ó renegar de él, y lo propio de las demas sectas y creencias, este será uno de los puntos á que con particular criterio debe atender el catequista en las conversiones de adultos, sobre todo, si son estranjeros transeuntes.

En cuanto á la categnesis ordinaria, concluimos insertando la disposicion del Concilio de Trento, hoy regla capital en la materia.

«Para que el pueblo fiel se llegue á recibir los sacramentos con mayor reverencia y devocion de espíritu, manda este santo Sínodo á todos los obispos, que no solo espliquen préviamente la fuerza y uso de los mismos, cuando hubieren de administrarlos por sí, acomodándose al alcance de los que han de recibirlos; sinó qué procurarán que esto mismo se observe por cada uno de los párrocos piadosa y prudentemente, hasta en

(1) Can. 1, 10 y 11, quest. 3.
(2) Cap. *inter cætera.*

(1) Cánon 57, *distinct.* 4, *De consecratione.*

lengua vulgar, si es necesario, y buenamente puede ser asi, segun la forma que por este santo Sínodo será prescrita en la categnesis para cada uno de los sacramentos: cuya categnesis procurarán los obispos sea fielmente traducida en lengua vulgar, y espuesta al pueblo por todos los párrocos. Asimismo procurarán que los párrocos en todos los dias festivos ó solemnes durante la misa, ó de la celebracion de los divinos oficios, esplanen en lengua vulgar tambien, la divina doctrina y consejos de salud, procurando imprimirlos en todos los corazones, é instruir á los infieles en la ley del Señor, evitando cuestiones inútiles.» Concilio de Trento, cap. 7, ses. 24 *de reform.* Véase BAUTISMO: CATECISMO: CATECUMENO. Sobre *categnesis* de judíos véase la disposicion de Gregorio XIII, cap. 5, tít. 1, lib. 5 del sétimo de las Decretales, *Sancta mater Ecclesia.*

CATEGORIA. Voz griega, que, como en latin, significaba, *predicamento* en sentido lógico, esto es, *calificacion generalísima*, y tal que equivalia á *género supremo* en la acepcion filosófica de esta palabra. Conocidas son en este sentido las célebres *categorías* de Aristóteles, que siendo solo doce enunciativas ó predicamentos, comprendian cuanto abarca el universo, corpóreo, ó incorpóreo, quietud ó movimiento, efecto ó causa, etc. Porfirio redujo las suyas todavia á menor número con el mismo efecto.

Mens, mensura, quies, motus, positura, figura
Sunt, cum materia, cunctarum exordia rerum.

Es decir, que cuanto encierra el universo habria de estar por necesidad comprendido en estas siete *clases*, predicamentos, categorías.

De aquí en lo social la aplicacion de la voz categoría á clasificar á los ciudadanos de un Estado, segun el grado que á cada uno de ellos corresponde, conforme al fin de la ley, y principio de que parte. Esto lo hace unas veces el nacimiento, otras el saber, el sueldo ú honor que se recibe del Estado, etc. Otras veces no es la ley la que hace las categorías, sinó las costumbres, hábitos y propensiones de cada pueblo, segun las que unas cosas están en honor en la apreciacion general, y otras en desprecio. De aquí la doble acepcion de la palabra categoría. En sentido genérico espresa las condiciones respectivas iguales, ó desiguales de los ciudadanos, prescindiendo de que sean altas ó bajas. Asi decimos, por ejemplo, que todos los vecinos, domiciliados, etc., cada uno segun su categoría, deben contribuir á tal, ó tal cosa: y otras por antonomasia, se toma la categoría por las clases mas realzadas. Asi cuando decimos que una persona es *de categoría*, espresamos que no corresponde en el estado á las clases ínfimas.

En sentido específico, en lo legal y administrativo la categoría espresa las diferentes clases de empleados, segun el grado de honor, dignidad, preeminencia que tienen unas sobre otras, siguiendo una escala numérica *ordinal*. Muchas veces la categoría, hay que deducirla del *mayor sueldo*, lo que ha sido y aun es muy comun en España: otras, del mayor grado de autoridad, ó mayor grado de jurisdiccion, ó mayor estension de esta: otras, en fin, la han prefijado las leyes y reales resoluciones, y casi siempre incompletamente, por la naturaleza misma de las cosas. Suscítase muy de ordinario la cuestion de categoría en las de *presidencia* y *precedencia*, y considerando que se mezclan en ello el prestigio de la autoridad, el de órden y buena disciplina á veces, el espíritu de cuerpo y de clase, el conflicto inevitable entre lo tradicional y lo actual, hasta el amor propio, se conocerá cuanta es la dificultad de establecer sobre ello una regla sin inconvenientes: dificultad que es mayor en un pais como el nuestro, en que la escala administrativa no ha estado arreglada ni definida con precision, y en que por edificar sobre antiguo, y edificar muy apriesa, se ha venido á tener que parar, en combinar lo actual con lo tradicional, que en muchas cosas se escluyen. Ya habíamos visto atravesar los siglos sin decidirse la cuestion de categoría y precedencia entre los procuradores á Córtes de Búrgos y Toledo: nunca han podido arreglarse todavia las de los diferentes cuerpos superiores ó su-

premos en su concurrencia á los actos públicos, tomando por partido el no concurrir, y eso aun concurriendo el monarca: hasta seis reales órdenes mediaron en pocas horas aun no hace mucho para arreglar la concurrencia del Consejo Real y del Tribunal Supremo de Justicia á la procesion del *Corpus* en la corte, á que concurria el monarca, y terminó por no verificarlo ni uno ni otro cuerpo: casi sin decidir está todavia la cuestion de recepcion en las provincias en los dias de corte y besamanos, aun cuando se está arreglando por multiplicadas reales declaraciones desde 1834 hasta el dia: y asi tantas otras.

Las categorías están arregladas, sin embargo, en algunas clases y cuerpos: en otras, en lo judicial y administrativo sobre todo, se han arreglado y prefijado en estos últimos años: las del cuerpo diplomático general lo fueron en 1814 en el congreso de Viena. En lo eclesiástico la *clasificacion*, bajo el doble concepto de *categoría* y *gerarquía*, está prefijado de un modo estable. Pero como el hablar aquí de las respectivas categorías romperia la unidad correlativa de la materia, ha de verse lo conveniente en los artículos respectivos, y por lo que hace á lo civil y administrativo véase **EMPLEADOS PUBLICOS, ORDEN JUDICIAL.**

CATEQUISMO. En un principio esta voz significaba la enseñanza cristiana, el oficio del catequista, y el catecismo, ó compilacion metódica y autorizada de la doctrina católica. Con el tiempo significó una de las especies del parentesco, ó cognacion llamada espiritual, y era la que segun la disciplina de los siglos medios, resultaba entre el catequista y el catecúmeno. Es para nosotros cierto que el Concilio de Trento abolió este impedimento dirimente. El tenor del cap. 2, ses. 24, *de reform.* es tan terminante, y tan notoria la mente y sábias miras del Concilio en dicho capítulo consignadas, que racionalmente no parece dejar lugar á duda. Despues de espresar el Concilio que la muchedumbre de impedimentos traian, contra las miras de la Iglesia en los matrimonios, el inconveniente de infringirlos por la dificultad de ser conocidos de todos, ordena con tal mira que á los bautismos no concurra á levantar al bautizado de la santa fuente mas que padrino, ó madrina, y cuando mas padrino y madrina; y que ninguno de los demas que tocaren al bautizado contraigan cognacion espiritual: designa las personas á que esta se limitará en adelante: establece sean castigados con pena estraordinaria los párrocos que permitan lo contrario: restringe tambien la cognacion espiritual en la confirmacion: declara reformada sobre todo lo dicho la antigua disciplina, y concluye con estas palabras: *omnibus inter alias personas hujus spiritualis cognationis impedimentis omnino sublatis.*

Hay, sin embargo, quien opina que el catequismo, como cognacion espiritual no fué abolido por el antedicho capítulo, y cierto que no puede rechazarse como temeraria esta opinion. El Concilio no habla mas que del sacramento del bautismo y del de la confirmacion. No habla del catequismo, como enseñanza, ni por consiguiente, puede decirse, de sus consecuencias. Pero el catequismo, ó la *categnesis* era la preparacion para el bautismo, y como su proemio: habla el Concilio de los inconvenientes de la multiplicidad de impedimentos por cognacion espiritual: se propone prevenir el *escándalo* á que se llega, segun su misma espresion, al haber de absolverlos, contraidos ya los matrimonios (*in quibus, vel non sine magno peccato, perseveratur; vel non sine magno scandalo dirimuntur*): de haber alguna razon para dejar subsistentes tales inconvenientes, mayor seria esta respecto de dos sacramentos del bautismo y de la confirmacion, que no del catequismo, infinitamente de menor categoría y entidad que ellos. Llégase á todo lo dicho que ya la importancia del catequismo, en su forma antigua, habia decaido en tiempo del Concilio de Trento, pues estaba sustituido, segun la práctica corriente; esto es, en vez de un cargo específico, era la incumbencia comun de los sacerdotes de cada iglesia: el mismo Concilio de Trento ratificó, ó confirmó, digámoslo asi, dicha falta de importancia, no restableciendo la

antigua categnesis; y antes al contrario, haciendo de ella pretericion, y estableciendo otra bajo nueva forma, segun vemos por el capítulo arriba inserto: lo cual todo apreciado, el mayor, y aun absoluto desuso en que ha caido la antigua categnesis despues del Concilio, y el no ver vigente y reconocida en la práctica la cognacion de *catequismo*, nos hace tener por cierto, con la comun de los autores, que dicha cognacion quedó abolida por el Concilio; y si en ello hubiera habido alguna duda, la disciplina posterior habria completado la abolicion. Véase el Concilio de Trento, comentado por Gallemart, capítulo preinserto: y Van-Espen, Jus. eccles. part. 2, cap. 6.

CATEQUISTA. En la antigua disciplina el sacerdote que tenia el cargo de hacer la *categnesis*, ó instruir privadamente á los catecúmenos, esto es, á los que mostraban vocacion y decision de hacerse cristianos y se preparaban para el bautismo, corridos los cuatro grados del catequismo. Véase **CATECUMENOS**. Por la antigua disciplina tambien se conoció hasta el Concilio de Trento, y fué abolida por este la cognacion espiritual, llamada *catequismo*, la cual tenia lugar entre el catequista, y sus catecúmenos. Véase **CATEQUISMO**. El cargo de *catequista*, como ordinario, ó específico, está en desuso, y la *categnesis* ordinaria está á cargo de los obispos y párrocos; la estraordinaria, del sacerdote á quien el obispo la encomienda en las conversiones estraordinarias de adultos. Véase **CATEGNESIS**.

CATEQUIZAR. Del griego *catechizo*, enseñar. Contraido á lo ecclesiástico hacer la *categnesis*, ó *catequismo*. Véase **CATECISMO: CATEGNESIS.**

CATOLICISMO. La creencia católica: el gremio de la Iglesia católica. El catolicismo, por tanto, escluye toda otra Iglesia ó creencia, toda secta, aunque sea cristiana; al contrario del cristianismo, que en un sentido lato puede comprender todas las creencias cristianas, pues si todos los *católicos* son *cristianos*; no todos los *cristianos* son *católicos*.

CATOLICO. Del griego *katholicos*, cosa *universal*: aplicado á la Iglesia de Jesucristo, es uno de sus *caractéres*, como veremos. En virtud de ello la Iglesia única, verdadera, se llama *católica*; y católico todo lo cor respondiente á ella, segun indicaremos tambien.

Siempre se atribuyó á la Iglesia el carácter de *católica*, ó *universal*, y de ahí el simbolizarle con el arca de Noe', con una nave, con la tabla única de salvacion, etc. El carácter de *católicas*, sin embargo, se atribuia en los primeros siglos á las iglesias que habian tenido un apóstol por su cabeza, ó habian recibido epístolas de ellos, segun decimos en el artículo **IGLESIA**. Pero especialmente desde el autorizadísimo Concilio de Nicéa, y su símbolo de fé, que despues fué y será el *símbolo* de la Iglesia universal, el connotado de *católica* constituye uno de los *caractéres docmáticos* de la verdadera Iglesia de Jesucristo: *et unam, sanctam, catholicam, apostholicam Ecclesiam. Católica*, pues, ó universal equivale á decir que es aquella iglesia, fuera de la cual no hay salvacion: la única verdadera: la única que puede salvar al universo: que no es local, de tiempos, de circunstancias, de climas, ni razas, civilizaciones, legislaciones, ni formas de gobierno determinadas; sinó de todos tiempos, de todos lugares y razas, perpétua, de todo el mundo, la única qne puede salvarle, *universal*. Hé aquí como esplica este concepto, esto es, el carácter *dogmático* de *universal*, el *Catecismo romano*, ó de San Pio V: «*Universalis etiam ob eam causam dicitur* (la Iglesia) quòd omnes, qui salutem æternam consequi cupiunt, eam tenère, et amplecti debeant, *non secus ac qui arcam, ne diluvio perirent, ingressi sunt.*»

Asi *católico* es lo correspondiente á esta Iglesia: *cristiano católico*, es el individuo perteneciente á esta Iglesia universal: *católica*, la *religion* que profesa la Iglesia universal, y como ella la profesa: *fé católica*, la que cree, confiesa y enseña la Iglesia universal, que hoy, multiplicadas las sectas y creencias cristianas, pero heréticas, ó cismáticas, á los cuatro *caractéres dogmáticos*, de *una, sancta, católica* y *apostólica*, reune el concep-

to de *romana*. Véase FE, IGLESIA, RELIGION.

CATOLICOS. Connotado de los reyes de España, y tratamiento ademas, pues no solo en términos generales, en literatura, historia, etc., se les califica con él; sinó que las cortes y soberanos estranjeros, en documentos políticos y diplomáticos, los nombran y distinguen asi.

Ya desde la dinastía goda los reyes de Castilla y Leon, despues de España, se distinguieron de tal suerte, y por regla general por su celo cristiano y servicios en favor de la religion, que desde muy antiguo se les denominó *Católicos*. A Recaredo le dió ese dictado el Concilio III de Toledo: el mismo se dió despues á Alonso. Con el tiempo el Papa Alejandro VI lo concedió á los llamados por antonomasia reyes Católicos, Fernando V de Aragon é Isabel I de Castilla. Apreciábanse y codiciábanse entonces estos títulos, que pocos monarcas habian hecho mas méritos para merecer y llevar que los de Castilla, con su reconquista de siete siglos contra los enemigos naturales del cristianismo; sus conquistas de Berbería, rompiendo las cadenas á tantos cautivos y cerrando las mazmorras; y con sus conquistas en las Indias, enarbolando en todos los mundos la cruz de Jesucristo. Los monarcas se honraban en usar los títulos de *católicos* y otros semejantes: los otros reyes y soberanos no los rehusaban, y antes favorecian este honor y deseo, y en el órden diplomático el dictado piadoso, pasó á *tratamiento* político y dinástico que se conserva, siendo *Majestad católica*, sin necesidad de otro aditamento el de los reyes de España, como *Magestad fidelísima* el de los de Portugal, *Magestad cristianísima*, y *Rey cristianísimo* el de los de Francia, etc.

CAUCION. Del latin *caveo*, *cautio*: recelar, desconfiar, y tambien asegurarse de antemano contra lo que se recela, ó aquello de que se desconfia. Como en este caso precede al mal, perjuicio, ó inconveniente que se recela y quiere evitar, la medida que se adopta para ello, esta se llama, en el lenguaje comun, *precaucion*, *cautela*; en el derecho y técnicamente *caucion*. Caucion es, pues, la garantía con que se asegura en términos legales el cumplimiento de un contrato entre partes, ó de un deber personal, como el cumplir lo que justamente se sentencie, ó responder, ora criminal, ora civilmente, del mal que se ha hecho. Los artículos subsiguientes dan á conocer las especies de *caucion* mas técnica y acostumbrada.

CAUCION DE CONDUCTA. La obligacion en que uno se constituye, ó la seguridad que dá ante el juez de que otro no ejecutará el mal que se teme, y de satisfacer la cantidad designada, si lo ejecuta.

La caucion de conducta, á que tambien es llamada caucion *bene vivendi*, se encuentra en los monumentos históricos y legales, ya como una responsabilidad general que tomaban sobre sí los superiores respecto de sus inferiores ó subordinados, los vecinos respecto de sus convecinos, ó un particular respecto de otro, con relacion á toda clase de actos ilícitos, y sin que existiese motivo racional inmediato ni determinado para temer que causaran daño alguno; ya como una garantía ó seguridad especial que prestaba una persona por otra, relativamente á un acto ilícito determinado, cuya perpetracion habia motivos fundados para temer.

De la misma clase de caucion se hallan vestigios entre los romanos en el derecho de patronato que ejercian y dispensaban los patricios á sus clientes. Mas especialmente se vén en la edad media, en que los señores feudales solian responder á los monarcas de la conducta de sus vasallos, los concejos y municipalidades de la de sus vecinos y colonos, y los mismos señores entre sí. Asi vemos en la Constitucion sajona, la institucion del rey Alfredo, de los Decennarios ó *Frankpledges*, por la que todos los vecinos eran mútuamente responsables de su buena conducta. Asi, para citar una disposicion de muchos códigos, hija de esta costumbre y notabilísima por la estension de la responsabilidad que imponia, se ha establecido por la ley 4, tít. 7, Part. 5, que si fuesen robados los mercaderes y demas que vinieran á nuestros reinos y no se aprehendiere á los

ladrones, ó estos fuesen insolventes, *que el concejo ó el señor, so cuyo señorío es el lugar donde fué fecho el robo, gelo debe pechar de lo suyo.*

Respecto de la caucion de conducta sobre personas y actos determinados, se encuentran vestigios en la legislacion romana, en la caucion llamada de *non offendendo*, de que trataremos mas adelante; y asimismo en las leyes de Inglaterra, que es sin duda alguna donde se la ha dado mas estension y aplicádose con mas frecuencia las leyes del rey Eduardo, se establecen dos especies de caucion, una para conservar la paz y de buena conducta la otra: denominadas *de pace et legalitate tuenda*. La caucion, para conservar la paz ó el órden, se exije en Inglaterra, segun Blaktone, por los jueces de paz, de oficio, á los que promueven algun desórden ó amenazan á alguno de herida ó muerte, á los que traban reyertas acaloradas ó que van armados ó con escolta propia para alarmar al pueblo, y á todos aquellos de quienes se teme, con motivo, que alteren el órden público. Asimismo, cuando un particular teme que otro intente quemarle su casa ó injuriarle corporalmente, ó que busque quien lo haga, puede exigir seguridad contra el injuriante, y el juez de paz está obligado á concedérsela, si el que la pide presta juramento de que sus temores son ciertos y fundados y que no procede de malicia ó por pura vejacion. Si la parte acusada no encuentra la caucion que el juez requiere, puede ser llevada á la cárcel hasta que la encuentre. Esta caucion puede confiscarse, si es especial, por cometer violencia ó atacar ó amenazar el que la dió al que la hubiere pedido, y si es general, se confisca por cualquiera accion ilícita que haya turbado la paz ó por alguna violencia particular cometida contra un súbdito del Estado, mas no por un mero daño causado en tierras ó bienes de otro, que solo dé motivo á una accion civil.

La otra caucion á favor de la buena conducta futura, se presta por medio de una obligacion que hacen celebrar las autoridades á los que no gozan de buena reputacion, en donde quiera que se les halle, á favor del rey y del Estado; por ella se comprometen á conservar la tranquilidad y la paz públicas.

Nuestros legisladores, tan celosos en adoptar cuantos medios se conocen para prevenir y evitar los delitos, no podian olvidar la adopcion de una medida tan conveniente y previsora. Asi no vacilaron en prescribirla ya en el Código penal de 1822, disponiendo en su artículo 79, que el que por sentencia ó por disposicion de la ley debiera dar fianza de observar buena conducta, tuviese la obligacion de presentar un fiador abonado, á satisfacion de la autoridad local respectiva; el fiador era responsable con sus bienes de todo delito ó culpa que cometiese el fiado dentro del término de la fianza.

Asi tambien el Código penal de 1850 ha establecido en su artículo 43 que la pena de caucion produzca en el penado la obligacion de presentar un fiador abonado, que responda de que aquel no ejecutará el mal que se trata de precaver, y se obligue á satisfacer si lo causare, la cantidad que haya fijado el tribunal en la sentencia. Segun esta disposicion, el fiador solo queda obligado á responder del delito que dió motivo al procedimiento, esto es, de un solo delito, de un acto, ó de un hecho determinado, y no de toda clase de delitos que cometiera el fiado durante el tiempo de la fianza. Asi se deduce del testo terminante del artículo 43, que dice, que el fiador responde de que el fiado no ejecutará *el mal que se trata de precaver*. Y en efecto, el fiador no debe responder mas que del delito que ha motivado la fianza, no de toda clase de delitos. La pena de la caucion es el resultado de un juicio seguido sobre un delito determinado para castigarlo y prevenirlo ó cortarlo en lo sucesivo; se impone por sentencia judicial despues de haberse cerciorado el juez de que hay motivos para temer que se cometerá aquel esceso, lo que no milita respecto de otra clase de delitos; no debe, pues, estenderse la fianza á aquellos que no dieron ocasion al procedimiento, y respecto de los cuales no creyó útil ó conveniente el Código imponer la caucion de conducta. Lo contrario seria ilógico y riguroso en demasía. Ademas, de esta

suerte se dificultaria la fianza; porque si bien puede ser fácil encontrar una persona que se preste á salir fiador por otro respecto de un delito determinado, cuando por lo que arroja el proceso, por la defensa del acusado y por otras circunstacias favorables al mismo que han esclarecido los debates, se cerciore de que no existen causas, motivos ó estímulos suficientes para temer que aquel perpetre el delito de que se le acusa, no sucederá lo mismo cuando el fiador tenga que responder de todas las pasiones, de todos los instintos, de todos los malos hábitos del penado, que han permanecido ocultos ó pasado desapercibidos en la causa, por no haber girado sobre ellos los procedimientos é investigaciones judiciales. Querer que el fiador responda de los infinitos actos reprobados en que puede incurrir la naturaleza humana, es exigir mas de lo justo, mas de lo que permite la prudencia, y aun es por otra parte tender lazos peligrosos á una caridad ardiente. Es, pues, justa la disposicion del art. 43 de nuestro Código al limitar la responsabilidad del fiador á solo el mal que se trata de precaver. Aun cuando el testo terminante de este artículo no espresara de un modo claro esta limitacion, la apoyaria la circunstancia de haberse redactado su disposicion con posterioridad y en vista de la que contenia el art. 79 del Código penal de 1822, y por la cual se obligaba al fiador á responder con sus bienes de *todo delito* ó culpa que cometiese el fiado dentro del término de la fianza, disposicion que fué atacada por las Córtes al discutirla, y cuyos graves inconvenientes no hubieran tardado en tocarse si hubiese llegado á ponerse en práctica aquel Código. Es verdad que el testo del art. 79 disponia, que la fianza consistiera en que el penado observara buena conducta, frase genérica, que como notó un individuo de la comision en aquellas Córtes, comprendia toda clase de delitos, porque mal podia decirse que el penado observaba buena conducta, porque no cometiese un delito determinado, si cometia otro de tanta ó mayor gravedad. Pero el Código de 1850 no ha hecho uso de aquella frase; ha sido cauto en la eleccion de sus palabras, usando únicamente la de *caucion* y limitando asimismo la aplicacion de esta seguridad ó garantía al mal que se trataba de precaver.

El Código penal no determina el espacio de tiempo ni la cuantía de la caucion, y solo establece en su art. 26 que dure el tiempo que determinen los tribunales segun su prudente arbitrio; y en el 43, que la cantidad que haya de satisfacer el fiador en caso de ejecutar el penado el mal que se temia, sea la fijada por el tribunal en la sentencia. Y á la verdad, siendo la caucion una pena que afecta al que la sufre en proporcion de la mayor ó menor fortuna que posee, y debiendo atenderse asimismo á la gravedad del delito que se teme, al mayor ó menor peligro de su perpetracion y al carácter y circunstancias particulares del penado, nadie mejor que los tribunales que han conocido del proceso pueden hacer estas apreciaciones con exactitud y justicia. Asi pues, el tiempo de su duracion y su cuantía serán mayores, cuando se tema un mal de trascendencia, que cuando se trate de evitar un daño de poca importancia; cuando el penado sea de carácter impetuoso é irascible que cuando tuviese un carácter pacífico y tranquilo. Pero en ningun caso parece que deberá elevarse la fianza á una suma de consideracion, porque el Código coloca esta pena en la tercera escala gradual, despues de la de destierro que es pena correccional, considerándola en su consecuencia de menor gravedad que esta, puesto que señala, en su art. 43, para sustituir á la caucion en el caso que no la diere el penado, el arresto menor segun mas adelante espondremos, y porque el Código solo la aplica por delitos castigados con penas correccionales y no de las mas graves. Y en efecto, la pena de caucion se halla impuesta en el Código fija y directamente solo en la proposicion para el delito de sedicion (art. 180), y en el delito de sociedades secretas, á los individuos que se espontaneasen ante la autoridad (art. 209); y de los casos en que impone el Código la caucion por descenso de las penas marcadas en las escalas graduales del artículo 74, conforme á las reglas de los ar-

tículos 60 al 64, es solo por los delitos menos graves, que se castigan con penas correccionales, no pudiendo en su consecuencia considerarse la pena de caucion mas grave que una pena correccional, puesto ocupa el cuarto grado de estas en su respectiva escala gradual establecida en el art. 79. No aplicándose, pues, la caucion por el Código sinó á delitos castigados con penas correccionales y no de las mas elevadas, y habiéndose sustituido con la pena de arresto, los jueces no deberán imponer una caucion que esceda del período que duran las penas correccionales impuestas á los delitos á que aquella se aplica. Esta doctrina se halla claramente confirmada por la disposicion de los arts. 262 y 266, que al conceder al simple vago y al mendigo la relevacion de las penas de arresto mayor y sujecion á la vigilancia de la autoridad, si dieren fianza de aplicacion y buena conducta, establece que esta dure dos años ó veinticuatro meses, no obstante sustituir á dos penas impuestas conjuntamente, y que duran, la de arresto, de uno á seis meses y la de sujecion, de siete á treinta y seis. No podrá, pues, esceder tampoco la cuantía de la fianza de 200 á 300 duros, segun se deduce por analogía de la disposicion del artículo 262 mencionado en que se establece, que la fianza del vago ó mendigo no baje de 50 duros, ni escede de 250, y asimismo de la del art. 82 del Código que previene que la multa no pueda esceder de la cantidad de 300 duros cuando se imponga como pena correccional, que es el carácter que en los casos en que se impone tiene la caucion. Apoya asimismo la doctrina que sostenemos las disposiciones del Código napolitano, que se ha tenido presente al redactar el nuestro, segun las cuales, el importe de la caucion cuando se impone como pena correccional, ó de policía, no puede ser mayor ni menor que la cantidad fijada para las multas en tales casos.

El artículo 24 del Código penal coloca la pena de caucion entre las comunes á las aflictivas, correccionales y leves, de donde deducen los autores, que una caucion que sea sumamente cuantiosa, deberá estimarse pena aflictiva, una mediana pena correccional, y una corta, pena leve. Pero es muy importante advertir, que al paso que el Código penal atribuye á la caucion aquellos tres caractéres, no la aplica en ningun caso como pena aflictiva, ni aun como correccional de los primeros grados de las diferentes escalas graduales, segun acabamos de esponer en el párrafo anterior. Respetando, pues, la declaracion terminante del artículo 24, no podemos menos de sentar, que si han de conciliarse debidamente las diversas prescripciones del Código, no debe entenderse impuesta sinó como pena correccional en el último ó penúltimo grado de las respectivas escalas. Y esto es asimismo lo mas conforme con la propia índole y naturaleza de esta pena, porque la caucion es una pena preventiva que no produce efectos de trascendencia inmediatos, general y simplemente considerada, ni por la impresion moral que deja en el que la sufre, ni por lo que afecta sus intereses, sinó que sus efectos principales dependen de la circunstancia condicional de que el penado abuse de la libertad que se le dió, cometiendo el delito que se teme. Y este fué tambien el concepto en que la consideraron las Córtes de 1822: al discutirse el artículo 79 del Código penal se declaró, que al reo á quien se aplicaba la pena de dar fianza, se suponia que era por un delito proporcionado á una pena tan suave, por lo que parecia muy duro que se impusiera arresto por via de sustitucion de la misma.

Cuando el penado no dé la caucion determinada por los tribunales en la sentencia, incurre, segun el artículo 43 del Código, en la pena de arresto menor. Algunos autores han tachado de ilógica esta disposicion, y de contradictoria respecto de la del artículo 24, que declara que la pena de caucion es comun á las aflictivas, correccionales y leves. Si la caucion tiene estos tres caractéres, dicen los autores á que nos referimos, no debia marcarse para sustituirla, el arresto menor, porque esta es una pena leve y es darle, en tal caso, importancia para sustituir á otra correccional, y aun aflictiva. En su consecuencia creen que debiera haberse sustituido

Lorenzo Arrazola

la pena de caucion con la de confinamiento menor, arresto mayor y arresto menor, segun que la caucion decretada tuviese el carácter de aflictiva, correccional ó leve. El argumento que estriba en la declaracion del artículo 24, queda contestado con las observaciones arriba espuestas, sobre que el Código impone siempre la caucion como pena leve ó correccional en los últimos grados. No puede, pues, verificarse que el arresto sustituya en este caso á una pena aflictiva, ni aun á las mas elevadas de las penas correccionales. Por la misma razon es riguroso y desproporcionado sustituir la caucion con la pena de confinamiento menor, y aun con la de arresto mayor, por no haber términos hábiles para esta sustitucion, puesto que no existe caso en que se imponga la caucion como pena aflictiva, y que cuando se hace como correccional, es en un grado igual ó menor que el que ocupa la pena de arresto mayor. Y aun cuando esta última fuese proporcionada á la de caucion, se caeria en el inconveniente de sustituir una pena de una naturaleza especial, comprendida en una escala de penas que dejan al culpable su libertad individual, si bien alejándole del teatro de sus escesos, con otra de diversa naturaleza y de diferente escala, como perteneciente á penas que se dirigen á privar de su libertad al sentenciado. Igual inconveniente se encuentra tambien en la de arresto mayor que designa el Código para sustituir á la fianza. Tal vez al adoptarse esta pena se han tenido demasiado presentes nuestras antiguas prácticas, respecto de la caucion de no ofender, por las cuales se reducia á prision prévia de apremio al que no la prestaba. Véase á Molina, de inst., título 4, disp. 42, núm. 12, y Gomez var., capítulo 4, núm. 16. Tal vez se tuvo tambien á la vista la disposicion del art. 79 del Código penal de 1822, en que se designaba para sustituir á la caucion el confinamiento ó arresto del penado donde pudiese trabajar por un tiempo que no pasase de la mitad del señalado al afianzamiento. Pero si asi fué, debió haberse tenido tambien presente, que las Córtes al discutir aquel artículo, tacharon de duras é inconvenientes estas penas para sustituir á la fianza, indicándose como mas proporcionada y análoga la pena de sujecion á la vigilancia de la autoridad, la cual, si no se adoptó, fué por ser en aquel Código mas dura que las de arresto y confinamiento, puesto que podia conducir á un confinamiento ó arresto por todo el tiempo de la pena de vigilancia. Pero segun nuestro Código, no ofrece la pena de sujecion aquellos inconvenientes, por lo que deberia sustituir á la de caucion, por ser mas análoga á su objeto, que es tener vigilado al culpable para evitar que abusando de su libertad perpetre el delito, por pertenecer á la misma clase de penas de que forma parte la caucion, y contenerse en la misma escala gradual. Asimismo la pena de vigilancia guarda mas conformidad con la clase de delitos á que se aplica la caucion, cuales son los de conspiraciones, sociedades secretas, y demas de esta naturaleza en que el medio mas conveniente de prevenirlos y evitarlos es alejar al delincuente del sitio donde puede valerse de su influencia, amistades y relaciones para perpetrar el delito; ó la vigilancia, para que no abuse de todos estos medios. Por estas consideraciones, sin duda, prescribe el Código napolitano, que en el caso en que el penado no preste la caucion, se le ponga á disposicion de la policía, á pesar de que este código aplica aquella pena juntamente con la cadena y reclusion. Por último, la opinion que sostenemos halla un firme apoyo en la disposicion del art. 419 de nuestro Código, que prescribe, que en defecto de la pena de caucion de no ofender al amenazado, que allí se aplica al que amenazó, pena que tiene una gran analogía con la presente, se imponga la de sujecion á la vigilancia de la autoridad. Véase **CAUCION DE NO OFENDER.**

Segun llevamos indicado, por el art. 262 del Código, se admite la caucion de buena conducta y aplicacion, al vago á quien se hubiere impuesto las penas de arresto y sujecion á la vigilancia de la autoridad, y en su virtud, es relevado del cumplimiento de la condena, en cualquier tiempo que la diere. La ley, al establecer esta disposicion, ha

procedido con suma justicia y consecuencia. Los vagos á quienes se imponen las penas mencionadas, no tienen contra sí mas que la presuncion de mala conducta por no poseer rentas ni bienes, ni ejercer profesion, industria ni oficio, no tener empleo, ni otro medio legítimo conocido de subsistencia, y llevar una vida ociosa, y nada mas justo y conveniente que desde que sale responsable de la probidad del vago una persona de honradez y demas circunstancias que requiere la ley para salir fiador, desaparezca aquella presuncion y se le releve de la pena. Es necesario no olvidar que la vagancia, legalmente considerada, no tanto es en sí un hecho criminal, cuanto un género de vida errante y oscuro, que unido á la falta de medios de subsistencia, ofrece mil peligros é incitacionss al delito, y que por tanto debe ser reprimida por la ley: cuando el vago no haga temer aquellos peligros, por la seguridad que ofrece el fiador que debe conocer sus hábitos, carácter é inclinaciones, cesa el único motivo que tenia la ley para aplicar su represion.

Igual beneficio de la fianza en los mismos casos es aplicable, segun los artículos 266 y 267 del Código penal, al que sin la debida licencia pidiere habitualmente limosna, y al que bajo un falso motivo obtuviere licencia para pedirla, ó continuare pidiéndola, despues de haber cesado la causa porque la obtuvo; porque en tales casos, el mendigo viene á equipararse al vago, no considerándose su conducta menos sospechosa, aunque acaso obtenga, implorando la caridad pública á que recurre, los medios necesarios para su subsistencia.

La cantidad de la fianza se regula por los tribunales en la sentencia, atendiendo al mayor ó menor tiempo de la vagancia ó mendicidad que ha podido crear hábitos de ociosidad mas ó menos inveterados, al sexo y edad del delincuente, para no considerar al anciano y á la muger tan culpables como al hombre jóven y robusto por no haberse procurado trabajo con que subsistir, y á las demas circunstancias particulares del penado. Sin embargo, la ley marca á los tribunales un círculo del cual no pueden salir en la regulacion de la cuantía de la fianza, determinando, que esta no pueda bajar de 50 duros ni esceder de 250.

La fianza debe depositarse en el Banco público para mayor seguridad, y para que sea mas fácil disponer de ella en caso de que el penado abusare de la libertad que se le concedió. Y por último, como el fiador pudiera tener motivos posteriores al acto de su fianza para temer que el vago ó mendigo no observará buena conducta, ó pudiera necesitar la cantidad que depositó como fianza, la ley le dá derecho para pedir en cualquier tiempo su cancelacion y la devolucion de la cantidad depositada, con tal que presente á la autoridad la persona del vago, para que cumpla ó estinga su condena.

CAUCION DE CUSTODIA. La obligacion en que uno se constituye ante el juez de que guardará con seguridad á la persona que se le encomienda para que no cause daño ni mal alguno. Esta caucion establecida por lo comun para tener seguros y vigilados á los locos ó dementes, se encuentra ya adoptada en las leyes del derecho romano. La ley 9, §. últ. Dig. *ad leg. Pomp. de pœnis*, despues de haber sentado el principio, *furiosus furore ipso punitur*, añadia, *diligentius custodiendum esse, aut vinculis coercendum*, disposicion que ampliaba la ley 13, Dig. *de off. præs.*, cuando decia, *furiosis si non possint per necesarios contineri, eo remedio per præsidem obviam eundum est, scilicet, ut carcere contineantur*. Esta disposicion fué adoptada por nuestras leyes de Partida. Las 9, tít. 1, y 8, tít. 9, Part. 7, prescriben, que los parientes del loco ó desmemoriado lo guarden, y si no lo hicieren, son responsables del daño que causare. El Código penal de 1850 ha prescrito asimismo, en su artículo 8.°, que cuando el loco ó demente hubiese ejecutado un hecho que la ley no califique de delito grave, sea entregado á su familia bajo fianza de custodia, y no presentándola decrete el tribunal su reclusion en uno de los hospitales destinados á los enfermos de aquella clase, del cual no podrá

salir sin prévia autorizacion del mismo tribunal.

La fianza que exige el Código es en estremo humanitaria y filosófica. Al paso que reconoce la necesidad de establecer una medida de precaucion respecto de un demente para privarle de la posibilidad de causar daño y poner á la sociedad á cubierto de sus agresiones, trata de no llevar estas precauciones mas allá de lo que requiere el peligro que nos amenaza. Por eso, dispone que si el loco ejecutare un hecho que la ley califique de delito grave, se le ponga en reclusion en un hospital, porque en tal caso, siendo el peligro á que se halla espuesta la sociedad, de trascendencia, debe el gobierno tomar á su cargo la seguridad y custodia del loco; pero cuando el delito perpetrado no sea de tal gravedad, ha creido la ley que podria conciliar la seguridad social con una reclusion mas suave y conveniente á los cuidados que el loco reclama y ha apelado á la reclusion doméstica encargada á su propia familia.

La duracion de la fianza debe ser la del estado de la demencia que la motiva; pero será bastante para relevarla, que se aplaque la locura de suerte que no ofrezca peligro social.

Respecto de su cuantía nada dice la ley: los tribunales deberán determinarla, atendiendo á la mayor ó menor vigilancia que se supone puede ejercer la persona que la dá y á las demas circunstancias especiales de la misma. Esta fianza no es obligatoria, puesto que la ley determina lo que debe hacerse en el caso de que no se presentare á darla pariente alguno, disposicion que se funda en que importando á la sociedad la guarda del loco, no ofreceria bastante seguridad una custodia impuesta forzosamente á un pariente que se negaba á darla.

La ley guarda asimismo silencio acerca de la clase de parientes á que debe confiarse la custodia del loco, por lo que parece que deberá recurrirse sobre este particular á las disposiciones del derecho sobre casos análogos; y estableciendo el derecho civil que en la curaduría de los dementes sean preferidos los parientes mas próximos, á estos deberá encargarse la guarda del loco, con tal que reunan las circunstancias necesarias para la seguridad del mismo; por lo que, si se presentaran varios parientes con este objeto, parece que deberá preferirse á aquel que diere mejor caucion de seguridad y custodia.

Los parientes que tengan bajo su guarda al loco, son responsables civilmente, segun el artículo 16 del Código, por los hechos que este ejecute, á no hacer constar que no hubo por su parte culpa ni negligencia, disposicion que examinaremos en el artículo RESPONSABILIDAD CIVIL. Asimismo, segun el art. 495, núm. 8 del Código, el encargado de la guarda de un loco ó demente, que le dejare vagar por sitios públicos sin la debida diligencia, incurre en la multa de medio á cuatro duros.

El artículo 88 del Código establece tambien otra caucion de custodia respecto de los parientes del loco. Dispone este artículo que el delincuente que despues del delito cayere en estado de locura ó demencia, si en la sentencia se le impusiere pena menor que la aflictiva y fuese declarado definitivamente loco, ó si se volviese demente hallándose cumpliendo la condena, podrá ser entregado por el tribunal á su familia bajo fianza de custodia y de tenerlo á disposicion del mismo tribunal, ó bien ser recluido en un hospital, segun este juzgare conveniente. Como se ve por la anterior disposicion, esta fianza es análoga á la precedente. Le son, pues, aplicables las observaciones que llevamos espuestas respecto de la clase de parientes que deben ser preferidos para prestarla; pero en el caso presente no podrán estos exigir que se confie el loco á su custodia, si el tribunal no lo conceptúa oportuno. En el caso de que se trata, el interés de la seguridad social prepondera sobre el que aconseja la mayor comodidad en la guarda del loco, y sobre el interés de afecto que pueden tener sus parientes en cuanto á su cuidado. Aquí la locura encubre á un delincuente, á un individuo que ha manifestado con la perpetracion de un hecho ilícito, que su inteligencia y su voluntad se hallaban viciadas y oscure-

cidas ó eran sobrado débiles para dejarse arrastrar por los impulsos de pasiones malévolas. El delincuente se halla, pues, bajo el fallo judicial, bajo la espada de la ley, que solo aguarda el momento de poder herir sin quebrantar los sagrados deberes que la humanidad y la razon prescriben. Y aun el mismo interés y afecto que mueve á los parientes para solicitar la custodia del loco, puede ser á veces causa de negativa por parte del juez, puesto que aquellos están interesados en que se prolongue la locura, ó en que se eluda el fallo de la ley por la fuga del loco ó por algun otro medio, para evitar la nota desfavorable que sobre ellos recae de aplicarse al delincuente la pena. Por esto el juez deberá ver para decretar la fianza de los parientes, si inspiran estos la confianza necesaria de que custodiarán como es debido al loco, y de que lo entregarán á la justicia en cuanto recobre la razon para que pueda ser castigado, y no quede burlada la ley social que reclama la espiacion del delincuente y el escarmiento de los demas.

CAUCION DAMNI INFECTI (DE DAÑO INMINENTE). Es la obligacion por la que uno asegura á su vecino que le indemnizará del daño que le irrogare una obra suya que amenaza causarlo; ó bien, la obligacion en que se constituye un propietario de una cosa afectada de un vicio peligroso, v. g., de un edificio que amenaza ruina, de indemnizar á su vecino del daño que por esta causa le provenga.

Esta caucion se halla establecida en el derecho romano, ocupándose de ella especialmente el tít. 2 del lib. 39 del Digesto que comprende 48 leyes. Segun ellas, cuando un edificio amenazaba ruina, podia acudir el vecino al pretor para que obligase al propietario á que le asegurase por medio de una estipulacion, que podia celebrar por sí mismo ó por fiadores, la reparacion del daño que pudiera irrogársele con la ruina del edificio: *damnum in factum*, *damnum nondùm factum*, ley 7, Dig. de *damno infecto*. Pero el vecino no podia obtener este resarcimiento cuando antes de haber solicitado la caucion, se arruinaba el edificio y le irrogaba daño, pues en este caso quedaba libre de toda indemnizacion el propietario, abandonando los escombros de su edificio en favor del vecino (leyes 4 y 7, tít. 2, lib. 39 del Dig.); pero aun despues de arruinado el edificio, establecian las leyes 8 y 9 del mismo título, que el vecino pudiera pedir la reparacion del daño, si no le fué posible preveer la ruina del edificio. Si el propietario se negaba á dar la caucion exigida, en el plazo que le mandaba el pretor, ponia este al vecino querellante en posesion de la casa, sin que por esto se entendiese que el propietario perdiese la posesion de la misma, ni que pudiera ser espulsado de ella; pero si aun insistia este en la negativa, el pretor, pasado cierto intervalo y con conocimiento de causa, daba á favor del vecino la órden de poseer, pudiendo entonces espulsar de la casa al propietario, y adquirir la propiedad del edificio por medio de la usucapion (ley 15, §. 33, y 18, §. 15, tít. 2, libro 39 del Dig.).

Las disposiciones espuestas del derecho romano han sido adoptadas en nuestras leyes de Partida. Segun la ley 10, tít. 32, Partida 3, la caucion mencionada se presta, cuando el edificio del vecino, ó por su mala construccion ó por su vejez, amenazase ruina que pudiera ocasionar daño. En este caso, el juez en vista de las informaciones testificales ó periciales que le aseguran del mal estado del edificio, requiere á su dueño para que lo demuela, si no es susceptible de reparacion, ó si lo fuere, lo repare, *dando buenos fiadores* á los vecinos de que *no les vendrá daño alguno*, esto es, de abonarles los daños y perjuicios que se les causaren, si se arruinase el edificio, antes de haberse reparado; indemnizacion que tendrá que verificar, en efecto, si el edificio se arruinase por su poca seguridad, mas no si la ruina dimana de causa de terremoto, rayo, huracan, aguacero ú otra semejante. Si el propietario se negase á dar esta fianza ó demorase la reparacion ó derribo del edificio, dispone la ley citada de Partida, que se dé á los vecinos querellantes su posesion, y si aquel permanece en su rebeldía, la propiedad hasta el tiempo que ellos tengan que repararlo

ó derribarlo por mandato del juez; pero esta disposicion, tomada de la ley romana arriba esp uesta, no tiene aplicacion en el dia, si no que se apremia al propietario para que repare ó derribe el edificio, y de no hacerlo, se le obliga á venderlo ó á darlo á censo para que otro lo verifique (ley 7 y la nota 4, título 19, lib. 3 de la Nov. Recop.).

Tampoco estará obligado el propietario á las resultas de su fianza, segun prescribe la ley 11, tit. 32, Part. 3, si el edificio se arruinase antes de haberse dado querella al juez para evitar el daño que amenazaba; pero no podrá llevarse el dueño del edificio la teja, madera ó ladrillo que cayó en la casa del vecino y dejar los ripios y la tierra, si no que deberá sacarlo todo ó dejarlo á beneficio del vecino.

Asimismo parece que debe tener tambien lugar la caucion de daño inminente, cuando se temiese que cayesen en una heredad los árboles de la colindante, no obstante que la ley 12, tit. 32, Part. 3, que trata de este caso, solo determina, que cerciorado el juez de que el árbol amenaza caerse, debe mandarlo cortar.

Acerca de las personas que pueden entablar la accion que dá motivo á la caucion de que tratamos y de los demas trámites de este procedimiento, véase el artículo **DENUNCIA DE OBRA VIEJA.**

Tiene tambien analogía con esta caucion la que está obligado á dar segun la ley 9, tit. 32, Part. 3, el que emprende una obra nueva, para cuya suspension promueve pleito otro que teme le resulte daño de continuarse, cuando el juez por no poder decidir el pleito en el término de tres meses, le dá facultad para continuar la obra bajo fianza. Esta fianza se reduce á responder de que el propietario que edifica, derribará la obra á su costa, si resultare que no tenia derecho para ejecutarla. Pero de este caso y otros análogos que mencionan nuestras leyes y los intérpretes, se tratará con mas estension en el artículo de esta ENCICLOPEDIA á que verdaderamente pertenecen, **DENUNCIA DE OBRA NUEVA.**

CAUCION DE DOLO. La obligacion en que se constituye el poseedor de una cosa que no es suya, cuando se teme que la pierda ó deteriore, de responder de toda mala intencion ó dolo, por la cual se perdiese ó menoscabase; ó bien, la seguridad que se dá de no proceder en un negocio con malicia.

Esta caucion fué establecida por derecho romano. Prestábase en multitud de casos, de que solo mencionaremos los principales. Cuando seguido litigio sobre restitucion de un objeto y consintiendo el demandado en entregarlo, habia motivos razonables para temer que lo hubiera viciado fraudulentamente, inutilizándolo en perjuicio del demandante, solicitaba este que el contrario le asegurase, por medio de una estipulacion, que no habia obrado con dolo y que repararia las consecuencias del mismo, si resultaren. Prescribíalo asi el juez, que en el caso de no prestarse el demandado á cumplir con lo que se le habia prescrito, pronunciaba sentencia, como si se hubiera negado á restituir el objeto que se le reclamaba; si accedia, quedaba absuelto; pero si despues resultaba que habia viciado por dolo la cosa restituida, era perseguido con una nueva accion que resultaba de la caucion de dolo (1). Obteníase tambien esta caucion contra el demandado á quien se perseguia por la accion *quod metus causa*, para obligarle á devolver lo que se le habia entregado por efecto de violencia (2): contra el acreedor que tenia prenda de su deudor, para que asegurase que no deterioraria el objeto en que consistia (3): contra el comprador que obligaba á su vendedor á recobrar la cosa vendida, por consecuencia de la accion redhibitoria (4); y finalmente contra el marido en la restitucion de los bienes dotales (5).

Por nuestro derecho, si bien no se halla reducida esta caucion á las fórmulas que por el romano, se admite y presta en casi todos los casos en que este la establecia. Véase

(1) §. 3, ley 7, tit. 8, lib. 4 del Dig.
(2) §. 5, ley 9, tit. 2, lib. 4 del Dig.
(3) Ley 15, tit. 7, lib. 3 del Dig.
(4) §. 1, ley 21, tit. 1, lib. 21 del Dig.
(5) §. 1, ley 25, tit. 3, lib. 24 del Dig.

CAUCION JUDICATUM SOLVI ó de pagar juzgado y sentenciado.

CAUCION FRUCTUARIA.

La seguridad que dá el usufructuario de que gozará de los bienes en que consiste el usufructo, á arbitrio de buen varon, y que los restituirá íntegros á quien correspondan cuando espire el usufructo. Esta obligacion se halla impuesta por la ley 20, tít. 31, Part. 3, cuyas palabras sobre este particular creemos oportuno trascribir por lo esplícitas que aparecen: «Pero aquel á quien fuere otorgado poder de esquilmar alguna destas cosas sobredichas, dévela esquilmar á buena fé, dando primeramente recabdo que la cosa en que há el usofruto non se pierda, nin se empeore por su culpa, nin por cobdicia quel mueva á esquilmarla mas de lo que conviene. E que cuando el finare ó se cumpliere en otra manera el tiempo á que la devia esquilmar, que la cosa sea tornada á aquel que otorgó el usofruto della, ó á quien él mandare, ó á sus herederos si él fuere finado.»

Esta fianza tiene por objeto evitar que el usufructuario abuse de los derechos que le corresponden ó que se esceda de sus facultades, quebrantando la voluntad de la persona que al dejar solamente el usufructo de una cosa, quiso circunscribirle dentro de ciertos límites, y que no perjudicase á sus verdaderos propietarios.

No debe exigirse la caucion fructuaria en aquellos casos en que, por las íntimas relaciones de parentesco ó por motivos de gratitud entre el usufructuario y el propietario, cese toda desconfianza ó temor del abuso espresado, ó cuando el usufructo recaiga en personas respecto de las cuales, aunque se hubiera escedido el usufructuario en sus facultades, no se entiende violentada la voluntad del que constituyó esta servidumbre, ni, por último, en los casos en que este espresó claramente su intencion de que no se prestara.

Asi, pues, no está el usufructuario obligado á prestar la caucion fructuaria en los casos siguientes:

1.° Cuando se concede el usufructo por la ley. No la presta, pues, el que, como padre, tiene el usufructo legal en los bienes adventicios de su hijo, porque desdeciria de las íntimas relaciones de afecto, autoridad y respeto que existen entre personas tan allegadas, y aun seria contra la misma índole de la patria potestad prestarse una caucion que tiene por objeto asegurar contra la desconfianza de un abuso ó de una mala gerencia (1). Por la misma razon tampoco tiene lugar la caucion respecto del cónyuge que goza del usufructo en los bienes del sobreviviente, como se dispone en algunas legislaciones ó fueros especiales.

2.° Cuando es el usufructuario el que hizo donacion de sus bienes, reservándose el usufructo de todos ó de parte de ellos, porque, ademas de que seria una ingratitud exigir esta caucion el donatario, quien le debe el beneficio de la donacion, no existe en este caso el peligro de que traspase el usufructuario los límites de la voluntad del que constituyó el usufructo, puesto que fué él mismo, ni que perjudique, propiamente hablando, á aquel que tiene la propiedad de los bienes usufructuados.

3.° Cuando el usufructo no ha de volver al propietario ó verdadero heredero del testador, ó del que lo constituyó, pues tampoco se presume quebrantada la voluntad de estos, porque va á parar el usufructo á personas estrañas, respecto de las cuales tenian iguales ó menores afectos que respecto del usufructuario.

4.° Cuando no se duda que el mismo usufructuario ó sus herederos han de adquirir la propiedad de los bienes, pues á nadie mas que á sí mismos perjudican por abusar del usufructo.

5.° Cuando es el fisco el usufructuario, porque no hay temor de que no pueda responder de los perjuicios que hubiese causado, puesto que al fisco se le reputa siempre idóneo para pagar los daños al propietario.

6.° Cuando el testador ó el que contituyó el usufructo remite ó dispensa al usufructuario de dicha caucion en el testamento ó en el contrato en que lo constituyó. Sin embargo, algunos autores, entre los que se

(1) Ley 5, tit. 17, Part. 4.

cuentan Molina, Castillo y Febrero, sostienen que no se puede remitir al usufructuario la fianza, si se le dejó el usufructo en última voluntad. Fúndanse en que debe evitarse que abusando de la remision, disipe los bienes, como que se le pone en ocasion de delinquir; en que no hay seguridad, si no hay caucion, de que el usufructuario conserve la propiedad de los bienes para el propietario y no se guarda la voluntad del testador. Pero ademas de que iguales razones militarian contra la remision de la fianza en el usufructo constituido por contrato, carecen de solidez, porque no es motivo suficiente para dejar de conceder una facultad ó no dispensar de un gravámen, el que pueda abusarse de esta concesion ó dispensa. La misma remision de la fianza por el testador, á favor del usufructuario, debe considerarse, ó bien como una seguridad de que este no abusará de aquel beneficio, puesto que revela la confianza que tiene el testador en que usará debidamente de su derecho, ó bien, segun dice Gutierrez, el reformador de Febrero, como una aprobacion del uso que, como dueño, puede hacer el usufructuario de los bienes en que consiste el usufructo, y entonces debe entenderse que el testador dejó la propiedad á otro para el caso que el usufructuario conservara aquellos en su poder hasta la muerte. Asi, pues, será válida la remision de la caucion fructuaria que haga el testador, cuando del abuso que pudiera resultar de ella no se perjudicasen las legítimas, ni se traspasaran las demas limitaciones que pone el derecho á la trasmision de los bienes por última voluntad.

La caucion fructuaria debe constituirse por medio de fiador; mas si el usufructuario no encontrase, por ser pobre, quien le fiase, podrá prestar la caucion juratoria de hacer el debido uso de los bienes, y restituirlos al tiempo que corresponda, si fuere de buena vida y costumbres; pero si fuere de mala conducta ó forastero, conviene poner en secuestro, depósito ó arriendo los bienes inmuebles en poder de persona abonada que los administre sin que sufran deterioro, y dar á rédito las sumas de dinero, entregando al usufructuario los frutos ó su precio y los arriendos.

Tambien el usuario está obligado á dar la caucion fructuaria de que usará de los bienes que se le dieron en uso, á arbitrio de buen varon, sin que por su culpa sufran daño ni deterioro (1).

CAUCION JUDICATUM SOLVI (DE PAGAR JUZGADO Y SENTENCIADO). Esta caucion es la obligacion en que uno se constituye de pagar lo juzgado y sentenciado contra el reo, si este no lo satisfaciere.

El orígen de esta caucion se encuentra en el derecho romano. Segun él, se exigia en la accion real al demandado cuando estaba en posesion del objeto que se reivindicaba, para que asegurase su restitucion ó el pago de su valor. Esta caucion tenia en el antiguo derecho tres objetos: 1.° satisfacer aquello en que consistiese la condena, si el demandado no restituia la cosa objeto del litigio, *de re judicatâ*; 2.° obligar al demandado á presentarse ante el juez y á permanecer en la instancia hasta el fin del pleito, de *re defendendâ*; 3.° impedir al demandado cometer dolo respecto del objeto litigioso, *de dolo malo* (2). Cuando el demandado no daba la caucion *judicatum solvi*, el demandante, si se avenia á darla, era puesto en posesion de la cosa litigiosa. Con mayor razon debia prestarla el demandado cuando era representado por otro, ya fuese que el litigio versara sobre accion real ó sobre accion personal, porque era un principio que nadie podia ser defendido por otro en una instancia, sin dar una caucion, *nemo alienæ rei sine satisdatione defensor idoneus intelligitur*. Por derecho nuevo, el demandado que se presentaba en nombre propio, no estaba obligado ni aun en la accion real á dar todas las garantías comprendidas en la caucion *judicatum solvi*; no tenia que prestar la caucion por el valor del litigio *pro litis æstimatione*, pero sí asegurar en todo caso que se presentaria en persona y permaneceria en la

(1) Ley 20, tit. 31, Part. 3.
(2) Ley 6, tit. 7, lib. 46 del Dig.

causa hasta el fin del proceso, para lo cual á veces bastaba la caucion juratoria. Cuando era representado por un simple defensor, debia dar al demandante la caucion *judicatum solvi*, y si presentándose en el juicio queria nombrar un procurador, debia constituirse, ya fuera en presencia del juez, ya estrajudicialmente, fiador de su mandatario *ad litem*, tomando sobre sí todos los empeños comprendidos en la caucion *judicatum solvi*, y dando ademas hipoteca sobre sus bienes, y la garantía de presentarse en persona á oir la sentencia, teniendo entonces esta el mismo efecto que si se hubiera dado contra el mandante. Si no se presentaba, quedaba el fiador obligado á pagar todo lo que contuviese la condena, á no ser que se hubiera interpuesto apelacion de la sentencia. El demandante no estaba sujeto á la *caucion judicatum solvi*, ni por derecho antiguo ni por el nuevo, cuando se presentaba por sí, y solo cuando comparecia en juicio por él un procurador debia este dar la caucion *de rato*, esto es, de que su principal ó mandante ratificaria la accion entablada. Véase **CAUCION DE RATO.**

Por nuestro derecho la caucion de pagar juzgado y sentenciado no abraza los estremos que la de *judicatum solvi* en el romano. Esta fianza ó caucion se presta tanto en los pleitos civiles como en las causas criminales, y en aquellos, ya versen sobre accion real, ya sobre accion personal. Préstase en los pleitos civiles por lo regular, cuando se manda á alguno que arraigue el juicio y no lo hace por ser poco abonado, para evitar que si se fuga, quede ilusoria la sentencia y el colitigante perjudicado. Dáse en las criminales, cuando solo merece el reo pena pecuniaria por ser leve el delito, mas no si mereciere pena corporal, porque nadie puede sufrirla por otro. Se obliga el fiador en los pleitos civiles á pagar todo lo que fuere juzgado y sentenciado contra el demandado en todas las instancias y tribunales, si este no lo satisfaciese, ya en su totalidad, ya en parte. En las causas criminales se obliga el fiador á pagar las penas pecuniarias y á la indemnizacion de daños y perjuicios ocasionados por el delito, á las costas procesales y gastos del juicio, en caso que no lo hiciese el fiado, en la misma forma que se acaba de esponer. Asi, pues, esta caucion no principia á producir efecto hasta que se ha finalizado y ejecutoriado el juicio.

Suscítase la duda sobre si se podrá sustituir á la fianza de pagar juzgado y sentenciado, cuando el reo no la encuentra, la constitucion de prenda ó hipoteca. Diferentes son las opiniones de los autores. Los que sostienen la negativa se fundan en que la prenda ó hipoteca no ofrece las garantías que la fianza, puesto que aquellas están limitadas á cantidad, y en esta es una suma indeterminada, y como tal puede cubrir mejor las responsabilidades que resulten del juicio; añaden ademas que estando tácitamente hipotecados á las resultas del juicio los bienes del reo, no se obtiene la ventaja de que estén asimismo sujetos los bienes del fiador. Pero á pesar de estas razones, siempre que se presuma fundadamente por las circunstancias del procesado, que no encontrará persona abonada que se constituya su fiador, y que por otra parte pueda constituirse prenda ó hipoteca que garantice suficientemente las responsabilidades pecuniarias que segun un cálculo prudencial pueden resultar del juicio ó proceso, parece que debe admitirse este medio supletorio para cubrirlas.

La fianza de pagar juzgado y sentenciado no espira por la muerte del demandado ó del reo, pues comprende la pena pecuniaria, la indemnizacion de daños y perjuicios causados por el delito, y las costas procesales y gastos del juicio que segun la sentencia definitiva arrojase el proceso.

No debe estenderse esta fianza, juntamente con la de estar á derecho y de cárcel segura, si no que deben limitarse los escribanos á autorizar solamente la que prescribiere el juez, pues asi está mandado en la ley 8, tít. 24, lib. 5 de la Nov. Recop., que dice: «Y mandamos que de aquí adelante no se dé lugar que los escribanos de la Audiencia estiendan las fianzas á mas de lo contenido en los autos que los jueces dieren; y si

Lorenzo Arrazola

no fuese en casos que por algunas justas causas convenga, no hagan que los presos dén fianzas para mas devolverlos á la cárcel, ó pagar lo juzgado.» Cualquier práctica introducida en contrario, es un abuso.

Los demas objetos comprendidos por derecho romano en la caucion *judicatum solvi*, se contienen, segun nuestras leyes, en la caucion *judicio sisti*, y en la de *dolo*. Por esto remitimos á nuestros lectores á los artículos correspondientes á estas dos cauciones, y asimismo al de la CAUCION DE RATO que tiene grande analogía con el presente. V. tambien ARRAIGAR EL JUICIO, FIANZA DE ARRAIGO, y el artículo siguiente.

CAUCION JUDICATUM SOLVI (PARA LOS ESTRANJEROS). En el artículo que precede nos hemos hecho cargo de la caucion *judicatum solvi* en su acepcion mas genérica, considerándola bajo el concepto de ser la garantía que dá el *reo ó demandado* para pagar lo que contra él fuese juzgado y sentenciado. En el presente nos concretaremos á tratar de ella en un sentido mas específico, pero sin duda alguna de mucha importancia: nos referimos á la *caucion* que deben prestar los *estranjeros*, cuando demandan á un regnícola, para asegurar el pago de las costas, daños y perjuicios del pleito, por si á ello fuesen condenados.

Antiguamente se deba á esta caucion el nombre de *cautio pro expensis*: en el dia, y principalmente entre nosotros, suele llamársele caucion ó fianza *de arraigo del juicio*. No desconocemos tampoco las cualidades que la distinguen de la de *judicatum solvi* de que antes nos hemos ocupado, siendo la mas capital la de que esta, por regla general, se presta por el reo ó demandado, al paso que aquella no se presta nunca si no por el demandante. Sin embargo, tratamos de ella bajo el epígrafe ó palabras con que se encabeza este artículo, porque bajo esta enunciativa es generalmente conocida en el foro; así la denominan casi todos los autores regnícolas y estranjeros, y no encontramos razon bastante para hacer variacion en este punto. En realidad por tal caucion se obliga el estranjero demandante á estar á las resultas del juicio y pagar juzgado y sentenciado, cuyas circunstancias están bien determinadas por las voces latinas *judicatum solvi* con que se especifica esta clase de caucion, aunque participe tambien de la naturaleza y objeto de la de *judicio sisti*.

Su importancia no será desconocida de ninguno de nuestros lectores, y mas si tienen en cuenta que no puede menos de ser hoy de aplicacion muy frecuente en la práctica. El vapor y la electricidad, esos grandes inventos que se han desarrollado en nuestros dias de una manera prodigiosa, casi han hecho desaparecer las distancias: lo que unido al espíritu especulador que distingue al presente siglo, ha contribuido á que se estrechen las relaciones de una nacion con otra, á que vaya desapareciendo el ódio y prevencion con que eran mirados los estranjeros, y á que se hayan aumentado estraordinariamente las transacciones mercantiles y de todo género entre individuos que pertenecen á naciones distintas y aun lejanas entre sí. De aquí el que hoy sea mas frecuente que nunca la comparecencia de los estranjeros ante nuestros tribunales á hacer uso de las acciones que les competen contra los naturales del pais, y al contrario, que estos se vean en la necesidad de acudir á los tribunales estranjeros para reclamar contra aquellos el cumplimiento de las obligaciones que han contraido. Es, por lo tanto, en el dia de uso muy frecuente la caucion de que se trata, y merece por su importancia que le dediquemos un artículo especial en la ENCICLOPEDIA.

Esta importancia ha subido de punto desde que se ha publicado la nueva *Ley de enjuiciamiento civil*, la cual en su artículo 238 dispone lo siguiente: «Si el demandante fuese estranjero, será tambien escepcion dilatoria la del arraigo del juicio, *en los casos* y *en la forma que en la nacion á que pertenezca se exigiere á los españoles.*» Los autores de esta ley no han tenido por conveniente establecer reglas fijas sobre esta materia, á pesar de que se hallan consignadas en casi todos los códigos estranjeros; y aceptando el principio de *reciprocidad* sancionado por el derecho de gentes, han estableci-

do que la caucion de arraigo (*judicatum solvi*) se exija á los estranjeros en los casos y en la forma que en la nacion á que pertenezcan se exigiere á los españoles. En el artículo correspondiente examinaremos la conveniencia de esta y de otras disposiciones análogas, que se fundan en el principio de *reciprocidad*: nos concretaremos ahora á examinar los casos y la forma en que en las naciones estranjeras se exige á los españoles la caucion *judicatum solvi*, á fin de que pueda hacerse la debida aplicacion del artículo antes citado de la nueva Ley de 5 de octubre de 1855. Esta novedad nos ha obligado á retirar é introducir las reformas convenientes en el presente artículo, que estaba para entrar en prensa cuando ha visto la luz pública la citada Ley.

No faltan autores que quieren derivar del derecho romano el orígen de esta caucion: lo encuentran en la *Novela* 112, *cap.* 2.°, la cual, entre las medidas que adopta *ad excludendas calumniosè moventium intentiones*, establece la caucion *pro expensis* ademas de la de *judicio sisti*, que el juez debia exigir *al actor* para responder de las resultas del juicio, cuyas dos cauciones vienen á ser equivalentes á la *de arraigo* que hoy debe prestar el estranjero demandante. *Et actis intervenientibus* (dice dicha Novela con referencia al actor), *fidejussorem idoneum periculo competentis officii præstiterit, confitentem quod* usque ad finem litis permaneat, *et suas intentiones aut per se, aut per legitimum procuratorem exerceat: et si postea fuerit approbatus injustè litem movisse*, sumtuum et expensarum nomine *decimam partem ejus quantitatis, quæ in libello continetur, pulsato restituat.* Mas como á primera vista se echa de ver, esta caucion tiene sus caractéres particulares, que la diferencian en mucho de la que segun la legislacion moderna debe exigirse al estranjero demandante. Aquella se prestaba por todos los actores ó demandantes, sin distincion de regnícolas y estranjeros; al paso que esta solo se exige al demandante que es estranjero: el objeto de aquella era *ad excludendas calumniosè moventium intentiones*, evitar que se promovieran pleitos injustos y aplicar la correccion merecida á los litigantes de mala fé; y el de esta es asegurar las resultas del juicio promovido por el estranjero, á quien seria muy fácil eludir la sentencia que contra él se dictare marchándose á su pais, en cuyo caso el demandado no podria indemnizarse de los perjuicios que se le hubiesen irrogado por el pleito promovido injustamente. De manera que puede decirse que, aunque la escepcion de arraigo del juicio tenga su fundamento en el derecho romano, en ese monumento de *la razon escrita*, ha sufrido, al pasar á las legislaciones modernas, modificaciones profundas que han alterado su carácter, en términos que han quedado hoy sin aplicacion las reglas trazadas respecto de la misma por las leyes romanas, pues se adaptaba á otras personas y á otras circunstancias la caucion *judicatum solvi* que dichas leyes sancionaron.

Ya hemos indicado que esta caucion se halla establecida como escepcion contra el estranjero demandante en casi todos los códigos modernos, y aceptada por la jurisprudencia de la mayor parte de las naciones. La uniformidad con que los legisladores y jurisconsultos de tantos Estados han mirado el principio en que se funda dicha escepcion, puede considerarse como la prueba mas concluyente de su justicia intrínseca. Si bien todo gobierno ilustrado debe proteger al estranjero que sin miras hostiles viene á residir entre nosotros, tambien debe tomar precauciones saludables para evitar que ese mismo estranjero cause perjuicios á los naturales del pais, promoviendo pleitos que podrán ser injustos, sin que antes asegure la indemnizacion de dichos perjuicios y el cumplimiento de la sentencia. Veamos, pues, lo que las legislaciones estranjeras, fundadas en este principio de conveniencia y de justicia, tienen establecido, para venir á parar á la aplicacion del art. 238 del nuevo Código de enjuiciamiento civil.

En *Inglaterra*, donde los fallos de los tribunales forman jurisprudencia con fuerza de ley, se halla sancionado por aquellos, que el demandante estranjero está obligado á prestar la caucion *judicatum solvi*, para res-

ponder de las costas y gastos del juicio (1): esceptúase, sin embargo, de esta obligacion segun la opinion mas seguida, el estranjero demandante que se encontrase de hecho ó hubiese fijado su domicilio en el reino, aunque sobre esto existen decisiones contrarias (2). Los *Estados-Unidos* de América se rigen por el mismo derecho que Inglaterra.

El Código civil de *Francia*, que ha servido de norma á los de tantas naciones, sancionando lo que la jurisprudencia de aquel pais tenia establecido, en su art. 16 ordena lo siguiente: «En cualquiera materia que no sea de comercio, el estranjero demandante estará obligado á dar caucion para el pago de las costas, daños y perjuicios que resulten del pleito, á no ser que posea en Francia bienes raices de valor suficiente para asegurar dicho pago.» Y el art. 166 del Código de procedimiento civil dice asi: «Todo estranjero que demandare, sea como principal ó por intervencion, deberá, si lo exigiere el demandado antes de oponer ninguna escepcion, afianzar que pagará las costas, daños y perjuicios en que pudiera ser condenado.» Dos escepciones se establecen por estas disposiciones: la primera es cuando se trata de asuntos mercantiles; y la segunda, cuando el demandante fuese un estranjero que poseyese en Francia bienes inmuebles bastantes para asegurar el pago de la condena que pudiera recaer contra él. La primera escepcion se funda sin duda en que importa demasiado al interés público la fácil espedicion de los negocios mercantiles, y por eso no debe rodeárseles de dificultades: y la segunda, en que teniendo el estranjero bienes inmuebles en Francia, bastantes para responder de las resultas del juicio, queda por este medio asegurado el cumplimiento de la sentencia, que es el objeto de la caucion. *Sciendum est possessores immobilium rerum satisdare non compelli*, dijo ya la ley 15, Dig. *Qui satisdare coguntur*. Pero téngase presente que esta caucion no puede exigirse, si no á peticion del demandado, quien debe deducirla desde luego, *á limine judicii*, antes de oponer ninguna otra escepcion, como lo dispone el Código de procedimiento civil.

Iguales disposiciones contienen los códigos civil y de procedimientos civiles de las *Dos Sicilias*: el art. 17 de aquel y el 260 de este, son una traduccion casi literal de los dos de los códigos franceses que acabamos de copiar.

El art. 15 del Código civil *polaco*, ordena lo mismo que el 16 antes copiado del francés, añadiendo despues de las palabras «daños y perjuicios» estas otras: «y de la privacion de ganancias;» y despues de «bienes raices» estas otras: «ó un establecimiento industrial;» adiciones que nos parecen muy conformes á la razon y á la justicia.

El Código *sardo*, en su art. 33 dispone tambien lo mismo que el francés; pero limitando espresamente su disposicion «al estranjero demandante que no tenga domicilio fijo en los Estados Sardos.» Esta limitacion es muy conforme al objeto de la caucion de que se trata, pues el estranjero que ha fijado su domicilio en el pais ante cuyos tribunales entabla su demanda, que tiene allí su casa, su establecimiento y quizá sus intereses, aleja de sí la presuncion que recae contra el transeunte de que con la ausencia ú ocultacion podrá eludir los efectos de la sentencia. Aun establece al final del artículo otra limitacion, tambien muy justa, como fundada en el principio de *reciprocidad*, en favor de los estranjeros en cuyo pais no se exija esta garantía ó caucion á los súbditos del rey de Cerdeña: «ó que no se exija á los súbditos del rey en el pais á que pertenezca el estranjero,» añade al fin del artículo, despues de la escepcion «á no ser que posea en los Estados Sardos bienes raices de valor suficiente para asegurar dicho pago.» Por los tratados de 21 de febrero y 3 de julio de 1817, 5 y 30 de enero de 1818, fué abolida espresamente la caucion *judicatum solvi* de que estamos tratando, entre los súbditos sardos y los de Módena, de Parma y

(1) Pueden verse dichas decisiones en el *Law Magazine*, vol. XIII, p. 452, n.° 10, sentencia del tribunal del Echiquier en el pleito de Alivon contra Furnival: vol XVI, p. 401, n.° 1, sentencia en el pleito de Youde contra Youde: vol. XVIII, p. 383, n.° 3, id. en el pleito del emperador del Brasil contra Bursens; y vol. XIX, p. 163, n.° 2, id. del rey de Grecia contra Wright.

(2) En el citado *Law Magazine*, vol. XXIV, p. 177, n.° 6, se encuentra una sentencia sobre este particular en favor del estranjero; y en id., vol. XIV, p. 167, n.° 9, se encuentra otra anterior decidiendo en sentido contrario.

Plasencia, de Toscana, y de Massa y Carrara. Como no existe convenio igual con España, es consiguiente que los naturales de uno y otro pais queden sujetos á las prescripciones generales.

El Reglamento judicial de los *Estados Pontificios*, en su artículo 796, dispone lo siguiente: «El estranjero que introduce una demanda, ó que reclama su intervencion en una demanda deducida contra una persona domiciliada en estos Estados, debe, si el demandado lo requiere, prestar caucion de pagar las costas, daños y perjuicios, á que pudiera ser condenado.» Como se ve, no se establecen las justas escepciones en favor de los asuntos mercantiles, y del estranjero que tenga en los Estados Pontificios bienes raices, como se hace en los códigos de casi todas las naciones que han adoptado la caucion *judicatum solvi*: tampoco se respeta el principio de la *reciprocidad*: el mandato es absoluto y comprende á todo estranjero que sea demandante principal ó coadyuvante, ó que reclame algo judicialmente contra cualquiera persona domiciliada en aquellos Estados.

Tambien el Código de procedimiento civil de los *Paises Bajos* consagra dos artículos á la materia de que venimos ocupándonos; pero mas riguroso que los demas, en la única escepcion que establece en favor del estranjero que posea bienes raices en aquel territorio, exige que dichos bienes se inscriban en el registro de hipotecas, y sin consentirlo, el demandante estranjero no quedará relevado de la caucion. Dicen asi los dos artículos á que antes hemos aludido: «Art. 152. Todo estranjero que demande como principal ó por intervencion, ó que sea parte coadyuvante en una instancia pendiente, está obligado, si el demandado lo requiere antes de oponer escepcion ó defensa, á prestar caucion para el pago de las costas, daños y perjuicios á que pudiera ser condenado. Por reclamar esta caucion, no se entenderá que la parte reconoce la competencia del juez.» «Art. 153. En la providencia en que se mande prestar la caucion, se fijará la cantidad de la misma. El demandante que depositare la cantidad señalada, ó que justificare que tiene bienes raices situados en los Paises Bajos, bastantes para responder de ella, quedará relevado de dar la caucion» con tal que en este último caso consienta una inscripcion hipotecaria sobre dichos bienes.»

El artículo 16 del Código civil de *Baden* dispone lo mismo que el del Código francés: mas esta disposicion ha sido algun tanto modificada por el de procedimiento civil, del cual trasladamos á continuacion los párrafos relativos á este asunto, porque su contesto nos dá á conocer de una manera bien esplícita la legislacion vigente sobre el particular en dicho pais; dicen asi: «§. 176. Todo estranjero, demandante principal ó por intervencion, ó coadyuvante de la accion de aquel, está obligado, si el demandado lo requiere, á dar caucion de pagar las costas, daños y perjuicios á que pudiera ser condenado, á no ser que posea en el gran ducado inmuebles, ú objetos que la ley reputa como inmuebles, de valor suficiente para responder de dicho pago.» «§. 183. Cesa esta obligacion: 1.° En los casos de quiebra ó cesion de bienes. 2.° Cuando es probable que la parte líquida del crédito alcanzará á cubrir las costas, daños y perjuicios. 3.° En caso de ejecucion de una sentencia ó escritura pública. 4.° En asuntos de comercio. 5.° Cuando el estranjero ha sido compelido judicialmente á poner su demanda.» «§. 184. No se puede exigir caucion de pagar el importe de la reconvencion, ó de los gastos que ella pueda ocasionar.»

El Código de procedimiento civil de *Ginebra* exige tambien la caucion de que se trata, ó un depósito equivalente, del estranjero demandante que no esté domiciliado en el Canton, pero respetando el principio de *reciprocidad* antes indicado, y relevando tambien de tal obligacion al que posea en el pais bienes suficientes. Véase, si no, el testo de los artículos 67 y 68, que dicen asi: «Artículo 67. Si el demandado lo requiere al principio del pleito, el demandante estranjero, no domiciliado en el Canton, estará obligado á dar caucion para el pago de las

costas y de los daños y perjuicios que resultaren del pleito, ó á depositar la cantidad que provisionalmente determinase el tribunal.» «Art. 68. El demandante estranjero estará dispensado de dar la caucion ó de hacer el depósito, si perteneciese á un Estado en el cual no se exigen estas precauciones del ginebrés demandante, ó si posee en el Canton bienes bastantes para asegurar el pago de dichas costas, daños y perjuicios.»

El párrafo 5.°, del capítulo 8.° del Código de procedimiento civil de *Baviera*, obligaba tanto al demandante como al demando á dar la caucion *de lo juzgado*; mas esta disposicion fué modificada por el número 1.°, párrafo 8.° de la ley de 22 de julio de 1819, en el mismo sentido en que están concebidas las demas legislaciones de Europa que se ocupan de esta materia. Dice asi dicha disposicion: «Núm. 1.° Todo estranjero que entable demanda contra un súbdito bávaro, y que no posea bienes raices en Baviera, está obligado, si el demandado lo requiere, á dar caucion de pagar los gastos del proceso; si se le opusiere reconvencion, la caucion deberá ser suficiente á cubrir el importe del principal, frutos, intereses, daños y perjuicios resultantes de dicha reconvencion; no viniendo obligado el demandado á contestar la demanda hasta tanto que se haya prestado dicha caucion. La obligacion de dar la caucion para pagar los gastos, cesa en los casos de quiebra ó de concurso, en materia de letras de cambio y cuando una parte del crédito resulta líquida; en cuyo caso quedará esta parte reservada para seguridad del demandado.»

En *Austria*, por el párrafo 406 de su Código de procedimiento civil, se impone la obligacion de prestar caucion á todo demandante, sin distincion de naturales ni estranjeros, que no posea en la provincia donde radica el pleito, bienes suficientes para responder de las costas y gastos del mismo; relevándose únicamente de esta caucion al demandante pobre que afirme bajo juramento no hallarse en estado de prestarla.

Tambien en *Prusia* se obliga á dar la caucion *judicatum solvi* á todo demandante, sea regnícola ó estranjero, siempre que lo requiera el demandado: asi lo dispone el párrafo 1.°, tít. 21, part. 1.ª de su Código de procedimiento civil: mas por el párrafo 2.° se esceptúan los negocios sumarios, y los que versan sobre alimentos, salarios, letras de cambio, ejecucion de sentencias, reintegro ó posesion de bienes, divorcio, los mercantiles celebrados en ferias y mercados y los de quiebras. Tambien están dispensados de dar caucion el fisco, las municipalidades, los establecimientos públicos, las corporaciones legalmente establecidas, y el demandante que posee bienes raices suyos ó de su muger, de valor suficiente para responder del pago. Ademas, dedica un párrafo especial á tratar de la caucion que debe dar el demandante estranjero, que dice asi: «§. 13. Si el demandante es estranjero, no puede el demandado negarse á contestar la demanda, á pretesto de que no se ha prestado la caucion, cuando aquella se apoya en escrituras públicas ó en otras pruebas de fácil adquisicion y que pueden ser producidas sin gastos considerables. Pero si la demanda del estranjero está basada en pretensiones vagas que no tienen apoyo en documentos fehacientes, de manera que puede temerse un procedimiento y unas pruebas costosas, debe dar la caucion ordenada por el juez, ó bien depositando la cantidad señalada, en dinero ó en títulos de crédito pagaderos en el reino, ó ya por medio de fianza de personas abonadas, ó dando prendas; sin que en ningun caso pueda admitirse la caucion juratoria. Si no puede ó no quiere dar la caucion de alguna de las maneras antedichas, el demandado no tendrá obligacion de contestar la demanda, y á su instancia se archivarán los autos. El estranjero que ha sido vencido en primera instancia, é interpone apelacion, debe tambien prestar caucion si el apelado lo requiere; y no puede la apelacion seguir adelante, hasta que el apelante haya cumplido este mandato judicial.»

Con arreglo al párrafo 16 del Código de procedimiento civil de *Hanóver*, tambien está obligado el estranjero, cuando sea demandante principal ó en reconvencion, á dar

la caucion para el pago de las costas y gastos del juicio, si el demandado regnícola lo requiere, á no ser que posea en el reino bienes raices suficientes para asegurar dicho pago.

Igual obligacion tiene el demandante estranjero en el *gran ducado de Hesse* con arreglo á la ley de 1742, siempre que el demandado lo requiera antes de contestar la demanda.

En los paises alemanes, que aun se rigen por el *derecho comun* en materia de procedimientos civiles, se obliga á todo demandante á prestar la caucion *judicatum solvi*, por los gastos del juicio y la reconvencion, admitiéndose casi las mismas escepciones que hemos reseñado respecto de Prusia. Siendo, por último, de advertir, que en la Confederacion Germánica los habitantes de un Estado no están dispensados de prestar la caucion cuando comparecen como actores ante los tribunales de cualquiera de los otros Estados confederados, pues para estos efectos se consideran como estranjeros.

En *Grecia*, por último, con arreglo á los artículos 78 y 79 del Código de procedimiento civil, tambien se obliga al demandante estranjero á que preste caucion, si el demandado lo requiere, escepto en los tres casos siguientes: 1.° Cuando aquel posee en Grecia bienes raices de valor suficiente para responder de las costas, daños y perjuicios del pleito, á que pudiera ser condenado. 2.° Cuando la parte del crédito, que haya sido reconocida, baste para cubrir dichas costas, daños y perjuicios. 3.° En asuntos de comercio ó de letras de cambio. En todo caso se deja siempre á salvo lo convenido con otras naciones en los tratados respectivos.

Este es el resultado de nuestras investigaciones y estudios sobre las legislaciones y códigos estranjeros que hemos podido adquirir, en la parte relativa á la caucion de arraigo del juicio ó *judicatum solvi*, de que tratamos en este artículo, cuyo conocimiento, como ya hemos indicado, es hoy de absoluta necesidad á nuestros letrados y tribunales, para poder aquellos pedir y estos conceder con conocimiento de causa, la escepcion de que habla el art. 238 de la nueva Ley de enjuiciamiento civil. Porque si la escepcion de *arraigo del juicio* ha de oponerse al demandante que sea estranjero, *en los casos y en la forma* que en la nacion á que pertenezca se exigiese á los españoles, es evidente, que sin tener un exacto conocimiento de esos casos y esa forma, sin saber lo que en cada una de las demas naciones se hace con los españoles que se ven obligados á demandar á los regnícolas ante sus tribunales, no puede determinarse lo que en cada caso particular tendremos derecho á exigir del estranjero demandante.

Antes de desenvolver la doctrina que se desprende de la nueva disposicion, debemos indicar que hasta ahora en España no se conocia disposicion alguna que espresamente exigiese de los estranjeros la caucion *judicatum solvi*. Cuando estos comparecian como actores ante nuestros tribunales, eran tratados con las mismas consideraciones que los naturales del pais: se les administraba justicia sin restricciones; y solo en casos estraordinarios, y por las mismas razones que á los regnícolas, hubiera podido exigírseles el arraigo del juicio. Pero no era justo que se les tratase con esta distincion, cuando á los españoles no se les guardasen iguales consideraciones en los tribunales del pais á que aquellos pertenecian; y por esta razon sin duda, en el proyecto de Código civil publicado en 1851, se establece (arts. 30 y 32), que «el estranjero demandante en España debe afianzar el pago de lo que fuere juzgado y sentenciado, á no ser que posea en España bienes inmuebles, en cantidad suficiente,... sin perjuicio del principio de reciprocidad consignado en el art. 26,» segun el cual, «los estranjeros gozarán en España de los mismos derechos civiles que gocen en su pais los españoles, salvo lo dispuesto ó que se dispusiere por los Tratados y leyes especiales.» En este proyecto se consignaron principios justos y sábios, en armonía con las demas legislaciones de Europa, que no han podido tener aplicacion porque no han llegado á pasar de proyecto, aunque bien mira-

das las cosas, debieran seguirse por estar fundados en el derecho de gentes. Quedaba el mismo vacío que antes, y para llenarlo se ha aprovechado la primera ocasion oportuna, que ha sido la de la sancion de la Ley de enjuiciamiento civil.

Esta, como ya hemos visto, no establece principios ó reglas especiales, que sin duda sus entendidos autores habrán considerado de la competencia del Código civil, y aceptando el principio de *reciprocidad* sancionado por el derecho de gentes, se ha concretado á mandar que si el demandante fuese estranjero, será tambien escepcion dilatoria la del arraigo del juicio, en los casos y en la forma que en la nacion á que pertenezca se exigiere á los españoles. Con esto á nadie se ofende: no se lastiman derechos de ningun género: nadie puede quejarse. Nuestros tribunales tratarán al estranjero como los de su pais traten á los españoles: si en ellos se exige á estos, cuando se presentan como demandantes, la caucion para pagar lo juzgado y sentenciado, en el mismo caso la exigirán al estranjero los jueces españoles: si se les releva de esta obligacion por poseer en el pais bienes inmuebles ó por otra cualquier causa, lo mismo se hará en España: si se les obliga á consentir una inscripcion hipotecaria sobre dichos bienes, como sucede en los Paises Bajos, tambien en España se tomará razon en el registro de hipotecas de la responsabilidad á que quedan afectos los bienes raices del estranjero demandante: si en el pais á que este pertenezca, se admite libremente ante sus tribunales al español, sin exigirle garantía de ningun género para asegurar las resultas del juicio que entable, la misma conducta observarán los jueces españoles con aquel estranjero, por mas que el demandado reclamase en contrario. En esto consiste la reciprocidad, y esto es lo que quiere decir y lo que ha sancionado el artículo 238 de la nueva Ley de enjuiciamiento civil. En cada caso, pues, habrá de consultarse la legislacion ó jurisprudencia del pais á que pertenezca el estranjero demandante, y hacerse lo mismo que allí se practique. Por la reseña que antes hemos hecho de la legislacion estranjera, se ve que en muchas naciones está organizada esta materia y sujeta á reglas claras y sencillas, que respectivamente deberán ser observadas y guardadas por nuestros jueces y tribunales en los casos que ocurran; y respecto á los naturales del pais en que nada haya sancionado la ley ni determinado la jurisprudencia, se estará á las prescripciones generales del derecho de gentes.

Este tiene admitido como regla general que se obligue al demandante que sea estranjero á prestar la caucion *judicatum solvi*, con el objeto de asegurar al demandado el reintegro de las costas, daños y perjuicios que se le sigan del pleito, en el caso de que aquel lo abandonase, ó que por haberlo promovido con temeridad fuese condenado á su pago. De donde se sigue, que esta caucion debe prestarse al principio del pleito, *in limine litis*; que sin que se llene este requisito, el demandado no está obligado á contestar la demanda: que aquella debe ser proporcionada al objeto para que se presta, esto es, en cantidad suficiente, á juicio del juez, para cubrir las indicadas costas, daños y perjuicios: que si el demandante estranjero apelase del fallo de primera instancia, deberá aumentar el valor de la caucion por los gastos de la segunda, si la que tuviese prestada no fuese suficiente á cubrirlos; y que dicha caucion no debe exigirse del estranjero naturalizado, ni del que haya adquirido carta de vecindad ó haya fijado su residencia en el pais donde interpone su demanda, ni del que posea en el mismo bienes raices ó inmuebles en cantidad suficiente á cubrir dicho pago, pues en estos casos está asegurado el objeto para que se exige la caucion. Tampoco debe prestarla el estranjero que comparezca ante los tribunales como demandado, porque en este caso no hace mas que emplear el medio natural de la defensa, que á nadie puede negarse, ni es justo poner obstáculos para el ejercicio de este derecho. Todo esto es lo que aconseja la razon natural, y lo que se halla admitido por el derecho de gentes; y estas reglas se seguirán con el demandante estranjero cuando las leyes de su pais no ten-

gan establecido otra cosa espresamente, salvo el caso de que ninguna garantía exijan sus tribunales al español demandante.

Nada dice el artículo citado del nuevo Código de enjuiciamiento, acerca del caso en que hubiese tratados especiales con la nacion á que pertenezca el estranjero demandante. En tal caso no habria mas que cumplir lo dispuesto en esos tratados, que son pactos solemnes que deben respetarse mas, si cabe, que los contratos bilaterales. No conocemos, ni creemos que haya *Tratado* alguno celebrado por la España con otra nacion que contenga estipulaciones espresas sobre esta materia; en muchos de ellos, como en los de paz y amistad celebrados desde 1836 hasta el dia con las repúblicas Mejicana, de Chile, Ecuador, Venezuela, Dominicana y otras que se han formado de las que fueron en otro tiempo posesiones españolas de América, y en el que en 1795 se estipuló con los Estados-Unidos, se halla consignado que los habitantes de los territorios de una y otra parte respectivamente, serán admitidos en los tribunales de justicia de la otra parte, y les será permitido entablar sus pleitos: pero nada se determina sobre la forma en que han de hacer uso de este derecho.

Viniendo ahora á la esposicion del artículo 238 de la Ley de enjuiciamiento civil, diremos, que segun él, la caucion *judicatum solvi* ó de arraigo del juicio, solo puede exigirse del estranjero que sea *demandante*, y de ningun modo del que sea demandado. La inclusion espresa de aquel comprende, á no dudarlo, la esclusion de este; lo que es ademas conforme á la doctrina que dejamos espuesta, y á lo que generalmente se halla establecido por la legislacion estranjera. Por *demandante* deberá entenderse no solo el que lo sea principal, si que tambien el que comparezca en un pleito como coadyuvante de la accion de aquel ó como tercer opositor; en uno y otro caso se constituye en verdadero demandante, y por lo tanto vendrá obligado á prestar la caucion. No asi cuando al contestar la demanda proponga *reconvencion*, pues por esta circunstancia no pierde el carácter de demandado, y si hace uso de tal remedio que la ley le concede, no es atacando voluntariamente, si no defendiéndose del ataque del actor. Lo mismo decimos del estranjero demandado que interpusiese apelacion del fallo de primera instancia, pues aunque en la segunda se constituye en actor ó reclamante, no por esto pierde el carácter de demandado en el pleito; y ademas, debiendo pedirse esta caucion por vía de escepcion dilatoria, las cuales solo tienen cabida en la primera instancia, creemos que no puede reclamarse en la segunda, la que provoca el demandado ejercitando el derecho natural de la defensa.

Nada dice la ley respecto de los estranjeros que hayan adquirido carta de naturaleza ó de vecindad, ni tampoco respecto del que posea en el pais bienes inmuebles. Nuestra opinion es, que aquellos no están obligados á prestar la caucion *judicatum solvi*, en razon á que el estranjero que ha obtenido carta de naturaleza es considerado y reputado como español, y el que la haya adquirido de vecindad está sujeto á las mismas leyes y tribunales que los naturales del pais, y goza de los mismos derechos que estos en cuanto á la administracion de justicia (véase ESTRANJERO). No opinamos del mismo modo en cuanto á los que posean en el pais bienes inmuebles: la ley no los esceptúa, y de consiguiente vendrán obligados á prestar la caucion, salvo el caso de que en su pais estén esceptuados de prestarla los españoles que se hallen en idénticas circunstancias. Podrán, sí, arraigar el juicio obligando ó hipotecando especialmente á sus resultas los indicados bienes.

Cuando el demandado sea estranjero, ¿podrá exigir del demandante tambien estranjero la caucion de lo juzgado? De las palabras de la misma ley se infiere que esta escepcion está concedida solamente en favor de los españoles demandados por un estranjero, y como un privilegio de nacionalidad: por lo tanto, creemos que no podrá tener lugar cuando el pleito verse entre estranjeros, á no ser que el demandado hubiese adquirido carta de naturaleza ó de vecindad en España, pues entonces militan en su favor las

razones indicadas en el párrafo anterior.

El arraigo del juicio, ó sea la caucion *judicatum solvi*, no puede decretarse de oficio. Solo el demandado tiene derecho á reclamarla como beneficio introducido en su favor, que, por lo tanto, podrá renunciar cuando así le parezca. Se entenderá que lo renuncia por el hecho de contestar la demanda sin haber hecho la reclamacion. La Ley la califica con justicia de *escepcion dilatoria*, y para proponer las escepciones de esta clase solo concede el plazo improrogable de seis dias, contados desde el siguiente al de la notificacion de la providencia en que se mandaren entregar los autos para contestar la demanda, cuyo término trascurrido, deberán alegarse contestando, y no producirán el efecto de suspender el curso de la demanda (1). De consiguiente, si el demandado deja pasar estos plazos; si contesta la demanda sin haber hecho uso de la escepcion, ya no hay términos hábiles para utilizarla, y se considerará como perdido ó renunciado su derecho. Los trámites que debe seguir esta reclamacion son los mismos que han sido establecidos para las escepciones dilatorias, y que podrán verse en el artículo **ESCEPCION DILATORIA.**

Para completar el presente con la resolucion de las dudas racionales y fundadas á que, en nuestro concepto, podrá dar lugar la materia de que estamos tratando, nueva en el foro español y que no empezará á regir hasta el dia 1.° del año próximo de 1856, réstanos solo examinar, si la caucion *judicatum solvi*, ó el arraigo del juicio podrá exigirse al demandante estranjero en el juicio ejecutivo, ó en cualquiera otro que no sea el ordinario. Creemos que no; y para opinar así nos fundamos en que, si la intencion del legislador hubiera sido hacer estensiva esta escepcion á todos los juicios, la hubiera incluido en el tít. 1.°, de la parte 1.ª de la Ley, que trata de las *disposiciones generales* á todos ellos, ó lo hubiera mandado espresamente en otra parte: no conteniendo la ley este mandato, y estando colocado el art. 238, que autoriza dicha escepcion, en el tít. 7, que trata del *juicio ordinario*, parece indudable que solo en este juicio debe tener aplicacion. Ademas, la autenticidad y fuerza de los documentos en que se apoya una ejecucion, y la naturaleza sumaria de este y de los otros juicios fuera del ordinario, rechazan naturalmente la escepcion de que se trata. Pero si estos juicios llegasen á hacerse ordinarios, entonces ya tendrá el demandado espedito su derecho para reclamar del demandante estranjero el arraigo del juicio, ó la caucion *judicatum solvi*. Véase **FIANZA DE ARRAIGO.**

CAUCION JUDICIO SISTI

(**DE PRESENTARSE EN JUICIO Y DE ESTAR A DERECHO**). La obligacion que uno contrae, ó la seguridad que dá ante el juez de que el reó ó demandado comparecerá á juicio siempre que sea llamado para evacuar cualquiera diligencia ó acto que se decrete en el seguimiento del proceso, y de que no usará de dolo.

La caucion *judicio sisti* trae su orígen de la introducida por el sistema formulario de los romanos con el nombre de *vadimonium*. Esta se prestaba por el demandado que habia obtenido un plazo para reflexionar sobre la pretension del demandante, por no haber negado ni reconocido su accion: por ella se obligaba á presentarse ante el magistrado á la espiracion del término concedido, para contestar á la demanda. El *vadimonium* no siempre se prestaba por medio de fiador, si no que á veces bastaba la simple promesa personal de presentarse en juicio por parte del demandado, en cuyo caso se llamaba *purum*, es decir, *sine satisdatione*. Si ambas partes comparecian ante el juez en el dia prescrito, se seguia la causa ó el pleito: si faltaba el demandado, decaia en su derecho, *causâ cadebat*, si bien obtenia restitucion fácilmente. Cuando no comparecia el demandado, podia el demandante proceder *ex stipulatu*, ya contra aquel, si era *purum* el *vadimonium*, ya contra la caucion, si no lo era, para que se aplicase la pena estipulada en el *vadimonium*. Mas si el demandante habia obtenido una indemnizacion á conse-

(1) Art. 239 de la Ley de enjuiciamiento civil.

cuencia de la accion *ex stipulatu*, ya no tenia derecho para intentar la accion principal. Como este *vadimonium* ó caucion aseguraba la presentacion del demandado ante el juez para la contestacion del pleito, se halla mencionado á veces en los testos del cuerpo del derecho civil con el nombre de *cautio judicio sistendi causâ*. Asi es que en un principio la caucion *judicio sisti* no aseguraba la presentacion del demandado ante el magistrado, si no hasta el momento de la contestacion á la demanda; pero en tiempo de Justiniano, confundidos ya el *jus* y el *judicium* y reuniendo el magistrado este carácter y el de juez, abrazó la caucion todo el juicio. Por esto dándose el *vadimonium* tanto en la accion real como en la personal, la caucion *judicio sisti* se prestaba en ambas clases de acciones. Esta caucion formaba, segun derecho romano, uno de los tres objetos ó miembros que se comprendian en la caucion *judicatum solvi*, por lo que pueden verse en el artículo que antecede, los casos en que habia obligacion de darla y demas particulares prescritos sobre ella por el derecho romano.

Segun nuestras leyes de Partida y recopiladas, la caucion ó fianza de estar á derecho, á que antiguamente se llamaba de la *haz*, ya porque se constituia ante el juez y el escribano de la causa, ó bien ante otro escribano por órden del juez, ya porque con ella se *hacia frente* á la obligacion del reo ó demandado, tiene lugar tanto en los pleitos civiles como en las causas criminales.

Respecto de los pleitos civiles, dispone la ley 36, tít. 11, Part. 5, que el que prometiere en juicio, bajo cierta pena, que hará comparecer y estar á derecho al demandado en el plazo que se marque, no incurre en la pena aunque no lo hiciere venir en dicho plazo, con tal que lo presente en los dos, tres ó cinco dias siguientes, ó mas, al arbitrio del juez, pero por esta próroga no ha de seguirse al demandante perjuicio en su derecho, antes al contrario podrá usar de él como si lo hubiese hecho en el primer término. Y segun la ley 37 no incurrirá tampoco en la pena el fiador cuando no hubiese podido hacer que comparezca en juicio el demandado por algun impedimento legítimo, como por enfermedad, avenidas de rios y otros semejantes, debiéndolo traer en cuanto cese el impedimento.

En cuanto á las causas criminales se halla dispuesto que el que se constituyere fiador por el reo ante el juez, obligándose bajo cierta pena á traerlo á juicio para dia señalado, debe hacerle estar á derecho para aquel dia. Mas si no lo pudiese encontrar, tiene otro plazo igual al que se le concedió primeramente, con tal que no esceda de seis meses, y si no le pudiese hallar, ó no le trajere á juicio hasta cumplido el año, debe pagar la pena á que se obligó en la fianza (1).

El que se constituye fiador del modo que se acaba de espresar, puede en cuanto pasare el primer plazo, hasta que se termine el segundo, defender al reo en juicio, si quisiere, sobre aquello porque fué acusado ó emplazado; pero no podrá abandonar la defensa hasta que termine el pleito, aunque muriese entre tanto el fiado. Si este resultare sin culpa, queda el fiador libre de la fianza; mas si hubiese culpa, debe pagar el fiador á la otra parte la pena á que se obligó con todos los daños y perjuicios que se le causaron. Y si el emplazamiento versare sobre obligacion de dar ó hacer alguna cosa, deberá hacerla ó pagarla el fiador con los daños y perjuicios. Y cumpliendo de esta suerte, se librará de la pena á que se habia obligado, puesto que defendió al fiado en juicio hasta la sentencia (2). Si este muriese antes de cumplirse el primer plazo concedido para traerle á juicio, no está obligado á pagar el fiador la pena á que se obligó; pero sí deberá pagarla cuando aquel muriese despues del primer plazo (3).

Con arreglo tambien á las leyes de Partida, si el fiador se obligó solamente á traer á juicio al fiado á dia cierto, pero no á pagar pena, y no lo trajese en aquel *plazo*, puede el juez condenarle en la pena que

(1) Ley 17, tít. 12, Part. 5.
(2) Ley 18, tít. 12, Part. 5.
(3) Ley 19, tít. 12, Part. 5.

fuere de costumbre en el lugar, y en su defecto, en una pecuniaria: mas si averiguare que el fiador procedió con engaño, por no querer traer á juicio al fiado, pudiendo, debe imponerle pena mayor (1).

El fiador que no señaló plazo para traer al fiado á juicio, queda libre si el actor no le pide que lo traiga en el término de dos meses, á no recaer la fianza sobre pleito que perteneciese al rey ó á comun de algun concejo ó que se hubiese hecho escritura pública, pues entonces dura la fianza por tres años; de suerte que si no se pide al fiador que traiga á juicio al fiado en este plazo, queda libre de la fianza, sin que pueda apremiársele á que cumpla la obligacion que en ella contrajo.

La clase de pena que debe pagar el fiador que se obligó á traer á otro á juicio ha de ser pecuniaria, y nunca corporal, aunque la mereciese el fiado, porque nadie puede constituirse corporalmente fiador de otro, ni á nadie puede imponerse pena corporal por delito que no cometió. En cuanto á la cuantía de esta pena, debe regularse por el juez de modo que esceda el interés que tiene el fiador en no perderla, al del procesado en no comparecer, para evitar de esta suerte que se burlen los procedimientos judiciales (2).

Esta pena ó el derecho de hacerla efectiva, se prescribe cuando no ha sido pedida, dentro de un año, contado desde el dia en que se impuso (3).

La fianza espira por la muerte del fiado y por presentarlo el fiador ante el juez ó tribunal, pues cumplido su objeto, debe quedar cancelada.

Siendo el objeto de la fianza de estar á derecho que el reo no falte al juicio, y dejando de comparecer ó de asistir á juicio, indudablemente el reo que debiendo presentarse en la cárcel se fuga ú oculta, se ha creido por la generalidad de los autores que en la caucion de estar á derecho se halla comprendida la fianza carcelera ó de cárcel segura, ó bien las han identificado aplicando al fiador de cárcel segura ó carcelero comentariense las disposiciones de nuestras leyes que quedan espuestas. No puede negarse que hay en efecto entre ambas fianzas esta analogía, y que son aplicables á las dos las disposiciones enunciadas; pero no por esto deben confundirse de tal manera que se deje de advertir, que la fianza de cárcel segura tiene por único y especial objeto presentar al reo en la cárcel, y que el de la de estar á derecho es mas general, pues que consiste en presentar en juicio al reo ó demandado siempre que fuere llamado para continuar el curso del procedimiento; que aquella no tiene lugar si no en los casos en que el reo puede ser encarcelado, y esta puede versar sobre actos agenos ó independientes de la encarcelacion; que aquella no se presta si no en las causas criminales, y esta se presta tambien en las civiles. Mas como quiera que puede hallarse comprendida la fianza de cárcel segura en la de estar á derecho, creemos oportuno esponer en este lugar las disposiciones generales sobre la primera, remitiendo para los demas pormenores y consideraciones á que dá lugar, al artículo **FIANZA CARCELERA O DE CARCEL SEGURA.**

La fianza carcelera es la obligacion que uno contrae de hacer que se presente ó vuelva á la cárcel el procesado á quien se le puso ó dejó en libertad, siempre que el juez lo estime conveniente. Llámase este fiador carcelero comentariense, porque toma á su cargo la custodia del reo, obligándose á presentarlo en la cárcel en el término legal ó en el que prefije el juez, ó siempre que se le mande, bajo la pena, si no lo presentare, á que él se obligue, ó fuere costumbre del lugar, ó que se le imponga como tal carcelero.

Segun nuestras leyes de Partida (1), esta fianza se admitia cuando el reo no era merecedor de pena de muerte ú otra grave por el delito que cometió. El reglamento provisional para la administracion de justicia pu-

(1) Leyes 19, tit. 12, Part. 5 y 10, tit. 29, Part. 7.
(2) Ley 10, tit. 29, Part. 7.
(3) Ley 1, tit. 11, lib. 10 de la Novis. Rec.

(1) Leyes 24, tit. 18, Part. 3: 16, tit. 1 y 10, tit. 22, Part. 7.

blicado en 1835 (1) vino á adoptar tambien esta regla, disponiendo, que en cualquier estado de la causa en que, aunque no resulte la inocencia del procesado, aparezca que no es reo de pena corporal, debe serle concedida la libertad bajo fianza ó caucion suficiente.

La ley provisional para la aplicacion del Código penal de 1848, reformado en 1850, ordena (2) que se conceda la libertad de oficio bajo las fianzas que prescribe la regla 34 de la misma, en los casos previstos en la regla 25.

Y en los delitos á que el Código penal señale prision correccional ó presidio de igual clase, al prudente arbitrio del juez y segun las circunstancias del hecho.

Pero no se concede la libertad bajo fianza aun en estos casos en los delitos de robo, hurto y estafa, en los atentados y desacatos contra la autoridad, y en los de lesiones graves y menos graves, mientras no resulte la sanidad del ofendido (3). La fianza que se requiere en los casos espuestos no es la carcelera ó de cárcel segura: es una fianza, bien en metálico, importante de 100 á 500 duros, depositados en el Banco Español de San Fernando, ó bien en fincas, cuyo valor importe de 500 á 2,000 duros, bajo la responsabilidad del escribano que otorgue la escritura.

Ultimamente, en real decreto de 30 de setiembre de 1853, se han prescrito reglas precisas y circunstanciadas sobre los casos en que debe darse la fianza carcelera. Segun él no pueden decretarse autos de prision por los jueces y tribunales en las causas en que se persiga delito que merezca pena inferior á los de presidio, prision y confinamiento mayores, segun el órden establecido en el artículo 24 del Código penal; y asimismo, en las delitos de falsificacion de que tratan los artículos 226 y 227 del propio Código, cualquiera que sea la penalidad que les corresponda, con tal que el hecho no haya tenido un objeto de lucro ni ocasionado perjuicio á tercero (4). Mas en todas las causas por delitos de penalidad superior á la de arresto mayor, se mandará que el procesado dé la fianza prevenida en la ley provisional para la aplicacion del Código penal, y de cárcel segura si fuere notoriamente pobre, y si estos procesados no hallaren en el acto de ser requeridos las fianzas convenientes, deben ser reducidos preventivamente á prision, de la que saldrán luego que las presenten (1).

Pero se esceptúan de las disposiciones espuestas y son constituidos en prision, desde luego en los casos en que asi proceda segun la ley: 1.° los reos de robo, hurto, estafa, vagancia, atentado de cualquiera clase contra la autoridad y desacato grave á la misma; 2.° los reos de lesiones, calificadas de peligrosas, ínterin no desaparezca completamente el peligro (2).

La fianza consistente en metálico ó fincas prestada por un tercero, solo es responsable á las resultas del juicio en el caso de fuga ó ausencia del procesado (3).

En las causas sobre delitos á que corresponda pena de arresto mayor ú otra inferior, cometidos por personas notoriamente sospechosas ó sin arraigo, familia ó establecimiento fijo, pueden exigir los jueces y tribunales que los reos se les presenten periódicamente, ó decretar cualquiera otro género de medidas de inspeccion y vigilancia para evitar su ausencia; mas si los reos incurrieren en alguna infraccion, puede decretarse su prision, ó que presten la fianza (4).

De las disposiciones espuestas resulta que en el dia la fianza de cárcel segura puede darse por el procesado que fuere notoriamente pobre y que hubiese incurrido en delito que no consistiendo en robo, hurto, estafa, vagancia, atentado ó desacato grave contra la autoridad, y lesiones peligrosas, sea castigado con pena superior á la de arresto mayor é inferior á la de prision, presidio y confinamiento mayores, ó en delito de falsificacion á que se refieren los arts. 226 y 227 del Código penal, ó por los procesados notoriamente sos-

(1) Art. 11.
(2) Reglas 25, 34 y 36.
(3) Regla 35.
(4) Art. 1.°

(1) Art. 2 y 4.
(2) Art. 5.
(3) Art. 5.
(4) Art. 7.

pechosos ó sin arraigo, familia ni establecimiento fijo, que hubiesen cometido delitos de penalidad inferior á la de arresto mayor y que infringieren las medidas que tomase el juez para evitar su ausencia.

Los procesados en causas sobre delitos á que corresponda pena de arresto mayor ú otra inferior que no tuvieren contra sí las circunstancias desfavorables que se acaban de indicar, quedan en libertad sin necesidad de dar fianza alguna, y en su consecuencia, ni la de cárcel segura.

El fiador que ha de prestar la fianza de cárcel segura debe ser persona de probidad y de arraigo; por lo que, la ley considera fiador suficiente para este efecto, á todo español de buena conducta y avecindado dentro del territorio del tribunal ó juzgado, que esté en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos y venga pagando con un año de anterioridad una contribucion directa de cien reales anuales sobre bienes inmuebles de su propiedad personal, ó 200 por razon de subsidio (1).

La presentacion de la fianza debe hacerse á los tribunales para obtener la libertad, pues sin ella no pueden estender el correspondiente mandamiento de soltura (2). Véase **FIANZA CARCELERA.**

CAUCION JURATORIA. La promesa ú obligacion que hace con juramento una persona de cumplir y ejecutar alguna cosa, ya sea voluntariamente ó por mandato judicial. Esta caucion adquiere su fuerza por la promesa y juramento, y aunque no se asegura con prendas ni con fianza, produce el mismo efecto que estas en cuanto á la obligacion de cumplir lo que se promete. Préstase en los negocios judiciales y estrajudiciales. En estos para asegurar el pago de lo que se debe cuando se llegare á mejor fortuna, ó para garantir la fidelidad en la administracion de bienes, y en otros casos análogos. En aquellos, para presentarse en el tribunal el procesado siempre que fuere requerido, ó para alguna diligencia, ó para comparecer en la cárcel, y aun en este caso suele estenderse á no variar de domicilio sin permiso del juez, sujetándose á cumplir el fallo definitivo que recaiga. En general se presta cuando la cosa sobre que recae es de corta entidad, y cuando el demandante ó demandado no encuentra quien le fie y no tiene prendas para la seguridad de lo que se le pide, lo cual deberá asegurarse al prestar la caucion al mismo tiempo que el cumplimiento de lo que se promete (1).

Cuando se presta en los negocios judiciales contenciosos, no se celebra por lo comun escritura, si no que se estiende *apud acta*, á continuacion de las mismas actuaciones judiciales. Para concederla subsidiariamente en defecto de prendas ó fianza deberá tener el juez presente la pobreza ó escasez de bienes del que trata de presentarla, su religiosidad, único garante de esta clase de obligaciones, como que se apoyan en la santidad del juramento, la levedad del delito ó poca importancia del acto sobre que recae, y demas circunstancias análogas; pues solo en tales casos se puede y debe conciliar con el espíritu y objeto de la ley, y de la equidad, que es la justicia natural, el interés del procesado.

Siendo personalísima la responsabilidad que se contrae por el juramento, parece inútil decir, como hacen los autores, que esta caucion debe prestarse por el mismo interesado y no por medio de tercera persona. Pueden consultarse las leyes del tít. 12, Part. 5. Véase **JURAMENTO.**

Al ir á entrar en prensa este artículo, ha sido publicada la nueva Ley de enjuiciamiento civil, en la que encontramos dos artículos que hacen relacion á la *caucion juratoria*. El uno, al hablar de los beneficios que disfrutan los que por ser declarados pobres están exentos de pagar los gastos que causa la administracion de justicia, ordena que darán caucion juratoria de pagar, si vinieren á mejor fortuna, en vez de hacer los depósitos necesarios para la interposicion de cualesquiera

(1) Art. 2 del real decreto de 30 de setiembre citado.
(2) Real órden de 5 de diciembre de 1850.

(1) Authent. Cui relictum; Cod. de Indict. Viduitate tollenda, y cap. 6 de la Novela 134.

recursos (1). El otro, que corresponde al tratado de recursos de casacion, aplica al depósito que en ellos debe constituirse por regla general, el mismo principio. Segun él, si el que interpone el recurso litiga por pobre, basta que preste caucion de pagar las cantidades á que asciende el depósito, si fuere condenado á su pérdida, y viniera á mejor fortuna (2). Disposiciones conformes sustancialmente con nuestro antiguo derecho, si bien formuladas con mas precision, y garantidas siempre con el juramento.

CAUCION MUCIANA. La seguridad que dá el nombrado heredero ó legatario bajo condicion negativa, ó de no hacer una cosa, ó para un fin determinado, *sub modo*, de que restituirá la herencia ó la manda al interesado con los frutos durante el tiempo que hubiere disfrutado de ella, si ejecutare el hecho que se le prohibe ó no hiciere lo que se le encarga. Llamóse muciana esta caucion de Quinto Mucio Scevola, que fué quien la introdujo (3) con el objeto de favorecer las últimas voluntades, pues siendo principio legal en esta materia que en los legados condicionales, el legado cede y viene cuando se verifica la condicion, y no pudiendo entenderse cumplidas las condiciones negativas hasta la muerte del legatario ó heredero, tenia que suspenderse ilimitadamente el efecto de dichas disposiciones, quedando para aquellos ineficaz el legado, puesto que no podrian disfrutarlo.

Esta caucion debe consistir en fiadores segun la opinion de Gregorio Lopez; pero si no se pudiesen encontrar personas que fiaran al legatario ó heredero por su pobreza, bastará que presten la caucion juratoria.

Si no se quisiere ó no se pudiese prestar la caucion por el heredero ó el legatario, no debe recibir el legado ni la herencia; pero si no se pudiera y el legado fuese hecho por causas piadosas, opina Gregorio Lopez que tendrá efecto, aunque la caucion no se preste.

Tampoco hay necesidad de prestar la caucion si el legado se dejase para un fin que interesara solamente al legatario, pues no habiendo carga para este, no tiene obligacion que cumplir, y pudiendo renunciar por otra parte á lo introducido á su favor, tiene derecho á pedir la entrega del legado sin necesidad de dar caucion: asi sucederia si se le dejó el legado para reedificar su casa destruida por un incendio (1). Véanse los artículos **LEGADO**, **HERENCIA** y **CONDICION.**

CAUCION DE NO OFENDER. La seguridad que dá por medio de fiador el que amenaza á otro gravemente, de que no ofenderá al amenazado, y de resarcirle los perjuicios si le ofendiere. El orígen de esta caucion, llamada en idioma latino de *non offendendo*, se encuentra en el derecho romano. La ley *Denunciamus*, *nam si quis*, Cod. de *His qui ad Eccles. conf.*, facultaba á los que temian que otro les irrogase algun daño, para acudir á los magistrados con el fin de que lo evitasen: *nam si aliquid*, decia esta ley, *contra legem á quibusdam existimet perpetrari, liceat ei adire judicem et legitimum postulare præsidium.* Y la ley *Illicitas* y *Ne potentiores, D. de officio præs.*, encargaba á los jueces cuidasen de que los poderosos no injuriasen á los desvalidos, ni que los defensores de aquellos persiguiesen á los inocentes con delitos calumniosos: *ne potentiores viri*, dice la ley, *humiliores injuriis adficiant, neve defensores eorum calumniosis criminibus insectentur innocentes, ad religionem præsidis provinciæ pertinet.* Asi, segun nuestra antigua jurisprudencia, cuando alguno acudia al juez quejándose de que otro le habia amenazado de muerte ó de causarle algun otro mal de consideracion, siendo capaz de llevar á efecto la amenaza, y suplicándole en su consecuencia, que admitida sumaria informacion de los hechos por medio de las personas que los habian presenciado, dispusiera que el que le amenazó otorgase la oportuna caucion de que no le ofenderia ni realizaria sus amenazas, por sí ni por medio de otro, el juez persuadido de la verdad de los hechos y de que existian

(1) §. 4 del art. 181 de la Ley de enjuiciamiento civil.
(2) Art. 1052 de id.
(3) Ley 7, tit. 1, lib. 35 del Dig.

(1) Ley 71, tit. 1.°, lib. 35 del Dig.

motivos razonables para temer que estas se llevaran á efecto, mandaba que el culpable diese fianza al amenazado de no causarle daño alguno, evitando toda querella que pudiera ocasionarlo. En su consecuencia quedaba obligado el fiador á pagar la cantidad que se designase para indemnizar al perjudicado de los perjuicios que pudiera sufrir.

Estas previsoras y laudables prácticas fueron elevadas ya á ley en el Código penal de 1822, y últimamente en el de 1848, reformado en 1850. En el art. 722 del Código de 1822 se dispuso, que en cualquiera de los casos que comprendia el capítulo en que se contenia dicho artículo, que era el capítulo 2.°, tít. 2.°, parte 2.ª, cuando las amenazas hiciesen temer algun riesgo de la persona, honra ó bienes del amenazado, se pudiera, á peticion de este y al prudente arbitrio de los jueces, si lo consideraban necesario, obligar al amenazador á que diese fiador de que observaria una conducta pacífica, ó á que si no lo diese, saliera desterrado por uno á seis años del pueblo en que habitase el amenazado, y veinte leguas en contorno. Y en el art. 419 del Código penal de 1850 se manda, que en todos los casos de los dos artículos 417 y 418 que penan las amenazas, se pueda condenar al amenazador á dar caucion de no ofender al amenazado, y en su defecto á la pena de sujecion á la vigilancia de la autoridad.

Los casos en que, segun el art. 419 del Código de 1850 se puede pedir y mandar la caucion, son aquellos en que se amenaza á otro con causar al mismo ó á su familia, en sus personas, honra ó propiedad, un mal que constituya delito, ó en que, aun cuando no constituya delito, se exija al amenazado una cantidad, ó en que se le imponc cualquiera condicion ilícita. En todos los demas casos y amenazas en que no concurra alguna de estas circunstancias, no ha lugar á la caucion. No lo hay, pues, cuando la amenaza ó intimidacion fuese contra los diputados ó senadores, los ministros de la corona ú otra autoridad en el ejercicio de sus cargos, ó á un superior suyo con ocasion de sus funciones, pues en tales casos, las amenazas constituyen el delito de desacato á la autoridad que marcan los artículos 189 y 192. No hay tampoco lugar á la caucion en las amenazas que el Código califica de faltas, y respecto de las cuales se cree no existen motivos fundados para temer que se llevarán á efecto. Tales son las que se hicieren con armas blancas ó de fuego, las que se hicieren de palabra, y en el calor de la ira, con tal que el amenazador se mostrare luego arrepentido, y aunque el mal á que se referia la amenaza constituyera delito; y las que se hicieren tambien de palabra, consistentes en un mal que no constituya delito, todas las cuales se designan en los artículos 484, núm. 5.°; 485, núm. 12, y 494, número 10, y se hallan penadas en los mismos como faltas. Véase AMENAZAS.

Pero, aun en los casos de amenazas arriba referidos, no impone el Código la caucion como debiendo aplicarse necesariamente. El artículo 419 se limita á decir que se podrá imponer, copiando en esto lo prescrito por el artículo 722 del Código penal de 1822: queda, pues, la imposicion de esta pena al prudente arbitrio de los jueces, quienes deberán atender al carácter activo del acusador, á la saña, ademanes y energía que hubiere demostrado, ó si alimentaba rencor contra el amenazado, y á todas las demas circunstancias que revelen peligro de que la amenaza se llevará á efecto. Nada dice el artículo 419 sobre si puede pedirse la caucion por el amenazado, segun se leía en el Código de 1822; pero estando este gravemente interesado en su prestacion para su tranquilidad y seguridad propias, no hay duda que podrá pedirla, siendo esta una de las circunstancias á que tambien deberá atender el juez para determinarse á aplicar dicha pena. Asi, pues, podrá pedirse la caucion en el caso en que la muger tema malos tratos por parte de su marido, y en los demas que reconocen nuestro derecho y nuestras antiguas prácticas.

Acerca del tiempo que dura esta caucion, no parece que deberá esceder nunca del máximo de las penas correccionales, puesto

que se señala para sustituirla la sujecion á la vigilancia de la autoridad, que ocupa el segundo lugar respecto de esta clase de penas en la escala tercera del art. 79; y que la caucion de conducta que tiene grande analogía con la que motiva este artículo, ocupa un lugar inferior en dos grados en dicha escala á la de sujecion á la vigilancia de la autoridad. Igual regla puede establecerse respecto de la cuantía á que podrá elevarse la caucion: no parece que pueda esceder en caso alguno de la que se prescribe para la multa, cuando se aplica como pena correccional, á saber, la de 300 duros, por las mismas razones que acabamos de esponer, y por las que se han indicado en el artículo **CAUCION DE CONDUCTA**, al tratar del tiempo y de la cuantía de esta pena.

La caucion, segun las nuevas prescripciones del Código penal, es el resultado de un juicio celebrado con ocasion de un delito, en el cual se impone esta pena en virtud de una sentencia condenatoria: el Código penal ha regularizado, pues, sobre esta materia nuestras antiguas prácticas, con lo que han venido á cesar las infinitas dudas y dificultades que ofrecian nuestros antiguos intérpretes, Cancerio, Riccio, Gomez, Molina y otros. En su consecuencia, no tiene lugar en el derecho la duda sobre si quedaba obligado á guardar la caucion el que la prestó, cuando á su contrario no se imponia igual obligacion, pues esta duda se resuelve fácilmente por la afirmativa con solo observar que solo queda obligado á la caucion aquel á quien el juez se la impuso con conocimiento de causa, y en virtud de sentencia ejecutoria, por haber dado motivo racional para temer que causaria daño á otro, que es en lo que se funda la obligacion que se le impuso: no podria, pues, este reclamar la reciprocidad de obligacion respecto del contrario que se halla favorecido por su buena conducta, motivo por el que el juez no le gravó con semejante responsabilidad. Cesa asimismo la duda sobre si se entenderá quebrantada la paz ó amistad por el insulto ó agravio que no sea corporal ó que consista en la pérdida de bienes, puesto que imponiendo la caucion como pena de un delito, se entiende subsistente hasta que habiendo conocido los tribunales del nuevo esceso en que incurrió el que la prestase, haya recaido fallo de que se cometió el delito que se trataba de precaver, y de que se hizo responsable la caucion.

No tiene tampoco aplicacion la dificultad ó la duda sobre si el amenazado de injuria podrá pedir que el injuriante le dé caucion de no ofenderle, cuando aquel dió motivo á la enemistad ó á la amenaza, puesto que á los tribunales es á quienes incumbe apreciar, segun los principios del derecho criminal, hasta qué punto fué atenuado el acto de la amenaza ó injuria, por las provocaciones ó escitaciones que promoviera el injuriado ó amenazado. Finalmente, no tiene tampoco lugar en el dia, ni aun la duda mas fundada que se propone, sobre si cesará la caucion por pruebas inequívocas de amistad y de afecto que se dieran los querellantes con posterioridad á la prestacion de la misma, v. *g.*, por un enlace entre las dos familias del que amenazó y del amenazado; pues aunque algun autor se pronuncia por la afirmativa, fundándose en que es incompatible la caucion con la existencia de la amistad, ó en que la amistad supone novacion de la obligacion anterior, en que la paz ó amistad es perpétua y la enemistad temporal, y esta es la que dió orígen á la caucion y aquella supone que cesa; no puede menos de resolverse la duda por la negativa, al considerar que la caucion se impone por el Código penal, no solo con el objeto de asegurar al amenazado contra la agresion del amenazador, si no como pena que debe sufrir por su delito, y ademas, que la pena se impone por una ejecutoria que no puede levantarse, ni destruirse sus efectos en caso alguno legalmente, por lo que el condenado á darla no podrá ser relevado de la obligacion.

Pero no ha de confundirse, como hacen algunos, la caucion de conducta con la de no ofender, puesto que aquella se impone en los delitos de conspiracion, sociedades secretas y otros que afectan directamente al Estado, y esta solamente en el delito de

Lorenzo Arrazola

amenazas que afecta á los particulares; que en aquella se responde de un delito sin relacion á la persona sobre quien recaiga, y en esta el fiador solo responde de que su fiado no causará mal ó daño á determinada persona; que cuando aquella no se presta, se sustituye con la pena de arresto menor, y esta es sustituida con la de sujecion á la vigilancia de la autoridad. Véase **CAUCION DE CONDUCTA.**

CAUCION DE PERIODICOS. Las seguridad que dá el editor responsable de un periódico por medio de una suma de que no se abusará de la libertad de imprenta en el periódico de que se constituye editor.

Segun la ley de 22 de marzo de 1837, que es la que rige sobre la materia, esta cantidad debe ascender á 40,000 rs. efectivos por cada periódico que se publique en Madrid, 30,000 en Barcelona, Cádiz, Sevilla y Valencia; 20,000 en Granada y Zaragoza, y 10,000 por cada uno de los que se publiquen en los pueblos restantes, siempre que el periódico salga á luz de una á siete veces á la semana, ó sea de los que salen sin período fijo. Si el periódico lo tiene determinado y no se publica una vez al menos á la semana, la caucion es únicamente de la mitad de dicha suma, y en todo caso se admite el cuádruplo en efectos de la deuda consolidada. Tambien se admite para constituir esta caucion acciones de ferro-carriles y de carreteras. Véanse los decretos y los artículos que lo disponen.

La consignacion de esta caucion debe hacerse en el Banco Español de San Fernando ó en poder de los comisionados en provincias, y donde no los hubiese, en la junta de comercio (1).

Está prohibido que se admita á los periódicos fianzas de particulares en lugar de la consignacion mencionada. En su consecuencia, en las provincias donde no hay comisionado del Banco Español de San Fernando ni juntas de comercio, deben los editores de periódicos por sí ó por apoderado verificar el depósito que les corresponde en Madrid en el mismo Banco, ó para su mayor comodidad en las provincias mas cercanas donde exista comisionado ó junta de comercio (1).

No se comprenden en el depósito señalado para los periódicos políticos, los boletines oficiales y diarios de avisos que no traten de otros asuntos que los que anuncian sus títulos, y los periódicos que no traten de materias religiosas ó políticas. Pero si tratare de ellas el todo ó parte de alguno de sus artículos, el gobernador puede suspender el periódico por solo este hecho hasta que cumpla su editor con las condiciones prescritas acerca del depósito, ó le exima de llenarlas el jurado. Basta sin embargo, que este declare que el artículo versa sobre materias religiosas ó políticas, en que no podia ocuparse el periódico, para que el editor sufra la multa de 1,000 rs. Si ademas incurriere en algun otro abuso, responden de él el autor, el editor y el impresor subsidiariamente (2). Véase **LIBERTAD DE IMPRENTA Y PERIODICO.**

CAUCION DE RATO. La seguridad que dá el que se presenta en juicio sin poder ó sin ser bastante, en nombre de otro, de que este habrá por firme lo que se practicare en el pleito, y la obligacion en que se constituye si asi no lo hiciese, de pagar al colitigante la pena prometida y la que se le imponga.

Por derecho romano se prestaba esta caucion por el procurador que intentaba una accion en nombre de otro; prescribíase ordinariamente por el pretor antes de la contestacion del pleito; pero si se omitia su prescripcion, y habia motivos para dudar de la existencia de la procura, podia exigirla el juez que entendia del pleito. Fundábase la prestacion de esta caucion en que segun los principios del derecho romano, el procurador no obligaba al principal en este caso.

Asi era que cuando un procurador empeñaba la contestacion del pleito con el adversario del representado, no podia novar por tal medio el derecho de este último; por lo

(1) Art. 10 de la ley de 27 de marzo de 1837.

(1) Real órden de 18 de mayo de 1837.
(2) Art. 9.° de la ley de 15 de marzo de 1837.

que tenia que sufrir el demandado las consecuencias de este ataque, sin que por eso estuviera libre de que el representado entablara contra él una nueva accion sobre el mismo objeto. De aquí el derecho que tenia para que se le asegurase contra este ataque por medio de la caucion de *rato* (1).

Nuestro derecho adoptó el espíritu de estas disposiciones. Asi, la ley 10, tít. 5, Partida 3, al prescribir que nadie puede comparecer en juicio como procurador de otro, en concepto de actor, sin poder de este, y al esceptuar de la regla al marido cuando comparece por su muger, al pariente cuando por el pariente hasta el cuarto grado, al suegro, yerno ó cuñado, al aparcero ó condueño de una misma heredad ú otra cosa, dispone, que estos aseguren antes de entrar en el juicio, por medio de fiadores, bajo cierta pena, que aquel por quien demandan, habrá por firme cuanto se alegase, hiciere ó juzgare en aquel pleito, y si no quisiere hacerlo, que ellos y sus fiadores pagarán al demandado la pena que se impusiere. Asimismo se exige esta fianza al que pareciese en juicio para responder por otro que hubiere sido emplazado y se hallara ausente, con cuyo requisito no es necesario que sea pariente, ni que tenga poder del emplazado. Una disposicion análoga se encuentra en el Fuero Real, ley 5, título 10, lib. 1.°, cuyo tenor es el siguiente: «Todo marido puede demandar ó responder por su muger, si quiere: è todo pariente por su pariente: fasta en aquel grado que manda la ley deste fuero: de aquellos que no pueden testiguar uno por otro: esto sea dando fiador, que aquel por quien él demandare ó respondiere, que lo otorgue, è que esté por ello; y esto mismo sea de los herederos, è de los compañeros de una demanda, ò de clérigo de pleito de su iglesia; y si despues aquel por quien demandó, ò por quien respondió, no lo quisiere otorgar, el fiador peche la fiaduría, è torne el pleito à aquel estado en que era ante que fuese la fiadura.»

Asimismo, la ley 21, tít. 5, Part. 3, dispone que dé seguridad por medio de fiadores ó de prendas de que el actor habrá por firme lo que se hiciere en el pleito, aun el que se presentare á demandar con poder suficiente de aquel, cuando dicho poder fuere dudoso. Tambien impone la obligacion de dar esta fianza á los procuradores del reo, á no ser que el poderdante se constituyese fiador del apoderado en dicho poder, obligándose á cumplir y pagar todo lo que se juzgase en el pleito, pues entonces no se le debe pedir otra fianza.

Las fianzas que prescriben las leyes de Partida citadas, debian pedirse por el reo antes de la contestacion de la demanda, porque despues no hay obligacion de darlas, aunque se pidan (1).

Estas fianzas solo tienen lugar en los pleitos civiles, pues en las causas criminales no está admitido por la práctica oir á los que se presentan como procuradores ó defensores de los reos ausentes ó prófugos, aunque sean parientes. Véanse los artículos CAUCION JUDICATUM SOLVI, y PROCURADOR.

Estando ya para entrar en prensa este artículo, ha sido publicada la nueva Ley de enjuiciamiento civil. En su artículo 13 ordena espresamente que la comparecencia en juicio será siempre por medio de procurador, y añade que el poder se acompañará precisamente con el primer escrito, sin que se permita en ningun caso la protesta de presentarlo. De aquí algunos infieren que ha cesado la caucion *de rato*, y que pertenecerá esclusivamente á la historia. No lo creemos asi: el citado artículo se refiere solo á la necesidad de valerse de las personas que tienen el oficio de procurador para comparecer en juicio; á estas y no á otras es á las que exije indeclinablemente el poder. No corrige el derecho civil, al que corresponde declarar las personas que pueden ser gestores de negocios agenos; se limita solo a los procedimientos judiciales. Haciendo aplicacion de esta doctrina á un caso dado, podremos decir que el pariente ó el aparcero, dentro de las condiciones espuestas,

(1) Tit. 8, lib. 46 del Dig.

(1) Leyes 2 y 12, tit. 28, lib. 11 de la Nov. Recop.

Lorenzo Arrazola

podrá salir á la defensa del pleito del pariente ó aparcero que estén ausentes, pero por medio de procurador y dando la caucion de *rato*. De otro modo se confundirian los derechos civiles con las leyes que ordenan las actuaciones judiciales. Para que no quede duda acerca de este punto, baste observar que, segun espresa el mismo art. 13, hay pleitos en que no es necesaria la intervencion del procurador, como son los verbales y los de menor cuantía, y seria absurdo suponer que, al mismo tiempo que se habia dejado intacto el derecho civil respecto á estos, se habia derogado en los demas. Por último, debe procederse con gran cautela antes de suponer por induccion, que están derogadas leyes que es posible que ni remotamente se tuvieran en cuenta al formarse la que sirve de pretesto para hacerlo.

CAUCIONERO. Dábase antiguamente este nombre al que se obligaba á salir fiador ó responsable por otro. Ciceron usa tambien de la palabra latina *cautor*, que equivale á la de caucionero entre nosotros, en el sentido de hacerse responsable de un peligro ageno. En la oracion por Sextio, cap. 7, dice: *Hunc vir clarissimus, mihique, multis repugnantibus, amicissimus, Cn. Pompeius, omni cautione, fœdere, execratione devinxerat, nihil ni tribunatu contra me esse facturum. At ille nefarius ex omnium scelerum colluvione natus pasum se fœdus violaturum est arbitratus, nisi ipsum cautorem alieni periculi suis propiis periculis terruisset.* Tambien usa Plauto de esta palabra en el mismo sentido en su *Cautivo*.

CAUDAL. Esta voz es sin duda corrupcion ó trasformacion de la de *capital* en sentido económico, y una de las infinitas que en la lengua castellana provienen del latin *caput*, en el sentido metafórico de lo que es *principal* en cada cosa (V. **CAPITAL** *en sentido económico*). En ese caso la voz *capital* habria sufrido la misma trasformacion que en **CAMINOS CAUDALES** (véase este artículo). Pudiera decirse tambien del latin *capio, captum*: tomar, recoger; lo cogido, reunido, etc., pues que el caudal es el cúmulo de bienes de fortuna, de riquezas, reunido por la industria, la suerte, y demas títulos de adquirir. Creemos mas fundada la primera etimología, pues que en lo antiguo se decia, en vez de caudal, *capital*; y aun hoy equivale muchas veces á lo mismo, y una voz se toma sin dificultad por la otra en ocasiones. Puede decirse, sin embargo, que segun el uso, *caudal* es mas estensa, se presta menos á espresar reducidas sumas, ó porciones de bienes, intereses, etc., que *capital*. Lo indican bien sus derivados *caudaloso*, *acaudalado*, que simplemente enunciados, sin otro aditamento, significan, gran copia de aguas el primero aplicado á los rios, considerables bienes de fortuna el segundo aplicado á los hombres; mientras en *capital* y sus derivados, es preciso algun aditamento para que signifiquen abundancia, riqueza considerable, etc., como *grandes capitales*, gran capitalista, etc. Caudal, pues, es toda la hacienda, el conjunto de bienes de una persona ó corporacion, y aun de un estado político, ó parte de él. Asi decimos el caudal de Pedro, por todos sus bienes: el caudal finable, por el acerbo ó totalidad de bienes de una testamentaría: caudales venidos de América, por parte de los bienes de alguna persona ó compañia que tienen esta procedencia: caudales públicos, conduccion, distribucion de caudales, etc., por parte de los tributos y rentas del Estado. Repetimos, sin embargo, que aunque estas dos acepciones sean las mas comunes, y por tanto las mas propias, algunas veces *caudal* es lo mismo que *capital* en sentido económico, y tambien con igual generalidad, ó universalidad; de ordinario en sentido mas reducido ó restricto; lo que ha de tenerse muy presente en cuestiones económicas y jurídicas. Capital en todo caso es mas específico, caudal mas genérico; y de aquí capital se presta mejor á espresar riqueza metálica, que caudal: este, sin otra adicion ó calificacion, espresa mas bien riqueza colectiva, todo lo que constituye el haber, la hacienda, la fortuna de alguno. Asi, si un cambista, un banquero, uno que por profesion ó industria habitual, tiene dedicados parte de sus fondos, de sus bienes á ope-

raciones de crédito; si este, decimos, mandase á otro en testamento ó codicilo, ó traspasase de otro modo *sus capitales*, la trasmision podria tener una acepcion y estension diferente, que si dijese que mandaba, trasmitia, etc., su caudal. En una testamentaría *caudal* del marido, sin otra adicion, es *todo su ha de haber*: *capital* lo que aportó al matrimonio, y suele resultar de la escritura de capitulaciones, de *dote* y *capital*. Véase sobre esto lo que dejamos espuesto en el artículo citado **CAPITAL** (*en sentido económico*).

CAUDALES (**CONDUCCION, CUSTODIA, DISTRIBUCION DE**). Si hubiéramos de hacer mérito de las infinitas disposiciones dictadas sobre las anteriores enunciativas, y otras análogas, no bastarian á contenerlas algunas entregas de la obra. Omitímoslas, por tanto, no precisamente por esa razon, si no porque siendo de ordinario gubernativas y de índole transitorio, unas vienen sustituyéndose á las otras para serlo ellas por otras á su vez, siendo esta una de las partes del derecho constituido que mas sigue la necesaria movilidad de la administracion. La conduccion, custodia, traslacion de caudales, etc., se refiere á la incumbencia, ya antigua, de los ayuntamientos en recaudar, conservar, y trasladar á las capitales los tributos públicos: á igual incumbencia de los recaudadores y depositarios: á la propia por parte de las oficinas provinciales: á los encargados del trasporte de los de América, de las llamadas *conductas* hasta recientemente en la Península y Ultramar; estableciéndose y arreglándose las disposiciones que á ello conciernen, el premio ó retribucion, responsabilidad, franquicias y ventajas de los que tienen á su cargo las mencionadas incumbencias, ó servicio público, unas veces por las leyes tributarias, y por las orgánicas y de atribuciones de los cuerpos y agentes públicos mencionados, y otras por meras instrucciones, decretos y reales órdenes, y circulares de los jefes y oficinas superiores respectivas.

En cuanto á distribucion de caudales, el buen órden en los servicios públicos, y casi con mas frecuencia la dificultad de ocurrir á ellos por no nivelarse los ingresos con los gastos, ha hecho recurrir á los gobiernos á diferentes medios y espedientes, que en breve han sido sustituidos por otros, como continuarán siéndolo. El medio mas ordinario ha sido, y es sin duda el mas análogo, el nombrar una *junta de distribucion de caudales*, compuesta de los gefes superiores de los ramos respectivos de la administracion, ordenada regularmente de tal modo que todos los ministerios tengan en ella representacion. La junta con presencia de los gastos y servicios públicos autorizados por el presupuesto general del Estado, ó por leyes especiales y reales disposiciones suplementarias, ó sobre créditos suplementarios: con presencia asimismo de la ley de contabilidad; de los ingresos y gastos efectivos ó presupuestos respecto del mes inmediato siguiente; y de las instrucciones particulares del gobierno, que mas al alcance que nadie de las urgencias públicas, ya notorias, ya reservadas, presentes ó que amenazan, ó pueden temerse, es el mas competente, ó por mejor decir, el único competente para dictar disposiciones adecuadas sobre ello; la junta, decimos, con presencia de todo, hace al fin de cada mes la distribucion de fondos ó caudales para los servicios del mes siguiente, adjudicando á cada ministerio la cantidad que le corresponde, ó lo que es posible. Cuando los ingresos van á la par con los gastos, la operacion es sencilla y de pura ritualidad: cuando es á la inversa, y lo es entre nosotros casi siempre en el sentido mas perjudicial y que puede suponerse, de esceder los gastos á los ingresos, la operacion es difícil, si bien entonces no incumbe á la junta distributora mas que la operacion material, pues que el gobierno dá la norma, indicando por acuerdo en Consejo de Ministros, y cediendo á la mayor necesidad, qué servicios han de quedar desatendidos. La junta, concluida la distribucion, la eleva á la aprobacion del gobierno, quien la aprueba, ó modifica, segun las necesidades que pueden haber aparecido. En vista de la distribucion, y del déficit de servicios que presenta, al ministro de Ha-

cienda incumbe arbitrar los medios de cubrirlo, recurriendo al crédito, ó de otro modo, de los muchos que han dado, y aun darán á conocer los apuros habituales de nuestro tesoro. Ordinariamente el gobierno publica la distribucion en la *Gaceta* oficial; pero no se puede establecer, ni exigir asi, como regla inalterable. Hay gran ventaja en la publicidad, y mas en los gobiernos representativos, en los cuales la prensa y cada particular están llamados á ejercer fiscalizacion sobre la administracion general y servicios públicos: en caso de urgencias é inevitables desigualdades, á veces violentas, insoportables, peligrosas, y siempre sensibles, la publicacion del déficit es como una satisfaccion pública á las clases postergadas, que viendo es inevitable su perjuicio, se quejarán solo de las circunstancias, no de las personas, y podrá atenuar su amargura, y templar su queja el ver que con su privacion hacen en cierto modo un sacrificio en favor del Estado: pero esa publicidad es á veces la de la bancarrota, que atenúa la fuerza moral del gobierno, estingue la confianza, acaba con el crédito de aquel, y alejando inevitablemente á los que han de facilitar recursos, *alienta* á los enemigos del órden, de la política ó del Estado, se estinguen los recursos, y las clases y servicios públicos que estaban mal atendidos, acaban por estarlo mas. En los últimos años de la guerra dinástica que acabó en Vergara, los ingresos mensuales ordinarios eran de treinta y tres á treinta y cinco millones, una gran parte de ellos en libranzas y papeles de crédito, que, ni con mucho, valian lo que sonaban; mientras uno solo de nuestros ejércitos necesitaba por término medio ochenta millones cada mes. Asi la oficialidad mejor pagada estaba reducida á lo que se llamaba la quincena: estaban aun peor atendidos otros servicios militares: desatendidos casi de todo punto el clero, las clases pasivas, y poco menos las activas, inclusa la magistratura: y aun pueden darse situaciones mas acervas, en que aparecerá ciertamente como un problema de buen gobierno el publicar, ó no, las distribuciones.

Lo que sí es inevitable en buenas reglas administrativas y de contabilidad, es el organizar la distribucion adecuada, como que es el principio de la ejecucion del presupuesto general, y de las leyes de contabilidad que rigieren. Podrá la operacion confiarse al Tesoro, que es lo mas análogo cuando sobran caudales, ó por lo menos no faltan: podrá confiarse á una junta de gefes de Hacienda, aspirando á inspirar confianza, y mayor cooperacion facultativa y moral: podrá cometerse á una junta de gefes de los ministerios, ó por cualquier otro medio ó combinacion; pero siempre será necesaria.

Las multiplicadas disposiciones que hablan sobre el particular han de verse, con mas comodidad que en las colecciones generales, en la de *guias de Hacienda*, que abraza el período de cuarenta y nueve años, desde su orígen á fines del siglo pasado, hasta la creacion del *Boletin de Hacienda* en 1848: en estos *Boletines* que siguen publicándose hasta el presente; y en el *Indice*, ó coleccion de decretos y órdenes de Hacienda por García Gimenez, que recorre desde 1799 hasta 1843.

CAUDALES VENIDOS DE AMÉRICA. La estraordinaria penuria del Erario en los últimos años del siglo anterior obligó al gobierno á echar mano hasta de los fondos particulares, despues de haber agotado todos los recursos de que podia disponer dentro de la esfera de su legítima autoridad. En 2 de enero de 1801 acordó que todas las cantidades de depósitos judiciales, particulares, de quiebras y concursos, y de economatos, se trasladasen á las tesorerías y depositarías, usándose de estos capitales, de los de fianzas de empleados y asentistas de provisiones, y de los caudales venidos de América, por cuyos réditos se abonaria el tres por ciento. Por injusta que fuese esta disposicion respecto de la mayor parte de los objetos espresados, éralo mas, sin duda, respecto de los capitales venidos de América, que consignados desde aquellos paises á favor de particulares, y de procedencia puramente particular, sin haber entrado para objeto alguno en las tesorerías y

depositarías del gobierno, eran ocupados por este con una violencia injustificable.

Pagáronse por algun tiempo los intereses, y aun algunos acreedores pudieron conseguir años adelante su reintegro: la mayor parte se vieron privados de aquellos y de sus capitales. En 1816 se declaró que estos no se hallaban comprendidos en la deuda del Estado, y en 5 de mayo de 1825 se previno que el tesorero general del reino propusiera una medida general, formando el oportuno espediente que abrazara todos los capitales, y los sugetos á quienes pertenecieran. En su virtud, se liquidaron algunos de estos créditos, y se espidió á los dueños láminas provisionales que carecian de categorías, quedando sin liquidar otros muchos, que lo van siendo ahora á virtud de lo dispuesto en la ley de 1.° de agosto de 1851 sobre arreglo de la deuda.

El importe de la que constituyen en la actualidad los caudales venidos de América es incalculable, porque, como se ha indicado, están sin liquidar la mayor parte de estos créditos, siendo muchos los espedientes de esta clase que se hallan hoy pendientes de liquidacion.

Segun Canga Argüelles (1), en 1826 las obligaciones por caudales venidos de América importaban 27.315,928, y habiendo sido pagados hasta fin de julio de 1820, 5.702,755, quedaban por satisfacer 21.613,173.

La ley citada sobre arreglo de la deuda dispuso en su artículo 5.°, que se considerasen convertidos por el todo de su capital nominal en títulos de la deuda consolidada del 5 por 100 las deudas liquidadas y por liquidar, conocidas bajo el título de *caudales venidos de América*. En su virtud, con arreglo á los art. 9 y 11 del reglamento de 17 de octubre, se convierten en renta diferida por todo su valor nominal las láminas de deuda provisional procedentes de dichos caudales, y se reconocen en la espresada renta los capitales de créditos de la misma procedencia pendientes de liquidacion.

CAUDATARIO. Del latin *cauda*, la cola. Tómase por la de los trajes talares categóricos, ó especiales, como el traje, ó capa *coral*, capa episcopal, etc. Ya antes hemos dicho que la cola en este género de trajes se tenia por indicio de *autoridad*. El que en los actos solemnes tiene el cargo de levantarla, y sostenerla, ó llevarla recogida cuando debe hacerse segun la liturgia, se llama *caudatario*. El cargo y la denominacion tienen lugar especialmente en lo eclesiástico. Aunque es comun, ó muy general la *cola* en el traje *coral*, no pueden usar de *caudatario* mas que los prelados, y cabezas de primera categoría con jurisdiccion episcopal, *vel cuasi*, como los prelados *nullius*, obispos, arzobispos, cardenales, el Papa. Ni aun los deanes tienen ese derecho, ni aun los llamados *prelados domésticos* del Papa, no obstante el uso de *capisayos episcopales*. El caudatario en estos casos es siempre un sacerdote, ó clérigo por lo menos. Las reinas en los actos de corte y otros de etiqueta y solemnidades, en que visten el manto, llevan caudatario, y lo es por lo comun un grande, ó gentil hombre. Véase CAPA.

CAUDILLO. Del latin *caput*, cabeza. El que acaudilla, guia, ó conduce á alguno, ó algunos para buenos ó malos fines. Caudillos son, un general de ejército, un gefe de salteadores, los cabezas de una rebelion, sedicion, etc. La terminología es varia en el particular, y segun los casos y circunstancias, caudillo, gefe, autor, cabeza, significan lo mismo, espresando siempre el principal; el cabeza entre otros. Seria interminable el enumerar los requisitos, deberes, honores y prerogativas espresadas y determinadas por las leyes para los gefes, ó cabezas en los multiplicados cargos eclesiásticos y civiles, lo cual por lo tanto ha de verse en sus respectivos artículos. En cuanto á su responsabilidad en las empresas ilícitas, y en cuanto á la locucion antigua *cabdillo*, y tambien *capdillo*, véase este artículo, y los de APELLIDO, ASONADA, BANDIDOS, REBELION, SEDICION y demas análogos.

CAUSA (EN SU ACEPCION FILOLÓGICA GENERAL). Lo inmenso, y trascen-

(1) Tom. 2, pág. 697.

dental del concepto de causa, el uso frecuentísimo y variado de la voz en lo *ontológico*, y en lo *moral y legal*, hace imposible tratar de la misma bajo un solo contesto, sin riesgo de complicacion y oscuridad, que fácilmente se evitan verificándolo en diferentes artículos, segun las principales y mas usadas acepciones.

Limitando el presente principalmente á lo filológico, nos es preciso hacer notar, sin embargo, que la inmensidad de séres que constituyen el universo; cuanto ha existido, existe y existirá, á cualquier órden que se refiera, corpóreo, ó incorpóreo, moral, ó físico, todo se refiere absolutamente á una de estas dos categorías: *causa*: *efecto*. De aquí nace la indefinida variedad en el uso y acepciones de estas voces. Ontológicamente, en el rigorismo filosófico, el uso de ellas es mas simple, mas espedito, menos espuesto á error: en el órden moral sucede todo lo contrario, y lo propio en el lenguaje comun; pero en este los errores son de menos trascendencia que en el órden moral, é infinitamente menores tambien que en el órden filosófico; á no ser que se incurra en el vicio frecuente de confundir el lenguaje comun con el tecnológico, y de aceptar y usar aquel como tecnológico para todas las ciencias. Lo hemos demostrado asi en los artículos ABSTRACTO, CASUALIDAD, y otros; y aun tendremos que repetirlo en otros muchos, pues que nada hay mas usual en nuestros autores, desde que la lengua patria sustituyó á la latina en la esposicion y comentario de las leyes, que el trasladar al derecho el lenguaje comun, de cuyo punto nos proponemos tratar de propósito en otro lugar.

En cuanto á las ideas correlativas *causa* y *efecto*, y señaladamente respecto de la primera, hemos indicado su universalidad, y de ahí su variedad de acepciones, segun el asunto de que se trate, y el órden filosófico, moral, social, legal, jurídico, etc. á que se aplique, pues que si en todos el principio de la *causalidad* es el mismo por regla general; los fines son diversos; como lo es alguna vez aun el principio, y por tanto las clasificaciones: para el físico, por ejemplo, para el químico, etc., no hay *causas morales*, y es porque el *sugeto* en sus ciencias no es *sugeto de ley*.

Siendo esto asi, tampoco es de estrañar la diversidad de definiciones, aunque de ello mismo se infiere que no todas pueden ser igualmente aceptables en materias determinadas. En el lenguaje comun, por ejemplo, *causa*, segun la Academia de la lengua, es *el principio que produce alguna cosa*. Sea lo que quiera de esta definicion en el lenguaje comun, no es exacta ni aceptable en el derecho. En primer lugar la palabra *principio* es equívoca en sí, y mas bien se refiere, ó con igual propiedad á lo menos, á la idea de *causalidad*, que á la de *casualidad*; esto es, al concepto *generativo*, *productivo*; que al *sucesorio de tiempo y órden*, en cuyos casos, *principio*, prescindiendo de la *causalidad*, es idea correlativa de *medio* y de *fin*. No es idea *precisa*, por otra parte, y para ello no hay mas que ver sus multiplicadas significaciones, en la voz *principio* de la propia Academia. Y por último, en el órden filosófico la enunciativa de principio *que produce alguna cosa*, es mas bien activa que pasiva, espresa con mas propiedad efectos *reales*, *positivos*, que los *negativos*, ó privaciones de *efecto real*; cuya falta de exactitud lleva consigo dicha enunciativa, trasladada al órden moral y jurídico, en que no solo hay que apreciar los *efectos positivos*; si no los negativos, ú *omisiones*.

Covarrubias, en su *Tesoro de la lengua*, define la causa casi con rigor y propiedad *ontológica*, y de un modo que abraza las cuestiones de *causalidad* y de *casualidad*, de *causa* y *efecto*, lo mismo en sentido *positivo*, que en sentido *negativo*; asi en el órden *filosófico absoluto*, que en el moral y jurídico. «Causa, dice, es nombre latino, *et propriè dicitur*, *id*, *ex quo*, *vel propter quod*, *vel per quod*, *vel á quo*, *aliquid fit*: todo lo que es ocasion de que *suceda* alguna cosa.» Cuanto mas genérica es la enunciativa *suceder alguna cosa* sobre la de *producir alguna cosa*, tanto mas exacta es en lo moral y jurídico la idea de *causa* que nos dá, porque en efecto, mas propiamente decimos que los

efectos *negativos*, las *omisiones suceden*, que no que se *producen*.

En otros casos la etimología es una razon que decide, un indicante, si no, que esclarece las dudas y cuestiones filológicas, sobre la significacion de una voz. En el presente falta ese recurso, y asi la filosofía como el derecho han adoptado una voz latina, *causa*, cuya rigorosa significacion hay que derivar del uso. Segun el propio Covarrubias, y otros autores, pudo decirse *á casu* de *caso* ó suceso, porque el *efecto* es ciertamente un *caso*: segun otros de *chaos*: otros quieren se derive del griego *kaisis*, ardor: otros, en fin, del verbo latino *caveo*, en el sentido de precaver, sin que ni tales etimologías, ni las razones de sus autores puedan satisfacer; si bien revelan el estudio que se ha consagrado al conocimiento filológico de una voz de tal trascendencia; motivo por el que nosotros dedicamos al mismo propósito este y otros artículos.

Concluyendo, diremos: que considerado filosóficamente el universo, se ve estar organizado de modo que en él todos los séres, menos uno, todos los sucesos penden en el órden *sucesorio*, ó se derivan unos de otros. Si se atiende solo á este órden, ó bajo el punto de vista de la *casualidad*, aquel sér, suceso, acontecimiento de que se deriva otro, ora *positivo*, ora *negativo*, se llama *principio*: si por el contrario, prescindiendo de la *casualidad* ó del órden sucesorio, atendemos, ora principal, ora esclusivamente al órden *causativo*, á la *causalidad*, aquel sér, de que, inmediata ó mediatamente proviene otro, parcial ó totalmente, y ya el procedente sea *positivo* ó *negativo*, se llama *causa*. *Causa*, pues, aplicada la enunciativa al órden *ontológico*, al órden físico, como al moral y jurídico, diremos, que es *aquel ente por cuya accion, eficacia, ó influjo físico ó moral, total ó parcialmente se reproduce otro, sucede, ó deja de suceder algun acontecimiento ó suceso*.

De esta definicion resulta, que en la práctica, segun la materia y fin del filósofo, del legislador, del juzgador, etc., la palabra *causa* tendrá, y asi es realmente, considerable número de acepciones, de entre las que las principales, ó de mayor aplicacion ó trascendencia, pueden verse en los artículos subsiguientes. Véanse tambien los de **ACASO, CASO, CASUALIDAD, EFECTO.**

CAUSA (**EN SENTIDO FILOSÓFICO GENERAL**). Dejamos indicada la etimología de causa en el artículo anterior. Concretando la acepcion al objeto del presente, que es la *causalidad* puramente *ontológica*; reservando lo *ontológico-moral* para otros artículos, se llama causa *aquel ente, hecho ó suceso por cuya actividad ó influjo se produce, sucede, ó deja de suceder otro, que respecto de ellos llamamos efecto*. Dícese del latin *causa*, lo que produce algun efecto. *Causa y efecto* son por tanto, y segun allí dejamos indicado, dos voces que constituyen el objeto universal de la filosofía: son ellas solas la *síntesis* mas *ontológica* ó universal de la misma, pues que en suma *filosofía es la ciencia universal que trata de todas las cosas*, esto es, del mundo material y moral, *por causas y efectos*. Unas veces por el efecto se deduce la causa: otras por la causa se deduce, ó conoce el efecto. El estudio de esta correlacion, de esta dependencia, constituye la filosofía: todo el estudio del hombre. Entre la causa y el efecto media aquella relacion que la filosofía misma llama *necesaria*, ó sea, que de tal suerte uno de los dos estremos supone al otro que lo contrario es imposible. ¿Quién de la idea de padre puede separar la de hijo? ¿Quién de la de hijo la de padre? Asi tampoco se concibe efecto sin causa, ni causa sin efecto, pues cuando la llamamos causa es ya con ocasion del efecto. Y como la humana razon ha elevado á principio, y es reconocido como tal por la filosofía universal, que *nihil fit in rerum natura sine ratione sufficienti cur potius sit, quam non sit*, la averiguacion de esta razon, del *principio*, del *modo* y del *cuando*, del *¿por qué?* de las cosas constituye toda la filosofía, todo el estudio y todo el saber del hombre. Por eso la antigua filosofía elevó tambien á principio esta *optacion*: *¡fœlix, qui potuit rerum cognoscere causas!* *Optacion* y principio que son en suma, por parte de la razon

humana, una confesion de su impotencia, pues se resuelven en esta otra enunciativa: *ninguna criatura puede ser omniscia: á nadie es dado conocerlo todo.*

Asi, la idea que podemos dar de la *causa*, será por demas imperfecta y limitada. Imperfecta y limitada es tambien la que de ella tienen la filosofía y el hombre: mas bien que un conocimiento *preciso*, *profundo*, *cierto*, *infalible* de la *causalidad*, tenemos solo la *terminología* convencional, algunas verdades demostradas, ó demostrables, y un conjunto de reglas, falibles algunas veces, pero seguras otras, y de todos modos el fruto del trabajo y de los esfuerzos de la razon humana desde el principio de los siglos para conocer, con la lentitud de la verdadera sabiduría, alguna verdad mas; para equivocarnos menos.

Segun estas reglas, segun estas verdades demostradas, y esta terminología convencional, repetiremos, que cuanto existe en el universo, es, como *objeto lógico*, como objeto del estudio, y alcance del hombre, *causa* ó *efecto*. Pero el universo está organizado de tal modo, tal es la dependencia sucesoria, la correlacion generatriz de las cosas y de los eventos, que los séres en general son alternativamente *causas* y *efectos*.

La razon humana no comprende, sin embargo, que estos dos connotados puedan corresponder á todos los séres absolutamente, sin distincion, ó sin escepcion. Antes al contrario, de esa misma naturaleza *sucesoria* de los séres, de esa misma correlacion necesaria entre efectos y causas, remontándose con su vuelo, ya inteligente, ya atrevido, hasta los límites, digámoslo asi, del tiempo y del espacio, siente que una fuerza interior insuperable, la de su ingénita limitacion, la detiene: siente que tiene que detenerse ante este inflexible dilema: *ó el mundo es eterno, y esta progresion de los séres no tuvo principio, ni por tanto tendrá fin; ó el mundo tuvo principio, y los séres, retrocediendo en su progresion generatriz, llegan hasta uno, que ya no recibió de nadie su sér.* Hé aquí el último término del estudio filosófico de la *causalidad*: hé aquí tambien el escollo y el escándalo de la razon presuntuosa. Grande esfuerzo se necesita sin duda *para comprender la eternidad*; pero sin entregarse á una aberracion voluntaria, es mayor aun el que se requiere para comprender, y mayor todavía para dar por cierto *que es eterno lo perecedero; que no tuvo principio lo que vemos empezar; que no tendrá fin lo que vemos, no ya diaria, si no aun momentáneamente, desaparecer.* ¡El que nace de un padre, y va en breve á anonadarse en el mismo sepulcro, se reputará aun eterno!!! ¿Dónde, por otra parte, hallamos históricamente al hombre eterno?

Tan elevada, tan útil, tan inmensamente peligrosa es á la vez en sí misma la cuestion filosófica de la *causalidad*, que la frivolidad de los estudios, la gravedad de la materia, y no alguna vez sola las prevenciones, la reputan, ó ritual, ó impertinente. El *sentido íntimo*, *la razon*, y el *sentimiento universal*, se han decidido por lo que se presenta mas conforme *al órden general sucesorio* en el universo: á lo que se ve, y observa cada dia: á lo que cada uno observa en sí mismo, y es *que no puede ser eterno lo perecedero: que todo sér finito empieza y acaba: que la causalidad empezó para los séres que perecen; y empezó por necesidad en alguno, que si no ha de ser* perecedero tambien, porque *entonces la cuestion quedaba en pié, es de todo punto indispensable, que no empezase, y por tanto, que sea eterno.*

Hé aquí planteada y resuelta, en los términos abreviados que ella permite; como está, repetimos, mas al alcance de la humana razon; como la trae prejuzgada el buen sentido desde el orígen de los pueblos; como la han juzgado nueve décimas partes del género humano, y por tanto de buena fé, la inmensa cuestion de la *causalidad* universal, de influencia tan inmensa tambien en el órden moral y social, que es lo que la dá un lugar necesario en nuestra ENCICLOPEDIA.

Del modo que la comprendemos, y que la esponemos y aceptamos, conformes en ello con las enunciativas que sobre este punto capital consignamos de propósito en el

prólogo de esta obra, se deduce necesariamente esta primera y capital consecuencia, que, por serlo hasta tal punto, se eleva á la esfera de un principio cardinal: *todos los séres del universo son, ó primarios, ó secundarios*; ó lo que es lo mismo, *las causas*, en la acepcion filosófica mas fundamental, *son primarias, ó secundarias.* Es convencional ya en la opinion, asi como en la conciencia del género humano; y es demostrativo en la ciencia, *que no es posible mas que una causa primaria*, pues que tiene que ser *infinita*, y la razon humana *no concibe posibles dos infinitos*, porque *al uno faltaria entonces para serlo todo el sér y atributos del otro*; resultando asi que *el uno era limitado por el otro*, y en su consecuencia, que siendo *única*, é *infinita* la causa primaria, *tiene en su esencia la razon de su existencia*, sin que por tanto haya recibido de nadie su sér, ni nada pueda limitarlo, alterarlo, ni destruirlo, habiendo de ser, por tanto, *eterna*, *inmutable*, *infinitamente perfecta*, pues que de ella, *asi como todas las existencias, ha de derivar toda perfeccion.* En consecuencia de todo no hay mas que una *causa primaria.* Aristóteles la llamó *Causa causarum*: Platon, el gran *Arquitecto* del mundo. Todos los demas séres, dependiendo de la primera causa para existir y subsistir, son secundarios, finitos, perecederos: pero, dotados de eficacia, de fuerza, de virtud activa ó procreatriz, segun su género, aunque finita, reproducen su sér, ó esplican por otros efectos perceptibles dicha actividad, y entonces se llaman *causas.*

Entre estas las hay dotadas de *inteligencia* y *albedrío*, capaces por tanto de *mérito* ó *demérito* en el órden moral; y están, como *cosas*, en relacion física y general con las demas cosas, con el universo; como *personas*, con los demas séres inteligentes, siendo por tanto las únicas causas secundarias que pueden ser, y son en lo moral, y como derivaciones de este en lo social y político, en lo legal y jurídico, *sujetos de ley.* Inmensa es aquí tambien, fundamental, decisiva en la suerte del género humano, como razon de su destino, fundamento de la sociedad, base cardinal del derecho constituyente, la cuestion que examina y ha de conciliar, como sin duda se concilian, las dos leyes antedichas de la causa inteligente; su relacion *necesaria*, como *cosa* con el universo; su relacion como *persona* con las demas causas inteligentes: la *libertad* de la *causa inteligente*, y la *necesidad* de la misma, como parte de la creacion, sometida á este fin universal y complejo establecido de antemano, inalterable por parte de ella, y al que está sometida, no ya por leyes físicas, por organizacion; si no aun por instintos, como sér dotado de vida; leyes y propensiones en que sirve, no á su eleccion, no á su designio; si no al designio de otra causa superior á ella, al designio del Hacedor. Pero correspondiendo la esposicion de estos principios, la solucion de sus dificultades, á otras ciencias que la del derecho, á ellas nos referimos; puesto que el derecho, si bien tiene que examinar alguna vez las conclusiones de las mismas, dá por supuesta en sus sanciones la libertad cardinal de accion; y examinando solo la individual en cada caso particular, esplica ó aplica sus sanciones, conforme á aquel supuesto y á este exámen.

Pero al realizarlo no aspira á conocer y determinar la naturaleza del *efecto*; si no la de la causa, ó causas que lo han producido: si lo han verificado total ó parcialmente, y en qué proporcion: el motivo, el modo, el tiempo, etc.; y de aquí en la filosofía de las costumbres las enunciativas que espresan los pormenores de este juicio complejo, y reflexivo, á saber, *causa*, *concausas*, *causa física*, si es material: causa *moral* en su caso: causa *principal*, *eficiente*, *ocasional*, *instrumental*, *final*, *ejemplar*, etc.: y las enunciativas asi bien, *causar* por producir efecto: *causativo*, por tener actividad propia para efectos determinados: *causante*, por causa, etc. Las equivalentes en lo legal han de verse en el artículo siguiente.

Infiérese de lo dicho, que si la filosofía en su última síntesis se encierra en inquirir y conocer fundamentalmente, ó hasta donde sea dable, la correlacion, mas ó menos necesaria, entre las causas y los efec-

tes; bien se ve hasta qué punto en el órden moral, social y legal es este exámen eminentemente filosófico: hasta qué grado la filosofía encarna, digámoslo asi, en el derecho sobre este punto: hasta qué grado su estudio, y estudio profundo, es indispensable en todas las ciencias morales; pero especialmente en la del derecho, de lo que volvemos á hablar en el artículo siguiente.

El estado actual de la ciencia nos obliga á concluir con una observacion. Por mucho tiempo, ó mas bien desde los primeros estudios filosóficos de que la historia nos ha trasmitido noticia, se venia creyendo que la palabra *causa*, y sus equivalentes, significaban *una entidad activa*: hoy estendiéndose y complicándose los estudios filosóficos; prevaleciendo mas que nunca el deseo de adelantar; pero en grande escala tambien, el prurito de *señalarse*; por este motivo, ó por los dos, se sostiene por muchos que la palabra causa espresa solo *una idea*; que no es, por tanto, un concepto lógico, un predicado que se aplique con verdad á un sugeto. Niégase para ello que tengamos, ni nos sea posible tener nocion verdadera de *causa*. Tomando por tipo para la cuestion los actos imperativos de la voluntad humana, se dice, y con razon, que podemos tener certeza de que al mandato de la voluntad para que se mueva un pié, por ejemplo, se seguirá el movimiento; pero no la tendremos de que este provenga *ni esclusiva, ni inmediatamente* de la voluntad, porque no cabe evidencia, en el comercio incomprensible del alma con el cuerpo, de como el espíritu influye sobre la materia; ni por tanto si la voluntad realiza, ó causa con su mandato el mencionado movimiento *inmediatamente*, ó sin mediar otro agente natural; ó si por el contrario, mediando el fluido *nérveo*, ú otro fluido, *fuerza animal*, ó agente desconocido. En este caso, concluyen, de lo que tendremos certeza será, de que *al mandato de la voluntad* se ha seguido el movimiento del pié, de la mano, etc.; *pero no de que inmediatamente lo haya movido la voluntad, ni cómo*. El conocimiento en este caso es del *suceso*, de la *correlacion sucesoria* de los dos hechos, el *mandato* y *el movimiento*: esta sola idea es la que espresa, y la que puede espresar sin error la palabra *causa*; pero no la de verdadera, cierta, evidente *causalidad*. Que mande la voluntad, añaden estos filósofos, que se muevan el hígado ó el corazon, y no se moverán; con lo que creen haber probado que el movimiento de aquella no es *causa* del movimiento en el otro caso.

Ciertamente que por este medio se pudiera probar que el imperio de la voluntad no sufraga nunca. Que mande al brazo que, al moverse indefinidamente, no se fatigue; y no por eso dejará de fatigarse. Nadie ha pensado que, ni la voluntad, ni otra potencia finita, tengan eficacia *para fines no providenciales*; y no lo es seguramente el que el hígado ó el corazon se muevan á su mandato, teniendo en la economía otras funciones que llenar, y otro modo de existir y obrar que el brazo, ó la mano. Tampoco ha creido nadie que las causas secundarias sean *universales*, para poder dudar, porque no lo sean, que tampoco son causas *realmente* en su esfera de accion. Y es, en fin, poco lógico, ó es del todo ilógico, argüir de lo singular á lo universal, y nada concluiria por tanto el ejemplo tomado del mandato de la voluntad; pues todas las causas no la tienen, ni hay la misma dificultad para que influyan unas sobre otras, que para que influya el espíritu sobre la materia.

Una palabra mas y concluimos: por el antedicho sistema de duda, se viene á concluir que Dios es la causa inmediata de los movimientos en la organizacion humana: otros sostienen que no es la voluntad la que impera al brazo, á la mano, etc., si no *el yo*. Si este modo de esplicar la *causalidad* no conduce al *panteismo*, ó al *pirronismo*, conduce de seguro á hacer aquella incomprensible, y muy próximamente á hacer ociosa toda cuestion, ni filosófica, ni moral, ni legal, acerca de ella, pues aniquila, ó poco menos, el libre *albedrío*. Nuestro ánimo al hacer esta lijera escursion, es manifestar que nosotros no comprendemos asi la *causalidad*: y que en este

y en los muchos artículos en que ya hemos tratado, ó tendremos que tratar de ella, bajo los variados conceptos con que juega en lo moral y legal, es comprendiéndola como el *sentido íntimo*, y el *sentimiento universal* la comprenden y han comprendido; prácticamente, ó de un modo practicable: no *á priori*; si no *á posteriori*: por *induccion*: como, de ordinario á lo menos, es dado al hombre comprenderla, y basta que la comprendan el legislador, el juzgador, el jurisconsulto. Cuando por una constante observacion, ó esperiencia se venga conociendo que de la accion de tal ente resulta tal otro, sin que la razon humana alcance, ni la esperiencia haya dado á conocer existen entre ambos otros agentes, ó entidades á que poder atribuir el fenómeno; entonces el discurso humano concluye bien, que la primera de dichas entidades es *causa* de la segunda. En las cuestiones morales y jurídicas importará poco que en este caso, tal cual se ha precisado, la voz *causa* esprese solo *una idea*, un modo de concebir ó darse á entender, ó una *verdadera entidad activa*, generante: y ni aun en filosofía, no ya especulativa; pero aun general, importará mucho mas. Neuton dijo que no conocia la atraccion como causa; pero que llamaba atraccion al fenómeno de la *gravitacion* de los cuerpos, siquiera fuese esto tomar el efecto por la causa; y no por eso las leyes y movimientos se esplican en el orbe con menos verdad y precision.

Al final del artículo siguiente nos es preciso volvernos á hacer cargo del sistema de *no causa* aquí mencionado. Véase, como tambien ACASO, CASUALIDAD, y demas relativos á la *causalidad*, y á la responsabilidad humana.

CAUSA (EN LO MORAL Y LEGAL.) Hablar de la *causalidad* en sentido moral y legal, es hablar de ella en sentido *social*, *legal*, *jurídico*, *administrativo*: bajo el punto de vista del *deber*: en la vasta estension de las *acciones humanas*, apreciadas bajo el concepto del *mérito* ó *demérito*: segun las leyes divinas y humanas, las costumbres, los compromisos espontáneos, y hasta las leyes del pundonor; si bien por la índole de nuestra obra contraeremos principalmente nuestras observaciones en el presente artículo al órden moral, al órden legal en general, y mas particularmente al órden jurídico.

Bajo este punto de vista, el final del artículo anterior, es con igual propiedad la cabeza del presente. Y es que la cuestion de *causalidad*, en sentido moral, es eminentemente filosófica tambien, como en sentido filosófico, y mas bien son en rigor, y por parte del principio filosófico, una misma cuestion. ¿Y cómo no? El mundo *inteligente* es parte del universo, como el mundo físico y ontológico. La diferencia, pues, que establecemos, es en gran parte por razon de método: es ademas por la diferencia de *objeto inmediato*, *final*. En la *causalidad*, tomada en sentido filosófico general, el fin, ó *causa final*, es mas bien *cognoscitivo*, que *práctico*; en el caso del presente artículo es á la inversa, principalmente práctico, sin dejar de ser *cognoscitivo*: allí, la naturaleza comun de las cosas, la correlacion entre la *causa* y el *efecto*; aquí, la naturaleza moral de las mismas, la circunstancia de *causalidad* para la *imputacion* en lo moral y jurídico: punto y dificultad que tenemos que volver á tocar y desenvolver, algun tanto mas, en este mismo artículo.

Pero despréndese de ella desde luego, que la teoría de la *causalidad* es tanto mas difícil, tanto mas árdua, de tanta mayor trascendencia en sentido moral, cuanto supera la escelencia del hombre á la de los demas séres; y es preciso reconocer que, aun contraida la teoría y sus dificultades á lo legislativo y judicial; aun en las cosas y casos que menos lo parece, las cuestiones son en suma de *causalidad*. *¿Quis fecit? ¿Cui prodest? ¿Quem nocet? La crítica judicial: el criterio racional*: los *indicios* y *conjeturas*, y por tanto, la *prueba indiciaria*: infinitas de las presunciones *juris*, y de las nominadas *juris et de jure*, no son si no cuestiones de *causalidad*. El *sumario*, la *prueba*, son en suma la aplicacion de esta teoría. ¡Cuán profundo estudio no requiere en el terreno de lo moral y jurídico la que no parece si no una cuestion

ontológica, puramente abstracta ó metafísica, y aun ritual de escuela!

Y esta necesidad en el jurisconsulto, en el legislador y el juzgador, es tanto mas indeclinable; la dificultad es tanto mayor, cuanto mayor es la diferencia que media respecto al principio de evidencia entre la *causalidad* en sentido filosófico genérico, en sentido *físico* y *ontológico*; y la misma considerada en sentido *moral*.

Habíamos indicado antes una diferencia esencial en el *fin* inmediato, y específico; entre los dos puntos de vista de esta teoría: ahora hallamos otra no menor, y es preciso reconocerla tambien, en cuanto al principio *cognoscitivo*, ó de evidencia, en el que ha de descansar el *criterio racional*. En el primer caso, en la primera de estas dificultades, en el sentido del artículo anterior, el *criterio* descansa sobre las *leyes generales*, físicas ó metafísicas, *inflexibles* de suyo, las mismas siempre; como que son *necesarias*: en el segundo, el juicio humano descansa tambien sobre esas mismas leyes; pero mezclándose, uniéndose á ellas, tambien como principal, el elemento del humano *albedrío*; el *albedrío*, al que tan difícilmente se prescriben leyes; y jamás los legisladores humanos le han prescrito, ni le prescribirán bajo el punto de vista de la *causalidad*. Se le prescriben, sí: el autor de la naturaleza se las prescribió, aun bajo el punto de vista de la *causalidad*, haciéndole *finito*; pero dejándole *libre*: se las prescribió, y se las prescriben los legisladores humanos para *obrar bien*; pero si sujetan, no encadenan la *voluntad*; si restringen, no estinguen la *libertad*: queda, por tanto, el *albedrío* en la de faltar á ellas.

Y falta con frecuencia: falta llevando el abuso de su libertad hasta lo singular y lo caprichoso: dejando atrás todas las leyes, ó sobreponiéndose á ellas; cuanto mas estas le estrechan, mas ejercita su inagotable *inventiva*, esa facultad indefinida de variar, novar, disfrazar sus modos de obrar; y de aquí nace una tercera dificultad para los legisladores, al haber de apreciar y resolver la cuestion de *causalidad* en cada caso. ¡Cuántas veces por efecto de esa *inventiva* el culpable aparece inocente á los ojos del juzgador, el verdugo como víctima; y cuántas veces tambien el inocente ha aparecido y ha sido condenado como culpable! Y eso por falta de evidencia, natural y jurídica en punto á la *causalidad*. El legislador, para obtenerla, establece cánones, aun facticiamente inalterables, en punto á criterio legal: establece presunciones *juris*, y lo que es mas, *juris et de jure*; inflexibles, sin admitir prueba en contrario: autoriza ó tolera la prueba indiciaria: recomienda el estudio del corazon humano: procura hacer filosófica su legislacion: autoriza, como en la ley provisional para la ejecucion del Código criminal acaba de verificarse, sobre el criterio *legal*, el *criterio racional*. Lucha, por último, cuanto en la humana posibilidad puede exigirse, para prevenir el error, para evitar la arbitrariedad; pero lucha para tener al fin que entregarse muchas veces en manos de ella, ó autorizar la ocasion de cometerla; que eso es en ocasiones la *prudencia judicial*, el *arbitrio* del juzgador. El criterio mismo *racional* no es en ocasiones otra cosa. De aquí resulta la cuestion de las cuestiones en el órden filosófico general: la cuestion de las cuestiones en el terreno de lo moral y legal: la cuestion de *causalidad*, de la cual penden prácticamente los derechos y las garantías individuales en el órden legal y político. La justicia, y el crédito ó descrédito muchas veces de la autoridad y de las leyes, penden en no pocos casos del criterio individual del juzgador, ó de una autoridad administrativa; criterio, que reflejará de un modo inevitable el grado de probidad, de esperiencia, de ciencia de su autor. ¡Cuánta discrecion no se necesita, en vista de ello, en la eleccion de jueces y autoridades! ¡Cuán filosófica no debe ser una legislacion al establecer, sobre todo, los datos del criterio jurídico! ¡Cuán profundo estudio, volvemos á decir, no requiere la teoría de la *causalidad* en el terreno de la moralidad y del derecho!

Pero la materia ofrece aun en este concepto una nueva dificultad. Reseñando la natu-

raleza del *libre albedrío*, hemos indicado que todavía los legisladores humanos no le han prescrito, ni le prescribirán nunca su última ley en el terreno de la *causalidad*. Libre siempre hasta el abuso: fecundo, hasta funestamente, en variar y disfrazar sus modos, en ocultar sus caminos, seguro de que no se ha de castigar al que no aparezca reo, esto es, *causa, agente, autor*; lleva su inventiva hasta la hiprocresía; y el humano legislador tiene que atajarle tambien en este terreno. Lo propio el juzgador al hacer uso de su arbitrio judicial: pero ¡con cuánto riesgo uno y otro! El legislador recurre en tal caso á un órden estraordinario y hasta mas ó menos facticio, con que esplica, ó cree esplicar; suple, ó cree suplir; y no pocas veces contra su propósito, complica ó contraría el curso ordinario, ó *rigorosamente filosófico*, que cree de buena fé no bastar en casos determinados, ó que realmente no alcanza. La procacidad, el escándalo, la deprabacion especial de una época, lo recio y aciago de las circunstancias y de los tiempos, le obligan entonces á adoptar disposiciones, á establecer criterios de *causalidad*, conocidamente violentos, notoriamente arriesgados en el terreno filosófico, que descansan, en fin, sobre una *causalidad* facticia, sobre un supuesto, que puede ser cierto ó falso; pero que por eso mismo no es la *verdad*.

Las indicadas razones de actualidad podrán justificar la sancion; pero, repetimos, siempre con riesgo. Se han impuesto muchas veces en estos casos hasta las penas mas graves, por ejemplo, á los que llevaban armas prohibidas en tiempo ó lugares determinados; y solo por el hecho. Se hacia aquí el supuesto de que tales armas eran precisamente para el crímen. Dando por sentada y probada esta intencion en el agente, se le reputaba reo, causa del delito que trataba de reprimir, ó de castigar: la cuestion de *causa* se resolvia desde luego contra él, por una circunstancia que en el órden filosófico no tiene relacion *necesaria* con el crímen, como la tiene, por ejemplo, el fuego puesto de propósito, ó no de propósito, á un edificio con la combustion que se ha seguido: y mas aun, se le reputaba *causa* de un *efecto*, que no habia existido tal vez; reo de un crímen que en muchas ocasiones no se habria cometido. Por los mismos principios se reputa y ha castigado como reo de rebelion al que en circunstancias dadas ha sido hallado con armas, ó sin ellas, en parages determinados, en camino de un campo rebelde, á la inmediacion de él. La cuestion de *causalidad* en estos casos, realmente no se juzga, si no se *prejuzga*, por el legislador, autoridad ó gefe, autor de los bandos. Acercándose mas al órden rigorosamente filosófico presupone la ley, por ejemplo, y dá por sentado, que si un jóven y un anciano perecen en un incendio, aquel murió primero. No hay evidencia de ello, ni aun moral; y las cosas pudieron muy bien pasar de otro modo, como en otras infinitas presunciones del derecho. *Al que es malo, por ejemplo, una vez, se le presume siempre malo en casos idénticos.* La ley establece aquí el *criterio*, y el juzgador tiene á su vez que fundar el suyo en este principio: *de regulariter contingentibus judicium ferendum est.*

Pero ¿son imposibles los casos estraordinarios? ¡Cuántas veces *la verdad no es verosímil*! Todo ello requiere, como ya antes aparecia de lo dicho, y siempre aparecerá bajo cualquier punto de vista que se trate esta grave cuestion, la necesidad, ya reiterada, de un profundo estudio *ontológico*: de costumbres y sentimientos: del corazon humano: de que toda legislacion sea filosófica, cuanto mas sea posible: y que aun las desviaciones, con frecuencia inevitables en el curso de los sucesos humanos, del órden absolutamente filosófico á que nos vamos refiriendo: la sustitucion de lo *ordinario* por lo *estraordinario*: la teoría de la *verdad* y de la *bondad relativas* sobre la *verdad* y la *bondad absolutas*, han de procurar ceñirse á principios filosóficos. Cuando dichas teorías y determinaciones no estén á prueba, como no están siempre, de un exámen rigorosamente filosófico, ó son ya arbitrarias en sí, ó llevan inminente riesgo de serlo. No seremos prolijos en citar casos de comprobacion de esta verdad lamentable; pero indicaremos

uno, y bastará entre los infinitos que podrian citarse. Es de todos sabido que en la antigua jurisprudencia se reputaba un principio en materia criminal, que *in atrocioribus, vel minima indicia sufficient.* Sobre este principio práctico descansaba el criterio legal. Por él eran juzgados los hombres: y estremece el pensar con qué facilidad y falta de fundamento filosófico podia un inocente ser condenado, y lo seria infinitas veces. Hoy la moderna jurisprudencia retrocede horrorizada ante el dislate filosófico llamado principio; y halla mas filosófico, y lo es evidentemente, que si el *efecto* ha de responder, como en el curso ordinario de la naturaleza, segun las leyes comunes de la *causalidad*, corresponde á la *causa*, para un mayor crímen se necesita un grado proporcional, es decir, mayor, no ordinario, de deprabacion y resolucion que lo comun. Y no siendo ese el tipo normal de la deprabacion y de la resolucion punible del comun de los hombres, no puede darse por supuesto, y darse por probado por lijeros indicios; y antes en tal caso un indicio prueba menos que otro de igual naturaleza en casos ordinarios. Las leyes filosóficas de la *causalidad* se subvierten en tales casos; ó bien son reemplazadas, como hemos dicho, por un criterio y *causalidad* facticia.

Por lo que hace á la terminología, aun significando las mismas cosas, es á veces diversa en lo moral y legal que en lo filosófico. Asi, lo que en la filosofía general es *causa, concausas, causa principal, eficiente, moral, ocasional, parcial*, etc., etc., en lo moral y legal unas veces conservará esas mismas denominaciones: otras se dirá, segun la materia y su tecnología, *caudillo, cabeza, autor, reo principal, principal motor, agente principal, cómplice, correos, instigadores, ausiliadores*; la *causa instrumental, instrumento*; la *causa final, fin*; la *causal, motivo*: el *efecto* crímen, falta, contrato, daño, etc.; pero siempre la cuestion es de *causalidad. Quis fecit? Quem nocet? Cui prodest?*

Hay todavía en esto una diferencia en la teoría de las *causas* en sentido físico, metafísico, filosófico absoluto; y la misma en el terreno de la moral y del derecho: diferencia indicada al principio del artículo, y que corresponde aquí esplanar. En el primer concepto el fin es, como hemos dicho, principalmente *cognoscitivo*, puede ser por tanto puramente teórico, abstracto: en el segundo, sobre ser tambien cognoscitivo, es principalmente práctico, y encaminado á la *imputacion*, á la responsabilidad; al mérito ó demérito de las acciones humanas en caso particular. En la filosofía general el filósofo puede pararse, satisfecho el fin *cognoscitivo*, hallada la causa del fenómeno: puede suceder que no buscase otra cosa: en el órden moral y jurídico, en el órden legal no es asi: ni el legislador, ni el juzgador se mueven solo por miras científicas; si no de aplicacion del derecho constituyente, y del constituido. Obedeciendo á este deber y fin de su destino, no solo inquirirá el juzgador, por ejemplo, é inquirirá hasta con rigorismo de conciencia, quien es el autor, la *causa* de un *efecto* dado; si no con qué grado de libertad, y voluntariedad se ha cometido el hecho; qué impulsos naturales, qué sujestiones, qué circunstancias agravan; ó bien atenúan su gravedad: *quid, ubi, per quos, quoties, cur, quomodo, quando.* La tarea del filósofo por otra parte puede ser, y suele ser espontánea: la del legislador y juzgador, la del jurisconsulto, la del causídico, supuesta la aceptacion del cargo, sagradamente obligatorias. ¡Y con qué diferente trascendencia! ¿Qué puede importar para la suerte y destino del género humano en sí, ó personificado en la individualidad, derechos y garantías de cada hombre, el error padecido por uno en determinar, por ejemplo, la causa de una *aurora boreal*, de la nieve, del granizo, de la formacion de un *aerolito*, del retardo en la aparicion de un cometa, etc.? El mundo no será por eso perturbado en su marcha: la ciencia puede esperar: si un filósofo ha padecido error, otro podrá acertar; pero en lo moral y político, en lo judicial sobre todo, no se cometerá el error sin que resulten lastimados los fueros de la justicia: no errará el juzgador sin que resulte un individuo, ó muchos, mas ó menos, tal vez de un

modo estremo é irreparablemente, perjudicados.

Para evitarlo, la ciencia tiene demostrados los caminos que en conciencia no pueden menos de recorrer el legislador, el juzgador, el jurisconsulto, el causídico: la ciencia tiene establecidos los principios sobre que descansa el *criterio racional*: la ley los que constituyen, é ilustran el *criterio legal*. Una cosa notaremos sobre este punto y es, que reduciéndose en lo moral y jurídico todas las cuestiones á dos, á la de *hecho* y á la de *derecho*; y estando ceñida la primera á averiguar el *hecho*, y su *autor*, la *causa* y el *efecto*; no es en suma la cuestion de hecho, en su vasta estension, en su irreducible variedad, en su inmensa trascendencia, no es en suma, decimos, si no la cuestion de *causalidad*, cuyos infinitos pormenores apenas han podido ser si no indicados en el presente y anterior artículo, correspondiendo su desenvolvimiento á otros muchos análogos; el desenvolvimiento parcial á cada uno de ellos, el completo al conjunto de los mismos.

Añadiremos ademas, que cualquiera que sea la identidad de objeto de la tecnología filosófica, y de la moral y jurídica; el legislador, por razones de otro órden que el filosófico de la *causalidad*, puede para el efecto de la penalidad atribuir á dichas *causas*, *autores*, *agentes*, etc., otro concepto. En lo filosófico absoluto, por ejemplo, *causas parciales* son las que no producen solas el efecto dado; si no concurriendo con otras, y concurriendo, no como causas *absolutas*, *eficientes*; si no como tales causas parciales. Esto último son en lo moral y en el derecho los *cómplices*. Y sin embargo, dejando en ello intacta la cuestion de *causalidad*, la ley por razones, decimos, de otro órden, con conocida justicia en ocasiones, por principios sostenibles al menos, unas veces para el efecto de la penalidad ha considerado á los *cómplices* como *coautores principales*, esto es, á las *causas parciales* como *causas totales*, ó *absolutas*; y segun el caso, al mero *aconsejante*, al *instigador*, es decir, á la causa *moral*, *ocasional*, etc., como *causa eficiente*. Asi por ejemplo, en la antigua legislacion y jurisprudencia *autores principales* y *cómplices* eran todos castigados con la misma pena, es decir, eran considerados como causas *totales*, *absolutas*, *eficientes*, como *autores principales*, siendo la síntesis de aquellas legislaciones y jurisdrudencia el conocido principio: *agentes, et consentientes similem incurrunt pœnam*. Hoy el Código penal como es sabido, ciñendo, digámoslo asi, la cuestion de *penalidad* á la de *causalidad*, distingue entre *autores principales* y *cómplices*, entre *causas totales* y *causas parciales*, aplicando con analogía á este connotado y proporcion las penas. Todavía la ley, con razon sostenible repetimos, amplia el concepto filosófico de *causa principal*, *total* y *eficiente*, para el caso mismo de la penalidad, á los que no lo tienen en rigor filosófico. El artículo 12 del Código penal, por ejemplo, dice asi:

«*Se consideran* autores:

1.° Los que *inmediatamente* toman parte *en la ejecucion del hecho*.

2.° Los que fuerzan ó *inducen* directamente á otros á ejecutarlo.

3.° Los que *cooperan* á la ejecucion del hecho por *un acto sin el cual no se hubiera efectuado*.» Los del párrafo 1.° son en realidad causas *eficientes* y *totales*, pues son solos los que ejecutan: los del párrafo 2.° son causas meramente *morales*; en el mismo caso se hallan los del párrafo 3.°, y cuando mas ellos, como los del 2.°, podrán merecer el concepto de *causas parciales*; y sin embargo la ley los iguala á la causa *eficiente* y *total*, y los castiga con la misma pena. Repetimos que en ello queda intacta la cuestion de *causalidad*, reducida á averiguar y demostrar, si en efecto las causas *totales* y *parciales* lo son de la parte que se les atribuye en el hecho. Por lo demas, tan lejos está el que *induce* y el que coopera *por un hecho*, sin el cual el delito *no se hubiera verificado*, tan lejos están, decimos, de ser causas en rigor filosófico *eficientes*, *totales*, del delito, que en primer lugar vemos no toman parte inmediatamente en la ejecucion de él; y que tan lejos está su cooperacion de

inducir *necesidad* absoluta en la ejecucion ó perpetracion, que pudo esta muy bien no seguirse por arrepentimiento, por accidentes imprevistos, por motivos independientes de la voluntad de los ejecutores. El legislador mismo comprendió, y quiso salvar esta falta de exactitud filosófica, diciendo, como ya hemos indicado en otro artículo, no que las tres mencionadas clases de *correos son autores* principales; si no que *se consideran* autores.

Indicando al fin del artículo anterior algunas de las opiniones filosóficas sobre la grave cuestion de la *causalidad*, hemos mencionado los estremos á que conducen, siendo algunos de ellos el *escepticismo* filosófico, y la anulacion del libre *albedrío*, sobre cuyas bases ningun legislador puede levantar el edificio de ninguna legislacion merecedora de este nombre. Hemos dicho allí que, sea lo que quiera de lo exagerado de tales sistemas en el terreno de la filosofía general, en el cual, ni en lo especulativo, ni en lo esperimental obstan sus conclusiones en la cuestion abstracta de la *causalidad*, como lo hemos demostrado con el sistema neutoniano; empecen aun mucho menos en el órden moral y legislativo. Hemos añadido en consecuencia de ello, que para el legislador, para el jurisconsulto, y lo propio para el preceptista de moral, en lo relativo á las acciones humanas *es causa* para el *mérito* ó *demérito* lo que el sentido íntimo y la esperiencia universal aprenden como tal, si no por *demostracion*, por *induccion*: porque *ordinariamente* siempre los fenómenos ó hechos de que se trata se han realizado y realizan segun la misma correlacion de efecto y causa. No tienen otro fundamento las reglas y principios de la buena crítica judicial. Por eso está admitida y sancionada, y sancionada sábiamente, la regla de derecho, *de regulariter contingentibus judicium ferendum est*: en la misma se apoya, entre otras infinitas, la célebre regla de crítica judicial en los casos dudosos, *is fecit, cui prodest*; pues que es ordinario en el proceder del comun de los hombres, que ninguno se mueva deliberadamente para su daño; que todos por la inversa se muevan mas bien para su provecho.

Y en cuanto á la certeza, y evidencia metafísica, que es el objeto de los antedichos sistemas filosóficos, ¿para qué se necesita que el ébrio, por ejemplo, conozca física, ó químicamente la composicion y propiedades del vino, toda vez que el efecto ordinario en el esceso de este es la embriaguez? ¿Qué añade ó quita á la evidencia moral sobre la deprabacion é intencion del incendiario convicto, y por tanto para declararle *causa*, el que este conozca, ó no, y lo mismo el juzgador, la teoría de la combustion; si entre esta y la aplicacion criminal del fuego median otras entidades, ó coagentes; la parte que en ella tengan el oxígeno, el hidrógeno, ni otros agentes naturales? ¿Qué argumento seria contra la evidencia legal, el decir, que sin la intervencion de dichos agentes la combustion no se hubiera seguido, como es verdad, á pesar del hecho punible de la aplicacion del fuego; y que aquellos, y no este, ni por tanto la accion del incendiario son la causa del *fuego*? No de otro modo se concluye en los antedichos sistemas á que nos referimos que, porque pueden mediar entre el mandato de la voluntad para el movimiento del brazo ó de la mano y el movimiento de estos, algunos agentes naturales, como el fluido *nérveo*, por ejemplo, ó porque no tenemos evidencia de que no median, no podamos asegurar que el mandato de la voluntad es *causa* del movimiento citado. En lo relativo á las acciones de los hombres, en lo moral y legal, la razon universal, y los legisladores interpretándola, tienen tomado su partido: *qui est causa causæ, est causa causati*: *qui vult quod antecedit, vult et quod consequitur*, segun las reglas del derecho. El que quiere el asesinato, y para ello dispara adecuadamente el arma homicida, quiere la accion é intervencion de todos los agentes químicos ó físicos, que *necesariamente* se sigue al primer movimiento eficaz aplicado para la esplosion: estos agentes podrán ser la causa *inmediata* de la muerte, como lo es la ruptura ó destruccion de un vaso arterial, de una entraña; pero la causa *mediata* lo es el asesino.

Este ademas es causa inteligente, voluntaria; los agentes naturales mencionados, causas materiales y necesarias.

Pero este sistema, nos dirán, conduce precisamente al de Hume, que es el que principalmente se viene combatiendo sobre la *causalidad*. Segun aquel sistema, la palabra *causa* no espresa *una entidad generatriz*; si no *un suceso*, un hecho *que sigue á otro*, ó *sucede despues de otro*; lo cual es ciertamente un *caso*, pero no una *causa*: y la cuestion que parece de *causalidad*, no lo será si no de *casualidad*. En ese caso seria muy posible tomar el *error* por *verdad*, ó incidir en el error y sofisma conocido *non causa, ut causa*.

Sin duda ninguna el anterior sofisma es uno de los mas frecuentes, como empleado á un tiempo por la *ignorancia* y por la *mala fé*. *Hoc post hoc*? luego *hoc ex hoc*, dice el ignorante, y dice por opuesta razon, cuando le conviene, el que se propone abusar del talento, ó de la agena credulidad. ¿Tal hecho siguió inmediatamente á tal otro? Luego este es causa de aquel. Este modo de raciocinar, sin embargo, es propio, repetimos, de la malignidad ó del vulgo; y ciertamente tienen que prevenirse no poco contra él los juzgadores; pero no es este el criterio de causalidad que nosotros establecemos, ó mas bien que en materia moral tiene adoptado el género humano. Una persona tomó tal sustancia alimenticia y en seguida murió: luego murió por tomarla: dicha sustancia fué la causa de la muerte. Deducir de este hecho singular la naturaleza deletérea, por ejemplo, de esta sustancia, puede ser un abuso de la lógica; pero si siempre, desde que hay espiriencia de ello, los que la toman, mueren en seguida; esta es una deduccion natural, rigorosamente lógica. Esta cuestion es de *causalidad*, no de *casualidad*. Se funda en lo que ordinariamente sucede. Y ¿por ventura se han deducido de otro modo las cualidades de la mayor parte de las sustancias, las propensiones de la mayor parte de los séres? ¿Es otro, ni el camino, ni el medio, ni el resultado de la observacion filosófica? ¿Es otro tampoco, en la mayor parte de los casos, ni aun el de la esperiencia? Mas arriba hemos citado algunos de los principios en que descansa el criterio en lo moral y legal; aun en el mundo físico tiene adoptado el buen sentido un principio análogo, de nadie hasta ahora negado, á saber: *qualitates, quæ observantur sine incremento, aut decremento in eis corporibus, in quibus experiri licet, pro universalibus corporum propietatibus habendi sunt*. En otros artículos nos proponemos ampliar mas nuestras consideraciones sobre el criterio moral.

Al concluir este artículo nos es preciso notar que, en el anterior (CAUSA, *en sentido filosófico general*), hemos tratado de la *causalidad* en abstracto, genéricamente; en sentido puramente *ontológico*, y por tanto, como si no hubiera en el universo mas causa *inteligente* que la *primaria*. Las causas *inteligentes* secundarias, el hombre se comprende allí, como la especie en su género, como uno de tantos agentes naturales, prescindiendo de lo que en él es específico, el *albedrío* y la *inteligencia*, y por lo mismo, sin consideracion á la imputabilidad, que no es objeto de la *ontología*; si no de la *filosofía del hombre*.

En el presente artículo descendemos del género á la especie: estraemos á la *causa inteligente secundaria* de la universalidad de las *cosas* para considerarla como *persona*; que no puede ser *causa* sin *merecer*, ó *desmerecer*. El artículo es por tanto *ontológico-moral*: tratamos en él de la causalidad *ontológica* con aplicacion al órden moral y legal, y de su primera é inevitable consecuencia, que es la *imputabilidad*.

Pero la moral y el derecho, al determinar la *imputabilidad*, aprecian, como es inevitable si el juicio ha de ser justo, los grados de *advertencia* y de *libertad* de la causa inteligente: lo *voluntario* y lo *libre*: los *motivos* y los *fines*: el influjo de otras *concausas*, ora *físicas*, ora *morales*: y acomodando las enunciativas á sus fines especiales, segun el caso, dan á la palabra *causa* multiplicadas y diversas acepciones, mas ó menos propias, ora en sentido natural, ora en sentido figurado, en que se parte, sí, de los principios

generales de la *causalidad*, asi *ontológica*, como *ontológico-moral*; pero ateniéndose mas á dichos fines especiales: mas á lo usual, ó tecnológico, que al rigor filosófico; sin que por eso sea menos necesario conocerlas. En este caso se hallan en lo moral; pero especialmente en ambos derechos, las enunciativas causa por *motivo*; por *razon*; por *derecho de pedir*, por *pleito*, ó *proceso*: causa *justa*, causa *falsa*, *lucrativa*, *torpe*, *pia*, etc., y otras infinitas. Interminable seria el dar razon de cada una de ellas en particular. De muchas se hace en artículos de otra denominacion, como se verifica al tratar de la desheredacion, de la ingratitud, de la enagenacion de los bienes de la Iglesia, etc.: de las principales acepciones en que es mas técnica, ó mas específica la *causa* en el mencionado sentido, damos razon en los artículos siguientes.

Véase ademas CASUALIDAD, CAUSA (*en sentido filosófico general*), CRITERIO, CRITICA, FILOSOFIA, IMPUTACION, INDICIOS, PRUEBA.

CAUSA (POR MOTIVO). En lo moral y legal se llama *causa* algunas veces el motivo, el fin, la razon impulsiva del operante.

Este artículo es realmente una seccion de los tres anteriores. En el *principio* conviene con ellos, pues en el terreno de la filosofía general, no hay mas que *causas* y *efectos*; y el que un agente, un hecho, una circunstancia influya solo indirecta ó parcialmente en que el efecto se siga, no le quita en aquel caso el concepto *ontológico* de *causa*, en su género. Pero en el artículo primero de causa se trata solo de fijar este concepto, *filológica* y *ontológicamente*, esto es, del modo metafísico, mas universal y abstracto que es posible: en el segundo, ó sea de la causa en sentido filosófico general, se establece la correlacion entre la causa y el efecto, y se hace la clasificacion de causas, sin descender á leyes especiales de causalidad: por leyes comunes ó causas materiales, sin descender á causas determinadas, salvo la primaria, como base y fundamento de la teoría de la *causalidad* en todos los órdenes de la creacion. En el tercero, ó sea de la *causalidad* en el órden moral y legal, ya se hace aplicacion de la teoría abstracta á la primera de las categorías y órdenes de la creacion: á las causas *racionales*, dotadas de *inteligencia* y *libre albedrío*. La ciencia moral y legislativa, por razon de método, por conveniencia, por la inmensa importancia del objeto, y por todo junto, distingue en su terminología entre el *agente*, causa, ó autor de cuya responsabilidad, mérito, ó demérito se trata, y los motivos que le han determinado á obrar; y este es el objeto del presente artículo, y su diferencia de los anteriores. Asi, la clasificacion, la diferencia entre ellos, no es nuestra, ni de nuestro sistema espositivo; si no de la ciencia misma y su terminología. Diremos, sin embargo, que esta, como la ciencia, tienen un fundamento solidísimo, pues que á veces el exámen de los *motivos* y la certeza de su influencia sobre la voluntad del agente en caso dado, constituyen la responsabilidad de este, la destruyen; la atenúan, ó la agravan, y no puede darse idea mas exacta de la importancia de los *motivos*, que el ver que no solo pende de ellos la cuestion principal en lo moral, y lo legislativo; si no que la reemplaza, pasando asi á ser principal la cuestion accesoria. Ni podia ser otra cosa, supuesto el principio filosófico por todos reconocido de que *voluntas humana sine motivis sese non determinat*. Asi, la teoría y cuestion de motivos es tan universal, de tan vasta y elevada trascendencia, como la de *causalidad*; bien que ya hemos insinuado, que no se diferencian si no en el fin, y por razon de método; siendo ambas una misma cosa en el *principio*.

Algo hemos indicado ya de sus fundamentos y pormenores en el anterior artículo, y de su importancia. Ahora diremos, que prácticamente el sistema de motivos es la teoría de circunstancias *atenuantes* y *agravantes* en lo penal; la motivacion, en lo *judicial*: y si ellos deciden con su favorable ó funesto, legal ó punible influjo, de la *razon*, que pueden ofuscar, ó iluminar: de la voluntad, que pueden rectificar ó deprabar; favorecer ó reprimir: de la libertad que pueden asimismo coartar, y aun estinguir; la cues-

tion de motivos es teórica y prácticamente la de *voluntad*, *libertad* y *responsabilidad*; encierra el *criterio racional* y *legal*.

En este terreno el legislador, y el juzgador examinarán respectivamente: 1.° La cuestion de *causalidad*, ó sea la existencia efectiva del que se dice motivo. 2.° Su correlacion y conexion *necesaria*, ó meramente moral, con el caso de cuya imputacion se trata. 3.° Su influencia ordinaria, y por principio, general en tales casos: con arreglo á este principio, los legisladores establecen los fueros, remedios, exenciones, presunciones y circunstancias relativas á la edad, al sexo, á los vínculos de la sangre, á los sentimientos de familia, etc. 4.° Su influencia lógica, local, de clase, etc.: conforme á esta base tambien, en algunas legislaciones especiales se ve la disposicion singularísima de que al juzgar los crímenes, cometidos reinando viento levante, esta circunstancia se *reputa atenuante* para la penalidad. 5.° Su influencia, en fin, personal, ó que realmente haya tenido en el caso dado, habida consideracion al sexo, edad, estado, profesion, hábitos y precedentes, estado de salud, y de fortuna, capacidad, grado de instruccion, creencias, situacion política ó social, complexion, categoría, etc., en una palabra, *la vida de relacion del hombre*, cuanto influye en sus deliberaciones; é influye todo. Hemos mencionado, por ejemplo, el estado de salud, las situaciones morales: y ¿cuántas veces una melancolía habitual, el tédio de obstinados padecimientos, el pesar de pérdidas mas ó menos irreparables, impelen á las resoluciones mas desesperadas, sin escluir siquiera el suicidio? ¿A cuántos engrandece el infortunio; mientras el mismo hunde y aplana moralmente á los que en la prosperidad parecian estar mas á prueba de él? Podrá ser un sarcasmo, y no un principio el apotegma de la filosofía vulgar, *el hombre es todo situaciones y circunstancias*; pero es una verdad irrecusable el principio de la filosofía general, de la filosofía de todos los tiempos, *quidquid recipitur, ad modum recipientis recipitur*: es una verdad, no ya fisiológica; si no de sentido comun, que el hombre *está en relacion con toda la naturaleza*, y vive en vida de relacion con todos los séres: es una verdad incontestable el apotegma, tambien de la esperiencia universal, que *el que padece no se parece*: y las obras científicas, los estudios del influjo físico sobre lo moral, y de lo moral sobre lo físico; la moderna fisiología, sobre todo, Pascal, Labater, Wiseman, en sus *razas* y *lenguas*, Cabanis, entre otros, en su célebre memoria sobre el particular, prescindiendo aquí del fin con que se escribiera y lo exagerado de sus deducciones, y aplicaciones; demuestran hasta qué punto influyen sobre el hombre, no ya la salud, las enfermedades, la prosperidad, el infortunio, la educacion, etc., si no aun la localidad, el clima, hasta la *alimentacion*.

El legislador y el juzgador tienen que luchar aun con los escesos de la ilustracion, con la audacia ó el abuso de los estudios fisiológicos en los últimos tiempos, los frenológicos, sobre todo, que asi, segun sus estudios y opiniones, pueden influir sobre su ánimo, y prudencia, como los motivos sobre el ánimo del reo, del sugeto de ley, sobre lo cual, segun hemos manifestado ya en otra parte, espondremos nuestra opinion en su lugar oportuno.

El legislador y el juzgador, en fin, tienen todavía otra dificultad mayor que superar, ó por lo menos no menor. Era poco haber de penetrar en los senos, nunca bien conocidos, del corazon humano. En la apreciacion de las acciones; pero muy especialmente en la de los motivos, ó causas impulsivas, es preciso llegar hasta la intencion. ¡Cuántas veces el mismo agente no podria asegurar la intencion que le animó, y las variaciones de ella, segun las dificultades, ocasiones é incidentes en la ejecucion del hecho! Y aunque las declarara, no podria siempre ser creido. *Nemo mentitur in suum dedecus*: nadie miente para su daño y deshonra, segun la espresion de Tertuliano: tambien es cierto que ni aun la verdad se dice de ordinario para tales fines: por lo menos la abnegacion y el sacrificio no son en eso la ley normal del género humano; y mas bien lo es la con-

traria. Los legisladores han acudido en este punto hasta á la religion del juramento judicial contra el estudio y la cautela del egoismo, de la hipocresía, y de la deprabacion; y no solo no ha bastado; si no que las legislaciones modernas han tenido que suprimirlo en las confesiones, por evitar el sacrilegio y el escándalo. Por motivos de otro género, que aquí no examinamos, empiezan á suprimir, como lo ha verificado entre nosotros el real decreto de 26 de mayo de 1854, hasta la misma confesion con cargos. De este modo, á pesar del sistema penal mejor concertado, á pesar del rigorismo de la legislacion penal; la *prudencia judicial*, es decir, la *jurisprudencia judiciaria* comparte la primacía con la legislacion escrita, y aun en infinitos casos, en el terreno práctico, decide de esta, pues que la *cuestion de hecho*, ó de *causalidad*; y la de *penalidad*, subordinada á la apreciacion de los *motivos* y *circunstancias*, arrastran consigo la cuestion de *derecho*.

Es preciso notar á este propósito, que los hechos accesorios al principal, las circunstancias, las *causas* en el sentido del presente artículo, tienen en la mayor parte de los casos el doble concepto de *indicios* y de *motivos*: sirven á un tiempo para probar por induccion la *causalidad* y la *penalidad*; si el encausado es delincuente y con qué grado de culpabilidad: ¡ doble deber y cargo del legislador; pero sobre todo del juzgador, que no permiten creer á propósito para el oficio judicial mas que á las eminencias científicas, de prudencia y esperiencia probadas ademas, ó hacen estremecerse por los derechos y garantías del hombre! El superior revisará y modificará el juicio del inferior: en la tecnología jurídica, en la necesidad de llegar á la cosa juzgada, porque las *lites* han de tener término, se dirá aun, que el superior *enmienda* la sentencia del inferior: pero siempre en virtud del mismo *criterio*, del arbitrio y *prudencia judicial*; con los mismos riesgos por tanto, pues no han hecho mas que trasladarse. Muchas veces el superior revoca por injusta, nula ó errónea, la sentencia del inferior: otro superior revoca la suya: y ¿qué evidencia hay de que un superior todavia en cuarto grado no revocase la segunda revocatoria, y otros aun otra y otras?

No traemos estas consideraciones para apreciar aquí el sistema judicial, ni el valor de la cosa juzgada: las traemos únicamente esponiendo, apreciando, encareciendo, si se quiere, la dificultad del cargo legislativo y jurídico en este punto, por si fuera posible hallar su remedio absoluto; que no se hallará, ni está en la naturaleza de las cosas; para llegar por lo menos al remedio posible.

Toca este en parte á la legislacion; no será todo. Haciendo cuanto es dado á la misma sobre las pruebas *taxativas*, formulará y sancionará la teoría de *indicios* y *conjeturas*: la de circunstancias *agravantes* y *atenuantes*: exigirá, como las de Partida, que las pruebas de un delito sean *claras como la luz*; pero no está en su mano el evitar las sombras inseparables de esta luz, en suma, metafórica; pues que al cabo el tipo de su claridad lo ha de fijar en muchos casos el prudente arbitrio del juez. Señalará algunas de las circunstancias agravantes ó atenuantes; pero por vía de ejemplo, y bajo la fórmula y *otras análogas*, autorizará el *arbitrio judicial*. Establecerá, en fin, la *evidencia legal*: para llegar á ella, el *criterio legal*; pero cuando no sea dado arribar á dicha evidencia, antes que sancionar la impunidad, sustituirá el *criterio legal* con el *criterio racional*.

Hoy todavia las modernas legislaciones establecen otro deber penoso, ó mas bien es el mismo de que venimos hablando, variado en su forma y aplicacion. Nos referimos á la motivacion de las sentencias, garantía por una parte de la justicia; por otra escollo posible de la reputacion y prestigio personal del juzgador y de la magistratura: piedra de toque, de doble efecto siempre, respecto de la cosa juzgada. Bajo el punto de vista del efecto perjudicial, de la desautorizacion, prohibian la *motivacion* las leyes recopiladas: bajo el punto de vista del efecto favorable, la establecen las leyes del dia en gran número de casos; y nosotros trataremos en

su fondo esta cuestion en su lugar oportuno. Mencionámosla aquí únicamente como uno de los casos de aplicacion de la *apreciacion judicial* de motivos, circunstancias, casos accesorios al principal; en cuyo concepto el *criterio racional*, la cuestion de apreciacion de tales circunstancias, como *indicios* ó en la prueba indiciaria de *causalidad*; como *motivos* ó causas *impulsivas* del hecho; como razones y fundamentos de un fallo judicial, y la *motivacion*, son una misma cosa en el fondo.

Despues de todo, ni siquiera hay que deducirlo, queda evidenciado por lo dicho, que el único fundamento sólido del criterio racional, el remedio cardinal en las dificultades del arbitrio judicial, el posible y mas seguro al menos, son por parte del juzgador profundos y esmerados estudios filosóficos, fisiológicos y jurídicos; observancia estricta de las leyes y prácticas judiciales: por parte del legislador, prescripcion y buena organizacion de esos estudios; legislacion filosófica, precisa, esplícita y previsora; adecuada organizacion de tribunales; sistema de garantías é inalterable severidad en el nombramiento de jueces; conducente remuneracion, prestigio y ventajas de los mismos; leyes severas é inflexibles de responsabilidad judicial.

Se dirá, y lo comprendemos: ¿cómo se consultan, de qué aprovechan esas garantías en la institucion del jurado? ¿en los tribunales revolucionarios? ¿en las comisiones ejecutivas y tribunales improvisados, que son revolucionarios á su vez? ¿en la ejecucion de los bandos militares en casos dados; y aun en los juicios militares en general, en los consejos de guerra, en todo tribunal de legos, en fin? Cualquiera que sea la fuerza de esta reflexion, es mas bien contra estas clases de tribunales, que contra el remedio de la arbitrariedad y el error, antes indicado. No es de este lugar el examinar si esas instituciones pueden mejorarse, si muchas deben suprimirse, si pueden reemplazarse, si algunas entre ellas ni existen, ni han debido existir si no por abuso, por vicio de la legislacion, por lo azaroso de los tiempos: pero sí habrá que reconocer que cuanto mas se consulte en la formacion é institucion de ellas el sistema arriba indicado, tanto menos de temer serian los abusos y errores de los mismos; y que siempre seria una ventaja incontestable de la justicia, aunque solo fuera aplicable á los tribunales comunes, y como teoría general, que es el objeto de este artículo, cuyos multiplicados pormenores corresponde desenvolver, y desenvolveremos en muchos otros.

CAUSA (POR RAZON). En lo moral y legal, la voz causa no espresa siempre la *causalidad*, esto es, la derivacion *ontológica* de una cosa de otra; si no lo lícito, ó ilícito de la accion: á veces la mera esplicacion de esta, dada por el mismo agente, una mera enunciativa, que en ocasiones nada influyó, ó que la ley reputa no haber influido nada en la causalidad: lo cual necesita esplicacion.

Para ello ha de tenerse presente que *causa*, *razon* y *motivo* en filosofía general ó abstracta significan una misma cosa, y se usan como equivalentes. En el principio *nihil contingit in rerum natura sine ratione sufficienti, cur potius sit, quàm non sit*, esto es, nada sucede *por acaso*, *no hay efecto sin causa*, vemos que *razon* se toma en la acepcion completa de *causa*. Aun al tratar de la *causalidad ontológico-moral*, en el principio asimismo filosófico *voluntas humana sine motivis sese non determinat*, vemos que *motivo*, se toma por *causa impulsiva*, como hemos dicho en el artículo anterior.

En lo moral y legal, sin embargo, unas veces las tres voces significan una misma cosa: otras diversa: ó si se usan como equivalentes, no espresan siempre, repetimos, la causalidad, si no accidentes de ella, ó bien la causalidad considerada bajo otro punto de vista que la generacion ó procedencia del efecto principal. Y como diversas acepciones espresan, ó deben espresar, diversos conceptos, de aquí la necesidad de analizar y distinguir aquellas.

En razon de ello fácil es observar, que en filosofía general, tratándose *del ente en general*, en cuanto á las causas secundarias, esto es, solo de *cosas*, de *agentes naturales*, pres-

cindiendo de su especie, y por tanto de que sean ó no *causas inteligentes*, las tres mencionadas voces significan, y pueden sin inconveniente significar la misma cosa; y por lo comun, siempre la causa eficiente, ora sea única, ora sea concausa. Un edificio nuevo aun, se desploma por mal construido? diremos igualmente bien, que la mala construccion ha sido la *causa*, el *motivo*, la *razon* del hundimiento. Y es que la cuestion es todavía de pura *causalidad*: no de *causalidad é imputacion*, como en pasando á lo moral y legal: si se trata de las causas inteligentes, es como si no lo fueran; y por tanto no hay que averiguar mas que si se ha seguido el efecto; no el por qué.

En lo moral y legal, tratándose de la *causalidad*, y de la *imputacion*; y pues que la voluntad humana *sine motivis sese non determinat*, una cosa será averiguar el efecto en sí, y otra sus razones y motivos esternos, ora realmente conexos; ora meramente por qué los haya articulado el agente, para esplicar, para disimular, y aun para desfigurar su accion; reservándose la ley, por tanto, la apreciacion de la verdad, y dando ó quitando efecto civil á la enunciativa: y hé aquí por qué, de necesidad, en lo moral y legal, *causa*, *motivo* y *razon*, significarán, á veces, una misma cosa; la causalidad precisamente, como en la filosofía abstracta; otras, cosas diversas; y asi es en efecto. Asi, cuando decimos que tal persona no ha podido hacer tal cosa por tal *causa*, *motivo* ó *razon*, estas voces no se aplican en el concepto de causas impulsivas; y antes damos por cierta y demostrada la existencia del efecto, con total independencia de ellas; y las articulamos solo con relacion á lo lícito, ó ilícito de ese mismo efecto. Entonces las enunciativas *razon*, *motivo*, se pueden usar como equivalentes de la de *causa*, esta de la de *razon* y *motivo*; pero ninguna, repetimos, en este caso en la acepcion propia y ontológica de causa.

Ahora bien: no solo en el uso comun; si no en lo técnico, en lo moral y legal, es frecuentísima la equivalencia de *razon* por *causa* en este sentido, y de *causa* por *razon*. Asi decimos donacion *con causa*: causa legítima de desheredacion: causa justa: causa de pedir: causa para la enagenacion de bienes eclesiásticos: causa en los legados, etc. En estos casos, tan diversas son las acepciones de *causa* en sentido *ontológico*, y causa *por razon*, que la primera se identifica siempre con el efecto principal; la segunda prescinde de él, ó á pesar de ella se reconoce aquel. Asi sucede, por ejemplo, en los legados *con causa*, que puede esta ser *falsa*; y sin embargo, se sostiene el legado, esto es, el *efecto* de que se trata. Hecha esta esposicion general de la acepcion de causa por razon, véanse todavía sus aplicaciones particulares y técnicas en los artículos CAUSA (*por motivo*): CAUSA (*en los testamentos*): CAUSA FALSA: CAUSA JUSTA.

CAUSA DE PEDIR. En el lenguaje forense, escriturario y de contienda jurídica, es lo mismo que la razon ó derecho que nos asiste: el título porque pedimos, poseemos, ó disfrutamos. Asi en las demandas la *causa de pedir* es la razon, derecho ó título porque pedimos: *quo jure petatur*. En estos casos la denominacion genérica *causa*, se resuelve en las específicas, dominio, posesion, herencia, compra-venta, donacion, legado, etc. Llámase causa en correlacion á la declaracion judicial que solicitamos por *efecto*, ó como efecto legal de la misma. Traer causa de alguno, es haber recibido de él por un título legítimo el derecho que nos compete. Con relacion á esta transmision nos llamamos respecto de él *causahabientes*; él respecto de nosotros *causante* y *causadante*. En la enunciativa de causa *onerosa* y causa *lucrativa* es mas específica y mas técnica, como en algun otro caso, la voz *título*, que la de causa. Asi decimos mejor, *título oneroso*, *título lucrativo*, *título de herencia*, *título de dominio*; que causa de dominio, de herencia, etc.

CAUSA (EN LOS TESTAMENTOS Y CONTRATOS). Desde los romanos es conocida y ritual la cuestion de los legados *de causa*, ó con causa. Nuestras leyes han copiado á las romanas; y entre nosotros tambien en testamentos y contratos, pero especialmen-

te en los primeros, tiene aplicacion, y aun es técnica, la acepcion de *causa por razon*: esto es, y segun dejamos espuesto en tésis general en el artículo genérico *causa por razon*, la palabra causa se usa aquí, no en su acepcion verdadera, no con relacion precisamente á la *causalidad*, si no como *demostracion de la persona*, como *esplicativa de la determinacion*. Lego tal cosa á Pedro, *que me hizo*, ó *porque me hizo tal servicio*.

Como en el derecho importan tanto las formas, es preciso notar, que la que es objeto de este artículo, encierra dos cuestiones: una filológica y técnica, reducida á esponer con precision qué sea *causa* en este caso, diferenciándola, pues que realmente se diferencia, de lo que significa en otras acepciones propias, como la *ontológica*, la de *motivo*, *modo*, *condicion*, y tantas otras, que quedan ya, ó serán indicadas en sus diferentes artículos. La otra cuestion es legal, encaminada á determinar los efectos civiles que produce tal cláusula, segun el derecho y la jurisprudencia. Ceñido el presente artículo, principalmente á la primera de estas cuestiones, no podremos menos de hacer notar la falta de conformidad que hay entre los jurisconsultos y las leyes, no en el efecto; pero sí en la enunciativa, resultando de ello la contradiccion de que no se correspondan recíprocamente el signo y la idea. Bartulo (1) define así la *causa por razon*, en el sentido de este artículo: *Causa est quid præteritum, vel instans, quo impellimur, ut aliquid disponamus*. Segun Baldo (2), es *adjectio, motivum finale, vel impulsivum testatoris, ostendens*. La ley 21, tít. 9, Partida 6, dice en esta razon: «Otro si los facedores de los testamentos *ponen razones* en las mandas, cuando las facen. E á esta *razon* llaman en latin *causa*. E esto es, como cuando dice el testador, *mando á fulano cient maravedis, por servicio que me fizo*. E tal razon como esta *cata siempre* al tiempo pasado. E la manda, que es ansi fecha, decimos que, magüer la *razon* que es puesta en ella, *non sea verdadera*, vale, é puede luego demandar tal manda aquel, á quien es fecha, é debe ser entregado de ella.»

Difícil seria el salvar la propiedad y verdad de la denominacion de causa á un hecho, circunstancia, ó aditamento, segun la espresion de Baldo, que no solo puede no influir en la realizacion del *efecto*, que es el legado; si no que puede ni aun existir *in rerum natura*, y sí solo en la mera espresion, como sucede cuando es falsa: *magüer non sea verdadera*. Mejor se salva la parte dispositiva de la ley; aunque bien podria ser la contraria, sin faltar á las leyes y reglas del raciocinio, como haremos ver al tratar la cuestion bajo este segundo punto de vista.

Gregorio Lopez dice sobre la cuestion filológico-jurídica, en la glosa á la ley anterior: *Item legatur sub causa, quod fit per quia, et respicit tempus præteritum.... Habes hic, quod* razon *in nostro vulgari, idem est, quod causa in latino sermone*; cuya última deduccion, si ha de ser exacta, habrá de entenderse ceñida al caso de la ley; pero no por regla general.

Despues, como aceptando las definiciones preinsertas de los jurisconsultos citados, añade: *satis cum ista definitione consonat lex*. Con efecto: en la espresion *causa por razon*, hay cierta consonancia; pero en el fondo de verdad, ni aun en la locucion general, ó sea el todo de la definicion, tan lejos está de haber conformidad, que por el contrario hay una esencial diferencia. En la opinion de los mencionados autores *causa*, en el caso de este artículo, es *quid quo impellimur... motivum finale, vel impulsivum... ut aliquid disponamus*: es cierta cosa, por la cual *somos impelidos*, el *motivo final, impulsivo para que adoptemos la disposicion*. Es decir, que la *adicion* ó *razon* alegada por el testador en este caso, no lo es como demostracion, como esplicacion, que por miras de decoro, de conciencia, de familia, ó de otros miramientos humanos, ha podido creer necesaria, si no *verdadera causa, causa impulsiva, impelente, final*, lo cual no dice la ley de Partida, ni por otra parte es exacto en el terreno del

(1) A la ley *demostratio falsa*, 17, tit. 1, lib. 35 del Digesto.

(2) Al título de institutionibus, et substitut. del Código, 25, lib. 6.

derecho. Ni ¿cómo será *causa verdadera*, causa *impulsiva*, ni aun *causa final*, lo que puede no haber existido, y aun constarle así al testador? ¿Cómo, á ser verdadera siempre, lo cual era necesario para ser realmente *causa impulsiva*, la ley haria el supuesto de que *puede ser falsa*, esto es, mera fórmula, mera esplicacion, ó demostracion, *no compulsiva* ante el juzgador, y á la cual, solo en tales conceptos, podia la ley misma dar tan poco valor jurídico, que el legado vale con ella lo que valdria sin ella, y vale á pesar de ella, como sucede *cuando es falsa*. ¿Cómo, por último, ha de ser *causa final*, esto es, el fin porque el testador se determina, y que se propone satisfacer, lo que él mismo sabe, á veces mejor que nadie, ser falso, no haber existido, como la ley lo supone posible suceda? La de Partida, que esponemos en lo relativo á la cuestion, no va ciertamente tan allá. Con verdad en el fondo y en la fórmula; y con mas precision que los mencionados autores, y los que con ellos forman opinion comun, dice meramente que «*razones ponen* los homes, cuando facen sus mandas.» La ley, como se ve, con justa prevision, con prevision que pueda despues conciliarse jurídicamente con su parte dispositiva, se limita á la espresion, á la fórmula, al hecho de que los testadores *ponen* esa *razon*: prescinde de si la sintieron, de si fué en ellos causa *realmente impelente*, *impulsiva de su voluntad*: puesto que la voluntad humana *sine motivis sese non determinat*, si fué esa razon el *motivo real* de la determinacion; y antes supone que puede ser falsa tal razon, no haber existido el hecho por ella enunciado; y sin embargo, el legado valdrá, y se reputará y dirá *legado de causa* para los efectos del derecho, esto es, como legado *simple*, ni mas ni menos que si no contuviese la cláusula. ¿Cómo la ley dejaria asi de respetar la última voluntad de los testadores? Otra de tantas ocasiones, como tendremos de hacer notar segun ya lo hemos verificado en artículos anteriores, que la jurisprudencia romana adoptó los términos de la filosofía; pero no los conceptos filosóficos á ellos correspondientes, ni por tanto su exactitud y precision.

Mas de todo ello parece inferirse que la adicion ó cláusula, la *causa* por *razon*, que dá nombre á los *legados de causa*, es una pura fórmula, pues que lo mismo vale en el derecho siendo *cierta*, que siendo *falsa*; espresa, que omitida, toda vez que aun siendo falsa *vale la manda magüer* la causa *non sea verdadera*; es decir, como si no se hubiera puesto. Ciertamente, si por pura fórmula se entiende que no es *inductiva de obligacion*; que el legado no pende de ella, pues que siendo *cierta*, vale el legado; y siendo *falsa*, vale lo mismo; en ese caso, no solo la cláusula es una mera fórmula, si no una fórmula ociosa. Mas nunca puede entenderse que no sea *demostrativa*, *esplicativa*; y en este concepto, no solo no es mera fórmula, ni es ociosa, si no que surte efectos en derecho, y el legado pende de ella alguna vez bajo el punto de vista del resultado; puesto que no siendo cierta y conocida de otro modo la persona del legatario, no podria aquel tener efecto. Por otra parte hay que tener presente que la ley no impone la cláusula, ni la necesidad de legar en tal forma; si no que se hace cargo del hecho de que los testadores *suelen ponerle en sus mandas*: y en este caso la ley, sirviendo á su fin de *preveer*, de *prevenir*, la dá á conocer, y esplica sus efectos; y á fé que asi es necesario, pues que de otro modo, y segun ya antes hemos indicado, pudiera muy bien la mencionada cláusula entenderse en opuesto sentido: como *condicion de pretérito*, por ejemplo, y el legado por tanto *remuneratorio*, y pendiente de ella: nulo en fin, siendo ella falsa; asi como es *ineficaz*, ó lo seria, cuando, considerada la cláusula aun meramente como *demostrativa* ó *esplicativa*, el legatario no pudiera ser conocido si no por ella. Ademas hay que tener presente que los legados de causa pueden á veces confundirse con otros, con los de *condicion* ó *modo*, por ejemplo, y la ley sirve tambien á su fin en esplicar hasta con minuciosidad sus diferencias.

En este punto hay que notar que la ley de

Partida es rigorosamente *técnica*. En otros casos la tecnología nace de la jurisprudencia: en el presente, pasa á la jurisprudencia de la ley. Y no solo esta espone y resuelve la cuestion técnica; si no que ha querido resolver la *filológica*, en cuya razon dice: «cada una de estas tres maneras sobredichas (*condicion*, *causa* y *modo* en los legados) ha su manera cierta en latin porque se pone «ca la primera se face por *si*: la segunda por *quia*: la tercera por *ut*.»

Dos reglas establece la ley para que la fórmula de *causa* por *razon* en los legados pueda ser diferenciada de las demas: que *cata siempre al tiempo pasado*: y que en latin se espresa por *quia*. Las mismas establecen los autores con la ley: pero ni las opiniones de estos, ni el testo de la ley, pueden tomarse como regla precisa en sentido estrícto, y digámoslo así, *pro forma*; si no meramente, segun que de ordinario suele, ó fué comun practicarse. Es ciertamente lo mas comun que la *causa por razon cata al tiempo pasado*; pero ni el rigor de los principios de derecho, ni las leyes del raciocinio se oponen á que se refiera al tiempo presente, ni al futuro. Lego tal cosa á Pedro, *que me ha sido afecto*, es ciertamente un legado de causa; y nadie podrá ver otra clase de legado en estas otras fórmulas: lego tal cosa á Pedro, *que me es afecto*: *que me sea*, ó *me será afecto*.

En cuanto á la segunda circunstancia, ninguna ley la ha prescrito como necesaria. Nuestras leyes la tomaron de las romanas, porque en efecto, Justiniano en sus instituciones (1), y el Digesto, convirtiendo en leyes las opiniones y fórmulas de Cayo y de Papiniano (2), formularon sus ejemplos con la locucion *quia* (3), pero los formularon, como hubieran podido hacerlo con otras locuciones, igualmente *latinas* y *propias*, hasta el punto de sustituirse recíprocamente. Nadie puede sostener que este ejemplo de la ley romana, *Titio fundum do*, *quia negotia mea curavit*, no esté con todo rigor y propiedad latina sustituido por estos otros: *Titio fundum do*, *quoniam negotia mea curavit*: *quod negotia mea curaverit*: y todavia por algunos mas. La regla, pues, de la ley de Partida y de los espositores latinos del derecho, será mas práctica y cierta, reducida á esta otra. *Constituye legado de causa aquella cláusula del testador, que sin ser inductiva de obligacion, necesita ser formulada con estas locuciones causales*, porque, ó por haber, *ú otras de idéntico sentido*, *equivalentes á las latinas*, quia, quoniam, y quod, *en el modo del verbo que admita* esta, y no aquellas *espresiones*: lego á Pedro tal fundo *porque* cuidó, ó *por haber* cuidado de mis intereses. Decimos que no ha de ser inductiva de obligacion; porque si era respecto del legatario, el legado seria *condicional*, ó de otra especie; pero no *de causa*: y sí en el testador; si este alegaba una cosa á que estaba obligado, cambia tambien la índole de la disposicion testamentaria.

Ultimamente, hemos dicho en la cabeza de este artículo, que la mencionada cláusula, no es de *causa impulsiva* en la verdad filosófica de esta locucion, si no *demostrativa de la persona y esplicativa de la disposicion*; añadiendo ahora, que solo asi es como no vicia esta; pues si la cláusula afectase, no á la persona, si no á la cosa legada, siendo falsa la causa, decaerá el legado; asi como es cierto, que si se probase que la cláusula no es meramente *demostrativa* y *esplicativa*; si no realmente *causa impulsiva*, en términos, que sin tal motivo, el testador no hubiera hecho el legado, tampoco este entonces es legado de causa, y cederá faltando aquella. En esta razon decian las leyes romanas: *Falsam causam legato non obesse verius est*, *quia ratio legandi legato non cohæret*. *Sed plerumque doli exceptio locum habebit*, *si probatur*, *alias legaturus* (*testator*) *non fuisset* (1).

Pero estas cuestiones pertenecen ya mas bien al fondo de la cuestion, y han de verse

(1) Lib. 2, tit. 20, *de legatis*, §. 31.
(2) Leyes 17, §. 2 y 72, §. 6, tit. 1, lib. 35, *de conditionibus, et demonstrat.*
(3) Titio, quia, me absente, negotia mea curavit, stichum do (*Instituciones*): Titio fundum do, quia negotia mea curavit (*Digesto*).

(1) Ley 72, §. 6, tit. 1, lib. 35 del Digesto.

en su artículo correspondiente. Véase **CONDICION**, **DEMOSTRACION**, **LEGADO**, así como se verán en los artículos respectivos de contratos los efectos correspondientes en ellos á la *causa por razon*, segun queda espuesta, y definida.

CAUSA CIVIL DE OBLIGAR. Dícese con relacion á la obligacion civil, en oposicion á la obligacion natural. Estiéndese por tanto la enunciativa al órden civil y al criminal. Si aun en este concepto limitado hubiéramos de tratar, segun parece habia de ser, fundamental y estensamente de la responsabilidad humana en la ancha esfera del derecho *positivo*, la tarea era inmensa, y la índole de nuestra obra no permitiria comprenderla en un solo artículo. Pero el objeto del presente es solo la cuestion técnica, de ordinario enunciada bajo esa fórmula, mereciendo aun asi ser examinada con alguna detencion, ya porque siempre lo requiere la tecnología de toda ciencia, ya por el uso inmemorial y frecuente de la tecnología romana en nuestra jurisprudencia, ya en fin, por los grandes testimonios de autoridad esterior en que viene apoyada.

Ceñido, pues, el presente artículo á este concepto, diremos que esta materia está íntimamente ligada con la de *nombre* en los contratos, y la de *pactos* y *contratos*; y en estos artículos la trataríamos sin las razones especiales que reclaman para la misma un artículo especial, segun se convencerá por el contesto del presente.

Increible parece que sobre este punto pueda haber habido oscuridad en las leyes, ni divergencia, ó incoherencia entre sus espositores; y sin embargo es asi, sin que la culpa esté en su razon, clara y hasta privilegiada á veces, como la de algunos autores de los que eitaremos; si no en una tecnología viciosa, falta de precision filosófica, que adopta ordinariamente el lenguage filosófico, y no las ideas que científicamente debia espresar.

Porque en efecto: el contrato no produce *obligacion civil eficaz*, esto es, *deducible* ante los tribunales civiles, si no en cuanto se han observado en él las solemnidades, y concurren los requisitos, que como *esenciales* establece la ley en cada caso: la causa *mediata*, pues, ó remota de la obligacion, es la ley que ha atribuido fuerza civilmente obligatoria á un convenio que sin eso no la tendria, aunque la produjera de conciencia, de honor, ó de otro modo no rigorosamente *civil*: causa próxima, ó *inmediata* de la obligacion será la observancia de las prescripciones de la ley para que el simple convenio pase á *creacion civil*.

Este lenguaje es claro, sencillo, identificado con la naturaleza de las cosas, conforme al rigor filosófico, segun el que *causa total* y eficiente de un efecto es la que lo produce totalmente y por sí, como aquí la ley en primer término; en segundo, inmediatamente el conjunto de requisitos *esenciales*, la práctica, si se observan las prescripciones de la ley para que el contrato lo sea, para que produzca *obligacion civil*, que es de lo que se trata. Pero la tecnología romana, y despues la de todos los pueblos que adoptaron aquella legislacion, no tomó este camino. Propensa siempre al lenguaje figurado, sin lo cual seria menos verdad la máxima de aquel derecho, y de todos, *omnis definitio in jure periculosa*, usó de él en esta materia; y mientras la ley declaraba requisitos *esenciales* de un contrato, esto es, sin los cuales no habria contrato, ni por tanto obligacion eficaz, el *consentimiento*, la *capacidad* de las *personas*, la condicion *permutable* de las cosas, ó el que estén en el comercio humano, lo lícito y moral del fin, las solemnidades establecidas *pro forma*, etc; la tecnología, como por antonomasia, llamará *causa civil de obligar*, al uno solo de ellos, al último por ejemplo, porque él completa, digámoslo asi, la *creacion civil*, el contrato; en lo cual habrá valor entendido, pero no verdad, ni filosófica, ni jurídica: no filosófica, porque se atribuye el carácter de *causa total y eficiente* á la que no lo es si no *parcial*, y por tanto mera *concausa*: y no jurídica tampoco, porque para ello era necesario que observado el mencionado último requisito, ó solemnidad, él solo constituyera contrato y obligacion: pero eliminense todos los demas;

y ni aun tanto, uno solo de ellos; y no habrá ni obligacion ni contrato. Ni ¿quién comprenderia, que faltando en una cosa lo que le es *esencial*, aquella subsistiese? Y no hay en lo dicho escepcion respecto de ninguno de los requisitos *esenciales*; ni aun de los llamados *pro forma*; y ni aun en la jurisprudencia mas sistemática y formularia, como la romana, lo cual demostramos aun mas ámpliamente en el resto del artículo.

Asi ya no se estrañará ver sobre este punto oscuridad en el derecho, y en sus esposito-res: vacilacion é incoherencia entre estos, y aun cada uno consigo mismo: á jurisconsultos eminentes, padres unos, digámoslo asi, del derecho y jurisprudencia romana, dotados otros de tal superioridad de razon que honraria aun el errar con ellos, recurrir en una cuestion práctica, cotidiana, *civil civilísima*, á términos abstractos, vagos por tanto, para conciliar sin conseguirlo, ó sin contradecirse, el rigor formulario con el rigor filosófico, é incidir asi bien en errores insostenibles, al esplicar la intervencion de la causa en los convenios para que nazca la obligacion; resultando ademas que segun los mismos la obligacion nace ó parece nacer, unas veces de la llamada causa civil de obligar; otras de otros principios distintos de ella, como la *ley*, el *consentimiento*, la *equidad natural*, el *hecho propio*, la *forma*, aun lo *lícito* del convenio, etc., segun vamos á demostrar.

Ante todo notaremos que el tema de *nombre* y *causa* en los convenios formales, como técnico, fué creacion de la jurisprudencia y no del derecho, de donde nace que en vano se buscaria en este la definicion esplícita y taxativa de nombre y de causa; y si habla de ellos es despues que se convirtieron en leyes del Digesto las opiniones de los jurisconsultos, y aun entonces con la misma vaguedad, y falta de precision que reinaba en estas.

Asi, segun el jurisconsulto Gayo, cuya opinion pasó á ser ley del Digesto sobre el particular (1). «Las obligaciones nacen, *aut ex contractu, aut ex maleficio, aut proprio quodam jure ex variis causarum figuris.*» Dificil seria deducir de aquí la naturaleza de la llamada causa, y el mismo Vinnio reconoce que es tal la oscuridad de estas palabras, que nada cierto sobre obligacion puede inferirse de ellas: «*Sed hæc verba, quæ in leg. 1. Pandect. De obligat. et act. occurrunt, tam sunt obscura, ut non possint inservire definitioni* (1).»

En defecto de definicion esplícita, Cujacio (2), y Vinnio (3) adhiriéndose á su opinion, son de sentir que la verdadera definicion de pacto y contrato, y por tanto el concepto esplícito y cierto de *nombre* y de *causa*, se *oculta* en la ley 7, §. 1 y 2, lib. 2, título 14 del Digesto, *de Pactis*: *quomodo differunt pacta et contractus, docuit jampridem Cujacius,... ubi observat, veram et genuinam definitionem* latitare *in leg. 7, etc.* (4).

Esta ley, que no consignó, si no en la que está *como oculta* (*latitare*); de la que hay que inferir la *verdadera* y *genuina* definicion de pacto y contrato, y por tanto el valor jurídico, la significacion técnica de *causa* y de *nombre*: esta ley decimos, que vemos por testimonios tan autorizados ser *la mas esplícita* que hay en la materia, se formó de la opinion de Ulpiano, y dice asi: «Algunas convenciones del derecho de gentes producen accion; otras escepcion. Las que producen accion no conservan ya su nombre; si no que pasan á *nombre propio de contrato*, como compra-venta, locacion,... y los restantes contratos semejantes. Pero, aun cuando no pasen á otro contrato, en ellas sin embargo *subsiste causa* (*sed, etsi in alium contractum res non transeat, subsistit tamen causa*); y asi Aristo Celso respondió elegantemente *habia obligacion*: como por ejemplo, te dí una cosa para que me dieses, ó hicieses otra, lo cual es contrato... y de él *nace obligacion.*» De esta ley resultaria la diferencia civil entre pacto y contrato: la diferencia entre contratos nominados é in-

(1) Ley 1, tit. 7, lib. 11 del Digesto.

(1) Vinnio, ad Instit. lib, 3, tit. 14, §. 759.
(2) Observat. lib. 2, cap, 15.
(3) Ad Instit. lib. 3, tit. 14, §. 755, 756 y 757.
(4) El mismo Vinnio, id. id.

nominados: la nocion genérica de *causa civil de obligar*; pero no la específica, individual y esplícita. Y ¿cuál es aun esa causa genérica? ¿Es la *obligacion natural* que ya traia el *pacto*, ó convencion de derecho de gentes, antes de pasar á contrato, ó convencion de derecho civil? ¿Es el *hecho* personal de los contrayentes? ¿Es el consentimiento que prestaron, ofreciendo el uno y aceptando el otro? ¿Es el *conjunto* de estas circunstancias? ¿O es la disposicion de la ley civil, que del *conjunto*, y no de cada una, constituye el contrato? Todo lo parece, y parece mas bien esto último. Y esto aun en aquellos en que la ley es esplícita: en los contratos nominados, é innominados. ¿Será, pues, mas claro, taxativo y preciso el connotado de *causa*, en aquellos casos de que no habla la ley: á que hay que aplicarla por deduccion, y hasta por una ficcion de derecho, como por ejemplo, en los *cuasi-contratos*? Y si esto resulta de la ley mas esplícita en el particular, en vano seria buscar conclusion mas concreta y precisa en otras leyes y opiniones.

Lo singular es que tampoco resulte en los luminosos trabajos de espositores de primera nota. Queriendo esclarecer el concepto, nos dice Vinnio, *ser causa* en los contratos *aliquid præsens, ex quo, secundum leges, obligatio nascitur*. Esta es la definicion generalmente repetida. Pero antes buscábamos la esplicacion específica de causa; y ahora la necesitamos, aun con mayor razon, de los términos, de todo punto indefinidos, *aliquid præsens*. En vez del género *próximo*, el que se adopta en la definicion es *remoto*, é indefinido por demas. Por otra parte esa circunstancia de presente, ese *aliquid præsens*, ¿es relativo á las personas, á las cosas, ó á las solemnidades? ¿Ha de ser presente *en el tiempo* ó *en el efecto*, ó en ambas cosas? Si en el tiempo solamente, ¿cómo se salva este connotado de causa en los convenios *per epistolam*? Si en el efecto, ¿cómo se salvará en los cuasi-contratos, en los contratos con pactos suspensivos, ó restrictivos, como la retroventa, ó los pactos de la ley comisoria, de adicion *in diem*, etc? Este jurisconsulto, despues de indicar que lo *presente* es en el efecto, citando la compra-venta, el mútuo, el comodato, etc., espresa en otra parte, que lo es en el tiempo, y no en el efecto: *Donatio*, dice, *nec nomen, nec causam habet*, quia, *nec actio donati datur*, nec aliquid etiam præsens est, *sed tantum in futurum promittitur sine omni solemnitate*. No diremos que, si el efecto es aquí de futuro, la promesa es de actualidad, *est aliquid præsens*. ¿Y cómo se esplica en el rigor sistemático de esta terminología el que esa misma donacion, en la generalidad con que aquí se toma, de *nombre* y de *causa*, segun se dice *producia obligacion*, aun sin aceptacion actual, sin insinuacion cuando se hacia *ad pias causas*? ¿Como, el que aun la *esperanza* de una accion futura se pudiese donar eficazmente; segun las mismas leyes romanas (1)? Se dirá que la enunciativa *aliquid præsens* no se refiere, ni al *tiempo*, ni al *efecto*; si no á la cosa, ó cosas que son objeto del contrato, ó lo que es lo mismo, de la obligacion; y que la enunciativa *præsens*, no ha de tomarse por contraposicion á ausente, ó no presente; si no por *cosa cierta* y *determinada*, como sucede en la venta, locacion, mútuo, etc. Pero en ese caso se reconoce que la terminología no es precisa; y tendremos ademas que el objeto de la obligacion no es desde luego cierto y determinado siempre en los *cuasi-contratos*, ni en las acciones llamadas *in factum*. Y ¿cómo desconocer que puede ser cierto y determinado el objeto de la obligacion en los pactos nudos, y sin embargo, eso no basta para que haya causa civil? La razon es conocida: porque no lo ha establecido, ó autorizado la ley civil. Pero entonces venimos á parar á la tecnología sencillísima de que causa *mediata* de la obligacion civil, es la ley civil; *inmediata*, ó *próxima*, la observancia y concurrencia de las solemnidades y requisitos prescritos por ella como *esenciales*. El mismo Vinnio dice muy oportunamente en otra parte: *fundamentum obligationis omnis est lex*. En otro lugar añade con igual razon: *omnis contractus*

(1) Leyes 3, 6 y 35, tit. 31, lib. 8 del Codigo.

nititur consensu. Y ciertamente: sin él no habria contrato, ni consensual, ni real, ni escritural, ni verbal: y si no podria negarse que al consentimiento, como á los demas requisitos *esenciales* de que hemos hecho espresion á la cabeza de este artículo; pero casi con mayoría de razon al *consentimiento*, no podria negarse, decimos el ser *aliquid præsens, ex quo, secundum leges, obligatio nascitur*; él seria la *causa civil de obligar*, no ya en los contratos llamados por antonomasia *consensuales*; si no en todos. No lo admite asi la tecnología, pero eso prueba que es incorrecta y falta de precision filosófica puesto que puede aplicarse con igual propiedad á cosas diferentes.

Heineccio, como los demas espositores del derecho romano, y á su vez los de nuestro antiguo derecho, y aun del moderno, presentan bajo el mismo connotado la idea de *causa*: *caussam præsentem* (1). Ninguno de ellos salva, porque no puede salvarse, la falta de exactitud filosófica, y aun jurídica, en llamar *causa* de la obligacion, como si lo fuera *total, eficiente y esclusiva* de ella, á uno de los requisitos, ó formalidades *esenciales*; cuando no lo es si no parcial, y concausa con estos, en términos, que si todos penden de ese requisito, cualquiera que él sea, del *aliquid præsens*, de la *tradicion*, de la *escritura*, de la *solemnidad de palabras*, para constituir contrato formal, y que resulte obligacion *eficaz*; él á su vez y para los mismos efectos, pende de todos, y de cada uno, como ya antes hemos espuesto. Entre los llamados *causas*, no hay uno que mas en rigor de derecho, y mas en el rigor tambien de la tecnología romana pudiera llamarse tal, que la *solemnidad de palabras* en la estipulacion. En otros la ley convierte en creacion suya lo que ya lo era del otro derecho preexistente, de la equidad y justicia natural, como el consentimiento, la entrega de la cosa: aquí por el contrario, el título de la obligacion es pura creacion de la ley civil; que para el mismo fin civil adoptó la fórmula de la estipulacion, como pudo adoptar otra, sin ofensa de la equidad natural; y sin embargo, aun esa solemnidad de palabras no produce obligacion; no es *causa civil*, sin prévio consentimiento, como terminantemente lo espresaba el derecho: *Verborum quoque obligatio constat*, decia el jurisconsulto Paulo, *si inter contrahentes* id agatur: *neque enim, si per jocum, puta, vel demonstrandi intellectus causâ, ego tibi dixero*, ¿spondes? *et tu responderis* spondeo, *nascetur obligatio* (1). Esta misma fórmula de palabras, aunque tan estricta al parecer, se interpretaba y presumia, á pesar de que no constase á veces mas que la pregunta y no la respuesta (2); y lo que es mas, aun sin ella, toda vez que constase que los contrayentes quisieron obligarse, cualquiera que fuese la fórmula de palabras que empleasen, segun la constitucion notable del emperador Leon (3).

Hija, ó no, de los mismos principios, la misma falta de precision se nota al hacer intervenir la causa en los contratos. *Contractus*, segun Vinnio, y los demas jurisconsultos, *est conventio, quæ habet, vel nomen, vel causam.* Establecida asi la alternativa, se deduce por necesidad lógica, que lo uno es equivalente á lo otro; y puede haber, por tanto, contrato con solo nombre sin causa, ó con sola causa sin nombre. Esto segundo es cierto; mas no lo primero. La causa es siempre esencial al contrato; el nombre puede faltar. Asi lo exacto era decir, que es contrato toda convencion que tiene causa civil de obligar, y algunas veces nombre. Heineccio, corregido en eso por sus anotadores (4), define asimismo el contrato, *conventio, quæ habet nomem, vel causan præsentem, suâ naturâ civiliter obligantem*; si bien es verdad que él mismo en otra parte esplica adecuadamente los conceptos de *nombre* y de *causa*. Hemos dicho ya sobre la enunciativa de *causam præsentem*: relativamente á la de *naturâ suâ civiliter obligantem*; que habrá de entenderse de la *naturaleza civil*; pues si se entendiera de la naturaleza radical

(1) Hein. Institut. Cap. 11, lib. 3, §. 771 al 780.

(1) Ley 3, tit. 7, lib. 44 del Digesto.
(2) Ley 1, tit. 38, lib. 8 del Codigo.
(3) Ley 10, id. id.
(4) Instituta ya citada, §. 775.

de la causa, cuando no es del todo facticia é indiferente *in specie*, *ó á priori*, como la fórmula verbal de la estipulacion, seria la equidad ó justicia natural; y sabido es que ni en uno, ni en otro caso estas son causa civil de la obligacion, si no lo dispone, y en la forma que lo dispone la ley civil.

Resulta de todo: que la causa de la obligacion civil, que es efectiva y clara como principio, ha llegado á ser compleja, oscura, y aun á tocar en logomaquia, como cuestion técnica. La teoría, pues, del orígen ó causa de la obligacion civil en el sentido del presente artículo, puede y debe encerrarse en las enunciativas siguientes:

1.ª Siendo la *obligacion civil* creacion de la ley, hasta tal punto, que sin la prescripcion de esta, aquella no resultaria en los actos humanos, la ley es la *causa* cardinal de la obligacion. *Fundamentum obligationis omnis est lex.*

2.ª La ley, como causa inteligente y próbida, debe adoptar todas las disposiciones que aseguren su fin: determina los *requisitos*: establece *la forma*. La concurrencia de aquellos, y la observancia ó verificacion de esta, completan, *perfeccionan* su creacion. La observancia, pues, de *cuanto* la ley prescribe, como *esencial* en este punto, y no solo la de alguna parte, es la *causa inmediata* del efecto que se buscaba, de la *obligacion*. La ley, pues, sin envolverse en tecnologías que oscurecen lo que es sencillo, es la *causa mediata*, ó remota de la obligacion: la concurrencia, y observancia de los requisitos y solemnidades esenciales establecidos por ella, son la causa *inmediata*. Despues de todo, asi vienen á establecerlo los mismos jurisconsultos, que han parecido esponer, ó considerar de otro modo la *causa civil de obligar*; bien cuando el hombre *contrata*; bien cuando el hombre *delinque*; bien cuando la ley interpreta y suple su voluntad, hecho, y consentimiento, como por ejemplo, en los cuasi-contratos. *Omnes obligationes..... ex lege sunt; sunt enim vinculum juris. Sed tamen aliæ* inmediatè... *ex lege civile nascuntur*; *aliæ* mediaté; *accidente facto obligatorio... Contrahentes et delinquentes* inmediaté *obligantur ex facto*; mediaté *ex lege* (1).

3.ª Por antonomasia, ó valor entendido, puede, sin embargo, llamarse causa civil de obligar á alguno de los requisitos, y solemnidades prescritos como esenciales, señaladamente al que en último término completa el número de estos, ó al establecido *pro forma*, ó como *pro forma*, por la ley; por cuanto, observado, ó verificado dicho requisito, la *creacion* de la ley se completa en el terreno práctico, y nace *inmediatamente* la obligacion, pareciendo asi que nace de él solo. Pero siempre hay inconveniente en sustituir el lenguaje y connotados propios por los figurados; lo cual debe economizarse cuando no hay necesidad, como no la hay en la presente materia, y en asuntos prácticos, digámoslo asi, usuales, civilísimos, en que conviene que el deber esté con la mayor facilidad posible al alcance de los que lo han de cumplir.

4.ª Síguese de lo dicho que la *causa civil de obligar* en los actos humanos, ora lícitos, ora ilícitos, puede ser, y es de hecho, diferente en distintas legislaciones; y aun en una misma en diversos tiempos; pues la ley que por su poder soberano é independiente designa la materia, y establece las formas ó solemnidades para que resulte la obligacion, puede variarlas y sustituirlas.

5.ª Por esta libertad y omnipotencia de la ley en su esfera, se sigue asi bien, que no puede fijarse, como inflexible, ó inalterable, la causa civil de obligar en convenios, ó actos humanos determinados, como, por ejemplo, en los contratos verbales *la solemnidad de palabras*, en los reales *la entrega de la cosa*, en los consensuales el *consentimiento*, etc. Hablamos bajo el supuesto de que la obligacion que resulte haya de ser eficaz, espedita, *deducible* ante los tribunales. En ese caso véase, como segun los tiempos, decayó de su eficacia técnica, porque la ley asi lo autorizó, la *causa* en la estipulacion. El jurisconsulto Paulo suponia, y con él el legislador de las Pandectas, que en la donacion no era bastante eficaz, como

(1) Heineccio, Instituta citada, §. 771.

causa, la *rei tradicion*, si no acompañaba el propósito. «La *sustancia* de la obligacion, decia, no consiste en que pasen á ser mios un cuerpo, ó una servidumbre; si no en que alguno quede ligado á darme, prestarme, ó hacerme alguna cosa. No basta que el dinero sea del que lo dá, y *que se haga del que lo recibe, para que nazca obligacion*; si no que es menester *que se dé* y *reciba* con ánimo de que *aquella se constituya* (1);» si bien no se comprende, como el que era dinero *de otro* pase lícitamente y por voluntad de su dueño á ser *dinero mio*, sin que resulte obligacion. En la tecnología romana, en fin, diremos con Vinnio al determinar la causa, *respicitur ad id, quod contractum perficit, et absolvit*: en consecuencia de lo que se asentaba ser las *causas* de los contratos nominados la *tradicion*, la *solemnidad de palabras*, la *escritura*, y el *consentimiento*; y véase despues entre nosotros, que dada la ley del Ordenamiento, *la forma de la estipulacion* no perfecciona el contrato oral; el contrato de censo no es eficaz sin escritura de constitucion; el de esponsales sin que pasen por escritura pública; el matrimonio sin las solemnidades de la Iglesia, etc. Esto en cuanto á la *causa* en la acepcion de la tecnología romana: en la verdadera y filosófica acepcion de causa, siempre será, cualquiera que sea la variacion que introduzcan las leyes, *causa mediata* la ley; *inmediata* la observancia de los requisitos *esenciales*, establecidos por ella. En este concepto sin duda, nuestros jurisconsultos asientan que la célebre ley antedicha del Ordenamiento de Alcalá (1, tít. 2.°, ib. 10, Nov. Recop.) ha inducido novedad en todos los contratos y cuasi-contratos, y segun la espresion de Escriche, que *no hay obligacion sin causa*. Véase **CONTRATO, PACTO, OBLIGACION.**

CAUSA (EN LO PROCESAL). La voz *causa* tiene aun en lo judicial y procesal diversas acepciones. Hemos espuesto ya el caso en que se llama *causa de pedir*: ademas de eso, tomada en sentido genérico significa toda contienda y procedimiento criminal, ó civil: los autos ó proceso escrito: el juicio mismo.

En sentido específico significa solamente y en igual forma, la contienda en lo criminal, el proceso escrito y el juicio. En el segundo de estos conceptos se dice formarse causa, instruirse causa: en el tercero fallarse, sentenciarse la causa: en todos tres sobreseerse en la causa, ó sebreseer la causa, pues se cesa ó levanta mano en la contienda, en el proceso y en el juicio.

En lo disciplinario y escriturario las enunciativas causas, pleitos, procesos, espedientes, significan lo mismo los civiles que los criminales, como se observa al prescribir al actuario, al archivero, al secretario las reglas para la formacion, ó para la conservacion, sobre entrada ó saca de procesos, sobre índice de procesos, pleitos, causas, etc.

Cuando se presupone, ó se lleva entendida la calidad del asunto de que se trata, las palabras causa, proceso, autos, pleito, significarán asunto civil ó criminal. En otro caso, causa, proceso, espresan mas bien los criminales: pleito, sin otro aditamento ó valor entendido, asunto civil. Para que sea otra cosa, ó cuando la fórmula genérica pueda inducir á equivocacion, decimos causa criminal, pleito criminal, procesos criminales: pleito civil, causa, proceso civil. Asi la antítesis ritual entre uno y otro género de asuntos cuando han de espresarse colectiva; pero genéricamente, es *pleitos* y *causas*, y nadie duda que aquellos son civiles y estas criminales. Por esta misma razon, por la diferencia indicada entre la significacion genérica y específica de la palabra *causa*, y sus correlacionadas en el sentido del presente artículo, no estaria en la buena tecnología el que un juez, conociendo y fallando en asunto civil dijera: *únase á la causa*; *se recibe esta causa á prueba*, *en la causa que ante nos ha pendido y pende*, etc., como no lo estaria en asunto criminal, de oficio sobre todo, procédase á *la formacion de pleito*; *se sobresee en este pleito*; *en el pleito que ante nos ha pendido*, etc., y eso aun cuando el pleito criminal se siga, ó instruya á peticion de parte. Por la misma razon, en fin, en asuntos criminales tiene mas propiedad la palabra *proceso*

(1) Ley 3, tít. 7, lib. 44 del Digesto.

Lorenzo Arrazola

usada simplemente, ó sin aditamento alguno, que la de autos; *causa* que la de *pleito* en el propio caso.

Causa, en los casos á que se contrae el presente asunto, se toma por la culpabilidad é interés *colectivo* del encausado, y en este sentido decimos tener buena, ó mala causa, agravar la causa, etc. Si el asunto es civil, decimos de ordinario, y siempre con mas propiedad, tener buen ó mal pleito; en lo que se vé, que segun hemos asentado, la palabra causa, en sentido específico por lo menos, se aplica con mas propiedad á los asuntos criminales que á los civiles.

En todos es de notar que se denomina *causa* á la contienda, á los autos ó proceso, al juicio, á la culpabilidad del encartado, al interés, genéricamente considerado, del contendiente. Parece que en estos casos hay impropiedad filosófica, y que la palabra causa se aparte de su genuina y cardinal acepcion, de la acepcion filosófica que le hemos dado en los artículos anteriores; y sin embargo no es asi. Causa se dice en los casos de este artículo con relacion al *efecto* que se procura, segun las diversas intenciones: el castigo de un crímen, ó la absolucion: la declaracion, ó privacion de un derecho: el desagravio de la sociedad, ó de los particulares. Y como, segun el principio filosófico, *res denominantur á fortiori*, las cosas se denominan y deben denominarse de lo que es principal en ellas, lo principal en los juicios es la declaracion judicial: es el *efecto* á que todo se encamina, y de cuyo efecto es *causa* la culpabilidad averiguada, el derecho demostrado, y en este sentido el interés de cada una de las intenciones.

Aun cuando la enunciativa *causa* en su acepcion genérica es, como hemos visto, la fórmula del procedimiento judicial en toda su estension, no podemos traer sus infinitos pormenores al presente artículo, que por lo mismo reducimos á puramente filosófico, reservando tratar del procedimiento bajo sus distintos puntos de vista en los artículos correspondientes.

Lo que hemos dicho de la enunciativa causa, ha de entenderse circunscrito al órden y tribunales civiles; pues en lo eclesiástico difieren mas ó menos las acepciones de dicha voz, y han de verse, por tanto, en su artículo especial **CAUSA EN LO ECLESIASTICO.**

CAUSA ONEROSA: CAUSA LUCRATIVA. En el sentido de este artículo causa es lo mismo que *título de adquirir*, y por tanto, lo mismo que título traslativo de dominio. Asi las voces *título* y *causa* espresan la *razon civil* por que nos pertenecen nuestras cosas y derechos: otras veces título espresa el derecho mismo. En este sentido decimos que una cosa nos corresponde por título de compra, de donacion, etc.: otras, que nos pertenece, la reclamamos ó reivindicamos por título de dominio, etc. Dedúcese de todo, que título es mas específico que causa, si bien se usa tambien en sentido genérico como esta. La causa y el título entonces se refieren mas bien á las cualidades que á la cosa en su esencia: mas al modo que á la sentencia, aunque no sea asi, cuando se usan específicamente. En este concepto, digo que me pertenece una cosa por *causa* de donacion, y con mas propiedad por *título* de donacion, de herencia, etc.: en el concepto anterior, digo que me pertenece por título, ó causa onerosa, una cosa que he comprado; por título, ó causa lucrativa una cosa donada, en lo que se ve hacemos diferencia entre el título de adquirir y la cualidad ó el modo de haber sido gratuitamente ó por precio.

Causa onerosa se dice del latin *onus*, la carga, ó gravámen: lucrativa del latin *lucrum* la ganancia, ó utilidad. Las voces no se toman, por tanto, en su acepcion comun; pues puede haber utilidad, ganancia, lucro en una compra, por barata; y gravámen, pérdida, perjuicio en una donacion. Tómanse en sentido *técnico*, en el valor entendido que les atribuyen el derecho y la jurisprudencia, y es el de haber mediado, ó no, para la trasmision del dominio ó derechos, precio, compensacion, disminucion directa, ó indirecta de nuestros intereses como condicion, ó circunstancia obligada del pacto, ó convenio. En el primer caso la ad-

quisicion se dice por causa *onerosa*; en el segundo por causa *lucrativa*, en cuyos casos la voz causa se toma en el concepto propio de *causa imputiva*, ó motivo, pues que en lo oneroso, si se realiza la trasmision de la cosa ó derecho, es por mediar ella, siendo asi parte esencial del convenio; y si en lo lucrativo se verifica dicha trasmision, es por lo contrario; por no mediar el gravámen; pues mediando, en muchos de los casos el adquirente no adquiriria, ni el cedente trasmitiria, toda vez que no siempre está dispuesto á vender, permutar, etc., el que está dispuesto á donar, legar, instituir; y en todo caso, mediando gravámen, ya el contrato gratuito deja de realizarse; pues se realiza otro. En la apreciacion de lo *oneroso*, asi como en sentido inverso en la de lo lucrativo, tiene completa aplicacion el concepto general de valor representativo, como el principio específico en algunos contratos, en el mútuo especialmente, *tantumdem est idem*. Todo lo que aumenta ó dismunuye nuestro patrimonio, todo lo que constituye nuestra fortuna, es objeto, aumentándose, de causa lucrativa; disminuyéndose por condicion inherente al convenio de que se trata, de causa onerosa. En su consecuencia el precio, las cosas permutadas, la cesion, la renuncia de derechos ó esperanzas legítimas, la remuneracion, las obras, la quita y espera, cuanto es, ó se puede convertir en un derecho, ó privarnos de él, es respectivamente lucro, ó carga; y cedido ó adquirido, constituye en sus casos causa onerosa y causa lucrativa.

Establecida asi la esencia y diferencia de estos dos conceptos, y locuciones técnicas, los efectos civiles que les están atribuidos por el derecho ó la jurisprudencia, han de verse en los respectivos negocios en que tienen aplicacion.

CAUSA FALSA. En la definicion mas sencilla se ve clara la inexactitud de la tecnología del derecho. Si ahora dijéramos con la ley, que causa falsa es la que no es *verdad*, el concepto seria equívoco: y es porque en el derecho la palabra causa no se toma siempre en su acepcion filosófica. Por eso *causa falsa* no es en filosofía siempre lo que en el derecho. En filosofía, *causa falsa, es la que no ha producido el* EFECTO *que se le atribuye*: en el derecho, es algunas veces eso mismo, como cuando se inquiere y averigua quién es el agente de un hecho justiciable, el autor de un delito: otras, como en el presente artículo, *causa falsa* es *el hecho, razon, circunstancia que no ha existido, segun se supone*. En el primer concepto se examina la *existencia* y *correlacion generativa de dos entidades*, la producente y la producida: la *causa* y el *efecto*: en el segundo, en el caso del presente y otros artículos, únicamente *la existencia de una sola entidad*, del *hecho, razon, circunstancia, demostracion*, etc., *que se articula* por el testador ó contrayente. Cuando *se demuestra* que han existido este hecho, ó circunstancia, se dicen *causa verdadera*: en el caso contrario *causa falsa*.

Y decimos *se demuestra* haber existido, y no *haber existido simplemente*, porque establecida por el derecho la prueba *taxativa*, establecido, por ejemplo, que dos testigos *no tachados*, que una escritura pública *no redargüida* de falsa, hacen plena prueba, aquello *existe* para el juzgador que se prueba por estos ú otros medios legales: aquello no existe, no es verdadero, es *falso* en el sentido de este artículo, que por los mismos se prueba no haber existido, ó que no se prueba haber existido, por aquel que los alega.

Y ¡cuántas veces, sin embargo, la verdad real no es verosímil, cuántas no llega á demostrarse jurídicamente, cuántas sucumbe ante el amaño, el dolo, ó la desgracia ó impericia de los medios, á virtud del rigorismo de una prueba *taxativa*, ó de la falta de ella! En esos casos existe *in rerum natura*; pero no existe para el juzgador. Así en el derecho tambien son conceptos diversos, la *verdad absoluta*, y la *verdad jurídica*; y relativamente hay que decir lo mismo de la falsedad. En el caso, sin embargo, mas frecuente en el derecho, de *causa por razon*, esto es, en materia testamentaria, la *causa* articulada en este concepto por el testador, se reputará verdadera, mientras no se pruebe ser *falsa*.

Ahora, sobre este punto, dice la ley 20, título 9, Partida 6: «*Falsa* ó mentirosa razon, diciendo el testador, cuando ficiese manda, non le empesce, nin se embarga por ella. E esto será, como si dijese, mando á fulano, *ome que me fizo tal honra*, ó tal servicio, tantos maravedís, ó tal cosa. Ca magüer *non fuera verdad*, que le oviere fecho aquella honra... non se embargaria la manda por esta razon; ante es tenudo el heredero de la cumplir.»

Aquí se ve evidentemente cuanto dejamos espuesto á la cabeza de este artículo, y es que en el sentido del mismo, y del derecho en esta parte, no se trata, por regla general, de averiguar, si la *causa* ó *razon* alegada fué *impulsiva*, filosófica y realmente, de la determinacion de la voluntad, si fué *causa* real de este *efecto*; si no de si *existió*.

Observaremos tambien en conclusion que, por la ley antes citada, se comprueba cuanto decimos en el artículo CAUSA (*en los testamentos*) sobre el incierto criterio establecido por los autores y por la ley 21, tít. 9, Partida 6, al consignar es *causa por razon* aquella que en latin se escribiria con *quia*: como resulta asimismo que la causa en estos casos es, por regla general, no precisamente *impulsiva*, si no *demostrativa*, ó *esplicativa*, segun allí dejamos espresado; pues en el ejemplo aducido por la ley se ve que la correspondencia en latin seria *qui* y no *quia*, y que por el hecho de usarse de la reduplicacion, *ome que*, no es *impulsiva*, ni final; si no *demostrativa*, y tal vez en el ánimo del testador *esplicativa*.

Sobre efectos de la *causa falsa* tratan latísimamente ambos derechos, lo cual corresponde, ya á los casos particulares de aplicacion, ora á los negocios *inter vivos*, ora *mortis causâ* Como doctrina general, sin embargo, pueden verse el citado tít. 9, Partida 6: el título 20, lib. 2 de las Instituciones de Justiniano: tít. 1, lib. 50 *De legatis*; y tít. 1, libro 35 *De conditionibus et demostrationibus*, del Digesto: y el 42, lib. 6 del Código De *conditionibus*. Véanse, ademas, CAUSA (*en los testamentos*): CAUSA (*por razon*): CERTEZA: CRITERIO: VERDAD.

CAUSA JUSTA. En lo moral y jurídico la razon, título, ó fundamento que hace lícitas nuestras acciones; y claro es, que consideradas estas bajo el punto de vista de la responsabilidad, ora moral, ora judicial; *justo* será en este último caso lo que es conforme al derecho constituido; en aquel, al derecho constituyente, á los buenos principios de moralidad, equidad y justicia natural. Esto en abstracto: en concreto, la causa justa viene, segun el caso, bajo las denominaciones de razon legal, derecho de pedir, ó proceder, facultad legal de obrar, justicia y otras análogas; porque en efecto, el que tiene razon, obra con derecho, usa de facultades legítimas, procede con justicia, tiene justa causa. Asi en el derecho constituido, en el civil, por ejemplo, la ingratitud es *causa justa* de desheredacion: en el canónico la *sevicia* causa justa de divorcio: en lo moral, todo lo que cohibe la voluntad es causa justa de *esculpacion*; en lo moral y legal, en el derecho constituyente y en el constituido la injusta agresion contra la vida es justa causa de repeler la fuerza con la fuerza, aun con la muerte, salvas, empero, las prescripciones del derecho positivo y de las reglas de conciencia, ó sea el *moderamen inculpatæ tutelæ*. *Justo* es, pues, lo ajustado á la regla porque ha de juzgarse. De aquí sucederá, como sucede en efecto, que solo en lo que es de justicia absoluta; en lo que es de justicia relativa, y en las cosas que llama la filosofía *de genere indiferentium*, una misma causa será justa é injusta en diversos tiempos y en diversos lugares, variando las legislaciones, las costumbres y prácticas legítimas. Véase JUSTICIA, JUSTO.

CAUSA TORPE. Del latin *turpe*, cosa *disforme*, en el sentido de *no arreglada al tipo, ó forma de su especie*. Del órden físico se trasladó en sentido figurado al órden moral y legal; y se aplica á las acciones *inmorales*, *ilícitas*, *injustas*, porque la *moralidad*, *licitud* y *legalidad*, son la norma ó forma de las acciones buenas. Faltando dichas cualidades, la accion es *enorme*, *disforme*, esto es, *sin su forma ó contra su forma*, y en lo técnico *torpe*. Algunas veces,

como por antonomasia, se aplican las voces *torpe* y *torpeza*, á la *inmoralidad*, *ilicitud*, *ilegalidad* ó *injusticia*, que se oponen á sentimientos y cualidades morales que la sociedad estima delicados en alto grado: que constituyen lo que podríamos llamar la *decencia* y *pudor* de la especie humana: entonces se llama *torpe* lo *deshonesto*, *impúdico*, *obsceno*. Torpe es tambien en lo moral y legal lo que es *deshonroso* en materia de costumbres: *contra bonos mores*. En este sentido es máxima que viene de los antiguos, tratándose de penas, *que solo son deshonrosas, ó arguyen torpeza moral, las que son merecidas*: *illud est turpe pati, quod quisque meruit*. En lo legal, en fin, *causa torpe* es tambien lo mismo que *motivo injusto*, ó reprobado por la ley. Asi la rúbrica en la legislacion romana, al tratar de la repeticion por *causa torpe*, era *De condictione ob turpem, vel injustam causam* (1). Las Partidas la refieren á los de *prevaricacion de jueces*, de dolo, de pagos indebidos y otros análogos. Y decimos que ligan ó refieren la torpeza á diversos títulos, porque en efecto, esta circunstancia, siempre vituperable, y muchas veces punible, puede intervenir en todos los negocios humanos. Esta índole, universal bajo dicho punto de vista, hace que no se preste bien, como otras materias, á ser tratada en un artículo especial sin haber de repetirse. Pero la legislacion romana, y aun la nuestra, sin dejar de tratar de ella como incidente punible y á veces criminal en diversos negocios y actos oficiales, lo verifican por separado, bajo un tema técnico, y por tanto específico, y es la razon que tenemos para dedicar á dicha cuestion el presente artículo, con la estension á que dan lugar las mismas leyes, y requiere ciertamente su gravedad. Antes de proceder á la conveniente esplanacion por casos, como tambien lo hacen las leyes, notaremos que *causa* se toma aquí por *motivo*, y por tanto por *causa impulsiva*, esto es, en una de las acepciones filosóficas de la voz, en cuyo concepto *causa torpe* es uno de los infinitos casos particulares y de aplicacion de los artículos genéricos CAUSA (*en sentido filosófico*): CAUSA (*en lo moral y legal*); y CAUSA (*por motivo*).

(1) Digesto, tit. 5, lib. 12.

PARTE DOCTRINAL.

SUMARIO.

SECCION ÚNICA.

§. 1.° *De la* causa torpe *por parte solo del que por tal motivo da ó promete.*

§. 2.° *De la* causa torpe *por parte solo del que en tal concepto recibe pago ó promesa.*

§. 3.° *De la* causa torpe *por parte del que dá y del que recibe.*

§. 4.° *Algunas cuestiones especiales, y consideraciones comunes á los párrafos anteriores.*

SECCION ÚNICA.

Desde que se habla de *causa torpe*, esto es, de *lucro adquirido por motivos y medios inmorales, ilícitos, injustos*, no parece podia, ni debia haber cuestion; si no reprobacion absoluta, y una fórmula y solucion, absoluta tambien, para todos los casos, é idéntica á la de otros análogos en el derecho. Y asi como respecto del *dolo*, es, no solo una fórmula, si no un *principio absoluto*, *leges non favent dolo*: asi como en cuestiones de usurpacion, hurto, rapiña, es tambien fórmula y principio *absoluto*, *res ubicumque est, domino suo clamat*: del mismo modo, en fin, que en materia de moralidad, es asimismo regla y principio, *nemo potest cum alterius jactura locupletari*: *nemo ex dolo, vel nequitia, utilitatem afferre potest*; asi en la cuestion á un tiempo moral y legal de *causa torpe*, de lo dado, recibido, ú ofrecido *ob turpem causam*, ó debia tener aplicacion absoluta la regla anterior; ó bien esta, ú otra equivalente; y precisamente por identidad de razon: *ob turpem causam nemo lucrari potest*; *imo quisquis id lucretur, ad modum casûs, punietur.*

Sin embargo, no sucede asi siempre por nuestro derecho. Tampoco sucedia en todos los casos por la legislacion romana, en medio de haber proclamado la escelente máxima de los antiguos, adoptada y reproducida por Celso y Sabino: *id, quod ex injusta causa apud aliquem sit, condici potest* (1). Nuestras leyes de Partida copiaron sobre este punto en su mayor parte á las romanas; y si en algo se apartaron, no fué para mejorar lo que sobre ellas podia mejorarse en el sentido que llevamos espuesto. Y es que, como ellas, trataron esta materia, lo propio que otras, no *à priori* por un sistema científico; si no casuístico, reuniendo ademas, como homogéneas, opiniones que se escluyen, de lo que el Digesto no ofrece solo un ejemplo.

Las leyes romanas trataban de la causa *torpe* en el concepto de lo que llamaban *condictio*, esto es, en el sentido de poder repetir, ó no, *lo dado ob turpem causam*. Las leyes de Partida, bajo el epígrafe de que *aquel que recibe en pago alguna cosa torpemente la debe tornar*; sin que ni la una, ni la otra enunciativa abarquen completamente la teoria: varia, como veremos, en sus pormenores, la cual, en vista del contesto general de las leyes, puede fijarse asi. *Interviniendo causa torpe en los convenios, puede repetirse lo que se hubiere dado por tal motivo: si nada se hubiese dado, si no prometido, el pacto ó promesa es ineficaz: todo sin perjuicio de la penalidad del delito especial que de ello resultare.*

Todavia la presente regla no es precisa, ni completa; pero las leyes, como veremos, no permiten formularla de otro modo. La 47, tit. 14, Part. 5, dice en esta razon: «Pagas è pleitos facen los homes... sobre razones ò cosas que son torpes, è *desaguisadas*, è *contra derecho*. E porque esta torpedad aviene à las vegadas, *de parte de aquel que da la cosa solamente*: à las vegadas *de aquel que la rescibe*: è à las vegadas tambien *del uno, como del otro*; queremos mostrar que departimiento ha entre ellos.....» La ley 1, título y libro citados del Digesto, adoptando la doctrina de Paulo, dice asi al mismo propósito: «*Omne, quod datur, aut ob rem datur, aut ob causam: et obrem, aut turpem, aut honestam. Turpem autem, aut, ut dantis sit turpitudo; non accipientis: aut accipientis dumtaxat; non etiam dantis: aut utriusque.....*» Bajo estos tres conceptos, pues, espondremos con separacion las disposiciones del derecho.

§. 1.° *De la* causa torpe *por parte solo del que por tal motivo da ó promete.*

Las leyes romanas establecian sobre la *condiccion*, ó repeticion de lo dado *ob turpem causam*, los mismos tres casos que despues las leyes de Partida; y sin embargo, no formularon el primero de estos tres casos; y todas las que hablan de la *causa torpe*, ó lo hacen espresamente, ó hay que entenderlas de la torpeza por parte solo del que recibe, ó por parte del que recibe y del que dá, ó promete; pero no aisladamente de este. Por ello sin duda las leyes de Castilla quisieron establecer y formular dichos tres casos con separacion. En cuanto al primero de ellos, dice asi la ley 50, título y Partida antes citados: «Sabiendo alguna muger, que non podria casar con algun home, con que oviese pleito de casamiento, *porque fuese su pariente*, ó porque *ella oviese otro marido*, ó por otra razon semejante destas, que fuese à tal, que segund derecho non podiese con él casar; è *non sabiendo* él que habia entre ellos algun embargo, casase con ella; si *le diese ella alguna cosa por dote*, magüer el casamiento se partiese por esta razon, *non podria ella demandar aquello que le oviese dado por dote*; nin seria el tenudo de gelo tornar; porque face ella muy gran torpedad en trabajarse á sabiendas de casar con tal home, con quien non podria casar con derecho... E este es un caso en que viene la torpedad tan solamente de parte de aquel que da la cosa. E lo que decimos en esta ley en razon de casamiento, entiéndese tambien en todas las otras cosas semejantes desta, en que viniese la torpe-

(1) Ley 6, tit. 5, lib. 12 del Digesto, *De condictione ob turpem causam.*

dad de parte del que da la cosa tan solamente, è non de la otra.»

El ejemplo es algun tanto estremado en sí, y en sus pormenores. Los autores de la ENCICLOPEDIA han visto mas casos de *poligamia* que de *poliviria*. Esto en cuanto á procurar casar con otro la muger que ya tiene marido. El caso del parentesco, siendo esta una circunstancia familiar, y por tanto recíproca; despues del Concilio de Trento, sobre todo, y de las moniciones y solemnidades establecidas por él para el matrimonio válido, es caso aun mas difícil; pues casi no se concibe sin complicidad. Como quiera que sea, el principio y el ejemplo, ó regla práctica, quedan establecidos por la ley, si bien con menos amplitud que la necesaria.

Porque, en efecto: ¿qué derecho regirá en caso que el precio ó la dádiva, que constituye la torpeza material, no llegare á entregarse, y solo se prometiera; ó cuando la promesa no fuere de *dar*; si no de *hacer*, ó de *no hacer*, como no demandar, no ejecutar, no reclamar lo justamente debido por otros títulos ó conceptos anteriores? El silencio de la ley, y el rigor de la teoría, parecian exigir que el promitente pudiera ser compelido á demanda del que recibió la promesa, y habia de percibir la utilidad. Parece aun inducir á ello la índole penal de esta disposicion de la ley, que asi castiga la inmoralidad. El silencio de la ley, repetimos, cuando vino, como con propósito, supliendo el de las leyes romanas en este punto, autoriza la mencionada interpretacion; y sin embargo tenemos por cierta la contraria. En los casos de inmoralidad, ó torpeza recíproca, ó cuando está solo de parte del *accipiente*, las leyes lo establecen asi; y hay ademas que los tribunales, admitiendo la demanda del *promisario*, y condenando al pago, ó cumplimiento al promitente; parecerian llamados á *completar* un hecho de inmoralidad que la voluntad de los contrayentes, ó circunstancias independientes de ella, habian dejado pendiente de resultado. Menos inmoralidad y repugnancia habria en aplicar en este caso lo prometido al *fisco*, que no al *promisario*, permítasenos la voz. El promitente, pues, se librará ó defenderá de la demanda por escepcion *in factum*.

La ley habla solo de lo que la muger dió *en dote*; y sin duda espresó en ello menos de lo que quiso, á menos de convertir aquí la enunciativa *dote* en inmoralidad. Ha de tomarse, pues, en este caso la palabra dote en sentido genérico y por todo lo que en cualquier modo y especie diere al marido.

La ley hace el supuesto de que se siguió el matrimonio; y sin duda la pérdida de lo entregado tiene igualmente lugar, aunque aquel no se siguiere, pues la *torpeza* ó inmoralidad existe ya en el ánimo y en el hecho del convenio y entrega; aunque no esté consumada en todos sus efectos.

Habla la ley, en fin, del caso únicamente de la *disolucion* del matrimonio. ¿Será que su sancion penal no tenga lugar durante aquel? El contesto de la ley es dudoso en este punto, pues no dice simplemente que la pérdida de lo entregado tenga aplicacion, disuelto el matrimonio; si no *magüer el casamiento se partiere por esta razon*; supuesto lo cual, la disolucion del matrimonio ilegal parece ponerse, como caso estremo de supererogacion, mas favorable á la muger que la continuacion del consorcio. Y sin embargo, siendo este ilegal, y consistiendo en esta circunstancia precisamente la sancion penal de la ley, la continuacion y la disolucion, para este efecto serian iguales. ¿Cómo la ley favoreceria una union que no seria matrimonio; si no union incestuosa, concubinaria, etc., y la favoreceria en la persona culpable esclusivamente? Otra cosa será si la union incestuosa, ó concubinaria se convirtió canónicamente en matrimonio legítimo, obteniendo dispensa y rehabilitacion pontificia. Repugnante seria, contrario á la solicitud y fines de las leyes civiles y eclesiásticas en legitimar las uniones maritales, el perturbarlas subsistiendo, ó infamar su recuerdo y efectos despues de disuelta, estigmatizando asi en su caso la memoria de los padres, haciendo pesar su flaqueza, ó su crímen en la memoria y sentimiento de los hijos. ¿Cuántas veces un matrimonio no legítimo, hasta incestuoso con toda la grave-

dad que puede serlo, es secretamente rehabilitado por penitenciaria, ó sea por la vía reservada, y eso por bien de la sociedad, respeto á la institucion, á un tiempo civil y sagrada, del matrimonio, y decoro de la familia? ¿Qué tribunal romperia este secreto sagrado, y lo convertiria en escándalo, admitiendo la demanda inmoral asimismo y escandalosa de la muger en vida, ó despues de sus herederos, para la devolucion; ó la del marido, ó los suyos en sus casos para la retencion, ó deduccion de lo dado por la muger en el caso de la ley que esponemos? Los autores en su larga práctica cuentan numerosos casos de matrimonios *rehabilitados* canónicamente; pero ni uno solo de reclamacion *ob turpem causam*, en el sentido que venimos esponiendo.

§. 2.° *De la* causa torpe *por parte solo del que en este concepto recibe pago ó promesa.*

La ley de Partida, ya citada (47, tít. 14, Partida 5), establece con claridad el *ejemplo* y el *principio* en este punto. «E decimos, espresa la ley, que la torpedad aviene tan solamente de parte de aquel que recibe la paga ò la promision, cuando le promete de pagar alguna cosa por que non furte, ò non mate ome, ò non faga sacrilegio ò adulterio, ò otra cosa semejante destas, de aquellas que segun natura, è segun derecho todo ome es tenudo de guardarse de las facer.....» Añade asi bien el ejemplo del que recibió en *préstamo*, ó *aloguero* alguna cosa, y luego necesita se le dé ó prometa algo para devolverla. Señala, por último, el caso del que exigiese lo mismo por restituir al padre el hijo, ó al dueño las cosas que le hubiese robado. Despues de eso, dice en cuanto al primer caso, que el *recipiente*, «debe tornar en todas guisas quello que recibió por aquella razon. E si non gelo oviesen pagado, deben *quitar la promision* que oviesen fecho para pagargelo. Ca mucho es cosa desaguisada de recebir ome ninguno precio por non facer aquello que el por sí mesmo es tenudo naturalmente de guardarse de lo facer.» En cuanto al segundo caso: «Si por tal razon le diese algo luego el otro, ò *gelo prometiese*, tenudo es de gelo tornar, ò de *quitarle la promision* quel oviese fecha por ende: por que es gran torpedad de recebir ome precio por aquello que, segun derecho, es tenudo de facer.» En cuanto al tercero, en fin: «Eso mesmo decimos que seria si alguno furtare à otro su hijo, etc.: ca aquello que del recibió (del padre ò dueño) sobre tal razon, tenudo seria de gelo tornar, magüer non quisiese.»

Las razones de la ley no pueden ser mas sólidas, ni su tenor mas claro. Y aunque hablando de la *promesa* de dar, dice debe *quitarla*, esto es, renunciar á ella el que la recibió, siempre ha de entenderse que los tribunales suplirán su irracional, y tambien inmoral y nuevamente torpe noluntad, ó resistencia.

Las leyes romanas disponian lo mismo por regla general, y la citada de Partida en lo que dispone, es copia, casi hasta en los ejemplos, de la 1.ª y 9.ª del Digesto, título y libro ya citados, *De conditione ob turpem causam*: *Quoties accipientis, non etiam dantis*, dice la 4 del tít. 7, lib. 4 del Código, *De conditione ob turpem causam*, turpis invenitur *causa, licet hæc secuta fuerit, datum condici tantum; non etiam usuræ peti possunt.* Nuestra ley no habla de las usuras, aunque por lo mismo es cierto que no se podrán pedir, ya por la autoridad y racionalidad de la doctrina romana, ya porque al cabo, aunque por cierta necesidad, el promisor dió el precio *voluntariamente*, en vez de acudir á los tribunales de justicia, en los casos á lo menos en que, sin riesgo podia hacerlo, y por otra parte la moralidad y la justicia quedan vindicadas revocando la dádiva y defraudando al accipiente en su esperanza y lucro ilícito. Con la razon antes indicada del recurso posible á los tribunales antes de acudir á dádivas, que si no son inmorales en sí, fomentan la inmoralidad, coincide la disposicion de la ley 9, ya citada, del Digesto, segun la cual, el que daba dinero por recobrar lo que tenia vendido ó prestado, no debia usar para reintegrarse de la

reclamacion *ob turpem causam*; si no de la accion directa que le daban los mencionados contratos. De algunas cuestiones, y casos especiales, relativos á esta segunda subdivision; pero que lo son tambien respecto de alguna de las otras, ó de todas tres, hacemos mérito al final de este artículo, en el §. 4.°

§. 3.° *De la* causa torpe *por parte del que dá y del que recibe.*

En cuanto á este punto la ley está menos esplícita que respecto de los dos anteriores. En aquellos es teórica; en este casuística, estableciendo allí, ademas del ejemplo, el principio general; mientras aquí se limita á un caso, que no es el que ocurre con mas frecuencia, ni el que arguye mayor depravacion. « A sabiendas casando algunos de so uno, dice la 51 del título y Partida citados, seyendo sabidores, tambien el varon como la muger, que habia entre ellos embargo, etc.» Establece el caso en los propios términos que el ya espuesto de ser culpable solo la muger, con la misma conclusion *casuística*, y es, que aunque el matrimonio se disuelva, no puede el uno repetir lo que dió al otro por arras, ó dote, por la razon de que «la torpedad viene de amas las partes.» La ley no encarga sirva el caso de regla general, como lo hace en los dos anteriores; y sin embargo, asi debe entenderse, no ya por identidad, si no por mayoría de razon. Asi, si uno paga á un asesino, á un incendiario: si uno dispensa ausilios y proteccion al bandido, al estafador, al jugador, al contrabandista, y estos acuden á aquellos con precio ó dádivas, no como participacion en lo robado; pues esto constituiria ademas otro género de infraccion; si no como retribucion ó compensacion, ni unos ni otros podrán repetir lo que dieron; ni tampoco podrán ser compelidos por lo que prometieron. Ademas de la razon de analogía con los demas casos, y de estar todos tres reprobados por la ley 47 arriba inserta, hay la regla ó principio análogo del derecho de que el dolo de una de las partes se compensa con el de la otra, sobre lo que aun habremos de hablar despues. La ley 51, antes citada, esceptúa el caso de que alguno de los contrayentes sea menor de 25 años, ó si lo fueren los dos, asentando que el que lo fuere, puede repetir lo dado por causa torpe. Y esceptúa asi bien el caso de error ó ignorancia del impedimento para el matrimonio, cuya escepcion no era necesaria, pues si uno solo lo sabia, ya el caso no es el de la ley, esto es, de doble culpabilidad, si no solo del recipiente: y si lo ignoraban los dos, no es tampoco el caso de la ley, que parte del supuesto de que ambos lo hayan de saber: *á sabiendas casando algunos*, etc. Las leyes romanas resolvian del mismo modo el caso de doble culpabilidad. *Ubi autem, et dantis, et accipientis turpitudo versatur, non posse repeti dicimus* (1).

§. 4.° *Algunas cuestiones especiales y consideraciones comunes á los párrafos anteriores.*

Hasta aquí la teoría de la repeticion por causa torpe. No saliendo de la fórmula general; no descendiendo á casos particulares; enunciando meramente el principio, sin esponer las razones y fundamentos, corria sin obstáculo: no podia ser mas racional: *que la inmoralidad y la injusticia sean reprimidas, y escarmentadas: que no puedan ser útiles á los implicados en ellas.* Pero cabalmente, descendiendo las leyes á casos particulares, se ve en muchos lo contrario: dando razones de esta irregularidad, se ve el vicio de la teoría; ó su falseamiento por el mismo legislador.

El primer convencimiento de ello lo tenemos al examinar prácticamente la misma teoría general, que en esta parte adolece del propio vicio esencial que la general del derecho del dolo *mútuo*.

Porque, en efecto: en el primero y segundo caso, esto es, cuando la *torpeza* está solo de parte del que dá, y cuando asimismo está solo de parte del que recibe, cada uno pierde lo que dió, y por tanto cada uno queda castigado: pierde de su patrimonio lo que fué el

(1) Ley 3, título y libro citados del Digesto.

precio de una inmoralidad. Pero en el tercer caso de la teoría, cuando la inmoralidad está de parte de los dos, no queda castigado ninguno. Alégase la falsa razon, como en la teoría del *dolo mútuo*, de que *una torpeza se compensa con la otra*. No, ciertamente: no es en el resultado una torpeza con otra lo que se compensa: ni el que uno sea malo puede autorizar el que otro lo sea; lo que se compensa es realmente una pena con otra, una pérdida con otra. Cada uno pierde lo que dió; pero *retiene lo que recibe*, por la singular razon, decimos, de que el otro delinquió, de que obró ilegal, ó ilícitamente. Ambos quedarian castigados si ninguno sacare utilidad, ni de su hecho ilícito, ni del ageno. La sociedad por medio del fisco, de establecimientos de beneficencia pública, etc. era la que debia recibir el precio de la inmoralidad, no ninguno de los delincuentes. Lo singular es, que las mismas leyes lo establecen así en algun caso, como veremos.

El falseamiento de la teoría por este medio puede aun conducir, no ya á que ninguno de los dos delincuentes pierda de su patrimonio todo lo que dió; pues en todo ó en parte queda compensado con la pena del otro; si no que alguna vez puede ganar mucho, siendo las dádivas ó pagos desiguales. Tal seria en el caso de la ley de Partida si el varon diese grandes riquezas por dote y arras á la muger; y ella una ligera dádiva al marido, ó al revés. ¡Buen modo de quedar castigado el que en tal caso retenia medio millon, uno, dos, por la pérdida de mil reales que él diera al otro, resultando que los retenia por el hecho mismo inmoral por que el otro los pierde! Lo que resulta de ello no es realmente un escarmiento; si no una nueva *torpeza*, ó inmoralidad, autorizada por la ley.

Por otra parte, cualquiera que sea el carácter que se dé á la pérdida de lo dado por causa torpe, ora civil, ora criminal; y siquiera sea el primero; siempre es preciso reconocer que es de índole penal. ¿Cómo se salvará en ello la igualdad, proporcion, y eficacia de la penalidad?

Ultimamente: en el ejemplo aducido por la ley de Partida para el caso de la doble culpabilidad, hace justamente la escepcion ya mencionada de la menor edad. Pero la menor edad no puede exigir, ni debe, si no que el menor, por causa de ella, *no reciba daño*; pero no el que reciba provecho; y menos por causa inmoral, ilícita, punible. Y precisamente es ese el caso. En el de la ley citada cometen torpeza ambos contrayentes: el uno es menor de edad y puede por ello repetir lo que dió: el otro por ser mayor de edad pierde lo dado por él, quedando en poder del menor. Esto se llama falsear la teoría completamente, y no ella sola; si no otras teorías y principios del derecho. El derecho no considera al hombre en edad madura hasta los 25 años; pero le reputa capaz de malicia y por tanto de pena, y eso aun cuando la malicia no se adelante á la edad á los 14. ¿Cómo confundir estas dos sanciones del derecho, justísimas ambas, y que por tanto han de conciliarse en vez de sacrificar la una á la otra, y eso en materia de inmoralidad, de malicia, en lo que el hombre es ya reputado, en parte capaz; y luego capaz completamente, no ya á los 25 incoados, á los 24, 22, si no aun en inferior escala, como es sabido? Sírvale al menos el privilegio de la menor edad para no recibir daño; ¿pero por qué ha de servirle para recibir provecho, para reportar lucro por inmoralidad propia y agena? Mientras el menor, pudiendo reclamar lo que dió, retenga ademas lo que recibió del otro cómplice, no solo queda falseada la teoría de la repeticion *ob turpem causam*; si no la teoría jurídica de la *imputabilidad* de las acciones, de la susceptibilidad de malicia, y capacidad para la pena. Entiéndase que combatimos solo la retencion por el menor de lo dado por su cómplice, lo cual, segun dejamos indicado en el caso anterior, debia pasar *á la sociedad*. Reseñando ahora algunos casos especiales de aplicacion de la teoría, hallaremos nuevas pruebas sobre la incoherencia acerca del mismo punto.

Si alguno, dicen las leyes de Partida, hallándose cautivo de enemigos, ó en poder de ladrones diese á alguno porque le librase,

no lo podria reclamar; salvo si este fuese autor, ó cómplice de los que le tenian preso; que entonces podria (1).

El que sabiendo que tiene escepcion *ob turpem causam*, en vez de usar de ella, paga lo prometido, ya no podrá repetirlo; pues parece darlo así espontáneamente, con lo cual, dicen los autores, queda purgada, ó subsanada la torpeza, ó culpabilidad del que recibió; y eso, añade la ley, aunque la promesa procediese de fuerza, ó miedo grave. Esto es, el promitente no estaria obligado á cumplir la promesa; pero si paga espontáneamente, ese es el caso en que no podrá repetir. La materia de fuerza y miedo grave tiene su artículo particular, y por eso no la continuamos aquí. En razon de la torpeza, dice Gregorio Lopez, ha de entenderse la ley, limitada al caso en que *tempore solutionis, vel per ipsam solutionem purgatur turpitudo præcedens*. Ciertamente, si la solucion es tal, y tan evidente la espontaneidad que puede reputarse donacion gratuita; y no precaucion por miedo, ó temor de ulterior peligro, la hallamos menos violenta, pues en realidad algo lo es. La legislacion sobre la causa torpe no es de todo punto privada, de suerte que la sociedad nada tenga que velar sobre ello, ni por qué ser vindicada. Los pactos con causa torpe no lastiman solo los intereses y derechos del que dá; si no que son ofensivos á la moral pública, y como decian las leyes romanas, *contra disciplinam temporum, contra bonos mores*; y no ha de estar en manos de particulares el hacer que al violador de la ley le sea útil su hecho punible. Hallaríamos mas fundado el hacer *presuncion juris* la de que mediaba nueva fuerza, engaño, dolo, ó torpeza de parte del que ya en ese terreno constaba habia una vez sido malo. Los autores no llevan tan adelante su rigor, si bien esceptúan lo que ciertamente no era necesario, y es, que *quando actus consecutivi procedunt ex eadem fragilitate, non confirmant actum principaliter celebratum* (2).

El glosador de las Partidas asienta que la ley anterior fué tomada de la romana, *Si ob turpem causam* del Digesto, título y libro citados: es así, y la cual no citaríamos, si no opináramos que su razon ha trascendido á nuestra jurisprudencia mas de lo que conviniera. Su oscuro contesto, que requiere una traduccion libre, dice así: « Si prometieres algo á Ticio por causa torpe; no obstante que en este caso, si pide, le puedes rechazar con la escepcion de dolo malo, ó *in factum*, con todo eso, si pagares lo prometido, no puedes repetir. La razon es, porque removida (con la paga) la causa próxima de la estipulacion (que era la promesa) y la cual en virtud de las antedichas escepciones podias repeler; despues no queda ya si no la causa primitiva que es la *torpeza*: en este supuesto ya; pues que media esta de parte del que dá, y del que recibe, *el poseedor es de mejor condicion*, y por tanto cesa la repeticion (de parte tuya), no obstante que pagaste en virtud de la estipulacion (ó promision, rebatible, como queda dicho).» La ley romana no dá la misma razon que la española. Segun esta, la razon de no poder repetir, es porque, pagando espontáneamente, queda purgada la torpeza, y lo que antes esperaba el accipiente por un título *ilícito*, ahora la recibe por uno *tan lícito*, como *la voluntad de su dueño*; que por una parte renuncia á la escepcion de *dolo*, ó *in factum* contra la estipulacion, ó convenio, y por otra hace desaparecer la torpeza con su espontaneidad y largueza en el pago. Por la ley romana, es al contrario: la estipulacion desapareció, en efecto, pero *subsiste*, dice, *la torpeza*; y en tal supuesto, y reduciéndose ya el caso al de doble ó *mútua torpeza*; *mejor es el derecho del que posee*. No satisface, segun hemos visto, la razon de la ley española; y sin embargo es mas aceptable. Verdad es que pone el caso de inmoralidad de solo el *accipiente*; mientras la ley romana lo establece de inmoralidad de los dos: pero aun así, nos parece peligrosa la aplicacion del principio *melior est conditio possidentis*, cuando la posesion no es á todas luces legal, exenta de todo viso de inmora-

(1) Ley 48, tit. 14, Part. 5.
(2) Gregorio Lopez, glosa 2 á la ley 49, tit. 14, Part. 5.

lidad ó injusticia, que aquí, á lo menos en nuestra opinion, es de ordinario inseparable de ella; ó de otro modo, lo ordinario es, en nuestro concepto, que la espontaneidad en el pago es aparente y sospechosa; y la escepcion el caso contrario.

Los autores, en fin, Gregorio Lopez con otros, aplican la teoría de la repeticion *ob turpem causam*, al derecho público y de gentes, y establecen, que si los pueblos ó ciudades invadiesen castillos ó fortalezas, y exigiesen ó recibiesen precio por la devolucion, el caso era de causa torpe, y estarian obligados á la devolucion de lo percibido, sin que les librasen de ello *los capítulos de la paz*. Los autores aplican aquí la teoría á la inversa que en otros casos. El presente es sin duda de inmoralidad ó torpeza de solo el que recibe. En él han asentado que el pago voluntario ó hecho con conocimiento de que se podia rehusar, purga la *torpeza*; y sin embargo, aquí no quieren que quede subsanada, ni aun por los capítulos de la paz. En esta parte creemos lo contrario. En el derecho de gentes las diferencias se arreglan de otro modo que entre particulares. Las condiciones de paz lo son todo, y no hay diferencia que no pueda arreglarse por ellas, y puesto que las naciones no tienen otro tribunal que á sí mismas. Sobre castillos y fortalezas del rey y de los grandes, véase CASTILLO.

En lo judicial las leyes de Partida despliegan á un tiempo un estremado rigor, y una singular lenidad respecto de la causa torpe. Hablan de ella al lado del cohecho, de la corrupcion de jueces, del prevaricato (ley 27, tít. 22, Part. 3) y en el ya citado título 14, Partida 5, de las *pagas é quitamientos*; y es en este punto, esto es, en el terreno judicial en donde menos convenia y debia esperarse, en el que dichas leyes, con estrañeza fundada de sus comentadores, muestran una lenidad, que no podia suponerse, con los concusionarios.

Y con efecto: habia ordenado una ley romana: *Si dedi, ut secundum me in bona causa judex pronunciaret, est quidem relatum condictionis locum esse: sed hic quoque crimen contrahit, judicem enim corrumpere videtur; et non ita pridem imperator noster constituit litem perdere* (1). La ley es ciertamente oscura. Si el que dá dinero al juez aunque sea en buena causa parece *corromperle* (*corrumpere videtur*): si comete en ello *crímen*, y crímen de tal gravedad, que, aun correspondiéndole en justicia, debe *perder el pleito*: si este habria de importar, siendo de intereses, ordinariamente mas que lo que se daba por *causa torpe*; pues que en otro caso ¿para qué se daba, ó qué iba á ganarse con darlo? en vista de todo, la glosa civil y los espositores opinaron que, pues habia lugar á pena mayor; con superior razon lo habria á la menor, ó sea á la no *condiccion*. Y pudieron creer hasta error en el contesto: el *relatum est*, podria ser *negatum*; ó suponerse si no, omitida una negacion, esto es, *relatum est non*, etc. La frase *adversativa* por una *parte*, y correlativa por otra, *sed hic quoque crimen contrahit*, parece persuadirlo asi. Como quiera que sea: por estas ú otras razones se formó y prevaleció opinion comun, como dejamos manifestado. De otro modo, el sentido de dicha ley seria: «el que dé dinero por que le fallen bien la buena causa, *no comete inmoralidad*; *pero comete crímen de concusion*: por lo primero no incurre en pena, y *puede reclamar lo dado*: por lo segundo sufrirá la pena de *perder el pleito*.» En las sutilezas, estremadas á veces, de la jurisprudencia romana, cabia ciertamente esta antítesis; pero es menester convenir en que el buen sentido, la moralidad, aun no muy rígida, la suma importancia de la administracion de justicia, encuentran en ello la misma repugnancia que justamente encontró la opinion general, despues repelida, como veremos, por la ley de Partida.

Hay que notar, que al propio tiempo la glosa canónica á los capítulos *Qui rectè*, 46, causa 11, cuestion 3, y *Non sanè*, 15, causa 14, cuest. 6, adoptaba una opinion contraria á la comun. El tenor del primero de estos capítulos no puede ser mas acervo: *qui rectè*

(1) Ley 2, tit. 5, lib. 12 del Digesto, §. 2.

judicat, et præmium inde remunerationis expectat, fraudem in Deum perpetrat, quia justitiam, quàm gratis impertiri debuit, acceptione pecuniæ vendit. Acceptio numorum prævaricatio veritatis est. No lo es menos el del cap. *Non sanè:..... non debet judex vendere judicium... multo sceleratius utique pecunia sumitur, quia sceleratè etiam á volentibus datur...* Pero este mismo capítulo contiene las palab as siguientes: *Ille tamen solet* (el corruptor) *tamquam malè sibi ablatam pecuniam repetere, qui justum judicem emit, quoniam venale esse non debuit.* Bien claro se ve que la ley canónica no preceptúa, no ordena, no niega la procedencia de la *condiccion*; si no que la menciona, como practicada en otro foro, ó con arreglo á la costumbre: *solet.* No prueba, ni desaprueba; y antes debia suponerse que desaprobaba la práctica y costumbre. Pero la glosa opinó con la ley romana, contra la *opinion comun* y la glosa civil; y la ley de Partida (27, tít. 22, Part. 3) siguió á la glosa canónica contra dicha ley romana y opinion general. La citada ley dice así: «Cuando... el contendor que tiene mal pleito diese algo al juez *porque juzgue mal*, é *á pro de si*, ó porque alongase el pleito, é *non juzgase en ninguna manera*; decimos que por ninguna destas razones *non gelo* puede despues demandar.... é abonda *que el juzgador lo peche al rey....* Mas si dió algo al juez *por que non le juzgue tuerto, ó por que le juzgase derecho, puedelo demandar* que gelo torne, por que la maldad é la enemiga *fué de parte del juzgador* que lo recibió, tomando precio, por lo que era tenudo de facer llanamente por derecho é por jura. E si por aventura á la sazon que la parte diere algo al juzgador callase, ó le digese *que gelo daba porque le juzgase, non le puede despues* demandar..... lo que le diera; *por que le quiso meter en cobdicia engañosamente*; nin debe fincar en poder del juez lo que tomó... *mas débelo tornar al rey.*

Si la ley no diferenciase en los casos que establece, no seria fácil adivinarlo; aunque sí apareceria menos infundada su disposicion. ¿Quién comprenderá que el juez reciba por *codicia* el precio de su inmoralidad en el último caso, y no en los anteriores? ¿Cómo creer alejado el peligro y el escándalo de la admision de dones y pagos, disonantes y peligrosos, porque el corruptor pronuncie una palabra menos, que siempre procuraria omitirla, si en eso consiste en suma el que la causa no sea *torpe*? Con razon nota Gregorio Lopez que por esta ley *reprobatur glossæ, et communiter omnium legistarum opinio, quæ voluit ut isto casu non competeret repetitio, et dans judicium perderet.*

La ley en cambio mejora la teoría estableciendo á lo menos en este caso, como hemos espuesto debia verificarse en los mas, el confisco de lo dado *ob turpem causam.*

Pero ademas de lo dicho, la ley 52, tít. 14, Partida 5.ª, ordena que «maravedís ó otra cosa cualquier, dando alguna de las partes al juzgador, *á pleito que dé la sentencia por él*, quier *haya mayor derecho* en el pleito... aquel que los dá, *quier el otro*, non puede despues demandar aquello que dió, nin debe fincar en el juzgador..... ante decimos *que debe ser de la cámara del rey.*» Esta ley es realmente contradictoria de la antes citada. En uno de los estremos que contiene, es precisamente la ley romana mas favorecida en dicha ley 27, tít. 22, Part. 3, que en esta. La romana dice: «*Si doy porque el juez falle por mi en buena causa* (*Si dedi, ut secundum me in bona causa judex pronunciaret*).» Ahora la ley 52 citada niega la *condiccion* á la parte que dé algo al juzgador *á pleito que dé la sentencia por él*; quien haya *mayor derecho*, etc. La contradiccion, pues, entre ambas leyes es evidente. Verdad es que en la 27 mencionada se dá repeticion, cuando se entrega algo *porque no juzgue tuerto al dador, ó porque le juzgue derecho.* Si estas fórmulas se aplican, cuando se trata del que tiene buena causa (*in bona causa*), el caso es realmente el de esta ley, con el diverso resultado que presenta en las mencionadas de Partida 27 y 52. Los glosadores creen salvar la *antinomia* con decir que en estos casos no espresa testualmente el donante *que dá por que juzguen por él.* Pero ¿qué otra cosa es *hacerle justicia, ó no hacerle tuerto*, cuando tiene razon (*in bona causa*)? Si en efecto,

por eso no existe contradiccion, existe una cosa peor, y es el hacer depender de fórmulas verbales, que tanto se prestan á ser estudiadas, y á distar del pensamiento en el fondo, los fines de la ley en asunto tan grave como el *cohecho* y el *prevaricato* en la administracion de justicia. Lo singular es la razon que dán las leyes mismas en el caso opuesto, esto es, de procurar hacer al juez *cobdicioso*; y el asentar los mismos glosadores (Gregorio Lopez, á la ley 52 mencionada), que no ha lugar á la repeticion de lo dado por causa torpe, aunque solo se dé para el pronto despacho; como si el *pronto despacho* no fuera tan debido, como el *hacer justicia*, ó *no hacer tuerto*.

La ley 26, en fin, tít. 22, Part. 3, considera la dacion *ob turpem causam*, bajo el doble concepto del *cohecho*, y prefija las penas por este delito.

Finalmente: las leyes de Castilla, como las romanas, señalan todavia algunos casos especiales, de los que mencionaremos los mas notables. El que con fines deshonestos, dice la ley 53, tít. 14, Part. 5, dá dinero, ú otros dones á muger de buena fama, no puede repetirlos, aunque ella falte al mal propósito, y es la razon, que hay causa torpe de parte de ambos, y en ese caso *mayor derecho ha en la cosa el que es tenedor, quel otro que la dió*. Tampoco puede repetirse lo que con el propio mal fin se dá á una ramera, aunque ahora es porque no hay torpeza si no de parte del que dá; pues la mala muger, si bien hace mal en abandonarse á su infame trato, no despues en llevar intereses en ejecutarlo. Esta ley está tomada al pié de la letra en ambos estremos de la 4 del título citado *De condictione ob turpem causam* del Digesto. Desde luego nos pareceria menos inmoral entre los romanos gentiles, que entre nosotros; y sobre todo diérase otra razon, ó no se diera ninguna. Reconocido que la muger de buena nota comete inmoralidad en recibir un premio nefario, que desmiente bien aquella nota, no merecia el respeto de la ley el supuesto derecho de posesion, que ya antes hemos combatido. En el caso de la meretriz es aun mas disonante la razon, y no menos, ni menos fútil é incoherente y filosófica la doctrina de que *comete inmoralidad en prostituirse, pero no en ejercer la prostitucion*. Aun por homenaje á la moralidad parécenos que estas no son razones de ley. Dijérase que el donante debia imputarse á sí mismo el malversar sus intereses, y que la no *condiccion* tenia por fin el retraer á los hombres; asi como á la mala muger, haciendo menos lucrativo el vituperable comercio. Y ciertamente que no era un grande aliciente para el vicio el no ceder, si no en utilidad de la sociedad, ó sea del fisco. Era aun menos repugnante el decir que por haber inmoralidad de parte de los dos; que no porque *solo hace mal*, ó *procede por causa torpe* el hombre, y no la meretriz. Hasta en los términos está concebida la ley de Partida de modo que parece hacer la apología, aunque sabemos bien que no la hace, de la prostitucion. *Illam, enim*, decia la ley romana, *turpiter facere, quod sit meretrix; non turpiter accipere, cum sit meretrix*. Nuestra ley de Partida lo tradujo asi: «Ca como quier, que la muger face gran yerro en yacer con los homes; *pero non face mal en tomar lo quel dan*: é por ende, en recebirlo *non viene la torpeza della*.» Despues de esto es menester convenir en que no puede formarse idea exacta de la *torpeza*, ni de la *prostitucion*. ¿Qué es el *vicio*, separando de él *los actos* que constituyen *el hábito*? Se declara *causa torpe* el dar dinero al juez, aun por *el pronto despacho*, por temor de que se haga *cobdicioso*; y no hay inmoralidad en confirmar la prostitucion con premio que, para salvar semejante estremo de la terminología formularia, hay que reputar *lícito*, pues que no es *torpe*! Lo singular es que las mismas leyes romanas (5, tít. 7, lib. 4 del Código) estableciendo casi el mismo caso, si bien aplicado al *lenocinio* (*ad uxorem mercàlem*), funda, con razon, la no *condiccion*, en ser tal estipulacion *contra bonos mores*.

Hay, en fin, un caso en que las leyes de Partida y las romanas discordan, siendo asi que aquellas lo tomaron de estas. Es el que se llama *redimir su sangre ó su fama*, lo

cual, por principio general, es lícito á todos. La persona complicada en un delito, si diere algo por no ser descubierta, comete torpeza, dice la ley romana (4, tít. 5, lib. 12 del Digesto ya citada). *Si ob stuprum datum sit, vel siquis in adulterio deprehensus redemerit se... item si dederit fur, ne proderetur..... cessat repetitio... quoniam utriusque turpitudo versatur.* La ley 54, tít. 14, Part. 5 dice en el mismo caso: «En yerro de adulterio, ó de homicidio, ó de furto..... cayendo home... si por miedo de ser descubierto diese alguna cosa á otro por que non le descubriese... *non face torpedad*... por estorcer el peligro... de ser descubierto. E por ende decimos *que lo puede demandar.* Ca sabida cosa es que *todo home debe puñar*, cuanto pudiere, *para estorcer que non caya en peligro de muerte, ó de fama.*» Aunque palpable la contradiccion entre ambas leyes, hallamos mas racional la española; si bien el principio que aquí proclama de un modo absoluto, no es aplicado por las demas del Código de las Partidas, ni por la jurisprudencia, con igualdad y sistema. ¿Quién duda que trata de salvar su vida ó su fama el que dá dinero por el pronto despacho de una causa *de calumnia*, por ejemplo, ó en una acusacion falsa de muerte? Y sin embargo, en esos casos, ó muchos de ellos, vemos que las propias leyes declaran, ó sus espositores asientan, *cometer torpedad* el que dá algo en tal sentido.

Réstanos observar, si por el nuevo Código penal se ha introducido novedad en cuanto á la llamada *causa torpe*; y sin duda han introducido alguna. Por regla general, no confundiendo la *concusion*, *cohecho*, *soborno*, etc., con la simple dacion por causa torpe, la *condiccion*, ó reclamacion de lo dado por tal motivo era de índole civil: la demanda por tanto era á manera de *demanda civil de daños*. Esto, por regla general, si la demanda se intentaba aislada, ó por separado de toda otra. Lo propio sucedia y hoy sucederá, viniendo como incidente de pleito, ó causa civil. Asi era, en fin, aun viniendo como incidente de causa criminal, toda vez que la causa torpe fuese de tal modo separable de la corrupcion, ó soborno, que no debiese ser considerada, si no bajo el punto de vista de los *efectos civiles* de la causa, ó pleito. Hoy, segun las disposiciones del Código penal, por parte del juez ó empleado público que recibe, se considera *delito de cohecho*, ó *soborno*. Sobre este particular, el Código reputa delito de *cohecho* ó *soborno*, no ya la intervencion de pago, si no de dádivas ó *regalos* á empleados públicos *en consideracion á sus cargos* (art. 314 y 315): el que los hace es por tanto reputado sobornante, é incurre en las penas de los cómplices, segun el caso, escepto las de inhabilitacion. Aun proviniendo el regalo ó dádiva, promesa, etc., en causas criminales, de parte del cónyuge, ó de algun ascendiente, descendiente, hermano, ó afin del reo en los mismos grados, será el donante ó promitente castigado con una multa igual al valor de la dádiva, ó promesa (art. 316): en todo caso las dádivas *caerán en comiso* (art. 317). No hay, pues, términos hábiles para la *condiccion* ó repeticion de lo dado en materia criminal despues del Código. Véase **COHECHO, CONCUSION, DADIVAS, PREVARICACION, SOBORNO.**

CAUSA PIA. Es bien singular que siendo el objeto de este artículo de tal entidad y trascendencia en ambas sociedades: habiendo por ello merecido hasta tal punto el favor de uno y otro derecho, que en consideracion al mismo se han dispensado por ambos, aun en los actos *mortis causa*, restricciones y solemnidades que para otros objetos no se dispensaban; es singular, decimos, que ni en las leyes, ni en los cánones hallemos la definicion terminante, precisa, *taxativa* de lo que son *pias causas*, ó *causas piadosas*. Empezó este favor *ad pias causas* con las leyes romanas, y sin embargo casi hasta hoy se ha venido disputando, si, por ejemplo, el dotar ó *casar huérfanas* era *pia causa*, si lo era la reparacion de muros, puertas fuertes de los pueblos, ó comunes, etc.; y ocurrirá el disputar cada dia sobre muchos otros objetos, cuya índole civil y canónica se modifica, sustituye, ó cambia, segun cambia, ó se modifica el derecho.

Fijando, pues, la teoría con la mayor exactitud, y estension posibles, segun el estado y disposicion de uno y otro derecho, diremos que aquí la voz causa se toma en la acepcion filosófica de *motivo*, ó *causa impulsiva*: que la cualidad *pía*, ó *piadosa*, determina la naturaleza del *motivo*, y en su consecuencia que la enunciativa *causa pía* se refiere á la voluntad é intencion del donante ó fundador, con tal fin: que en sentido figurado, ó tomando el efecto por la causa, se llaman tambien pías causas las cosas mismas, esto es, las fundaciones, donaciones, ereccio-nes, etc.; los objetos materiales y resultados civiles, y canónicos inmediatos de la causa impulsiva, en cuyo caso es técnico el decir, por ejemplo, *lo dado*, ó dejado *ad pias causas*, á causas piadosas, ó para causas piadosas; mientras realmente lo es *por motivos* ó *fines piadosos*: y últimamente, que en uno y otro sentido y para los efectos del derecho, se comprende en la mencionada enunciativa *causas piadosas, piæ causæ, ad pias causas, lo dado ó dejado por motivos de Religion y humanidad*.

De aquí se sigue: que el carácter de las *causas pías* es esencial, y por tanto irremisiblemente *religioso* y *moral*, pues ni la *Religion*, ni la *humanidad*, pueden propender á otra cosa, ni santificarla: los actos, por lo mismo, *constitutivos* de las causas piadosas, esto es, las donaciones, fundaciones, etc., han de poder esplicarse como actos de virtud: se encaminarán por tanto á fines *espirituales* y *ad bonos mores*: quedarán en su consecuencia escluidas de la categoría de *causas pías*, las fundaciones, donaciones, etc., que aunque revistan las formas y apariencias de *piedad* y *moralidad*; no sean si no *profanas* de todo punto en el sentido de no ser realmente, ni *religiosas*, ni *humanitarias*. Tales serian las siguientes: en atencion á la penuria y necesidad de la municipalidad en que nací, lego á la misma cien doblas para que añada algunas almenas, ó decore con escudos y empresas sus muros y castillos: lego á Ticio, en atencion á la mala fortuna á que ha venido, para que pueda añadir un principio mas á su mesa: lego á los huérfanos de Ticio para que aprendan esgrima: á Nuño, cautivo en poder de infieles, para que redima su cautividad (siendo este acaudalado ó poderoso, ó no queriendo redimirse en otro caso), etc. Considerada asi la *causa pía*, no podia haber habido cuestion sobre los casos arriba indicados, ni podrá haberla sobre muchos otros que, no precisando las ideas, se prestan á ello. Esto por lo que hace á los motivos de *humanidad*; que para serlo han de tener por base una verdadera necesidad humana que satisfacer ó remediar, física, ó moral, de situacion, ó posicion, etc. Por lo que hace á la Religion, como en fomentar el mejor servicio de Dios ni se consulta necesidad, ni cabe esceso no siendo en el modo; ó por prohibicion y restriccion espresa de la ley, como por ejemplo, la prohibicion de fundar capellanías, bastará que el fin y objeto de la fundacion ó donacion sean verdaderamente religiosos, para que las mismas se reputen *causas pías*, á los fines y efectos civiles del derecho. De este modo hubiera sido *ad pias causas*, el legado que se hubiera hecho á Murillo para pintar una ó muchas Concepciones mas.

La idea teórica que presentamos de *causa pía*, está de acuerdo en su fondo con la acepcion filológica de la voz de que se deriva. *Piedad*, segun los romanos, era amor y reverencia á los dioses: amor, respeto, veneracion á los padres, á las mugeres, á la patria; amor á los parientes, á los hijos, al prógimo: clemencia, compasion, conmiseracion, humanidad: es decir, en todo una virtud, siquiera fuera solo filosófica. Segun nuestra Academia de la lengua, piedad es, «*virtud* que mueve é incita á reverenciar, acatar, servir, y honrar á Dios, á los padres, y á la patria: misericordia, conmiseracion, lástima.» Siempre, repetimos, la virtud por base y norma; y no hablamos aquí de la piedad teológicamente, porque la consideramos solo como la consideran las leyes; para los efectos, ora civiles, ora religioso-civiles; pero siempre segun el derecho humano.

En la práctica, hé aquí las indicaciones mas notables consignadas casuísticamente y por vía de ejemplo en las leyes. Despues de estable-

cer una de Partida, que conforme á la mente de la Santa Iglesia los clérigos no pueden escusarse de contribucion con los legos para la *construccion* y *conservacion* de *puentes de pro-comun*, *calzadas* y otros *caminos comunales*, añade, deben ser en su caso compelidos á ello, «*porque son obras buenas é de piedad* (1).» No trayendo nosotros aquí los testos legales si no para determinar la verdadera índole y significacion de la *causa pía*, y no para tratar de las gavelas de los clérigos, no nos haremos cargo de las opiniones de los autores sobre este particular, ni sobre otros, que no sea el que es objeto del presente artículo. En la glosa á la ley antes citada, Gregorio Lopez indica la opinion de varios autores que quieren, que la disposicion mencionada se entienda de la reparacion de muros que sirvan para la defensa comun, y no de los que solo sean de ornato. Otros llevan la contraria. Nosotros, segun la teoría que hemos sentado, estamos por la primera, de acuerdo con la ley que habla de *pro-comun*, esto es, de *utilidad ó necesidad pública*; de todos, ó la mayor parte de los vecinos y moradores.

«Quitar deben los homes á los que yacen en captivo por cuatro razones: la primera porque place á Dios de haber ome dolor de un cristiano, ca segun el dijo, asi lo debe amar, como á sí mismo... La segunda por mostrar y *piedad* que deben haber los omes de aquellos que mal reciben, porque son de una natura..... (2).»

Los clérigos aplicarán las rentas eclesiásticas en vivir «mesuradamente: é lo demas, porque es de Dios (se ordenó) que lo despendan en *obras de piedad*, *asi como* en dar á comer é á vestir á pobres, en facer criar los huérfanos, é en casar las vírgenes pobres, para desviarlas que con la pobreza non hayan de ser malas mugeres, é para sacar captivos, é reparar las eglesias comprando cálices, é vestimentas, é libros, é las otras cosas de que fueren menguadas, *é en otras obras de piedad semejante destas* (3).»

(1) Ley 54, tit. 6, Part. 1.
(2) Ley 1, tit. 29, Part. 2.
(3) Ley 12, tit. 28, Part. 3.

El testamento inoficioso se reputa hecho *contra oficio de piedad*, en lo que se vé que si la veneracion y ausilios del hijo al padre son oficios *piadosos*, lo son igualmente el amor y deberes naturales del padre al hijo (1), de lo cual volvemos á hablar al final del artículo.

Ultimamente, hablando las leyes de Partida (2) de la detraccion de la cuarta falcidia, dicen asi: «Empero, mandas ya de tal natura, de que la non podria sacar, é son estas, *asi como* de las cosas que dejase el facedor del testamento á *eglesia*, ó á otro *logar religioso*, á *hospital*, ó á *pobres*, ó para quitar los *captivos*, ó *en alguna otra manera*, que fuese obra de piedad.»

Las leyes romanas fueron en esto casuísticas tambien. La 1, tít. 15, lib. 37 del Digesto, por ejemplo, dice: que los militares deben como otros, dar pruebas de *piedad* á sus padres: que el mismo deber de *piedad* debe mediar entre los *colibertos*, la madre y el hijo: y que el pretor castigue con pena proporcional los delitos contra la *piedad pública*: en cuya ley, como en otras, no se vé sobre la piedad si no el sistema casuistico de las Partidas.

El mismo, en fin, y segun hemos indicado ya, domina en los cánones. En vano se recurrirá á los capítulos *Aurum* (70, causa 12, quest. 2): *Pontifices* (3, causa 12, quest. 4) y algun otro análogo, que suele citarse al efecto, y que en suma hablan de que en lo que se dá á la Iglesia y al clero, el escedente de la sustentacion y necesidades del culto es de los pobres.

De lo dicho hasta aquí resulta evidenciado lo que dejamos manifestado á la cabeza de este artículo, y es que en vano se buscará en ninguno de los derechos una definicion precisa y taxativa de lo que tanto ha favorecido en sus disposiciones; de las *causas pías*, y de aquí la falta de fijeza de los espositores. *Habest hic*, dice Gregorio Lopez, á la ley 12, tít. 28, Part. 3, antes inserta, *quod maritare virgines pauperes dicetur pia causa. Habest hic*, dice á la 4, tít. 11, Part. 6, *quod relic-*

(1) Ley 1, tit. 8, Part. 6.
(2) Ley 4, tit. 11, id.

tum ecclesiæ vel hospitali, vel in usus pauperum, vel in redemptionem captivorum dicitur relictum ad pias causas, etc. Pero ¿qué? ¿era menester que lo dijera la ley para que tales casos constituyeran el de *causa pía*? Pues ¿cuál seria *causa piadosa*, si cada uno de esos no lo fuera? Ciertamente lo serian, aunque la ley no lo hubiera espresado, con tal que no hiciera esclusiva de ellos, como son los que no menciona, y hay que subentenderlos en el ejemplo. Se dirá que no bastaria para los efectos civiles que tales casos lo fueran de *piedad* en sí, si la ley no los declarara, pues que en mano de la misma estuvo el no favorecer las *causas pías*, ó favorecerlas con limitaciones y esclusivas. Sin duda que pudo: pero, pues no lo hizo, y adoptó por tanto en toda su amplitud el tema, ó supuesto de *causas pías*; sobre él ha de estribar la teoría, y en su consecuencia, *cuanto se manda, lega ó dá, lo que se funda ó constituye en obsequio de la Religion y bien de la humanidad, es causa pía en sí, y lo es* por las razones espuestas *para los efectos del derecho*. Solo apartándose de este principio, pudiera ponerse en duda, por ejemplo, que la dacion de la libertad al esclavo sea *en rigor* causa piadosa, porque tal acto no mira al bien del alma. *Quia libertas servinon est præcisè causa pia, cum non respiciat animam* (1). Pero ¿qué? ¿no son causas piadosas, asi en sentido lato, como en sentido estricto, si no las espirituales? ¿No lo son las relativas al alivio del pobre, del desgraciado, del preso, del cautivo, del siervo, de las *personas miserables*?

Prácticamente considerada la cuestion, seria imposible esplanarla en toda su estension y pormenores. En este concepto la enunciativa *causa pía* es una fórmula genérica que, segun el objeto, el modo, ó el medio de la manda, fundacion, ereccion, etc., se trasforma en las específicas, y mas ó menos genéricas tambien, iglesias, santuarios, beneficios, capellanias, legados píos, memorias de misas, capillas, aniversarios, dotacion de huérfanas, prestameras, limosnas, casas de caridad, hospicios, hospitales; caridad, misericordia, beneficencia, enseñanza pública, etc., y es en cada uno de estos numerosos artículos en donde ha de verse prácticamente la aplicacion de la teoría, y los beneficios ó restricciones de la ley. Lo propio sucede en otros muchos casos y asuntos en que la enunciativa no es de *causa pía*; pero que en su esposicion se ligan á ella, como testamentos, donaciones, aceptacion en los contratos, restitucion, etc., ya en cuanto á solemnidades, ya en cuanto á otros conceptos; amortizacion, manos-muertas, vínculos, patronatos, etc., en cuanto á franquicias, ó restricciones.

Entre los autores es máxima que, en casos de duda, vale el argumento *á libertate ad piam causam*, y á la inversa; esto es, que lo que se permite ó autoriza por la ley bajo uno de estos conceptos, se subentiende consentido ó autorizado bajo del otro. Asi, por ejemplo, la ley, que por regla general prohibe á la muger ser fiadora por otro; pero le permite serlo en algunos casos particulares, siendo uno de ellos «cuando fiase á alguno por razon de *libertad* (1),» de lo cual infieren los autores le está permitido ser fiadora *ad pias causas* (2).

En el antedicho concepto dicen los mismos equipararse *la dote* y la *causa pía*, de donde deducen en igual forma que, permitiendo la ley abajo notada que la muger pueda fiar *por razon de dote*, puede la misma hacerlo, ó podria, por causas piadosas, ó á la inversa, aunque la ley no lo mencionase (3). Tenemos por cierto, sin embargo, que en estas *equipolencias* jurídicas, ha de dominar siempre la teoría que dejamos sentada, *el sentimiento religioso ó humanitario*, y en su consecuencia que la *causa pía* que se tiene por punto de partida para la *equivalencia*, lo sea en rigor: que la *dote* y la *libertad* en sus casos puedan reducirse á *causas pías* por el sentimiento que domina, ora este sea *religioso*, ora de *humanidad*; circunstancia que hemos visto requiere la misma ley, aun en

(1) Gregorio Lopez, á la ley 3, tit. 12, Part. 5.

(1) Ley 3, id. id.
(2) Gregorio Lopez, id. id.
(3) El mismo, id. id.

causas que de suyo esplican sentimientos plausibles, y tienden por tanto *ad bonos mores*, como es el *dotar á doncellas* para que se casen, consultándose en ello siempre el doble fin político, moral, y aun por deduccion religioso, de facilitar y aumentar las uniones lícitas, y aumentar la comodidad de los gobernados, no solo casando, si no casando con mayores ventajas. Aun en este caso, decimos, la ley establece que la dote sea para casar «vírgenes *pobres* (1).» La *dote*, la *libertad* por lo tanto serán causas pías, ó equivaldrán á ellas, cuando correspondan al testo de la ley, ó á su espíritu; no cuando se verifique la fianza, por ejemplo, por lujo, vanidad, especulacion, por motivos vituperables tal vez, no ocurriendo una verdadera necesidad, ó no respondiendo á un sentimiento moral, de virtud, ora religioso, ora de humanidad.

Al principio del artículo hemos espuesto la doble acepcion en que se toma la enunciativa *causa pía*, esto es, como el *motivo* de una determinacion, y como el *resultado de ella*: como el *motivo* de donar, legar, fundar; y lo *fundado*, *establecido*, etc. En el primer concepto sostienen los autores, y sientan como un principio, que en caso de duda antes ha de estimarse que el hombre se movió por su interés propio, aunque lícito; que no por *motivos de piedad*. El espositor de las Partidas establece esta regla á propósito de la ley 25, tít. 12, Part. 5, segun la cual, si alguno recogiese á un huérfano *por piedad* «(*piedad mueve á las vegadas al ome á rescevir algun huérfano desamparado*)» despues no podria repetir nada por razon de *impensas*, *lo que despendió de lo suyo*. *Quod factum sit pietatis causa, in dubio non præsumitur, cum nemo jactare suum præsumatur*. Lo contrario es mas cierto. En otro género de negocios puede proceder la doctrina, y procede por regla general; pero no en negocios como el presente, esto es, en que media la *humanidad*, como inseparable de él, á menos de suponer que el hombre es mas capaz de ser *avaro é inhumano*, que humano y generoso en el caso concreto de *infortunio*, calamidad, desgracia; y precisamente este es el caso establecido por la ley, que no habla simplemente del huérfano, si no del huérfano *desamparado*, caso en que la misma ley supone haberse movido el hombre *por piedad*. Y esta es por otra parte la doctrina aplicada muy oportunamente por el autor á los que asientan que no deben admitirse mas *causas pías* que las espresadas testualmente por las leyes; y en su consecuencia que en caso de duda antes una institucion ó fundacion, manda, etc., se reputará *profana*, que *pía*. La deduccion no es otra que el mismo principio asentado por el autorizado espositor de las Partidas, que en este caso, sin embargo, asienta con *solidez*, segun hemos dicho, que la naturaleza jurídica del hecho ha de determinarse en caso de duda, no por reglas absolutas, y abstractas; si no por las circunstancias, partiendo siempre del supuesto filosófico, y mas digno del género humano, que no es mas cierto que el hombre sea mas bien *avaro* é *inhumano*, que *humano* ó *compasivo en presencia del infortunio*.

Los autores, en fin, llaman *causa piisima* á la redencion de cautivos. Refiérense ellos á la ley 5, tít. 10, Part. 6, que efectivamente prescribe disposiciones que revelan todo el favor, y aun favor especial del derecho: respecto de cautivos, véase **CAUTIVO**.

Sobre preferencia entre dos *causas pías* acerca de un legado, y otras cuestiones análogas, véase **LEGADO**.

Ahora en conclusion observaremos, que si de tal índole es el fundamento de la *causa pía*, si la *religion* y la *humanidad* son los móviles de la voluntad de las mandas y fundaciones relativas á dicho fin, desde luego podia asegurarse que en tal terreno, no solo el pueblo español habrá igualado al que mas; si no que se habrá aventajado, si es que, en el modo á lo menos, no se ha escedido. Y con efecto: se ha tratado de averiguar, se ha espuesto y censurado esta propension y antiquísima práctica entre nosotros, bajo diversos puntos de vista; de la *amortizacion*, por ejemplo, de *beneficios*, de *capellanías*, etc.; pero todas particulares, ó parcia-

(1) Ley 19, tit. 28, Part. 3.

les; mas no bajo un punto de vista general. En el trascurso del tiempo y sus vicisitudes, es muy de temer que ni aun fuese posible. Sobre tan complejos trabajos empleados al intento, mencionaremos uno que prueba tal vez mas que todos. Por los años de 1846, deseando alijerar el presupuesto general, y que el clero de España fuera dotado con toda la independencia posible del Erario, al propio tiempo que por medios mas análagos que el presupuesto civil, se pensó si podria serlo encargando al mismo el cumplimiento de todas las memorias y *fundaciones piadosas* de la Península é islas adyacentes, obteniendo canónicamente reduccion de cargas espirituales, é imputando al clero en su presupuesto el escedente, cumplidas aquellas. Pensóse que seria prudente hacer un ensayo de inquisicion en sola una provincia que despues podria generalizarse. Limitóse á la de Madrid, y solo en lo relativo á sufragios. Cometióse la ejecucion á un eclesiástico de actividad é inteligencia, facilitándole el gobierno las manos y ausilios necesarios. El vasto espediente sobre ello formado radicó en Gracia y Justicia, hasta que en 1849, por acuerdo del Consejo de ministros, lo reclamó el ministerio de Hacienda, para utilizar el resultado y llevar en su caso la operacion adelante. Creemos no tuvo esto lugar por los cambios políticos; pero es lo cierto que el resultado era entonces el de un capital de *cuatrocientos millones de reales* en sola la provincia de Madrid, y eso de solo lo espiritual, olvidado, abandonado, ó por otras causas no corriente en el pago y cumplimiento de cargas.

Esto, con otros datos, revela hasta qué punto ha podido llegar entre nosotros la consagracion de intereses *á causas pias*, y cuán fácil es que haya llegado al esceso, repetimos, que al menos en el modo. El legislador, por una parte, no puede menos de hallar plausible lo que tiende á moralizar á los asociados, por el desenvolvimiento de sentimientos tan altamente civilizadores como el *religioso cristiano* y el *humanitario*, todos aquellos, si no, de que son fórmula compleja la *caridad cristiana*, la *piedad*: mas por otra, no siempre podrá menos de ocurrir, ora al abuso, ora al esceso, como se ha verificado, y ya desde remotos tiempos, bajo miras económicas sobre todo. ¿Qué otra cosa han sido la reduccion, union, supresion de beneficios y capellanías, á peticion de la potestad política: su enagenacion: la prohibicion parcial de fundar con bienes raices, sin real licencia: los gravámenes de amortizacion, ó de *manos muertas*; los concordatos sobre contribucion del clero y bienes eclesiásticos, etc.? Pero todo esto no era si no parcial, aunque empujaba á su estincion y fin las *causas pias*, en el sentido de este artículo. Puede decirse que sonó para ellas la última hora, por un simple medio: por la enagenacion casi omnímoda de los bienes eclesiásticos y afectos de *carga pia*: por la prohibicion de fundar: por el no cumplimiento de las *cargas piadosas*, aun en los restos de esos bienes afectos, ora se hayan conservado al clero, ora hayan pasado á particulares, sea por título familiar, sea por el de venta. Véase sobre este particular, entre otros artículos, el de **CAPELLANIAS.**

Véanse ademas **AMORTIZACION, ANIVERSARIO, BENEFICENCIA, BIENES ECLESIASTICOS, CARGAS EN LOS BENEFICIOS, ESTABLECIMIENTOS PIADOSOS, HUMANIDAD, LEGADOS PIOS, MEMORIAS, PIEDAD.**

CAUSA (**EN MATERIAS ECLESIASTICAS**). La voz causa en lo canónico tiene, si bien algunas en mayor ó menor escala, las mismas acepciones que quedan espuestas en lo filosófico, moral y legal; y tiene ademas muchas otras especiales. Algunas de ellas son la rúbrica, ó fórmula de estensos tratados que no pueden traerse al presente artículo sin arrancarlos de su verdadero lugar. Tal es la acepcion de causa en sentido de pleito, ó de juicio, causas eclesiásticas; causas criminales, causas beneficiales, causas de los obispos, etc. Por esta razon el presente artículo es solo filológico, y genérico, reservando el fondo de las cuestiones para en sus artículos particulares.

Diremos en consecuencia, que si *causa* en lo eclesiástico se toma, segun hemos dicho,

y en cuanto al órden judicial, por pleito, proceso, juicio, etc., como en el órden civil; en el canónico significa especialmente ademas la *materia de que se trata*, ó que dá lugar á gestion y resolucion, ora gubernativa, ora judicial. Asi, segun la índole de la materia, segun que sea eclesiástica, profana, civil, criminal, espiritual, temporal, etc., la gestion, pleito, espediente, resolucion, llevarán denominaciones análogas á su *causa*, esto es, á su *materia*. Causa por tanto en lo eclesiástico, en su acepcion genérica, mas estensa que en lo civil, es toda gestion, solicitud, preces orales ó escritas, que se someten á resolucion de autoridad legítima en el *foro interno*: en sentido mas específico toda gestion, solicitud, demanda, pleito, proceso eclesiástico, civil ó criminal, etc., que en el foro esterno, ó en el interno y esterno, pero con formas esternas, se someta, á solicitud de parte, ó de oficio, á resolucion de autoridad legítima gubernativa, ó jurisdiccional.

Como esta es la clave para precisar las ideas en muchas cuestiones y materias eclesiásticas, creemos conveniente dar alguna mas amplitud á lo anteriormente dicho, acerca de lo cual dicen los autores canonistas: *Judicium est discussio* causæ, *quæ ritè fit in foro coram judice*: causa *verò est origo negotii, et materia judicii* (1). *Causa* en este caso se toma, segun se vé, en la verdadera acepcion filosófica de tal, con relacion al juicio que se reputa su efecto. El cap. 10, tít. 40, lib. 5 de las Decretales de Gregorio IX, tomado del tratado de los orígenes ó *etimologías* de San Isidoro, esponiendo la de todas las voces que juegan en un juicio, dice así en esta razon: «*Forus est exercendarum litium locus, à fando dictus... Constat autem forus causa, lege, et judicio. Causa à casu, quo venit, dicitur: est enim materia, et origo negotii, necdum discussionis examine patefacta: quæ, dum proponitur, causa est: dum discutitur, judicium: dum finitur, justitia...*» Resulta de lo dicho, segun tenemos manifestado, que *causa*, en el sentido que vamos esponiendo, es lo mismo que la *materia* y *orígen* del pleito, ó negocio; y que ademas figuradamente, tomando una cosa por otra, significa tambien el proceso, ó espediente: la contienda: el fallo judicial, ó la decision gubernativa: lo cual conviene tener presente al esponer y apreciar las siguientes subdivisiones.

Causa canónica. Dícese algunas veces por la *razon* ó *motivo* de pedir, proceder, ó decidir, y llámase tal, en sentido estricto, el que está fundado en disposiciones terminantes y prácticas de la Iglesia; en sentido lato, la razon ó motivo no contrario á ellas, y antes análogo. La primera acepcion es peculiar por tanto del derecho estricto, la segunda del interpretativo: aquella del derecho constituido; esta del constituyente. En un prebendado, por ejemplo, el *realés*, ó la licencia para ausentarse por utilidad ó necesidad de la Iglesia, son en el primer concepto *causas canónicas* de no residir en la suya: sólo en el segundo otros motivos personales ó privados, no espresos en los cánones; pero que parecen racionales á la autoridad diocesana al decidir el espediente canónico *de non residendo*: cualquier motivo de otro género será *causa canónica* para la privacion de frutos, suspension, ó pérdida de la prebenda, conforme á las leyes de la Iglesia. Alguna vez *causa canónica* se dice en contraposicion á causa civil profana. Equivale entonces á *espediente canónico*, ó *causa eclesiástica*. Véase esta subdivision.

Causa espiritual. Cosa, razon ó motivo que dice relacion á la salud del alma. Otras veces lo mismo que causa *merè* eclesiástica. Véase esta subdivision.

Causa. Lleva esta denominacion ó epígrafe una de las divisiones artísticas del Decreto de Graciano, como si dijéramos tratado, seccion, etc. La causa se divide en *cuestiones*, y estas en *capítulos*. Véase **CUERPO DEL DERECHO CANONICO: CITA.**

Causas eclesiásticas. Hemos visto arriba que si bien la voz *causa* en una acepcion estricta significa *la materia del juicio ó negocio*, algunas veces en sentido figurado se toma por el *juicio* mismo, y este es el sentido

(1) Lanceloto, Institution. juris canon., lib. 3, tit. 1.

de la presente subdivision, esto es, la enunciativa *causas eclesiásticas* espresa todos los juicios eclesiásticos de formas públicas, ó en sentido forense, quedando asi fuera de la clasificacion los relativos al tribunal de la penitencia, toda vez que está definido por el Concilio de Trento (cánon 9, ses. 24, cap. 4 *De pœnitentia*) que la absolucion en este caso es *acto judicial*. En los artículos genéricos **JUICIO** y **JURISDICCION**, corresponde esponer cuanto concierne á los mismos: pero siendo tan específica y usual la denominacion de *causas* en lo canónico, y considerando los cánones y las leyes eclesiásticas esta importante materia mas generalmente bajo la enunciativa de *causas*, que de las de juicio y jurisdiccion, no podemos dispensarnos de consignar aquí la clasificacion y algunas consideraciones generales, relativas á las mismas.

Por decontado notaremos, que si en la acepcion que esponemos *causa* y *juicio* son una misma, no hay precision en la nocion de estos y aquellas dada por algunos autores canonistas. Si, segun los cánones, y como arriba queda espuesto, *causa est materia judicii, vel negotii: si judicium est discussio causæ*, entre causa y juicio habrá tal correlacion y reciprocidad, que *causa* sea *juicio*, y *juicio causa*; ó por lo menos las especies de *causas* en el sentido *forense* corresponderán á las de juicios, y á la inversa. Y sin embargo, el mismo canonista antes citado (Lanceloto), y de quien hemos visto ser la doctrina *judicium est discussio causæ*, presenta asi la idea capital de juicio: *Summa divisio judiciorum hæc est, quòd, aut sunt secularia, aut ecclesiastica. Judicia secularia sunt, quæ coram judice laico inter personas seculares exercentur. Ecclesiastica verò sunt, quæ coram judice ecclesiastico inter personas ecclesiasticas agitantur.* La razon es, segun el autor, que dividido el *imperio suma* en los paises cristianos entre el Papa y el monarca, á cada una de estas dos clases de potestades corresponden juicios independientes, asi como jurisdiccion de su índole respectiva. No es difícil conocer que ni en la clasificacion, ni en la razon aducida hay exactitud, ni verdad histórica. Una y otra se conciben como abstracciones absolutas del órden social, eclesiástico y civil; pero en materias de tal trascendencia y de tal modo fundamentales, no proceden abstracciones contra la verdad, y la verdad histórica y jurídica es, que nunca el sacerdocio y el imperio han estado, y lo que es mas, que nunca en naciones cristianas lo estarán, con absoluta independencia. Asi la clasificacion de juicios y causas eclesiásticas no se ha de deducir de una hipótesis, ni realizada, ni realizable de la abstracta y omnímoda separacion entre el sacerdocio y el imperio; si no de su concordia. ¿Cómo se esplicarian en la teoría que combatimos las *causas civiles eclesiásticas inter laicos* de los primeros siglos de la Iglesia; los recursos de *fuerza*, de *proteccion ab abuso*, despues en algunos paises; y siempre, desde el derecho de Novelas, las causas eclesiásticas llamadas *non merè eclesiasticas*; y la intervencion de la autoridad política á nombre del órden público en actos espirituales, ó de índole espiritual, como el *modo*, el *tiempo*, el *lugar*, etc., en actos religiosos; aun en la administracion de los sacramentos, como luego diremos? Parécenos que en la acepcion de causa, objeto de esta subdivision, la naturaleza y cualidad eclesiástica de ella se deriva, no esclusivamente de la *materia*, de la jurisdiccion, ni de la clase de las personas, si no de la índole del tribunal: si es eclesiástico, la causa ó juicio será eclesiástico; si político, ó civil, de esta misma índole, como lo veremos en algunas de las subdivisiones que siguen.

Porque en efecto, causas eclesiásticas son las que se ventilan ante jueces eclesiásticos y se deciden por ellos. Si la historia presenta algun caso que parezca turbar esta doctrina, como el de el emperador Constantino, que una y otra vez designó jueces, esto es, *constituyó tribunal* entre Ceciliano y los Donatistas, y por tanto en cuestion de fé; sabido es que el tribunal que constituyó fué de eclesiásticos; fué el juicio episcopal en los sínodos de Roma y de Arlés; y si en tercer recurso decidió el mismo, la historia y la disciplina ecle siástica esplican satisfactoriamen-

te este hecho. Pudiera ser que no fuese asi, y aun entonces no bastaria un caso aislado para falsear una teoría. Sabido es ademas que no todos justifican el hecho de Constantino.

Siendo constante y característica la antedicha calidad de *tribunal eclesiástico*, se combinan con ella, ya acumulativa, ya separadamente la *materia* y la *jurisdiccion*, resultando de ello que las *causas eclesiásticas* son, ó *merè* eclesiásticas ó *non merè* eclesiásticas. Las primeras son de todo punto *espirituales*; las segundas espirituales solo por parte del fin, ó sea *temporales* subordinadas á un fin espiritual. En aquellas el tribunal eclesiástico procede por jurisdiccion eclesiástica *propia, esencialmente tal, esclusiva*: en estas es atribuida por la potestad política. (Véase **JURISDICCION.**) Versan las primeras sobre *causas* ó *materias* esencialmente espirituales; como los sacramentos, en cuanto á su *sustancia*, la fé, el dogma, la creacion de ministros, y demas cosas análogas: las segundas son, ó pueden ser temporales, pero dedicadas ó encaminadas al fin espiritual de la Iglesia, al servicio de Dios y salvacion eterna de las almas, conforme á las prescripciones de la Iglesia. Tales fueron las *causas eclesiásticas civiles y criminales, inter laicos*: tales son las civiles *inter clericos*, las criminales de los clérigos *in foro externo*, etc. En las primeras no puede entender, ni mezclarse sin temeridad la potestad humana, y es canónica y dogmáticamente nulo cuanto ordenare ó declarare: en las segundas es competente omnimodamente el eclesiástico por concesion de aquella, total ó parcial, segun el caso; asi como la potestad temporal es competente á su vez en asuntos, y acerca de cosas eclesiásticas por concesion, ó tolerancia de la Iglesia. De las primeras principalmente han de entenderse las declaraciones canónicas prohibiendo á los legos el mezclarse en asuntos eclesiásticos, asi como la disposicion del Concilio lateranense, bajo Inocencio III, prohibiendo hasta el *compromiso* en persona lega; *ne super rebus spiritualibus compromittatur in laicum, quia non decet, ut laicus in talibus arbitretur*. De las segundas principalmente han de entenderse disposiciones, como la del cap. 4 *De immunitate ecclesiastica in Sexto... Super causis ecclesiasticis, sive quæ ad forum ecclesiasticum ratione personarum, negotiorum, vel rerum, de jure, vel antiqua consuetudine pertinére noscuntur.*

A la division capital de causas *espirituales*, ó *merè* eclesiásticas y *non merè* eclesiáticas; se llegan todavia en lo canónico numerosas subdivisiones, ora por razon de la materia, ora por razon del tribunal, ora, en fin, por razon de las personas, como *causas mayores, causas menores, beneficiales, matrimoniales, criminales, civiles*, etc., de entre las que mencionamos á continuacion las principales.

Las leyes del reino hablan largamente sobre el particular, y señaladamente las de los títulos 6, Part. 1, y 1, lib. 2, Nov. Recop., de las cuales es notable la 56 de dicho título 6, que dice asi:

«Franqueados son aun los clérigos..... en razon de sus juicios que se departen en tres maneras. Ca, ó son de las cosas espirituales, ó de las temporales, ó de fecho de pecado. Onde de cada una destas tres maneras mostró Santa Eglesia cuales son, é ante quien se deben judgar... é mostró que aquellas demandas son *espirituales* que se facen por razon de *diezmos* é de *primicias*, ó de *ofrendas*, ó de *casamiento*, ó sobre *nacencia de ome*, ó de muger, si es legítimo ó non, ó sobre *eleccion de algun perlado*, ó sobre razon de derecho de *patronazgo*. Ca como quier que la puedan haber los legos... pero porque es de cosas de la Eglesia cuéntase como espiritual. E otro sí son cosas espirituales los pleitos de las *sepulturas*, é de los *beneficios* de los clérigos, é los pleitos de las sentencias, que son de muchas maneras, asi como *descomulgar*, é vedar, é *entre decir*... Otro sí *pleitos de las eglesias* (sobre) *de cual obispado*, é de cual arcedianazgo *deben ser*; ó *de los obispados á cual provincia pertenecen*. Otro sí, son espirituales los pleitos que acaecen *sobre los artículos de la fé*, é sobre *los sacramentos*. E todas estas cosas sobredichas é *las otras semejantes dellas* pertenc-

cen á juicio de Santa Eglesia, é los perlados las deben judgar.»

Las cosas contenidas en esta ley, son en general las que constituyen las causas *merè* eclesiásticas, si bien los diezmos han de entenderse los no secularizados, y beneficios, y capellanías los no laicales.

La ley 58 de la misma Partida añade todavia la *heregía*, *usura*, *simonía*, *perjurio*, *adulterio*, separacion de los casados *quoad thorum*, *incesto*, *sacrilegio*, cuyos pecados dice la ley «se deben judgar, é librar por juicio de Santa Eglesia.»

Todavia han de verse sobre el particular la ley 57 del propio título, y de que aun volveremos á hablar: la 2, tít. 26, Part. 7; y la 20, tít. 1, lib. 2 Nov. Recop. En ellas, como se ve en las aquí insertas ó relacionadas, se nota desde luego que no se presentan con la debida distincion las cosas *espirituales*, y las *espiritualizadas*, esto es, las que dan ocasion á las causas *merè* eclesiásticas, y á las *non merè* eclesiásticas; si bien es verdad que ni los cánones, ni los canonistas hacen un deslinde rigoroso ó taxativo en cuanto á las sagradas, ni pueden, pues como de jurisdiccion *atribuida*, ó que *sacerdotio extrinsecùs advenit* segun la espresion de los canonistas, son por su naturaleza variables segun los tiempos, la costumbre, y aun el derecho, sobre todo el *concordado*.

Debemos notar, por último, que sobre muchos casos de los antes mencionados, considerados como delitos, el conocimiento del eclesiástico no escluye el de la jurisdiccion temporal, aunque cada una por su fin respectivo; esta para la imposicion de penas temporales, ó para efectos civiles, aquella para la de penas canónicas, y efectos de la misma índole. Sobre efectos temporales véase *causas civiles eclesiásticas*.

Ahora de las causas eclesiásticas en general, el Concilio de Tarragona, y otros (Cánon *Nullus placita*) ordenan no pudiera tratarse, ni actuarse en ellas en los domingos ni dias festivos, y asi se practica: y hé aquí el notable capítulo del Concilio de Trento (20, ses. 24 *De reformat.*), que constituye el derecho moderno en cuanto á ellas.

«Todas las causas, correspondientes de cualquier modo al fuero eclesiástico; aun cuando sean beneficiales, sean tratadas en primera instancia ante los ordinarios de los lugares únicamente: y precisamente sean concluidas, á lo menos dentro de un bienio, á contar desde el dia en que empezaron. En otro caso sea permitido á las partes, y á cada una de ellas, pasado dicho término, recurrir á los jueces superiores, por otra parte competentes; los cuales avocarán la causa en el estado en que se halle, procurando terminarla en el menor término posible. Antes de este caso, ni se les cometan las causas, ni ellos las avoquen, ni por ninguna clase de superiores se admitan las apelaciones que de ellos se interpongan: ni se dé comision respecto de dichas causas, ni se decrete inhibicion, salvo de providencia definitiva, ó que haga fuerza de tal, ó cuyo gravámen no pueda ser reparado por apelacion de la definitiva. Esceptúanse de lo dicho las causas que por disposiciones canónicas estén reservadas á los Papas, ó que el Papa, por causa urgente y racional creyere oportuno cometer, ó avocar, por medio de rescripto de su signatura, suscrito de su propia mano. Ademas, las causas matrimoniales y las criminales han de reservarse únicamente á la jurisdiccion del obispo, sin cometerla al dean, arcediano, ni otros inferiores, ni aun en visita; y esto, aun cuando al presente penda competencia sobre el conocimiento de esta causa, en cualquiera instancia, entre el obispo y el dean, arcediano, ú otros inferiores. Y si la parte probase verdadera pobreza ante el obispo, no sea obligada en causa matrimonial á litigar fuera de la provincia; ni en segunda, ni en tercera instancia, á no ser que la otra parte quiera sufragar el importe de las costas y gastos. Los legados, aunque sean *de látere*, los nuncios, los gobernadores eclesiásticos, ni otros; cualquiera que sea el vigor ó fuerza de sus facultades, no solo no intentarán impedir á los obispos el conocimiento de estas causas, ó de cualquier forma prevenir ó turbar esta jurisdiccion; si no que no procederán contra clérigos, ú otras personas eclesiásticas, sin

requerir antes al obispo, y siendo este negligente: si lo contrario hicieren, los procesos que instruyeren, y disposiciones que dictaren serán de ningun momento, quedando obligados ademas á indemnizar á las partes los daños irrogados. Ademas: si alguno apelare en los casos permitidos por derecho; si se quejare de algun gravámen, ó por el lapso del bienio, segun antes queda dicho, recurriere á juez superior competente, esté obligado á trasladar, compulsado á sus espensas, ante el juez de apelacion todo lo actuado ante el obispo, enterado este antes, por si creyere oportuno esponer alguna cosa al juez de apelacion, que sirva de instruccion á la causa. Compareciendo el apelado, esté obligado á pagar á prorata la compulsa traida por el apelante, si quisiere aprovecharse de ella; salvo costumbre del pais, de que toda sea á costa del apelante.» Ordena todavia el Concilio en este capítulo, que si el notario cometiere fraude al exhibir los autos originales para la compulsa, sea suspenso del cargo á arbitrio del obispo, y condenado en el duplo de lo que se litigare. Si el juez *á quo* fuere en este caso connivente en el fraude, ó de otro modo obstare á que el apelante pueda ser provisto de la compulsa dentro del término legal, incurre tambien en la mencionada pena del duplo. El Concilio concluye el capítulo ordenando se observe cuanto en él se dispone, sin que obsten «privilegios, indultos, concordias que solo obligarán á sus autores, ni cualesquiera costumbres en contrario.»

Causas ordinarias. Las que empiezan ante los obispos, y siguen de grado en grado del sufragáneo al metropolitano, y de turno en turno hasta recaer en ellas tres sentencias conformes, al tenor del capítulo preinserto del Concilio de Trento y otras disposiciones que con él, y en el antedicho sentido, constituyen el fuero comun canónico.

Causas estraordinarias. Las correspondientes á jurisdicciones privilegiadas, y que por tanto se apartan, á lo menos en su primera instancia, de lo prevenido en el citado capítulo 20, ses. 24 del Concilio. A juzgar por el tenor literal de este capítulo, no debia haber causas estraordinarias, mas que las que el mismo menciona, las reservadas al Papa. Los términos de aquel no pueden ser mas generales y esplícitos. *Causæ omnes, ad forum ecclesiasticum quomodolibet pertinentes, etiamsi beneficiales sint, in prima instancia coram ordinariis dumtaxat locorum cognoscantur.* Y sin embargo, aun segun el Concilio mismo hay causas estraordinarias, ó que no empiezan ante el obispo, cuales son, por ejemplo, las menores de los obispos, de que ha de conocer el concilio provincial, al tenor del cap. 5, ses, 24, y concluirlas el mismo, ó los delegados por él, corroborando en eso otras disposiciones canónicas anteriores. Ni se diga que en estas es *ordinario* el concilio provincial, como lo es el Papa en las reservadas, puesto que su competencia proviene del derecho, aun comun. Pero el Concilio en el cap. 30 habla de *ordinarios locales*, que todavia espresa ser los obispos: y por tal medio é interpretacion, en fin, vendria á eliminarse la diferencia que hay en el fuero comun y los fueros privilegiados.

Son, pues, causas estraordinarias las mencionadas, como todas las competentes á jurisdicciones privilegiadas. Tales son, ó han sido en España, la de cruzada, noveno y escusado, espolios, la académica, de jueces conservadores, ya universitarios, ya de obras y causas pías, etc., entre los cuales hay que mencionar, aun los que tienen ordinario local, con jurisdiccion episcopal, vel cuasi, como los prelados *nullius*, los grandes priores de las órdenes militares, el vicario general castrense, el pro-capellan mayor de la *real capilla*, etc., toda vez que despues de la primera instancia, las causas ante ellos incoadas, ó lo que es lo mismo, ante sus provisores ó delegados, no sigan los trámites del derecho comun, pues si los siguieran, no serán causas estraordinarias; si no ordinarias, por cuanto dichos prelados locales se hallan equiparados á los obispos, segun ya hemos visto en el artículo **CASOS RESERVADOS**, y asi lo tiene declarado aun en la presente materia la congregacion del

Concilio. La regla general será que toda causa eclesiástica, en caso de duda, ó si no se alegare derecho capaz de constituir escepcion del capítulo del Concilio, es ordinaria.

Causas mayores. Aquellas de que solo puede conocer el Papa. Los autores eclesiásticos convienen en que la primera, entre las causas que la autoridad pontificia se fué reservando, es la encausacion de los obispos. El Concilio de Antioquía (cán. 20), habia establecido que los juicios eclesiásticos se tratasen y decidiesen en los concilios provinciales (1), ordenando en el cánon 14 lo que habia de practicarse, ocurriendo discordia en las causas de los obispos (2), y que el juicio que se pronunciase fuera ya firme: es decir, que si el Concilio no escluia, tampoco autorizaba el conocimiento preventivo, ni de otro modo, de la Santa Sede. Ya antes el Concilio de Nicéa habia establecido asi bien (cán. 5) la competencia del concilio provincial. Preténdese que el de Sárdica favoreció algun tanto sobre el particular la jurisdiccion del Papa. Y asi corrió el derecho escrito hasta que en la coleccion de Graciano apareció el cap. *Quamvis* (3), decretal atribuida al Papa Eleuterio, escribiendo á las provincias de las Galias en 185, subordinando á los Papas el conocimiento de las causas de los obispos en definitiva, si bien conociendo hasta este trámite el concilio provincial. Fundados en esta y otras razones los autores, refieren el orígen de las llamadas *causas mayores* de los obispos, unos al siglo IX, y otros al X. La historia demuestra, sin embargo, que mucho antes los Papas habian ejercido tal jurisdiccion, como se ve en el caso entre otros muchos, en que el Papa Zósimo, en 118, depuso á Próculo, obispo de Marsella, encargando al de Arlés hiciese elegir otro.

Como quiera que sea, y dejando la conveniente esplanacion de la materia para el artículo **OBISPO**, habiendo prevalecido la costumbre de que solo fuesen á Roma las causas mas graves de los obispos, conociéndose de las *menores* en el concilio provincial, empezó la clasificacion doctrinal de *causas mayores y menores*, autorizada aun por las disposiciones del Concilio de Trento sobre la materia, como se ve en el cap. 5, ses. 24 de reform.

A imitacion de las causas *mayores* de los obispos, que despues del Concilio de Trento son las que pueden dar lugar á *suspension* ó *deposicion*, se introdujeron otras, que los autores reasumen en la forma siguiente: *Causæ omnes majores ad Sedem Apostolicam referuntur: porró causæ majores censentur, quæ spectant ad articulos fidei intelligendos; ad canonicos libros discernendos: ad sensum sacrarum litterarum declarandum, approbandumque: ad interprætanda quæ dubia sunt vel obscura in controversiis fidei, in jure canónico, vel divino: item ad declarandum quæ ad sacramenta pertinent, videlicet, ad materiam, formam, et ministrum, et alia hujusmodi* (1).

Fácil es conocer que este número es diminuto, y ni de este resúmen, ni del capítulo *Quoties ratio* (2), que suele citarse, se deducen todas, ni pueden, pues que, segun el capítulo tridentino antes inserto (20, ses. 24), no solo corresponden al conocimiento del Papa las *causas mayores* espresadas en los cánones; si no *las que tuviere á bien cometer, ó avocar por rescripto firmado de su mano.*

La glosa canónica (3) reasume las causas mayores en otra forma, por parte de la atribucion suprema, que es análoga á cada una, en los siguientes versos, á que tenemos que aplicar la misma observacion por diminutos:

Restituit Papa solus, deponit, et ipse
Dividit, ac unit, eximit, atque probat:
Articulos solvit: symbolum facit generalem:
Transfert, et mutat: appellet nullus ab illo.

Los Papas, segun la disposicion del Concilio Tridentino (cap. 5, ses. 24), en cuanto á las causas mayores de los obispos, cuando ha de conocerse de ellas fuera de Roma, de-

(1) Cap. *Propter*, 4, distincion 18 del Decreto de Graciano.
(2) Cap. *Si quis episcopus*, 5, cuestion 4, causa 6.
(3) 7, cuest. 6, causa 3.

(1) Barbosa, *De officio et potest. episcopor.*
(2) 12, causa 24, cuestion 1.
(3) Al cán. 1, *De translatione episcopor.*

ben cometerlas y las cometen á los arzobispos y obispos, los cuales se limitan á la instruccion del proceso, reservando la decision á la Santa Sede.

Las reservas sobre causas mayores son combatidas por cuanto favorecen la impunidad, pues á causa de las distancias, y dispendios consiguientes, pocos se resolverán á acusar, ó trasladarse á Roma para sostener una demanda. Es asi ciertamente, y véase lo que sobre ello hemos dicho en el artículo CASOS RESERVADOS; si bien es necesario tener presente que las causas *se cometen*, con lo cual se acortan las distancias y atenúan los gastos; y que no puede dejar de reconocerse que la Iglesia se ha fundado en grandes razones de órden y disciplina, que si en este caso no bastaran para justificar la determinacion, no podria justificarse tampoco en lo civil la existencia de tribunales supremos, de casacion, etc., centralizados en los mas vastos imperios. En la práctica la Santa Sede economiza el uso de la prerogativa de avocar, ó por otros medios atenúa los inconvenientes.

Causas menores. Dícese por contraposicion á las llamadas *mayores*, para el efecto de no ser *cometidas*, ni *avocadas*, por el Papa; si no entabladas y decididas en sus tribunales respectivos, todas las que no se comprenden en dicha categoría de *mayores*, repitiendo aquí la observacion ya indicada de que ni el número de estas, ni el de aquellas puede fijarse taxativamente; pues el ser *mayores* ó *menores* pende en muchas en cuanto al efecto, no de que sean tales en sí; si no de que respecto de ellas la Santa Sede use, ó no, de su facultad discrecional de *cometerlas*, ó *avocarlas*, al tenor de lo dispuesto en el Concilio de Trento.

Causas civiles. Llámanse asi las que versan sobre bienes y derechos temporales, ora entre *legos*, ora entre *clérigos*: de suerte que las *causas eclesiásticas civiles*, son de dos clases, como se indica, entre *legos* y entre *eclesiásticos*: ademas se dicen *civiles* porque versan sobre intereses temporales; y *eclesiásticas*, no precisamente por las personas que litigan; si no por ser eclesiástico el tribunal. Los autores canonistas dicen en esta razon: *Jurisdictio, quæ sacerdotio extrinsecus advenit, in duobus fermè consistit: nempè, in decidendis causis* civilibus, *sive* laicorum, sive clericorum; *et in puniendis, etiam in foro externo*, civilibus *clericorum delictis* (1).

Por lo que hace á las causas civiles *entre legos*, es ya, casi en general, un hecho histórico; pero de que no puede prescindirse en la historia del derecho, la vasta competencia que sobre este punto llegaron á tener los tribunales eclesiásticos, por causas bien conocidas.

Entre los preceptos evangélicos encaminados á la suma perfeccion, eran notables, y como una prueba insigne de caridad y mansedumbre, los de *ceder la capa al adversario, antes que dispularle en juicio la túnica* (2): *el no repetir del ladron las cosas robadas* (3). El Apóstol, á su vez, exortaba á los cristianos á no llevar á otros cristianos ante los jueces gentiles, por el vilipendio que en ello parecia recibir la Iglesia, y antes bien debian dirimir entre ellos sus contiendas, aunque fuera sometiendo la decision al último entre los cristianos (4). El interés individual, y el amor mismo á la paz y confraternidad cristiana, haria buscar la mayor ilustracion y justicia allí en donde eran de suponer; y de este modo, no solamente el juicio eclesiástico prevaleció sobre el civil; si no que radicó en los obispos, á quienes hay que suponer propicios á favorecer el espíritu de las letras sagradas, y á arraigar la paz, atajando las discordias entre sus fieles. San Agustin asegura que el juicio eclesiástico nació en los primeros siglos de un sentimiento religioso (5), y en todo la dicho se hallará, no ya la primera causa, si no la fundamental del *juicio civil* eclesiástico *entre legos*.

Sobre este principio, convertidos al cristianismo los emperadores romanos, no solo

(1) Cavalari, Instit. can. part. 3, cap. 9.
(2) San Mateo, cap. 5, vers. 40.
(3) San Lucas, cap. 6, vers. 30.
(4) Primera ad corinth. 6.
(5) Lib. 3 ad Bonifac. cap. 8.

confirmaron y revistieron de autoridad pública el arbitrio de los obispos; si no que lo ampliaron. Arcadio y Honorio autorizaron que cada uno pudiera llevar sus contiendas pecuniarias ante el obispo (1). La decision del obispo era inapelable, y ejecutiva para los tribunales del imperio, como si fuese dada por el *prefecto del pretorio*.

El juicio de los obispos era gratuito, de plano, ó sin estrépito forense, y esta fué una causa mas para aumentar su autoridad jurisdiccional.

Vió luego la luz pública una constitucion, atribuida al emperador Constantino, inserta en la adicional al Código *Teodosiano*, y segun la que, aun trabado ya el juicio ante el magistrado civil, una de las partes podria llevarlo al obispo, no obstante que la otra lo resistiese: *etiam si altera pars refragaretur*. Tienen unos por verdadera, otros por apócrifa esta constitucion; pero prevaleció en lo judicial: atribuida á Teodosio, Carlo-Magno la dió fuerza, y la comprendió en sus Capitulares (2): comprendióse despues, asi como las demas constituciones imperiales citadas, con la novela 12 de Valentiniano, confirmatoria de las mismas, en el Decreto de Graciano y Cuerpo del Derecho canónico (3); y de este modo la jurisdiccion de los obispos para causas civiles, estensiva ya entonces á mas que á las contiendas pecuniarias, se elevó á derecho comun.

Aumentóse aun por el mismo principio porque habia nacido y dilatádose: por un sentimiento de piedad en los súbditos y en los legisladores temporales; por economía y conveniencia ademas, de parte de los primeros; y todos aquellos negocios en que se mezclaba el sentimiento ó respeto religioso: en *causas pias*; mediando juramento, matrimonio: en razon solo de mediar *pecado*; tomando este por principal, y lo temporal como accesorio, la mayor parte de los asuntos civiles de legos pasaron á los obispos, que en un principio los cometian á veces á los presbíteros y diáconos; y despues á sus provisores.

A imitacion de las Capitulares y del Decreto de Graciano, todas las legislaciones cristianas de los siglos medios confirmaron, si no ampliaron esta jurisprudencia. En nuestro Código de Partidas pueden verse algunas leyes en este sentido, entre ellas la 56 y 58 del tít. 6, Part. 1, de las cuales por la primera, se ve establecer por uno de los fundamentos de la jurisdiccion eclesiástica el que se trate *de fecho de pecado*; y por la segunda, enumerando los *fechos de pecado*, menciona entre ellos la *usura*, el *perjurio*, el adulterio, y el sacrilegio.

Todavia Enrique II y otros monarcas de aquel siglo ordenaban y reencargaban que *los concejos y justicias no se entrometiesen á tomar, ni ocupar la jurisdiccion civil que por uso y costumbre, ó privilegio, pertenecia á la Iglesia* (1). Pero la potestad jurídica de los obispos, siendo ya verdadera jurisdiccion, revistió, con esceso tal vez, las formas forenses con sus dilaciones y gravámenes, lo que destruyó las ventajas antiguas de brevedad y economía: estendiendo su esfera, por uso ó por abuso, cada dia mas, segun la índole de todo poder, y mas si es precario, por privilegio, ó tolerancia; amenguaba estraordinariamente el prestigio y atribuciones de los tribunales civiles, y la reaccion del poder temporal para la reversion fué mas rápida que lo habia sido para la concesion. Entre nosotros, y casi en general, el siglo XIV fué de transicion en este punto, y el mismo Enrique II, y otros reyes que habian dictado disposiciones favorables, como hemos visto, á la jurisdiccion civil de los obispos, las dictaron restrictivas, hasta con rigor (2). El siglo XV, en fin, fué de reversion, de reintegracion del poder temporal: Enrique IV y los Reyes Católicos continuaron y casi concluyeron la reintegracion empezada, reduciendo las facultades de los jueces *conservadores*, prohibiendo los contratos jurados, in-

(1) Leyes 7 y 8 del Código, *De episcopali audientia*.
(2) Lib. 6, cap. 563, edicion de Baluzio.
(3) Causa 11, cuest. 1.

(1) Leyes 1 y 9, tit. 9, lib. 1 Nov. Recop.: 1, 2 y 3, tit. 1, lib. 2, id. id.
(2) Leyes 4 y 5, tit. 1, lib. 2 id. id.: 5, tit. 1, lib. 10 idem, id.

ductivos entonces de competencia eclesiástica, la sumision de legos á estos tribunales, etc. (1). Con el tiempo cesaron hasta los jueces conservadores; y en el dia han cesado de todo punto, por leyes y disposiciones aun mas terminantes, las *causas eclesiásticas civiles* entre legos.

La jurisdiccion civil entre eclesiásticos tuvo el mismo orígen y vicisitudes, con mayoría de razon. Por este motivo se estendió y arraigó mas. Las leyes civiles fueron tambien esplícitas en confirmarlo, atemperándose á la legislacion canónica. La 57, tít 6, Partida 1, no podia ser mas terminante en el particular: «é cuando demandasen clérigo con otro sobre alguna destas cosas (las *temporales*, como *heredades* ó de *dineros*, ó de *bestias*, *aposturas*, *avenencias*, *cambios y otras semejantes*), quier sea mueble, quier raiz, débese jozgar *ante sus perlados, é non ante los legos.*» Pero de esto corresponde tratar con amplitud en otra parte.

Causas criminales. En este punto los obispos han tenido tambien jurisdiccion sobre los *legos*; pero mucho mas restricta y puramente *correccional*. Ni podia ser otra cosa. La Iglesia no tiene fuerza coercitiva esterior: no le está encomendado el órden público, de cuyo alto deber es peculiar é inseparable el *jus gladii*: ni este por otra parte convendria al carácter de la Iglesia. De aquí es que en virtud de estos principios, ella misma, aun para aplicar penas temporales á los clérigos, ha tenido y tiene que impartir *el ausilio del brazo secular*.

Sin embargo, en testimonio de respeto y sumision á la Iglesia; obtemperando al principio humanitario cristiano; mezclándose en ello tal vez la mansedumbre y la política, por la eficacia de las penas menores, previniendo asi, ó queriendo prevenir las mayores, los primeros emperadores cristianos permitieron tambien á los obispos una jurisdiccion, que propiamente no era si no *monitoria* y *correccional*, para las faltas y leves delitos, en materia de religion y de costumbres, reservando siempre el castigo de los crímenes públicos á la magistratura civil. En el artículo CARCEL hemos visto la intervencion disciplinaria y derecho de visita que en el particular concedian á los obispos, no solo las leyes romanas; si no las de Partida. Esta jurisdiccion, sin embargo, y como era de esperar, caducó y fué reincorporada al principio de que partiera, antes que la civil *entre legos*; punto que volveremos á tratar en otra parte.

La Iglesia ha podido y puede castigar á los legos con penas eclesiásticas por delitos eclesiásticos; pero esto es en virtud de jurisdiccion de este mismo órden: no *atribuida*; si no *propia*.

En cuanto á los *clérigos*, la doctrina *canónica* sentada en una de las subdivisiones anteriores pudiera dar lugar á error. Nos referimos á la enunciativa de que la jurisdiccion *atribuida*, ó que *sacerdotio extrinsecus advenit*, se ejerce casi únicamente en las causas criminales de clérigos y legos, *et in puniendis etiam in foro externo civilibus clericorum delictis*. La potestad eclesiástica no juzga á los clérigos de todos los delitos civiles; si no solo de algunos, los no *graves* y *atroces*: y de aquellos de que los juzga, es sin escluir la accion jurídica de la potestad secular, é impartiendo su ausilio en caso necesario, asi como en los crímenes civiles graves los entrega *á su brazo*, de lo cual hablamos en su artículo correspondiente.

Hé aquí en conclusion la admirable doctrina de la Iglesia sobre órden público, y causas criminales de clérigos y legos. *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit... qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit... Si autem malum feceris, time: non enim sine causa gladium portat. Dei enim minister est: vindex in iram ei, qui malum agit* (San Pablo *ad romanos*, 13).

Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit; etiam si apostolus sit, si evangelista, si propheta; sive quisque tandem fuerit, non enim pietatem evertit ista subjectio. (El Crisóstomo, homilia 13, *in epist. ad romanos*).

Omnis anima potestatibus sublimioribus

(1) Leyes 6, 7, 8, 9 y 10 y siguientes, tít. 1, lib. 9, Novísima Recop.: 6 y 7, tit. 1, lib. 10, id. id.

Lorenzo Arrazola

subdita sit: si omnis, et vestra. ¿Quis vos excipit ab universitate? Si quis tentat excipere, conatur decipere. (San Bernardo, *ad Simonensem archiepiscopum*, epíst. 42).

El Concilio de Trento (cap. 5, ses. 24) declara corresponder solo al Papa las causas criminales graves de los obispos: las *menores* al Sínodo provincial. (Véase su artículo.) Despues en el cap. 20, ses. 25, recomienda á los príncipes cristianos que guarden á la Iglesia y á las personas eclesiásticas sus inmunidades, fueros y privilegios. El Lateranense 5, ses. 5, lo habia inculcado tambien, como otras muchas disposiciones canónicas y civiles; y sin embargo en España, segun la legislacion vigente, los delitos civiles atroces los juzgan y penan los tribunales civiles, si bien hay que distinguir siempre entre delitos civiles, eclesiásticos y mistos, como esponemos en otra parte.

Causas beneficiales. Cuando á la cabeza de este artículo hemos insertado el cap. 20, sesion 24 del Concilio de Trento sobre causas eclesiásticas, lo hemos llamado *notable*: el cardenal de Luca, que consagró apreciables trabajos á su mejor inteligencia y aplicacion, lo llama *celebérrimo*, si bien por eso mismo, viniendo sobre envejecidos abusos, y derechos adquiridos; cayendo, digámoslo así, sus prescripciones absolutas y esclusivas, sobre los privilegios mas especiales, ó pareciendo que recae, preciso es que diera ocasion, como realmente ha dado, y el citado cardenal asegura, á infinitas controversias, no siendo la materia en que menos, la presente de *causas beneficiales*. En pocas de las que menciona, es dicho capítulo mas absoluto que cuando quiere que toda causa perteneciente al fuero eclesiástico venga en primera instancia al ordinario local, y eso de cualquier género que sean, y aunque sean beneficiales: *etiam beneficiales*. Este modo, *doblemente reduplicativo*, de hablar de ellas, indica que acerca de las mismas habia ó abusos notables, ó privilegios de singular calidad, y que aquellos quedan corregidos y estos derogados, y todo sin escepcion. Así ademas lo establece el propio capítulo al final. ¿Será así en efecto? Sobre ello vamos á consignar las ligeras indicaciones que la índole genérica del artículo permite.

Diremos ante todo que, en términos generales, *causa beneficial* es aquella en que se trata de lo principal y conexo de un beneficio propio, ora menor, ora mayor, ó de los beneficios impropios, como las capellanías *colativas*, por ejemplo, ó fundaciones de particulares espiritualizadas: en su consecuencia la causa en que se trata del *título*, *afeccion*, *union*, *separacion*, *secularizacion* por incóngruo, *cumplimiento* y *reduccion* de cargas *pías*; derecho *in re*, derecho *ad rem*, *petitorio*, *posesorio*, etc., si bien no en todas partes, todos estos conceptos se reputan de índole eclesiástica en lo jurídico.

En sentido menos lato, *causas beneficiales* son meramente entre las mencionadas, aquellas de que, segun el derecho comun, la costumbre legítima y disciplina particular de cada país, conocen solo los tribunales eclesiásticos.

En un sentido especial, en fin, y como antonomástico entre los canonistas romanos, son aquellas causas sobre beneficios de que solo *conoce*, ó *conocia* el Papa.

En la doctrina de dichos canonistas, el Papa es, no solo el *colador general* en materia de beneficios, segun lo admite tambien la doctrina general; si no *como señor de ellos*, dispensador de los mismos, como *poseedor universal*. *Papæ sunt beneficia totius mundi obedientialia*. Cierto que esta regla puede traerse á la doctrina comun; pero no es esa ahora la cuestion. Véase AFECCION. De ello deducen que los *provee*, *afecta*, *reserva*, etc., por propio y privativo derecho, y que por eso tambien le compete el decidir sobre ellos, si bien ha limitado su conocimiento privativo á juzgar solo del *título*, del derecho *in re*, y del derecho *ad rem*, reservando las demas cuestiones á los ordinarios. Tampoco suele ser de todos; cometiendo el conocimiento de varios de ellos. La cuestion es hoy si aun las causas beneficiales reservadas al Papa, deben ir en primera instancia al ordinario, por la *reduplicativa*, y esclusiva, *quomodolibet* (*ad forum eclesiasticum pertinentes*)... *etiam si beneficiales sint.*

Los términos absolutos y esclusivos del capítulo parecen indicarlo asi: pero despues se esceptúan las causas reservadas al Papa. El mismo Concilio declara en el capítulo 23, ses. 25, que cuanto en él se decreta y ordena sobre reforma y disciplina, se entiende dejando ilesa la autoridad del Papa. Y la práctica en la curia romana es, cometer el Papa los beneficios reservados, ó afectos á los ordinarios locales, con lo que se han tratado de conciliar los derechos de la Santa Sede con el respeto al Concilio. En todos los demas se sigue en la práctica la disposicion conciliar, salvas las escepciones á que dan lugar los Concordatos, las costumbres y disciplina particular, y algunos indultos pontificios, lo que principalmente tiene lugar en las regiones de Ultramar, y en Roma y su rádio. Asi, por ejemplo, si el Papa provee un beneficio reservado para que el provisto siga carrera literaria, ó si está afecto á la Cámara apostólica, toma este posesion y puede sostener el posesorio ante el auditor de la misma Cámara. Véase sobre esto el Concilio de Trento por Gallemart, dicho cap. 20, sesion 24: el cardenal de Luca, discurso práctico 33, adicionado al Concilio: y Gonzalez, *Jus ecclesiasticum* part. 3, tít. 2: la bula de Benedicto XIV, *Justitiæ et pacis*. Véanse asimismo los artículos **BENEFICIO**, **CAPELLANIA**.

Causas sacramentales. Las que versan sobre los Sacramentos *quoad substantiam*, esto es, en cuanto al número, esencia, materia, forma, sugeto, ministro y eficacia de los mismos. Estas causas, en cualquier forma que se traten, competen á la potestad eclesiástica. Véase **SACRAMENTOS**. Esto por lo que hace á la cuestion *juris*, como queda dicho: en cuanto á la cuestion *facti*, puede ser del resorte de ambas potestades, aunque bajo distinto concepto cada una: lo que se ciña meramente á lo espiritual, compete á la autoridad eclesiástica: lo que inmediatamente se liga al órden público, constituyendo por tanto, como cualquier otro acto eclesiástico en el mismo caso, una cuestion de gobierno temporal, sin dejar de corresponder al eclesiástico en este efecto; es tambien de la competencia de la potestad civil, si bien puramente como hecho y cuestion de órden público.

De las causas sacramentales, es muy raro el que alguna venga al órden forense, salvo las matrimoniales. Véase esta subdivision; y tambien la de *causas eclesiásticas*.

Causas matrimoniales. Dejamos indicado que en el dia es raro se traten *contenciosamente*, ó en forma judicial forense otras causas sacramentales que las relativas al matrimonio *quoad substantiam*, y á los efectos espirituales de este Sacramento. La razon es sin duda el que descansa sobre un *contrato bilateral*, que segun algunos es lo que constituye la *materia* del Sacramento; y ciertamente que el anular este contrato, de los mas solemnes que se celebran en sus dobles formas y naturaleza, civiles y eclesiásticas, merece ser tratado en forma contenciosa. El fundamento de la disolucion del vínculo matrimonial es al fin una acusacion, ó inculpacion, ó por lo menos lo es en la mayor parte de los casos, de uno de los cónyujes contra el otro: ¿cómo no exigir la prueba de parte del uno, y autorizar la defensa respecto del otro? Pudiendo llegar la malicia hasta proceder de acuerdo y dolosamente ambos cónyujes, para romper un vínculo, que sin la existencia de ciertos hechos, supuestos acaso, saben no puede romperse, ¿cómo no ha de intervenir *ad cautelam* siempre, un defensor del matrimonio, un representante por tanto de las leyes canónicas y civiles, que por un criminal concierto podrian quedar eludidas? De aquí la forma contenciosa, sobremanera adecuada y conveniente, ya que no fuera necesaria, en lo relativo á este Sacramento.

Hay motivos, sin embargo, para creer que, aunque siempre conoció de estas causas la potestad eclesiástica, no siempre fué en rigor forense; si no en sínodo ó concilio de obispos. Asi, en una decretal atribuida á Alejandro II (hácia 1067), se prohibia á un postulante que aspiraba al *divorcio*, el dimitir de ninguna manera á su muger, ni unirse á otra *donec episcoporum religiosorum concilium causam istam examinaverit* (1).

(1) Causa 33, cuest. 6, cap 10 del Decreto de Graciano.

Con el tiempo, dice la glosa al capítulo único, causa 33, cuest. 2, el conocimiento radicó en los obispos en particular: «*Sed rectè et hodiè ad episcopalem jurisdictionem cognitio matrimonialis causæ spectat. Unde nec abbates, nec alii cognoscere possunt de matrimonio, nisi ex concessione, vel alia causa legitima id habeant.*»

Pero mediante un *contrato*, eran inevitables considerables cuestiones de carácter al parecer misto, ó que se prestaban á pretensiones é interpretaciones mas ó menos fundadas de la autoridad temporal. Las dudas y las invasiones llegaron á punto sin duda de persuadir al Concilio de Trento una declaracion absoluta, y robustecida con anatema. Algunos prelados inferiores, ora exentos, ora con autoridad local mas ó menos estensa, llegaron á conocer tambien de las causas matrimoniales, como deanes, arcedianos, abades: y ya fuese que en ello hubiera abuso; ya que esta clase de tribunales no guardase analogía con la importancia que el Concilio quiso imprimir á este género de causas, como veremos, dictó en el particular dos determinaciones notabilísimas; si bien la práctica ha atenuado no poco su tema absoluto y general. Es la primera de ellas el cánon 12, ses. 24 *de reform. matrim.*, que dice asi: *Si quis dixerit causas matrimoniales non spectare ad judices ecclesiasticos, anathema sit.* La otra es la contenida en el capítulo preinserto al principio de este artículo (20, ses. 24 *de reform.*), y en la cual se ordena respecto á este punto: 1.° Que el conocimiento de las causas matrimoniales corresponde *solamente* á los obispos (*non decani... aut aliorum inferiorum judicio;... sed episcopis tamtúm examini...*). 2.° Que quedan inhibidos los deanes, arcedianos y cualesquiera otros inferiores á los obispos; entendiéndose la inhibicion, aun en acto de visita. 3.° La parte que probare ser pobre, no será obligada á litigar en causa matrimonial fuera de la provincia, ni en primera ni en ninguna otra instancia, á no ser que la parte contraria se allane á sufragar las costas y alimentos. 4.° Quedan de todo punto inhibidos los legados, aunque sean *de látere*, los nuncios, los gobernadores eclesiásticos y toda otra autoridad eclesiástica, cualesquiera que sean sus prerogativas, de impedir, ni aun perturbar á los obispos en el conocimiento de estas causas; pena de nulidad, costas y perjuicios.

La inhibicion de los arcedianos y demas inferiores se entenderá, y lo propio de los abades y exentos, si, segun ya antes dejamos indicado, no tienen jurisdiccion *episcopal*, ó *cuasi-episcopal*, pues que en este caso ellos son el diocesano, el ordinario local. Su inhibicion tambien *en acto de visita*, se entenderá: 1.° Si no tienen jurisdiccion *episcopal vel cuasi*. 2.° Si en este caso, aun teniendo cierta jurisdiccion local, no es de aquel género. 3.° Si en el mismo caso hicieren la visita en nombre y autoridad propia, y no del obispo, siendo entonces las letras de comision la medida de sus atribuciones: y 4.° Aun en el caso de hacer la visita de propia autoridad por cierto grado de jurisdiccion no *episcopal vel cuasi*, como prelados *nullius*, en lo relativo á las cuestiones de derecho, validéz del matrimonio, separacion de los cónyujes, ni aun *quoad thorum*; pero no de otras medidas correccionales en cuestiones de *hecho*, escándalo y reglas de costumbres.

El Concilio llevó el rigor hasta declarar inhibidos á los prelados y jueces inferiores, aun en las causas en que á su promulgacion pendiere pleito de jurisdiccion, ó contienda de competencia, entre ellos y los obispos, en cualquier instancia, ó grado en que se hallare. La congregacion del Concilio declaró caducadas en vista de este aun las ejecutorias de jurisdiccion, ganadas por prelados inferiores, en virtud de privilegios, ó indultos anteriores al mismo, pues tales privilegios no podian tener fuerza contra una ley general posterior (*in salernitana*, 9 de abril de 1589). Y con todo la misma Congregacion declaró: 1.° No haber sido abrogada por el Concilio la costumbre inmemorial; siendo de notar que esta hace veces de privilegio, y que el Concilio escluye al final del cap. 20 citado, asi como todo privilegio, *cualquier género de costumbre en contrario*. 2.° Ni tampoco la *cuasi-inmemorial*, si bien esta ha

de probarse ante el mismo obispo y declararse por él. 3.° Que bastaban para probar la costumbre inmemorial tres sentencias conformes, siendo de notar que la misma Congregacion reputó caducadas las ejecutorias de privilegio, anteriores al Concilio (22 de enero de 1598). 4.° Que una sola sentencia que pasase en cosa juzgada, equivale á tres conformes (12 de febrero de 1598).

Véase á Gallemart, al Concilio de Trento, capítulo y sesion citados: Gonzalez, *Jus ecclesiast.* part. 3, tít. 2, núm. 10 y siguientes: cardenal de Luca, anotaciones al Concilio, discurso 33, núms. 39 y 40, capítulo *Multorum.*

Sobre causas matrimoniales, hay todavía una cuestion gravísima; no por la frecuencia con que acontece; y antes acontece rara vez; si no por su trascendencia, que en alguna ocasion ha desgarrado el seno de la Iglesia, y separado de su unidad naciones enteras. Hablamos de las causas matrimoniales de reyes y soberanos; y nos referimos al caso de Enrique VIII, y consiguiente cisma de Inglaterra.

Este mismo caso patentiza una cosa, y es, cuán débil seria la autoridad de un obispo para sobreponerse siempre á exigencias de tal género, que no han bastado á contener en ocasiones la mayor autoridad y prestigio de los Papas.

Por esta razon sin duda: porque la causa de divorcio de un príncipe puede traer consecuencias fatales, no solo al prelado de una diócesis, súbdito en lo temporal del mismo príncipe ó soberano; si no á la Iglesia universal: porque es ademas, ó se presta á ser una cuestion política, con trascendencia al estado y sociedad eclesiástica; la cual nadie puede apreciar mejor que su jefe y cabeza, primer custodio, por otra parte, de la severidad é integridad canónica: por estas razones, decimos, es sin duda por lo que antes del Concilio de Trento y despues, ha sido práctica el que los Papas conozcan, aun por sí mismos, y otras veces cometiéndolas, de las causas matrimoniales de los príncipes; si bien es verdad que, si no todos, la mayor parte de los casos de que dá razon la historia, han ocurrido en naciones en que no ha sido recibido el Concilio de Trento, tales como la Francia. Pero de aquí se deduce una razon muy para tenida en cuenta, y es, que si tal era la práctica en tales paises antes del Concilio, con mayor razon lo seria en aquellos que admitieron este, lo que prueba mayor adhesion á la Santa Sede. Y como hemos visto que el mismo Concilio declaró no deben entenderse en perjuicio de la autoridad y prerogativas del Papa sus determinaciones de reforma: como por la congregacion del Concilio hemos visto asi bien haberse declarado que por el tenor el cap. 20, ses. 24, *de reform.*, no fué abolida sobre causas matrimoniales la costumbre inmemorial, y ni aun la *cuasi-inmemorial*; debe concluirse que la competencia y prerogativa del Papa en este punto, ó para conocer de las causas matrimoniales de testas coronadas, y otros soberanos, la que era antes del Concilio, aun en paises en que este fué admitido, esa es despues. Es cierto, pues, que los Papas conocerán de este género de causas, allí donde sea asi costumbre, sin que por ello se contravenga al Concilio: y decimos mas; por las razones que arriba apuntamos acerca de la naturaleza y trascendencia de tales causas, casi no hay posibilidad para que se verifique, ni conducencia en que se verifique de otro modo. Aun hablaremos otra vez de esta grave cuestion, canónica por su principio; política por sus resultados, y hé aquí entre tanto algunos hechos históricos que hacen al propósito.

Luis XII de Francia intentó la disolucion de su matrimonio con Juana de Francia. Llevada la causa al Papa, la cometió á tres obispos con tres asesores. En 1498 estos jueces dictaron sentencia, declarando nulo el matrimonio.

Ya hemos hablado del divorcio intentado por Enrique VIII y que dió lugar al cisma de Inglaterra, por no haberlo estimado el Papa.

En 1599 el Sumo Pontífice cometió la causa de divorcio intentado por Enrique IV. Dos jueces delegados declararon la nulidad tambien: y se ve que esta fecha es ya pos-

terior al Concilio, bien que este no se recibiera en Francia.

Entre otros muchos casos hay dos contemporáneos que merecen atencion, aunque cada uno por razon diversa. Sabido es el divorcio que tuvo lugar entre Napoleon I y Josefina Tascher. No hallando propicio á Pio VII, fueron nombrados siete obispos, que admitiendo la designacion, se declararon *tribunal competente* á causa de las *circunstancias*: es decir, que reputando, si no vacante, *impedida* la silla pontificia, vinieron á atenerse á la antigua disciplina arriba insinuada, de decidirse las causas matrimoniales *in concilio episcoporum*, segun la decretal allí citada. No siendo ahora cuestion la legalidad de tal tribunal, eslo sí el consignar, que, declarando la nulidad del matrimonio, consignaron en la sentencia «que *atendida la dificultad* de recurrir *al gefe de la Iglesia* (1810) *á quien de hecho ha correspondido siempre conocer, y pronunciar sobre estos casos estraordinarios*, declaramos nulo, etc.»

No habia tal dificultad en recurrir á la Santa Sede, teniendo el Emperador bajo su mano, y digámoslo asi bajo su guarda, la persona y la libertad del gefe de la Iglesia. ¿Cómo no la hubo, si no, para recurrir al mismo en otras muchas cosas y no de poca monta, como por ejemplo, un *concordato*, que si ha de tener pleno valor legal, supone omnímoda libertad en las potestades soberanas que lo autorizan? Lo que habia era que se sabia de cierto no podia contarse con la voluntad pontificia, lo propio que en el otro caso á que nos referíamos. Napoleon, en efecto, trató asimismo del divorcio de su hermano Gerónimo Bonaparte, luego rey de Wesfalia. Para ello *se dirigió al Sumo Pontífice*, que es la cuestion presente. El Papa no halló procedente el divorcio; pero razonó la negativa en un documento notable por la copia de doctrina, y por lo autorizado de ella misma sobre *indisolubilidad* del matrimonio. Véase MATRIMONIO.

Causas de fé. Algunos, al clasificar las causas en *mayores* y *menores*, opinan que en materia de *causas de fé*, ninguna es *menor*; si no que por ese hecho todas han de reputarse mayores. Sin otra esplicacion esta opinion induciria á un error, pues equivaldria á establecer que todas las *causas de fé* están reservadas al Papa, lo cual no es asi. Las causas de fé, ó tienen por objeto una *declaracion dogmática*, ó una medida disciplinaria, como el castigo de un delito *contra la fé*. En el primer caso el juicio corresponde *á la Iglesia* en la forma recibida por los cánones: en el segundo á los tribunales. En esa acepcion la tomamos en la presente subdivision. Los tribunales, conocedores del dogma, apreciarán la violacion de los cánones en que se consigna, aplicando al caso aquellos que con su sancion penal lo garantizan contra los ultrajes de la impunidad, del crímen, de la negligencia, del error voluntario y pertinaz. Aplicada al caso la sancion penal canónica (como á su vez la civil), los tribunales han concluido: si la calidad, trascendencia y otras circunstancias del error *pertinaz* exigiesen alguna declaracion dogmática, ó interpretacion de lo ya definido, la causa entonces es ya otra, segun hemos dicho: corresponde al Papa, quien apreciará si es competente ó conducente el que decida por sí solo, ó reuniendo á la Iglesia en Concilio.

Lo dicho vuelve la cuestion, no obstante la opinion mencionada, al terreno y clasificacion general de *causas mayores* y *causas menores*: es decir, que aun en el concepto forense las causas de fé, que por la levedad é índole del asunto merezcan el nombre de *menores*, siguen el curso general prescrito para las demas causas eclesiásticas, como mas arriba queda espuesto: si mereciere el nombre de *mayor*, el de las de esta clase. Asi se vé comprobado aun por el mismo Concilio de Trento, que reservando al Papa las causas *mas graves* de los obispos; indica bien que las menores, aunque *de fé*, llevan el curso ordinario: y escepcionando las de heregía entre las mas graves, esto es, que irán al Papa cuando sean muy graves, se deja entender asimismo su curso, cuando no sean de tal gravedad. *Causæ criminales graviores contra episcopos, etiam hæresis, quòd absit... ab ipso tantum romano Pontifice cognos-*

cantur, etc. (Cap. 5, ses. 24, *de reform.*)

En España la institucion de la Inquisicion primero, y la de la Rota despues, imprimieron á la disciplina eclesiástica un carácter especial, de lo cual hablamos en otro punto. Suprimida aquella en los últimos tiempos, y cesando por tanto la especialidad, no parece quedaba en estos Estados mas que la regla general, como asi fué; y aun respecto de la apelacion á la Santa Sede, Pio VIII, por *breve* de 3 de octubre de 1829, publicado como ley del reino, ordenó que aquellas, en materia de fé, vayan al nuncio, quien habrá de cometer el conocimiento y decision al tribunal de la Rota, como en las demas causas, con lo demas que espresa.

Causas rotales. Las de *mayor gravedad* (*graviores*), y que por tanto no se cometen *de ordinario* por el Papa si no á la *Rota romana*. El buen sentido ha indicado cuales son estas causas por su naturaleza; y la prudencia indica en cada caso las que lo son por sus circunstancias. Los Pontífices conservan siempre espedita esta facultad discrecional, y de aquí el no poder reducirse las causas *rotales* á número determinado. Suelen ser, sin embargo, las que tratan de jurisdiccion: del derecho de patronato: las *beneficiales*, en el sentido romano en que antes las hemos espuesto: las mismas, aunque solo se trate de sus productos, si estos esceden de 24 *ducados de oro de cámara*: en general todas las causas, cuyo valor esceda de 500 escudos, *citra montes* respecto de Roma; de 1,000 *ultra montes* en el mismo sentido: si se trata de la primera dignidad de las catedrales y colegiatas: las de nulidad de profesion religiosa: y algunas veces las matrimoniales. Véase la siguiente subdivision.

Causas prelaticias. Las demas causas inferiores en gravedad ó importancia á las rotales, se llaman *prelaticias*, porque de ordinario se cometen, ó comete el Papa su conocimiento á los prelados, como cardenales, legados, etc. La diferencia está, pues, en que á las causas graves ó de importancia, esto es, á las de *calidad* ó *cantidad*, se las asigna un tribunal *colegiado*, la Rota, ó *sacro auditorio*; á las demas, tribunales singulares, ó *unipersonales*. Notárase ademas otra cosa, y es que las causas eclesiásticas no radican en Roma si no *por comision*. Es una cosa parecida á nuestro antiguo sistema de juzgar por *reales cédulas*, ó cuando por estas se daba ó quitaba el conocimiento de causa, se *cometia*; y aun se abrian procesos fenecidos. No es aun hasta cierto punto el sistema de enjuiciamiento civil en Inglaterra, descendiendo el cometido de los altos tribunales de Wesminster. Es todo una consecuencia necesaria de hallarse ó reputarse *centralizada* la jurisdiccion: de la diferencia radical entre la *retenida* y la delegada. Y en lo eclesiástico se salva asi, por la *delegacion* ó *comision* especial, la verdad y teoría canónica de *reservas al Papa*, y el conocimiento del mismo, si bien unas veces es *personal*, otras *cometido*, ó cometiendo la causa. A veces el principio se salva aun por una comision ó delegacion en cierto modo perpétua, ó *á priori* y en abstracto, sin perjuicio de la comision especial en los *turnos* en cada caso. Asi está delegada la jurisdiccion pontificia en el nuncio y Rota de España, como mas latamente decimos en su lugar.

Es de notar aun que las causas varian de índole, esto es, las *rotales* pueden y suelen cometerse á prelados, y las *prelaticias* á la Rota, de consentimiento de las partes; salvas empero las causas matrimoniales, y las de nulidad de profesion religiosa. Asi lo estableció Benedicto XIV; si bien Clemente XIII ordenó que las *rotales* y *prelaticias* lo fuesen siempre, independientemente de la voluntad de las partes. Y con todo eso, volvemos á repetir, que estas y cualesquier otras reglas generales en la materia ceden á la suprema facultad discrecional pontificia, siendo un principio, establecido por el Concilio de Trento, segun hemos visto; asi bien por constitucion de Benedicto XIV (1), á saber, que el Papa, por rescripto *firmado de su mano*, puede cometer *todo género de causas* á *cualesquier jueces*, colegiados, singulares, etc. Véanse el preinserto capítulo del Concilio de Trento (20, ses. 24): constitucio-

(1) Constit. *Justitiæ et pacis*, 41, tomo 2 de la coleccion.

nes de Benedicto XIV, *Ad militantes*, 48, tomo 1: *Si datam*, 47, tomo 2: *Romana curia*, 115.

Causas de correccion: *causas de visita*. Otro de los capítulos notables del Concilio de Trento, es el 1 de la ses. 13, *de reform.* Despues de escelentes máximas y principios legislativos; teniendo presente el frecuente abuso de los trámites judiciales y medios de defensa, por parte de los curiales, ordena que en las espresadas causas de *correccion* y de *visita*, ya sean de *habilitacion*, *inhabilitacion*, y aun *criminales*, no puede apelarse; y si se apelare, se desestime como frívola la apelacion de providencias interlocutorias, salvo que el perjuicio que irrogaren no pueda repararse en definitiva, derogando en este punto aun la costumbre inmemorial y toda práctica en contrario. Véase APELACION, VISITA.

Causas de exentos. Aunque respecto de ellos la regla general es en escepcion; y escepcion el derecho comun, todavía los cánones vienen, hace tiempo, poniendo restricciones á la exencion, reduciéndola en muchos casos al derecho comun. Varias son las disposiciones dictadas con este fin; siendo las mas notables la constitucion de Inocencio IV, en el Concilio Lugdunense (1245), segun la cual los clérigos exentos, ó privilegiados, deben responder ante el ordinario local, por causa de contrato, de delito, y de cosa raiz: tambien convenidos, y á su vez corregidos por el diocesano los individuos exentos del clero regular (1). El cap. 14, ses. 7 del Concilio de Trento, *de reform.*, que dá por reproducida la constitucion citada de Inocencio IV, *Volentes*; añadiendo ademas, que en las *causas civiles* por salarios, y de personas miserables, los clérigos seculares, ó regulares que viven fuera de sus conventos, de cualquier modo que sean exentos, aun cuando tengan juez especial deputado *in partibus* por la Santa Sede, en ello y en las demas cosas, ó asuntos en que no tuvieren juez *in partibus*, serán convenidos ante el ordinario local, como delegado por Su Santidad, siendo ineficaz en tales casos todo privilegio en contrario. El cap. 4, ses. 14 *de reform.* del mismo, conforme al cual, por causa de delito todo eclesiástico, cualquiera que sea su privilegio, está sujeto al ordinario local, como delegado este de la Santa Sede. Y últimamente, entre otros, el cap. 5 de la misma sesion, por el cual se prohibe el uso de letras, ó de despacho de preces *conservadoras*, que sirvan para sustraer abusivamente á los que las obtienen de la jurisdiccion de su obispo ú otro superior ordinario, en las causas criminales y en las mistas, ó del juez ordinario en causas de cesion de derechos por un tercero: se reproduce el capítulo 14, ses. 7 antes citado; si bien se declara no hacerse novedad en cuanto á universidades generales, colegios de doctores, ó de escolares, los lugares de regulares, y los hospitales.

Causas de beatificacion y canonizacion. Véanse estos artículos.

Causas sobre nulidad de profesion religiosa. Véase PROFESION, REGULARES, MONJAS.

Cuanto queda indicado en estas diferentes subdivisiones ha de entenderse, en lo disciplinario, sin perjuicio de la disciplina particular de cada pais, y legislacion concordada, muy señaladamente en España, con *la delegacion general* del Papa á los nuncios, y el establecimiento del Tribunal de la Rota. Véanse, pues, en cuanto á todo el artículo, APELACION, FUERO ECLESIASTICO, JUICIO ECLESIASTICO, JURISDICCION, NUNCIO, ROTA.

CAUSANTE: CAUSA-DANTE: CAUSA-HABIENTE. Véase CAUSA (*por motivo*): CAUSA (*por razon*): CAUSA ONEROSA.

CAUSAR INSTANCIA. Véase INSTANCIA.

CAUSIDICO. Véase ABOGADO.

CAUTELA. Precaucion, prevision, caucion. La inseguridad de las cosas de la vida: lo voluble de la voluntad, cuando es combatida, sobre todo por un interés cierto, ó por el estímulo de la pasion: lo limitado del

(1) Sesto de las Decretales, tit. 7, lib. 5 *De privilegiis*, capítulo 1.°

humano alcance, que tal vez cree cierto, seguro, útil, lo que luego por circunstancias no previstas suele resultar incierto ó pernicioso: las adversidades de la vida, los desengaños, en fin, hacen al hombre *cauto*, ó *precavido*, ya que no *desconfiado* ó *cauteloso*. Entonces adopta medidas de seguridad, ó de éxito seguro, ó que reputa seguro contra lo eventual: y entonces lógica y filosóficamente llamaremos *cautela* al juicio ó resolucion en virtud del que adoptamos precauciones; y tambien á las precauciones tomadas, ora legales, ora morales. Asi es usual en el foro la locucion latina *ad cautelam*; que en tal caso quiere decir *precaucion, caucion, garantía por lo que pueda suceder; por si acaso* faltare lo existente, ó aparente: *precautoriamente*. Asi se dice informacion de testigos por ejemplo, *ad perpetuam rei memoriam*, ó *ad cautelam* la que se pide antes que perezcan ó desaparezcan, ó de otro modo sea imposible que presten su declaracion los testigos que estén para embarcarse, para marchar á la guerra ú otra espedicion peligrosa. Véase CAUCION, FIANZA, GARANTIA.

CAUTIVO. El que es privado de su libertad natural. Pero siendo el cautiverio un caso particular de la privacion de libertad contra el derecho natural y de gentes, y queriendo nosotros tratar esta cuestion con amplitud y segun la gravedad del asunto lo requiere, véase ESCLAVITUD, LIBERTAD, PRISIONERO, RAPTO.

CAZA Y PESCA. Estas palabras tienen diferentes significaciones. Se toman generalmente por el derecho de cazar y pescar; se aplican otras veces á las clases de animales que constituyen la caza y pesca, ó que pueden ser objeto del ejercicio de este derecho, cuando todavia están en su natural libertad; se aplican tambien á estos mismos animales cuando han sido ya aprehendidos por el hombre y constituyen su propiedad; y por último, designan el uso que se hace de los medios reconocidos y autorizados para apoderarse de los animales salvajes. Todas estas significaciones se enlazan naturalmente; de manera que, aun cuando el asunto principal de este artículo versa sobre el derecho de cazar y pescar, y sobre los límites y estension de su ejercicio, se hablará tambien de la caza y pesca en las demas significaciones espresadas.

Hemos unido las dos palabras por la conveniencia de tratar á un tiempo las materias á que se refieren, y siguiendo la costumbre observada por los legisladores y tratadistas del derecho civil. La mayor parte de los principios y de las doctrinas referentes á la caza son aplicables á la pesca, y hasta en su orígen y desarrollo hay algo de comun que las enlaza é inclina á tratarlas bajo un solo contesto. Esto no obstante, hemos adoptado el método conveniente para esponer las disposiciones relativas á la caza, con cierta separacion de las que tienen por objeto reglamentar la pesca, consignando antes los principios comunes aplicables á una y á otra, en la forma que manifiesta el siguiente sumario.

PARTE LEGISLATIVA.

SUMARIO.

Novísima Recopilacion.
Disposiciones posteriores.
Código penal.
Legislacion estranjera.

NOVISIMA RECOPILACION.

LEY 1, TÍT. 30, LIB. 7.

D. Alonso en las Córtes de Alcalá, año 1348.

Prohibe bajo ciertas penas armar cepos grandes en los montes con hierros, por el peligro que pudieran correr los hombres y los caballos.

LEY 7, ID. ID.

D. Juan II, cort. de Mad., pet. 45 en 1435.

Que las justicias formen ordenanzas declarando el tiempo en que se verifica la cria de la caza que se habia de prohibir, y que no se proceda á las penas de las leyes, que pro-

hiben la caza y pesca, pasados los tres meses despues que hubiere sucedido el caso.

LEY 8, ID. ID.

D. Juan II, cort. de Mad., pet. 45 en 1435.

Prohibe bajo ciertas penas echar en los rios cebos de cal viva, veneno, beleños, torvisco, guardalobo ni otra cosa ponzoñosa para matar ó amortiguar el pescado.

LEY 4, ID. ID.

D. Cárlos y Doña Juana en las Córtes de Valladolid, pet. 28, de 1527.

Prohibe y castiga el cazar con arcabúz y escopeta, con todo tiro de pólvora, y con yerba de ballestero, y que nadie pueda hacer ó tener en su casa esta yerba.

LEY 1, TÍT. 31, ID.

Los mismos en las Córtes de Valladolid, pet. 7, 1542.

Permite que las justicias puedan dar órdenes para que se maten los lobos, aunque sea con yerba, y puedan señalar el premio por cada cabeza ó por cada cama de ellos que les trajeren.

LEY 3, ID. ID.

D. Cárlos I y el príncipe D. Felipe por pragm. de 1552.

Prohibe que en los palomares haya trampas y armadijos, y reproduce una ley de don Enrique IV, año de 1465, en que se prohibe tirar á las palomas con ballesta, arco, piedra y de cualquier otra manera, ni armarles redes, ni lazos, una legua en derredor de donde hubiese palomar ó palomares.

LEY 2, TÍT. 30, ID.

Los mismos en Madrid, por pragm. de 1552.

Prohibe, bajo ciertas penas, cazar con lazos de alambre, ni con cerdas, ni con redes, ni con otro género de instrumento, ni con reclamos, ni bueyes, ni con perros nocharniegos, y manda que no se puedan tener perdigones para cazar, y que no los tengan en las casas.

LEY 9, ID. ID.

Los mismos en Madrid por pragm. de 1552.

Que no se pesque con paños de jerga, ni lienzos, ni sábanas, ni cestos, ni con júrdias; que no se hagan paradas ni corrales; que no saquen los rios comunes de madre para dejarlos en seco y tomar la pesca; que no se pesque en tiempo de cria, ni cuando desovare el pescado, y que cada consejo tenga ordenanzas en que se fije el marco que han de tener las redes, segun la cualidad del pescado, y el tiempo de la cria de la pesca y aquel en que desova, remitiendo estas ordenanzas al Consejo real.

LEY 3, ID. ID.

Los mismos, id. id.

Dispone que no se pueda usar ningun género de caza en tiempo de cria, ó sea en los meses de marzo, abril y mayo; y que en tiempo de fortuna y nieve no se cace liebre, ni perdiz, ni otra caza alguna, con ningun género ni instrumento de caza.

LEY 5, ID. ID.

D. Felipe III en Madrid, 1617.

Dispone que se pueda tirar á la caza con arcabúz ó escopeta, ó con otro tiro de pólvora, ó con balas ó perdigones de plomo, y al vuelo, con tal que no sea en tiempo vedado; y que las justicias no se entrometan á impedirlo á pesar de lo dispuesto en leyes anteriores. Precede un largo y razonado preámbulo, en que se esplican las varias razones que exigian esta novedad, y concluye la ley reiterando la prohibicion de cazar con todo género de lazos y armadijos, con perdigones y reclamos, y demas instrumentos bajo las mas severas penas.

LEY 6, ID. ID.

D. Felipe IV en Madrid, 1622.

Dispone, que la pragmática de 17 de noviembre de 1617, por la cual se permitió tirar con perdigones, no se entienda en la corte y veinte leguas en contorno, pues dentro de ellas no podrá tirarse con perdigones de plomo ni de otra cosa; pero se podrá tirar en la corte y dentro de las veinte leguas con bala rasa sin incurrir en pena alguna.

LEY 4, TÍT. 31, ID.

D. Cárlos III por res. á cons. en 1768.

Dispone que hallándose las palomas en los dos meses de octubre y noviembre y en los tres de junio, julio y agosto, fuera de los palomares, se les podrá tirar á cualquier distancia por los yecinos y forasteros, con tal que siendo dentro de la distancia del tiro no se pueda hacer si no á espalda vuelta á los palomares; que en los demas meses y temporadas del año no se pueda tirar á las palomas á las inmediaciones de los palomares, ni á la distancia de una legua á sus alrededores; y por último, que se observen estas disposiciones á pesar de lo establecido en otras leyes, pragmáticas y ordenanzas particulares de los pueblos.

LEY 14, ID. ID.

El mismo en céd. de 1788.

Encarga á los corregidores que hagan observar las ordenanzas de pesca, imponiendo á los contraventores las penas señaladas, procurando tambien la conservacion de las pesquerías.

LEY 1, TÍT. 7, LIB. 6.

D. Cárlos IV por real decreto inserto en cédula de 8 de marzo de 1793.

Teniendo el rey presente la decadencia á que habia llegado la marinería, y deseando atajar tan graves inconvenientes con la oportunidad que se requeria, se mandó que se observe en toda su fuerza y vigor el art. 119 del tít. 3, trat. 10 de las ordenanzas generales de la armada, que reiterando lo prevenido en el tít. 6 del trat. 4, concede el privilegio esclusivo de la pesca y navegacion en la estension del agua salada á los individuos matriculados.

LEY 2, TÍT. 31, LIB. 7.

El mismo por res. á cons. en 1794.

Que las justicias paguen en adelante premio doble á las personas que presentaren lobos y demas animales nocivos, siendo aquel por cada lobo ocho ducados, diez y seis por cada loba, veinte y cuatro si fuere cogida con camada y cuatro por cada lobezno, veinte por cada zorra ó zorro y ocho por cada uno de los hijuelos.

LEY 16, TÍT. 30, ID.

El mismo en 1795.

Esta ley, dirigida principalmente á facilitar la libre navegacion del rio Nalon en Asturias, consigna respecto de la pesca las siguientes disposiciones: Que el derecho de la pesca en los rios es de suyo libre y general, y que por lo mismo la facultad privativa de pescar en algun sitio determinado no puede derivarse si no de privilegio real, ó de una posesion inmemorial que le suponga; que este derecho privativo nunca supone la facultad de estorbar la libre navegacion de los rios, ni el derecho de pescar que otros tienen fuera del lugar determinado por el privilegio, y que por consecuencia no pueden ponerse estacadas, ni usarse otros medios que impidan la subida de la pesca y pongan obstáculos al ejercicio de dicho derecho.

LEY 17, ID. ID.

El mismo en Madrid, R. Ordenan. de las matrículas de mar de 1802, arts. 7, 10, 11 y 12, tít. 5.

Dispone: Que no puedan establecerse impuestos sobre el producto de la pesca sin

espresa órden del generalísimo de la armada, pues no solo deben gozar los matriculados de mar el privilegio de la pesca, si no tambien su tráfico con toda libertad: que á ninguno que no fuere matriculado le sea permitida la pesca: que la pesca de peces y del coral, en todas las costas, puertos y rios, sea permitida, libre y franca á todos los vasallos alistados en la matrícula de mar, para los que está reservada la facultad de pescar; y en fin, que cuando en materia de pesca dispensase el rey algunas gracias á sugetos particulares, deberán celar los comandantes de las provincias que se proceda en su ejecucion sin fraude ni mala fé.

LEY 11, TÍT. 7, LIB. 6.

El mismo, en dicha ordenan. de matrículas 1802, art. 22, tit. 6.

Del conocimiento privativo del juzgado de marina, ha de ser el de todo lo relativo á la pesca, ya sea hecha en la mar, como en sus orillas, puertos, rias, abras y generalmente en todas partes donde bañe el agua salada, y tenga comunicacion con la del mar; siendo de la particular inspeccion del mismo juzgado, la práctica y observancia de las reglas establecidas para gobierno de este ramo en los reglamentos y órdenes particulares que se mandaren espedir, asi como la concesion de licencias y la imposicion de castigos en que incurran los contraventores.

LEY 11, TÍT. 30, LIB. 7.

El mismo por resol. á cons. del consejo y cédula de 1804.

Contiene esta ley la nueva ordenanza general sobre el modo de cazar y pescar en estos reinos.

Por el art. 1.° se prohibe cazar en las provincias de puertos acá, desde el 1.° de marzo, hasta el 1.° de agosto de cada año, y de puertos al mar Océano desde 1.° de marzo hasta 1.° de setiembre, esceptuando los conejos en los sitios vedados de todo el reino, en que podrán cazar sus dueños y arrendadores desde el dia de la Natividad de S. Juan Bautista, hasta 1.° de marzo, segun el artículo 2.

Arts. 3 y 4. Prohiben absolutamente el uso de la escopeta en caza, durante el tiempo de la veda; en el resto del año solo podrán cazar con escopeta y perros los nobles, eclesiásticos y las personas honradas de los pueblos; mas no los jornaleros y artesanos que solo podrán hacerlo por diversion los dias de fiesta.

Por el art. 5 se prohibe el uso de los galgos desde 1.° de marzo, hasta el dia en que se concluye la veda general, y en las viñas hasta que el fruto se haya cogido, no pudiendo usarlos en diez leguas al contorno de la corte y sitios reales, si no los hacendados ó personas de distincion ó los que obtuviesen licencia del Consejo en sala de justicia, conforme al art. 6.

Los arts. 7 y 8 permiten los cazadores de oficio con licencia del gobernador del Consejo, y prohiben la conservacion de los hurones, previniendo que cuantos los necesitasen para la saca de conejos en sitios vedados, deberán obtener licencia del Consejo en sala de justicia.

El 9 y 10 prohiben absolutamente que puedan tenerse perdices y perdigones de reclamo, lazos y demas instrumentos que destruyen la caza, y que se pueda tirar á las palomas dentro de una legua de distancia de los palomares, y poner añagazas, ni otros armadijos, á escepcion de los tiempos de sementera y recoleccion de frutos.

Finalmente, los arts. 11 y 12 prohiben las batidas y monterías de lobos, zorros, osos y otras fieras perjudiciales, asi como las cacerías generales que solian hacerse una ó mas veces al año para aplicar su producto á objetos piadosos, concluyendo los arts. 13 y 14 con mandar que los pastores no usen municion menuda, trayendo solo postas ó balas, y que los mismos y sus zagales, criados, segadores y otras personas, se abstengan de buscar los nidos de las perdices, bajo ciertas penas.

En cuanto á la pesca, el art. 15 la prohibe en aguas dulces desde 1.° de marzo hasta fin de julio de cada año, con instrumento que no

sea caña, y los dueños particulares solo podrán pescar desde el 24 de junio.

El 16 prohibe la pesca de las truchas en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero.

El 17 dispone que en los tiempos permitidos solo se podrá usar del anzuelo, nasas y redes, teniendo cada malla la cabida que fija, prohibiendo en todo tiempo todo instrumento y medio ilícito, como cal viva, beleño, coca, etc.

Contiene ademas esta ordenanza algunas providencias generales, como la del art. 19 en que se detallan las penas contra los trasgresores de aquella; la del 21, en que se encarga á las justicias de los pueblos el procedimiento breve é instructivo de todos los negocios é incidencias de caza y pesca, sin escepcion de personas, estados, ni clases, con as prevenciones especiales que contiene el 22, para el caso en que los contraventores fuesen eclesiásticos seculares ó regulares; la del 24, en que se declara que para justificar la trasgresion de esta ordenanza baste la declaracion del guarda, ministro ó alguacil jurado con la aprehension de la escopeta ó perro, y en su defecto de cualquier otro adminículo; la del 25, en que se encarga á los corregidores que se dediquen á providenciar cuanto consideren oportuno al exacto cumplimiento, celando que las justicias lleven á debido efecto lo resuelto; la del 26, que ordena la publicacion de la ordenanza en los pueblos en uno de los primeros ocho dias de febrero de cada año, para su observancia en lo correspondiente á la veda general de caza y pesca; y finalmente, la derogacion que se contiene en la última parte de este artículo de las anteriores ordenanzas, cédulas, disposiciones, acuerdos y providencias del Consejo.

DISPOSICIONES POSTERIORES.

REAL DECRETO DE 20 DE FEBRERO DE 1817.

Se resuelve y manda, queden abolidos para siempre todos los privilegios esclusivos, relativos á la pesca, concedidos á particulares ó corporaciones de cualquier clase que sean; y se declara la facultad de emplearse en ella á todos los vasallos de estos reinos, con la condicion de alistarse en las matrículas de mar. Tambien se manda que los poseedores de los privilegios abolidos sean indemnizados segun corresponda y en la forma que se dispondrá.

REAL DECRETO DE 3 DE MAYO DE 1834.

TITULO PRIMERO.

De la caza en tierras de propiedad particular.

1.° Los dueños particulares de las tierras lo son tambien de cazar en ellas libremente en cualquier tiempo del año, sin traba ni sujecion á regla alguna.

2.° En los mismos términos, y con la misma amplitud podrán cazar en las tierras de particulares los que no sean sus dueños, con licencia de estos por escrito.

3.° Cuando el dueño de las tierras dé licencia para cazar en ellas, y la licencia para hacerlo con la espresada amplitud no conste por escrito, el cazador estará sujeto á las restricciones de ordenanza que se espresarán en adelante para los baldíos.

4.° Se podrá cazar sin licencia de los dueños, pero con sujecion á las indicadas restricciones de ordenanza, en las tierras abiertas de propiedad particular que no estén labradas, ó que estén de rastrojo.

5.° Los arrendatarios de tierras de propiedad particular tendrán en órden á la caza las facultades que estipulen con los dueños.

6.° No se podrá cazar en tierras ajenas de propiedad particular, si no en los casos y en los términos espresados en los cuatro artículos precedentes.

7.° La caza que cayere del aire en tierra de propiedad ó entrase en ella despues de herida, pertenece al dueño ó arrendatario de la tierra, y no al cazador conforme á lo dispuesto en la ley 17, tít. 28, Part. 3.

8.° Los que con el objeto de cazar violasen y saltasen los cercados de tierra de propiedad particular, pagarán ademas de los

daños que causaren, incluso el valor de la caza que matasen ó cogiesen, que debe ser para el dueño, ó arrendatario en su caso, las costas del procedimiento si lo hay, y ademas 20 rs. vn. por la primera vez, 30 por la segunda y 40 por la tercera.

TITULO II.

De la caza en tierras de propios y baldíos.

9.° En las tierras que no sean de propiedad particular se prohibe cazar, por lo tocante á las provincias de Alava, Avila, Burgos, Coruña, Guipúzcoa, Huesca, Leon, Logroño, Lugo, Navarra, Orense, Oviedo, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Santander, Segovia, Soria, Valladolid, Vizcaya y Zamora desde 1.° de abril hasta 1.° de setiembre. Y en lo demas del reino, inclusas las islas Baleares y Canarias, desde 1.° de marzo hasta 1.° de agosto.

10. Se prohibe asimismo cazar durante todo el año en los dias de nieve y los llamados de fortuna, á escepcion del caso que se espresará en el tít. 4.°

11. Se prohibe cazar en todo tiempo con hurones, lazos, perchas, redes y reclamos machos. De esta regla general se esceptúan las codornices y demas aves de paso, respecto de las cuales se permite cazarlas durante el tiempo de su tránsito, aunque sea con redes y reclamos.

12. Los ayuntamientos podrán arrendar, con aprobacion del subdelegado de la provincia, la caza en las tierras de propios de los pueblos; y los arrendatarios podrán dar licencia á los demas para que cacen; pero unos y otros lo harán con sujecion á las restricciones que se espresan en este título.

13. Los que cacen en tierras de propios arrendadas sin tener licencia del arrendatario, ó faltando á las restricciones de la ordenanza, pagarán en uno y otro caso al arrendatario el valor de la caza que mataren ó cogieren, y ademas 20 reales la primera vez, 30 la segunda y 40 la tercera. La mitad de esta multa será para el arrendatario, y la mitad para el fondo destinado al esterminio de animales dañinos de que se hablará en el título 4.°

14. En los montes y baldíos que no pertenezcan á propios, podrán cazar los vecinos del pueblo respectivo, con sujecion á las reglas y restricciones establecidas en este título. Las justicias podrán dar licencia para lo mismo á los forasteros.

15. Se permite cazar con sujecion á las restricciones contenidas en este decreto, en los montes, baldíos y tierras de propios, que no estén arrendadas, á los que obtengan licencia del subdelegado de la provincia.

16. Estas licencias se concederán por escrito, prévio el informe de la justicia ú otro que se estime conveniente. Los vecinos pagarán por la licencia anual para cazar en el término jurisdicional de sus pueblos respectivos, 10 rs.; el doble los que la obtengan para cazar en toda la provincia; y el cuádruplo los cazadores de profesion, los cuales se entenderá que la tienen para toda la provincia.

17. Los productos de esta tarifa quedan afectos especialmente al pago de las recompensas por la estincion de animales dañinos, de que se hablará en el tít. 4.°

18. No se permite por règla general cazar hasta la distancia de 500 varas, contadas desde las últimas casas de los pueblos, para evitar los peligros de personas y de incendios.

TITULO III.

De la caza de palomas.

19. Las palomas campesinas están comprendidas en las demas aves que pueden cazarse con sujecion á las reglas prescritas.

20. No podrá tirarse á las palomas domésticas ajenas, sinó á la distancia de mil varas de sus palomares. Los infractores pagarán al dueño el valor de la caza, y ademas pagarán á la justicia 20 reales por la primera vez, 30 por la segunda y 40 por la tercera, siendo la mitad de esta multa para el dueño, y la otra mitad para el fondo que se dirá en el título 4.°

21. Los dueños de palomares tendrán obligacion de tenerlos cerrados durante los

meses de octubre y noviembre, para evitar el daño que puedan ocasionar las palomas en la sementera. Los infractores ademas del daño, si lo hubiere, pagarán 100 reales de multa por la primera vez, 150 por la segunda y 200 por la tercera.

22. La misma obligacion, y bajo las mismas penas, tendrán los dueños de palomares durante la recoleccion de las mieses desde 15 de junio hasta 15 de agosto.

23. Si por razon de la diferencia de los climas conviniese señalar plazos diversos de los fijados anteriormente para el cerramiento de los palomares en las dos épocas espresadas, ó en alguna de ellas, podrá hacerlo la justicia del pueblo, siempre que el plazo respectivo no esceda de dos meses, avisándolo con anticipacion para gobierno de los dueños de palomares.

24. Durante las dos épocas espresadas de recoleccion y de sementera, será libre tirar á las palomas domésticas á cualquier distancia fuera del pueblo, aunque sea dentro de las mil varas señaladas arriba, siempre que en este último caso se tire con las espaldas vueltas al palomar.

TITULO IV.

De la caza de animales dañinos.

25. Será libre la caza de animales dañinos, á saber: lobos, zorras, garduñas, gatos monteses, tejones y turones en las tierras abiertas de propios, en las baldías y en las rastrojeras no cerradas de propiedad particular, durante todo el año, inclusos los dias de nieve y los llamados de fortuna.

26. No se permite en ninguna clase de tierras abiertas, aunque estén amojonadas, cazar con cepos, trampas, ni ningunos otros armadijos de que pueda resultar perjuicio á los pasajeros ó á los animales domésticos. Los infractores pagarán ademas del daño y las costas, 40 reales de multa por la primera vez, 60 por la segunda y 80 por la tercera.

27. En las tierras cercadas, sean de propios ó de particulares, no se permite la caza de animales dañinos sin licencia de los dueños ó arrendatarios.

28. Los dueños y arrendatarios de tierras cercadas, y no otros, podrán poner en ellas cepos ú otras cualesquier especies de trampas y armadijos, para cojer ó matar animales dañinos. En cuyo caso estarán obligados á poner y mantener en paraje visible un padron con el aviso para que nadie pueda alegar ignorancia.

29. Para fomentar el esterminio de los animales dañinos se pagarán á las personas que los presenten muertos, por cada lobo 40 reales, 60 por cada loba, y 80 si está preñada, y 20 reales por cada lobezno; la mitad respectivamente por cada zorro, zorra ó zorrillo; y la cuarta parte tambien respectivamente por las garduñas y demas animales menores arriba espresados, tanto machos como hembras y sus crias.

30. Los que tengan derecho á las precedentes recompensas presentarán á la justicia el animal ó animales muertos, y la justicia les entregará la cantidad correspondiente bajo recibo.

31. Estos recibos, junto con las colas y orejas de los lobos y zorras, y las pieles de las garduñas y demas animales arriba espresados, serán los documentos que han de presentar las justicias en la capital de provincia para justificar en sus cuentas los artículos de esta clase, que no se les abonarán sin ambos requisitos.

32. Para el pago de las espresadas recompensas en los pueblos, queda asignada la mitad de las penas pecuniarias impuestas á los infractores de todas las disposiciones contenidas en los artículos anteriores, inclusas las relativas á palomares, como asimismo la mitad de las que se espresan en los siguientes títulos sobre la pesca.

33. Si el importe de la mitad de dichas penas no alcanzare á cubrir el de las recompensas, los cazadores podrán reclamarlas en la oficina general de propios de la provincia, presentando certificacion de la justicia junto con los despojos ó pieles de los animales.

34. Si de la mitad de las penas sobrase para pagar las recompensas, el resto se

agregará á la masa de arbitrios comunales del pueblo.

35. Se prohiben las batidas comunales de los pueblos bajo ningun pretesto, incluso el del esterminio de animales dañinos, dejando este cuidado al interés particular de los cazadores.

TITULO V.

De la pesca.

36. Los dueños particulares de estanques, lagunas ó charcas que se hallen en tierras cercadas, están autorizados, en virtud del derecho de propiedad, para pescar en ellos durante todo el año sin sujecion á regla alguna. Se entienden por tierras cercadas en este título y en todos los demas del presente decreto, las que lo estén enteramente, y no á medias ó aportilladas; de suerte que no puedan entrar en ellas las caballerías.

37. Los dueños podrán, en virtud del mismo derecho de propiedad, comunicar estas facultades á sus arrendatarios en los términos que entre ellos se estipule.

38. Se prohibe á los dueños particulares y arrendatarios de estanques y lagunas, que se hallen en tierras abiertas, aunque estén amojonadas, pescar en ellas envenenando ó inficionando de cualquier modo el agua, de suerte que pueda perjudicar á las personas ó á los animales domésticos transeuntes que la bebieren.

39. Si las lagunas y aguas estancadas lindasen con tierras de varios dueños particulares, podrá cada cual pescar desde su orilla con sujecion á las reglas generales establecidas; pero poniéndose los dueños de comun acuerdo podrán pescar con arreglo á los tres artículos precedentes, como si fuera uno solo el dueño.

40. En las aguas corrientes á que sirven de linde tierras de propiedad particular, podrán los dueños de estas pescar desde la orilla hasta la mitad de la corriente, con sujecion á las restricciones de ordenanza. Y nadie podrá hacerlo sin su licencia.

41. En las aguas corrientes, cuyas riberas pertenezcan á propios, podrán los ayuntamientos arrendar la pesca con la aprobacion del subdelegado de la provincia, y los arrendatarios podrán dar á otros licencia para pescar; pero todos estarán sujetos á las restricciones espresadas.

42. En las aguas corrientes, cuyas orillas pertenezcan á baldíos, ó á propios, en el caso de no estar arrendada la pesca, se declara esta libre hasta la mitad de la corriente para todos los vecinos del pueblo á cuyo término pertenezcan las orillas, y no á los de otros pueblos, aunque tengan comunidad de pastos. Las justicias podrán dar licencia para pescar á los forasteros; pero tanto estos, como los vecinos, estarán sujetos á las restricciones designadas.

43. En los rios y canales navegables se ha de entender que las facultades de los dueños y arrendadores, espresadas en los tres artículos precedentes, han de ser sin perjuicio de la navegacion ni de las servidumbres, á que con motivo y á beneficio de ellas, están sujetas las tierras riberiegas.

44. En los canales de navegacion y de riego, como asimismo en los caces y acequias para molinos ú otros establecimientos industriales ó de placer, se observarán las mismas reglas establecidas anteriormente, segun la calidad de las orillas, á no ser que haya costumbre ó contrato en contrario.

TITULO VI.

De las restricciones de la pesca.

45. Se prohibe pescar envenenando ó inficionando las aguas en ningun caso, fuera de el de ser estancadas y estar enclavadas en tierras cercadas de propiedad particular. Los infractores, ademas de los daños y costas, pagarán 40 rs. por la primera vez, 60 por la segunda y 80 por la tercera.

46. Se prohibe asimismo pescar con redes ó nasas, cuyas mallas tengan menos de una pulgada castellana ó el duodécimo de un pié en cuadro, fuera de los estanques ó lagunas que sean de un solo dueño particular, el cual podrá hacerlo de cualquier modo.

47. Desde el 1.° de marzo hasta último de julio se prohibe pescar, no siendo con la caña ó anzuelo, lo cual se permite en cualquier tiempo del año.

TITULO VII.

De la ejecucion de este reglamento.

48. El modo de proceder de las justicias en materias de caza y pesca, será por regla general gubernativo.

49. Los procedimientos tendrán lugar: 1.° por queja de parte agraviada: 2.° de oficio: 3.° por denuncia de guarda jurado ó de cualquier individuo del ayuntamiento: 4.° por denuncia de cualquier vecino, siendo caso de aguas inficionadas ó de cepos armados fuera de cercado.

50. El alcalde hará comparecer al presunto infractor, y comprobado el hecho, exigirá de él la multa, el valor de la caza y del daño, cuando lo haya, dando á estas cantidades el destino que se ha prescrito en el presente decreto.

51. Cuando se proceda por queja de parte agraviada, si resulta ser cierto el hecho y hubiere daño, el alcalde procurará que los interesados transijan en cuanto al daño, sin perjuicio de cobrar la multa, y si no se avinieren, decidirá gubernativamente en las causas de menor cuantía, dejando que las otras sigan el curso judicial que les corresponda; pero satisfaciendo antes el reo la mitad de la multa destinada al fondo del artículo 31 para la persecucion de animales dañinos.

52. Las infracciones de que se trata en este decreto prescribirán á los 30 dias en los casos de aguas maleficiadas ó de cepos y armadijos fuera de cercado, y en todos los demas á 20 dias. Pasados estos plazos, las justicias no podrán proceder de oficio, ni admitirán queja ni denuncia alguna.

TITULO VIII.

De las penas de los infractores.

53. La pena general por las infracciones de este reglamento, cuando en él no se espresa otra, será ademas del daño y costas, si las hubiere, 20 rs. por la primera vez, 30 por la segunda y 40 por la tercera. Si todavia se repitiese el delito, la justicia consultará al subdelegado de Fomento de la provincia sobre la pena que convenga.

54. Los padres y los tutores son responsables de las infracciones cometidas por sus hijos de menor edad y por los pupilos.

55. Quedan derogadas todas las ordenanzas y reglamentos anteriores en cuanto se opongan al presente decreto.

DECRETO DE LAS CÓRTES GENERALES Y ESTRAORDINARIAS DE 14 DE ENERO DE 1812, RESTABLECIDO EN 23 DE NOVIEMBRE DE 1836.

Art. 3.° Declara cerrados y acotados los terrenos destinados á plantío cuyo suelo y arbolado sean de dominio particular, dejando libre el paso..... como tambien el disfrute de caza y pesca.

DECRETO DE LAS CÓRTES DE 6 DE AGOSTO DE 1811, RESTABLECIDO EN 2 DE FEBRERO DE 1837.

Art. 7.° Quedan abolidos los privilegios llamados esclusivos, privativos y prohibitivos que tengan el mismo orígen de señorío; como son los de caza, pesca..... quedando al libre uso de los pueblos, con arreglo al derecho comun y á las reglas municipales establecidas en cada pueblo, sin que por esto los dueños se entiendan privados... de los aprovechamientos comunes... á que, como particulares, puedan tener derecho en razon de vecindad.

Art. 8.° Los que obtengan las prerogativas indicadas en los antecedentes artículos, por título oneroso, serán reintegrados del capital que resulte de los títulos de adquisicion: y los que los posean por recompensa de grandes servicios reconocidos, serán indemnizados de otro modo.

DECRETO DE LAS CÓRTES GENERALES, SANCIONADO POR S. M. EN 13 DE SETIEMBRE DE 1837.

Artículo único. El disfrute de caza y pesca en los montes y terrenos de que trata el

artículo 3.° del decreto de 14 de enero de 1812, sobre abolicion de las ordenanzas de montes y plantíos, ó en otros que estuvieren cerrados ó acotados, corresponde privativamente á los dueños, y nadie podrá cazar ni pescar en ellos sin su prévio permiso ó de quien sus veces hiciere.

CODIGO PENAL.

Art. 484. Serán castigados con las penas de arresto de 5 á 15 dias y multa de 5 á 15 duros:

7.° Los que con violencia entraren á cazar ó pescar en lugar cercado ó vedado.

Art. 495. Incurrirá en la multa de medio duro á cuatro:

25. El que entrare sin violencia á cazar ó pescar en sitio vedado ó cerrado.

26. El que infringiere las ordenanzas de caza ó pesca en el modo ó tiempo de ejecutar una ú otra.

LEGISLACION ESTRANJERA.

El derecho romano consideraba la caza y pesca como uno de los medios originarios de adquirir la propiedad, y derivados por consiguiente del derecho natural. Recayendo el ejercicio de aquel derecho sobre los animales que viven en su natural libertad, el que cazaba ó pescaba se hacia dueño de ellos como primer adquirente y por el derecho de ocupacion. Tenian, pues, lugar respecto de la caza y pesca todos los principios relativos á este género de adquisicion, y todas las aplicaciones que de ellos hacian las leyes en sus respectivos casos.

Indudablemente el derecho de cazar y pescar correspondia al dueño del fundo, porque la ley le autorizaba para resistir que cualquiera entrare en su propiedad con aquel objeto. *Planè qui alienum fundum ingreditur venandi aut aucupandi gratia, potest á domino, si is prævideret, prohiberi ne ingrediatur* (1). Sin embargo, no por eso el dueño del fundo lo era de los animales existentes en él, porque no podia adquirir su dominio si no en virtud de la ocupacion. Asi el cazador, que contra la prohibicion del dueño entraba en la propiedad agena, si por una parte cometia una contravencion contra la cual concedia la ley á este la accion de injurias, por otra se hacia dueño de la caza que cogia, porque la prohibicion del dueño, como decian los jurisconsultos romanos, ni podia mudar la condicion de los animales, ni hacer que los aprehendidos fuesen del primero, puesto que en semejante caso no le habrian concedido la simple accion de injurias, si no la *reivindicacion* ó la *condicion furtiva*.

No conocia, pues, el derecho de caza y pesca restricciones entre los romanos, y puede decirse que su ejercicio no tenia otros límites que los establecidos por el derecho natural. Permitíase á todos, como respecto de la pesca en lugares públicos lo declaró el emperador Justiniano: *Ideoque jus piscandi omnibus commune est in portu, fluminibusque.* La pesca en el mar era tambien de uso comun, y si se impedia á alguno ejercerla, podia valerse de la accion de injurias, como si se le impidiese el uso de cosa propia. *Si quis me prohibeat in mari piscari..... an injuriarum judicio possim eum convenire? Et plerique putant esse huic similem eum qui in públicum lavare, vel in cavea pública sedere, vel in quo alio loco agere, sedere, conversari non patiatur; aut si quis re mea uti me non permittat* (Dig. L. 13 de Injur.). Aquel á quien se impedia el ejercicio de la caza ó de la pesca en algun lugar público, podia querellarse por la ya citada accion de injurias. El cazador, como se ha indicado, era dueño de la caza por el mero hecho de su aprehension, independientemente de toda otra circunstancia, y retenia el dominio mientras los animales permanecian en su poder.

En Francia, el Código civil establece el principio general de que la facultad de cazar se regula por leyes particulares; y en efecto, despues de la ley de 30 de abril de 1790 que ha regido por mas de cincuenta años, sintiéndose la necesidad de establecer otras disposiciones que reprimieran mas eficaz-

(1) Lib. 2, tit. 1, §. 12. Inst. L. 3, Dig. de acq. rer. dom.

mente los abusos de aquel derecho, se publicó la de 3 de mayo de 1844 que es la vigente en la actualidad. Posteriormente se han dictado diferentes instrucciones ó reglamentos administrativos, que forman el complemento de esta ley.

Por ella no se permite la caza si no con licencia de la autoridad administrativa, y durante cierta época del año, esceptuándose únicamente el dueño del fundo que podrá cazar en todo tiempo, y sin permiso cuando la heredad esté unida á alguna casa de habitacion cerrada, con total independencia de las colindantes. La misma autoridad fija el tiempo en que se permite la caza y dá las licencias. Estas pueden ser negadas á ciertas clases de personas que la ley determina, designando otras á quienes no pueden concederse. La misma autoridad, con acuerdo del consejo general, puede ordenar lo que juzgue mas conveniente sobre la caza de las aves de paso, de las acuátiles, sobre la de los animales dañinos, estincion de cierta clase de pájaros y otros puntos análogos.

La ley castiga con la multa de 10 á 100 francos al que caza sin licencia, ó en terreno de otro sin su consentimiento, ó infringiendo algun acuerdo de la autoridad. Con la de 50 á 200 francos al que caza en época prohibida ó de noche; al que vende, compra ó trasporta caza en tiempo tambien prohibido; á los que envenenan ó inficionan la caza, y algunos otros. Estas penas se aumentan en casos y circunstancias particulares. La ley, finalmente, establece la forma de perseguir y proceder en esta clase de delitos, y declara que los padres, tutores y otras personas semejantes, son responsables civilmente de los delitos de caza, cometidos por sus hijos, pupilos, domésticos.

La pesca en el mar está permitida por regla general á todos; pero los infinitos reglamentos dictados en Francia para el ejercicio de este derecho, limitan lo que se llama la *grande peche* á los marinos que con su práctica é inteligencia pueden evitar los peligros á que de suyo está espuesto ese género de industria. Sobre este punto pueden verse las ordenanzas de 8 de febrero de 1816 y de 14 del mismo mes de 1819. La que se denomina *petite peche*, es libre á todos con sujecion á los reglamentos de policía, teniendo lugar en las costas del mar y en los rios que desembocan en el mismo hasta el punto que en cada uno de ellos está determinado por las ordenanzas particulares. Véanse la ley de 15 de abril de 1829 y la ordenanza de 10 de julio de 1835.

La pesca que se hace en los rios caudalosos, ó pequeños canales navegables ó flotables, cuya conservacion está á cargo del Estado, corresponde á este, asi como la que se hace en los sitios pantanosos, conductos y acequias que toman el agua de dichos rios. En todos los demas riachuelos y canales el derecho de pescar corresponde á los ribereños, y se esplota por ellos, cuya conservacion se halla tambien á cargo de aquel temporalmente mediante alguna retribucion. La concesion se verifica, segun la ley de 15 de abril de 1829, en licitacion pública. En todos los demas rios y canales, fuera de los espresados, los propietarios riberiegos tienen cada uno, en la parte que le es correspondiente, el derecho de pescar hasta la mitad de la corriente, sin perjuicio de los derechos que competan á otros por títulos legítimos. Por consiguiente, la pesca en las corrientes de agua que no son navegables, se considera como un accesorio de las propiedades colindantes ó riberiegas, ó como una especie de servidumbre impuesta en beneficio de ellas sobre la corriente misma.

Finalmente, la pesca en los canales, acequias y demas acueductos abiertos en las propiedades particulares, asi como la de los viveros, estanques, charcas, etc., que constituyen propiedades de esa especie, corresponde á los particulares mismos ó propietarios. En el ejercicio de este derecho, como que usan de una cosa que les pertenece esclusivamente, no están sujetos á restriccion alguna, y pueden impedir toda intrusion de cualquier modo que se intente.

En las demas legislaciones modernas de Europa, que han adoptado los principios y las doctrinas de la administracion francesa, rigen, con corta diferencia, las disposiciones

que hemos indicado. Ordenanzas y reglamentos particulares establecen la forma de ejercer el derecho de caza y pesca, regularizándole en sus principales actos y pormenores, y acomodándole á la índole especial, al clima y á las diferentes circunstancias de cada pais. Creemos, sin embargo, deber hacer especial mencion de la Inglaterra, ya por la dificultad que ofrece el caracterizar su legislacion en esta materia, ya por los privilegios que allí se conservan aun en el ejercicio de estos derechos.

Las leyes inglesas determinan la clase de peces, de aves y animales terrestres que se comprenden bajo las denominaciones de caza y pesca. El derecho de cazar y pescar, segun Blacktone, está reservado al príncipe, ó á aquellos de sus vasallos á quienes concede el mismo privilegio, sin perjuicio de que cada particular pueda cojer en la demarcacion de su propiedad los animales que no están comprendidos espresamente en las clases que constituyen la caza (1). El rey se reserva el ejercicio esclusivo de ella en los bosques, concediendo alguna vez cierta estension de terreno á particulares para que puedan cazar en ellos. En cuanto á la caza menor, tambien corresponde al rey, segun el autor citado, *ratione privillegii*, no pudiendo ejercitarla nadie sin la oportuna concesion real, que se hace siempre con la mira de protejer y fomentar la caza. En resúmen, dice Blacktone, el rey por su prerogativa, y los que han recibido del mismo la correspondiente autorizacion de cazar y pescar, son las *únicas* personas que pueden adquirir la propiedad de los animales *feræ naturæ*, la cual no siendo absoluta y permanente, ni subsistiendo si no mientras los animales se hallan dentro de los límites del terreno, objeto del privilegio, cesa desde el momento en que los animales salen sin violencia de tal demarcacion.

En tal concepto se halla establecido por los estatutos, que el que levanta una pieza de caza en su propio terreno, y la persigue hasta matarla en terreno de otro, adquiere su propiedad. Lo mismo que si un estranjero levantá la caza dentro de la demarcacion privilegiada de uno, y la persigue dentro de la demarcacion de otro; la caza continuará perteneciendo al primer propietario por razon de su privilegio. Si uno levanta la caza y la mata en el terreno de otro, la propiedad corresponde á este *ratione soli*, porque ha sido levantada en terreno de su pertenencia. Y finalmente, si despues de levantarla la mata en terreno propio de un tercero, no pertenece ni al propietario del primer fundo, por que la propiedad es puramente local, es decir, se limita á la demarcacion de este, ni al propietario del segundo terreno, porque no se ha levantado en él, si no al cazador que la ha movido y herido.

A pesar de la seguridad con que el autor citado asienta la doctrina, de que la ley inglesa concede al rey solamente la propiedad esclusiva de la caza, y de que nadie puede ejecutarla sin un privilegio emanado del mismo rey, Mr. Christian la refuta estensa y fundadamente, demostrando que aquella prerogativa no es tan absoluta; que el rey podrá ejercitar el derecho de caza y pesca conjuntamente con el dueño, y que el derecho de establecer bosques de caza, no es tan estenso é ilimitado como supone el comentador de las leyes inglesas. Pueden verse las dos notas últimas al cap. 27, lib. 2, pues no entra en el objeto de esta parte de nuestros artículos dar á la legislacion estranjera mayor estension que la necesaria para conocer los principios fundamentales de ella.

(1) Comentar. á las ley. ing., lib. 2, cap. 26

PARTE DOCTRINAL.

SUMARIO.

Sec. I. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA CAZA Y PESCA.

§. 1.° *Orígen de la caza y pesca, y del derecho de cazar y pescar.*

§. 2.° *Naturaleza del derecho y hechos que constituyen el ejercicio de la caza y pesca.*

§. 3.° *Condiciones á que está sujeto el derecho de cazar y pescar.*

SEC. II. DISPOSICIONES DEL DERECHO ESPAÑOL RELATIVAS Á LA CAZA.
§. 1.° *De la caza en tierras de propiedad particular.*
§. 2.° *De la caza en tierras de propios y baldíos.*
§. 3.° *De la caza de las palomas.*
§. 4.° *De la caza de animales dañinos.*
SEC. III. DISPOSICIONES DEL DERECHO ESPAÑOL RELATIVAS Á LA PESCA MARÍTIMA.
§. 1.° *Nociones históricas.*
§. 2.° *Facultad de ejercer la pesca marítima.*
§. 3.° *Instrumentos ó artes de pescar.*
§. 4.° *Parajes y estaciones en que se prohibe la pesca marítima.*
§. 5.° *Pesqueras especiales.*
SEC. IV. DE LA PESCA EN LOS RIOS, ESTANQUES, LAGOS Y OTROS PUNTOS SEMEJANTES.
SEC. V. DEL PROCEDIMIENTO Y DE LAS PENAS EN MATERIA DE CAZA Y PESCA.
§. 1.° *Del procedimiento.*
§. 2.° *De las penas.*

SECCION I.

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA CAZA Y PESCA.

El número y la relacion que guardan entre sí las secciones, en que hemos creido conveniente dividir este artículo, dan á conocer el órden que nos propusimos observar en la esposicion de la doctrina concerniente á esta materia. Fundada en principios generales del derecho comun y de gentes, y en las ideas generalmente admitidas por las naciones mas adelantadas en la ciencia administrativa, nuestra esposicion doctrinal seria incompleta si se limitase á la de las disposiciones del derecho español, incompleto tambien en esta parte. Hemos creido, pues, indispensable dar mayor estension á nuestro trabajo, abarcando en este artículo uno y otro objeto, y empezando por la esposicion de los principios generales, á fin de que puedan apreciarse despues con mayor exactitud las disposiciones positivas de nuestro derecho.

§. 1.° *Orígen de la caza y pesca, y del derecho de cazar y pescar.*

Para nadie puede ser dudoso que el ejercicio de la caza y pesca debió nacer de los instintos imperiosos de la vida humana, desarrollados por las necesidades físicas, y de la facultad que para satisfacerlas daba al hombre la naturaleza, haciéndole árbitro y dueño de todo lo criado. El instinto del hombre, la superioridad de su sér y la fuerza poderosa de su razon, le daban ya en aquellos tiempos el derecho de apropiarse todos los objetos esteriores, singularmente aquellos que podian contribuir á la satisfaccion de su placer y de su sustento. El hombre, verdadero propietario en aquel estado, informe y primitivo, de cuanto cubria la tierra, debió apelar, y apeló efectivamente, á la aplicacion de los medios mas eficaces, para someter los dones de la Providencia á la satisfaccion de sus gustos y necesidades.

Los animales que poblaban la tierra; las aves que vagaban por el aire, y los peces que moraban en las aguas, debieron llamar su atencion preferentemente para este imperioso objeto. La escritura nos dice, que al principio del mundo, el Criador, infinitamente bueno, dió al hombre la dominacion sobre toda la tierra, y sobre los peces del mar, y sobre las aves del aire, y sobre todos los séres que poblaban la tierra misma. Y sintiendo el hombre dentro de sí ese instinto, determinado por los altos fines de la creacion, claro es que debió propender naturalmente á ejercer su imperio, apoderándose de los animales de la tierra, de las aves y de los peces, usando de ellos segun su capricho ó sus necesidades. Agregábase á esto la necesidad de defenderse de esos mismos animales, que por el instinto de su propia conservacion, comun á los brutos, veian en el hombre un enemigo implacable de su existencia; agregábase la necesidad de apo-

vechar sus pieles y despojos para cubrir sus carnes; y se agregaba, en fin, otra necesidad no menos imperiosa, á saber; la de ejercitar sus fuerzas y de perfeccionar su destreza y actividad en un tiempo, en que toda la superioridad estaba cifrada en la escelencia de estas condiciones.

La primera ocupacion del hombre debió ser, pues, la de la caza y pesca, y este debió ser tambien el único ejercicio de su vida por espacio de mucho tiempo. Todos los escritores, á quienes la civilizacion científica ha debido investigaciones mas ó menos profundas y acertadas, convienen en que los pueblos debieron ser antes cazadores que pastores; y fácilmente se comprende la verdad de esta apreciacion, teniendo en cuenta las observaciones que acabamos de enunciar. Entonces aquel ejercicio era libre y se estendia á todos los individuos y á todos los sitios; no habia reglas, porque no habia restricciones; no existian derechos, porque no existian obligaciones. La voluntad individual y absoluta de cada hombre, la estension de sus necesidades, la fuerza, la actividad y la destreza de cada uno formaban la ley reguladora de esta clase de adquisicion originaria. La caza y pesca constituian un derecho natural y comun, sin otros deberes que los que la naturaleza misma impone á los hombres, y deben observar fielmente en cualquier estado que sea; que los que consideramos y llamamos absolutos, y que obligan á los hombres, aun fuera de las convenciones y establecimientos sociales, y por respeto únicamente á la constitucion originaria del género humano.

Pero á ese estado debió seguir, y siguió efectivamente otro, en que reunidos los hombres bajo el amparo de una autoridad comun y la salvaguardia de reglas tutelares, pudieron asegurar el goce de ciertos derechos, sacrificando parte de aquella sombra de libertad, ruda y estéril, de que creian gozar en el anterior estado. En otros términos; á la comunidad negativa, tan infecunda para producir el adelantamiento y prosperidad de los hombres, quedó sustituida la comunidad positiva, la forma social, y con ella la apropiacion individual, garantida y protegida, primero por las leyes, y despues por las costumbres y la aquiescencia de todos. Entonces la caza y pesca dejaron de ser un derecho natural, y su ejercicio quedó sometido á las reglas ó condiciones que para el disfrute de los demas derechos inspiró á los asociados esta necesidad comun é instintiva. Constituyó una facultad regida por reglas civiles y autorizada por el bien y la conveniencia de la sociedad; constituyó, en suma, *el derecho*, considerado ya desde entonces como uno de los elementos del derecho complejo de propiedad.

No parece difícil, por lo mismo, la solucion de una controversia muy agitada entre los escritores, acerca del orígen del derecho de cazar y pescar. Si el ejercicio de la caza y pesca, como hemos visto, está fundado en el uso de una facultad derivada de la naturaleza y del destino físico que el Criador dió en su sabiduría á los animales con relacion al hombre, el derecho, esto es, esa facultad ordenada y regularizada por prescripciones encaminadas á su perfeccion, no puede hallar su orígen en lo que estrictamente llamamos hoy derecho natural. La idea misma de estas prescripciones, sin las cuales no podria existir semejante derecho, prueba que este no puede ser tan absoluto en su ejercicio, como deberia serlo para que se le considerase emanado de aquel orígen. Y aunque es verdad que no hay derecho alguno, por natural y absoluto que sea, que no pueda recibir limitaciones mas ó menos estensas en su ejercicio, lo es tambien que el derecho de cazar y pescar nace directamente de la propiedad, cuyo derecho complejo está fundado en la existencia de las leyes civiles.

Puffendorf, que examina esta cuestion, sostiene que el derecho de que vamos hablando, depende únicamente de la voluntad del soberano y no de ninguna ley natural; y haciéndose cargo de la doctrina de los jurisconsultos romanos que sostenian lo contrario, añade que esta opinion no tenia ya defensores, y que habia mucho tiempo que los sábios, distinguiendo el derecho natural de *simple permision* del derecho natural *obligatorio*, habian

convenido en la resolucion unánime de esta controversia.

Sin convenir nosotros, como diremos mas adelante, en el concepto de que el derecho de cazar y pescar dependa, en las sociedades constituidas, únicamente de la voluntad del soberano, sostenemos, sin embargo, que las leyes civiles regulan su ejercicio concediéndolo ó negándolo bajo las condiciones que exigen el bien comun; que ellas fijan la estension de las facultades individuales dentro de los límites del interés general; y finalmente, que en la esfera de esas mismas leyes civiles hay que buscar siempre las reglas á que deben subordinarse los hombres en el ejercicio de aquel derecho, segun los principios adoptados por las circunstancias especiales de cada pais.

Y asi, en efecto, ha sucedido siempre, como nos lo demuestra la historia desde el establecimiento de las sociedades, por mas que en la aplicacion de aquellas reglas se hayan adoptado sistemas diferentes y aun opuestos. En los primeros tiempos de las sociedades humanas esas reglas debieron ser sencillas. La ocupacion constituiria el fundamento esencial de cazar y pescar; sin que esta fuese la ocupacion precaria de la comunidad negativa, sujeta á la agresion del mas fuerte, si no la posesion legítima que autorizaba un título civil é irrevocable. Consiguiente á la ocupacion debió ser la facultad de disponer y trasmitir las cosas aprehendidas; facultad sancionada tambien por la ley y protegida por la autoridad pública. Las restricciones de aquel derecho serian muy limitadas: su ejercicio fácil y espedito.

Cambiada con el trascurso del tiempo la faz de las sociedades, alterada la índole de los gobiernos, amenguados los derechos de los pueblos, robustecido y acrecentado el poder de los soberanos, el derecho de caza y pesca sucumbió bajo el peso de las exageraciones, de los abusos y de las invasiones del poder real y de sus leyes. Dejando de ser un derecho comun, de uso permitido bajo condiciones mas ó menos restrictivas, pero siempre favorables á su ejercicio mismo, vino á ser un atributo de la soberanía; una prerogativa real, un derecho feudal que solo podian ejercer los reyes ó los que de ellos obtuviesen semejante concesion. En unos paises se otorgaba en forma de una gracia especial; en otros era un privilegio concedido á los nobles y á otras clases privilegiadas; pero en ninguno podia el propietario, por el hecho de serlo, gozar de una facultad que á espensas solamente de ese grande abuso de la autoridad pública, pudo segregarse de esa condicion á que vá inherente por su propia naturaleza. Digamos, sin embargo, en honor de nuestro pais, que en España, si bien los reyes concedian algunos privilegios esclusivos en esta materia, y señaladamente para la pesca en rios y lagos públicos, jamás el derecho de propiedad llegó á estar tan restringido; y si en alguna ordenanza antigua se hizo alguna concesion á los nobles, á los eclesiásticos y á las personas honradas de los pueblos, que no fuese estensiva á los jornaleros y artesanos, esta esclusion tenia el objeto altamente político de impedir que, entregados á hábitos de ociosidad y de vagancia, descuidasen el trabajo de los talleres y los campos, en grave perjuicio de ellos, de sus familias y de la causa pública.

Como quiera que sea, estas aberraciones y abusos pertenecen ya á la historia. El derecho de caza y pesca no es hoy en ninguna nacion un atributo de la soberanía. Es un derecho civil, regularizado en su ejercicio por las leyes que establecen la forma y el modo de usarle de la manera mas conveniente y provechosa. Ni hay que buscar en la actualidad el órden reglamentario de ese derecho en los principios del derecho natural, ni en el órden de las concesiones privilegiadas que emanaban de las prerogativas especiales de los soberanos. Las leyes mas ó menos restrictivas, segun la mayor ó menor latitud que la administracion de cada pais dá al gobierno, fijan los derechos de los propietarios con relacion á la caza y pesca, los de las corporaciones que son tambien propietarias de determinadas tierras, y el uso comun que pueden hacer los particulares en las que están sometidas al dominio público. Asi el orígen del derecho de que venimos hablando

está en la ley civil, como en ella está la seguridad de su ejercicio, su conservacion y garantía.

§. 2.° *Naturaleza del derecho de cazar y pescar, y hechos que constituyen el ejercicio de la caza y pesca.*

Naturaleza. Demostrado el orígen de este derecho, no será difícil determinar su naturaleza legal en el terreno de los principios, y con arreglo á la aplicacion práctica que de ellos se ha hecho en las naciones mas adelantadas en la ciencia administrativa.

Tuvimos antes ocasion de decir que el ejercicio de la caza y pesca, dejando de ser con la sucesion de los tiempos una facultad natural, y quedando sometido á las condiciones establecidas para el disfrute de los demas derechos en las sociedades civiles, vino á ser considerado como uno de los elementos del derecho complejo de propiedad. En efecto: el derecho de cazar y pescar compete naturalmente al propietario del terreno; solo él puede y debe verificarlo donde el derecho de propiedad conserve la integridad de sus fueros; á ninguna otra persona puede ser lícito usar de semejante facultad sin su consentimiento. Es por consecuencia el derecho de cazar y pescar un accesorio, una parte de la propiedad de las tierras; y son aplicables para su uso los principios generales que la legislacion establece para el régimen del derecho de propiedad. Desconocido este principio en las legislaciones antiguas; privado el propietario del goce de una facultad que debia corresponderle legítimamente por el hecho de serlo; obligado á dejar sus campos abiertos para que otros la ejercieran, háse visto despues reintegrado en el ejercicio de ella, siendo hoy esta facultad un principio fundamental en la materia. En él, como sobre una base incontrastable, están fundadas las legislaciones modernas.

Este principio es aplicable á toda clase de terrenos para determinar las reglas que deben prescribirse y observarse en el ejercicio de aquel derecho. En las tierras de dominio privado, el derecho de cazar y pescar es esencialmente libre, sin otras restricciones que las que exigen la conveniencia pública y el interés de los demas propietarios. En las tierras que son de uso público, ya pertenezcan á corporaciones municipales ó provinciales, ya correspondan al Estado, la autoridad pública que le representa y que ejerce el derecho de propiedad, establece por el propio principio las reglas que cree mas convenientes para el uso y ejercicio de la caza. En cuanto á la pesca que se hace en los rios y sus riberas, en los lagos, estanques y lagunas, tiene exacta aplicacion esta doctrina; pero en cuanto á la pesca que se hace en el mar, el derecho de verificarla no participa de la misma naturaleza.

Sin entrar ahora en la cuestion teórica, muy debatida en otros tiempos, sobre el imperio ó la propiedad de los mares, bastará decir que cualquiera que sea la resolucion de este problema, nadie puede negar, ni niega efectivamente, que á una nacion le corresponde el derecho de aprovecharse de todos los usos á que pueden ser destinadas las playas y las costas que baña el mar en los límites de ella. El derecho de pescar, pues, en estas playas y costas, corresponde indudablemente á los súbditos de cada nacion, con esclusion absoluta de los de las demas naciones, no pudiendo estos venir á ellas á ejercer semejante industria sin cometer una usurpacion, ocasionada ademas á disturbios y peligros. Por consiguiente, el derecho de ejercer la pesca en los sitios de que vamos hablando es un derecho esclusivo de nacion á nacion que compete á los súbditos de cada una, y que para el uso individual de estos se halla sometido á las reglas establecidas por la autoridad pública. Ninguno puede ejercer este derecho por su propia voluntad ni arbitrariamente, porque ninguno es dueño de las playas y de las costas. La potestad pública, que representa y ejerce este derecho, fija las reglas que cree mas convenientes, siendo práctica y costumbre general que las naciones adopten disposiciones especiales para la gran pesca marítima, que no la permitan si no á ciertas clases ó profesiones, y que no pueda ejercerse si no

con las artes y procedimientos autorizados, permitiendo solo á los particulares la pequeña pesca que se hace por diversion y no constituye una industria.

Algunos autores discuten y sostienen aun en la actualidad, que el ejercicio de la caza y pesca es un derecho que el soberano puede conceder, modificar ó prohibir. Antes hemos visto, al trazar la historia de este derecho, que en otros tiempos ha sido considerado como un atributo ó prerogativa de la soberanía. Puffendorf sostiene y se esfuerza en probar, que ese derecho debe quedar reservado al soberano. Pero, en la esfera de los principios y en la cuestion abstracta que al presente examinamos sobre la naturaleza esencial del derecho, independientemente de la apreciacion que los legisladores han hecho en otros tiempos, aquella opinion no puede sostenerse. Tan injusto, tan violento y tan tiránico seria que el soberano reservase para su uso especial el derecho de caza y pesca, ó que pudiera prohibir su ejercicio absoluta ó indefinidamente, como que prohibiese el ejercicio de la propiedad particular en las diversas aplicaciones que pueden tener lugar en el órden indefinible de las combinaciones y transacciones sociales. No: la potestad pública, quien quiera que la ejerza, puede arreglar el ejercicio de aquel derecho; puede fijar los límites hasta donde deba estenderse; pero ni puede reservárselo, ni puede prohibir su uso á aquellos á quienes esencialmente les corresponde.

De la naturaleza ya determinada del derecho de cazar y pescar se deduce en primer lugar, que la ley, sin necesidad de investigar el orígen de este derecho, debe fijar el principio de que el propietario puede ejercerle únicamente dentro de su fundo, sin que otro alguno pueda verificarlo sin su consentimiento. Esta declaracion la exije el respeto de la propiedad, y la única restriccion que puede esperimentar aquel, consiste en la sumision y cumplimiento de las leyes reglamentarias y de policía, hechas en el interés de la sociedad. Sin esta sumision el derecho se convertiria en abuso, su ejercicio seria un manantial de desórdenes que la autoridad pública debe preveer y evitar.

Infiérese tambien que el propietario puede arrendar el derecho de cazar y pescar, ya lo haga separadamente, ya con el fundo mismo. Esta facultad no puede ofrecer dificultad ninguna, toda vez que aquel derecho se considera como un accesorio de la propiedad, y es por lo mismo susceptible de todos los usos y aplicaciones á que esta se presta. Lo que puede ofrecer alguna duda es, si la facultad de cazar ha de corresponder *ipso facto* y de derecho al arrendatario. La cuestion ha sido ámpliamente debatida, no es de fácil solucion, y se han emitido diferentes opiniones acerca de ella.

Sostienen unos, que el derecho de cazar corresponde al arrendatario siempre que en el contrato no se haya estipulado otra cosa; y se fundan en que aquel, por la naturaleza del contrato y por los principios generales del derecho, tiene el goce ó disfrute omnímodo y completo de la finca arrendada, el de percibir todos los emolumentos y obvenciones derivados de ella, y hasta el de aprovecharse de todos los placeres que proporcione. No importa, añaden estos escritores, que rigorosamente hablando no sea la caza una produccion del suelo, cuando es un beneficio que se obtiene con ocasion de él, ó una parte de la utilidad que el fundo mismo proporciona; el arrendatario, pues, asi como el usufructuario, tiene el derecho de percibir íntegramente esta utilidad.

Sostienen otros, por el contrario, que el arrendatario no puede aprovecharse de la caza y pesca, si no en el caso de que se haya estipulado espresamente en el contrato. Apóyase esta opinion en la naturaleza misma del derecho, que siendo por su esencia inherente á la propiedad, debe corresponder al dueño del fundo, mientras que por un acto espreso y voluntario no se haya privado de él entera ó parcialmente trasfiriéndolo á otro. Y eso es tan cierto, añaden estos escritores, como que por el derecho comun el arrendatario solo percibe los frutos de la finca arrendada, y no hay términos hábiles para considerar la caza y pesca en el número de las produccio-

nes del suelo. Por consiguiente, cuando en el contrato nada se ha estipulado en favor del que recibe el arriendo, el derecho de cazar no debe formar parte de la cosa arrendada, ni atribuir á este facultades ni participacion en la caza.

Todavia un escritor, Mr. Duranton, propone una tercera opinion reducida á que, en el caso de que se vá hablando, es decir, á falta de estipulacion espresa en el contrato, la caza corresponde conjuntamente al dueño y al arrendatario; pero esta opinion, que no se funda en ningun principio de derecho, y que no apoya su autor si no en leves consideraciones, derivadas de la comparacion poco concluyente de algunas disposiciones del derecho francés, no ha tenido ningun séquito, ni en la esfera de las teorías, ni en el terreno de la jurisprudencia. La opinion que ha prevalecido en los tribunales de aquella nacion es la primera; sin embargo, al adoptarla como doctrina general, hay que tener presente, segun la juiciosa observacion de los autores del Repertorio de legislacion y jurisprudencia, la naturaleza en cierto modo especial del derecho de caza, el cual, no solo tiene por objeto la utilidad, hasta considerable, que puede producir este género de industria, si no el recreo y placer que proporciona. Allí donde la caza no podria verificarse sin grandes gastos y dispendios, y sin descuidar ó abandonar hasta cierto punto el cultivo de las tierras, existirá siempre la presuncion de que el propietario no ha querido trasmitir el derecho de ejercerla, y esa presuncion no podrá quedar desvanecida si no ante una cláusula espresa en otro sentido. En posesiones pequeñas situadas, por ejemplo, á tal distancia del domicilio del propietario, que haga presumir su intencion y deseo de no reservarse aquel aprovechamiento, habrá de considerarse cedido al arrendatario, aun cuando nada se haya dicho en el contrato espresamente. Pero si se trata de posesiones importantes, de casas de campo, de placer y recreo, cercados, de gran precio, cuyo arrendamiento tenga por principal objeto disfrutar los goces de un retiro agradable y de las diversiones que proporciona, no puede creerse que el arrendatario haya querido privarse del derecho de cazar y pescar, permitiendo que el propietario pueda entrar libremente en la propiedad para ejercerle con el séquito y aparato, y los perjuicios que este ejercicio lleva siempre consigo.

De los principios que determinan la naturaleza del derecho de cazar y pescar se infiere tambien que, cuando el usufructo se halla separado de la propiedad, debe corresponder aquel esclusivamente al usufructuario. En el mismo caso se halla el enfiteuta, mas no el que tiene una finca en virtud del contrato de anticresis, porque los derechos de este son precarios y no forman parte de la propiedad, segun hemos espuesto en el artículo correspondiente.

Hechos que constituyen el ejercicio de la caza y pesca. Por las observaciones espuestas hasta aquí puede comprenderse, que la caza y pesca es unas veces el ejercicio de un derecho legítimo, sea que corresponda por propia representacion ó por cesion y trasmision agena; otras veces, la violacion de este derecho, ó la trasgresion de las disposiciones legales, y por consiguiente un delito en la acepcion lata de esta palabra. Importa, pues, fijar algunas nociones sobre este punto, y determinar los hechos que constituyen la caza para poder determinar en su caso los hechos ó circunstancias que constituyen el delito.

Advertiremos, en primer lugar, que no son objeto de la caza y pesca todos los animales indistintamente que pueblan la tierra, el aire y las aguas. Lo son, sí, ó pueden serlo, aquellos que en el derecho se llaman salvajes ó *feræ naturæ*, los cuales viven en su libertad natural sin haber entrado en poder del hombre, ni formar bajo otro aspecto parte de su patrimonio. El hecho de apoderarse de estos animales es el que puede constituir el ejercicio de aquel derecho, ó el delito de caza que hemos indicado. La consecuencia inmediata de este principio es, que el acto de apoderarse de alguno de los animales que llamamos domésticos, como el perro, el caballo y otros semejantes, no consti-

tuye el ejercicio ó hecho de caza, si no un robo que debe castigarse, en consecuencia, por las leyes peculiares de este delito. En cuanto á los animales, que siendo originariamente *ferœ naturœ*, han perdido ya su natural ferocidad y viven fijos y adheridos á alguna propiedad del hombre, tales como las abejas, las palomas, etc., el acto de apoderarse de ellos en cualquiera de estos lugares no constituye tampoco hecho de caza, si no el propio delito ya espresado. Otro tanto debe decirse respecto de los peces que viven encerrados en estanques y viveros particulares, formando parte de la propiedad del dueño del suelo ó fundo. Ultimamente, los conejos y otros muchos animales, que constituyen lo que bajo un concepto general llamamos *caza*, son, como es sabido, una propiedad particular cuando están encerrados y establecidos en algun lugar destinado especialmente á su conservacion y reproduccion: apoderarse de ellos en estas circunstancias, no es tampoco un hecho sometido á las disposiciones represivas de la caza. Resulta, pues, como circunstancia fundamental para que exista este hecho y en su caso el delito, que los animales deben ser de la naturaleza y de las condiciones espresadas. Mas esto supesto, ¿qué actos deberán haberse ejecutado para que pueda decirse que hay hecho ó delito de caza, justiciable por las leyes represivas de ella?

Por un concepto general, el acto de buscar, de perseguir ó de apoderarse de los animales es lo que constituye el hecho ó delito de este nombre; pero sin que haya llegado á verificarse semejante circunstancia, pueden concurrir otras que den para el objeto de la ley el mismo resultado. El hecho de colocarse con los preparativos convenientes sobre un punto de paso para los animales, con el fin de cojerlos; las tentativas ejecutadas para sorprenderlos y apoderarse de ellos; el recorrer los campos y los bosques para levantar la caza; el colocar los lazos, perchas y demas artes que tienen aquel objeto, son circunstancias que por sí solas pueden constituir el hecho ó delito de que vamos hablando. La ley en esta parte no debe fijar mas que el principio general, dejando al arbitrio y decision de los jueces el apreciar las circunstancias especiales de los casos. Esas decisiones constituyen la jurisprudencia, cuyas reglas suplen la omision forzosa de la ley, que no puede prever ni resolver á priori las multiplicadas combinaciones de la malicia ó del capricho de los hombres.

§. 3.º *Condiciones á que debe estar sujeto el derecho de cazar y pescar.*

Conocida la naturaleza de este derecho, se comprende fácilmente que su ejercicio haya de estar subordinado á las restricciones que exige el bien comun, y á la sancion de ciertas penas convenientes para impedir la violacion de aquellas reglas. Si la facultad de cazar y pescar fuera libre y absoluta en su ejercicio, y no tuviese otro límite que el capricho y las combinaciones, mas ó menos ingeniosas y destructoras de cada uno, claro está que el uso se convertiria en abuso, que la facultad degeneraria en una licencia funesta, y que no respetándose la propiedad ni los derechos individuales, volveríamos al estado primitivo, en que aquel ejercicio era una lucha contínua, privilegio del mas fuerte sobre los menos esforzados. Ya lo hemos dicho antes: en las sociedades constituidas, la ley, sin desconocer el principio que se deriva de la naturaleza del derecho, debe establecer las restricciones mas adecuadas para su ejercicio.

Estas restricciones se fundan en los saludables fines de interés general que la legislacion debe proponerse, y en la combinacion de ellos con la índole especial del derecho que examinamos. Porque ninguna legislacion ilustrada y previsora puede desentenderse, de que si es respetable el derecho de cazar y pescar como accesorio y parte del derecho de propiedad, lo es quizá en mayor grado la necesidad de procurar la conservacion y reproduccion de la caza y pesca, y que si debe facilitarse el ejercicio de aquel derecho, ha de ser en términos que no se resientan y se perjudiquen por ello el interés individual y la seguridad pública. La conservacion y reproduccion de la caza, la tranqui-

lidad pública y la seguridad de los frutos de la tierra son, pues, los principios que la administracion pública debe tener en cuenta como fundamentales para establecer sus disposiciones y reglamentos.

Concretándonos á la caza, la primera disposicion indispensable para su buen régimen es, fijar el espacio de tiempo durante el cual pueda practicarse. Hay, como es sabido, un período anual en que se verifica la reproduccion de ella. Perseguirla en ese tiempo, aprehenderla y matarla seria destruirla, aniquilarla y estinguirla. Hay tambien otro espacio de tiempo en que, cubiertas las tierras de sus frutos, no permitirian la persecucion de la caza sin daño y menoscabo de estos. La caza, pues, en ambos períodos debe estar prohibida. Como la duracion de estas épocas varía segun las circunstancias especiales de los diversos territorios de cada pais, la ley debe fijar solo el principio, dejando el determinar aquellas al conocimiento particular de las autoridades administrativas.

Una cuestion se ha suscitado entre los escritores con motivo de la prohibicion de cazar en determinada época del año; y es, si esta prohibicion llevará envuelta la de vender la caza y trasportarla durante el tiempo prohibido. La opinion afirmativa, adoptada por la administracion francesa y por casi todas las legislaciones modernas de Europa, nos parece incontestable; porque supuesta la prohibicion de cazar en cierta época del año, es una consecuencia inmediata la de vender y llevar la caza de un punto á otro durante la misma época. Es ademas esta prohibicion el complemento de la primera, y la medida mas eficaz para asegurar su ejecucion, de tal manera que no se concibe la prohibicion de cazar en tiempo vedado sin que ocurra desde luego la interdiccion de vender la caza. Verdad es, que el delito se previene con la pena impuesta al hecho de ejecutarlo; pero tambien lo es que, sin la prohibicion de que vamos hablando, quedaria abierta la puerta para infringir la ley, y aun se ofreceria cierto estímulo para ello no castigando al vendedor. Por esta consideracion y por la inseparable correlacion que guardan entre sí los dos actos, creemos que la ley debe prohibir lo mismo el uno que el otro, puesto que ambos afectan á la conservacion de un objeto que está bajo su proteccion y vigilancia.

Ademas de la prohibicion espuesta, las leyes deben imponer otra, fundada en el mismo principio de conservacion. Tal es la que han reconocido todas las legislaciones, inclusa la nuestra, de cazar en tiempo de nieve. La facilidad de aprehender la caza en estas circunstancias produciria su destruccion, y esto es precisamente lo que debe evitarse.

Por último, creemos que la caza, especialmente la que se verifica con armas de fuego, debe quedar prohibida absolutamente de noche. La seguridad pública se veria amenazada en muchas ocasiones si se permitiera que hombres armados recorriesen de noche los campos, dando lugar á los abusos que esta libertad lleva consigo forzosamente. La prudencia y la conveniencia pública exigen que la caza, ya se considere como pasatiempo y recreo, ya como el ejercicio de una industria, se concrete á las horas del dia, en que puede ser vigilada para que se repriman y se eviten los desórdenes á que se presta.

Otra condicion, á que debe estar sometido el derecho de cazar, es la del permiso ó licencia concedida por la autoridad pública. Sin perder de vista la calificacion que hemos dado á la naturaleza de este derecho, creemos que no hay contradiccion alguna entre esta y aquella condicion, porque de ella no puede inferirse que la licencia confiera la facultad de cazar. Este derecho será siempre, y á pesar de semejante circunstancia, una dependencia del derecho de propiedad; pero sin atacarle en su orígen, ni aun en la esencia de su ejercicio, la prudencia y la prevision pueden establecer en la forma alguna restriccion que impida su abuso. ¿Son acaso todos los individuos de la sociedad igualmente dignos del ejercicio de los derechos civiles? ¿No hay algunos á quienes no debe permitirse el uso de armas de fuego? ¿No hay muchos para quienes seria peligrosa la libertad de entregarse al ejercicio de la caza? Véase, pues, el saludable fundamento en que se apoya una restriccion encaminada

á evitar abusos, que podrian llegar á ser funestos, si aquella fuese absoluta ó indefinida.

La licencia debe ser concedida siempre por la autoridad pública, segun las circunstancias especiales del caso y de las personas. Pero, como hay algunas á quienes debe ser siempre rehusada, será conveniente que estas esclusiones estén consignadas espresamente en la ley para la mayor sancion de sus disposiciones. Los menores de cierta edad, por ejemplo, de 16 años; los menores de edad que no tienen padre, tutor ni curador; los que tienen interdiccion judicial en sus bienes; los que por sentencia tambien judicial se hallan bajo la vigilancia de la autoridad pública, y otros muchos que podrian citarse, deben quedar escluidos, y la ley debe determinar estas y otras esclusiones semejantes, dejando á la prudencia de la autoridad la concesion ó denegacion de la licencia en los demas casos.

Otra condicion indispensable para el ejercicio de la caza, cuando se ha de verificar en la propiedad de otro, es el consentimiento del dueño dado espresa ó tácitamente. Ni porque el tiempo no sea vedado, ni porque la autoridad haya dado la licencia, puede considerarse cualquiera autorizado, para invadir el fundo ageno y perturbar al propietario en la posesion y disfrute de su propiedad. El acto, aun acompañado de aquellas circunstancias, seria un hecho justiciable, sujeto á las disposiciones penales de la legislacion especial de caza.

Tampoco puede abandonar la ley al capricho y á la voluntad individual la eleccion de los medios de cazar, permitiendo que cada uno emplee los instrumentos ó las artes que crea mas convenientes. Hay, como es sabido, entre estos algunos, cuyo uso se concilia con el ejercicio bien entendido de la caza; pero hay otros esencialmente destructores, que no solamente la aniquilan, si no que podrian afectar á la salud pública. El arma de fuego de ciertas condiciones, el uso de perros de caza, la carrera á caballo y algun otro, pertenecen á los primeros. Su uso puede concederse sin peligro, sin que la conservacion de aquella y la salud pública, puedan resentirse: pero el de los hurones, de las redes, lazos, cepos, argollas y otros, no podrian tolerarse sin poner en riesgo uno y otro objeto. Los primeros constituyen los medios de cazar, considerada esta ocupacion en el órden del interés de la sociedad; los segundos constituyen los medios de que se vale la industria destructora ó la especulacion furtiva, que no debe ser lícita bajo ningun concepto. En la ley y no en los reglamentos convendrá determinar los instrumentos y medios de caza que deben prohibirse y los que deben tolerarse. En cuanto á la caza de animales dañinos, aves de paso y otras especies, en que no pueden establecerse reglas fijas y determinadas, la ley deberá dejar á la prudencia y discrecion de las autoridades administrativas la eleccion de las medidas que crean mas conducentes para conciliar el uso de ella con la indispensable mira de evitar toda suerte de abusos y desórdenes.

Por último, toca á la ley en esta materia sancionar clara y esplícitamente la penalidad para todos los hechos ó delitos de caza. Infructuosas serian todas sus disposiciones, dirigidas á regularizar el ejercicio de este derecho, si concretándose á imponer restricciones mas ó menos latas, no procurase su cumplimiento por medio de un castigo proporcionado. Por punto general la ley debe designar la pena correspondiente á la infraccion de cada una de estas disposiciones restrictivas. El que caza en tiempo prohibido; el que lo hace sin el permiso de la autoridad; el que invade para tal fin la propiedad de otro sin su consentimiento; el que emplea instrumentos ó medios vedados; el que infringe los reglamentos ú órdenes de la autoridad; el que vende la caza en tiempo tambien prohibido; todos son reos de este delito, y deben sufrir la pena preestablecida, graduada por la importancia y la trascendencia de cada uno de los hechos.

En cuanto á la pesca, las mismas consideraciones de interés y conveniencia general, espuestas en los párrafos precedentes, exijen que su ejercicio se someta á reglas especiales y á restricciones convenientes. La pesca que se hace en alta mar, en las ensenadas y

otros puntos semejantes de ella, no puede permitirse si no á cierta y determinada clase de personas, porque los peligros que lleva consigo la naturaleza y complicacion de los artes ó instrumentos que se emplean para efectuarla, y el interés de adiestrar á esas clases en las faenas y ejercicios marítimos, exigen que aquel derecho no se generalice. La ley debe fijar tambien los procedimientos que deben usarse para esta clase de pesca; determinar la época en que puede verificarse sin peligro de su destruccion, y disponer, finalmente, todos los pormenores que reclamen la conservacion de ella y la seguridad de los individuos. Lo mismo debe suceder respecto de la pesca en las costas y playas, permitida generalmente á todos, y en los rios, estanques y lagunas. Reglamentos especiales determinarán los medios permitidos, los que no lo sean, la época de su ejercicio y cuantas medidas sean conducentes para regularizarla.

SECCION II.

DISPOSICIONES DEL DERECHO ESPAÑOL RELATIVAS AL EJERCICIO DE LA CAZA.

Entramos ya en el exámen de las disposiciones del derecho español sobre la materia de este artículo, con el conocimiento de los principios generales y de las teorías mas aplicables á ellas. En la imposibilidad de dar á nuestras observaciones un órden filosófico y doctrinal, á que no se prestan el método y la contestura del real decreto orgánico de caza y pesca, nos parece preferible seguir el que se adoptó en él para facilitar la inteligencia de sus disposiciones. Empezaremos, pues, por la caza que se verifica en tierras de propiedad particular.

§. 1.° *De la caza en tierras de propiedad particular.*

El estudio de nuestras leyes y ordenanzas antiguas referentes á la caza confirma indudablemente una idea que hemos tenido ocasion de esponer ya, á saber: que esta no era una prerogativa reservada al soberano, ó un derecho feudal, como en otras naciones, que él solo, ó los que merecian su especial gracia, podia ejercer libremente. Pero, nos advierte y persuade de que la caza estaba sujeta á muchas restricciones, que limitaban su ejercicio dentro del círculo de la conveniencia y de la seguridad pública. El propietario, por ejemplo, no era árbitro de cazar cuando le acomodaba, ni durante el tiempo que la ley tenia prohibida semejante ocupacion. Esperimentaba esta limitacion en el uso de su derecho, como la esperimenta siempre que el interés general, bien ó mal comprendido, viene á competir y á contraponerse al uso de los derechos individuales, por mas respetables que sean.

Los cambios políticos introdujeron y desarrollaron en nuestro pais ideas esencialmente diversas de las que habian servido de base á nuestra legislacion, á nuestra política y á la administracion general del Estado, dando lugar á reformas radicales en casi todas las materias del derecho público. Una libertad escesiva, que jamás se concilia bien con las necesidades sociales, y una proteccion exagerada á la propiedad particular, que comunmente degenera en licencia, fueron los caractéres generales de las nuevas reformas, que al fin produjeron en el asunto de que tratamos cierta reaccion, inconveniente, pero análoga, á las restricciones anteriores. En 1812, al paso que se declaraban cerrados los terrenos de propiedad particular, destinados á plantío, se declaraba libre en ellos el disfrute de la caza y pesca; y en 1834 se sancionaba la libertad mas absoluta y omnímoda en favor de los propietarios, para ejercer ese derecho.

Efectivamente: el decreto de 3 de mayo de dicho año 1834 dispone en su artículo 1.°, que los dueños particulares de las tierras lo son tambien de cazar en ellas libremente, en cualquier tiempo del año, sin traba ni sujecion á regla alguna; y en el segundo, que con la misma amplitud podrán cazar en las tierras de particulares los que no sean sus dueños, con licencia de estos por escrito. El propietario no reconoce, por consiguiente,

limitacion alguna en el uso de su derecho; puede usar y abusar de la caza como le plazca y se le antoje, puede perseguirla y matarla en cualquier tiempo; podria en suma destruirla y aniquilarla si eso llegaran á dictarle su cálculo ó su capricho.

La inconveniencia de esta medida no hay para que demostrarla; bastará observar, que sobre ser esa ilimitada libertad, no el uso, si no el abuso; no el derecho, si no la licencia; no el principio, si no su exageracion peligrosa y funesta; usando de ella todos los propietarios, podria llegar á estinguirse la caza que es un elemento de comodidad, de placer y hasta de riqueza, y podrian resultar desórdenes incompatibles con la seguridad pública. La legislacion francesa dá al propietario esa omnímoda facultad solo en un caso; á saber, cuando se trata de una propiedad cercada, que forma parte de un edificio destinado á la habitacion del propietario. Solo en estas circunstancias puede ejercerla en razon á que el fundo se considera como un accesorio de la habitacion y merece todo el respeto y la inviolabilidad debidos al domicilio ó morada; morada en que seria difícil, ó tal vez imposible, practicar las investigaciones conducentes á justificar los hechos.

Esas disposiciones que, como quiera que sea, deben observarse entre nosotros tal cual se hallan escritas, forman notable contraste con la del artículo 4.° que permite cazar sin licencia de los dueños, aunque con sujecion á las restricciones de ordenanza establecidas para la caza en terrenos baldíos, en las tierras abiertas de propiedad particular que no estén labradas ó que estén de rastrojo. Aquí se falta, no solo á la exageracion del principio que sirve de fundamento á los anteriores artículos, si no á la esencia del principio, considerado dentro de sus legítimos y racionales límites. Tan dueño es el propietario en uno como en otro caso; tan respetables son los fueros de la propiedad en aquel como en este, y si en el primero se exige espresamente su consentimiento, no comprendemos por qué no ha de ser igualmente esencial en el segundo. No basta para violar, como de hecho se viola, el derecho de propiedad en este último caso, la circunstancia de que las tierras estén de rastrojo; porque ni ello hace que el dueño deje de serlo; ni esa cualidad, puramente accidental, suspende el goce y ejercicio de los derechos de aquella. La escepcion sin duda se derivó de las disposiciones, á la sazon vigentes, que obligaban al dueño de tierras abiertas de rastrojo á permitir la entrada de los ganados; pero aparte de que este beneficio, condenado ya por la razon y las buenas ideas, no debia estenderse nuevamente á otra clase de personas, el principio de la ley y la inviolabilidad de aquel derecho debieron prevalecer sobre todas las demas consideraciones.

Hemos visto que, salva esta escepcion, la licencia del dueño es indispensable para cazar en tierras de propiedad particular. Esta licencia debe darse por escrito, conteniendo la estension que en su uso puede disfrutar el concesionario; si no se concediese en la indicada forma, el cazador estará sujeto á las restricciones de ordenanza, prescritas para la caza en tierras de baldíos (1).

Una dificultad puede suscitarse, en punto á la licencia de que hablamos, en el caso de que la propiedad pertenezca, no á uno, si no á varios dueños. El decreto nada dispone para este caso; y es por lo mismo indispensable recurrir al exámen de los principios generales del derecho. Segun estos, la propiedad indivisa ó comun no corresponde á ninguno de los condueños en particular; ninguno puede ejercer por sí y aisladamente los derechos que ella confiere; su ejercicio radica legalmente en la entidad que constituyen los co-propietarios reunidos. ¿Con qué título podria uno conferir á un estraño la facultad de cazar, que no pudiera contradecir ó arrogarse cualquiera de los otros? La única escepcion que admitiríamos á esta doctrina, y el único caso en que consideraríamos exento de responsabilidad penal al que cazara en tierras comunes á varios dueños sin el consentimiento de todos, seria cuando el ca-

(1) Art. 3 del real decreto citado de 5 de mayo de 1834.

zador, ignorando esta circunstancia, hubiese procedido de buena fé, obteniendo el consentimiento del que creyera ser único propietario. No es esta, sin embargo, la opinion general, y la combaten entre otros los autores del Repertorio general anteriormente citado; creemos con todo, que la opinion de estos escritores, por muy respetable que sea, no puede sostenerse ni en el terreno de los principios, ni en la esfera de la conveniencia pública.

Los artículos 7.° y 8.° de la ley, descendiendo al exámen de algunos casos particulares, resuelven cuestiones que en todos tiempos han sido muy controvertidas. El primero dispone, que la caza que cayere del aire en tierras de propiedad particular, ó entrase en ellas despues de herida, pertenece al dueño ó arrendatario de la tierra y no al cazador, conforme á lo dispuesto en la ley 17, tít. 28, Part. 3. En primer lugar, la aplicacion que se hace de esta ley al caso propuesto no es exacta, porque basta su mera lectura para comprender que se refiere al cazador que entra en la propiedad ajena para cazar en ella contra la voluntad ó prohibicion del dueño. Asi es, que la ley fija ante todas cosas el principio justo y conveniente de que nadie puede entrar en heredad ajena para cazar en ella contra la prohibicion del dueño, y aplicando despues este concepto general, resuelve: 1.° Que si hallándose presente el dueño, prohibiese la entrada al cazador, cuanto cogiese (en la heredad misma) no será de este, si no del primero: 2.° Que lo mismo sucederá cuando el dueño halle cazando al cazador y le hiciera la prohibicion indicada. De forma, que para que el propietario se haga dueño de la caza, herida por otro, segun la ley de Partida, es indispensable: 1.° Que haya sido herida en el fundo ó heredad del propietario; y 2.° que lo haya sido contra la espresa prohibicion de este antes de cazar ó estando ya cazando.

Estas circunstancias no concurren, como es fácil advertir, en el caso propuesto en el art. 7.° del decreto, porque en él se trata de la caza que cae del aire en tierras de propiedad, ó que entrase en ella despues de herida; lo cual supone que lo ha sido fuera de esa propiedad y que el cazador no trata de entrar en ella á cazar contra la prohibicion del dueño. Antes al contrario, con arreglo á la ley de Partida que vamos examinando, no mediando semejante prohibicion, el cazador se haria dueño, no tan solo de la caza que hubiese herido fuera de la propiedad, si no de la que hiriere y matase dentro de la propiedad misma correspondiente á otro.

La aplicacion, pues, de la ley de Partidas al caso propuesto en el art. 7.° del decreto, es de todo punto inexacta; pero la cuestion se resuelve en él del modo que hemos visto, y conviene examinar la justicia de esta resolucion y su conformidad con los principios del derecho comun. Empezamos por advertir que el caso del artículo citado puede presentarse bajo dos formas diferentes: sucederá alguna vez que el dueño de una heredad, ó la persona que tenga derecho á cazar en ella, hiera la caza dentro de su demarcacion y la persiga hasta el momento de introducirse en la heredad ajena; y podrá acontecer tambien que despues de herida la pieza que cae ó se introduce en la propiedad de otro, el cazador deje de perseguirla: en este caso no vemos inconveniente en la resolucion del decreto, pero en el anterior no pensamos del mismo modo.

Todos saben que, entre los jurisconsultos romanos, fué muy debatido si el cazador se hacia dueño de la caza por el hecho de haberla herido. El jurisconsulto Trebasio resolvió la cuestion afirmativamente... *Statim nostram esse et eo usque nostram videri, donec eam persequamur. Quod si desièrimus eam persequi, destnere nostram esse, et rursus fieri occupantis. Itaque si per hoc tempus, quo eam persequimur, alius eam ceperit eo animo, ut ipse lucrifaceret, furtum videri nobis eum commisisse.* Otros jurisconsultos opinaron lo contrario, como lo testifica una ley del Digesto: «*Plerique non aliter putaverunt eam nostram esse, quam si eam ceperimus; quia multa accidere possunt, ut eam non capiamus; quod verius est.*» La ley de Partida adoptó esta última opinion sancionada por la legislacion romana, si bien

la del Fuero Real citada en otro artículo (1), dispuso que nadie deberia cojer la fiera ínterin fuera en su seguimiento el que la hirió.

Pasando del derecho constituido al terreno de la doctrina observaremos, que tampoco están conformes los escritores modernos en la resolucion de esta tésis. Puffendorf sostiene que si la herida es tal, que persiguiendo el cazador la pieza, probablemente habrá de apoderarse de ella, no debe ser lícito á ninguna otra persona el aprehenderla mientras que el primero insista en su persecucion; pero si la herida es lijera, de modo que pueda escaparse el animal, será del primer ocupante.

Barbayrac, por el contrario, sostiene que mientras el cazador persigue la pieza, aun cuando no la haya herido, debe ser tenido y reputado por el primer ocupante al efecto, de que ningun otro pueda apoderarse de ella mientras continúe su persecucion. Esta última opinion, dicen los autores del Repertorio general de jurisprudencia, es mas conforme á los principios de la severa moral, que á las reglas rigorosas del derecho; porque seria bajo todos conceptos violento calificar de robo el hecho de apoderarse de un animal herido por otro, siendo la herida tan lijera que no ofreciese la menor dificultad para escaparse. Finalmente, M. Proudhon sostiene, y esta es la opinion mas general, que cuando el animal ha sido herido, de forma que no pueda escaparse, el cazador debe ser considerado dueño de él, aun cuando no le haya aprehendido todavia.

Bajo de estos principios, la resolucion del artículo 7.°, en el caso á que hemos concretado últimamente la cuestion, no nos parece justa. Cuando el cazador ha herido la pieza en su propio fundo, ó en el que tiene derecho á cazar, y la persigue hasta que entra en la propiedad de otro, no hay ninguna consideracion de justicia y de ley que pueda privarle del derecho incontestable que tiene ya adquirido á apoderarse de ella luego que cae en dicha propiedad, y no puede escaparse. Como no hay tampoco consideracion ninguna de la misma especie que dé al dueño de la propiedad un derecho que no reconoce título alguno legítimo y suficiente. Supuesto el derecho adquirido por el cazador que hiere de gravedad y persigue la caza, la circunstancia de caer ó de entrar en el fundo ajeno, es demasiado accidental para que dé y confiera al dueño de este la propiedad de aquella. Y seria mas violenta y menos conforme á los principios de justicia esta gratuita concesion en favor del dueño de la heredad, que el agravio que pudiera inferírsele de obligarle á permitir la entrada del cazador para solo el objeto de recojer la caza, ó entregarla á este despues de recogida por el mismo. La exageracion de los principios suele conducir á consecuencias absurdas ó inconvenientes; y sin duda la exageracion que se dá en el artículo 7.° al respeto de la propiedad, dá lugar á la violenta é injusta aplicacion que se hace de este principio, en el caso que hemos examinado.

El art. 8.° resuelve tambien un caso especial que merece ser discutido. Los que con el objeto, dice, de cazar violasen y saltasen los cercados de tierra de propiedad particular, pagarán, ademas de los daños que causaren, incluso el valor de la caza que mataren ó cogieren, que debe ser para el dueño ó arrendatario, en su caso, las costas del procedimiento, si las hay, y ademas 20 reales de multa, etc. Las disposiciones de este artículo, respecto del cazador que viola los cercados de tierra de propiedad particular, son varias: 1.° Satisfaccion de los daños. 2.° Pago del valor de la caza. 3.° Pago de la multa y costas del procedimiento, si le hay. 4.° Adjudicacion de la caza al dueño. Dejando para mas adelante el exámen de la responsabilidad y de las penas, trataremos ahora de la última de dichas disposiciones. Resuélvese que la caza, que el cazador matare ó cogiere, debe ser para el dueño ó arrendatario, en su caso: decide, pues, una cuestion muy debatida, sobre la cual no se ha fijado la opinion en el terreno de la doctrina y de los principios.

Por el derecho romano ya hemos visto que

(1) Véase *Animales*, seccion tercera.

la caza aprehendida en terreno ajeno, aun mediando la prohibicion del dueño, era para el cazador, salva la accion de injurias que correspondia al primero. La ley de Partida, tambien hemos tenido ocasion de decir ya, que declaraba propio del cazador cuanto cogia antes de la prohibicion. La doctrina generalmente admitida descansa en la teoría, de que no siendo el propietario de un fundo dueño de la caza que se halla en él mientras vive en su natural libertad, pertenece al primero que la ocupa; que el propietario tiene sin duda el derecho de prohibir á otro cualquiera la entrada en su propiedad, y que el violar esta prohibicion constituye un delito de parte de quien lo ejecuta; que este, en fin, deberá ser responsable de todos los daños y perjuicios causados, mas no podrá ser privado de la caza que haya cogido, porque esta no pertenece á nadie. Pudiéramos citar varios escritores que profesan esta doctrina, pero nos limitaremos á trascribir un párrafo de M. Proudhon, que la resume en los siguientes términos. «Las aves y cuadrúpedos salvajes corresponden al primer ocupante que puede apoderarse de ellos, aunque sea por un hecho de caza ejercido en terreno de otro, porque nada tienen de comun con el suelo donde son aprehendidos, del cual, ni son una dependencia, ni un accesorio, y porque las leyes jamas han concedido al propietario accion para revindicar la caza existente en su propiedad.»

Otro escritor francés sostiene la opinion contraria, sancionada por alguno de los tribunales de la misma nacion. La caza es indudablemente *res nullius*, dice aquel escritor, en el único sentido de que cada uno puede perseguirla y apoderarse de ella mientras pasa y existe en su propio fundo: mas el que caza en el fundo ajeno sin autorizacion de su dueño, ejerce un derecho que no le corresponde, y por consiguiente no puede adquirir para sí, si no para el dueño de la heredad, segun la máxima *nemo ex delicto locupletari debet*. Los autores del Repertorio general, antes citado, combaten esta teoría, suponiendo que aquella máxima no es aplicable á la materia ó á los hechos de caza, por lo menos en el sentido de que, si la ley impide al delincuente sacar algun lucro de su contravencion, sea de otro modo que imponiéndole la responsabilidad y las penas convenientes, mas no privándole de la caza, aunque aprehendida ilegalmente. Ni se comprende, añaden, como el propietario del terreno pueda hacerse dueño de la caza, que á nadie pertenece, por el mero hecho de haberse apoderado de ella un tercero, sin voluntad y sin intencion de que sea para el primero. Y aun suponiendo que el delito cometido por el que invade el terreno ajeno sea legítimo impedimento para que se apropie la caza, no se seguirá de ahí que haya de corresponder al propietario de la heredad, si no que deba colocarse en el número de las cosas que no tienen dueño y que pertenecen, por lo mismo, al Estado. Lo que la ley, dicen finalmente, castiga en el hecho de cazar en tierra de ajena propiedad, no es precisamente el daño que esperimenta el dueño por la captura de la caza, porque esta á nadie pertenece, si no la perturbacion que esperimenta el propietario en el goce de su posesion esclusiva.

A pesar de estas observaciones y de la respetable opinion de los escritores á quienes hemos aludido, la decision del artículo 8.° en el punto de que vamos hablando, nos parece de una incontestable justicia. Ciertamente en el órden de los principios del derecho, considerados en su abstracta y mas rigorosa comprension, el propietario del terreno invadido carecerá de un título, puramente jurídico, para hacer suya la caza herida ó muerta por otro; pero el rigor de los principios y la abstraccion exagerada de las nociones del derecho, pueden dar lugar á decisiones injustas é inconvenientes. *Summum jus, summa injuria*. La solucion de esta controversia debe buscarse en las prescripciones de la justicia fundamental; en las máximas que la razon autoriza; en lo que aconsejan el buen sentido y la conveniencia pública. ¿Puede ser conforme á las prescripciones de esa justicia, que está al alcance de todo buen sentido, que el que invade la propiedad ajena cometiendo un delito, pertur-

bando una legítima posesion y desquiciando el primer elemento del órden público, se haga dueño de la caza que arrebata por estos medios? ¿Puede permitir la razon esa contradiccion manifiesta y esa subversion de las ideas de lo recto y de lo justo? Dígase lo que se quiera, en la acepcion rigorosa de los principios, la razon y la justicia no pueden permitir jamás que al lado de una disposicion prohibitiva se establezca otra disposicion que sirva de estímulo y aliciente para infringirla; y esto es precisamente lo que sucederia, si prohidiéndose al cazador invadir las tierras de propiedad particular, la ley le hiciera, sin embargo, dueño de los animales que hiriese ó matase en la propiedad invadida. Ni bastaria que se castigase con penas mas ó menos graves el hecho de la invasion, cuando el correctivo de esa penalidad se veria desvirtuado por un interés quizá mas eficaz y poderoso que el temor del castigo. Sobre todo, la conveniencia pública se opondrá siempre, donde imperen la prudencia y la prevision, á que la ley, lejos de evitarlas, autorice y fomente las ocasiones de atentar contra la propiedad, de perturbar el reposo de los ciudadanos, de producir conflictos y altercados funestos, y de que se ejerciten y desarrollen los instintos y las pasiones de los mas osados. La ley debe guardar consecuencia en sus disposiciones, y si halla justo, como sin duda lo es, prohibir con penas la violacion de la propiedad ajena, justo será tambien que el invasor no reporte beneficio ni lucro alguno por la ejecucion de ese mismo acto.

La disposicion del artículo 8.° se refiere literalmente á los cercados de tierra de propiedad particular, y puede suscitarse la duda de si las observaciones que hemos espuesto en los párrafos anteriores, son aplicables á las tierras no cercadas de la misma clase. Nosotros creemos que lo son. El cazador que invade las tierras no cercadas de propiedad particular está, para el objeto de hacer ó no suya la caza, en el mismo caso y en idénticas condiciones, que el que viola y salta tierras cercadas de la misma clase. La cerca de la propiedad, para el objeto de que se trata, es una circunstancia puramente accidental. No lo será para apreciar la gravedad del hecho, y por eso el que viola y salta el cercado de tierra merece mayor pena que el que invade una propiedad abierta, puesto que á la violacion acompaña una circunstancia agravante del delito ó falta cometida; mas para la adjudicacion ó apropiacion de la caza, aquella circunstancia es indiferente. Tanto se viola la propiedad; tanto se falta al respeto debido á ella en un caso como en otro; ni en aquel ni en este asiste al propietario un derecho real y efectivo á la caza existente en su propiedad; y como la razon fundamental en que hemos apoyado nuestra opinion cuando se trata de tierras cercadas, se funda en la injusticia é inconveniencia de ofrecer al cazador un estímulo para quebrantar la prohibicion de la ley, y un beneficio ó lucro por haberla quebrantado, creemos que la disposicion del artículo 8.° debe aplicarse tambien á las tierras no cercadas de propiedad particular, porque concurre respecto de ellas la misma razon, idénticas circunstancias.

Hasta aquí hemos hablado de las tierras de propiedad particular, es decir, de las tierras llanas destinadas á la labor y al cultivo. Respecto de los terrenos destinados á plantío, cuyo suelo y arbolado son tambien de dominio particular, dispuso el decreto de 14 de enero de 1812, restablecido en 23 de noviembre de 1836, que fuese libre el disfrute de la caza y pesca. Mas el decreto de 13 de setiembre de 1837 derogó la anterior disposicion, ordenando que dicho disfrute en los terrenos cerrados ó acotados correspondiese privativamente á los dueños, sin que ningun otro pudiera cazar y pescar en ellos sin su consentimiento ó de quien sus veces hiciere.

La inteligencia y aplicacion de estas disposiciones no ofrece ninguna duda; podria sin embargo ofrecerla la comparacion de ellas con las ya examinadas del decreto de 1834. En el artículo 8.° de este decreto se habla de los *cercados* de tierra; y en el artículo 36 del mismo se dispone que se entenderán por tierras cercadas las que *lo estén enteramente*, y no á medias ó aportilladas,

de suerte que *no pueden entrar en ellas las caballerías*. Sin embargo, los decretos de 1812 y 1837 hablan de terrenos *cerrados* ó *acotados*, y como esta palabra no supone la cerca *material* y *efectiva* del terreno, si no cualquiera señal visible que indique el hecho de la propiedad, cabe la duda sobre la inteligencia de la palabra *cerrados* que emplea el decreto de 1834. La duda, en efecto, ha existido, habiéndose resuelto por real órden de 25 de noviembre de 1847, declarando que *la ley prohibe la invasion en todo terreno de propiedad particular que esté cerrado ó acotado, sin exigir que esté cercado de pared contínua*. Resulta por consecuencia que las disposiciones del decreto de 1834 y la solucion que hemos dado á las cuestiones discutidas, se aplican no solo á las tierras cercadas de propiedad particular, si no tambien á las que estén acotadas ó amojonadas, es decir, á las que tengan señales materiales y visibles que marquen el hecho de la propiedad y la demarcacion de la pertenencia.

Para concluir las observaciones referentes á este párrafo, resta decir dos palabras sobre las facultades que competen á los arrendatarios de tierras de propiedad particular. El artículo 5 del decreto de 1834 dispone que tendrán en órden á la caza las que estipulen con los dueños. Por manera que segun esta declaracion quedan resueltas las cuestiones indicadas en la anterior seccion. Si el arrendatario no tiene en órden á la caza mas que las facultades estipuladas con el dueño, es claro que no tendrá ningunas cuando la caza no haya sido objeto de su estipulacion. Sin embargo, la decision no podrá ser absoluta y uniforme en todos los casos, y al aplicarla los jueces y tribunales deberán tener presentes las reglas espuestas en dicha seccion, párrafo 1.°

§. 2.° *De la caza en tierras de propios y baldíos.*

Una vez adoptado el principio que sirve de fundamento á las disposiciones examinadas en el párrafo anterior, parecia fácil establecer reglas generales, en consonancia con ese principio, para el ejercicio de la caza en los terrenos de que vamos á tratar. Si los ayuntamientos son los legítimos administradores de esa clase de bienes, ya correspondan á sus propios, ya sean de uso comun; si respecto de los primeros y para los efectos de su ámplia y casi ilimitada administracion, cabe considerarlos como propietarios, el decreto de 1834, pudo establecer alguna ó algunas bases generales, de donde se derivasen las facultades de aquellas corporaciones en punto á la caza. No lo hizo así; antes bien descendió, con alguna confusion por cierto, á dictar disposiciones especiales, sobre las cuales recaerán nuestras observaciones.

Refiérense estas disposiciones á los terrenos pertenecientes á los propios de los pueblos, y á los montes y baldíos que, por no corresponder á ellos, son de aprovechamiento comun; y en cuanto á los primeros, unas se contraen á los terrenos de propios arrendados y otras á los que no lo están. En cada uno de estos casos las disposiciones son distintas, como vamos á esponer.

El artículo 12 dispone que los ayuntamientos podrán arrendar con aprobacion del subdelegado (hoy gobernador) de la provincia la caza en las tierras de propios de los pueblos; y que los arrendatarios podrán dar licia á los demas para que cacen; pero unos y otros con sujecion á las restricciones que se espresan. Esta disposicion es consiguiente en su primera parte á las facultades que competen á los ayuntamientos como administradores de los bienes de propios, y en la segunda á las que se trasmiten al arrendatario, quien por el hecho de serlo de la caza, puede ejercer todas las facultades inherentes al derecho adquirido.

El artículo 13 ordena que los que cacen en tierras de propios arrendadas sin tener licencia del arrendatario... incurrirán en la responsabilidad que indicaremos mas adelante. Nótese que en el artículo anterior se habla de la *caza arrendada*; y en este de las *tierras de propios arrendadas*, lo cual presupone que el arrendatario de estas tierras haya estipulado el disfrute de la caza, á no ser que en el artículo 13 se hablara equivocadamen-

te del arrendatario *de tierras* de propios, en lugar del arrendatario de la caza á que se refiere el artículo 12, puesto que, atendida la correlacion que guardan entre sí, aquel parece ser el complemento de este, y que contiene la responsabilidad del cazador que perjudica al arrendatario, á quien se refieren ambos artículos.

En los montes, baldíos y tierras de propios que no estén arrendadas se permite cazar, con sujecion á las restricciones establecidas en el decreto, á los que obtengan licencia del subdelegado, hoy gobernador de la provincia (1). De modo que en estos terrenos, á pesar de pertenecer á los ayuntamientos en calidad de propios, no tienen intervencion alguna las corporaciones municipales para el objeto de que se trata.

Sin embargo, el artículo 14 refiriéndose á los montes y baldíos no pertenecientes á propios, dispone que podrán cazar los vecinos del pueblo respectivo, con sujecion á las reglas y restricciones establecidas, añadiendo despues: «Las justicias podrán dar licencia para lo mismo á los forasteros.» La primera observacion á que dá lugar este artículo es que al permitir la caza á los vecinos en montes y baldíos que no sean de propios, no exige espresamente licencia; lo cual ni guarda conformidad con la disposicion del artículo 15 que la prescribe para cazar en montes, baldíos y tierras de propios no arrendadas, ni seria conveniente por los abusos y desórdenes á que podria conducir esa libertad tan absoluta. Las palabras, «las justicias podrán dar licencia *para lo mismo á los forasteros*, parecen indicar que tambien se quiso prescribir para los vecinos. En tal concepto, y aun en el de que la disposicion se refiera únicamente á los forasteros, ofrece una irregularidad notable, porque debiendo dar la licencia para cazar en montes, baldíos y tierras de propios no arrendadas el gobernador de la provincia, no alcanzamos la razon que pudo tener el decreto para autorizar á las justicias de los pueblos á conceder esta misma licencia, tratándose de montes y baldíos no pertenecientes á propios.

Conocida la facultad de cazar en las diversas clases de terrenos de que hemos hablado, examinemos las restricciones que el decreto establece:

1.° *Tiempo en que se prohibe cazar*. Nuestra legislacion ha reconocido siempre la necesidad de prohibir la caza durante cierta época del año para favorecer su desarrollo y procurar su conservacion. En las Córtes de Madrid de 1435 se ordenó ya que las justicias formaran ordenanzas para declarar el tiempo en que tenia lugar la cria de la caza, durante el cual quedaba prohibida. Otro tanto se ordenó por D. Cárlos I en 1552, determinando como tiempo de cria los meses de marzo, abril y mayo; pero la ordenanza de 1804 estendió este período, disponiendo que se prohibia cazar en las provincias de puertos acá desde 1.° de marzo hasta 1.° de agosto de cada año, y de puertos al mar Océano desde 1.° de marzo hasta 1.° de setiembre. El decreto de 1834 prohibió la caza en toda clase de tierras, que no sean de propiedad particular, desde 1.° de abril hasta 1.° de setiembre en las provincias que designa, que son las de puertos al Océano y desde 1.° de marzo hasta 1.° de agosto en las demas.

El sistema adoptado en esta parte por el decreto de 1834, no nos parece el mas conveniente. En un pais de dilatada estension como el nuestro, donde las condiciones topográficas y atmosféricas hacen que el clima sea distinto casi en cada una de las provincias, no es fácil establecer una regla absoluta, sin dar ocasion á inconvenientes que pueden perjudicar el objeto mismo que se trata de favorecer. Prefeririamos, pues, que la ley consignase el principio de la prohibicion, dejando á la autoridad administrativa de cada provincia la designacion del tiempo de la veda, y la publicacion de su ordenanza ó bando con la conveniente anticipacion, segun disponia el artículo 26 de la de 1804 ya citada.

La prohibicion del artículo 9 es absoluta como hemos visto; comprende todos los medios ó instrumentos de cazar, y es estensiva

(1) Art. 15.

á todo género de animales. Pueden considerarse únicamente esceptuadas las aves de paso, cuya caza se permite durante el tiempo de su tránsito, cuando quiera que se verifique. Lo que el decreto no prohibe es la venta de la caza; pero sin duda se ha considerado siempre implícitamente comprendida esta prohibicion, puesto que de hecho se prohibe dicha venta por las autoridades municipales y se persigue á los que se ocupan en este tráfico.

2.ª *restriccion. Dias de nieve y fortuna.* El mismo fin de favorecer y procurar el desarrollo y conservacion de la caza, inspiró desde tiempos muy antiguos la idea de prohibirla en los dias mencionados. La disposicion se ha venido reiterando constantemente, y el artículo 10 del decreto vigente prohibe cazar, durante todo el año, en los dias de nieve y los llamados de fortuna. Esceptúase únicamente la caza de animales dañinos en que, como se comprende fácilmente, no concurre la causa de aquella prohibicion.

Que esta causa está de todo punto justificada, no hay para que demostrarlo. La aprehension de la caza está al alcance de los medios mas sencillos, cuando cubierto de nieve el suelo ó esperimentándose recios temporales, no puede salir de sus guaridas ó volver á ellas. La caza entonces es una grangería que se hace á poca costa, lucrativa y destructora, y las leyes no deben permitirla cuando no tiene otro objeto que una especulacion contraria al interés general.

3.ª *restriccion. Medios ó instrumentos prohibidos.* Como la caza en tiempo vedado está absolutamente prohibida, claro es que durante él no pueden usarse ningunos medios de verificarla. La restriccion de que hablamos se refiere por consiguiente al tiempo en que la caza es permitida.

Desde muy antiguo la legislacion española ha proscrito todos aquellos medios que conducen mas ó menos directamente á la destruccion de la caza. En las Córtes de Valladolid se dictaron penas para los que cazaran con arcabúz y escopeta, con toda clase de tiro de pólvora, y con yerba de ballestero. Prohibiéronse despues los lazos de alambre, las cerdas, las redes, los reclamos, los perros nocharniegos y los perdigones. En tiempo de don Felipe III se permitió cazar con arcabúz ó escopeta, ó con otro tiro de pólvora, ó con bala ó perdigones, reiterándose la prohibicion de verificarlo con todo género de lazos y armadijos, con perdigones y reclamos, y demas instrumentos. La ordenanza de 1804 permitió el uso de la escopeta y perros á los nobles, eclesiásticos y personas honradas de los pueblos; mas no á los jornaleros y artesanos, que solo podrian hacerlo por diversion los dias de fiesta. Prohibió tambien la conservacion de los hurones, las perdices y perdigones de reclamo, lazos, y en general todos los instrumentos que destruyen la caza. Ultimamente, el art. 11 del decreto de 1834 prohibe cazar en todo tiempo con hurones, lazos, perchas, redes y reclamos machos, esceptuando solamente las codornices y demas aves de paso, respecto de las cuales permite cazarlas durante el tiempo de su tránsito, aunque sea con redes y reclamos.

La designacion específica de los medios que prohibe el artículo citado puede dar lugar á creer que autoriza todos los demas. Esta consecuencia no seria razonable, porque hoy mismo se conocen otros medios, y mañana pueden inventarse otros mas destructores y funestos que los mencionados, y no seria justo ni lógico permitir el uso de ellos, cuando podian conducir mas eficazmente á la destruccion de la caza que se trata de evitar. En este punto debe dejarse mucho arbitrio á la accion de las autoridades administrativas, partiendo del supuesto que donde concurra la razon fundamental de la ley, que es prohibir todos los medios que destruyen la caza, debe ser aplicada su disposicion. Lo mas conveniente seria que la ley espresara los medios permitidos para el ejercicio de la caza, proscribiendo todos los demas; lo cual no deberia ofrecer inconveniente, puesto que son conocidos los procedimientos que no destruyen la caza, sin poner obstáculo al ejercicio de ella. Este es el sistema que ha seguido la actual legislacion francesa, que solo autoriza la caza á tiro, á la carrera ó con perros, y con huron y cierta clase de redes en la caza de los co-

nejos, prohibiendo espresamente todos los demas.

La escepcion que hace el decreto respecto de las codornices y demas aves de paso nos parece muy fundada. Esta caza constituye un gran recurso de placer, de comodidad y aun de útil grangería en una gran parte de pueblos, y no seria conveniente prohibirla, cuando, por ser transitoria y pasagera, no concurren en ella las razones que reclaman la conservacion de la caza en general. Las autoridades administrativas, y aun las locales en su nombre, deben tener, sin embargo, la facultad de dictar los bandos convenientes para evitar los abusos á que podria dar ocasion una estremada libertad en el ejercicio de esta caza. La ley francesa autoriza á los prefectos para fijar la época y el modo de cazar estos animales, y permitir aun los medios prohibidos para la caza ordinaria, segun las costumbres establecidas en cada localidad.

4.ª *restriccion. Distancia de las poblaciones.* La seguridad pública, como ya hemos tenido ocasion de manifestar, exige en el ejercicio de la caza ciertas medidas de precaucion y prudencia que la ley debe establecer espresamente. Si se permitiera cazar á cualquier distancia de las poblaciones, la imprudencia de unos, la negligencia de otros, y muchas veces casualidades imprevistas darian lugar á desgracias lamentables. Por eso el decreto de 1834 establece muy oportunamente que no se permitirá, por regla general, cazar hasta la distancia de quinientas varas, contadas desde las últimas casas de los pueblos, para evitar los peligros de personas y de incendios. Esta disposicion suele ampliarse á casos análogos en la práctica; y por eso en los bandos que, al abrirse la época de la caza, publican las justicias, generalmente se dispone que nadie pueda tirar á menos de treinta pasos de distancia de las eras, casas y posesiones en que haya trabajadores y vecinos.

5.ª *restriccion. Licencia.* Tambien la seguridad pública exige que nadie pueda dedicarse, sin licencia de la autoridad, al ejercicio de la caza, ya se haga por recreo, ó ya por oficio ó como modo de vivir. Esta restriccion es indispensable para evitar abusos, que podrian ser de fatales consecuencias; porque indudablemente seria peligroso permitir á todos dicho ejercicio y el uso de las armas que en él suelen emplearse. Mas, no se entienda por esto restringido, ó menoscabado en manera alguna el libre ejercicio del derecho de propiedad: la licencia de la autoridad no confiere por sí sola la facultad de cazar en terrenos de propiedad particular; será ademas necesaria la licencia del dueño del terreno, ó del que le represente en este derecho, segun antes hemos manifestado. Conforme con estos principios el artículo 124 del reglamento de policía de 1824 declaró, que las licencias para cazar se entenderán concedidas sin perjuicio de los derechos de propiedad y con sujecion á las leyes de veda.

Nuestra antigua legislacion, dirigida mas bien á proscribir los medios destructores de la caza que á restringir su ejercicio en las personas á quienes era permitido, requeria la licencia de la autoridad, no para cazar, si no para emplear algunos de aquellos medios que por regla general ó por circunstancias locales estaban prohibidos. Asi es, que por el capítulo 4.° de la ordenanza de 1772, y por el 5.° de la de 1804, para cazar con galgos dentro de diez leguas en contorno de la corte y sitios reales, los nobles, eclesiásticos y personas honradas de los pueblos, únicas á quienes se permitia el libre ejercicio de la caza fuera del tiempo vedado, pues á los artesanos y jornaleros solo les era permitido en los dias de fiesta, debian obtener licencia del Consejo en sala de justicia, por cuya gracia pagaban 300 reales (1); y para hacerlo con escopeta, habian de obtener la licencia del gobernador de dicho Consejo. Sin embargo, las mismas ordenanzas por considerar, no solo útil, si no casi preciso al regalo de las mesas el uso de la caza, permitieron los cazadores de oficio, prohibidos anteriormente, como luego lo fueron tambien por el art. 4.° de la real órden de 17 de febrero de 1818.

(1) Cap. 80 de la real cédula de 19 de marzo de 1801.

Las ideas modernas han introducido tambien reformas convenientes en esta parte de la legislacion. El reglamento de policía de 1824, que aun está vigente en esta materia, salva alguna ligera modificacion que haremos notar, sancionando el principio, consignado despues mas espresamente en otra real disposicion (1), de que nadie pueda cazar sin licencia de la autoridad, é igualando asi á todas las clases del Estado, dispuso (2) que estas licencias solo se concedan á las personas que la tengan para usar armas, ó que las puedan usar sin ella (cuales sean estas personas puede verse en el artículo ARMAS PROHIBIDAS, sec. III, §. 3.°, pág. 593 del tomo 3.°). En la concesion, pues, de licencias para el ejercicio de la caza, hoy no debe atenderse á la categoría de las personas, si no á si podrán ó no abusar de esa concesion en perjuicio de los particulares ó de la seguridad pública, y se supone que no cometerán tal abuso aquellos individuos que inspiren á la autoridad la confianza bastante para permitirles el uso de armas. Por eso está tambien mandado (3) que para concederlas, precedan informes de oficio que abonen la honradez y buena conducta del que la solicitare, sin temor ni recelo de que abuse de ella; que nunca se concedan á los menores de 20 años, en razon á que por su inesperiencia pudieran cometer dicho abuso; y para mayor garantía y seguridad, que se esprese en la licencia el nombre y apellido, edad, estado, vecindad, empleo, ocupacion ú oficio del interesado, y ademas sus señas personales.

Segun la disposicion citada del reglamento de 1824, para poderse conceder la licencia de cazar era requisito indispensable el que hubiese obtenido el interesado préviamente la de uso de armas, fundándose sin duda en que las de fuego son el medio que mas generalmente se emplea para el ejercicio de la caza. Mas, el decreto de 3 de mayo de 1834, teniendo en consideracion que tambien puede cazarse lícitamente sin armas de fuego, con mucha razon no exige dicho requisito como circunstancia indispensable. Podrá, pues, concederse la licencia para cazar sin haber obtenido préviamente la de armas; pero no podrá cazarse con estas sin la autorizacion competente para usarlas.

Dicha licencia ha de concederse por escrito, estendida en papel del sello 3.° (1). Ademas, ha de pagar por ella el interesado la retribucion correspondiente. Esta retribucion, segun el reglamento de 1824, es de 60 rs. en Madrid y poblaciones de mas de diez mil almas, y de 40 rs. en los demas pueblos; debiendo pagar los cazadores de oficio, que vemos otra vez permitidos, la mitad de las cuotas antedichas respectivamente, y en todo caso la retribucion correspondiente al uso de armas. Esto fué modificado por el decreto de 3 de mayo de 1834, segun el cual (2) los vecinos habian de pagar por la licencia anual para cazar en el término jurisdiccional de sus pueblos respectivos, 10 rs.; el doble los que la obtuviesen para cazar en toda la provincia, y el cuádruplo los cazadores de profesion, los cuales se entenderá que la tienen para toda la provincia, cuyos productos quedaron afectos especialmente al pago de las recompensas por la estincion de animales dañinos (3). Mas, por real órden de 23 del mismo mes y año se mandó, que quedase en suspenso la ejecucion de lo antedicho, y que continuase la policía espidiendo las licencias para caza y pesca con las mismas retribuciones establecidas en sus reglamentos, aplicando á sus fondos el producto como hasta entonces; y asi viene practicándose por punto general, á pesar de que indudablemente es mas lógico, racional y conveniente lo que sobre esta materia dispone el decreto de 1834. Estas licencias espiran de derecho el último dia del año en que se espidieren; y los que quieran continuar usando de ellas deben renovarlas antes que caduquen, pagando cada vez nueva retribucion (4).

(1) Real órden de 10 de enero de 1827.
(2) Art. 122.
(3) Real órden de 17 de febrero de 1818.

(1) Art. 16 del decreto cit. de 3 de mayo de 1834, y artículo 17 del de 8 de agosto de 1851.
(2) Art. 16 antes citado.
(3) Art. 17.
(4) Art. 123 del reglamento de 1824, y real órden de 30 de mayo de 1846.

Los gobernadores de provincia, como gefes superiores en la suya respectiva de los ramos de policía y seguridad pública, son hoy la autoridad á quien compete conceder las licencias de cazar. Al efecto, el interesado debe dirigir su solicitud por escrito á dicha autoridad, quien por regla general la concede siempre que de los informes, que pide ordinariamente al alcalde de barrio ó al constitucional del pueblo en que tenga su residencia el solicitante, no aparezcan motivos para negarla. A la espresada autoridad, pues, deben acudir todas las clases del Estado para sacar dicha licencia, escepto los militares á quienes está concedido que la obtengan gratis de sus respectivos gefes, esto es, de los capitanes generales, gobernadores ó comandantes militares (1). Desde luego se creyeron con derecho á disfrutar de este privilegio todos los que gozaban de fuero militar; y para resolver las dudas y reclamaciones que se suscitaron, se declaró por real órden de 23 de marzo de 1832, que los sugetos á quienes los gefes militares pueden conceder licencia para cazar, son los que componen las clases del ejército activo y ramo político de guerra, los que gozan el fuero entero militar, y los que están retirados con goce del criminal por habérseles considerado con quince años de servicio; debiendo todos los demas acudir á la policía, hoy al gobernador de la provincia, aunque gocen el mismo fuero criminal por otras causas, ó disfruten pensiones alimenticias ó escudos de ventaja. Esta misma disposicion ha sido reproducida por otra muy reciente (2), declarando ademas que tampoco gozan de dicho privilegio los empleados de la real casa y patrimonio, ni ninguna otra persona que no sea de las espresadas anteriormente.

§. 3.° *De la caza de palomas.*

La caza de las palomas ha sido considerada siempre como objeto de reglas y disposiciones especiales, y por tanto, en el decreto de 1834 constituye un título particular. Puede, en efecto, dicha caza considerarse bajo dos aspectos diferentes, segun sea la naturaleza de aquellas aves; porque, ó se trata de palomas campestres, que conservan su naturaleza de animales salvajes, y susceptibles de la ocupacion del primero que las aprehende; ó de palomas domésticas que han perdido tal carácter, y corresponden al dueño del fundo en que se halla establecido su albergue ó palomar. En el primer caso las palomas tienen la condicion de los demas animales que son objeto de la caza ordinaria, y la caza de ellas debe estar sujeta á las reglas prescritas para la de estos: en el segundo, la administracion debe establecer ciertas restricciones especiales para evitar que la negligencia, ó el interés de los dueños de los palomares, perjudiquen á los propietarios de las heredades inmediatas.

Calcada desde muy antiguo sobre estos principios la legislacion española, prohibióse ya en tiempo de don Enrique IV tirar á las palomas con ballesta, arco, piedra y de cualquier otra manera, y armarles redes y lazos una legua en derredor de donde hubiese palomar ó palomares. En tiempo del señor don Cárlos III se ordenó que en los meses de octubre y noviembre, y en los de junio, julio y agosto, pudiera tirarse á las palomas á cualquier distancia, hallándose fuera de los palomares, y que en los demas meses no se pudiera tirar á la inmediacion de estos ni á la distancia de una legua á sus alrededores. La ordenanza de 1804 adoptó estas disposiciones, y el decreto de 1834, ampliándolas, mejoró notablemente la legislacion relativa á este particular.

El artículo 19, partiendo de la doble consideracion que se deja espuesta, dispone que las palomas campesinas están comprendidas en las demas aves que pueden cazarse con sujecion á las reglas prescritas. Nada hay, pues, que prevenir ni advertir respecto de ellas. Todas las reglas que hemos examinado ya, prescritas para la caza ordinaria, todas se aplican á la caza de las palomas campesinas.

Para la caza de las palomas domésticas es-

(1) Real órden de 10 de enero de 1827.
(2) Real órden de 15 de diciembre de 1853.

tablece dos reglas generales: 1.ª que no podrá tirarse á las palomas domésticas ajenas, si no á la distancia de mil varas de sus palomares: 2.ª que los dueños de ellos deberán tenerlos cerrados durante los meses de octubre y noviembre, y desde 15 de junio hasta 15 de agosto bajo ciertas penas; siendo libre durante estas dos épocas tirar á dichas palomas domésticas á cualquier distancia fuera del pueblo, aunque sea dentro de las mil varas de que se ha hecho mencion, siempre que en este último caso se tire con las espaldas vueltas al palomar (1).

La primera regla se funda en el respeto debido al derecho de propiedad. Las palomas domésticas recogidas en sus palomares, hemos indicado que forman un accesorio de las heredades, una parte integrante de la propiedad; todos los principios de justicia, pues, de derecho y de conveniencia, prescriben que sean respetadas y que se prohiba su persecucion, mientras no se alejen á una distancia tal, que haga presumir que los animales han perdido la costumbre de volver á su albergue, y recobrado su natural libertad, ó que el dueño las tiene en un abandono tan culpable, que justifica la disposicion de la ley. En este concepto el decreto ha fijado prudencialmente la distancia de mil varas; permitiendo que halladas las palomas fuera de ese límite, pueda cualquiera cazarlas y perseguirlas en todas las épocas del año.

La segunda regla se apoya tambien en razones incontestables. Por punto general la sementera se verifica en los meses de setiembre y octubre; y la recoleccion de las mieses desde 15 de junio hasta 15 de agosto. Permitir que puedan tenerse abiertos los palomares durante esas dos épocas, en las cuales tanto daño pueden causar en sembrados y en las mieses las palomas desparramadas por los campos, seria un acto de imprevision indisculpable en una administracion medianamente organizada. El derecho de un particular debe conciliarse con el interés de los demas, que considerado colectivamente constituye el interés general; por eso recibe en su ejercicio todas las restricciones que aconseja la conveniencia pública. De ahí la justicia de la disposicion; de ahí el fundamento de la sancion que puede considerarse como su complemento: el que falta á la obligacion de tener cerrado su palomar en aquellas dos épocas, autoriza en cierto modo á los demas para que se defiendan de un enemigo pernicioso; cualquiera debe tener en semejante caso libertad para tirar á las palomas domésticas á cualquier distancia, colocándose con las espaldas vueltas al palomar, que todavia es una propiedad que debe ser respetada.

La designacion de las dos épocas que hace el decreto, no puede entenderse si no prudencialmente, y en un concepto general. La variedad de los climas que se observa en las diferentes provincias de nuestra Península; las prácticas diversas porque se rijen los labradores, y la mayor ó menor regularidad en las condiciones atmosféricas, anticipan ó retardan las épocas de la sementera y recoleccion, sin que pueda establecerse sobre este punto una regla general y absoluta. Asi lo previó el mismo decreto, disponiendo en el artículo 23, que si por razon de la diferencia de los climas conviniese señalar plazos diversos de los fijados anteriormente para el cerramiento de los palomares en las dos épocas espresadas, ó en alguna de ellas, podrá hacerlo la justicia del pueblo, siempre que el plazo respectivo no esceda de dos meses, avisándolo con anticipacion para gobierno de los dueños de palomares. Esto es efectivamente lo que se observa en la práctica; las justicias de los pueblos, segun el clima y las costumbres agrícolas de cada uno, determinan los dos períodos de la sementera y recoleccion, publicando oportunamente el bando que contiene estas y las demas disposiciones que exigen las circunstancias especiales de cada localidad.

§. 4.° *De la caza de animales dañinos.*

Tal es el epígrafe que lleva el título 4 del real decreto que vamos examinando. Cual-

(1) Arts. 20, 21, 22 y 24.

quiera comprenderá sin esfuerzo, que los medios ejercitados para perseguir los animales de esta especie, mas que caza, en el sentido concreto y verdadero de esta palabra, constituyen la persecucion y esterminio de ellos. El derecho de verificarlo, mas que un derecho civil, es un acto de legítima defensa, natural é inviolable, que tiene por objeto preservar los frutos de la tierra, los animales domésticos y hasta la seguridad personal, de los daños que pudieran causar aquellas bestias feroces y destructoras. En este concepto, los principios en que descansa el ejercicio de un derecho tan legítimo, son muy sencillos: y pueden reducirse á la breve y no menos sencilla fórmula de que el propietario, el arrendatario, el poseedor, en suma, de una heredad, de un fundo cualquiera, debe tener espedito el derecho de esterminar por los medios conducentes los animales de naturaleza dañinos que pueden perjudicar sus intereses.

Sin embargo, como en el ejercicio de este derecho tan legítimo todavia pudiera perjudicarse á los demas; como la seguridad pública prescribe ciertas restricciones para su conservacion y defensa; como importa determinar las especies de los animales que pueden ser perseguidos y esterminados en virtud de ese derecho amplísimo; de ahí que la administracion pública intervenga en esta materia para establecer reglas oportunas, evitar que el derecho degenere en licencia y que se consigan aquellos saludables fines de que una legislacion previsora é ilustrada no puede desentenderse jamás.

Nuestras leyes desde tiempos muy antiguos han venido dictando disposiciones acertadas sobre este particular, unas veces autorizando á las justicias para disponer la persecucion y matanza de los animales dañinos; otras, prohibiendo armar, cepos y lazos grandes con hierros, por el peligro que pudieran correr los hombres y las caballerías; mas adelante, ofreciendo premios proporcionados á los aprehensores; despues, prohibiendo las batidas y monterías de animales nocivos, asi como las cacerías generales que solian hacerse una ó mas veces al año; por último, regularizando esta especie de caza y ofreciendo convenientes estímulos para favorecerla.

Tal ha sido tambien el objeto de las disposiciones del decreto de 1834. En la primera se determinan, y con mucha oportunidad en nuestro concepto, las especies de animales que deben considerarse como dañinos, porque pudiera suceder, faltando esta designacion, que á pretesto de perseguir y esterminar los nocivos, se invadieran las propiedades públicas ó privadas para perseguir y aprehender otros de diferente especie, causando en ellas perjuicios de mas ó menos trascendencia. Segun aquella clasificacion, los animales dañinos son los lobos, zorras, garduñas, gatos monteses, tejones y turones, y á todos ellos deben aplicarse las disposiciones del decreto.

Estas se refieren á las tierras abiertas de cualquier clase que sean y á las cercadas. Respecto de las primeras dispone el artículo 25, que será libre la caza de animales dañinos en las tierras abiertas de propios, en las baldías y en las rastrojeras no cerradas de propiedad particular, durante todo el año, inclusos los dias de nieve y los llamados de fortuna. No se permite, añade el artículo 26, en ninguna clase de tierras abiertas, aunque estén amojonadas, cazar con cepos, trampas, ni otros armadijos de que pueda resultar perjuicio á los pasajeros ó á los animales domésticos. La justicia de esta última disposicion es evidente; no asi, en nuestro concepto, la de esa indefinida libertad que se concede para cazar los animales dañinos en toda clase de tierras abiertas, porque sobre no ser conforme al respeto de la propiedad que el decreto consagra como base de sus disposiciones, puede perjudicar gravemente á los dueños en terrenos montuosos, sobre todo donde los medios que se emplean para aquella caza ocasionan destrozos casi inevitables.

En las tierras cercadas, sean de propios ó de particulares, no se permite la caza de animales dañinos sin licencia de los dueños ó arrendatarios. Aquellos y estos, y no otros en sus respectivas tierras cercadas, podrán poner cepos ú otras cualesquier especies de trampas y armadijos para cojerlos. En tal

caso estarán obligados á poner y mantener en paraje visible un padron con el aviso, para que nadie pueda alegar ignorancia (1). Suponemos que la palabra dueños aplicada en el artículo á las tierras de propios, se referirá á la corporacion municipal que los administra, y en este concepto serán las justicias de los pueblos las que dén la licencia que se prescribe.

Un abuso, muy perjudicial á los intereses de los propietarios, creyó conveniente corregir el decreto de 1834. El pretesto, en sí plausible, de esterminar los animales nocivos, habia introducido desde muy antiguo las batidas ó cacerías generales de que hablan nuestras leyes; y aunque por la ordenanza de 1804 quedaron prohibidas, el artículo 35 del citado decreto reiteró semejante prohibicion, ordenando que no se practicasen bajo ningun pretesto, incluso el esterminio de animales dañinos, dejando este cuidado al interés particular de los cazadores.

Tambien creyó oportuno el decreto fomentar el esterminio de estos animales, ofreciendo algun estímulo que incitase á su persecucion; á este fin estableció un premio para los que presentasen alguno ó algunos de ellos, proporcionado á su entidad y cualidades nocivas y destructoras. Por cada lobo se entrega al que le presenta 40 reales, 60 por cada loba y 80 si está preñada, por cada lobezno 20 reales; la mitad respectivamente de las cantidades espresadas por cada zorro, zorra ó zorrillo; y la cuarta parte tambien respectivamente por las garduñas y demas animales menores espresados anteriormente, tanto machos, como hembras y sus crias. Para evitar todo género de fraudes en este punto, se dispuso tambien, que los que tuviesen derecho á las precedentes recompensas, deberán presentar á la justicia el animal ó animales muertos, entregándoseles la cantidad correspondiente bajo recibo (2).

El conocimiento de los abusos que de esta facultad, concedida ya en la ordenanza de 1804, solian hacer los ayuntamientos, es á todos notorio. Las autoridades administrativas deberán tener mucho celo para evitarlos, adoptando la práctica que en algunas partes se estableció para ello.

(1) Arts. 27 y 28.
(2) Art. 30.

SECCION III.

DISPOSICIONES DEL DERECHO ESPAÑOL RELATIVAS Á LA PESCA MARÍTIMA.

Al entrar en la esposicion del derecho español sobre esta importante materia, comprenderán nuestros lectores, que no nos proponemos escribir un tratado sobre todos los pormenores de ella, ni examinarla bajo el punto de vista práctico, económico y facultativo, de que es susceptible. Nos proponemos solamente, como lo exije el objeto de nuestra obra, dar á conocer los caractéres y reglas principales de esta lucrativa industria, bajo el punto de vista del derecho constituido, es decir, determinar las condiciones legales con que puede verificarse en bien de los particulares y con aprovechamiento público. La pesca, y señaladamente la de los mares, lleva consigo, como queda espuesto en la seccion primera, muchas restricciones saludables, á las que debe sujetarse su ejercicio. Las relaciones mútuas entre los pescadores, la primacía y el órden de los parajes aptos para pescar, la continuidad de los derechos adquiridos, la necesidad del prudente señalamiento de las estaciones, las artes que pueden usarse, la prohibicion de ciertos inventos destructores, y otras muchas consideraciones, en fin, autorizan y aun reclaman la accion justa, legítima y útil de la autoridad pública, para establecer cuanto considere conveniente.

Consideradas bajo un concepto abstracto las disposiciones generales y particulares sobre la pesca marítima, creemos que su objeto puede reducirse á los particulares siguientes: facultad de ejercerla; instrumentos ó artes para pescar; sitios y estaciones en que se permite; pesqueras especiales. Adoptando esta ordenada clasificacion, la seguiremos en la esposicion de nuestras observaciones,

haciendo preceder algunas nociones históricas para el completo conocimiento de nuestros lectores.

§. 1.° *Nociones históricas.*

La antigüedad de la pesca del mar se pierde en los tiempos primitivos de nuestra historia. Dados los españoles á empresas árduas y atrevidas, aficionados al comercio, y movidos por su viva inteligencia, cultivaron siempre con fruto el arte de la navegacion, á la cual ha precedido como causa eficaz de su desarrollo el ejercicio de la pesca.

Sin necesidad de remontarnos á épocas anteriores, hallamos notables vestigios de ella en la España romana. Marcial, hablando con gran desprecio de las ranas y agujas que se comian en Roma, elogia las trillas escelentes de Galicia, *que si no llegaban*, dice, *al peso de tres libras, se arrojaban al mar sin comerlas*. Habla tambien de las conchas del mismo mar, y algunos historiadores hacen mencion de las salpas de Ibiza, de la murena de Gibraltar, del colias ó lacerto sexitano, del sollo tan comun entre los romanos, del pescado seco que en gran cantidad se llevaba á Roma de nuestras costas meridionales, y de los adobos, en fin, ó salmueras, que tanto se apreciaban en aquellas mesas (1). Plinio habla de las celebradas cetarias, ó sean los depósitos en que se conservaba viva la pesca que de una vez no podia consumirse, y Estrabon elogia los adobos ó escaveches que hemos indicado, de los cuales dice que se valian los naturales de la Bética para mantener, preparar y beneficiar el pescado que se destinaba al consumo público y al tráfico en los pueblos interiores.

Y en efecto, datos históricos que no hay necesidad de citar, pero que gozan de autenticidad completa, prueban que el pescado fué uno de los principales elementos del floreciente comercio que España sostenia con las demas naciones. La pesca nacional surtia las mesas de los reyes y magnates; el tráfico interior se alimentaba tambien con este eficacísimo recurso; la innumerable multitud de pescados que producia la pesca en las aguas del mar, y la baratura de algunos de ellos, los ponian al alcance de la generalidad de las gentes.

Tenemos á la vista un documento muy curioso, que es el arancel formado por Gutierre Fernandez, alcalde mayor de Toledo en la era de 1393, en el cual consta lo que se hallaba ya ordenado y establecido acerca «del pesar, vender y pagar derechos de los salmones, cóngrios, besugos, pixotas, albures, sabalos, atun, ballena, cóngrios secos, cazones, pulpos, mielgas, tollos, morenas, estruchas, y los pescados menores, como arenques, cerdas, sabogas, alusjas, chopas y sardinas secas;» cuyas disposiciones, como otras que se omiten, prueban el gran consumo de las cosechas de la pesca en aquellos tiempos.

No es de este lugar el exámen de las diversas industrias que por entonces y con posterioridad sostenia y fomentaba la pesca marítima en España; ni el de las disposiciones legales con que, unas veces se contrariaban los intereses de aquellas industrias, influyendo notablemente en su decadencia, y otras se intentaba sacarlas de su abatimiento: basta decir que la suerte de ellas influyó considerablemente y produjo al fin gran decadencia en la pesca de nuestros mares. El economista don Bernardo Ulloa achacaba esta decadencia principalmente al bacalao y pescados salados, que del estranjero entraban cada año en España, y cuyo valor calculaba en tres millones de pesos, y despues de discurrir detenidamente sobre este punto, concluia diciendo: «con que solo resta, que puesta en ejecucion tan saludable máxima, reconozcan los pescadores las utilidades que les produce aumentar sus artes, y se verán en breve pobladas las costas de pescadores, sin que sea acertado querer aumentar la pesca antes de la prohibicion (de introducir pescado estranjero) porque será pretender un imposible, pues el aumento lo ha de producir la ventaja que fueren esperimentando los interesados, y asi á costa de la penalidad y escasez de los primeros años, se con-

(1) Masdeu, tomo 8, pág. 77 y siguientes.

seguirá el fin.» Con posterioridad, y señaladamente en la época del señor don Cárlos III, se dictaron muchas á importantes providencias para sacar la pesca de su abatimiento y decadencia. Concedióse á los pescadores varias franquicias y exenciones en el cáñamo, lino, alquitran y otros artículos indispensables para las pesquerías; se aminoró el precio de la sal, descargando este artículo de varios impuestos; se redujeron los derechos de alcabala y cientos á una exaccion moderada en las primeras ventas; se suprimieron los impues tos municipales aboliendo las posturas, y se invirtieron algunas cantidades por cuenta del Estado en varios ensayos para beneficiar con mas perfeccion ciertos pescados y descubrir nuevos bancos y comederos.

La pesca no estaba en aquellos antiguos tiempos, ni podia estar sometida á disposiciones ú ordenanzas generales y uniformes. Cada pueblo se regia por sus costumbres ó por disposiciones especiales. Estas, mas que á fomentar la industria, se dirigian á regularizar hasta donde era posible el ejercicio de ella.

La pesca, como fácilmente se comprende, no puede ser si no la ocupacion de ciertos hombres que, dedicados á ella desde sus primeros años, y acostumbrados á sus duras faenas y á la accion de las aguas y de la intemperie, pueden sobrellevar sus penalidades. Los pescadores comprendieron la necesidad de ausiliarse y protejerse recíprocamente, ya para conseguir aquella regularidad en el ejercicio de la pesca, ya para establecer entre ellos mismos y los que se dedicaban á otros géneros de industria, las relaciones conducentes á la seguridad y garantía de sus respectivos derechos: de aquí nació la idea de reunirse y asociarse, siguiendo el espíritu de la época de formar corporaciones, conocidas hasta hoy con el nombre que revela por sí solo la organizacion y las tendencias de ellas.

Los gremios ó universidades de pescadores empezaron á establecerse y á propagarse con grande utilidad de la pesca marítima. Cada pueblo tenia su gremio, cada gremio sus ordenanzas; y en ellas se prescribia minuciosamente cuanto tenia relacion con la facultad de pescar, con los medios de verificarlo, con las épocas en que podia ejercitarse, con las demas circunstancias, en fin, é incidencias de esta ocupacion lucrativa.

Prolijo seria, si no difícil, el empeño de dar á conocer las disposiciones de esta infinita variedad de ordenanzas ó estatutos. Bastará decir, que concretada cada una de ellas á dictar disposiciones especiales para el gremio de la localidad á que se referia, formaba, como todavia constituye las primeras y mas importantes reglas á que debian atenerse los pescadores, sin perjuicio de alguna que otra disposicion de interés general que dictaba la autoridad suprema, ya para encargar y asegurar la observancia de las ordenanzas locales, ya para fomentar con beneficiosas concesiones la pesca y el tráfico de los pescados. Mas adelante establecieron las leyes los que se llamaron gremios de mareantes, y aunque estas asociaciones por su propio instituto se hallaban destinadas á un objeto particular, cual era socorrer con un fondo creado á este efecto á los matriculados impedidos por su edad ó por sus achaques, poco á poco fueron ensanchando sus facultades, arrogándose, entre otras muchas, la de conocer y arreglar todos los asuntos concernientes á la pesca; resultando de aquí, que en muchos pueblos los gremios de pescadores quedaron refundidos en los de mareantes. En el dia subsisten estos gremios, aunque reducidos á su primitivo objeto y al goce que se les declaró en las ordenanzas generales de la Armada. Véase GREMIOS DE MARINEROS.

Las disposiciones generales que, segun hemos indicado, rigen esta materia, se hallan consignadas en las ordenanzas generales de la pesca, que se formaron y publicaron á fines del siglo pasado, y en diferentes artículos de la ordenanza de las matrículas de mar, sancionadas en 12 de agosto de 1802. Unas y otras, con los estatutos gremiales indicados, y con algunos reglamentos dictados para el régimen de ciertas pesqueras especiales en determinadas provincias, constitu-

yen la legislacion vigente respecto á la pesca de nuestros mares.

§. 2.° *Facultad de ejercer la pesca marítima.*

La pesca en los mares puede considerarse bajo dos aspectos diferentes; ó como el ejercicio de una industria considerable, de la que reportan los particulares y el Estado pingües beneficios, ó como una ocupacion de placer permitida á toda clase de personas para procurarse recreo y esparcimiento. En el primer caso la pesca se ejecuta en alta mar, en las costas y en las ensenadas, con barcos y grandes aparejos; entra en el dominio de las ordenanzas y disposiciones generales á que hemos hecho referencia, y constituye lo que, con propiedad, suele llamarse *grande pesca*. En el segundo, se practica por lo comun en los puertos y en las orillas, sin barcos ó con barquichuelos preparados para la comodidad de las personas, con cierta clase de aparejos, y sometida á las disposiciones especiales de cada localidad, constituye lo que puede llamarse *pequeña pesca*. Escusado es manifestar que la facultad de ejercer la pesca marítima de que vamos á hablar en el presente párrafo, se refiere á la primera y no á la segunda, cuyo ejercicio, como inocente de suyo, se permite á toda clase de personas, en los términos que se indicará mas adelante.

Contrayéndonos, pues, á la que con propiedad merece únicamente la calificacion de pesca marítima, fácil será comprender, por muy escaso conocimiento que se tenga de los medios y de los esfuerzos que exige esta penosa ocupacion, que necesita un gran número de reglas calificadas por la esperiencia de los siglos; que no pueden entregarse á ella si no los hombres acostumbrados desde sus primeros años á las duras y complicadas faenas de su ejercicio, y á la accion insalubre y perniciosa de los elementos; que no debe permitirse, en fin, si no á los que, pudiendo salvar los escollos de los mares y los peligros de la navegacion, se hallan en disposicion de ejercerla sin provecho propio y con utilidad del Estado. Las naciones marítimas, ademas, se hallan muy interesadas en tener un gran número de buenos y sobresalientes hombres de mar, y nada conduce tan eficazmente á ello como el penoso ejercicio de la pesca. El arte de navegar, dice Regnart, procede de ella, es el semillero y verdadera escuela de marineros escelentes, es para la industria y comercio el medio mas importante.

Por estas consideraciones la pesca marítima no ha sido permitida en España desde muy antiguo, si no á la espresada clase de hombres de mar. En las ordenanzas navales de 1748, se consignó ya este privilegio espresamente en favor de los que se matriculasen en el servicio de la real Armada, en justa remuneracion de los trabajos que sufren, y de los beneficios que, á espensas de ellos, dispensan al Estado. En 1793 se consideraba la relajacion de este privilegio como una de las causas que mas directamente habian contribuido á la decadencia de la marina española, y se mandó que se observara en toda su fuerza y vigor el privilegio esclusivo de la pesca, concedido en toda la estension del agua salada á los individuos matriculados. Por último, en la ordenanza para las matrículas de mar, citada anteriormente, se reprodujo igual concesion, disponiéndose en el artículo 10, tít. 5, que á ninguno que no fuese matriculado será permitida, bajo ningun título ni pretesto, la pesca;... debiendo considerarse reservada la facultad de ejercerla á los que estuviesen alistados en las matrículas de mar. La esclusion de todas las demas personas se entiende de navegar como tales pescadores en los barcos de pesca, y de pescar por sí desde tierra, con red ó con cualquier otro instrumento que no sea *vara* ó *caña*; pues este género de pesca, que generalmente se hace por diversion ó pasatiempo, segun hemos indicado, á nadie se prohibe. Tambien debe advertirse, que la esclusion absoluta de la navegacion y pesca, impuesta á los no matriculados, no impide que los pescadores que lo sean, puedan valerse á su arbitrio de gente no matriculada, en todo lo que pertenezca á la pesca, fuera de los bar-

cos de ella, como en ayudar á tirar las redes á tierra, matar el pescado, salarle, etc., cuando de la matriculada no haya la bastante para estos ejercicios, pues esta debe siempre emplearse con preferencia. Tambien permiten las ordenanzas de matrículas que los jóvenes menores de 18 años puedan emplearse en la pesca costanera, en barcos del pueblo de su naturaleza ó domicilio, sin goce del fuero de marina los que no fueren hijos de matriculados, debiendo, para disfrutar esta concesion, tener papeleta del comandante de la provincia, ó ayudante del distrito en que conste la filiacion y el permiso, con la obligacion de refrendarla anualmente hasta que cumplan aquella edad (1).

Gozan los matriculados, no solo la facultad de ejercer francamente el privilegio de la pesca, si no tambien su tráfico con toda libertad, pudiendo conducirla, segun dispone la ordenanza, á donde y como mas les convenga, sin que jurisdiccion alguna pueda coartarles esta franquicia, sin consentirse gavelas ó contribucion alguna en dinero ó en especie (2).

La facultad de pescar, concedida á los matriculados de mar, no se limita á punto alguno determinado de esta. El art. 11 del título 5, dispone, que la pesca de peces y del coral en todas las costas, puertos y rias (3) de los dominios reales, será permitida libre y franca á todos los vasallos alistados en la matrícula de mar, para los que está reservada la facultad de pescar, con cuyas circunstancias, añade, podrán practicarlo sin embarazo, no solo en la provincia ó partido de que dependan, si no en otros cualesquiera de los reinos en Europa, á cuyos comandantes se manda no impidan, á los que presentaren cédula ó licencia legítima, que como pudieren y mejor les parezca, pesquen en barcos propios suyos, ó en los de la provincia con cuyos patrones se hubiesen convenido.

El privilegio esclusivo de la pesca y las concesiones mencionadas no han sido derogados ni restringidos con posterioridad; antes bien pueden considerarse confirmados y aun ampliados en favor de los matriculados. La mas notable de estas nuevas disposiciones, dice un escritor (1), y de que han reportado mayores beneficios, es la que se dictó aboliendo para siempre los privilegios esclusivos, concedidos á particulares, corporaciones y señoríos territoriales para utilizarse de los productos de la pesca (2). Esta prerogativa, añade, era esencialmente funesta á la prosperidad de un género de industria tan útil y ventajoso para el Estado, despojaba á los matriculados de la mejor y mas cómoda pesca en la mayor parte de las costas de la Península, y ponia un dique á los adelantos de la navegacion.

Asimismo consiguieron que se acordara espresamente la demolicion de las estacadas y de otros obstáculos análogos á ellas, que colocaban los particulares en los rios para remansar las aguas ó detener la pesca; medida tambien protectora de sus derechos, puesto que aquellos obstáculos obstruian el libre curso de la pesca y perjudicaban á la del salmon señaladamente, cuyo aprovechamiento en la parte bañada por las aguas del mar les está espresamente reservado (3).

Las almadrabas del reino han sido tambien objeto de una concesion especial en favor de los matriculados. Todas fueron consignadas en propiedad particular á los gremios de pescadores de los distritos de marina en que se hallen situadas, aunque con la condicion de sacarlas á pública subasta para que los capitalistas ó empresarios rematadores corran el riesgo de las pérdidas ó quebrantos (4).

Ultimamente, por real órden de 17 de abril de 1844, se declaró que ninguna corporacion ni persona que no pertenezca á las matrículas de mar, pueda emplearse en la industria de la pesca, ni en el ejercicio de la navegacion.

(1) Art. 2, tit. 2.°
(2) Art. 7, tit. 5. Esta concesion se halla en observancia sin otra modificacion que la del derecho de puertas á que se sujetó el pescado.
(3) Véase el tit. 3, trat. 10, Orden. gen. de la Armada, artículos 29, 30, 32 y 120.

(1) Ordenanza de las matrículas de mar, adicionada por don J. M. Travieso.
(2) Real órden de 30 de febrero de 1817.
(3) Reales órdenes de 8 y 20 de mayo de 1827.
(4) Reales órdenes de 22 de febrero de 1828 y 17 de mayo de 1850.

§. 3.° *Instrumentos ó artes de pescar.*

Al esponer en la primera seccion las consideraciones que creimos mas importantes en materia de caza y pesca, procuramos demostrar, que la autoridad pública no podia prescindir de establecer aquellas restricciones que exige el ejercicio de una y otra en sus diferentes usos y aplicaciones. Este principio procede en toda su estension cuando se trata de los artes, aperos, medios y procedimientos que se emplean para ejecutarla. La seguridad de los pescadores, la conservacion de la pesca, y el respeto que merece individualmente el uso de un derecho recíproco, son las altas consideraciones de bien público que han servido de fundamento para permitir ciertos de aquellos artes, para prohibir absolutamente otros, y para modificar el uso de algunos, quitándoles las condiciones destructoras de su primitiva invencion.

No seria posible sin escribir un libro muy voluminoso, dar idea á nuestros lectores de la diversidad de los artes que se emplean en la pesca de los mares. En la imposibilidad de hacerlo, pues ni ese es el objeto de este artículo, ni cabe en sus regulares límites, procuraremos generalizar nuestras observaciones y reducir á una clasificacion sencilla los artes mas importantes y de uso mas frecuente, esponiendo sobre cada una de estas clases lo mas esencial de las disposiciones generales y especiales concernientes á ellas.

Y en efecto, los instrumentos ó artes de la pesca marítima, en medio de la prodigiosa variedad con que ha sabido multiplicarlos el ingenio humano, pueden reducirse á corto número. Los anzuelos, las redes, las nasas, los harpones y fisgas, son los inventos esenciales, ó como si dijéramos, los elementos de las infinitas combinaciones que sobre ellos se han ideado y puesto en ejecucion por los pescadores.

Anzuelo. Esta invencion tan sencilla, como todos saben, recibe por el instrumento á que se aplica diferentes combinaciones, y cada una forma un arte particular. La caña, el bolantin, el palangre, el cordal, la ballestilla, el espinel, etc., etc., son artes de anzuelo. Todos son lícitos, porque son inocentes. El anzuelo, dice Regnart, no destruye los mares como la mayor parte de los otros artes de pescar, porque cuantos peces coje, por pequeños que sean, regularmente su tamaño es á propósito para la venta pública, sin la necesidad de trastornar los algares ó herbajes marinos rastreando los fondos, como ciertas redes que lastimosamente barren ó arrasan un sin número de desoves, y de crias ó pececillos que nadie puede aprovechar.... Por lo propio á nuestros pescadores, lejos de impedirles el libre uso de arte semejante, se les concede y estimula á que le ejerzan en todas estaciones y distancias, bajo el órden de reglas muy premeditadas.

En este concepto, las ordenanzas generales de pesca (1) disponen, que en todo tiempo y estacion, mientras no embaracen otras pesqueras útiles y permitidas, puedan emprender la suya los artes de anzuelo; que para las pescas de estos artes, no se prescribe tamaño limitado á número de codos, pies ó aguas á las embarcaciones, sin que por ello puedan los pescadores hacerlas tan pequeñas, que pongan en peligro á los que las ocuparen; que el barco anzolero, que antes que ningun otro llegare al cantil, troya, placer ó comedero, puede libremente calar en el paraje mejor; que el segundo, tercero y demas barcos, conforme fueren llegando al espacio de mar en que está situado el mismo comedero, observen el propio órden, absteniéndose de calar sus anzuelos sobre los de otros barcos, que habiendo llegado antes, estén calando ó lo hayan ejecutado ya; que para esta recíproca conveniencia se guarden las distancias proporcionadas; que teniendo uno calados sus anzuelos, podrá otro verificarlo por el mar de él, haciéndolo á distancia competente para no estorbarle; finalmente, disponen lo que deberá observarse cuando, por no cumplir las reglas establecidas, perjudicase un barco anzolero á otro, ya viniendo un aparejo sobre otro, ya por estrecharle el mar, ya mudando de sitio, ya tendiendo un

(1) Formamos el resúmen de estas disposiciones teniendo á la vista los artículos de dichas ordenanzas, que trascribe Sanchez Regnart en su diccionario, *verb. Anzuelo.*

arte sobre los de otro, ya en los demas casos á que se refieren.

Redes. Son el arte mas usual en la pesca marítima, y el que ha recibido mayor número de combinaciones, segun las circunstancias de los lugares y la índole y tamaño de los peces. Arte lícito y permitido, mientras se ajusta á las condiciones establecidas; pero perjudicial y destructor, cuando estas se quebrantan, sustituyendo á las precauciones de la ley los artificios que sujiere la codicia.

La circunstancia fundamental en los artes de red son las mallas, porque segun fuere mayor ó menor el ámbito de su cuadrado, así producirán buenos ó malos efectos relativamente á la conservacion de la pesca. En tal concepto, por regla general conviene que las mallas de las redes sean de algun tamaño considerable, á fin de que por sus claros puedan salir con franqueza las crias de la mayor parte de los peces, sin perder de vista que, segun el impulso mas ó menos violento que se diere á las redes, se estrechan ó juntan en el hecho de tirar de ellas.

Por esta importante consideracion, las ordenanzas generales de pesca determinan con minuciosidad el ámbito de la malla en cada una de las pesqueras mas usuales.

La del *jeyto* debe tenerlas de á pulgada en cuadro, cuya disposicion se aplica á las demas redes sencillas de *deriva*.

Las redes sencillas de tiro, en que se comprenden la *traina* y la *barquía*, deben tener en el cope ó paño de cerrado la malla de una pulgada en cuadro.

Las redes de tiro con copo, y especialmente el *artó*, tendrán el cuadrado de una pulgada castellana.

En las redes de tiro á fuerza de hombres, está prevenida la malla de mas de pulgada para las bandas ó piernas, y de cuatro á seis líneas para los carteles ó copes.

Las redes con armazones tendrán una pulgada en enjuto.

El arte de malla real deberá tener la malla del cuadrado de una pulgada castellana.

Las redes de atajo tendrán las mallas en todo el discurso del año á lo menos de pulgada castellana en su cuadrado, á escepcion de los meses de marzo, abril y mayo, en que por razon de las crias no se permitirán otras redes que de dos y media pulgadas de malla.

Finalmente, aun las dos parejas privilegiadas de Valencia para pescar en todo tiempo tienen señalado para sus mallas, en la época de la veda general, el cuadrado de dos y media pulgadas castellanas.

Las redes, cuyo invento, como hemos indicado, se ha multiplicado en una proporcion asombrosa, pueden reducirse á las siguientes clases que mencionan las ordenanzas (1).

1.ª *Redes sencillas de deriva ó flotantes*, como el sardinal, jeyto ó alvareque, redes de gueldear ó sardineras y otras.

2.ª *Redes sencillas de fondo*, como cazonales, corbineras ó correderas, rascas, raeyras, rasquiños, volantes, bolechas, etc.

3.ª *Redes sencillas de tiro*, como rapetas, sacadas, trainas, barquías, sacadas de alto, rapetones, esparaveles y otras.

4.ª *Redes de tiro con copo*, como jábegas, sedales, boliches, las lavadas y chinchorros, redes de á pie, etc.

5.ª *Redes de rastreo á la vela con copo*, como parejas, ganguiles, tartanas, etc.

6.ª *Redes mistas ó compuestas*, como trahiñas, cercos reales, trasmallos, saltadas, pantasanas, barrachinas y otras.

7.ª *Redes con armazones*, como cercotes, atajos, velos, almadrabas, fileras, samarugueras, etc.

8.ª *Redes de batir ó golpear las aguas*, como trabuquetes, visgales, betas etc.

La primera clase, ó sea, las redes sencillas de deriva, están destinadas á la pesca de la sardina en el Mediterráneo y en las costas de Galicia. Respecto de las redes sardinales, disponen las ordenanzas generales de pesca, que se calarán guardando el trecho de separacion de las playas segun costumbre; que sin perjuicio de la práctica de pescar desde que el sol se pone hasta que sale, no se impedirá el uso de aquellas en cualquier hora del dia que se vea rizar la sardina, con tal que no se perjudique á otros artes: que el

(1) Sanchez Regnart, en su diccionario, *verb. Red.*

uso de estas redes sea preferido en su legítima temporada á otros artes, cuya pesca á la sazon sea menos lucrativa: los demas artículos establecen las reglas que deben observar entre sí y con otros pescadores, y la responsabilidad en que incurren caso de no verificarlo. Respecto del jeyto, redes que se usan en las costas de Galicia, se dictaron algunas disposiciones en real decreto de 15 de marzo de 1850, de las cuales haremos mencion al hablar de la pesca de la sardina.

La segunda clase, ó sea, las redes sencillas de fondo, pueden reducirse á las que se llaman cazonales y volantes, que puede decirse son una misma cosa. Unas y otras son permitidas, porque el cuadrado de sus mallas, que es de casi un palmo, no perjudica la pesca. Sobre el uso de los cazonales, dice Sanchez Regnart, hay su particular legislacion dictada por la esperiencia de los siglos, en que se funda la utilidad recíproca entre los que con semejantes artes ganan su sustento. Regularmente, añade, los barcos cazonaleros no están sujetos al órden de suerte, y sus patrones se aprovechan de la buena diligencia en acudir á los parajes convenientes, con lo que el pescadero ó puesto es del primero que llega; pero el buen régimen exige que cada uno conserve el derecho ó accion que adquirió por su cuidado y vigilancia, sin que ningun otro pretenda usurpárselo. Las demas reglas que refiere el autor citado, tienen por objeto determinar las relaciones que deben guardar entre sí para no causarse perjuicio, y con pescadores de otras clases. Todas estas reglas tienen aplicacion á las redes volantes, acerca de las cuales se tendrán ademas presentes las reglas peculiares de su objeto que establecen las ordenanzas, reducidas á que cada embarcacion, destinada á pescar en invierno con volantes, se tripule con catorce hombres á lo menos; en verano con siete, ocho, ó nueve, segun costumbre; cada uno irá provisto del competente número de piezas de red; que se afiancen, al calarlas, con resones, poniendo en flor de agua boyas competentes á su mejor seguridad; y por último, se establecen algunas precauciones para evitar perjuicios á los pescadores de sardina.

La tercera clase, que son las redes sencillas de tiro, no ofrecen por punto general inconvenientes á la pesca, si se esceptúa la barquía que, aun cuando es arte de poca importancia, suelen reducirle el cuadrado de la malla en la parte central de la red á media pulgada, en cuyo caso puede causar perjuicio en los parajes que barre. En cuanto á las rapetas, en que pueden considerarse comprendidas las trainas, disponen las ordenanzas generales que puedan usarse con cope ó sin él; que no se permita el uso del *valo*, que consiste en golpear las aguas para aturdir la pesca con el fin de que vaya hácia las redes; que el primer barco de rapeta que llegare á pescar en paraje oportuno, tomará puesto para un lance solo, sucediéndole en él el segundo, y á este tenor los demas hasta que todos hayan echado un lance, en cuyo caso volverá á principiar la primera red: que cuando llegaren casi á un mismo tiempo dos barcos á un paraje, corresponde el lance primero al que haya echado antes el reson: que si ambos soltaron el reson á un tiempo, echen suertes, no aviniéndose; que en los puertos, donde no se haya usado de cope en las rapetas, no se permita, á menos que el gremio de pescadores lo establezca para uso comun; que no esceda de ochenta brazas, y en fin, que no se causen mútuamente perjuicios en los casos que se mencionan. En cuanto á los rapetones, cuya diferencia con las rapetas consiste solamente en ser mayores, pues constan comunmente de 105 á 120 brazas, las ordenanzas disponen, que continúe la costumbre de formar compañías para pescar sardina con la red nombrada rapeton; que aunque la duracion de esta pesquería no debe esceder del mes de junio, podrá restringirse ó ampliarse el término de ella, con tal de que no se perjudique la oportunidad de la estacion para otros artes, y que los que formen compañía con un mismo número de piezas de red, no percibirán la pesca á iguales partes, si no en la proporcion con que cada uno haya contribuido.

La cuarta clase de redes, que son las de

Lorenzo Arrazola

tiro con copo, constituyen uno de los artes mas importantes de la pesca marítima. Todas ellas son muy semejantes, diferenciándose solamente en alguna que otra circunstancia accesoria. Asi, el sedal, destinado á la pesca de los atunes en las costas de Andalucía, es una especie de jábega, como lo es tambien el boliche, que por esta causa se llama en algunas partes media-jábega, jábega pequeña, medio arte ó medio arte real; asi tambien la lavada, que viene á ser lo mismo que el boliche, se confunde con los chinchorros, y á ambos artes se aplican las mismas disposiciones legales.

La jábega, que es el principal de todos estos artes de tiro con copo, se llama *art*, ó *arte* en Cataluña, *arte real* en Valencia, *arte de malla real* en Andalucía, *boliche* en otras partes, y finalmente, *bol* en algunas. Es una de las pesqueras mas importantes, como que segun Regnart, en los años de 1756 á 1782, hubo muchos en que para solo la salazon y beneficio de la sardina en las costas de Ayamonte, se consumieron hasta sesenta mil fanegas de sal cada año, importando sobre cuatrocientos mil pesos fuertes anuales la estraccion del pescado que hacian los forasteros dedicados á este comercio. Las ordenanzas generales de pesca disponen detalladamente cuanto concierne á este arte, para conciliar el interés público con el de los gremios de pescadores, y establecer entre ellos las relaciones mas equitativas y convenientes. Las principales de aquellas disposiciones son: que los arraeces ó patrones de jábega echen suertes para ejecutar su pesca, debiendo estar pronta la segunda cuando calare la primera, so pena de perder su suerte; que se observen las reglas que fija para asegurar la suerte en casos dados; que en las playas, donde por su natural disposicion no cabe el medio de la suerte, ocupe el puesto la barca que llegare primero: que si hubiere banco ó islote comun á dos gremios, se observe la alternativa; que se guarden las reglas que establece cuando se juntaren dos ó mas jábegas, teniendo majal de peces á la vista; que se cumplan ciertas prevenciones que hace á los arraeces de las barcas para no perjudicarse unas á otras, asi como las que determinan la autoridad que debe ejercer sobre las cuadrillas de los empleados, ya sean matriculados, ya gente de cabo de tierra; que se guarden las prácticas establecidas sobre el modo de repartir la pesca; finalmente, determina las obligaciones del armador en cuanto á los barcos y demas pertrechos que se necesitan. Tambien las ordenanzas han prescrito algunas disposiciones respecto del uso de los sedales, y aunque por lo general estos artes deben arreglarse en todo á lo que se establece para las jábegas, convendrá añadir, que el sedal debe usarse únicamente en las playas que convenga y puntos establecidos para la pesca de atunes, bonitos, melvas, albacoras y otros peces de paso; que este arte debe tener la preferencia á todo otro que no sea almadraba de vista, monteleva ó buche; que el sedal no ha de impedir á las jábegas los boles ó lances que les convengan á la parte de barlovento, ó sea de las aguas por donde pasan los atunes, siempre que tuvieren lance ó redadero conocido, y medie la distancia de una legua á lo menos; que á la parte de sotavento del sedal, ó sea el lado por donde ya pasaron los atunes, puedan redar las jábegas en la distancia de un cuarto de legua, lo cual se hace estensivo á los artes útiles, sean de red ó de anzuelo; y en fin, que concluido el paso ó retorno de los atunes, podrá pescar indistintamente el sedal, pero sin la esclusiva anterior y sujetándose como las jábegas á la suerte ó turno.

La quinta clase de redes, que son las de rastreo á la vela con copo, reunen, ya por su estructura, ya por la exageracion que les ha dado la facilidad de pescar abundantemente con ellas, las condiciones mas perjudiciales. Algunas, como el ganguil y la tartana, casi no están en uso; pero el principal de estos artes, llamado comunmente el *bou*, *pareja* ó *parella*, cada dia ha visto ensanchar su uso y aplicacion, hasta el punto de ser hoy quizá el mas frecuente, como el mas nocivo y destructor.

Consta este arte de una gran red con su copo, tirada por dos embarcaciones á la

vela. Las bandas suelen tener de diez á doce brazas de largo y cuatro de ancho, y el copo hasta siete, pudiendo abrir aquellas con los cabos que se les agregan hasta quinientas brazas paralelamente. Baja á una profundidad estraordinaria, pues segun Regnart, puede rastrear en mas de cien brazas, y siempre en el fondo del mar con toda su estension completamente calado.

De aquí resulta, dice un escritor francés, que la pesca con el ganguil, llamada del huey, es la mas perjudicial de todas las que se hacen al tiro ó rastreo, desde luego porque su red tiene mucha estension, las mallas son pequeñas, está cargada de mucho plomo, igualmente que de muchas cuerdas; y por otra parte, porque tirada ó arrastrada con fuerza y prontitud, levanta y trastorna el fondo, arranca las yerbas, no permite á ningun pez que escape, y lastima muchos de tamaño y gusto que se amontonan en el copo. «La red del bou, añade Regnart, entre nuestros gremios de pescadores es mirada con bastante desabrimiento, como que los de otros artes se quejan de su uso aun en el tiempo permitido; pero como es la mas lucrativa en su término, tiene tantos partidarios, cuantos son los individuos que se aprovechan de ella; á que se añade que los pueblos marítimos que desean verse surtidos con abundancia y conveniencia, se interesan en sostenerla.»

El mismo autor discute largamente sobre los inconvenientes de este arte, y demuestra que, cuando en los rastreos que ocasiona, no se esterminen incesantemente las crias, como tratan de persuadir los defensores del bou, espantan, ahuyentan y vendimian toda la pesca, escogiendo de ella la mas crecida entre la mole ó poleton de fango y arena que colma el copo, y tienen que desenvolver y limpiar á bordo con fuerza de cubos de agua, echando al mar las crias maceradas, deshechas y confundidas con el mismo fango; que por el número que se cuenta de ellas y por sus acciones sobre los fondos, arrastran, barren y trastornan, no solo los peces, si no los insectos, plantas, fango, etc., que los sustenta, en los mismos parajes que habitan, esterminándolos; que alteran y ponen en recelo y huida los peces que no cojen, haciéndoles espatriar, asombrados, á otras distancias, hácia los golfos; y finalmente, que esto, sobre otros daños que produce, perjudica á los demas pescadores, que se ven precisados con mayor riesgo y coste á separarse de la tierra para hallarlos.

Por estas consideraciones, sin duda, el arte del bou ha sido prohibido diferentes veces. Sanchez Regnart cita una sentencia dictada por la Audiencia de Valencia en 7 de agosto de 1736, por la que se acordó que la pesquera del ganguil, ó por otro nombre el bou, no se usase en adelante pena de cien libras. Por real órden de 13 de enero de 1761 quedó tambien generalmente prohibida. Otra real órden de 1.° de agosto de 1782 escluye como ruinoso en las pesqueras de Galicia el arte llamado buey catalan. En Mallorca fué tambien totalmente abolido. A pesar de eso, el uso de las parejas se halla en el dia consentido, aunque con algunas precauciones, que indican la desconfianza y el recelo con que debiera mirarse este género de pesca; siendo de estrañar que, en medio de las encontradas reclamaciones y solicitudes de los pueblos y de los gremios, pidiendo unos la conservacion y otros la abolicion del arte, no se haya adoptado una resolucion terminante y general en materia de tanta importancia.

La sesta clase son las redes compuestas, inocentes de suyo y útiles, porque no ofrecen ninguno de los inconvenientes indicados. Las saltadas, pantasanas y barrachinas vienen á ser una misma cosa, como lo son tambien, sin que haya diferencia positiva entre ellos, las trahinas y cercos reales. Uno y otro arte están destinados á la pesca de la sardina en las costas de Galicia, habiendo producido inmensos beneficios la red de cerco real especialmente. Despues de su decadencia á mediados del siglo pasado, recibió grande impulso por el celo y los esfuerzos de un ilustre patricio que, siendo ministro de Marina á la sazon, se propuso restaurar la pesca de la sardina. Logrólo indudablemente, pues segun asegura Sanchez Regnart, en solo tres meses del año 1749, se sacaron catorce millones de sardinas, sin

contar los demas pescados. Posteriormente se formó un plan para la compañía gremial del puerto de Marin, que se propuso fomentar los cercos reales. Esta ordenanza creemos que sea la que rige en la actualidad. Las ordenanzas para las provincias de Pontevedra y Coruña, no solamente autorizan el uso del cerco real, si no que contienen diferentes medidas para fomentarle, siendo notable la disposicion de las últimas, que prescribe haya de usarse con varias redes unidas y que compongan mil brazas de largo con su cope y velas altas y bajas, como las trahiñas; pero estas se han de tirar siempre desde tierra por las dos cuerdas de su remate. Tanto la trahiña como el cerco, dice Sanchez Reguart, son unos armazones admirablemente útiles, que desde luego hacen mucho honor á sus inventores y á los puertos que usan de ellas, pues sin trastornar los fondos, ni aniquilar las crias, ni macerar golpeando ó encenagando los peces, verifican una copiosa cosecha de sardina, que enriquece las costas del reino de Galicia. Los *trasmallos* son muy peculiares de las costas de Valencia, Alicante y Andalucía, aunque tambien se usan en Galicia, como vemos por las ordenanzas citadas y otras. Tienen casi diferente nombre en cada localidad, y se emplean en la pesca de los peces rastreros, que comunmente, segun su naturaleza, andan por el suelo del mar buscando su alimento. Las ordenanzas generales de pesca declaran este arte útil para la pesca, debiendo emplearse solo en los fondos para que se inventó; previenen que se observen en sus calamentos las distancias proporcionadas para no perjudicarse, como deberá hacerse tambien respecto de otros artes circunscritos á determinados sitios; que no se echen en menos profundidad de cuatro brazas de agua; que no se use, ni como las redes de tiro, ni como las de atajo; y que continúen las costumbres establecidas sobre el repartimiento de la pesca.

La sétima clase de redes son las compuestas, entre las cuales, como se comprende fácilmente, las hay mas ó menos complicadas. De las almadrabas hemos hablado por su grande importancia en su respectivo artículo, y las samarugueras, y algunas otras semejantes, no merecen por su sencillez y corta entidad mencion específica. Las *fileras* son una armazon ingeniosísima, compuesta de varias filas de redes colocadas con tal artificio, que con el auxilio de pequeñas nasas en los estremos se cojen muchas especies de peces al trasferirse de las lagunas al mar, y de este á aquellas. Usanse principalmente en la Albufera de Valencia, manteniéndose de este arte mas de trescientas familias. La comunidad de pescadores de Valencia tiene establecidas desde antiguo reglas para impedir varios abusos de que suelen resultar funestas consecuencias, siendo las principales; que no pueda echar suerte el que tenga una barcada que no valga 30 libras, como tampoco el que haya vendido jarcia ó barco; que el que haya de hacer barcada nueva se ajuste á los requisitos que se marcan; y que no siendo la malla competente, se pueda arreglar, es decir, se pueda sujetar al órden general provechoso á todos. En cuanto á los *velos*, las ordenanzas generales de pesca disponen que puedan usarse asi en el mar como en los rios con la malla de una pulgada en cuadro, debiendo perderse en otro caso, por la primera vez el arte, y en el de reincidencia se exigirá ademas la multa de un ducado; que no se pesque en tiempo de veda bajo la pena de dos ducados, y que las penas se apliquen á los pobres del gremio del puerto ó pueblo. Ultimamente, el *cercote*, que en las costas de Andalucía se llama arte de malla real, en otros puntos corral ó paradera, consiste en una línea de redes que ataja los peces que con la marea entraron á buscar su alimento en el espacio ó ámbito que describen; al bajar las aguas, como estas salen sin dificultad por entre las mallas, los peces, que por su tamaño no caben por ellas, quedan forzosamente sobre las arenas. Sobre el uso de estas redes, asi como de las de malla real y demas que se denominan de *atajo*, disponen las ordenanzas generales de pesca, que no se permita su frecuencia, pudiendo armarse solo una ú otra vez en las playas donde no se siga perjuicio; que no escedan de trescientas brazas de circuito; que las mallas de pa-

red ó altura sea conforme á los puestos en que se establezcan, no pudiendo pasar de cinco á seis brazas; que las nasas se coloquen á distancia de veinte brazas; que se observe la vez ó turno por determinados apostaderos ó atajos, conocidos segun costumbre; que cuando se hallare un brazo de mar ó caño con varias ramificaciones y estas se estiendan tierra adentro, formando islotes, todo en el territorio de un propio gremio, no se permitirán atajos en las ramificaciones ó canales, ni de islote á islote, ó de estos á la tierra firme, siempre que perjudiquen á la pesca de atajo acostumbrada del caño grande ó principal; que el pescador de red de atajo á quien corresponda el turno, usará de su accion, y si por no tener corriente el barco ó arte no saliere á pescar, avisará al que le siguiere para que no pierda la proporcion de la marea; que se observen las reglas que espresa para evitar perjuicios á otros pescadores; que si los barcos de pasaje ó tráfico, por no haber pescador que arrie la red, pasaren por encima ó picaren el cabo, no tengan los atajadores accion para quejarse; que si estando allí y ejecutando las diligencias convenientes, el patron del barco les causare perjuicios, sea responsable; y en fin, que los barcos navegantes procuren evitar todo daño bajo su responsabilidad y una multa.

La octava y última clase de redes son las de batir ó golpear las aguas, y aunque en su estructura particular nada hay que pueda hacerlas nocivas, lo son por las circunstancias con que redan y funcionan. La *beta*, por ejemplo, es una red de 70 á 80 brazas, por cinco de ancho, se cala con dos barcos de forma que venga á describir un círculo, en cuyo estado el barco que ha quedado dentro de él anda al rededor golpeando las aguas con los remos para que amalle el pescado. El *trabuquete* es una especie de trahiña pequeña, que emplea tambien dos lanchas arrojando piedras y golpeando las aguas. El *visgal* es una especie de trasmallo, que tampoco perjudica si no se dán golpes ni se hace ruido. Acerca de estos artes disponen las ordenanzas generales, que se prohibe el uso de arrojar piedras, golpear ó apalear las aguas para que espantados los peces se enmallen en las redes; que para precaver el daño que de semejante modo de pescar se origina, las redes conocidas en distintos paises bajo las denominaciones de trabuquete, tenderete, manjarda, tir, visgal, beta, red de batedores, batuda, emballo ú otros cualesquiera, se usarán naturalmente y sin violentar la pesca; que si pescando de noche se prevaliese alguno de la oscuridad para golpear ó apalear las aguas, se exigirán diez ducados de multa al que se hallare cometiendo semejante esceso, y doble con pérdida de la red caso de reincidencia.

Nasas. Otra especie de inventos generales que han servido de base á diferentes aplicaciones para los artes de pescar, son las nasas. Hácense de varias materias; unas con varas delgadas de mimbres, otras se forman de sacos de red, y otras de junco que son las mas comunes. Tienen generalmente una figura piramidal ó de cierta especie de campana, cuyo hueco se sostiene inflexible por círculos formados de varas de árbol: en la parte inferior, que es circular, se coloca una pieza de la forma de embudo, que ocupa como la tercera parte del interior de la campana, de manera que, ajustando el círculo de esta pieza sobre el círculo de la principal, venga á quedar en la parte interna superior lo estrecho de la pieza sobrepuesta. En el borde del cuello de esta sobresalen muchas puntas de los juncos ó mimbres, lo cual dá por resultado, que entrando fácilmente por él los peces, atraidos del cebo que se coloca dentro de la nasa, no puedan salir ya, tanto por la angostura de la pequeña boca del embudo, cuanto porque se enredan y lastiman con las puntas que encuentran al intentar la salida. Por esta sencilla esplicacion se comprende, que la pesca de las nasas es de las mas inocentes que se conocen; que no pueden causar perjuicios á las crias y á los fondos, y que es de las que con toda propiedad pueden llamarse sedentarias ó constantes. La temporada de ella compone en rigor todo el año, porque cuando el tiempo es caluroso, se echan á las inmediaciones

de tierra ó proximidades de las playas, y cuando reina la estacion fria, se calan en las honduras á largas distancias ó trechos de las orillas.

Las ordenanzas generales de pesca prescriben sobre las pesquerías de nasas: que sus calamentos no perjudiquen á otros artes útiles, ni estos á las nasas, guardándose unos á otros las temporadas y distancias proporcionadas, segun las posiciones de las playas con respecto á los vientos, corrientes y fondos; que continúe la costumbre respecto de la figura, dimensiones y malla de las nasas, en atencion á que ninguna de ellas perjudica al desove y cria de peces por sus configuraciones, ni por las mallas ó claros de sus enrejados; que en los parajes, donde la pesca de nasas sea mediante sorteo por temporada, se observarán las formalidades establecidas y que convengan á evitar todo engaño; que todos los que logren puesto ó lance, han de tener embarcaciones y artes á propósito, y que en el repartimiento de la pesca se siga la regla general, sin agravio del derecho respectivo de marineros y patrones.

Las nasas se aplican á diferentes combinaciones, que han recibido su nombre particular: asi se conocen la *andana de nasa*, el *andanon*, la *andaneta*, etc. La andana de nasa consiste en un determinado número de ellas, que calan los pescadores en sitios ó puestos á donde concurren los peces á cierta distancia de tierra. Usase en Valencia, y para el efecto el gremio de pescadores, con arreglo á sus antiguas costumbres y privilegios, se junta en comunidad, y con las debidas solemnidades echan suertes para decidir sin controversias los puestos ó parajes en que, segun resulte del órden de las suertes, deberá cada uno calar su andana. Las suertes son catorce, y el primero que sale tiene la accion de elegir el sitio, y asi sucesivamente. Los mismos pescadores en diversos acuerdos han establecido algunas reglas, que son las únicas porque se rije esta pesquera, reducidas á que el que hubiere sorteado andana la haya de calar el 8 de setiembre, ó á lo menos tener la *barcada encima de la proa*, es decir, la mitad de la andana, que son 32 ó 33 nasas, lista, pudiendo usar de dicha pesquera hasta el dia 1.° de noviembre, y no verificándolo, pasa su suerte á la comunidad; que los marineros, que llevare cada patron en su barco y empezasen esta pesquera, no puedan dejarle hasta el citado dia 1.° de noviembre, y el patron no podrá despedirlos sin justa y legítima causa; que haya cinco celadores para otros tantos determinados sitios, y que nadie pueda ir á poblar mientras estos celadores no pasen á reconocer las balas de las nasas, bajo la pena de diez libras. El *andanon* se diferencia poco de la andana, pero se aplica á cierta clase de peces solamente, como el jurelo, de que abundan mucho las costas de Valencia. Este arte no está sujeto á suerte, y el pescador que primero llega toma el sitio que le conviene, y el que llegare despues, si le acomoda, puede situarse á la derecha ó izquierda con la distancia que le parezca; pero no puede ponerse delante si no es á vista de boga, ó sea á un gran trecho como de media legua. Estas son las reglas admitidas comunmente, teniendo ademas establecido el gremio, que ninguno pueda sacar las panas á tierra hasta San Miguel, bajo la pena de diez pesos, y si alguno quisiere sacar el andanon entero, ha de ser dentro de dos dias contados desde el en que diere cuenta al celador respectivo.

Fisgas, harpones y otros semejantes. Son estas otras de las aplicaciones que ha sugerido á los pescadores la esperiencia y la comparacion. Merecen recordarse especialmente, por la importancia de la pesca á que se destinan, las fisgas, los harpones, los martillos y los rastros. La *fisga* es un instrumento compuesto de cierta especie de peine de hierro con determinado número de púas, de una cuarta poco mas ó menos de largo, colocadas á alguna distancia unas de otras: clávase á golpe de brazo en los peces, como se intenta clavar la punta de una lanza hácia el suelo. Las hay de varias especies, unas mas fuertes que otras, mas y menos complicadas, y ninguna podria considerarse como perjudicial, si no fuera porque su uso casi está reservado para la pesca del candil, que ofrece grandes inconvenientes. El *harpon* no es sustancial-

mente otra cosa que una flecha grande ó dardo arrojadizo, que se emplea como principal instrumento en la pesca de las ballenas y otros cetáceos de gran magnitud, pudiéndose colegir de esta sencilla enunciativa, la importancia que ofrece en la pesca marítima el uso de este arte. Los hay de varias formas y dimensiones, y en el empleo de ellas no pueden establecerse reglas, porque todo pende de la habilidad, de la fuerza y del empuje del que lo maneja. El *martillo*, instrumento tan sencillo y de usos tan diversos de la pesca, tiene tambien aplicacion á ella. Empléase en la de los lobos marinos, llamados por los naturalistas *focas*, y esto dá asimismo idea de la importancia de este arte, por la que ofrece una pesca tan abundante y lucrativa. Finalmente, los *rastros* son varios armazones de distintas hechuras, compuestos de diversos materiales, los cuales, arrastrados sobre las playas, estraen las diferentes especies de mariscos y otros peces que se crian en ellas y ocultan entre la arena. Su variedad es inmensa, sirviendo unos para rastrear dentro del agua sobre playas ó arenales; otros fuera de ella en las playas mismas, y otros, finalmente, para rascar, arrancar ó raer de las peñas los mariscos pegados á ellas. Son instrumentos indispensables para la pesca de ciertos peces llanos, y otros que se quedan escondidos en los arenales al bajar la marea, como asimismo para las conchas que nacen y se crian en ellos. Con todo, Sanchez Reguart dice, que no deja en algun modo de ser perniciosa esta multitud de rastros con que se rasca, levanta y trastorna la superficie de los arenales de tantas y tan diversas maneras, y que lo seria mucho mas si no mediasen los intervalos largos á que obliga el órden periódico de las mareas. Para evitar estos inconvenientes, las ordenanzas particulares de algunos gremios y provincias acordaron las disposiciones que juzgaron conducentes, habiéndose ordenado, por último, en las generales de pesca, con relacion á este objeto: que fuera de los meses desde diciembre hasta abril del año siguiente, no puedan usarse los *rastros*, *endeños*, *garabatos ó angasos*; y que en caso de emplarse semejantes instrumentos, las púas ó dientes, con que están armados, han de ser de madera, bajo pena de perder el arte y dos ducados de multa.

§. 3.° *Parajes y estaciones en que se permite la pesca.*

La policía de la pesca marítima, fundada esencialmente en las exigencias del interés público, no permite una libertad absoluta, ni respecto del tiempo, ni de los sitios en que hayan de usarse los diferentes artes ó procedimientos de que hemos hecho mencion. La conservacion de las crias; la imprescindible necesidad de evitar todo cuanto pueda contribuir á la destruccion de los peces; la seguridad misma de los pescadores, y las relaciones que deben guardar entre sí los que emplean diferentes artes, han aconsejado y prescrito en todos tiempos restricciones utilísimas, que la esperiencia, el comun consentimiento y la ley han elevado á reglas de rigorosa observancia en esta materia. Diremos sobre ello lo mas sustancial que se halla hoy dispuesto ó admitido en dicho concepto.

El arte llamado *andana de nasas*, está sujeto á sorteo, se cala en sitios determinados y suele tener lugar de setiembre á noviembre.

La *andana de red* se cala por suertes en las costas, y su temporada es mientras dura el retorno de los atunes, ó sea de julio á agosto.

Los artes de *anzuelo* pueden calarse en todo tiempo y estacion, mientras no embaracen otras pesqueras útiles.

El *bou* tiene prescrita su temporada desde el dia 20 de octubre hasta la Pascua de Resurreccion.

Los *cañales* no deben permitirse si no en aquellos parajes en que, por su distancia lejana de los puertos, por ser el sitio despoblado, y por tener el terreno muchas rocas, no pueden causar perjuicio, no solo á la navegacion, pero ni tampoco á los artes ó redes de tiro y otros.

Los *cazonales* se calan en parajes marca-

dos por las vistas de tierra, y empiezan por abril hasta principios de julio.

Los *cercos reales* tiene sus sitios determinados que llaman postas, equivalente á lances, puestos ó pescaderos. En Galicia suelen calarse desde octubre hasta enero.

Los *corrales* y demas paradas de piedra, estacadas, etc., no deben permitirse en los paises de playas limpias para redaderos, porque son otros tantos escollos fatales á los navegantes, con especialidad á los pequeños barcos pescadores que no pueden arrimarse á tierra sin grave peligro, y mas en caso de huir de un temporal.

El *esparavel* no se permite en tiempo de veda, ni en sitios donde puedan causar perjuicio á otros pescadores.

El *espinel* ha sido prohibido sin distincion de lugar y tiempo en algunos institutos gremiales; pero en otros parajes se circunscribió la prohibicion á solos aquellos en que se esperimentaba daño efectivo, como dentro de los puertos, dejando en libertad la accion de los espineleros para la estension de las costas.

El *jeyto*, asi como todos los demas artes que se emplean en la pesca de la sardina, sean las redes de deriva, sean de arrastre, están vedados desde 15 de febrero á 15 de junio inclusive, con las prevenciones que se indicarán mas adelante.

Las *nasas* comprenden en rigor todo el año, porque cuando el tiempo es caloroso se echan á las inmediaciones de la tierra ó proximidades de las playas, y cuando reina la estacion fria se calan en las honduras á largas distancias ó trechos de las orillas.

Las *saltadas* ó *pantasanas* tienen su temporada desde junio á setiembre.

La *raña*, *garavata*, *vichero* y otros que se emplean para la pesca del pulpo, no pueden usarse en marzo, abril y mayo en que se verifica la cria: fuera de esta temporada de veda, la raña solo puede usarse en la costa.

Las *rapetos* no pueden usarse en los tres meses mencionados de marzo, abril y mayo.

Rapeton: en enero principian las compañías para pescar sardina con este arte, y su duracion no debe esceder de junio, salvo el paso indicado anteriormente.

Las *rascas*, *rasgos* y otras redes de malla grande para la pesca de fondo, no pueden emplearse en las temporadas de la pesca de la sardina, en las ensenadas ó conchas, y han de calarse fuera de puntas de los puertos, rias y ensenadas, en parajes de roca.

Los *rastros*, *endeños*, *garabatos* ó *angasos*, no pueden usarse desde abril á diciembre.

Las redes denominadas *arte de malla real*, *cércoles* y otras semejantes no pueden usarse absolutamente desde marzo hasta mayo inclusive.

Las redes de *atajo* solo podrán usarse en los meses de marzo, abril y mayo con malla de dos y media pulgadas en cuadro.

El *trasmallo* se cala inmediato á la orilla hácia el mar, desde mayo hasta San Juan.

§. 4.° *Pesqueras especiales.*

Falta para completar el cuadro que nos hemos propuesto bosquejar de las disposiciones mas importantes sobre la pesca marítima, hacer algunas indicaciones sobre ciertas pesqueras, que por sus condiciones especiales exigen esta particular esplicacion (1).

Pesca de salmones. Supuesta su grande importancia, sobre lo cual juzgamos ocioso detenernos, conviene advertir que se verifica solamente en el Océano, en los rios que se hallan desde el Miño al Bidasoa, abundando mucho en aquellas costas. Estas pesquerías están circunscritas á parajes determinados, como son las embocaduras de los rios hasta una ó dos leguas tierra adentro. Esta circunstancia ha dado lugar en casi todos los puertos donde se pescan salmones, á frecuentes y acaloradas disputas entre los vecinos no comprendidos en la matrícula de mar y los matriculados, pretendiendo los primeros la facultad de ejercer la pesca desde la embocadura adentro, y sosteniendo los segundos la estension y aplicacion de su privile-

(1) No hacemos mencion de la pesca de los atunes, porque está tratada en el artículo ALMADRABAS.

gio, aun á estos sitios. Generalmente todas estas cuestiones produjeron reñidos litigios, y quedaron dirimidos por las ordenanzas de la real Armada y la de matrículas, cuyos artículos conducentes á este particular, dejamos citados en el párrafo 1.° Lo comun es que en cada ria hay determinada una estension desde la línea donde desemboca en el mar hasta cierto punto del interior, la cual se supone bañada por el agua salada; todo este trayecto ó distrito hasta la mar, es privativo de los matriculados para la pesca, y los vecinos solo pueden hacerla desde dicho punto rio arriba ó tierra adentro.

Hácese esta pesca con las redes llamadas *salmoneras*, que reciben otras diversas denominaciones, empleándose todos los pescadores del puerto formando una especie de compañía. Suelen establecer ademas algunos artificios muy perjudiciales, como las presas, paradas, estacadas, apostales y otros impedimentos semejantes, que no solo causan gran daño á la procreacion de los salmones, si no que estorban la navegacion y originan inundaciones en los terrenos y heredades contiguas, de que dimanan estragos irreparables.

Las ordenanzas generales para arreglar todo lo conducente á esta importante pesca, disponen, que las redes no escedan de cien brazas de largo, ni su anchura de cuatro; la malla de las bandas de seis pulgadas en cuadro, y de tres la del centro; que empiece precisamente desde 1.° de enero y concluya el último dia de junio, quedando prohibida lo restante del año en todos los rios y sus embocaduras; que los barcos procedan por turno en los lances, empezando á establecerlos por medio de suertes ó de otro modo en que no haya perjuicio: que finalizado el mes de junio nadie pueda emprender la pesca llamada comunmente de *salmones agostizos*, bajo cierta pena; que á cualquiera que en los tiempos en que regularmente vayan al mar las crias de salmones, mantenga redes ú otro arte con que se atajen ó pesquen, se le embargue y venda; que mientras dure la costera de salmones ningun barco ha de echar las redes acercándose á la embocadura del rio, aunque en ella haya lances conocidos; que las puedan echar á alguna distancia, evitando que por la multitud de redes con que se persigue á los peces, desde el momento que intentan entrar en el rio, ostigados se retiren y vuelvan al mar; que durante la costera ningun pescador ni otra persona en dicho preciso paso de la entrada, embocadura ó barra del rio, se acerque á él destinadamente á ver y registrar cuando entran salmones: que nadie se ponga de atalaya en cerro ó altura próxima á dicho paso de la entrada y sus inmediaciones; que los que contravengan á estas disposiciones sean castigados con las penas que se establecen: prescribe como se han de conducir los barcos en los lances que echen, y las reglas que deberán observarse en las contestaciones que por ello se susciten; que en la reparticion de los productos se siga la costumbre de aplicar á la embarcacion y red una tercera parte, formando de las otras dos quiñones, conforme al número de pescadores; y finalmente, que para que no haya motivo de duda, sin embargo de cualquier uso ó costumbre, se ha de observar lo prevenido estrictamente en las ordenanzas generales de la real Armada (1) en que se concede libre y francamente el aprovechamiento de la pesca en todas las costas, puertos y rias, á los que se alistan en la matrícula de mar, sobre lo cual no se disimulará la menor infraccion.

Pesca de la sardina. Es esta tan importante en muchas costas de España, y especialmente en las de Galicia, y es asimismo tan considerable la industria que ella alimenta, que tendriamos por incompleto nuestro trabajo si no dedicásemos algunas líneas á dar á conocer, siquiera sea brevemente, sus vicisitudes y su estado actual, bajo el punto de vista del derecho constituido.

Ya desde muy antiguo fué considerada esta pesca como un elemento muy eficaz para la prosperidad de aquellos paises. Era en ellos, dice Sanchez Reguart, un tesoro de los mas preciosos y preferible á los de las minas de nuestras Indias, porque es inago-

(1) Véanse los artículos á que se refiere en el §. 1.°

table. Con él se sustentaba una infinidad de familias, y de estas procedia una marinería copiosa, robusta y alentada para la navegacion.

Y en efecto, no hay mas que considerar el número, la clase y las condiciones de los artefactos, aparejos, utensilios, barcos y demas que se emplean en esta pesca, para convencerse de la importancia de su establecimiento y de la trascendencia de sus resultados. Por documentos auténticos consta, que el gremio de marineros de una poblacion de Galicia solamente, se componia de mas de 1,500 individuos, manteniendo doce cercos ó armazones reales para la pesca de sardina, que les redituaba mas de 80,000 ducados anuales, sin que sean estos cercos los únicos artes que se emplean en ella, pues hay ademas otros muchos de que se ha hecho mencion al hablar de las redes.

Esta floreciente situacion vino, sin embargo, á la mayor decadencia antes de la mitad del siglo pasado. Las guerras en que se vió envuelta la nacion, absorviendo la atencion del gobierno; las interrupciones que por esta y otras causas esperimentaba este; la falta de brazos, y aun los abusos introducidos en el uso de los artes de verificar la pesca, produjeron aquel triste resultado. Por lo cual el ilustre patricio á quien hemos aludido anteriormente, don Francisco Javier Sarmiento, se propuso dar impulso y vida en las costas de Galicia á la pesca de la sardina, restaurando y modificando el uso de los cercos reales, medio que consideraba como mas eficaz y menos nocivo á la cria y conservacion de ella. Sanchez Reguart refiere los esfuerzos que hubo de hacer este celoso ministro para conseguir hasta cierto punto su intento; y aunque los resultados de los primeros ensayos hechos con los cercos no pudieron ser mas satisfactorios, la pesca de la sardina no llegó al auje y prosperidad que habia alcanzado en tiempos no muy remotos. Con todo, el puerto de Marin formó un plan ó estatutos para la formacion de una compañía gremial, que se proponia fomentar los cercos reales sin perjuicio del jeyto y de otros artes permitidos; los gremios de otros puertos se alentaron, las provincias de Pontevedra y Coruña formaron sus ordenanzas, y la pesca de que vamos hablando empezó á fomentarse con el ejemplo y al favor de todas estas disposiciones protectoras.

Las ordenanzas de Pontevedra encargan á los marineros matriculados que se dediquen á la pesca de todo género de pescados, curándolos y salándolos; que procuren por todos los caminos el aumento de la marinería, y que prefieran á todas la pesca de la sardina: declara que el instrumento mas útil es el jeyto, debiendo tener ciento cincuenta mallas y de doce á trece brazas, despues de entrallada, usándose solo de noche desde 1.° de junio hasta últimos de febrero, y quedando prohibida en los demas meses; hacen mérito las ordenanzas de otros muchos artes que se empleaban para la pesca de sardina y otros peces, y determina las condiciones que deben reunir necesariamente; prohibe el *valo* con palos en los barcos dando golpes y haciendo ruido; prohibe el uso de las nasas y jábegas en los sitios que designa, y castiga con multa á los que emplean la manjarda y el trabuquete, y concluyen diciendo que no habiendo establecido al presente cerco real en ninguno de los puertos de la provincia, para cuando llegare el caso de que se establezca, se arreglarán todos los matriculados á la ordenanza que estaba hecha sobre este particular, aprobada por S. M. en 12 de mayo de 1750.

Las ordenanzas para la provincia marítima de la Coruña se publicaron un año despues, es decir, en 1769 y despues de hacer las mismas prevenciones sobre el aumento de la marinería y fomento de la pesca de sardina, y sobre las dimensiones, mallas y tiempo de usar el jeyto, determinan los demas artes que pueden emplearse entre los que cuenta la nasa grande ó mediana en alta mar; permite el uso del bou ó jábega, añadiendo, que estimándose por algunos perjudicial á la cria de peces, se examinaria con mayor solemnidad, é ínterin no hubiese posterior declaracion se permitiria, cuidando que no fuese tan inmediato á tierra que sirviese de red barredera; prohiben la manjarda y el trabuquete

por embalo y ruido; los rastros y raeiras desde las puntas de las rias adentro, y el uso de las brejas, especie de trasmallo, por ejercerse á puros palos y golpes en el agua y barcos de las nasas en las bahías; y describe los sitios y pesqueras en cada uno de los puertos y rias de la provincia, y los artes que deben usarse en los tiempos que señala, disponiendo por último, que la pesquera de la sardina se haga por punto general por campañas, en una, dos, tres y mas embarcaciones que se congreguen á ella unánimemente, de las cuales, con distincion de cada embarcacion, ha de formarse relacion individual de los sugetos que la tripulen y aparejos con que cada uno concurra, las cuales, firmadas de los dos ficles ó veedores, se han de presentar originales al ministro principal ó subdelegado de su respectivo cuerpo.

Algunos años despues que se publicaron estas ordenanzas, se espidió una real órden en que, declarándose prohibido solamente el bou catalán, se permitia el uso de las redes de trescientas mallas ó mas, siguiéndose de aquí tambien el uso de la jábega para la pesca de la sardina. Fueron muchas las reclamaciones que con este motivo se dirigieron al gobierno, y habiéndose instruido espediente con toda la copia de datos é informes que podian ilustrar la cuestion, resultó, que la jábega arruinaba la pesca, aprovechando solo á los pocos armadores que las usan para beneficio de los estraños y no de la provincia; que el jeyto, aunque no pescaba con la rapidez que la jábega, estropeaba la sardina que cogia enmallándola; que el establecimiento de las 150 mallas de ordenanza fué justo; que el cerco era el que ocupaba mas pescadores, pues para él se acompañaban los gremios enteros, entrando en compañía las viudas y huérfanos, y ademas pescaba en mejor forma que ningun otro arte, pues recogia viva la pesca en el copo sin maltratarla; por cuyas consideraciones el inspector general de matrículas, competentemente autorizado, dictó una providencia general en 29 de julio de 1787, prohibiendo la jábega, y disponiendo que desde 1.° de agosto hasta últimos de enero se usara y fomentara el cerco como mas ventajoso para la pesca de sardina; que se limitara el jeyto á las 150 mallas; que no se valeara ni en modo alguno se golpeara la mar, y por último, que se observaran las ordenanzas en tanto que no se publicase una general que las derogara.

A pesar de estas disposiciones tan acertadas, la pesca de la sardina no salió de su abatimiento. Ya en este siglo llegó á una escasez tan estraordinaria, que podia considerarse como su completa desaparicion, no en una ú otra de las rias, si no en todas, y en todas las estensas costas de las provincias mencionadas, siendo los resultados de esta calamidad tan perjudiciales, no solo para el interés particular, si no para el general del Estado, que por espacio de muchos años se ha estado reclamando la atencion del gobierno con repetidas y respetuosas esposiciones elevadas por los interesados. El gobierno, al fin, nombró una comision de personas competentes para que examinasen detenida y maduramente esta materia, y despues de dar esta su dictámen esponiendo los infinitos abusos introducidos en la pesca de la sardina, y reconociendo como causas principales de la decadencia el uso de redes y artes que estinguen ó ahuyentan los pescados, y la poca observancia de las vedas en estaciones en que debe dejársela libre para la reproduccion, dictó el real decreto, que ya queda citado, de 15 de marzo de 1850, por el cual se dispuso, que las redes del jeyto se reduzcan en su ancho al número máximo de doscientas mallas, decomisándose en otro caso; que las embarcaciones pescadoras de cóngrio no puedan llevar á su bordo para hacer carnada, mas que una sola pieza de red de 110 varas de largo y del ancho de 200 mallas, perdiendo en otro caso la red, sin perjuicio de las demas penas á que haya lugar por la contravencion á las ordenanzas; que las autoridades de marina celarán con especial cuidado la estricta observancia de las reglas que establecen las ordenanzas de pesca sobre los puntos en que no pueden usarse los jeytos; asi como que ni esta ni otra red alguna de deriva se cale al

fondo; que no se apalee ni apedree la mar, y que no se causen ruidos ni estrépitos, ni pesquen si no desde la puesta del sol al sol naciente; que queda vedada toda la pesca de sardina, asi con red de deriva, como de arrastre, desde 15 de febrero á 15 de junio inclusive; que en los procedimientos á que haya lugar por la trasgresion de la veda, no podrá dictarse sobreseimiento sin consultar al tribunal de la comandancia general del departamento; que en las infracciones de veda, ademas de las penas de ordenanza, se perderán siempre las redes; y que las autoridades de provincia y distrito no toleren que por ningun pretesto se rompa la veda ni un dia antes del término prefijado.

Pesca de la ballena. Es para nosotros tanto mas lisonjera la mencion especial que hacemos de este género de pesca, cuanto que su recuerdo vá unido á las glorias inolvidables de nuestro pais. Necesitábase en verdad que el espíritu humano, cuando las artes de navegacion apenas habian traspasado los límites de sus primeros ensayos, hiciese un grande esfuerzo de valor y uno de esos alardes de intrepidéz que nos admiran cuantas veces se recuerdan, para lanzarse en los procelosos mares y emprender una terrible lucha con esos peces monstruosos, cuya enormidad espanta y cuya fuerza prodigiosa destroza los buques, ó los sumerje en las aguas. Corresponde esa gloria de lleno á nuestros vascongados, de quienes á este propósito el autor de la obra titulada *Riqueza de Holanda*, despues de asegurar que esta pesca desde mucho tiempo estaba entre manos de los vascongados, dice, que entre ellos habia nacido el arte de harponear, y en ellos se encontraban los marineros mas intrépidos, que son los que se necesitan para darla el éxito de que es capaz. Los holandeses, añade, aprendieron de los vascongados el rumbo de la Groclandia y el estrecho de Davis, el arte de harponear las ballenas, de estraer el sain y de purificar el *spermaceti*.

Efectivamente: en nuestras costas del septentrion, contando desde Galicia, se cree que fué donde primitivamente se fomentaron muchos puertos mediante compañías establecidas entre sus antiquísimos pescadores para harponear las ballenas, que por aquella parte del Océano abundaban en los siglos remotos, como lo indican algunos vestigios muy antiguos (1). Tuvo entonces esta pesca un valor proporcionado á los riesgos casi insuperables de tan atrevida empresa. Ejecutábanla colocándose hombres prácticos y cuidadosos en las alturas de las montañas, desde las cuales, cuando descubrian en el espacio de las aguas alguna ballena, avisaban con prontitud al puerto ó puertos inmediatos por medio de señales convenidas. Corrian los pescadores á sus lanchas ya prevenidas, y dirigiéndose hácia la ballena armados de harpones, empezaba la terrible lucha en que el diestro harponero, aprovechando el momento de sacar el pez la cabeza para respirar, le clava el harpon con una ó ambas manos en el punto mas conveniente. Herida la ballena, sale á la superficie del agua en medio de sus agitaciones, y entonces los pescadores, armados de venablos y jabalinas, la hieren cuantas veces pueden, resguardándose de los terribles golpes de la cola, hasta que espira.

Esta pesca, segun el escritor citado, llegó á su colmo en siglos posteriores, y se mantuvo en ese grado de prosperidad hasta bien entrado el siglo XVIII. En 1732 se pensó en restablecerla formando una compañía de órden del rey; mas aquel buen deseo no llegó á realizarse, ya por las circunstancias calamitosas en que se encontró poco despues la Nacion, como por haberse incendiado dos navíos destinados á la espedicion, uno en 1740 y otro en 1741, en términos que, verificada la paz, se hallaba la compañía en 1749 con un solo navío, que sin embargo habilitó despachándole al estrecho de Davis, que se consideraba el mas abundante en esta pesca.

La compañía de Caracas en el mismo año resolvió fomentarla asignando el fondo de sesenta mil pesos, y en 1752 compró dos navíos; pero con tan poca ventura, dice Sanchez Reguart, que el uno tuvo que volver de arribada de resultas de una fuerte

(1) Sanchez Reguart, verb. *Harpon*.

avería, y el otro, aunque siguió su viaje, la corta cantidad de pesca que hizo apenas pudo cubrir el coste de su armamento. Estos desastres, la interrupcion de nuestro comercio con Dinamarca, y otras circunstancias que ocurrieron á mediados del mismo siglo, llevaron á la mayor decadencia la industria de que vamos hablando.

Coincidió con la decadencia de esta pesca la de la pesca general, y el señor don Cárlos IV, siguiendo las miras de su augusto padre, concibió el proyecto de formar una compañía, cuyo objeto principal era hacer la pesca en los mares de los dominios españoles, en Europa, Africa y América, de todos los peces propios para salar y curar, y singularmente la de la ballena y otros peces de grasa para reducirlos á ella. La compañía fué aprobada y tomada bajo la real proteccion, con el nombre de real compañía marítima, por real cédula de 19 de setiembre de 1789, concediéndosele varias franquicias y exenciones, y publicándose unos estatutos bastante estensos para su gobierno. La compañía apresló sus buques, hizo sus primeras espediciones con varia fortuna, y poco á poco fué decayendo, hasta que los acontecimientos políticos, las guerras y los disturbios de los últimos años del pasado siglo y de los primeros del presente, la llevaron á su estincion. Hoy la pesca de la ballena está entregada al interés particular, que para emprenderla arma buques de gran porte, y hace los demas aprestos que exije un ramo tan importante de industria y navegacion, cultivado por otras naciones como un elemento considerable de su prosperidad.

Pesca de ostras. No por la riqueza de esta pesca, ni por su importancia en el órden económico, hemos creido conveniente tratar de ella en este lugar; pero no siendo, como no es tampoco indiferente en algunas provincias, y hallando en las ordenanzas generales y en las particulares de esas provincias algunas disposiciones concernientes á la pesca de este marisco, parécenos indispensable dar á nuestros lectores algun conocimiento de ellas.

Al hablar de los rastros, instrumentos con los que se verifica la pesca de las ostras, hemos dado una idea sucinta de ellos y de la forma que las ordenanzas permiten darles para que no se conviertan en medios nocivos y destructores. Si se permitiera el uso de ellos sin restriccion alguna; si indistintamente se autorizara la pesca de estos mariscos sin sazon y en cualquier tiempo; si no se establecieran, finalmente, útiles precauciones fundadas en la observacion y en la esperiencia, claro es que se impediria la reproduccion, y que hasta se aniquilaria la especie sin utilidad alguna. Como las ostras, dice Sanchez Reguart aludiendo á los que censuran las precauciones de las ordenanzas, hasta casi los tres años, segun convienen los prácticos, no son de provecho, ni por lo mismo racionalmente deben servir para comer, en el caso de cojerse sin sujecion á las reglas establecidas, como sucede con las crias de otros peces, no deberemos admirar haya entre nosotros tambien imitadores de aquellos salvajes que no se detienen en derribar el árbol para comer el fruto.

Sin duda por estas consideraciones las ordenanzas de la provincia de Pontevedra dispusieron que el rastro no fuese de hierro, si no de palo; que en los meses de mayo, junio, julio y agosto, no se pescase la ostra, por ser el tiempo de la cria; que esta pesca deberia empezar en 1.° de diciembre hasta último de abril, y que en las mareas bajas nadie pasara á cojer la cria de la ostra que queda arrimada á la tierra, antes bien procuraran todos echarla mar adentro para que se crie, crezca y pueda ser útil; y respecto de que para cojer dicha cria es preciso entrarse á pié en el agua salada, celaran los marineros que ninguno del gremio de tierra entrase á sacarla ni á pescar con fisgas, bajo la responsabilidad que establece.

Las ordenanzas para la provincia de la Coruña disponen tambien, que para la pesca de las ostras haya de usarse precisamente de los rastros de madera en tierra, y en piedra de fierro.

Por último, las ordenanzas generales establecieron todas las precauciones que juzgaron convenientes, disponiendo: que la

pesca de ostras tendrá su principio en primeros de diciembre, y concluirá en abril del año siguiente, sin que en los meses restantes pueda usarse con rastros, endeños, garabatos ó angasos; que en todo caso las púas han de ser de madera; que los pescadores se abstengan siempre de cojer las crias que encuentren sueltas, y en caso de que estén pegadas á otras ostras ó piedras, las echen al mar; que no ejerza esta pesca, donde sea preciso embarcarse ó entrar en el agua salada, quien no se halle alistado en los libros de gente de mar; que si en algun puerto ó pueblo conviniese, pueda comenzar la pesca desde el mes de setiembre; que á ninguna persona se ha de impedir el aprovechamiento de la pesca del marisco en la estension de las playas y arenales que descubre la vaciante de las mareas; y finalmente, que ha de ser libre la pesca de ostras siempre que no estuvieren en parajes acotados, como son las cepas de puentes ó las ostreras construidas de propósito, que de tiempo inmemorial posean algunos particulares, ó se construyeren con real permiso.

Pesca del coral. Nuestros lectores, que no habrán olvidado el punto de vista bajo el cual venimos tratando la interesante materia de esta seccion, no esperarán una esposicion mas ó menos erudita sobre particulares que no tienen inmediata conexion con nuestro objeto. No vamos por consiguiente á investigar la naturaleza de esa produccion marina, ni la de la materia de que está formada; ni á describir las diversas artes que se emplean en esta pesca; ni á enumerar uno por uno los mares en que se forma; ni á referir, en fin, los usos y costumbres de los pescadores que se ocupan en esta industria. Basta á nuestro propósito decir, que desde tiempos muy antiguos el coral se halla en los mares de España, especialmente en las costas de Andalucía y Cartagena, en los mares de Cataluña, en las islas de Mallorca y Menorca, y en otros puntos determinados; y que los españoles fueron de los primeros que ensayaron su inteligencia é ingenio en el aprovechamiento de este lucrativo ramo de comercio.

Capmany asegura (1), que desde tiempos muy remotos, otro de los ramos del trato de los catalanes fué la pesca y abrage del coral, cuya industria y negociacion estuvo en sus manos por mas de tres siglos; añade, que el beneficio de aquella planta marina era mirado como muy importante ya en principios del siglo XV, si se consideran las providencias que espidió el gobierno en aquellos tiempos y en otros posteriores para conservar dicha labor en la provincia; y por último, que en las ordenanzas de la diputacion contra los defraudadores de los derechos de aduanas establecidos en 1422, se impuso la pena de 400 sueldos al que estrajere de Cataluña las muelas de labor, ademas de quemar la embarcacion que las condujese, á fin de conservar en el pais el provecho de aquella industria.

Sanchez Reguart cita un escritor para confirmar el hecho de que en el siglo XVI continuaba la pesca y negociacion del coral, pues, entre todos los ramos de industria y tráfico de Barcelona, este fué el que mereció su particular atencion. El mismo, añade, duraba en el siglo siguiente segun testimonio de algunos viajeros é historiadores contemporáneos, que cuentan la esportacion de aquella manufactura corriente y acreditada en los paises estranjeros. En el resto de la Península habia y se hace aun algun consumo de coral, manufacturado en las montañas de Pas, de Leon, Asturias, y algunos parajes de Castilla la Vieja, ademas de algunas porciones que se trasportaban á Nueva España.

El señor don Cárlos IV, deseando promover esta pesquería en la Península y aprovechar los productos de las costas de Africa, proyectó la formacion de una compañía, dotada suficientemente para dar á la pesca y fábrica del coral el impulso que reclamaba. La compañía se formó efectivamente en 1790, poniéndose á su frente una junta compuesta de un presidente y cuatro vocales, habiéndose reunido para ello varios cuerpos de comercio de la corte, como el de los cinco gre-

(1) Memorias históricas sobre la marina, etc.

mios mayores de Madrid, el de la real compañía de Filipinas, el de la real compañía marítima y el de la de longistas, acordándose habilitar desde luego 120 falúas, ó las que pareciesen necesarias, quedando libres para emplearse de cuenta de sus respectivos dueños en otras pesquerías, pasada que fuese la pesca del coral. Se redactó un reglamento bien combinado para el régimen de la compañía, y esta empezó á realizar sus operaciones con algun progreso, segun los estados que inserta el autor citado. La guerra de Europa las interrumpió desgraciadamente, y desde entonces este ramo de industria ha caido en la mas completa decadencia.

Las ordenanzas generales disponen acerca de esta pesca, que será premiado del fondo del gremio el que inventare máquina ó nuevo instrumento para estraer con mas ventaja el coral; que continúe el uso de los artes actuales, con tal que se formen sin abuso y con las proporciones, figuras y dimensiones convenientes á las profundidades, sitios y cóncavos en que se hubieren de aplicar; que se guarde el órden que prescriben entre los pescadores; que los que descubrieren cueva de coral vivo en fondo de menos de 40 brazas, la disfruten por sí solos; que los mismos descubridores no emprendan la pesca sin espresa licencia del juez de marina; que no introduzcan al aprovechamiento de ella persona alguna, bajo ningun pretesto; que si algun descubridor ha de trasferirse al servicio de la real Armada, pueda ceder su derecho á otro pescador matriculado; que el descubridor, que se ausente por su propia conveniencia, le pierda, y si hubiere necesidad de reemplazar su persona para el desempeño de las maniobras de la pesca, se echarán suertes entre los pescadores de la primera cuadrilla de turno para servicio de la Armada; que se verifique lo mismo cuando falleciere algun descubridor, á menos de que el número de los que quedaren fuese suficiente para verificar completamente las maniobras de la pesca; que si los descubridores abandonaren la pesquería esclusiva de la cueva, quede á la comunidad del gremio; que las cuevas de coral muerto sean de todos los pescadores, prefiriendo al primero que llegue; que continúe la costumbre de pescar el coral por compañías, autorizando el juez de marina los convenios que deben preceder; y finalmente, que se observen en la formacion de estas, en sus operaciones y distribucion de productos, las reglas que establecen.

SECCION IV.

DE LA PESCA EN LOS RIOS, ESTANQUES, LAGOS Y OTROS PUNTOS SEMEJANTES, Y DE LAS RESTRICCIONES Á QUE ESTÁ SUJETA.

Era natural que el decreto de 1834, al dictar las disposiciones referentes á la pesca en aguas dulces corrientes ó estancadas, adoptase los mismos principios establecidos al reglamentar el ejercicio de la caza. Derecho tan legítimo y justo es el del propietario en un caso como en el otro; si la propiedad se respetaba para atribuirle el derecho de disfrutar ámplia y libremente de la caza, otro tanto debia hacerse respecto de la pesca, porque donde hay igual título y razon, se dá siempre igual derecho. Este es el principio fundamental que convenia consignar para aplicarlo despues á las diversas combinaciones que ofrece la propiedad misma, y este es el sistema que ha seguido el decreto citado, aunque incompleto como veremos por su exámen.

El artículo 36 dispone que los dueños particulares de estanques, lagunas y charcas, que se hallen en tierras cercadas, están autorizados, en virtud del derecho de propiedad, para pescar en ellos durante todo el año sin sujecion á regla alguna. Se entienden por tierras cercadas en este título y en todos los demas del presente decreto, las que lo estén enteramente, y no á medias ó aportilladas, de suerte que no puedan entrar en ellas las caballerías. La disposicion del artículo no hace por consiguiente mas que consagrar el principio espuesto, y dar á la propiedad la plenitud de sus prerogativas. En cuanto á la inteligencia que por lo respectivo á este artículo debe darse á las palabras *tierras cercadas*, véase la esplicacion y observacio-

nes que dejamos hechas en la seccion segunda, §. 1.°

Consecuencia natural era de este derecho, y casi no habia necesidad de consignarla en el decreto, la de que los dueños podrán, en virtud de su propiedad, comunicar estas facultades á sus arrendatarios en los términos que con ellos estipulen. La duda que en todo caso pudiera ocurrir respecto de la facultad de pescar los arrendatarios, no es la que en esa disposicion puede considerarse enunciada. Cuando el dueño comunica la facultad de pescar á su arrendatario haciéndola objeto espreso del contrato, no puede haber contradiccion ni duda sobre el derecho de ejercerla; la duda surgirá cuando nada se ha pactado con el arrendatario sobre el punto de la pesca; y entonces se seguirá, como mas ajustada en nuestro concepto, la doctrina que en caso igual dejamos espuesta al tratar de la caza.

El interés del propietario, segun hemos dicho ya otras veces, no es ni puede ser tan libre y espedito, que cuando choque con el interés general, ó amenace á la seguridad y tranquilidad pública, todavia haya de ser respetado. Por esta consideracion el art. 38 prohibe á los dueños particulares y arrendatarios de estanques y lagunas que se hallan en tierras abiertas, aunque estén amojonadas, pescar en ellas envenenando ó inficionando de cualquier modo el agua, de suerte que pueda perjudicar á las personas ó á los animales domésticos transcuntes que la bebieren. Esta disposicion concretada á los dueños particulares, se hace general en el artículo 45 que prohibe pescar envenenando ó inficionando las aguas, en ningun caso, fuera del de ser estancadas y estar enclavadas en tierras cercadas de propiedad particular. Esta acertada prohibicion es muy antigua, como se habrá observado en la seccion legislativa, pues ya en 1435 prohibió don Juan II echar en los rios cebos de cal viva, beleño, veneno, torvisco y otras plantas, y la misma prohibicion se repitió en la ordenanza de 1804. Las razones que la justifican son tan obvias, que hacen escusada toda esplicacion. Lo que no nos parece tan obvio, atendido el objeto del art. 38, es la inteligencia que en este caso especial debe darse á las palabras *tierras abiertas aunque estén amojonadas.*

El artículo prohibe á los dueños y arrendadores..... en tierras abiertas aunque estén amojonadas, pescar, etc. Luego el artículo solo permite pescar inficionando las aguas, cuando las tierras estén cerradas ó cercadas, sin que baste para considerarlas tales el que estén amojonadas. Conforme á esta consecuencia, el art. 36 dispone que se entenderán por tierras cercadas *las que lo estén enteramente y no á medias ó aportilladas.* Pero nosotros en otro lugar, interpretando este artículo y citando una disposicion que lo aclara, hemos sostenido que para considerar las tierras cercadas, no hay necesidad de una cerca material y completa. Debemos ahora añadir que esta inteligencia ha de entenderse en términos generales; y que no puede aplicarse al caso presente en que solo puede conseguirse el saludable objeto de la ley, estando las tierras totalmente cerradas. En el caso anterior solo se trataba del derecho de propiedad; en el del artículo 38 se trata de una especialidad, que no puede aplicarse á la interpretacion de que hemos hecho mérito.

Ademas de los pescaderos comprendidos en tierras de propiedad particular, puede haber otros que linden con tierras de particulares. El decreto ha creido justo conceder á estos el derecho de pescar, porque en ello no se ofende el interés público, á no ser que tales pescaderos estén comprendidos en las clases de que nos haremos cargo á seguida, y dispone que si las lagunas y aguas estancadas lindasen con tierras de varios particulares, podrá cada cual pescar desde su orilla con sujecion á las reglas generales establecidas; «pero, añade, poniéndose los dueños de comun acuerdo, podrán pescar con arreglo á los tres artículos precedentes, como si fuera uno solo el dueño.» Esto en cuanto á las lagunas y aguas estancadas; mas si fuesen aguas corrientes las que lindasen con dichas tierras de propiedad particular, ordena el artículo 40 que los dueños de estas

puedan pescar desde la orilla hasta la mitad de la corriente, con sujecion á las restricciones de ordenanza. Evidente es que en estos casos ninguna otra persona podrá pescar sin licencia del propietario, toda vez que para hacerlo necesita entrar en la propiedad ajena y usar de ella.

Despues de la pesca en tierras de propiedad particular, examina el decreto la que puede ejecutarse en las aguas existentes en tierras de propios arrendadas y no arrendadas, y en las aguas pertenecientes á tierras de baldíos. Por de contado, á la manera que hemos visto al tratar de la caza, los ayuntamientos pueden arrendar la pesca, pero con la aprobacion del gobernador de la provincia. Verificado esto, nada hay que advertir, pues como el arrendatario, para el objeto y fines del arrendamiento, se sustituye en el lugar del propietario, claro es que le competerán todas las facultades que á este. El arrendatario podrá pescar por sí y dar á otros licencia para que lo hagan; pero estos y aquel deberán sujetarse á las restricciones espuestas y demas que se espondrán. Si las aguas corrientes están en tierras, cuyas orillas pertenecen á propios, y la pesca no se ha arrendado, el artículo 42 la declara libre hasta la mitad de la corriente para todos los vecinos del pueblo á cuyo término pertenezcan las orillas, y no á los de otros pueblos, aunque tengan comunidad de pastos. Tambien permite el artículo citado que en este caso puedan las justicias dar licencia para pescar á los forasteros; pero estando sujetos tanto estos, como los vecinos, á las restricciones de que se ha hablado.

El mismo principio é idénticas disposiciones adoptó el decreto respecto de la pesca en aguas corrientes, cuyas orillas pertenezcan á baldíos. Tambien en este caso es libre la pesca hasta la mitad de la corriente para todos los vecinos del pueblo, á cuyo término pertenezcan las orillas; tambien las justicias pueden dar licencia para pescar á los forasteros, y tambien hay necesidad de someterse á las reglas establecidas.

Por último, el decreto hace mérito de los canales de navegacion y de riego, y de los cazes y acequias para molinos ú otros establecimientos industriales y de placer, y dispone que se observarán las reglas de que se ha hecho mencion, segun la calidad de las orillas, á no ser que haya costumbre ó contrato en contrario. Es decir, que salva esta limitacion, hay que observar si los canales, cazes ó acequias lindan con tierras de propiedad particular, ó de propios, arrendadas ó no, y de baldíos, y segun el caso asi se aplicará la disposicion correspondiente.

Todas las espuestas, con relacion á las aguas corrientes, son aplicables tambien, aunque el decreto no lo determina espresamente, á los rios y canales navegables. Al hablar de los primeros en la seccion precedente, hemos visto que en aquellos que desembocan directamente en el mar, hay señalado un punto desde el cual tierra adentro se considera libre la pesca. En todo este espacio, por consiguiente, y en toda la corriente de los demas rios y canales navegables, supuesta esa libertad, podrá el propietario pescar en toda la estension de su orilla, hasta la mitad de la corriente; asi como podrán ejercer los ayuntamientos las facultades que se les dán en el caso de pertenecer las orillas á propios ó baldíos.

Como el uso de la pesca en los rios que por lo comun recorren largos espacios, pudiera embarazarse segun los medios que se empleen, las leyes han dictado diferentes disposiciones para evitarlo, y asegurar el libre ejercicio que compete á todos. El mismo decreto del año 34, aunque incompleto en esta parte, dispone que en los rios y canales navegables se ha de entender que las facultades de los dueños y arrendadores, espresadas en el mismo decreto, han de ser sin perjuicio de la navegacion ni de las servidumbres á que, con motivo y á beneficio de ella, están sujetas las tierras riberiegas. Reduciendo á un concepto general todo lo que puede decirse y ordenarse en la materia, la máxima que debe observarse escrupulosamente es, que la pesca no se verifique en los rios de modo y por medios, que se impida el ejercicio de ella á los que hayan de ejecutarla en sitios mas bajos. Por eso nuestra le-

gislacion prohibió desde muy antiguo que se pescara con paños de jerga, lienzos, sábanas y jurdias; que se hicieran paradas, estacadas y corrales; que no se sacaran los rios comunes de madre, para dejarlos en seco y tomar la pesca; que no se pescara en tiempos de cria, ni cuando desovare el pescado; y que cada concejo tuviese ordenanzas en que se fijara el marco que deberian tener las redes, segun la calidad del pescado. Otras declaraciones de importancia en esta materia se hicieron con posterioridad; á saber, 1.ª que el derecho de la pesca en los rios es de suyo libre y general, y que por lo mismo la facultad privativa de pescar en algun sitio determinado, no puede derivarse si no de privilegio real ó de una posesion inmemorial que le suponga: 2.ª que este derecho privativo nunca supone la facultad de estorbar la libre navegacion de los rios, ni el derecho de pescar que otros tienen fuera del lugar determinado por el privilegio; y 3.ª que no puedan ponerse estacadas ni usarse otros medios que impidan la subida de la pesca, y pongan obstáculos al ejercicio de este derecho.

En cuanto á los privilegios concedidos para pescar en determinados puntos de los rios, ya queda dicho que fueron abolidos por el célebre decreto de 11 de agosto de 1811, confirmado despues por algunos otros. Pero no quedaron abolidos todos los privilegios de pesca sin distincion, si no aquellos únicamente que, no reconociendo el orígen que marca la ley de 1804, habian sido disfrutados y ejercidos por los señores jurisdiccionales y en semejante concepto. El que solo tenia una concesion gratuita é injustificada; el que al abrigo de la jurisdiccion y del poder, propios de su carácter, se habia ido intrusando en el uso y ejercicio del derecho esclusivo de pescar, perdió de todo punto su privilegio. Pero se respetaron, como no podia dejar de suceder, el derecho derivado de títulos legítimos traslativos de la propiedad; se respetó el derecho apoyado en contratos onerosos, y todos los que ejercian el de pesca privativamente continuaron y continúan disfrutándolo, sin que el decreto de 1834 se oponga á ello, si no que antes bien el espíritu de sus disposiciones los confirma y ratifica. Siempre que ocurra, pues, contienda sobre ello, el que alega el privilegio é intenta hacer valer su derecho, está obligado á probar el orígen puro y legítimo del mismo, acreditando el contrato, ejecutoria ó título de que proceda. Es, pues, incontestable que por la naturaleza misma del derecho de propiedad, y aun por los términos del decreto citado, la pesca en determinados puntos de aguas estancadas, lagunas y aun en los rios navegables y flotables, puede ser una propiedad como otra cualquiera, que se encuentra protegida y reconocida por nuestra legislacion. Si se disputare el derecho de la pesca al particular que la ejerce en uso de la propiedad de que se halla ó crea hallarse en posesion, su fallo corresponde esclusivamente á los tribunales ordinarios, á quienes están cometidas todas las cuestiones de propiedad y de derecho privado.

La segunda disposicion está exactamente ajustada á los principios consignados en esta seccion, y la tercera es la aplicacion práctica de estos principios á los casos que espresamente se mencionan.

La pesca tiene, como la caza, sus restricciones, que deben observarse escrupulosamente. La principal es la del tiempo en que no está prohibida. La ordenanza de 1804 prohibia la pesca en aguas dulces desde 1.º de marzo hasta fin de julio de cada año, y á los dueños particulares solo les permitia pescar desde el 24 de julio. La única escepcion que admitia la ley era la de la pesca de caña, la cual, como digimos, es tan inocente, que en ninguna época del año daña á la especie. La pesca de truchas quedaba prohibida en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. El decreto vigente prohibe pescar, no siendo con la caña ó anzuelo, desde 1.º de marzo hasta últimos de julio, adoptando, como se vé, la disposicion de la antigua ordenanza. Sin embargo, preferiríamos que este punto quedase sometido á la propuesta de las justicias locales, con aprobacion de la autoridad su-

perior, porque siendo muchas necesariamente las variaciones que han de producir la diversidad de los climas y el curso de las aguas, seria mas acertada la designacion de la época de la pesca.

En cuanto á los medios y artes para pescar en los rios, ya hemos dicho que la caña y el anzuelo se permiten, aun en el período de la prohibicion. De donde se sigue que fuera de este período, ó sea durante el tiempo en que se permite, no pueden usarse aquellos medios que la ley condena espresamente, ó que aun cuando no los condene, puedan perjudicar la pesca. La ordenanza antigua solo permitia pescar en tiempo permitido con anzuelo, nasas y redes, siempre que la malla de estas tuviese la cabida que marcaba. Y el artículo 46 del decreto de 1834 prohibe pescar con redes ó nasas, cuyas mallas tengan menos de una pulgada castellana, ó el duodécimo de un pié en cuadro, fuera de los estanques ó lagunas que sean de un solo dueño particular, el cual podrá hacerlo de cualquier modo.

Del contesto de este artículo inferimos que, segun el decreto de 1834, no hay otros medios ó artes permitidos para pescar en aguas dulces, que la caña, el anzuelo, y las redes ó nasas que tengan el claro ó malla prevenida; y ciertamente, no nos ocurre ninguno de los infinitos artes á que ha dado lugar la variada combinacion del ejercicio de la pesca, que pueda aplicarse á la de los rios sin causar el perjuicio que la ley se ha propuesto evitar. Diferentes de aquellos artes están espresamente prohibidos en las ordenanzas para la pesca de los rios, y solo los que no pueden mermar ni destruir las crias, barriendo y arrastrando los fondos, son los que la conveniencia pública puede autorizar, porque la pesca en los rios se destruye con mucha mayor facilidad que en los mares, toda vez que la angostura de ellos unas veces, el poco fondo otras, y la facilidad de recorrer y cruzar las orillas, permiten abusos é invenciones maliciosas para destruir la pesca.

En cuanto al tamaño de las mallas, constantemente y desde tiempos muy antiguos se ha considerado, que las mallas en los rios debian ser mayores que en el mar, y en este sentido se han dictado siempre las disposiciones dadas sobre la materia. En una real cédula de 16 de enero de 1772 se prescribió el cuadrado de la malla, de pulgada y media (medida de Búrgos), para los rios y aguas dulces; pero ya la ordenanza de 1804 redujo el tamaño de aquella á una pulgada, que es la medida que ha prevalecido, como hemos visto. Si la malla de las redes, dice Sanchez Reguart, con que se permite pescar en los rios, fuese de menor cuadrado ó igual al reducido que tienen muchas redes marítimas, se perderian todas las crias, y por lo mismo no puede negarse entre ellos y el mar la diferencia..... En este, por su estension de aguas, por el temor de las olas, y por lo ténue é imperfecto de la navegacion, debian ser incomparablemente menos nocivas (las mallas menores) hasta que el discurso humano, estimulado de un escesivo lucro, sin reparar en los medios, estendió la invencion al ganguil, la tartana, y colmó sus anhelos con la pareja.

Como se ve por el exámen que hemos hecho de las disposiciones del decreto de 1834, relativas á la pesca, las reglas establecidas para fijar los derechos de los pescadores en los diferentes puntos de que hemos hablado, distan bastante de ser completas; y las muy escasas en número, que se consignan sobre la policía de la pesca misma, no llenan con mucho este objeto. El interés general exige que el ejercicio de ese derecho esté sometido á reglas circunstanciadas que puedan prevenir la destruccion de los peces. Sea que se adopte el sistema de determinar á priori, y para la generalidad, el reglamento ú ordenanza que se crea conveniente; sea que se siga el otro sistema de autorizar á las justicias locales, con aprobacion de las superiores, para adoptar las disposiciones reclamadas por las circunstancias, es indispensable que aparezca prescrito y ordenado el tiempo, la estacion y hasta el período del dia en que puede ejecutarse la pesca, en los rios por lo menos y en las corrientes de agua, cualesquiera que sean; los artes y medios de pescar, que pudiendo perjudicar á la reproduccion ó nue-

vas crias en los rios, deben prohibirse; las redes, artimañas y demas que puedan inventarse con igual objeto; las dimensiones que han de tener las primeras y el hueco de sus claros, segun las diversas clases de pescados y las circunstancias de los sitios; el tamaño de los peces que pueden pescarse, con la prohibicion de sacar y vender los menores; la clase de cebo con que podrá pescarse, y en suma todas las medidas que pueden conducir al importante objeto de la policía de la pesca.

El decreto de 1834 no exige la licencia de la autoridad para el ejercicio de la pesca en parajes que no sean de propiedad particular, como por los artículos 15 y 16 la exige para el ejercicio de la caza. No por eso debe inferirse que la pesca no está sujeta á esta restriccion, toda vez que la impuso el reglamento de policía de 1824, vigente en esta parte como hemos dicho, y que se la considera subsistente en disposiciones posteriores. La real órden ya citada de 23 de mayo de 1834, al dejar en suspenso los artículos 16 y 17 de aquel decreto, ordenó que continuase la policía espidiendo las licencias para caza y *pesca* con las mismas retribuciones establecidas en sus reglamentos vigentes, aplicando á sus fondos el producto como hasta entonces; y otra real órden muy reciente (1) habla tambien de las licencias para pescar, declarando á qué personas pueden concederlas los gefes militares. Ademas, el art. 17 del real decreto de 8 de agosto de 1851 en su número 4.° dispone, que se estiendan en papel del sello tercero las licencias de caza y *pesca*: están, pues, subsistentes de hecho y de derecho.

La retribucion que por ellas debe satisfacerse, ademas del precio del papel sellado, es la de 30 rs. en Madrid y 20 en los demas pueblos; y la de 20 y 10 rs. respectivamente para los pescadores de oficio, siempre que no estén matriculados para el servicio de la marina, en cuyo caso las obtendrán *gratis* (2). Estas licencias, lo mismo que las de caza, se entenderán concedidas sin perjuicio de los derechos de propiedad, y con sujecion á las leyes de veda (1); y es tambien aplicable á las mismas cuanto hemos dicho respecto de las de caza en la *restriccion* 5.ª, §. 2.°, seccion II de este artículo, relativamente al tiempo en que espiran, y autoridades que pueden concederlas (2).

(1) La ya citada de 15 de diciembre de 1853.
(2) Art. 125 del reglamento de policía para Madrid, y 105 del de las provincias, de 20 de febrero de 1824.

SECCION V.

DEL PROCEDIMIENTO Y DE LAS PENAS EN MATERIA DE CAZA Y PESCA.

Llegamos ya al último término del presente artículo en que hemos de tratar una materia importante. Escusadas serian todas las disposiciones restrictivas que el derecho ha establecido para reprimir los abusos, si al lado de aquellas no se hubieran sancionado penas convenientes para asegurar su observancia y cumplimiento. De estas penas, y del modo de proceder en su imposicion, hablamos en la seccion presente.

§. 1.° *Del procedimiento.*

El procedimiento es siempre una parte esencial y atendible cuando se trata de castigar, porque comprende la forma y los trámites que deben observarse para evitar la arbitraridad del castigo.

El modo de proceder de las justicias en materias de caza y pesca, será por regla general gubernativo: esto dispone el art. 48 del decreto de 1834, sin añadir mas.

La primera consecuencia á que dá lugar esta disposicion es que, en materias de caza y pesca, puede promoverse alguna vez un procedimiento que no sea gubernativo; porque no nos ocurre procedimiento de ninguna otra clase, al cual pueda aplicarse la restriccion espresada. ¿Cuándo, pues, habrá lugar á un procedimiento puramente gubernativo, y cuándo podrá abrirse otro judicial? Con-

(1) Art. 126 de id. id.
(2) En cuanto á los militares, puede verse ademas de la real órden citada de 15 de diciembre de 1853, la de 4 de julio de 1831.

signemos sobre esta cuestion algunas reflexiones.

Examinadas todas las disposiciones penales que comprende el decreto, podemos concretarlas á sencillas ideas y reducirlas á pocos casos. Los delitos de caza y pesca penados en aquellas disposiciones, ó afectan solo el interés privado, ó afectan á intereses generales, constituyendo un delito ó una falta; ó suponen la simple infraccion de un acuerdo ó bando de la autoridad, sin otra trascendencia. El que inficiona ó envenena las aguas para pescar, no siendo propietario y careciendo de facultad para ello, y procediendo quizá con intencion maliciosa, no puede ser objeto de un procedimiento gubernativo, porque existen en el hecho ejecutado circunstancias que deben ser objeto de las investigaciones de la autoridad judicial. El que entra sin violencia en tierras de ajena propiedad y caza, ó falta á algun bando de la municipalidad, no puede colocarse en igual caso. Creemos, pues, que en casos idénticos al primero será cuando, segun la restriccion del art. 48, deba ser el procedimiento judicial. Podrá ser tambien judicial el procedimiento cuando se trate de daño privado, si este asciende á suma que constituya mayor cuantía.

Determina tambien el artículo 49 del decreto los medios en virtud de los cuales pueden promoverse, tanto el procedimiento judicial, como el gubernativo, aunque no establece esta separacion. «Los procedimientos, dice, tendrán lugar: 1.° por queja de la parte agraviada: 2.° de oficio: 3.° por denuncia de guarda jurado ó de cualquier individuo del ayuntamiento: 4.° por denuncia de cualquier vecino, siendo caso de aguas inficionadas ó de cepos armados fuera de cercado.» Esta disposicion es justa y conforme á los principios jurídicos que tienen aplicacion á la materia sobre que versa. Promuévense los procedimientos por *queja* de la parte agraviada, cuando el hecho de caza ó pesca que se ha ejecutado afecta meramente el interés privado de un particular que demanda la indemnizacion del daño esperimentado. Nadie mas que él en tal supuesto tiene derecho á quejarse y á reclamar; por eso nadie mas que él puede llevar ante la autoridad al autor del abuso. Si tal queja no se produce, no habrá términos hábiles para proceder.

Promuévense los procedimientos de *oficio* cuando hay un delito ó una falta que trasciende al público y que altera el órden legal y constituido; asi como cuando se trata de la violacion de los bandos y preceptos de la autoridad. La vindicta pública en el primer caso, y la autoridad en el segundo, se hallan interesadas en el procedimiento para reprimir los desmanes y faltas cometidos en ambos casos. La autoridad no puede dejarlos impunes, y como se trata de la satisfaccion de derechos públicos, evidente es que debe tener aquella la jurisdiccion conveniente para promover de oficio el procedimiento que corresponda.

Promuévense los procedimientos por *denuncia de guarda jurado*, ó de cualquier individuo de ayuntamiento, en los mismos casos que se acaban de espresar, es decir, en aquellos en que puede procederse de oficio. No siempre la autoridad puede saber por sí los escesos que se cometan en materia de caza y pesca; por lo mismo necesita el ausilio y la cooperacion de sus dependientes para que le denuncien la existencia de aquellos, y pueda proceder en su consecuencia.

Y finalmente, promuévense por *denuncia de cualquier vecino* en los casos que espresa el artículo. Hay entonces un atentado contra la salud pública; puede el hecho envolver un delito público tambien; todos se hallan interesados en su represion, porque á todos pudieron alcanzar las consecuencias del atentado. Justo es, pues, que se permita denunciarle á cualquier vecino. Escusamos decir que en los dos casos espresados en el párrafo 4.° del art. 49, caben sin duda y no quedan escluidos ni la denuncia del guarda jurado, habilitado siempre para denunciar toda falta ó todo delito, ni el procedimiento de oficio si llega á conocimiento de la autoridad la noticia del atentado.

Entra ya el decreto á determinar los trá-

mites que deben seguirse en la actuacion de estos negocios, y dispone que el alcalde hará comparecer al presunto infractor, y comprobado el hecho, exigirá de él la multa, y el valor de la caza y del daño, cuando lo haya, dando á estas cantidades el destino prescrito en el mismo decreto. Desde luego se comprende que se trata en esta disposicion del procedimiento gubernativo; la prueba del hecho la dará la parte perjudicada, y el alcalde apreciará sin el rigor del derecho, y atendiendo á las circunstancias del caso, la verdad que se propone descubrir para la imposicion de la pena. Una particularidad notable establece el art. 51 del mencionado decreto, disposicion que aplaudimos, porque está fundada en el espíritu de lenidad y de conciliacion que debe prevalecer siempre cuando de ello no se siguen perjuicios á otros intereses mas elevados. «Cuando se proceda, dice, por queja de parte agraviada, si resulta ser cierto el hecho, y hubiere daño, el alcalde procurará que los interesados transijan en cuanto al daño, sin perjuicio de cobrar la multa; y si no se avinieren, decidirá gubernativamente en las causas de menor cuantía, dejando que las otras sigan el curso judicial que les corresponda, pero satisfaciendo antes el reo la mitad de la multa destinada al fondo para la persecucion de animales dañinos.» Es decir, que tratándose de daño causado á un particular, sin mezclarse bajo ningun concepto el interés público, cualquiera que sea la gravedad é importancia del daño reclamado, el alcalde debe proceder desde luego gubernativamente para procurar en la comparecencia ante su autoridad la transaccion ó arreglo del negocio, y solo cuando esta gestion conciliadora no haya producido resultado, si el daño es de mayor cuantía, habrá lugar al procedimiento judicial correspondiente.

Es tambien digna de aplauso la disposicion del art. 52 del espresado decreto. «Las infracciones, dice, de que se trata en este decreto prescribirán á los 30 dias en los casos de aguas maleficiadas, ó de cepos y armadijos fuera de cercado, y en todos los demas á los 20 dias. Pasados estos plazos, las justicias no podrán proceder de oficio, ni admitirán queja ni denuncia alguna.» Para que la pena produzca sus saludables efectos, debe aplicarse inmediatamente, y cuando aun está viva en la conciencia de todos la impresion ocasionada por la infraccion de la ley: cuanto mas leve es la falta, mas pronto desaparece aquella impresion; y por eso nos parecen prudentes los plazos que se fijan para la prescripcion de las indicadas infracciones. Mas, téngase presente que se trata solo de hechos que constituyen faltas; si esos hechos por su gravedad ó consecuencias se elevasen á la categoría de delitos, no pueden considerarse comprendidos en esta disposicion, que únicamente se refiere á las simples infracciones de las ordenanzas de caza y pesca.

Puede ocurrir una duda, originada por la comparacion de las disposiciones del decreto de 1834 con las del Código penal. Establece el primero, por ejemplo, que los que con el objeto de cazar violasen y saltasan los cercados de tierra de propiedad particular, pagarán ademas de los daños que causaren, incluso el valor de la caza que mataren ó cogiesen, que debe ser para el dueño, ó arrendatario en su caso, las costas del procedimiento, si lo hay, y ademas 20 reales por la primera vez, 30 por la segunda y 40 por la tercera. Pero el Código penal califica de falta el hecho de entrar con violencia á cazar ó pescar en lugar cercado ó vedado, y castiga con la pena de arresto de 5 á 15 dias y multa de 5 á 15 duros al que lo ejecuta, sometiéndole por consiguiente al procedimiento especial establecido por el mismo Código para el conocimiento y castigo de las faltas. Aumentábase todavía el conflicto con la disposicion del artículo 505 del citado Código, el cual, despues de disponer que en las ordenanzas municipales y demas reglamentos generales y especiales de la administracion que se publicaren en lo sucesivo, no se establecerán mayores penas que las señaladas en el mismo Código, aun cuando hayan de imponerse en virtud de atribuciones gubernativas, á no ser que se determine otra cosa por leyes especiales, añade lo siguiente: «Conforme á este

principio, las disposiciones de este libro no escluyen ni limitan las atribuciones que por las leyes de 8 de enero, 2 de abril de 1845 y cualesquiera otras especiales, competan á los agentes de la administracion para dictar bandos de policía y buen gobierno.» De todas estas disposiciones nació una gran confusion en esta clase de procedimientos y una especie de anarquía perjudicial para los culpables. Las autoridades gubernativas, fundadas en el decreto de 1834 y en el art. 505 del Código, conocian é imponian las penas prescritas; y los alcaldes en juicio de faltas conocian de los mismos hechos, y los castigaban con la pena impuesta por la ley criminal. Lo que ocurria en hechos de caza y pesca, ocurria tambien en todos los demas sujetos á la autoridad administrativa y considerados como faltas por el Código. Para evitar estos inconvenientes, bien dignos de llamar la atencion del gobierno, se dictó el real decreto de 18 de mayo de 1853, en que se adoptaron las siguientes reglas:

1.ª Las faltas que, segun el Código penal ó las ordenanzas y reglamentos administrativos, merezcan pena de arresto, deberán ser castigadas siempre en juicio verbal con arreglo á lo dispuesto en la ley para la ejecucion de dicho Código.

2.ª Las faltas cuyas penas sean multa, ó reprension y multa, podrán ser castigadas gubernativamente, á juicio de la autoridad administrativa á quien esté encomendada su represion.

3.ª Los alcaldes de los pueblos conservarán la facultad gubernativa de imponer multas hasta en la cantidad que permite el artículo 75 de la ley de 8 de enero de 1845, y sin atenerse al límite señalado en el párrafo 1.°, art. 505 del Código penal, solamente cuando dichas penas estén establecidas en ordenanzas ó reglamentos municipales vigentes, cuya publicacion sea anterior á la del referido Código.

4.ª Los mismos alcaldes podrán, sin embargo, imponer gubernativamente la pena de arresto por sustitucion y apremio de la multa, con sujecion á lo dispuesto en el artículo 504 del Código penal, solo cuando los multados fueren insolventes, y no pudiendo en ningun caso esceder de quince dias el tiempo del arresto. Otras disposiciones contiene el real decreto citado para dirimir algunas otras contiendas en el particular de que tratamos; no creemos deber hacer mencion de ellas al presente, dejando su esplanacion para el artículo correspondiente.

§. 2.° *De las penas.*

La imposicion de la pena es el último acto del procedimiento, con el cual se satisface la vindicta pública ó se indemniza al interés privado de los daños que ha esperimentado. Para que esta pena no sea ilusoria y pueda producir el saludable efecto de contener al culpable y reprimir á los demas, necesario es que su gravedad esté en armonía con la índole del atentado, y con el interés ó intereses que pueden determinar la voluntad de cualquiera á cometer alguno de los delitos de que tratamos. Hay ocasiones en que la vanidad, el amor propio ofendido, una palabra comprometida imprudentemente, lanzan á uno á la ejecucion de hechos de esta clase, que nunca son graves, porque la levedad de la pena hace que se la mire hasta con desprecio. Necesario es, pues, organizar las penas en esta materia de forma que, sin tocar en una severidad impropia de la naturaleza de los hechos, puedan servir de freno á los que, sea por la causa que fuere, no tienen la costumbre de respetar la propiedad y los derechos ajenos.

El decreto de 1834 es defectuosísimo en el particular de que vamos hablando, y apenas, queriéndose adoptar entonces un sistema exagerado de lenidad y dulzura, se pudieron llevar las cosas á mayor estremo de exageracion del que se llevaron. «La pena general, dice el art. 53, por las infracciones de este reglamento, cuando en él no se espresa otra, será, ademas del daño y costas, si las hubiere, 20 rs. por la primera vez, 30 por la segunda y 40 por la tercera. Si todavía se repitiese el delito, la justicia consultará al subdelegado de Fomento de la provincia (gobernador) sobre la pena que convenga.»

Lorenzo Arrazola

Imposible es hacer el análisis de una disposicion donde se olvidaron todos los principios del derecho, las nociones mas vulgares de la jurisprudencia y las reglas mas sencillas, inconcusamente practicadas en la administracion de justicia. Por el exámen que llevamos hecho de las disposiciones del decreto de caza y pesca, habrán podido comprender ya nuestros lectores los distintos casos, los diferentes hechos, los varios delitos que pueden ocurrir en esta materia. Señalar una pena general para estas infracciones, que no pase de 20 rs., significa, que el alcalde tendrá que graduar la pena desde 20 reales, que es el máximum, hasta 8 ó 6, ó 4. Preguntamos ahora de buena fé, si la imposicion de una multa de 4 ó 6 rs. es capaz de producir el efecto que se propone el legislador siempre que pena un delito ó una falta. Si el alcalde no quiere pasar por el ridículo de imponer semejante multa, é impone el máximo de 20 rs., entonces resultará que esta multa se aplicará en todos los casos, y que con ella se castigarán desde la mas leve infraccion hasta la falta mas grave. ¿Y qué castigo es este para el que, deseando satisfacer un capricho de su amor propio, invade la propiedad ajena, saltando con violencia sus cercados y mortificando al dueño, que no habiendo daño no puede aspirar si no al valor de la caza, que seria bien ténue, y á ver exigir la despreciable multa de 20 rs.? En hora buena que esa pena se hubiese reservado, como mínimum de multas, para las simples infracciones de bandos de buen gobierno, y aun para las introducciones sencillas é inocentes en propiedades ajenas; pero hacer la pena general y absoluta para todos aquellos casos en que no se imponga otra mayor, nos parece un contrasentido. Y es tanto mas grave esta reflexion, cuanto que el respeto y la consideracion al derecho de propiedad se lleva en aquel decreto á sus últimos límites, y no corresponde á esta idea fundamental de la ley la pena impuesta á la infraccion de ella. Elevar por un lado la escelencia de un derecho y colocarle á una gran altura, y permitir á renglon seguido que pueda ser hollado y destruido casi impunemente, no es por cierto la obra de la sensatez y del buen juicio.

Despues de esta disposicion general, el decreto establece la multa que debe imponerse en algunos casos determinados.

El primero de que hace mérito es, cuando con el objeto de cazar violasen y saltasen los cercados de tierra de propiedad particular; pagarán los daños, el valor de la caza, las costas del procedimiento, si le hubiere, y 20 rs. por la primera vez, 30 por la segunda y 40 por la tercera. Sobre este punto ya hemos hecho algunas observaciones.

El segundo caso es, cuando uno caza en tierras de propios arrendadas, sin licencia del arrendatario, ó faltando á las restricciones de la ordenanza; penas, pagará el valor de la caza, 20 rs. por la primera vez, 30 y 40 por las sucesivas.

El tercero es, cuando uno tira á las palomas domésticas ajenas dentro de la distancia de mil varas de sus palomares; penas, el valor de la caza y 20 rs. de multa por la primera vez, y 30 y 40 en sus respectivos casos.

Cuarto caso: cuando los dueños de los palomares no los tuviesen cerrados durante los meses de octubre y noviembre; penas, ademas del daño, pagarán 100 rs. de multa por la primera vez, 150 por la segunda y 200 por la tercera. Conviene, sin embargo, notar, que este no es hecho ni delito de caza; es un acto muy conexionado con la caza de las palomas, que puede dar lugar á graves daños en el período especificado ya de la sementera, y la conveniencia pública exigia que se le enlazase con las disposiciones relativas á la caza, determinando la pena del que incurriese en aquella notable falta.

En el mismo caso se halla el caso quinto de que hace mencion el decreto, á saber; cuando los dueños de los palomares no los tienen cerrados durante la recoleccion de las mieses, desde 15 de junio hasta 15 de agosto.

El sesto caso es, cuando se ponen en tierras abiertas, aunque estén amojonadas, cepos, trampas ú otros armadijos de que pueda resultar perjuicio á los pasajeros ó animales domésticos. Aquí sube la multa que, ademas

del daño y las costas, será de 40 reales por la primera vez y de 60 y 80 en las dos sucesivas.

El sétimo caso es el de envenenamiento de aguas: los infractores sufrirán las mismas penas que quedan espuestas en el artículo anterior.

Desde luego se observa que esta pena leve é insignificante, dista mucho de corresponder á la gravedad que tiene siempre el hecho de que se trata, y á la mayor que puede tener atendidas las circunstancias. Sucede como en el caso anterior de la violacion de cercados agenos; de ahí es que el Código penal, calificando de falta este último hecho de la violacion, le castiga con prision de 5 á 15 dias y multa de 5 á 15 duros. El envenenamiento puede llegar á ser delito por sus consecuencias, ó si las circunstancias con que se ha ejecutado le atribuyen los caractéres de tal.

Es notable la disposicion del artículo 54 del mencionado decreto, segun la cual los padres y los tutores son responsables de las infracciones cometidas por sus hijos de menor edad y por sus pupilos. Para imponer esta responsabilidad se habrá fundado el decreto en que, estando estos bajo la autoridad y custodia de aquellos, deben vigilarlos para impedir que cometan tales infracciones. Por mas esquisita que sea esta vigilancia, es seguro que no podrán evitarlo en muchos casos, y por eso lo justo hubiera sido imponer tal responsabilidad para cuando hubiere culpa ó negligencia de parte de los padres ó de los guardadores. De todos modos deberá entenderse que esta responsabilidad es solo respecto de los daños ocasionados y de las penas pecuniarias, mas nunca en cuanto á las penas corporales; y que siempre es subsidiaria, para el caso de que los hijos ó menores carezcan de bienes propios con que pagar los daños ó la multa.

Réstanos solo decir sobre esta materia, que aunque el decreto de 1834 dispone (1) que la mitad de las multas impuestas por las infracciones del mismo se aplique al pago de las recompensas que se señalan para fomentar el esterminio de los animales dañinos; y por real órden de 18 de setiembre de 1846 se mandó que dichas multas ingresasen íntegras en las depositarías de los gobiernos políticos para darles aquella aplicacion, hoy no pueden tenerla estas disposiciones en cuanto á la recaudacion de las multas en metálico, toda vez que con posterioridad está mandado (1) que todas las multas impuestas gubernativa ó judicialmente se recauden por medio del papel sellado creado al efecto.

(6) Art. 32.

CAZA Y PESCA (EN LO CANONICO). Los antiguos padres de la Iglesia tenian una idea fatalísima de la caza, no solo, como ocupacion del clérigo; si no aun en sí misma. San Agustin la llamaba *perniciosísima*, y aun *perversísima*, y la comparaba, en cuanto al clérigo dado á ella, con la profesion de las meretrices (*in quo venator nequissimus est: qui venatoribus donant, non homini donant; sed arti nequissimæ*). Los que regalan á un cazador, decia este Santo Padre, *los que se regocijan de verle, se entristecerian de ver al Salvador.* «*Esaú era cazador*, dice San Gerónimo, *porque era pecador: absolutamente no hallamos en las escrituras sagradas que un santo fuera cazador; aunque sí pescadores.*» *¿Quid prodest jejunare visceribus; luxuriare venatibus?* decia San Ambrosio: *abstinere cibis; errare peccatis? An putatis illum jejunare... qui primo diluculo, non ad ecclesiam vigilat..... sed, surgens, congregat servulos, disponit retia, canes producit, saltus, sylvasque perlustrat? Servulos, inquam, secum pertrahit; fortassé magis ad ecclesiam festinantes; et voluptatibus suis peccata accumulat aliena, nesciens reum se futurum, tam de suo delicto, quám de perditione servorum?* (Véanse los cánones 7 al 13, distincion 86 del Cuerpo del Derecho canónico).

Aunque estas apreciaciones y censuras gravísimas de los Santos Padres son generales, siempre se entendió que lo eran mucho

(1) Arts. 46 y 53 del real decreto de 8 de agosto de 1851. Los arts. 50 y 51 del mismo determinan la manera en que las tesorerías de provincia han de satisfacer la parte de multa que corresponda á tercero.

mas respecto de los clérigos. Sin embargo, tomadas de sus homilias y obras doctrinales, parecen no contener, si no consejo y enseñanza de mayor perfeccion. Los concilios particulares empezaron muy luego á convertirlas en precepto; formándose de sus prescripciones el capítulo *Episcopum, presbyterum* (1), que reproducido en las Decretales, dice asi: *Episcopum, presbyterum, aut diaconum canes, aut accipitres, aut hujusmodi ad venandum habere non licet. Quod si quis talium personarum in hac voluptate sæpius detentus fuerit, si episcopus est, tribus mensibus á communione: si presbyter, duobus: si diaconus, ab omni officio suspendatur* (2).

Este capítulo presenta alguna diferencia con el 2 citado de la dist. 34 del Decreto, pues en este no se hace mencion del diácono. En ambos capítulos se atribuye la disposicion al Concilio *Aurelianense* IV; pero la *correccion romana* á la citada dist. 34, espresa no hallarse en las actas conocidas de los concilios aurelianenses; aunque sí en las de los concilios *Meldense* y *Agatense*, con alguna variedad tambien, pues en vez de pena jurisdiccional, ó gubernativa, se encomienda á la conciencia del obispo, y clérigos que faltaren á dichas prescripciones, el abstenerse de la comunion. (Véase allí.) El testo de la Decretal antes inserta, sin embargo, es terminante, y á él ha de estarse, como ley posterior.

El Concilio de Trento confirmó estas disposiciones canónicas; pero en términos generales, sin añadir, ni quitar á lo ya dispuesto, por lo que continuó la duda, y aun la inobservancia de lo mandado: *ab illicitisque venationibus... abstineant.* Estas son las palabras del Concilio, de las que aun volveremos á hacernos cargo (3).

Benedicto XIV, en fin (4), asienta que *toda caza* está prohibida á los clérigos.

El estado actual de la disciplina es, sin embargo, que los cánones están escritos, pero en desuso. Teóricamente prevalece la distincion de que la caza prohibida á los clérigos es la *clamorosa* y *habitual*; no la *pacífica* y *casual*. Pero en la práctica es lo cierto que hay, y nosotros conocemos clérigos, habitualmente entregados al ejercicio de la caza, sin recibir por ello represion, ni demostracion penal, ni disciplinaria de sus prelados.

En cuanto á los legos, nunca las disposiciones canónicas citadas, aunque generales las mas, han tenido otra significacion, ni aplicacion que las demas que se encaminan á reprobar y precaver todo esceso. Por lo que hace á los clérigos, y por mas que la antedicha distincion de caza *clamorosa* y caza *pacífica* no tenga aplicacion alguna, la práctica en sentido restrictivo, diremos doctrinalmente que se halla fundada en buenas razones y hasta en razones canónicas, que ligeramente reseñaremos. En primer lugar, examinando los cánones y la naturaleza misma de las cosas, se vé que las prohibiciones disciplinarias personales, pueden y deben tener uno de estos tres fines, ó todos á la vez: el impedir la malversacion de los bienes y rentas eclesiásticas; y el que se emplee en vicios ó atenciones y usos profanos lo que es patrimonio de los pobres: el evitar lo que distraiga al clérigo de las funciones y atenciones sagradas, contínuas y edificantes de su ministerio: y en fin, lo que imprima hábitos feroces en vez de la mansedumbre evangélica. A ninguno de estos tres fines se opone la caza pacífica, no convertida en vicio: tampoco la *clamorosa* casual, ó por alguna vez aislada; pero á todos tres la habitual: la que hace mantener perros, azores, redes, criados ó monteros, y se convierte como en profesion.

Las sentencias y apreciaciones mas severas de los padres se prestan á esta interpretacion; y asi se vé en el cánon citado, tomado de San Ambrosio, que habla, no del que una vez se mezcla en la caza *clamorosa*; si no del que habitualmente, al amanecer de todos los dias, *primo diluculo*, prepara redes, perros y pertrechos de caza, reune para ello á sus siervos, etc. Las Decretales de los concilios, reasumidas en la de Gregorio IX, ya citada, hablan del obispo, presbítero, ó diácono, *qui in hac voluptate* (en la de la caza, mante-

(1) Cap. 2, *distinct.* 34 del Decreto de Graciano.
(2) Cap. 1, tit. 24, lib. 5 de las Decretales, *De clerico venatore.*
(3) Cap. 12, ses. 24 *De reform.*
(4) De Synodo, lib. 11, cap. 10, núm. 8.

niendo perros y aves para ella), *sæpius detentus fuerit*; notándose bien cuanto dista la enunciativa habitual *sæpius*, de *alguna vez* solamente, y el mantenimiento de perros, aves y monteros, de la caza *casual*, y de la *unipersonal*, y de todos modos *pacífica*.

El Concilio de Trento, en fin, al consignar que el clérigo debe abstenerse *á venationibus illicitis*, parece dar á entender, ó dá márgen á la suposicion doctrinal de que hay *caza no ilícita*; ó que no todas son *ilícitas*; pues no ordena que el clérigo se abstenga absolutamente de todas, como lo hace respecto de las danzas y espectáculos profanos; si no *ab illicitis venationibus*.

De cualquier modo que sea, y cualquiera que sea el punto á que se haya llevado, ó lleve el abuso, es indudable que el clérigo no debe convertir su indisciplina en escándalo; y que el obispo está en su derecho conteniendo aquel con demostraciones canónicas, no solo gubernativas, si no aun judiciales, por procacia.

De la pesca no hay prohibicion canónica espresa: pero no justificará el abuso, el que sea, y los cánones la hayan reputado mas pacífica que la caza clamorosa: y en todo caso creemos que siendo la misma la razon de la ley; como ninguna hay ni puede interpretarse que santifique el escándalo, el abuso de funciones obligatorias y sagradas, tenemos por cierto, que si la pesca diere ocasion á que se contravenga á alguno de los tres fines antes indicados, ó á todos; puede y debe ser canónicamente reprimido su abuso, como el de la caza: doctrina en un todo conforme con el testo y sentido de nuestras leyes sobre el particular.

Las de Partida copiaron en parte el derecho canónico, y asimismo á los espositores: y la 47, tít. 6, Part. 1, dice asi: «Venadores, nin cazadores non deben ser los clérigos, de cual órden quier que sean, nin deben haber azores, nin falcones, nin canes para cazar. Ca desaguisada cosa es despender en esto lo que son tenudos de dar á los pobres. Pero bien pueden pescar é cazar con redes, é armar lazos. Ca tal caza, como esta non les es defendida, por que lo pueden facer sin aves, é sin canes, é sin roido. Mas con todo eso non deben usar della de manera que se les embarguen por ende las oraciones, nin las horas que son tenudas de facer y decir. E otrosí, non deben correr monte, nin lidiar con bestia braba, nin aventurarse con ella por precio, ca el que lo ficiere seria por ello de mala fama. Pero si las bestias brabas ficiesen daño en los omes, ó en las mieses, ó en las viñas, ó en los ganados, bien las pueden estonce los clérigos seguir é matar si les acaeciese. E tobo por bien Santa Eglesia quel clérigo que usase á facer algunas de las cazas sobredichas, que les son vedadas de facer, que si despues que el perlado le oviere amonestado que lo non faga, se trabajare dello, si fuer misacantano que le debe vedar por dos meses que non diga misa: é si fuer diácono ó subdiácono, han otrosí, de ser vedados de oficio, ó de beneficio, fasta que su perlado dispense con ellos.»

Véase CAZA Y PESCA: CLERIGO: PESCA.

CÉDULA. Del latin *schedula*, diminutivo de *scheda* voz griega, que espresa el cuerpo *membranáceo*, flexible, susceptible de doblarse, ó plegarse, sobre el cual se escribe, graba, ó imprime alguna cosa. Como vemos en el artículo CANCELARIA ROMANA, en el lenguaje de esta oficina universal se usa la voz griega *scheda*, *y contra schedam*, por *cédula* y *contra cédula*. En castellano, como en latin, y por tanto en lo civil y canónico la voz *cédula* (*schedula*) tiene una acepcion genérica, que se hace especifica por medio de la adicion de alguna circunstancia inherente á la misma, como la espresion de su objeto, de su forma, de la persona ó autoridad de que procede. En el primer concepto las palabras *cédula*, *despacho*, *provision*, *título*, *privilegio*, *patente*, *carta*, etc., y otras análogas se sustituyen con frecuencia: en el segundo la voz se hace técnica en la mayoría de los casos, como *cédula real*, *del Consejo*, *de sucesion*, *bancaria*, *de retiro*, *de preeminencias*, *de comunion*, etc., y entonces no puede sustituirse sin impropiedad, y sin riesgo de error. En los artículos subsiguientes hacemos mencion de las acepciones mas usuales, ó importan-

Lorenzo Arrazola

tes de la palabra cédula y sus derivados en sentido específico.

La forma de las cédulas no es siempre la misma. A veces son meras órdenes de las autoridades ó corporaciones, como las *cédulas de abono*, por ejemplo. Otras eran simplemente un despacho ó provision. Las de forma mas solemne eran las llamadas *cédulas reales* y *cédulas del Consejo*, por intervenir la autoridad real directamente ó representada, y aun en estas no habia conformidad: las reales encabezaban de ordinario con la palabra *El Rey*, y luego, *á nuestros oidores y alcaldes del crímen, etc.*: *A vos el Presidente, Regente y oidores, etc.*: *A nuestras justicias, etc.*: *Sabed*. Las de S. M. y señores del Consejo encabezaban y encabezan por lo regular como las reales provisiones: *Doña Isabel II por la gracia de Dios, etc., sabed*. V. CEDULA REAL.

Algunas veces un mismo documento público, segun el uso de cancillería, oficina, ó autoridad de que procede, recibe con propiedad, además de nombre de cédula, otro de los antes mencionados al hablar de la acepcion genérica, de la primera de estas voces, como por ejemplo, *cédula* y *título* en los nombramientos y gracias; por lo cual véanse los artículos correspondientes á las voces indicadas y sus análogas.

CEDULA ANTE DIEM. La papeleta con que algunas sociedades ó corporaciones citan á los individuos de las mismas para sus juntas ó reuniones ordinarias. Usanlas tambien los tribunales inferiores para algunos emplazamientos y *comparendos*, como vemos en su lugar. La fórmula *ante diem* espresa la notable circunstancia de que los citados ó convocados han de serlo con un dia de anticipacion al acto de que se trata. La omision de la citacion en esa forma en aquellas juntas, sesiones ó comparecencias en que asi lo manda la ley ó tiene recibido la costumbre, afecta la validez del acto, escusa la falta de asistencia, y pone á salvo la responsabilidad y el derecho de protesta del citado en otra forma. La cédula llevará los signos de autenticidad mandados ó acostumbrados, como el sello de la corporacion, la firma del secretario, etc. La citacion *ante diem* tiene por objeto prevenir los efectos de la sorpresa y asegurar el acierto; y sin embargo, como ya hemos indicado, no tiene ni puede tener lugar sino respecto de las juntas ó sesiones ordinarias; no de las estraordinarias. Ordinariamente contienen indicacion, y debian contenerla siempre, del objeto para que se convoca. Cuando este es de índole reservada, la cédula se entrega cerrada. Con ser tan plausible y acostumbrado el uso de las cédulas *ante diem*, no estuvo debidamente consultado su fin, pues no habia mas seguridad de haber sido entregadas, y haberlo sido á tiempo, que el dicho del funcionario ó subalterno encargado de distribuirlas, que de padecer descuido, antes atenderia á cubrir su responsabilidad que á otra cosa. En el dia, aun teniendo fé pública ó responsabilidad oficial los actuarios de noticificaciones judiciales, como escribanos, ujieres y alguaciles, ha sido necesario recurrir al medio de que las partes las firmen ó firmen la notificacion. V. CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO: CEDULA DE NOTIFICACION.

CEDULA DE ABONO. Cuando por calamidades públicas ú otras causas se remite el todo ó parte de sus adeudos tributarios ó rentísticos á los pueblos ó á los particulares, la órden que se espide por las autoridades de hacienda pública, para que al recaudador se admita en data la misma entidad condonada.

En lo militar suele llamarse tambien cédula de abono el despacho que se espide á los individuos del ejército sobre abono de tiempo y premios. Llámase mas ordinariamente *cédula de premio*.

CEDULA AUSILIATORIA. Véase AUSILIATORIA.

CEDULA BANCARIA. Lo mismo que *cédula de banco*, y se llamaban asi las de este género, con que los beneficiados provistos en Roma en beneficios reservados al Papa ó *afectos* á su provision, aseguraban el pago de lo que á manera de *anata* debian satisfacer.

CEDULAS DE BANCO. En los bancos por acciones suelen llamarse asi los

títulos ó documentos, llamadas mas ordinariamente *acciones de banco*, en los cuales consta las que en dicho establecimiento corresponden al inscripto en ellas, y de estar endosadas, al último adquirente. Pero con propiedad suelen llamarse *cédulas de banco*, hoy mas ordinariamente *billetes*, el escrito anónimo, y por tanto *al portador*, en que, con las solemnidades adoptadas por el establecimiento, ya públicas, ya reservadas para mayor garantía contra el fraude, se espresa una cantidad que el banco se compromete á pagar á la vista. En el estranjero se llaman tambien *notas de banco*. Por analogía se llaman asimismo *cédulas* y *billetes de banco* los espedidos por las tesorerías generales y por los bancos, casas de giro, ó *bancos* de particulares ó compañías. El valor de estas cédulas está en razon del crédito del establecimiento de que proceden. Lo relativo á la facultad de emitirlas, su curso *forzado ó voluntario*, y su garantía y demás requisitos que hacen segura su utilidad y cortan el fraude, se espone en sus artículos correspondientes. V. BANCOS DE CREDITO: BILLETES DE BANCO: CEDULA BANCARIA: PAPEL MONEDA. Sobre la proporcion en que han estado en España y en el estranjero, en diferentes épocas el número y cantidad de cédulas de bancos ó billetes en circulacion, y su *reserva metálica*, ó garantía, V. en el Diccionario de Banqueri, el artículo *cédulas de banco*.

CEDULA DEL CONSEJO. En términos generales toda provision espedida con el nombre y firma del Rey, y de los individuos del Consejo, por alguno de los cuerpos supremos que llevaban este nombre, como el de Castilla, el de la Cámara, el de Indias, de Aragon, de Nápoles, etc. Encabezaban D. Cárlos..... por la gracia de Dios, Rey, etc.: seguia la esposicion del hecho, ó materia, y la parte dispositiva, hablando siempre personalmente el Rey: y concluia mandando se cumpliese y ejecutase por todos ó por quien correspondiese, firmando el Rey (*de estampilla*): un secretario del Rey: los consejeros: y el secretario de gobierno del Consejo que lo era de ordinario el mas antiguo de los de Cámara.

Estas cédulas versaban unas veces sobre materias de la competencia ordinaria del Consejo, y entonces segun la materia, aunque el documento era realmente cédula, tenia otro nombre específico y usual, como de provision, real carta, *sobre carta* si era en materias judiciales: título, si el asunto era de aptitud personal, como de abogado, relator, etc. Otras versaban sobre materias administrativas, como sobre propios, arbitros, pósitos, etc.: el Consejo en uso de sus atributos y cumplimiento de su deber miraba la cuestion, la resolvia, y espedia cédula para su ejecucion, equivaliendo entonces la cédula á una Real provision, pues se hacía hablar personalmente al Rey, como queda dicho. Otras veces, en fin, el Rey, por medio de sus *secretarios del despacho* espedia un real decreto que dirigia al Consejo para su promulgacion por cédula. Estas eran en rigor técnico las reales cédulas, que como todas las demás que llevaban la firma del Rey y de los consejeros, se llamaban *cédulas de S. M. y señores del Consejo*; y en lo usual *cédulas del Consejo* meramente, y reales cédulas.

Vamos hablando en tiempo pasado, porque recientemente, cambiado nuestro derecho público, las leyes y mandatos reales se espiden, autorizan y promulgan de otro modo respecto de la Península é Islas adyacentes, y aun por regla general en cuanto á Ultramar. Véase CEDULA REAL.

CEDULA DE DILIGENCIAS. Antiguamente se llamaban asi los despachos que espedia la Cámara de Castilla, y despues el Consejo, dando comision á un juez para hacer alguna averiguacion. Se encabezaban á nombre del Rey, y llevaban la real estampilla, refrendándolas el secretario de la Cámara ó del Consejo. Tambien se han llamado *cédulas de diligencias* los despachos que con el objeto indicado espedian los tribunales superiores.

CEDULA DE EMPLAZAMIENTO. La que deja el escribano actuario de un pleito cuando no encuentra en su casa á la persona á quien va á citar ó emplazar, testimoniando en ella la providencia que debia notificar y el auto en que se man-

da hacer la citacion por escrito. Hoy se llama tambien *memoria*.

Debe firmarla el escribano, quien la entregará á la familia que hallare en la casa del citado, y en su defecto al vecino mas inmediato, acreditándolo por diligencia que estenderá en los autos, la que firmará la persona que reciba la cédula, ó un testigo á su ruego, y si el primero no quisiere firmar, lo verificarán dos testigos de la vecindad (1).

Para que el emplazamiento se ejecute por medio de cédula, es indispensable mandamiento judicial.

Ni en dias feriados ni de noche podrá el escribano dejar la cédula, á no ser que preceda habilitacion del juez.

Estas eran las disposiciones que se hallaban vigentes al publicarse la ley de enjuiciamiento civil de 5 de octubre de 1855, la cual ha introducido las notables reformas de que dan razon los artículos siguientes:

Art. 228. «El emplazamiento se hará por medio de cédula, que será entregada al demandado, si fuese habido, y si no se le encontrare, á su mujer, hijos, parientes que vivan en su compañía, criados ó vecinos.

Se estenderá diligencia de esto en los autos, que será firmada por el escribano y por la persona á quien se haga la entrega.

Si esta no supiere ó no pudiere firmar, lo hará á su ruego un testigo. Si no quisiere, ni presentar testigo que lo haga por ella, firmarán dos testigos, requeridos al efecto por el escribano.»

En las cédulas para citar á juicio de conciliacion al demandado, el art. 207 previene: que «el secretario ó la persona que este delegue, en lugar de la copia de la providencia le entregará una de las papeletas que haya presentado el demandante, en la que ademas se espresarán el juez que manda citar, y el dia, hora y lugar de la comparecencia. En la papeleta original, que se archivará despues, firmará el citado el recibo de la copia, ó un testigo á su ruego, si no pudiere.»

En los juicios de deshaucio el art. 640 dispone: «La citacion se hará en su persona al demandado; si no pudiere ser habido despues de las diligencias con intervalo de seis horas, se le dejará en su casa cédula citándole para el juicio; entregándola á su muger, hijos, dependientes ó criados, si los tuviere, y no teniéndolos, al vecino mas inmediato.»

Al tratar de los juicios en rebeldía, dice el art. 1196: «Al litigante que haya sido citado por cédula entregada á su muger, hijos, parientes, criados ó vecinos, se prestará audiencia contra la ejecutoria dictada en su rebeldía, concurriendo las circunstancias siguientes:

1.ª Que la pida precisamente dentro de un año, contado desde la fecha de la publicacion de la ejecutoria en el *Boletin* de la provincia.

2.ª Que acredite cumplidamente, que una causa no imputable al mismo ha impedido que la cédula de citacion ó emplazamiento le haya sido entregada.»

Art. 1197. «Estas mismas reglas son aplicables al litigante rebelde que haya sido citado ó emplazado en paises extranjeros, por medio de cédula entregada á su muger, hijos, parientes, criados ó vecinos.»

En los asuntos mercantiles el emplazamiento se hace por cédula (1), la cual comprenderá á la letra la demanda y el auto proveido sobre ella, espresándose en relacion hallarse acreditada la personalidad del procurador, si lo hubiere. No se insertarán los documentos producidos en apoyo de la demanda; pero se espresará que se han presentado y están unidos á ella.

La cédula se entregará por el alguacil del juzgado, quien despues hará relacion de haberlo practicado, y del nombre y apellido de la persona que hubiere recibido la cédula (2).

Cuando no se conozca el domicilio del demandado, ni sea posible descubrir su paradero, se entregará la cédula al alcalde del último pueblo donde haya estado avecindado, para que la haga fijar en las casas consistoriales: poniéndose otra igual en los estrados del tribunal donde penda el juicio,

(1) Art. 3.° de la ley de 4 de junio de 1857.

(1) Art. 111 de la Ley de enjuiciamiento.
(2) Art. 113 de la misma Ley.

publicándose tambien en el *Boletin oficial* de la provincia (1).

En los negocios contenciosos de la administracion el emplazamiento se ejecuta siempre por medio de una cédula original para la parte que lo promueve, y tantas copias de ella como sean las partes que hayan de ser citadas ó emplazadas. Unas y otras las redacta y entrega un ugier del tribunal; la original firmada por el secretario, las demás por solo el ugier.

Ademas de las formalidades que se previenen para las cédulas de simple notificacion, las de emplazamiento contendrán, so pena de nulidad, las siguientes (2):

1.ª El nombre del consejo, hoy Tribunal Supremo contencioso-administrativo.

2.ª El dia de audiencia pública señalado por el reglamento ó por el Tribunal, para que los litigantes comparezcan en persona ó por medio de abogados.

3.ª Copia literal de la demanda.

4.ª Copia ú oferta de entregar ó poner de manifiesto los documentos ó escrituras en que se funda la demanda. De los documentos y escrituras se entregará una sola copia, aunque los emplazados sean mas de uno, si lo fueren marido y muger, ó personas que tengan un interés comun en el negocio.

En la cédula original firmará el recibo de los documentos la persona á quien se entreguen, y si no supiere, un testigo á su ruego. Véanse los artículos, CITACION, EMPLAZAMIENTO, NOTIFICACION, Y CEDULA DE NOTIFICION, Y ANTE-DIEM.

CEDULA DE GRACIA. En términos generales aquella en que se contiene alguna de las infinitas que puede otorgar la Corona, como títulos de Castilla, grandezas de España, cargos, honores, condecoraciones, perdones, indultos, acostamientos, donaciones, etc. En sentido específico suele contraerse á las llamadas *gracias al sacar*. Véase el artículo de estas.

(1) Art. 114 id.
(2) Art. 77 del reglamento sobre el modo de preceder el Consejo Real en los negocios contenciosos de la administracion de 30 de diciembre de 1846.

CEDULAS HIPOTECARIAS. En 1809, por decreto de 9 de junio, el rey intruso José I ordenó que todos los acreedores contra el Estado, por capitales, atrasos de réditos, sueldos, pensiones y cualquier otros títulos anteriores al 6 de julio de 1808, deberian presentar sus títulos de crédito á la comision liquidadora, creada en la misma fecha, desde entonces al 31 de diciembre del mismo año; pasado cuyo término, ya no serian admitidos, si bien aquel gobierno se reservaba resolver segun las circunstancias en cuanto á Indias.

Los acreedores podrian cambiar su crédito por rentas vitalicias, consistentes en un capital igual á diez veces la renta del crédito.

Los créditos reconocidos y liquidados, serian cambiados por *cédulas hipotecarias*, de 1,000, 4,000, 10,000 y 20,000 rs., segun lo deseasen los interesados; y los picos por cédulas menores. Una y otras serian firmadas por un ministro de Estado, denominado *Inspector general de cédulas hipotecarias*, por el tesorero mayor, y el contador de data, (estas dos firmas de *estampilla*) y por el interesado ó dueño de la cédula ó su apoderado. Las cédulas asi espedidas se recibirian como metálico y *á la par*, en las compras de bienes nacionales. (Artículos 1, 2, 3, 4 y 5).

Sucesivamente se dictaron por el mismo gobierno intruso multiplicadas disposiciones sobre *cédulas hipotecarias*, que pueden verse en los tomos 1.° y 2.° de la coleccion de decretos de aquella época, si algun caso ó duda ocurriere aun en la práctica, pues se fijó modelo para dichas cédulas, se las admitió en pago de casas demolidas de mandato de la autoridad, se crearon cédulas especiales para premiar y recompensar; y en otros artículos de crédito y deuda pública indicamos las vicisitudes de las mismas y sobre su liquidacion durante el período mencionado.

En 1820, por decreto de Córtes de 9 de noviembre, se estableció que todos los títulos legítimos de deuda contra el estado, serian reconocidos, aunque hubieran sido presentados á liquidacion durante la dominacion del gobierno intruso ya consistiesen en

Lorenzo Arrazola

cédulas hipotecarias, ya en otra especie de papel, con tal que el crédito fuese anterior á la invasion francesa; (art. 6) resultando así la notable diferencia que se vé, esto es, la de la validez á la nulidad, por entonces á lo menos, entre las cédulas que traian este orígen, y las especiales creadas por el gobierno intruso para recompensas y otros usos, como hemos dicho. Las cédulas reconocidas se convertirian en vales con interés y sin él, y se fijó un plan perentorio para su presentacion.

Ocurrieron dudas, 1.° sobre, si habiendo sido endosadas las cédulas á los tenedores por endoso, se les reconoceria su crédito por el valor de ellas, ó habria de suponerse para ellos como no hecha la liquidacion de las mismas bajo el gobierno intruso, y de consiguiente, en el caso de ser créditos con interés los liquidados, abonárseles los réditos y reconocérseles, un capital con interés igual al primitivo: y 2.°, si á los que liquidaron sus créditos y recogieren cédulas hipotecarias por el capital y rédito hasta el dia de la liquidacion, y ahora no presentaban todas las cédulas, deberian reconocérseles créditos con interés, ó mas bien sin él, por no espresarse en ellas si corresponden al capital primitivo, ó al capital y réditos, ó bien proceden de estos solos: y en vista de ello, por órden de 8 de mayo de 1822, acordaron las Córtes que en ambos casos se reconocerian las cédulas hipotecarias por el capital que representaban, aunque sin interés.

Perjudicaba no poco á estas cédulas en la estimacion comun, y aun en la oficial la circunstencia de su orígen, si bien la justicia abogaba siempre en favor de las que representaban créditos legítimos anteriores á la invasion; y habiéndose mandado por real decreto de 16 de febrero de 1826, se admitiesen á liquidacion todos los créditos contra el Estado que fuesen legítimos, fundado en esta disposicion, y en las mencionadas de Córtes de 1820 á 1823, se ordenó por real decreto de 8 de agosto de dicho año de 1826, lo fuesen las cédulas hipotecarias de orígen anterior á la invasion francesa en la Península, espidiéndose por ella láminas *positivas*, y no provisionales.

Por real órden, en fin, de 22 de noviembre del propio año, se repitió lo mandado, espresando ademas se reputasen nulas las cédulas hipotecarias procedentes de vitalicios de la dominacion francesa; mas no si el crédito era anterior á ella; y que si el capita contenido en las de este género correspondiere á dos ó mas personas, se proratease, y abonase á cada uno el capital respectivo.

Convertidas las cédulas hipotecarias en otros créditos contra el Estado, han seguido la suerte de estos, de lo cual tratamos en otros artículos.

CEDULA DE INDULTO. Véase INDULTO, PRERROGATIVA DE GRACIA.

CEDULA DE INVENCION. Este documento oficial, en el lenguaje comun y aun en las mismas órdenes y decretos que versan sobre la materia, se llama tambien *patente de invencion*, *privilegio de invencion*, *cédula de privilegio*, cédula y *privilegio industrial*, motivo por el que sin impropiedad podria tratarse de él en otros lugares y artículos, si bien hemos preferido hacerlo en el presente, como el mas inmediato, por ser frecuentes, mas que nunca, los casos de derecho y cuestiones administrativas á que esta materia dá lugar, supuesto, y aumentando cada dia el movimiento de la industria y de las artes. Por lo demás, de cualquier modo de los mencionados con que se denomine el documento, espresa siempre el despacho ó título oficial, por el cual se asegura al que lo obtiene el derecho *esclusivo* para la espendicion, uso público, ó aplicacion de una cosa inventada por él, ó para la construccion en el reino de máquinas, instrumentos, aparatos, etc., conocidos solo en el estranjero. Es este un punto administrativo é industrial, que puede ser apoyado ó combatido con razones atendibles: una cuestion que admite soluciones opuestas. ¿Conviene á la industria, á las artes, el monopolio de uno, al cual, por el tiempo que dure el privilegio, parece se sacrifica la inventiva de los demás, cerrando asi el camino, ó por lo menos atenuando el estímulo para los adelantos? El privilegio esclusivo ¿es por la inversa un

modo de avivar el estímulo de inventar? ¿Seria mas adecuado el sistema de premios de invencion, el pago y compensacion de inventos y secretos? No habiendo términos hábiles para compeler á la venta, ni á la revelacion de ellos ¿seria mas adecuado que el privilegio esclusivo la compulsion indirecta para revelarlo ó enajenarlo, denegando en otro caso la patente ó cédula de invencion? Tal es la cuestion teórica, que ninguna nacion ha resuelto en términos absolutos, sino prudenciales, y de decirse resuelta teóricamente por alguno, lo seria en el sentido de preferir la revelacion remunerada ó premiada de los secretos é inventos á las patentes de invencion, pues ordinariamente se ha tanteado aquel medio antes de deferir el privilegio esclusivo. En la práctica, sin embargo, ora por escasez de medios y urgencias de los estados, ora por la negativa de los inventores, se ha adoptado, como general y ordinario, el sistema de privilegio esclusivo. En España se vino empleando, como en otras naciones, y aun hoy se aplica en ocasiones el sistema misto de conceder privilegio de invencion, ó tantear el medio de la revelacion del secreto, remunerada por el estado. El sistema dominante, sin embargo, es el primero de 30 años á esta parte; y eso no como gracioso ó potestativo del supremo gobierno, sino como derecho comun del caso, es decir, todo inventor, ó descubridor puede acudir al gobierno pidiendo bajo su responsabilidad sobre la certeza y realidad del invento, privilegio de invencion, seguro de que lo obtendrá.

Reservando la esplanacion de la cuestion teórica para lugar mas oportuno, y en tésis mas general, ceñimos el presente artículo al derecho constituido, consistiendo cardinal, y principalmente en el notable real decreto de 27 de marzo de 1826, orgánico en la materia, y que por la razon mencionada y por carecer el presente artículo de parte legislativa, insertamos á la letra, como algun otro sobre el caso. El mencionado es como sigue:

«Siendo un medio natural de adelantar la industria y las artes proporcionarles la multiplicacion y perfeccion de máquinas, instrumentos, artefactos, aparatos, procederes y métodos científicos y mecánicos; y no pudiendo esperarse estos agentes de la produccion sin asegurar á sus autores, introductores y mejoradores la propiedad y disfrute de las obras de su ingenio y aplicacion por medio de disposiciones legales, que conciliando la igualdad de proteccion que se debe al interés particular y al beneficio de la industaia; pongan aquel á cubierto de toda usurpacion, y ocurran al abuso con que perjudicarian á esta la estancacion y monopolio de los inventos destinados á su mismo servicio; he creido conveniente establecer las reglas y órden uniforme con que para conseguir tan importantes miras se han de conceder en adelante los privilegios esclusivos por la invencion, introduccion y mejora de cualesquiera objetos de uso artístico: y habiendo oido sobre la materia á la Junta de Fomento de la riqueza del reino, y el acuerdo de mi Consejo de Estado, con el cual me he conformado, tengo á bien resolver y resuelvo, que se observen y guarden los artículos siguientes:

Artículo 1.° Toda persona de cualquiera condicion ó pais que se proponga establecer ó establezca máquina, aparato, instrumento, proceder ú operacion mecánica ó química, que en todo ó en parte sean nuevos, ó no estén establecidos del mismo modo y forma en estos reinos, tendrá su uso y propiedad esclusiva en el todo ó en la parte que no se practicare en ellos, bajo de las reglas y condiciones que aquí se espresarán, y con sujecion á las leyes, reales órdenes, reglamentos y bandos de policía.

Art. 2.° Para asegurar al interesado la propiedad esclusiva se le espedirá una real cédula de privilegio, sin prévio exámen de la novedad ni de la utilidad del objeto, y sin que la concesion de la gracia pueda mirarse en ningun caso como una calificacion de su novedad y utilidad, quedando el interesado sujeto á las resultas, con arreglo á lo que se previene en este real decreto.

Art. 3.° Las reales cédulas de privilegio se espedirán por cinco, por diez ó por quince años, á voluntad de los interesados, en

el caso que las soliciten para objetos de su propia invencion, y por solos cinco años, si la solicitud fuese para introducirlos de otros paises; entendiéndose que el privilegio concedido para estos, que se llamará de *introduccion*, ha de ser para ejecutar y poner en práctica en estos reinos algun objeto, pero no para traerlo hecho de fuera; pues en tal caso estará sujeto á lo dispuesto en los aranceles y órdenes acerca de la entrada de géneros y efectos del estranjero.

Art. 4.° El privilegio concedido por cinco años podrá ser prorogado por otros cinco, mediando causa justa: los concedidos por diez y quince años serán improrogables.

Art. 5.° Será materia de privilegio de invencion lo que no se halle practicado en España ni en pais estranjero; y lo que no lo esté aquí, pero sí en el estranjero, lo podrá ser de introduccion. Sin embargo, todo aquello de que existan modelos y descripciones en castellano en el real Conservatorio de Artes, no podrá ser materia de privilegio sino despues que hayan pasado tres años desde su entrada sin que se haya puesto en práctica, en cuyo caso se concederá privilegio de introduccion por solos cinco años.

Art. 6.° Los interesados han de solicitar la real cédula de privilegio por sí ó por medio de apoderado, y por memorial estendido conforme al modelo número 1.°, y presentado al intendente de la provincia de su residencia, pudiendo en todo caso presentarlo al de la de Madrid si les conviniere.

Art. 7.° Al memorial acompañarán: 1.° una representacion á mi Real persona en papel del sello cuarto mayor, espresándose el objeto del privilegio, si es de invencion propia ó traido de otro pais, y el tiempo de la duracion, conforme al artículo 3.° Esta representacion estará arreglada al modelo número 2.° literalmente. No se podrán incluir en una misma representacion mas objetos que uno: 2.° un plano ó modelo con la descripcion y esplicacion del objeto, especificando cuál es el mecanismo ó proceder que presenta como no practicado hasta entonces: todo con la mayor puntualidad y claridad, á fin de que en ningun tiempo pueda haber duda acerca del objeto ó particularidad que presentan como no practicados de aquella forma; pues solo para esto se concede el privilegio.

Art. 8.° Los modelos se han de presentar en una caja cerrada y sellada, y lo mismo los planos, descripciones y pliegos de esplicacion, ó bien cerrados en papel y sellados; poniéndose en uno y otro caso un rótulo en los términos que espresa el modelo número 3.°

Art. 9.° El intendente pondrá debajo del rótulo: *Presentado*, y lo rubricará, haciendo sellar la caja ó pliego, y dando á los interesados certificado de la presentacion, y el oficio con que lo remita á mi secretario de Estado y del despacho de Hacienda, para que ellos ó persona en su nombre se lo entreguen todo.

Art. 10. Cuando yo tenga á bien conceder la real cédula de privilegio, se pasarán dichos documentos al mi Supremo Consejo de Hacienda, en el que se hallan incorporados por ahora los negocios en que entendia la Junta general de Comercio, Moneda y Minas, y allí se abrirán las cajas y pliegos; y hallándose los documentos que se señalan en el artículo 7.°, se espedirá, sin otro exámen, la cédula de privilegio que corresponda, estendiéndola con arreglo al modelo número 4.°

Art. 11. A esta espedicion ha de preceder que los interesados presenten carta de pago que acredite haber entregado por ahora en el real Conservatorio de Artes los derechos siguientes:

Por el privilegio de cinco años	1,000 rs. vn.
Por el de diez años.	3,000
Por el de quince años.	6,000
Por el de introduccion. . . .	3,000

Se pagarán ademas ochenta reales por los gastos de espedicion de la real cédula.

Art. 12. Espedida esta, se remitirán al real Conservatorio de Artes los documentos cerrados y sellados, y en pieza destinada al efecto quedarán depositados, y no se abrirán sino en caso de litigio, y en virtud de providencia y oficio de juez competente.

Art. 13. Las concesiones de privilegios se publicarán en la Gaceta de Madrid.

Art. 14. Con arreglo á lo prevenido en los artículos 6.° y 21 de la real órden de diez y ocho de agosto de mil ochocientos veinte y cuatro, por la cual se creó el real Conservatorio de Artes, habrá en este establecimiento un registro de las cédulas de privilegio que se espidieren, y que se anotarán por órden de fechas, y con espresion de estas, de los nombres, apellidos y vecindad de los interesados, objeto del privilegio y tiempo de su duracion. Este registro se manifestará á las personas que lo soliciten.

Art. 15. El poseedor de un privilegio gozará del uso y propiedad esclusiva del objeto que lo motivó, sin que nadie pueda ejecutarlo ni ponerlo en práctica sin su consentimiento, en el todo ó en la parte que ha declarado ser nuevo ó no practicado en estos reinos en la manera que lo presentó en el modelo, plano y descripcion que ha entregado para que en todo tiempo sirva de prueba.

Art. 16. La propiedad se contará desde el dia y hora de la presentacion de los documentos al intendente: y en caso de haber solicitado dos ó mas personas privilegio para un mismo objeto, solo será válido el de aquella que haya presentado primero los documentos.

Art. 17. El uso del privilegio podrá cederse, donarse, venderse, permutarse y legarse por última voluntad como cualquiera otra cosa de propiedad particular.

Art. 18. Toda cesion deberá hacerse por escritura pública, espresándose si el privilegio se cede para ejecutarlo en todo el reino, en una ó mas provincias, ó en determinados pueblos y parajes: si la cesion ó renuncia es absoluta, ó con reserva tambien de su uso: si es con la calidad de poderlo traspasar ó no, y si el poseedor lo tiene cedido antes á una ó mas personas.

Art. 19. El cesionario estará obligado á presentar testimonio de la escritura de cesion al intendente ante quien se hubiese hecho la solicitud del privilegio, y este, despues de tomar razon de ella, la remitirá al Consejo de Hacienda, el cual dará el correspondiente aviso al real Conservatorio de Artes para que lo anote en el registro de que habla el artículo 14. La cesion será nula si el testimonio de la escritura no se presentase dentro de treinta dias despues de su otorgamiento.

Art. 20. La duracion del privilegio se contará desde la data de la real cédula de su concesion.

Art. 21. Cesan los efectos de esta, y queda anulado y sin valor el privilegio en los casos siguientes: 1.° cuando se ha cumplido el tiempo señalado en la concesion: 2.° cuando el interesado no se presenta á sacar la real cédula dentro de los tres meses siguientes al dia en que presentó su solicitud: 3.° cuando por sí ó por otra persona no ha puesto en práctica el objeto del privilegio en el tiempo de un año y un dia: 4.° cuando el interesado lo abandona: el abandono se entiende cuando se deja de tener en prática el objeto un año y un dia sin interrupcion: 5.° cuando se prueba que el objeto privilegiado está en práctica en cualquiera parte del reino, ó descrito en libros impresos, ó en láminas, estampas, modelos, planos ó descripciones que haya en el real Conservatorio de Artes, ó que se ejecuta ó se halla establecido en otro pais, habiéndolo presentado el interesado como nuevo y suyo propio.

Art. 22. En el caso de haberse cumplido el tiempo de la concesion del privilegio, el director del real Conservatorio de Artes avisará al Consejo de Hacienda del dia en que cumpla, y este declarará la cesacion.

Art. 23. En los demas mencionados casos de cesacion se procederá pór el juez competente, á peticion de parte, á justificar el hecho, y probado que sea, se dará parte al Consejo de Hacienda para que declare la cesacion.

Art. 24. Los jueces para conocer de estos negocios serán los intendentes en sus respectivas provincias: las demandas deben presentarse ante el de aquella donde resida el demandado; y las apelaciones se interpondrán para el Consejo de Hacienda.

Art. 25. Cuando por las causas mencio-

nadas en el artículo 21 cesare el privilegio, se abrirá por el director del real Conservatorio de Artes la caja ó pliego de los documentos depositados en él, y se pondrá todo á la vista del público, anunciándose ademas en la Gaceta.

Art. 26. El poseedor de un privilegio obtenido por cualquiera título, tendrá derecho á demandar y perseguir en juicio al que le usurpe su propiedad: conocerán de estas demandas los intendentes de las provincias donde residan los demandados; y las apelaciones corresponderán al Consejo de Hacienda.

Art. 27. Justificada que sea la demanda se condenará al reo en la pérdida de todas las máquinas, aparatos, utensilios y artefactos, y al pago de tres tanto mas del valor de ellos, apreciándose por peritos, y aplicándose uno y otro al poseedor del privilegio.

Art. 27. Los privilegios concedidos hasta la fecha se conservarán con las condiciones de su concesion; y los que lo fueron con la reserva de estar á lo determinado en el presente real decreto se sujetarán á sus disposiciones. Tendréislo entendido, y comunicareis las órdenes correspondientes para su cumplimiento.»

Conocidas son las autoridades que han sustituido á los intendentes, y Consejo de hacienda mencionadas en el anterior decreto.

Habiendo sido mal comprendido sobre introduccion de máquinas, por real aclaracion de 14 de mayo de 1829, se dictan las reglas siguientes:

1.ª «Que el privilegio de *introduccion* no es para traer de fuera máquinas, instrumentos, herramientas y demas objetos de esta clase, sino para la ejecucion de ellas en el reino, recayendo solamente el privilegio en la parte ó medio que no estuviere practicado antes en España, sin perjuicio del que empleare otro medio en lo sucesivo.

2.ª Que el privilegio de introduccion, que como vá dicho solo es para ejecutar lo que no se ejecutaba, y no para traer de fuera los objetos, no quita á nadie la facultad de introducir del estranjero las máquinas, instrumentos y demás, á no estar prohibida su entrada por los aranceles de comercio ó reales órdenes.

3.ª Que todo el que obtuviere real cédula de privilegio de introduccion, haya de presentar dentro de un año y un dia, como está mandado, el competente testimonio de haber puesto en práctica el objeto de su privilegio; cuyo testimonio se presentará al intendente, quien lo remitirá al Consejo de Hacienda, y este al Real Conservatorio de Artes para que se registre.

4.ª Que si pasado el año y el dia no se hubiere presentado dicho documento, el Consejo de Hacienda declarará nulo el privilegio, avisándolo al Director del Real Conservatorio de Artes para que proceda con arreglo al art. 25 del Real decreto de 27 de marzo de 1826.»

Por otra real órden de 13 de abril de 1844 se declaró asi bien se esprese en las cédulas de invencion «que los interesados han de presentar en el Conservatorio de artes en el término de un año y un dia desde la fecha de ellas el testimonio de tener puesto en práctica el objeto del privilegio,» como ya se previno en el decreto de 1826 y aclaracion de 1829.

Como parte del sistema misto, que se observa entre nosotros, son las *subvenciones* en su caso, y la *remision del impuesto*, habiéndose solicitado estos ausilios por algunos inventores, en real órden de 14 de marzo de 1848 se declaró, que siendo el decreto orgánico de 1826 *una verdadera ley* por la época en que se dictó, no podia el gobierno dispensar de él en cuanto al pago del tributo: y que para presentar á las Córtes proyecto de ley sobre dispensa, habia de ser conocido el invento, ó en otro caso revelarse el secreto, únicamente ante dos ó tres personas de moralidad y competencia, que el gobierno designará, las cuales informarán con reserva.

Nuevas y frecuentes dudas y cuestiones, una de ellas, y muy fundada, sobre la regla tercera de la real órden antes inserta de 1829 acerca del término para presentar el testimonio

de haber puesto en ejercicio el invento dentro del año y un dia de su concesion, motivaron la aclaracion de 11 de enero de 1849, en que se repite que el decreto orgánico es una ley, y es como sigue:

1.ª «Todo el que hubiere obtenido privilegio de industria, acreditará haberle puesto en práctica dentro del término de un año y un dia, á contar desde la fecha de la real cédula de concesion, ante el jefe político de la provincia respectiva, el cual por sí ó por persona especialmente delegada al efecto, se asegurará del hecho. A presenciarle concurrirá tambien un escribano designado por el mismo jefe ó su delegado, el cual dará testimonio del acto en virtud de decreto de la misma autoridad.

2.ª El jefe político, recibido que sea este testimonio, lo pasará á informe en Madrid del director del Conservatorio, en las provincias de las juntas de comercio, y en las que no las hubiere, de las sociedades económicas, y á falta de unas y otras, de personas entendidas á juicio del jefe político. El informe deberá reducirse á esponer si es real y verdadero el uso del objeto privilegiado, sin mezclarse para nada en su bondad ó utilidad.

3.ª Si el objeto privilegiado fuere relativo á la industria agrícola, el informe que se ha de requerir será el de la junta de agricultura. Sin embargo, en Madrid será siempre oido el director del Conservatorio.

4.ª Cuando el objeto privilegiado funcione fuera de la capital de la provincia ó sus inmediaciones, las corporaciones dichas, en sus casos respectivos, podrán comisionar á la persona ó corporacion que tengan por conveniente, para que le visite y reconozca en la localidad, y les dé las noticias que juzguen necesarias para evacuar el informe.

5.ª Recibido este, el jefe político le elevará al gobierno por conducto de la direccion general de industria, con la solicitud del interesado y el testimonio del acto de práctica del privilegio, esponiendo ademas lo que tengan por conveniente.

6.ª Cuando se solicite acreditar la suspension del uso por un año y un dia para la declaracion de caducidad de un privilegio, la pretension se entablará en los mismos términos; pero la primera diligencia será citar por parte del jefe político al privilegiado. Si este no opusiere contradiccion, se proseguirán las actuaciones por los trámites marcados anteriormente, declarándose por la ad administracion la caducidad, si procediere. Mas en caso de oposicion del interesado, el jefe político remitirá las actuaciones al juzgado de primera instanciadel domicilio de este, ante el cual se ventilará la cuestion, siendo todas las que se originen entre particulares sobre privilegios, por su esencia, contenciosas y de propiedad, y por tanto de la competencia de los tribunales ordinarios.

7.ª El hecho de hallarse en práctica el objeto privilegiado se ha de justificar ante el jefe político antes de la espiracion del término del año y el dia que concede la ley. Para ello bastará que el interesado reclame un dia antes, cuando menos, la intervencion de la autoridad, que será responsable de los perjuicios que se originen de cualquiera omision, pudiendo por lo mismo delegar las funciones que no pueda desempeñar personalmente. Acreditado el hecho, nada importa que las demás diligencias y la remision al gobierno se haga fuera de aquel término, con tal que se verifique dentro de los treinta dias siguientes, bajo la misma responsabilidad á la autoridad que causare ó consintiere cualquiera dilacion.»

Pudiendo ser contradicho el privilegio de invencion por otros inventores ó industriales, suscitándose sobre ello cuestion judicial, no parece podia caber duda en que, hasta cierto punto impedido, durante ella, el agraciado, pues en la posibilidad de quedar vencido, aventuraria los capitales que tuviese que anticipar, no le corría el término perentorio de año y dia para hacer uso del privilegio. Sin embargo, por real órden de 8 de enero de 1849 se declaró lo contrario, fundándose, 1.° en que durante el litigio, el agraciado *estuvo en posesion*, pues por ella precisamente ganó el pleito: 2.° que en prueba de ello, si otro, que los colitigantes, hubiese

tratado de plantear privilegio igual, se lo hubiera contradicho: 3.° que el decreto orgánico de 1826 es una ley que el gobierno no podia alterar sobre términos: y 4.° que aun quedaba tiempo al agraciado para plantear su invento ó secreto despues de ejecutoriado el pleito.

Ciertamente que ninguna de estas razones produce el convencimiento que requiere siempre la lesion de un derecho sagrado, garantido por la ley. Es sabido, que un litigio, contestada la demanda, interrumpe la posesion, en el sentido de dejarla en suspenso. Por eso la prescripcion, que no ha concluido antes de la contestacion, ya no concluye durante el pleito. Y aun sin eso, seria indudable siempre, que de subsistir ó continuar la posesion, es una posesion perturbada, no disfrutada libremente; que puede perderse por ejecutoria, perdiéndose con ella, como tenemos indicado, los capitales, estudios y trabajos anticipados, y que durante el pleito se anticipasen; y lo que es mas el secreto, inútilmente revelado al ponerlo en ejecucion durante el pleito. Si en el particular no mediare una razon de plena justicia, para que al concesionario no se le impute para el año y dia de la ley el tiempo del litigio, sino que, interrumpido por la demanda, empiece á correr desde la notificacion de la sentencia ejecutoria; apenas habria un caso de su género en que la equidad esté mas recomendada.

Y todavía aparecen mas recomendadas la equidad y la justicia, si se analizan las razones consignadas en la real órden que las escluye. Esprésase en la primera que el inventor estuvo en posesion durante el pleito, y que por ella lo ganó. Pero no fué espedita esta posesion, ni hubo certeza de ello hasta que el pleito se ejecutorió; y pudo muy bien ejecutoriarse en contrario sentido. Dícese en la segunda, que en prueba de que estaba en posesion, por virtud de ella hubiera contradicho á otro que presentase igual privilegio. Pero eso no destruye que lo contrariase á nombre de una posesion en litigio, perturbada; y por ello esta esclusion que hubiera hecho á otro privilegio, era solo accidental, hipotética en cuanto al resultado; pues si perdia el pleito, cesaban con él la posesion y la esclusiva contradiccion hecha al tercero. Asiéntase en la tercera que el gobierno no puede traspasar la ley, refiriéndose al decreto orgánico de 1826. Pero este no habló de posesion disputada durante el año y dia, y por tanto el establecer jurisprudencia respecto de este punto, es hacer aplicable el decreto, no infringirlo; fuera de que en cuanto á términos, hemos visto que el gobierno se ha creido con facultades para interpretarlo, y ha creido bien; como lo ha practicado en órden á las autoridades y juzgados que deben conocer de los efectos y resultas de las cédulas de invencion, y sobre todo en la *rehabilitacion de término* caducado. Y en efecto: habiéndose pedido esta rehabilitacion, precisamente por omision, aunque involuntaria, segun se espuso, en cumplir con el decreto orgánico al presentar el pliego cerrado del secreto en el Conservatorio de artes, dentro del año y dia, por real órden de 22 de noviembre de 1848 se rehabilitó el término por equidad, si bien con las justas restricciones que pueden verse en ella.

Ultimamente, por la propia real órden se declaró corresponder á los jueces de primera instancia el conocimiento sobre «todas las cuestiones contenciosas de privilegios, como juicios civiles en materia de propiedad.» Creemos que esto ha de entenderse en cuestiones entre particulares; pues entre particulares y el gobierno, como por ejemplo, á consecuencia y por perjuicios irogados por actos administrativos, como la real órden antes analizada y combatida, la competencia y procedimiento son *contencioso-administrativos*. Véase CEDULAS DE INVENCION PARA ULTRAMAR: PRIVILEGIO.

CÉDULA DE INVENCION PARA ULTRAMAR. En 30 de julio de 1833, se espidió real cédula para las posesiones de Ultramar; que no habiéndose publicado en la Península, se creyó oportuno hacerlo por real órden de 31 de enero de 1849, y es como sigue:

«Por real decreto de 27 de marzo de 1826, espedido con respecto á estos mis reinos é

islas adyacentes, tuve á bien adoptar las medidas mas oportunas para animar y proteger á mis vasallos ingeniosos y aplicados, que con ventajas y conocido adelantamiento de las artes y demás ramos útiles, acertasen á inventar nuevas máquinas, instrumentos, artefactos, aparatos, procederes y métodos científicos ó mecánicos; y tambien á los que se propusiesen introducirlos del estranjero, ó mejorar provechosamente algunos que estuviesen ya en uso; á cuyo fin era forzoso y justo establecer, como lo hice por dicho mi real decreto, las reglas mas adecuadas á asegurarles legalmente su propiedad y disfrute con privilegios esclusivos por tiempo determinado, de manera que, conciliando la proteccion debida al interés particular y al beneficio de la industria, se les pusiese á cubierto de toda usurpacion, y se evitasen los perjuicios de la estancacion y monopolio de los inventos. Espedidas desde entonces diferentes cédulas de privilegio para estos mis reinos, segun se ha ido anunciando en la *Gaceta*, y tambien por mi Consejo de las Indias otras dos para la introduccion y uso en las islas Filipinas de una máquina estranjera con destino á fundir y afinar el hierro mineral, y de otra de hilar y tejer, me dignè encargar al propio Consejo me consultase acerca de la estension del citado decreto á mis dominios de América y Asia, con las variaciones que exigiese la diversidad de circunstancias; y conformándome con lo que me ha propuesto en consultas de 29 de abril de 1829, y 20 de diciembre del año último, despues de haberse instruido para la segunda de los informes dados de órden mia por los intendentes generales de Cuba y Filipinas, y por el de real Hacienda de la isla de Puerto-Rico, como tambien de lo que en vista de todo han espuesto la contaduría general de Indias y mi fiscal, vengo en resolver se observen y guarden los artículos siguientes:

1.° Toda persona, de cualquier condicion ó pais, que se proponga establecer ó establezca máquina, aparato, instrumento, proceder ú operacion mecánica ó química, que en todo ó en parte sean nuevos, ó no estén establecidos del mismo modo y forma en cada una de las islas de Cuba, Puerto-Rico ó Filipinas, tendrá su uso y propiedad esclusiva en el todo ó en la parte que no se practicase en ellas, bajo de las reglas y condiciones que aquí se espresarán, y con sujecion á las leyes, reales órdenes, reglamentos y bandos de policía. Pero segun lo tengo declarado respecto á la de Cuba, en real órden de 27 de diciembre de 1827, comunicada al intendente general de la Habana, se ha de entender y entienda que el privilegio de introduccion recae solo sobre los medios de ejecutarlo; quedando libre para otro la facultad de poderlo realizar para diversos objetos.

2.° Atendido el estado particular de la isla de Cuba, donde no se necesita de estímulos para el fomento de la industria agrícola, principalmente en la elaboracion del azúcar, porque así los propietarios, como las corporaciones están muy atentos á los adelantamientos que se hacen en el estranjero, llevando y adoptando desde luego las máquinas, instrumentos, artefactos, procederes y métodos científicos, se limitará respecto de ella el privilegio á los inventores y perfeccionadores; y en cuanto á los introductores queda á discrecion del gobernador capitan general y del intendente en junta superior directiva, despues de oir al ayuntamiento, á la junta de comercio ó fomento, de que se hablará en el art. 28 y á la sociedad económica, el señalar, si lo estiman conveniente, los ramos de industria ó de agricultura, y los distritos en que no ha de haber privilegio, bajo de reglamento ó de artículos adicionales, de que darán cuenta para mi real aprobacion.

3.° Para asegurar al interesado la propiedad esclusiva, se le espedirá una real cédula de privilegio, sin prévio exámen de la novedad ni de la utilidad del objeto, y sin que la concesion de la gracia pueda mirarse en ningun caso como una calificacion de su novedad y utilidad, quedando el interesado sujeto á lo que se previene en esta mi real cédula.

4.° Las de privilegio se espedirán por cinco, por diez ó por quince años, á voluntad de los interesados, en el caso que las soliciten para objetos de su propia invencion; y

por solos cinco años si la solicitud fuese para introducirlos de otros paises; entendiéndose que el privilegio concedido para el establecimiento ó introduccion de tales máquinas, aparatos, instrumentos, procederes ú operaciones mecánicas ó químicas, ha de ser para ejecutar en estos reinos algun objeto, pero no para traer este objeto elaborado de afuera, pues en tal caso estará sujeto á lo dispuesto en los aranceles y órdenes acerca de la entrada de géneros y efectos del estranjero.

5.° El privilegio concedido por cinco años á los inventores podrá ser prorogado otros cinco, mediando causa justa: los concedidos por diez y quince años serán improrogables.

6.° Será materia de privilegio de invencion, lo que no se halle practicado en aquellos y estos dominios, ni en pais estranjero: y lo que no lo esté en aquella de las mencionadas islas donde se quiera introducir; pero si en algunas de las otras, en España ó en pais estranjero, lo podrá ser de introduccion. Sin embargo, todo aquello de que existan modelos y descripciones en los ayuntamientos, juntas de comercio ó fomento, sociedades económicas y archivos del gobierno respectivos, no podrá ser materia de privilegio, sino despues que hayan pasado tres años desde su entrada, sin que se haya puesto en práctica, en cuyo caso se concederá privilegio de introduccion por solos cinco años.

7.° Los interesados han de solicitar la real cédula de privilegio por sí ó por medio de apoderado, y por memorial estendido conforme al modelo número 1.°, y presentado al intendente de la provincia de su residencia; pudiendo en todo case presentarlo al de la Habana los de la isla de Cuba.

8.° No se podrán incluir en una representacion mas objetos que uno, acompañando un plano ó modelo con la descripcion y esplicacion del objeto, especificando cuál es el mecanismo ó proceder que presenta como no practicado hasta entonces: todo con la mayor puntualidad y claridad, á fin de que en ningun tiempo pueda haber duda acerca del objeto ó particularidad que presentan como no practicados de aquella forma, pues solo para esto se concede el privilegio.

9.° Los modelos se han de presentar en una caja cerrada y sellada, y lo mismo los planos, descripciones y pliegos de esplicacion, ó bien cerrados en papel y sellados; poniéndose en uno y otro caso un rótulo, en los términos que espresa el modelo número 3.°

10. El intendente pondrá debajo el rótulo: *presentado*, y lo rubricará, haciendo sellar la caja ó pliego, y dando á los interesados certificado de la presentacion; y si fuere en las provincias subalternas en la isla de Cuba, el oficio con que lo remita al intendente de la capital, para que ellos ó persona en su nombre se lo entreguen todo.

11. El intendente lo pasará todo á la junta superior gubernativa de real Hacienda, y con su asistencia y la del fiscal se abrirán las cajas y pliegos, y hallándose los documentos que se señalan en el art. 8.°, se acordará sin otro exámen la concesion del privilegio que corresponda, pasando oficio con copia del acuerdo al gobernador capitan general, á quien el interesado se dirigirá con una representacion arreglada al modelo núm. 2.° para que á mi real nombre espida la cédula segun el modelo número 4.°

12. A esta espedicion ha de preceder que los interesados presenten carta de pago, que acredite haber entregado por ahora en la junta de comercio ó fomento los derechos siguientes.

Por el privilegio de cinco años.	70 pesos.
Por el de diez años..	210
Por el de quince años..	420
Por el de introduccion.	210

La mitad de su importe se guardará en las arcas de la junta de comercio ó fomento, con separacion y destino al progreso de las artes y de la industria: y la otra mitad se remitirá á España con destino al Corservatorio de Madrid.

Se pagarán ademas ocho pesos por los gastos de la espedicion de la cédula.

13. Espedida que sea, pasará oficio el gobernador con copia de ella al intendente, á cuyo cargo queda el remitir á la junta de

comercio ó fomento los documentos cerrados y sellados, y el darme cuenta por medio de mi secretario de Estado y del de Fomento general del reino, con remision de la mitad de los derechos del privilegio correspondientes al real Conservatorio de Artes, donde se anotará la concesion, segun se previene en el artículo 15. Los referidos documentos quedarán depositados en la junta de comercio ó fomento, en pieza destinada á este fin, y no se abrirán sino en caso de litigio, y en virtud de providencia y oficio de juez competente.

14. Las concesiones de privilegio se publicarán en los respectivos *diarios de gobierno*, y en la *Gaceta* de Madrid.

15. Habrá en las juntas de comercio ó fomento un registro de las cédulas de privilegio que se espidieren, y que se anotarán por órden de fechas, con espresion de estas, de los nombres, apellidos y vecindad de los interesados, objeto del privilegio y tiempo de su duracion. Este registro se manifestará á las personas que lo soliciten.

16. Si los interesados acudiesen por sí ó por apoderado á pretender la gracia en estos reinos, se arreglarán á lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del real decreto de 27 de marzo de 1826, entendiéndose por la vía del fomento general del reino, y por el Consejo de Indias, y que el plazo señalado por el artículo 4.° se concederá á discrecion, segun las distancias y el objeto.

17. El poseedor de un privilegio gozará del uso y propiedad esclusiva del objeto que lo motivó, sin que nadie pueda ejecutarlo ni ponerlo en práctica sin su consentimiento, en el todo ó en la parte que ha declarado ser nuevo, ó no practicado en el distrito de la gobernacion superior donde se introduce, de la manera que lo presentó en el modelo, plano y descripcion que ha entregado, para que en todo tiempo sirva de prueba.

18. La propiedad se contará desde el dia y hora de la presentacion de los documentos al intendente: y en caso de haber solicitado dos ó mas personas privilegio para un mismo objeto, solo será válido el de aquella que haya presentado primero los documentos. Pero si al mismo tiempo acudieren dos ó mas interesados á solicitar privilegio de invencion ó de introduccion, unos en estos, y otros en aquellos dominios, verificándose en las islas de Cuba y Puerto-Rico con solo el intervalo de un mes la presentacion á los respectivos intendentes, y en Filipinas con el de cuatro, gozarán todos del privilegio: si con mayor diferencia, lo gozará esclusivo el que primero se hubiese presentado.

19. El uso del privilegio podrá cederse, donarse, venderse, permutarse y legarse por última voluntad, como cualquiera otra cosa de propiedad particular.

20. Toda cesion deberá hacerse por escritura pública, espresándose si el privilegio se cede para ejecutarlo en todo el distrito de la gobernacion superior, en una ó mas provincias, gobiernos inferiores, alcaldías, ó en determinados pueblos ó parajes; si la cesion ó renuncia es absoluta ó con reserva tambien de su uso; si es con calidad de poderlo traspasar ó no; y si el poseedor lo tiene cedido antes á una ó mas personas.

21. El cesionario estará obligado á presentar testimonio de la escritura de cesion, al intendente ante quien se hubiere hecho la solicitud del privilegio: este, despues de tomar razon de ella, la remitirá al de la capital, y este á la junta de comercio ó fomento, y lo pondrá en noticia de mi secretario de Estado y del de Fomento general del reino, el cual dará el correspondiente aviso al real Conservatorio de Artes para que lo anote en el registro de que habla el art. 15. La cesion será nula si el testimonio de la escritura no se presentase dentro de sesenta dias despues de su otorgamiento.

22. La duracion del privilegio se contará desde la data de la cédula de su concesion.

23. Cesan los efectos de esta, y queda anulado y sin valor el privilegio en los casos siguientes: 1.° cuando se ha cumplido el tiempo señalado en la concesion. 2.° cuando el interesado no se presenta á sacar la real cédula dentro de los tres meses siguientes al dia en que presentó su solicitud. 3.° cuando por sí ó por otra persona no ha puesto en

Lorenzo Arrazola

práctica el objeto del privilegio en el tiempo que se le haya señalado en proporcion de las circunstancias. 4.° cuando el interesado lo abandona; el abandono se entiende cuando se deja de poner en práctica el objeto un año y un dia sin interrupcion. 5.° cuando se prueba que el objeto privilegiado, como de introduccion, está en práctica en alguna parte del distrito de la gobernacion superior, ó descrito en libros impresos, ó en láminas, estampas, modelos ó planos que haya en los ayuntamientos, juntas de comercio ó fomento, sociedades económicas, archivos del gobierno, sin haber pasado los tres años de que habla el art. 6.° Y finalmente, cuando habiéndolo presentado el interesado como nuevo y suyo propio, se averigua que se ejecuta ó se halla establecido en cualquier parte de estos ó de aquellos dominios, ó en el estranjero.

24. En el caso de haber cumplido el tiempo de la concesion del privilegio, el presidente de la junta de comercio ó de fomento avisará al intendente de la capital, y en junta superior directiva declarará la cesacion, dando cuenta por la vía reservada del fomento general del reino; y se pondrá en noticia del director del real Conservatorio.

25. En los demas mencionados casos de cesacion se procederá por el juez competente, á peticion de parte, á justificar el hecho, y probado que sea, declarará la cesacion.

26. Los jueces para conocer de estos negocios serán los intendentes en sus respectivas provincias: las demandas deben presentarse ante el de aquella donde resida el demandado; y las apelaciones se interpondrán para la junta superior contenciosa, y de esta para el Consejo.

27. Cuando por las causas mencionadas en el artículo 25 cesare el privilegio, oficiará el intendente á la junta de comercio ó fomento, que procederá á la apertura de la caja ó pliego de los documentos depositados, y se pondrá todo á la vista del público, anunciándose ademas en el *Diario* de gobierno.

28. Hallándose ya establecida en la Habana, á virtud de lo dispuesto en el Código de comercio, reales resoluciones y cédula de la materia, la junta que se titula de *Comercio*, continuará á su cargo el fomento de la isla, que estaba cometido á la suprimida de gobierno por el antiguo reglamento, desde el artículo 21 en adelante; en Puerto-Rico, al de la junta de comercio ó fomento que se ha de establecer y organizar en cumplimiento de la cédula de 17 de febrero de 1832, y en Filipinas, la corporacion que en consecuencia del Código de comercio, mandado observar por otra de 26 de julio del mismo, habrá de sustituir á la junta gubernativa consular, para el fomento de la agricultura y de la industria.

29. El poseedor de un privilegio obtenido por cualquier título tendrá derecho á demandar y perseguir en juicio al que le usurpe su propiedad. Conocerán de estas demandas los intendentes de las provincias donde residan los demandados, y las apelaciones corresponderán á la junta superior contenciosa de real Hacienda, y de esta al Consejo.

30. Los inventores que han obtenido privilegio en estos dominios, ó en alguna de las islas de Cuba, Puerto-Rico ó Filipinas, tendrán derecho á usar de él en cualquiera de las otras, de venderlo ó de trasmitirlo, conforme al art. 17; pero con la obligacion de sacar cédula del Consejo dentro de un año de esta fecha, ó desde la cédula de la concesion, pasado el cual podrá introducirlo cualquiera que lo solicite, con el privilegio de introduccion.

31. Justificada que sea la demanda, se condenará al reo en la pérdida de todas las máquinas, aparatos, utensilios y artefactos, y al pago de tres tanto mas del valor de ellos, apreciándose por peritos, y aplicándose uno y otro al poseedor del privilegio.

32. Los privilegios concedidos hasta la fecha se conservarán con las condiciones de su concesion; y los que lo fueron con la reserva de estar á lo determinado en la presente real cédula, se sujetarán á sus disposiciones.

CEDULA DE NOTIFICACION. La copia testimoniada que en pleitos ya trabados, ó despues del emplaza-

miento, (v. CEDULA DE EMPLAZAMIENTO) deja el escribano de la providencia que debia hacer saber, cuando no puede ser encontrada la persona á quien iba á notificarla. Tambien se llama *memoria*.

Debe ponerse nota en los autos del nombre, calidad y habitacion del sugeto á quien se entregue la cédula, el cual firmará su recibo, y no sabiendo hacerlo, presentará un testigo que lo verifique á su ruego; mas si no quiere presentar este testigo, ó se negase á firmar sabiendo, el escribano se valdrá de dos testigos vecinos de la casa, ó de los mas próximos á ella; y por lo menos del pueblo cuando la cédula se deje en otro lugar que no sea la casa. Estos testigos nunca podrán ser los oficiales y dependientes del escribano.

La cédula se dejará á la primera diligencia en *busca*, sin necesidad de mandato judicial, escepto en los emplazamientos ó traslados de demanda, y las notificaciones de estado y citaciones de remate en los juicios ejecutivos (1).

Tales eran las disposiciones vigentes al publicarse la ley de enjuiciamiento civil de 3 de octubre de 1855, y aunque son lijeras las variaciones que esta ha introducido, notamos á continuacion los artículos en que se consignan.

Art. 23. «Si á la primera diligencia que se practique en su busca, no fuese habida la persona á quien se vá á notificar, se hará la notificacion por cédula sin necesidad de mandato judicial. En la diligencia que se estienda para hacerlo constar, se espresará el nombre, calidad y ocupacion de la persona á quien se entregue la cédula, firmando aquella el vecino.

Sino supiere ó no pudiere firmar, lo hará á su vez un testigo, y sino quisiere, ni presentar testigo que lo haga por ella, firmarán dos testigos requeridos al efecto por el escribano.»

En los juicios de deshaucio, segun los artículos 640 y 649, la providencia declarando el deshaucio y el lanzamiento en su caso, se hará saber al demandado en su persona, y sino pudiese ser habido despues de dos diligencias con intervalo de seis horas, se le dejará en su casa cédula, notificándole la providencia, la cual se entregará á su muger, hijos, dependientes ó criados, y no teniéndolas, al vecino mas inmediato.

En los juicios ejecutivos el art. 955 dispone: «Si el deudor no fuere habido despues de haberle buscado dos veces en su domicilio con intervalo do seis horas, se le hará el requerimiento por cédula, que se dejará por su órden á su muger, hijos mayores de catorce años, dependientes ó criados, si los tuviere: á falta de ellos á los vecinos.

Sino se supiere su paradero, ni tuviere casa, se hará el requerimiento por cédula al alcalde del pueblo de su domicilio, y sino lo tuviese conocido, del de su última residencia; publicándolo ademas por edictos, que se insertarán en los periódicos del pueblo si los hubiere, y sino, se fijarán en las puertas del juzgado.»

Art. 959. Hecho el embargo, se citará de remate al deudor en persona, ó por medio de cédula, sino fuere habido en la forma prevenida para el requerimiento.»

En los negocios contenciosos de la administracion las cédulas de notificacion son, una original, para la parte que la promueba, y tantas copias de esta como fuesen las partes á quienes se ha de notificar con lo demás que espresamos en el artículo CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO Y CEDULA DE UGIER.

La Cédula será leida y entregada en propia mano á la persona á quien concierna ó á las siguientes: si la persona citada no estuviere en casa, se leerá y dejará á uno de sus parientes familiares ó domésticos, con encargo de que se la entreguen. Si el ugier no hallare pariente ni criado á quien dejarla, lo hará á un vecino, y en defecto de vecino al promotor fiscal.

Cuando la notificacion ó citacion hubiere de hacerse á una persona ausente de Madrid, se le comunicará la cédula por medio de despacho al juez del pueblo de su domicilio: y si en las provincias de Ultramar, se dirigirá el despacho por conducto del ministerio de Estado, si la persona que ha de ser citada se hallare en pais estranjero.

(1) Artículo 3.° de la ley de 4 de junio de 1837.

Si la parte á quien se dirija la notificacion no tuviese domicilio fijo ó se ignorase su paradero, se insertará la cédula en la gaceta oficial y en el boletin de la provincia donde se sepa que residia últimamente.

El promotor fiscal dará aviso sin demora á los interesados, cuyo paradero sepa, de las cédulas que para ellos hubiere recibido.

Ademas llevará un registro donde sentará en resúmen las cédulas, espresando la fecha en que las hubiere recibido y despachado.

Ninguna cédula será leida ni entregada en dias feriados sin habilitacion de la seccion de lo contencioso.

El auto de la habilitacion se insertará en la cédula original y en sus copias.

No podrá entregarse ninguna cédula antes de salir ni despues de ponerse el sol.

Ningun ugier podrá autorizar cédula alguna ni diligencia en la cual tengan interés ellos, sus mugeres legítimas ó sus parientes consanguíneos ó afines hasta el cuarto grado inclusive.

Será nula toda cédula en que se falte á los requisitos anteriormente dichos. Véase NOTIFICACION.

CEDULA DE PREEMINENCIAS. Se llamaba así la real cédula que se espedia en favor de algunos magistrados, ú otro funcionario público, imposibilitado física, ó moralmente de servir su cargo, para que se le considerase, como si realmente lo sirviese, ó como funcionario activo con el sueldo íntegro, honores y preeminencias de tal, segun la índole del destino. Como se vé, este estremo se ha practicado y practica sin grandes inconvenientes cuando la imposibilidad se funda en motivos de pública utilidad, como el desempeñar al propio tiempo otro cargo ó comision de mayor importancia ó urgencia. Pero el primero, el de reputar efectivo al que en sus facultades físicas, ó intelectuales, se ha incapacitado para serlo, ofrece inconvenientes de mas de un género; es oponerlo á un sistema bien entendido de jubilaciones, que procediendo de ley general, obra como causa y estímulo general, eficaz é inalterable, en el ánimo y en la esperanza de todos los funcionarios públicos; y es aun mas incompatible con las disposiciones modernas, para que no se devenguen dos sueldos por un mismo destino y otras análogas. Las Córtes generales de 1821 creyeron que era opuesto hasta al régimen constitucional; y en órden de 15 de mayo lo consignaron asi, declarando abolido para siempre el sistema de *cédulas de preeminencia*, prefiriendo el de jubilaciones, aun con todo el sueldo. La fuerza de las cosas ha hecho prevalecer en efecto el sistema de jubilaciones y derechos pasivos, sí bien con las modificaciones que presentan las leyes sucesivas de presupuestos, ú orgánicas de clases, y hoy no hay ya en el último sentido *cédulas de preeminencias*; aun que sí en el efecto por causas de pública utilidad, como los nombramientos en comision, y otras misiones con retencion del destino principal.

CEDULA REAL. Dícese mas comunmente *real cédula*. En rigor técnico se han conocido dos clases de *cédulas reales*: las espedidas por los consejos supremos, como el de Castilla, de Indias, etc., y las que aun se espiden hoy por la *cancillería* de los Ministerios. Las primeras eran en cuanto á la forma respecto de los consejos, lo que las *reales provisiones*, respecto de las antiguas chancillerías, y hoy de las audiencias territoriales, salvo la *estampilla*, como espresamos. Decimos en cuanto á la forma, porque en cuanto al fondo habia la diferencia de que las reales provisiones se ceñian á asuntos judiciales y gubernativos, como hoy solo á los primeros; y las reales cédulas versaban con frecuencia sobre asuntos legislativos, siendo sabido que la mayor parte de nuestras leyes, en los tres últimos siglos se han dado y promulgado por real cédula. En ellas el Rey hablaba, como en las reales provisiones, personalmente: firmaban algunas veces los señores del Consejo, y refrendaba el secretario de cámara del mismo. En materias legislativas, y en la mayor parte de las cédulas para Ultramar, acompañaba de *estampilla* la firma, *Yo el Rey*. Entonces se llamaban propiamente *reales cédulas de S. M. y señores del Consejo*. Cuando no llevaban la real firma, por ser actos solo del

Consejo, sobre asuntos gubernativos, ú otros no graves, se llamaban simplemente *cédulas del Consejo*, aunque en escritos antiguos, es fácil ver confundido este lenguaje. Hoy los tribunales supremos continúan espidiendo aun *reales cédulas* en asuntos de Ultramar.

En cuanto á las reales cédulas espedidas por la cancillería, lo son ordinariamente en materias de gracia. Espedido un *real decreto* agraciando con grandeza de España, título de Castilla, cargos y honores para Ultramar, sucesion en los títulos y grandezas, heredados, comprados ó donados, pasa á cancillería, la cual los reduce á real cédula, encabezando con el nombre de S. M. que habla personalmente: *Doña Isabel II, etc., á todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed* que en tal fecha he provisto el real *decreto siguiente*: se inserta á la letra, y concluye la cédula mandando á todas las autoridades, tribunales, etc., que la guarden y hagan guardar. Firma la Reina de estampilla, se sella por el canciller con el sello de Castilla en blanco sobre oblea, ó sobre lacre, con caja de plomo ó plata, segun lo apetece la parte que lo pague, y la refrende el Ministro de Gracia y Justicia, ó aquel á cuyas órdenes esté la cancillería por la cual se espide. Por analogía y en términos generales se llaman reales cédulas alguna vez los despachos, títulos y nombramientos que emanan de la Corona ó se espiden en nombre de S. M. por los ministerios ó altos cuerpos. Las cédulas en materia legislativa encabezaban, *El Rey*. Firmaba este de estampilla; y refrendaba el secretario. V. CEDULA.

CEDULA DE RETIRO. La cédula ó despacho en que se consigna la licencia absoluta de un militar con los honores y prerogativas de su clase, principalmente del fuero militar.

CÉDULA DE RUEGO Y ENCARGO. Eran las cédulas reales que se dirigian á los cabildos y potestades eclesiásticas del reino, sobre asuntos de su competencia. Decíanse *de ruego y encargo*, porque no eran preceptivas; sino que la Corona, el poder temporal adoptaba esa fórmula *rogatoria y comendaticia*, para significar que no invadia, que no coartaba atribuciones propias de la potestad eclesiástica. Luego que fué espedito el ejercicio del patronato universal de nuestros reyes en la presentacion para el episcopado, decretada la presentacion para una mitra vacante, se dirigia al cabildo respectivo cédula *de ruego y encargo* en que se daba conocimiento al mismo de la real presentacion, *rogando y encargando* al propio tiempo al cabildo, que en la *sede vacante* tuviera á bien nombrar gobernador de la diócesis al obispo electo, ínterin era preconizado en Roma, se recibian las bulas, se consagraba y encargaba de su diócesis. El uso de estas cédulas se limitaba á la Península, pues sabidas son las facultades estraordinarias de nuestros Reyes en Ultramar, de lo cual nos hacemos cargo en su lugar respectivo. Aunque no preceptivas, ni obligatorias estas cédulas, como se vé, rara vez eran desatendidas, y en uso ya de ese derecho y posesion, la Corona llegó á creerse desobedecida, si alguna vez el cabildo no deferia al *ruego*: y en nuestros tiempos han tenido lugar y publicidad ruidosos espedientes y delicadas cuestiones sobre el particular, como sucedió con el cabildo de Toledo y otros en los años de 1836 á 1849. Puede verse sobre ello el *Discurso canónico-legal*, publicado en 1839 por don Pedro Gonzalez Vallejo, arzobispo de Toledo y otros escritos á que dió lugar.

Otras veces las cédulas de *ruego y encargo* se dirigian á los obispos y arzobispos, como podian serlo á los sínodos, sobre nombramientos ó medidas que por razon de utilidad y conveniencia para la Iglesia y para el Estado conviniere adoptar á juicio de la Corona.

Estas cédulas no eran del Consejo; sino de las llamadas con todo rigor *cédulas reales*. emanadas directamente del Rey, encabezando asi: *El Rey. A vos el dean y cabildo...* A vos el *M. R. arzobispo*, etc. En el dia tienen uso todavía, y continuarán teniéndolo estas reales cédulas, por cuanto su objeto subsiste y es perpétuo, á saber, la independencia respectiva y mútuas consideraciones entre

ambas potestades; si bien variarán algun tanto en la forma por haberse sustituido á los *secretarios del Rey, y á los de Estado y del despacho*, los ministros responsables. V. **CEDULA REAL.**

CEDULA DE SUCESION.

Llamábase asi y tambien *cédula* sucesoria, la que debian sacar los sucesores en títulos y grandezas de España, para poder usar de estas, y de aquellos. Estas cédulas, que en el uso comun siguen llamándose asi, se denominan legal y oficialmente *cartas de confirmacion*, desde el real decreto de 28 de diciembre de 1846. Por el art. 15 de la ley de presupuestos de 1845, se autorizó al Gobierno para hacer en el servicio y derecho llamado de lanzas y medias anatas de títulos de Castilla y grandezas, las reformas que mas creyese convenir á la utilidad del Estado. En uso de ella el Gobierno suprimió aquel servicio, y lo sustituyó con el llamado *impuesto especial sobre grandezas y títulos*. Sin pagarlo, y sacar la *carta de confirmacion*, ó cédula sucesoria, nadie pueda usar de estos. V. **GRANDEZAS DE ESPAÑA: TITULOS DE CASTILLA:** el real decreto de 28 de abril de 1846, y real instruccion de 14 de febrero de 1847.

CEDULA DE VECINDAD.

El documento que se facilita á cada individuo para acreditar su vecindad, y para viajar dentro de la Península é islas adyacentes. Han sido creadas estas cédulas, por real decreto de 15 de febrero de 1854, en reemplazo de los pasaportes que antes se espedian para este último objeto, los cuales han quedado abolidos desde 1.° de mayo de dicho año, salvo para el estranjero y Ultramar. Tambien hacen las veces del padron, cédula ó carta de seguridad que, segun el real decreto de 8 de febrero de 1824 y reglamento de policía de 20 del mismo mes y año, debia tener todo español mayor de 16 años y toda viuda ó soltera cabeza de familia, para acreditar su domicilio y viajar dentro del rádio de seis leguas.

Segun el decreto citado de 1854, á principio de cada año la autoridad correspondiente debe facilitar á los padres ó cabezas de familia una cédula de vecindad para sí, y otra para cada uno de los demás individuos de su familia con arreglo al padron de vecindario, y por todas ellas, cualquiera que sea su número, se les exige un real de vellon. Se esceptúan de este pago los pobres de solemnidad, los peregrinos, los braceros que no tengan mas medio de subsistencia que el jornal diario, los obreros que estén en el mismo caso, y las viudas y huérfanos que no posean mas que su pension, si esta no pasa de 1,500 rs. Dichas cédulas deben repartirse á domicilio, á todo el que estuviere empadronado, por los dependientes de la autoridad, los cuales han de recojer en el acto su importe y la nota que deberán dar los cabezas de familia, con arreglo al padron, de los individuos de la suy respectiva, y de los criados, á quienes se ha de dar tambien cédula separada en virtud de reclamacion del amo, si están sirviendo, y si no lo están, en vista de su padron. Las cédulas deben renovarse en el mes de enero de cada año, repartiéndose de la misma manera que queda espresado. A los estranjeros transeuntes, les sirven sus pasaportes de cédula de vecindad; pero habrán de obtenerla si están domiciliados.

Todo viajero debe caminar provisto de este documento, sin necesidad de presentarlo á nadie, como no le sea pedido en nombre de la autoridad, en cuyo caso está obligado á exhibirlo. La falta ó carencia del mismo es causa legal para la detencion del omiso, y para la imposicion de las penas ó multas en que, al tenor de las disposiciones vigentes, incurre el que carece de padron en los pueblos donde reside, y de pasaporte en los viajes que emprende. Estas penas, segun lo dispuesto en el reglamento de p olicía ya citado de 1824, vigente en esta parte, como lo declara la real órden de 18 de agosto 1858, consisten en la multa de 10 ducados por la falta de padron, y de 20 por la del pasaporte, en Madrid; y en provincias desciende segun la importancia de las poblaciones, no pudiendo pasar de dos ducados en los pu eblos que no llegan á mil almas.

Ocupando hoy las cédulas de vecindad el lugar de los pasaportes para el interior como

hemos dicho, es consiguiente que sean aplicables á las falsedades que respecto de ellas se cometan, las penas del Código penal referentes á la falsificacion de pasaportes. Por tanto, el empleado público que espidiese una cédula de vecindad bajo nombre supuesto, ó la diese en blanco, será castigado con las penas de prision menor é inhabilitacion temporal absoluta; á no ser que lo hiciese por justas causas, comunicadas al superior respectivo, en cuyo caso no es aplicable esta disposicion (1). El que hiciere una cédula de vecindad falsa, debe ser castigado con las penas de prision correccional, y multa de 10 á 100 duros; en cuyas penas incurre tambien el que en una cédula verdadera mudare el nombre de la persona á cuyo favor se halle espedida, ó de la autoridad que la espidiere, ó que altere en ella alguna otra circunstancia esencial (2). Y el que hiciere uso de una cédula de vecindad que contenga cualquiera de dichas falsedades, ó que, siendo verdadera, se halle espedida á favor de otra persona, será castigado con la multa de 10 á 100 duros (3).

CEDULA DE VINCULACION. Prohibida por la cédula de 1789 la facultad de fundar mayorazgos sin real licencia, era natural que esta se obtuviese por *cédula de gracia*; pero á mayor abundamiento, y por haber ocurrido casos de omision, en real órden de 29 de noviembre de 1827, se mandó que en lo sucesivo, todo el que fundase mayorazgo, estuviese obligado en el término de seis meses á sacar de la cámara *cédula de vinculacion*.

CEDULA DE UGIER. Háse importado entre nosotros, hace tiempo el cargo, y recientemente el documento y denominacion á que es referente este artículo. Al establecerse el Consejo Real bajo su última planta, en vez de *porteros*, se crearon *ugieres*. Siendo estos en los tribunales franceses una especie de actuarios *diligencieros*, con ese mismo carácter se establecieron ahora; pues con otro, ya eran conocidos en la servidumbre de palacio. En Francia el ugier notifica y diligencia las providencias y sentencias de los tribunales, llamándose cédula de ugier el despacho con ámplias inserciones que para ello se espide; y en España la cédula de ugier es un despacho al modo. La cédula de citacion y notificacion comprende la original de la demanda ó solicitud, y tantas copias como partes haya que citar, ó requerir, constando en ella el nombre y apellido, profesion, domicilio ó residencia de las mismas, y cualquier otra circunstancia notoria que facilite el conocimiento. La cédula de emplazamiento, contendrá, pena de nulidad, el nombre del Consejo, el dia de audiencia pública señalada por el tribunal ó por el reglamento, para comparecer los litigantes en persona, ó por medio de abogados: copia literal de la demanda: copia ú oferta de entregar ó poner de manifiesto los documentos ó escrituras en que se funda la demanda. Trata de ello estensamente el reglamento de lo Contencioso del Consejo Real, y especialmente los artículos 64 y 76. Véase CEDULA DE NOTIFICACION: CEDULA DE EMPLAZAMIENTO.

CEDULON. Hasta las últimas reformas se daba este nombre á la cédula de emplazamiento cuando se fijaba en la puerta de la casa del emplazado.

En lo eclesiástico es el edicto de excomunion que se coloca en las puertas de las iglesias.

Vulgarmente se dá el nombre de cedulones á los papeles anónimos que se fijan en las esquinas, desacreditando é injuriando á alguna persona. Mas usualmente se llaman pasquines. (Véase su artículo.)

CELADOR DE BARRIO. Llamado tambien de *policía* y de *proteccion* y *seguridad pública*. Es un funcionario del órden administrativo, encargado principalmente de conservar el órden interior de los pueblos, de sus distritos ó barrios, y de velar por la proteccion y seguridad de las personas y propiedades de los vecinos.

Su institucion ha tenido muchas vicisitudes en España. Los antiguos reglamentos de policía establecieron celadores en las pobla-

(1) Art. 220 del Código penal.
(2) Art. 230 de id.
(3) Art. 231 de id.

ciones de cierta importancia, siendo las facultades y atribuciones que les concedian muy análogas á las de los alcaldes de barrio, de tal manera que en diferentes épocas, los celadores han sustituido á los alcaldes de barrio, y estos á los celadores. Ha habido, sin embargo, entre unos y otros funcionarios diferencias muy esenciales, características del orígen, índole y representacion de cada uno y de la estension de sus facultades. El cargo de alcalde de barrio ha sido siempre gratuito y honorífico, de eleccion de los ayuntamientos. Los celadores nunca gozaron de tales preeminencias, siempre han sido nombrados por los jefes superiores de administracion en sus respectivas provincias; disfrutan un sueldo, y su accion es menos ámplia que la de los alcaldes de barrio, y mas sumisa al gobierno.

En la restauracion política de 1824, por real decreto de 8 de enero del mismo año, se organizó la policía general del reino, y en 20 de febrero siguiente, se publicó un reglamento para la policía especial de la corte y la de las provincias. Por este reglamento se crearon sesenta y cuatro celadores de barrio en Madrid y uno para sus afueras. En las capitales de provincia, uno para cada barrio en que estuviere dividida, y en los distritos de las subdelegaciones se encomendaron á los alcaldes de barrio las funciones de celadores, confiriendo á estos casi todas las atribuciones que hasta entonces habian tenido los alcaldes de barrio.

Las facultades y obligaciones de aquellos celadores pueden verse en el reglamento espresado. (1) Las principales se reducian á vivir en sus respectivos barrios, ejecutar las órdenes que se les comunicasen, dar parte diario de todas las ocurrencias que pudieran interesar al órden público y á la ejecucion de las leyes, bandos y reglamentos de policía, ejercer una vigilancia especial y constante en su distrito, formar el padron general del vecindario, registrar con frecuencia los libros de las posadas, y otras análogas.

(1) Reglamento para la policía especial de la corte y para la de las provincias del reino, de 20 de febrero de 1824.

Los celadores eran nombrados por el superintendente general de policía, prévios los informes oportunos, en especial de las diputaciones de caridad de los mismos barrios. Su nombramiento no podia recaer sino en vecinos honrados, que estuviesen domiciliados en el barrio dos años por lo menos, y que poseyeren alguna propiedad ó industria con que mantenerse. Usaban un distintivo y baston con puño de marfil; disfrutaban un sueldo de 4,400 rs. anuales los del interior de Madrid; de 7,700 el de las afueras, y de 4,000, 3,500 y 3,000 los de las capitales de provincia, segun que fuesen de 1.ª, 2.ª y 3.ª clase.

Restablecida en 1836 la ley de ayuntamientos de 1823, los alcaldes de barrio recobraron sus anteriores facultades, que siguieron ejerciendo hasta el año de 1844, en que por decreto de 26 de enero se organizó el servicio de proteccion y seguridad pública, creando un celador para cada uno de los barrios en que estuvieren divididas las capitales de provincia, estableciéndolos tambien en los pueblos cabeza de partido, ó de crecido vecindario, que por sus circunstancias particulares requiriesen especial proteccion y vigilancia.

En el art. 16 de las disposiciones dictadas en 30 de enero de 1844 para llevar á efecto la organizacion del ramo de proteccion y seguridad pública, espresamente se dice, que los celadores desempeñarian en sus respectivos barrios las atribuciones que hasta entonces habian tenido los alcaldes de los mismos.

Los deberes y atribuciones de estos funcionarios se designan en las disposiciones citadas, (2) asi como el distintivo que debian usar, y su sueldo. En los presupuestos generales de 1850, figuran 45 celadores en Madrid y 206 en provincias.

Por real decreto de 25 de febrero de 1852 se modificó el servicio de proteccion y seguridad pública de Madrid, denominándole de *vigilancia*, creando sesenta y cinco celadores con el sueldo de 7,000 rs., suprimiendo

(1) Dispoiciones dictadas en 30 de enero de 1844, para llevar á efecto la organizacion del ramo de proteccion y seguridad pública.

el cargo de comisarios, cuyas atribuciones reasumieron los celadores. En el reglamento publicado en 11 de mayo siguiente, se amplian algun tanto las facultades que por los reglamentos anteriores habian tenido los celadores, concediéndoles entre otros distintivos el uso de una medalla plateada con las armas nacionales que debian llevar al cuello, lo que dió lugar á alguna crítica por parte de la prensa y de corporaciones respetables, que no podian mirar con indiferencia que se confundiese el noble y honroso emblema que representa las elevadas funciones de la judicatura, con el distintivo de un simple celador de vigilancia.

Posteriormente por decreto de 4 de abril de 1854 se introdujo una gran reforma en el servicio de vigilancia pública y municipal de Madrid, que se puso á cargo de cinco inspectores, 30 comisarías y 30 secretarías de comisaría, suprimiendo el cargo de celadores.

Anulado este decreto por disposicion de la junta de salvacion y defensa de Madrid en 23 de julio de 1854, y despues por real decreto de 13 de setiembre de 1854, restablecida tambien por otro de 9 de agosto del mismo año la ley de 3 febrero de 1823 sobre el gobierno de las provincias y de los pueblos, y las disposiciones que se hallaban vigentes al publicarse el real decreto de 30 de diciembre de 1843, volvieron los alcaldes de barrio á sustituir como otras veces á los celadores. Mas muy pronto se conoció que la índole y carácter de aquellos antiguos funcionarios, no era compatible en el dia con muchas de las funciones de que estaban encargados, y que las circunstancias especiales de la nacion y los hábitos é instintos de la época presente exigian el restablecimiento de los celadores. Asi se verificó, y por reales órdenes comunicadas por el ministerio de la Gobernacion con fecha 4 de setiembre y 3 de noviembre de 1854, se cuentan 54 celadores para el casco de la poblacion de Madrid y cuatro para los barrios de las afueras: despues por real órden de 23 de febrero de 1855 se han reducido á 44 los celadores de Madrid. Son nombrados por el gobernador, tienen 5,000 rs. de sueldo usan baston con puño plateado y borlas de color berde y carmesí. Para las capitales de provincia y pueblos de importancia se hacen en el dia los nombramientos de celadores, no como medidas de un plan general adoptado, sino como medio de ocurrir á necesidades locales, en virtud de las cuales los gobernadores aumentan ó disminuyen el número de celadores, con tal que el sueldo que se les asigne no esceda de la cantidad que para este objeto se le ha señalado en el presupuesto.

Los celadores y alcaldes de barrio, aunque deben prestarse recíproco ausilio, en la actualidad obran independientemente los unos de los otros.

Los celadores para el desempeño de su cargo tienen señalado cierto número de auxiliares subalternos, que se han llamado salvaguardias, vigilantes, agentes y hoy guardias urbanos.

Los deberes principales de los celadores son, vigilar constantemente sus distritos, hacer que se conserve en ellos el órden y la tranquilidad, prestar ausilio á quien lo necesite, procurar que se respeten los monumentos artísticos y se cumplan las ordenanzas y bandos de policía, detener á los criminales que deberán entregar inmediatamente á sus jueces competentes, pudiendo en ciertos casos hacer uso del poder coercitivo que dentro del barrio de su distrito les concede la administracion, como un medio de correcion y disciplina. Sobre todo están encargados de llenar con el mayor esmero y cuidado el padron de vecinos, especialmente en las grandes poblaciones.

La utilidad y conveniencia de los celadores de barrio cada dia es mas notoria: por desgracia no se halla muy adelantado entre nosotros este ramo del servicio, que en otras naciones, como Inglaterra y Francia, ha llegado á su perfeccion. En España la institucion de los celadores, que debe ser pura y esencialmente administrativa, se ha querido hacer política, siendo este el principal motivo de que no se haya respetado como debiera, ni correspondido á su fin.

CELADOR DE CAMINOS. Desde que á mediados del siglo anterior

aplicó el gobierno del estado una atencion especial á la apertura y mejoramiento de los caminos, se crearon, como no podia menos, empleados subalternos, que cuidasen de su conservacion y entretenimiento, de la calidad y asiduidad de los trabajos en su caso, y de la observancia de las ordenanzas del ramo sobre estos mismos objetos, policía y seguridad de los caminos. Ejercian funciones, pues, de *sobrestantes*, de *guardas* de *celadores*, llamándose en un principio *guardas-celadores*, y despues *peones camineros*, clasificados en *peones camineros* simplemente, y *peones-capataces* (1). Estos empleados se reputaban guardas jurados para los efectos penales en las denuncias de las infracciones de ordenanza (2).

A lo último de este período se marcó mas la diferencia entre *peones* y *celadores*, dándoles tal importancia, que en la conocida vindicacion de la administracion del conde de Florida Blanca se consignó, como capítulo de mérito: «Se han formado reglamentos para la conservacion de caminos, estableciendo para ello *peones camineros*, en cada legua, con un *celador facultativo* en cada *ocho* que vele sobre todo, edificando para ello casas, donde la distancia de los pueblos no permitia establecerlos en estos. Son ya 49 las casas hechas que acompañan los caminos, y sirben de consuelo y recurso á los viajeros.» A la nueva clase de celadores *facultativos* se les dió tambien el carácter de *guardas jurados* (3): estaban subordinados al ingeniero, y eran jefes inmediatos de los peones. Despues de la administracion de Florida Blanca se señaló á cada celador la distancia de 10 á 20 leguas, segun el estado y dificultades tópicas del camino.

En 25 de abril de 1839 se publicó un reglamento especial de *celadores de caminos*, esplicando y metodizando, mas bien que innovando esencialmente sus atribuciones: Establecidos uno por cada 15 leguas, ó segun lo exigiesen ó permitiesen los accidentes del terreno, debian principalmente el cuidar de que los peones camineros cumpliesen con su deber: que las obras se ejecutasen con perfeccion, segun las contratas y disposiciones del ingeniero: examinar la calidad de los materiales, celar el cumplimiento de la ordenanza, y auxiliar á los ingenieros, practicar medidas, etc.: no podian ser menores de 24 años, y habian de saber aritmética, geometría, trigonometría plana, con principios de arquitectura civil, agrimensura y delineacion, y tener dos años de práctica en obras de caminos y canales.

Bajo este pié continuaron, hasta que por real decreto del 2 de abril de 1854, se organizó el personal de los auxsiliares facultativos del cuerpo de ingenieros de caminos, canales y puertos, declarándole reducido á las tres clases de *aspirantes*, *auxiliares*, y *sobrestantes*, quedando refundida la de *celadores* en la de *ayudantes*. El número de estos no se determina ya por leguas, sino que es cerrado, ochenta para todo el reino, con otras muchas variaciones que pueden verse en dicho decreto.

CELADOR DE CAMPO. Se dió este nombre á las personas encargadas por los ayuntamientos de la custodia y defensa de los campos, esto es, de panes, viñas y pastos.

En los pueblos de dilatado término donde la agricultura está bastante desarrollada, los celadores de campo, tenian, ó tienen carácter de jefes de los guardas, siendo sus principales atribuciones, vigilar la conducta de ellos y procurar que cumplan exactamente sus deberes.

Los celadores de campo siempre han dependido de las municipalidades, siendo nombrados y pagados por ellas.

En las ordenanzas antiguas (1) se confundia el título de celador de campo, con el de celador de monte, guarda de campo y de monte, siendo enteramente iguales las atribuciones de estos funcionarios que solo se diferenciaban en el nombre. En el dia á los celadores se han sustituido los guardas.

(1) Ordenanzas de 1.° de julio de 1767: 26 de marzo de 1774: instruccion y reglamento de 8 de junio de 1794 para la ejecucion de la ordenanza general de correos y caminos de la misma fecha, y ordenanza de 27 de mayo de 1805.
(2) Real instruccion de 18 de setiembre de 1784.
(3) Instruccion de 25 de julio de 1790.

(1) Ley 14, lib. 7, tit. 24. Nov. Recop.

CELADOR DE CARCEL. Las personas encargadas de observar mas de cerca á los presos y de procurar se cumplan respecto de ellos, los reglamentos, las órdenes y disposiciones de las autoridades y de los alcaides.

La legislacion carcelaria y los buenos principios de administracion determinan las reglas de policía y disciplina de las cárceles, que deben servir de base al formar los reglamentos especiales para el régimen interior de aquellos establecimientos. En el que se formó para las cárceles de Madrid en 31 de agosto de 1848, á consecuencia de lo dispuesto por real órden de 6 de abril del mismo año, se establece que en cada departamento general haya uno ó dos celadores, obligados á conservar el órden y la buena disciplina, evitando los juegos, canciones deshonestas, y cualquier otro género de inmoralidad ó escesos. Ordinariamente los alcaides, proponen para celadores, y la autoridad superior provincial hace el nombramiento. Otras veces los alcaides comparten bajo su responsabilidad las tareas y atenciones de su cargo con otros agentes, ó auxiliares que nombran, ó eligen, con los nombres de celadores, vigilantes, etc. Véase CARCEL.

CELADOR DE MONTES. Se llamaban asi las personas encargadas de la custodia y conservacion de los montes.

Desde muy antiguo se conocieron estos empleados. En las reales ordenanzas de 7 de diciembre de 1748 para el aumento y conservacion de los montes y plantíos (1) se prevenia, que el consejo, justicia y regimiento de cada pueblo elige y nombra cada año los celadores de campo y monte, que segun la estension de su término, juzgaren conveniente, para que cuiden de su conservacion y aumento, aprehendan y denuncien ante la justicia ordinaria, á los que encontraren ó justificaren hacer talas, causar incendios, introducir ganados, ó cortar sin licencia, procurando sean personas de buena opinion, fama y costumbres.

(1) Ley 14, lib. 7, tit. 24, Nov. Recop.

Segun las reales ordenanzas citadas, los celadores de montes, por recompensa de su trabajo estaban exentos de todos las cargas concegiles, alojamientos, quintas y levas por el tiempo que sirvieren aquellos oficios: les correspondia la tercera parte de las penas: se les permitia el uso de todas armas blancas y de fuego, siendo de la medida legal: eran guardas jurados, y por tanto sus declaraciones bastaban, cuando habia aprehension real, para ejecutar las penas que se señalaban á los dañadores; y cuando faltaba la aprehension, se tenia por suficiente prueba la declaracion jurada del celador con la deposicion de un testigo mas, que la coadyuvase, para las penas de ordenanza.

Los celadores de montes acusados de fraude, tolerancia ó cohecho en cortas, talas ó quemas de los montes ó plantíos, debian ser castigados con las penas de cuatro años de presidio de Africa irremisibles, y á pagar los daños. Tanto en las ordenanzas mencionadas, como en las disposiciones que despues se han publicado, el título de celador de montes se ha confundido con los de guardas de los mismos, celador y guarda de campo.

En el dia no existen los celadores de montes: por los reglamentos vigentes, sus funciones las desempeñan, segun sus mayor ó menor importancia, los guardas de montes ó peritos agrónomos, quienes las ejercen bajo la inspeccion de las comisarías de distrito, que están á las inmediatas órdenes de los gobernadores. Véanse los artículos GUARDAS DE MONTES, DE CAMPO y de PERITO AGRONOMO.

CELADOR DE POLICIA URBANA. Es un dependiente de los ayuntamientos, encargado principalmente de velar sobre el cumplimiento de las ordenanzas municipales, de denunciar á sus infractores, de evitar al público toda clase de incomodidades y perjuicios, de procurar el aseo y ornato de las poblaciones.

Las funciones de estos celadores se han acumulado, ó confundido en algunas épocas con las de los celadores de proteccion y seguridad pública, no obstante su diferencia. En el aprobado por el ayuntamiento de Ma-

drid en 1841, y en las ordenanzas del mismo nombre, formadas para la propia corporacion, y aprobradas por el alcalde corregidor en 1847, se supone separado el cargo de celador de policía urbana del de proteccion y seguridad pública. Por real decreto de 4 de abril de 1854, el servicio de vigilancia pública y municipal de Madrid se encargó á cinco inspectores, treinta comisarios y treinta secretarías de comisaría, debiendo abonar el presupuesto municipal la cuarta parte del gasto total de la vigilancia pública y municipal. Segun el espíritu y la letra de aquel decreto, debian haberse suprimido los celadores de policía urbana; sin embargo, continúan en el dia, abolido el decreto espresado por otro de 13 de setiembre de 1854. Las ordenanzas de policía urbana y rural de Madrid de 1847, que son las vigentes, en el artículo 8.° dicen, que están á las órdenes del alcalde y sus tenientes, como empleados y dependientes del ramo de policía urbana, los celadores de dicho nombre. Mientras existieron corregidores, estos eran los que hacian los nombramientos de celadores: hoy corresponde esta atribucion á los ayuntamientos.

El número de celadores ha variado segun las épocas y circunstancias: en la actualidad existen doce para el casco de Madrid y dos para las afueras, destinados, uno al cuartel del Norte y otro al del Sur. Llevan baston por distintivo.

Los deberes y atribuciones de los celadores de policía urbana, se infieren de su misma definicion. Están obligados á vigilar su distrito constantemente, á observar con particular cuidado la construccion de los edificios, procurando se guarden las alineaciones; que los derribos se hagan con órden, poniendo vallas y tomando las demás precauciones, que en cada caso aconseje la esperiencia. Deben denunciar los edificios que amenacen ruina, informar las solicitudes que se hagan para ejecutar obras en sus distritos, cuidar de los empedrados, de la limpieza de las calles, etc. Sobre todo su principal objeto ha de ser la conservacion del órden en el ramo de policía urbana, la proteccion del vecindario en todo lo relativo al órden público, á su comodidad en las ocupaciones y negocios ordinarios de la vida social, procurando siempre que los empleados de las municipalidades y los vecinos observen las ordenanzas de villa; bandos de buen gobierno y demás disposiciones que dicten las autoridades, conminando á los primeros con multas ó descuento de sueldo cuando falten á su deber, y aconsejando y reconviniendo á los segundos y aun denunciándolos á los juzgados de faltas, ó á la autoridad gubernativa competente. Tambien pertenece á los celadores la inspeccion en todas los ramos de la policía sanitaria, con la cual se confunde muchas veces la urbana: bajo tal concepto, su principal cuidado debe ser alejar de las poblaciones los focos de corrupcion, denunciando á la autoridad local, de que dependan, los depósitos, almacenes y establecimientos insalubres y peligrosos. Ultimamente, cuando ocurra algun incendio, se pondrán inmediatamente á disposicion del alcalde, que es la autoridad á quien compete cuidar de que se corte é impidan ó atenúen sus efectos.

CELADOR DE VIGILANCIA NOCTURNA. Este nombre se ha aplicado tanto á los serenos, como á los celadores de estos, encargados principalmente de observarlos y hacer que cumplan sus deberes.

La institucion de los celadores de vigilancia nocturna no es moderna en España. Don Cárlos IV, por edictos publicados en Madrid á 28 de noviembre de 1797, y de 6 y 9 de diciembre de 1798 (ley 3.ª, tít. 19, libro 5 de la Nov. Recop.), mandó se estableciesen ocho celadores nocturnos, ó de los serenos, para los ocho cuarteles, aumentando para los gastos de este servicio la contribucion de faroles. En dichos edictos se encarece la utilidad y beneficio de estos empleados, y se juzgan con tanta severidad sus faltas, que los que robasen en el acto del ejercicio de su empleo, ó hiciesen capa á otros para que lo ejecutasen, debian ser castigados irremisiblemente con la pena de *muerte*.

Desde dicha época siguieron los celadores nocturnos en Madrid y en algunas otras grandes poblaciones, hasta que por real de-

creto de 16 de setiembre de 1834, se mandó que en todas las capitales de provincia se estableciese desde luego el servicio de los serenos, cuya organizacion es objeto de las ordenanzas y reglamentos especiales que cada ayuntamiento tiene aprobadas para el órden y régimen interior de sus pueblos; y como en esta parte han sido árbitros de adoptar la nomenclatura que les ha parecido, en unas capitales, existen y han existido los celadores de vigilancia nocturna, con este nombre, y en otras con otros diversos. En las poblaciones de no numeroso vecindario, no se conocen tales celadores, y solo los simples serenos. Las ordenanzas de policía urbana y rural de Madrid, aprobadas en 1847, que son las vigentes, en su art. 80 disponen, que para el servicio de vigilancia nocturna y del alumbrado público, haya los celadores, serenos y demás dependientes que se consideren necesarios: segun el art. 81, el cuerpo de celadores y serenos se rige por el reglamento formado para él por el ayuntamiento (1); y segun el 82, los celadores y serenos usarán de noche el traje que les está designado, y llevarán un chuzo ó lanzon, un pito y un farol encendido y numerado. En el dia existen doce celadores de serenos en Madrid con el sueldo de 5,500 rs.; son nombrados por el ayuntamiento, y están á las órdenes de un inspector.

La aplicacion relativa, que en defecto de otro general, suele tener el antedicho reglamento en las provincias, hace que consignemos aquí algunos de sus pormenores.

Segun él, para ser celador de vigilancia nocturna, se requieren las circunstancias de honradez, aptitud y antecedentes de una conducta sin tacha: han de vivir en su distrito y no tener otro empleo con sueldo, ni ocupacion contínua que les distraiga de las atenciones de su destino. Sus principales deberes se reducen á pasar lista á los serenos de su distrito, examinar el estado de las armas y equipo de cada uno, rondar el distrito toda la noche, dando parte al amanecer al inspector de cuanto haya ocurrido, si el caso no fuese tan grave que exigiese hacerlo antes, presenciar y llevar una cuenta exacta de los enseres necesarios para el alumbrado, vigilar con particular cuidado las reuniones de gente sospechosa; enterar á los serenos de los nuevos toques y señales de inteligencia y auxilios; conducir á la cárcel á los que cogieren haciendo uso, sin estar autorizados, de armas, pito ú otro distintivo de los empleados del ramo. Han de llevar un libro en el que anotarán el nombre, edad, estado, señas personales, habitacion y dia del nombramiento de cada sereno, las prendas de armamento y vestuario que hayan recibido, sitio y número de los faroles de que deban cuidar cada uno, conducta, faltas y las multas que se les impongan. En caso de alarma ó fuego, deben reunir á todas los serenos de su distrito, y ponerse al frente de ellos para cumplimentar las órdenes que se les comuniquen; son responsables de las faltas que ocurran en su distrito, por estar los serenos dormidos ó ser poco activos y vigilantes. Deben llevar el trage que se les tiene designado y la linterna descubierta, para que sean respetados y obedecidos, como funcionarios de la policía: y ejercen autoridad coercitiva correccional sobre sus subordinados, pudiendo imponer multas á los serenos por las faltas que cometan, con tal que aquellas no escedan de 12 rs.

CELADORES REALES. Asi se denominó la fuerza pública de caballería, destinada despues de 1824 á la seguridad de los caminos. Por su destino llamóse tambien *tropa de policía*. En un principio esta fuerza era del ejército, y por tanto con organizacion rigorosamente militar. Habiendo espuesto el superintendente general de policía que la organizacion rigorosamente militar del regimiento de *celadores reales*, se oponia á los servicios propios de su destino, propuso la creacion de una fuerza especial de policía de ambas armas. Aprobada la creacion de esta fuerza en real órden de 4 de junio de 1826, no tuvo efecto sin embargo, porque debiendo pagarse de fondos de policía, espuso el superintendente no sufragaban para

(1) De 22 de junio de 1840.

ello. En su vista se suprimió el cuerpo de *celadores reales*, creando por real resolucion de 13 de mayo de 1827, en su lugar una compañía de caballería y otra de á pié, denominadas fuerza de policía de Madrid, á las órdenes del superintendente del ramo, ordenándose al propio tiempo que por el ministerio de la Guerra se formase, un plan general de una fuerza especial separada de la del ejército, que velase sobre los caminos, asegurase la tranquilidad del reino, hiciese respetar la justicia, y persiguiese ó contribuyese á la persecucion de los defraudadores de la hacienda,» siendo fácil ver en esta fuerza, que al fin cesó con aquel régimen político, como el embrion de la institucion escelente, hoy llamada *Guardia Civil*.

CELIBATO: CELIBE. Del latin *cælibatus*. El estado de aquellas personas que nunca han contraido matrimonio. Estas enunciativas envuelven dos conceptos, á saber: el del estado mismo de tales personas, que en el lenguaje comun se llama de *soltería*, y las personas *solteras*: y la idea moral, y otras veces mística, que suele ser inherente, y en la mística, en casos de institucion se supone serlo á dicho estado, y es la de *castidad*, la abstinencia de goces carnales, no solo lícitos, como en el matrimonio, sino ilícitos. En estos conceptos el soltero ó nunca casado, se denomina tambien, segun el caso, *celibato*, *célibe*, *virgen*. Hasta tal punto es dominante en el particular esta última idea y concepto, que, en sentir de los ascéticos y escritores eclesiásticos, *celibato* y *célibe*, se dijeron de *Cælum*, el *Cielo*, como si á él condujera fácilmente, no ya el estado, sino la virtud de la *pureza*, y virtud, que supone. *Dictus est cælebs*, dice San Gerónimo, *quod Cælo dignam vitam agat*: y San Agustin: *cælebs, qui non habet uxorem, vel quæ non habet maritum, qualia sunt numina in Cælo, quæ absque conjuge sunt*.

No creemos aventurado el asentar que nunca el celibato ha sido tratado por la ciencia, ni considerado por las legislaciones bajo un punto de vista universal teórico, ni menos uniforme; y sí bajo puntos de vista particulares, así al santificarlo ó protegerlo, como al restringirlo ó castigarlo. Efecto de esto, de la fuerza del hábito, ó de otras causas, y mas bien de todas juntas, la voz celibato es una de aquellas voces, que no suscita desde luego en el ánimo la idea de su trascendencia capital, identificada con la existencia de la sociedad política, del género humano. Y sin embargo en el órden económico y político, en lo moral y social, en todos los órdenes que se identifican, ó estrechamente se ligan con la existencia, con el destino racional, moral y social de la humana especie, es una de las cuestiones mas capitales y fecundas que pudiera tratarse. La índole y los límites de nuestra obra no permiten abarcarla en esa estension; y antes el rigor alfabético y enciclopédico de ella, hacen que el desenvolvimiento de esta cuestion inmensa, aun reducida á estrechos límites, haya de compartirse entre otros muchos artículos, como los de *bigamia*, *concubinato*, *especie humana*, *género humano*, *legitimacion*, *matrimonio*, *voto de castidad*, etc. En el presente, sin embargo, consignaremos las nociones generales que constituyen como la *ontología* de las teorías científicas de la conservacion y reproduccion de la especie humana, y de tantas otras, que son ó parecen serle opuestas.

PARTE DOCTRINAL.

SUMARIO.

Sec. I. RESEÑA HISTÓRICA: CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL CELIBATO.

Sec. II. DEL CELIBATO CIVIL.

Sec. III. DEL CELIBATO SACERDOTAL Y RELIGIOSO.

§. 1.° *Consideraciones generales sobre el celibato sacerdotal.*

§. 2.° *Leyes, prácticas y decisiones de la Iglesia Católica sobre el celibato sacerdotal y religioso.*

§. 3.° *Disciplina de la Iglesia griega sobre el celibato sacerdotal.*

§. 4.° *Cánones y disposiciones de los concilios españoles.*

§. 5.° *Disposiciones del derecho civil.*
§. 6.° *La continencia se apreció siempre como requisito indispensable, ó relevante al menos, para ejercer las funciones sagradas sacerdotales de todos los cultos.*
§. 7.° *Impugnaciones dirigidas contra el celibato sacerdotal y religioso.*

SECCION I.

RESEÑA HISTÓRICA: CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL CELIBATO.

Es cosa singular, que siendo una ley suprema, inalterable; un hecho histórico además incontestado é incontestable; un precepto divino, en fin, *crescite, et multiplicamini*, el que el género humano, despues de la creacion, no puede conservarse, segun las leyes naturales, sino por la reproduccion generativa de la especie: naciendo el hombre para la sociedad, cuyo elemento constitutivo, absoluto, racional y moral, es la *familia*; sean tantos en número, y tan antiguos, como el género humano, los medios, tendencias, abusos y aun crímenes, que mas ó menos, se oponen á dichos principios cardinales. No hablaremos de los vicios, escesos, y destructores abusos que sonrojan á la humanidad, y la moral reprueba; y no ya la moral, sino aun el egoismo de la propia conservacion. Mencionaremos, sí, los que han sido, ya tolerados, ya autorizados, segun los tiempos, por la opinion y por las leyes, como la *poliviria*, la *prostitucion*, la *castracion*, las guerras; y entre los que han sido, no ya tolerados, ó autorizados; sino *santificados* por la opinion, ó las leyes tambien, las *bacanales*, las *lupercales*, el culto de Venus: y entre los medios, costumbres ó instituciones de ordinario inocentes y puros, la *digamia* ó matrimonio *de uno con una*, antítesis de la *poligamia*, *poliviria*, y escesos antes mencionados; y entre otros, por último, el *celibato* objeto del presente artículo. El *celibato*: tan antiguo y universal; y no ya por depravacion y nefando estragamiento; si no por un principio moral y de virtud, mejor ó peor aprendido: no ya consuetudinario; si no elevado á virtud ó institucion, santificado, preceptuado por las leyes: y no como quiera por las leyes humanas, sino por las divinas. La historia lo columbra ya en el principio de los pueblos: la fábula lo asocia, como sacramento inviolable, tremendo á veces, al culto idolátrico, al de Cibeles, por ejemplo: las leyes civiles le dieron su sancion, harto cruenta, como los romanos en la delincuencia de las vestales: las leyes divinas, en fin, las eclesiásticas, las cristianas, lo han elevado á virtud, á institucion religiosa, lo han colocado, en el Cielo al lado del Altísimo, en la tierra sobre los altares.

Interminable seria el recorrer sobre este punto los testimonios y recuerdos de la historia, de las legislaciones, de la fábula, lo cual no entra en nuestro propósito, mientras no podemos menos de considerarlo en su relacion con el género humano, y con el órden social, bajo el punto de vista de la conveniencia social y de la historia; de la filosofía y de la ley; del derecho constituyente y del constituido.

En cuanto al derecho constituyente, á la teoría, á la ciencia, la ley de la reproduccion de la humana especie se identifica de tal manera con el género humano, es hasta tal punto la base cardinal de la *familia* y de la *sociedad humana*; es, en fin, precepto tan universal, sagrado, de derecho natural y divino positivo, segun dejamos espuesto, que no parece pueda tener escepcion; ni arbitrio los legisladares humanos sobre su sancion, muy anterior y superior á ellos. El celibato, pues, es inconciliable con tales leyes y sanciones, con el precepto absoluto; universal, capital, de la reproduccion.

Y sin embargo, lo hemos visto tolerado, mandado, santificado. La historia, la ley, la autoridad, y autoridad á veces de todo punto irreprochable, desmienten la teoría. ¿Es que el género humano viene destruyendo sus leyes, operando su suicidio desde el principio? ¿Es que la razon universal, la autoridad, la ciencia, los legisladores todos han incidido en error, asi los profanos, como los sagrados?

Ciertamente que no parece conciliarse la ley universal, el precepto divino, la condicion absoluta para la conservacion y existencia del género humano por la reproduccion generativa, con tantos modos de contrariarla. Para la solucion de la cuestion teórica no embarazarian seguramente los medios abusivos, y aun criminales: embarazan, sí, las autoridades, y las prácticas universales, hasta santificadas. Los escritores sagrados esplican y concilian el celibato por virtud con la ley natural y precepto divino de la reproduccion de la especie. En cuanto á nosotros, escritores profanos, como á todos los que lo son, el hecho histórico universal que queda espuesto: la marcha misma de la naturaleza, segun indicaremos: la necesidad de conciliar entre sí la existencia y condiciones del género humano como las de la sociedad política, es decir, la conciliacion de leyes todas naturales, y todas al parecer universales, nos obliga á reconocer y admitir, ora se considere esta cuestion trascendentalísima, como puramente teórica, ora como práctica y de hecho:

1.° que la ley y condicion natural de la reproduccion de la humana especie, aunque universal, no es de tal manera absoluta; que nunca, por ninguna necesidad, ni conveniencia social admita escepcion.

2.° Que no es respecto del género humano *colectiva* y *distributiva*, obligando por tanto *á todos y cada uno, y siempre*, como aquellos principios naturales, que la práctica y la ciencia han formulado con estos términos, y pueden formular con otros: *agendum est ex dictamine rationis: Deus est colendus; parentes sunt honorandi*, etc. La razon humana no concibe escepcion en estos principios, ni en los demás que sean como ellos, aunque pocos rayen en su universalidad, y altísima trascendencia; pero la concibe, la autoriza la fuerza de las cosas, y la contesta la historia de los hechos lícitos, en cuanto á otros principios naturales, que por tanto se dicen respecto de la humana especie *colectivos*; pero no *distributivos* en todo tiempo y caso.

3.° Que en tal supuesto, el principio universal de la reproduccion de la especie en su relacion y trascendencia á la sociedad política, no escluye la autoridad y arbitrio racional de los legisladores humanos:

4.° Que asi se comprende tambien la poligamia, no ya, como abuso, sino como hecho legal; no ya tolerada, sino autorizada en los primeros tiempos del mundo, como su *innecesidad*, sus inconvenientes despues, y por tanto los multiplicados medios de atenuar ó conducir las consecuencias de aquel principio, generalizada ya la especie, siendo la mas insigne, la general, y santificada la de *digamia*, ó union conyugal de *una con una*, y todavia con las trascendentales restricciones de los impedimentos *impedientes* y *dirimentes*, de las penas de la *bigamia*, aun *sucesiva*, como en lo canónico, y sobre todo de lo *indisoluble* del vínculo, ó esclusion del divorcio.

5.° Y en consecuencia de lo dicho, que el celibato entra en el número de estos medios, y por tanto respecto de él, sucede con la ley general de la reproduccion de la humana especie lo que con otros principios y leyes naturales, en que la razon universal, la conveniencia y necesidades del mismo género humano, han hecho establecer y autorizado la conocida teoría de la *bondad absoluta y relativa* de dichas leyes, en que se encierra la conveniencia necesaria de la *aplicacion absoluta y relativa* tambien, es decir, *prudencial* de las mismas, la *obligacion relativa y absoluta* en fin. Y es que siendo las leyes naturales en este punto un *medio*, aunque cardinal, y la existencia, desarrollo racional y moral, el perfeccionamiento del género humano, el *fin*, hay que subordinar á este, y esplicar por él, asi las leyes y condiciones de *ser* del mismo género humano, como las del *modo de ser*, y el *destino* ó *fines providenciales por que es*. Los legisladores, pues, han podido favorecer, restringir, ó prohibir el celibato, no por medios arbitrarios, destructores de la sociedad y de la especie, ni menos inmorales y que degraden la naturaleza; sino por razones y causas justas, y de conveniencia general que asi lo persuadan, segun las exigencias imperiosas del tiempo, de la sociedad, y del

mismo género humano. En otro caso, llevando las cosas por un rumbo absoluto y opuesto, habrá que culpar, no ya á la razon universal, á las legislaciones humanas y divinas de todos los tiempos; sino á la misma naturaleza: habria que argüirla de contradiccion en no hacer á todos igualmente aptos, y en todo caso aptos, para la reproduccion de la especie: en su admirable parsimonia de no hacer aparecer la aptitud física, tan fácil en el abuso, sino cuando tambien aparece el desarrollo de la razon; de atenuar su vigor, cuando la razon declina.

Mas hemos hablado de restringir y aun prohibir el celibato; y esto tambien lo han hecho las legislaciones; y no con menos escesos, ni abusos. Pero hemos desenvuelto ya la teoría, la árdua cuestion de derecho constituyente sobre el principio natural y precepto divino de la reproduccion de la especie, que es lo que principalmente nos propusimos en esta seccion; y en la siguiente aplicaremos la historia de las restricciones al derecho constituido sobre el celibato.

SECCION II.

DEL CELIBATO CIVIL.

Usamos de la enunciativa *celibato civil*, en oposicion á la de *celibato sacro ó sacerdotal y religioso*.

Si por lo espuesto en la seccion anterior se nos pudiera juzgar favorables al celibato, en todo caso y de un modo absoluto; es todo lo contrario. Los autores de la ENCICLOPEDIA llevan la opinion de que *el estado natural del hombre*, de este ente esencialmente *racional y moral, sociable* por *necesidad* y por *destino*, y por tanto, el primero y superior entre los seres criados: el único que puede realizar el hecho *providencial* de la *sociedad humana*; el estado natural, decimos, de este ser privilegiado, no es el celibato ciertamente; sino la *sociedad conyugal*, la *familia*. Reconocemos, sin embargo, el celibato, como *virtud*: el celibato como *institucion*, cuando tal sea el conjunto de razones, y tales estas, que basten á justificarlo: pero hay un género de celibato vituperable á veces, otras hasta criminal, pernicioso siempre, ó en la mayoría de los casos, y contra ese nos declaramos. Es este el celibato por *depravacion y estragamiento* unas veces, otras por *egoismo*, por *sistema*, *ú otros motivos*; *pero pernicioso* siempre, pues no le asisten razones que la razon universal, ni el buen sentido hayan hallado plausibles: tal es el celibato *sistemático profano*. Contra él se han declarado tambien los pueblos y las naciones, como pasamos á reseñar, diferenciando el celibato civil en tres especies, que sino estuvieren en la tecnología, lo están ciertamente en la naturaleza de las cosas, en la sociedad y en la historia, á saber: celibato *necesario*, celibato *sistemático*, y celibato por *institucion*.

Celibato necesario. No es este por regla general el objeto de nuestras censuras, aunque sí en algunos casos. Si la necesidad, esto es, la incapacidad es *física*, *involuntaria*, no habrá que culpar en esto sino á la *naturaleza*, al *azár*, ó á la *desgracia*, lo cual puede requerir mas bien compasion, que inculpacion. Si la incapacidad, *física ó moral* para la union conyugal, fuere voluntaria en la causa, ó en el efecto, las leyes deben desplegar en ese caso toda la severidad de su sancion penal, pues además de *celibato*, voluntario en la causa y en el efecto, habrá de ordinario un crímen comun. Tal sucede, por ejemplo, en la castracion voluntaria por causa de especulacion. (Véase CASTRACION,) y se comprende en otros varios casos.

Hay una incapacitacion *moral* que no es menos digna de atencion, ora sea voluntaria, ora involuntaria. Tal es la de aquel número inmenso de personas, á las cuales retrae de la union conyugal la adversa fortuna, la nulidad de recursos y facultades, por el temor pundonoroso de no hacer desgraciada á una consorte, y no mas felices á los hijos de aquella union. Este género de causa moral puede ser tambien voluntaria, y no lo es pocas veces: por disipacion, vagancia, prodigalidad, acercándose mucho en estos casos, y en muchos identificándose con el, al celibato sistemático de que hablamos despues.

En el primer caso, siendo la causa *involuntaria*, incumbe á la sociedad política el superarla; en el segundo, siendo *voluntaria*, *reprimirla*, aplicar con severa perseverancia su sancion penal: allí, difundiendo la ilustracion relativa, velando sobre las costumbres, fomentando la industria y el amor al trabajo, premiando la aplicacion, estimulando á las uniones lícitas: en el caso opuesto desterrando la ociosidad, enfrenando el vicio, multiplicando los gravámenes de la soltería, asi como las ventajas del consorcio. Ciertamente que no importan tanto á la sociedad política los muchos, como los buenos ciudadanos. Sabido es ademas, que la poblacion se nivela naturalmente, y sin estímulo especial, con los medios de subsistencia; asi como la ociosidad, la vagancia y las malas pasiones se previenen con la educacion y la ocupacion: la economía política es sobre todo ello una auxiliar admirable de la moral.

Celibato sistemático. Hemos esplicado ya esta funesta decepcion social. Es el celibato de aquellas personas, que teniendo aptitud natural, y medios para mantener una consorte, por disipacion, por egoismo, ó por cualquier otra de las causas indicadas al principio de esta seccion, menos por voto, ó motivos de piedad, rehusan el matrimonio. Este es con razon, y siempre ha sido y será el objeto de la censura universal. «El celibato, dice un autorizado escritor, Merlin, ha sido mas bien tolerado, que aprobado por las naciones. La mayor parte de los legisladores políticos lo han mirado, como un mal funesto, digno de ser castigado con severas penas.....: es pernicioso á los Estados por la corrupcion que difunde.....: el orígen de un sin número de vicios es el gran número de celibatos; y á pesar de las razones con que estos pretenden escusar su conducta, el celibato es contrario al bien público.» «Cuanto mas se disminuye el número de matrimonios que puedan realizarse, dice Montesquieu, mas se perjudica á los ya celebrados; porque cuanto mayor es el número de los célibes, tanto menor es la fidelidad en los matrimonios; asi como es mayor el número de robos, cuanto mayor es el número de los ladrones.» Nosotros añadiremos aun, que la prostitucion, el amancebamiento, el concubinato, el lamentable recurso legal de los *lupanares*, y en espresion de nuestras leyes, de las del inmortal código de las Partidas, de las *puterías*: las razas compadecibles y numerosas de hijos sin nombre, ó de un nombre bochornoso, como los bastardos, los espúreos, los adulterinos, incestuosos, etc.: los crímenes referidos, y degradantes de la dignidad humana: los de *alcahuetes*, *rufianes*, *bestialidad*, *sodomía*, y otros, radicalmente destructores de la humana propagacion, y que el rubor y la pública decencia, diremos con Montesquieu, nos obligan á preferir, debidos son principalmente al celibato *sistemático*; no moderado en sus escesos por ninguna virtud; sin estímulo heróico como el *religioso*.

Tremenda es en este punto la legislacion de todos los pueblos, aunque se realice lo que hemos enunciado al principio de esta seccion; y es que en vano se buscaria sistema, ni espíritu uniforme, en la represion del celibato. Veremos que las leyes relativas á este punto son en general como de *circunstancias*, *transitorias* por la calidad del motivo, nunca, ó en raro caso, sobre el doble punto de vista de la *propagacion de la especie*, y la *moralidad*, que es y debe ser en este punto el verdadero, filosófico, y social fundamento del derecho *constituido*, como lo es del derecho *constituyente*, cualquiera que sean, por otra parte el uso, ó el abuso que de él hayan hecho las sociedades, y los estravíos del género humano. Si alguna vez hallamos consultado, con mayor amplitud á lo menos, este doble objeto del derecho constituyente, es en las leyes de Moisés. Atendiendo en ellas á realizar la promesa divina de que la raza de Abrahan igualaria en número á las *estrellas del cielo* y *á las arenas del mar*, se tomó casi en riguroso sentido el precepto divino tambien *crescite, et multiplicamini, et replete terram*: y consultando el fin moral, los varones debian contraer matrimonio luego de salidos de la pubertad, á los 17 años, adelantándose asi á los escesos de la edad por la naturaleza y por el clima, y merecia re-

probacion el haber llegado á la edad de 20 años sin casarse. Se establecian premios y honores para los casados, de que no gozaban los célibes: durante el primer año del consorcio eran libres aquellos del servicio de armas, y fatigas de la guerra (1). Habia premios y alabanzas públicas para los que tenian sucesion, y esto fué tenido en tanto honor, que llegó á consagrarse como axioma, *quicumque adjecerit animam unam Israeli, quasi mundum ædificat.* Habia *infamia* por último, no ya para el célibe; sino aun para la esterilidad, como es sabido. Los axiomas de costumbres y de doctrina no podian ser mas terribles en la raza hebrea: *homo, cui non est uxor, non est homo: quicunque negligit præceptum de multiplicando humano genere, habendus est homicida.*

Los pérsas asignaban premios tambien segun el mayor ó menor número de hijos, con la inmoralidad, sin embargo, de poder haber estos en mancebas ademas de la muger propia.

Entre los atenienses prevalecieron las mismas costumbres: se reconocia una *acusacion pública*, ó popular contra los célibes, que no podian aspirar á los cargos de oradores, ni de generales de las armas; mientras habia premios para los consorcios y para los que tenian hijos, aun cuando los hubiesen de mancebas. Sócrates mismo, loado por casto, recurrió á este medio, por librarse del deshonor; en lo que se vé desde luego que si se consultaba por un lado el principio de la propagacion de la especie, se olvidaba, por otro, ó se ofendia la moral.

Leyes y costumbres análogas dominaron en Esparta. El que tenia hijos era relevado segun el número de ellos de las fatigas de la guerra. *Lex illis est, ut qui tres genuerit liberos, ab excubiis, qui quatuor penitús immunis sit* (2); mientras habia penas señaladas, no solo contra el celibato, sino contra los que casaban tarde, ó casaban mal, no pudiendo esperar hijos. *Spartanorum lex pœnas statuit, primam non ducenti uxorem; alteram serò ducenti, tertiam denique, ac gravissimam, malé ducenti* (1). Los célibes, segun Plutarco (2) eran escluidos de los juegos gimnásticos: eran compelidos á rodear el foro desnudos en ciertas ocasiones durante el invierno; y á cantar versos é invectivas compuestas contra ellos: los que casaban tarde, en fin, eran traidos en ciertas festividades ante las aras de los dioses, y allí azotados por las mugeres.

En un principio los germanos no necesitaron establecer penas contra el celibato, coetáneo por lo regular de la corrupcion y licencia de costumbres, de que por mucho tiempo les preservaron la sobriedad y la ocupacion. Cuando al fin les amenazaron tambien aquellas plagas del género humano, adoptaron la jurisprudencia penal de que no pudiesen testar, ni recibir por testamento, cayendo en comiso en otro caso lo mandado ó dejado, los que llegasen á la edad de 60 años, hombres ó mugeres, sin haberse casado, y ni los viudos que hubiesen permanecido por 30 años en este estado (3).

Llegamos por fin al pueblo, grande en la gloria y en la degradacion, en las hazañas y en los escesos: al pueblo romano, cuyas costumbres, degenerando de dia en dia, llegaron á no poder tolerar, segun la bella espresion de Heineccio, *ni los vicios, ni su remedio.* Desde luego puede tenerse por cierto que en este estado de cosas, el celibato habria llegado á su mayor esceso. Y con efecto, habiendo sus primeros Césares, alarmados por ello, y por la espantosa pérdida de gentes ocasionada por las recientes luchas, mandado formar *censo*, ó confrontacion del número de casados y de célibes, resultó mayor el de estos, y entonces vieron la luz pública las célebres leyes *Julia*, por Julio César, y *Papia Popéa* en tiempo de Augusto, *de maritandis ordinibus*; en vista de las que no haremos mérito de las varias disposiciones anteriores, ya desde Numa, sobre la misma materia; como lo haremos circunstanciado de la

(1) Deuteronómio, cap. 20, vers. 7: cap. 25, v. 5.
(2) Aristóteles, Política, lib. 2, cap. 9.

(1) Ariston, sermon 73: Plutarco, en *Liysondro*, al final
(2) En el resumen de las leyes de Licargo.
(3) Heineccio, *Ad legem juliam, et papiam poppeam*, lib. 1, cap. 2, §. 4.

ley *Julia*, como refundida en la ley *Papia Popéa*.

De esta dice Heineccio, en la estensa é ilustrada esposicion de ella, que apenas la capital del orbe conoció una ley mas célebre: *Legem Papiam Poppéam, quâ vix ulla in principe terrarum civitate celebrior extitit.....* Y con todo esta la ley célebre tuvo por principal objeto, sobre favorecer al Erario público, fomentar los matrimonios, reprimiendo el celibato. Llamóse por ello tambien *lex marita, lex nupcialis, lex de maritandis ordinibus, lex sobolis procreandæ.* En otra parte reseñamos su historia; y el modo con que ha sido, no *hallada*; sino *compuesta* ú ordenada de los fracmentos históricos y jurídicos, y de las sentencias de Ulpiano, Cayo, Paulo, Marciano, Marcelo y otros jurisconsultos, variando empero en el número de los capítulos de la misma, pretendiendo unos haber sido 25, mientras otros los hacen subir á 35; otros, en fin, hasta 40. De ella proceden las multiplicadas leyes que sobre el particular contiene el Digesto, relativas á las condiciones irritantes *de non nubendo* en los testamentos y otras análogas, de que asimismo hacemos mérito al tratar de esta ley.

Ahora nos bastará indicar, para el propósito del presente artículo, que segun el capítulo 3 de la misma, toda persona púber, estaba obligada á contraer matrimonio, esceptuados los varones de 60 años, las mugeres de 50, y los espadones. *Omnes puberes, virique potentes, matrimonium, liberorum quæsundorum causâ, inire tenentur. Sexagenarii masculi, quinquagenariæ fœminæ, et spadones, à pœnis hujus legis liberi sunto.*

El cap. 6 era todo penal. «*Si qui, scientes, dolo malo adversus hanc legem coierint, nec vir, nec uxor, nec socer, sucrusve, intelliguntur.* Liberi quæsiti, native legitimè, hæredes sui ne sunto, neve parentibus prosunto. Neque hæreditatem, quæ eis lege obvenerit, legatumve, ipsi conjuges, neque inter se quidquam capiunto; mortuaque muliere, dos caduca esto.»

«Si alguno, decia el cap. 28, impusiere al heredero, ó al legatario, la condicion de celibato, ó de viudedad, uno y otro sean libres de tal condicion, y reciban la herencia ó el legado.»

«Los célibes, añadia el 36, que no se hubieren casado dentro de cien dias de publicada esta ley, no pueden recibir herencias, ni legados por testamento, como no sea de sus parientes próximos.»

La ley fué mas pródiga en premios al matrimonio y por el número de hijos, que se verá habia sido en las penas, lo que reservamos para en el artículo Matrimonio. Notaremos, si, en comprobacion de una observacion nuestra anterior sobre que nunca ó rara vez se habia legislado acerca del celibato, abarcando y teniendo por única mira el doble principio *de la propagacion de la especie* y de la *moralidad* y *pureza de las costmbres*, que por el cap. 4.° de la ley se autorizaba á tener concubinas, con tal que fuesen mugeres *no honestas*, á los que no podian contraer matrimonio conforme el tenor de ella.

Todavía vemos reproducidas, si bien mas ó menos modificadas, las prevenciones legales contra los célibes civiles, por los emperadores ya cristianos, en lo cual, no creemos necesario detenernos, probado nuestro propósito en la presente seccion, si bien volveremos aun sobre la materia al tratar en la siguiente del celibato sagrado.

Sin que se comprenda por qué, nuestras leyes no han imitado la severidad de las romanas contra el celibato civil; aunque sí en favor del matrimonio y del número de hijos, como decimos en su artículo. Pudiera atribuirse á que, mejoradas las costumbres de los pueblos modernos por el cristianismo, el matrimonio era apetecido y menos frecuente el celibato sistemático. Tambien al alto aprecio en que por consecuencia ha sido tenida la virtud de la *castidad*, y favor dispensado al celibato sacro ó por motivos de religion, resultando de todo esto una especie de prevencion favorable, y suposicion piadosa de pureza en el estado de celibato, aun civil. Y sin embargo, la esperiencia atestigua contra el celibato *sistemático*; y las leyes no han estado lejos de pensar asi, cuando las vemos establecer ventajas, honores y franquicias, que induzcan al matrimonio. Por otra parte

atestiguarán asi mismo contra la indicada prevencion benévola, el concubinato y amancebamientos, la organizacion de lupanares, y mil otros medios de prostitucion, las multiplicadas clases de hijos espúreos, y tantos otros comprobantes de una sociedad corrompida. La ciencia de la civilizacion, la verdadera politica, echará siempre de menos, en las legislaciones cristianas sobre todo, el principio *económico-moral* de reprimir el celibato sistemático, A nadie podrá ocurrir que aboguemos por medios directos: *el amor no se manda*: ¿ni quién podria pensar en uniones forzadas?: y ¿cuáles serian sus resultados? Pero, aunque árdua la materia, permite sin dificultad medios indirectos, como hemos visto los han aplica do antes las naciones: estímulos y ventajas para las uniones lícitas: privaciones de ciertos honores y preeminencias sociales para los célibes: gravámenes tambien en gavelas y tributos. ¿Qué violencia habria en que al varon robusto, y con facultades para sostener una familia, que llegase á la edad de 30 años sin haber contraido matrimonio, se impusiese una prestacion especial en favor de hospicios, casas de espósitos, y de misericordia; para educacion y sostenimiento de huérfanos desvalidos, cuya tutela y cuidado incumbe á la sociedad? Estos, como medios especiales, directos, y que por tanto llegaban á ser individuales; sin perjuicio de los medios generales indicados ya, y no por cierto menos eficaces, de mejorar las costumbres, difundiendo la ilustracion y sanos principios de pura moralidad, reprimiendo en vez de fomentar, el *celibato* lamentable de la prostitucion, persiguiendo la ociosidad y la vagancia, honrando el trabajo, fomentando la industria, etc.

En vano se diria que el celibato conduce para que ciertos cargos puedan ser desempeñados con mayor asiduidad é independencia. No admitimos escepciones mas que en la vida monástica, en el sacerdocio, y en la profesion militar. En ninguna otra cosa, profesion, ni cargo hay garantía, como la *de la familia*. ¿Con cuán decidido y hasta tierno afan no es laborioso el que trabaja y adquiere para sus hijos? ¿Hasta qué punto no es mo-

rigerado el que tiene una consorte, que con él comparte las amarguras, como las dulzuras de la vida, y en quien vé por otra parte, su *providencia doméstica*, y la madre de sus hijos? En el admirable mecanismo del hombre, ¿cuántas fibras esquisitas se entierran con el cuerpo sin haber vibrado una vez en la vida, cuantos resortes del corazon humano están fuera de accion, en el que no ha esperimentado ni conoce, ni las dulzuras, ni las penalidades de la familia? En esos casos lamentables que cubren de oprobio y de dolor á una familia, y á veces de baldon al género humano, en el estupro y pérfido engaño de una hija inocente y honrada; en la infidelidad de una consorte, en los crímenes de violacion, de rapto, de parricidio: cuando sea preciso pedir justicia contra el homicida de un hijo, de una esposa querida, de un esposo: cuando haya que lamentar la horfandad de una numerosa familia; clamar contra el cómplice de ello, ó defraudador de su fortuna: al apreciar los estímulos que han determinado á un padre á procurarse, delinquiendo, pan para sus hijos amenazados de perecer: ó bien á lanzarse, delinquiendo tambien, ó escediéndose en su defensa, contra el matador de su hijo, contra el violador de su hija, el matador de su esposa, ó de su propia honra: ni en estos, ni en infinitos otros casos, que no son menos, que casi todos los que constituyen la vida social, ¿cómo ha de ser lo mismo declamar, pedir amparo ó represion ante un juez, ó autoridad, libre de la mayor parte de los lazos de familia y estraño á ellos; que al padre de familias, á quien se le hace preveer en el hecho, ó tal vez se le cuenta la historia, el baldon ó el peligro de la suya propia? ¿Y cómo prescindir de los peligros y estímulos bastardos que por la inversa solicitan al funcionario célibe en elevados cargos y posiciones, y aun en cargos y posiciones humildes? Si la familia es una solicitud perenne para un buen padre y jefe de ella, tambien esta lleva en sí mismo el consejo, tambien perenne, que ilustra, impele saludablemente y retrae, el gérmen de infinidad de sentimientos nobles. Pero ¿hasta qué punto no es una perenne solicitud y so-

licitud de otro género, el celibato sistemático; mientras en sí es estéril y peligroso, sin mas estímulo para lo bueno que la conciencia y pundonor individual? Por otra parte casi no se concibe que el buen padre de familias pueda ser perniciosamente egoista, ni aun contra sí mismo. En una sociedad bien organizada, en fin, creeríamos que al hablar de garantías personales y cargos públicos, y en casi todos los actos sociales de trascendencia deberia restablecerse la fórmula empleada por los censores romanos: *¿ex sententia tua uxorem habes?*

Venimos hablando de un celibato que por sus motivos y fines, que hemos espresado, es siempre vituperable. Hay sin embargo celibato civil que proviene meramente de cierta *pusilanimidad*; de un pundonor exagerado, y meticuloso, respecto de los deberes y cargos del matrimonio. Lejos estamos de confundir este celibato con el anteriormente espuesto, por *depravacion* y *estragamiento*, por *perversion* de sentimientos y principios morales, por *vagancia* y *disipacion*, por *egoismo* punible: pero, como muchas veces se confunde con este, y en los efectos ostensibles coinciden no poco; mereciendo mas suave censura, reclama tambien la atencion del legislador, y la represion indirecta de la ley. Véase **MATRIMONIO**: Heineccio ad legem Juliam, et Papiam Poppeam, tom. 8.° de la coleccion de sus obras: Montesquieu, Espíritu de las leyes, lib. 23. cap. 19: y V. **AMANCEBAMIENTO: CONCUBINATO.**

SECCION III.

DEL CELIBATO SACERDOTAL Y RELIGIOSO.

Podriamos decir del celibato *sagrado* y del *religioso votivo*; como tambien comprender á uno y otro bajo la fórmula comun de celibato *místico*. Espresa el primero el estado de aquellas personas que espontáneamente renuncian al matrimonio, para poder llenar con mas pureza y perfeccion los sagrados deberes del sacerdocio: el segundo el de aquellas que, ya en el siglo, ya en corporaciones religiosas, se ligan espontáneamente con *voto de castidad* para mejor poder servir á Dios y practicar la virtud. Se vé, pues, que en ambos casos el motivo es *místico*, esto es, divino, sagrado, religioso, y de este género de celibato trata la presente seccion, aunque mas principalmente del *sacerdotal* y *monástico*.

§. 1.° *Consideraciones generales sobre el celibato sacerdotal y religioso.*

Grandes son las luchas y controversias sostenidas sobre el celibato *místico*; mientras ¡cosa singular! no son tan empeñadas, ni con mucho, las relativas al celibato *sistemático*, y lo que es mas, á la *prostitucion*, y otros vicios, que, no como quiera no propagar convenientemente la raza humana, sino que la *esterilizan*, *vician* y *degradan*, asi como degradan al género humano en sus cualidades esenciales y supremas de *racional* y *moral*. Naciones podriamos citar en que, declarada guerra implacable al celibato eclesiástico, y aun al religioso en general, no hay sancion penal alguna, ni aun censura contra el celibato sistemático; y en que, con esmero y voluptuosa solicitud se organizan y sostienen los *lupanares*: se destruyen con encono, hasta sangriento, las aras de Vesta; y se erigen sin repugnancia á la hedionda lujuria.

Lejos de nosotros el establecer antítesis entre el celibato y el matrimonio. Hemos declarado que la union conyugal, *la familia*, es el verdadero *estado natural* del hombre: la Iglesia católica lo ha declarado ademas *sacramento*: añadiremos aun; el matrimonio es el *estado normal* del mundo *moral* y *social*; mientras el *celibato* religioso es una escepcion; el *sistemático* un *abuso*, y á veces hasta un hecho punible; y en todo caso repetiremos con San Pablo, *melius est nubi, quam uri.* Pero la polémica no se establece entre la regla y su escepcion; sino entre aquella y su *infraccion*, y dejamos demostrado en la seccion primera, que el precepto natural de la reproduccion cae por su índole bajo *la prudencia del género humano y de sus legisladores*; y que si algun celibato pu-

diera tolerarse, autorizarse y aun santificarse, seria con preferencia á todo otro el eclesiástico y religioso, que alejando de sí todo egoismo, hasta el *egoismo santo* de la quietud del alma, de mejor asegurar para sí la vida eterna, hace renunciar á los placeres de la carne, para mejor poder consagrarse al servicio de Dios y de los demás, del mismo género humano. Añadiremos en conclusion, que de establecerse la cuestion entre estremos opuestos, entre el *celibato místico* y la sentina y destructora pestilencia de los vicios carnales, de la prostitucion y escesos no menos nefandos, de la *poligamia*, *poliviria*, *amancebamiento*, *concubinato* y aberraciones análogas del principio de la reproduccion de la especie, ni siquiera puede establecerse punto de comparacion, ni cuestion por lo tanto. Lo primero raya en un *heroismo*, mas propio de ángeles que de hombres; lo segundo en una *degradacion bestial*. Hay entre estos dos estremos, aunque en menor escala, la misma diferencia *antitética*, y realmente divina, sobrenatural en uno de sus estremos, que entre la Religion cristiana y las creencias opuestas: aquella declara la guerra y convierte en crímenes, hasta con sanciones eternas, á las pasiones y vicios degradantes; estas les erigen aras y culto.

Lejos de nosotros, sin embargo, el patrocinar estremos. Los autores de la ENCICLOPEDIA ESPAÑOLA correspondemos, con decision y sobrehumano consuelo, á la creencia católica. Fieles á este principio, aun cuando no tuviéramos conviccion científica, política y religiosa, sobre la escelencia y conveniencia *religiosa* y *política* del celibato sacerdotal, hablariamos de él con respeto, aun por solo el hecho de autorizarlo y mandarlo la Iglesia; pero tenemos conviccion. Aun con esceso, si es que de ellos no puede librarse el género humano, entre la inmunda degradacion á que arrastra el placer carnal, no moderado, ni por la ley, ni por la conciencia, y el *suplicio voluntario*, la *tortura ascética* del *celibato religioso*, estariamos por este. No autorizariamos, sin embargo, aunque por la intencion disculpariamos, sin aplaudir, segun lo hizo la Iglesia católica, medios estremados, como el aplicado en su misma persona por Orígenes y otros. En los párrafos sucesivos esplicaremos mas ámpliamente esta cuestion, segun el derecho constituido, volviendo aun á recaer á su final sobre el constituyente reducido á polémica.

§. 2.° *Leyes y decisiones de la Iglesia católica acerca del celibato.*

Entre los católicos tienen desde tiempos remotos la obligacion de guardar el celibato los eclesiásticos ordenados *in sacris* y los religiosos; estos por voto particular, ademas de las órdenes sagradas; aquellos, es decir, los obispos, presbíteros, diáconos y subdiáconos, por una ley general recibida y practicada universalmente en la Iglesia latina, aunque no siempre fueron comprendidos en ella los subdiáconos.

La religion cristiana, conformándose con la opinion casi unánime de las naciones civilizadas antiguas y modernas, mira el celibato como un estado de perfeccion, el único apropósito para ejercer convenientemente el santo y elevado ministerio del sacerdocio. Lleva consigo privaciones, sin duda, es un *sacrificio humano*, como dijo San Bernardo; pero este sacrificio puede cumplirse por las fuerzas del hombre meramente, y mas aun con el auxilio divino, que nunca faltará á los que quieran acercarse con fé á la divinidad para rendirla puro y santo culto.

En todas épocas ha sido duramente impugnado el celibato religioso. Los heresiarcas, en los primeros siglos de la Iglesia, y los protestantes despues, le combatieron como opuesto á las Sagradas letras y á la naturaleza misma: los filósofos del siglo XVIII siguieron sus huellas en esto, como en todo.

¡Vano trabajo! Hay en la Iglesia latina una cadena no interrumpida de preceptos, de tradiciones y de leyes, que arranca del tiempo de los apóstoles, llega á nuestros dias, y se estenderá hasta el fin del mundo como la misma Religion católica, en cuya honra y para cuya perfeccion existe el celibato.

Ante todo, demostraremos la verdad de esta doctrina, y despues trataremos de las impugnaciones.

Jesucristo quiso nacer de una vírgen y dijo: *Bienaventurados los limpios de corazon, porque ellos verán á Dios* (1). *Hay eunucos que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Entiéndalo quien pueda* (2). Y esclama en otra parte: *El que dejase su casa, sus hermanos, sus padres, su muger é hijos, sus bienes á causa de mi nombre, recibirá el centuplo y alcanzará la vida eterna* (3).

Los apóstoles confirmaron y estendieron con su predicacion las palabras de Jesucristo. *Bonum est homini*, dijo San Pablo, *mulierem non tangere* (4), es bueno para el hombre abstenerse de toda relacion carnal con la muger; consejo que cuadra mas especialmente á los eclesiásticos. «No es un mandato, añade, el que os doy, sino un consejo; quisiera que fuéseis todos como yo, mas cada uno recibe de Dios el don que le conviene. Digo, pues, á los que están en el celibato ó en la viudez *(non nuptis et viduis)* que les conviene permanecer como yo; el que se casa con una vírgen, hace bien; pero el que no se casa hace mejor (5).» Y mas adelante: «El casado se ocupa en las cosas de este mundo, procura agradar á su esposa y tiene dividida su atencion; mientras el que vive en el *celibato* no tiene otro cuidado que el de servir á Dios y agradarle (6).» Hablando de los obispos quiere que sean irreprensibles, continentes (7), que no hayan tenido mas que una muger, y que esta fuese asimismo continente (8), refiriéndose en estos pasajes, como siempre, á la continencia absoluta.

Los cánones de los apóstoles suponen el celibato establecido respecto de los obispos, presbíteros y diáconos, puesto que el vigésimo quinto solo permite el matrimonio á los cantores y á los lectores; y las constituciones apostólicas prohiben espresamente á aquellas tres clases de eclesiásticos que contraigan este vínculo profano despues de la ordenacion. Prescindimos de si una y otra coleccion están escritas por los mismos apóstoles; pero no puede negarse que se encierran en ellas las reglas y las prácticas que observaron y trasmitieron tradicionalmente en los primeros siglos, si bien las constituciones apostólicas aparecen despues alteradas y aumentadas.

Quede, pues, evidenciado que la ley de continencia fué establecida, como entonces podia serlo, desde los tiempos mas remotos para los sacerdotes cristianos.

Los adversarios del celibato, despues de penosas investigaciones, solo han podido demostrar que hubo eclesiásticos que habian contraido matrimonio antes de recibir los órdenes mayores; pero nunca pudieron alegar datos verdaderos y aceptables para probar que la Iglesia haya autorizado en ningun tiempo á los obispos ó á los presbíteros consagrados al servicio de su ministerio, ni para contraer matrimonio despues de la ordenacion, ni para usar del consorcio contraido antes de ella.

La doctrina de Jesucristo se estendia con una rapidez maravillosa: habia en la Iglesia naciente gran penuria de sacerdotes y ministros: escaseaban los célibes entre los judíos y los gentiles convertidos, y en tan especiales circunstancias hubo de tomarlos por necesidad entre los hombres casados, sábios y virtuosos, como lo atestigua espresamente San Gerónimo: *Eliguntur mariti in sacerdotium, quia non sunt tanti virgines, quanti necessarii sunt sacerdotes* (1). Pero no por esto se derogaba la ley de continencia, puesto que una vez promovidos al sacerdocio, renunciaban para siempre al uso del matrimonio.

Podrá haber habido inobservancia del precepto en una localidad ó un tiempo dados: podrá haberse relajado pasajeramente, como

(1) Beati mundi corde, quoniam ipsi Deum videbunt. San Matth, c. 5.
(2) Sunt enim eunuchi propter regnum cælorum. Qui potest capere, capiat. Id. c. 19.
(3) Et omnis qui reliquerit domum, vel fratres aut sorores, aut patrem, aut matrem, *aut uxorem*, aut filios, aut agros propter nomem meum, centuplum accipiet et vitam æternam possidebit. Matth. 19, 29 y en casi iguales palabras San Luc. 14, 26.
(4) I cor. c. 7.
(5) Ibid., id.
(6) Ibid. 32.
(7) Tit. c. 1.
(8) I Timoth. iii, 21.

(1) S. Hier. adv. Jovin. lib. 1.°

en otras materias, el rigor de la disciplina; pero nunca la Iglesia ha autorizado, ni dispensado esas vituperables infracciones, hijas de la debilidad de los prelados y de la miseria de los tiempos.

Demuéstranlo palpablemente la doctrina de los Santos Padres, los cánones de los Concilios y las decisiones pontificias.

El concilio de Neocesárea decia en su primer cánon: «El presbítero que contrajere matrimonio, sea destituido de su carácter sagrado. Si falta á la castidad ó incurre en adulterio, sea igualmente destituido y condenado á penitencia.»

El general de Nicéa, celebrado en 325, «prohibe absolutamente (1) á los obispos, á los presbíteros, á los diáconos y á todos los demas clérigos que tengan en su compañía muger alguna estraña (*mulierem introductam*) (2), y les consiente solo vivir con su madre, su hermana, su tia ú otras que no den lugar á la menor sospecha.» Claro es que este concilio fortalecia y sancionaba la prohibicion de contraer matrimonio despues de la ordenacion y usar del contraido anteriormente, pues de otro modo hubiera enumerado la muger propia y legítima como la primera que podia vivir en compañía de los eclesiásticos, al paso que la escluye con su silencio de una manera terminante.

El de Calcedonia (3) reiteró los mismos preceptos y su sancion penal de una manera decisiva.

El iliberitano celebrado al comenzar el siglo IV, ordenó (4) que se abstuvieran de sus mugeres, y quedasen sujetos al celibato los obispos, presbíteros, diáconos y todos los clérigos (5) consagrados al santo ministerio, y que á los contraventores se les privase de los honores eclesiásticos.

El Papa San Siricio, recomendando á los eclesiásticos en su epístola á los prelados de Africa el deber de continencia, les decia: «no os doy un precepto nuevo; os reitero el cumplimiento de los mandatos apostólicos.» *Non nova præcepta....., sed..... quæ apostolicâ et Patrum constitutione sunt constituta* (1). El mismo pontífice, dirigiéndose á Himero, prelado de Tarragona, llama crímen al uso del matrimonio legítimamente contraido antes de la ordenacion, declara á sus autores incapaces de todo honor eclesiástico y de acercarse á los sagrados misterios, y á los que sigan su ejemplo indignos de indulgencia (2).

En el segundo concilio de Cartago, celebrado en el año de 390, se espresa que la prohibicion hecha á los sacerdotes de usar del matrimonio, es conforme á lo que los apóstoles enseñaron y á lo practicado por toda la antigüedad; *quod apostoli docuerunt, et ipsa servatur antiquitas* (3). En el quinto, que tuvo lugar en el año 398, se impuso á los, que no la observaran, la pena de destitucion del oficio eclesiástico (4).

El de Turin, reunido en 397, declaró asimismo que los clérigos que hubiesen persistido en la vida conyugal, no pudieran ser ascendidos á los órdenes superiores (5).

El Toledano primero comprendió á los subdiáconos en la obligacion del celibato (6). El Gerundense (7) y el Toledano segundo (8) prohibieron de nuevo á los ordenados despues del matrimonio, que viviesen conyugalmente con sus mugeres.

El Papa San Leon declaró terminantemente, mediado el siglo V, que la ley de continencia obligaba lo mismo á los ministros inferiores casados antes de recibir los órdenes sagrados, que á los obispos y presbíteros; y que á los legos y lectores les era lícito usar del matrimonio antes de llegar á los órdenes mayores; pero no despues de haberlos recibido (9).

San Gregorio Magno prohibió á los obis-

(1) Cán. 3.
(2) Véase Agapetas.
(3) Cán. 10.
(4) Cán. 33.
(5) Algunas versiones de este cánon solo hablan de los tres primeros órdenes.

(1) Decret. S. Syric., c. 7, Epistol. Sinod., c. 7.
(2) Decret. S. Syric. c. 7.
(3) Concil. Carthag. II, can. 2.
(4) Concil. Carthag. quintum.
(5) Concil. Taurin, cán. 8.
(6) Cán. 1.°
(7) Cán. 6.°
(8) Cán. 1.°
(9) S. Leo, Epist 92 ad Rustic Narbon. episc.

pos de Sicilia admitir al subdiaconado á los que no prometiesen vivir castamente (1).

En Francia se prescribió tambien el celibato, bajo severas penas en los concilios de Orange, Arlés, Agda, Orleans y Leon, celebrados en los siglos V y VI.

Pero el que mas contribuyó á la observancia estricta y rigorosa de la antigua y venerable ley del celibato en la Iglesia latina, fué Gregorio VII. Aquel gran Pontífice, restaurador de la disciplina eclesiástica, dotado de una voluntad de hierro y de un celo ardiente y santo, despues de haber hecho practicar severamente en Roma el año 1074, los antiguos preceptos sobre la continencia sacerdotal, dirigió á todos los obispos del orbe católico una notable apología en que habla con gran fervor de esta santa virtud. Estiéndese largamente en probar sus escelencias y apoya su enérgico precepto en el Concilio de Neocesárea, en el tercer cánon del general de Nicéa, en el décimo del calcedonense, en las decretales de los Papas Silvestre, Siricio, San Gregorio y Zacarías, en la doctrina de San Gerónimo, y termina: «Pero ¿qué mas? nos falta tiempo para narrar los testos de los Santos Padres que vienen á robustecer nuestros decretos apostólicos, porque todos los católicos que han respetado la doctrina de los cuatro primeros concilios, han ordenado lo mismo que nosotros.» *Sed ¿quid dicam ulterius?: deficit enim mihi tempus ut enarrem vicisim sanctos Patres prædictis nostri apostolici statutis subscribentes. Nam omnes catholici eadem observanda esse censuerunt, qui, et á sacratissimis quatuor conciliis dissentire noluerunt, ex quibus noster apostolicus præfata produxit decreta* (2).

El primer concilio de Letran, noveno de los generales, reunido en el año 1123, reitera la prohibicion absoluta de contraer matrimonio á los presbíteros, diáconos, subdiáconos y religiosos, y respecto de los ya contraidos dice, «juzgamos, *segun la definicion de los sagrados cánones*, que tales matrimonios deben ser disueltos y los contrayentes obligados á hacer penitencia.» Presbyteris, diacónibus, subdiaconibus et monachis, matrimonia contrahere penitus interdicimus; contracta quoque matrimonia ab ejusmodi personis disjungi, et personas ad pœnitemtiam redigi, juxta sacrorum canonum definitionem, judicamus» (1).

El segundo Lateranense, décimo de los generales, celebrado el año 1139, es aun mas esplícito, puesto que reiterando la prohibicio n anterior, manda que los esposos de tal es matrimonios sacrílegos sean separados, porque *entiende* que semejante union no es verdadero matrimonio, como opuesto á las reglas de la Iglesia. *Hujusmodi namque copulationem, quam contra ecclesiasticam regulam constat essecontractam, matrimonium non esse censemus* (2).

Por el simple exámen de los testos anteriores queda demostrado con evidencia irresistible que la ley de celibato ó continencia absoluta de los eclesiásticos, no fué establecida, como se ha pretendido, en los concilios de Letran, sino por el contrario, fué objeto constante de la solicitud y preceptos de la Iglesia desde Jesucristo y los Apóstoles. Lo que hicieron estos concilios, asi como otros anteriores y el posterior de Trento, fué confirmar las prescripciones antiguas y robustecerlas, y cuando mas hacer del Sacramento del órden sacerdotal un impedimento dirimente del matrimonio. Hay, no obstante, quien cree que tal vez podria probarse que este impedimento existia mucho antes de los concilios referidos (3).

Para completar esta reseña ó esposicion sucinta de las leyes eclesiásticas, decisiva en la materia, recordaremos que el célebre Concilio de Trento, último de los generales, fulminó anatema contra los que sostuvieran que los eclesiásticos ordenados in sacris, ó los religiosos ligados solemnemente por el voto de castidad, podian contraer

(1) Gregor. Epist. 49.
(2) Apolog. Greg. VII.

(1) Conc. Lateran. princ. cán. 21.
(2) Conc. Later. sec., cán. 7.
(3) Jager, le celibat ecclesiastique dans ses raports religieux et politiques, pág. 86.

matrimonio, ni que este fuera válido, no obstante la ley eclesástica ó el voto (1).

Determinada con la brevedad que nos ha sido posible la disciplina de la Iglesia de Occidente en la grave materia que tratamos, debemos establecer cuál fué la disciplina de la Iglesia de Oriente acerca de la misma.

§. 2.° *Disciplina de la iglesia griega sobre el celibato sacerdotal.*

En los primeros siglos de la Iglesia la disciplina era una misma en oriente y occidente. Las decisiones pontificias y los cánones de los concilios occidentales obligaban tambien á la Iglesia griega; la division tuvo lugar en tiempos posteriores por causas de que trataremos oportunamente.

El concilio de Ancyra, celebrado á principios del siglo IV, permitió contraer matrimonio á los diáconos que en el acto de la ordenacion protestaran su propósito de no permanecer célibes; pero los que nada decian ó prometian castidad espresamente, quedaban obligados al celibato, so pena de destitucion.

Benedicto XIV, apoyándose en la autoridad de Balsamon, Zonara y Aristenes, asienta que este concilio fué universalmente rechazado (2). De todas maneras su observancia pudo ser muy pasagera, pues, como ya indicamos, dos años despues, en 1315, el concilio de Neocesárea ordenó la destitucion de todo presbítero que contragese matrimonio: *Presbyter, si uxorem acceperit ab orbdine deponatur* (3).

El general de Nicéa, antes citado, prohibió absolutamente que los obispos, presbíteros, diáconos y demás eclesiásticos tuvieran muger alguna estraña, á no ser la madre, la hermana, la tia ú otra persona que no diera lugar á sospechas, y ya observamos que si el matrimonio de los eclesiásticos hubiera sido lícito, como quiere suponerse, la muger propia y legítima habria sido citada antes que todas; asi lo entendieron San Basilio, que escribia en el mismo siglo (1), y el concilio segundo de Cartago, que reiterando varios preceptos del Niceno, ordenó á los obispos, presbíteros y diáconos que se abstuvieran de sus mugeres (2).

San Leon, dirigiéndose al Obispo de Tesalónica, obliga tambien á los subdiáconos á la ley de perfecta continencia, prohibiéndoles casarse, y á los casados usar del matrimonio (3).

Habia cundido, sin embargo de estos preceptos, entre los sacerdotes griegos mucha relajacion y eran frecuentes, mas que entre los latinos, las infracciones de la ley de continencia. Para cohonestarlo, acudian al quinto cánon apostólico que prohibia á los obispos, presbíteros y diáconos separarse de sus mugeres, argumento de que hablaremos despues; pero desde el concilio de Nicéa vacilaban mucho en esta doctrina los mas laxos, hasta que el concilio in Trullo hizo sobre la materia un cánon (4) de que nunca se ha separado la Iglesia griega desde aquella época. Este cánon permite elevar al presbiterado, diaconado y subdiaconado á los que hubieren contraido antes matrimonio; pero despues de recibir las órdenes sagradas les prohibe contraerlo, escepto á los cantores; y si lo hicieren, serán depuestos.

Tambien los obispos pueden ser elegidos en el estado de matrimonio; pero al momen-

---

(1) Si quis dixerit clèricos in sacris ordinibus constitutos, vel regulares castitatem solemniter professos, posse matrimonium contrahere, contractumque validum esse, non obstante lege eclesiastica, vel voto, et oppositum nihil aliud esse, quam damnare matrimonium, posseque omnes contrahere matrimonium qui non sentiunt se castitatis, etiam si eam voverint, habere donum, anathema sit: cum Deus id recte petentibus non deneget, nec patiatur nos supra id quod possumus tentari. Sess. 24, cán. 9.

(2) Bullarium Benedict. XIV Const. 129, §. 35, 36 y 37.

(3) Concil. Neocesa., cán 1.°

(1) Nec primi, nec soli, Paregore, sancivimus ut ne una cum viris habitent mulieres; sed lege canonem á sanctis nostris patribus editum in Synodo Nicena, qui manifesté sancivit extraneas mulieres non esse. Vita autem cælebs in eo honestatem habet, ut á convictu mulieris separetur. Epistol. 198.

(2) Placet ut episcopus, presbyter et diaconus, vel qui sacramenta contrectan, pudittiæ custodes, ab uxoribus se abstineant. Concil. cartag. secund., cán 2.

(3) Ad exibendam perfectæ continentiæ puritatem, nec subdiaconibus quidem connubium carnale conceditur: ut et qui habent, sint tan quam non habentes, et qui non babent, permaneant singulares. S. Leo ad Anast.

(4) Quoniam in apostolicis canonibus dictum est eorum qui non ducta uxore in clerum promoventur, solos lectores et cantores uxorem posse duerce; et nos hoc servantes decernimus, ut deinceps nulli penitus hypodiacono, vel diacono, vel presbytero post sui ordinationem contrahere liceat. Si autem fœrit hoc ausus facere, deponatur. Concil. *Trullo*, cán. 6.

to deben separarse de sus mugeres, (1), que se retirarán á un monasterio, ó pasan, si reunen las circunstancias necesarias, á la clase de diaconesas (2).

Los presbíteros y los diáconos que han de tocar las cosas santas deben *guardar estrictamente continencia* mientras desempeñen su sagrado ministerio, pues la *pureza absoluta* es indispensable para los que han de acercarse al divino sacrificio, y *tal fué el precepto trasmitido por los apóstoles* (3).

Los griegos cismáticos siguen en esta parte la misma disciplina.

Tales son los cánones del celebre concilio in Trullo celebrado el siglo VII, que aun en medio de haber relajado los antiguos y saludables preceptos de la Iglesia universal, todavía reconoce y acata el principio de que toda funcion sacerdotal exige la pureza, la continencia absoluta del ministro que la ejerce. Y en cuanto á la invectiva de este mismo concilio contra la enérgica severidad que la Iglesia latina ha desplegado para hacer observar el celibato, la mejor réplica es la que dió el P. Thomassin en muy ceñidas palabras. «Es natural, dice, que los débiles no puedan soportar la virtud de los fuertes; al paso que estos muestran la grandeza de su alma perdonando y sufriendo la debilidad de aquellos. La Iglesia toleraba con paciencia y con caridad la incontinencia de los sacerdotes griegos; y estos no podian transigir con la pureza y castidad de los latinos (4).»

Benedicto XIV en bula espedida para la Iglesia de oriente el año 1742 declaró que no se debia permitir, ni tolerar de modo alguno, que fuesen promovidos á los órdenes sagrados los latinos instruidos en el rito latino que no quisieran profesar la ley de continencia, conforme al rito griego, con la esperanza de retener sus mugeres; dispensando por aquella sola vez á los italo-griegos que hubieran sido ordenados hasta aquel dia por obispos latinos con ánimo de permanecer en aquel rito (1).

El mismo pontífice, aunque doliéndose de ello, consigna que la iglesia romana tolera á los subdiáconos, diáconos y presbíteros de la griega que retengan á sus mugeres, siempre que hubiesen contraido matrimonio antes de recibir los sagrados órdenes con persona vírgen; que prohibe ascender al subdiaconado, diaconado y presbiterado á los que le hubieren contraido con viuda ó muger corrupta, ó pasado á segundas nupcias; que manda castigar severamente con escomunion, deposicion y separacion de la muger ilegítima á los que contraigan matrimonio despues de la sagrada ordenacion, ó pasen en igual caso á segundas nupcias, muerta la primera muger legítima con quien vivian antes de ordenarse; pues tales matrimonios eran, y se declaraban nuevamente irritos y nulos (2). Prevenia, por último, esta bula que el presbítero griego casado debia abstenerse de su cónyuge durante una semana, ó á lo menos tres dias antes de ofrecer el santo sacrificio (3).

El profundo dolor con que la iglesia romana veía la relajacion de la disciplina griega en esta parte tan importante para la santidad del ministerio sacerdotal, aun tolerándola por circunstancias especiales, se retrata vivamente en otro importante documento, que debemos tambien á la docta pluma de Benedicto XIV. Nos referimos á las instruc-

(1) Ad nostram cognitionem pervenit quod in Africa et Lybia et aliis locis, quidam ex his qui illic sunt religiosissimi præsules, cum propriis uxoribus, etiam postquam ad eos processit ordinatio, una habitare non recusant, *ex eo populis offendiculum et scandalum afferentes*. Cum itaque studium nostrum in eo magnopere laboret ut omnia, ad gregis in manus nostras traditi nobisque commissi utilitatem fiant, nobis visum est, ut nihil ejusmodi deinceps ullo modo fiat. Concil. Trull., cán. 12.

(2) Viudas cristianas asociadas al servicio de las Iglesias para enseñar la doctrina evangelica á las familias paganas, instruir á las jovenes, cuidar á las pobres enfermas y consolar á las desgraciadas que sufrian persecucion por seguir la fé de Jesucristo.

(3) Scimus, sicut et qui Cartagine convenerunt, et vitæ ministrorum honestatis curam gerentes dixerunt, ut subdiaconi qui sancta mysteria contrectant, et diaconi, et presbyteri, secundum proprios terminos à consortibus abstineant: ut et quod per apostolos traditum est, et ab ipsa usque antiquitate servatum, nos quoque similiter servemus, tempus in omni rescientes, et maxime jejunio et oratione. Oportet enim eos, qui divino altari assident, in sanctorum tractandorum tempore ese omnibo continentes, u possint id, quod à Deo simpliciter petunt, obtinere. Conc. Trull., can. 13.

(4) Thomass. Disciplina de la Iglesia.

(1) Bullarium Benedict. XIV. Bulla 57, §. 7.°, De Sacramento Ordinis, núm. 21.

(2) Bullarium Benedict. XIV. Bulla 57. §. 7.°, números 26 y 27.

(3) Presbyter græcus conjugatus, antequam ad Sanctum sacrificium, seu sanctam missam celebramdam accedat, vel per hebdamadam, vel per tridnum abuxore curet abstinare. Ibid. número 28.

ciones espedidas en 4 de mayo de 1745 con motivo de varias dudas que le fueron consultadas, entre ellas la de si podian contraer primero y segundo matrimonio los párrocos del rito cophto. Recuerda en ellas que la pureza y santidad convienen muy especialmente á las personas consagradas á Dios, y que los cánones apostólicos 17 y 18 prohibian á los obispos, presbíteros y diáconos, no solo la *bigamia propia*, ó sea el segundo matrimonio, muerta la primera muger legítima, sino tambien *la similitudinaria*, esto es, el primer matrimonio con muger viuda ó vírgen. Reiterados estos preceptos en el cánon tercero del concilio *in Trullo*, que aunque no tiene autoridad en la Iglesia de Occidente, es recibido y acatado en la de Oriente, declara Benedicto XIV que la prohibicion referente á las segundas nupcias debe observarse en ella y mantenerse con esmero.

En cuanto á las primeras, (prosigue el mismo Pontífice) desde tiempo muy antiguo (*antiquissimo tempore*) ambas iglesias, latina y griega, prescribieron de consuno, para aumentar la santidad del ministerio eclesiástico, que los presbíteros y demás clérigos ascendidos á los órdenes sagrados guardasen perpétuo celibato; pero si bien la primera jamás relajó esta ley de continencia, sucedió lo contrario en la segunda con el transcurso de los siglos. Los Papas Estéban y Gregorio XIII, tomando en cuenta esta tradicion de los sacerdotes griegos, no interrumpieron la tolerancia de la iglesia y permitieron á los maronitas casados ascender al sacerdocio; pero exhortando piadosamente á los que quisieran permanecer en el celibato, para que persistiesen en su buen propósito.

Constituido Benedicto XIV en la necesidad de seguir las huellas de estos y otros venerables Pontífices, consintió que los clérigos griegos de órdenes menores, que contrageran matrimonio, pudieran ascender al sacerdocio sin romperle; pero al mismo tiempo reiteró la prohibicion de casarse á los presbíteros y diáconos, so pena de deposicion, y declaró que el matrimonio realizado por ellos habia de estimarse, no solo ilícito, sino tambien nulo, como en la Iglesia de occidente.

Respecto de los cismáticos, dispuso que cuando los sacerdotes griegos abjurasen el cisma y se acogieran al gremio de la iglesia madre, se conformasen, como era justo, á su disciplina y observancia, y por tanto á la ley del celibato, santa é inviolablemente guardada por los promovidos á los órdenes mayores, asi latinos, como griegos. Pero se le consultaba, qué habia de hacerse respecto de los sacerdotes maronitas, ya casados antes de abjurar el cisma, y aquí crecian sus dudas y ansiedades. En rigor de derecho, decia, los diáconos vueltos á la unidad de la iglesia no pueden tener un pié en las cosas terrenales y otro en las divinas (*non posse pedes tenere in diversis, unum in divinis, alterum in carnalibus*) y por tanto deben separarse de sus esposas absolutamente; ¿pero quién no recela, añadia, que este poderoso obstáculo ha de apartarlos de la saludable vía de su conversion? Casos hubo en que la Santa Sede otorgó, por consideraciones especiales, á los cismáticos que volvian al seno de la grey católica, dispensa pontificia para continuar en el matrimonio contraido, no solo antes, sino hasta despues de los sagrados órdenes; pero estos ejemplos no fueron de tanto peso para Benedicto XIV, que se determinase á seguirlos sin ulterior y madura reflexion. Vacilaba, y para ilustrar su juicio preguntó á los vicarios generales, prefectos de las misiones y misioneros de aquellas comarcas, y les pidió, entre otras cosas, los datos necesarios para resolver con mayor detenimiento.

Queda demostrado, que aunque la disciplina de la Iglesia griega es mas laxa que la observada estrícta y santamente por la Iglesia latina, reconoce y acata, sin embargo, el principio de que toda funcion sacerdotal exige la pureza del ministro que la ejerce; prohibiendo en su consecuencia á los sacerdotes aspirar al matrimonio despues de recibir los órdenes sagrados; obligando á los obispos á separarse de sus consortes absolutamente y para siempre; é imponiendo á los presbíteros y diáconos, casados antes de su

ordenacion, el deber de estricta continencia y la preparacion conveniente, mientras desempeñan los deberes de su sagrado ministerio.

A fin de ilustrar mas la materia, juzgamos oportuno hacer una breve reseña de doctrina y decisiones por los concilios españoles.

§. 3.° *Cánones y preceptos de los concilios españoles.*

En España, como en todas partes, el escaso número de célibes sábios y virtuosos, produjo en los primitivos tiempos del cristianismo la necesidad de elegir sacerdotes entre los casados que reunian estas cualidades, al paso que los obispos, presbíteros y diáconos no podian contraer matrimonio, una vez ascendidos á los órdenes sagrados. Esta tradicion antigua y apostólica, no solo se observó siempre en las iglesias españolas, sino que fueron haciéndola constante y sucesivamente mas severa, de su espontáneo y propio movimiento, hasta el punto de haber sido las primeras del mundo en adoptar limitaciones y restricciones que despues se generalizaron con ventaja universal.

El concilio de Braga (1) y los Toledanos primero (2), segundo (3) y octavo (4) estendieron á los subdiáconos la prohibicion de contraer segundas nupcias, impuesta ya por precepto apostólico á los eclesiásticos de órden superior.

Práctica fué de las iglesias españolas que los obispos, presbíteros y diáconos casados, deberian haberlo sido precisamente con muger vírgen ó doncella, porque este fué el uso del antiguo testamento (5); y que las viudas de los eclesiásticos no volvieran á casarse bajo ningun pretesto, so pena de escomunion hasta el fin de sus dias (6).

El Concilio iliberitano previno de una manera absoluta y esplícita que no solo el obispo, sino tambien los presbíteros, diáconos y subdiáconos casados, se abstuvieran del uso del matrimonio, y no haciéndolo, quedaran despojados del honor del clericato. *Placuit in totum prohiberi episcopis, presbyteris et diaconibus, vel omnibus clericis positis in ministerio, abstinere se à conjugibus suis et non generare filios: quicumque vero fecerit, ab honore clericatus exterminetur* (1). Lo mismo dispuso el primero de Toledo comprendiendo tambien á los subdiáconos en la obligacion del celibato (2); y repitieron disposiciones análogas el tercero (3) y cuarto (4) del mismo nombre.

El de Gerona (5) y el segundo toledano (6) prohibieron de nuevo á los ordenados despues del matrimonio que hicieran vida conyugal con sus mugeres. El de Tarragona (7) prescribió que el eclesiástico casado no pudiera tener en su casa otras mugeres que la suya propia, ó sus hijas, madre y hermanas, y en el caso de admitir por necesidad á otra parienta mas lejana, debia traer á su lado algun anciano virtuoso y ejemplar como testigo doméstico de sus actos.

Por último, las iglesias de España robustecieron en adelante la ley del celibato eclesiástico con repetidos y saludables preceptos, ora estableciendo que ningun clérigo casado seria promovido á la dignidad episcopal, ni á los grados de presbítero, diácono y subdiácono, si no renunciaba solemnemente al uso del matrimonio, ora decretando que los obispos y los párrocos profesasen castidad antes de entrar al ejercicio de sus cargos; ora estendiendo esta misma providencia á todos los que recibieran las órdenes mayores.

Igualmente rígidos fueron los concilios españoles para evitar la mala conducta de los sacerdotes con mugeres estrañas y el escándalo de los fieles.

Además de las reglas dadas sobre esta materia en los cánones antes citados, el conci-

(1) Cán. 44.
(2) Cán. 4.
(3) Cán. 3.
(4) Cán. 6.
(5) Epist. Innocent. I, ad Vitric. caps. 4, 5, y 6.
(6) Collect. Martin. Bracar., cap. 29.

(1) Cán. 33.
(2) Cán. 1.°
(3) Cán. 5.
(4) Cán. 21 y siguientes.
(5) Cán. 6.
(6) Cán. 1.°
(7) Cán. 1.°

lio iliberitano (1) decretó que no pudieran tener bajo su propio techo sino á hermana ó hija vírgen consagrada á Dios, por no hallarse entonces instituidos los monasterios de religiosas.

El 1.° de Toledo (2) les prohibia ver á las solteras, á no ser hermanas suyas.

El de Tarragona (3) únicamente toleraba á los eclesiásticos una breve visita de saludo á sus parientas, siempre que les acompañara persona de honradez y edad provecta.

El de Gerona (4) solo les consentia estar acompañados de su madre, su hermana, un paje, ó un amigo.

El 2.° de Toledo (5), la compañía de una parienta, y si habian menester el servicio ó cuidado de nna muger estraña, debia vivir en otra casa inmediata, imponiendo á los transgresores la separacion del oficio sacerdotal, espulsion del templo y privacion de toda la comunion de los católicos.

El cuarto del mismo nombre dijo: «Es necesario que tengamos (los eclesiásticos) una »conciencia pura delante de Dios y la mejor »fama entre los hombres para acreditar, se»gun el precepto apostólico, una vida santa, »no solo ante Dios, sino tambien ante el »mundo. Evítese toda mala sospecha para no »dar lugar á los seglares de motejarnos (6).» Por cuyas consideraciones escluía de su trato y compañía á toda muger que no fuese la madre, hermana, tia ú otras que no indujeran recelo de incontinencia.

El octavo tambien de Toledo (7) se mostró muy severo con los clérigos concubinarios hasta el punto de castigarlos con perpétua reclusion en un monasterio religioso.

El de Valladolid, presidido por el Legado Cardenal de Sabina, previno con arreglo á la doctrina del Concilio general de Letran, «que »denuncien por descomulgadas todas las bar»raganas públicas de los dichos clérigos et »beneficiados: et si morieren, que las entierren »en la sepoltura de las bestias.... Item, esta»blecemos que despues que el obispo asi so»pier la verdat, que prive aquellos concubi»narios públicos para siempre de los bene»ficios que hobieren, asi como es mandado »et establecido en el Concilio general. Item, »establecemos et mandamos que los fijos de »los clérigos que despues de este concilio »nascieren de las barraganas, que no puedan »heredar los bienes de sus padres (1).»

Las mismas penas y aun mas duras y severas imponian á los clérigos concubinarios y á sus barraganas ó mancebas el Sínodo de Leon (2) del año 1267 y los concilios posteriores de Valencia, Peñafiel, Valladolid y Salamanca.

El Concilio de Tortosa mas tarde en el año 1419, recomendaba á los eclesiásticos tanta mayor honestidad que al resto de los fieles, cuanta exigía la pureza de costumbres de quienes deben manifestarse á los demás como espejo y ejemplo de virtudes (3).

Se vé, pues, por estos notables documentos y otros muchos que omitimos para evitar prolijidad, cuánto y cuán eficazmente hicieron las iglesias españolas para perfeccionar y robustecer la ley del celibato y restablecer la pureza y castidad del clero. Difícilmente puedan competir otras con ellas en este santo empeño. Sus cánones de continencia fueron acogidos y citados con encomio desde el siglo IV en adelante en las constituciones y decretos pontificios (4) y en los mas célebres concilios (5).

Pasemos ahora á examinar concisamente las disposiciones del derecho civil, que guardan armonía con las leyes eclesiásticas.

§. 4.° *Disposiciones del derecho civil acerca del celibato eclesiástico.*

En el siglo sesto, Justiniano, emperador de Oriente, admite como generalmente establecido el precepto del celibato, robustece

(1) Cán. 27.
(2) Cán. 6.
(3) Cán. 1.°
(4) Cán. 7.
(5) Cán. 3.
(6) Cán. 22.
(7) Cán. 51.

(1) Esp. Sagr. Tom. 36, pág. 216.
(2) Ibid., pág. 219.
(3) Cap. 1.°
(4) Decretales de Siricio, Inocencio I y otros Pontífices.
(5) Entre ellos el célebre de Nicea.

con la sancion civil los cánones de los concilios, que prohibian el matrimonio á los presbíteros, diáconos y subdiáconos desde los primeros siglos de la Iglesia, é impone penas temporales á los infractores declarando que no solo perderian, segun las reglas de la misma, sus cargos eclesiásticos, sino que además sus matrimonios serian nulos y no producirian en el órden civil efecto alguno (1). Habiendo parecido sin duda demasiado severa esta ley en cuanto á la pérdida absoluta de los derechos civiles de los clérigos casados, la suavizó el mismo emperador en los capítulos 5 de la novela sesta y 42 de la sétima (2), ciñéndose á ordenar que todo presbítero, diácono ó subdiácono que se casase, descenderia al estado de simple particular (idiota), pudiendo por lo demás vivir con su muger; pero de todos modos declara en ellas, que es lo que hace á nuestro propósito, que si los espresados sacerdotes contraen matrimonio público ó secreto, quedan incapacitados para ejercer las funciones de su ministerio.

La novela 123 no puede ser mas esplícita en cuanto á la prohibicion de casarse los eclesiásticos despues de recibir las órdenes sagradas. «Si el que haya de ser ordenado, dice, no tiene muger propia, no se le ordenará sin haber prometido antes que puede vivir honestamente sin muger legítima en lo sucesivo, porque el obispo no puede permitir al ordenado que se case despues de la ordenacion (3).» Mas tarde fué generalizándose el abuso de permitir el matrimonio á los eclesiásticos, no solo antes de la ordenacion, sino tambien en el período de los dos años inmediatos: pero el emperador Leon restableció el antiguo derecho, si bien ya no eran absolutamente escluidos los sacerdotes casados del servicio eclesiástico. Se les destituía del ministerio sacerdotal, pero no se les privaba de ejercer los cargos inferiores de la Iglesia compatibles con el matrimonio.

Recesvinto, en nuestra España, fué mas severo aun que los emperadores de Oriente con los sacerdotes que faltaban á la ley del celibato, bien contrayendo matrimonio, bien infringiendo de otro modo sus deberes.

«Cuanto mas el príncipe, dice (1), manda »guardar castidad, tanto mas la manda guar»dar á sus ministros. E nos devemos nos es»forzar de poner término á los que quieren »facer mal, cuanto mas queremos facer pla»cer á nuestro sennor. E por esto mandamos »nos que el sacerdote ó el diácono que se »aiuntare con vidda, ó con vírgene, ó con »otra mulier cualquiere, ó *por casamiento* ó »por adulterio, manteniente que el obispo ó »el juez lo sopiere, luego los faga partir, ó »pues que este fuere metido en poder de su »obispo, metal en un logar de penitencia é »fagánle cuemo manda el decreto (el derecho canónico). E si esto non fiziere el obispo, »peche dos libras de oro al Rey, é demás que »faga meiorar, é si no lo pudiere meiorar el »obispo, llame al conceio, ó lo diga al Rey. E »las mugieres que este mal ficieren, reciba »cada una ciento azotes, é iamas non se mes»can con ellos.»

La misma prohibicion repitió en otra ley respecto de las monjas. «Defendemos por Dios é por la nuestra fé que daqui adelantre nenguno non se case con virgen sagrada, ni con bibda dorden.»

En las leyes 37, 38, 39 y 40, tít. 6.° de la Partida 1.ª, reprodujo fielmente D. Alonso el Sábio los cánones y prescripciones de la Iglesia en esta materia. La 41 del mismo título, siguiendo igual propósito, dice: «Casándose algun clérigo, que hobiese órden sagrada, non debe finear sin pena, *ca deben le vedar de oficio, et tollerle el beneficio que hobiere de la eglesia por sentencia de descomulgamiento* fasta que la dexe et faga penitencia de aquel yerro; et la muger débela el obispo meter en servidumbre de la eglesia...»

(1) L. 45, C. de episc. et cleric.

(2) Si aliquis presbyter aut diaconus, aut subdiaconus postea ducat uxorem aut concubinam, aut palam aut occulte, sacro statum cedat ordine, et deinceps idiota sit. Novell. 6, cap. 5. La 7 se espresa en términos análogos.

(3) Si futurus ordinari diaconus non habuerit uxorem conjunctam sibi, non aliter ordinetur, nisi prius ab ordinante eum interrogatus, promiserit posse post ordinationem et sine legitima uxore honeste vivere: non valente eo qui ordinat, in tempore ordinationis permittere diaconum aut subdiaconum, post ordinationem, uxorem accipere. Novell. 123, cap. 14.

(1) Fuero Juzgo. L. 18, tít. 4. lib. 3.

La 44 se espresa tambien con laudable rigor en estos términos: «Enfamado seyendo »algunt clérigo que tiene barragana (1) en »cobiertamente, maguer non lo acuse nin»guno dello, á tal como este, desque su obis»po lo oyere, debel mandar que se salve que »non es en aquella culpa que sospechan »dél....: et si non se quisiere salvar, ó non »podiere, debel toller el beneficio, et vedar»le que non diga horas en la iglesia; pero »deste atal no deben dexar sus parroquia»nos de oir las horas dél, nin de recebir los »sacramentos mientra que su perlado so»friere que sirva la eglesia. Et non tan sola»mente veda santa eglesia á los clérigos de »morar con las barraganas, mas aun que non »fablen con ellas solos apartadamiente: et si »por aventura lo hobieren de facer por al»guna razon derecha, deben haber consigo »algunos compañeros porque no puedan sos»pechar contra ellos que lo facen á mala »parte.»

Conforme á esta misma legislacion de las Partidas y á la ley 2.ª, tít. 3, lib. 1 del Ordenamiento Real, los hijos habidos en matrimonios celebrados por eclesiásticos no podian heredar á sus padres.

La ley 3.ª, tít. 26, lib. 12 de la Novísima Recopilacion, dictó tambien varias penas contra las mancebas de los clérigos.

Despues del estudio y exámen que hemos hecho de las leyes eclesiásticas y civiles, que prescriben el celibato clerical, nos parece oportuno demostrar cual fué la opinion de todas las naciones y de todos los siglos respecto de la pureza con que debian ejercerse, aun entre los gentiles ó paganos, las elevadas funciones del culto y sacerdocio.

§. 5.° *La continencia se miró siempre como circunstancia indispensable para ejercer las ceremonias sagradas de todos los cultos religiosos.*

Todos los pueblos han juzgado el celibato como estado mas perfecto que el estado de matrimonio; aunque tambien hay en el último su especial santidad y perfeccion.

Se ha dicho con acierto que hay en la continencia, en este sacrificio perpétuo de las pasiones al deber, algo que eleva al nombre y le acerca á la divinidad (1).

Prescindiendo de los honores y el respeto que los judíos, griegos y romanos dispensaban á la virginidad y á la viudez que rehusaba las segundas nupcias, hallamos que toda funcion sacerdotal se creyó por lo comun incompatible con la inobservancia de la castidad, aun tratándose de la muger propia y legítima.

Moisés prohibió á los levitas, so pena de muerte, acercarse á las oblaciones sagradas de los hijos de Israel cuando no se hallaran en estado de pureza, para que no contaminasen su sacrificio grato á Dios (2).

En Roma se exigia á los augures y demás personas que debian intervenir en los sacrificios gentiles igual preparacion (3). Especialmente el culto de Ceres, (4) de Baco y de Isis, la exigian de una manera imprescindible.

Mahoma impuso á sus voluptuosos sectarios el deber de castidad en ciertos dias solemes y durante las peregrinaciones; y que se purificaran antes de entregarse á la oracion (5).

El precepto de continencia era mas rígido para los que se consagraban al desempeño de las ceremonias sacerdotales continuamente y por algun período determinado.

Los sacerdotes de la ley antigua vivian en el templo, aparte de sus mugeres, todo el año de su ministerio para ofrecer á Dios víctimas gratas. Si volvian, pasado este tiempo al lado de sus esposas, dice San Gerónimo, era solo para perpetuar la tribu de Leví, única depositaria del sacerdocio (6).

Las vestales romanas guardaban continen-

(1) Véanse los artículos *Barragana* y *Concubinato*.

(1) Incorruptio facit esse proximum Deo. Sap., VI, 20.
(2) Levit. XXII, 2, 3.
(3) Brissonius, de Formulis.
(4) Annua venerant Cerealis tempora festi, Secubat in vacuo sola puella toro. (Am., III, x, 1, 2.)
(5) Alcoran, c. 1.° y 5.°
(6) S. Hyeronim., adv. Jovin.

cia hasta los 30 años, edad en que cesaba su ministerio.

Siguiendo la misma gradacion, los que ejercian perpétuamente el cargo sacerdotal guardaban constantemente el precepto de continencia. Asi acontecia con el hierophanta de los griegos, cuyo ministerio duraba tanto como su vida.

Los sacerdotes egipcios guardaban el celibato. (1) Las sacerdotisas de Céres en Atenas, las de Persia consagradas al sol, y las del Perú observaban la ley de continencia.

En oriente como en occidente, en el mundo antiguo como en el nuevo, la perpetuidad del ministerio sacerdotal llevaba consigo la perpetuidad de la continencia. Si no bastasen los poderosos razonamientos de los escritores cristianos, he aquí las sentidas palabras de un orador pagano, célebre por su elocuencia.

«Estoy íntimamente persuadido de que los que penetran en el santuario, los que tocan las cosas sagradas y presiden al culto divino, deben ser puros y castos, no solo por espacio de algunos dias, sino durante su existencia entera» (2).

Ya hemos visto como juzgaba del celibato sacerdotal el mundo gentílico: veamos ahora como lo aprecia el orbe católico desde sus primeros siglos.

San Cipriano designa ya á las vírgenes cristianas, esto es, á las que se habian consagrado al servicio del Señor, como la flor de la raza eclesiástica, el ornamento de la gracia espiritual, la imágen mas santa de Dios, la porcion mas ilustre del rebaño de Jesucristo, la alegria de la Iglesia. En su tiempo formaban ya un cuerpo distinto del de los demás fieles (3).

«La virginidad, dice San Fulgencio, es superior al matrimonio, como las cosas escelentes son superiores á las buenas, las celestiales superiores á las de la tierra, la union inmortal superior á la perecedera, el espíritu superior á la carne (4).»

(1) Ibid., lib. 2, cap. 9.
(2) Demostenes contra Timverates, núm. 12.
(3) S. Cap., dei habitu Virginum.
(4) S. Fulgene ad Probam, cap. 9.

No podemos resistir al deseo de estampar aquí las elocuentes frases de San Crisóstomo. «Nada, dice, mas dulce, mas bello, y mas brillante que la virginidad, la cual destella un fulgor mas vivo que el de los rayos solares y, abstrayéndonos de los negocios mundanos, fija sin intermision nuestros ojos puros en el sol de la eterna justicia (1).»

Seria inútil continuar este exámen de los escritores católicos. Todos ellos han prodigado á la pureza religiosa iguales alabanzas.

Añadiremos sí, que el voto de castidad fué mirado en todos tiempos como inviolable. San Crisóstomo dice que las vírgenes que faltan á él, incurren en una culpa mas grave aun que el adulterio: San Agustin las condena al fuego eterno.

El Concilio iliberitano decretó contra ellas la terrible pena de escomunion, aun in artículo mortis, á no ser que merecieran compasion por haberse arrepentido y hecho penitencia durante toda su vida (2). Verdad es que los gentiles no eran menos severos que los cristianos: las enterraban vivas.

Se vé, pues, que la Iglesia al pronunciar anatema en una de sus épocas mas célebres por medio del concilio de Trento (3) contra los que proclamasen que el estado de matrimonio debe anteponerse al de virginidad ó celibato, no hizo mas que repetir y sancionar las ideas y creencias, no solo de la Iglesia católica, sino tambien del género humano, del mundo civilizado como dice un escritor que ha tratado profundamente esta materia (4).

Y si tal era la tradiccion laudable y constante del mundo entero ¿con cuánta mas razon no la haria suya la Iglesia romana, que profesa una religion sublime, apoyada toda ella en la pureza y la virtud? Lo que exigian los paganos de los sacerdotes que ha-

(1) S. Chrysost., de Virgini. cap. 21.
(2) Cán. 13.
(3) Si quis dixerit statum conjugalem anteponendum esse statui virginitatis vel cælibatus, et non esse melius et beatius manere in virginitate, aut cælibatu, quam jungi matrimonio, anathema sit. Sess. 24, cán. 10.
(4) Jager, le Celibat ecclesiastique, donde pueden verse ademas de las citas y autoridades que nosotros empleamos, otras muchas que ilustran la materia.

bian de dar culto á ídolos deformes, á mentidas divinidades, representacion lamentable de debilidades y pasiones vergonzosas, no podia menos de exigirlo la Iglesia universal de los ministros del culto católico para el servicio del verdadero Dios, orígen de toda santidad y perfeccion, y de exigirlo perpétua y rigorosamente, porque sus deberes religiosos son de todos los dias y de todos los momentos.

Habiendo reprendido Jesucristo muchas veces, decia Tertuliano, á los escribas y á los fariseos, el enseñar lo que no practicaban ¿cómo podia admitir entre sus discípulos á quienes hubieran exhortado á otros á la continencia, usando ellos del matrimonio? (1).

Todos los fieles cuando se acercan al altar de Jesucristo, han menester la pureza del cuerpo y la castidad del alma; pero el celibato es necesario, indispensable para la dignidad y santidad del sacerdocio, porque los ministros del Altísimo han de practicar la pureza y la castidad perfectas, esto es, la continencia absoluta.

Examinemos ahora las objecciones antiguas y modernas que se han opuesto asi á la justicia de este precepto eclesiástico, como á la posibilidad, una vez admitido, de observarlo.

§. 6.° *Impugnaciones dirigidas contra el celibato sacerdotal: su solucion.*

Lejos de ser la continencia, dicen los adversarios del celibato, un precepto apostólico, consta por las palabras de un apóstol, San Pablo, que los apóstoles fueron casados y de consiguiente no podian observarla. ¿*Numquid non habemus potestatem mulierem sororem circumducendi, sicut et cæteri apostoli*? (2) ¿No podemos llevar con nosotros una muger, *nuestra hermana*, como los demás apóstoles?

De este pasaje no se deduce que San Pablo fuera casado, y seria árduo empeño el de demostrarse que ninguno de los apóstoles contrajera matrimonio despues de recibida su santa mision sobre la tierra. Lo que se prueba por ese testo del apóstol, malignamente citado, es que llevaban consigo mugeres, no como esposas, sino como *hermanas*, á fin de poder penetrar sin escándalo y sin dar ocasion á sospechas en los aposentos de las mugeres paganas y propagar en ellos la luz del Evangelio, que de esta suerte se estendia á toda una familia.

Por lo demás, San Pablo, ofreciéndose terminantemente como modelo de los célibes (1), segun ya vimos, pone fuera de duda que no estuvo ligado al matrimonio. El Felipe de quien menciona San Clemente de Alejandría (2) que tuvo hijos, era uno de los siete diáconos; y de ningun modo el apóstol San Felipe, como lo han demostrado los mejores y mas exactos críticos de sus obras. San Juan y Santiago fueron siempre mirados como vírgenes, segun atestigua San Gerónimo. El único apóstol verdaderamente casado, conforme á las sagradas letras, fué San Pedro; y si los demás lo hubieran sido, en ellas constaria de igual modo. ¿Y qué hizo San Pedro desde que, elegido por el Señor, esperimentó su vocacion al apostolado? Oigámoslo á él mismo: *Ecce nos reliquimus omnia, et secuti sumus te.* «Todo lo hemos abandonado por seguiros (3). Jesucristo hizo aun mas claro y esplícito el sentido de estas palabras con su réplica: *Et omnis, qui reliquerit domum... aut uxorem... propter nomem meum, centuplum accipiet, et vitam eternam possidebit.*» «El que dejase su casa... *su muger*, á causa de mi nombre, recibirá el centuplo y alcanzará la vida eterna (4).»

Pero vencidos en este argumento, los adversarios del celibato, presentan desde muy antiguo con aire de triunfo otro, tomado asimismo de testos de San Pablo. Los heresiarcas y los protestantes siguieron al adoptarle el camino que les dejaron trazado Vigilancio y Joviniano.

(1) Tertul. de Monog. C. 8.
(1) I. Cor., XI, 5.

(1) I Cor., XI, 5.
(2) Clemens Alexand. Stromates l., 3.
(3) Mat. c. 19, 27.
(4) Ibid., 29.

El apóstol dijo, hablando de las circunstancias que debia reunir el que ejerciera el sagrado cargo episcopal: «Es preciso que sea irreprensible, que haya contraido matrimonio con una sola muger..., que gobierne bien su casa: que tenga hijos sumisos:» (1) y en otra parte: «El que no lleva sobre sí la mancha del crímen, es marido de una sola muger, y tiene hijos fieles (2).»

Es imposible dar á estas palabras el sentido que se pretende sin incurrir en un absurdo: resultaria que el apóstol exigia como requisito indispensable para ser obispo la circunstancia de tener muger é hijos: resultaria mas, como observó acertadamente San Gerónimo, destruyendo esta impugnacion de Joviniano, resultaria, que San Pablo no hubiera debido ser obispo, puesto que manifestó ser célibe y quiso servir de ejemplo para el celibato, como dejamos asentado: resultaria, por último, que se pondria al apóstol en contradiccion consigo mismo, una vez que dijo: «Es bueno para el hombre abstenerse de toda relacion con la muger», (3) y espresó que á nadie se obligara al matrimonio, y que los sacerdotes fuesen *continentes*. La verdad es que San Pablo, como despues las iglesias latina y griega, quiso escluir del episcopado á los bigamos, esto es, á los que hubiesen contraido segundas nupcias, aun despues de muerta la primera muger propia y legítima: quiso que si era preciso elegir obispo entre los ya casados, solo lo fuese quien hubiera contraido matrimonio antes de la ordenacion una sola vez y tuviese hijos fieles y sumisos para evitar la maledicencia y el escándalo; pero al mismo tiempo, le impuso para lo sucesivo la obligacion de continencia. Ya San Gerónimo se valió de un raciocinio semejante para destruir la impugnacion (4), y del mismo modo entendieron y esplicaron este pasaje de San Pablo Inocencio I, San Ambrosio, y San Crisóstomo. San Isidoro de Damieta y Tertuliano sostuvieron tambien que los apóstoles observaron como precepto y para ejemplo una continencia perfecta.

Se insiste alegando el quinto cánon apostólico, en el cual se impone al obispo, al presbítero y al diácono la obligacion de no abandonar á su muger, so pretesto de religion, y se ordena que si la abandona, se le escomulgue, y si persiste, se le destituya.

Fácilmente se comprende que no tuvo por objeto derogar la obligacion de continencia, que despues de él encargó siempre la Iglesia eficazmente, segun hemos demostrado; se refiere á los sacerdotes casados antes de la ordenacion, que no debian usar del matrimonio, pero tampoco abandonar sus esposas á las penalidades y horrores de la indigencia. Esta interpretacion hubo de darle el concilio de Gerona, celebrado en los primeros años del siglo VI, que permitia á la esposa vivir bajo el mismo techo que el marido promovido al sacerdocio, siempre que un hermano de cualquiera de ellos viviera en su compañía como testigo de su continencia, regla que se prescribió y observó generalmente, no solo en España, sino en Italia, en Africa y generalmente en toda la Iglesia latina en iguales casos.

Otra de las impugnaciones que los adversarios del celibato han hecho valer con mas empeño en los últimos tiempos es la falsa anécdota de Paphnucio, supuesto obispo de Egipto, y el discurso que le atribuye Sócrates en su historia eclesiástica, al celebrarse el primer concilio general de Nicéa.

Sócrates, escritor poco exacto y diligente, refiere que los padres del concilio Niceno estimaron de su deber sancionar una nueva ley para imponer á los que habian contraido matrimonio antes de llegar á la dignidad episcopal, al sacerdocio ó al diaconado, la obligacion de renunciar á la vida conyugal. En el momento mismo de irse á votar este precepto, se levantó Paphnucio, varon esclarecido por su santidad y milagros, y dijo con vehemencia, que de ningun modo debia obtener la aprobacion de aquel célebre concilio; que el lecho nupcial era inocente y sin mancilla; que se debia honra y aprecio á la institucion del matrimonio, que un esceso de severidad

(1) 1 Timoth., III, 2 y 4.
(2) Ibid., 6.
(3) Bonum est homini mulierem non tangere. 1 Cor., 6, 7.
(4) Hieron. lib. 1, adv. Jovin.

causaria grave daño á la Iglesia: que no todos podrian soportar el sacrificio de una continencia tan severa, y estaria mucho mas espuesta la castidad de las esposas; que bastaba la antigua tradicion de la Iglesia que prohibe á los eclesiásticos contraer matrimonio despues de la ordenacion; pero no convenia separar á ninguno de la esposa que habia elegido siendo lego. Paphnucio era célibe y muy severo en sus costumbres; los padres aplaudieron, la discusion terminó y se dejó á cada cual en libertad de abstenerse del matrimonio cuando quisiera (1).

Este pasaje, que á primera vista parece fuerte y hace vacilar á quien de nuevo le oye, no resiste, sin embargo, á un detenido exámen y á las reglas mas sencillas de la crítica.

Escritores del mayor peso y de vasta erudicion como Baronio, Belarmino y el Padre Thomasin lo han mirado, con razon, como una fábula destituida de toda apariencia de fundamento. Ninguno de los contemporáneos al concilio hace mérito de una cosa tan notable, y que se halla en contradiccion con otros de sus cánones, que ya hemos mencionado. Sócrates escribió mas de un siglo despues de haberse reunido aquella célebre asamblea, pues su historia comprende hasta el año 439, y no pudo por lo mismo presenciar los hechos que refiere. Es de notar que cuando varios escritores de aquel tiempo hablaron mas ó menos detenidamente del celibato sacerdotal, ni él citase, ni hoy se conozca uno siquiera que prestase á aquel aserto confirmacion y robustez.

Eusebio (2) y san Atanasio, contemporáneos, no hablan una palabra de ese ilustre y célebre Paphnucio: su nombre no se halla en la lista de los obispos que firmaron las actas del concilio. Los padres de la Iglesia mas próximos á este, que mencionan siempre con veneracion los cánones nicenos, hablan frecuentemente de la rigorosa obligacion de continencia impuesta por la Iglesia á los eclesiásticos casados antes de su ordenacion. San Epifanio y San Gerónimo que sostuvieron con energía y poderosos raciocinios el celibato sacerdotal; San Crisóstomo, Teodoreto y S. Cirilo que secundaron unánimes sus esfuerzos; San Siricio, que dijo que su violacion era un crímen vergonzoso; todos estos Padres de la Iglesia, todos estos escritores puntualísimos y rectos ¿cómo no hubieran hecho mencion de tal discurso, si se hubiera pronunciado, siquiera para combatirle, puesto que no recayó sobre él un cánon ó acuerdo espreso del concilio?

¿Cómo esplicarán los que se apoyan en el deleznable testimonio de Sócrates la omision absoluta que hace su cánon tercero (1) de las mugeres legítimas y propias, puesto que arrastrado por la elocuencia de Paphnucio resolvió dejar á los sacerdotes casados en plena libertad de usar ó no del matrimonio, cuando previene terminantemente que los eclesiásticos solo puedan tener en su compañía á su madre, su hermana, su tia, ú otras que no den lugar á la menor sospecha? Lo natural y lógico, supuesta tal intencion, hubiera sido enumerar la primera á la esposa ó muger propia, como en otro lugar dejamos observado.

Además, segun el mismo Sócrates, el discurso de Paphnucio se apoya en el dicho de un clérigo herege, que alegaba haber asistido al concilio niño todavía, siendo muy poco probable ni que asistiese en tal edad, ni que de haber asistido, recordase aquel suceso con tan vivos colores despues de tantos años; y mas fácil que las palabras interesadas y maliciosas del impostor Auxanon, que tal era su nombre, hallasen fácil acogida en la credulidad y poca diligencia de un escritor, como Sócrates, á quien la crítica echa en cara haber cometido errores graves al hacer la historia del propio concilio de Nicéa. Citaremos

(1) Sócrates, Hist. ecclesiast. lib. 1.°, cap. 11.: Sozomeno lib. 1.°, cap. 21.

(2) Eusebio, que asistió á este Concilio, dice terminantemente que los sacerdotes de la antigua ley vivian en el estado conyugal y deseaban tener hijos, al paso que los sacerdotes de la ley nueva se abstienen de él porque están enteramente ocupados en servir á Dios y en educar una familia espiritual. Demostrac Evangelic., lib. 1.°, c. 9.

(1) Interdixit per omnia magna Synodus, non episcopo, non presbytero, non diacono, nec alicui omnino qui in clero est, licere subintroductam habere mulierem, nisi forte aut matrem, aut sororem, aut amitam, vel eas tantum personas quæ suspicionem effugiunt. Conc. Nicæn, cán. 3.

Lorenzo Arrazola

solo, como ligera muestra de ellos, la estraña circunstancia de haber ignorado absolutamente el célebre decreto que promulgó aquella asamblea para la celebracion de la Pascua en un mismo dia por las Iglesias de Oriente y Occidente, que fué uno de sus actos principales (1).

Entrando en otro órden de argumentos, se dice que la ley del celibato impuesta á los eclesiásticos es injusta; pero se ha contestado con razon, que lo seria si la Iglesia impusiera á determinadas personas la obligacion de abrazar el estado sacerdotal y de hacer este y otros sacrificios á las elevadas funciones de su santo ministerio. Cuando obra espontánea y reflexivamente el que aspira al sacerdocio, cuando lo hace y debe hacerlo, consultada su vocacion, y contándose con las fuerzas necesarias para vivir ejemplarmente en la esfera de virtud y perfeccion peculiar suya, no puede alegarse severidad, ni injusticia de ninguna especie.

Pero la sociedad civil, las naciones, se insiste, sufren graves perjuicios por la aplicacion general de esta ley eclesiástica en la gran parte del mundo civilizado sometido al catolicismo: la poblacion disminuye y con ella la industria y la riqueza: las costumbres se pervierten y la corrupcion aumenta.

En primer lugar, las leyes penales contra el celibato, aun civil, ó indirectamente obligatorias del matrimonio, no contribuyen solas al aumento de la poblacion en los paises que las adoptan. La poblacion es proporcionada á los medios de subsistencia, á la clase de los territorios, á su buen régimen, á otra porcion de circunstancias que forman un todo complejo y especial, de que en su dia trataremos detenidamente. Además, no ha podido demostrarse que el celibato de los sacerdotes y de los religiosos haya sido nunca por sí solo la verdadera causa de la despoblacion de ninguna region del universo. Es ademas un caso de escepcion.

Italia, á pesar del número crecido relativamente, que hay en ella de sacerdotes y regulares, está en el dia mas poblada que bajo la dominacion de los romanos, cuyas leyes prohibieron con empeño mas ó menos constantemente el celibato. Cuando la Suecia era católica, dice Bergier, estaba mas poblada que lo está desde que se hizo protestante: los estados católicos de Alemania tienen en proporcion tantos habitantes como los paises sometidos al protestantismo. Lo mismo sucede en Suiza, y en Irlanda, á pesar de su miseria y sus desgracias, comparada con Inglaterra (1). La supresion del celibato eclesiástico y religioso seria ineficaz para promover el aumento de la poblacion y sobre hollar grandísimos respetos, apareceria al cabo como ridícula y pueril. Asi se ha demostrado con la exactitud rigorosa de los cálculos numéricos.

Se ha exagerado malignamente el número de los célibes consagrados al culto católico. En Italia hay catorce millones y medio de habitantes; y doscientos ochenta mil eclesiásticos, esto es, un dos por ciento de la totalidad de los habitantes. En España y en Francia apenas llegan á la centésima parte de la poblacion. En la mayor parte de los demás pueblos católicos la proporcion es aun menor.

«Hay mas, decia el autor de los anteriores datos estadísticos á fines del siglo pasado y todo el mundo conoce que si ahora se repiten las investigaciones, el argumento aumentará en fuerza por las consecuencias que han dejado en pos de sí las revoluciones y reformas políticas, hay mas, sobre el total de seis millones y de doscientas mil mugeres aptas para el matrimonio, se cuentan un millon y cuarenta mil que no están casadas, y entre las últimas, solo setenta mil religiosas, ó la quincena parte de las mugeres célibes.»

«Del total de los hombres comprendidos en aquella suma hay por lo menos un millon que podrian casarse y no lo hacen, y entre ellos ciento treinta mil eclesiásticos y religiosos, ó lo que es lo mismo, la décima parte (2).

Rebajemos de ese número de eclesiás-

(1) Véase á Yager en la obra citada, que pone de manifiesto estas y otras contradicciones del referido historiador.

(1) Bergier, Diccio Teologic, art. *Celibato*.
(2) Anales politicos de 1782, núm. 91.

ticos célibes y religiosos de ambos sexos los que no tengan inclinacion al matrimonio, los que carezcan de medios para soportar sus cargas, los ancianos, los enfermos, los que paguen á la muerte su natural tributo, ¿y qué nos quedará de esos magníficos cálculos de la exageracion y la malicia?

¿Por qué no combatis el numeroso celibato de los criados de ambos sexos, de los soldados y marineros, de los jornaleros y los pobres, y de las prostitutas, sobre todo, que es por cierto mas perjudicial y de mas funestas y terribles consecuencias? Porque es difícil, me direis y tendreis razon; pero entonces, si teneis perdon y tolerancia, por las necesidades de la sociedad, para la mayor parte de esas clases de celibatos, muchos de ellos orígen de vicios y desórdenes ¿por qué os rebelais contra el único celibato, que tiene por objeto digno la santidad del ministerio sacerdotal y por base imprescindible la virtud y la pureza?

Achacais á los eclesiásticos la perversion de las costumbres, la corrupcion de la moral: pero ¿se la achacais con justicia? Buscad mas bien sus causas en las doctrinas irreligiosas, en el libertinage de ambos sexos, en el número de prostitutas, muy superior al de las religiosas, en el lujo escesivo que corrompe los matrimonios, en la mala educacion de los hijos, en el falso colorido que las costumbres y los hábitos sociales dan á las pasiones y vicios mas indignos.

Los eclesiásticos son hombres, y no exentos por lo mismo de fragilidad, pueden faltar al deber santo de la castidad: este abuso será en un número, por fortuna limitado, de individuos, acaso frecuente y deplorable: pero, por temor á tal abuso ¿ha de renunciar la Iglesia católica á esa digna y sábia ley de continencia que tanto la honra y la enaltece? Se ha dicho con acierto que el órden eclesiástico sujeta y pone freno á las pasiones y estravíos por grandísimos respetos. Contienen la santidad de su instituto, el temor de la deshonra, no solo individual, sino de clase; el menosprecio de la sociedad que ha de abrumarle, la opinion de todas las personas honradas, que jamás encontrarán atenuacion ni disculpa para el que, habiendo abrazado espontáneamente un estado perfecto, infringe criminalmente sus deberes. Además los eclesiásticos tienen á la vista para cada ejemplo de depravacion, muchos de pureza y de virtud.

Cierto es que en España, como en todas las naciones europeas, hubo una época tristísima en que el clero, á ejemplo de las demás clases, relajó la severidad de sus costumbres, y se entregó, en una gran parte, á la disolucion y al desenfreno; pero examínese la ajustada y virtuosa conducta de los prelados; estúdiense los cánones de los concilios, regístrense los anales del cristianismo, y se hallará que ninguna voz se alzó mas fuerte y mas enérgica que la de la Iglesia contra tamaños escesos, que la mancillaban y ofendian.

Aunque no falta quienes recelan que en Castilla y en los primeros tiempos de la restauracion, los clérigos tuvieron mugeres legítimas y barraganas ó concubinas, lo cierto es, que á pesar de haberse escudriñado con empeño los archivos y documentos antiguos para comprobarlo, no ha podido citarse ningun dato positivo respecto de Leon y de Castilla. Algo mas felices los adversarios del celibato en cuanto á la corona de Aragon, citan, mediado el siglo X, algunos ejemplares, muy reducidos por cierto, de presbíteros y clérigos casados. Así, Abad y Lasierra, tratando de esta cuestion, hablan de dos escrituras muy antiguas, una del monasterio de la O, y otra del archivo de San Victorian. En la primera se dice, que el obispo de Roda, Odesindo, visitando en el año 957 sus iglesias, tuvo el sentimiento de ver que habia fallecido su amigo el presbítero Blanderico sin dejar hijo, ni presbítero, ni disponer de ellas y que las cuidaba su muger. En la segunda se decia, que habiendo muerto en Plasencia Baron, presbítero, y su muger Adulina, dejaban su iglesia al monasterio de Obarra. Por último, en el antiguo ritual de la misma Iglesia de Roda, con motivo de preceptuarse la estrecha obligacion de guardar el sigilo sacramental, se lee: *Nemo hoc scire debet consilium nisi*

soli presbyteri: non frater, non amicus, non mater, non soror, non UXOR. *Quia quidam, sicut audivimus, amicis suis, vel* UXORI *suæ manifestavit peccata eorum qui occulé eis confessi sunt: sed ¡væ illis sacerdotibus qui talia agunt!: regnum Dei non possidebunt* (1). Estos documentos, concedida su exactitud en fé de quien los cita, pues no los tenemos á la vista, prueban sin duda que hubo en España clérigos casados, como en otras partes, lo cual nadie niega ni podria negar con fundamento; pero de ningun modo que lo hubieran sido despues de recibir las órdenes sagradas, ni que elevados al sacerdocio, faltasen á la ley de continencia impuesta por los concilios españoles con especial severidad, segun hemos demostrado. La esposa de Blanderico pudo cuidar de las iglesias que se citan en concepto de diaconesa ó de persona consagrada al culto, conforme al uso de aquellos tiempos: la del presbítero Baron dejó en union con él la iglesia que habian fundado al monasterio de Obarra, indudablemente porque los bienes de ambos habian servido para erigirla y sostenerla. Y en cuanto al precepto del Ritual de Roda, que cita terminantemente á las esposas de los presbíteros, el concilio de Gerona, celebrado precisamente en la corona de Aragon, en los dominios de que se trata, le esplica natural y suficientemente. Este concilio, teniendo presente el quinto cánon apostólico, y refiriéndose á los sacerdotes casados antes de recibir los órdenes sagrados, que no debian usar del matrimonio; pero tampoco abandonar sus esposas á los horrores de la miseria, permitia á estas vivir bajo el mismo techo que sus esposos promovidos al sacerdocio, siempre que un hermano de cualquiera de ellos viviera en compañía de los mismos como testigo de su continencia. Asi la crítica sana y bien intencionada, buscando la verdad de buena fé y libre de todo propósito maligno, reduce á sencillas y exactas proporciones los datos que se citan, tal vez con menos convencimiento que apariencias de raciocinio poderoso.

Se hallaban sin duda en España y en la época de decadencia, que se cita, como en todas las regiones del orbe católico, sacerdotes encenagados en la barraganía ó concubinato, que mancillaban con sus crímenes el santo ministerio: eclesiásticos en su mayor parte arrojados del seno de la Iglesia, que tenian hijos cuya suerte quiso fijar la ley civil; pero se ha dicho con exactitud: «estos tristes ejemplos hubieran escandalizado menos si se hubiese parado la atencion en que se trataba de sacerdotes rechazados generalmente por la Iglesia, y de sus hijos, que la legislacion civil no creyó debian ser responsables del crímen de sus padres.» Y aun en España, el deseo de reprimir tales escesos, vino muy pronto á debilitar y hasta imponer silencio á esta razon de humanidad y sentimiento. Las Córtes de Valladolid de 1351 (1), hicieron una enérgica reclamacion al Rey don Pedro el Justiciero sobre la insolencia, lujo y escesos de las barraganas de los clérigos, «que andaban muy sueltamente é sin regla, »trayendo paños de grandes contias con ado»bos de oro é de plata en tal manera, que »con ufanía é soberbia que traian, non cata»ban reverencia nin honra á las dueñas hon»radas é mugeres casadas....., é pidiéronle »merced que ordenase é mandase, como lo »hizo, á las barraganas de los clérigos tra»jesen paños viados de Ipre, sin adobo nin»guno, porque sean conocidas é apartadas de las dueñas honradas é casadas.»

No bastando esta providencia para cortar el mal, generalmente lamentado, las Córtes de Soria de 1380 (2) pidieron á don Juan I que se privase á los clérigos de la facultad de instituir á sus hijos herederos, y se anularan todos los fueros, cartas y privilegios que se la otorgaban, «Que en algunas cibdades »é villas é logares del nuestro regno han »cartas é privillegios que los fijos de los clé»rigos que hobieren en sus barraganas que »hereden sus bienes é de otros cualesquier

(1) Abad y Lasierra sacó una copia de este Ritual, escrito en letra gótica y en el siglo XI, á su juicio, que debe hallarse en la Academia de la Historia. Marina, Ensayo histórico crítico.

(1) Peticion 25.
(2) Peticion 8.

»sus parientes, asi como si fuesen de legíti-»mo matrimonio, et por esta razon que dan »ocasion para que otras buenas mugeres, asi »viudas como vírgenes, sean sus barraganas »é hayan de facer pecado. Et que desto vie-»ne muy grand deservicio á Dios é á nos, »é muy grand escándalo é dapno á los pue-»blos dó esto acaesce.» Y el Rey conformándose, ordenó: «Que los tales fijos de clérigos que *non hayan nin hereden los bienes de los dichos sus parientes, nin de otros parientes, nin hayan cualquier* manda ó donacion ó vendida que les sea fecha agora nin de aqui adelante: é que cualesquier privillegios é cartas que tengan ganadas ó ganaren de aqui adelante..... que non valan.»

Terminaremos este punto recordando que los escándalos que afligieron á la Iglesia en el período desgraciado á que nos referimos, ocurrian cuando la sociedad entera, sin distincion de clases, gemia bajo el peso de una corrupcion universal. Los señores feudales, que no conocian otra ley que la de la fuerza, ni freno alguno á sus pasiones, se apoderaban de los beneficios eclesiásticos, hacian de ellos una parte de su patrimonio, y poco escrupulosos en la eleccion, los daban á sus protegidos, sin cuidarse gran cosa de sus merecimientos y virtudes: *inde mali labes.* En una palabra, el clero daba mucho escándalo, pero no era peor que la degradada sociedad de que formaba parte.

La constancia y fervor de los prelados, apoyados enérgicamente por la potestad civil, lograron por fin estirpar en nuestra pátria la fea mancha del concubinato.

Se encarece que con la doctrina del celibato profesada por la Iglesia, se degrada y afea el estado conyugal, y se perjudica á la sociedad haciendo que se mire con menor estimacion como imperfecto. El argumento peca de inexactitud y de malignidad á un mismo tiempo. Siguiendo el ejemplo del Salvador, que predicó el matrimonio como santo, digno y perfecto con su género especial de perfeccion, el cristianismo predicó tambien la dignidad de la muger virtuosa, y la elevó á su altura primitiva desde la abyeccion y la esclavitud á que la habian llevado los absurdos de la idolatría y la corrupcion sensual del paganismo.

La Iglesia católica se ha limitado á declarar, con el asentimiento del género humano y de la razon en todos los tiempos y paises, *que la continencia es un estado mas perfecto*, y por tanto mas conveniente á los ministros de un Dios vírgen y perfecto. No por esto es vituperable, sino muy al contrario, á los ojos de la religion y de la Iglesia, el estado conyugal que tiene, repetimos, su género especial de perfeccion, aunque no llegue á tanto grado.

El celibato, se dice, por último, no es una ley divina. Cierto, lo es solo de disciplina, lo es solo de la Iglesia; pero no por eso menos respetable. Hemos demostrado que tiene su raiz en las palabras de Jesucristo, en las máximas y el ejemplo de los apóstoles, en las decisiones y la práctica de la Iglesia primitiva y en las poderosas razones que aun nos reservamos esponer, y bástale con ello para ser santa, respetada, inviolable.

Si el celibato eclesiástico, se añade, es tan recomendable y santo, si faltar á él es indigno y criminal, ¿cómo la Iglesia romana autoriza el matrimonio de los sacerdotes en el rito griego? La iglesia no le prescribe ni le autoriza, le tolera por circunstancias especiales, y le tolera deplorándolo siempre y procurando que desaparezca una disciplina, que siempre ha rechazado con laudable constancia para sus propios ministros.

Esta relajacion de la antigua disciplina general aparece en el siglo VII formulada como regla y precepto por los cánones del concilio *in Trullo* que se celebró en Constantinopla, y aun este concilio, como ya observamos, reconoció, en general, la ley de continencia. Sobre los términos y el profundo sentimiento con que la Iglesia latina ha tolerado la disciplina de la Iglesia griega en esta parte, consúltense en el VIII siglo las declaraciones del Papa Zacarías, en el IX la respuesta de Nicolás I á los búlgaros, y los escritos de Ratramne y de Eneas de Paris, en el XI las decisiones de Gregorio VII y las opiniones del

cardenal Humbert (1), y en los posteriores, notables documentos mas universalmente conocidos, y en especial los decretos de Benedicto XIV correspondientes á la pasada centuria, antes mencionados.

Por último, Lutero, siguiendo las huellas de los filósofos paganos y de los antiguos heresiarcas, ó mejor dicho, el impulso de sus propias pasiones, sostuvo que la estricta observancia del celibato es un sacrificio superior á las fuerzas de los hombres, contrario á la naturaleza, que mina la robustez y la salud, é imposible de guardar exactamente. La impugnacion es antigua, pero su victoriosa solucion tambien lo es.

Nada es imposible con el auxilio de Dios, digeron los Padres de la Iglesia, y este le obtiene todo el que sinceramente le impetra y le desea. La oracion, la lectura, la meditacion, las buenas obras, dan fuerza para vencer las pasiones é indemnizan con las delicias espirituales de las delicias del siglo (2).

La continencia no es penosa para los que han sido siempre castos y han huido del vicio, poniendo freno á la sensualidad de las pasiones. Es mas fácil renunciar al matrimonio que dejar á su esposa y á sus hijos despues de contraido, y sin embargo asi lo exigia Jesucristo y asi se practicaba en los antiguos tiempos de la Iglesia.

El matrimonio tampoco preserva al hombre débil de la influencia de los vicios, y en todos los estados puede incurrir é incurre en ellos el que no sabe dominarse. Mas fácilmente puede conseguirlo el que sintiéndose con vocacion al sacerdocio, recibe desde sus años juveniles una educacion ascética, robustecida despues por el convencimiento profundo de su dignidad y de sus deberes.

Ya lo hemos dicho; la Iglesia á nadie impone el sacrificio del celibato; elige sus ministros entre los que de su grado quieren profesarle y tienen libertad y derecho para hacerlo. Considera la espontánea vocacion del individuo como un llamamiento divino revelado á cada cual en lo íntimo de su conciencia; pero al dejar á los ordenados plena y absolutamente libre la eleccion, al recomendarles siempre y en el acto mismo de la ordenacion por boca del prelado que reflexionen maduramente en edad y tiempo apropósito, cuando la legislacion civil permite al hombre disponer de sí y de sus bienes para vínculos igualmente perpétuos, el yugo que van á imponer sobre sus hombros; al reiterarles que todavía pueden volver á la vida y á los alhagos del siglo (1), les recuerda de la manera mas esplícita, que una vez promovidos al subdiaconado, una vez abrazada la vocacion, han de cumplirla perpétua y dignamente, viviendo con el ausilio divino, en perfecta continencia y consagrándose hasta su muerte al santo ministerio. Y concluye dirigiéndoles esta sencilla amonestacion, propia solo de una madre cariñosa: «Meditadlo, que aun es tiempo; pero si perseverais en vuestro propósito, acercaos en nombre del Señor»

El ministerio sacerdotal impone privaciones y sacrificios, grandes privaciones y grandes sacrificios ¿quién lo duda?; pero es posible cumplirlos, hay medios de hacerlo; la razon lo dicta; la esperiencia lo acredita incontestablemente hace muchos siglos. Los eclesiásticos y los religiosos que quieran sobreponerse á la debilidad de su naturaleza y amortiguar el estímulo de sus pasiones, aléjense del mundo y acójanse á la meditacion y al estudio, haciendo de ellos su mas asídua compañía.

El estudio metódico y constante, el estudio intenso y continuado hace deslizar suavemente las horas y los dias, espiritualiza al hombre despojándole, digamóslo asi, de la parte terrenal, prepara al sacerdote al desinterés y á la caridad, que tanto embellecen sus actos, y modera la ambicion, ciertamente mas temible y menos fácil de domar aun que la concupiscencia.

Creemos bastantemente demostrado que la imposibilidad de observar el celibato sacerdotal alegada como razon ó como prete-

(1) Véase Yager en la obra citada.
(2) San Agust. De bono viduit.

(1) Véanse las palabras que usa el Pontifical romano para la ordenacion del subdiácono.

to por los filósofos paganos, por los antiguos heresiarcas, por Lutero y sus discípulos y por los enciclopedistas del siglo XVIII, última filiacion de esa cadena de absurdos é impiedades, existia solo en su imaginacion ó en sus deseos.

Examinemos ahora si ha habido en los pasados tiempos, si hay en la actualidad, si podrá haber en el órden sucesivo de los siglos, fundamentos sólidos y razones bastantes para variar ese precepto recibido tradicionalmente desde los primeros albores del cristianismo. Oigamos autoridades competentes.

«Quieren, dice San Ambrosio, los adversarios de la continencia sacerdotal ampararse de la ley antigua, cuando los levitas solo ofrecian el sacrificio por intervalos durante algunos dias; pero callan ú olvidan que aun entonces el pueblo lavaba sus vestidos y se purificaba durante dos ó tres dias para acercarse al sacrificio, como leemos en el antiguo testamento. Si la figura exigia tanta preparacion ¿cuánta mas ha menester la realidad?» «Aprended, esclama fervorosamente, aprended sacerdotes y levitas, como habeis de lavar vuestros vestidos para que os acerqueis puros y castos á la celebracion de los misterios religiosos (1).»

«El sacerdote cristiano, dice Yager (2) comentando elocuentemente estas palabras, penetra diariamente en el santuario, ofrece un sacrificio puro y sin mancilla, se une á su Dios; la administracion de los sacramentos le llama á cada instante á ejercicios santos y sublimes que piden una pureza de alma y cuerpo incompatible con los deberes del matrimonio. ¡Cómo! La santidad del celibato se ha exigido para el culto de las divinidades impuras del paganismo bajo el imperio de leyes corrompidas y de misterios infames ¿y no será indispensable al sacerdote cristiano bajo una ley de perfeccion que ha ennoblecido el celibato eclesiástico dándole una sancion divina?»

En efecto, la verdadera razon, la razon fundamental del celibato eclesiástico es la santidad y la dignidad del sacerdocio. Este punto de disciplina, que no queremos presentarle de otro modo, ha echado tan hondas raices porque está íntimamente enlazado con el dogma, y porque la naturaleza del sacerdocio le reclama bajo todos conceptos imperiosamente.

Sin él, ¿podria tener la Iglesia católica ministros celosos esclusivamente entregados al ejercicio de sus difíciles deberes? ¿podrian existir sacerdotes que, imitando á los apóstoles, llevasen al través de los mares y de los desiertos, con la muerte siempre pendiente sobre su cabeza, sufriendo desnudos y descalzos los rigores y asperezas de contrapuestos climas, desafiando el hambre y la miseria, la civilizadora religion de Jesucristo, la luz del Evangelio á los confines últimos del mundo?

Sin él, recibirian los mismos consuelos los enfermos, iguales limosnas los pobres, idéntica instruccion religiosa los niños y los fieles? ¿Se administrarian los sacramentos con el mismo celo y fervor, se predicaria la palabra de Dios tan asídua y provechosamente, miraria el párroco la grey encomendada á su solicitud como su propia familia?

¿Sin él, se habrian reunido esos millares de vírgenes que piden á Dios por las imperfecciones de los demás con la pureza de los ángeles, y se consagran á la enseñanza de las niñas desvalidas, que un dia llegarán á ser buenas madres de familia? Sin él, por último, ¿hubieran existido las *hermanas de la caridad*, honor del cristianismo, que han embellecido la religion, derramado el mas dulce consuelo sobre la afligida humanidad, y escitado la veneracion de los impíos y la admiracion del universo entero en los modernos tiempos?

La Iglesia quiere con razon que sus ministros no tengan otro cuidado, otra ocupacion, otro deber que la salvacion de las almas, otro esparcimiento y alegría que la de llevar el socorro y el consuelo á todas las aflicciones y miserias.

No temais que el fanatismo religioso arrastre demasiado número de hombres al celibato sacerdotal con perjuicio de los pueblos.

(1) San Ambros. De officiis, lib 1.°, cap. 50.
(2) Le Celibat. ecclesiastique, pág. 46.

La observancia de la virginidad, contestó ya San Gerónimo, es difícil y rara por lo mismo. *Difficilis res est virginitas, et ideo rara, quia difícilis* (1); y de todos modos urge mas atender á las necesidades de los pobres, que aumentar su número.

Los escándalos que por la fragilidad humana puedan alegarse son abusos que nada prueban contra la utilidad y la necesidad de la ley del celibato. ¿Y estaria exento de ellos el matrimonio de los clérigos? Las disensiones domésticas, la mala conducta de los hijos, la infidelidad de los esposos ¿no degradarian al sacerdocio hasta un punto trascendental y lamentable?

No decimos por eso, fuerza es repetirlo, que el matrimonio no tenga tambien su indudable pureza y santidad, proclamada por Jesucristo y bendecida por la Iglesia: la tiene y muy grande y muy laudable y muy útil para la sociedad: pero no la que conviene á los que se consagran perpétua y asíduamente al culto religioso.

Lutero mismo, autor de la doctrina y triste ejemplo de la práctica protestante, vaciló, dudó mucho, sostuvo una fuerte y penosa lucha, segun se deduce de sus escritos y de los de sus discípulos, y cuando, sucumbiendo al mal consejo de sus pasiones, verificó su enlace, doblemente sacrílego, con una religiosa, lo realizó de noche, ocultándose hasta de sus enemigos, y sufriendo, á pesar del fuego maldito de su desenfreno, angustias é inquietudes. Esta violacion de las leyes de la Iglesia atrajo á los protestantes el desprecio público. Erasmo se mofó picantemente de ellos con este agudo epígrama: *La reforma acaba por casamientos, como acontece en las comedias* (2).

El parlamento inglés reconoció la escelencia del precepto católico en la misma ley que promulgó permitiendo el matrimonio á los eclesiásticos: «*Conviene mas*, dijo á los »sacerdotes y á los ministros de la Iglesia, »vivir castos y fuera de matrimonio, y es de »desear que quieran de su grado abstenerse »de este vínculo (1).»

Y cuenta que el matrimonio de los ministros protestantes hace menor impresion, escandaliza menos, porque todo el que reflexiona un poco, piensa que donde no hay sacrificio, tampoco hay sacerdote.

¿Quereis saber lo que son el ministro protestante y el sacerdote católico, suponiéndolos igualmente virtuosos? Pues contempladlos cuando Dios envia al mundo para su castigo una de esas plagas asoladoras que derraman la muerte y el espanto sobre las naciones. En medio de los horrores de la epidemia que cubre la tierra de cadáveres, el sacerdote católico corre en pos de los enfermos; el ministro protestante huye de ellos. ¿Por qué? Porque puede mas la voz de la naturaleza que la voz de sus deberes, porque es padre de familia.

Y este mismo padre de familia, ¿cómo cumplirá el hermoso precepto de la caridad cristiana en perjuicio de sus hijos? El clero inglés es el mas rico del mundo; y sin embargo, por el testimonio mismo de los escritores protestantes, es, como no podia menos de ser, el que socorre y alimenta menos pobres y el que dá menos muestras de su ciencia.

Reasumiendo, el esplendor y santidad de la religion católica, la conversion y civilizacion del mundo por medio de la predicacion y las misiones, las magníficas catedrales de Europa, los asilos para los pobres y los enfermos, la creacion de las antiguas universidades, no hubieran existido, ó hubieran existido en reducida escala, sin el constante precepto del celibato eclesiástico, que tanto honra y enaltece á la Iglesia y sus ministros.

CELSITUD. Equivalente á *alteza*: tratamiento que tuvieron los Reyes de Castilla, hasta que con el advenimiento de la casa de Austria, tomaron el actual de *Magestad*. Véase **ALTEZA, CASA DE AUSTRIA, MAGESTAD, TRATAMIENTO.**

CEMENTERIO. Del latin *cœmeterium*, version de la locucion griega *coime-*

(1) Hieron, ad Jovin. lib. 1.°, cap. 31.
(2) Jager, obra citada.

(1) David Humé. Hist. de la Casa de Tudor, tom. 3.°, pág. 204.

terion (κοιμητήριον) conjugacion del verbo *coimao*, descansar, reposar, dormir, conjugado con la primera persona de singular, y por tanto, *yo duermo*, yo reposo, etc. Etimológicamente, pues, cementerio es lo mismo que *lugar de descanso, de reposo*: metafóricamente, en el lenguaje usual y legal, lugar sagrado en que se entierran, ó de otro modo se custodian los cuerpos, ó restos mortales de los difuntos. La enunciativa de *sagrado* se toma en su acepcion latina por meramente *bendito*: pues sabido es que apenas se dá un caso en que el cementerio reciba *consagracion* episcopal con el rigor canónico y propio de la palabra; sino mera bendicion del párroco ú otro presbítero. Viénele la denominacion de *sagrado* de los tiempos en que, estando contiguos á las iglesias, eran consagrados con estas; y despues, de que verificándose los enterramientos dentro de las mismas iglesias, la sepultura se decia con propiedad *sagrada*, cuando la iglesia lo habia sido, y por términos generales, aun cuando no habia sido sino bendita. De aquí el llamarse con mas propiedad los cementerios en los últimos tiempos *campo santo*.

Desde luego se comprende la íntima relacion del presente artículo con los de *cadáver*, *embalsamamiento*, *enterrar*, *entierro*, *funerales*, *panteon*, *sepultura*, y todavía otros muchos análogos, que no pudiendo omitirse, nos obligan á reducir el presente al establecimiento y vicisitudes de los cementerios.

PARTE DOCTRINAL.

SUMARIO.

Sec. I. INDICACIONES HISTÓRICAS.

Sec. II. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE CEMENTERIOS.

Sec. III. PRÁCTICAS Y DISPOSICIONES ECLESIÁSTICAS SOBRE CEMENTERIOS.

Sec. IV. PRÁCTICAS Y DISPOSICIONES CIVILES SOBRE CEMENTERIOS.

Sec. V. ADMINISTRACION Y POLICÍA DE LOS CEMENTERIOS.

SECCION I.

INDICACIONES HISTÓRICAS.

Todos los pueblos cultos han egercido la práctica piadosa de tributar á los muertos los últimos honores en testimonio de amor y de respeto. Los gentiles la consideraban como un deber sagrado exigido por la naturaleza y prescripto por los Dioses. El que hallaba en medio de los campos un cadáver desconocido y por lo menos no le cubria de tierra, cometia un crímen y debia hacer en honor de Ceres un sacrificio expiatorio.

Estas ideas y estas prácticas tenian su raiz en la creencia pagana de que las almas de los insepultos vagaban errantes durante cien años por las orillas de la laguna estigia, antes de entrar en la morada de los bienaventurados, como lo recuerda el autor de la Eneida.

Los egipcios fueron los primeros, ó de los primeros que practicaron el enterramiento ó depósito de sus muertos, rodeando de solemnidades este acto, en la creencia de que no podria alcanzar reposo en el otro mundo, el que no fuera enterrado en este. Pero en esa costumbre, ademas del objeto religioso, habia otros civiles tambien muy importantes, el de conocer si la muerte habia sido natural, ó violenta, y el de evitar los horrores de las enfermedades y contagios.

La privacion de sepultura se impuso como castigo desde los tiempos mas remotos á los asesinos, á los parricidas y á los traidores á su pátria, para evitar la repeticion de estos graves crímenes, y en efecto á muchos les contuvo, mirándose esta pena, principalmente entre los griegos y los romanos, como el último grado de infamia.

La dignidad del hombre exigia y exige siempre esta consideracion á sus restos mortales; y sin embargo es de observar, que cuando fueron generalizándose en estos pueblos los estudios filosóficos, las prácticas religiosas se desprestigiaron con daño de la sociedad, aunque erradas y absurdas como lo eran, y degeneraron las costumbres.

Lisimaco, ofendido del falso filósofo Teodoro de Cirene, conocido por el *ateo*, le ame-

nazó con mandarle colgar de lo alto de una cruz. «Intimidad, replicó este, á vuestros cortesanos con tales amenazas; á Teodoro le es indiferente que su cuerpo llegue al estado de podredumbre en la tierra ó en el aire.»

Platon recuerda que cuando Sócrates estaba próximo á espirar, le preguntó uno de sus discípulos cómo queria ser enterrado, y él respondió que se curaba poco de que su cuerpo fuese enterrado ó comido por los buitres.»

Que me arrojen despues de muerto en medio de los campos, decia Diógenes el Cinico. ¿No te horroriza, observaron sus amigos, que tu cuerpo sea presa de los animales carnívoros? Pondreis cerca de mí un palo para espantarlo. ¿Y qué aprovechará esa precaucion á tu cuerpo insensible? Pues si ya no siento, repuso Diógenes ¿qué mal pueden causarme devorándome?

Tiestes dirije á Atréo terribles imprecaciones, le desea una muerte horrorosa y añade:

Neque sepulchrum, quo recipiat, habeat portum corporis:

Ubi, remissa humana vita, corpus requiescat malis.

Ciceron tacha estas palabras de frívolas y supersticiosas. «¡Error lamentable, dice, creer que el sepulcro sea como un puerto en que el cadáver se halla al abrigo de los vientos y donde el cuerpo reposa en paz! Ciertamente, Pelops no tiene disculpa por haber imbuido tan malas doctrinas á su hijo, en vez de procurarle mas sanas ideas (1).»

»¿Qué le importa al filósofo, decia Sócrates, víctima tambien de la corrupcion y los crímenes que siguen siempre al descreimiento de los deberes religiosos, qué le importa al filósofo que su cuerpo sea presa de las aves ó devorado por los peces?.... No exijo de nadie los últimos deberes; á nadie recomiendo el cuidado de mis restos mortales.... Mecenas ha dicho con razon:

Nec tumulum curo, Sepelit Natura relictos (2).

(1) Cicer. Tuscul. lib. I.
(2) Senec. epist. 92.

Pero la humanidad entera, con leves escepciones en épocas lamentables, habia protestado y protestaba contra esa indiferencia filosófica, hija de la impiedad y del error.

»La práctica de enterrar á los muertos y de honrar su memoria, dice un erudito escritor, es tan antigua que los hombres tuvieron sepulcros antes que los dioses templos. Los templos mismos no fueron al principio otra cosa que sepulcros en los cuales se reunian los hombres para ofrecer sacrificios á los dioses. Los sepulcros construidos con mayor esmero se llamaban templos, y no conociéndose nada mas sagrado, se dió igual nombre á los edificios erigidos en honra de la divinidad (1).»

Asi lo atestiguaron Eusebio (2), Arnobio (3), Lactancio (4) y San Clemente de Alejandría (5), que citan á su vez la autoridad de antiguos escritores griegos.

Pero al tributar los últimos deberes á los muertos, lo verificaban los diferentes pueblos con ritos muy diversos.

Los egipcios, que profesaban el dogma de la inmortalidad del alma, embalsamaban los cuerpos prolija y cuidadosamente y los conservaban con esmero dentro de sus propias casas. En esto habia sin duda una exageracion; pero tal vez mas disculpable, bajo el punto de vista de la piedad y sentimientos de familia, que la de los griegos y romanos, los cuales quemaban los cadáveres y enterraban únicamente sus cenizas.

La piadosa ley de los cristianos de enterrar á los muertos es mas benigna y humana, mas conforme á las palabras y ejemplos de las sagradas letras y á las costumbres y tradiciones del pueblo hebreo.

El Señor dijo que el hombre, terminada su existencia, volveria á la tierra de que habia salido (6).

En la historia de los Patriarcas hallamos

(1) Les Siecles Paiens par l' Abbé de Castres.
(2) Euseb. de Præpar. evag. l. 2, c. 8.
(3) Arnob. Adv. gent. l. 5 y 7.
(4) Lactant. De falsa relig. et de orig. error
(5) Clem. Alex. l. 7. Strom.
(6) Gener. c. 3, 19.

ya la manera con que verificaban sus enterramientos. Abraham adquirió dos subterráneos para que en ellos descansaran sus restos y los de su esposa Sara y toda su familia (1) Isaác y Jacob, que anhelaban estar reunidos, aun despues de muertos, con su familia y descansar con sus padres, fueron enterrados en ellos (2). ¿Quién no vé la creencia de la vida futura en esta cuidadosa sepultura comun de los Patriarcas?

La ley de Moisés prohibió usar en los entierros de las costumbres supersticiosas de los Cananeos (3).

Entre los judíos era un gran oprobio ser privados de sepultura, como lo hemos dicho de los demás pueblos. No tenian sitio determinado para los enterramientos, y aunque lo mas comun era construir ó abrir los sepulcros cerca de los caminos públicos, los colocaban tambien en cuevas, en jardines y aun dentro de las ciudades. Sabido es, que el sepulcro que José de Arimatea habia preparado para su cadáver, y en el que depositó el cuerpo del Salvador, estaba en su jardin y abierto en la roca. Moisés, Aaron, Eleazar y Josué fueron enterrados en los montes, y los sepulcros de los reyes se labraron tambien bajo el que sirvió de asiento al Templo.

Los sepulcros romanos se colocaban generalmente junto á la vía pública, segun Varron, para recordar á los pasageros que eran tan mortales, como aquellos cuyos restos contemplaban, (4) y ademas, conforme atestiguan los jurisconsultos, á fin de no profanar las cosas sagradas existentes en las ciudades (5).

No era, sin embargo, desconocido entre los paganos lo que despues se llamó cementerio ó reunion de sepulcros; los griegos lo llamaban tambien *polyandrion* y los latinos *sepulchretum*, y *conditorium* (6).

(1) Ibid., c. 23, 15: c. 16, 9.
(2) Ibid., c. 49, 29.
(3) Levit. c. 19, 27: Deut., c. 14, 1.
(4) Varron de ling. lat. lib. 5.
(5) Paulo, lib. 1.° senten., tit. 21. §. 4.°
(6) Gaspar Barthius, l. 43, c. 13: Anton Nebrissensis, in quinquages. 12.

SECCION II.

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE CEMENTERIOS.

Por las indicaciones consignadas en la seccion 1.ª y por la historia general, se vé que el enterramiento aislado, diseminado, es el mas antiguo; y tambien el que debia suponerse y aun el único posible en los primeros tiempos. La sociedad misma estaba, digámoslo así, diseminada. No era comun una civilizacion desarrollada, una centralizacion vigorosa; y el individualismo se hacia notar aun en los enterramientos. La fuerza del hábito despues, y siempre el apego al *mio* y *tuyo*, el instinto de la propiedad, la propension al dominio, que parecen inseparables del hombre; los sentimientos tambien de amor y ternura, de respeto y piedad para con los restos mortales de los que fueron nuestros padres, nuestros hijos ó hermanos, nuestros amigos y personas queridas; asi como le dieron fundamento y orígen, dieron duracion al sentimiento humano, natural, de tener cada uno cerca de sí ó bajo su particular custodia, de conservar al alcance de su personal solicitud, de preservar de ultrajes y substraer al olvido por su confusion con otros en panteones generales, ó fosas comunes, el tesoro venerando de su amor y piedad. Este conjunto de causas, decimos, hizo que por mucho tiempo, y en algunos pueblos todavía los enterramientos particulares hayan coexistido con los cementerios comunes, y aun disputado á estos la preferencia.

Influia para ello además el general descuido, y hasta abandono de los cementerios; y con natural y mayor energía el sentimiento religioso y práctica de enterrarse los fieles en las iglesias. Aun allí se ha venido notando la doble tendencia, el antagonismo de hechos que hemos notado: el templo era panteon enterramiento comun; y al mismo tiempo aspiraban, cuanto podian á hacerlo peculiar, por capillas y enterramientos de familia, y el que eso no podia, por compra de sepultura á perpetuidad, ó para cierto número de generaciones.

Ciertamente que en el enterramiento en la iglesia, como antes en el terreno contiguo á ellas, habia un sentimiento religioso por demás laudable; y que aquí no nos detenemos á esponer; pero habia tambien algo de repugnante, posibilidad de profanacion, y de peligro para la salud pública. Los juicios de Dios son inescrutables; pero ¡cuántas veces reposaria en el lugar santificado, al pié de los altares, al lado de un mártir, de un justo beatificado, el cuerpo, cuya alma habria sido destinada á suplicios eternos por el juicio inexorable de Dios! ¿Cómo era evitable la insalubridad siempre, y mas en tiempo de epidemias, en iglesias lóbregas, húmedas y de suyo insanas?

No se ocultaban estas razones, ni podian á los que regian la Iglesia y el estado: y vemos ya en tiempos los mas remotos la idea y práctica de enterramientos comunes, fuera de los templos, pudiendo decirse que entre los cristianos son coetáneos á los primeros templos y basilicas, pues cementerios eran los enterramientos comunes fuera de las iglesias; pero contiguos á ellas.

Otra causa contribuyó no poco á generalizar, y aun á hacer mirar como sagrada la idea y práctica de los cementerios, á saber las persecuciones sangrientas contra los cristianos en los tres primeros siglos de la Iglesia, de donde data el orígen, y uso religioso de las catacumbas.

De todos modos, el cementerio es un género de enterramiento que concilia perfectamente las consideraciones religiosas y políticas que pueden apetecerse; y que se aspira á satisfacer por el enterramiento aislado; y esto no tiene hoy la menor duda, si algun dia pudo tenerla. Establecidos fuera de las poblaciones y en lugar adecuado, gana en ello la salubridad pública; y la accion del aire libre, con otras precauciones de que hacemos mérito en la seccion 5.ª, neutralizan los efectos consiguientes á la acumulacion en tan reducido espacio de tantos cuerpos en descomposicion. Las cercas, especial custodia, y buena administracion, aseguran á cada familia el depósito de su ternura y recuerdos. Siendo fácilmente susceptible un cementerio en campo abierto de cuanta ampliacion sea necesaria, dá lugar á consultar las exigencias del aumento de poblacion y de los tiempos, lo cual no era posible en los templos, no siendo infrecuente por ello tener que apelar al temible recurso, y especie de profanacion ademas, de la estraccion y trasporte de los cuerpos á la fosa comun antes del período natural de la total descomposicion. La amplitud de un cementerio, permitiendo el uso de panteones, sarcófagos, y mausoléos particulares, satisface al sentimiento de familia, y todo otro sentimiento noble de amistad, de ternura, de gratitud, etc. Lo sagrado del lugar, las leyendas multiplicadas y espresivas, los monumentos, cruces y signos de religion esparcidos por todas partes, la concurrencia de fieles, el recogimiento, las plegarias, las lágrimas de tantos como á ellos concurren, escitan y favorecen el sentimiento religioso, cuanto es dable. Si á todo esto, en fin, se llega, que, como ya ha tenido lugar en muchos casos de que puede servir de ejemplo el cementerio de una de las capitales de provincia de que hacemos mérito despues, es conciliable en la ereccion, régimen y administracion de cementerios la intervencion de la potestad eclesiástica y civil, y sus respectivos fueros y derechos, incluso el de sepultura, nada hay que no recomiende el establecimiento de cementerios, sino como enterramiento esclusivo y único, como general al menos; salvas las pocas escepciones, que aconsejan razones de superior órden y de que hacemos mérito en su lugar oportuno.

Las razones arriba indicadas, y otras muchas, la fuerza de las circunstancias, han obligado á una y otra potestad á deferir á las exigencias de los tiempos, y asi se refleja en las prácticas y determinaciones de cada una, que esponemos en las secciones 3.ª y 4.ª

SECCION III.

PRÁCTICAS Y DISPOSICIONES ECLESIÁSTICAS SOBRE CEMENTERIOS.

Desde el principio de la Iglesia se usó la honrosa sepultura de los muertos.

Los subterráneos ó catacumbas de Roma y otros puntos fuerón, digámoslo asi, los primeros cementerios de los cristianos. Acosados por la persecucion, habian llevado á ellos los huesos de los primeros mártires y protegidos por la soledad y el silencio, se congregaban para practicar ante sus reliquias las ceremonias religiosas. En estos subterráneos, algunos vastísimos, (VEASE CATACUMBAS) se enterraban los cuerpos de los fieles. Este uso fué estendiéndose á medida que se estendia la doctrina del Salvador, y dió orígen, cuando cesó la persecucion, al establecimiento de los cementerios ó *dormitorios*, llamados asi para atestiguar, como digimos, la fé en la resureccion á mejor vida.

Conforme se iban erigiendo iglesias, iban trasladándose á ellas las reliquias de los mártires, y los cristianos querian ser inhumados cerca de estos, como sus antepasados, porque creían santificarse en cierto modo aproximándose á ellos, porque confiaban en su intercesion, y porqué establecidos los cementerios en las inmediaciones de los templos, los vivos tenian un perenne recuerdo á fin de que orasen por los muertos.

Las ceremonias con que procedian á los entierros los primitivos cristianos eran las siguientes: «Lavados los cuerpos, los envolvian en lienzos finos y telas de seda, y á veces los adornaban con preciosos trages; los esponian públicamente durante tres dias orando y velando al lado suyo, y despues los conducian á la última morada. Acompañaban al cuerpo con cirios y hachas, cantando salmos é himnos en alabanza de Dios y para significar la esperanza de la resureccion. Se decian por los difuntos preces y oraciones, se ofrecia el santo sacrificio, se daba á los pobres el festin llamado *agape* y auxilios ó limosnas; se renovaba su memoria al cabo del año y en los sucesivos, ademas de la conmemoracion general que se hacia todos los dias en el sacrificio de la misa. Para honrar y conservar su memoria se enterraban á veces con ellos las insignias de su dignidad, los instrumentos de su martirio, redomas ó esponjas llenas de su sangre, las actas del martirio, su epitafio ó al menos su nombre, medallas, ojas de laurel ú otro árbol siempre verde, cruces, el evangelio... El cuerpo se colocaba de espaldas con la cara vuelta hácia el Oriente (1).»

Algunos escritores se oponian á la esmerada proligidad y al escesivo lujo en estas sagradas ceremonias. S. Efrem dijo en su última voluntad: «Acompañadme con vuestras oraciones, y reservad los aromas para ofrecerlos á Dios.»

Segun la práctica y el derecho de los romanos, cualquier lugar en que se sepultara un muerto ó su cabeza, como parte principal del mismo, se estimaba religioso. Conforme á las leyes de la Iglesia, no basta la inhumacion, ni puede imprimirse aquel carácter á un terreno profano por autoridad privada. El acto de erigir los cementerios consagrándolos con solemne rito, mediante las preces y bendiciones sacerdotales, incumbe al obispo y no puede ejercerle el párroco sin delegacion ó comision del mismo.

Una vez consagrados, ó benditos, se les debe veneracion y reverencia. En algun tiempo fueron considerados como lugares de asilo.

Solo las iglesias parroquiales podian tener cementerios: hoy aun las cofradias.

El concilio de Braga, celebrado en 563, prohibió absolutamente enterrar á nadie dentro de las iglesias, tolerando que en caso de necesidad se hiciese fuera y al rededor de los muros (2).

El Toledano tercero ordenó que los cuerpos de todos los religiosos que pasasen de esta vida fuesen llevados cantando salmos á los sepulcros. «Así conviene, dice, y es necesario que se dé sepultura á todos los cristianos (3).»

A mediados del siglo IX se reiteraba igual prohibicion, invocando los preceptos y costumbres de la Iglesia, y ordenando que se

(1) Costumbres de los primitivos cristianos por el Abad de Fleuri.

(2) Item placuit ut corpora defunctorum nullo modo intra Basilicam Sanctorum sepeliantur, sed, si necesse est, de foris circa murum Basilicæ usque adeo non abhorret. Conc. I, cán. 18.

(3) Cán. 22.

destinaran á los enterramientos el átrio, el pórtico y los terrenos inmediatos al templo, pero de ningun modo cerca del altar donde se celebra el divino sacrificio. *Intra Ecclesiam vero et prope altare ubi corpus et sanguis Domini conficitur, nullatenus sepeliantur* (1).

Pero en este mismo siglo se fué quebrantando un rigor tan saludable. Se concedió primero á los obispos y presbíteros, despues á los emperadores y príncipes que ya no se enterraran en el átrio ó vestíbulo, sino dentro de la misma iglesia (2); obtuvieron mas tarde lo mismo algunos legos por causa de honor, dignidad ó grandes beneficios dispensados á la Iglesia; y por último se estendió y generalizó esta tolerancia en el siglo X hasta el punto de establecerse la costumbre de enterrar á todos dentro de los templos, no obstante los perjuicios que el aire nocivo de estos parajes cerrados ocasionaba á la salud pública; y el reiterado empeño con que los concilios y leyes eclesiásticas quisieron limitar estas concesiones, aunque en vano.

Pero aun establecida y generalizada la costumbre de enterrar en las iglesias, no se hacia indistintamente en cualquier parte de ellas, y solo rara vez y por distincion muy especial se permitian las sepulturas en el coro ó cerca del altar (3).

El ritual romano de Pablo V dice: «donde exista la antigua costumbre de sepultar á los muertos en los cementerios, obsérvese, cuidando de restablecerla en cuantas partes fuere posible; donde no pueda evitarse, añade, entiérreseles lejos de los altares y del coro (4).»

En la displina actual se reserva únicamente este lugar de honor á los patronos y fundadores.

Por regla general los feligreses deben enterrarse en la parroquia donde hacian parte de la comunion de los fieles durante su vida; pero se esceptúan de ella los que tienen panteon ó sepultura de familia (1), los que han muerto fuera del pueblo de su vecindad y no pueden ser trasladados fácilmente, y los que eligen otro lugar de enterramiento.

Pero la eleccion debe ser libre y hecha con recta intencion. Cuando alguno deja el sepulcro de sus mayores y designa otro lugar menos religioso por dolo, por desprecio ó para no satisfacer á la iglesia su porcion canónica, la eleccion queda sin efecto (2); y está terminantemente prohibido á los sacerdotes regulares y seculares que induzcan á nadie á elegir con pacto y juramento sepultura en sus iglesias ó cementerios, y aun elegida, se tendrá la eleccion como no hecha, y se enterrarán en su propia parroquia (3).

Esta laudable providencia cortó grandes y perniciosos abusos, que afeaban, por culpa de algunos, el decoro de la clase sacerdotal.

La parroquia debe celebrar en todos los casos las exequias de sus feligreses difuntos.

Los monges y religiosos se enterraban, como parroquia suya, en las iglesias ó cementerios de sus conventos, y los canónigos y beneficiados en los de su catedral ó beneficio.

Los cementerios, se hallan comprendidos en la primera, y por tanto en la mas respetable clase, de los bienes que pertenecen á la Iglesia, y en su virtud exentos del comercio de los hombres é incapacitados para convertirse en objeto de negociacion ó lucro (4).

Si por cualquier motivo fueren profanados, los ministros del Señor los reconcilian y habilitan nuevamente por medio de las ceremonias marcadas al efecto en el pontifical ó ritual romano.

(1) Concil. Nannetens., ann. 850, cán. 6.
(2) Euseb. l. 4. De vist. Constantin. c. 71: Chrysostom. Hom. 26 in 2.ª ad Corinth.
(3) Ferrar., de non sepelend. mort. prope aras.
(4) Ubi viget antiqua consuetudo sepeliendi mortuos in cæmeterio, retineatur, et ubi fieri potest, restituatur.

(1) Nos, Instituto majorum Patrum considerantes, statuimus nonnunquamque in majorum suorum sepulchris jacere... Nulli tamen negamus propriam eligere sepulturam, et etiam alienam... dejando á la iglesia parroquial su porcion canónica. Leon III, año 810, 28, lib. 3.º de las Decretales, De Sepulturis.
(2) Tit. 28, lib. 3.º de las Decretales, cap. 3.
(3) Sexto Decret. tit. 12. c. 1.
(4) Terra cœmeterialu pro sepultura fodienda vendi non debet... ne quiequam omnino præsumant exigere de hac causa. Lib. 3.º Decret., tit. 28, c. 15: Inoc. III.

SECCION IV.

PRÁCTICAS Y DISPOSICIOCES CIVILES SOBRE CEMENTERIOS.

Al examinar en esta parte el derecho civil y administrativo, no podemos escusarnos de repetir que los romanos prohibieron la inhumacion de los cadáveres dentro de las poblaciones por la ley de las Doce Tablas, que decia: *Hominem mortuum in urbe ne sepelito, neve urito.* Hadriano estableció en su Edicto contra los infractores de este juicioso precepto pena pecuniaria, y la renovaron Diocleciano y Maximino (1).

Teodosio el Jóven reprodujo asimismo esta prohibicion, deseando que los sepulcros, colocados fuera de las ciudades, recordaran al hombre la fragilidad de su existencia, al paso que no viciaran la salud pública (2).

Durante las persecuciones religiosas, Valeriano habia confiscado los cementerios de los fieles, como los demás edificios y lugares destinados al culto católico; pero Galieno, con mejor acuerdo, los restituyó á la Iglesia por un rescripto público (3).

En el órden civil, el Emperador Leon fué el primero que introdujo (4) la perniciosa costumbre de enterrar dentro de las Iglesias, aunque á la verdad con grandes limitaciones, que no pudieron impedir que se generalizara completa y absolutamente.

La violacion de los sepulcros fué considerada y castigada como un crímen (5).

Viniendo á nuestra España, donde tambien quedó tan profundamente arraigada la práctica de enterrar en las iglesias, que ha llegado casi hasta nuestros dias, hallaremos que ya la legislacion de Partida, siguiendo como siempre las huellas de la canónica, procuró, aunque en vano, poner coto á este abuso.

Don Alonso el Sábio consagró un título íntegro á esta importante materia, y considerándola en el preámbulo bajo su aspecto religioso, dice con sentidas frases: «Erraron »algunos homes muy malamiente creyendo »que cuando muere el cuerpo del home, que »muere otrosí el alma con él et que todo se »perdia en uno; et este fué entendimiento de »homes desesperados..... Onde, pues que »los cristianos hobieron et han vida ordena»da de como vivan, et creencia verdadera »de como han de resucitar et ser salvos los »que ficieren bien, por ende fué ordenado »por los Santos Padres que hobiesen sepul»turas ciertas cabo sus eglesias et non en »lugares yermos et apartados dellas, yacien»do soterrados en los campos como bestias.»

La ley 2.ª del mismo título es tan religiosa como notable, históricamente considerada, porque encierra, no solo las creencias, sino hasta las preocupaciones de su tiempo, y merece ser transcrita: «Cerca de las egle»sias, recuerda el sábio Rey, tovieron por »bien los Santos Padres que fuesen las se»polturas de los cristianos, et esto por cuatro »razones: la primera, porque asi como la »creencia de los cristianos es mas allegada á »Dios que la de las otras gentes, que asi las »sepolturas de ellos fuesen acercadas á las »eglesias: la segunda es porque aquellos »que vienen á las eglesias, quando veen las »fuesas de sus parientes ó de sus amigos, se »acuerdan de rogar á Dios por ellos: la ter»cera, porque los acomiendan á aquellos »santos á cuyo nombre et á cuya honra son »fundadas las eglesias, que rueguen á Dios »señaladamente por los que yacen en sus »cementerios: la quarta, porque los diablos »no han poder de se allegar tanto á los »cuerpos de los muertos que son soterrados »en los cementerios, como á los que yacen »de fuera: et por esta razon son llamados los »cementerios amparamiento de los muertos. »Empero antiguamente los Emperadores et »los Reyes de los cristianos ficieron estable»cimientos et leyes, et mandaron que fuesen »fechas eglesias et cementerios de fuera de »las cibdades et de las villas en que soter»rasen los muertos porque el olor dellos non »corrompiese el aire, nin matase á los vivos.»

(1) L. 12, Cód. de religios. et sumpt. funer.
(2) L. 6, Cód. Theod. De sepulcro violato.
(3) Euseb., lib. 7, cap. 3.
(4) Véanse sus Novelas.
(5) L. 1.ª, Cod. de Sepulc. violat.

La ley 3.ª declara, copiando las reglas canónicas, á quien pertenece el derecho de enterrar los muertos.

La 4.ª esplica minuciosamente quiénes deben mandar establecer los cementerios y cuáles habian de ser su medida y estension.

«Et los obispos, dice, deben señalar los »cementerios á las eglesias que tovieren por »bien que hayan sepolturas, de manera que »las eglesias catedrales hayan cada una de»llas quarenta pasadas á cada parte por ce»menterio, et las otras eglesias parroquiales »treinta.... Et por qué algunos dudarien co»mo se deben medir los pasos para amojonar »el cementerio, departiolo santa eglesia »desta manera: que en la pasada ha de ha»ber cinco piés de home mesurado, et en el »pié quince dedos de travieso.»

Las leyes 5.ª, 6.ª y 7.ª ordenan que cada uno debe soterrarse en la eglesia donde era parroquiano, y marcan los derechos que podian exigirse de los que morian intestados.

La 11 enumera las personas, que como escepcion á la regla general debian ser enterradas dentro de las iglesias, y lo hace indicándolas, no sin vaguedad, circunstancia que abre siempre fácil senda á los abusos. «Enterrar non deben, dice, á otro nin»guno dentro en la eglesia sinon á estas per»sonas ciertas que son nombradas en esta ley, »asi como los Reyes et las Reinas et sus fijos, »et los obispos et los abades, et los priores, et »los maestres, et los comendadores que son »perlados de las órdenes et de las eglesias »conventuales, et los ricos homes, et los »otros hombres honrados que ficiesen egle»sias de nuevo ó monasterios, et escogesen »en ellas sus sepolturas: et todo otro home »quier sea clérigo ó lego que lo meresciese »por santidat de buena vida et de buenas »obras.»

Cárlos III, monarca bien intencionado y amante de sus pueblos, cuyo gobierno acometió útiles reformas en varios puntos de administracion y buen régimen civil, era natural que no diese al olvido una materia tan grave é importante; y asi sucedió en efecto.

Respetando, como debia, las leyes y prácticas religiosas, dictó en su real cédula espedida en 3 de abril de 1787 á consulta del Consejo (1), providencias muy útiles para la salubridad pública y para el decoro de los templos.

«He tenido á bien resolver y mandar, di»ce en ella, que se observen las disposicio»nes canónicas, de que soy protector, para »el restablecimiento de la disciplina de la »Iglesia en el uso y construccion de cemen»terios, segun lo mandado en el Ritual Ro»mano y en la ley 11, tít. 13, P. 1.ª (arriba »citada), cuya regla y escepciones quiero se »sigan por ahora, con la prevencion de que »las personas de virtud ó santidad, cuyos »cadáveres podrán enterrarse en las igle»sias, segun la misma ley, hayan de ser »aquellas por cuya muerte deban los ordi»narios eclesiásticos formar procesos de vir»tudes y milagros, ó depositar sus cadáveres »conforme á las decisiones eclesiásticas, y »que los que podrán sepultarse por haber es»cogido sepulturas, hayan de ser únicamen»te los que ya las tengan propias al tiempo »de espedirse esta cédula.»

El mismo monarca ordenó que los corregidores, como delegados suyos y del Consejo, de acuerdo con los prelados eclesiásticos, comenzasen la ereccion de cementerios por los lugares que sufrieran epidemias ó estuviesen mas espuestos á ellas, siguiendo por los mas populosos y por las parroquias de mayores feligresías, y continuando por las restantes.

Los cementerios habian de construirse fuera de las poblaciones, siempre que no hubiera dificultad invencible ó grandes anchuras dentro de ellas, en sitios ventilados é inmediatos á las parroquias y distantes de las casas de los vecinos, aprovechándose para capillas de los mismos las ermitas existentes fuera de los pueblos.

Debia verificarse la construccion á la menor costa posible, bajo el plan ó diseño que hicieran formar los párrocos, de acuerdo con el corregidor respectivo. Este, en el caso de variedad ó contradiccion de dictámenes, es-

(1) Ley 1.ª, tít. 3.º, lib. 1.º de la Nov. Recop.

pondria el suyo al prelado para que se resolviera lo conveniente.

El coste de las obras se cubriria:

1.° Por los caudales de fábrica de las iglesias, si las hubiere.

2.° En su defecto, por todas las clases de partícipes en diezmos, á prorata.

3.° Los caudales públicos ayudarian al pago de estas obras con la mitad ó tercera parte del importe, segun su estado, y se facilitarian ademas los terrenos, siempre que fueran concejiles ó de propios.

Por último, en esta real cédula se mandaba hacer uso en los cementerios nuevamente creados del reglamento hecho, con acuerdo del ordinario eclesiástico, para el Real Sitio de San Ildefonso, en cuanto fuera adaptable á los mismos.

Este juicioso reglamento, meditado con prudente consejo, para que todos conociesen la utilidad y conveniencia del precepto general, puesto que el monarca empezaba por aplicarle, sin distincion de personas, ni de clases á uno de sus reales sitios, lleva la fecha de 9 de febrero de 1785 (1), y tuvo por objeto desde luego servir de modelo á todos los del reino bajo el aspecto de salubridad, policía y decoro de los funerales y enterramientos, conciliando las reglas de buena administracion con los respetos religiosos.

Porque está redactado con acierto, atendidos los tiempos y las circunstancias, y porque constituye, digámoslo asi, la parte mas útil de nuestra legislacion en la materia, creemos conducente hacernos cargo de sus disposiciones.

Asienta como regla indeclinable que todos los que fallecieran en el Real Sitio habian de ser enterrados en el cementerio allí establecido.

Los cuerpos se conducirian privadamente á la capilla de la orden tercera, inmediata á la iglesia parroquial, ó á la del cementerio, segun la voluntad de los difuntos y de sus testamentarios, á cuyo fin estarian siempre dispuestas unas andas con una caja cubierta y montada sobre ruedas, que se enviarian á la casa mortuoria cuando se pidiesen.

El cadáver permanecia en la capilla hasta que llegada la hora de decirse la misa y nocturno, se pasaba á la iglesia y se rezaban ambos oficios estando de cuerpo presente. Acabados, se le volvia á la capilla y desde ella se le conducia al cementerio en la hora mas oportuna.

En el caso de conducirse directamente el cuerpo desde la casa mortuoria al cementerio, se hacian tambien los oficios en la parroquia del mismo modo que si se hallara presente.

Al lado del cementerio se preparó casa para un eclesiástico, que tenia la obligacion de decir el oficio de sepultura en presencia del cadáver, y de dar al conductor una cédula espresiva del nombre del difunto y de la hora y lugar de su entierro, la cual se entregaba al párroco para que sentase la correspondiente partida. Este mismo eclesiástico decia en la capilla del cementerio las misas que se le encargaban por las almas de los sepultados en él.

No habia de hacerse novedad alguna en el pago y cantidad de derechos. A fin de no perjudicar á la parroquia en los de rotura, se señalaron en el cementerio otras tantas clases como habia en ella.

Para el depósito de cadáveres durante algun tiempo, que podia ocurrir por motivos judiciales ó por cualesquiera otros, se mandaron construir seis nichos en el cementerio y que se reservaran esclusivamente á aquel objeto.

Finalmente, se mandó hacer unido al cementerio un osario, donde se fueran depositando los huesos que resultáran con el discurso del tiempo, y que cuando hubiera la porcion competente se hiciera un oficio general por las almas de todos los fieles á quienes perteneciesen, y se les diera sepultura eclesiástica en lugar cómodo del mismo cementerio.

Gran paso era este, sin duda, en medio del absoluto abandono é indiferencia con que se habia mirado anteriormente este ramo, que tanto influye en las buenas ó malas condicio-

(1) Está inserto en la Nov. Recop. por nota á la ley 1.ª, título 3.°, lib. 1.°, antes citada.

nes de salubridad de las ciudades y los pueblos, y cuando habia que luchar con hábitos y costumbres envejecidos y tenaces; pero no se consiguió todo el éxito que debia esperarse, si bien el que se alcanzó, especialmente en las grandes poblaciones, fué ya muy provechoso.

En 15 de noviembre de 1796 (1) al publicarse las ordenanzas referentes á la policía y salud pública, se dispuso en el capítulo 2.° que hasta que llegara el feliz momento de la ereccion de cementerios rurales, cuidaran el presidente y la junta de gobierno del ramo que los cadáveres se sepultaran con la profundidad competente; que no se espusieran en parajes públicos cuando hubieran llegado á términos de putrefaccion; y que las mondas se hicieran en las horas, épocas del año y estado de la atmósfera menos espuestos á propagar los miasmas que despiden los cadáveres y sus despojos.

En circular de 26 de abril de 1804 se mandó activar el cumplimiento de la real cédula de Cárlos III en todo el reino, si bien por reales órdenes de 6 de octubre de 1806 y 13 de febrero de 1807, se hicieron escepciones de la regla general, razonables y fundadas en las leyes eclesiásticas, á favor de los arzobispos, y obispos, que debian ser enterrados en las respectivas catedrales, y de las religiosas, que lo habian de ser en los enterratorios de sus propios monasterios.

En 13 de enero y 17 de julio de 1807, y 20 de enero de 1808 se sujetaron nuevamente los fondos de fábrica y junta decimal á costear las obras de cementerios.

Reproducidos por las malas condiciones higiénicas, tristes períodos de epidemias ó incremento de enfermedades ordinarias, se avivaba el celo amortiguado y se reiteraba con empeño, menos constante de lo que convenia, el cumplimiento de las antiguas providencias.

Asi sucedió en 30 de junio de 1814, repitiendo de real órden á los individuos del consejo, encargados de mantener correspondencia continua con los pueblos que se les habian encomendado respectivamente, á los ayuntamientos y á los prelados, vicarios y párrocos que procediesen al establecimiento de cementerios proporcionados y capaces, y que pusieran el mayor esmero y exactitud en asunto de tamaño interés para el bien público.

Pasados los momentos de peligro, continuaban, sin embargo, el abandono y la apatía, como se deja conocer por los términos duros y severos de una real órden espedida en 22 de de noviembre de 1828. En vista de los inconvenientes con que se tropezaba para el establecimiento de los cementerios y del abandono de muchos corregidores; teniendo en cuenta que eran mas los pueblos que carecian de este beneficio, que aquellos en que los habia; siendo notorio que en algunos se hacia uso de los provisionales, en su mayor parte mas espuestos para la salud que la continuacion misma de los enterramientos dentro de las iglesias; y considerando que la seguridad de la salud pública es una de las principales causas de la felicidad de los pueblos, al paso que se aumenta con la adopcion de esta medida el decoro de los templos, se mandó estrechamente que ninguna autoridad, corporacion ó persona se escusara de prestar los datos y documentos pedidos por el consejo y las autoridades, ni de cumplir las órdenes dadas sobre el particular por los mismos ó el gobierno.

Por reales disposiciones de 8 de agosto de 1830, 20 de febrero de 1831 y 14 de noviembre de 1832 se reprodujeron las órdenes anteriormente citadas sobre la aplicacion de los fondos de fábrica y partícipes de diezmos al establecimiento de los cementerios.

Inauguradas las reformas, y creado el Ministerio de Fomento, encomendado al conde de Ofalia, noticioso el gobierno de que en Segovia se daba sepultura á los fieles en los templos, á pesar de estar construido un cementerio, ordenó que donde se hallaran ya establecidos, se procediese desde luego al enterramiento de los cadáveres, sin condescencia, ni disimulo alguno. Donde no los habia, encargó á los intendentes y prelados el cuidado de que

(1) Nota á la misma ley antes referida.

se diera principio á su construccion á espensas de las fábricas de las iglesias, que son las primeras obligadas á ello; en su defecto, de los fondos de propios, en aquellos pueblos que pudieran soportar este gravámen, destinándose al efecto terrenos concejiles, prévia la aprobacion de S. M.: y á falta de unos y otros propondrian las autoridades los medios mas adecuados. Para completar estas disposiciones se dijo en circular de 5 de diciembre del mismo año que cuando hubiera necesidad de ocupar terreno de propiedad particular, y no mediase cesion voluntaria, se echara mano de él y se abonase su valor en el concepto de espropiacion forzosa, conforme á la ley.

La notable instruccion publicada por don Javier de Búrgos en 13 de febrero de 1834, decia sobre este punto en su artículo 30:

«Entre las providencias de salubridad, complemento esencial de las medidas sanitarias, es importantísima la de construir cementerios... para que las exhalaciones de los muertos no infesten el aire que han de respirar los vivos y no aumenten asi las epidemias, que á veces adquieren por esta sola causa una asoladora intensidad.»

En 30 de octubre de 1835 se previno que los cadáveres de las religiosas se habian de sepultar precisamente en los átrios ó huertos de los monasterios y conventos, señalándose en ellos para este objeto un paraje, con esclusion absoluta de los coros bajos y de las iglesias.

En su artículo correspondiente hablaremos del derecho de sepultura, y de enterramiento de personas privilegiadas. Por lo que hace á cementerios, quede sentado, que hoy el derecho comun de los españoles, es que haya de haberlos en todos los pueblos, como ya se verifica en la mayor parte de ellos, con prohibicion, por regla general, de enterrar en las iglesias.

SECCION V.

ADMINISTRACION Y POLICÍA DE LOS CEMENTERIOS.

Ciertamente que en los cementerios, por su posicion en campo abierto y despoblado, mal cercados en general, y encomendada su custodia, la alternativa y turno de los enterramientos, y el acto material de la *humacion* á personas de ordinario mal retribuidas, la administracion y policía requieren reglas mas precisas, y ser aun mas esmeradas que en el enterramiento en las iglesias, en que por la solemnidad y decoro del culto, por el celo, é inspeccion diaria y asídua del clero y autoridades, por la concurrencia frecuente de los fieles, era mas fácil prevenir, notar y corregir los abusos. La *inhumacion* se verificaba entonces á vista del párroco y concurrentes, durante los cantos funerarios; la sepultura estaba por muchas horas á la vista de todo el mundo, pudiendo ser notada por todos su profundidad, el estado y destino de los restos mortales estraidos; el uso oportuno de la cal sobre los cadáveres; que el sepulcro era cerrado y cubierto, sin que en cada turno se enterrase en él mas que un solo cadáver, etc., mientras todo lo contrario sucede de ordinario en el enterramiento de la clase general en los cementerios. En ellos, en la mayor parte de los pueblos, el conjunto de operaciones materiales está encomendado á ignorantes, y no pocas veces desapiadados sepultureros, sin responsabilidad, no siendo infrecuente el dejar los cadáveres casi insepultos, espuestos al ultraje y profanacion: el hacinarlos en una misma hoya, mediando solo entre ellos una ligera capa de tierra, con otros abusos ó descuidos, ofensivos á los sentimientos de religion y humanidad; tanto como al decoro y salubridad pública. Podriamos citar hechos, que no se mencionan ni se escuchan sin horror; y solo como una escitacion enérgica á quien corresponda, como una justificacion del rigor que exigimos en la administracion y policía de los cementerios, diremos haber sido testigos de la consternacion de una familia, del indecible dolor y desesperacion de un padre, cuya hija habia sido estraida y devorada por los perros en el cementerio en la noche misma de su enterramiento. He aquí, pues, los puntos á que no puede menos de prestar atencion una y otra autoridad, la eclesiástica y la civil, cada una en su caso para la cons-

truccion, administracion y policía de los cementerios.

1.° *Eleccion de lugar saneado, á la distancia conveniente de la poblacion, y al aire que mas favorezca á la salubridad.* En terrenos quebrados, desiguales, ó montuosos, pende este último punto de las circunstancias tópicas. En vano las buenas reglas físicas, y de higiene pública, prefijarian si es mas adecuado para dicho fin el aire del norte, del sur, etc.; si la posicion estuviese tópicamente cerrada á estos vientos. La autoridad local debe proceder en esto con direccion ó consejo facultativo, eligiendo en todo caso un punto elevado, y abierto á las corrientes de los vientos. En terrenos planos ó despejados hemos visto aconsejar y situar los cementerios al aire del norte, mientras físicamente se comprende que debe ser al opuesto. El aire del norte es por su naturaleza y procedencia el mas á propósito para la salubridad de las poblaciones, y no debe venir infestado con las emanaciones de un cementerio. Todavía en esto hay que atender á los vientos dominantes en una localidad, debiendo situarse entonces el cementerio al viento opuesto el que mas domine.

2.° *Seguridad.* Apenas es esta posible de un modo absoluto contra las personas, no siendo por la vigilancia de encargados, que no en todas partes pueden nombrarse, ó costearse por escasez de recursos: pero en todas partes debe consultarse la seguridad contra los animales. La administracion pública puede solo emplear, pero no debe descuidar hasta donde sean posibles, los medios de cercas con la altura y cerraduras convenientes: conserges permanentes: vigilancia nocturna y visitas estraordinarias: profundidad conveniente de los sepulcros: y severidad de penas contra los que, de cualquier modo, abusaren de sus oficios ó atentaren contra el sagrado de estos lugares.

3.° *Decencia religiosa.* Constitúyenla principalmente los signos, leyendas y emblemas sagrados, entre ellos, como principal, el signo de la redencion, convenientemente colocado y repetido, como sobre las puertas, y en el centro del cementerio. la forma peculiar de los monumentos, sarcófagos, urnas, panteones ó enterramientos de familia: nada profano; todos á propósito para revelar, aun desde lejos, que aquel es un lugar religioso. En donde los recursos lo hagan posible, habrá capilla con altar, ó con la cruz al menos, para los responsorios y cantos funerarios: local cubierto, cerrado, y seguro para depósito de cadáveres hasta ser enterrados: y en algunas ciudades de Europa hay además un tercer local para reunion, descanso, y guarecimiento en caso de temporal, de las familias dolientes que van á rezar por sus finados. Donde nada de eso fuese posible, como en las poblaciones pequeñas y pobres, habrá, por lo menos, un pórtico, ó lugar cubierto para los responsorios, y un pequeño lugar cubierto y cerrado en que, á fin de prevenir todo lo que pueda parecer profanacion, ó falta de respeto, se conserven, y retiren de la vista, el féretro comun, instrumentos de inhumacion, etc.

4.° *Administracion espiritual y temporal.* Preparado así, y en tal estado ya un cementerio, podrá haber sido construido con fondos únicamente de la fábrica parroquial: con fondos meramente municipales: de empresa de particulares, como lo serán, y vemos lo son en el hecho, una ó mas cofradías sacramentales ó empresas y asociaciones puramente civiles y de especulacion: con fondos mistos en fin. En el primero, tercero y ulteriores casos, el cementerio no recibirá carácter público, ni se dará principio á las inhumaciones, sin que la autoridad secular lo visite, y las autorice en virtud de hallarse consultadas las condiciones de salubridad y demás que la incumbe examinar: en el caso segundo y siguientes, sin que lo visite la autoridad eclesiástica, y lo bendiga segun queda ya indicado, sin lo cual no recibe el carácter de lugar religioso que necesita: y en todos los casos los dueños ó conduceños del cementerio, formaran el reglamento de su administracion, con la tarifa de derechos, y espresion de todo lo que concurre á realizar el fin que la Iglesia y la sociedad se proponen en el establecimiento de estos enterramientos comunes. La autoridad eclesiástica lo aprobará en cuanto á los fines religiosos: la secular en

cuanto á los fines y profanos, estableciendo en su caso, los medios y condiciones de conciliar y dejar á salvo el derecho respectivo de sepultura, el de propiedad y demás que deban respetarse, como veremos despues se ha declarado por reales decisiones.

5.° *Formalidades para los enterramientos.* No debe entrar cadáver alguno en el cementerio sin que preceda mandato ó papeleta de admision del párroco, y además, si hubiese sido la muerte violenta, ó á mano airada, sin órden del juez, ó autoridad secular competente: y ni estos, ni aquel la darán sin certificado de defuncion, autorizado por el médico, ó facultativo asistente, documento que en casos de observacion por muerte repentina, debe ser estensivo á la presentacion de la corrupcion, único signo inequívoco de muerte en lances dudosos. Las leyes y disposiciones vigentes previenen lo oportuno sobre este punto, como veremos; pero en lo que omitieren, la administracion, el celo de los párrocos y autoridades locales debe suplirlo, asi como formalizarse por los párrocos el registro de enterramiento, ó numeracion de sepulturas, en que con órden preciso y las esplicaciones necesarias, anotarán, sobre las circuntancias personales, de fechas, y calidad de la defuncion, natural ó violenta, la correspondencia ó correlacion entre la numeracion del registro parroquial y la del cementerio, de cuya materia hablamos en otro lugar. Sabemos y comprendemos el casi absoluto abandono que hay sobre el particular, especialmente en pueblos pequeños; pero no por eso dejaremos de deplorarlo, de calificarlo con acervidad, y de inculcar el remedio contra un abuso, por tantas razones vituperable. Véase todavía el número siguiente.

6.° *Salubridad.* Muchos de los requisitos hasta aquí indicados, sobre todo en los números 1.° y 5.° contribuyen á ella; pero todavía conciernen especialmente á la misma, aun circunscribiéndonos á la localidad material del cementerio, la profundidad de las fosas, el enterramiento individual, ó de un solo cadáver en cada fosa, las exhumaciones, las *mondas*, y el *osario*, ó fosa comun.

Los reglamentos del caso suelen determinar la profundidad de las fosas ó sepulturas, y sino, debe hacerlo la autoridad sin dejarlo nunca al arbitrio de los sepultureros. En todo caso la profundidad debe ser relativa á la calidad del terreno, posicion y demás circunstancias tópicas de salubridad del cementerio. En un cementerio alto, barrido por los vientos, y de terreno arcilloso, y compacto, que por lo mismo dificulta la evasion de miasmas, las fosas pueden ser menos profundas que en un cementerio situado en bajo, mal ventilado, y de suelo arenisco. La profundidad ordinaria de las hoyas es de cinco piés: á mayor profundidad se retarda la putrefaccion; á profundidad menor es temible la infeccion atmosférica ó difusion de los miasmas pútridos. La profundidad escesiva requiere por lo tanto mayor término para la exhumacion ordinaria de los restos mortales, ó sea para poder depositar en la hoya otro cadáver, y de aquí la necesidad de mayor amplitud en el cementerio, lo cual no pueden costear todos los pueblos.

Nunca se enterrará mas que un solo cadáver en cada hoya; y de lo contrario deberá arreglarse el número de ellos á la profundidad. En los enterramientos unipersonales no pueden mediar entre una y otra hoya menos de dos piés de terreno: si se depositase en cada una mas de un cadáver, sin haber esperado el turno, ó período de renovacion de sepultura, debe ser proporcionalmente mayor la distancia intermedia, porque se hace mayor el foco de corrupcion, y mayor el peligro de pestilencia y contra la salubridad al abrir las fosas contiguas, casi al contacto con dicho foco. Solo en casos de absoluta necesidad debe alterarse la regla de enterramientos unipersonales, y turno de renovacion, lo propio que las *mondas*.

Las exhumaciones estraordinarias, para *autopsias*, traslacion de cadáveres, asi como la estraccion del cementerio de ningun género de restos mortales, no podrá, ni deberá permitirla el conserje ó encargado de él, sin órden por escrito de la autoridad competente, la cual hará se observen con precision las prescripciones higiénicas del caso.

La misma formalidad se requiere para alterar los turnos de renovacion, y sobre todo para las *mondas generales*. Estas, sobre las muchas prescripciones higiénicas para lo material de la operacion, como estacion fria, horas nocturnas, uso de desinfectantes, ó anti-pútridos, prévio dictámen y prescripciones de los facultativos en el arte de curar, requieren, si se han de verificar perturbando los turnos de renovacion, como en los casos de epidemia, una fosa comun profunda, adecuada á la masa y estado de putrefaccion de los despojos que han de depositarse en ella; pues que los osarios lo han de ser meramente para los huesos áridos.

Lo dicho hasta aquí en este número tiene aplicacion á los enterramientos en el suelo: los nichos y galerías necesitan precauciones especiales, reducidas á la solidez impermeable de los muros y panteones particulares, proporcionales al número de cadáveres depositados en cada uno, sino fueren individuales: al uso de la cal, cuando no hay embalsamiento: al período de renovacion, que no sea arbitrario en cuanto á su *mínimum*, aun respecto de los nichos y panteones de propiedad particular. Sabido es que el uso de cajas, y mas si fueren dobles, de plomo, etc., requiere mayor período para la putrefaccion. Otros infinitos pormenores sobre precauciones y licencia para la traslacion de cadáveres, ó restos mortales de un cementerio á otro, de unos á otros pueblos, ó puntos del reino: embalsamientos: solemnidades y ritualidades funerarias, etc., han de verse en sus artículos especiales y conexos con el presente, en que algunos se mencionan.

7.° *Embellecimiento*: *ornato profano*. Hablamos aquí de ello, por ser á la administracion y autoridad secular á la que compete el ordenarlo, autorizarlo, ó permitirlo; y no á la eclesiástica, á la cual en su caso corresponderia mas bien reclamar sobre el abuso, y en caso de *profanidad*, si se llegase á ese estremo. No es nuestro ánimo descender en este punto á estensos pormenores, aunque algo nos es preciso indicar. Sabido es hasta qué punto los pueblos y los particulares han llevado en todos tiempos este empeño, donde la civilizacion, aun en su escala mínima, reemplazó á la rudeza selvática. La amistad, y la gratitud, que inspiró en general y siempre respeto, á los restos mortales del hombre, y otras veces respeto y amor; inspiró tambien, no ya la ostentacion y el ornato en el enterramiento y conservacion de los restos y cenizas de los finados; sino el conato eficaz, y de mil modos manifestado, de precaver los estragos del olvido y del tiempo sobre la memoria de los vivos. Es este uno de aquellos puntos bien dignos de la atencion del filósofo, en que el género humano parece en contradiccion consigo mismo. Pueblos y generaciones que no creían al parecer en la inmortalidad del alma humana, erigian monumentos, sin embargo, al culto de esta idea, *célica*, digámoslo así, eminentemente civilizadora y consoladora; pues lo mismo era levantar templos, mármoles, pirámides á la perpétuidad. El instinto se sobreponia en ello al error profesado. Si todo moria con el hombre, ¿cuál era el sér, que despues de su muerte, acogia este homenaje de amor, humanidad y piedad? Si nadie lo recogia, ¿á quién se tributaba? ¿A quién se consagraban las ofrendas, los sollozos, las lágrimas vertidas al pié de aquellos monumentos funerarios; sino espresaban sino la negacion de toda supervivencia, el aniquilamiento de lo que existió, ¡la *nada*!... segun el concepto y creencias profesadas del que las vertió?

En otro lugar nos estendemos sobre esta materia, limitándonos aquí á observar, que el embellecimiento y antiguo ornato espresaba con propiedad la idea de *perpetuidad*; mientras el de los pueblos modernos la del *agrado*, el conato erigido por algunos en doctrina científica, de *despojar á la muerte de su orror*: la realizacion del pensamiento sintético espresado en la materia por los modernos escritores: *la muerte es la tarde de un bello dia*. ¿Qué hay de conformidad, sino, entre el silencioso é imponente aparato funerario del Valle de Josafat, del Sepulcro de David, del mausoleo de Artemisa, de las pirámides de Egipto, y cementerios *arqueológicos*, digámoslo asi, del Cairo y de Pompeya, de las *criptas sagradas*, de los vas-

tos subterráneos convertidos en cementerios por el temor y la piedad, de las catacumbas; y el célebre cementerio del padre *Lachaise*, en la vecina Francia y tantos otros á que ha servido y vá sirviendo de estímulo, ó de modelo? No creemos que el embellecimiento y ornato profanos sean incompatibles con la religiosidad. La autoridad sin embargo, debe procurar siempre que nunca lo sean, y ni aun lo parezcan.

No habiendo sido antes general, ni empezado realmente á generalizarse el establecimiento de cementerios, sino desde la real resolucion de 2 de junio de 1833, son poco numerosas las disposiciones posteriores sobre la materia de la presente seccion; y casi limitadas á la traslacion de cadáveres, *mondas* generales y otros puntos determinados, sobre los indicados en la seccion anterior.

En reales órden de 27 de marzo de 1845 y 21 de febrero de 1846 se dictaron varias reglas sobre exhumacion, que despues fueron modificadas por otra de 19 de marzo de 1848, segun la cual no podrá verificarse exhumacion y traslacion de cadáveres sin licencia del jefe político de la provincia en que estén sepultados.

La traslacion no se verificará sino á otro cementerio, ó panteon particular, y en ningun caso antes de haber trascurrido dos años desde la inhumacion.

Para verificar la exhumacion, pasados dichos dos años, hasta cinco de la inhumacion, procederá á la licencia del jefe político la licencia de la autoridad eclesiástica y declaracion de dos facultativos de la ciencia de curar, nombrados por aquella autoridad, de no seguirse perjuicio á la salubridad pública. Los facultativos han de ser doctores, ó individuos en la academia de medicina y cirugía del distrito, si el reconocimiento fuese en la capital de la provincia. La certificacion será individual, y en discordia se nombrará un tercero.

Los cadáveres embalsamados podrán exhumarse en cualquier tiempo y sin necesidad de reconocimiento facultativo.

Para la traslacion á España de cadáveres sepultados en pais estranjero, ó vice-versa, ha de obtenerse préviamente licencia espresa del ministerio de la Gobernacion del reino. Al solicitarla, se acreditará, bien la circunstancia de hallarse embalsamados, ó bien la de haber transcurrido mas de dos años, y hallarse ya, segun reconocimiento facultativo, en estado de completa desecacion.

A los interesados incumbe naturalmente cubrir los gastos de exhumacion. Los honorarios de cada profesor por el acto de reconocimiento, inclusa la certificacion, están fijados en 160 reales para Madrid, y 120 para los demás puntos del reino. Esta suma se aumentará discrecionalmente por el gobernador de la provincia en razon á la distancia que los facultativos hubiesen de recorrer cuando el reconocimiento se haga fuera del pueblo de su domicilio. Los honorarios se reducirán á la mitad siempre que se hiciere á un mismo tiempo el reconocimiento de dos ó mas cadáveres.

Estas providencias referentes al cuidado y policía de los cementerios, se completaron por otras dos Reales órdenes de 30 de enero de 1851 y 31 de agosto de 1853, comprensivas de las reglas que deben observarse para verificar la exhumacion y traslacion de los cadáveres y sus restos dentro de los mismos cementerios.

En su virtud, se prohiben de todo punto las mondas ó limpias generales.

No podrán ser trasladados los cadáveres de un punto á otro de los mismos antes de haber transcurido cinco años de la inhumacion, sino en el tiempo y con los requisitos prevenidos en la anterior real órden de 19 de marzo de 1848. Los Gobernadores de provincia modificarán este plazo respecto de los cementerios, cuya capacidad no sea proporcionada al número de defunciones anuales de la respectiva poblacion.

La traslacion de huesos enteramente secos puede hacerse en cualquier tiempo. Para la ejecucion de los dos últimos estremos es innecesaria la intervencion de facultativos.

Cuando los cementerios sean reducidos y no puedan observarse las reglas espresadas, se han de exhumar necesariamente los cadáveres que lleven mas tiempo sepultados y

Lorenzo Arrazola

parcialmente, esto es, uno por uno, á medida que haya necesidad de ello para enterrar á otros, adoptando las medidas convenientes, á fin de evitar los peligros que las exhumaciones anticipadas ocasionan. Entre ellas se espresan la de impedir que se formen nichos en los cementerios muy reducidos, haciendo que todos se sepulten en la tierra, y la de procurar que se aumente la estension de los cementerios, ó se promueva la construccion de otros mas capaces y con todos los requisitos debidos.

En 20 de setiembre de 1849 se encargó á los obgernadores de provincia que no consintieran la conduccion de los cadáveres á las iglesias para celebrar las exequias, supuesto que se halla reconocido no perjudica á los derechos de las mismas la ausencia del cadáver en cuyo auxilio se celebran; excepto los arzobispos y obispos, que, como ya se ha dicho, gozan del privilegio de ser enterrados en las catedrales. Pero en 30 de noviembre del mismo año á consecuencia de esposiciones elevadas por varios prelados y en atencion á haberse pedido dictámen por el ministerio de Gracia y Justicia al Consejo Real sobre este asunto, mandó el de Gobernacion que se suspendiera ejecutar la anterior providencia hasta que se recibiesen nuevas instrucciones. Los rigores de la última epidemia dieron lugar, sin embargo, á que en la mayor parte de las poblaciones se mandaran celebrar las exequias sin el cadáver presente, no por precepto general del gobierno, sino como medida preventiva adoptada por las Juntas de sanidad ó por las autoridades locales.

Como regla saludable y prudente de policía judicial, se habia dispuesto en 1.° de diciembre de 1837 y se reiteró en 12 de diciembre de 1853, que no se dé sepultura á ningun cadáver sin el correspondiente certificado en que el facultativo esprese la enfermedad de que ha muerto.

Resulta, pues, que la legislacion civil, al restablecer los cementerios, no hizo novedad en las prácticas y atribuciones de la Iglesia: respetó, como debia, los derechos de rompimiento correspondientes á las parroquias, y mandó ó los fieles que acudieran con ellos á las mismas. Y es tambien de notar que aunque la ley (1) previene que los caudales públicos ayuden á la edificacion de cementerios con la mitad ó tercera parte del gasto y con los terrenos en que se hayan de construir, cuando sean concegiles ó de propios, ni ordena reintegro alguno de tales prestaciones, ni contraría, antes confirma, la percepcion íntegra y privativa de los derechos de rompimientos por parte de las parroquias respectivas.

Por estas consideraciones, el Consejo de Castilla y los arzobispos de Toledo adjudicaron privativamente á las fábricas parroquiales de la corte los derechos de sepulturas, con la obligacion y carga natural de sostener los cementerios generales, sus edificios, capillas, capellanes, sirvientes, efectos y enseres necesarios, como tambien las Iglesias sin participacion de los curas y tenientes.

En 1846 se suscitó cuestion entre el ayuntamiento de Palencia, que amplió el cementerio de aquella ciudad y construyó una capilla á sus espensas, y el obispo de la diócesis, sobre clasificacion y aplicacion de los derechos de sepultura. Esta cuestion, despues de muchos y variados trámites, vino á terminar mandando se formara, de comun acuerdo por ambas autoridades, como se verificó, un reglamento, aprobado por S. M., para la direccion, cuidado y conservacion del espresado cementerio, cuyas principales disposiciones creemos útil indicar ligeramente, como dignas de tenerse á la vista en casos semejantes.

Consta de cinco títulos.

El primero establece que habrá un capellan nombrado por el ayuntamiento y aprobado por el R. obispo ó su provisor, cuyo nombramiento será revocable *ad nutum* por la autoridad eclesiástica; y espresa su dotacion y obligaciones. El nombramiento de capellan se entiende sin irrogar perjuicio alguno á los derechos parroquiales de las iglesias y curas, y á calidad de que ha de obtener préviamente licencia de la autoridad

(1) Ley 1.ª, tit, 3.°, lib. 1.°

eclesiástica para todo acto religioso que no sea el de celebrar misas rezadas y responsos en la capilla y cementerio, segun la piedad de los fieles lo solicitare. Los cadáveres que se conduzcan al cementerio irán acompañados del cura párroco ó de un delegado suyo, y estos no llevarán derecho alguno, tratándose pobres de solemnidad.

El título 2.° habla del sepulturero y de sus obligaciones espresadas minuciosamente y con bastante acierto, bajo el punto de vista de policía, buen órden, salubridad y respeto á los difuntos.

Nos parece conveniente copiar á la letra el título 3.° que trata de los fondos del cementerio. Dice asi:

Art. 10. Los fondos del cementerio consistirán: 1.° en lo que se abone anualmente al ayuntamiento en el presupuesto para este efecto: 2.° en las dos terceras partes de los derechos sepulturales que devenguen los enterramientos, sea en panteones, nichos, sepulturas con lápida ó sin ella, quedando la otra tercera parte en beneficio de las respectivas fábricas.

Art. 11. El ayuntamiento administrará dichos fondos como tuviere por conveniente, siendo de su cuenta el pago de la gratificacion del capellan, la del sepulturero, y todos los gastos de la capilla, osario y cementerio.

Art. 12. Los interesados satisfarán los derechos de sepultura á los respectivos párrocos al mismo tiempo que lo hagan de los parroquiales, dándoseles recibo por separado de unos y otros, espresando en el segundo la distribucion de ellos conforme á este reglamento.

Art. 13. Los párrocos entregarán al ayuntamiento mensualmente una relacion de los finados, acompañando nota espresiva de las cantidades que hubiesen entrado en su poder por derechos sepulturales. La corporacion municipal podrá disponer en el momento por medio de libramiento de las dos terceras partes de los espresados derechos.

Art. 14. Para salvar toda equivocacion é identificar los derechos sepulturales de cualquiera clase, devengados mensualmente en cada parroquia, el capellan del cementerio pasará tambien al ayuntamiento, á fin de mes, otra noticia espresiva de los sepultados de cada una, indicando si lo han sido en nicho ó panteon, en sepultura comun ó con lápida, con caja ó sin ella, ó por pobres.

El título 4.° se refiere á la division del cementerio y clasificacion de los derechos de sepultura, que no marcamos por ser variables segun las circunstancias de las poblaciones.

Y el quito, finalmente, contiene las siquientes disposiciones generales.

Art. 20. Ningun cadáver podrá ser enterrado sin que preceda el certificado de defuncion espedido por el facultativo, ó el correspondiente mandato judicial.

Art. 21. Tampoco podrá hacerse el enterramiento hasta que hayan pasado á lo menos 36 horas desde el fallecimiento en los casos ordinarios, y 48 en las muertes repentinas.

Art. 22. No se hará por ningun título exhumacion alguna de cadáver, aunque sea para cambiar de localidad dentro del cementerio, sin que fuere concedida por la autoridad eclesiástiea en conformidad á lo que dispone el derecho: y si esta exhumacion hubiere de ser para trasladar el cadáver fuera del cementerio, se observará lo prevenido en la real órden de 19 de marzo de 1848.

Art. 23. No se fijará ninguna inscripcion en panteon, nicho ó lápida, sin que fuere visada préviamente por la autoridad eclesiástica, la cual examinará si las que se hallan fijadas hasta el presente, necesitan ó no alguna modificacion.

Art. 24. La llave del cementerio estará en poder del capellan, quien la entregará por el dia al sepulturero.

Art. 25. Cuando hubiere de hacerse algun reparo en el cementerio, ya sea ordinario, ya estraordinario, el capellan dará aviso al alcalde constitucional para que como presidente del ayuntamiento, que administra los fondos del cementerio, depute á quien tuviere por conviente para que los efectúe, y lo mismo hará el capellan cuando se concluyan

la cal y demás materiales necesarios (para los enterramientos).

Art. 26. Se entenderá pobre de solemnidad para no devengar derechos sepulturales, el que fuere honrado por la parroquia con funerales de pobre; el que habiendo sido muerto á mano airada, fuese mandado sepultar de oficio, y el mendigo transeunte que falleciese en la ciudad.»

Este reglamento es tanto mas notable, cuanto fué dado con dictámen de las secciones de Gracia y Justicia y de Gobernacion del Consejo Real, y del vicario general eclesiástico de Madrid á principios de 1847.

Ultimamente en real órden por fin de 12 de diciembre de 1833 se recuerda lo prevenido en la de 1.° de diciembre de 1837, sobre que no se sepulten los cadáveres sin certificacion de facultativo sobre la defuncion.

CEMENTERIOS DE COMUNIONES NO CATOLICAS. Siempre ha sido esta una cuestion delicada, y siempre lo será, pues se mezclan en ella el sentimiento de humanidad: la disciplina de la Iglesia Católica: las exigencias de la religion del Estado: las prácticas y hasta prevenciones de los paises: los intereses profanos, de la industria, del comercio, etc.: el espíritu de cada época: exigencias, y á veces estipulaciones con naciones, ya amigas, ya aliadas: y hasta la civilizacion invoca sus fueros. La gravedad de la cuestion aumenta naturalmente, si, como en España, no como quiera está escluida la tolerancia de cultos; sino que la Religion Católica es la del Estado, y la única de los españoles: y conocidas son las prescripciones y anatemas de la Iglesia sobre sepultura sagrada á infieles, é impenitentes, etc. Esta gravedad peligrosa sube de punto, en fin, por la índole de los tiempos, en épocas, digámoslo así, de transicion y novedades políticas; de régimen y de creencias en que se entabla la pugna, inevitable entonces, y en que con su innata condicion de ardorosa, y hasta enconada polémica, se ostenta el antagonismo entre lo antiguo y lo presente, entre lo pasado, lo presente y lo futuro: situaciones por las que ha atravesado España desde ha muchos siglos; ora tolerando, ora escluyendo creencias opuestas á la católica; y porque en mayor escala está atravesando en el dia.

Nosotros, que en el artículo anterior, sobre *cementerios* tambien, hemos encarecido, y en tantos otros encareceremos la dignidad del hombre, y abogado como una consecuencia inevitable, no ya por sus santos fueros y derechos en vida, sino aun por los justos y debidos respetos, ora á su memoria; ora á sus restos mortales; no dejaremos de inculcar el mismo principio en la materia. Los restos mortales del hombre, diremos por regla general, han de ser enterrados, ó depositados con humanidad y decencia. No se opone á esta regla alguna escepcion penal, cuya justicia y conveniencia ha de determinarse por la fuerza de las razones en que se apoye; punto que corresponde desenvolver y desenvolvemos en otros artículos, mencionándolo aquí únicamente, como principio, para la materia que es objeto del presente artículo. Nuestras antiguas leyes establecian que al parricida, encubado, como es sabido, se le arrojase al agua: alguna vez el cadáver del bandido, condenado por la justicia, era espuesto en cuartos en los caminos públicos, al horror y escarmiento de otros malvados, y á la voracidad de las aves: otros delincuentes eran quemados, etc. El horror de la pena espresaba en estos casos, ó se aspiraba á que espresase, el que inspiraba y debia inspirar el crímen: teoría, que si no justificase siempre la escepcion, á lo que aquí no descendemos; siempre la esplicaría, salvando por lo tanto el principio.

Tampoco ha de confundirse *la decorosa inhumacion*; con la sepultura eclesiástica: diferencia y clave, que resuelve ciertamente todas las dificultades, ó conduce á resolverlas. En cuanto á sepultura eclesiástica, católicos nosotros de corazon, no debemos, ni queremos tener otras creencias que les de la Iglesia á que pertenecemos. La privacion de sepultura eclesiástica es una escepcion penal, que no destruye el principio general de la humana y decorosa inhumacion de los restos mortales del hombre. Hecha esta salvedad

respetuosa, nuestra opinion és, que sin controvenir en este punto á la disciplina de la Iglesia, la potestad secular puede y debe autorizar enterramientos, y por tanto, cementerios para la decente inhumacion ó depósito de los finados, cualquiera que sea su creencia; si bien con las restricciones que espresaremos. Estos no serán cementerios *sagrados*: serán *cementerios de humanidad*: hasta *puramente profanos*, segun el caso; empero testimonio siempre de la diferencia entre el *hombre* y la *bestia*.

Mas si por ello se aspira á no insultar á la *humanidad*, precisamente en el momento supremo de la defuncion del hombre; tambien es indispensable que este homenaje de respeto á la obra de la creacion se tribute asi bien sin insulto de la religion del Estado, y por tanto de las leyes del pais; de la opinion y sentimientos nacionales; sin contravenir por último á deberes internacionales, que puedan cumplirse, y que para ello deben examinarse antes de contraerse. La no tolerancia de cultos se opondrá á que á esos enterramientos comunes se les iguale en decoracion, signos y ritos con los que autorice, ó requiera la religion única, ó dominante del pais; ni menos los cadáveres serán conducidos á ellos con formalidades que constituyan culto público. Pueden situarse, no precisamente en público, digámoslo así; sino en lugar privado; y en el peor caso dentro del recinto, por ejemplo, de la legacion correspondiente. De haber de ser en lugar público, y con signos y decoraciones que contraríen á la religion del Estado, habrán de establecerse dentro de una alta cerca desnuda de tales signos y que nada revele en sí, mas que otra cerca cualquiera. Véase sobre este punto, además de los artículos **CULTOS**, **RELIGION**, **SEPULTURA**, y otros análogos en la materia, lo que decimos sobre *culto religioso*, en el art. **AGENTE DIPLOMATICO**, tom. 2, pág. 192.

En España ha habido dos épocas principales en que las dificultades y doctrinas en teoría se han hecho prácticas. Fué la primera la de los tiempos de moros y judíos: la segunda la de admision en el pais de estranjeros comerciantes y artistas, no solo como transeuntes, sino domiciliándose; ó bien conservando su nacionalidad, y aun naturalizándose, segun les conviniere; y cualquiera que fuese su creencia, si fuesen ingleses, franceses, etc., como puede verse en las leyes recopiladas sobre la materia. En la primera de estas épocas la dificultad era menor; pues todos eran súbditos de un mismo monarca, que por lo tanto podia dar por sí solo á la cuestion la solucion que aconsejasen las circuntancias del pais y otros respetos. Pudo conceder á los judíos el uso de sinagogas y no el de mezquitas á los moros, y concedido lo primero, ya no era dificultad la de cementerio: y pudo dar otra, ú otras soluciones á la dificultad. Entonces no habia contienda tampoco sobre la unidad católica.

En la segunda de las dos mencionadas épocas, todo viene sucediendo al contrario. Los ingleses, franceses, etc., fueron admitidos por consecuencia de tratados: entraban conservando su nacionalidad, y por tanto amparados por sus soberanos y por el derecho internacional; y si la religion única del Estado no permitia conceder culto público á los no católicos, á lo menos desearian enterrarse con humanidad y decoro, pretension en que insistirian y que apoyarian sus gobiernos.

La unidad católica ha sido además puesta en cuestion nueve veces en el no largo trascurso de 43 años: en 1812, 1814, 1820, 1823, 1834, 1836, 1837, 1845 y 1855, pues en cuestion se pone lo que sigue rigiendo porque legítimamente se aprueba y sanciona, pudiendo por razones ó circunstancias no haberse aprobado, ó haberlo sido con mas ó menos franquicias ó restricciones, como lo ha sido en alguna de las ocasiones citadas: ocasiones en que, como es incontestable, se ha alterado, derogado, restablecido, modificado, ó innovado, la Constitucion política del pais, de que es artículo capital el de religion, y como inherente el de culto público. No dudamos que la base segunda de la Constitucion política, ya votada por las Córtes Constituyentes, aunque todavía no sancionada al promediar el mes de marzo del corriente año de 1856, sanciona la unidad católica; pero

es un hecho tambien el sentido práctico que se ha pretendido darle, y es obra fácil el conjeturar el que se pretenderá.

En tal estado de cosas; lo que era preciso que sucediese, eso ha sucedido. La Gran Bretaña por medio de su representante cerca del último monarca solicitó autorizacion respecto de la construccion de cementerios para sus súbditos residentes en España; y en 13 de noviembre de 1831 se dictó la real resolucion siguiente:

«Habiendo dado cuenta al Rey nuestro Señor de una reclamacion del representante británico, pidiendo un terreno en la Coruña para cementerio de los súbditos de su nacion; que se señalen tambien otros en todos los puntos de residencia de los cónsules ingleses, y que se le manifieste la voluntad de S. M. en cuanto al que su gobierno ha comprado en esta corte con igual objeto; se ha servido S. M. resolver, conformándose con el dictámen de su Consejo de señores ministros, que *no hay inconveniente* en conceder dichos terrenos, pudiéndolos adquirir los ingleses de los particulares, y cercarlos, con tal que se observen las formalidades prevenidas, á saber: *que se cierren con tapia, sin iglesia, capilla, ni otra señal de templo, ni culto público ni privado*, y que bajo la misma condicion podrán hacer uso del terreno que tienen comprado en esta corte, poniéndose sobre todo, de acuerdo con las autoridades locales, á las que se deberán hacer las prevenciones oportunas.»

El ejemplo no alentó, sin embargo, á iguales reclamaciones, por parte de otros estados, ó de particulares ó familias estranjeras; pero los ha suscitado la base 2.ª constitucional, abriendo campo á cuestiones que entran ciertamente mas que por cementerio, ó enterramiento peculiar y público. Como resultado de este movimiento en la opinion, en 29 de abril de 1835 se promulgó la siguiente ley hecha en Córtes.

«Art. 1.° En todas las poblaciones, donde la necesidad lo exija á juicio del gobierno, se permitirá construir cementerios á donde sean conducidos, depositados y sepultados, con el respeto debido á los restos humanos, los cadáveres de los que mueran fuera de la comunion católica.

Art. 2.° En aquellas poblaciones que no tengan los comenterios especiales á que se refiere el artículo anterior, los alcaldes y ayuntamientos cuidarán, bajo su mas estrecha responsabilidad, de que los cadáveres de los que mueran fuera de la comunion católica sean enterrados con el decoro debido á los restos humanos, tomando las precauciones convenientes para evitar toda profanacion.

Por tanto mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, asi civiles como militares y *eclesiásticas*, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.»

No hay escepcion, como se vé, de razas, ni creencias: no se limita á las creencias cristianas, si bien protestantes, cismáticas ó de cualquier modo heréticas. El protestante, el griego cismático, el musulman, todos pueden pedir enterramiento público: el cristianismo, en todas sus comuniones; y todas las creenciasque le son opuestas, sin esceptuar el gentilismo, el deismo, etc.: si la China, ú otros estados ó razas gentílicas entran en relaciones internacionales con España; todas las creencias han sido en esto igualadas. Asi se desprende de la ley. No contiene esta restriccion alguna, análoga á las espresadas en la anterior real resolulion de 1831. ¿Se inferirá de aquí, que cualquiera creencia puede conducir sus cadáveres al cementerio procesionalmente, y con aparato funerario público, segun su rito? Si en la carrera se encontraren, contendiesen, ó detuviesen un entierro católico, y uno ó mas, protestantes, cismáticos, musulmanes, chino, etc., cada cual con sus insignias, sacerdotes, y ritos; teniendo la autoridad local que dispensar proteccion á todos, sin preferencia por tanto para el de la comunion católica, ¿será fácil persuadirse y sostener que no hay absolutamente, que no hay á lo menos en parte, no ya tolerancia de cultos, sino plena igualdad, sin ventaja por tanto

para la religion del Estado? De la ley no se desprende nada contrario; y antes á la inversa, por el mismo hecho de no prevenirlo, ni prohibirlo. Se encarga, sí, á los alcaldes que *bajo su mas estrecha responsabilidad..... tomen las precauciones convenientes para evitar toda profanacion*; pero es profanacion *contra el decoro debido á los restos humanos*. Muy justamente; pero ¿y la profanacion *contra la unidad católica*, y por tanto *contra la unidad de su culto*? ¿Podrá un alcalde, ni otra autoridad adoptar precauciones contra ella; ó no podrá sin contravenir á la ley, si dichas precauciones han de ser restrictivas del favor concedido por las mismas, en su segundo artículo, especialmente á todas las creencias? La Ley no lo dice; y algo exigia la exageracion de las apreciaciones de la base 2.ª constitucional, las reclamaciones, y exigencias, que dieron lugar á ella, casi todas en sentido opuesto á la *unidad católica* y de culto.

Sin embargo, la base no se formuló bajo el propósito de alterar en el Estado la *unidad católica*: el debate no giró tampoco en ese sentido: la mayoría, al menos, de los legisladores han espresado, ó de un modo ú otro dado á entender, no entraba en su mente alterar dicha unidad: la base en su tenor testual no lo dice: si de su espíritu y aun de su letra se desprende la libertad de conciencia, á lo menos en cierta escala, de ningun modo la libertad de cultos: el gobierno ha empezado á marchar en el mismo sentido, ya adoptando medidas restrictivas contra las tentativas sobre libertad de cultos, ya ha publicado, y solemnemente consignado en recientes reales órdenes, que se halla resuelto á no consertir se contravenga á la unidad católica: la unidad de culto, pues, con todas sus consecuencias, sigue siendo el derecho comun de los españoles. Ninguna disposicion posterior deroga, ni sustituye la antes inserta de 1831. Es muy de suponer que el gobierno central publicará la real instruccion adecuada para la ejecucion de la ley, antes inserta, á fin de prevenir conflictos. Si no se previenen, ellos vendrán de seguro, luego que se generalicen los cementerios de diversas creencias, sean frecuentes los entierros, y se despliegue la casi inevitable rivalidad. Entonces será necesario formular el uso de ese derecho de enterramiento público, y fijar la ritualidad funeraria tambien pública, y aun cuando hubiera de ser privada. No dudamos que lo será en el sentido único á que se presta la base constitucional; y entretanto la real resolucion de 1831 no está derogada: la autoridad comentará y procurará conforme á ella, todo lo que conduzca á que «*los cadáveres de los que mueren fuera de la religion católica, sean enterrados con el decoro debido á los restos humanos...*» *evitando la profanacion de ellos*. Hasta aquí no tenemos mas que *la humanidad, la decencia pública*, la *civilizacion*; pero nada que sea, ó pueda reputarse *culto religioso público*. En una palabra, las autoridades deben conciliar el encargo de la ley con la unidad católica de creencia y de culto, que aquella no altera, ni puede, pues seria contrariando la Constitucion política del Estado.

CEMENTERIOS (EN ULTRAMAR). Rige hoy el mismo sistema general que en la Península é islas adyacentes, salvo en lo relativo á cementerios de creencias no católicas, pues no se ha mandado que rija para aquellos dominios la ley de 29 de abril de 1855, hecha para la Península. (Véase el artículo anterior).

En Ultramar, como en España, empezó á pensarse tambieu sériamente sobre el establecimiento general de cementerios fuera de poblado en el último tercio del siglo anterior. Espidiéronse sobre ello las cédulas de 3 de abril de 1787; 27 de marzo de 1789; 22 de setiembre de 1792 y 15 de mayo de 1804, ordenando la construccion de cementerios, determinando los fondos de que habian de costearse, y hasta acompañando modelo para su forma. El escelente virey y vice-patrono Revillagigedo contribuyó eficazmente, á que la voluntad del monarca tubiera cumplimiento, y antes de acabar el siglo, tenian cementerio La Puebla y Veracruz, como desde 1807 lo tuvo la Habana, y antes y despues otras poblaciones. En cédula de 31 de agosto de 1818 se estendió á Indias la pre-

rogativa de las monjas de enterrarse dentro del recinto de sus conventos, como estaba y continúa concedido á las de la Península é islas adyacentes (V. CEMENTERIO).

CENA. Era en Aragon lo que en Castilla el *yantár*; esto es, primero los comestibles que los vasallos debian suministrar al Rey en su tránsito por los pueblos, y luego la reduccion de esta prestacion á dinero en cuyo caso se pagaba á veces, aunque el Rey no saliese de su corte. Llamóse entonces *cena de ausencia*, y *cena de presencia*. Pagaban la primera los moros, aunque el Rey no transitase por sus pueblos; la segunda los cristianos, cuando transitaban por los suyos. Convirtióse al fin en contribucion, consistente en seis *sueldos* y seis *dineros*, esto es, tres reales y seis maravedís de vellon, pagados por los cabezas de familia. Todavía hace pocos años que se cobraba esta contribucion en algunos pueblos del reino de Valencia, que nota Banqueri en su diccionario, añadiendo que en 1820 produjo solo 10,000 reales.

CENA (BULA DE LA). En el artículo BULA hacemos indicacion de la denominacion, tenor y vicisitudes canónicas de esta bula, y de las *restricciones*, segun unos; sobre su aplicacion en España; de su *prohibicion absoluta*, segun otros, si bien allí no espusimos nuestra opinion. La importancia ademas de esta bula, famosa en España y en todo el orbe católico, asi como la de otros documentos poco conocidos en su tenor, aunque frecuentemente citados, como las célebres *Reglas de la Cancelaría romana*, *Artículos orgánicos*, *Ley sálica* y aun el ruidoso *Monitorio de Parma*, nos inducen á insertarlos á la letra para mayor utilidad de nuestros lectores, y cual creemos corresponde á una obra de consulta, al paso que con el mismo fin espondremos nuestra opinion y el estado legal y jurídico sobre la retencion de dicha bula.

No fué esta en un principio sino una mera reiteracion, aunque solemne, de las escomuniones y censuras ordinarias de la Iglesia, porque siempre habian estado escomulgados los herejes y cismáticos. Pero los Sumos Pontífices creyeron no impropio, y antes conducente en aquellos momentos, en que mas y con mas solemnidad parece ostentarse la unidad, divinidad y universalidad de la Iglesia, recordar, con dolor de los separados de su seno, si fuesen capaces de dolerse, con piadoso consuelo de los miembros fieles de aquel cuerpo místico, para saludable temor, en fin, cuáles eran las clases de los miembros separados, y cuáles continuarian siéndolo. Asi, al modo de tremendo oráculo, era proclamado por la cabeza de la Iglesia en las solemnidades del Jueves de la Cena, en el de la Ascension y en la de la dedicacion de la Iglesia de los apóstoles San Pedro y San Pablo.

Este *monitorio* se estendió despues á multiplicadas especies de delitos y crímenes, no relativamente á los estados pontificios; sino al orbe cristiano; y de aquí el conflicto inevitable con las potestades seculares, y la resistencia de estas por vía de defensa de sus prerogativas y atribuciones soberanas que creyeron vulneradas. La agresion no fue ciertamente intencional. Siempre hemos creido que en ello prevaleció mas un celo desmedido, que un designio hostil y de invasion; pero no por eso dejaba de ser cierto el conflicto. El testo mismo del Monitorio es el que mejor demuestra hasta dónde pudieron ser fundados los temores y los agravios de las potestades seculares, tal cual llegó á estenderse, y el estado en que quedó en los últimos tiempos en que todavía era anualmente fulminado, no ya como al principio en las tres mencionadas solemnidades, sino solo en el *Jueves de la Cena*, de donde le vino la denominacion: es como sigue:

«*Literæ processus S. D. N. Clementis Papæ, lectæ die Cœnæ Domini, ann.* 1671.

Clemens episcopus, servus servorum, etc., ad futuram, etc. Pastoralis Romani Pontificis vigilantia, et solicitudo, etc., etc.

1 Excomunicamus, et, anathematizamus ex parte Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, auctoritate quoque Beatorum Apostolorum Petri, etc Pauli, ac nostra quoscumque Husitas, Wiclephitas, Lutheranos, Zuinglianos, Calvinistas, Hugonotos, Anabaptistas, Trinita-

rios, et á Christiana Fide Apostatas; ac omnes, etc. singulos alios Hæreticos quoqumque nomine censeantur, et cujuscumque sectæ existat. §. Ac eis credentes, eorumque recceptatores, fautores, et generaliter quoslibet illorum defensores. §. Ac eorumdem libros hæresim continentes, vel de Religione tractantes, sine auctoritate nostra, etc. Sedis Apostolicæ scienter legentes, aut retinentes, imprimentes, seu quomodolibet defendentes, ex quavis causa publicè, vel occultè, quovis ingenio, vel colore. §. Nec non Schismaticos, et eos qui se á nostra, etc. Romani Pontificis pro tempore existentis, obedientia pertinaciter subtrahunt, vel recedunt.

II. ..... omnes, et singulos cujuscumque status, gradus, seu conditionis fuerint: Universitates vero Collegia, et Capitula quocumque nomine nuncupentur, interdicimus; ab ordinationibus, seu mandatis nostris, ac Romanorum Pontificum pro tempore existentium ad universalem futurum Concilium appellantes. §. Nec non eos, quorum auxilio, consilio, vel favore appellatum fuerit.

III. ..... omnes Pyratas, Cursarios, ac Latrunculos maritimos, discurrentes mare nostrum, præcipuè à monte Argentario, usque ad Terracinam. §. Ac omnes eorum Fautores, Recceptatores, et Defensores.

IV. ..... omnes, et singulos, qui Chistianorum quorumqumque Navibus, tempestate, seu in transversum (ut dici solet) jactatis, vel quoquo modo naufragium passis, sive in ipsis Navibus, sive ex eisdem ejecta in mari, vel in littore inventa; cujuscumque generis bona, tam in nostris Tyrrheni, et Adriatici, quam in cæteris cujuscumque maris regionibus, et littoribus, surripuerint; ita, ut nec ob quodqumque privilegium, consuetudinem, aut longissimi etiam immemorabilis temporis possessionem, seu alium quemcumque prætestum excusari possint.

V. ..... omnes qui in terris suis nova pedagia, seu gabellas, præter quam in casibus sibi á jure, seu speciali Sedis Apostolicæ licentia permissis, imponunt, vel augent, seu imponi, vel augeri prohibita exigunt.

VI. ..... omnes falsarios Litterarum Apostolicarum, etiam in forma Brevis, ac Supplicationum gratiam, vel justitiam concernentium per Romanum Pontificem, vel S. R. E. Vice-Cancellarios, seu gerentes vices eorum, aut de mandato ejusdem Rom. Pont. signatarum. §. Nec non falso fabricantes Litteras Apostolicas, etiam in forma Brevis, et etiam falso signantes supplicationes hujusmodi sub nomine Romani Pontificis, seu Vice-Cancellarii, aut gerentium vices prædictorum.

VII. ..... omnes illos qui ad Sarracenos, Turcas, et alios Christiani nominis Hostes, et Inimicos, vel Hæreticos per nostras, sibi hujus Sanctæ Sedis sententias expressè, vel nominatim declaratos, deferunt, seu transmittunt equos, arma, ferrum, filum, ferri, stamnum, chalibem, omniaque alia metallorum genera, atque bellica instrumenta, ligamina, canapem, funes, tam ex ipso canape, quam alia quacumque materia, et ipsam materiam aliaque hujusmodi, quibus Christianos, et Catholicos impugnant. §. Nec non illos, qui per se, vel alios de rebus statum Christianæ Reipublicæ concernentibus, in Christianorum perniciem, et damnum, ipsos Turcas Christianæ religionis inimicos, nec non Hæreticos, in damnum Catholicæ Religionis, certiores faciunt §. Illisque ad id auxilium, consilium, vel favorem, quomodolibet præstant. §. Non obstantibus quibuscumque privilegiis quibusvis personis, Principibus, Rebus publicis per Nos, et Sedem prædictam hactenus concessis, de hujusmodi prohibitione expressam mentionem non facientibus

VIII. ..... omnes impedientes, seu invadentes eos, qui victualia, seu alia ad usum Romanæ Curiæ neccesaria adducunt. §. Ac etiam eos, qui nè ad Rom. Curiam adducantur, vel asferantur, prohibent, impediunt, seu perturbant. §. Seu hæc facientes defendunt per se, vel alios cujuscumque fuerint ordinis præeminentiæ, conditionis, et status, etiam si Pontificali, seu Regali, aut alia quavis Ecclesiastica, vel mundana præfulgeant dignitate.

IX. ..... omnes illos, qui ad Sedem Apostolicam venientes, et recedentes ab eadem, sua, vel aliorum operâ interficiunt, mutilant, spoliant, capiunt, detinent. §. Nec non illos omnes qui jurisdictionem ordinariam, vel delegatam á Nobis, vel nostris Judicibus non habentes illam sibi temere vindicantes, similia, contra morantes in eadem Curia, audent perpetrare.

X. ..... omnes interficientes, mutilantes, vulnerantes, detinentes, capientes, seu deprædantes Romipetas, seu Perogrinos, ad Urbem causa devotionis, seu preregrinationis accedentes, et in ea morantes, vel ab ipsa recedentes. §. Et in his dantes auxilium, consilium, vel favorem.

XI ..... omnes interficientes, mutilantes, vulnerantes, percutientes, capientes, carcerantes, detinentes, vel hostiliter insequentes S. R. E. Cardinales, ac Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos, Sedisque Apostolicæ, Legatos, vel Nuntios, aut eos, à suis Diœcesibus, territoriis,

terris, seu dominiis ejicientes. §. Nec non ea mandantes, vel rata habentes, seu præstantes in eis auxilium, consilium, vel favorem.

XII. ..... omnes illos, qui per se, vel per alios, personas Ecclesiasticas quascumque, vel Seculares ad Romanam Curiam, super eorum causis, et negotiis, recurrentes, ac illa in eadem Curia prosequentes, aut procurantes, negotiorumque gestores, Advocatos, Procuratores, et Agentes; seu etiam Auditores, vel Judices super dictis causis, vel negotiis deputatos, occasione causarum, vel negotiorum hujusmodi, occidunt seu quoquomodo percutiunt, bonis spoliant, seu qui per se, ver per alios directè, vel indirecté, delicta hujusmodi committere, exequi, vel procurare, aut in eisdem auxilium, consilium, vel favorem præstare non verentur, cujuscumque præeminentiæ, et dignitatis fuerint.

XIII. ..... omnes, tam Ecclesiasticos, quam Seculares cujuscumque dignitatis, qui prætexentes quamdam frivolam appellationem à gravamine, vel futura executione Litterarum Apostolicarum, etiam in forma irevis, tam gratiam, quam justiciam concernentium: nec non citationum, inhibitionum, sequestrorum, monitoriorum, processuum executorialium, et aliorum Decretorum, à nobis, et à Sede Apostolica, seu Legatis, Nuntiis, Præsidentibus Palatii nostri, et Cameræ Apostolicæ Auditoribus, Comisariis, aliisque Judicibus, et Delegatis Apostolicis emanatorum, et quæ pro tempore emanaverint, aut alias ad Curias Seculares, et laicam potestatem recurrunt, et ab ea, instante etiam Fisci Procuratore, vel Advocato, appellationes hujusmodi admitti, ac Litteras citationes, inhibitiones, sequestra, monitoria, et alia prædicta capi, et retineri faciunt. §. Quive illa simpliciter, vel sine eorum beneplacito, et consensu, vel examine executioni demandari, aut ne Tebelliones, et Notarii, super hujusmodi Litterarum, et Processum executione instrumenta, vel acta conficcre, aut confecta parti, cujus interest, tradere debeant, impediunt, vel prohibent, ac etiam partes, seu eorum agentes, consanguineos, affines, familiares, Notarios, Executores, et Subexecutores Litterarum, citationum, monitoriorum, et aliorum prædictorum capiunt, percutiunt, vulnerant, carcerant, detinent, ex Civitatibus, Locis, et Regnis ejiciunt, bonis spoliant, perterrefaciunt, concutiunt, et comminantur per se, vel alium, seu alios, publicè, vel occulté. §. Quive alias, quibuscumque personis, in genere, vel in specie, ne pro quibusvis eorum negotiis prosequendis, seu gratiis, vel litteris impetrandis ad Romanam Curiam accedant, aut recursum habeant, seu gratias ipsas, vel Litteras á dicta Sede impetrent, seu impetratis utantur, directè, vel indirectè prohibere, statuere, seu mandare, vel eas apud se, aut Notarios, seu Tabelliones, vel alias quomodolibet retinere præsumunt.

XIV. ..... omnes, et singulos, qui per se, vel alios, auctoritate propria, ac de facto, quarumcumque exemptionum, vel aliarum gratiarum, et Litterarum Apostolicarum prætextu, beneficiales, et decimarum alias causas spirituales, et Spiritualibus ánexas ac ab Auditoribus, et Com. missariis nostris, aliisque Judicibus Ecclesiasticis avocant, illorumve cursum, et audientiam, ac personas, Capitula, Conventus, Collegia, causas ipsas prosequi volentes impediunt, ac se de illarum cognitione tamquám Judices interponunt; quive partes actrices, quæ illas commiti fecerunt, et faciunt, ad revocandum, et revocari faciendum citationes, vel inhibitiones, aut alias litteras in eis decretas, et ad faciendum, vel consentiendum eos, contra quos tales inhibitiones emanarunt, á censuris, etc. pœnis in illis contentis absolvi per statutum, vel alias compelunt, vel executione Literarum Apostolicarum, seu executorialum, processuum, ac decretorum prædictorum quomodolibet impediunt, vel suum ad id favorem, consilium, aut assensum præstant, etiam prætextu violentiæ prohibendæ, vel aliarum prætensionum, seu etiam donec ipsi ad Nos informandos, ut dicunt, supplicaverint, aut supplicari fecerint, nisi supplicationem hujusmodi coram Nobis, et Sede Apostolica legitimè prosequantur, etiam si talia commiteutes fuerint Præsidentes Cancellariarum, Consiliorum, Parlamentorum, Cancellarii, Vice-Cancellari, Consiliarii Ordinarii, vel Extraordinarii quorumcumque Principium Secularium; etiam si Imperiali, Regali, Ducali, vel alia quacumque, præfulgeant Dignitate, aut Archiepiscopi, Episcopi, Abbates, Commendatarii, seu Vicarii fuerint.

XV. Quive ex eorum prætenso officio, vel ad instantiam partis, aut aliorum quorumcumque personas Ecclesiasticas, Capitula, Conventus, Collegia, Ecclesiarum quarumcumque, coram se ad suum Tribunal, Audientiam, Cancellariam, Consilium, vel Parlamentum, præter Juris Canonici dispositionem trahunt, vel trahi, faciunt, vel procurant directè, vel indirectè quovis quæsito colore. §. Nec non qui Statuta, Ordinationes, Constitutiones, Pragmaticas, seu quivis alia Decreta in genere, vel in specie, ex quavis causa, et quovis quæsito colore; ac etiam prætextu cujusvis consuetudinis, aut, privilegii vel alias

quomodolibet fecerint, ordinaverint; et publicaverint, vel factis, vel ordinatis usi fuerint, unde libertas Ecclesiastica tollitur; seu in aliquo lædi-tur, vel deprimitur, aut alias quovismodo restringitur, seu nostris, et dictæ Sedis, ac quarumcumque Ecclesiarum juribus quomodolibet directè, vel indirectè, tacitè, vel expressè præjudicatur.

XVI. Nec non qui Archiepiscopos, aliosque superiores, et inferiores Prælatos, et omnes alios quoscumque Judices Eclesiasticos, Ordinarios, quomodoliber hac de causa directè, vel indirectè carcerando, vel molestando eorum Agentes, Procuratores, Familiares, nec non consanguineos, et affines, aut alias impediunt, quo minus sua jurisdictione Ecclesiastica contra quoscumque utantur, secundum quod Canones, et Sacræ Constitutiones Ecclesiasticæ, et Decreta Conciliorum Generalium, et præsertim Tridentini statuunt. §. Ac etiam eos, qui post ipsorum Ordinariorum, vel etiam ab eis Delegatorum quorumcumque Sententias, et Decreta, aut alias fori Ecclesiastici judicium eludentes, ad Cancellarias, et alias Curias Sæculares recurrunt, et ab illis prohibitiones, et mandata, etiam pœnalia Ordinariis, ac Delegatis prædictis decerni, et contra illos exequi procurant. §. Eos quoque qui hæc decernunt, et exequuntur. §. Seu dant auxilium, consilium patrocinium, et favorem in eisdem.

XVII. Quive jurisdictiones, seu fructus, redditus, et proventus ad Nos, et Sedem Apostolicam, et quascumque Ecclesiasticas personas ratione Ecclesiarum, Monasteriorum, et aliorum beneficiorum Ecclesiasticorum pertinentes, usurpant. §. Vel etiam quavis occasione, vel causa, sine Romani Pontificis, vel aliorum ad id legitimam facultarem habentium expressa licentia sequestrant.

XVIII. Quive collectas, decima, talleas, præstantias, et alia onera Clericis, Prælatis, et aliis personis Ecclesiasticis, ac eorum, et Ecclesiarum, Monasteriorum, et aliorum Beneficiorum Ecclesiasticorum bonis, illorumque fructibus, redditibus, et proventibus hujusmodi, absque simili Romani Pontificis, speciali, et expressa licentia imponunt, et diversis etiam exquisitis modis exigunt, aut sic imposita, etiam à sponte dantibus, et concedentibus recipiunt. §. Nec non qui per se, vel alios, directè vel indirectè prædicta facere, exequi, vel procurare, aut in eisdem auxilium, consilium, vel favorem præstare non verentur, cujuscumque sint præeminentiæ, dignitatis, ordinis, conditionis, aut status, etiam si Imperiali, aut Regali præfulgeant dignitate, seu Principes, Ducas, Comites, Barones, et alii Potentatus quicumque etiam Regnis, Provinciis, Civitatibus, et terris, quoquomodo Præsidentes, Consiliarii, et Senatores, aut quavis etiam Pontificali Dignitate insigniti. §. Innovantes Decreta super his per Sacros Canones, tam in Lateranensi novissimè celebrato, quam aliis Conciliis Generalibus edita, etiam cum censuris, et pœnis in eis contentis.

XIX. Item excomunicamus, et anathematizamus omnes, et quoscumque Magistratus, et Judices, et Notarios, Scribas, Executores, Subexecutores quomodolibet se interponentes in Causis Capitalibus, seu Criminalibus, contra personas Ecclesiasticas, illas processando, banniendo, capiendo, seu sententias contra illas proferendo, vel exequendo, sine speciali, specifica, et expresa hujus Santæ Sedis Apostolicæ licentia, quique hujusmodi licentiam ad personas, et casus non expressos extendunt, vel alias illa perperam abutuntur, etiam si talia committentes fuerint Consiliarii, Senatores, Præsidentes, Cancellarii, Vice-Cancellarii, aut quovis alio nomine nuncupati.

XX. ..... omnes illos, qui per se, seu alios directè vel indirectè, sub quocumque titulo, vel colore invadere, destruere, occupare, et detinere præsunpserint, in totum, vel in partem, Almam Urbem, Regnum Siciliæ, Insulas Sardiniæ, et Corsicæ, Terras citra Pharum, Patrimonium Beati Petri in Tuscia, Ducatum Spoletanum, Comitatum Venusinum, Sabinensem, Marchia Anconitanæ, Massæ Trebariæ, Romandiolæ, Campaniæ, et maritimas Provintias, illarumque Terras, et Loca, ac terras specialis commissionis Arnulphorum, Civitatesque nostras Bononiam, Cæsenam, Ariminum, Beneventum, Perusium, Avinionem, Civitatem Castelli, Tudertum, Ferrariam, Comachium, et alias Civitates, Terras, et Loca, vel jura ad ipsam Romanam Ecclesiam pertinentia, dictæque Romanæ mediatæ, vel inmediatè subjecta. §. Nec non supremam jurisdictionem in illis Nobis, et eidem Romanæ Ecclesiæ competentem, de facto usurpare, perturbare, retinere, et vexare variis modis præsumunt. §. Nec non adhærentes, fautores, et defensores eorum, sed illis auxilium, consilium, vel favorem quomodolibet præstantes.»

Hállanse indicantes históricos de que esta clase de *procesos* monitorios se conocian ya en el siglo XIII (1). Las circunstancias ha-

(1) Lopez, Historia legal de la *Bula de la Cena*, part. 1, núm. 4.

cian se les añadiesen nuevos capítulos, que las heregías de Bohemia hicieron aumentar á principios del siglo XV. Publicada asi la *Bula de la Cena* por Martino V, celebrándose el concilio de Constancia, ha dado esta circunstancia ocasion á que varios autores designen á este Pontífice como autor de dicha bula. Continuó esta con varios sucesos hasta la época que hemos indicado de Clemente X, segun la vemos en el testo preinserto, y en el pontificado de Clemente XIV, en 1775 cesó su publicacion.

Desde esa época datan las contraversias sobre su retencion. En el artículo *Bula de la cena*, las dejamos reseñadas, habiendo reservado para el presente el esponer, si la bula en su totalidad está mandada retener, y por tanto, fuera de uso en España, ó si lo está únicamente en parte, esto es, *en lo que se oponga á las regalías*; en cuyo caso habria que descender á determinar cuáles de sus capítulos son los prohibidos y cuáles los que no lo están. Hay de particular en el asunto que son precisamente las disposiciones legislativas y jurídicas las que dan lugar á la duda, pareciendo unas inculcar la retencion y esclusion *absoluta* de la bula, mientras otras parecen rechazar únicamente ciertos capítulos de ella, los opuestos á la regalía: punto sobre el que creemos indispensable consignar algunas indicaciones.

Los debates y conflictos sobre la aplicacion de la bula, segun los documentos legislativos y jurídicos que nos es dado consultar, parece haber empezado en Aragon y Cataluña, y aun en nuestros dominios de Nápoles, antes que en Castilla, segun veremos despues.

Pero en 1572 Felipe II mandó formalizar y formalizó suplicacion de la bula, *prohibiendo su admision* en estos reinos; lo que despues se reiteró con súplica á la Santidad de Gregorio XIII, segun ya hemos indicado en el artículo *Bula de la cena*.

Ademas: habiendo hecho publicacion de dicha bula el obispo de Calahorra, mandando fijar cedulones contra los resistentes, Felipe II lo estrañó del reino.

Habiendo hecho uso de las censuras de la bula el obispo de Pamplona, el fiscal del Consejo en suplicacion sobre ello á Cárlos II, asentó, «estar suplicado y no admitido en España, ni aun en los demás estados católicos, dicho proceso, ó monitorio *in cœna Domini.*»

Y en la real Cédula espedida con tal motivo y dirigida al R. obispo en 2 de noviembre de 1694, se le previno no haber debido declarar á los ministros del Consejo de Navarra incursos en las censuras de la *bula de la cena*, «*que no estaba admitida*, decia el Rey, *en sus dominios.*»

Suponiéndose que los Nuncios influian para que el clero en los púlpitos amenazase con las censuras de la *bula de la cena*, á los que contrariasen lo dispuesto en el cap. 16 de ella sobre jurisdiccion eclesiástica, en 1593 á peticion de las Córtes de Madrid, se espidió real resolucion mandando al Consejo, Chancillerías y Audiencias, que no obstante ello, sostuviesen los recursos de fuerza y defendiesen á los agraviados (1).

Nuevamente hubo que contener al obispo de Pamplona en el propio sentido de la cédula anteriormente citada; y reencargando por otra su cumplimiento, en 14 de noviembre de 1745, repitiósele á consulta de la Cámara, «que la *bula de la cena no estaba admitida* en estos dominios.»

Lo propio se dijo al provisor de Huesca con ocasion de una competencia con la Audiencia de Aragon, por resolucion á consulta del Consejo de 26 de abril de 1746.

La signatura de justicia de Roma *circunscribió* un auto de fuerza provisto por la Audiencia real de la Coruña, fundada aquella en los principios de la bula.

El Consejo en 12 de Enero de 1751 elevó consulta á S. M. encareciendo la necesidad de rogar al Sumo Pontífice se sirviese mandar tildar, y tachar en los registros de la signatura una resolucion tan ofensiva á las regalías: y hecho como proponia el Consejo, Benedicto XIV accedió á lo solicitado. Con este motivo se dirigió circular á los obispos

(1) Ley 8, tit. 2, lib. 2, Nov. Rec.

y demás prelados de España, ordenándoles, que mientras se tratasen los recursos de fuerza en los tribunales reales; no admitan bulas, ni recargos que embaracen su accion, y antes se observe en todo el reino lo que se practicaba en los dominios de Indias, y es que las bulas, breves y rescriptos pontificios no tienen aplicacion, ni cumplimiento sin real auxiliatoria (1).

Estas, y otras muchas disposiciones análogas, que pudieran citarse, parecen probar que la bula está retenida y suplicada *en su totalidad*; mientras hay otras muchas que prueban, ó dan ocasion por lo menos á creer lo contrario, como vamos á ver.

Y con efecto: el Papa Julio III, amplió el tenor de la bula á mediados del siglo XVI, estendiéndolo en lo jurisdiccional, con cuyo motivo, tuvo lugar la publicacion de la misma por el arzobispo de Zaragoza y el castigo del impresor de que queda hecho mérito. El reino de Aragon representó entonces al Rey contra la novedad y los agravios de aquella. Venia la cuestion complicada con la célebre causa del baron de la Laguna, en la cual medió breve de Roma para que los inquisidores *prendiesen al justicia mayor de Aragon*, y á sus lugar-tenientes por haber contravenido á la bula, y obrar sin respeto, ni temor á sus censuras. No fué tampoco obedecido el breve; y el emperador Cárlos V, al par que lo aprobaba todo, y mandaba ir en ello adelante, en la real cédula, que en 28 de enero de 1551, publicó el Virey en la audiencia de Aragon, decia á esta, sin embargo, como para tranquilizarla, y fortalecerla, «que habia dado órden á su embajador en Roma, para que supuesta la publicacion de dicha bula, que de hecho, se habia ejecutado por el arzobispo, *sacase absolucion de Su Santidad de todo lo que hasta allí se hubiese obrado, que pudiese parecer contrario á ella.*»

En 1552 el Consejo de Cataluña elevó esposicion al Emperador Cárlos V, manifestando que la bula se oponia á las regalías en el punto de jurisdiccion real.

Posteriormente, habiendo San Pio V renovado en ella los capítulos añadidos por Julio III, y adicionado todavía algunas disposiciones mas sobre jurisdiccion, mandando á los obispos y prelados eclesiásticos del reino de Nápoles la publicasen é hiciesen obedecer; fueron tales las controversias suscitadas con este motivo, que el Santo Padre se creyó en la necesidad de mandar á España, como Nuncio especial para terminar las diferencias, al obispo de Ascoli, con cuya ocasion Felipe II, en real cédula de 24 de marzo de 1575 ordenaba el Virey y consejeros del principado informasen sobre lo espuesto por el Nuncio, espresando en ella, «*que para estar con el ánimo quieto, y no incurrir por descuido en las censuras de la bula in coena domini*, he tenido á bien de escribiros esta; y os encargamos tengais particular cuidado de favorecer la jurisdiccion eclesiástica cuanto sea dable, y de no venir contra ella, *sino en cuanto fuere contra preeminencia real*» Evacuando el Virey la consulta, decia al Emperador que «en la misma bula hay *algunos capítulos* perjudiciales á la jurisdiccion y real preeminencia,» citando el 5 sobre imposicion de nuevas gavelas: el 8.° sobre los que impiden llevar bastimentos á Roma: el 12 sobre los que por sí, ó por otros hieren ó maltratan á los que recurren con sus negocios á la corte romana, el que trata del *executur regium* para las bulas y breves; y del embargo y retencion de bienes civiles de clérigos. En consulta posterior el Virey se quejaba ademas de la adicion hecha á la bula sobre bienes de náufragos.

El consejo de Castilla en la Circular antes citada en 16 de marzo de 1768, despues de haber encarecido, como queda visto, los perjuicios de la bula, é inculcado estar retenida y suplicada, concluirá asi. «22 Todos estos antecedentes, omitiendo otros muchos, la constante tradicion de los jurisconsultos del reino, y la práctica de los tribunales superiores de él demuestran que en España *no tienen fuerza alguna* las censuras de dicho Monitorio *in cœna Domini, en cuanto perjudican* á la autoridad *indepen-*

(1) Circular del consejo de 19 de marzo de 1768; nota 2.ª, al tit. 3, lib. 2, Nov. Rec.

diente de los soberanos *en lo temporal, é impiden las funciones de sus magistrados, facilitan las pretensiones* de la curia romana, y *turban la tranquilidad* de los Estados, á que tanto conduce la armonía del imperio y el sacerdocio.....» «de órden del Consejo, lo participo á V., á fin de que se arregle á las reales disposiciones que van citadas, sin permitir por manera alguna que en esa diócesis ó provincia se publiquen, ni aleguen semejantes monitorios, anuales *in cœna Domini, debiéndoles considerar como retenidos, y sin uso en cuanto ofendan la regalía* (1).»

Ultimamente y para omitir otras citas, la mas clásica que sobre ello hay que alegar, es la célebre pragmática de Madrid de 16 de junio de 1768 (1) sobre la necesidad del *pase régio*, mas encarecida entonces que nunca con ocasion del ruidoso y célebre *Monitorio de Parma*, de que hablamos en su artículo; y sin embargo todo lo que se dice en la espresada pragmática relativamente á la *bula de la cena*, es (2) que se remitan al consejo, entre otros, todos los rescriptos y bulas sobre jurisdiccion, para que el consejo juzgue... si «usa de las censuras *in cœna Domini* suplicadas y retenidas *en todo lo perjudicial á la regalía.*»

Preciso es convenir en que el lenguaje de muchas leyes, si el fin de ellas era escluir en un todo la bula *de la cena*, no puede ser mas perplejo, ni menos terminante. Si solo está suplicada, y retenida en *todo lo perjudicial á la regalía*; claro es que no lo está en totalidad; ó en otro caso era necesario haber dicho que todo se oponia; lo que no se verá en ninguno de los testos que pueden aducirse en uno ú otro sentido. Y ciertamente hay cosas que no se oponen, por estar mandadas por otras leyes, ó disposiciones eclesiásticas no retenidas, para lo cual no hay mas que recorrer el testo de la bula.

Y sin embargo: siendo incontestable que por regla general no puede ejecutarse bula, ni breve que no haya obtenido el *pase*: no habiéndolo obtenido la *bula de la cena*, pues aunque no estuviesen suplicados todos sus capítulos; no por eso el silencio ó pretericion de los que no lo estén, puede tomarse por *pase real*, esplícito, y tal cual se acostumbra á formular: no discernido por declaracion competente cuáles son los capítulos no suplicados, ó que no se oponen á las regalías, pues la única autoridad competente para designarlos, y hacer la debida separacion entre los que se oponen y los que no se oponen á las regalías, fué el Consejo y hoy el Tribunal Supremo de Justicia, que nada han declarado, ni consultado á S. M. sobre el particular: teniendo en cuenta además la creencia general y práctica de los tribunales; puede darse por cierto que la *bula de la cena* está en su totalidad en España fuera de uso, y por tanto, que no habiendo hasta hoy obtenido el pase, de todo punto necesario conforme á las leyes del reino, y especialmente á la pragmática de 1768, antes citada, ninguna autoridad, ni tribunal la puede aplicar. Alguna vez sin embargo se aplicarán varias reglas, y prescripciones en ella contenidas; pero no lo serán como capítulos de la bula; sino por estar mandados, ó autorizados por otras leyes ó disposiciones canónicas admitidas en el reino, y siempre lo serán sin las censuras de la bula. V. BULA DE LA CENA: PASE.

CENCERRADA. En su acepcion propia significa el ruido desapacible, molesto y tumultuoso que se hace con cencerros, cuernos, caracolas, campanillas y otros instrumentos, acompañado de silbidos, gritos ó voces destempladas, con el objeto de burlarse de los viudos cuando contraen segundas nupcias, ó en desprecio de cualquiera otra persona á quien se quiere poner en ridículo. En sentido figurado se dá tambien este nombre á un artículo de periódico ó á cualquier otro escrito satírico-burlesco, dirigido á mofarse de un hombre público con ocasion de actos de su cargo.

Algunos autores opinan, que las cencerradas son una imitacion burlesca de cierta ceremonia con que terminaban los matrimonios paganos, reducida á que el marido arroja-

(1) Dicha nota 21 al tít. 2, lib. 2, Nov. Recop.
(2) Ley 9, tit. 2, lib 2, Nov. Recop.
(3) Párrafo 3.

ba al pueblo monedas ú otras dádivas de poco valor, que la muchedumbre recogia con gran confusion y desórden; y suponen que los cristianos, reputando como odiosas las segundas nupcias, se valieron de aquel medio para ridiculizarlas; estendiéndose despues esta costumbre á los matrimonios contraidos entre personas ancianas ó de edad muy desigual, y convirtiendo la algazara y confusion de las gentes en injurias y ruidos desapacibles; y las dádivas, en penas que imponian á los contrayentes, si querian librarse de sufrir las molestias que se les preparaban. Efectivamente, en la Provenza era muy frecuente que los viudos recien casados contratasen con el director de la cencerrada á quien llamaban el *abate*, la cantidad que debian entregar para salvarse de aquel bochorno; y en algunos pueblos de España tambien ha habido esta clase de convenios, aun en nuestros dias, si bien la pena ha consistido ordinariamente en algunas libras de dulces ó en otros comestibles ó en licores.

Es bastante incierta la época en qne tuvieron orígen las cenceradas, y solo podemos decir que son muy antiguas; siendo notable que esta perniciosa costumbre haya prevalecido por tantos siglos, á pesar de que las personas sensatas la han reputado siempre como un abuso, que ultraja al individuo, ofende á la familia, perturba el órden público, repugna á la moral, y suele producir las mas funestas consecuencias. Los antiguos espositores ya opinaban que los autores de las cencerradas podian ser perseguidos por la accion de injuria, *nec possint excusari consuetudine, cum sit contra bonos mores.* Sin embargo, de nada servian estas opiniones, y en España, Francia y otras partes se repetian con frecuencia, resultando escándalos, enemistades, pendencias y desgracias, que turbaban la paz de las familias, é introducian la discordia en las poblaciones. Estos escesos llamaron la atencion de la Iglesia, que tal vez veía tambien en las cencerradas una falta de respeto al sacramento del matrimonio; y en los concilios de Langres de 1421 y 1455, y en el de Tours, celebrado en Angers en 1548, fueron reprobadas, mandándose en el de Narbona de 1609 que los obispos las prohibiesen, bajo pena de escomunion. «*Prohibeant Episcopi ludos, qui impudenter in contemptum secundarum nuptiarum á permultis fieri solent..... contumaces et inobedientes pœna excomunicationis coerceant.*» Tambien se prohibieron por decretos de la mayor parte de los parlamentos de Francia, que consideraban las cencerradas como contrarias á las buenas costumbres, si bien solo imponian penas pecuniarias á los transgresores.

Don Cárlos III prohibió igualmente las cencerradas por bando publicado en Madrid á 27 de setiembre de 1765. (1). En el preámbulo de esta ley se indican las causas que la motivaron, por cuya razon creemos conveniente su insercion literal; dice así: «Para cortar de raiz el abuso introducido en esta corte de darse cencerradas á los viudos y viudas que contraigan segundos matrimonios, y obviar los alborotos, escándalos, quimeras y desgracias que en adelante pudiesen suceder, se manda: que ninguna persona de cualquier calidad y condicion que sea, vaya solo ni acompañado por las calles de esta corte, de dia ni de noche, con cencerros, caracolas, campanillas, ni otros instrumentos, alborotando con este motivo: pena al que se le encontrase con cualquiera de dichos instrumentos en semejante acto, de noche ó de dia, y á los que los acompañasen, aunque no los lleven, de cien ducados aplicados á los pobres de la cárcel de corte y cuatro años de presidio por primera vez, y por las demás al arbitrio de la Sala.» Como se vé, esta prohibicion se limitaba á solo la corte; pero luego se puso en observancia en varios pueblos, quedando en otros arraigado ese abuso viturable, y llegando en algunos casos hasta el estremo de ver á los mismos alcaldes tomar parte en las cencerradas, aunque muchas veces con el laudable fin de contener á la muchedumbre dentro de ciertos límites, y evitar por este medio que las cencerradas tomasen un carácter de gravedad y trascendencia, que pudiera comprometer el órden público, causar desgracias, y tal vez proporcio-

(1) Ley 7, tit. 35. lib. 12 Nov. Recop.

nar con su confusion medios fáciles de perpetrar otros delitos. Esta conducta podia ser disculpable no habiendo ley prohibitiva, pues la recopilada solo estaba en observancia en algunos pueblos, como antes hemos indicado; pero desde que tenemos una prohibion espresa, los alcaldes faltarian á sus deberes si consintiesen que impunemente se verificasen las cencerradas, y quedarian sujetos á una grave responsabilidad, que no podrian eludir, ni con el deseo de evitar males de mayor consecuencia, ni aun con esa elasticidad que quieren dar los agentes de la administracion á las leyes, cuya aplicacion les está encomendada. En el Código penal se prohiben las cencerradas, no como en el francés y de Bélgica, en que se impone una multa á los autores y cómplices de ruidos y alborotos nocturnos ó injuriosos, sino especificándolas con su propio nombre y con tal claridad, que ninguna escusa podrian alegar los encargados de vigilar el cumplimiento de las leyes, si tolerasen la infraccion de sus disposiciones.

No hay duda que en esta parte de la legislacion penal, nuestro Código ha introducido modificaciones convenientes y conformes con los principios de justicia. En él se mitiga el rigor escesivo de la ley recopilada que antes hemos citado; rigor necesario en aquella época, para cortar de raiz una costumbre que contaba tantos siglos de existencia, y que hoy se halla casi olvidada en la mayor parte de nuestros pueblos importantes: no se castiga con igual pena al director y á los simples ejecutores de la cencerrada; se la considera como falta, y solo tomará el carácter de delito, cuando altere gravemente el órden público. Asi, en su artículo 485, núm. 14, impone la pena de arresto de cinco á quince dias, ó multa de 5 á 15 duros á los que escitaren ó dirigieren cencerradas, ú otras reuniones tumultuosas, en ofensa de algunas personas ó del sosiego de las poblaciones. El artículo 493, núm. 2.° dispone que se castigue con arresto de uno á cuatro dias y reprension á los que tomen parte en cencerradas ú otras reuniones ofensivas á alguna persona, no estando comprendidos en el caso anterior. Por último, el 497 declara que incurren en la pena de arresto mayor á prision correccional los que turbaren gravemente el órden público para causar injuria ú otro mal á alguna persona particular.

Estas disposiciones están redactadas con tal claridad, que no necesitan de comentario alguno para su buena inteligencia. Basta solo tener presente que las cencerradas se prohiben y castigan, no solamente cuando van dirigidas contra los viudos que han contraido segundas nupcias, cuyo caso suele ser el mas comun y frecuente, si que tambien cuando se hacen en ofensa de cualquiera otra persona ó del sosiego de las poblaciones. En toda sociedad bien constituida, sus individuos deben guardarse todas las consideraciones que el bien comun exige; nadie está autorizado para molestar á su vecino, y la ley está en el caso de corregir al que falte á estos deberes sociales, aun cuando lo haga sin el objeto de ofender á persona determinada. Naturalmente es mayor la falta ó culpabilidad de los que promueven las cencerradas, y de los que las escitan ó dirigen, que la de los que simplemente toman parte en ellas: sin la escitacion de aquellos es probable que estos nada hubiesen hecho, y por eso con mucha razon castiga la ley con mayor pena á los primeros que á los últimos. Una observacion debemos hacer, sin embargo: el núm. 14 del artículo 485 castiga á los que escitaren ó dirigieren cencerradas en ofensa de alguna persona ó del *sosiego de las poblaciones*, al paso que en el núm. 2.° del 493, omitiéndose este segundo estremo, solo se pena á los que tomaren parte en ellas cuando son ofensivas á alguna persona; no por esto deberá entenderse que no incurre en falta alguna el que toma parte en una cencerrada, que no tiene otro objeto que alterar el sosiego de la poblacion. Mas consideracion se merece todo un vecindario que cada individuo en particular: ambos casos están comprendidos en la razon de la ley, y la referencia que hace el segundo artículo al primero de los citados, indica que se han querido comprender en aquel los mismos casos á que este se estiende. De consiguiente, los que tomen parte en cencerradas que, sin ir dirigidas contra persona determi-

nada, ofenden, sin embargo, el sosiego de las poblaciones, serán penados con arreglo al artículo 493 del Código penal.

Ordinariamente las cencerradas no presentan carácter alarmante; las gentes conocen, ó fácilmente pueden conocer su objeto, y no hay, por tanto, temor de que se altere la tranquilidad pública: tampoco en el órden social se tiene por ofensa grave la que con ellas se causa. Por estas razones nos parece conveniente, que el Código penal, mitigando el rigor escesivo de la ley recopilada, las castigue como simples faltas. Mas, cuando se traspasan aquellos límites; cuando por darles un carácter político; por mediar rivalidades de familias, como suele suceder en los pueblos de corto vecindario, ó por otra cualquier causa, se turbare con ocasion de ellas gravemente el órden público, ó se cometieren otros escesos mas graves, entonces pasarian los hechos á la categoría de delitos, que deberian ser penados con arreglo á su naturaleza, ó conforme al art. 197 si solo hubiesen producido la alteracion del órden público.

Las cencerradas, por merecer pena de arresto, pertenecen á la clase de faltas que deben ser castigadas siempre en juicio verbal, y no gubernativamente, conforme á lo dispuesto en el Real decreto de 18 de mayo de 1853. En lo relativo al procedimiento y circunstancias que han de tenerse en consideracion para la aplicacion de la pena, véase FALTAS.

CENIZA. Conocida es en lo eclesiástico la significativa ceremonia de signar con ella á los fieles por el celebrante en el templo, y antes de la misa mayor en el miércoles de la primera semana de cuaresresma, llamado por eso miércoles de ceniza. En las catedrales y colegiatas esta ceremonia dá lugar á cuestiones de precedencia, asi como en la distribucion de *palmas* y *candelas*. Sobre ello véase CANDELAS.

CENOBITA. Del griego *koinobios* (κοινόβιος) el que vive en comunidad, ó hace vida comun con otros. Aplicóse á todas las asociaciones religiosas de oriente, cualquiera que fuese el rito que profesasen: despues de la ley de gracia á los que despues hemos llamado *monjes* y *frailes*, y por consecuencia á las *monjas*. El espíritu de piedad y tédio del mundo, primero, y las persecuciones contra el cristianismo, despues, hicieron á muchos preferir al siglo y humano comercio la soledad del campo, de los grandes desiertos y la vida contemplativa. Reuníanse unos en comunidad y bajo una disciplina comun: preferian otros el aislamiento personal fijo ó sedentario: otros, en fin, con poco provecho para ellos, ni ejemplo para los demás, la vida errática. Llamáronse los primeros *cenobitas*; los segundos *anacoretas* y *solitarios* del yermo, del desierto, y *hermitaños*; los terceros, mal mirados en general, *sarabaitas*, á que equivalieron despues en sus casos las calificaciones de *girovagos*, *obiquistas*. Fácil es ver en los *cenobios* el orígen de los monasterios, vida monástica, comunidadss religiosas, conventos, etc., de que hablamos en su lugar.

CENOTAFIO. De las voces griegas *kenos*, vacío, y *taphos*, sepulcro, tumba. Dícese, pues, con propiedad, del monumento funerario, tumba, urna, etc., en que no están, ni nunca estuvieron el cuerpo ó restos mortales de aquel á quien se dedican: á diferencia de *sarcófago*, que es por el contrario el monumento fúnebre, ó sepulcro que encierra ó encerró los despojos del finado. Dió principalmente lugar á la creacion de estos *sepulcros vacíos*, la creencia pagana de que los *insepultos*, esto es, los finados, cuyos cuerpos no eran enterrados, vagaban por una centuria sin poder entrar en los campos *Elíseos*, ó en la region eterna del descanso y premio de las buenas acciones, segun ellos lo aprendian. Construido el cenotafio, se consagraba conforme al rito del pais, y se *evocaban los manes* del finado para que entrasen y morasen en el sepulcro *supletorio* de la verdadera, y no obtenida *sepultura*. Erigíanse los cenotafios á los que morian en la guerra, ó en la mar, si quedaban insepultos; de muerte y en lugar ignorados, etc. Despues se trasladó la denominacion, aun á pueblos cuyas creencias rechazan el principio, como el pueblo cristiano; si bien la enunciativa de cenotafio lleva un valor en-

Lorenzo Arrazola

tendido, como cuando se llaman asi los aparatos funerarios levantados en los templos para las exequias fúnebres de finados, cuyo cadáver no se halla presente. Asi los *catafalcos*, *túmulos* y *tumbas* funerarias de los templos, no son otra cosa que cenotafios. Dentro del templo no tiene duda que su profanacion es un sacrilegio; no por ellos; sino por razon del lugar, pues que no se concibe lo fueran sin serlo el templo. Pero en un cementerio, erigido uno de estos monumentos, antes que se deposite en ellos cuerpo alguno ni despojos mortales; erigidos, sino, aislados é independientes, en lugar no bendito, como monumento pùblico, al modo de los que erigia Atenas, por ejemplo, á los que morian en la guerra, en el barrio llamado por eso *cerámico*; en estos casos, decimos, y en otros análogos, de destruir, allanar, maltratar dichos monumentos ¿se dirá el crímen de *violacion de sepulcros*? Sin duda no, aunque es cierto habrá otro delito, como lo hay siempre que se hace un mal á sabiendas. V. SARCOFAGO, SEPULTURA, SEPULCRO.

CENSALES. Con este nombre se designan en Aragon los censos, ó sea el contrato en que por medio de la trasmision á otro del dominio de un capital ó finca, adquiere el que lo dá el derecho de cobrar una pension anual.

En oposicion, los censos redimibles se llaman graciosos: estos se consideran en la clase de las cosas muebles y los irredimibles ó perpétuos pertenecen á la de sitios, cuya declaracion hizo el Rey don Martin I en 1398 en las Córtes de Zaragoza, por el deseo, segun dice, de poner término á las encontradas opiniones de los *foristas*, con cuyo dictado se designaba algunas veces á los jurisconsultos. (Fuero *de censualibus*).

Esta disposicion es de mucha consecuencia en la legislacion aragonesa, en la que *por fuero*, esto es, sin necesidad de pacto, se reconoce la viudedad del cónyuge sobreviviente en los bienes *sitios* del difunto.

Los instrumentos *censales*, segun el fuero de 1592, traian aparejada y privilegiada ejecucion, aunque antiguamente debian antes sentenciarse, lo que se abolió por este fuero, estendiendo el privilegio el fuero de 1626 á los censales de las comunidades de Albarracin y Teruel y villa de Mosqueruela, determinando que con sus escrituras, aunque careciesen de la cláusula de *güarentigia*, se pudiese *aprehender*, *inventariar* y *ejecutar*. Estas comunidades fueron agregadas á los fueros de Aragon, pues antes con la villa de Mosqueruela se gobernaban por el de Sepúlveda.

Las escrituras de imposicion de censos en su otorgamiento son *actos de firma*, segun el fuero de 1528 (Forma de testificar).

El Rey don Alonso en Teruel en 1428, para impedir los embarazos que se oponian á las ejecutorias de las sentencias sobre censales á título de *falsias*, *inhibiciones*, *contra fuero*, etc., dispuso que la ejecucion de las sentencias no se embarazase con las escepciones indicadas, descendiendo á dictar varias disposiciones; pero este fuero se concreta á los contratos de censales que de allí en adelante se testificasen ó se hiciesen. (Fuero *de censualibus et aliis debitis*).

Como los censos tenian tanta importancia en Aragon, se encuentran varias disposiciones dictadas en distintas épocas, y que dicen relacion principalmente á los impuestos sobre universidades, *aljamas de judíos* ó moros, etc., sobre las *generalidades* del reino, y sobre las comunidades de Teruel y Albarracin, su reduccion y *luicion*.

El privilegio del fuero de 1428 se aplicó por el señor don Juan II en Calatayud en 1461 á los censales impuestos sobre aljamas de judíos y moros del señor Rey que entoncos tenian, si los dichos censales se llegasen á reducir á 40,000 por mil, ó de ahí arriba, ordenando que estos censales no se sentenciasen de nuevo, y que tuviesen el privilegio del fuero de Teruel como si hubiesen sido sentenciados despues del mismo. (*Actus super censualibus judaicorum et sarracenorum*).

Todavia el mismo Rey en el propio año publicó otro fuero sobre los censales viejos á que estuviesen obligados cualesquiera barones, nobles, caballeros, infanzones, uni-

versidades, cuerpos, aljamas, colegios ó singulares personas de dichos cuerpos, estableciendo disposiciones idénticas á las que contenia el anterior fuero, pero previniendo que las aljamas de los judíos ó moros, así realengas como no realengas, que tuvieran censos viejos impuestos antes del otro fuero á menos precio de 40,000 por mil, y quisiesen constituir nuevo censo al precio de 40,000 por mil, se pudiesen ayudar de ciertos fueros que cita: que las aljamas que estuviesen cargadas de censales y fueren reducidos á razon de 40,000 por mil, haciendo censales nuevos, se hubiesen de reducir á razon de 50,000 por mil, y los que los tuviesen á 50,000 por mil, los redujesen á 70,000: y que estas aljamas, reducidas en esta forma, pudiesen invocar los fueros y privilegios que cita. (*Actus in favorem censualium veterûm*).

La espulsion de los moriscos dió lugar al establecimiento de nuevas concordias en las Córtes de 1626, reduciendo los censos concegiles no concordados, que estuviesen cargados á menos, á razon de 20,000 por mil, ó sea al 5 por 100, prohibiendo imponer nuevos censales, á no ser para las dotes de las hijas de los señores, que con arreglo á fuero tenian obligacion de dotarlas.

Tambien en Aragon se cuidaba de la amortizacion de los censos, y en las Córtes de 1564 se acordó que de lo que sobrase, pasadas cuentas, se luyesen los censos cargados sobre el general del reino, comenzando por los mas antiguos.

En las Córtes de 1646 se redujeron á 22,000 por mil los censos sobre las generalidades; ordenando que todo el beneficio que resultase de esta rebaja de las pensiones y de los censales que se fuesen luyendo, se destinaran á la luicion de los censales de los estranjeros por su antigüedad y despues á la de los regnícolas en la misma forma. Véase **CENSO** (*como contrato*).

CENSATARIO. Dícese tambien *censuario*, aplicadas de ordinario ambas denominaciones al que paga la pension ó cánon de un censo, especialmente en el censo como contrato.

CENSO. Del latin *census*, del verbo *censeo*, estimar, juzgar, sentenciar, apreciar, con otras muchas significaciones análogas. Aplicábase, como por antonomasia, entre los romanos al *juicio* del magistrado público, llamado *censor*, encargado de formar, y rectificar cada cinco años el padron, y estadística personal, y de riqueza y costumbres de los ciudadanos. Este recuento y fallo sobre la riqueza, número y costumbres de los ciudadanos, se llamó *censo*; y tambien el tributo impuesto sobre este catastro, o estadística, de donde la voz se ha generalizado á tantas otras especies de prestaciones pecuniarias, y aun de frutos; y por metonimia al contrato, que produce esta obligacion personal, y respecto del cual la ley, ó mas bien el legislador, hace de *censor*, estimando ó fijando préviamente para cada caso el tanto de la pension. En los artículos sucesivos veremos las acepciones mas usadas de la palabra *censo*.

CENSO DE AGUA. La pension que en Madrid pagan al ayuntamiento los dueños de casas que tienen agua de pié, de los viajes de la villa.

CENSO AL QUITAR. Lo mismo que *censo redimible*. V. **CENSO** (*como contrato*).

CENSO (**EN LO CANONICO**). Decíase tambien *censo catedrático*. Véase **CATEDRATICO** por *censo* ó *derecho*.

CENSO CONSIGNATIVO. Véase **CENSO** (*como contrato*).

CENSO (**COMO CONTRATO**). En su acepcion mas usual y técnica, es en cuanto á los resultados, el derecho que uno tiene á percibir, y otro la obligacion de pagar cierto cánon, ó pension ánua por la concesion al segundo del dominio directo y útil de algun prédio ó prédios: por solo el dominio útil: ó por la entrega de alguna cantidad sobre fincas, cuyo dominio útil y directo conserva el que las recibe á censo, lo que dá lugar á las tres especies de los mas usuales y comunes, y aun llamadas asi por antonomasia; á saber, censo *reservativo, enfitéutico y consignativo*, sobre las cuales, con el *vitalicio*, versa el presente artículo.

En cuanto al principio, estos censos, se

constituyen unas veces por contrato; otras por testamento, por la ley, como ha sucedido en casos de usurpacion de bienes comunes ó baldíos, por sentencia judicial y por transaccion ó avenencia, cual sucede en particiones testamentarias. En el primer caso hay un contrato bilateral en toda la estension y propiedad de la palabra: en los demas la obligacion sobreviene sin espontaneidad y designio prévio, y aun contra la voluntad; como sucede, por ejemplo, en las mencionadas usurpaciones de terrenos públicos, en las compras ó adquisicion de ellos con algun vicio ó falta de formalidades. Pero como siempre sobreviene la aceptacion, la sumision, y por lo tanto la voluntad, de aquí el dominar siempre en los censos la idea de contrato, y porque tambien es, entre todos los modos de constituirlos, el mas comun. De aquí la definicion mas comun tambien, y usual del censo, diciendo ser un contrato, por el cual, adquiere el derecho de exigir y percibir cierto rédito, ó pension anual, el que cede ó trasmite á otro alguna cosa ó cantidad con este propósito y segun las formalidades prescriptas para el caso, por las leyes: definicion descriptiva mucho mas esplícita y adecuada, que la dada por algunos, á saber: contrato por el cual uno vende, y otro compra el derecho de percibir cierto cánon ó pension anual en dinero ó frutos; aunque reconocemos que todo censo puede reducirse á una venta, como otros lo reducen á una servidumbre *real*.

Tomando el efecto por la causa, y segun hemos indicado en el artículo genérico *censo*, esta voz espresa algunas veces el derecho mismo á percibir y exigir la pension: otras la obligacion de pagarla; otras, en fin, la pension misma, y aun el contrato. Asi decimos que Ticio *tiene* tales censos á su favor: que Mevio *paga* un censo; que tal hacienda está abrumada de censos; que sobre tal heredad ó fincas se ha constituido ó impuesto un censo.

Nuestra legislacion sobre el particular es inmensa, y aun mas, y mas complicada la jurisprudencia, prácticas y costumbres generales y locales: los censos numerosos, mas de lo que conviniera: las cuestiones sobre ellos frecuentísimas; por lo que no hemos podido menos de dar una estension conveniente á este artículo, y en cuanto á la legislacion, hacer mérito, con alguna estension tambien, de lo que es indispensable tener presente en la materia.

PARTE LEGISLATIVA.

SUMARIO.

Leyes de las Partidas.
Leyes de la Novísima Recopilacion.
Disposiciones posteriores.
Leyes de Indias.
Legislacion canónica.
Legislacion estranjera.
Proyecto de Código civil.

LEYES DE LAS PARTIDAS.

LEY 3, TÍT 14, PART. 1.

«Enfiteosis es manera de enajenamiento de que ficimos emiente en la tercera ley ante desta, et es de tal natura que derechamiente non puede ser llamada vendida nin arrendamiento como quier que en si haya natura de amas á dos, et ha lugar este enagenamiento en las cosas que son raices, et non en las muebles, et facese con voluntad del señor de la cosa, et del que la recibe, en esta manera; que el recibidor ha luego de dar de mano al otro dineros ó alguna otra cosa cierta segunt se avinieren que es como manera de precio que ha de fincar por suyo quitamiente, et el señor de la cosa débela enagenar al otro á tal pleyto quel dé cada año dineros ó otra cosa cierta en que se avinieren; et puédese facer tal enagenamiento como este para siempre ó para tiempo cierto, et ha de ser fecho por *carta de escribano público ó del señor que lo dá*, et despues deso non se puede destaiar, pagando cada año el que tiene la cosa aquello á que se obligó. Et si por aventura alguno toviere á enfiteosis cosa que pertenesciese á la eglesia, et estobiese por dos años ó poco tiempo mas

que non pagase lo que prometió dar cada año, puedegelo toller el perlado ó aquel á quien pertenesce la cura de las cosas de la eglesia sin otro juicio. Et si naciere contienda sobre este poco tiempo demas de los dos años, debe ser librada por alvedrío del judgador del lugar: et aquellas heredades pueden dar á enfiteosis á aquel que viere el obispo ó el cabildo que mas provecho es de la eglesia en las dar que en las tener.»

LEY 11, TÍT. 31, PART. 3.

«Heredamientos, et casas, et otros edificios han algunos homes que son de tal natúra que como quier que hayan la tenencia dellos et los esquilmen, non son verdaderos señores dellos en todo, asi como las heredades que tienen en feudo, ó las que tienen algunos para en su vida et de sus herederos, dando por ellas algunt cienso cierto ó habiendo á facer algunt servicio señalado. Et por ende decimos que cualquier que toviese alguna destas heredades sobredichas et otorgase servidumbre en ellas á otri, ó otro alguno la otorgase á él en la su heredat propia para uso de aquella heredat que toviese asi, que tambien la una servidumbre como la otra vale para siempre, bien asi como si la ficiesen en las heredades que han suyas quitamiento.

LEY 28, TÌT. 8. PARTIDA 5.ª

«*Contractus enfiteuticus* en latin tanto quiere decir en romance como pleito ó postura que es fecha sobre cosa raiz que es dada á cienso señalado para en toda su vida de aquel que la rescibe ó de sus herederos, segunt que se avienen por cada año; et tal pleito como este debe seer fecho con placer de amas las partes et por escriptura, ca de otra guisa non valdrie. Et otrosí deben seer guardadas todas las conveniencias que fueren escriptas et puestas en él. Et porque este pleito es mas semejante á los logueros que á otro contrato ninguno, por ende fablamos en este título dél, et decimos que si la cosa que es dada á cienso se perdiese toda por ocasion, así como por fuego ó por terremotos, ó por aguaducho, ó por otra razon semejante, que tal daño como este pertenesce al señor della et non al otro que la hobiese así rescebida, et de aquel dia en adelante non serie tenudo de darle cienso ninguno. Mas si la cosa non se perdiese de todo por aquella ocasion, et fincase cuanto la ochava parte della á lo menos, entonce tenudo serie de dar el cienso cada año por ella asi como lo habie prometido. Et aun decimos que si la cosa que es dada á cienso es de eglesia ó de órden, si aquel que la asi tenie, retovo la renta ó el cienso por dos años que lo non diese, ó por tres años, si fuese de home lego que non fuese de órden, que dende adelante los señores della sin mandado del juez gela pueden tomar. Pero si despues de estos plazos sobredichos quisiere pagar la renta por si sin pleyto ninguno fasta diez dias, debe gela rescebir el señor de la cosa, et de entonce non ge la debe tomar: et si á ninguno destos plazos non pagare la renta, entonce tomarle puede la cosa el señor maguer nol pidiese el cienso él por sí, nin otri por él; ca entiéndese que el dia del plazo á que debie pagar la renta, la demanda por el señor et aplaza al otro que la pague.»

LEY 29, ID., ID.

«Enagenar et vender puede la cosa aquel que la rescebiere á cienso; pero enante que la venda, débelo facer saber al señor como la quiere vender et quanto es lo quel dan por ella; et si el señor le quisiese dar tanto como el otro, entonce la debe vender á él ante que al otro. Mas si el señor dixese que lo non querie dar, ó se callase fasta dos meses que non dixese si lo querie facer ó non, dende en adelante puédela vender á quien quisiere, et nol puede embargar aquel que gela dió á cienso que lo non faga; pero la debe vender á tal home de quien pueda el señor haber el cienso tan de ligero como del mesmo. Otrosí decimos que este que tiene la cosa á cienso, que la puede empeñar á tal home como sobredicho es sin sabidoría del señor, et entonce cuando la enagenaria tenudo es el señor de la cosa de rescebir en ella á aquel á quien

la vende, et de otorgar gela faciendo ende carta de nuevo; et por tal otorgamiento ó renovamiento de pleyto nol debe tomar mas de la cincuentena parte de aquello porque fué vendida, ó de la estimacion que podrie valer si la diese. Mas á otras personas de quien non podiese haber tan ligeramiente el cienso non la puede vender nin empeñar, asi como á órden ó á home mas poderoso que él, ca entonce non valdrie, et perderie por ende el derecho que habie en ella.»

NOVISIMA RECOPILACION.

LEY 1.ª, TÍT. 15, LIB. 10 (68 *de Toro*).

«Si alguno pusiere sobre su heredat algun censo, con condicion que si no pagare ciertos plazos, que caya la heredat en comiso, que se guarde el contrato y se juzgue por él, puesto que la pena sea grande y mas de la mitad.»

LEY 2.ª, ID., ID.

D. Cárlos y D.ª Juana, peticion 65 de las Córtes de Madrid en 1588, 100 de las de Valladolid en 1548, y 123 de las de la misma ciudad en 1555.

Mandamos que las personas que de aquí adelante pusieren censos ó tributos sobre sus casas ó heredades ó posesiones que tengan atributadas ó encensuadas á otro primero, sean obligados de manifestar y declarar los censos y tributos, que hasta entonces tuvieren cargados sobre las dichas sus casas y heredades y posesiones, so pena que si asi no lo hicieren, paguen con él dos tanto la quantía que recibieren por el censo que asi vendieren y cargaren de nuevo, á la persona á quien vendieren el dicho censo.

LEY 3.ª, ID., ID.

Los mismos, peticion 127 de las Córtes de Madrid en 1534, 139 de las de Valladolid en 1537, y 62 de las de Toledo en 1539.

Porque somos informados que de los censos al quitar, que de pocos tiempos acá nuestros súbditos han puesto sobre sus haciendas y heredades, se han seguido y siguen grandes inconvenientes en daño y grave lesion de los que ansi con necesidad los han puesto y ponen: visto por los del nuestro Consejo y platicado con los procuradores de Córtes para lo remediar, mandamos que de aqui adelante no se puedan hacer los tales censos y tributos al quitar para que se hayan de pagar en pan, vino y accite, ni en leña, ni en carbon, ni en miel, cera, jabon, lino, y gallinas y tocino, ni en otro género de cosas que no sean dineros; y que en los contratos que hasta aqui se hobieren hecho y hicieren de aqui adelante, se reduzca el dinero, que se hobiere dado por el censo de las tales cosas, á respecto de catorce mil maravedises el millar, para que se pague en dinero y no en las dichas cosas.

LEY 4, ID. ID.

Los mismos y D. Felipe II, Peticion 159 de las Córtes de Valladolid en 1548 y 47 de las de Madrid, en 1586.

Porque por evitar lo contenido en la ley anterior, algunos hacen contratos simulados en fraude de ella, y otros hacen renunciar la dicha ley, mandamos que se guarde lo prevenido en ella, y que las justicias no den lugar á que se haga fraude á lo en dicha ley contenido. Y por quitar dudas declaramos y mandamos que se guarde y cumpla y ejecute, ansi en los censos á catorce como en los censos de por vida.

LEY 5, ID. ID.

D. Felipe V, á 18 de febrero de 1572, 47 de noviembre de 1574 y 21 de octubre de 1580.

Contando que en varios puntos para contravenir con fraude á lo prevenido por la ley 3.ª de este título, se hacian contratos y otorgaban escrituras en que, á pretesto de ser censos perpétuos, intervenia un precio mucho menor del establecido en aquella, se ordenó que en los censos asi establecidos desde el año 1534 en frutos ó cualquiera otra cosa que no fuese dinero, y en los que

mas adelante se establecieren, se pagasen á razon de mil maravedís por cada catorce mil de los que hubiere dado el comprador, y aunque en la escritura se espresare ser tales censos perpétuos, se hubiesen de tener y juzgar como redimibles; que los que resultaren á mayor precio de catorce mil maravedís el millar, no llegando á veinte mil pudiera reducirles el deudor, quedando á este salvo el derecho, si no quisiere hacerlo, para proceder contra el señor del censo sobre el engaño ó iniquidad de tal contrato; y que las pensiones vencidas desde el dia de la contestacion, se redujeran y pagasen al precio establecido por la ley, condenando á los dueños á restituir el esceso que hubiese cobrado desde aquel dia, y dándoles por libres respecto del que antes hubiesen percibido (1).

LEY 6, ID. ID.

D. Felipe II, en 1583.

Prohibe para en adelante la creacion de censos vitalicios por dos, tres ó mas vidas, pudiéndose constituir por solo una; fija para los de esta clase el precio de siete mil maravedís el millar; ordena que el capital con que se hubiere de comprar el censo sea precisamente en dinero, y al contado, escluyendo espresamente el oro y plata labrados, los tapices y otras alhajas y joyas estimadas: que el escribano ante quien pasare el contrato de fe de ello, y que los contratos censuales hechos de otra manera y á menor precio, sean de ningun valor y efecto, quedando privado de oficio el escribano. En cuanto á los censos de esta clase anteriormente otorgados, se previene que siendo por una sola vida, se reduzcan al precio de siete mil maravedises el millar; siendo por dos, queden subsistentes, pero reduciéndose á ocho mil maravedises el millar; y los que fueren por mas vidas, queden limitados solamente á dos, y al precio por ellas de ocho mil maravedises el millar.

LEY 7, ID. ID.

Peticion 2.ª de las Córtes de Madrid de 1583.

Declaramos que el *Proprio Motu* sobre que los censos se impongan y sienten con dineros de presente, no está recibido en estos reinos; antes se ha suplicado de él por el fiscal del Consejo, donde se ha hecho justicia en los casos que se han ofrecido, y se hará adelante, y con su Santidad la instancia que pareciere necesaria.

LEY 8, ID. ID.

D. Felipe V. en Madrid á 12 de febrero de 1705.

Que en adelante no se pueda constituir censo al quitar á menos precio que el de treinta y tres mil y un tercio el millar, y que los contratos de censos que en otra manera se hiciesen, sean en sí nulos y de ningun valor, ni efecto, y que no se pueda en su virtud pedir, ni obrar en juicio, ni fuera de él mas de á la dicha razon y respecto, con pena de privacion de oficio al escribano que otorgase escrituras á menor precio. Los censos antes creados y sus pensiones quedan desde luego reducidos al de treinta y tres mil y un tercio el millar, que se han de entender y practicar á tres por ciento.

LEY 9, ID. ID.

D. Fernando VI á 6 de julio de 1750.

Que en todo el distrito y provincias de la corona de Aragon se observe lo dispuesto en la ley anterior sobre la minoracion de réditos de los censos redimibles y al quitar, declarando para su mejor inteligencia que la reduccion de cinco á tres por ciento comprende todos los censos consignativos, reales, personales ó mistos que estuvieren creados ó se fundaren en adelante, sin embargo de cualesquier firmezas, cláusulas y pactos

(1) Felipe III en 1608 por una pragmática, que fué luego la ley 12, tít. 15, lib. 5.º de la Novísima Recopilacion ordenó que no se pudieran imponer de nuevo juros, ni censos al quitar á menos precio de veinte mil reales el millar, y los de por una vida á doce mil maravedís el millar. La ley 13 comprendió en la misma disposicion los fundados anteriormente por menor precio.

que tengan sus escrituras, aunque sea el reservativo de dominio, que se practica en algunos territorios: que donde estuviere recibida la costumbre de poder ajustar el rédito en granos ó frutos, se regule la paga de estos sin esceso alguno: que desde el dia de su publicacion en las cabezas de partido queden reducidas al tres por ciento todas las concordias en que las corporaciones ó los particulares hubiesen ajustado el rédito á otro respecto, aunque fuese á menos que á cinco, pero si hubiese algunas con mayor moderacion que al rédito de tres, subsistan en su fuerza y vigor; pudiéndose crear en lo sucesivo cualquiera censo redimible con menor pension de tres por ciento, pues aunque de esta cantidad nunca ha de poder esceder el rédito, bien puede bajar en el principio de la imposicion, ó posteriormente por concordia.

LEY 10, ID. ID.

D. Felipe V. á 11 de diciembre de 1738.

Que los oidores de las Audiencias de Aragon no interviniesen como jueces de las concordias sucesivas entre los pueblos, universidades y señores de vasallos y sus acreedores censualistas, quedando en libertad para hacerlas por sí, sus apoderados ó personas de distincion ó autoridad, y para acudir, si no se convinieren, á los Tribunales de justicia.

LEY 11, ID. ID.

D. Cárlos III, á 11 de julio de 1761.

Concediendo á los poseedores de mayorazgos, á los patronos y administradores de casas pertenecientes á obras pías sujetas á la Real jurisdiccion, y á los tutores y curadores de menores Real permiso para imponer sobre ellas censos, cuyos capitales no escedan de lo necesario para costear las obras precisas á la limpieza de Madrid, y para redimir otros censos impuestos antes sobre dichas casas á tres por ciento, bajándolos á dos y medio ó á menos, hipotecando el pago de sus réditos y seguridad del capital que recibieren las mismas casas y otras fincas del propio mayorazgo ú obra pía. Se espresa el modo fácil y espedito de ejercer esta facultad.

LEY 12.

Don Cárlos III á 5 de abril de 1770.

Que en las ventas sucesivas de casas de Madrid sujetas á censo perpétuo, y en los que se establezcan de nuevo sobre solares ó áreas yermas, solo se pague por razon de licencia y otorgamiento al dueño directo, con arreglo á la ley de Partida, una cincuentena parte del precio de la cosa que se vende, la cual corresponde á un dos por ciento, sacando solo por consiguiente en cada venta el laudemio que se causa: que la cincuentena ha de ser del valor líquido de solar y de lo edificado en él: que si se vinculare algun edificio, cuyo sitio esté gravado con censo perpétuo, se indemnizará al dueño de este con tres cincuentenas, en lugar de las tres veintenas en que hasta entonces se habia estimado el justo precio de la libertad. Podrá el enfiteuta redimir el cánon ó censo perpétuo, entregando un capital duplicado á razon de treinta y tres y un tercio al millar, regulado por el rédito ó cánon anual, y á su vez el dueño directo obligar al enfiteuta, aunque este no lo solicite, á que redima ó cargue á censo redimible el capital del censo perpétuo: y en todos estos casos se considerará redimible el censo, no solo para el fin de poder vincularse las casas ó solares, sino en cualquier caso que el dueño del dominio útil quiera libertar su casa de la gravosa carga del censo perpétuo. Este censo debe constituirse en lo sucesivo con doble capital que el redimible. No habiendo podido las manos-muertas adquirir ni comprar casas sujetas á censo perpétuo por las prohibiciones del derecho comun y real que se lo impiden, se deja espedito á los dueños directos el derecho de exigir que las pongan en manos libres, estimando nula su adquisicion. Los poseedores de las casas afectas á censo perpétuo y luego vinculadas, pagarán una

cincuentena por una vez al dueño directo, quedando asi en igual capacidad de retener que las demas personas no prohibidas, sin perjuicio de la obligacion de redimir el censo perpétuo, que asi como al dueño directo compete el derecho de tanteo, dentro de dos meses de haberle requerido el dueño útil, compete á este igual derecho en calidad de comunero por el mismo plazo, cuando aquel venda su dominio directo. Siguen varias prevenciones sobre el modo de hacer las liquidaciones de la cosa enfitéutica que se vende, de regular la carga de policía, del alumbrado, de reducir el capital de la carga de aposento y otras semejantes, dirigidas á estimular la reedificacion de los 191 solares ruinosos, existentes entonces dentro de los muros de la corte.

LEY 13, ID., ID.

Don Cárlos III en 1.° y 3 de junio de 1761.

Habiendo entendido que los propios de muchos pueblos están gravados con censos impuestos á nombre de vecinos particulares sin la correspondiente facultad, para evitar los daños y perjuicios ocasionados de esta manera indebida, se previene que los que en adelante se impongan sin facultad real en nombre de particulares contra los caudales públicos pertenecientes al comun, haciéndolos responsables á la satisfaccion de sus réditos, queden escluidos, asi en sus capitales, como en los réditos, de las cuentas de propios, con prohibicion de repartir su importe entre los vecinos, aunque dichos capitales se hayan convertido en su comun beneficio y lo justifique plenamente, porque han de ser responsables á su pago los que hayan acordado su imposicion y no los propios, ni otros caudales públicos.

LEY 14, ID., ID.

Don Cárlos IV á 18 de diciembre de 1804.

Que las juntas municipales de propios y arbitrios hagan tres partes iguales del sobrante líquido que resultare á fin de cada año de sus efectos comunes, y apliquen precisamente dos de ellas á la redencion de capitales de censos, y la otra al pago de atrasos de sus réditos, prefiriendo en uno y otro caso al acreedor que voluntariamente hiciese mayor baja ó remision de su principal y réditos, á cuyo fin se establecen las reglas necesarias, sin esceptuar de esta medida general á comunidad, obra pía ni particular alguno.

LEY 15, ID., ID.

Don Cárlos IV en el mismo dia.

Que las mismas juntas se arreglen á la condicion específica que fije las partes en que deba hacerse la redencion, si la hubiere en las escrituras de imposicion, no escediendo de la mitad; pero si se estendiese á todo el capital, lo representen al Consejo para acordar lo conveniente, á no convenirse los dueños en que se ejecute por la mitad ó menos.

LEY 16, ID., ID.

Don Cárlos IV en el mismo dia.

Declara por regla general que pueden redimirse por la mitad todos aquellos censos, cuyos capitales no lleguen á cien mil reales, y los que escedan de esta cantidad, por terceras partes, aunque en las escrituras se hubiese pactado no poder hacerse sino por el todo ó en la mitad de ellos; que las justicias y juntas municipales puedan obligar á los dueños á que lo ejecuten, depositando el importe de la parte del capital por su cuenta y riesgo, y cesando el rédito ó pension desde el dia en que se constituya el depósito.

LEY 17, ID., ID.

Don Cárlos IV en el propio dia.

Que los censos, cánones, feudos ó tributos que poseía la compañía de Jesus sobre los efectos comunes de los pueblos, no habian

variado bajo ningun concepto su naturaleza por la ocupacion de temporalidades, y que por lo mismo estaban sujetos y comprendidos en la resolucion general de 23 de mayo de este año.

LEY 18, ID., ID.

Don Cárlos IV en igual dia.

En vista de lo espuesto por el intendente de Cataluña acerca de la justificacion y formalidades que debian preceder al pago de los réditos de censos impuestos sobre los propios y arbitrios de los pueblos de aquel Principado, se dispone que los capitales de los censos que estuviesen para redimirse con caudales pertenecientes á los mismos propios y arbitrios, siempre que los acreedores no presenten los títulos primordiales de su imposicion y cargamento, ademas de los documentos que justifiquen la legítima pertenencia y existencia de ellos, se depositen formalmente por cuenta y riesgo de los mismos acreedores censualistas, se les notifique dicha providencia, y cese el rédito de ellos desde dicho dia, señalándoles el término preciso de un año para que en él presenten los citados títulos y demas documentos, y no haciéndolo, proceda la junta del pueblo respectivo á emplear los capitales depositados en la redencion de los demas censos, que se hallen con todas aquellas justificaciones, reservando á los interesados su derecho para que usen de él en justicia en la Real Audiencia; y que esta proceda á su declaracion y á la de si han de tener ó no derecho al cobro de los réditos desde el dia en que se hizo el depósito de sus capitales.

LEY 19, ID., ID.

D. Cárlos IV, por decreto de 6 de diciembre de 1797 é instruccion de 17 de enero de 1798.

Enterado de los graves daños que ha ocasionado á la agricultura del reino de Granada el censo llamado de poblacion, y deseando los mayores alivios de mis amados vasallos, he resuelto permitir á todos los propietarios de tierras, casas y fincas gravadas con dicho censo que puedan redimirlo y estinguirlo, pagando á mi Real Hacienda los capitales correspondientes. (Sigue una estensa instruccion que consigna la forma, trámites y reglas que habian de observarse para estas redenciones, y concluye estableciendo que su producto se aplique al fondo de amortizacion creado para la estincion de vales). V. CENSO DE POBLACION.

LEY 20, ID., ID.

D. Cárlos IV á 18 de diciembre de 1798.

Para realizar la enajenacion de las fincas vinculadas conforme á lo resuelto por real decreto de 19 de setiembre último, por hallarse gravadas con varios censos particulares, se resuelve que si los censos afectos á las fincas son redimibles, entren sus capitales por vía de depósito en la caja de amortizacion al interés de 3 por 100, bien sea para reimponerlos sobre ella, si consienten los dueños, ó para volvérselos, siempre que intenten darles otro destino: que si estos capitales corresponden á obras pías, capellanías, memorias, aniversarios, patronatos de legos, ó á otros establecimientos piadosos, queden precisamente subrogados en la caja de amortizacion, segun el espíritu del mismo real decreto: y finalmente, que los censos perpétuos ó enfitéuticos que tengan contra sí los bienes en favor de particulares, de cuerpos eclesiásticos, ó de fundaciones piadosas, pasen con las mismas fincas que les sirven de hipoteca, bien entendido que no adeudarán derecho de laudemio por la primera venta, puesto que por ser vinculadas no pudieron esperarle los dueños del dominio directo.

LEY 21.

D. Cárlos IV á 6 de noviembre de 1799.

Para disminuir la circulacion de los vales con utilidad del Estado y de los vasallos, se concede permiso á todos los que tengan contra sí censos perpétuos, y al quitar, y á los que posean fincas afectas á algun cánon en-

fitéutico, para que desde luego los puedan redimir con ellos.

LEY 22, ID., ID.

D. Cárlos IV á 17 de abril de 1801.

Todo dueño y poseedor de fincas afectas á censo redimible por la convencion ó por la ley, ó perpétuo, de cualquiera naturaleza ó condicion que sean, podrá redimirlos con vales reales por todo su valor, aunque se hayan impuesto con licencia ó aprobacion real, ó intervenga pacto de no redimirse, ó se paguen la pension ó reditos en frutos, ó se haya estipulado que la redencion se haga con fincas ú otro efecto, ó en metálico, con designacion de monedas. La misma facultad concede á los poseedores de fincas afectas á carga de aniversario, capellanía, misa, festividad, limosna, dote, ó cualquiera otra prestacion anual ó temporal, por la que se pague alguna cantidad de dinero, frutos ó cosa equivalente, á los poseedores de fincas afectas á los mismos gravámenes en favor del Real patrimonio, á los poseedores de mayorazgos, vínculos y cualquiera mano-muerta que quieran vender á pública subasta alguna finca de la fundacion para redimir las cargas afectas á otras de la misma, sirviendo el precio del remate para la redencion, sin deduccion alguna, y quedando impuesto el sobrante, si lo hubiere, en la caja de amortizacion. Tambien se podrán redimir con vales los cánones enfitéuticos impuestos sobre casas, pagando un capital doble por el cánon regulado á razon de treinta y tres y un tercio al millar, y por derecho de laudemio la cantidad que á un tres por ciento reditúe en veinticinco años una cincuentena del valor de la casa, rebajando de él el importe de las cargas. En las redenciones de los censos al quitar, constando los capitales, se procederá por su respectivo importe y por el doble de él en los censos perpétuos y cualquiera otro gravámen que tambien lo sea, en que su dueño no tenga mas derecho que el percibo de su tributo ó pension en los plazos estipulados, si en las escrituras de imposicion resulta el capital, y no resultando se regulará por la pension ó cánon ánuo á razon de treinta y tres y un tercio al millar. Lo mismo ha de observarse en las redenciones de las cargas de aniversarios, misas, etc. Siguen estensamente otras reglas relativas al caso de ser incierto el importe de estas cargas en cada año; á la redencion en comun por los poseedores de las fincas sitas en un mismo pueblo de los gravámenes pertenecientes á la real hacienda, á corporacion ó comunidad, ó á un solo vínculo ó dueño particular; y á la manera de hacer constar las entregas de los capitales, otorgamiento de las escrituras de imposicion, entrega de los vales, redencion amistosa y extrajudicial de los censos ó gravámenes libres en su poseedor; y judicial, ya cuando alguno se resistiese á ella, ya cuando el gravámen perteneciese á vínculo, capellanía ú obra pía, y en la escritúra no resultase el capital, exencion de derechos, toma de razon en el oficio de hipotecas, y trámites y forma de la redencion.

LEY 23, ID., ID.

D. Cárlos IV, á 15 de setiembre de 1804.

En lo sucesivo pueden dar dinero á censo redimible los dueños del mismo que no estén obligados á hacer de él imposicion forzosa, poniendo en las escrituras que se otorguen los pactos, vínculos y condiciones que se tengan por conveniente respecto de los plazos en que haya de hacerse la redencion del capital, moneda de pago de este y sus intereses, no escediendo del tres por ciento permitido por las leyes. El que reciba dicho dinero á censo redimible, podrá renunciar de un modo válido, eficaz y subsistente las facultades que le dispensan las reales cédulas de 10 de noviembre de 1799, la pragmática sancion de agosto de 1800, la cédula de 17 de abril de 1801, y cualquiera otra relativa á censos perpétuos ó redimibles, quedando obligados los particulares y comunidades, sin distincion, á la puntual observancia de la escritura y sus condiciones. Si los que dan dinero á censo son comunidades eclesiásticas secu-

lares ó regulares, entendidas con el nombre de manos-muertas, han de acreditar su pertenencia en propiedad y libre disposicion y que no corresponde á patronato, memoria ú obra pía, que lleve embebida la obligacion de imponer, sin cuyo requisito no serán válidas semejantes imposiciones, y por las que con él se verifiquen, se declaran libres los dueños de los capitales del pago del quince por ciento, pero no de las alcabalas. Podrán los escribanos autorizar las escrituras de censos de imposicion voluntaria que se otorgaren en adelante, alzando en esta parte la prohicion y penas que en la Real cédula de 9 de octubre de 1793 y ulteriores providencias se les imponen.

LEY 24, ID., ID.

D. Cárlos IV, á 17 de enero de 1803.

Habiendo sido derogada por otra de 3 de agosto de 1818, como se verá despues, y atendida su mucha estension, se omite en este lugar, escepto los capítulos siguientes mandados de nuevo observar por la ley de señoríos de 3 de Mayo de 1823, restablecida en 2 de febrero de 1837.

Cap. 4.° Las redenciones de los censos al quitar, perpétuos y demas cargas en que su dueño no tenga mas derecho, que apercibir el tributo ó pension en los plazos estipulados, se harán por el capital que resulte de las escrituras de imposicion.

5.° Cuando en estas no se espresaren, se formará con arreglo á la práctica que rija en cada pueblo por ley, estatuto, ordenanzas, ó costumbre generalmente recibida; procediéndose, en el caso de no haberla en el pueblo, por la que gobernare en la cabeza de partido, y en su defecto, por la de la capital de la provincia ó reino.

6.° En las redenciones de los censos enfitéuticos en que el poseedor de la finca solo tenga el dominio útil, correspondiendo el directo al dueño de la carga, se tendrá presente en primer lugar, si los poseedores de ambos dominios hubiesen estipulado la estimacion que deba darse al capital del cánon, y al de los demas derechos dominicales, conocidos en las provincias con los respectivos nombres de licencia fádiga, tanteo, laudemio, luismo, comiso, ó cualquiera otro, ó convenido entre sí las reglas por las cuales deba procederse á la estimacion referida; y en tal caso se observarán puntualmente esos convenios.

7.° Si no hubiere tales pactos, se formarán los capitales por el valor que en cada pueblo, partido ó provincia se dé por la misma ley, estatuto ó práctica al cánon enfitéutico, y á los derechos espresados.

8.° Finalmente, á falta de convenios particulares y de práctica constante, se procederá á la redencion, consignando por el cánon un capital regulado á razon de uno y medio por ciento, ó sesenta y seis, y dos tercios al millar, y por derecho de laudemio, en que irán considerados todos los dominicales, la cantidad que en el espacio de viente y cinco años, sea capaz de redituar al tres por ciento otra igual al importe de una cincuentena del valor de la finca, rebajadas las cargas á que está sujeta, ó lo que es lo mismo, dos y dos tercios por ciento de su precio líquido.

12. Cuando los réditos, tributos ó pensiones de las cargas que se redimieren, se pagaren ó cumplieren en granos, ú otra especie que no sea dinero, se formará el capital por el valor que hayan tenido los respectivos frutos en un año comun del quinquenio anterior á la redencion, escluyendo los estraordinariamente estériles.

LEY 25, ID., ID.

D. Cárlos III, á 19 de noviembre de 1780.

Dispone que la renta del tabaco de todos los depósitos públicos, se destine á la imposicion de censos á beneficio de mayorazgos, vínculos, patronatos, y obras pías, con el objeto de que sin gravámen de los vasallos, se aumenten las rentas para atender á los gastos estraordinarios de la guerra.

LEY 26, ID., ID.

El mismo á 8 y 9 de marzo de 1781.

Hace estensivo lo dispuesto en la anterior á los capitales de censos que se vayan redimiendo; pero por cédula del Consejo de 14 de diciembre de 1783, se mandó cesar esta medida, y que fuese libre á todos imponer los capitales de censos en la renta del tabaco ó sobre fincas de particulares, y otra de 9 de noviembre de 1786, suspendió las imposiciones sobre la misma venta de capitales de depósitos públicos y de particulares, dejando espeditos de esta obligacion á los tribunales y jueces.

LEY 27, ID., ID.

D. Cárlos IV, á 9 de octubre de 1795.

Resuelve que los capitales existentes en los depósitos públicos se impongan nuevamente á censo redimible en la renta del tabaco, con un rédito de tres por ciento.

LEY 28, ID., ID.

D. Cárlos IV, por Real decreto de 7 y Cédula del Consejo de 21 de febrero de 1798.

Que se vendan las casas pertenecientes á propios de los pueblos, con arreglo á las formalidades que prescribe, y que su importe se imponga sobre la renta del tabaco á un rédito de tres por ciento.

LEL 29, ID., ID.

D. Cárlos III, á 1.° de noviembre de 1769.

He resuelto establecer en Madrid un fondo fijo anual en cantidad de cuatro millones de reales vellon para que empleen en renta vitalicia los que quisieren entrar en sus acciones, á ejemplo de lo que está establecido por semejante giro en otros reinos, y consiga tambien al mismo tiempo el Real Erario la ventaja de adquirir competentes caudales que faciliten la recompra de alhajas enajenadas de la Corona. A este intento he mandado consignar como hipoteca fija, efectiva y sin carga, el caudal sobrante que con total separacion de mi real hacienda, se conserva en la Caja general de Juros, para que tomando de él en cada un año los referidos cuatro millones, sean fondo que asegure la paga de los réditos vitalicios de los capitales que se reciban con respecto al rédito de nueve por ciento, que se señala en general sin distincion de edades, sexos ni clases, á eleccion de los imponedores.

DISPOSICIONES POSTERIORES.

REAL CÉDULA DE 3 DE AGOSTO DE 1818.

Declara nulas todas las redenciones de censos hechos durante el gobierno intruso, bien sea con vales ó con cualquiera otra especie de papel; y á su consecuencia manda que los deudores censualistas paguen á los dueños de censos, sus acreedores, todas las pensiones vencidas desde las redenciones, y las que estuviesen debiendo al tiempo de ellas, permitiendo por conmiseracion á dichos deudores que reclamen..... los vales reales que hubiesen entregado de procedencia legítima.

REAL CÉDULA DE ID. ID. ID.

Derogo, y he por derogada la real cédula espedida en 17 de enero de 1805, dejando á las corporaciones asi eclesiásticas como seculares y vasallos particulares, en la debida plena libertad de celebrar sus contratos censuales, y poner en ellos las cláusulas y condiciones que á bien tengan, y exigir su puntual cumplimiento; y asimismo derogo cualesquiera otras Reales resoluciones, que directa ó indirectamente puedan ofrecer dudas ú obstáculos á esta mi Soberana resolucion.

REAL DECRETO DE 16 DE ENERO DE 1826.

He venido en declarar nulas y de ningun valor ni efecto todas las redenciones de censos pertenecientes á los regulares, hechas en

la época de la titulada Constitucion, ora se ejecutasen con vales, ora con cualquiera otro papel, y que los censualistas que las hicieron, deben pagar á las respectivas comunidades religiosas las pensiones que hayan vencido desde las redenciones, y los descubiertos que tuviesen al tiempo que realizaron estas.

REAL DECRETO DE 5 DE MARZO DE 1836.

Artículo 1.° Se declaran en estado de redencion desde ahora todos los *censos*, imposiciones y cargas, de cualquier especie y naturaleza, que pertenezcan á las comunidades de monacales y regulares, asi de varones como de religiosas, cuyos monasterios ó conventos hayan ya sido, ó sean en adelante suprimidos, y sus bienes de todo género aplicados á la nacion y mandados vender por mi Real Decreto de 19 del pasado.

El 2.°, 3.° y 4.° consignan los trámites de la liquidacion y redencion.

Art. 5.° El importe del *censo*, imposicion ó carga que se trate de redimir, se satisfará en esta forma: una quinta parte al contado, ó antes del otorgamiento de la escritura de redencion y las otras cuatro quintas partes en los cuatro años sucesivos á razon de una en cada año.

Art. 6.° El pago se verificará en las siguientes especies de la Deuda pública: una tercera parte en vales no consolidados por todo su valor nominal; otra tercera parte en títulos de la deuda corriente con interés á papel, tambien por todo su valor nominal; y la tercera parte restante en títulos ó documentos de la Deuda sin interés, pero en una cantidad dupla, ó sea no dando á su importe nominal mas que una mitad de este mismo valor.

Art. 12. El producto íntegro de la redencion, se aplicará á la estincion de la deuda del Estado.

REAL ÓRDEN DE 10 DE ABRIL DE 1836.

Que en las cargas espresadas en la condicion primera del art. 33 de la Instruccion dada en 1.° de marzo anterior para la enajenacion de bienes nacionales, se comprenden los *censos* de toda especie, sin que el acto de la venta de los espresados bienes, ni el traspaso de su propiedad pueda perjudicar, ni lastimar nunca los derechos de los respectivos censualistas, debiendo mantenerse en toda la fuerza y vigor que concede la legislacion vigente en este ramo. Que las ventas de las fincas rústicas y urbanas que hoy se hallan dadas en *enfiteusis* y *foros* no pueden verificarse sino en el dominio directo, y lo mismo en los foros dados por tres vidas. Que los derechos enfitéuticos y forales de las comunidades suprimidas puedan redimirse, no obstante su perpetuidad; y que toda vez que el dueño ó poseedor del dominio útil no se prestare á esta invitacion, se saquen á pública subasta las respectivas cargas perpétuas, prévia la formacion de su capital, bajo las bases acordadas para los bienes nacionales en Real decreto de 19 de febrero de 1836.

DECRETO DE LAS CÓRTES DE 6 DE AGOSTO DE 1811 SOBRE INCORPORACION DE LOS SEÑORÍOS JURISDICCIONALES (RESTABLECIDO POR EL DE 2 DE FEBRERO DE 1837).

Art. 4.° Quedan abolidos los dictados de vasallo y vasallage, y las prestaciones asi reales como personales que deban su orígen á título jurisdiccional, á escepcion de las que procedan de contrato libre en uso del sagrado derecho de propiedad.

Art. 6.° Por lo mismo los contratos, pactos ó convenios que se hayan hecho en razon de aprovechamientos, arriendos de terrenos, *censos* ú otros de esta especie, celebrados entre los llamados señores y vasallos, se deberán considerar desde ahora como contratos de particular á particular.

LEY DE SEÑORÍOS DE 3 DE MAYO DE 1823 (RESTABLECIDA POR LA DE 2 DE FEBRERO DE 1837).

Artículo 1.° Para evitar dudas en la inteligencia del Decreto de las Córtes de 6 de agosto de 1811 se declara que por él quedaron abolidas todas las pretensiones reales y

personales y las regalías y derechos anejos, inherentes y que deban su orígen á título jurisdiccional ó feudal, no teniendo por lo mismo los antes llamados señores accion alguna para exigirlas, ni los pueblos obligacion á pagarlas.

Art. 2.° Declararse tambien que para que los señoríos territoriales y solariegos se consideren en la clase de propiedad particular, con arreglo al art. 5.° de dicho decreto, es obligacion de los poseedores acreditar préviamente con los títulos de adquisicon, que los espresados señoríos no son de aquellos que por su naturaleza deben incorporarse á la nacion y que se han cumplido en ellos las condiciones con que fueron concedidos segun lo dispuesto en el mencionado artículo, sin cuyo requisito no han podido, ni pueden considerarse pertenecientes á propiedad particular.

Art. 3.° En su consecuencia solo en el caso de que, por la presentacion de títulos resulte que los señoríos territoriales y solariegos son de los incorporables y que se han cumplido las condiciones de su concesion, es cuando deben considerarse y guardarse como contratos de particular á particular, segun el art. 6.° del propio decreto los pactos y convenios que se hayan hecho entre los antes llamados señores y vasallos, aprovechamientos, arriendos de terrenos, *censos* ú otros de esta especie; pero sin embargo, quedarán siempre nulas y de ningun valor ni efecto, todas las estipulaciones y condiciones que en dichos contratos contengan obligaciones ó gravámenes relativos á las prestaciones, regalías y derechos anejos é inherentes á la cualidad jurisdiccional ó feudal que quedó abolida.

Art. 4.° Por lo declarado y dispuesto en los artículos precedentes, los poseedores que pretendan que sus señoríos territoriales y solariegos son de los que se deben considerar como propiedad particular, presentarán ante los jueces respectivos de primera instancia los títulos de adquisicion para que se decida segun ellos si son ó no de la clase espresada, con las apelaciones á las Audiencias territoriales, conforme á la Constitucion y á las leyes. En este juicio que debe ser breve y meramente instructivo con acuerdo de los mismos señores, de los promotores y ministros fiscales y de los pueblos, no se admitirá prueba á las partes en ninguna de las instancias, sino sobre los dos puntos precisos de ser ó no señoríos incorporables por su naturaleza, ó de haberse ó no cumplido las condiciones de su concesion, en el caso de que estas circunstancias no resulten completamente de los mismos títulos, y sobre si efectivamente son ó no territoriales y solariegos los espresados señoríos en caso que los pueblos nieguen esta calidad.

Art. 5.° Mientras que por sentencia que cause ejecutoria no se declare que los señoríos territoriales y solariegos no son de los incorporables á la nacion y que se han cumplido en ellos las condiciones con que fueron concedidos, los pueblos que antes pertenecieron á estos señoríos no están obligados á pagar cosa alguna en su razon á los antiguos señores, pero si estos quisieren presentar sus títulos, deberán los pueblos dar fianzas seguras de que pagarán puntualmente todo lo que hayan dejado de satisfacer y corresponda segun el art. 3.° de este decreto, si se determinase contra ellos el juicio y de ningun modo perturbarán á los señores en la posesion y disfrute de los terrenos y fincas que hasta ahora les hayan pertenecido, como propiedades particulares, sino en los casos y por los medios que ordenan las leyes; entendiéndose todo sin perjuicio de los derechos que competen á la nacion acerca de la incorporacion ó reversion de dichos señoríos territoriales. Sin embargo, se declara que si á alguno de los espresados señoríos perteneciese algun foro ó enfiteusis que se haya subforado ó vuelto á establecer por el primer poseedor del dominio útil, solo este seria el obligado á dar la fianza prescrita en este artículo para satisfacer á su tiempo lo que corresponda al señor del dominio directo, segun lo que resulte del juicio; pero tendrá derecho á exigir las pensiones contratadas del subforatorio ó del segundo poseedor del dominio útil, y estos de los demás á quienes hayan vuelto á traspasar el propio dominio.

Art. 6.° Cuando en vista de los títulos de adquisicion se declare que deben considerarse como propiedad particular de los antiguos señores los señoríos territoriales y solariegos, los contratos espresados en dicho art. 3.°, se ajustarán enteramente en lo sucesivo á las reglas del derecho comun, como celebrados entre particulares sin fuero especial, ni privilegio alguno.

Art. 7.° Por consiguiente, en los enfiteusis de señorío que hayan de subsistir en virtud de la declaracion judicial espresada, se declara por punto general, mientras se arreglan de una manera uniforme estos contratos en el Código civil, que la cuota que con el nombre de laudemio, luismo ú otro equivalente, se deba pagar al señor del dominio directo, siempre que se enajene la finca infeudada, no ha de esceder de la cincuentena ó sea del dos por ciento del valor líquido de la misma finca, con arreglo á las leyes del reino, ni los poseedores del dominio útil tendrán obligacion á satisfacer mayor laudemio en adelante, cualesquiera que sean los usos ó establecimientos en contrario. Tampoco la tendrán de pagar cosa alguna en lo sucesivo por razon de fadiga ó derecho de tanteo; y este derecho será recíproco en adelante para los poseedores de uno y otro dominio, los cuales deberán avisarse dentro del término prescrito por la ley, siempre que cualquiera de ellos enajene el dominio que tiene; pero ni uno ni otro podrán nunca ceder dicho derecho á otra persona.

Art. 8.° Lo que queda prevenido no se entiende con respecto á los cánones ó pensiones anuales que, segun los contratos existentes, se pagan por los foros y subforos de dominio particular, ni á los que se satisfacen con arreglo á los mismos contratos por reconocimiento del dominio directo ó por laudemio en los enfiteusis puramente alodiales; pero cesarán para siempre donde subsistan las prestaciones conocidas con los nombres de *terratge*, quistia, fogatge, jova, llosol, tragi, acapte, lleuda, peatge, ral de batlle, dinerillo, cena de ausencia y de presencia, castillería, tiraje barcaje, y cualquiera otra de igual naturaleza, sin perjuicio de que si algun perceptor de estas prestaciones pretendiere y probare que tienen su orígen de contrato, y que le pertenecen por dominio puramente alodial, se le mantengan en su actual posesion, no entendiéndose por contrato primitivo las concordias con que dichas prestaciones se hayan subrogado en lugar de otras feudales anteriores de la misma ó distinta naturaleza.

Art. 9.° Asi los laudemios como las pensiones y cualesquiera otras prestaciones anuales de dinero ó frutos que deban subsistir en los enfiteusis referidos, sean de señorío ó alodiales, se podrán redimir como cualesquiera censos perpétuos bajo las reglas prescritas en los artículos 4.°, 5.°, 6.°, 7.°, 8.° y 12 de la real cédula de 17 de enero de 1805 (ley 24, tít. 15, lib. 10 de la Novísima Recop.); pero con la circunstancia de que la redencion se podrá ejecutar por terceras partes, á voluntad del enfiteuta, y que se ha de hacer en dinero ó como concierten entre sí los interesados, entregándose al dueño el capital redimido, ó dejándolo á su libre disposicion.

LEY DE 28 DE MAYO DE 1837, PUBLICADA EL 31.

Artículo 1.° Se declaran en estado de redencion, con arreglo á lo dispuesto en el real decreto de 5 de marzo de 1836 y demas determinaciones y aclaraciones posteriores, todas las cargas ó rentas exigidas con título de foro, enfiteusis ó de arrendamiento, cuya fecha sea anterior al año de 1800, que se pagaban por posesiones, caseríos, tierras, cotos ó lugares pertenecientes á las comunidades y monasterios estinguidos de ambos sexos.

Art. 2.° Se invitará para la redencion por medio de los boletines oficiales, y si á los seis meses no se presentasen los llevadores á este efecto, se subastarán los capitales y sus rentas en la forma que está prevenida.

Art. 3.° El pago del capital... se verificará en el término de cuatro años, ó sea por cuartas partes, al fin de cada uno, en títulos del 4 ó 5 por ciento ó su equivalente en metálico, con arreglo á los precios que tengan en la bolsa de Madrid el dia en que debia verificarse el pago.

Art. 4.° Lo dispuesto en los artículos anteriores se entenderá siempre que los arrendamientos de largo tiempo sobre que versan, y de los cuales debe haber una razon exacta en las oficinas del crédito público, no escedan de 1,100 rs. mensuales.

LEY DE 6 DE JUNIO DE 1837, PUBLICADA EL 7.

Se declaran válidas todas las redenciones de censos y cargas, inclusa la de aposento, verificadas durante la época constitucional en virtud de los decretos de las Córtes (1), otorgándose á los interesados las escrituras correspondientes, si entonces no se hubiese hecho.

REAL ÓRDEN DEL 19 DE JULIO DE 1837.

Que en lugar de títulos de la deuda corriente se admitan de la consolidada del 5, cualquiera que sea la consolidacion á que correspondan, siempre que los interesados se allanen á ello.

(1) Estos decretos son los siguientes:

Decreto de las Córtes de 18 de diciembre de 1821.—Las Córtes estraordinarias, usando de la facultad que se les concede por la Constitucion, han decretado: Que los censos puedan redimirse con dos quintos de créditos de capitalizaciones, y tres en créditos con interés, y comprarse á un tiempo lo mismo que los otros bienes nacionales.

Las mismas en 4 de enero de 1822.—Se declara que los censos cuya redencion se autoriza por decreto de 18 de diciembre próximo en créditos de capitalizaciones, son únicamente los que se espresan en el artículo 20 del decreto de las Córtes ordinarias de 9 de noviembre de 1820. Este decreto, que tuvo por objeto la estincion de la deuda nacional, dice en el artículo 20. Se formará un fondo de amortizacion para estinguir progresivamente la deuda consolidada con los arbitrios siguientes..... 3.° Los censos consignativos y reservativos, enfiteusis, foros, misas y pensiones, y toda carga perpétua ó temporal que pertenezca á la nacion ó al crédito público por la reforma de los regulares, bienes del patrimonio Real, pertenencias de la Inquisicion, redencion de cautivos, temporalidades de los jesuitas, obras pias, santuarios, memorias y fundaciones que están aplicadas y se apliquen al pago de la deuda pública y graviten sobre bienes y rentas de dominio particular, podrán redimirse con créditos consolidados. 4.° Los capitales de la renta que se conoce con el nombre de regalía de aposento sobre las casas de Madrid, se podrán redimir con créditos consolidados. 5.° Igualmente se podrán redimir con créditos consolidados las rentas que se conocen con el nombre de poblacion de Granada, y cánones que pagan los pobladores de Sierra-Morena y nuevas poblaciones de Andalucía...

Art. 21. Estas redenciones de las cargas, que sean temporales ó redimibles á voluntad de los que las sufren, se harán á razon de 33 y 1/3 al millar, y al respecto de 66 y 2/3 los foros, enfiteusis y cualquier otra carga perpétua por su naturaleza ó por la constitucion del contrato, y los capitales de unas y otras en créditos consolidados, se entregarán á la Junta nacional del crédito público y quedarán amortizables.

Decreto de 26 de mayo de 1822.—No se admitirán por ahora las capitalizaciones para la redencion de censos, y se suspende esta en los de las fincas aplicadas al crédito público.

Decreto de 21 de junio de 1822.— Se alza la suspension de la abolicion del censo de poblacion de Granada, decretada en 8 de noviembre de 1820, sin perjuicio de aplicar igual beneficio al pueblo ó pueblos que lo reclamen y acrediten como Granada hallarse en caso de semejante ó idéntica naturaleza.

DECRETO DE LA REGENCIA DE 9 DE DICIEMBRE DE 1840.

Art. 1.° Los censos declarados en estado de redencion por real decreto de 5 de marzo de 1836, y que no están comprendidos en la ley de 31 de Mayo de 1837, serán redimibles en la forma que aquel establece tan solo en el término de noventa dias desde la publicacion de este decreto en las respectivas capitales de provincia.

Art. 2.° Los que durante dicho término no ejecuten la redencion, no gozarán despues de los beneficios del citado decreto, y los capitales se venderán en público remate en el modo y forma que las Córtes determinen.

LEY DE 14 DE AGOSTO DE 1841.

Art. 1.° Los censos conocidos en el antiguo reino de Granada, con las denominaciones de sueltos, suertes, ábices y abuela, que componen la renta llamada censo de poblacion de Granada, podrán redimirse graduándose su capital al tres por ciento, y satisfaciéndose en papel de la deuda del Estado, de la misma clase y en la misma proporcion y plazos que señala el art. 3.° de la ley de 31 de mayo de 1837.

Art. 2.° En el caso de que los censatarios no hagan uso del derecho que se les concede por los artículos anteriores, dentro del plazo de cuatro años, contados desde la promulgacion de esta ley, queda el gobierno facultado para enajenar los censos, vendiéndolos á personas particulares, pero en clase de redimibles.

Art. 3.° Queda abolido el derecho de farda ó guardas de mar, y sin obligacion alguna los pueblos que se hallen gravados con esta carga.

REAL ÓRDEN DE 21 DE JUNIO DE 1842.

Se declaran estinguidas las cargas y prestaciones en metálico ó en especie, que por el mero derecho de patronato se satisfacian á iglesias ó conventos suprimidos en que los

patronos no pueden ya gozar de sus preeminencias, y la obligacion de contribuir al Estado con las cantidades en especie ó en metálico con que estaban gravadas en favor de los conventos algunas fincas de particulares, que sin tener la calidad de patronos, debian contribuir con ellas para la manutencion de las comunidades.

REAL ÓRDEN DE 26 DE SETIEMBRE DE 1847.

Art. 1.° «Los censos impuestos á favor de monasterios y conventos y demas corporaciones, cuyos bienes se hallan actualmente aplicados al pago y estincion de la deuda pública, y que no están comprendidos en la ley de 31 de mayo de 1837, se podrán redimir hasta 31 de diciembre próximo.

Art. 2.° La redencion se hará en títulos de la renta del tres por ciento, como se verifica con los que proceden de las encomiendas de la órden de San Juan de Jerusalen.

Art. 3.° No servirá de obstáculo la falta de imposicion, pudiendo suplirse con la capitulacion de los réditos que los interesados satisfagan segun los recibos que presenten y los datos que existan en las oficinas de bienes nacionales.»

Por real decreto de 7 de Abril de 1848, se mandó proceder á la venta de todos los bienes de las encomiendas vacantes de las cuatro órdenes militares, los de ermitas, santuarios y cofradías, y en él se dispuso tambien la enajenacion de los censos pertenecientes á las mismas, con sujecion al real decreto de 19 de febrero de 1836, é instruccion de 1.° de marzo siguiente. Su artículo 5.° dice: Se concede á los dueños de fincas gravadas con censos que deben enajenarse con arreglo á este real decreto, el término de dos meses para que puedan pedir su redencion, la cual se verificará con arreglo á las disposiciones anteriormente dictadas en esta materia.

Este término se prorogó por un mes en real órden de 7 de agosto de 1848.

CIRCULAR DE 24 DE JUNIO DE 1848.

Declara que los interesados en los espedientes de redenciones de censos, que son gubernativos, no están obligados á pagar derechos de ninguna especie por la instruccion de los mismos.

REAL ÓRDEN CIRCULAR DE 31 DE AGOSTO DE 1849.

Establece medidas para la pronta enajenacion de los foros y censos no vendidos en virtud de las anteriores disposiciones.

REAL ÓRDEN DE 30 DE SETIEMBRE DE 1849.

Resuelve que los censos, cuyos capitales se ignoren, se capitalicen para su venta por sesenta y seis y dos tercios al millar.

CIRCULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE FINCAS DEL ESTADO DE 22 DE MARZO DE 1851.

Recopila y aclara todas las disposiciones acordadas para la venta de bienes, y la *redencion de censos* de la órden de San Juan de Jerusalem, á fin de promover y facilitar su cumplimiento.

REAL ÓRDEN DE 13 DE MAYO DE 1851.

Interin se acuerda lo correspondiente para llevar á efecto el Concordato celebrado con la Santa Sede, ordena que se suspenda desde luego la venta y *redencion* de los bienes, *censos* y demas pertenencias procedentes de las estinguidas comunidades regulares de ambos sexos, clero secular, ermitas, santuarios, hermandades y cofradías.

REAL ÓRDEN DE 19 DE MAYO DE 1851.

Declara que la redencion de los censos enfitéuticos capitalizados al respecto de sesenta y seis y dos tercios al millar, ó sea al uno y medio por ciento, con arreglo á lo dispuesto en las reales órdenes de 23 de abril de 1838 y 30 de setiembre de 1849, estingue el derecho de laudemio y todos los demas inherentes al dominio directo.

REAL DECRETO DE 8 DE DICIEMBRE DE 1851.

En cumplimiento de los párrafos 4.° del art. 33 y 6.° del 38 del Concordato celebrado con la Santa Sede, se resuelve el modo de formar los inventarios y hacer entrega á los prelados de las fincas, *censos*, derechos y acciones del clero secular y regular, monjas, encomiendas, maestrazgos de las cuatro órdenes militares, cofradías, ermitas, santuarios y hermandades que no habian sido enajenados por el Estado.

REAL DECRETO DE 9 DE DICIEMBRE DE 1851.

Establece reglas para la enajenacion de las fincas, *censos*, derechos y acciones arriba enunciados.

Art. 1.° Los dueños de las hipotecas afectas á los censos podrán redimir este gravámen, siempre que lo soliciten ante los diocesanos dentro del plazo de seis meses. Este plazo empezará á contarse desde el dia en que se fijen los correspondientes anuncios por los respectivos diocesanos en los boletines oficiales de las provincias en que estén, sitos los bienes que constituyen dichas hipotecas. La redencion se hará segun las reglas establecidas en la ley recopilada, no pudiendo sacarse á pública licitacion hasta terminar los seis meses.

No se consignan aquí los demás artículos referentes á los trámites y forma de la venta por haber derogado la ley de desamortizacion de 1.° de mayo de 1855 las disposiciones de este real decreto.

REAL DECRETO DE 31 DE MARZO DE 1852.

Amplía hasta 30 de junio del mismo año el término concedido para la redencion de los censos de la renta de poblacion de Granada, y manda que en el caso de no redimirlos sus actuales llevadores, se proceda á su venta en subasta pública, que tendria lugar el 1.° de agosto siguiente.

REAL ÓRDEN DE 26 DE AGOSTO DE 1852.

Que los censos que se enajenen por la junta de la Deuda para la amortizacion de la misma, puedan capitalizarse al cuatro y cinco por ciento, cuando en primera y segunda subasta no se hayan presentado licitadores á los mismos, capitalizados al tres por ciento en la forma que se practica respecto á las fincas del Estado. Esta resolucion se estendió en 6 de setiembre por el ministerio de Gracia y Justicia á la redencion de los censos pertenecientes al clero que habian de enajenarse con arreglo al Concordato.

REAL ÓRDEN DE 28 DE AGOSTO DE 1852.

Tiene por objeto facilitar en el nuevo plazo que se señala la redencion, y en su defecto la enajenacion de los censos que aun existian de la órden de San Juan.

LEY DE 1.° DE MAYO DE 1855.

Declara en estado de venta, sin perjuicio de las cargas y servidumbres á que legítimamente estén sujetos, todos los prédios rústicos y urbanos, *censos* y *foros* pertenecientes al Estado, al clero, á las órdenes militares, á cofradías, obras pías y santuarios, al secuestro del ex-infante D. Cárlos, á los propios y comunes de los pueblos, á la beneficencia, instruccion pública y cualesquiera otros pertenecientes á manos muertas, con las limitadas escepciones que en ella se marcan. Dispone ademas, especialmente sobre censos:

Art. 7.° Para redimir los censos declarados en venta por la presente ley, se les concede á los censatarios el plazo de seis meses, á contar desde su publicacion, bajo las bases siguientes:

1.ª Los censos cuyos réditos no escedan de sesenta reales anuales, se redimirán al contado, capitalizándolos al diez por ciento.

2.ª Los censos cuyos réditos escedan de sesenta reales anuales, se redimirán al contado, capitalizándolos al ocho por ciento, y en el término de nueve años y diez plazos iguales, capitalizados al cinco.

3.ª Los censos cuyos réditos se pagan en especie, se regularán por el precio medio que

haya tenido la misma especie en el mercado durante el último decenio.

4.ª Los censos, foros, treudos, prestaciones y tributos de cualquier género, cuyo cánon ó interés esceda del cinco por ciento, se redimirán en la forma prescrita al tipo reconocido en la imposicion ó fundacion, y si no estuviese reconocido, al consignado en las bases primera y segunda.

Art. 8.° Concluido el término señalado para la redencion, se procederá á la venta de los censos en pública subasta, bajo los mismos tipos y condiciones establecidos en el artículo anterior.

Art. 9.° El gobierno asegurará á cada establecimiento de beneficencia las rentas que disfruta en la actualidad, compensando la pérdida que puede sufrir en la reduccion ó venta de los censos con el aumento que se obtenga en la de los bienes inmuebles.

Art. 10. El pago del laudemio en los enfiteusis será á cargo de los compradores.

Art. 11. Se perdonan los atrasos que adeuden los censatarios, ya procedan de que no se hayan reclamado en los últimos cinco años, ya de ser los censos desconocidos ó dudosos, ó ya de cualquiera otra causa, con tal de que se confiesen deudores de los capitales ó sus réditos.

LEY DE 14 DE JULIO DE 1855.

Se autorizó por ella al gobierno de S. M. para emitir doscientos cincuenta millones de reales en billetes del Tesoro aplicables única y esclusivamente al pago de bienes nacionales y redencion de censos y foros.

REAL ÓRDEN DE 27 DE JULIO DE 1855.

Que desde luego se admitan en pago de redenciones de censos las cartas de pago del mencionado anticipo, sin perjuicio de que los interesados se sujeten á las resultas de la aprobacion de sus respectivos espedientes.

REAL DECRETO DE 13 DE SETIEMBRE DE 1855.

Se declaran en estado de venta y redencion las fincas y censos que corresponden á la obra pía de los Santos Lugares de Jerusalen, con sujecion á los trámites que dispone la ley de 1.° de mayo del presente año é instruccion de 31 del mismo, relativas á la desamortizacion.

REAL ÓRDEN DE 5 DE OCTUBRE DE 1855.

1.° Que se perdonen los atrasos que adeuden los censatarios hasta 1.° de mayo último, por censos cuyos réditos no se les reclamaron en los cinco últimos años anteriores, y los que reclamados no se pagaron por ser dudosa la existencia de su capital ó de su descubierto, con tal que se confiesen deudores del uno ó de los otros, que deberán satisfacer desde la fecha de la citada ley hasta el dia de la redencion.

2.° Que en consecuencia han debido percibirse los corridos de censos cobrados en alguno de los últimos cinco años por anualidad completa ó á cuenta, ó cuyo pago se reconoció como debido, acreditado que fuere cualquiera de estos estremos.

REAL ÓRDEN DE 20 DE OCTUBRE DE 1855.

Que hasta que se sancione la inmèdiata ley dirigida á facilitar la redencion de los censos comprendidos en la ley de 1.° de mayo último, se suspenda todo procedimiento contra los censatarios por los descubiertos en que se encuentren de sus respectivos censos.

RECOPILACION DE INDIAS.

LIBRO VI, TÍT. IV.

De las cajas de censos y bienes de comunidad y su administracion.

LEY 2.

Que en las cajas de comunidad entren todos los bienes comunes de Indias y sus escrituras y recaudos, para que de allí se gaste lo preciso en beneficio comun de todos, y se atienda á su conservacion y aumento.

LEY 3.

Que no se pueden introducir en las mismas otros bienes, so pena de comiso, y que sea de la comunidad con el cuatro tanto que se exigia al contraventor.

LEY 4.

Que lo procedido de esta hacienda entre en arca separada, capaz y bien resguardada.

LEY 5.

Que la plata que hubiere en la caja se procure imponer á censo con distincion de comunidades para que no esté ocioso.

LEY 6.

Si sucediere que á algunos indios se les redima su censo y de él tuvieren cantidad de corridos, se ha de dar órden de que juntos con el principal se imponga otro de nuevo para que la renta vaya creciendo, y sino hubiere cantidad considerable perteneciente á los indios, cuyo fuere el censo redimido, y la hubiere de otra ú otras comunidades, y pareciere que la dieta es buena y segura, se podrá juntar uno y otro é imponer de todo nuevo censo, con declaracion del principal y réditos, haciendo prorata de lo que á cada una pertenece, asentando y razonando esto en los libros de cuenta que conforme á lo ordenado ha de estar armada con cada una de las comunidades clara y distintamente.

LEY 7.

Cuando se redimiere algun censo de comunidad, ó se hubiere de hacer nueva imposicion, los oficiales reales tomarán luego la razon de la cantidad que montare, y pondrán cédulas en las cuatro esquinas de la plaza y otras partes que les parezca convenir, ó harán dar pregones para que venga á noticia de todos y no haya dilacion, y recibirán las memorias de personas, haciendas y fianzas, las cuales llevarán al oidor y fiscal á cuyo cargo fueren estos bienes para que las vean y escojan las que mejor, mas saneadas y abonadas parecieren, y antes de determinar darán cuenta en el acuerdo de la Audiencia, para que en él se resuelvan por todos lo que conviniere, teniendo particular cuidado de que por favores ni otros respetos no se deje de mirar mucho, y reconocer qué seguridad tienen las hipotecas, con que cesarán los daños y quiebras que se han reconocido.

LEY 8.

Que en la caja haya alguna plata de resguardo para ir socorriendo á los indios, pagar y cumplir las libranzas.

LEY 9.

En la caja ha de haber cuatro libros de la cuenta y razon, los dos de la entrada y partidas por menor que hacen su caudal, y de lo que se librare y saliere de la caja para gastos necesarios y comunes,... y otros dos, que en el uno se pondrá por inventario relacion de todos los censos, con distincion de comunidades cuyos fueren, y qué personas particulares son deudores, ó cuáles cajas reales y á qué plazos y sobre qué bienes están impuestos, con dia, mes y año de las escrituras y nombre de los escribanos ante quien se otorgaron, dejando bastante blanco, de modo que se puedan añadir los que de nuevo se fueren imponiendo, y en otra parte del mismo libro se armará la cuenta separada con cada uno de los censualistas, de lo que se debe y paga, y á qué comunidad pertenece; en el otro se ha de hacer inventario y relacion, la mas clara y cumplida que sea posible, de los indios, pueblos y comunidades que tienen parte en los dichos censos, espresando la cantidad de renta que á cada uno tocare y sobre qué bienes está impuesta, y lo que parece se le debe de la plata que hubiere y se hallare por emplear en la caja, y hecho esto con mucha precision y claridad se pondrá por menor en otra parte de este libro lo que se cobra por cuenta de cada comunidad, y se les dá y paga por libranzas, remitiéndose las partidas de un libro á las de

otro, para que con mayor facilidad se pueda confrontar y ver y entender lo debido, y que ha cobrado y gastado cada parcialidad. Y mandamos que... no se mezcle otra ninguna cuenta... porque para la claridad, cobranza, paga y seguridad de esta hacienda, conviene que la cuenta y libros estén formados con separacion de otros.

LEY 10.

Que no se pueda sacar hacienda de las cajas de comunidad bajo la pena que se espresa.

LEYES 11 y 12.

Que la administracion y cobranza de la caja esté á cargo de los oficiales reales, que pondrán en ello todo cuidado y desvelo, y que el mismo tenga en proveer que el capital de los censos esté seguro y su renta saneada.

LEY 13.

De los réditos que se cobren de los censos y bienes comunes, sin tocar en la suerte principal, se ha de hacer pago de las cantidades que á Nos deben y debieren los indios de sus tasas.

LEY 14.

Que los bienes, censos y rentas de la de comunidad, se gasten en beneficio comun y pagar los tributos.

LEYES 15 y 16.

Que los gastos de misiones y seminario de indios se hagan de los bienes de comunidades, y que los doctrineros no gasten de estas cajas sin licencia del virey y audiencia.

LEY 17.

Ordenamos que las pagas y socorros de los tributos de indios sean de los corridos de censos causados por cuenta de las comunidades á quien se hubieren de hacer, sin mezclar, ni confundir la hacienda de unos indios con la de otros, ni tocar en la suerte principal, si no fuere en caso de ofrecerse tan grave y urgente necesidad á los mismos indios que de otra forma no pueda ser socorrida, ni remediada.

LEY 18.

Desean los indios vender y distraer los censos y bienes de sus comunidades para pagar los tributos y rezagos, sin hacer distincion entre principal y réditos; y si esto se les permitiese por algun medio, se descuidarian de trabajar y causar mayor caudal á la bolsa comun, en gran perjuicio de las obras públicas y particulares necesidades que padecen, y no conseguirian su intento, habiendo de redundar en notable perjuicio de todos; y porque conviene que sean ayudados y favorecidos y de los réditos pagados los rezagos de sus tasas y demoras, Ordenamos que los corregidores cobren buenamente de estos efectos lo que montaren.

LEY 19.

Que los oficiales reales den fianzas abonadas por los bienes comunes de los indios, y que se les tomen cuentas todos los años.

LEYES 20, 21 y 22.

Que las diligencias judiciales y cuidado de esta cobranza esté á cargo de un oidor, nombrado por los vireyes y presidentes pretoriales que les pareciese mas á propósito, al cual podrán remover y quitar con causa ó sin ella, todas las veces que convenga á la buena administracion de justicia y cobro de este caudal: que el oidor sea juez en primera instancia de todos los pleitos ordinarios y ejecutivos, civiles y criminales sobre la cobranza y paga de esta hacienda, los cuales ha de poder avocar á su juzgado, ejerciendo jurisdiccion privativa con inhibicion á las demas justicias, y de sus autos y sentencias se ha de apelar á la Audiencia donde el oidor ejerciere, y allí se han de concluir por otra sentencia, sin dar lugar á suplicacion; y que el fiscal de la misma ha de ser el defensor y

abogado de estos en cualesquiera diligencias judiciales, y si sus ocupaciones no dan lugar á ello, las remitirá á los abogados, protector y procuradores nombrados y asalariados para los negocios de los indios.

LEY 23.

Que los oficiales reales justifiquen las libranzas dadas por los oidores jueces de censos á pagar en estas cajas, quienes no puedan enviar ejecutores, ni otra persona á costa de las cajas, porque las han de cometer á los gobernadores ó corregidores, que si fueren omisos, será por su cuenta y costa.

LEY 24.

Para que en todo tiempo se haga la cobranza de estos bienes puntual y efectivamente, el oidor, fiscal y oficiales reales..... hagan sacar y saquen al principio de cada año una nómina ó recepta de todo lo que se ha de cobrar en él de censos, rezagos y otra cualquier cosa que pertenezca á las comunidades, que entregarán al cobrador, con las escrituras, recaudos y despachos necesarios de los que estuvieren en la caja, dejando en ella recibo, que se le borrará cuando los vuelva, y para esto habrá un libro ó cuaderno en la caja, y todos harán que ponga en la cobranza el cuidado posible, sin atrasar las cantidades, cobrando cada tercio como se cumpliere su plazo, y lo atrasado de una vez, sin perder ninguna diligencia.

LEY 25.

Donde hubiere caja de comunidad, nombre el acuerdo escribano y alguacil de este juzgado con los requisitos, atribuciones y derechos que se espresan.

LEYES 26, 27, 28 y 29.

Que nombre asimismo el acuerdo un cobrador de toda satisfaccion y confianza para este objeto, el cual jure que usará bien y fielmente su oficio, y dé fianzas abonadas en cantidad de 2,000 pesos ensayados. El oidor, fiscal y oficiales reales le pedirán cuenta cada mes de lo hecho y cobrado, de forma que siempre se mejoren la cobranzas; y por su trabajo y diligencia se le pagará una ayuda de costa proporcionada, tasándolo el juez, fiscal y oficiales reales.

LEY 30.

Que las pagas se hagan con efecto y dentro de la caja, y allí se asiente la partida de recibo, dando al deudor certificacion bastante, que le sirva de carta de pago, señalada del oidor, fiscal y oficiales reales; y lo mismo se entienda en las partidas de censos que se redimieren, sin consentir que en poder del cobrador, ni otra alguna persona entre, ni se detenga, aunque sea por poco tiempo, el dinero y caudal de las comunidades.

LEY 32.

Los gobernadores y corregidores, cada uno en su distrito y tiempo, han de tener á su cargo las cobranzas enteramente, y lo que dejaren de cobrar, ha de ser por su cuenta y riesgo. Donde no hubiere oficiales reales, entren estos bienes en poder de los depositarios generales, ó en su falta, en el de la persona mas abonada que nombre el cabildo ó consejo á su riesgo, y luego dé cuenta el justicia mayor á los oficiales reales principales, para que puestos en la caja de su cargo, se empleen y paguen en los fines para que están destinados, y no impongan censos, porque esta facultad toca al oidor, fiscal de la Audiencia y oficiales reales de la caja principal.

LEY 33.

Encargamos á los vireyes y jueces de censos, que en cada un año hagan que los corregidores de indios les envien un tanteo y balance de lo cobrado de bienes de la comunidad y estado que tienen todas estas cajas en sus distritos, para que los corregidores vivan con mas cuidado, y se remedien los daños que en ellas suele haber, y los fiscales procuren que asi se cumpla y ejecute.

LEY 34.

Que se ponga remedio en los tratos de los corregidores con las cajas de comunidad.

LEY 35.

Que las causas contra corregidores sobre bienes de comunidades se sigan criminalmente hasta pena de la vida.

LEY 36.

Mandamos que todos los gobernadores, corregidores, alcaldes mayores y ordinarios, jueces de residencia, y los demas que gobernaren la provincia, sean obligados en las cuentas que tomaren á los concejos, de hacer la misma diligencia en cuanto á los censos impuestos en favor de las comunidades de indios, cobrar los rezagos y resultas, y ponerlas en la caja inmediata de aquella gobernacion; y si los bienes hipotecados hubieren pasado á terceros poseedores, ó se murieren los principales censualistas, provean que se hagan los reconocimientos necesarios con obligaciones en forma, y si en esto fueren omisos ó negligentes, de sus personas y bienes se cobre otra tanta cantidad como hubiere montado el daño y perjuicio.

LEY 37.

Que los vireyes, presidentes y oidores, jueces y oficiales reales, pongan todo cuidado, por lo que á cada uno tocare, no solo respecto de las cobranzas ordinarias y corrientes de los censos de indios, sino que se hagan con efecto de todas las deudas atrasadas, y avisen al Rey.

LEY 38.

Que los vireyes y presidentes gobernadores hagan reintegrar en las cajas de censos todas las cantidades que se debieren, no omitiendo, ni perdonando ningun medio que pueda conducir á esta resolucion hasta estar las cajas enteradas, y respecto de que en algunas partes es la real hacienda el mayor deudor y en mas gruesas cantidades por empréstitos que de estos bienes de comunidad se le han hecho, mandamos que con ningun pretesto se pueda sacar ninguna cantidad de las dichas cajas; y en cuanto á los réditos corridos de las cantidades que se han tomado para nuestra real hacienda, harán que con la comodidad y brevedad posible se vayan enterando y reintegrando á las dichas cajas. (V. BIENES DE COMUNIDAD DE INDIAS, tomo 6.°, página 534).

LEGISLACION CANONICA.

TITULO V, CAP. I, LIB. III (*Extrav. Commun*).

Bula de Martin V espedida en 1425, año VIII de su pontificado.

Declara que el contrato de compra y venta de un censo anual con la cláusula de retroventa no adolece del vicio de la usura.

«*Comperimus contractus hujusmodi juridicè et juxta determinationem doctorum licitos fore. Ad hujusmodi ergo ambiguitatis tollendum dubium in præmissis, præfatos contractus licitos et juri communi conformes, ac ipsorum censuum venditores, ad illorum solutiones (remoto contradictionis obstaculo) obligari auctoritate apostolica tenore presentium ex certa scientia declaramus; non obstantibus præmissis, cæterisque contrariis quibuscumque.*»

CAP. II, ID. ID., AÑO 1455.

Hace un minucioso recuerdo de la anterior y la confirma en todas sus partes.

ID. DE NICOLÁS V, AÑO 1452.

Especial para el reino de Sicilia *citra et ultra Farum*. Se halla entre las Pragmáticas del rey Alfonso I de Aragon, Sicilia yen el título de Censos. de Valencia,

Declara lo mismo que la bula de Martin V en estos términos:

«*Nos igitur pro debito pastoralis ministerii nobis divinitus injuncti super his salubriter provideri ac statui, et indemnitatibus in-*

colarum et habitatorum regnorum et terrarum dicti Regis (Alfonsi) citra montes constitutorum præsentium et futurorum, quantum cum Deo possumus subvenire cupientes, et attendentes quod clero terrarum et dominiorum ipsius Regis citra montes constitutorum in suis olim indigentiis per venditiones prædictorum censualium auctoritate apostolica pluries consultum et provisum fuit, præfati Regis in hac parte suplicationibus inclinati, tam eidem Regi, quam omnibus et singulis incolis et habitatoribus ac..... universitatibus præsentibus et futuris hujusmodi censualia super rebus et proprietatibus suis, ac facultatibus et emolumentis eorumdem instrumento gratiæ pro consimili pretio illa redimendi, mediante dummodó annualis census hujusmodi censualium decimarum partem principalis recepti, seu pretii eorumdem non excedat, inter se contrahendi, vendendi et emendi cum opportuna contrahentium securitate, tuitione, et indemnitate, ac cum potestate vendentes personas, earumque proprietates, redditus, jura, jurisdictiones, census, ac omnia et singula mobilia et tumobilia bona obligandi et obligare faciendi, ac etiam quascumque alias obligationes et submisiones cuicumque foro, nec non renuntiationes, promisiones, stipulationes, pœnis, juramentis, et aliis cautionibus vallatis et alia quœcumque de quibus inter ementes et vendentes hujusmodi censualia conventum et in pactum deductum fuerit, plenam licentiam, et liberam auctoritate apostolica tenore præsentium concedimus facultatem.

»Decernentes et declarantes eosdem incolas et habitatores..... ac universitates censualia prædicta modo præmiso..... liberé et licité contrahere, ac emere et vendere posse, neque propteréa usurariam pravitatem committere, dummodo alias, quam ut præmittitur, quodlibet annum censuale decimam partem recepti, seu pretii venditionis ipsius non excedat: et pensionibus, seu annualitatibus eorum in sortem non computatis pro totali redemptione, præter principalem sumam nihil ultra percipiatur ab emptore, vel exhibeatur á venditore.....»

Don Alfonso I al publicar con su aceptacion la anterior bula espresando que en ella se consultaban las mayores ventajas y prosperidad de los naturales y habitantes de las Dos Sicilias, dispuso que los contratos censuales habian de traer pronta y aparejada ejecucion, sin que pudiera esto impedirse de ningun modo, ni bajo pretesto ó motivo alguno; que las pensiones ó réditos anuales no pudieran confiscarse ó secuestrarse por razon de crímenes ó delitos, escepto el de lesa magestad; y que las cosas, bienes ó derechos obligados al pago de los réditos no cayeran en comiso por no haberse pagado aquellos en los términos establecidos, ni por haberse deteriorado, cualesquiera que fuesen los pactos celebrados en contrario, aun confirmados con pena ó juramento.

Pio v, 1568.

Tit. 12, lib. 2 del *Septimo* de las Decretales.

No hallándose admitido en España este *motu proprio*, ni la otra bula espedida por el mismo Pontífice sobre la materia, y no siendo necesario en su virtud consultarlos testualmente, hemos creido mas espedito que insertarlos, hacer el siguiente estracto de sus disposiciones.

En atencion á celebrarse con frecuencia muchos contratos de censo que no se ajustaban á los límites establecidos por sus antecesores y aun los quebrantaban abiertamente por estímulos de codicia y con manifiesto desprecio de las leyes divinas, quiso este soberano Pontífice, satisfaciendo á los ruegos de personas piadosas y consultando la salvacion de las almas, proveer de remedio á tamaños males y estableció al efecto las siguientes condiciones:

1.ª Que el censuario consigne alguna cosa inmueble y fructífera determinada.

2.ª Que se constituya el censo entregándose al vendedor el justo precio en dinero contante, á presencia del notario y testigos en el acto de la celebracion del instrumento, y no antes.

3.ª Que no se hagan pagos anticipados de los réditos.

Lorenzo Arrazola

4.ª Que no pueda obligarse á los casos fortuitos el que no lo estuviere por la naturaleza del contrato.

5.ª Que no tenga valor, ni fuerza el pacto de no poder venderse la cosa sujeta al censo, ni quede obligado el vendedor á pagar el laudemio, quincuagésima ú otra carga, y sí únicamente á dar preferencia al dueño del censo sobre otros compradores, anunciándole las condiciones de la venta y esperando su resolucion durante un mes.

6.ª Que no se hagan, ó hechos sean nulos, pactos dirigidos á que el deudor moroso del censo, quede obligado á los intereses del lucro cesante, cambios, espensas, salarios, dimision de la cosa censida, ú otra cualquiera pena.

7.ª Que no se aumente el censo, ni se cree otro nuevo para el pago de pensiones devengadas ó futuras, en la misma cosa ó en otra á favor del dueño del censo ó de otra persona.

8.ª Que no se hagan pactos, segun los cuales los pagos de cargas se refieran á objetos contrarios á derecho y á la naturaleza del contrato.

9.ª Que todos los censos creados en lo sucesivo se estingan total ó parcialmente siempre que el fondo perezca en todo ó en parte; que puedan redimirse por el mismo precio, debiendo anunciarlo el deudor, en su caso, dos meses antes, despues de cuyo anuncio el acreedor podrá exigirle el precio dentro de un año; pero trascurrido este plazo sin hacerlo, continúa el censo.

10. Se prohibe el pacto de poder exigir el capital, ya como pena, ya por otra causa, salvo el caso antedicho.

11. Que no pueda alterarse el precio por las circunstancias de los tiempos ó la clase de los contrayentes.

12. Que el vendedor del censo pueda estinguirle y redimirle en todo ó en parte cuándo y como le pareciere, y de otra manera se convertirán los censos en ilícitos, usurarios y feneraticios.

13. Que para la celebracion del contrato censual habia de intervenir necesariamente otorgamiento de escritura.

Las disposiciones de estas letras apostólicas tuvieron fuerza de ley en casi todos los Estados de Italia; pero se negaron generalmente á admitirla los demas católicos de Europa. V. CENSOS DE NAVARRA.

GREGORIO XIII, EN 1574.

Empieza esta Bula esponiendo que las concesiones hechas con madura deliberacion por los Romanos Pontífices á instancia de los monarcas para utilidad de sus Estados, mayormente cuando tendian á quitar ocasiones de pecado, y vienen sancionadas por un largo uso, parece muy razonable que se observen, no obstante la posterior promulgacion de otras constituciones pontificias generales, á ellas contrarias. Partiendo de este principio, como demostrase la esperiencia que la Bula de Pio V no podia observarse en el reino de Sicilia *ultra farum*, sin gran perturbacion y daño, se declara en vigor la Bula de Nicolás V, y se deroga la anterior en estos términos:

Nos ipsarum literarum tenoribus diligenter consideratis, et re maturè discussa, cum literæ Nicolai, nihil in se contineant quod a ratione sit alienum, diuque in Regno Siciliæ prædicto magna cum incolarum tranquilitate observatæ fuerunt, literas vero Pii Quinti, tam primo, quam secundo loco emanatas, eidem Regno minime expedire attextetur prædictus Rex Catolicus, cui tanquam optimo Regi et diligenti Patri familias..... omnino credendum esse duximus, supplicationibus prædictis inclinati, ut tam Regi ipsi quam omnibus et singulis Regni Siciliæ ultra Pharum incolis et habitatoribus et locorum, et civitatum, et terrarum, universitatibus præsentibus et futuris, census juxta Nicolai V. Constitutionem facere, emere et vendere liceat: eosque sic constitutos census, validos et licitos, non autem fœneratilios esse perinde ac si litteræ Pii V prædicti non emanassent, tenore præsentium Apostolica auctoritate concedimus, declaramus et statuimus, Illud addentes, ut in censuum emptione et venditione, prius unius vel plurium rerum certarum, super qua, vel quibus census

ipse constituatur exprese, et deinde si voluerint omnium bonorum in genere mentio fiat, quemadmodum in censualibus contractibus hujusmodi in futurum in eo Regno celebrandis, et præteritis in quibus forte prius generalis, deinde specialis bonorum mentio facta est, quo ad hoc in suo robore permanentibus retineri, et quatenus opus sit, de novo introduci et observari præcipimus. Præterea, si qui abusus in contractibus prædictis faciendis irrepserint, qui Constitutioni Nicolai prædicti aliqua ex parte adversantur, vel facultatem redimendi censuum, tam annualem, quam perpetuum juxta dicti Nicolai, et Pii Quinti litteras esse decernimus, aliquo modo restringant eas omnes harum authoritate literarum quas perpetuo valere volumus, abolemus litteris Pii V, et quatenus literis Nicolai V adversantur, vel aliud præterea decernunt, et aliis contrariis quibuscumque non obstantibus.

ID. DE CLEMENTE VIII, 1592.

Esta Bula limitada á los Estados Pontificios, ó sea al territorio sujeto en lo temporal á la Santa Sede, tuvo por objeto moderar el gravámen de los censos, reduciéndolos al precio de siete por ciento, salva la facultad de redimirlos, no obstante las constituciones apostólicas, estatutos, costumbres y leyes anteriores; aun corroborados con el juramento y con la confirmacion apostólica.

LEGISLACION ESTRANJERA.

El emperador Zenón fué el primero que dictó disposiciones legales acerca del censo enfitéutico marcando la naturaleza especial de este contrato, y desde aquella época aparece en las leyes romanas con existencia y efectos propios, distintos de los que peculiarmente corresponden á los de venta y locacion. (L. 1.ª C. *de jure enfiteutico*: L. 1.ª y 3.ª D. *si ager vectigalis*).

Algun vestigio, aunque ligero y aislado, de los demas censos, se encuentra en las leyes de Justiniano, (Novela 160) pero profundamente arraigados en las costumbres, y formulados en las leyes no se hallan hasta el siglo XIV que se generalizaron en Francia y en Italia, y de aquí pasaron sucesivamente á las coronas de Aragon y de Castilla.

El Código francés conserva el censo consignativo bajo el nombre de *renta perpétua*, (artículos del 1909 al 1913); el vitalicio bajo el de *renta vitalicia*, (1968 á 1983): y hay algo muy semejante al censo reservativo en su art. 530.

El de las Dos Sicilias, copia casi testualmente al francés (1781 á 1786, y 1836 á 1855).

Lo mismo hace el de Holanda con leves diferencias (1807 á 1810, y 1812 á 1824).

El del Gran Ducado de Baden consagra al mismo objeto el cap. 2.° del lib. 2.°

El sardo admite todas las clases de contratos censuales (1938 á 1948, y 2002 á 2017).

El de la Luisiana establece el reservativo y le define en el art. 2750, y el vitalicio en el 2931 y siguiente).

El del canton de Vaud reconoce asimismo el reservativo bajo el nombre de *carta de renta*, (1395 y sucesivos) y el vitalicio (1431 á 1456).

El austriaco establece el vitalicio, (1284 á 1292), y lo mismo el de Prusia, (607 á 649).

El censo enfitéutico, omitido en el Código francés, y á su ejemplo en otros posteriores, fué, sin embargo, conservado por el de las Dos Sicilias, (1679 á 1703) por el de Holanda (784 á 803) y por el de Prusia, seccion 2.ª, título 11, parte 1.ª

PROYECTO DE CODIGO CIVIL.

TITULO X.

De los censos y otros contratos análogos.

CAPÍTULO I.

Disposiciones comunes á los censos.

Art. 1546. Se constituye el censo, cuando se sujetan algunos bienes inmuebles al pago de un cánon ó rédito anual, en retribucion de un capital que se recibe en dinero ó

del dominio que se trasmite de los mismos bienes, sin que el acreedor tenga la facultad de exigir su redencion, fuera del caso del artículo 1551.

Art. 1547. No podrán constituirse en adelante otros censos que el consignativo y reservativo, y no surtirán mas efecto que los señalados en este título, á pesar de lo estipulado en contrario, y cualquiera que sea el nombre que se les dé.

Es consignativo cuando se impone el gravámen del rédito ó canon, en compensacion del capital recibido en dinero.

Cuando sin recibirse ningun capital, se enajena ó trasmite el dominio de los bienes inmuebles, reservando únicamente para sí ó para otro el rédito ó cánon anual, es reservativo.

Art. 1548. Todos los censos son redimibles, aunque se pacte lo contrario. Esta disposicion es aplicable á los censos existentes.

Art. 1549. No habiendo pacto en contrario, la redencion no puede hacerse por partes.

Art. 1550. El rédito ó interés de los censos se determinará por las partes segun su arbitrio al otorgarse el contrato, con sujecion á lo dispuesto en el art. 1650 (1); y no podrá pasar del legal, en todo el tiempo en que el deudor esté privado de la facultad de redimir el capital.

Art. 1551. El capital del censo no es exigible, sino en caso de quiebra é insolvencia del deudor, ó cuando habiendo dejado pasar dos años seguidos sin pagar la pension, y requerido judicialmente, no paga en el término de diez dias contados desde el requerimiento.

Art. 1552. El acreedor censualista, al tiempo de entregar el recibo de cualquiera pension ó rédito, puede obligar al deudor á que le dé nn resguardo en que conste haberse hecho el pago.

Art. 1553. El capital del censo es prescriptible en conformidad á lo que se dispone en el tít. 14 de este libro: (el de la prescripcion).

(1) Art. 1650. El interés convencional no podrá esceder del doble del interés legal, y en lo que escediere, lo reducirán los tribunales á instancia del deudor.

CAPÍTULO II.

Disposiciones especiales relativas al censo consignativo.

Art. 1554. En cuanto no se halle especialmente determinado en este título, se observarán respecto de los censos las disposiciones contenidas en los títulos 19 y 20 de este libro (De la hipoteca y del registro público).

Art. 1555. Sin embargo de pacto en contrario, el deudor del censo consignativo puede redimirlo, sin mas que devolver el capital recibido, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.

Art. 1556. Las partes podrán pactar que no ha de redimirse el censo durante la vida del acreedor ó de una tercera persona determinada ó que no pueda redimirse en cierto número de años, que nunca escederá de diez, ó que no se hará la redencion sin dar aviso al acreedor con tiempo anticipado; pero no podrá estipularse que el término esceda de un año.

Art. 1557. El rédito ó pension del censo consignativo se pagará siempre en dinero.

CAPÍTULO III.

Disposiciones especiales relativas al censo reservativo.

Art. 1558. No puede constituirse válidamente el censo reservativo sin que preceda la estimacion ó justiprecio de la finca, y nunca se podrá pactar para el caso de redencion mayor capital que el estimado ó justipreciado.

Art. 1559. El censo reservativo solo produce accion real, y únicamente sobre la finca gravada.

Sin embargo es admisible la accion personal para el pago de las pensiones atrasadas y de los daños é intereses cuando hubiere lugar á ellos.

Art. 1560. Lo dispuesto en el art. 1556 es aplicable al censo reservativo, con la sola diferencia de que el número de diez años allí fijado, podrá estenderse aquí hasta el de sesenta.

Art. 1561. El rédito ó pension se podrá pagar en dinero, ó en frutos, segun se hubiere pactado.

Art. 1562. Si la finca gravada con un censo se pierde del todo, cesará el rédito ó pension; pero si se pierde solo en parte, no se eximirá al deudor de abonar la renta, á no ser que prefiera abandonar la finca al acreedor.

Interviniendo culpa del deudor, quedará sujeto en ambos casos al resarcimiento de daños y perjuicios.

CAPÍUTLO IV.

Disposiciones aplicables á los censos de cualquier especie, foros y otros gravámenes análogos, constituidos con anterioridad á este Código.

Art. 1563. En cuanto á los censos enfitéuticos, foros, subforos, derechos de superficie ó cualesquiera otros gravámenes perpétuos de igual naturaleza, constituidos antes de la promulgacion del código civil, se observarán las reglas siguientes.

1.ª Podrán redimirse por los terratenientes, pagando el capital de la imposicion; y si este no fuere conocido, abonando por capital, laudemio, luismo y cualesquiera otros derechos dominicales, la cantidad que resulte, computada la pension al respecto de treinta y tres y un tercio al millar, ó sea tres por ciento.

2.ª Si la renta ó pension se paga en frutos, se estimarán estos, para computar el capital por el precio que hubieren tenido en el último quinquenio.

3.ª Los terratenientes pueden enajenar libremente el dominio útil; y en los casos en que, con arreglo á la legislacion vigente y á lo pactado, tenga lugar el laudemio ó luismo, ó cualquiera otro gravámen de esta clase, no podrá exigírseles mas que la cincuentena parte, ó dos por ciento del precio de la venta.

4.ª Mientras los terratenientes satisfagan el cánon ó pension y demas gravámenes que hasta ahora vengan pagando, no podrán ser inquietados en el goce de las fincas afectas á su pago.

5.ª Lo dispuesto en el art. 1551 es aplicable á los censos, foros y demas derechos de que se trata en este capítulo.

6.ª Las cuestiones sobre la cuantía del cánon ó pension, se resolverán con arreglo á lo que se hubiere venido pagando en el último quinquenio.

7.ª Tanto los terratenientes como los perceptores de las pensiones ó gravámenes, podrán usar del retracto legal en toda trasmision de sus respectivos derechos.

8.ª En las herencias por testamento ó sin él, se considerarán los derechos de los terratenientes, como todos los demas derechos reales, y por lo tanto divisibles entre los herederos, con sujecion á las disposiciones comunes sobre herencias.

9.ª El contrato en cuya virtud el dueño del suelo ha cedido su uso para plantar viñas, y por el tiempo que vivieren las primeras cepas, fenece de derecho á los sesenta años, sino se ha estipulado lo contrario, bien se conserven las primitivas en todo ó en parte, ó bien se hayan plantado otras.

TITULO XV.

De los contratos alcatorios ó de suerte.

CAPÍTULO IV.

De la renta vitalicia.

Art. 1703. La constitucion de renta vitalicia es un contrato alcatorio, cuando el deudor queda obligado á pagar una pension ó rédito anual, durante la vida de una ó mas personas determinadas, por un capital en bienes muebles ó inmuebles, cuyo dominio se le transfiere desde luego con la carga de la pension, la cual se estingue con la muerte del pensionista.

Art. 1704. Tambien puede uno constituir la renta vitalicia gratuitamente por do-

nacion ó testamento sobre sus propios bienes, reteniendo su dominio para sí ó para su heredero, en cuyo caso estará sujeta la renta á las reglas sobre capacidad, reduccion ó nulidad, establecidas para los casos respectivos en los títulos 1.° y 4.° de este libro.

Art. 1705. Puede constituirse la renta sobre la vida del que entrega ó pone el capital, sobre la de un tercero ó sobre la de varias personas.

Tambien puede constituirse á favor de aquella ó aquellas personas sobre cuya vida se otorga, ó á favor de otra ú otras personas distintas.

Art. 1706. Es nula la renta constituida sobre la vida de una persona que habia muerto á la fecha del otorgamiento, ó que en el mismo tiempo se hallaba padeciendo una enfermedad que llegue á causar su muerte dentro de los veinte dias, contados desde aquella fecha.

Art. 1707. La renta vitalicia no tiene mas tasa que la que se fija en el contrato.

Art. 1708. La persona á cuyo favor se ha constituido la renta en pago de un precio ó capital, puede hacer que se rescinda el contrato si no se le otorgan las seguridades estipuladas.

Si la renta se hubiere constituido en testamento sin designacion de bienes determinados, el legatario tendrá derecho á que el heredero señale bienes bastantes sobre los que haya de constituirse hipoteca.

Art. 1709. En el caso de que el deudor de la renta deje de pagarla, no tendrá el acreedor otro derecho, aunque se haya pactado lo contrario, que el de ejecutar judicialmente al deudor para el pago de las rentas atrasadas y para asegurar la prestacion de las futuras.

Art. 1710. La renta correspondiente al año en que muere el que la disfruta, se pagará en proporcion á los dias que vivió, pero si debia pagarse por plazos antipados, se pagará el importe total del plazo que durante su vida se hubiere empezado á cumplir.

Art. 1711. Solamente el que constituye á título gratuito una renta sobre sus bienes, puede disponer al tiempo del otorgamiento que no estará sujeta á embargo por derechos de un tercero.

Art. 1712. No puede demandarse la renta sin justificar la existencia de la persona sobre cuya vida está constituida.

LEY DE 27 DE FEBRERO DE 1856 (1).

Artículo 1.° Se declaran comprendidos en el art. 1.° de la ley de desamortizacion de los censos enfitéuticos, consignativos y reservativos, los de poblacion, los trendos, foros, los conocidos con el nombre de «carta de gracia,» y todo capital, cánon ó renta de naturaleza análoga, pertenecientes á manos muertas, las que están sujetas á la ley de 1.° de mayo.

Art. 2.° Se declaran como censos, para los efectos de esta ley, los arrendamientos anteriores al año 1800, que no escediendo de 1,100 rs. anuales en su orígen ó el año último, hayan estado desde la citada época en poder de una misma familia, aunque hubiesen sufrido alguna alteracion en las rentas en épocas posteriores. Lo mismo se entenderá si la renta escede de 1,100 rs., con tal de que la finca esté dividida entre dos ó mas partícipes, si cada uno de ellos no paga actualmente mas de la referida suma.

Art. 3.° Con la redencion de los réditos ánuos, capitalizados conforme previene la ley de 1.° de mayo, quedan estinguidos todos los demás derechos que tuviese la mano muerta censualista.

Art. 4.° Cuando el capital de un censo perteneciente á mano muerta afectase varias fincas que estén en diversos poseedores, ó á una que se haya dividido entre partícipes, y esté dividido tambien entre ellos el pago de los réditos, cada cual podrá redimir su parte de capital, obteniendo la libertad de su porcion de propiedad afecta con relacion al capital impuesto. En estas redenciones parciales, se hará la capitalizacion prevenida en el art. 7.° de la ley de 1.° de mayo, tomando por tipo el rédito total del censo.

Los censos, cuyos réditos se pagan en es-

(1) En prensa ya el artículo, se ha promulgado esta ley.

pecie, se regularán por el precio medio que esta haya tenido en el mercado durante el decenio de 1840 y 1850.

Art. 5.° Para redimir los censos de poblacion, se capitalizarán por la renta que se impuso á cada suerte, sin tener en cuenta la mancomunidad en que se hallan todos los vecinos de un pueblo.

Art. 6.° En el caso de que un capital de censo haya sido redimido en totalidad con arreglo á las prescripciones de la ley de 1.° de mayo y sus aclaratorias, por alguno de los partícipes de la propiedad afecta ó por la persona que haga cabeza, podrá cualquiera de los otros contribuirle con la prorata que le toque, dentro del término concedido para la redencion en esta ley, gozando de sus beneficios.

Art. 7.° Se condonan todos los atrasos de réditos á los censatarios y demás pagadores de gravámenes desamortizados que adeuden mas de tres anualidades, contando hasta 1.° de mayo último, y los laudemios devengados por ventas realizadas con anterioridad á dicha fecha y que no se hayan pagado. Este perdon se entenderá con la obligacion de redimir respecto á los censatarios de censos conocidos, y con la de redimir ó de reconocer el capital, obligándose á pagar los réditos sucesivos, tocante á los de censos dudosos ó ignorados, uno y otro dentro del plazo de esta ley. Se consideran dudosos para el indicado objeto, aquellos que ni hubiesen pagado los réditos ni se les hubiese reclamado, ya judicial, ya gubernativamente, en los últimos cinco años que han vencido en 1.° de mayo.

Art. 8.° Los usufructuarios de fincas afectas á censos dudosos ó ignorados, gozarán del beneficio concedido en el artículo anterior, si hiciesen la declaracion del gravámen; pero esta no perjudicará por sí sola al propietario para el dia en que se consolide el usufructo.

Para que se pueda gozar del beneficio de la redencion en los censos en que la propiedad está separada del usufructo, se concede preferencia para efectuarla á los propietarios, y en segundo lugar á los usufructuarios, si redime el primero, tendrá derecho á cobrar los réditos del usufructuario durante el usufructo; si el segundo, quedará este dueño del censo (él ó sus herederos), y cobrará los réditos del propietario cuando termine el derecho del usufructuario.

Art. 9.° Para que no se perjudique la preferencia que el art. 8.° concede á los propietarios respecto de los usufructuarios, se hará lo mismo que se establece en la regla 5.ª del art. 11, de modo que la redencion se efectuará en cuanto la pida el propietario, pero habrá de detenerse hasta el trascurso de todo el término si la solicitase el usufructuario.

Art. 10. Se declaran estinguidos los censos pertenecientes al Estado y el clero regular ó secular que graviten sobre fincas de igual naturaleza, y que lleguen á venderse, haciéndose los respectivos abonos de capitales á cada uno de los propietarios del censo estinguido y de la finca vendida.

Art. 11. En las fincas vendidas á censo por ayuntamientos ú otras manos muertas que tuvieran sobre sí anteriores gravámenes en favor de otras manos muertas, y no se rebajasen en la subasta, el poseedor, con solo hacer la redencion de censo mas moderno que comprendia todo el valor de la finca, se entiende que redime los restantes gravámenes, haciéndose los oportunos abonos, como queda indicado en el artículo anterior.

Art. 12. Los censos enfitéuticos establecidos en Cataluña, los especiales en la ciudad de Barcelona, su huerto y viñedo, los foros y subforos en Galicia, y los que existan iguales ó parecidos en cualquier otro punto de la Península é islas adyacentes, quedan para su redencion sujetos á las siguientes reglas:

1.ª Los que se prestan para reconocimiento del dominio directo, y por su naturaleza no son valuables en numerario, quedan desde ahora estinguidos, y se consolidará el dominio directo al útil.

2.ª En los que sea señor directo ó mediano el estado ó cualquiera de las manos muertas comprendidas en el art. 1.° de la ley de 1.° de mayo, Podrá redimir el domi-

nio directo el que tenta el útil; y si esto no lo hiciere, el enfiteuta que cobre censo en nuda percepcion, despues de este los señores medianos, cuando los haya, en órden ascendente, sin que en lo sucesivo pueda renacer ó restablecerse bajo pena de nulidad el grado ó grados de señores redimidos.

3.ª El importe del censo redimido se disminuirá en todos los grados intermedios desde aquel que el redimente deba seguir pagando, hasta el que haya de subsistir como mas antiguo despues del estinguido.

La parte de laudemio redimido no podrá acrecer á los partícipes de lo demás, ni restablecerse directa ni indirectamente por pacto alguno, bajo pena de nulidad.

4.ª Dentro del plazo concedido para la redencion de los censos, presentarán sus solicitudes todos los que tengan derecho en conformidad á la regla segunda, llevándose á efecto la redencion desde luego si la solicitase el poseedor del dominio útil, y esperándose hasta la conclusion del término si fuese el peticionario cualquiera de los otros, para que pueda ser efectiva la preferencia que queda establecida.

Art. 13. Los censos pertenecientes á particulares que gravitan mancomunadamente con hipoteca sobre todas las fincas de un caudal desamortizado, sobre dos ó mas del mismo, ó sobre una sola que haya de dividirse para su enajenacion, se admitirán por el valor que resulte, capitalizándolos al 5 por 100 de sus réditos ánuos, en pago del precio en que se vendiesen las fincas hipotecadas á su seguridad.

Si los referidos capitales tuviesen en la escritura de imposicion la caulidad de que se habian de redimir, ó devolver íntegro para el caso de estinguirse ó enajenarse sus hipotecas, se admitirán en pago por todo su valor.

Se declaran como censos con hipoteca mancomunada aquellos que enajenó el Estado á particulares sobre fincas interminadas de cualquiera de los caudales desamortizados por la ley de 1.° de mayo, y cuya hipoteca especial no conste, bastando para acreditar su derecho y que se admita en pago al 5 por 100 la escritura de venta que otorgó el Estado.

Tambien podrán los censualistas de que habla este artículo, durante el plazo de seis meses, contados desde la publicacion de la presente ley, optar por la redencion del censo que les pertenezca, capitalizando la renta al 6 por 100 y cobrando su importe á proporcion que se haga efectivo el valor de los bienes sobre que estaba impuesto.

Art. 14. No se exigirá documento alguno ni prueba al que solicite la redencion de un censo, efectuándose esta al tenor de su declaracion, si por las oficinas no se acreditase que es mayor su capital. Esto, sin perjuicio de las investigaciones que puedan hacerse en lo sucesivo, y de la responsabilidad á que quedan sujetos el censatario y la finca afecta, si debiese mayor cantidad. Se esceptúan de esta disposicion los arrendatarios á que se contrae el artículo 2.°, en los que será preciso la justificacion documental, ó en caso de absoluta imposibilidad de esta, la de testigos con intervencion de la hacienda y de las corporaciones á que pertenecian los bienes, y que use del derecho para sí, y no para cederlo al mismo interesado.

Art. 15. Las redenciones de censos desamortizados que estén pendientes, se arreglarán á lo prevenido en esta ley.

Art. 16. Las escrituras de redencion se estenderán en el papel sellado correspondiente al capital que se redime.

Art. 17. Se amplía por seis meses mas, á contar desde la publicacion de la presente ley, el plazo que se concedió en el art. 7.° de la de 1.° de mayo para la redencion de los censos. Este plazo podrá prorogarlo el gobierno por otros seis meses. Este término se contará en los censos sobre que hay litigio pendiente, desde que se declare la ejecutoria ó desde que el censatario se allane al reconocimiento.

Art. 18. Las juntas de venta de bienes nacionales de provincia aprobarán en las suyas respectivas los espedientes de redencion de censos, cuyos capitales no escedan de la cantidad de 10,000 rs vn., conforme á los tipos marcados en la ley de 1.° de mayo último.

PARTE DOCTRINAL.

SUMARIO.

Sec I. RESEÑA HISTÓRICA.
Sec. II. CLASIFICACION Y NATURALEZA DE LOS CENSOS.
§. 1.° *Clasificacion de los censos.*
§. 2.° *Carácter y naturaleza de los censos.*
§. 3.° *Censo enfitéutico.*
§. 4.° *Censo reservativo.*
§. 5.° *Censo consignativo.*
§. 6.° *Censo vitalicio.*
Sec. III. CONSTITUCION DE LOS CENSOS.
§. 1.° *Capital ó precio de los censos.*
§. 2.° *Personas que pueden constituir censos.*
§. 3.° *Cosas sobre que pueden constituirse los censos.*
§. 4.° *Rédito, ó pension de los censos.*
§. 5.° *Fiador del contrato censual.*
§. 6.° *Escritura.*
Sec. IV. PACTOS Y OBLIGACIONES QUE SUELEN AÑADIRSE AL CONTRATO CENSUAL.
Sec. V. RECONOCIMIENTO Y REDUCCION DE LOS CENSOS: SUBROGACION Y LIBERACION DE HIPOTECAS.
§. 1.° *Reconocimiento de los censos.*
§. 2.° *Reduccion del contrato censual: subrogacion y liberacion de hipotecas.*
Sec. VI. ACCIONES QUE NACEN DE LOS CENSOS: NATURALEZA DE SU HIPOTECA.
§. 1.° *Acciones que nacen de los censos.*
§. 2.° *Naturaleza de la hipoteca censual.*
Sec. VII. ESTINCION DE LOS CENSOS.
§. 1.° *Destruccion ó esterilidad superveniente de la hipoteca.*
§. 2.° *Dimision de la hipoteca.*
§. 3.° *Venta judicial de la hipoteca.*
§. 4.° *Comiso.*
§. 5.° *Consolidacion de dominios.*
§. 6.° *Redencion.*
§. 7.° *Prescripcion.*
§. 8.° *Defuncion en el censo vitalicio.*
Sec. VIII. DEL PROCEDIMIENTO.

SECCION I.

RESEÑA HISTÓRICA.

Nuestros jurisconsultos modernos han convenido generalmente en apreciar esta institucion como una calamidad que seca y destruye las fuentes de la riqueza pública. Aun resuenan en nuestras universidades las sentidas lamentaciones de Elizondo, Vizcayno y el Pavorde Sala acerca de ella. Estos respetables tratadistas, arrastrados por la contemplacion de los males que existian en su tiempo, no alzaron los ojos á su orígen y á su historia, para examinar concienzuda y plenamente, como á nuestro juicio debia, el objeto de sus críticas.

Si se consideran bajo su aspecto económico, todavía puede defenderse la actual conveniencia de los censos con las modificaciones y reformas oportunas, hijas de las variaciones y necesidades de los tiempos; pero aun son mas fuertes y poderosas las razones que las recomiendan y abonan bajo el aspecto filosófico é histórico.

Examinados al través de los siglos en su orígen primitivo, hallaremos sin duda que contribuyeron no poco á mejorar la condicion y procurar la independencia de los hombres consagrados á la agricultura, preparando de este modo una organizacion social, si defectuosa é incompleta siempre, buena y fecunda comparada con las anteriores.

El censo enfitéutico, formulado ya por las leyes, data del tiempo del emperador Zenón; pero su raiz, su verdadero orígen, se encuentra en la República romana y en el sistema que siguió respecto de todas sus conquistas en el mundo entonces descubierto.

Verdad es que no existia en aquella época esta clase de censos, asi como tampoco ninguna de las demás hoy conocidas; pero existia su principio en la renta ó prestacion denominada *cánon* ó *tributo*.

Los romanos al estender su poderosa do-

minacion sobre los pueblos vencidos, observaban la máxima de que los frutos de la victoria pertenecian al que soportaba los gastos de la guerra; y como esta se hacia siempre bajo las enseñas de la República, de ella se consideraban á título de conquista todos los terrenos subyugados. Pero ni la República podia cultivarlos por sí propia, ni aun cuando hubieran podido los vencedores hacerlo, les inclinaba á ello la vida altiva y gloriosa de los campamentos. Era preferible para su índole guerrera, y asi aconteció, dejar los terrenos cultivados á sus primitivos dueños ó á nuevos colonos, con la obligacion de pagar anualmente un cánon ó tributo moderado (1), y conceder á braceros laboriosos el dominio útil de los campos incultos bajo iguales condiciones. Cuando de este modo el enfiteusis dió lugar en la série de los tiempos á convenciones particulares de la misma especie, vinieron las leyes en pós de tales hechos á establecer las reglas, carácter, naturaleza y modo de constituirse este contrato, fundado, como todos, en la mútua conveniencia.

Indudablemente era triste, aunque no tanto como quiere encarecerse, la suerte reservada á los habitantes de algunos de los territorios sujetos al pueblo romano; pero no puede negarse que, libres de los horrores y abyeccion de la esclavitud, disfrutaban de una condicion y de una existencia menos duras. Ya el hombre no conocia señor; era dueño de sus acciones y del fruto de su trabajo, sin otra obligacion que la de pagar el cánon y poseía una especie de patrimonio, lo cual, entre otros notables adelantos, influyó mucho en la cultura y en la independencia individual, que á su vez produjo el deseo de la libertad, impulsada por el principio religioso. En una palabra, el cultivo por enfiteusis, arrendamiento privilegiado, muy semejante á los feudos, creados despues en la edad media, fué un paso no pequeño en el vasto camino que debia correr la civilizacion humana en los siglos posteriores.

Cuando aquella organizacion social trabajada por el tiempo, por los vicios y molicie del imperio, y por otras consideraciones que no son de este lugar, iban desapareciendo y modificándose todas las instituciones que la rodeaban, apareció, segun dejamos indicado, el *censo enfitéutico* en la forma de contrato, bajo los auspicios de la ley. El derecho de ciudad, antes tan escatimado, se habia estendido á los últimos confines del territorio; la antigua y soberbia Roma, ensanchándose y haciendo suyo todo el mundo, cumplido el objeto que habia marcado la Providencia á aquel período histórico, empezó á decaer rápidamente; ya no hubo vencedores y vencidos, sino ciudadanos y propietarios, que daban sus terrenos en enfiteusis á los proletarios ó braceros.

No era aquello un simple arrendamiento, como se ha pretendido; era un censo, puesto que se estipulaba por tiempo indeterminado á favor de quien tomaba el terreno y de sus sucesores, con tal que pagasen el cánon, mientras los arrendamientos se hacen por tiempo mas ó menos largo, pero siempre limitado.

Llegó el momento supremo señalado por el dedo de Dios al enflaquecido imperio romano, y los bárbaros del Norte se lanzaron como un torrente asolador sobre la Europa al comenzar el siglo V. Rota y disuelta la sociedad legal de los antiguos pueblos, los vencedores, raza pastoril y guerrera, empujada por las privaciones á comarcas mas feraces, saqueando á su paso las poblaciones agrupadas sin establecerse en ellas, se desparramaron por los campos con sus esclavos y ganados, y despojaron de la mayor parte de su propiedad á los vencidos. La inseguridad comun, el temor á la violencia, los graves males y conflictos que solo pueden remediar la civilizacion y el establecimiento de las sociedades, aun en el grado mas imperfecto, fueron aproximando con lentitud aquellos discordes elementos. La poblacion agrícola, los habitantes de los campos, cultivadores de sus pequeñas propiedades, solicitaron la proteccion de propietarios mas poderosos para asegurar sus vidas y fortunas, ofreciéndoles en

(1) Este *tributo*, conocido tambien con el nombre de *vectigal*, se pagaba en frutos, circunstancia ó modo de pagar en especie que continuó en las sucesivas dominaciones de los godos y los árabes.

cambio una renta anual en dinero ó en especie que se fijó por el consentimiento de ambas partes. Esta asociacion espontánea de los hombres libres y propietarios, que empezó y se generalizó por la fuerza de las cosas desde el siglo sesto hasta el duodécimo, era un progreso inmenso teniendo en cuenta la existencia precaria, desordenada y tumultuosa que la invasion habia producido, y llegó á regularizarse y á formar un todo eslabonado y completo cuando el sistema feudal, á vuelta de sus vicios y defectos, fué elaborando trabajosamente y dando nueva forma á la creacion de sociedades conocidas mas tarde bajo el nombre genérico de monarquías y de Estados

La asociacion entre los hombres libres y propietarios á la vez, produjo otra asociacion que la historia deja entrever al acercarse el siglo XI. De esta época data un nuevo sistema para el cultivo de las tierras y el fomento de los ganados, muy semejante al establecido por los normandos en sus vastas conquistas. Causas y necesidades análogas produjeron efectos idénticos. Cedíanse los ganados y las heredades á los esclavos con facultad de atender libremente á su cultivo y cuidado por cierto número de años, con la obligacion de pagar al señor una módica remuneracion ó censo anual. Merced al noble y civilizador influjo de la religion cristiana, al piadoso ejemplo de los obispos y del clero, y á la esperiencia tambien de que asi era mas útil el trabajo y el cultivo mas fecundo, la poblacion esclava principió entonces á disfrutar un doble beneficio, el de la libertad y el de la propiedad á un tiempo mismo.

Las cesiones de tierras hechas á los esclavos fueron creciendo paulatinamente. Limitadas primero á uno ó mas años, se estendieron despues á diez, á treinta, á ciento, convirtiéndose finalmente en perpétuas. La primera cesion anual empezó á minar la esclavitud; quedó destruida desde el momento en que la cesion temporal se hizo perpétua.

El Derecho romano, pauta y orígen de todas las legislaciones europeas cuando las respectivas sociedades fueron llegando á cierto grado de cultura, restablecido en gran parte por el canónico, trasmitió á todas ellas el contrato enfitéutico, que, circunscribiéndonos ya á la de nuestro pueblo, vemos consignado en las Partidas con todos los requisitos y condiciones que le son anejos.

La invasion de los árabes habia reproducido en nuestro suelo los males y desastres que dejó profundamente marcada la antigua de los bárbaros del Norte, y, como era natural, los mismos hechos produjeron tercera vez los mismos resultados. Acometida bien pronto la gloriosa y difícil obra de la reconquista, mientras duró, y cuando la terminaron brillantemente los Reyes Católicos, clavando el estandarte de la fé sobre los muros de Granada, la propiedad territorial estaba en su mayor parte acumulada en manos de la nobleza y del clero, si bien acumulada con títulos legítimos, porque fueron los dos poderosos auxiliares que ayudaron constantemente á nuestros reyes en tan santa y noble empresa.

Y como no fuera posible que estas clases cultivasen por sí mismas sus numerosos y vastos prédios, los dieron en censo enfitéutico á labradores laboriosos y honrados, no sin gran conveniencia de unos y otros y del Estado en general. Existen de ello innumerables datos, asi en las casas de nuestra antigua nobleza como en los archivos eclesiásticos.

Resulta, pues, que aun cuando sea cierto que en el Derecho romano antiguo no se encuentra espresa y formulada la institucion de los censos, se halla fácil y naturalmente su orígen y raiz en la historia de aquel pueblo y en las necesidades y condiciones propias del estado de la sociedad en aquella época y en las que con grande analogía le fueron sucediendo.

Haremos ver ahora que el censo enfitéutico (1), primero en el órden cronológico, no solo fué útil, fué indispensable para la prosperidad de aquellos pueblos.

La propiedad aglomerada á causa de las guerras de conquista y del sistema feudal,

(1) Emphiteusis, palabra griega que significa *plantacion*, cultivo, mejora.

dejaba los campos yermos y sin cultivo, grave mal que hallaba en este contrato su remedio.

El propietario que poseía grandes prédios incultos, y que no queria ó no podia fácilmente hacerlos productivos, los cedia á otro mas laborioso y mas necesitado. Habia en ello ventajas para todos: el dueño del terreno inculto é infructífero, tenia el beneficio del cánon ó pension anual, al paso que vendido, solo le hubiera procurado un precio ínfimo; los braceros ó colonos destituidos de otro capital que el de su trabajo, lograban una ocupacion estable, se hacian en cierto modo propietarios; la sociedad ganaba tambien con el fomento del cultivo y con el aumento de la poblacion y la riqueza.

Por el trascurso de los siglos y como resultado del mismo contrato, la necesidad y la utilidad del enfiteusis fueron siendo gradualmente menores: pero ¿puede decirse que los censos enfitéuticos deban ser omitidos en concepto de perjudiciales como lo hizo el Código francés, ó de todo punto escluidos, como lo hace nuestro proyecto de Código civil? A nuestro juicio, tratándose de determinados paises, no seria prudente acuerdo.

Cierto es que la transmisibilidad de los bienes dados á censo enfitéutico se minora; que se embaraza su venta por el derecho de fadiga ó retracto; que el laudemio comprensivo del valor de las mejoras es injusto; pero en último resultado pueden venderse y transmitirse, y siempre es menor inconveniente aquella dificultad que la de permanecer los campos improductivos, asi para el dueño que no los labra, como para el Estado que no recibe su parte respectiva en los impuestos, y para la sociedad cuya riqueza se minora.

Las comarcas pobres y estériles reclaman sobre todo este contrato que combina el derecho de propiedad con los esfuerzos de la industria.

En España hay en la actualidad terrenos baldíos, que exigen la conservacion del censo enfitéutico para que aumente el número de los que se interesen en el mantenimiento del órden público, y hagan mas difícil ó imposible el triunfo de ciertas ideas y doctrinas peligrosas, que bajo el disfraz de una filantropía hipócrita, aspiran á variar la faz del mundo.

Se opone que es orígen de muchas cuestiones y litigios; pero establézcanse para su aplicacion reglas claras y sencillas, y abolidos ya los derechos de señorío, condiciones especiales, no del contrato mismo, sino de la manera con que el régimen feudal le admitió y modificó, dará lugar á las mismas contiendas que los demas contratos, sin que por ello se pida, ni sea justo pedir su abolicion.

Déjese al que toma la tierra para hacerla fructífera con el sudor de su frente y el trabajo de sus brazos la plena libertad de abandonar el prédio, y devolvérsele al dueño directo, siempre que le sea gravoso continuar en él; manténgase su calidad de redimible y no queda, en nuestro concepto, ninguna razon para borrar de la esfera legal un contrato sancionado por legislaciones seculares, por la tradicion y las costumbres.

Es un axioma inconcuso, una regla de derecho que el uso de la propiedad debe ser ilimitado mientras no resulten perjudicados la moralidad ó el público intéres, y á ninguno de ellos lastima el censo enfitéutico; y es tambien un sano principio económico dejar libre el uso de los capitales y los brazos conforme á los cálculos y necesidades del interés particular, verdadera fuente y creador de las riquezas.

Por estas consideraciones creemos que el contrato enfitéutico, debe mantenerse en nuestros Códigos; si bien no ha de negarse que, apartando la vista de las ventajas obtenidas en el momento de su institucion y en los siglos que la subsiguieron despues de constituido, en las actuales condiciones de la sociedad, es el menos favorable de todos los censuales.

Las demas clases de censos tienen tambien, á nuestro juicio, un orígen mas antiguo que el que ordinariamente se les dá (1). Encuén-

(1) La noble figura de José concediendo á nombre de Faraon campos á los israelitas con la obligacion de pagar la quinta parte de sus frutos ¿no dá en las mismas letras sagradas una idea clara del censo reservativo?

trase ya alguna huella y vestigio de ellos en las leyes de Justiniano. La novela 160 de este emperador se refiere en términos harto claros á un censo estipulado por la ciudad de Afrodisia en Tracia. Esta poblacion entregó un considerable capital en oro, á condicion de que se le pagaran intereses anuales hasta la devolucion del mismo capital. Trascurridos bastantes años, los intereses acumulados, llegaron á doblar y aun mas la suma á que ascendia el capital, y los particulares que le habian recibido, se consideraron enteramente libres de aquella obligacion, apoyándose en la ley 27, 5, 1. C. de *usuris*, conforme á la cual los intereses á su juicio debian cesar desde el momento en que se hubiera satisfecho por su medio una cantidad equivalente al duplo de la deuda. Justiniano, conocida la cuestion, decidió en la Novela arriba citada, que aquella ley tuvo por objeto los intereses de los préstamos ó deudas exigibles, y que no podia aplicarse á un caso en que no se trataba de intereses de una suma prestada, sino de *una renta ó pension anual: illam etenim de creditoribus concripsimus, et qui in ea comprehenduntur casibus, præsens verò species illam non attingit, siquidem hoc magis annuo redditui quam usurarum præstationi simile videtur.*

Era, pues, este un verdadero censo, contrato que, segun se ha observado con acierto, podia y debia introducirse fácilmente en una legislacion que como la de Justiniano autorizaba el préstamo á interés.

Viniendo á tiempos mas cercanos, los censos *consignativo, reservativo* y *vitalicio* se hallan establecidos en varios pueblos, especialmente en Francia y en Italia; pero como contratos sancionados por la ley no son muy antiguos en España.

A ejemplo de lo que sucede en las principales fuentes de que traen orígen nuestras leyes, ninguna mencion se hace del consignativo y reservativo en nuestros Códigos hasta los reinados de Martin I y Alfonso I en Aragon y la época de los Reyes Católicos en Castilla. La opinion mas comun es que debieron introducirse en este último reino ya en la mitad del siglo XV., siguiendo las costumbres y prácticas de la Corona de Aragon, que á su vez debió tomarlos de los pueblos de Italia pertenecientes á la misma; pero no puede desconocerse que los Juros, constituidos desde el tiempo de D. Enrique IV. en los antiguos reinos de Castilla, eran unas verdaderas constituciones de censo consignativo en que el poder supremo hacia las veces de censuario. Consistian en rentas sobre salinas ú otros derechos generales que los monarcas concedian, unas veces en remuneracion de servicios hechos al Estado, y otras mediante entrega real y efectiva de capitales para las urgencias públicas. Los Reyes Católicos anularon los que creyeron injustos, confirmaron los legítimos y moderaron muchos.

La primera ley recopilada que habla del censo consignativo ó contrato censual estrictamente dicho, es la 68 de Toro (1), obra como el cuaderno legal á que pertenece de don Fernando y doña Isabel, aunque promulgado por su hija Doña Juana en 1509, si bien de su mismo contexto se deduce que antes de esta ley era ya conocido y practicado.

Este censo y los demas indicados, no son contratos de derecho de gentes, lo son de derecho civil. Las necesidades de toda sociedad creciente y con especialidad las de la agricultura y del comercio los fueron introduciendo sucesivamente en varios pueblos. Reclamaban aquella y este capitales, sin cuyo ausilio les era imposible remontar su vuelo. Era muy difícil siempre, imposible las mas veces encontrarlos á préstamo gratuito, y á pesar de las prohibiciones, hubo de recurrirse al censo consignativo, que es una especie de préstamo perpétuo, como medio mas fácil y favorable de adquirirlos. Y en verdad que no hay motivo para rechazar este censo del número de los contratos, puesto que no es dable hallar el dinero á un precio mas cómodo, ni á condiciones menos gravosas.

Difícil seria ciertamente enumerar los males y perjuicios que puedan sobrevenir

(1) Ley 1. tit. 15, lib. 10, de la Nov. Rep.

tanto de su uso, como de la aplicacion del censo reservativo, especie de arriendo perpétuo, que lleva tantas ventajas al arriendo ordinario como el consignativo al préstamo comun. Uno y otro, y el enfitéutico antes, y á la par que ellos, han convertido los terrenos eriales en fértiles campiñas, y han contribuido al mas fácil cambio de los productos respectivos, mejorando la condicion de las sociedades y de los individuos. Se les mira equivocadamente como una hijuela de esa amortizacion que, dando en el estremo opuesto, se persigue sin tregua ni descanso, y la verdad es que los censos constituyeron durante varios períodos de nuestra historia y de la historia de otras naciones, la única desamortizacion entonces posible y hacedera. ¡Cuánto mas lentos é incompletos hubieran sido sin ellos los pasos de la civilizacion durante muchos siglos! ¿Cómo esplicarán de otra manera los que sostienen opiniones opuestas el fenómeno de que en un tiempo en que al interés del dinero se le llamaba *usura*, y se le condenaba con todas las sanciones y en todas las esferas, el poder eclesiástico se uniera al civil para declarar lícitos los censos y favorecer su imposicion?

La potestad eclesiástica, en efecto, aunque con la recta intencion de reprimir lo que estimaba equivocadamente censurable, habia ido en este punto mas allá de su esfera legítima, invadiendo al poder temporal en sus atribuciones ordinarias. El derecho canónico, por motivos propios de su fin habia condenado el interés del dinero como ilícito; las Partidas, copiándole, sancionaron la misma doctrina, y gradualmente aquel interés, confundido con la *usura*, erigido una vez en *pecado*, pasó á la categoría de delito. Como sucede siempre que hay una ley prohibitiva exagerada, se buscó ahincadamente el modo de eludirla.

No podia recurrirse al préstamo á interés y se prestó bajo el nombre simulado de compra y venta, como se verá mas adelante, privándose el prestamista de su derecho á reclamar el capital, y surgiendo inconvenientes y abusos mayores de los que se pretendian evitar. Era preciso que la solucion de estas dificultades surgiera de la misma potestad que las habia dado orígen, y asi sucedió. No obstante las prevenciones y errores de la época, tan atrasada en la ciencia económica, á pesar de las prevenciones religiosas, de las doctrinas corrientes en las universidades y consignadas en las leyes, á pesar de tantos obstáculos, decimos, la luz de la verdad se hizo camino y varias constituciones pontificias, aunque rodeándose naturalmente de grandes precauciones y muchos requisitos, modificaron de una manera favorable el rigor del derecho establecido.

La legislacion canónica, sancionando una costumbre que califica de arraigada, racional y usada por eclesiásticos y para objetos de la iglesia (1), aprueba ya el censo consignativo y formula reglas acerca de él, entre ellas la libre facultad de redimirle total ó parcialmente, á principios del siglos XV, en la célebre estravagante *Regimini* espedida por Martin V el año 1423, y en la de Calisto III. *de emptione et venditione*, publicada en 1455, que recuerda la anterior y la confirma plenamente.

Otras dos análogas, y aun mas latas, pero especiales para el reino de Sicilia, publicaron Nicolás V y Gregorio XIII. Es notable la primera por los datos que contiene en su parte espositiva. Manifiéstase en ella que en Sicilia y en otros dominios del rey Alfonso I de Aragon la codicia de los prestamistas habia llegado á tal estremo, que los que habian menester dinero, tenian que sujetarse á usuras y sacrificios inauditos, y de no restituir al plazo fijado las cantidades recibidas, perdian sus bienes miserablemente. Se espresa tambien que en los reinos de Aragon, Valencia y Mallorca, en el principado de Cataluña y en el condado del Rosellon, las corporaciones y las personas eclesiásticas y seculares que necesitaban dinero, para adquirirle con menos perjuicio, recurrian con pre-

(1) *Quod á centum annis citra et supra et á tanto tempore et per tantum tempus cujus contrarii memoria hominum non existit... quædam consuetudo rationabilis observata, præscripta ac moribus utentium approbata ad communem hominum utilitatem introducta fuisset... quodque etiam super hujus modi censibus plurima beneficia ecclesiastica, collegia, canononicatus et prebendæ, dignitates, altaria, etc. erecta, dotata et fundata.....*

ferencia á las ventas de censos anuales, dichas *muertas*, sobre las casas y propiedades con especialidad, y tambien en general sobre todos los bienes, réditos, emolumentos, derechos y otras cosas; lo cual se verificaba en aquellos reinos, no solo en virtud de una antigua costumbre, sin que hubiese memoria de hombres en contrario; sino tambien por hallarse asi establecido en los fueros y derechos municipales y confirmado por el mismo Rey y sus predecesores con asentimiento de los tres brazos ó estados eclesiástico, militar y real.

Hemos creido conveniente consignar estas curiosas noticias por la utilidad que prestan para fijar la antigüedad de los censos en una parte muy principal de España, y la idea favorable que de ellos se tenia.

Confírmase esta con el resto de la parte espositiva de la propia bula, en la cual se dice que pudiendo los súbditos del mismo Rey en los dominios de Sicilia, necesitados de metálico, eximirse de la gran carga de la usura por medio de las espresadas ventas de censos, recelaban, sin embargo, los poseedores de capitales que si los daban en tal concepto, incurririan en pravidad usuraria y se retraian de verificarlo con daño de los menesterosos, y gran ventaja de los usureros, que imponian la ley á su capricho. Para evitarlo, el referido don Alonso y sus súbditos, deplorando estos males, suplicaron al Pontífice que les auxiliara paternalmente, y declarase que las ventas de censos con las cláusulas y cauciones establecidas para su validez entre los vendedores y compradores por mútuo consentimiento, podian hacerse sin peligro de conciencia *(absque lessione conscientiæ)* en los reinos de Sicilia *citra et ultra Farum*, como en efecto lo declaró Nicolás V, en la parte dispositiva de esta misma bula, que por ello insertamos en la parte legislativa.

D. Alfonso I de Aragon, al aceptar y publicar con carácter de ley la anterior bula como ventajosa y acomodada á la mayor prosperidad de los naturales, habitantes y corporaciones de las Dos Sicilias, ordenó que los contratos censuales trajesen pronta y aparejada ejecucion como cosas juzgadas (1), no solo contra las personas y bienes de los que en su orígen los vendieron, sino tambien contra las de cualesquiera detentadores singulares de las cosas censidas; que los réditos ó pensiones anuales no pudieran confiscarse por razon de crímenes ó delitos, escepto el de lesa magestad; y que si él mismo, sus sucesores, oficiales ó ministros, concediesen moratorias, inhibiciones ú otro aplazamiento bajo cualquier forma ó color, aun por causas referentes á la pública utilidad, cualesquiera que fuesen las consideraciones que pudieran escogitarse para ello, quedaran sin efecto, llevándose adelante las ejecuciones, so pena de cien onzas de oro de irremisible exaccion, cuya pena se impondria, no solo á los impetrantes, sino tambien á los presentantes y aun á los jueces, si contra lo mandado, las admitiesen. V. CENSALES.

Ademas dispuso D. Alfonso en esta notable pragmática que las cosas, bienes ó derechos obligados al pago de los réditos, no cayeran en comiso por no haberse pagado aquellos en los términos establecidos, ni por haberse deteriorado, cualesquiera que fuesen los pactos celebrados en contrario, aun confirmados con pena ó juramento.

La otra bula especial para Sicilia fué espedida por Gregorio XIII, como ya indicamos. Causando muchos y graves perjuicios en aquel territorio la observancia de las bulas de Pio V, inductivas de nuevas solemnidades y requisitos y reputándose impracticables en aquel reino, Felipe II le rogó ahincadamente que eximiera de su ejecucion á los habitantes del mismo: pero aquel Pontífice lo resistió con gran tenacidad y otorgó únicamente algunas ligeras reclamaciones que pueden verse en Cencio. Muerto Pio V se renovaron las mismas gestiones por medio del arzobispo Panormitano, enviado régio

(1) *Hac cædictali lege perpetuo valitura sancimus hujus modi censualium contractus seu instituta, tamquam res judicatas, nulla provocatione suspensas, promptam et paratam executionem habere, et non solum contra personas, res et bona illorum, qui originaliter censualia hujus modi vendiderint, hæredum seu universalium sucesorum sed etiam absque aliqua bonorum principalis debitoris discussione, contra personas et bona quorum cunque singularium detentationum rerum, jurium vel bonorum, super quibus censualia ipfu fuerint specialiter onerata.*

especial para este objeto, ante su sucesor Gregorio XIII, quien las acogió con mayor benevolencia. «Considerando, por una parte, (copiamos sus palabras) que las concesiones hechas con madura deliberacion por los romanos Pontífices á instancia de los Monarcas, para utilidad de sus Estados, mayormente cuando se dirigen á quitar ocasiones de pecado y vienen sancionadas por una larga práctica, parece muy razonable que se observen, no obstante la posterior promulgacion de otras constituciones pontificias generales, á ellas contrarias; y teniendo presente que la bula de Nicolás I, observada en Sicilia durante mas de un siglo, nada contenia opuesto á la razon, mientras las dos de Pio V producian graves perturbaciones,» segun el testimonio del Rey Católico, á quien califica de escelente monarca y diligente padre de familias, acogió las preces de este con algunas restricciones y derogó espresa y termitemente las bulas de Pio V, en cuanto eran contrarias á la de Nicolás V, si bien con marcada limitacion al reino de Sicilia *ultra Farum*. Entendemos, sin embargo, que esta bula de Gregorio XIII se observó en ambos reinos de Sicilia. V. *la parte legislativa*.

Al espirar el mismo siglo XVI espedia Clemente VIII otra bula limitada á los pueblos comprendidos en los Estados pontificios, y por tanto sujetos en lo temporal á la Santa Sede. Consultando este Pontífice las mismas razones económicas que los demás soberanos, moderó el gravámen de los censos reduciéndolos á razon de siete por ciento al año, de ocho, nueve y diez á que antes se imponian, salva la facultad de redimir.

Varios de nuestros jurisconsultos sostuvieron que las constituciones de Martin V y Calisto III carecian de fuerza de ley general y que contenian únicamente precepto local, alegando que no se hallaban en el cuerpo del derecho canónico, ni tenian de otro modo pública autoridad. Pero nuestros teólogos y canonistas, apoyados tambien por jurisconsultos de nota, contestaron, que aquellas disposiciones pontificias eran de derecho comun, y que como tales se admitieron contínuamente en las escuelas y en las decisiones de los tribunales, y las glosaron los eruditos. Esta nos parece la opinion mas segura, y es lo cierto que el cuerpo de las estravagantes no carece de autoridad pública, pues de otro modo no hubiera ordenado Gregorio XIII que se enmendase y diera á la estampa con el resto del derecho pontificio.

Consideramos necesario, por tanto, examinar ligeramente aquellas y las demás constituciones pontificias, para que pueda apreciarse la influencia que ejercieron en nuestras leyes y tribunales y las reñidas é interminables cuestiones sostenidas por nuestros intérpretes.

Martin V y Calisto III, al dar la sancion eclesiástica al censo consignativo modificando las anteriores doctrinas canónicas, nada digeron acerca de la precisa imposicion del censo sobre cosa inmueble; pero Nicolás V. y Gregorio XIII interpretaron en sentido favorable este silencio, y establecieron terminantemente en sus constituciones especiales para Sicilia, no solo que en el contrato censual podian obligarse las cosas muebles y la persona, sino que esta última clase de obligacion era la principal, disponiendo que, en el caso de perecer los bienes, quedase salvo el derecho á las pensiones, si bien no podia obligarse á los vendedores al pago del capital. Pio V fué el primero que repugnó el censo creado sobre las personas y exigió que la imposicion se hiciese necesariamente sobre cosa inmueble y fructífera determinada. V. *la parte legislativa*.

Las constituciones pontificias exigian tambien, como requisitos indispensables, el *justo precio*, regulándose la justicia conforme á las prescripciones legales, ó en su defecto, por la costumbre del lugar en que se celebrara el contrato; y la entrega completa del mismo en el acto al vendedor. Creyendo Martin V que seria injusto y contrario á la razon que el comprador del censo obtuviera la ventaja de cobrar la pension sin poner nada real y efectivo de su parte, como sucederia si el vendedor pagara los réditos sin que mediara otra seguridad que la confianza de obtener mas tarde el precio, dispuso que el dinero estuviese á

la vista y contado al celebrarse el contrato; Pio V añadió despues que se hiciera entrega de él en presencia del notario y los testigos.

Otra de las reglas establecidas por la legislacion canónica, era la de que el vendedor del censo pudiera redimirle á su arbitrio *total ó parcialmente*. Esta disposicion fué latísimamente debatida y comentada por nuestros antiguos juristas, segun la índole de los estudios y el estado de la ciencia del derecho en aquel tiempo; pero vinieron á terminar estas contiendas de una manera razonable las disposiciones legales, una vez que en la libre facultad de redimir consiste especialmente la justicia del contrato censual.

Tales son las condiciones y requisitos principales exigidos por los Pontífices mencionados para dar la sancion eclesiástica á los censos y mitigar el rigor de las bulas anteriores que habian declarado ilícito y usurario todo interés en los préstamos, partiendo de la errónea doctrina de que el dinero, como cosa estéril, nada podia, ni debia producir sin incurrir en aquel vicio. Era preciso conciliar esta doctrina religiosa, general en aquella época, con la circulacion de los capitales, sin la cual no podian la industria y el comercio crecer y tomar vuelo en la proporcion que las necesidades de los pueblos modernos exigian. Y como era difícil vencerle de frente, se eludió este grave obstáculo, convirtiendo al censualista ó acreedor á la pension en una especie de co-propietario de los prédios hipotecados hasta la concurrencia del capital, y á los réditos como frutos de los mismos prédios estimados en dinero. Habia algo que chocaba en todo ello; pero solo de esta suerte se prestaron los Pontífices referidos á aprobar este contrato, considerándole ya libre del vicio y del pecado de la usura. De cualquier modo adoptaron un temperamento beneficioso y necesario, y merecen por ello sincera alabanza.

El *motu proprio* de Pio V, que exigia mas condiciones y hacia mas difícil el contrato censual, con objeto de desinfestarle plenamente del vicio y pecado de la usura, hizo su celebracion embarazosa y produjo gran confusion en la práctica de nuestros tribunales. Algunos jueces le observaban diligentemente: la mayor parte, asi en los tribunales superiores como en los inferiores, seculares y eclesiásticos, se abstenian de cumplirle como no recibido en estos reinos; por manera que se daba la irregularidad de pronunciarse fallos contrarios sobre casos idénticos.

Para evitar esta perturbacion y los empeñados litigios y molestísimas disputas que ocasionaba, las Córtes celebradas en Madrid por los años de 1583 á 1585 pidieron á Felipe II que declarase si se le debia observancia en sus dominios, y respondió el monarca en el cap. II, que no estaba recibido, antes se habia suplicado por el fiscal del Consejo (1), desde cuyo dia cesó toda perplegidad en el terreno de los hechos y el *motu proprio* quedó absolutamente sin ejecucion en estos reinos. En el campo de las ideas se disputó, sin embargo, si el monarca pudo rectamente y con justicia suspender su fuerza y observancia, y no faltó quien sostuviera que, á pesar de la régia decision, pecaban mortalmente sus transgresores y violadores, y que no debia España, la nacion mas afecta á la Sede Apostólica, rechazar una ley suya, justa, santa y dirigida á la salvacion de las almas y á la paz y prosperidad de los gobernados. Felipe II, el hijo mas respetuoso de la Iglesia, y católico por escelencia, aunque tachado por sus adversarios de fanático, sabia defender las atribuciones de la autoridad Real, y á pesar de estas doctrinas,

(1) El tenor de la peticion y de la respuesta régia es el siguiente: V. sin embargo *Censos de Navarra*.

El Papa Pio V de felice recordacion en el año pasado de 1569, hizo publicar un *motu proprio*, que trata de que los censos se impongan y sitúen en dinero de presente ante el escribano y testigos de la escritura: en el cual asimismo se contienen otras muchas cosas tocantes á la materia de censos; y sobre la guarda y observancia del *motu proprio* ha habido y hay muchos pleitos y diferencias en todos los tribunales de estos reinos, y sentencias contrarias unas de otras, porque algunos jueces le mandan guardar y otros dicen que no ha sido recibido en estos reinos y que está suplicado de él, y escusarianse muchos pleitos, inconvenientes y daños, si se declarase, supiese y entendiese lo que en esto se ha de tener y guardar. Suplicamos á V. M. sea servido declarar si se ha de guardar en estos reinos el dicho *motu proprio*, y si está suplicado de él ó no, y en caso de que se haya de guardar, desde qué tiempo ha de ser para que cesen y se acaben los dichos pleitos y diferencias.

A esto vos respondemos que el proprio motu que decis, no está recibido, antes se ha suplicado por el fiscal del nuestro Consejo á donde se ha hecho justicia en los casos que se han ofrecido, y se hará en lo de adelante, y con su Santidad la instancia que pareceré necesaria.

que permitió dar á la prensa con plena libertad, sostuvo su mandato, el cual fué obedecido por los tribunales de ambos fueros.

Y en verdad que si la constitucion de Pio V hubiera obtenido alguna fuerza aun en el mismo órden eclesiástico, habria causado graves inconvenientes, porque los clérigos y los legos no pueden tener derecho diverso respecto de un mismo contrato, y los primeros quedan obligados á la ley que estos guardan respecto de ellos.

Pasemos ahora á examinar las leyes y disposiciones de nuestro derecho pátrio sobre la materia. Supuesta la existencia de los censos, tales como se conocian en Italia, Francia y otros pueblos, y los habia recibido y limitado el derecho canónico, se encaminaron casi todas á mantener su genuina observancia, reprimir y cercenar los abusos inventados por la codicia, y reducir los réditos anuales; segun lo exigian consideraciones importantes en el órden económico y las vicisitudes de los tiempos.

Bajo este punto de vista habremos de repetir que la primera ley recopilada acerca del contrato de censo es la 68 de Toro. Apreciándole los Reyes Católicos como un hecho usual y conocido, le llevaron del terreno de la costumbre al del derecho constituido, y establecieron que en el caso de haberse puesto el censo bajo la condicion de que la heredad cayera en comiso siempre que no se pagaran ciertos plazos, se guardase lo pactado y cumpliera el contrato, aunque la pena fuese grande y mas de la mitad. Y como se hiciera mas frecuente desde esta época el uso y aun el abuso del contrato censual, á esta ley siguieron otras de Cárlos V, Felipe II y sus sucesores hasta nuestros dias.

Don Cárlos y doña Juana, á fin de evitar inconvenientes y fraudes no pequeños, y teniendo en cuenta reiteradas peticiones hechas por las Córtes de Madrid y Valladolid en 1528, 1548 y 1555, ordenaron que las personas que en adelante impusieran *censos* ó *tributos* sobre casas, heredades ó posesiones de su propiedad, sujetas ya de antemano á otro censo, fuesen obligados á manifestarl incurriendo en el caso de no hacerlo en la pena de pagar con el dos, tanto la suma recibida por el nuevo censo á la persona que contrajo con ellos, ignorándolo.

Verificada la espulsion de los judíos, consagrados en su mayor parte á sostener la industria y á dar sus capitales á interés; fueron mucho mas frecuentes los censos redimibles sin forma, ni tasa, teniéndose por moderado el rédito anual de un diez por ciento (1): ademas, entregado el capital en metálico, se estipulaban los réditos en legumbres y otras especies que producian superiores ganancias. Para evitarlo, accediendo á lo espuesto por las Córtes de Madrid, Valladolid y Toledo en 1534, 37 y 39, y en vista del informe del Consejo acerca de los graves perjuicios que sufrian los que impulsados por la necesidad habian impuesto sobre sus haciendas tales censos, prescribieron los mismos monarcas que no se pagaran las pensiones anuales en frutos ó en especie, sino única y esclusivamente en dinero, y que asi los contratos anteriormente celebrados como los que se estipulasen en lo sucesivo se redujeran á la tasa de catorce mil maravedís el millar, ó uno por catorce, pagándose en dinero y no en frutos los réditos en uno y otro caso. Esta fué la primera tasa del interés legal establecida para el censo consignativo redimible en nuestros Códigos.

Buscaron la malignidad y la codicia nuevos caminos para eludir los efectos de esta providencia, ya celebrando contratos simulados en fraude de ella, ya haciendo constar una renuncia espresa de sus disposiciones; pero los referidos monarcas y Felipe II aceptaron las peticiones de las Córtes de Valladolid y Madrid de 1548 y 1586, y reiteraron en leyes posteriores su estricto cumplimiento, estendiéndole tambien á los censos vitalicios, que asi como los reservativos, tenian por aquella sazon fuerza y existencia.

Siguiendo Felipe II los naturales impulsos de su carácter severo y de sus principios religiosos, dictó varias resoluciones que figuran hoy en nuestros Códigos, dirigidas to-

(1) Auto acordado 6, tit. 4, lib. 5.°

das á remediar el anterior y los demas abusos que se cometian á la sombra del contrato censual, cuya necesidad y conveniencia (1), por otra parte, reciben una nueva confirmacion en el hecho de recurrirse á él, no obstante tales vicios y escesos. Y como uno de los fraudes fuese el de hacer contratos y otorgar escrituras en que, á pretesto de crear censos perpétuos, se consignaba un precio mucho menor del establecido por la ley, ordenó que en los censos creados de esta suerte desde el año 1554 en frutos ó especie, y en los que en adelante se crearan, interviniese el precio legal de mil maravedís por cada catorce mil de los que hubiere dado el comprador, y aunque en la escritura se espresara ser tales censos perpétuos, se hubiesen de tener y juzgar como redimibles. Partiendo de esta base, quedaba al arbitrio del deudor, ó reducir los constituidos á mayor precio, siempre que no escediesen de veinte mil maravedís el millar, ó proceder contra el dueño del censo por el engaño ó iniquidad de que el contrato adoleciera, reduciéndose al precio legal las pensiones vencidas desde el dia de la contestacion, y quedando libres los dueños por las que antes hubiesen percibido. La circunstancia de la redencion, obligatoria ya por esta ley, fué un grande adelanto en esta clase de contratos.

En cuanto á los censos vitalicios, prohibió (2) que en lo sucesivo se creasen por dos, tres ó mas vidas; fijó para los establecidos por solo una el precio de siete mil maravedís el millar, y dispuso que el capital se habia de entregar precisamente en dinero y al contado, como sucedia en las otras clases de censos, escluyendo el oro y plata labrados y otras alhajas y joyas estimadas, y declarando de ningun valor y efecto los censos vitalicios contraidos de otra manera ó á menor precio. Respecto de los anteriormente otorgados prescribió que, siendo por una sola vida, se redujeran al precio de siete mil maravedís el millar; siendo por dos, quedasen subsistentes; pero á razon de ocho mil maravedís el millar, y los que fueran por mas vidas, limitados á dos, y al mismo precio de ocho mil maravedís.

En 1608, reinando Felipe III, se redujeron de nuevo á uno por veinte los juros y censos redimibles, providencia que luego se estendió á los anteriormente creados. Las Córtes de 1702 pidieron á este monarca que no se concedieran á las casas y mayorazgos de Castilla licencias ó facultades para cargar censos sobre sus vinculaciones, ó para obligarlas á la seguridad de las dotes, á lo que respondió era muy justo y estaba mandado se tuviera mucho la mano en ello, lo que se iba ejecutando y cumpliendo con efecto. En la misma época se redujeron los censos vitalicios á doce mil maravedís el millar.

Asi continuaron las cosas hasta el reinado de Felipe V, quien estableció que no pudiera constituirse en adelante, sopena de nulidad, el censo al quitar á precio menor que el de treinta y tres mil y un tercio el millar, quedando desde luego reducidos al mismo tipo los censos y pensiones antes creados (1).

Los fundamentos de esta nueva limitacion del precio, que fué de cinco á tres por ciento (2), se deducen perfectamente de las consideraciones que el legislador espone.

En tiempos no muy lejanos el interés legal era crecido por la escasez y alto valor de los capitales, y se fué moderando lenta, pero frecuentemente entre nosotros, como sucedió con leves diferencias en todas las naciones de Europa donde los censos eran conocidos. Varias ciudades y villas habian acudido reiteradamente al trono con la súplica de que se minorasen los réditos, ya que la exaccion de nuevos subsidios y las calamidades de los tiempos habian minorado tambien el valor de las haciendas redituables, resultando desproporcionados los intereses á la razon legal del cinco. Muchos acreedores censualistas habian reducido de su grado las pensiones y

(1) Leyes 4.ª y 5.ª, tit. 14, lib. 10 de la Nov. Rec.
(2) Ley 6 del mismo tit.

(1) Ley 8.ª del mismo tit.
(2) En Navarra no fueron recibidas esta ley y las que le sucedieron con el mismo objeto, y el interés de los censos continuó siendo el de cinco por ciento.

asegurado con esta moderacion el pago de las mismas, cuyos motivos y el principal arriba enunciado (aunque no se espresa) de haber menguado el valor relativo del dinero, produjeron esta rebaja, estendida despues por Fernando VI á todas las provincias comprendidas en la antigua corona de Aragon (1).

Al generalizar este monarca la providencia dictada por su antecesor, como en buena doctrina procedia, declaró que la reduccion se estendia á todos los censos consignativos, fuesen reales, personales ó mistos, creados ó que se crearan en lo sucesivo, no obstante cualesquiera cláusulas y pactos insertos en las escrituras, aun el reservativo de dominio usado en algunos territorios, y autorizó para lo sucesivo la creacion de cualquiera censo redimible con menor pension de tres por ciento, ora al hacerse la imposicion, ora posteriormente por concordia. Esta ley merece calificarse de acertada, porque sancionó la unidad y perfeccion del contrato censual en los diversos territorios de la monarquía en cuanto podia hacerlo la voluntad legislativa.

Llegó el reinado de Cárlos III, y obtemperando este monarca al espíritu de reforma que en España como fuera de ella, empezó á abrirse camino en aquella época, adoptó varias disposiciones sobre censos.

Para mejorar la policía de Madrid y la condicion de los dueños de edificios en ella, concedió á los poseedores de mayorazgos, á los patronos y administradores de fincas urbanas pertenecientes á obras pías sujetas á la real jurisdiccion, y á los tutores y curadores de menores real permiso para imponer sobre las casas censos, cuyos capitales ascendiesen á lo necesario para costear las obras precisas á la limpieza de la corte, y para redimir otros censos impuestos anteriormente sobre dichas casas á tres por ciento, reduciéndolos á dos y medio ó menos, é hipotecando las mismas casas y otras fincas del mayorazgo ú obra pía al pago de los réditos y seguridad del capital. Prescribió que en las ventas de los edificios de Madrid solo se pagase en concepto de laudemio el dos por ciento del valor líquido del solar y de lo edificado en él. Autorizó al enfiteuta ó dueño útil para libertar su finca de la carga del censo perpétuo, entregando un capital duplicado á razon de tres por ciento, regulado por la pension anual, y á su vez al dueño directo para obligar al enfiteuta á que redimiera ó cargara á censo redimible el capital del censo perpétuo. No habiendo podido adquirir, ni comprar las manos muertas, casas sujetas á esta última clase de censo, atendidas las prohibiciones del derecho, se dejó espedito á los dueños directos el de exigir que las pusieran en manos libres por estimarse nula su adquisicion, y se dictaron, por último, varias reglas sobre el modo de hacer la liquidacion de la cosa enfitéutica, de regular la carga de policía del alumbrado, de redimir el capital de la de aposento, y otras semejantes dirigidas á dar estímulos para la reedificacion de los ciento noventa y un solares ruinosos existentes entonces dentro de los muros de la corte (1). Publicadas las anteriores disposiciones, recurrieron al Consejo varias ciudades pretendiendo que se estendiera á ellas este auto acordado, haciendo notar que se hallaban en iguales circunstancias que la corte, y el absurdo de que permanecieran los censos perpétuos y enfitéuticos en el mismo pié de su constitucion y fueran mas baratos, ó, lo que es lo mismo, se les considerase menos capital que á los redimibles.

Respecto de los censos *vitalicios* dispuso Cárlos III en 1769 (2) el establecimiento de un fondo fijo anual de cuatro millones de reales, tomados anualmente de la Caja general de Juros, á fin de que empleasen sus capitales en renta vitalicia al nueve por ciento los que quisieran adquirir acciones, como se verificaba en otros reinos, resultando al Erario la ventaja de reunir por este medio caudales

(1) Ley 9 del mismo tit.

(1) Ley 12, id. id.
(2) Ley 20, id. id.

que facilitasen la nueva adquisicion de alhajas enajenadas de la corona. Mas tarde, en 1780, destinó el mismo monarca la renta del tabaco á la imposicion de censos á beneficio de mayorazgos, vínculos, patronatos y obras pías, tambien con un objeto económico, el de aumentar las rentas sin gravámen de los vasallos para atender á los gastos estraordinarios de la guerra con los ingleses, haciéndose estensiva esta providencia en 1781 á los capitales de censos que se fueran redimiendo (1); pero muy pronto, en 1783, tocándose los inconvenientes de estas providencias, se mandó por cédula del Consejo que cesara la precision de imponer los capitales de censos en la renta referida, y fué libre á todos el imponerlos sobre ella ó sobre fincas de dominio privado. Siguiendo este camino en 1786 se mandó suspender las imposiciones en la misma renta de los capitales de depósitos públicos y de particulares, y se dejó espeditos de esta obligacion á los tribunales de justicia, si bien, empeñada la guerra con la República francesa, resolvió Cárlos IV, para atender á sus urgencias, que aquellos capitales, esto es, los existentes en los depósitos públicos, se impusieran nuevamente á censo redimible en la renta del tabaco al rédito de tres por ciento. Tambien dispuso aquel monarca en 1798 (2) que se vendieran las casas pertenecientes á propios y arbitrios de los pueblos, y que su valor se impusiera sobre la misma renta y á igual rédito.

Desde aquella época se concedió á los propietarios del reino de Granada la facultad de redimir el censo llamado *de poblacion* (3), aplicando su producto, propio de la real Hacienda, al fondo creado para amortizar los vales, y se decretó asimismo en beneficio de la agricultura, la enajenacion de las fincas vinculadas gravadas con varios censos particulares, entrando los capitales por vía de depósito en la Caja de Amortizacion al interés de tres por ciento.

En el mismo período, y á fin de disminuir la circulacion de los vales, se autorizó (1) á todos los que tenian contra sí censos perpétuos y al quitar, sin distincion, y á los poseedores de fincas afectas á algun censo enfitéutico para redimirlos con aquella clase de papel moneda, percibiendo de esta suerte el rédito anual de cuatro por ciento, mayor del que antes cobraban. Los documentos de crédito referidos fueron en alguna época iguales en valor al dinero; pero habiendo bajado estremadamente los efectos públicos ó papel de nuestra deuda, no hay obligacion de recibirlos sino por el valor que tienen en el mercado, en lo cual ciertamente no hay perjuicio. Estas leyes, económicamente útiles, si el Estado hubiera podido cumplir sus compromisos, fueron derogadas á los pocos años, y aun antes de serlo, respecto de los censos anteriores, se permitió su renuncia para los futuros en la ley siguiente.

Dióse en esta, publicada en 1804 (2), grande libertad y ensanche á la imposicion de los censos y á la insercion en las escrituras censuales de pactos y cláusulas referentes á los plazos en que hubieran de redimirse, y clase de moneda, quedando obligados los particulares y comunidades sin distincion á la puntual observancia de la escritura y sus condiciones.

Al año siguiente (17 de enero) se establecieron de nuevo (3) reglas muy estensas para la redencion de toda clase de censos y cargas, formacion de sus capitales y su nueva imposicion en la caja de estincion de vales, escluyéndose únicamente de lo dispuesto en esta real cédula, los dominios solariegos ó establecimientos de la Carta-Puebla, las prestaciones alícuotas de los frutos de uno ó mas prédios cuando no constara haber sido adquiridas por precio cierto, y los foros temporales de Galicia y Asturias á calidad de por ahora. La regencia del reino, convencida por la esperiencia de que los escasos rendimientos de los arbitrios destinados á aquel

(1) Ley 26, id. id.
(2) Ley 24, id. id.
(3) Ley 19, id. id.

(1) Leyes 21 y 22, id. id.
(2) Ley 24, id. id.
(3) Ley 25, id. id.

objeto, se aplicaban á las necesidades de la guerra, y viendo por otra parte que eran unos capitales infructíferos, puesto que la caja no podia absolutamente satisfacer los réditos, resolvió en 13 de julio de 1811, que no se admitieran en ella los vales precedentes de las referidas redenciones.

Sometido este asunto á dictámen del Consejo, y con vista de reclamaciones hechas en opuestos sentidos, de conformidad con su dictámen, se derogó por real cédula de 3 de agosto de 1818, la anterior de 17 de enero de 1805 (1), dejando á los particulares y á las corporaciones seculares y eclesiásticas en plena libertad de celebrar los contratos censuales que estimaran conveniente, de poner en ellos las cláusulas y condiciones que á bien tuviesen, y de exigir su puntual cumplimiento y observancia.

Planteadas en nuestro suelo las instituciones representativas, las ideas políticas que produjeron la desvinculacion y la desamortizacion eclesiástica en los diversos períodos que ocuparon la esfera del gobierno, impulsaron la redencion y la venta de los censos, considerándolos como una de las trabas que ligaban á la propiedad y embarazaban su fácil trasmision durante el régimen antiguo; pero en cambio las frecuentes reacciones venian á deshacer su obra por completo, de cuya exagerada alternativa nacieron muchas y opuestas providencias que ocupan no escasas páginas de los tomos de decretos y de la coleccion legislativa. Habremos de reseñarlas muy rápidamente.

Por decreto de las Córtes de 6 de agosto de 1811 se incorporaron á la nacion todos los señoríos jurisdiccionales, y se declaró que los territoriales y solariegos quedaban en la clase de los demás derechos de propiedad privada, y por tanto, los contratos, pactos ó convenios hechos en razon de aprovechamientos, arriendos de terrenos, *censos* ú otros de esta especie celebrados entre los señores y vasallos, deberian considerarse desde entonces como contratos de particular á particular.

En 9 de noviembre de 1820, resolvieron las Córtes que se formara un fondo de amortizacion para estinguir progresivamente la deuda consolidada, aplicando al efecto, entre otros arbitrios, los censos consignativos y reservativos, enfiteusis y foros pertenecientes á la nacion por la reforma de los Regulares, bienes del Patrimonio, pertenencias de la Inquisicion y otros, que podrian redimirse en lo sucesivo con créditos consolidados á razon de treinta y tres y un tercio al millar los temporales ó redimibles, y al respecto de sesenta y seis y dos tercios los foros, enfiteusis y cualquiera otra carga perpétua, quedando amortizados los capitales de unas y otras en aquellos créditos; y mas tarde dispusieron las propias Córtes en 18 de diciembre de 1821 que estos mismos censos pudieran redimirse con dos quintos en créditos de capitalizaciones y tres en créditos con interés, y comprarse á la manera que los demas bienes nacionales.

La ley de señoríos de 3 de mayo de 1823 (restablecida en 2 de febrero de 1837) declaró que por el decreto de las Córtes de 6 de agosto de 1811 sobre el mismo objeto, quedaron abolidas todas las prestaciones reales y personales, y las regalías y derechos procedentes de título jurisdiccional ó feudal, é impuso á los poseedores la obligacion de acreditar préviamente con los títulos oportunos y de la manera allí espresada, que no debian incorporarse á la nacion, y si considerarse como de propiedad particular y como contratos privados, segun el art. 6.° del propio decreto, los *censos*, pactos y convenios hechos entre señores y vasallos. Cumplidas estas formalidades y declarados en vista de los títulos de adquisicion de propiedad particular los señoríos territoriales y solariegos, los censos y demás contratos se ajustarian enteramente en lo sucesivo á las reglas del derecho comun, como celebrados entre particulares sin fuero especial, ni privilegio alguno; no se pagaría al dueño directo en el caso de enajenacion de la finca infeudada mas que la cincuentena, ó sea el dos por

(1) Posteriormente fueron declarados en vigor sus artículos 4.°, 5.°, 6.°, 7.°, 8.° y 12 por la ley de 23 de mayo de 1823.

ciento de su valor líquido, cualesquiera que fueren los usos ó establecimientos en contrario; no se satisfaria cosa alguna por razon de fadiga ó derecho de tanteo, y este derecho seria recíproco en lo sucesivo para los poseedores de uno y otro dominio, que no podrian cederle á otra persona. Por último, segun esta ley, los laudemios, las pensiones y cualesquiera otras prestaciones anuales de dinero ó frutos pertenecientes á los enfiteusis referidos de señorío y alodiales, se podian redimir como cualesquiera censos perpétuos bajo las reglas prescritas en los artículos 4.°, 5.°, 6.°, 7.° y 12 de la real cédula de 17 de enero de 1805 (ley 24, tít. 15, lib. 10 de la Nov. Recop.), haciéndose la redencion por terceras partes á voluntad del enfiteuta en dinero ó como concertaran entre sí los interesados, y entregándose al dueño el capital redimido, ó dejándolo libre á su disposicion.

Como un efecto de la reaccion política entonces realizada en todos los ramos de la administracion, declaró el rey en 16 de enero de 1825 nulas y de ningun valor ni efecto todas las redenciones de censos pertenecientes á los Regulares hechas en la época anterior, ya se ejecutasen con vales ó con cualquiera otro papel, debiendo pagar los censualistas á las respectivas comunidades religiosas las pensiones desde entonces devengadas.

Instaurado nuevamente el régimen constitucional, se hizo en el año 1836 una verdadera revolucion en el órden económico, y entre sus resultados se cuenta el de declarar nuevamente en estado de redencion todos los censos, imposiciones y cargas pertenecientes á las comunidades de Monacales y Regulares, asi de varones como de religiosas, cuyos monasterios ó conventos resultasen suprimidos á virtud del real decreto de 19 de febrero del propio año. La redencion se habia de hacer por quintas partes en el término de cuatro años y en las diversas especies de papel de la deuda, allí consignadas.

La ley de 28 de mayo de 1837, dió tambien impulso á la redencion de esta clase de censos, y otra de 6 de junio de 1837, publicada el 7, declaró validas todas las verificadas durante la anterior época constitucional.

Varias disposiciones gubernativas dictadas posteriormente en el mismo sentido, se consignan en la parte legislativa y no merecen especial mencion en este sitio.

En 7 de abril de 1848, se mandó proceder á la venta de todos los bienes de las encomiendas vacantes de las cuatro órdenes militares, y los de ermitas, santuarios y cofradías, y á la enagenacion de los censos pertenecientes á las mismas, concediendo á los dueños de fincas gravadas con ellos el término de dos meses para que pudieran pedir su redencion.

Corriendo los años inmediatos, se dictaron medidas para la pronta enajenacion de los foros y censos no vencidos en virtud de las anteriores disposiciones, se estableció que aquellos cuya naturaleza se ignorase, se capitalizaran para su venta por 66 y 2/3 al millar; se recopilaron y ampliaron las reglas acordadas para la enajenacion de bienes y la *redencion de censos* de la órden de San Juan de Jerusalen, y se prorogaron hasta 30 de junio de 1852 los términos reiterados concedidos para la redencion de las prestaciones y censos impuestos en favor del Estado despues de la reconquista, y á consecuencia de la espulsion de los moriscos, sobre varias fincas, sitas en el antiguo reino de Granada, bajo el nombre de renta de la poblacion y de la abuela, añadiendo que en el caso de no acudir á redimirlos en este último y perentorio plazo los actuales llevadores, se procediera á su venta en subasta pública el 1.° de agosto siguiente.

Concluido y hecho público el Concordato celebrado con la Santa Sede, se resolvió en cumplimiento de sus disposiciones el modo de hacer entrega á los prelados de las fincas y *censos* del clero secular, y regular, monjas, encomiendas, maestrazgos, de las órdenes, cofradías, ermitas, santuarios y hermandades que no habian sido enajenados por el Estado, y se fijó el plazo de seis meses para la redencion de los mismos censos ante los diocesanos, y segun las reglas esta-

Lorenzo Arrazola

blecidas en la ley recopilada. Pero estas disposiciones han sido derogadas por la última ley de desamortizacion general espedida en 1.° de mayo de 1855, que declara en estado de venta, sin perjuicio de las cargas y servidumbres á que legítimamente estén sujetos, los prédios rústicos y urbanos, *censos* y *foros* pertenecientes al Estado, al clero, á las órdenes militares, á cofradías, obras pías y santuarios, al secuestro de D. Cárlos, á los propios y comunes de los pueblos y á la beneficencia é instruccion pública, con limitadas escepciones.

Esta ley concede á los censatarios el plazo de seis meses para redimir los censos referidos. No escediendo de 60 rs. ánuos, se redimirán al contado, capitalizándolos al diez por ciento; si esceden, al contado tambien; pero capitalizándolos al ocho por ciento; y en el término de nueve años y diez plazos iguales, capitalizados al cinco. Trascurridos los seis meses, se procederá á la venta de los censos en pública subasta bajo los mismos tipos y condiciones. Como se vé por estas y otras disposiciones, ha querido el legislador promover resueltamente la redencion ó la enajenacion de los censos llevando al último límite el propósito de que la desamortizacion sea completa y realizada en breve plazo, siguiendo, como es natural, el mismo espíritu los reglamentos y disposiciones dictadas para su ejecucion posteriormente.

No será inoportuno dar una ligera idea de las costumbres y prácticas que se observan en varios territorios, á pesar de la uniformidad prescrita para la ley recopilada.

En Cataluña se conocen las mismas clases de censos que en Castilla, aunque el mas frecuente es el enfitéutico. El reservativo apenas se usa. En el consignativo ó *censual*, que es mas comun, la pension fué por costumbre antigua al respecto de un sueldo por libra catalana, ó sea cinco por ciento, si bien á veces era menor por pacto; hoy se observan las mismas leyes que en Castilla al tiempo de crearse, pero una vez creados, reputándolos ya como bienes inmuebles, se compran y venden los censos á mayor ó menor precio que su capital.

El vitalicio se llama *violario* y está igualmente sujeto á la legislacion de Castilla.

Hay dos clases de censos enfitéuticos; generalmente el enfiteuta puede dar sus fincas á censo; pero solo en *nuda percepcion*, como allí se dice; en Barcelona y otros pueblos que gozan de sus privilegios, los enfiteutas dan á censo las fincas con dominio hasta contarse el número de tres enfiteutas; pero completo este número, el tercero de ellos solo puede dar en nuda percepcion.

Como que los establecimientos ó imposiciones de esta especie se hacen siempre con el objeto de mejorar la finca, para poner en armonía esta ventaja con la facultad que corresponde al enfiteuta de dimitirla cuando estime gravoso el contrato, suele pactarse en la escritura que no pueda hacerlo sin haber empleado cierta suma en mejorarla, circunstancia que aumenta y estimula el celo del enfiteuta.

Hay en Cataluña otras dos clases de establecimientos de censo: los *revesejats*, dichos asi porque en ellos, al revés de lo que sucede en las otras imposiciones, se retiene la cosa sobre que se constituye, tienen lugar cuando el dueño de una finca alodial ó libre vende ó concede á otro su dominio, imponiéndose la obligacion de pagar un rédito, y reservándose el dominio útil de aquella; y los llamados á *rabasa morta* ó á primeras cepas, que se verifican cuando el dueño de la tierra la dá para plantarla de viña, y mientras existan las primeras cepas; muertas ó infructíferas las cuales, concluye el contrato y vuelve la tierra al primitivo dueño. Esta clase de censo se conserva en el proyecto de Código civil, por ser frecuente y de grande utilidad en Cataluña, si bien estendiendo á sesenta años su duracion, fijada hoy en 50 por la jurisprudencia de aquellos tribunales.

Desde muy antiguo se encuentran vestigios de los censos en la legislacion foral de Aragon. Martin I, disponia ya en 1398 que los censos comprados *in perpetuum* se considerasen como *bienes sitios*.

En la parte legislativa hicimos referencia de la notable Pragmática de don

Alfonso I, que entre otras providencias, mandó que las acciones dirigidas contra los censatarios por las pensiones fuesen ejecutivas, no obstante cualesquiera escepciones alegadas para detener su curso. Esto mismo reiteró Felipe II en Tarazona en 1592, ordenando que los pleitos seguidos para la cobranza de los censales fueran fallados ejecutiva y privilegiadamente, y habidos por el fuero como sentenciados á la sola ostension de la Escritura.

D. Juan II redujo en 1461 los censos impuestos sobre las Aljamas de los moros y judíos á razon de cuarenta mil por mil y de aquí abajo; y en 1646 los censos, en general, se redujeron á veintidos mil por mil.

El censo enfitéutico era conocido en aquel reino con el nombre de *tributacion*.

A pesar de lo prescrito en la Pragmática de D. Alfonso I podia ponerse en el reservativo y el consignativo la cláusula de comiso para el caso de no pagarse las pensiones, porque en Aragon se está siempre al pacto y por él debe juzgarse.

Puede constituirse censo sobre lo que á uno le deben, y aun sobre las pensiones venidas de otro censo.

Merece recordarse que corriendo el siglo pasado, en las ventas hechas con el pacto *de retrovendendo*, si el vendedor se quebada en arrendamiento con la finca enajenada, este arrendamiento se calificaba de censo, considerando el precio como capital, novedad que influyó mucho para que al celebrarse las ventas llamadas á carta de gracia, no permitiera el comprador que el vendedor continuara en la finca como arrendador.

En Valencia los luismos ascendian á la décima parte del precio de la finca cada vez que se enajenaba, gravámen enorme, pues el dueño directo estaba suficientemente pagado con los réditos anuales, y el dos por ciento de su valor en venta. Los *quindenios* eran mas injustos si cabe; no se apoyaban en ley alguna y solo tenian por base una suposicion arbitraria.

Los *foros* de Galicia y aun los de Asturias casi idénticos, fueron en su orígen contratos de arrendamiento. Datan de la época de la reconquista. Los nobles y el clero dieron á colonos sus terrenos incultos, generalmente por la vida de tres reyes y veintinueve años mas, reservándose una parte de los frutos. Los terratenientes autorizados por la práctica dispusieron de los *foros* libremente, y establecieren *subforos*, cargando sobre cada uno de ellos una parte proporcional de la pension. Estas divisiones y subdivisiones produjeron graves inconvenientes y conflictos entre los dueños directos, que pretendian la reversion de las tierras con todas sus mejoras, y los dueños útiles de tantos años, que la resistian. Los fallos contradictorios de los Tribunales y las reclamaciones del reino de Galicia hicieron necesaria la intervencion del Consejo, que mandó suspender en 1763 los pleitos sobre foros, mientras los foreros pagasen el cánon que venian satisfaciendo á los dueños del dominio directo, y hasta que el Monarca resolviese. Esta resolucion, despues de varios y complicados trámites, no se ha dictado aun; pero el proyecto del Código civil, teniendo en cuenta, segun uno de sus autores (1) que la providencia del Consejo declaró de hecho la perpetuidad de los foros, y el lapso de ochenta y mas años que la confirma, propone su sancion definitiva. Inclináronles á ello la íntima conviccion de los mismos señores directos y útiles habituados á mirarla como un hecho consumado é irrevocable, los respetos debidos á la equidad y al interés de la agricultura, y de las clases mas desvalidas y laboriosas, y hasta el origen oscuro y vicioso de una buena parte de los foros.

Declarados estos *perpétuos*, si el proyecto se aprueba en esta parte, se convertirán en censos enfitéuticos, y quedarán sujetos á las mismas reglas que ellos.

En la Recopilacion de Indias hay un título especial sobre las cajas de censos y bienes de comunidad y su administracion. Los indios ó indígenas, pagan anualmente un ligerísimo tributo que se recauda en estas cajas, y los capitales que produce, se dan á censo

(1) Goyena, concordancias, motivos y comentarios del Código civil español.

á un rédito moderado, con arreglo á las leyes de aquellos dominios, y á las Ordenanzas de Intendentes. Estos capitales, los réditos de los censos establecidos sobre sus rendimientos y los bienes comunes de indios, que manda la ley no estén ociosos, deben consagrarse esmeradamente al alivio y socorro de las necesidades de los indios y al fomento de las poblaciones, tales como ausilios en caso de enfermedades y desgracias públicas y privadas, construccion y conservacion de las obras comunes, sueldos de los ministros inferiores del culto, gastos de las misiones y seminarios de indios, salarios de los maestros de escuela, vacunadores y defensores de presos, pago de las tasas y tributos, y otros semejantes.

La mala administracion económica ha desnaturalizado en varias épocas con notables abusos esta creacion previsora y filantrópica con que nuestra legislacion de Indias se anticipó á las asociaciones de socorros mútuos tan elogiadas con razon en nuestra época. Hemos dado lugar en el estracto legislativo á esta notable y humanísima parte de aquella legislacion, no solo porque las cajas de censos y comunidad existen todavía, sino porque cualquiera reforma que en ella se haga, si es cuerda y prudente, ha de conservar esta institucion benéfica, purgándola de los abusos con que el trascurso del tiempo y la falta de moralidad la han deslustrado.

Los Códigos estranjeros modernos conservan, unos del todo y otros en parte, las varias clases de censos de que llevamos hecho mérito.

Establécense en ellos el consignativo y reservativo como esencialmente redimibles, segun los buenos principios, si bien los contrayentes podrán convenir en que la redencion no se hará antes de un plazo dado, que no podrá esceder de diez años. El Código sardo permite tambien estipular que el derecho de redencion no se ejercite durante la vida del acreedor ó antes de un término dado, que no podrá estenderse á mas de sesenta años para los censos impuestos sobre bienes raices, ni á mas de diez para los otros: tambien admite el pacto de que el deudor no pueda ejercer este derecho sin haber avisado al acreedor en un plazo fijado de antemano, y que no podrá esceder de un año. Si se estipulan términos mas largos, se reducirán respectivamente á los arriba señalados. Cuando no se determina en el contrato el plazo en que ha de avisarse al acreedor, se entenderá el de tres meses antes, por lo menos, segun el Código del Canton de Vaud. El de Holanda autoriza á las partes para arreglar libremente las cláusulas y condiciones de la redencion, y para convenir en que no podrá efectuarse, sino despnes de un plazo preestablecido, el cual nunca podrá pasar de treinta años, siendo nula cualquiera condicion en contrario. El de Baden quiere que el censo sea siempre redimible, á menos que mediare pacto en contrario; pero en este caso se requiere prueba escrita.

Segun el Código francés, ademas de los casos previstos en el contrato, el deudor puede ser obligado á la redencion:

1.° Cuando falta á la obligacion de pagar los réditos por espacio de dos años. El de Vaud lo estiende á tres.

2.° Cuando no entrega al acreedor las garantías ó hipotecas establecidas en el contrato. El de Holanda añade: «el deudor que no pagó los réditos por espacio de dos años, ó dejó de dar al acreedor las seguridades prometidas, podrá libertarse de la obligacion de devolverle el capital, pagando dentro de las veinticuatro horas de haber sido presentada la demanda judicial todos los réditos vencidos, ó prestando todas las garantías estipuladas para verificar el pago.

Otros Códigos añaden mas casos obligatorios de redencion, á saber, los de las Dos Sicilias, Holanda y Vaud. Cuando por culpa del mismo deudor sufran menoscabo las garantías dadas al dueño del capital en el acto de verificarse la imposicion, enajenando las hipotecas, por ejemplo. Lo mismo viene á establecer el sardo en otros términos, á saber, cuando las garantías suministradas llegan á faltar y no se reemplazan con otras de igual valor.

El mismo Código sardo:

Cuando por efecto de enajenacion ó par-

ticion, el fondo sobre que se constituyó la renta ó censo llega á dividirse entre mas de tres personas.

Y el de Vaud:

Cuando despues de embargadas las hipotecas para el pago de una ó dos pensiones vencidas, deja el deudor correr mas de un mes sin devolver el capital ó los réditos anuales espresados.

Este último Código autoriza la redencion por terceras partes.

Puede exigirse tambien la devolucion del capital, segun todos los Códigos mencionados, en el caso de quiebra ó ruina del deudor, y el sardo añade:» sin embargo, cuando el deudor enajenó antes de su quiebra ó ruina el fundo hipotecado al pago de los réditos, no puede el acreedor exigir la redencion al nuevo poseedor, siempre que este declare hallarse pronto á pagar los réditos y á dar todas las seguridades necesarias al efecto.»

Por último, el Código holandés, dispone que cuando el precio de la redencion no se hubiese fijado al celebrar el contrato, y las partes no se pusieren de acuerdo sobre este punto, si fuere en dinero, se hará la redencion á uno por cada veinte, y en otro caso la valuacion se hará sobre el producto de los diez últimos años, y el capital se fijará en veinte veces sobre su valor.

El censo vitalicio se halla igualmente admitido en todos los Códigos modernos, que han seguido generalmente al francés en sus juiciosas prescripciones sobre la materia, asi como este se arregló á la justicia y á los principios generales de derecho.

Puede constituirse á título oneroso ó gratuito, quedando en el último caso sujeto á reduccion, si escede de la cuota legal: por la vida de quien dá el precio ó por la de un tercero: por la vida de una ó muchas personas: y en favor de un tercero, aunque se haya dado el precio por otro distinto.

Queda sin efecto cuando la persona, sobre cuya vida se impuso, fallece antes de finalizarse el contrato, ó estaba ya atacada de una enfermedad, que la llevó al sepulcro, antes de veinte dias (el Código sardo estiende este término á cuarenta), contados desde la fecha del contrato.

Se impone al rédito ó interés que fijen las partes contratantes. El Código de la Luisiana limita esta libertad y el Sardo quiere que el rédito sea superior al interés que puede producir ordinariamente la cosa cedida como precio.

Puede pedirse la rescision del contrato cuando no se dan las seguridades estipuladas para su cumplimiento.

La falta de pago de los réditos vencidos no autoriza por sí sola para reclamar el capital ó la finca afectos al censo: únicamente dá el derecho de embargar y hacer vender los bienes del deudor á fin de que se emplee en el pago de los réditos la cantidad suficiente de su producto. El Código de Holanda añade: «en caso de insolvencia declarada del deudor, la renta vitalicia se reducirá en la misma proporcion que los demás créditos y la masa de bienes quedará obligada á su pago.»

El deudor no puede libertarse del pago de los réditos, aunque ofrezca devolver el capital y renunciar á los ya satisfechos.

Por último, la renta ó censo vitalicio no se estingue por la muerte civil del acreedor; sino que dura tanto como su vida natural.

El Código de Prusia es el que ofrece mas novedad en esta materia. Segun él, en el caso de comprar varias personas una misma renta vitalicia, cada una de ellas tiene derecho solo á una parte, salvo pacto en contrario, y las pertenecientes de los que fallecen vuelven al vendedor.

Si el que paga la renta causa la muerte del acreedor ó de aquel en cuya cabeza fué constituida, se le obligará á restituir el capital á los herederos del acreedor. Cuando se impuso en cabeza del mismo que la paga, y este muere á resultas de un suicidio ó en virtud de sentencia judicial, el acreedor tiene derecho á que se le restituya el capital, con deduccion de lo que haya percibido.

En caso de que el deudor de la renta no realice durante tres años el pago de los réditos devengados, puede el acreedor reclamar el capital sin deduccion alguna de lo anteriormente percibido.

No pactándose otra cosa debe pagarse íntegro el interés ó rédito correspondiente al año en que ocurre la muerte del acreedor. El año se cuenta desde el dia del vencimiento del primer pago.

Daremos, por último, una idea del modo en que conservan el censo enfitéutico los Códigos de las Dos Sicilias y de Holanda, pues el de Prusia se limita á definirlo y mantenerlo en fuerza legal.

Prohibe aquel su constitucion ó establecimiento por un plazo menor de diez años y deja á los contrayentes en plena libertad de arreglar las condiciones del contrato como lo juzguen mas conveniente, siempre que no estén prohibidas por las leyes. No habiendo pactos especiales, se observarán las reglas que consigna, propias del objeto y naturaleza del mismo contrato. El de Holanda prescribe que sus disposiciones sobre la materia solo tendrán aplicacion cuando no hubieren sido derogadas por pactos privados de los contrayentes.

El enfiteuta, segun el de las Dos Sicilias, no puede solicitar reduccion ni condonacion de los réditos por causa de esterilidad ó pérdida total ó parcial de los frutos. El de Holanda establece lo mismo; pero esceptúa el caso de haber durado cinco años consecutivos la carencia total del usufructo.

Si el fundo dado en enfiteusis perece enteramente por caso fortuito, el enfiteuta se libra de pagar la prestacion anual; si perece solo una parte de él, no puede pedir rebaja alguna mientras el producto de la existente baste para el completo pago del rédito, pero si renunciar sus derechos cuando sea considerable la parte destruida, devolviendo el fundo al dueño directo. El holandés establece simplemente que la obligacion de pagar el cánon enfitéutico es indivisible y que cada parte del fundo dado en enfiteusis, se entiende gravada y sujeta á la totalidad del cánon.

El enfiteuta puede hipotecar el fundo enfitéutico; pero no imponerle servidumbres, y en caso de reversion ó retracto, vuelve á poder del propietario libre de toda carga.

Cuando el enfiteuta deja trascurrir tres años sin pagar la prestacion, puede reclamarse la nulidad del contrato, y el fundo vuelve á manos del dueño directo. El de Holanda declara caducado el derecho del enfiteuta cuando no paga el cánon por espacio de cinco años, y tambien cuando hubiere causado daños considerables en el inmueble y abusado gravemente del usufructo, sin perjuicio de la indemnizacion de daños é intereses; pero en el último caso podrá impedir la declaracion de caducidad, restableciendo las cosas á su antiguo estado y prestando garantías para lo sucesivo. Es nula la venta del enfiteusis practicada sin consentimiento del dueño directo, que recobra su propiedad por este hecho.

No podrá exigirse en caso de venta ó por cualquiera otra accion de mejoras, ninguna suma á título de laudemio, á no ser que hubiera pacto espreso sobre el particular, y siempre que no esceda del dos por ciento del precio. El de Holanda establece asimismo que no se pagará cánon alguno estraordinario en ninguna variacion del enfiteusis, ni al tiempo de verificar la particion de una comunidad.

La preferencia concedida al dueño directo en caso de venta, tendrá igualmente lugar si se quisiese ceder en pago de deuda ó subacensuar el dominio útil.

No podrá el enfiteuta escusarse de las obligaciones que contrajo pagando al dueño directo el capital correspondiente, salvo pacto especial; pero siempre que el prédio enfitéutico haya de ser devuelto al último, tiene derecho el enfiteuta á exigir de él el pago de todas las mejoras. Cuando la devolucion tuviere lugar por culpa del enfiteuta, se tomará en cuenta la diferencia entre los gastos invertidos y el mayor valor para la apreciacion de las mejoras; pero si se devuelve el prédio enfitéutico por haber vencido el plazo fijado al enfiteuta, tiene este derecho al importe de las mejoras á razon del mayor valor existente al tiempo de la restitucion, en cuyo caso el dueño directo podrá elegir entre el pago del precio en dinero contante, ó la conversion de la suma que se le adeuda en una renta anual de cinco por ciento con

hipoteca especial, salvo cualesquiera pactos en contrario.

El Código holandes, por su parte, determina que al espirar el enfiteusis, tiene el dueño directo contra el enfiteuta accion personal de daños é intereses, asi por los perjuicios nacidos de negligencia ó falta de conservacion del prédio, como por la pérdida de los derechos que el último hubiese dejado prescribir.

Y concluye el mismo Código estableciendo que estinguido el enfiteusis por haber espirado el plazo convenido, no se renueva tácitamente; pero puede continuar como existente hasta su revocacion espresa.

El proyecto de Código civil español, escluye el censo enfitéutico, yendo mas allá que el Código francés que se circunscribió á omitirle, por razones que no han podido convencernos. Ya dejamos espuestos, aunque con natural desconfianza, las poderosas que nos obligan á disentir de su opinion y á desear que se mantenga en el número de los contratos.

Consérvanse, al contrario, por el mismo proyecto el consignativo, reservativo y vitalicio, siguiendo las huellas de los Códigos modernos y los preceptos de nuestro derecho pátrio, innovando en algo, y aun agravando.

Como aquellos, erige en principio puedan redimirse los censos; pero vá mas lejos en sus disposiciones, puesto que los declara redimibles aunque se pacte lo contrario, y establece que la redencion no pueda hacerse por partes, sino en el caso de haberse asi pactado.

Deja al arbitrio de los interesados el rédito ó pension de los censos, siempre que no pase del convencional, ó del legal en su caso.»

El capital del censo no es exigible, por punto general, pero se establecen dos escepciones á esta regla: 1.ª la de haber caido el deudor en quiebra ó insolvencia, y 2.ª la de haber trascurrido dos años sin pagar la pension, si requerido judicialmente no verificase el pago en el término de diez dias, contados desde el del requerimiento. Encontrariamos acertado que á estas dos escepciones, se agregasen las establecidas por los Códigos de las Dos Sicilias, Holanda, Vaud y Cerdeña, á saber, la de haber sufrido menoscabo por culpa del deudor las garantías dadas al dueño del capital, y la de haberse dividido entre mas de tres personas por enajenacion ó particion el fundo sobre que se impuso el censo. Declara, por último, prescriptible el capital censual.

Partiendo de estas reglas generales para todos los censos, previene respecto del consignativo que el deudor pueda redimirle sin mas que devolver el capital recibido, pero las partes podrán estipular que no haya de redimirse durante la vida del acreedor, la de una tercera persona determinada, ó en cierto número de años, que nunca escederá de diez; y podrán pactar asimismo, que no se hará la redencion sin dar aviso anticipado al acreedor en el plazo de un año, cuando mas.

El rédito ó pension se pagará siempre en dinero.

El censo reservativo, segun el mismo proyecto, no puede constituirse sin que preceda el justiprecio de la finca y este será necesariamente el capital para el caso de redencion.

Solo produce accion real y únicamente sobre la finca gravada; pero se admite la accion personal para el pago de las pensiones atrasadas y de los daños é intereses.

Puede estipularse que no se redimirá en los mismos casos que el consignativo, con la sola diferencia de que el número de diez años allí fijado, podrá estenderse aquí hasta el de sesenta.

El rédito ó pension se podrá pagar en dinero ó en frutos.

Si la finca gravada con un censo se pierde del todo, cesará la pension; si se pierde solo en parte, no se eximirá el deudor de abonar la renta, á no ser que prefiera abandonar la finca al acreedor: en ambos casos quedará sujeto al resarcimiento de daños y perjuicios, si interviniere culpa suya.

El censo vitalicio se conserva en el proyecto bajo el nombre de *renta vitalicia*.

Puede constituirse durante la vida de una

ó mas personas determinadas, mediante un capital en bienes muebles ó inmuebles, cuyo dominio se trasfiere desde luego al deudor con la carga de la pension, la cual se estingue con la muerte del pensionista: debe entenderse la natural y no la civil, por mas que no se esprese como en el Código francés, sin duda por no haberse estimado necesario, y con razon.

Tambien puede constituirse gratuitamente por donacion ó testamento sobre bienes propios, reteniendo su dominio para sí ó para su heredero, en cuyo caso estará sujeta la renta á las reglas sobre caducidad, reduccion ó nulidad establecidas para los casos respectivos.

Finalmente, es lícito imponerla sobre la vida del que entrega el capital, sobre la de un tercero, ó sobre la de varias personas; y á favor de aquella ó aquellas sobre cuya vida se otorga, ó de otra ú otras personas distintas.

Es nula la renta impuesta sobre la vida de una persona que habia fallecido á la fecha del otorgamiento, ó que en el mismo tiempo se hallaba padeciendo una enfermedad que llegue á causar su muerte dentro de veinte dias, contados desde aquella fecha.

La renta vitalicia no tiene mas tasa que la que se fija en el contrato.

Cuando el deudor de la renta deja de pagarla, el acreedor no tendrá otro derecho, aunque se haya pactado lo contrario, que el de ejecutarle judicialmente para el pago de las rentas atrasadas, y para asegurar la prestacion de las futuras.

Solo el que constituye á título gratuito una renta sobre sus bienes puede disponer, al tiempo del otorgamiento, que no estará sujeta á embargo por derechos de un tercero.

Respecto de los censos enfitéuticos, foros, subforos, derechos de superficie ó cualesquiera otros gravámenes perpétuos de igual naturaleza, ya constituidos, establece el proyecto que los terratenientes puedan redimirlos, pagando el capital de la imposicion, y si no fuere conocido, abonando por capital, laudemio, luismo y cualesquiera otros derechos dominicales la cantidad que resulte, computada la pension al tres por ciento. Si la renta se paga en frutos, se estimarán estos para computar el capital por el precio medio que hubiesen tenido en el último quinquenio.

Los terratenientes podrán enajenar libremente el dominio útil, sin que pueda exigírseles por toda clase de gravámen mas que el dos por ciento del precio de la venta.

Solo podrá reclamarse de ellos la devolucion de las fincas en caso de quiebra ó insolvencia, ó cuando trascurridos dos años sin pagar la pension y requeridos judicialmente no lo verifiquen en el término de diez dias.

Asi los terratenientes como los perceptores de las pensiones ó gravámenes podrán usar del retracto legal en toda trasmision de sus respectivos derechos.

El contrato cediendo el uso del suelo para plantar viñas por el tiempo que vivieren las primeras cepas, fenece de derecho á los sesenta años, sino se ha estipulado lo contrario.

SECCION II.

CLASIFICACION Y NATURALEZA DE LOS CENSOS.

Espuestas en el artículo genérico censo las diferentes acepciones de esta palabra, á que ademas consagramos algunos artículos especiales, se entenderá desde luego que el objeto y epígrafe de la presente seccion se ciñen á las cuatro especies de censos antes mencionadas, á saber: al enfitéutico, reservativo, consignativo y vitalicio, segun se vé en los siguientes párrafos.

§. 1.° *Clasificacion de los censos.*

Las leyes y los jurisconsultos dividen los contratos censuales en las siguientes clases:

1.° En *reales, personales y mistos.* Reales cuando se hallan impuestos mera y esclusivamente sobre una cosa productiva; personales cuando lo están únicamente sobre la persona y su industria; mistos cuando el censo se constituye á la vez sobre la cosa y la persona.

2.° En *enfitéuticos*, *reservativos*, *consignativos y vitalicios*.

Es el primero un contrato por el cual, trasfiriendo á otro el dominio útil de una cosa inmueble, y reservándose el directo, se adquiere el derecho de exigir de aquel cierto cánon ó pension anual.

El consignativo es una especie de compra mediante la cual, entregando á otro un capital en dinero efectivo, se adquiere el derecho de exigir de él, con la garantía de los bienes consignados para su seguridad, una pension anual determinada. Llámase asi por estar ordinariamente consignado sobre bienes especiales del censuario.

El reservativo es asi bien un contrato por el que, al verificar la trasmision del dominio directo y del dominio útil de una cosa inmueble, se reserva su dueño el derecho de exigir anualmente del nuevo poseedor de la misma cierta pension ó rédito. La reserva de este derecho dá lugar al nombre con que se le distingue.

Censo vitalicio, por último, es aquel en que el derecho de exigir la pension ó rédito anual se constituye únicamente sobre la duracion de la vida natural de una ó mas personas. Atendiendo varios tratadistas á esta circunstancia estraordinaria, le escluían del número de los censos.

Se dividen ademas:

3.° En *pecuniarios y fructuarios*, conforme se establece en dinero ó en frutos la pension ó prestacion que haya de pagarse.

4.° En *ciertos ó inciertos*, segun que se trata de cantidad determinada, la de veinte mil reales por ejemplo, ó no se fija esta espresamente, como cuando se designa solo la tercera parte de los bienes.

5.° En *temporales y perpétuos*, segun se fija ó no al constituirlos limitacion de tiempo; y los temporales en *determinados*, como por diez años, ó *indeterminados*, como por la vida de alguno.

Y 6.° En *redimibles*, *ó al quitar*, *é irredimibles* ó absolutamente *perpétuos*.

§. 2.° *Carácter y naturaleza de los censos.*

El censo es contrato *sinalagmático ó bilateral* porque hay obligacion de ambas partes: uno se obliga á entregar la cosa ó pagar el capital ó precio; otro á satisfacer anualmente la pension.

Es contrato *nominado* porque tiene forma y nombre en virtud de la costumbre y posteriormente de la ley, y produce accion especial.

Como todos los consensuales se perfecciona por el simple consentimiento y no ha menester la entrega de la cosa.

En su celebracion se observan las reglas comunes á todos los contratos; pero como es una especie de compra y venta, aunque irregular y anómala, puesto que se asemeja en unas cosas y difiere en otras, se estima y rige en general por las mismas reglas que este último contrato y los defectos que le vician y anulan, vician y anulan tambien el de censo. Las partes, no obstante, pueden estipular las modificaciones que crean oportunas, siempre que no sean contrarias á la esencia del contrato mismo y á las prescripciones de la ley.

En los censos, que se comprenden entre los bienes inmuebles, á la manera que las pensiones en los muebles (1), no se compran, ni venden los frutos, sino la pension en dinero ó especie, proporcionada á la suma invertida para constituirle ó al valor del inmueble trasferido. Por eso ninguna ley dispone que el rédito se fije en proporcion de los productos; de otra manera resultaria que sin aumentarse, ni disminuirse el capital, unas veces seria mayor y otras menor la pension, segun la abundancia ó esterilidad de las cosechas, y cuando ninguna hubiese, nada se pagaria.

Por la naturaleza de las cosas, aparte de toda disposicion humana, el censo puede constituirse en las personas y solo en ellas, á pesar de las reñidas y eternas cuestiones de los tratadistas; y cuando se adunan las dos obligaciones real y personal, lo que de ningun modo repugna, esta es la principal y aquella la accesoria.

Considerados los censos como una deuda

(1) Asi se vé que los términos establecidos para la ejecucion respecto de aquellos, rigen tambien para los censos.

ó préstamo, y no puede negárseles alguna semejanza, fueron tachados en su principio de odiosos y usurarios. La diferencia sustancial entre este contrato y el de mútuo procede de que el capital se enajena por el que le dá y se adquiere por el que le recibe, sin la seguridad de que el último pueda ser obligado á restituirlo, y en esto consiste principalmente la justicia del contrato.

Algunos tratadistas sostuvieron que podian crearse los censos bajo otro título que el de compra y venta, como los de legado, donacion *inter vivos* ó *causa mortis*, transaccion ó pago, pero otros lo repugnaron con insistencia; sin distar mucho unos y otros en el fondo. Es indudable que en el testamento, por ejemplo, puede establecerse una pension anual sobre hipotecas, y aun llamarla censo: no podria aplicarse con material propiedad á tal disposicion el nombre, ni las circunstancias modales del censo convencional, y préviamente espontáneo; pero se vé que la diferencia es en el modo. Que pueda reunirse en un mismo instrumento con el legado y el fideicomiso nadie lo dificulta, puesto que tambien al otorgar la última voluntad pueden celebrarse cualesquiera otros contratos, pero sin que por esta coincidencia pierda su naturaleza propia y especial, y lo mismo decimos de la donacion. Fuerza es, pues, confesar que, no sin fundamento, en sentido lato y por costumbre, se llama tambien generalmente censo el derecho de percibir los réditos anuales constituidos de este modo, asi como los impuestos por la ley ó por la autoridad, por transaccion, en particion testamentaria, etc., segun indicamos al principio del artículo.

El censo ya constituido puede apreciarse como un derecho especial, como una parte desmembrada del dominio, y comprenderse entre los derechos en la cosa: *jus in re*.

Se ha sostenido con empeño que el contrato censual es contrario á justicia, y las consideraciones en que los moralistas y jurisconsultos fundaron esta opinion, despojándolas del aparato de polémica, se reducen á tres principalmente.

1.ª Debe estimársele usurario, una vez que ademas de percibir la pension por espacio de veinte, treinta ó mas años, tiene el acreedor pleno derecho al capital íntegro que dió.

2.ª Es un contrato que mengua y destruye los patrimonios.

3.ª Dá orígen á interminables pleitos y contiendas.

Aun los teólogos y canonistas menos severos creyeron, que si bien era lícito adquirir el censo ya constituido, era absolutamente ilícito establecerlo de otro modo que por mera donacion.

Los defensores de los censos decian por su parte: si cualquiera puede vender por su justo precio las cosas que le pertenecen ¿qué razon de moralidad ó de justicia se opone á que se ceda y adquiera la pension anual, que está legalmente en el comercio humano y constituye el objeto del contrato en cuestion? ¿No se ha considerado siempre lícito establecer el usufructo en dinero, puesto que se constituye con arreglo á derecho en los edificios y en otras cosas, que solo dan renta ó producto pecuniario? Se tacha sin razon de usurario este contrato; la usura cabe únicamente en el de mútuo ó préstamo. Cierto es que trascurriendo tiempo y acumulándose pensiones, llega el caso de que el acreedor percibe una suma mucho mayor del capital que dió; pero en esto nada hay, moral ni económicamente considerado, que no sea muy natural ó merezca reprobacion, siempre que el precio sea justo y proporcionado al derecho que se adquiere.

A los que presentaban como gravísima objecion contra el establecimiento de los censos que se daba *dinero por dinero*, les respondian que se daba dinero por el derecho de cobrar un rédito ó pension anual, y si hubieran escrito hoy, desvanecidas tantas preocupaciones y errores económicos, les hubieran contestado que nada hay de injusto ó malo en dar dinero por dinero dentro de ciertas y justas proporciones. Admitido el censo creado á título de donacion, es preciso admitir el establecido á título de compra y venta, ó incurir en el absurdo de no poder dar ningun motivo satisfactorio y lógico de esta diferencia.

Cuando los contratos censuales, añadian, se hallan admitidos en los códigos de los pueblos mas cultos y apreciadores de la justicia y del derecho: despues que varios Pontífices, y con especialidad Martin V, Calisto III, Nicolás V, Pio V, y Gregorio XIII, declararon lícita y libre de la infeccion usuraria la adquisicion del rédito anual creado por el censo, siempre que se guarden ciertos requisitos; hasta temerario parece dudar de la justicia intrínseca de un contrato que tiene á su favor la sancion Real, la Pontificia y la tradicional del tiempo y de la costumbre.

No puede negarse que los argumentos de los defensores de los censos, que hemos condensado en breves líneas, eran de buena ley y de gran fuerza, y aunque es cierto tambien que de este contrato, tan frecuente en nuestro pais, provienen hartas ocasiones de empobrecerse las familias, no se sigue de esta consideracion que sea intrínsecamente malo ó usurario.

Si los infelices propietarios abrumados por necesidades urgentes, los honrados padres de familia sorprendidos por una desgracia imprevista, y aun los viciosos y los pródigos impulsados por sus malas pasiones, acudieran respectivamente al medio de enajenar sus bienes para aliviar su miseria, poner á cubierto su reputacion ó satisfacer sus caprichos, ¿puede negarse que la venta en sí misma seria justa á los ojos de la ley y de los hombres? Y sin embargo, la enajenacion absoluta de sus propiedades, les inferiria mayores y mas irreparables perjuicios que la imposicion de uno ó mas censos sobre ellas.

El verdadero y trascendental inconveniente consistia en que algunos censos no podian redimirse, lo que desapareció mas tarde á beneficio de la ley, borrándose esta diferencia y siendo todos redimibles. Cesando la perpetuidad, se han minorado los perjuicios porque aquella era en verdad gravosa bajo el aspecto económico, y tenia algo de inícua bajo el aspecto moral, puesto que privaba al deudor para siempre de su libertad natural de hacer el pago.

Orillado este inconveniente, ¿cuántas ventajas no han producido y pueden producir en adelante? El labrador, que á fuerza de constante trabajo y honradas economías se siente con fuerzas para salir de la insegura condicion de simple bracero, busca una finca agrícola á censo reservativo y se convierte por este medio en propietario, afianzando al dueño de aquella el interés de su capital, sólidamente y sin eventualidades ni trabajos.

De la misma manera, el propietario, falto de metálico, puede encontrarle fácilmente á censo consignativo, hacer mas productiva su finca á fuerza de esmero y de constancia, y devolver el capital despues de haber satisfecho su objeto, sin verse precisado á enajenar parte de su finca ó toda ella, como sucederia si este contrato no existiera.

Ya digimos, y es fuerza repetirlo aquí tratándose de su justicia ó injusticia, que estos censos y el enfitéutico contribuyeron muy principalmente á fertilizar la superficie de la tierra y que sin ellos hubieran crecido lenta y pausadamente la industria y la riqueza.

Teniendo hoy todos los censos el carácter de redimibles, como hemos asentado, no hay para qué examinar cuestiones que envolvieron á nuestros célebres comentaristas en eternos y reñidos debates. Baste decir, que si podia defenderse, segun hemos visto, como lícito y justo el censo perpétuo, lo es mas el redimible, una vez que es mas ligero el gravámen del deudor, paga menor interés, y su obligacion se circunscribe á un período limitado por su utilidad ó conveniencia; en una palabra, las pensiones pueden pagarse cómodamente y estinguirse la obligacion contraida en sazon oportuna y sin pérdida de los bienes.

El censo *vitalicio*, mas especialmente combatido en los siglos anteriores como usurario y como ilícito á pretesto de que se constituia con la esperanza de recibir algo mas que el capital, tiene tambien un fondo indudable de conveniencia y de justicia.

Dejando á un lado las pensiones vitalicias establecidas por donacion ó testamento, que son verdaderos actos de liberalidad ó de beneficencia, hablaremos solo de las creadas

por contrato. Se le combate (1) como un juego de azar, como un golpe de fortuna que depende de la vida mas ó menos larga de aquellos en cuya cabeza se constituye, como un cálculo improbo y odioso de la codicia, contrario á las leyes de la naturaleza y á los afectos de la amistad en que el egoismo especula friamente y sin entrañas sobre la vida y la muerte de sus semejantes. Arguyese tambien de ilícito, porque el deudor no tiene libertad para estinguir esta clase de censos que penden de la vida del comprador siempre y esclusivamente.

La respuesta á estas apasionadas objeciones es satisfactoria.

En primer lugar, con arreglo á derecho, puede comprarse el usufructo por la vida del usufructuario, y hay analogía é identidad de razon en ambos casos. Ademas, la incertidumbre de la mayor ó menor duracion de la vida, circunstancia inseparable de este contrato, que se cuenta entre los llamados *aleatorios* ó *de suerte* en los Códigos modernos, le libra del vicio de inmoralidad y de usura. Es una verdadera venta del derecho de percibir una pension anual durante la vida del comprador ó de otra determinada persona, y nada tiene de ilícito desear ni procurarse por este medio algunas ventajas ó ganancias.

Para aprobar ó rechazar este contrato ha de examinarse su carácter, su naturaleza, su justicia intrínseca; el exámen somero y aislado de algunas de sus aplicaciones conduciria al error indefectiblemente. Como en otros muchos contratos y actos de la vida, los motivos, los antecedentes y los resultados de cada caso producirian apreciaciones enteramente opuestas, y siempre insuficientes é incompletas para establecer una regla general y exacta. Indudablemente habrá casos en que el censo vitalicio aparezca en su constitucion y efectos como un cálculo inmoral del egoismo y la codicia, ¿pero en cuántos otros se presentará como la espresion mas bella de la caridad cristiana, que es la mas noble y santa de todas las virtudes? ¿cuántas veces será el último y salvador recurso de la ancianidad y el infortunio?

¿Cómo rechazar, dice un jurisconsulto moderno, al indigente, enfermizo ó viejo que fundan su único medio de existir en la misma fragilidad de su existencia y venden para vivir el último momento de su vida? La naturaleza sabrá defender sus derechos en el corazon de un padre de familia; el hombre no quiere morir todo, y el padre ha de sobrevivir á sí mismo en sus hijos. A iguales cálculos é inconvenientes pueden dar lugar otras instituciones civiles, como las prestaciones ó servidumbres vitalicias estipuladas en un contrato de venta, los legados, el usufructo, las trasmisiones de propiedad de una persona á otra, etc. Y porque el deudor de una renta vitalicia pueda en el secreto de sus pensamientos mirar mi muerte como una dicha suya, ¿será preciso que yo renuncie al derecho de constituirme acreedor de una renta que debe sostener mi existencia? El legislador deberia proscribir las rentas vitalicias, si su uso no pudiera ser sino injusto y peligroso; pero siendo frecuentemente útil y necesario, debe mantenerlas. Una larga esperiencia ha consagrado dichas rentas en los pueblos mas cultos como una institucion que puede aliviar los sufrimientos de la humanidad y reparar, respecto de muchos individuos, los agravios é injusticias de la fortuna; y la esperiencia es la maestra de las leyes como de los hombres.

Añadiremos solo, que aun cuando celebrado el contrato de censo vitalicio, el deudor de la pension puede desear la muerte del censualista ó comprador, esto no arguye que sea ilícito, porque este deseo no nace esencial y precisamente del mismo acto, sino de la mala intencion del vendedor. Es falta y pecado de la persona; no inmoralidad ó vicio del contrato.

(1) Para dar una idea de la exajeracion original y absurda de algunos de sus antiguos impugnadores, reproduciremos testualmente uno de los curiosos argumentos que hemos visto escritos. *Fideles omnes*, decian con tan mal latin como criterio, *fideles omnes in Deo suam debent locare confidentiam, juxta illud Psalmi: Spera in Deo et fac bonitatem, et pasceris in divitiis ejus: sed census vitalitius procedit ex diffidentia Dei quia emitur ut securum emens agat vitam, securum habens victum, ergo, etc.*, como si fuera pecaminoso y malo que cada uno se procure medios de segura subsistencia y arguye desconfianza en Dios.

§. 3.° *Censo enfitéutico.*

La naturaleza ordinaria del censo enfitéutico es la perpetuidad y ha de considerarse perpétuo siempre que no se esprese tiempo, si bien puede constituirse por un plazo de diez ó mas años, por toda la vida del que recibe el dominio útil, ó por su vida y la de alguno de sus sucesores.

El censualista, reteniendo el dominio directo de la cosa acensuada, adquiere las ventajas y derechos siguientes:

1.° El de exigir la pension ó rédito anual.

2.° El de *comiso*, esto es, el de readquirir el dominio útil, si el enfiteuta no paga el cánon ó pension durante tres años, ó dos si el censuario fuere iglesia; pero si el enfiteuta entrega dentro de diez dias los réditos vencidos, recobra su derecho.

3.° El de *prelacion* cuando el enfiteuta quiera enajenar la cosa acensuada á persona de igual condicion que el dueño directo, en cuyo caso este es preferido á cualquiera otro por el mismo precio, usándole dentro de dos meses. Los fueros de Valencia y Cataluña le daban facultad de ceder á un tercero este derecho; pero hoy está espresamente prohibido (1).

4.° El de *laudemio* ó cincuentena parte del precio de la cosa, que debe pagar el que entre nuevamente á poseerla.

5.° El de *retracto* ó retroventa.

Existia ademas en algunos territorios el derecho de *quindenio*, esto es, el que correspondia por costumbre, pues no estaba fundado en ley, á las ciudades, iglesias, corporaciones y demás poseedores conocidos bajo el nombre de *manos muertas*, para cobrar como dueños directos, cada quince años el luismo á la manera que si entonces se enajenara la cosa.

El enfiteuta ó censuario adquiere:

1.° El dominio *útil* de la cosa.

2.° El derecho de venderla, requiriendo al censualista, siempre que este no la quiera ó guarde silencio por dos meses.

3.° El de empeñarla, sin participarlo al dueño directo, á persona de igual condicion que él para pagar los réditos; pero no á otra mas poderosa ó de menores garantías.

4.° El de imponer servidumbre sobre la cosa acensuada y conceder á otro su usufructo.

5.° El de darla en dote á sus hijas y dejarla por sucesion y por mejora, cuando no lo impiden los términos especiales del contrato, sin adeudar laudemio.

6.° El de no ser inquietado de modo alguno en su disfrute, mientras pague exactamente la pension anual.

7.° El de redimir la pension, el laudemio ó *luismo*, y cualquiera otro derecho del dueño directo.

8.° El de prelacion cuando el censualista quiera enajenar el dominio directo. Las leyes no fijan plazo para ejercer este derecho; unos quieren que sea el de nueve dias, como en los demás retractos, y otros el de dos meses por consideraciones de reciprocidad.

Aunque la escritura no parece que deberia ser un requisito esencial del censo enfitéutico, la exigen nuestras leyes terminantemente (1), y en verdad no puede negarse que es útil para resguardo del dueño directo, y siempre para la perpetuidad del hecho.

Hallándose dividido entre varias personas el dominio útil de un prédio ó edificio, puede el dueño directo obligarles á prorratear las pensiones entre sí, nombrando recaudador ó cabezalero de ellas al mayor porcionero, que cobrará de los demás y hará al dueño el pago íntegro.

Algunos, no sin razon, comprenden entre los derechos censuales el de *superficie*, porque hay en él una verdadera division del dominio directo y del dominio útil, que le hace muy semejante al enfiténtico. El dueño del terreno viene á ser el censualista y tiene

(1) Ley de 3 de mayo de 1823 restablecida en 2 de febrero de 1837, art. 7 al fin.

(1) Ley 3.ª, tít. 14, part. 1.ª; 28 y 29, tít. 8, pág. 5.ª Ley 3 del Código, de *jure emphytéutico*.

derechos análogos. El de la superficie, como dueño útil mientras paga la pension, puede, á la manera que el censuario, disponer del edificio, enajenarle y constituir en él servidumbre. Es, pues, bastante la analogía de estos dos derechos creados por la desmembracion del dominio pleno.

§. 4.° *Censo reservativo.*

Este censo, aunque semejante al enfitéutico, difiere de él sin embargo, en puntos esenciales. El enfitéutico trasfiere solo el dominio útil y la posesion natural, permaneciendo el *directo* y la posesion civil en el dueño del fundo, mientras en el reservativo el dominio *directo*, el *útil* y toda clase de posesion pasan al censuario, y al censualista ó antiguo dueño le queda únicamente el derecho de percibir el rédito ó pension anual.

Ademas, el censuario en el reservativo puede vender la cosa acensuada sin hacer al censualista ningun requerimiento; el enfiteuta no: está libre de pagar el laudemio ú otro gravámen cuando enajenare el fundo, al revés de lo que sucede en el enfitéutico: y por último, no cae de su derecho, ni la cosa en comiso, aunque deje de pagar los réditos anuales; y la razon es porque teniendo el pleno dominio, solo queda obligado personalmente al pago de estos, mientras en el censo enfitéutico la circunstancia de permanecer el dominio directo en el concedente, hace que sobre la obligacion personal del enfiteuta, exista otra real ó inherente á la cosa, objeto del contrato, y cuando esta no se cumple satisfaciendo el cánon, cae la cosa en comiso necesariamente. Por otra parte, la caducidad es una pena, y sabido es que no puede incurrirse en penalidad sino en los casos espresamente marcados por la ley, que la impone al enfiteuta y no al censuario: pero si al constituir el censo se establece como pacto, debe observarse (1).

Cuando de los términos de la escritura de constitucion, atentamente examinados, no resulte con claridad la clase de censo que se quiso crear y se duda, por tanto, si es redimible ó irredimible, reservativo ó consignativo, deben aplicarse las reglas de benigna interpretacion y estimarse lo mas favorable al deudor, declarando el censo antes consignativo que reservativo, y mas bien redimible que perpétuo é irredimible.

§. 5.° *Censo consignativo.*

En este censo, como en el reservativo, no hay division entre el dominio directo y el útil. Su carácter y naturaleza son los de un gravámen ó carga que pesa directamente sobre fincas ó cosas determinadas y ajenas, en cuya virtud el dueño actual de la cosa ó prédio debe pagar la pension estipulada. Puede tambien establecerse meramente sobre las personas (1).

Debe considerarse como una verdadera venta en que el censualista es el comprador, el censuario el vendedor, el capital el precio que se paga, y el derecho á la pension la casa, objeto de la venta. Sin negar esto la mayor parte de nuestros comentaristas, creen que no se perfecciona por el consentimiento, y que es requisito indeclinable que el dinero se cuente y entregue en el acto del otorgamiento para evitar los fraudes y abusos á que daria ocasion de otra manera: podia, á su juicio, imponerse, sin embargo, consistiendo el precio en deuda de dinero cierta y líquida, por la tradicion fingida ó *brevis manus*. Nosotros, no hallando fundado el temor á la usura y teniendo en cuenta las actuales doctrinas económicas, entendemos que bajo este concepto no difiere de los demás contratos celebrados bajo el título de compra y que se perfecciona por el consentimiento, en cuyo supuesto le hemos colocado entre los consensuales.

Ya hemos indicado que el censo consignativo puede establecerse sobre la obligacion simple y personal del censuario ó sobre bienes determinados y de la propiedad del mis-

(1) Ley 1.ª, tit. 15 lib. 10. Nov. Recop.

(1) Ley 23, tit. 15, lib. 70 de la Nov. Recop.

mo. Contraria fué la opinion del Pavorde Sala y de otros jurisconsultos que, como de él decimos en la seccion 1.ª, escribieron bajo la influencia de las preocupaciones exajeradas de su época contra la usura. La ley 23 del título de censos, de que el primero no se hizo cargo, y despues otras disposiciones, sobreponiéndose á aquellas cabilosidades, permiten interponer y mandan observar cuantos pactos y obligaciones establezcan los contrayentes, y que el censuario, ademas de hipotecar bienes raices para la seguridad del censo, se obligue á sí y á sus sucesores al pago de la pension.

El precio, que ha de ser justo, lo cual sucede, como se verá en su lugar, cuando la pension es proporcionada al capital entregado, que sirve de precio al censo, debe consistir en dinero contante.

La pension, por punto general, consiste tambien en dinero efectivo; pero está admitida por la ley, donde haya esta costumbre, su consignacion en frutos (1); y no puede menos de aprobarse en buenos principios económicos para evitar los efectos de la desestimacion monetaria y asegurar previsoramente la duracion de la pertenencia.

El censuario ó censatario tiene la libre y plena facultad de enajenar la cosa sobre que se impone el censo, sin otra limitacion que la de manifestar préviamente al nuevo comprador las cargas y responsabilidades que pesan sobre ella.

Por último, la naturaleza de este censo no permite que se conceda al acreedor la facultad de obligar al deudor á la redencion, porque si esto sucediera, no seria censo, sino mútuo.

Ya indicamos que los juros son una especie de censos consignativos: ahora es oportuno advertir que se estiende á ellos todo lo dicho respecto de estos últimos.

§. 6.° *Censo vitalicio.*

Por este censo, que es tambien como una rama ó derivacion del consignativo, se adquiere el derecho de exigir la pension sin consideracion á otra cosa que la vida del censuario, del censualista, ó de una tercera persona, no interviniendo, como sucede en los demas, prédio ó cosa alguna.

Se llamó tambien entre nosotros *fondo vitalicio, muerto* ó *perdido.*

Lo mas frecuente es constituirle sobre la existencia de la misma persona que entrega el capital y compra por su medio la pension que ha de servir para sostenerla: es árbitro, sin embargo, el comprador de imponerle sobre la vida, que presuma menos frágil de un tercero. Este puede ignorar lo convenido, por mas que preste al contrato el número incierto de los dias de su vida.

Ni en el derecho canónico, ni en el derecho romano hay ley alguna que trate del censo vitalicio. En el nuestro las leyes 4.ª y 6.ª, título 15, lib. 10 de la Novísima Recopilacion, ambas dictadas por Felipe II, son las primeras que hablan de él, como de cosa establecida, sujetándolo á las reglas de los demás censos, fijando á su respecto un precio determinado y especial, y prohibiendo que en lo sucesivo pudiera establecerse por mas de una vida.

Este capital ó precio ha de consistir en dinero efectivo, á razon de diez mil maravedís el millar; regulándose al respecto de doce mil el millar los establecidos por dos vidas antes de 1853, si bien es lícito á los contrayentes sujetarse á una regulacion mas moderada, tomando en cuenta el interés corriente del dinero, la respectiva edad y robustez y las demás probabilidades de la vida humana.

El capital debe entregarse en el acto, siendo nulo el contrato, si otra cosa se pacta espresamente, é incurriendo el escribano, sino se hace la entrega, en graves penas. En ningun caso ha de volver á poder del censualista: puede decirse que se estingue y crea en su lugar el derecho á las pensiones.

No siendo necesario imponer el censo vitalicio sobre cosa determinada, tampoco produce el derecho real inherente á las demás clases de censos, pero no por eso repugna á su naturaleza la designacion de una hipoteca

(1) Ley 9, tit. 15, lib. 10, de la Nov. Recop.

que le asegure y garantice, creada sobre fondos del mismo censuario ó de cualquier otro.

Los que tengan herederos forzosos no pueden hipotecar todos sus bienes á la seguridad de un censo vitalicio sin su consentimiento, puesto que de otra manera podrian sufrir el perjuicio de verse privados de su legítima.

La mera negligencia ó dilacion en el pago de las pensiones vitalicias, si bien produce pleno derecho para obligar á la ejecucion del contrato, no debe causar su rescision: No es prudente privar de firmeza y estabilidad á los contratos, declarándolos disueltos por motivos leves y fácilmente reparables. Ademas, en este caso se procederia contra las prescripciones de la equidad, puesto que el censualista recobraria su capital y se utilizaria de los réditos cobrados que en el censo vitalicio no son el interés del capital, sino el precio del mismo censo, que á cada pago anual estingue parte de la deuda.

SECCION III.

CONSTITUCION DE LOS CENSOS.

Ya anteriormente hemos indicado los diversos modos con que puede constituirse un gravámen censual. Y aunque no en todos ellos intervienen desde luego, sino muchas veces á *posteriori*, como en los *vitalicios reales*, *juros*, censos por testamento, dote, etc., el censualista y el censatario; ceñimos nuestras observaciones á la constitucion normal nacida de contrato, por ser esta la regla general á que todos, en cuanto sea dable, deben acomodarse.

§. 1.° *Capital ó precio de los censos.*

De cualquiera de los modos mencionados que se conntituya el censo, ó un gravámen, ó prestacion censual, siempre es el precio uno de los principales requisitos á que hay que atender y pudiera decirse el principal, pues que él decide de la justicia ó injusticia de la imposicion. Por eso, sin duda, mientras en las ventas comunes la ley lo deja á la apreciacion general relativa al *justo precio* de las cosas, en los censos esta apreciacion es especial, *taxativa*, prefijada por la ley.

Una constitucion de Cárlos V, espedida en 1548, estableció para el imperio de Alemania el precio legal del censo redimible á razon de uno por veinte, y mas bien á ciento por cinco, pues en materia censual, el capital hace de precio, y el rédito con el derecho á percibirlo de mercancía; y este era todavía en aquel pais y en Francia á principios del siglo XVII, el precio de los censos, si bien en algunas poblaciones de ambos territorios, estaba admitido por la costumbre que las pensiones anuales redimibles se impusieran á razon de uno por quince. Posteriormente la jurisprudencia de los tribunales franceses toleró los censos constituidos al uno por doce, redujo al uno por quince los establecidos al diez ú once, y estimó ilícito el contrato, si se hacia al uno por ocho, por nueve ó por cualquiera precio inferior al diez.

En Cataluña adoptó tambien la práctica el tipo de uno por veinte, mientras en Valencia á veces se constituían al mismo respecto, y á veces á razon de uno por diez. Nicolás V designó este último precio para Sicilia. En Andalucía y en otras comarcas españolas de la parte de allá del Tajo, sujetas á la antigua chancillería de Granada, solian constituirse al uno por diez, y en las de aquende el Tajo, á razon de uno por doce ó catorce; hasta que don Cárlos y doña Juana establecieron la tasa de catorce mil maravedís el millar, ó uno por catorce, y la obligacion de pagar en metálico los réditos; pero los abusos y las práticas diversas prevalecieron contra sus disposiciones.

Fué necesario toda la energía de Felipe II, para abolirlas y crear la conveniente uniformidad en esta materia por medio de una ley (1) publicada á peticion de las Córtes de Madrid de 1563, en la cual se ordenó que las pensiones ó réditos anuales redimibles se

(1) 6.ª, tit. 15, lib. 5 de la Nuev. Recop.

constituyesen solamente y en todas partes á razon de uno por catorce, declarando nulos los que se estableciesen de otra manera en lo sucesivo, y que se redujeran á este precio los anteriormente establecidos.

En 1608 y 1621 se redujeron de nuevo á uno por veinte los censos redimibles creados, y que se crearan; y Felipe V ordenó mas tarde (1) que no pudieran constituirse en adelante á precio menor que el de treinta y tres mil y un tercio al millar, ó sea tres por ciento, quedando desde luego reducidos al mismo tipo los censos ya creados. Fernando VI estendió esta providencia á las provincias comprendidas en la antigua corona de Aragon (2) y este es hoy el precio legal de los censos redimibles, bajo pena de nulidad del contrato y privacion de oficio al escribano que consigue mayor pension en la escritura. En Navarra no fueron aplicadas estas leyes y el interés legal de los censos continuó siendo el de cinco por ciento.

Para el irredimible, mientras existió, no hubo tasa legal; pero considerando que era mas gravoso al censuario que el redimible, se estableció en general, que debia ser mayor el precio, es decir, menor la pension que en este, ateniéndose en cada lugar á lo determinado por el uso.

Debe ser asimismo mucho mayor el precio en el censo enfitéutico que en todos los restantes. El censualista conserva el dominio directo de la cosa acensuada y adquiere ademas el de percibir el laudemio ó luismo y otros derechos enfitéuticos. La equidad y la justicia exigian que aumentado el de los redimibles á razon de tres por ciento, se aumentara el de los enfitéuticos al respecto de tres por doscientos, y asi se verificó en cuanto á las casas y áreas ó solares de Madrid en el auto acordado del año 1770, ley 12 de este título. La 22 del mismo autorizó á redimir con vales los cánones enfitéuticos impuestos sobre casas pagando un capital doble por el cánon regulado á razon de treinta y tres un tercio al millar, y por derecho de laudemio la cantidad que á un tres por ciento redituase en veinticinco años una cincuentena del valor de la cosa, rebajando de él el importe de las cargas. En el dia ha de procederse con arreglo al artículo octavo de la ley de tres de mayo de 1823, restablecida en 2 de febrero de 1837, que autoriza á las partes para arreglar libremente la cuota de la pension, y por tanto, el precio, y el laudemio. Lo que se cobre por este último concepto en los enfitensis que no tienen orígen de contrato, no puede esceder del dos por ciento, quedando refundidos en él todas las demás cargas ó gravámenes.

El precio de los censos vitalicios se fijó primeramente por Felipe II (1) á razon de siete mil reales el millar, y despues se redujo á razon de diez mil reales el millar, ó diez por uno. Los constituidos por dos vidas antes de 1583 deben regularse á doce por uno.

Este precio ha de consistir necesariamente en dinero efectivo, con esclusion de oro y plata labrados, alhajas, joyas y cualquiera otra cosa que no sea metálico, y debe entregarse en el acto del otorgamiento, iucurriendo de otro modo el escribano en graves penas.

Creemos oportuno recordar que D. Cárlos y doña Juana, escitados por reiteradas peticiones de las Córtes de Madrid, Toledo y Valladolid, establecieron al espirar la primera mitad del siglo XVI, que el interés del dinero en las contrataciones permitidas no pudiera esceder del diez por ciento, y es verdaderamente notable que en aquellos tiempos y bajo la influencia de las doctrinas que entonces dominaban, se diera una ley semejante (2). Este fué el interés legal hasta 1652 en que Felipe IV dispuso (3) que no pudiera esceder del cinco por ciento, sin embargo de cualesquiera pactos ó contratos hechos ó que se hicieren. Mientras esto sucedia por regla general y para toda clase de negocios y con-

(1) Ley 8, tit. 15, lib. 10 de la Nov. Recop.
(2) Ley 9 del mismo título.

(1) Ley 6, tit. 15, lib. 10 de la Nov. Recop.
(2) Ley 20, tit. 1.°, lib. 10 de la Nov. Recop. Otra ley del Fuero Real permitia exigir de cuatro maravedises los tres, ó sea el 75 por ciento. Entre los romanos el interés del dinero no pasó del doce.
(3) Ley 22 del espresado tit. 1.°, lib. 10.

tratos, el interés legal en los censos era el siete por ciento desde 1563, el 5 desde 1608 y mas tarde de 3 para alguna clase de ellos. Sorprende á primera vista que se conceda mayor interés á los contratos en que el acreedor tiene el derecho de reclamar el capital, que á estos censuales, que por su carácter especial le niegan tal derecho y ventaja. Esta misma anomalía existe en la actualidad. Nuestro derecho, á pesar de su tirantez en la materia, asigna para los negocios mercantiles y entre comerciantes el interés legal de seis por ciento, si bien se apoya en la consideracion de que el dinero empleado en la esfera comercial produce siempre ganancias mas cuantiosas, y entretanto sigue para los censos consignativos el mismo interés de tres por ciento, dificultándose mucho la frecuente celebracion de este contrato por tan exagerada diferencia.

Pio V estableció en el motu propio de que hicimos mencion, que el capital ó precio del censo habia de consistir en dinero efectivo, y aunque no se admitió en España y las leyes lo exigen únicamente respecto del censo vitalicio, aquella es la opinion generalmente recibida en la práctica por creerla mas conforme á la naturaleza del contrato, y en armonía con el espíritu general de nuestras leyes. Esto no obstante, puede defenderse la opinion contraria, atendidas las actuales doctrinas económicas y la generalidad con que los artículos 2.° y 3.° de la ley 23 del título de censos y la real cédula de 3 de agosto de 1818, dejan los términos del contrato al arbitrio de las partes.

Se ha disputado con empeño, si creado el censo consignativo á razon de tres por 100 con arreglo á la ley, puede luego adquirirse por menor precio sin vicio de nulidad, sin obligacion de restituir.

Varios jurisconsultos (1) sostuvieron que una vez constituido legítimamente hay completa analogía entre el censo y las demás cosas que están en el comercio de los hombres, por manera que solo deberia rescindirse el contrato habiendo lesion mayor de la mitad del justo precio, y aun entonces, estimándose su justicia por los datos y circunstancias á que se atienen los compradores y vendedores, cuando se trata de la generalidad de las cosas. Las leyes no lo prohiben; las reglas del derecho comun tampoco. Hay marcada diferencia entre el censo ya creado y el que ha de establecerse. La enajenacion de aquel no supone necesidad mas apremiante de la que aqueja al que vende una finca; ambos pueden venderse porque ya no le convienen á su dueño, porque se traslada este á otra poblacion; porque el deudor ó el vecino son de mala índole. Asi como en los demás objetos no se atiende al justo precio, á su naturaleza, á la suma en que fueron adquiridos, ni al trabajo empleado para su adquisicion, sino á la estimacion comun de los hombres, aun errada, debe estarse solo á iguales consideraciones en cuanto á los censos ya creados. No existen respecto de ellos las presunciones de fraudes y de usuras, orígen de las leyes que tasaron el precio de los que habian de imponerse nuevamente, y cesando la razon de la ley, cesa su disposicion.

Otros (1) juzgaron, al contrario, que esta venta á menor precio era injusta y nula.

La diferencia arriba establecida, decian, es mas aparente que real: el censo ya creado y el que ha de establecerse no difieren, tratándose de la misma cosa, en la sustancia y el efecto. Si la opinion opuesta prevaleciera se abriria la puerta á muchos fraudes, el usurero, ávido de lucro y dispuesto á eludir los preceptos legales, preferiria siempre los censos creados á los que hubieran de imponerse. Cuando la ley ordena que los censos constituidos á diferente precio antes de ella se reduzcan al tipo que establece, es claro que no pueden comprarse en lo sucesivo á otro respecto.

Solís, pesados ambos pareceres, distingue de este modo: si el censo está reconocido y sólidamente colocado, no puede venderse á

(1) Sarmiento, Martinez Olano, Pedro Salazar, Navarro y Antonio Gomez.

(1) Miguel de Palacio, Albornoz, Mercado, Luis de Molina, etc.

un precio menor que el señalado por la ley ni en el fuero esterno ni en el interno, pero si es litigioso é incierto, si el deudor está insolvente, si las hipotecas no ofrecen facilidad para el pago, es lícito adquirirle en menos del precio legal, porque todas estas circunstancias minoran indudablemente su valor. Por idénticas razones, cuando el vendedor del censo creado se obliga á la eviccion, aunque sea incierto y litigioso, no puede comprarse á menor precio, pues mediando la eviccion, es lo mismo de hecho y de derecho que si el vendedor se obligase á la continuacion del censo.

§ 2.° *Personas que pueden constituir censos.*

Este párrafo se reduce sin dificultad á la siguiente enunciativa: pueden constituir censos todas las personas que pueden contraer, y sabido es que pueden contraer todas las que tienen la libre administracion de sus bienes. Véase su artículo.

Hay en ello alguna escepcion. Un menor que está bajo la pátria potestad, no puede contraer, y sin embargo, como puede testar, puede en testamento constituir censo sobre aquellos bienes de que puede disponer, si bien es verdad que por el hecho de poder disponer de ellos, desaparece en cuanto á los mismos el óbice legal, y el caso se reduce á la regla general arriba asentada, y lo mismo ha de decirse en cualquier otro caso análogo.

De otro órden es una cuestion que de hoy mas es seguro ocurrirá, y ocurre ya alguna vez en la práctica. Es la relativa á la capacidad de los sordo-mudos. La ley no ha decidido todavía sobre este punto; mas si la jurisprudencia, resolviendo los tribunales en cuanto á nupcias, administracion de sus bienes sin curador, efectos de los contratos y negocios de comercio realizados, ó que hubieren de realizarse por esta clase desgraciada; pero eso, no menos que en tiempos anteriores, segun las circunstancias del caso, esto es, segun la prueba que se hiciere de la aptitud é inteligencia del sordo-mudo. Véase este artículo.

§. 3.° *Cosas sobre que pueden constituirse los censos.*

Ya digimos que el censo puede constituirse en la persona sin relacion á los bienes, por razones que es ocioso repetir.

Limitándonos ahora á los bienes, puede establecerse el censo en los que pertenecen á cada cual por derecho de dominio privado, sean muebles ó inmuebles, en atencion á no hallarse admitida entre nosotros la Bula de Pio V, que escluía espresamente los primeros.

Por consiguiente, no puede constituirse: 1.° sobre las cosas que están fuera del comercio de los hombres, como son los bienes *nullius* y las cosas sagradas, religiosas y santas: 2.° sobre las que son comunes á todos por derecho natural, como el agua corriente, el mar y sus costas: 3.° sobre las públicas ó de uso público, como los rios, puentes y riberas.

Respecto de los bienes pertenecientes á ciudades ó pueblos, hay que distinguir: los destinados á público y perpétuo aprovechamiento, como las plazas, las vías públicas, los acueductos, las fuentes, pastos y paseos, la casa municipal, los términos, salidas, dehesas, montes y otros de este género, no pueden sujetarse al contrato censual sin licencia de la autoridad competente ó del gobierno; pero los que pertenecian á las rentas ó recursos ordinarios del pueblo, los que constituían parte de su patrimonio especial, eran susceptibles de obligarse al contrato censual por acuerdo de la municipalidad y en beneficio público, y asi debe continuar entendiéndose en los de esta clase respecto de los que queden á los pueblos, despues de la ley de desamortizacion general, últimamente publicada.

En cuanto á los bienes eclesiásticos, no puede establecerse censo en los sagrados que sirven para el ministerio y culto divino, como los templos, vasos, cálices, ropas y ornamentos, á no ser en los casos de urgente y justísima necesidad, por ejemplo, el socorro de los pobres, cuando la indigencia sea estrema, para que no perezcan de hambre ó de frio, la redencion de cautivos y otros

semejantes, pero se imponian sobre los profanos y temporales, como edificios, prados, viñas, etc., los cuales podian hipotecarse, guardando la forma y solemnidades prescritas por los cánones, esto es, que hubiera necesidad ó utilidad evidente de la Iglesia, declarada y consentida por el prelado respecto de las iglesias inferiores, y reconocida y consentida por el cabildo respecto de las catedrales y colegiatas. Escusado es decir que estas reglas han sido derogadas por la ley de 1.° de mayo de 1855, que decretó la desamortizacion, entre otras, de todos los bienes de esta clase pertenecientes á la Iglesia.

Es indudable que el marido puede constituir censos sobre los bienes adquiridos durante el matrimonio, como puede enajenarlos; pero hay diversas opiniones acerca de si puede ó no imponerlos sobre las cosas dotales. Folerio sostiene que si *ad vitam* y mientras el fundo dotal esté en su poder, porque durante el matrimonio el marido es dueño de la dote. Solís opina que si la dote fué estimada podrá constituirse censo en ella libremente, porque mediante la estimacion pertenece *pleno jure* al marido y puede hipotecarla; pero como la muger, disuelto el matrimonio, puede á su vez reclamarla á fin de recuperar su dote, aun cuando hubiese consentido en ello, la imposicion es poco segura y debe evitarse. Si la cosa dotal se entregó al marido inestimada, no puede este de ningun modo obligarla al contrato censual, porque la ley prohibe espresamente al marido la hipoteca del fundo dotal.

Partiendo de esta doctrina, cuando se trabe ejecucion por los réditos vencidos en un fundo dotal sujeto á censo, no tendrá lugar aquella desde el momento en que se escepcione su clase de dotal, y habiendo ido á poder del marido el capital ó precio íntegro, como en caso de duda se presume, la muger que consintió la imposicion, tiene derecho á pedir que los herederos del marido rediman el censo. Si entretanto hubiere satisfecho los réditos vencidos, podrá exigirlos tambien íntegramente é *in solidum* de los mismos herederos, ya en virtud de la cesion hecha por el acreedor, ya por la accion de mandato. Pero cuando conste que el capital se convirtió en utilidad comun, la muger queda obligada por la parte que le corresponda, y si todo cedió en provecho suyo, queda obligada por todo.

En los bienes sujetos á fideicomiso ó á restitucion y en los que con arreglo á la ley no puedan ser enajenados, puede constituirse censo, que durará hasta que llegue el caso de la restitucion, atendiendo á que el poseedor del fideicomiso y cualquiera que esté en circunstancias análogas, es dueño aunque temporal y puede obligar vitaliciamente al censo la cosa que le pertenece como dueño directo ó como dueño útil. En su virtud, el poseedor del mayorazgo podia constituir censo sobre los bienes vinculados por el tiempo de su vida, á no haber dispuesto lo contrario el fundador espresamente, prévia real licencia segun práctica; pero es de advertir que esta licencia, la hipoteca de los bienes vinculados y la sujecion de los mismos al pago de las pensiones anuales, solo tenian lugar cuando faltaban bienes libres que pudieran obligarse al censo.

¿Puede constituirse censo sobre una cosa comun ó indivisa? Entendemos que sí, á la manera que puede enajenarse: el que tiene parte en una cosa puede obligarla, no envolviendo en su obligacion la parte de su sócio, y por tanto solo podrá imponerse como carga peculiar del que constituye.

Los censos ya constituidos pueden subacensuarse ó acensuarse de nuevo, esto es, puede establecerse sobre ellos el derecho de percibir un rédito ó pension anual.

Puede constituirse censo sobre los árboles, mientras existan en el prédio: sobre los derechos de riego, caza y pesca, y por punto general sobre todo derecho análogo que produzca renta y esté en el dominio privado.

Grandes han sido las cuestiones de los tratadistas acerca de si el usufructuario, el superficiario, el enfiteuta y otros semejantes pueden imponer censo sobre los objetos que como tales les pertenecen respectivamente. La mayor parte, para evitar esta reñida controversia, establecen que el usufructuario puede instituirle en el hecho de percibir los fru-

tos; pero no en el mismo derecho de usufructo, porque aquel puede enajenarse y darse en prenda y este no. Por nuestra parte creemos que el usufructuario puede constituir sobre el mismo derecho de usufructo el de percibir una pension anual, que permanecerá en el que le adquiera tanto, cuanto el derecho de usar y gozar en la persona del usufructuario, á la manera que se dijo de los bienes vinculados y de los sujetos á fideicomiso y á restitucion.

Del mismo modo, el propietario puede imponerle sobre su finca, aunque otro tenga el usufructo de ella; mas no puede imponer servidumbre sin consentimiento del usufructuario, porque la servidumbre urbana ó rústica, consiste en cierto derecho de usar y gozar, y careciendo de él el dueño de la propiedad, no puede imponerla, mientras para imponer el censo le bastan su condicion y derecho como tal.

Por la misma razon el enfiteuta y el superficiario que tienen dominio útil respectivamente en la cosa enfitéutica y en la superficie, pueden constituir censo sobre ellas, si bien durará solo cuanto el enfiteusis ó el derecho de superficie.

En la habitacion ó derecho de habitar, que es servidumbre personal, puede tambien constituirse censo, pues aunque los antiguos jurisconsultos dudaron si podria enajenarse, arrendarse ó cederse á otro, decisiones posteriores del derecho resolvieron esta duda afirmativamente.

Asimismo puede constituirse en las servidumbres rústicas y no en las urbanas, siendo el fundamento de esta diferencia que las primeras pueden trasmitirse y aprovechan á otro vecino, al paso que no pueden trasmitirse á otro las segundas, porque le serian de todo punto inútiles.

§. 4.° *Rédito ó pension de los censos.*

Al tratar en el párrafo primero de esta seccion del precio ó capital, tocamos por necesidad los puntos de mas importancia referentes á la pension ó rédito. Aquella doctrina y los datos legales allí aducidos, tienen aquí inmediata y correlativa aplicacion.

Baste decir que desde la ley dictada por Felipe V (1) y estendida por Fernando VI (2) á la corona de Aragon, quedó la pension anual de los censos reducida al tres por ciento, y esta es en la actualidad para el consignativo y reservativo, escepto en algunas reducidas comarcas forales.

La del censo enfitéutico se estableció al respecto de tres por doscientos en cuanto á las casas y solares de Madrid (3) y aunque en general no se fijó por nuestras leyes, los jurisconsultos sostuvieron con buenas razones que su precio debia ser mayor que el de los demás censos. En el dia, segun la ley de 3 de mayo de 1823 restablecida en 2 de febrero de 1837 (art. 8.°), las partes pueden arreglar libremente la cuota de la pension y la del laudemio.

Las pensiones de los censos consignativo y reservativo debian consistir en dinero efectivo segun la ley recopilada, tercera de este título, y como en algunos de los antiguos reinos se habian establecido en fraude de ella muchos censos bajo el título simulado de perpétuos ó irredimibles, haciendo consistir la pension en vino, trigo ú otros frutos, se mandó por la quinta que todos ellos se reputasen redimibles, porque los abusos y daños que se quisieron impedir eran tan frecuentes y mas graves en estos. Pero aunque esta disposicion era tan general que comprendia los censos creados antes de su publicacion, se halla con todo autorizada por otra ley (la novena) la costumbre de ajustar el rédito en granos, regulando la paga de estos sin esceso alguno, lo que tuvo en su orígen fundamento, aunque ofrece grandes dificultades por la variedad de los precios. Los censuarios, en su mayor parte labradores, apartados de las grandes poblaciones en un pais tan mal dotado de caminos como el nuestro, vendian muy difícilmente sus frutos, y esto cedia á su vez en perjuicio del censualista, que cobraba la

(1) Ley 8, tit. 15, de la Nov. Rec. art. 2.°
(2) Id. 9, id., id.
(3) Id. 12, id., id.

pension con menor facilidad. De todos modos téngase presente que donde se hace el pago de los réditos en frutos, como sucede en Galicia, han de apreciarse estos con exactitud, de tal suerte que no se pague mas ni menos del tres por ciento establecido por la ley; en lo cual hay grande analogía con lo que los romanos decian *datio in solutum*.

La pension de los censos vitalicios es la de diez por ciento, y la de ocho y tres cuartos en los constituidos por dos vidas.

§. 5.° *Fiador del censo.*

En el contrato censual puede intervenir fiador, é interviniendo, queda obligado en su caso al pago de las pensiones vencidas; pero es una regla general que no pueden reclamarse de él, sin que anteriormente se haya acudido contra el censuario ó deudor principal, si está presente y solvente.

Cuando el fiador se obliga en la misma escritura como principal, lo que sucede con frecuencia, no ha lugar al beneficio de excusion.

Si se obliga simple y subsidiariamente, puede reclamar las pensiones que pagó por medio de dos acciones, la de mandato y la del acreedor, que se entiende cedida y trasmitida por este, como esplanaremos despues en su lugar.

Se ha cuestionado largamente si el fiador, que lo hubiere sido largo tiempo en el contrato censual, puede obligar al deudor, á que le releve de la obligacion y fianza. La ley 8.ª, título 18, libro 3 del Fuero Real, espresa haber terminado la obligacion del fiador, que lo haya sido durante un año, cuando no se fijó plazo; y Montalvo y Antonio Gomez dan á entender que esta ley se hallaba recibida por el uso y la costumbre. Olano fijó el término medio de que el espacio de cinco años, baste para obligar al deudor á relevar al fiador. La ley de Partida lo deja al arbitrio del juez (1). Solís, al contrario, entiende que aunque el fiador continúe en la obligacion ciento y mas años, no puede compeler al deudor á que le exima de ella, porque causando la continuidad de la pension anual una obligacion sucesiva, mientras no se redima el censo, y siendo esto notorio á las partes desde el principio del contrato, por la naturaleza del acto queda el fiador obligado *in perpetuum* y no puede pedir razonablemente que se le exima de la fianza; á la manera que el que dió fianza por el tutor ó curador no puede eximirse de la obligacion antes de que acabe la tutela ó curatela, porque esta obligacion sucesiva y la fianza que la robustece tiene cierta medida y duracion, á las cuales el fiador se ha sujetado naturalmente y desde luego.

El Parlamento de París seguia la práctica, juiciosa en nuestra opinion, de que no mediando pacto (pues si mediara deberia cumplirse, como diremos luego), si el fiador se obligó á ruego del deudor del censo, y el contrato contaba ya la duracion de diez años por lo menos, podia reclamar fundadamente que este le librase de la obligacion, devolviendo el capital dentro del plazo señalado por el juez, puesto que debió creer con razon que su compromiso no seria perpétuo, ni indefinido.

En todo caso habrá de estarse á la costumbre local, ó general si la hubiere.

Cuando el fiador redime el censo antes de espirar el plazo en que el deudor principal se habia obligado á verificarlo, no puede pedir á este que le indemnice hasta despues de cumplido.

El fiador puede usar del derecho de subrogacion y hacerse pagar los réditos en tal concepto; pero en este caso pierde su derecho propio para exigir la indemnizacion del capital, en atencion á que ambos derechos son absolutamente incompatibles.

¿El deudor y el fiador pueden estipular que aquel quede obligado á redimir el censo dentro de cierto tiempo? Sí, porque su objeto es que el deudor esté sujeto á eximir de la obligacion al fiador, pasado cierto plazo, lo cual procede conforme á derecho.

Se opone que este pacto es contrario á la esencia del contrato censual, segun la que el deudor puede redimir, pero no está obligado

(1) Ley 14, tit. 12, p.

á ello: mas esta consideracion, que es cierta respecto del acreedor y sus causa-habientes, no lo es respecto del fiador, que tiene en el contrato una significacion peculiar y distinta que puede y debe ser limitada por la duracion que su voluntad marque, siempre que no intervenga fraude, que el mismo fiador no sea sócio de los bienes del acreedor, y que no se entienda maliciosamente con él al tiempo de celebrarse el contrato, ponerse la condicion y ejecutarse esta. Al reparo de que así se abre la puerta al fraude, contesta atinadamente. Dumoulin «que el fraude no se »presume: de seguro es posible y esto es un »inconveniente; pero si bajo pretesto de tales »temores se prohibiese una convencion, que »es en sí muy lícita, resultaria otro inconve»niente mayor, el de no encontrar con facili»dad dinero las personas que lo necesitan »para sus negocios, por no hallar fiadores que »quisieran comprometerse á una obligacion »ilimitada.»

§. 6.° *Escritura.*

Siendo la índole de los censos en general la perpetuidad, nada mas adecuado que el que hayan de constituirse por escritura pública. Respecto del enfitéutico, lo establece así la ley de Partida (28. tít. 8.° Part. 5) «e por escrito, ca de otra guisa non valdrie.» Es decir, que la ley requiere la escritura pena de nulidad, y como dice Gregorio Lopez en su glosa, no solo al *probationem*; sino *pro forma.*

Respecto de los otros censos, no están tan esplícitas las leyes; pero á imitacion de lo prevenido por el enfitéutico: por la índole de perpetuidad en los mismos, pues que en otro caso, ya que se conservara memoria del contrato, y del precio por el pago de pensiones, desde luego se oscurecerian bien pronto las hipotecas, haciendo por este medio ineficaz el censo: por la ventaja grande de poder ejecutar respecto de los réditos, y sabido es que la ejecucion no procederia sino en virtud de instrumento que la traiga aparejada: por estas y otras razones, desde luego fué corriente el no otorgarse los censos, ni el enfiteusis, sino por escritura pública. Esto fué ya una necesidad establecidos los oficios de hipotecas y toma de razon, y lo ha sido mucho mas en los últimos tiempos, en que convertido el registro de aquellas, de un modo probatorio y de perpetuidad del contrato, como fué en su orígen, en un recurso de hacienda, ya en el pago de un tanto por 100, ya en el beneficio del papel sellado, llegó á mandarse hubieran de otorgarse por escritura pública hasta los contratos de arriendo, y con mayoría de razon toda trasmision de propiedad y su gravámen. Hoy, pues, es constante, que toda constitucion de censo, así como el reconocimiento de los mismos, doblemente si contiene subrogacion, ó designacion de nuevas hipotecas, ha de ser por escritura pública.

Esto por lo que hace al censo convencional. Los de otro género, como juros, vitalicios, etc., lo propio que su reconocimiento, renovacion ó modificacion, pueden serlo por documento *auténtico*, á veces por reales cédulas, reales órdenes, inscripciones, títulos de crédito contra el Estado, etc.

SECCION IV.

PACTOS Y OBLIGACIONES QUE SUELEN AÑADIRSE AL CONTRATO CENSUAL.

Cuando se celebra este contrato, á la manera que sucede en los demás, suelen añadir las partes algunos pactos y convenciones, que deben cumplir, siendo lícitos, ó estando bajo cualquier concepto admitidos por la ley, ó por la costumbre autorizada.

Anteriormente á la ley 23, tít. 15, lib. 10 de la Nov. Recop., dada por Cárlos IV, á principios de este siglo, era pesado y confuso todo lo referente á esta parte de los censos, y dió lugar á intrincadas é interminables controversias entre los jurisconsultos. Despues de ella pueden darse reglas mas sencillas. Segun la misma, pueden consignarse en las escrituras censuales los pactos, vínculos y condiciciones que se tengan por convenientes acerca de los plazos en que ha-

ya de verificarse la redencion del capital, moneda de pago de este y sus intereses, no escediendo del tres por ciento, y hasta el de renuncia válida y eficaz de facultades otorgadas por leyes anteriores. Esta misma disposicion se reiteró por real cédula de 3 de agosto de 1818 que, al derogar la de 7 de enero de 1805, dejó á las corporaciones y particulares *la debida plena libertad de celebrar sus contratos censuales, poner en ellos las cláusulas y condiciones que á bien tengan, y exigir su puntual cumplimiento.* Por último, la ley de 3 de mayo de 1823, restablecida en 2 de febrero de 1837, dispuso respecto del censo enfitéutico en su artículo 8.° que las partes puedan arreglar libremente la cuota de la pension y la del laudemio, por manera que hoy se dá gran latitud para la celebracion de estos contratos.

Los pactos ilícitos que, segun la ley y la jurisprudencia, anulan el contrato, son ordinariamente:

1.° El que impone al censatario la obligacion de redimir el censo.

2.° El de entregar un precio menor del legal.

3.° El de que los censos sean perpétuos ó absolutamente irredimibles.

4.° El que obligue al censatario á redimir por mayor suma que la recibida, á no ser que se compense este gravámen de una manera equitativa.

Estos pactos son contrarios al carácter y naturaleza del contrato censual, porque limitan la libre facultad de redimir el censo con igual suma y á su arbitrio, que es una condicion esencial del mismo contrato.

Son tambien contrarios á su naturaleza; pero no lo anulan, quedando ellos únicamente sin efecto, ó *como no puestos*:

1.° El que priva al censatario de enajenar sus bienes en general, ó los obligados especialmente al censo, sin el consentimiento del censualista ó acreedor á la pension.

2.° El que compromete al mismo censatario á quedar reducido á prision, si interrumpe el pago de los réditos.

3.° En general, todos los que infieren gravámen al censatario, á no ser que la obligacion impuesta á este, se compense con un aumento proporcionado en el precio ó capital.

Cuando los pactos añadidos son de la primera clase, esto es, de los que vician ó anulan el contrato, los réditos, ya satisfechos, se consideran como parte del capital, y al revés cuando ellos quedan sin efecto como no escritos, y el contrato subsiste. Algunos entienden que la declaracion de nulidad debe limitarse á los censos vitalicios, y que respecto de los demás en que la pension fuere mas alta que la designada por la ley, solo procede la reduccion ó rebaja: y aunque esto pueda negarse, y se niegue con buenas y fundadas razones, debe confesarse que el medio de la reduccion es en muchas ocasiones ventajoso, y debe recurrirse á él cuantas veces sea posible para no perjudicar á la conveniente firmeza y estabilidad de los contratos.

Donde no rige la Bula de Pio V, como sucede en España, no compete al censualista el derecho de retraer por disposicion de la ley; y fundado en ello, asienta Solís que es nulo el pacto en que el censatario se obliga á enajenarle la cosa censual antes que á otro, porque mengua su libre facultad; y al contrario válido el que autoriza al censualista para retraer el prédio censual por el mismo precio en caso de enajenacion espontánea, puesto que entonces ningun perjuicio infiere al censatario, que por él á nada se obliga, ni se priva de su derecho y libre facultad de enajenarlo. Interviniendo este pacto, puede el censualista reclamar la cosa censual de cualquier poseedor, porque esto es lo que verdaderamente se entiende por retraer ó sacar por el tanto. Para evitar cuestiones, conviene sujetar espresamente á este pacto la hipoteca censual.

Es válido y puede añadirse, aunque se ha sostenido con empeño lo contrario, el pacto que autoriza al censualista, para que, si no se le paga la pension, disfrute la cosa acensuada, de modo que satisfecha aquella, la restituya al censatario con el resto de los frutos. V. CENSOS DE NAVARRA.

SECCION V.

DEL RECONOCIMIENTO Y REDUCCION DE LOS CENSOS.

El reconocimiento de los censos no está mandado *pro forma*; como la escritura de constitucion, segun dejamos espuesto en la seccion 3.ª; pero suele ser una condicion del contrato, y en todo caso es de práctica general, como medio probatorio para perpetuidad del contrato y sus condiciones y para impedir que lleguen á ignorarse las hipotecas. La reduccion, ora legal, ora convencional, es siempre sugerida por la justicia ó la equidad, segun pasamos á demostrar.

§. 1.° *Del reconocimiento de los censos: subrogacion y liberacion de la hipoteca.*

El reconocimiento es un acto por el cual el nuevo poseedor de la finca, sobre que se impuso el censo, renueva la obligacion del primitivo censatario á favor del censualista.

El nuevo ó tercer poseedor del prédio afecto á la obligacion censual, puede ser compelido á reconocer el censo y pagar al censualista el rédito anual ó á dimitirle, esto es, renunciarle en favor del mismo, segun lo defienden muchos y graves autores, y lo ha recibido la práctica. Pero téngase muy presente que el censualista, cuando el poseedor es mero *tenedor* de la hipoteca por título singular, no puede ejercer contra él la accion de que reconozca el censo pura y simplemente, que como personal no tiene fuerza contra él; si no disyuntivamente para que reconozca el censo, ó en otro caso dimita la hipoteca. Si el poseedor trae causa del constituyente, ó anterior reconociente, puede pedírsele la mera renovacion ó reconocimiento, porque ya venia ligado con obligacion personal.

Una vez reconocido el censo por el nuevo poseedor, puede obligársele tambien al pago de las pensiones anteriormente vencidas, escepto el caso de que el censualista, pudiendo reclamarlas del primitivo deudor, no lo hubiese hecho, pues entonces debe imputarlo á su negligencia.

El mero reconocimiento, aun cuando no aparezca el título primordial, ó escritura de constitucion, obliga al que le hace, sus sucesores y causa-habientes, siempre que no puedan hacer constar que la cosa acensuada es libre, ó exenta de la carga censual, porque constando legítimamente tales estremos, el reconociento queda sin valor, ni efecto, pues es una obligacion relativa, que depende de la principal, y es como el que paga con error.

El reconocimiento virtual y tácito obligan tambien al que lo presta y á sus causa-habientes, como cuando al celebrar la venta del prédio censual, el censatario espresó que la enajenaba con la carga de pagar el censo, si bien sobre esta aseveracion ha de recaer la circunstancia de que le hubiese en efecto satisfecho, ó confesado el deber de hacerlo en documentos ó de otra manera semejante.

El reconocimiento obliga despues á los causa-habientes del que reconoció.

El mero tenedor de la hipoteca por título singular, no está obligado á reconocer; pero negándose, tiene que dimitir la hipoteca. En este caso no está obligado á pagar los réditos vencidos, si hubiese sido poseedor de buena fé; pues si lo fuese de mala, sabido es que las leyes no favorecen el dolo, y que el poseedor de mala fé no hace suyos los frutos.

La subrogacion y liberacion de hipotecas, son cosas que ocurren frecuentemente, pero ligándose íntimamente al procedimiento para su realizacion; véase la seccion octava.

§. 2.° *De la reduccion de los censos.*

Reducir un censo es lo mismo que disminuir su producto anual ó minorar su pension. Esta reduccion procede de los preceptos de la ley ó de la voluntad privada, espresamente consignada en el contrato.

Las leyes de la Novísima Recopilacion, como se vé en la parte legislativa y en la seccion 3.ª, consignaron la reduccion legal de los censos en diversas épocas, atendiendo

al respectivo valor del dinero y á otras consideraciones económicas y de justicia.

La reduccion nacida de la voluntad privada es un pacto que disminuye la pension, cosa que está en el arbitrio del censualista, pues como dueño puede renunciar parte de su derecho.

Cuando la finca sobre que se impuso el censo era de mayorazgo, debia intervenir el inmediato sucesor en la forma prescrita por derecho: si pertenecia á capellanía, debia oirse al capellan y á los patronos y era útil tambien y conveniente la intervencion judicial; pero las modernas leyes de desamortizacion han hecho ociosas casi todas las limitaciones de este género.

La reduccion de los réditos en nada altera el capital del censo, que continúa en su primitivo estado.

Creado el censo á un precio menor que el establecido por las leyes, y satisfechas, sin embargo de ello, las pensiones por largo ó larguísimo tiempo ¿puede oponerse el acreedor á título de prescripcion á que se reduzca y modere el precio legal? Hay quienes sostienen que si y se fundan en que durante ese ó menor plazo adquiere derecho á la pension el que no ha entregado ningun precio, como sucede cuando interviene justo título, no verdadero, sino existimado, ó apreciado como tal, á saber; division, legado, donacion ú otro análogo; y en que el tiempo inmemorial tiene fuerza de ley. Pero estas consideraciones no pueden aceptarse en este caso como válidas; pueden admitirse mientras no consta el orígen vicioso; en cuanto es conocido, desaparece la base del derecho, y no puede utilizarse el trascurso del tiempo por largo que sea. La presuncion que nace de la antigüedad, cede ante la verdad del hecho irrecusable. Ademas la ley decidió espresamente esta cuestion (1). «Y en cuanto á los juros y censos y contratos, dice, hasta aquí hechos á menos precio de los dichos catorce mil maravedís el millar, mandamos que asimismo sean reducidos y reducimos al dicho precio y respecto de á catorce mil el millar, *no embargante que sean antiguos y de mucho tiempo impuestos.*» Esta regla se estiende á los herederos y sucesores singulares del acreedor, aunque, estimándolo justo por error de hecho y con buena fé, hubiesen recibido la pension por gran número de años.

Siendo hoy redimibles todos los censos; todos son reducibles: la prohibicion legal que liga á los particulares para no esceder del precio, ó interés; no obsta para disminuirlos, como tampoco para constituirlas á menos precio y rédito que el legal. La reduccion en este caso, siendo una novacion, es una reconstitucion, y como nueva constitucion del censo modificado.

SECCION VI.

ACCIONES QUE NACEN DE LOS CENSOS Y NATURALEZA DE SU HIPOTECA.

Las acciones censuales son desde el principio las mismas en la esencia; pero en los últimos tiempos han sufrido alguna modificacion en el modo, siguiendo en ello las vicisitudes del procedimiento judicial. De este último punto tratamos en la seccion 8.ª: del primero en la presente, en que tambien comprendemos la siempre debatida cuestion de la naturaleza de su hipoteca.

§. 1.° *Acciones que nacen de los censos.*

Del censo enfitéutico nacen dos acciones, personales y directas ambas, puesto que una y otra parte se obligan por la misma naturaleza del acto. Las dos se llaman enfiteuticarias. Tiene la primera el enfiteuta contra el dueño directo para que le entregue el prédio segun lo estipulado, y la segunda el dueño directo contra el enfiteuta para que le satisfaga el cánon, laudemio en su caso y demás cargas convenidas.

Tambien dirige el enfiteuta la accion de este mismo nombre contra cualquiera poseedor del prédio enfiteuticario, á fin de que

(1) Nota 4.ª á la ley 8, tit. 15, lib. 10 de la Nov. Recop., que recuerda la ley 6, tit. 15, lib. 5.° Recop., formada del capítulo 127 de las Córtes de Madrid de 1563; en ella se leen las palabras arriba citadas.

se le restituya con los frutos, daños é intereses.

Aunque del enfiteusis nace sin duda un derecho real, el enfiteuta es reconvenido personalmente en juicio, porque la obligacion principal emanada del acto ó contrato pesa sobre la persona. Véase, sin embargo, lo que decimos en la seccion 8.ª

Las demás clases de censos dejamos dicho, que, como contratos nominados que son, producen la accion nominal y específica de censo, que compete al censualista para reclamar del censatario el exacto pago de la pension anual. Esta accion es hasta aquí personal como todas las que nacen de contrato.

El censatario ó sus herederos y causahabientes pueden ser tambien reconvenidos en juicio por la accion hipotecaria; pero en este caso, siendo meramente real la accion que se ejercita, quedan aquellos libres tan luego como abandonen al censualista la cosa ó prédio afectos á la carga del censo, con las pensiones vencidas, pues las deben por obligacion mista ó personal con hipoteca.

Es bien sabido, que cuando cualquier deudor resulta insolvente, los acreedores se dirigen contra sus bienes y reclaman el pago en la parte posible, conforme al privilegio y anterioridad respectivos de sus créditos. En sus artículos correspondientes, para evitar repeticiones, se esplica el órden de preferencia entre los acreedores hipotecarios, limitándonos ahora á advertir, que la mayor parte de los litigios en materia censual proceden de la insolvencia de los réditos, y que siempre que se impone censo sobre una cosa ó prédio, obligándola á la seguridad del capital y las pensiones, el vendedor ó dueño será preferido en ella á cualquier otro acreedor. Esta es la deduccion práctica y la que importa consignar á nuestro objeto.

Aun enajenada la cosa sujeta al censo, el censatario ó sus herederos pueden ser reconvenidos, y tampoco les escusa del pago de la pension la circunstancia de esterilidad ó pérdida de la cosecha.

Sucede frecuentemente que, al imponerse un censo, se comprometen al pago de la pension ó rédito anual dos ó mas personas, y conviene consignar aquí de qué manera quedan obligadas, y se les puede compeler á su realizacion.

Cuando resulta de la escritura censual que dos ó mas se obligaron *in solidum* al pago de la pension, el acreedor ó censualista podrá reconvenirlos igualmente *in solidum*, aunque hubiesen sujetado separadamente sus bienes á la obligacion contraida, pidiendo á cualquiera de ellos el pago íntegro de las pensiones vencidas; pero no entablar contra todos la accion hipotecaria, ni acudir en juicio contra cualquiera de ellos á prorata. Si el reconvenido no las satisface, el acreedor puede dirigirse á otro, una vez que hasta el completo pago quedan íntegras las acciones personales é hipotecarias contra los demás reos de deber, aunque haya recaido contra el primero fallo condenatorio.

Verificado el pago total de la pension por cualquiera de los obligados á ello, podrá este repetir del co-reo ó co-reos de deber, su parte respectiva, en virtud de la carta *de lasto*.

El fiador censual, cumplida su obligacion subsidiaria, puede reclamar las pensiones que satisfizo en lugar del deudor principal por medio de dos acciones: la de mandato y la peculiar del censualista, que se entiende cedida y trasmitida por este. Si intenta la primera, procede el juicio ordinario; si aprovecha la segunda, y el instrumento reune las circunstancias necesarias, puede intentar la vía ejecutiva, acompañando tambien la carta de lasto, ó testimonio de la sentencia y pago, representando el derecho del censualista; y en este caso es preferido, como aquel, á otros acreedores, aunque el derecho de estos precediese en el órden del tiempo al pago de las pensiones, hecho por el fiador. Cesa esta regla, cuando el fiador se compromete á satisfacerlas en representacion del censatario, puesto que entonces se estingue la obligacion principal, y por tanto no puede cederse. Otra cosa es, si el pago de las pensiones se hace indefinidamente, sin espresar en nombre de quién: dado este caso, aprovecha la cesion al fiador, siempre que se haga en el acto. Basta la mera enunciativa

Lorenzo Arrazola

del censualista de haber recibido su importe, para que el fiador pueda reconvenir al censatario en su representacion; pero los tribunales deben proceder con mucha cautela cuando la escritura ó los actos subsiguientes á ella ofrezcan sospecha, porque frecuentemente las confesiones de recepto son simuladas y contienen fraude y dolo.

Se disputa, si dejando el censatario de pagar las pensiones y empezando á verificarlo el fiador, puede este, mediante la cesion del censualista, y reasumiendo su derecho, obligar al censatario á que redima el censo, y mientras no lo hace, exigirle á su vez el pago de los réditos.

Los que responden afirmativamente alegan, que el fiador ó cesionario, en tal supuesto, tiene dos personalidades diversas, las cuales producen derechos diversos tambien: que el censatario no pierde mas en este caso que en el de haber conservado su derecho el censualista ó habérsele cedido á un estraño: y que no debe tolerarse que, faltando á la equidad, escatime esta racional ventaja al fiador, á quien tal vez no guarda fé ni palabra, y á quien de todos modos no deben perjudicar el auxilio y favor prestados, lo que aconteceria, si no le fuese lícito obtener del censualista una cesion válida y eficaz.

No obstante, la fuerza que á primera vista tiene esta argumentacion, es lo cierto que el fiador como cesionario del censualista, no puede obligar al censatario á que redima el censo, y le pague entretanto los réditos anuales, ya porque la facultad de redimir es y debe ser libre en el último; ya porque el cesionario en el momento que quiere usar del derecho trasmitido por el censualista, se obliga á pagar las pensiones como deudor perpétuo mientras quiera tener el capital y le sea lícito disfrutar de él, pues en una misma persona no pueden reunirse al mismo tiempo el derecho de cobrar la pension y el de retener el capital ó precio. Además, la obligacion principal y la fideyusoria no pueden reunirse en una misma persona, puesto que cumplida aquella, se estingue necesariamente esta, y así desde que el fiador admite por cualquier motivo la cesion, y adquiere el derecho de percibir los réditos, espira la obligacion fideyusoria y cuanto de ella dependia.

Si eligiera el fiador renunciar al pago de los réditos y obligar al censatario á que redima, podrá hacerlo en el caso de haberse convenido espresamente desde un principio; al paso que si solo le prometió el censatario indemnizarle, no se puede obligar á la redencion, porque la simple promesa de indemnizar, se entiende conforme á la naturaleza ordinaria de la obligacion principal.

Por último, establecido el censo á un precio distinto del señalado por la ley, y pendiente el pleito sobre su reduccion, opinan algunos que el mismo instrumento, base de aquel procedimiento, puede servir para reclamar ejecutivamente las pensiones, porque si bien la *litispendentia* en la vía ordinaria, hace cesar la ejecutiva, cuando se trata de la nulidad del contrato, no sucede lo mismo cuando se trata solo de su rescision ó moderacion, en cuyo caso deben pagarse las pensiones mientras dura el litigio, dando el que las perciba la caucion oportuna. Otros entienden que ni el censo nulo, ni el constituido ilegalmente en cuanto al precio, constando estos vicios desde luego, pueden dar lugar á ejecucion respecto de los réditos durante el litigio, ya porque el petitorio absorve al posesorio, ya porque las leyes repugnan que se recurra á la vía ejecutiva á la sombra de instrumentos públicos, referentes á un contrato que consta ser injusto ó ilegal.

§. 2.° *De la naturaleza de la hipoteca censual.*

Se ha controvertido mucho, si la cosa acensuada tiene solo el carácter de hipoteca, ó si la imposicion del censo constituye mas bien en ella cierta manera de servidumbre, como creyeron entre otros, Gregorio Lopez, Simancas, Molina, Avendaño, y últimamente Salas. Juzgan estos autores que el censo constituye un accidente del prédio tan fijo é inherente á él, que mientras existe y rinde productos, existe el censo; pero si perece y queda destruido, tambien aquel se estingue.

Mas aun que el paborde Sala sigue esta opinion por estimarla mas fundada, y porque á ella se acomodan los efectos observados en la práctica, todavía confiesa que en el uso general de hablarse la llama hipoteca, y con él se conforma, á condicion de que se la califique de irregular ó anómala, como lo es en efecto, y lo atestiguó ya Cobarruvias al sostener la opinion contraria, que profesaron tambien Juan de Medina, Miguel de Palacios y cuantos defienden ser lícitos los contratos censuales impuestos sobre la persona. Tampoco faltó quien emitiera una doctrina conciliatoria y mista entre ambos pareceres.

A nuestro juicio, el censo, aunque participa de algunas circunstancias especiales de la hipoteca y de la servidumbre, no es propiamente una ni otra, sino una creacion *sui generis* primero de la costumbre y luego de la ley. Encierra ciertamente un verdadero contrato de compra y venta, porque para alcanzar toda la plenitud de efectos deseados por los contrayentes, no ha menester de hipoteca, requisito que solo se le agrega para mayor seguridad del crédito, del pago de la pension. De aquí deducimos que no puede imponerse censo en prédio alguno, sin que preceda obligacion personal á que se adhiere la del prédio, si bien puede separarse de comun acuerdo aquella y esta, y por consiguiente quedar íntegra la obligacion personal de pagar las pensiones despues de perecer el prédio, ó por el contrario, vivo el derecho constituido sobre este, aunque la accion personal no exista ya.

Por lo mismo que la cosa acensuada tiene un carácter propio, presenta condiciones que la diferencian de las hipotecas regulares ó comunes. Asi, por ejemplo, constituido el censo consignativo, puede el censualista obligar al pago de los réditos al nuevo poseedor de la finca gravada ó hipotecada, prescindiendo del que la enajenó, ó sea del deudor principal, circunstancia esencial y que no puede omitirse en las hipotecas ordinarias. Tambien se diferencia de estas la hipoteca censual en que se divide la accion segun el número de poseedores, y reconviene en juicio á cada uno de ellos solamente por su parte respectiva, aunque en la práctica, olvidando esta distincion, y ateniéndose á la condicion general de las hipotecas, se estima indivisible. Se diferencia, por último, de la servidumbre en que el censo puede constituirse, hecha abstraccion del prédio, en solo la persona, y además en que la servidumbre personal, se estingue faltando el sujeto á quien se debe, mientras el derecho de percibir el rédito censual pasa á los herederos, puede cederse á un estraño, y muerto el primer acreedor, dura indefinidamente hasta que se redime.

De todos modos quede asentado, que aunque el valor de la cosa afecta al pago de la pension sea inferior, no solo al capital, sino á la pension misma, el deudor tiene la obligacion de satisfacerla íntegra, una vez que por medio de la accion personal se le puede reclamar la diferencia.

Cuando la hipoteca censual se divide por cualquier motivo entre varios poseedores, se duda si cada uno de ellos puede ser reconvenido por toda la pension ó solo por su cuota respectiva. La mayor y mejor parte de los tratadistas sostiene que puede exigirse la pension *in solidum* á cualquiera de los poseedores y tal ha sido comunmente la práctica de los tribunales; si bien el censualista puede dividir la accion dirigiéndola colectivamente contratados.

SECCION VII.

ESTINCION DE LOS CENSOS.

Al esplanar este punto de la materia censual, es donde mas claramente aparece la anomalía de la hipoteca en los censos, y por consiguiente de la índole del contrato. Si este es pleno y propiamente de venta, la destruccion de la hipoteca no estinguirá el censo, esto es, el derecho de exigir pension y la obligacion de pagarla; pues en tal caso la hipoteca es un accesorio, mera garantía de la obligacion y contrato principal; el cual en los contratos comunes, subsiste aun cesando su accesorio. Si como otros sostienen, el con-

trato es de servidumbre, y servidumbre real, esta cesará, cesará el censo, sin derecho á reclamar el capital, ni otra cosa, pereciendo la hipoteca. Y quedarian todavía el *comiso*, el *laudemio*, el *quindenio* y otros incidentes, que no son propios ni de las servidumbres, ni de las ventas; resultando de todo ello, segun antes hemos asentado, que el contrato de censo es un contrato *sui generis*, especial, y que de su especialidad, determinada por la ley, por la jurisprudencia y por la costumbre, han de tomarse las reglas para determinar su naturaleza y para resolver las cuestiones que en la materia ocurren, y no de analogías, que pueden inducir á error. Que pueden inducir y que no bastan por otra parte para poner de acuerdo á los autores, se vé claro en los párrafos subsiguientes, sobre la estincion de los censos.

§. 1.° *Destruccion ó esterilidad superveniente de la hipoteca.*

Hablamos de la esterilidad *superveniente* de la hipoteca, pues la originaria, ó coetánea al contrato, afectaria la validez del mismo, toda vez que la pension gravita principalmente sobre los frutos de la hipoteca; y este vicio del contrato es distinto de la estincion del censo, que es de lo que tratamos.

No parece puede haber duda en que pereciendo por caso natural la hipoteca, se estingue el censo: el enfitéutico y reservativo, porque sobre lo que no existe no puede haber dominio: el consignativo por falta de objeto sobre que recaiga. Pero ha de advertirse que si la hipoteca perece ó se hace completamente improductiva por dolo ó culpa del censatario, aunque el censo se estingue por el pronto, y en el hecho, no sus derechos, y quédale al censualista el de exigir la subrogacion de nuevas hipotecas; y si no el reintegro del capital y los daños y perjuicios que se le hayan seguido por tal causa imputable. Esto sin perjuicio de la obligacion personal, si además se consignó en la escritura. Pero ocurre muchas veces que la hipoteca no perece del todo y que solo se destruye una parte de ella, y entonces se disputa con empeño si el censo subsiste íntegro ó se minora en una parte proporcionada. La opinion mas razonable y admitida es que el censo subsiste íntegro, mientras los productos de la porcion que resta sufraguen al pago de la pension, porque el censo está constituido sin distincion sobre toda la cosa y cada una de sus partes, porque las cosas, segun el buen sentido y los principios de derecho, perecen para su dueño, y porque pudiéndose imponer de nuevo otro censo del mismo valor en la parte que se conserva, seria irregular y absurdo que no subsistiera el antiguo.

Turbó algun tanto esta doctrina el tenor de la ley 28, tít. 8, Part. 5. Segun ella, el censo enfitéutico se estingue cuando solo queda y se salva de la hipoteca menos de la *ochava parte*. Los autores, sin embargo, han aprendido, y la razon persuade que la ley parte del supuesto de que dicha porcion menor de la octava parte, no produzca frutos para cubrir toda la pension, y no solo eso, sino que el censo deberá pagarse á prorata, si los frutos no sufragasen para mas. Asi lo estableció el citado motu propio de Pio V: *volumus ad ratam perire*, dice del censo, cuando la hipoteca se deteriora ó esteriliza; y aunque está mandado suplicar en España los autores sostienen no lo fué precisamente en este punto. Algo insostenible es esta opinion; mas por fortuna es ociosa, pues no es necesario invocar la disposicion pontificia como ley; y basta hacerlo como *muy autorizada doctrina*, de acuerdo con nuestra jurisprudencia y general costumbre. Ni ¿en qué razon de justicia podria fundarse otra cosa? Vendria asi á ser posible que solo el censualista sufriese todo el infortunio, si la parte perdida ó deteriorada de la hipoteca no valiese mas que el censo de que se libraba el censatario.

Aun tenemos que añadir un ejemplo, no poco violento, que ofrecen los tiempos modernos. Sabido es que muchas escribanías y oficinas públicas, enajenadas de la corona, fueron incorporadas á esta, ó mas bien secuestradas despues de 1834, sin indemnizacion. Muchos de estos oficios estaban gravados con censos. Los censualistas han dirigi-

do ejecuciones por los réditos vencidos contra los dueños de derecho de estos oficios, ó mas bien, terceros perjudicados que esperan, no ya la hipoteca; pues se la ha apropiado el Estado, sino la indemnizacion, que segun se hace esperar, muy tarde llegará, si llega. Estos censatarios se han defendido diciendo que la hipoteca ha perecido para ellos, ó por lo menos que se ha hecho casi estéril; pues hoy no rinde mas frutos que la esperanza del reintegro del capital, que por otra parte no puede reputarse fruto; y sin embargo, algunas veces hemos visto declarar que no habia méritos para despachar la ejecucion, absolviendo despues de la *demanda propuesta* en juicio ordinario; pero otras veces hemos conocido espedir ejecucion contra los bienes del dueño despojado, sobre todo si habia obtenido la gracia personal de servir el oficio, concedida por equidad á tales dueños en 1839, y espedirla por la pension íntegra, cuando á lo mas habria de ser á prorata de utilidades, y es lo único sostenible.

Hay casos en que se duda si la hipoteca se ha destruido completamente ó en parte, y lo mismo si ha quedado temporalmente infructífera ó estéril para siempre, y respecto de ellos en obviacion de gastos y litigios, el censualista tiene el derecho de obligar al censatario á que pague puntualmente la pension ó abandone aquella.

Si la cosa destruida vuelve á repararse, y la improductiva á hacerse fructífera, la opinion mas segura, aunque se contradiga por muchos, es la de que renacen el censo y la obligacion de pagar las pensiones, á la manera que sucede en el usufructo; pero el censualista no podrá exigir las pensiones correspondientes á los años en que la cosa permaneció destruida ó infructífera. Esta doctrina no tiene duda alguna respecto de los prédios: en cuanto á los edificios hay que distinguir. La opinion del Paborde Sala que los comprende sin limitacion en la regla anterior, alegando que el censo permanece *in habitu* en el solar y está como en suspenso, nos parece exajerada. Arruinado un edificio, la hipoteca desaparece casi en totalidad; el que se reedifica es una nueva entidad que no puede enlazarse con la anterior; y lo equitativo parece que subsista la pension respecto de lo que el solar valga en sí mismo y considerado aisladamente. La analogía é igualdad entre el prédio destruido y la casa arruinada existiria cuando esta, siguiendo en pié, dejara de dar producto por no poder habitarse ó alquilarse en virtud de una causa permanente. Es de notar, sin embargo, que si en el caso supuesto de arruinarse el edificio, valiera tanto, que sobre él pudiera muy bien constituirse el mismo censo, considerado el interés de su valor capitalizado al precio legal, el censualista estará en el caso de proponer y pedir decididamente al censatario, que reconozca y pague la pension, ó dimita el solar.

§. 2.° *Dimision de la hipoteca.*

Un tercer poseedor por título singular, que ha poseido de buena fé y no ha reconocido el censo, dimitiendo la hipoteca, se libra de toda responsabilidad. No hay lógica, ni conveniencia en esta práctica. Si el censo se impone en consideracion á los frutos mas que á la sustancia de la hipoteca, esta no puede representar aquellos; y sin embargo, la práctica de las dimisiones en el caso de que vamos hablando es constante. Se aplica al tercer poseedor la regla del derecho comun de que el que posee de buena fé, hace suyos los frutos. Esta regla seria sin duda equitativa, cuando dicho poseedor no pudiera reintegrarse por eviccion, pues entonces sufriria tambien una considerable pérdida; mas no lo es, ó lo es mucho menos en el caso opuesto. Repetimos, sin embargo, que la práctica es como dejamos dicho (Véase la seccion 8.ª). Dimitida asi la hipoteca, se estingue el censo.

Se estingue tambien en el caso de deterioro de la hipoteca y de la alternativa propuesta por el censualista para que el censuario reconozca ó dimita. Cuando se verificase esto último, concluye el censo.

Concluye, por último, si el censuario *reintegra*, esto es, solvente de todos los réditos vencidos, dimite ó abandona la hipoteca al

censualista, y este la acepta, ora espontáneamente, ora en virtud de condicion de la escritura, cuyo caso viene á reducirse al de consolidacion de dominio.

§. 3.° *Venta judicial de la hipoteca.*

Sucede alguna vez en la práctica que el censualista, para hacerse pago de las pensiones vencidas, no tiene otro recurso que el de dirigir su accion contra las hipotecas, ó por hallarse *baldías*, sin poseedor conocido, ni existir quien traiga causa de los constituyentes, ó á causa de hallarse poseidas por un tercero á virtud de título singular sin trato anterior, como ocupacion, prescripcion, etc.: en estos casos y otros análogos se vé claro que vendida la hipoteca, sin poder pedir á nadie renovacion ó subrogacion de otra, se estingue el censo.

§ 4.° *Del comiso.*

La ley 3.ª, tit. 66, lib. 4, del Código romano consignó espresamente el comiso del prédio enfitéutico, y entre nosotros la 28, título 8, Partida 5, estableció tambien que cuando el enfiteuta no pagara en tres años (ó dos siendo iglesia), la pension al dueño directo, caeria de su derecho, y la cosa en comiso.

Posteriormente, la 1.ª, tít. 15, lib. 10 de la Nov. Recop., 68 de Toro, le admitió para todos los censos sin distincion, siempre que se hubiera pactado de una manera espresa. «Si alguno, dice, pusiera sobre su heredad »algun censo, con condicion que si no pagare á ciertos plazos que caya la heredat en »comiso, que se guarde el contrato y se juzgue por él, puesto que la pena sea grande »y mas de la mitad.» La ley, como se vé, habla en términos generales y comprende todas las clases de censos, escepto el vitalicio; siendo cansadas y ociosas las disputas de los intérpretes que pretendian, unos que se limitaba esclusivamente al reservativo, y otros que al consignativo. Y aunque muchos jurisconsultos repugnaron este pacto como contrario á la naturaleza del censo, y otros sostienen que ni la ley de Partida, ni la de la Novísima están en observancia, fuerza es, á nuestro juicio, considerarle válido y eficaz, en el caso de no cumplir el deudor su obligacion de pagar las pensiones, cuando nuevas leyes han declarado á las partes árbitras de establecer los pactos y cláusulas que vieren convenirles.

Indudablemente la pena es desproporcionada á la falta, y bajo este concepto muy gravosa, con especialidad en el censo consignativo; pero no es lo mismo establecerlo como condicion natural y regla perpétua del contrato, que sancionar su ejecucion como una pena que los contrayentes se imponen á sí propios espontánea y deliberadamente. En su mano está evitarla cumpliendo con exactitud sus deberes y compromisos, y lo mas que podria hacerse, seria conceder á todos los deudores de censos el plazo de diez dias otorgado por la ley de Partida (1) á los enfiteutas para subsanar su malicia ó negligencia.

En el reservativo, como muy semejante al enfitéutico, no hay grave perjuicio; además de que el propietario que cede el pleno dominio de su finca, puede muy bien, y con justicia, no querer concederla de otro modo. Por punto general, la voluntad de las partes es y debe ser la ley de los contratos.

Respecto del enfiteusis, la ley de Partida, arriba citada, otorgaba al dueño directo la facultad de tomar por sí propio la cosa caida en comiso sin pedir al juez la posesion; pero la práctica no admitió esta parte de la ley y con razon, porque siempre suele haber resistencia, y en este caso vale mas implorar la autoridad y fallo judicial, evitando perturbaciones lamentables y peligrosas.

Tambien sufre el enfiteuta la pena de comiso, si la vende ó empeña á persona mas poderosa ó que no pueda ser compelida al pago de la pension con igual facilidad. Gregorio Lopez en la glosa 14 asienta, que caerá en la misma pena, aun vendiéndola á persona igual, si lo hace sin requerir antes

(1) Ley 28, tit. 8, Part. 5.

al dueño directo; pero no procede, porque no se halla comprendido este caso en ley alguna, y seria además un gravámen de entidad, como hoy no los tolera la jurisprudencia en materia de censos.

§. 5.° *De la consolidacion de dominio.*

Tiene lugar la consolidacion de dominio cuando se reunen y confunden por cualquier motivo legal en una sola persona los derechos correspondientes al censuario y al censualista. Este modo de estinguirse los censos es tan claro de suyo, que debemos omitir por innecesaria toda clase de esplicacion ó comentario.

§. 6.° *Redencion.*

La redencion es uno de los medios comunes y frecuentes de estinguirse los censos. Procede cuando el deudor ó censatario devuelve espontáneamente al censualista el capital del censo y los réditos ó pensiones que le deba. El reintegro del capital se ha de hacer de la manera y por la suma consignadas en la escritura de imposicion, si esta las espresa, y no haciéndolo, conforme á las leyes de la materia y á la práctica de cada pueblo. Puede efectuarse la redencion devolviendo todo el capital ó parte de él, aun cuando el censualista se niegue á admitirlo. Asi lo establecieron las constituciones de Martin V y Calisto III, que dieron forma á estos contratos, para hacerlos menos gravosos y aliviar la suerte de los que necesitaran recurrir á ellos, y asi lo admitió el derecho civil. Pero como la palabra parte, usada genéricamente, significa segun algunos, la mitad, y la facultad de hacer pagos parciales es contraria á la doctrina comun sobre pagos, opinaron los jurisconsultos en su mayoría no ser lícito al deudor redimir una parte menor que la mitad del capital. En la práctica, sin embargo, hemos visto admitir consignaciones de la tercera parte, y deben admitirse aun de la cuarta, ó la quinta en censos cuantiosos, en que una quinta, ó una sesta parte sean mayores que todo el capital de censos regulares. Mediando pacto espreso fijando la redencion parcial, no cabe duda en que debe observarse, hallándose autorizadas las partes, como lo están, para establecer los que estimen convenientes. Si nada se estipuló, podrá redimirse por mitad el capital que no esceda de cien mil reales, y por terceras partes el mayor de esta suma, aunque se haya convenido lo contrario (1). Y esto tanto mas cuanto que desde antiguo era práctica de nuestros tribunales y doctrina de los intérpretes, que el pacto de no hacer la redencion por partes, era nulo á no compensarse este gravámen con mayor precio del que tasan las leyes. Hay dos escepciones á esta regla, á saber: cuando el censatario oculta las cargas afectas á la cosa acensuada, y cuando invitado ya por él el censualista para proceder á la redencion, intenta retraerse de ella.

Cuando el censo es muy antiguo, y desconocido el capital, se valuará con arreglo á costumbre, donde la haya, y donde no, se ha de formar el capital por la cuota de la pension, esto es, á razon de ciento por tres (2).

Segun las leyes recopiladas, todos los censos pueden redimirse, con la diferencia de que, por los redimibles solo se paga el capital sencillo, y por los irredimibles el doble. En caso de duda se presumirán redimibles, porque la interpretacion se inclina siempre á lo menos gravoso, conforme á las reglas del derecho. En el dia hay que atenerse á la real cédula de 3 de agosto de 1818 en la cual, como ya digimos, se ordena que los censos se arreglen en un todo á las condiciones que estipulen los contrayentes, y se derogan las anteriores disposiciones legales, contrarias al libre convenio de los particulares.

Hemos asentado que la cualidad perpétua de *irredimible*, es perjudicial por diversos conceptos; pero no es menos cierto que hay muchos casos y circunstancias especiales que aconsejan prolongar la redencion por un plazo no muy largo, y tenemos por indu-

(1) Ley 16, tit. 15, lib. 10 de la Nov.
(2) Ley 21, tit. 15, lib. 10, Nov. Recop.

dable que conduce principalmente al mayor fomento de la agricultura, porque asi se toma mayor interés en el cultivo de fincas que las mas veces pasan de personas menos cuidadosas, á otras mas activas y eficaces. En el censo consignativo no milita esta importante consideracion y podria ser mas corto el plazo, si bien respetando en uno y otro caso la voluntad espresa de las partes, segun la regla general establecida. Asi lo estima con buen acuerdo el proyecto de Código civil, disponiendo que las partes podrán pactar que no ha de redimirse durante la vida del acreedor ó de una tercera persona determinada, ó en cierto número de años, que nunca escederá de diez respecto del consignativo, estendiéndose en cuanto al reservativo hasta sesenta.

La redencion del censo hecha por el pupilo ó el menor sin la autoridad del tutor ó curador ó el mandato del juez, es ineficaz, y á pesar de ella pueden reclamarse las pensiones; doctrina que se estiende á la dimision ú ofrecimiento del capital hecho al menor, al furioso y al pródigo impedido de administrar sus bienes, que gozan del derecho y privilegio de menores, puesto que debe hacerse al que está autorizado para recibirle y no á otro, salvo el caso de que se haya mejorado la condicion de cualesquiera de ellos, porque entonces nace la escepcion de dolo. Tampoco es válida la redencion hecha por el tutor ó curador sin intervencion y mandato judicial, porque la redencion es una verdadera enajenacion del derecho de percibir los réditos, derecho comprendido entre los bienes inmuebles, y á los tutores y curadores no les es lícito enajenar á su arbitrio los de esta clase; han de hacerlo en los casos previstos por el derecho y empleando las solemnidades que el mismo prescribe.

Asimismo, el heredero fideicomisario no puede tampoco redimir el censo sin la intervencion del juez, por igual motivo, esto es, porque no tiene facultad de enajenar, á la manera que no podia hacerlo el poseedor del mayorazgo.

Por último, ni el usufructuario, ni el dueño directo pueden hacer separadamente la redencion de un censo impuesto sobre la cosa cedida en usufructo; han de concurrir ambos á la vez, y el capital del censo redimido ha de ser para el usufructuario, á no ser que el dueño directo dé las garantías suficientes de pagarle anualmente la pension, ó emplee el capital en la imposicion segura de otro censo semejante.

Cuando uno de los herederos del censatario redime parcialmente un censo comprendido en la herencia, no por eso queda libre respecto de la parte no redimida, porque la accion hipotecaria es de suyo indivisible y comprende *in solidum* á cualquiera de los herederos; pero en cambio puede proceder contra sus coherederos y obligarlos á redimir tambien sus respectivas partes, asi como es cosa indudable que cualquiera de ellos, ofreciendo al acreedor todo el capital, redime todo el censo.

Las leyes de desamortizacion eclesiástica y civil han dado lugar á repetidas providencias para facilitar la redencion de los censos pertenecientes á bienes eclesiásticos, y á los del Estado, propios, instruccion y beneficencia sujetos á enajenacion.

En 1820 (1) resolvieron las Córtes que los censos consignativos y reservativos, y los enfiteusis y foros procedentes de los bienes de regulares, del patrimonio real y de la inquisicion, pudieran redimirse con créditos consolidados, á razon de treinta y tres y un tercio al millar, los temporales ó redimibles; y al respecto de sesenta y seis y dos tercios los foros, enfiteusis y cualquiera otra carga perpétua; y al poco tiempo (2) que se pudieran redimir con dos quintos en réditos de capitalizaciones y tres en créditos con interés.

La reaccion política de 1823 dejó muy pronto sin efecto ambas providencias, declarándose además por real decreto de 16 de enero de 1826 nulas todas las redenciones verificadas con arreglo á ellas; si bien, variadas las circunstancias, la ley de 6 de junio de 1837, ordenó á su vez que se conside-

(1) Decreto de 9 de noviembre.
(2) Decreto de 18 de diciembre de 1821.

rasen como válidas y se otorgaran á los interesados las escrituras correspondientes, sino habia podido hacerse al espirar la anterior época constitucional.

En 1836 (1) se declararon en estado de redencion los censos, imposiciones y cargas de los monasterios suprimidos á virtud del real decreto de 19 de febrero del propio año. El importe de la redencion habia de satisfacerse, una quinta parte al contado, y las cuatro restantes en los cuatro años sucesivos en las siguientes especies de deuda pública: una tercera parte en vales no consolidados por todo su valor nominal, otra en títulos de la deuda corriente con interés á papel, tambien por todo su valor nominal, y la restante en títulos de la deuda sin interés, no dando á su importe nominal mas que una mitad de este mismo valor.

Declaráronse asimismo en estado de redencion (2) todas las cargas ó rentas exigidas con título de foro, enfiteusis ó arrendamiento, de fecha anterior al año 1800, que se pagaban á las comunidades y monasterios estinguidos, invitándose oficialmente á los llevadores para que acudieran á redimirlas, y de no presentarse á los seis meses, se mandaban subastar los capitales y sus rentas, verificándose el pago de aquellos en el término de cuatro años y en otros tantos plazos en títulos del cuatro ó cinco por ciento, ó su equivalente en metálico, con arreglo á los precios que tuvieran en la Bolsa de Madrid el dia de verificarse el pago. Es de advertir, en cuanto á los arrendamientos de largo tiempo, que solo habian de entenderse comprendidos en esta disposicion legal los que no escedieran de mil cien reales mensuales. Con posterioridad (3) se hicieron redimibles en la misma forma y en el término de noventa dias los censos declarados en estado de redencion por decreto de 5 de marzo de 1836, y no comprendidos en la anterior ley, vendiéndose, pasado aquel plazo, los capitales en público remate, del modo que las Córtes determinaran. Prorogóse luego (1) el plazo hasta 31 de diciembre de 1847 y se mandó hacer la redencion en títulos del tres por ciento sin que sirviera de obstáculo la falta de escritura de imposicion, que podria suplirse capitalizando los réditos satisfechos por los interesados, segun los recibos que presentaran, y los datos que existiesen en las oficinas de bienes nacionales.

Tambien se hicieron redimibles (2) durante el término de cuatro años y en la forma y plazos prevenidos por la espresada ley de 31 de mayo de 1837, los censos conocidos bajo las denominaciones de sueltos, suertes, ábices y abuela que componian la renta llamada censo de poblacion de Granada, graduándose su capital al tres por ciento, y quedando el gobierno facultado, en el caso de no acudir los censatarios, para enajenarlos á particulares en clase de redimibles. El término de cuatro años se amplió con posterioridad hasta 30 de junio de 1852, procediéndose, si los llevadores no acudian, á su venta en pública subasta el 1.° de agosto siguiente.

Puestos en venta en 7 de abril de 1848 los bienes de las encomiendas vacantes de las órdenes militares y los de ermitas, santuarios y cofradías, se concedieron á los dueños de fincas gravadas con censos y enajenables segun este decreto, dos meses de término, que se prorogaron por otro, para pedir su redencion con arreglo á las disposiciones vigentes en esta materia.

En 1.° de mayo del propio año se pusieron asimismo en venta los censos pertenecientes á las encomiendas de la órden de San Juan, y en 10 de setiembre de 1850 se abrió un plazo de seis meses, despues reiteradas veces prorogado, para solicitar su redencion. Los censos reservativos y consignativos y las cargas perpétuas que no tuvieran capital conocido, habian de regularse al treinta y tres y un tercio al millar, cualquiera que fuese

(1) Real decreto de 8 de marzo.
(2) Ley de 31 de mayo de 1837.
(3) Decreto de la regencia provisional de 9 de diciembre de 1840.

(1) Real órden de 26 de setiembre de 1847.
(2) Ley de 14 de agosto de 1841.

Lorenzo Arrazola

su valor en renta, y el pago, respecto de aquellos cuyas rentas fueran de 20 á 200 reales anuales, se habia de hacer: tres cuartas partes en papel de la deuda consolidada del tres por ciento por todo su valor nominal, y la otra en metálico; y respecto de aquellos cuyas rentas escediesen de 200 reales, dos terceras partes en la misma clase de papel y la restante en metálico, entregándose en uno y otro caso la quinta parte del importe de la capitalizacion á los 15 dias de participarse á los interesados que estaba acordada la redencion, y el resto por cuartas partes en los cuatro años siguientes. La redencion de los censos cuyo valor en renta no escediese de veinte reales al año, se arreglaria de una manera convencional.

En 28 de agosto de 1852 se dictaron nuevas disposiciones para facilitar en un plazo definitivo la redencion de los censos restantes de esta clase, procediéndose en su defecto á la enajenacion de los mismos.

Por último, en otras dos reales órdenes (1), que merecen mencionarse, se dispuso que los censos cuya naturaleza se ignore, se capitalicen para su venta por sesenta y seis y dos tercios al millar, y que la redencion de los enfitéuticos capitalizados al mismo respecto, ó sea al uno y medio por ciento, estingue el derecho de laudemio y todos los demás inherentes al dominio directo.

Devueltos al clero, en cumplimiento de los párrafos 4.° del art. 35 y 6.° del 38 del Concordato celebrado con la Santa Sede, las fincas y censos del clero secular y regular, monjas, encomiendas, maestrazgos, cofradías, ermitas, santuarios y hermandades, que no habian sido enajenados por el Estado, se dieron reglas en 9 de diciembre de 1851 para la enajenacion de los mismos, y se dispuso que los dueños de las hipotecas afectas á los censos pudieran redimir este gravámen, solicitándolo ante los diocesanos dentro del plazo de seis meses y verificándose la redencion segun las reglas establecidas en la ley recopilada. Trascurridos los seis meses, se sacarian á pública licitacion. Asi estos censos, como los enajenados por la junta de la deuda para su amortizacion, podian capitalizarse con arreglo á ulteriores disposiciones (1) al 4 y 5 por 100 cuando en primera y segunda subasta no se hubiesen presentado licitadores á los mismos capitalizados al 3 por 100.

Recientemente, la ley de 1.° de mayo de 1855 ha puesto en estado de venta, sin perjuicio de las cargas y servidumbres á que legítimamente estén sujetos, los prédios, censos y foros pertenecientes al Estado, al clero, á las órdenes militares, á cofradías, obras pías y santuarios, al secuestro del ex-infante don Cárlos, á los propios y comunes de los pueblos, á la beneficencia é instruccion pública y cualesquiera otros pertenecientes á manos muertas (2), con las limitadas escepciones que en ella se marcan.

En el título 2.° de esta ley, referente á la redencion y venta de los censos, se concede á los censatarios para redimirlos el plazo de seis meses.

Los censos cuyos réditos no escedan de sesenta reales ánuos, se redimirán al contado capitalizándolos al 10 por 100: si esceden de esa suma al 8 por 100, cuando se rediman al contado, y al 5 verificándolo en el término de nueve años y en diez plazos iguales.

Si los réditos se pagan en frutos, se regularán los censos por el precio medio que haya tenido la misma especie en el mercado durante el último decenio.

Cuando el cánon ó interés esceda del 5 por 100 se redimirán en la forma prescrita al tipo reconocido en la imposicion, y sino estuviese reconocido, al fijado anteriormente.

Trascurridos los seis meses, se venderán los censos en pública subasta bajo los mismos tipos.

El pago del laudemio en las enfiteusis será á cargo de los compradores.

(1) De 30 de setiembre de 1849 y 19 de mayo de 1851.

(1) 26 de agosto y 6 de setiembre de 1852.

(2) Por real decreto de 15 de setiembre de 1855 se declaran tambien en estado de venta y redencion las fincas y censos correspondientes á la obra pía de los Santos Lugares de Jerusalen, con sujecion á los trámites de esta ley.

Siempre que los censatarios se confiesen deudores de los capitales censuales ó sus réditos, se les perdonan los atrasos que adeuden por no habérseles reclamado en los últimos cinco años, por ser los censos desconocidos ó dudosos, ó por cualquiera otra causa.

Habiéndose suscitado dudas sobre los casos y forma en que deba tener efecto esta condonacion de atrasos, se dispuso, (1) sin perjuicio de lo que resuelvan las Córtes en vista de un proyecto de ley presentado á las mismas sobre el particular, que se perdonen los atrasos adeudados por los censatarios hasta 1.° de mayo de 1855 por censos, cuyos réditos no se les reclamaron en los cinco últimos años anteriores y los que, reclamados, no se pagaron por ser dudosa la existencia de su capital ó de su descubierto, con tal que se confiesen deudores del uno ó de los otros, que deberán satisfacer desde la fecha de la citada ley hasta el dia de la redencion. Por consiguiente han debido percibirse los caidos de censos cobrados en alguno de los últimos cinco años por anualidad completa ó á cuenta, ó cuyo pago se reconoció como debido, acreditado que fuere cualquiera de estos estremos. Pero á pocos dias de dictada esta disposicion, se previno (2) se suspendiese todo procedimiento contra los censatarios por los descubiertos en que respectivamente se encuentren hasta la publicacion, como ley, del proyecto arriba indicado. Véase al final de la parte legislativa.

Finalmente, la ley de 14 de julio de 1855 autorizó al gobierno de S. M. para emitir doscientos treinta millones de reales en billetes del tesoro aplicables única y esclusivamente al pago de bienes nacionales y redencion de censos y foros, y en 27 del propio mes se ordenó que se admitieran desde luego las cartas de pago del mencionado anticipo en pago de las espresadas redenciones, sin perjuicio de que los interesados se sujeten á las resultas de la aprobacion de sus respectivos espedientes.

(1) Real órden de 5 de octubre de 1855.
(2) Real órden de 20 de octubre de 1855.

§. 7.° *Prescripcion.*

Otro modo de estinguirse el contrato censual es la prescripcion, que tiene lugar cuando el poseedor de la cosa afecta al censo la posee por espacio de treinta años no interrumpidos, con buena fé, como libre de toda carga. Hállase conforme esta regla con lo dispuesto en la ley 5, tít. 8, lib. 11 de la Novísima (63 de Toro), que exige todo ese tiempo para prescribir ó estinguir las deudas que no nacen de mera obligacion personal ó real, sino de obligacion mista ó con hipoteca, como es ordinariamente la de los censos.

El art. 153 del proyecto de Código civil establece tambien, que los capitales de censos sean *prescriptibles*, y fija para los reservativos el plazo de treinta años porque producen solamente accion real, y para los consignativos el de diez entre presentes y veinte entre ausentes. Adviértase que esto, aprobado que sea, es y ha de entenderse respecto de los censos futuros; en cuanto á los pasados ha de estarse á la regla arriba consignada, que es la legal y admitida, no obstante las interminables disputas de los intérpretes, que quieren, sin razon, que á pesar del tenor terminante y absoluto de la mencionada ley 5, continúen vigentes las de Partida (39, tít. 13, P. 5 y 27, tít. 29, P. 3.) Segun el derecho romano la accion hipotecaria se prescribia en efecto en cuarenta años contra el deudor, y lo mismo establecieron las Partidas, tomándolo de él; pero lo modificó despues la antedicha ley 63 de Toro de la manera referida.

El propio derecho romano, y á su ejemplo tambien nuestras leyes de Partida, solo exigen la buena fé al principio de la prescripcion, y por esta y otras consideraciones no puede aceptarse entre nosotros la regla del derecho canónico que la requiere siempre, por mas que varios de nuestros antiguos jurisconsultos la hayan sostenido con tenaz empeño.

Empieza á correr el plazo de los treinta años desde el tiempo en que venció el primero de los treinta plazos para pagar las pen-

siones el actual poseedor de la cosa acensuada, el que contrajo con el acreedor, ó algun otro en su nombre, pero no cuando cualquiera de ellos las satisface.

Dícese que no corriendo el tiempo al impedido, el censualista lo está para reclamar el capital; pero á esto se contesta fundadamente que ese principio no tiene aplicacion á este caso, porque el censualista no exigió, pudiendo hacerlo, el pago de las pensiones, y en su defecto la devolucion del capital, por espacio de treinta años, viene á dar por cierto, ó que nunca existió el capital, ó que dejó posteriormente de existir, ó finalmente que mereció su abandono y negligencia tal castigo.

Es todavía una grave cuestion, si prescripto el censo, lo quedan tambien las pensiones vencidas y no pagadas en los últimos 30 años; ó si por el contrario cada una de ellas requiere una prescripcion particular de 30 años tambien, como deuda mista, ó con hipoteca. Avendaño y Carleval llevan la opinion afirmativa, por cuanto lo accesorio, dicen, sigue la suerte de lo principal: Aillon *ad Gomez*, y otros la de 30 prescripciones. Y ciertamente, si la pension se debe, ó devenga en cada año, con absoluta independencia de las que preceden y puedan subseguirse, ¿por qué ley, ó razon se ligará á ellas, sin embargo, para correr su suerte? Cada pension es una deuda aparte, y deuda con hipoteca, que por tanto requiere para su prescripcion el trascurso de 30 años. En la opinion de prescribir juntamente con el censo todas las pensiones, la vigésima, por ejemplo, prescribe, no á los 30, sino á los 10 años, y eso sin distincion de inter-presentes, ó ausentes: la 25 á los 5 en la propia forma: la 29 al año. No es posible disimularse la violencia de derecho que hay para lo contrario, y sin embargo asi en general lo ha recibido la práctica. Nuestra opinion, por lo tanto, seria que las 29 últimas pensiones podrian aun reclamarse, prescripto el censo: pero no pudiendo desconocer por otra parte el poder de la costumbre legítima, aconsejaríamos, y practicaríamos en nuestro caso, que el juez obre segun la costumbre general: si hubiere costumbre local contraria, favorable á la prescripcion, no colectiva, sino individual de las pensiones, que falle por ella, y lo propio en caso de duda.

Tambien puede prescribirse el derecho á reclamar el esceso de las pensiones percibidas sobre la tasa legal. Por tanto, establecido y continuado un censo durante ochenta años á menor precio del fijado por la ley, no podrá exigirse el esceso de todas las pensiones satisfechas, sino solamente el de aquellas que lo hubiesen sido en un plazo inferior al período de 30 años. Esto se entiende respecto del heredero y sucesor particular, cuando procede de buena fé; pero no respecto del mismo censualista, porque obra de mala fé.

Constándole que el censo está constituido contra la ley, no cabe la prescripcion, aunque pasen ciento, doscientos ó mas años.

¿Empieza á correr el tiempo para la prescripcion desde el dia en que el censatario ó su heredero cesó en el pago de las pensiones, ó desde el en que un tercero empezó á poseer la cosa acensuada con título y buena fé? Varios autores sostienen lo primero, y se apoyan en que, mientras el censatario paga la pension al censualista, ninguna accion tiene contra el capital, y por consiguiente no corre la prescripcion á favor de quien no puede entablarla. Tampoco corre para quien, teniendo la accion correspondiente, es rechazado por una escepcion justa, como sucede cuando el censualista quiere dirigirse en juicio contra el nuevo poseedor, sin haber reconvenido antes al censatario, en cuyo caso aquel opone con éxito la escepcion *excusionis non factæ*.

El pago de la pension hecho por cualquiera sin espresion de causá, en caso de duda se juzga hecho en nombre de todos los que puedan ser reconvenidos y les absuelve de obligacion.

Otros sostienen que la prescripcion empieza desde el dia en que un tercero posee la cosa afecta al censo, y parece la opinion mas admitida por el número y autoridad de los jurisconsultos que la siguen. La regla, dicen, de que no corre el tiempo contra el que no puede entablar la accion, aunque cierta en sí misma, deja de aplicarse cuando el acreedor

pudo remover el impedimento y no lo hizo; y el censualista pudo removerle fácilmente en este caso, acudiendo contra el censatario, y por consiguiente corre contra él la prescripcion, mediante su negligencia, pues en su mano tuvo remediarlo.

Entre estas opiniones estableció Folerio la de que, si al tiempo de enajenarse la hipoteca ninguna noticia tuvo de ello el censualista, y asi se presume en caso de duda, no corre la prescripcion en daño suyo y procede la opinion de que corre el tiempo desde el dia en que el nuevo poseedor comienza á poseerla. Pero cuando el censualista lo sabe, no se opone, y permite pasar tanto tiempo, induce prescripcion. Y esto es mas seguro, atendida la manera en que comunmente se estienden las escrituras, renunciando los beneficios de excusion y division, en virtud de cuya renuncia puede el censualista acudir contra el nuevo poseedor, prescindiendo del censualista ó principal deudor.

La deuda que se satisface de una vez ó con un solo pago escluye la accion hipotecaria; no asi la que tiene tacto sucesivo, como la pension censual, que constituye una obligacion sucesiva y periódica hasta la redencion ó devolucion del capital.

El pago contínuo y repetido de las pensiones, cuando se hace sin espresar causa alguna, no induce, ni supone obligacion de continuar satisfaciéndolas en lo futuro, aunque se haya verificado largo tiempo y uniformemente, mientras el censualista no pruebe que se hizo por causa especial y determinada; de otro modo debe creerse que aquellos pagos se hicieron por mera liberalidad ó por alguna obligacion temporal. Existiendo causa determinada, como arriba indicamos, el pago de las pensiones realizado durante diez años contínuos, produce presuncion de verdadera causa y título, y si continúa hasta los treinta, produce verdadera adquisicion del derecho de percibir las pensiones censuales; pero no basta probar el pago del primero y del último año; se han de probar todos y cada uno.

Por último, el pago de las pensiones continuado por tiempo inmemorial, no solo tiene fuerza de causa y título, sino tambien de privilegio.

§. 6.° *Estincion del censo vitalicio.*

El censo vitalicio se estingue por la muerte natural de la persona de cuya existencia dependia, ora sea el mismo censualista ú otro, y si fueren varias, por el fallecimiento de la última. La muerte civil del acreedor no perjudica de ningun modo á la existencia y continuacion del censo.

SECCION VIII.

DEL PROCEDIMIENTO.

Considerable es el número de casos y cuestiones que con frecuencia obligan á recurrir á los tribunales, como el pago de réditos, ora por la vía ejecutiva, ora por la ordinaria, reconocimiento, liberacion, subrogacion, reduccion, redencion, tanteo, laudemio, comiso, informaciones de identidad, etc. Varios de ellos tenian trámites, ó formalidades, mas ó menos especiales, que en gran parte, sino en totalidad, han sido sustituidos ó derogados por la nueva ley de enjuiciamiento civil de 5 de setiembre de 1855. Esta ley no habla de censos, y antes indudablemente parece que estos no estuvieron presentes en la razon del legislador, al formar la ley; pero los preceptos absolutos, y á veces esclusivos de ella, cierran la puerta á todo procedimiento y tramitacion que los que ella establece, y la cual por otra parte declara derogadas todas las leyes, órdenes y reglamentos anteriores sobre la materia. Las modernas disposiciones sobre redencion de censos de corporaciones y manos muertas subordina mas aquella al resorte esclusivo de la autoridad gubernativa, conforme á la ley de desamortizacion de bienes eclesiásticos y corporativos de 1.° de mayo de 1855 é instruccion dada para ejecucion de la misma; y todo hace necesario el que consignemos algunas consideraciones sobre procedimiento en materia de censos.

Via ejecutiva. Hasta la introduccion de

los juicios *de menor* cuantía, era corriente la vía ejecutiva en los censos para el pago de réditos. Establecida aquella clase de juicios, en el caso, como es sabido, de que la cantidad demandada no escediese de *dos mil reales*, nuestros jurisconsultos se dividieron en opiniones, á que correspondia una divergencia análoga en los tribunales, sobre si en el caso de no esceder de la mencionada cantidad la que se reclamase, y por tanto, contrayéndolo á la cuestion, los réditos vencidos y reclamados de un censo, procedia la *vía ejecutiva* ó el juicio de *menor cuantía*. Nosotros fuimos, aconsejando, y juzgando, de la primera opinion; y hoy ha venido á sancionarlo asi la nueva ley del procedimiento civil ordinario, la cual despues de establecer aquel juicio, siempre que la cantidad no esceda de 3,000 rs., (art. 1133) ordena en su artículo 1134; que lo dicho haya de entenderse, sin perjuicio de la accion ejecutiva, de la cual *podrá* usarse, cualquiera que sea la cantidad de que se trate, en los casos en que proceda, con arreglo á derecho. Es decir, que en el censualista es potestativo en el caso en cuestion entablar la vía ejecutiva, ó el juicio de menor cuantía, como siempre lo aprendimos, por la razon de que, establecidos los trámites abreviados de uno y otro juicio en favor de los acreedores, no habian de interpretarse en su perjuicio; prohibiéndoles consultar dicha ventaja, eligiendo de los dos medios el que estimen mas conveniente.

En la anterior jurisprudencia era regla comun que la ejecucion no procedia, contra las hipotecas sobre todo, sino en virtud de la escritura de *constitucion*, y en su caso, por la de reconocimiento, cuando contenia espresion de aquellas, ó subrogacion de otras nuevas; pero siempre por la *original* ó *primera saca*. Hoy puede pedirse ejecucion en virtud de la *segunda*, ó *concuerda*, al tenor de la citada *ley de enjuiciamiento civil*, cuyo artículo 941, establece traer aparejada ejecucion «la escritura pública, con tal que sea *primera copia*, ó si es *segunda*, esté dada en virtud de *mandamiento judicial*, y con *citacion* de la persona á quien deba perjudicar, ó su causa habiente.»

La accion ejecutiva se dirigia siempre contra los bienes del poseedor, y solo subsidiariamente contra la hipoteca, sin perjuicio de subrogacion de otros equivalentes, si los primitivos se vendieren por culpa y con responsabilidad del llevador; todo con la mira de que la hipoteca se preserve, y pues es sabido que el censo descansa principalmente sobre los frutos. Al juez toca despues estimar si la accion procede contra otros bienes que la hipoteca, como se verifica lo último mediando accion real y personal, por ser el llevador constituyente, ó reconociente, ó traer causa de estos. Responde además de los créditos el mero tenedor de la hipoteca por título singular, cuando poseyó de mala fé, pues no hace suyos los frutos; y cuando no dimite. Aun dimitiendo, no se libra de las costas proporcionales, si tarda en dimitir, dando asi lugar á procedimientos, que sin eso se escusarian. El art. 949 de la nueva ley *de enjuiciamiento*, hace clasificacion de bienes, y establece el órden con que ha de hacerse la traba, ocupando el último lugar los sueldos, y el penúltimo los bienes raices. En el artículo 950 previene, sin embargo, que cuando media hipoteca, podrá hacerse en ella desde luego la traba, pidiéndolo el actor. En la hipoteca ordinaria se comprende que el acreedor tenga interés en ello; mas en la censual, de ninguna manera, y mas si no hay derecho para pedir que el deudor subrogue otras, ó no tiene bienes raices que subrogar, todo lo que daria ocasion á interminables reclamaciones y contiendas.

Sobre hipotecas y toma de razon de las escrituras para que valgan en juicio; véanse los artículos correspondientes.

Como el derecho de ejecutar se prescribe por diez años, segun la ley, nunca puede pedirse ejecucion por mayor número de pensiones vencidas; y ni aun por diez completas, pues entonces habria ya prescrito la accion ejecutiva. Por eso la práctica es pedir ejecucion por los réditos vencidos en los *nueve y medio últimos años*, sin que haya inconveniente en hacerlo por nueve años y dos tercios, cuatro quintos del décimo año, nueve años y once meses en fin.

Las pensiones que esceden de este tiempo, no pueden ya ser reclamadas sino en juicio ordinario, que hoy habrá de ceñirse á lo prevenido por regla general en la ley de enjuiciamiento de 1855.

Informacion de identidad. Hasta hoy, cuando por el trascurso del tiempo, ú otra causa, se habian oscurecido las hipotecas, se acudia con la escritura de constitucion ante el juez local ofreciendo informacion de testigos, reducida al testimonio de dos, tres, ó mas de los mas ancianos del pueblo, conocedores de la riqueza raiz, términos y pagos del mismo, que por su pericia y recuerdos, y al tenor de la escritura censual, emitian su juicio, identificando, ó determinando las fincas, que aunque con otro nombre ya, y tal vez con otros linderos y forma, eran en su sentir las antiguas hipotecas. Hecha la informacion, se mandaba entregar á la parte para los usos que le convinicsen; y eran, cuando el juicio de peritos no habia sido negativo, como alguna vez sucedia, con dicha informacion y la escritura censual, pedir ejecucion por los nueve y medio últimos años, sin perjuicio de reclamar en vía ordinaria las pensiones restantes, el reconocimiento y demás que hubiese lugar. Es menester convenir en que esta informacion, dada sin citacion contraria, ni audiencia de parte, era bien débil fundamento para una ejecucion. Y sin embargo, la ejecucion se despachaba de ordinario, y llegaba á su término, no habiendo oposicion de parte. Otras veces, en el caso opuesto, el pleito solia ordinariarse; y de todos modos en juicio ordinario el tenedor, ó poseedor de las hipotecas, vindicaba si le convenia y procedia, la libertad de estas.

En el dia no parece pueden tener lugar las *informaciones de identidad* para ejecutar, como ni tampoco para pedir en vía ordinaria. Asi es preciso inferirlo del tenor de la nueva ley de enjuiciamiento civil, que escluye todo ante-juicio, en ella no espresado, para el juicio ordinario, y no espresa las mencionadas informaciones (arts. 222 y 223): que taxativamente tambien enumera los preliminares del juicio ejecutivo, no mencionando el ante-juicio por informacion, que ya espresamente habia escluido en dicho artículo 223 para el juicio ordinario (arts. 911 y 912): y que si admite las informaciones *ad perpetuam*, ha de ser *con tal que no se refieran á hechos de que pueda resultar perjuicio á una persona conocida y determinada*, previniendo aun, que si pendiente una informacion de las limitadas que autoriza, *se formulare oposicion á ella, se sentenciara por vía ordinaria* (arts. 1339 y 1360). El dueño, pues, de un censo, cuyas hipotecas se hayan oscurecido, tiene hoy cerrado el camino para las antiguas *informaciones de identidad*, en la forma y para el fin inmediato para que se daban, si bien tiene otros medios espeditos á fin de poner en claro las hipotecas, y demandar en consecuencia lo que proceda. Tiene en primer lugar, el de pedir el reconocimiento cada diez años, especificando las hipotecas, con las variaciones de forma, linderos, etc. Puede pretender *apeo y deslinde* con arreglo á la mencionada ley de enjuiciamiento (arts. 1323 al 1334): y puede valerse estrajudicialmente del testimonio de peritos y ancianos, y enterado, presentar demanda ordinaria como por accion confesoria, contra los que con arreglo á estas noticias y datos resulte traer causa de los constituyentes, ó reconocientes, ó que sean meros tenedores de las hipotecas por título singular, ofreciéndose á probar lo necesario, encaminada aquella al doble efecto de que paguen y reconozcan. Puede, en fin, preparar el juicio ordinario por juramento *decisorio* ó *indecisorio* (pero en todo caso este último, por dejar siempre espedito el camino de prueba) siguiendo en ello lo prevenido en la ley de enjuiciamiento (art. 222).

Juicio de conciliacion. Si el reglamento provisional lo hacia necesario (art. 21), la ley de enjuiciamiento, lo escluye, ó no lo requiere para los juicios ejecutivos (Arts. 201 y 941). Véanse los artículos correspondientes.

Juicio verbal. La ley de enjuiciamiento civil dá lugar en este punto á dudas muy fundadas. Dice en el art. 1133 que *toda cuestion entre partes*, cuyo interés no esceda de tres mil reales, se decidirá en juicio de menor cuantía. En el 1134 que esta disposicion

se entiende *sin perjuicio de la accion ejecutiva, de la cual podrá usarse, cualquiera que sea la cantidad de que se trate.* Es decir que por este artículo, ora la cantidad reclamada baje de tres mil reales, ora de seiscientos, sucediendo con frecuencia esto último en la reclamacion anual de censos pequeños, puede entablarse para su cobro la vía ejecutiva. Mas despues en el art. 1162 se establece en términos tambien absolutos, que *toda cuestion entre partes* cuyo interés no esceda de *seiscientos reales*, se decidirá *en juicio verbal.* Parécenos, sin embargo, que establecidos los tres juicios mencionados, precisamente en favor del acreedor, segun ya antes hemos insinuado, y no habiendo razon legal para creer que por el art. 1162 se haya querido desvirtuar el 1134, sin espresarlo, debe entenderse, y establecerse la jurisprudencia de que el censualista, cuando las pensiones que reclama no escedan de seiscientos reales, podrá entablar, segun le convenga, el juicio verbal, ó el ejecutivo. Aconsejando nosotros, aconsejaríamos siempre este último, como mas solemne, y de protocolo mas seguro para perpetuar la noticia y vicisitudes del censo.

Liberacion. Cuando una cosa acensuada se vende como libre, reconocido despues el gravámen, el comprador, en vez de la eviccion, ó el saneamiento, suele pedir al vendedor que la *libére.* Alguna vez en las testamentarías y capitulaciones matrimoniales llevan los herederos, legatarios, ó contrayentes el gravámen de liberar. El censatario por propia comodidad propone á veces al censualista la *liberacion* de alguna, ó algunas hipotecas, y hay otros muchos casos de *liberacion*, entendiendo por tal la relevacion, ó alzamiento del gravámen, sin que se estinga el censo, de donde se sigue, que si se trata de la liberacion de todas las fincas, han de serlo por *subrogacion* de otras hipotecas, para que el censo subsista: si solo de algunas, pueden serlo por subrogacion, y tambien por redencion, pues el censo entonces continúa subsistente sobre las restantes. Si todas las fincas se redimen, entonces, aunque todas quedan *libres*, no es técnicamente *liberacion*, sino estincion del censo por redencion. Lo propio sucede cuando, poseidas las hipotecas por título singular meramente, justo, ó injusto, como por ejemplo, la usurpacion, y no pudiendo usar entonces el censualista sino de la accion real hipotecaria para el pago de réditos, las hipotecas todas se venden judicialmente. En este caso quedan libres tambien; no por liberacion técnicamente, sino por estincion del censo. Como se vé la *liberacion* propiamente dicha, es casi siempre convencional, algunas judicial. En este último caso se verifica siempre en juicio civil ordinario, no siendo necesario advertir que la liberacion, en sí misma, ceñida al censuario y censualista, no puede ser sino convencional: judicial solo por incidencia, por pacto ó contrato aditicio al censual, siendo la razon, que si bien la *redencion* puede hoy ser, y es obligatoria en todos los censos; en ninguno la subrogacion; y si está autorizada la redencion por partes, no asi la redencion, ni subrogacion por solo algunas de las hipotecas.

En el corriente siglo hemos conocido *liberaciones*, ni convencionales, ni judiciales: podrian llamarse oficiales, necesarias. Tales son los que han tenido lugar en las multiplicadas ventas de bienes eclesiásticos, hechas desde 1805 por el estado, y en que las hipotecas se vendieron como libres, quedando el Estado hecho cargo de los gravámenes, lo cual es una especialidad que se rige por las leyes y disposiciones de cada caso. En ellos la reclamacion de las pensiones ó réditos, ha de hacerse estrajudicialmente y por la vía gubernativa, antes de recurrir á la judicial.

Subrogacion ó sustitucion de una hipoteca por otra. Es tambien, unas veces convencional, segun antes hemos indicado; otras judicial, y en juicio ordinario, como en el caso, no raro, defenderse un censo sobre hipotecas que luego aparece no ser del constituyente, ó si tienen que venderse por gravámenes anteriores, que traían sobre sí: lo propio si se vendian, como hemos visto tambien por temeridad del ejecutado en no señalar otros bienes, sustrayendo los libres al alcance del tribunal, y demostrándose luego per-

tenecientes, vendidas ya las hipotecas. En estos casos, ora el llevador fuera constituyente ó reconociente, ó bien causa habiente de ellos, el censualista podia, y puede pedir la subrogacion ó señalamiento de nuevas hipotecas; por supuesto en juicio ordinario. Como hemos visto ya, la ley de enjuiciamiento establece el órden y clasificacion de bienes en que ha de hacerse la traba; colocando en último término los raices, si bien despues por el art. 950 autoriza á dirigir la accion desde luego contra la hipoteca; lo cual puede hacer muy bien el acreedor con hipoteca comun; pues no teniendo que ser pagado sino una vez, en nada le perjudica el que la hipoteca se venda; pero no asi el acreedor censualista, cuya accion tiene tracto sucesivo y pierde su garantía, y aun puede estinguirse, vendida la hipoteca; motivo por que ha de dirigir su accion, siempre que sea posible, de modo, que la hipoteca se salve, utilizando la accion personal, siempre que concurra con la real hipotecaria, como en su lugar dejamos indicado.

Reduccion del censo, reconocimiento, tanteo, pago de *laudemio*, y *quindemio*, *comiso*. Las acciones para estos fines, han de ejercitarse en juicio ordinario, siendo bien sabido además no hallarse vigente la ley de Partida que en el caso de *comiso*, autorizaba al censualista á tomar de propia autoridad, ó sin recurso á los tribunales la cosa decomisada.

Redencion. Puede ser tambien convencional y judicial, y hoy es además gubernativa, como diremos. Verifícase lo primero entre particulares que tienen la libre administracion de sus bienes, prestándose á ello el censualista. En otro caso hay que recurrir á la vía judicial, como siempre que el censualista es menor, ó comunidad, ó institucion eclesiástica, y antes los vínculos y mayorazgos; por cuanto era necesario imponer nuevamente el capital. La demanda era siempre, y es hoy, en los casos en que aun procede, ordinaria, ofreciendo en ella la consignacion del capital. El juez, en el mismo auto en que ha por presentada la demanda, designa la persona ó cuerpo en que ha de hacerse la consignacion, segun las disposiciones que sobre esto rijan á la sazon, y que realizada, se dé traslado al censualista.

En los censos que antes se redimieron con vales reales, la redencion era gubernativa, acudiendo á la Caja; como lo es en el dia la relativa á redencion de bienes eclesiásticos secularizados y los demás comprendidos en la ley de 1.° de mayo de 1855, y real instruccion para su cumplimiento. En cuanto á ellos se ocurre al gobernador de provincia con memorial ofreciendo redencion conforme á la ley y con opcion á las ventajas concedidas por la misma, segun que se anticipan algunos ó todos los plazos de redencion, y pidiendo se haya por pedida y ofrecida: que se mande capitalizar, y hecha la capitalizacion, se dé conocimiento de ella al recurrente para hacer el pago. El espediente instruido, se eleva á la aprobacion de las oficinas de la Corte. Devuelto al gobierno de provincia, este, por oficio dirigido al alcalde constitucional de la residencia del solicitante, lo hace saber á este, para que se presente á realizar el pago, y hecho, se le espida la escritura ó título de redencion, entregándole con ella la escritura de constitucion, cancelada. Véase sobre esto lo que decimos en la seccion 7, §. 6: y asimismo sobre acciones censuales la seccion 6.

Sobre materia censual véase el tít. 46, libro 4 del Código romano, *De jure emphyteútico*: leyes 13, tít. 14, Part. 1, y 28, tít. 8, Partida 5, con la estensa glosa de Gregorio Lopez: el tít. 15, lib. 10, Nov. Rec.: tít. 39, lib. 3, de las Decretales, *De censibus*; y título 12, lib. 2 del *sétimo* de las mismas, *De forma contrahendi censum*: Cencio, *De censibus*: Molina, *De justitia, et jure*, Trat. 2, disp. 381, 383 y 445: Covarrubias, Var. resol. lib. 3, cap. 7 y 10: Avendaño, *De censibus*: Vela, Disert. 34 y 35: Carleval, *De judiciis*, lib. 1, tít. 3, disput. 4: Gomez *Var.*, cap. 11: Gutierrez, *De juramento confirmat.* Part. 1, cap. 31, núm. 10, y en sus *Pract. quest.*, lib. 2, cuest. 68: y el Paborde Sala, en sus Instituciones, lib. 2, título 14, y apéndice á su Digesto romano-hispano, tomo 1, lib. 9, tít. 2. Véanse asimismo los artículos sucesivos de **censo**.

ADVERTENCIA.—Impresa ya una buena parte de este artículo, fué sancionada y publicada la ley de 27 de febrero sobre redencion de censos, que aun pudo colocarse al fin de la parte legislativa, donde la podrán consultar nuestros lectores.

Declara comprendidos en el artículo 1.° de la ley de desamortizacion, además de los censos enfitéuticos, consignativos y reservativos, los de poblacion, los treudos y foros, los conocidos con el nombre de *carta* de *gracia*, y todo capital, cánon ó renta de naturaleza análoga, pertenecientes á manos muertas.

Estima como censos, para los efectos de esta ley, los arrendamientos anteriores al año 1800, que no escediendo de 1,100 rs. anuales en su orígen, ó el año último, hayan radicado desde la citada época en una misma familia, y tambien los que escedan de aquella suma, siempre que la finca esté dividida entre dos ó mas partícipes y que cada uno de ellos no pague actualmente mas de la referida cantidad.

Las disposiciones de esta ley, dirigidas todas á impulsar y facilitar la redencion, no han menester observaciones especiales para su mas clara inteligencia.

Bastará advertir que amplía por seis meses el plazo concedido en el artículo 7.° de la ley de 1.° de mayo de 1855, autorizando al gobierno para prorogarlo en su caso por otro igual período; y que aquel término se contará en los censos sobre que hay litigio pendiente, desde que se declare la ejecutoria, ó se allane el censatario al reconocimiento.

CENSO DE AGUA. Ordinariamente se llama asi, la pension que en algunas poblaciones, como en Madrid, pagan los dueños de casas, fábricas, etc., que tienen fuentes peculiares, surtidas con las aguas de propiedad pública, y aun de particulares. No es posible señalar reglas generales para estos censos: las ordenanzas municipales de los pueblos, los contratos de concesion, y las costumbres locales, que por el trascurso del tiempo han venido á ser ley, son las que fijan la índole, estension y circunstancias de los censos, como la forma en que puede redimirse la pension, pagando el capital que supone. Es un principio general que corresponde á los dueños de las casas y fundos, que se aprovechan del agua, la construccion y reparacion de las obras necesarias para su conduccion desde el punto en que aquellas se separan de las cañerías, que sirven para el surtido comun. Tambien es punto de las ordenanzas respectivas, prácticas ó costumbres locales, la forma en que los asi beneficiados han de contribuir á las obras generales para la conduccion de aguas y sostenimiento de acueductos, etc., de aprovechamiento comun.

CENSO ELECTORAL. Las acepciones de esta palabra pertenecen propiamente al órden político, y se concreta á las elecciones de concejales, y á las de representantes del pais en las Córtes del reino. La palabra *censo electoral*, segun el sentido y objeto en que se aplique, significa unas veces el *censo personal*, que sirve de base al número de representantes que nombren las provincias, como un diputado por cada cincuenta mil almas, por cada cien mil, etc.: tambien el número de *electores*, lo cual no es otra cosa que un *censo personal político*: otras las circunstancias de fortuna ó riqueza, ya apreciada en sí, ya por el pago de tributos, y que dá aptitud política á electores, y elegibles; pero especialmente á estos. Como todo ello es tan especial de las leyes electoral y de ayuntamientos y de los artículos particulares DIPUTADO Á CORTES: ELECTOR: SENADOR, etc., véanse estos.

CENSO ENFITÉUTICO, FRUCTUARIO, IRREDIMIBLE, MISTO, MUERTO, DE POR VIDA, PECUNIARIO, PERPÉTUO, PERSONAL, REAL, REDIMIBLE, RESERVATIVO, TEMPORAL, VITALICIO. V. CENSO COMO CONTRATO.

CENSO ESTADISTICO. Esta enunciativa envuelve una idea compleja, y estriva en parte en dos de las muchas significaciones del verbo latino *censeo*, y son las de *contar*, y *apreciar* clasificando. (V. *el artículo genérico* CENSO). El censo estadístico pertenece al derecho administrativo, y aun político, y de todos modos al derecho público; en vez que el censo *convencional*, ó censo

como contrato, corresponde al derecho civil privado: en este el pacto, convenio, ó contrato de pagar y cobrar una pension; en aquel la insinuacion y demostracion de los habitantes de un pueblo ó estado. La denominacion, pues, de *censo estadístico*, envuelve una acepcion de todo punto, y aun esencialmente diversa de la de *censo como contrato*, ó de índole convencional.

Pero como, aun aplicada la voz á los asuntos sociales, pueden *contarse y apreciarse* tantos objetos y clases, formando *estados clasificados* de las mismas; de aquí las diversas acepciones específicas de la palabra genérica *censo estadístico*; que será segun su objeto principal, *censo de poblacion, de riqueza*, ó *misto*. Y decimos objeto principal, porque por la naturaleza de las cosas, difícilmente puede aislarse el objeto de un censo estadístico parcial; pues sino en sí, por los resultados, aparece ligado á otro ú otros objetos sobre el primitivo. ¿Cómo formar una estadística personal, aun puramente *numérica*, sin que ya se dejen conocer las clases del personal empadronado? ¿Cómo un censo clasificado, sin que se trasluzca la riqueza, ó estado de fortunas? ¿Cómo, en fin, un censo ó estadística puramente de riqueza, sin que de ella se desprenda ya la idea del número personal y de las clases?

Y no se crea que estamos dando por sentada la utilidad de los *censos estadísticos* parciales. Al contrario, los creemos estériles en general, comparados con los censos estadísticos generales, ó complejos. Estamos solo reseñando la ontología de este distintivo de las naciones adelantadas: demostrando la posibilidad de la division estadística; anunciando además el hecho histórico de que se han dividido, por error unas veces; otras por necesidad, ó conveniencia, segun los fines de la administracion.

Porque, en efecto: muchas veces los pueblos y naciones han recurrido, y muchas mas han debido recurrir y recurrirán, al medio de *empadronar*, *recontar*, ó conocer el número de sus habitantes. Si lo hacen, limitándolo al número y clasificaciones de sexo, edad, y condicion civil y política, el censo es *personal* ó de *poblacion*. Si además aprecian la riqueza y facultades respectivas, las artes y profesiones, el censo, es de *poblacion* y *estadística*. Alguna vez se separan estos conceptos: en lo antiguo se atendia al primero ordinariamente: en los tiempos modernos, en que hasta se ha elevado á ciencia administrativa y económica la *estadística*, sin descuidar el mencionado primer concepto, se unen ambos; ó se separan, no para abandonar el primero ó descuidarlo; sino para prestar mas atencion al segundo, formando asi la estadística de *riqueza*, que es la que realmente encierra el gérmen de ciencia: la que ha empezado á cultivarse en algunos estados, aunque aun se espera en los mas: la que ofrece mayores dificultades aun que la *personal*. En los pueblos mas antiguos, como en el hebreo, veremos ejemplos del *censo estadístico* puramente *personal*: en los tiempos modernos los hay multiplicados de censo estadístico puramente personal, como el empadronamiento para el reemplazo del ejército; del de *riqueza*, como en los *catastros* y *amillaramientos*; y mistos, cuales son los censos generales, como el de 1797 por ejemplo; y los tendremos mistos, en fin, en toda la estension en que pueden serlo, en tiempos y legislaciones intermedias, y tal era el *censo romano*, á un tiempo personal, clasificado, de riqueza y hasta de condiciones y costumbres.

Como se vé, el *censo*, en el sentido del presente artículo, y la *estadística*, son en la esencia una misma cosa. La estadística, sin embargo, entra mas en la tecnología científica; el censo en lo ritual é histórico. Y como además la historia hace separacion entre ellos, bajo este concepto, y sin perjuicio de la estension que el artículo **ESTADISTICA** reclama, damos aquí cabida á estos pormenores, si bien corresponden mas á la historia que á la ciencia de la materia. Véanse, pues, bajo este propósito, además del mencionado artículo **ESTADISTICA**, y el presente, los de **CENSO DE POBLACION**, **CENSO ROMANO**, y **CENSOR**, especies principales en que se resuelve el censo estadístico.

CENSO FEUDAL. Véase CENSO (*por tributo*).

CENSO GOTICO. Este nombre se dió á la pension ó tributo que, cuando los godos se enseñorearon de la Península, tenian que pagar los vencidos por la tercera parte del territorio que se les dejó, habiéndose reservado las otras dos terceras partes, para los nobles una, y otra para los Monarcas, que la cultivaban, valiéndose de los esclavos llamados del Rey.

CENSO DE POBLACION. Esta denominacion se aplica, unas veces á los censos *convencionales*, ó que nacen de contrato, cuando se imponen al poblar, ó despoblar; y tal es, como vemos en su artículo, el *censo de poblacion de Granada*. Otras á los censos *estadísticos* personales, y de esta clase de censos habla el presente artículo. En este sentido, pues, censo de poblacion es el padron, matrícula, ó registro público de los habitantes de un pueblo ó estado. (Véase CENSO ESTADISTICO.)

Aunque no se comprende la organizacion de un pais, regularmente civilizado, sin el conocimiento oficial y clasificado de sus moradores, no se ha apreciado en lo que vale este elemento de buen gobierno, si bien aun en los tiempos mas antiguos hallamos ya vestigios del censo estadístico personal ó de poblacion, aunque no siempre encaminado á todos los puntos de utilidad á que se presta; y antes practicado por miras, aisladas algunas veces; pasajeras otras, y casi siempre incompletas. El censo romano es el mas completo que ofrece la antigüedad, pues no era meramente de poblacion, como es sabido, y vemos en su artículo; y sin embargo no era estensivo con igual esmero, ó no lo era absolutamente á toda la República.

Y con efecto: en el pueblo hebreo hallamos ya vestigios del censo de poblacion, y no pocas veces, el pueblo pastor, y despues guerrero y conquistador, recontó sus tribus, y aun hay escritores, que creen como el Padre Marquez, que lo verificaban todos los años.

El mas notable de estos encabezamientos es el formado por Moisés en el desierto de todos los hijos varones de Israel por sus linajes y casas, y con espresion de los nombres de cada uno (1).

Su objeto fué hacer constar el número exacto de las gentes capaces de tomar las armas, á fin de dar las disposiciones convenientes, y fijar el órden que debia guardar cada tribu en los campamentos, en las marchas y en las batallas, alrededor del tabernáculo que acababa de erigirse. Por esta razon fueron escluidos, y no se contaron, como hombres de guerra, los que no habian cumplido veinte años, y los que pasaban de sesenta; asi como las mugeres, los prosélitos y muchos egipcios que moraban entre los hebreos. Tambien fué escluida la tribu de Leví, que habia de estar solo dedicada al servicio del tabernáculo. El número total de los israelitas comprendidos en él, fué el de seiscientos tres mil quinientos cincuenta.

El segundo empadronamiento que menciona el libro de los *Números*, es el formado treinta y ocho años despues por Moisés, y Eleazar en las campiñas de Moab, sobre el Jordán, y al frente de Jericó, estando para entrar en las tierras de Chanaán (los Números, cap. 26): comprendia solo á los varones, mayores de veinte años, capaces de llevar las armas en la guerra, que el pueblo de Dios iba á emprender. La distribucion proyectada de las tierras de los Cananeos entre las tribus, y las familias hebreas, fué el principal objeto de este empadronamiento en que figuraron seiscientos un mil setecientos treinta israelitas.

Digno es tambien de mencion por su importancia y por las consecuencias que produjo para el pueblo de Israel, el que el Rey David mandó formar á Joab, general de su ejército, de todas las tribus de Israel y de Judá (2). En esta operacion se tardó nueve meses y veinte dias, y fueron registrados en Israel, *ochocientos mil hombres fuertes que manejaban espadas*, y en Judá *quinientos mil combatientes*.

No es el único entre los antiguos, el pue-

(1) Pabon en los Números, cap. 1.
(2) (Libro 2.° de los Reyes, cap. 24).

blo hebreo, que procuraba, con la numeracion de sus hijos, tener la medida de su fortaleza y prosperidad. Esto mismo hicieron todos los que alcanzaron alto renombre en la historia. No ha llegado á nuestras manos ningun padron de poblacion hecho en el imperio egipcio, bajo el poder de los Faraones. Mas, una multitud de datos y de números parciales, que se encuentran en las obras de los historiadores griegos, prueban evidentemente que la poblacion estaba allí numerada y clasificada en diferentes grupos. Sábese, por ejemplo, que las fuerzas militares egipcias ascendian á 405,000 hombres, y que la casta de que estos esclusivamente salian, llegaba á 2.350,000 personas de todas edades y sexos. Y estos datos y otros de la misma índole, presuponen necesariamente la existencia de encabezamientos ó censos de poblacion.

Si estos pueblos no hubieran ya conocido esta rueda tan útil para el movimiento y mejor direccion de la máquina política; el génio político de la Grecia la hubiera inventado. El instinto de la libertad de los pueblos griegos, sus guerras gloriosas con las naciones estrañas, sus discordias intestinas, las diferentes razas que ocupaban el suelo, la rapidez sucesiva en el poder de los partidos, la intervencion del ciudadano en los asuntos públicos, en una palabra, la organizacion política de la Grecia, exigia que se contasen perpétuamente en la plaza pública los hombres libres, porque su número era el mas poderoso elemento para las cuestiones políticas del Estado.

Aun mayor importancia que la Grecia, con ser tanta, dió Roma al censo de su poblacion. La ciudad eterna, que aspiraba á sujetar el mundo con el poder de sus armas, miró siempre con orgullosa aficion esta clase de trabajos. El censo de sus ciudadanos fué para Roma la medida de su poderío: el censo de los habitantes de los pueblos subyugados, el precio de sus victorias y la talla de su grandeza. No es esta ocasion de hablar del orígen del censo romano, de su historia, de sus circunstancias, ni de los resultados políticos, civiles, administrativos y morales que producia. Estas y otras cuestiones, con ellas enlazadas, tienen un lugar especial en la Enciclopedia. (Véase **censo romano**). Baste á nuestro propósito consignar aquí que en el trascurso de 800 años, en medio de todas las vicisitudes que cambiaron tantas veces la faz de la República, nunca se dejaron de formalizar con mayor ó menor perfeccion estos registros. Los historiadores han conservado el resultado total de treinta y seis empadronamientos, que en materia de números son los mas curiosos datos de la antigüedad. Notable es sobre todo, por su objeto, el mas vasto que jamás se ha emprendido, el formado por Augusto y presentado al senado despues de su muerte, y del cual se hizo en este cuerpo lectura pública. Era un estado de las riquezas del imperio, del número de sus ciudadanos y aliados armados, de las escuadras, de los tributos y otros artículos de las rentas públicas. Y si consideramos que entonces el imperio romano se estendia en un espacio de 208,000 leguas cuadradas y que contaba mas de ochenta millones de habitantes, tendremos idea y conocimiento de la prosperidad y grandeza á que habia llegado aquel pueblo, el primero de la historia, que asi conquistaba naciones, como las ennoblecia y regularizaba con su administracion.

Sometida la España á los Romanos, no sin hacer antes ostentoso alarde de su brío y amor á la independencia, recibió de los vencedores, entre otras instituciones y costumbres, el censo ó padron general. Acallado, por entonces, un tanto el estruendo de la guerra, el censo en España, mas que al alistamiento militar, atendió al fomento y mejor repartimiento de los tributos. Para este objeto se dividió en personal y real. Hacíase el primero por cabezas ó personas, incluyéndose en él los hombres y las mugeres desde la edad de la pubertad hasta la de sesenta y cinco años: y formaban el segundo, teniendo en consideracion las propiedades que cada uno poseia. La principal diferencia que entre uno y otro existia, era que por el personal pagaban todos los comprendidos en él una misma moneda ó género de tributo, denominado comunmente *Nummus*, *census*, *capitatio*; y por el real se repartia el impuesto en propor-

cion de las heredades, suelo ó fundos que cada una disfrutaba. Uno y otro se formaban en instrumentos públicos, y abarcaban tanto á las personas libres como á los esclavos. Estos sin embargo no estaban sujetos al pago, que solo obligaba á los ciudadanos: figuraban únicamente para evitar fraudes y tener conocimiento de la poblacion en todos sus pormenores.

Un nuevo censo formó Augusto de España, que fué presentado en el Senado el año 715 de la fundacion de Roma, habiéndose hecho su publicacion en el siguiente. El motivo que para ello hubo fué la imposicion de un nuevo tributo en favor del pueblo romano. Este tributo llamóse *æs, ab ære*, por la moneda de metal en que se habia de pagar, y de aquí viene, en concepto de algunos historiadores, el orígen de contar los años por *eras*, esto es, partiendo desde el en que se comenzó á pagar esta contribucion por los españoles al pueblo romano.

Conveniente es observar aquí que este registro, como los demás de que hemos hablado, lo mismo en Roma que en la mayor parte de los pueblos antiguos, eran muy distintos de los que hoy conocemos con el nombre de *censos*. Mas que el conocimiento exacto de la poblacion, objeto de los censos modernos, tenian por fin aquellos la realizacion inmediata de una empresa militar, fijar el número de guerreros que un pais tenia para defender sus fronteras ó para invadir el territorio de su vecino, y no pocas veces el repartimiento de algun tributo ó contribucion. Mas, á pesar de todo, estas cifras, aunque parciales, incompletas y aisladas, son datos preciosos para conocer la economía de las sociedades antiguas, y no pueden menos de ser consideradas como antecedentes históricos de los modernos censos.

La revolucion social, que al comenzar el siglo V de la era cristiana, conmovió el occidente y varió la faz de la Europa, deja una laguna de seis siglos en la historia de la institucion de que venimos hablando.

Destruido el principio de unidad, esencia de los gobiernos antiguos; el principio de la libertad individual tiene, con los bárbaros, su entrada en la historia, de una manera absoluta y violenta.

El bárbaro, contento de sí mismo, satisfecho de su fuerza y con la conciencia de su libertad, pelea por sí y para sí, sin tener en cuenta para nada el estado ó pueblo á que pertenece. La Europa se convierte en un campo de batalla: cada ejército es un pueblo, y la historia una confusion de principios, de hombres, de razas, y de idiomas. Buscar en esta época censo de poblacion en Europa, es desconocer la historia de aquellos tormentosos tiempos. Motivos hay para asegurar que á algunos de los pueblos invasores no les era del todo estraña la costumbre de formar estos censos; sino que la habian practicado en sus primeros asientos allá al septentrion de la Europa. César asegura, que cuando se apoderó del campo de los Helvecios, en las Galias, encontró un registro nominal, dividido en dos categorías, una que comprendia los guerreros, y otra los viejos, las mugeres y los niños (1). Mas sea de esto lo que quiera; ello es que cuando salieron de sus bosques, cayeron sobre la Europa, la rodean al nordeste, y se establecen en ella ú olvidan la antigua costumbre, ó lo que es mas posible, no tuvieron ocasion de practicarla en la azarosa vida y en el estado de guerra en que vivieron, hasta que, organizado definitivamente el feudalismo, y habiendo cesado la invasion, se verificó, en el siglo XI, la insurreccion de las municipalidades de la Europa.

En cuanto á España, no siguió la misma suerte que las demás naciones. La invasion de los árabes, verificada al comenzar el siglo VIII, dió á nuestra pátria, en esta, como en otras materias, una fisonomía característica. Frecuente es presentar á los árabes, como un pueblo bárbaro é inculto, destituido de los conocimientos y costumbres propios de los pueblos civiles. Otra cosa, sin embargo, y muy distinta, se desprende de los monumentos artísticos y de las obras científicas que nos quedan de la época de su domina-

(1) L. 1.°, c. 5.°

cion. Limitándonos ahora á lo que es peculiar y correspondiente al objeto de este artículo, diremos solo, que cuando la Europa cristiana, sumida en la barbarie, ni alcanzaba siquiera á percibir las ventajas que proporcionan los registros de las poblaciones, los árabes, apenas sientan con alguna seguridad su planta en nuestro fértil suelo, convierten la vista á este importante ramo de la administracion pública y forman una estadística de España, para apreciar en su justo valor el precioso territorio de que se habian enseñoreado por la fuerza de las armas. Conde, en su historia de la dominacion de los árabes, afirma que en el año de 741 el valí ó virey de la Península envió al Califa un estado descriptivo del pais, de sus costas, de sus rios, de sus pueblos, de su poblacion y de sus productos. Y esto, que confirman otros historiadores, prueba el aprecio que hicieron siempre los árabes de los registros ó censos de poblacion, tanto, que, no solo conocian el número total de la poblacion de la parte de España en que dominaban, sino que sabian tambien el número de los habitantes de cada una de sus poblaciones, el de los trabajadores de toda clase y otras circunstancias y pormenores que, aun hoy, no han podido lograr las modernas estadísticas.

Mientras tanto los cristianos trataban de ensanchar sus fronteras. En el siglo XI, sin embargo, se observa en España, como en el resto de la Europa un movimiento de progreso. Los pueblos adquieren fuerza y poder, sacuden el yugo de sus señores, levantan gentes de guerra para sostener sus derechos y privilegios, y reunen en la plaza pública á todos los vecinos para acordar lo conveniente á la administracion y mejor gobierno de los intereses comunales. Este nuevo órden de cosas, esta revolucion completa, verificada en el seno de los pueblos, esta intervencion de la multitud en el gobierno del municipio, vino á dar nueva vida á los censos, los cuales al resucitar, por decirlo asi, tomaron el carácter de la época. Tenian entonces los intereses particulares mas fuerza, que los generales: los hombres sentian mas los apuros, y se afanaban mucho mas por la prosperidad de la ciudad de que formaban parte, y en cuyo gobierno tenian alguna intervencion, que por los intereses generales del Estado, que apenas comprendian, y en el que no tenian representacion ninguna. El censo se concretaba á las localidades, y satisfacia con esto todas les necesidades, que los pueblos esperimentaban. De aquí nace el que desde el siglo XI hasta el XV todos los que se formaron tuvieron un carácter puramente municipal. En el siglo XV varía completamente el estado de la Europa: el principio monárquico se sobrepone al principio aristocrático y al principio popular: se dibujan y constituyen definitivamente los estados modernos; levántanse los intereses generales al lado de los particulares; la nacion es mas que la ciudad, y asi como antes era preciso contar el número de individuos de un pueblo para la buena administracion del municipio, hácese ahora conveniente contar el número de los que componen el Estado para el repartimiento de las contribuciones y mejor gestion de los negocios públicos. No es nuestro objeto indicar siquiera los esfuerzos que en este sentido han hecho las naciones estranjeras: basta solo á nuestro propósito decir algunas palabras acerca de los trabajos que se han verificado en España sobre este particular.

Puede pasar como el mas antiguo de todos el censo formado por D. Alonso de Quintanilla, contador de los Reyes Católicos en 1482. Habia recibido este de sus señores el honroso y grave encargo de proponerles los medios mas oportunos para que estuvieran convenientemente armadas todas las gentes de sus reinos, y creyó necesario, para cumplir su comision con acierto y lealtad, tener conocimiento exacto de la poblacion. Con este objeto manifestó á los reyes, al presentarles su proyecto, que habia *contado muy ciertamente el número de las vecindades de los reinos de Castilla, é Leon, é Toledo, é Murcia, y el Andalucía, sin lo que hay en Granada; y que parecia haber en ellos un cuento é quinientos mil vecinos; de los cuales podrian ser de tierras solariegas de caballeros ó de otras personas legas, doscientos*

é cincuenta mil vecinos: así que quedarian en lo realengo é abadengo, é órdenes, é behetrías, un cuento é doscientos cincuenta mil vecinos (1). Este apuntamiento de Quintanilla viene tambien en apoyo de lo que hemos manifestado antes, á saber: que hasta el siglo XV no existió en España ningun censo, ni oficial, ni estra-oficial, que tuviera un carácter general. A haber existido, no hubiera tomado aquel funcionario sobre sí el penoso trabajo de registrar las vecindades del reino, sino que sirviéndole de base el padron general, hubiera, con el mismo acierto, en menos tiempo podido formular su pensamiento acerca del armamento que debia darse á los pueblos.

Mas importantes y de mucha mas utilidad son los trabajos que se hicieron en el siglo siguiente, y á cuya propalacion tanto ha contribuido el presbítero D. Tomás Gonzalez. Encargado por el Rey D. Fernando VII de reconocer y arreglar el archivo de Simancas, tuvo ocasion Gonzalez de verlos, reunirlos y apreciar todas las ventajas que su publicacion podria proporcionar. Asi fué que, prévia la oportuna real autorizacion en 1825, los publicó con el título de *Censo de poblacion* de las provincias y partidos de la corona de Castilla en el siglo XVI, con varios apéndices para completar lo del resto de la Península en el mismo siglo, segun resulta de los libros y registros que se custodian en el archivo de Simancas. Los documentos auténticos, reunidos en este libro, son datos inestimables, no solo para conocer la poblacion y su movimiento en aquella época, sino tambien para apreciar el influjo que en ella tuvieron las dos famosas providencias de 1492 y 1603, por la primera de las cuales se espulsó á los judíos, y por la segunda á los moriscos de España.

Dos son los censos mas importantes que se formaron en este período de tiempo: el de 1587, y el de 1594: por aquel la poblacion de España resultaba ser de seis millones seiscientos treinta mil novecientos veinte y nueve: por este de seis millones ochocientos ochenta y ocho mil ciento seis almas. Formóse el primero en virtud de los datos y relaciones que los MM. RR. arzobispos y RR. obispos remitieron á la secretaría del real Patronato de la Iglesia, teniendo el defecto de no haberse en él incluido muchos territorios exentos, algunos pueblos de las órdenes militares y casi todos los de la de San Juan. Por el contrario en el segundo fué registrada con bastante exactitud la poblacion, porque habiéndose hecho por la autoridad real, y para la distribucion del donativo de millones, servicio en que no habia exenciones, ni franquicias para nadie, y que comprendia á los nobles, como á los pecheros, todos los pueblos estaban igualmente interesados en que no hubiese agravio en el repartimiento.

En el siglo siguiente se formaron tambien dos censos; el primero en 1787, en 1797 el segundo. Segun el uno, habia en España 10.269,150 individuos; segun el otro 10,541,221. La diferencia que resulta entre estas cifras, á pesar del poco tiempo que medió entre una y otra investigacion, nace de que, habiéndose formado el de 1787 por diócesis, y el de 1797 por intendencias, no se comprendieron en aquel, y sí en este, los pueblos de las órdenes militares y las jurisdicciones exentas. Estos trabajos fueron ya mucho mas perfectos que los que se hicieron en el siglo XVI: baste decir, en prueba de ello, que tanto en el un censo, como en el otro, se hizo constar con distincion el número de pueblos, parroquias, casas, individuos, varones, hembras, eclesiásticos, religiosos, conventos, empleados, militares, nobles, estudiantes, abogados, médicos, labradores, jornaleros, fabricantes, artesanos, comerciantes, criados, hospitales, enfermos, espósitos, hospicios, cárceles, etc.

Desgraciadamente en el presente siglo no se ha mirado en España con la atencion que se merecen esta clase de operaciones.

Es triste, pero cierto, que la falta de registros públicos y el descuido que en ello se ha tenido y tiene, hagan necesario el tener que recurrir, no ya para apreciacion estadística de número, sino para derramas y tribu-

(1) Apéndice 2.° del censo de poblacion del siglo XVI, publicado por D. Tomás Gonzalez.

tos, y lo que es mas, para la contribucion de sangre, á datos y supuestos probables, tradicionales, falibles, mas bien que seguros, pues es tristemente cierto, que no los hay exactos para determinar el progreso numérico en que indudablemente se halla la poblacion de España. En 1803 la balanza del comercio la fijó ya en 10.164,096 almas; mientras es moralmente cierto que en el dia no baja de 12 millones, á pesar de las últimas guerras y de los estragos de enfermedades mortíferas y nunca conocidas en España ni en Europa.

Aquí debiamos tratar de la necesidad y utilidad de los censos de poblacion, aunque solo fueran personales, si bien clasificados. Asi fué el censo romano, y asi los practicados en España en 1787 y 1797, y mas ó menos parcialmente alguna vez despues. Pero como esto se refiere ya mas bien á la estadística, en la acepcion técnica y actual de esta palabra, véase su artículo. Véanse tambien **CENSO ESTADISTICO: CENSO DE POBLACION DE GRANADA: CENSO ROMANO: CENSOR ROMANO: EMPADRONAMIENTO: MATRICULA: PADRON.**

Siendo tan repetido, como tambien el único formal, ó mas formal de España hasta ahora, el censo de poblacion de 1797, concluiremos dando algunas nociones de él. Le precedió y tuvo por antecedente el de 1787. Todavía no pudo publicarse, ni fué impreso hasta 1801. Cuatro años se emplearon en rectificar y coordinar sus datos, en deducir y fijar sus resultados y aun asi se confiesa en el prólogo no ser de todo punto cierto ni decisivo, á lo cual, se dice, solo puede arribarse *con la perseverancia en la repeticion de los censos.*

El mencionado de 1797, despues de la nota ó advertencia que sirve de prólogo, se compone de 46 estados, á saber:

1.° De la poblacion de Madrid.
2.° Id. de la provincia de Alava.
3.° Id. de la del reino de Aragon.
4.° De la del Principado de Asturias.
5.° Id. de la provincia de Avila.
6.° De la de Búrgos.
7.° De la del Principado de Cataluña.
8.° De la del reino de Córdoba.
9.° Id. de la provincia de Cuenca.
10. De la de Estremadura.
11. De la del reino de Galicia.
12. Id. de la provincia de Granada.
13. De la de Guadalajara.
14. De la de Guipúzcoa.
15. Del reino de Jaen.
16. De la provincia de Leon.
17. De la provincia de Madrid, sin incluir la capital.
18. De la provincia de la Mancha.
19. Del reino de Murcia.
20. Del reino de Navarra.
21. De las nuevas poblaciones de Sierra Morena.
22. De la provincia de Palencia.
23. De la de Salamanca.
24. De la de Segovia.
25. Del reino de Sevilla.
26. Del real sitio de Aranjuez.
27. Del real sitio del Pardo.
28. Del real sitio de San Lorenzo.
29. De los reales sitios de San Ildefonso, Balsain y Riofrio.
30. De la provincia de Soria.
31. De la de Toledo.
32. De la de Toro.
33. Del reino de Valencia.
34. De la provincia de Valladolid.
35. Del señorío de Vizcaya.
36. De la provincia de Zamora.
37. De la isla de Mallorca.
38. De la de Menorca.
39. De la de Ibiza y Fromentera.
40. De las Islas Canarias.
41. De la plaza de Ceuta.
42. De los presidios de Melilla, Alhucemas y el Peñon.
43. Estado general de la poblacion de España en 1787.
44. Estado general de la poblacion de España en 1797.
45. Estado comparativo de los censos de poblacion de 1787 y 1797.
46. De las proporciones que resultan por el censo de 1797 aproximadas por decimales.

Hemos seguido en esta enumeracion el

lenguaje mismo y denominaciones del censo.

Los estados parciales antes espresados arrojan el número de almas siguiente:

	Número de almas.
El estado núm. 1.°. . .	167,607
—— núm. 2.°. . .	67,823
—— núm. 3.°. . .	657,376
—— núm. 4.°. . .	364,238
—— núm. 5.°. . .	118,061
—— núm. 6.°. . .	470,588
—— núm. 7.°. . .	858,818
—— núm. 8.°. . .	252,028
—— núm. 9.°. . .	294,290
—— núm. 10. . .	428,493
—— núm. 11. . .	1.142,630
—— núm. 12. . .	692,924
—— núm. 13. . .	121,115
—— núm. 14. . .	104,491
—— núm. 15. . .	206,807
—— núm. 16. . .	239,812
—— núm. 17. . .	60,913
—— núm. 18. . .	205,548
—— núm. 19. . .	383,226
—— núm. 20. . .	221,728
—— núm. 21. . .	6,196
—— núm. 22. . .	118,061
—— núm. 23. . .	209,988
—— núm. 24. . .	161,007
—— núm. 25. . .	746,221
—— núm. 26. . .	4,226
—— núm. 27. . .	581
—— núm. 28. . .	2,372
—— núm. 29. . .	3,856
—— núm. 30. . .	198,107
—— núm. 31. . .	370,641
—— núm. 32. . .	97,370
—— núm. 33. . .	825,059
—— núm. 34. . .	187,590
—— núm. 35. . .	111,436
—— núm. 36. . .	71,401
—— núm. 37. . .	140,699
—— núm. 38. . .	30,990
—— núm. 39. . .	15,290
—— núm. 40. . .	173,865
—— núm. 41. . .	3,002
—— núm. 42. . .	2,244

El estado 46 ó de *proporciones*, es curiosísimo, y hé aquí algunos de sus pormenores.

A 894 poblaciones realengas correspondian 100 de abadengo: á 476 de realengo, 100 de señorío eclesiástico: á 141 de realengo, 100 de señorío secular: á 172 de realengo, 10 de las órdenes militares: á 2,088 de todas clases, 1,000 realengas: á cada 100 parroquias 54,942 habitantes: á 1,248 casas habitables, 100 inhabitables: á 102 hombres, 102 mugeres: á 1,025 solteros, 1,000 solteras: á 1,512 solteros, 1,000 casados: á 1,476 solteras, 1,000 casadas: á 18,335 habitantes, 100 eclesiásticos seculares: á 181,883 habitantes, 1,000 individuos del clero regular: á 2,622 habitantes, 100 hidalgos: á 28,916 habitantes, 1,000 propietarios: á 100 propietarios, 139 arrendatarios: á 100 propietarios, 221 jornaleros, etc.

No pudiendo hacerlo de los demás estados, á continuacion insertamos á la letra el del núm. 44, como general y resúmen de todos.

El mencionado censo de 1797 fué impreso de órden superior y en fólio mayor en 1801 en Madrid, imprenta de Vega y compañía. En los últimos tiempos se remitió de real órden á las diputaciones provinciales.

ESTADO GENERAL DE LA POBLACION DE ESPAÑA EN EL AÑO DE 1797.

POBLACIONES.

	Ciudades.	Villas.	Lug. y felig.	Aldeas.	Granjas.	Cotos redond.	Despoblados.	Corregimientos.	Casas útiles.	Casas arruin.
Realengo. . .	126	1,703	7,870	879	934	118	291	150		
Abadengo. . .	»	135	948	42	46	129	25	7		
Señorío Ecles.	7	260	1,251	123	644	154	149	3	1.949,577	156,246
Id. Secular. .	15	2,286	4,267	671	612	400	430	71		
De Ordenes. .	»	332	186	106	15	36	37	2		
Total. . .	148	4,716	14,525	1,821	2,251	837	932	233	1.949,577	156,246

OFICINAS PUBLICAS.

Consistoriales.	Cárceles.	Pósitos.	Juegos.	Teatros.	Lonjas.	Pesos Reales.
6,935	5,898	3,954	739	76	663	755

OFICINAS PARTICULARES.

Matade-ros.	Carnece-rías.	Pescade-rías.	Taber-nas.	Casas de comer.	Botille-rías.	Posa-das.	Moli-nos.	Bata-nes.	Tene-rías.	Molinos de papel.
1,737	4,400	672	17,523	1,235	451	8,277	34,113	1,602	1,532	327

CASAS DE CARIDAD.

Hospitales.	Casas.	Capellanes.	Empleados.	Sirvientes.	Facultativos.	Enfermos.	Enfermas.	Locos.	Locas.	Espósitos.	Espósitas.
	2,331	688	1,647	2,903	1,141	9,816	4,038	485	420	2,723	2,603

Hospicios.	Casas.	Capellanes.	Empleados.	Sirvientes.	Hombres.	Mugeres.	Niños.	Niñas.	Total.
	106	68	367	358	3,791	4,305	2,139	1,667	12,695

Casas de Correccion.	Casas.	Empleados.	Reclusos.	Reclusas.	Total.
	32	114	239	900	1,253

—— de Espósitos.	Casas.	Empleados.	Espósitos.	Espósitas.	Total.
	67	252	6,455	5,954	12,661

—— de Huérfanos.	Casas.	Empleados.	Huérfanos.	Huérfanas.	Total.
	41	140	429	697	1,266

—— de Doctrinos.	Casas.	Empleados.	Doctrinos.	Doctrinas.	Total.
	9	16	239	47	302

Colegios.	Maestros.	Niños.	Sirvientes.	Para Niñas.	Maestras.	Niñas.	Sirvientas.
99	216	4,505	177	50	217	2,745	175

Escuelas de primeras letras.	Maestros.	Alumnos.	De enseñanza para Niñas.	Maestras.	Alumnas.
8,704	8,962	304,613	2,303	2,575	88,513

CASAS DE ESTUDIOS PARA CIENCIAS Y ARTES.

	Número.	Maestros.	Alumnos.	Sirvientes.		Número.	Maestros.	Alumnos.	Sirvientes.
						312	1,350	25,149	643
Universidades. .	22	560	12,538	127	Gabinetes.	3	2	16	1
Academias. . . .	99	242	4,422	32	Botánica.	5	4	147	18
Colegios.	129	485	6,424	433	Química.	6	11	322	4
Sociedades. . . .	34	8	692	15	Nobles Artes. . .	24	110	2,447	41
Matemáticas. . . .	22	49	1,035	30	De Comercio. . .	4	6	83	2
Historia natural.	3	1	»	6	De Agricultura. .	1	1	12	1
Astronomía. . . .	2	2	12	»	Derecho público.	»	»	»	»
Veterinaria. . . .	1	3	26	»	Mineralogía. . . .	2	1	50	»
Sumas.	312	1,350	25,149	643	Total.	357	1,485	28,226	710

INDIVIDUOS.

	SOLTEROS.		CASADOS.		VIUDOS.		Total de edades.
	Varones.	Hembras.	Varones.	Hembras.	Varones.	Hembras.	
Hasta 7 años. . .	997,433	968,265	»	»	»	»	1.965,698
De 7 á 16.	890,149	843,871	5,462	7,463	295	225	1.747,465
De 16 á 25. . . .	577,451	578,663	181,065	243,039	5,767	10,505	1.596,490
De 25 á 40. . . .	285,775	277,963	794,793	838,439	32,545	64,666	2.294,181
De 40 á 50. . . .	115,715	117,524	483,944	451,358	50,129	91,551	1.313,221
De 50 á 60. . . .	74,124	75,103	305,125	268,671	54,983	105,874	883,880
De 60 á 70. . . .	43,861	44,867	167,070	132,277	51,505	89,624	529,204
De 70 á 80. . . .	15,576	15,756	42,213	33,059	26,872	37,856	171,332
De 80 á 90. . . .	3,344	3,074	6,407	5,224	6,959	10,193	35,201
De 90 á 100. . .	391	1,234	512	359	789	1,150	4,435
De 100 arriba. .	13	17	9	6	23	46	114
Total.	3.003,832	2.926,337	1.986,600	1.982,895	229,867	411,690	10.541,221
Total de estados. . . .	5.930,169		3.969,495		641,557		
Total general.	10.541,221						

ESTADO ECLESIASTICO SECULAR.

	Número.	Canónigos.	Racioneros.	Curas Párrocos	Tenientes.	Beneficiados.	Ordenados de mayores.	Id. de menores.	Sacristanes y Acólitos.	Sirvientes.	Ermitaños.
Catedrales. .	62	1,485	863	83	36	1,182	1,377	582	663	774	8
Colegiatas. .	107	908	302	52	51	438	444	146	481	369	1
Parroquias. .	19,486	»	703	16,341	4,839	15,654	16,081	8,449	13,814	2,728	12
Capillas particulares. .	5,016	»	1	1	1	114	736	208	47	68	»
Ermitas. . .	17,302	»	»	1	2	23	31	3	10	48	1,395
Sumas. . .	41,673	2,393	1,869	16,481	4,929	17,411	18,669	9,088	15,015	3,987	1,416
Total.	91,258										

ESTADO ECLESIASTICO REGULAR.

MONGES.	Casas.	Profesos	Novicios.	Legos.	Donados.	Criados.	Niños.	Total.
Benitos	68	1,408	24	151	10	589	111	2,293
Bernardos	63	1,397	54	150	22	518	39	2,210
Gerónimos	50	1,480	57	45	75	1,046	100	2,803
Cartujos	16	309	22	109	30	485	30	985
Basilios	19	332	13	48	14	59	2	468
MENDICANTES.								
Dominicos	229	3,283	337	773	162	581	55	5,191
Franciscos	452	10,609	665	2,297	1,685	509	29	15,794
De San Pedro Alcántara	132	2,723	189	727	508	236	6	4,389
Recoletos ó Antoninos	38	673	58	235	164	31	»	1,161
Terceros	28	539	49	91	40	45	7	771
Capuchinos	113	2,271	175	710	448	156	2	3,762
Agustinos Calzados	129	1,910	107	393	30	289	15	2,744
—— Descalzos	20	676	65	166	36	51	2	996
Carmelitas Calzados	78	1,361	140	291	58	185	19	2,054
—— Descalzos	115	2,448	171	618	135	259	55	3,686
Trinitarios Calzados	68	1,052	91	234	35	137	46	1,595
—— Descalzos	29	640	43	163	35	76	7	934
Mercenarios Calzados	79	1.573	58	351	45	178	12	2,217
—— Descalzos	29	528	26	120	24	78	»	776
Mínimos	81	960	83	213	79	139	10	1,484
Servitas	9	224	4	60	8	11	2	309
De San Juan de Dios	58	463	24	112	24	113	4	740
CANÓNIGOS Y CLÉRIGOS REGLARES								
De San Benito	5	42	2	3	2	25	4	78
De San Agustin	9	78	5	3	»	83	6	175
Premonstratenses	22	310	14	2	14	104	31	478
Teatinos	5	75	3	11	1	22	6	118
Menores	14	177	20	42	1	20	5	265
Agonizantes	6	76	3	17	8	13	1	118
Escolapios	24	326	26	87	19	97	1,187	1,742
De San Vicente de Paul	4	60	»	25	2	3	»	90
FREYLES.								
De Malta	4	43	16	»	»	12	7	78
De Santiago	6	89	»	»	»	95	2	186
De Calatrava	2	42	4	»	»	28	»	74
De Alcántara	1	13	»	»	»	15	»	28
De Montesa	3	32	»	»	»	15	»	47
De Sancti Spiritus	4	9	»	1	1	4	12	27
CONGREGACIONES.								
De San Felipe Neri	19	139	3	58	4	44	7	255
Misioneros	4	48	2	32	9	12	4	107
Hospitalarios	7	21	2	21	»	1	»	45
Ermitaños	3	13	4	25	5	7	»	54
Total	2,051	38,122	2,559	8,384	3,733	6,401	1,828	61,327

RELIGIOSAS.

MONJAS.	CASAS SUJETAS al ordinario.	CASAS SUJETAS á la religion.	Profesas.	Novicias.	Señoras con vestido seglar.	Niñas.	Criadas.	Donados.	Criados.	TOTAL.
Benitas.	20	13	765	19	39	25	382	1	56	1,287
Bernardas.	49	18	1,207	52	33	30	524	12	51	1,909
Gerónimas.	10	8	365	21	17	6	138	1	37	585
Basilias.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Dominicas.	33	120	3,053	149	69	171	599	36	150	4,277
Franciscanas Claras. .	78	273	8,289	306	147	102	1,550	179	394	10,967
Recoletas.	17	40	1,142	51	11	22	183	10	63	1,482
Terceras.	5	6	238	14	9	»	32	1	8	302
Capuchinas.	24	5	815	38	4	1	14	142	20	1,034
Agustinas Calzadas. .	60	21	1,993	73	46	46	370	15	112	2,655
——Recoletas. . . .	15	8	481	6	»	2	43	4	26	562
——Descalzas. . . .	10	2	260	17	»	»	10	8	30	325
Carmelitas Calzadas. .	14	11	553	19	25	5	49	3	25	679
——Descalzas. . . .	35	46	1,634	39	3	2	85	6	76	1,845
Trinitarias Calzadas. .	6	5	230	2	4	5	16	»	4	261
——Descalzas. . . .	2	1	78	2	»	»	»	1	3	84
Mercenarias Calzadas .	»	7	126	8	»	»	23	2	7	166
——Descalzas. . . .	5	9	287	19	»	7	31	6	27	377
Brígidas.	5	»	107	8	»	»	9	»	1	125
Mínimas.	8	4	226	7	12	19	40	»	14	309
Servitas.	1	1	57	2	»	»	2	»	1	62
Salesas.	2	»	56	2	»	25	»	»	7	90
De la Enseñanza. . .	10	1	280	10	113	238	33	»	9	683
Del Santo Sepulcro. .	1	1	33	8	1	»	»	»	6	48
De San Lorenzo Justiniano.	4	1	66	3	»	3	4	»	4	82
Nazarenas.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Premonstratenses . . .	1	1	44	1	»	»	3	7	»	57
COMENDADORAS.										
De Malta.	1	7	163	3	7	11	24	»	6	216
De Santiago.	3	3	60	3	13	3	80	7	20	186
De Calatrava.	2	1	37	»	5	»	45	»	4	91
De Alcántara.	1	»	4	»	»	»	6	»	»	10
De Sancti Spiritus. . .	2	3	91	»	»	»	11	10	1	146
Beatas.	16	20	320	6	39	33	23	11	22	474
Beatas Hospitalarias. .	3	2	48	6	6	»	5	2	7	74
TOTAL. . . .	434	641	23,111	896	603	769	4,366	464	1,191	31,400

ESTADO SECULAR.

Clases.	Número	Clases.	Número.	Clases.	Número.	Clases.	Número.
Titulados. . .	1,323			Presidiarios. . .	1,444	Cirujanos. . .	9,272
Nobles.	402,059	Marineros. . .	31,238	*Dependientes de tribunales.*		Boticarios. . .	3,878
Empleados de		Pescadores. . .	16,247				
Inquisicion. .	3,078	Cazadores. . .	2,686				
—de Cruzada.	1,660	Comerciantes. .	6,824	Escribanos. . .	9,633	Albéitares. . .	5,706
—por el Rey.	27,243	Mercaderes. . .	18,861	Abogados. . . .	5,883		
Síndicos. . . .	3,536	Labradores		Relatores. . . .	147	*Criados.*	
Demandantes. .	3,467	propietarios. .	364,514	Alguaciles. . .	4,642		
Militares. . . .	149,340	Arrendatarios .	507,423	Porteros. . . .	1,066		
Estudiantes. . .	29,812	Jornaleros. . .	805,235	Procuradores. .	3,048	De escalera arriba.	15,571
Pintores. . . .	2,022	Ganaderos so-		Sirvientes. . .	4,371		
Arquitectos. . .	2,739	los.	25,530			De escalera abajo. . . .	23,412
Escultores. . .	912	Pastores. . . .	113,628	*Facultativos.*		Domésticos. . .	136,112
Grabadores. . .	223	Conductores. .	8,023	Médicos. . . .	4,340		
Sumas. . .	627,415	. . . . .	1.900,208	. . . . .	34,580	. . . . .	192,951

Total. 2.755,153

FABRICANTES, ARTESANOS Y MENESTRALES.

Fabricantes.	Maestros.	Oficiales.	Aprendices.	Total.	Artesanos y menestrales.	Maestros.	Oficiales.	Aprendices.	Total.
Plateros.	2,274	1,042	704	4,020	Hojalateros. . . .	564	164	83	811
Lapidarios. . . .	120	116	20	256	Latoneros.	502	166	110	778
Batidores.	65	28	10	103	Encuadernadores	374	279	133	786
Afinadores. . . .	22	13	3	38	Impresores. . . .	224	623	204	1,051
Fabricantes de seda.	8,809	5,269	1,798	15,876	Broncistas. . . .	170	79	42	291
De lana.	35,226	21,524	4,208	60,958	Estañeros. . . .	113	40	24	177
De sombreros. .	1,018	734	253	2,005	Caldereros. . . .	1,296	543	241	2,080
De lienzos. . . .	28,906	7,298	2,208	38,412	Cerrajeros. . . .	4,633	1,046	685	6,364
De cordelería y jarcia.	5,525	2,296	1,053	8,876	Herreros.	9,170	2,478	1,285	12,933
De esparto. . . .	9,153	2,688	186	12,027	Carpinteros. . .	25,432	5,477	2,401	33,310
De jabon.	1,146	96	82	1,324	Roperos.	878	147	69	1,094
Curtidores. . . .	3,682	854	234	4,770	Sastres.	27,378	6,732	4,040	38,150
Zurradores. . . .	1,398	507	180	2,085	Molenderos de chocolate. . .	2,860	480	130	3,470
De pastas. . . .	237	79	24	360	Cocineros.	1,286	356	246	1,882
De papel y cartones.	401	867	184	1,452	Pasteleros. . . .	289	81	63	433
De estampado. .	186	47	21	254	Confiteros. . . .	2,208	432	381	3,021
Bordadores. . . .	739	409	174	1,322	Reposteros. . . .	105	17	9	131
Tintoreros. . . .	1,227	465	217	1,909	Botilleros. . . .	351	138	31	520
Alfareros.	3,643	1,004	388	5,035	Peluqueros. . . .	1,195	506	134	1,835
De loza.	314	408	95	817	Zapateros. . . .	29,901	8,398	3,891	42,190
Fundidores de letras.	32	32	8	72	Taberneros. . . .	17,927	27	2	17,956
De vidrios. . . .	155	193	52	400	Traperos.	387	23	3	413
De cristales. . . .	5	10	1	16	Aguadores. . . .	3,708	7	4	3,719
De hules y encerados.	20	1	1	22	Mozos de carga. .	3,180	102	»	3,282
De aguardientes.	5,084	141	8	5,233	Carniceros. . . .	3,682	435	74	4,191
De velas de sebo.	180	67	28	275	Otros artesanos y menestrales.	60,236	13,319	3,080	76,635
De pez.	242	»	»	242	Jornaleros de todos.	22,089	»	»	22,089
De aceite de linaza.	189	»	»	189					
De azúcar. . . .	14	2	1	17					
Otros fabricantes.	7,730	3,707	632	12,069					
Jornaleros de todos.	29,467	»	»	29,467					
Total. . . .	147,229	49,897	12,775	209,901	Total. . . .	220,132	42,095	17,365	279,592

«*Segun el censo del año de* 1787 *la poblacion de España era de* 10.268,150 *individuos; el presente manifiesta que asciende á* 10.541,221. *Cotejados ambos, resulta el aumento de* 273,071.»

CENSO DE POBLACION DE GRANADA. Aunque bajo la enunciativa de *censo de poblacion*, no se trata de un *censo estadístico*, como en el artículo anterior, sino *convencional*. Tal es el que varios pueblos del contiguo reino de Granada, pagaron, primero al Rey, luego á los propios de Granada; y por último otra vez al Estado.

Verificada la espulsion de los moriscos, los nuevos pobladores de los lugares abandonados, recibieron en arriendo, y mas bien á manera do foro, las tierras y otros fundos, debiendo cada uno pagar al Rey un real por casa, y la décima de frutos.

Desde luego se comprende cuán embarazosa habia de ser la recaudacion y administracion de esta renta individual. Acreditado asi por los resultados, se vendieron á censo á los pueblos por un cánon módico las fincas, y este es el conocido y repetido *censo de poblacion del reino de Granada*. Aun asi no se acomodaron todas las fincas de moros; y ofrecidas en venta por juro deheredad, ó á censo; unas fueron compradas en el primer concepto por particulares: otras lo fueron á censo; y estos son los que, en el lenguaje y disposiciones rentísticas, se llaman *censos sueltos*, para diferenciarlos de los debidos colectivamente por los pueblos de aquel reino.

En un principio el censo de poblacion fué cedido á los propios de Granada. En 1743 lo volvió á reincorporar la corona; formando desde entonces la llamada *renta de poblacion*, compuesta de unos y otros censos; y de los impuestos llamados de *farda* y de la *abuela*.

Siempre mal pagado, y al propio tiempo, aun por eso mismo mas gravoso que de ordinario este censo, se han multiplicado las leyes y órdenes para su redencion, sin que aquella, sin embargo, tuviese total efecto; entre otras razones por una muy sencilla, y es que, por gravoso que fuese el solventar lo poco que se pagaba de la pension, lo era mas el aprontar de una vez el todo, ó la mitad del capital; y cuya solvencia no admitia la dilacion que el censo, ni se eludia con igual facilidad. Sea de ello lo que quiera, es lo cierto, que en este año de 1856 no ha sido todavía redimido totalmente el censo, y hé aquí, sin embargo, las principales disposiciones relativas á este fin, y aun á su abolicion.

Acordóla Cárlos IV en 1797 con insignes ventajas, que pueden verse en la instruccion del caso de 17 de enero de 1798 (1).

En 8 de noviembre de 1820 las Córtes decretaron su *abolicion*. Suspendiéronse los efecto de esta medida, hasta ver si habia otros pueblos á que pudiera ser aplicable. Pero, suponiendo que no los habria, y en todo caso, sin perjuicio de comprenderlos en la gracia, en órden de 22 de junio de 1822, se alzó la suspension: órdenes que en 1824 quedaron sin efecto, como todas las dictadas durante el régimen constitucional.

Por ley de 14 de agosto de 1841, se declaró en estado de redencion con las ventajas de la instruccion y ley recopilada, de que antes hemos hecho mérito, la *renta de poblacion de Granada*; si bien, enumerando con poca exactitud los gravámenes que la componian, como puede verse en el art. 1.° de dicha ley. Por el 4.° de la misma quedó abolida la *farda*. En real órden de 20 de noviembre de 1843 se amplió el término para redimir, si bien la redencion debia verificarse aprontando el capital de una vez. Por otra de 29 de noviembre de 1849, se amplió nuevamente el término hasta fines de febrero de 1850. En real resolucion, por último, de 21 de junio de 1850, se renovó la ampliacion de término, pero ordenando que la direccion de fincas del Estado se hiciese cargo por cuenta del mismo de todos los censos que no hubieren sido redimidos, para el 1.° de enero de 1851, á fin de enajenarlos, ó reimponerlos. Ultimamente es aplicable al caso la ley de 1.° de mayo de 1855, sobre venta y redencion de censos del Estado, y véase sobre ello lo que indicamos en el artículo CENSO (*como contrato*): véase además, ABUELA (*renta de la*): FARDA: RENTA DE POBLACION.

CENSO DE RIQUEZA. V. ESTADISTICA.

CENSO ROMANO. Hemos indi-

(1) Ley 19, tit. 15, lib. 10. Nov. Recop.

cado la naturaleza de este censo en el artículo **CENSO ESTADISTICO**. Pertenece á la clase de estos, y entre ellos á la de mistos, como es sabido, y esponemos en dicho artículo.

Su institucion se debe á Servio Tulio, 6.° Rey de Roma, que manifestó en ella, como en los demás actos de su gobierno, la justicia con que mereció el renombre de *Sanctor legum*. En el censo se dividia el pueblo en clases, y las clases en curias: la adjudicacion en la clase y en la centuria, se hacia segun las circunstancias y riqueza de los ciudadanos.

Seis eran las clases en que se dividia el pueblo.

La primera se componia de todos los que poseian en tierras y bienes cien mil *ases*. Esta clase se subdividia en ochenta centurias ó compañías de infantería, cuarenta de jóvenes y cuarenta de ancianos. Por jóvenes se entendia á todos los comprendidos en las edades desde 17 hasta 46 años; y por ancianos á todos los que pasaban de esta última edad. Los jóvenes estaban dispuestos á hacer las guerras esteriores, y los ancianos á defender la ciudad. Habia además en esta clase diez y ocho centurias de caballeros (*equites*), preparados para pelear á caballo contra los enemigos. De modo que el total de centurias de la primera clase era noventa y ocho. 98

La segunda clase comprendia á todos aquellos que tenian una fortuna de setenta y cinco mil *ases*. Constaba de veinte centurias, diez de jóvenes y diez de ancianos. A ellas estaban agregadas otras dos centurias de obreros, (*fabri*), para manejar las máquinas de de guerra. Tito Livio, sin embargo, supone que estas dos centurias pertenecian á la primera clase. Con razon han observado algunos que estos obreros debian ser dependientes de los que compusiesen las dos primeras clases, porque reputándose en Roma como deshonrosos los oficios mecánicos, no es de presumir que hubiera obreros que tuvieran capital tan considerable. Esta clase, pues, seria de veinte y dos centurias. 22

La tercera clase se componia de los que tenian un capital de cincuenta mil *ases*: tenia veinte centurias. 20

La cuarta clase estaba compuesta de los que tenian veinte y cinco mil ases: constaba de veinte centurias y dos de músicos. 22

La quinta clase se componia de los que tenian once mil ases, y era de treinta centurias. 30

La sesta clase se componia de todos aquellos cuyos bienes no llegaban á la espresada cantidad de once mil ases, ó que no tenian ningunos. Esta clase formaba una sola centuria, aunque escedia en individuos á cada una de las demás clases. 1

Total de centurias. 193

Al fijar las clases y las centurias, seguimos la respetable autoridad de Dionisio de Halicarnaso. Debemos, sin embargo, añadir que no están conformes con él en todo, ni Tito Livio, ni Cicerón. Antes hemos dicho que Livio ponia á las dos centurias de obreros en la primera clase: á esto debemos agregar que cuenta tres centurias de músicos, y de consiguiente hace subir á 194 el número de aquellas. Cicerón, conviniendo con que era 193 el número de las centurias, no dá á la primera clase mas que 88 centurias, y una de obreros. Sea de esto lo que quiera, se vé con bastante claridad, á pesar de estas diferencias no muy esenciales, cuál era la division del pueblo en clases y centurias, y cuáles eran los principios que regian en el censo.

Los esclavos no estaban comprendidos en el censo como personas, sino como cosas, es decir, por su valor para la computacion del capital de sus señores; y la inscripcion de los esclavos en el censo en concepto de personas, fué uno de los modos solemnes de manumitir.

Para la formacion del censo era obligacion de los jefes de familia hacerse inscribir en él. Al efecto declaraba bajo juramento el

número de personas que componian la familia, los bienes que poseían y su valor verdadero: lo que se omitia quedaba adjudicado al fisco. Cada familia tenia abierto un capital. Se formaba de cinco en cinco años, y despues de concluidos, pasaba el pueblo una revista en el campo de Marte, en donde era purificado por una *lustracion*: y de aquí el dar al espacio de cinco años el nombre de *lustrum*. De este modo tenia constantemente el pueblo romano una verdadera estadística de poblacion y de riqueza: sabia con qué gente podia contar para defender la pátria y estender sus conquistas, y cuál era la fortuna de los ciudadanos para contribuir al sostenimiento de las necesidades públicas.

Pero los romanos no confiaban á todos los ciudadanos indistintamente la defensa de la ciudad, ni querian que todos los inscriptos en el censo contribuyeran á sostener al Estado. Los que pertenecian á la sesta clase, ni pagaban los impuestos, ni tenian la honra de defender con las armas á la pátria: por esto se les llamaba *proletarios* (*proletarii*), porque solo se exigia de ellos que contribuyeran al bien público con su prole, esto es, dando hijos al Estado: y tambien *capita, censi*, cuando en el censo estaban solo inscriptos sus nombres, y no figuraban como dueños de cosa alguna.

La formacion del censo, competió en el principio á los reyes, y despues á los censores. Acerca de este punto nos limitamos á hacer aquí esta indicacion, que quedará esplanada en el artículo **CENSOR**, como magistratura romana.

Es opinion comun que ya en tiempo de Servio Tulio, instituidor del censo, la division de clases y personas, de que queda hecha espresion, fué utilizada para la creacion de los magistrados y la formacion de las leyes en los concilios centuriados. Por general que sea esta opinion, y por respetable que sea la autoridad de los que la sostienen, siguiendo á Niebulir y á Mecleloley, y fundados en la autoridad de Cicerón y de Tito Livio, creemos que esto no tuvo lugar durante los reyes, sino en la República, cuando los patricios tuvieron que llamar en su ausilio á los plebeyos.

Esta innovacion, que tuvo lugar en los primeros tiempos de la República, manifiesta como en Roma el principio aristocrático iba ya en decadencia, y como al lado del antiguo patriciado venia á elevarse otra aristocracia de riqueza, abierta á todos los ciudadanos. Desde entonces la participacion en las deliberaciones públicas, en la formacion de las leyes, en la eleccion de los magistrados, venia á corresponder á la cuota que cada uno satisfacia para levantar las cargas del Estado. Por esto se ha dicho por algunos con oportunidad y exactitud, que con la introduccion de los comicios centuriados, la república podia considerarse como una especie de sociedad mercantil, en que el grado de libertad de cada uno correspondia á los bienes de que era posedor. Véase **CENSOR** y **CONCILIOS CENTURIADOS**.

CENSO (*por tributo*). Con el nombre genérico *censo*, se han espresado siempre las prestaciones; no específicas, como *enfiteusis, moneda forera*, etc., sino las genéricas, y aun algunas veces todas aquellas con que los súbditos y vasallos acudian á sus gobernantes y señores por razon de señorío. Respecto del Estado, estas prestaciones eran realmente *tributos*: respecto de señores y de vasallos, una carga feudal. De aquí el testo del Evangelio por San Mateo: *¿Licet censum dare Cæsari, annon?* en cuanto á las primeras. Por lo que hace á las segundas, sabido es que entre nosotros han sido abolidas todas las prestaciones feudales, ó que no estrivaban en un título particular, independiente de la jurisdiccion de los señores de vasallos, segun tratamos en su lugar.

CENSOR. Del latin *Censor* el que cuenta, empadrona, clasifica, juzga ó aprecia, etc.; del verbo latino *censeo*, como *censo*, y *censura*. (V. el artículo genérico **CENSO**). Tiene multiplicadas acepciones, siempre relativas á *emitir juicio* sobre alguna cosa. Tómase en mal sentido, cuando se habla de *censores oficiosos*, y poco caritativos, como dando á entender que nada perdonan á los demás, que no disimulan los de-

fectos, que no están llamados á censurar ó juzgar. En sentido oficial, por el contrario, espresa un cargo, y como magistratura pública, cuyo objeto es, á nombre de la pública autoridad, emitir juicio sobre los hechos ó escritos de que pueda resultar ofensa ó desacato á la ley, á la autoridad ú objetos respetables, y tambien para hacer justicia, al autor de los mismos hechos ó escritos, ejercicios literarios, etc. Véanse los artículos subsiguientes y el de CENSURA.

CENSOR REGIO. Dióse este nombre á la persona encargada en las universidades de velar por la pureza de las doctrinas regalistas y legales, y de impedir la propagacion de las que eran contrarias ó las prerogativas de la corona y á las leyes del reino. Esta magistratura tuvo el mismo orígen que el juramento universitario, que por muchos años se ha venido prestando, por lo que consagramos algunas páginas á este hecho histórico.

Un bachiller en la universidad de Valladolid defendió unas conclusiones con el título *de clericorum exemptione á temporali servitio, et sæculari jurisdictione.* En sentido contrario sustentó y defendió otras conclusiones un doctor, con licencia del Consejo. Formóse un espediente: en él se pidió informe al colegio de abogados de Madrid para que, examinando las conclusiones, espusiese sobre ellas su dictámen. En 8 de junio de 1770 evacuó y fundó el colegio su dictámen comprensivo de ciento noventa y un capítulos, y concluyó proponiendo la formacion de un reglamento sobre opiniones contrarias á las leyes del reino, al gobierno, y de cualquier modo ofensivas al Estado. Propuso tambien la creacion de censores régios en las universidades. Por consecuencia de esto, se mandaron recoger los ejemplares de las conclusiones defendidas en Valladolid por el referido bachiller, se ordenó que el presidente de la chancillería convocase al claustro y á puerta abierta reprendiese á los doctores y maestros, que votaron en defensa de ellas, se suspendió al bachiller de todos los actos y ejercicios académicos, y se previno á la universidad dispusiera que *pro universitate* se defendieran otras conclusiones que vindicasen á la autoridad real sobre los puntos en que habia sido ofendida, y que el colegio de Madrid advertia en su informe. Todo esto se hizo por provision del Consejo de 7 de setiembre de 1770 (1). Prohibióse tambien al propio tiempo, que en lo sucesivo se promovieran, enseñaran ni defendieran doctrinas contra la autoridad real y regalías, y que esto con todas las diligencias de ejecucion se anotara en los libros de la universidad para que no pudiera alegarse ignorancia, ni hubiera contravenciones ni omisiones (2).

Pero si bien creyó el gobierno suficientes estas precauciones, no por eso vigilaba eficazmente su cumplimiento. Dos medios adoptó al efecto: fué el primero imponer una obligacion de conciencia á los que debian recibir grados mayores ó menores en las universidades, haciéndoles jurar que no promoverian, defenderian, ni enseñarian directa ni indirectamente, cuestiones contra la autoridad real y regalías de la corona. La fórmula de este punto era: *etiam juro me numquam promoturum, defensurum, docturum directè, neque indirectè, quæstiones contra auctoritatem civilem, regiaque regalia* (3). El segundo medio fué la creacion de los censores régios.

Debia recaer esta magistratura en los fiscales de las chancillerías y audiencias; y en los puntos en que no las habia, en una persona elegida por el Consejo (4). Sus funciones eran ver y examinar todas las proposiciones que debian defenderse, antes de su impresion y reparto: no permitir que se defendieran ó enseñaran doctrinas contrarias á la potestad temporal: dar cuenta al Consejo de las contravenciones, para su castigo, é inhabilitar á los contraventores para todo ascenso (5).

Catorce años despues, en 25 de mayo de 1784, se dió la instruccion que señalaba las reglas que debian observar los censores. Estas fueron:

1.ª No aprobar conclusiones, puramente

(1) Nota 1.ª de la ley 3, tít. 5, lib. 8 de la Nov. Rec.
(2) Ley 3 del mismo tít. y lib.
(3) Nota 2.ª de la espresada ley 3.
(4) Dicha ley 3.
(5) La misma Ley.

reflejas, en que no versara la verdadera y sólida instruccion de la juventud.

2.ª No consentir que se defendieran *pro universitate* et *cathedra* cuestiones y materias, que no fueran conformes á la asignatura de la cátedra del que las defendia.

3.ª Reprobar lo que se opusiera á las regalías, leyes del reino, derechos de la corona, concordartos, y á cualesquiera otros principios de nuestra Constitucion civil y eclesiástica.

4.ª No permitir que se enseñara doctrina alguna contraria á la autoridad y regalías de la corona, dando cuenta al consejo de las contravenciones para su castigo.

5.ª No permitir conclusiones opuestas á las bulas pontificias y derechos reales que trataban de la inmaculada Concepcion de la Vírgen María.

6.ª No consentir disputas, cuestiones, ó doctrinas favorables al tiranicidio ó regicidio y otras de moral laxa y perniciosa.

7.ª Revisar con particular cuidado las dedicatorias: asi en la sustancia, como en los dictados y ponderaciones.

8.ª Procurar que la latinidad de las conclusiones fuera correcta y propia, sin anfibologías ni oscuridades misteriosas (1).

Una real órden de 4 de febrero de 1799 ordenó que en los casos en que el censor régio de una universidad no se atreviera por sí solo y sin informes á desempeñar la obligacion de su cargo, consultase precisamente al cláustro de la facultad á que correspondieron las conclusiones (2): de este modo se conseguirá asegurar el acierto, que no padeciese la facultad sin ser oida, y que pudiese tener el Consejo la instruccion necesaria para dictar la resolucion conveniente.

Despues de la publicacion del plan literario de estudios y arreglo general universitario de 14 de octubre de 1824, no ha habido censores régios en las universidades: hacian sus veces los catedráticos mas antiguos de teología, de leyes, y de cánones, los cuales censuraban las conclusiones, que se imprimian despues con la licencia del rector (1). Este mismo debia cuidar sobre la pureza de las doctrinas que se enseñaban (2). En los planes y reglamentos publicados desde 1845, la atribucion de velar por la pureza de las doctrinas es de los decanos, que en el acto pueden tomar las disposiciones oportunas, dando cuenta al rector de las que exijan su conocimiento (3).

CENSOR (*Legislacion romana*). Tito Livio y Festo dan á la palabra *censor* la etimología del fin principal para que fué instituida esta magistratura: la formacion del censo: *censui agendo*. Segun Varron, llamábase asi porque los censores á su buen juicio (*censio*) hacian el censo del pueblo: *ad cujus censionem, id est, arbitrium, conseretur populus*. Véase CENSO.

No puede señalarse con certeza el año de esta institucion: generalmente se supone haber sido del 310 al 312 de la fundacion de Roma. El objeto principal de su cargo era la formacion del censo. Primitivamente esta habia sido atribucion de los reyes, con lo que dieron una grande estension á su autoridad. Las guerras esteriores y las conmociones interiores no dieron á los primeros magistrados del pueblo romano el tiempo necesario para dedicarse á tan importantes funciones, de modo, que segun afirma Tito Livio, pasaron en una ocasion diez y siete años sin que se formase el censo: esto fué lo que produjo principalmente, la creacion de los censores. Contribuyó tambien á ello la contínua lucha entre el patriciado y la plebe, lucha que siempre llevaba á transacciones, y en que cada uno de los órdenes procuraba sacar las mayores ventajas posibles. Cuando en el año 310 de la fundacion de Roma los patricios, agotadas ya sus fuerzas, no pudieron resistir mas las exigencias de la plebe, y se vieron precisados á admitir á la dignidad consular á los de esta última clase, prefirieron estinguirla á hacer partícipes del nombre de

(1) Ley 4 del espresado tit. y lib.
(2) Nota 3.ª del tit. 5, lib. 8, de la Nov. Rec.

(1) Art. 22 del espresado plan.
(2) Art. 24.
(3) Art. 8.º del Reglamento de 10 de setiembre de 1852.

cónsules á los que no eran de su órden, y poner al frente de la república los tribunos militares con la potestad consular: *tribuni militum consulari potestate*. Como compensacion, obtuvieron entonces que se encargaran de la formacion del censo dos magistrados, que pertenecieron al órden senatorio. Pero, como sucedió en Roma con todas las magistraturas, sucesivamente fueron comunicándose á los plebeyos. Cayo María Rutilo fué el primer plebeyo que ascendió á esta dignidad en el año 404 de la fundacion de Roma: despues por la ley uno de los censores debia ser siempre plebeyo, y en algun caso lo fueron los dos.

La renovacion de los censores se hacia cada cinco años, *lustrum*, por cuyo tiempo duraban los elegidos en sus funciones: despues se limitaron estas á año y medio, pasando el resto del lustro sin que las hubiera. Eran elegidos en los concilios centuriados. Nadie podia desempeñar dos veces esta magistratura. Cuando alguno de los que la ejercian moria durante su cargo, era reemplazado por otro; pero entonces habia la singularidad de que el colega sobreviviente tenia que renunciar sus funciones. La muerte de un censor se reputaba de mal agüero, desde que Roma fué tomada por los galos en un lustro, en que habia muerto uno de los censores.

Los censores entraban en el ejercicio de sus cargos despues de prestar juramento de no hacer nada por favor ó por ódio, y de obrar rectamente: y cuando terminaban sus funciones, prestaban nuevo juramento de haber cumplido lo que en el anterior ofrecieron.

Sus atribuciones, escasas en un principio, llegaron despues á tener la mayor importancia. De aquí provino que fuera la censura mas honorífica aun, que la dignidad consular, y que se reputase como un gran timbre de nobleza traer orígen de una familia censoria. Por eso dijo Plutarco, que la censura era el término de todos los honores: *ommium honorum apex, vel sarcinus.*

Se estendian sus funciones al órden político, al civil, al administrativo y al moral. Al órden político porque fijaban á cada ciudadano la clase, tribu y curia á que debia pertenecer, y lo inscribian, ya en el rango de los caballeros, ya en el de los vencedores. Al órden civil, porque la inscripcion en el censo era un modo de adquirir el esclavo su libertad y de trasferirse de unos á otros ciudadanos la propiedad romana. Al órden administrativo, porque les correspandia el cuidado y contratos para la construccion y reparacion de los edificios públicos, caminos, puentes, acueductos y calles: porque algunas veces contrataron lo necesario para los sacrificios públicos, los caballos para los magistrados curiales, y el sustento de los gansos que se conservaban en el capitolio en conmemoracion de haberlo salvado, dando la señal de alarma, de la sorpresa intentada por los enemigos; porque tambien cuidaban de que los particulares no ocuparan lo que era del público: y por último, porque en algunas ocasiones impusioron tributos, si bien esto fué por decreto del Senado, y por órden del pueblo. Al órden moral, porque vigilaban por las costumbres públicas, porque ponian notas infamantes, *animadversiones censoriæ*, y degradaban á los ciudadanos que se habian hecho á ello acreedores, trasladándolos de un órden á otro y de las tribus superiores á las inferiores. Y esta era la principal, la mas noble de las funciones de la censura: el perjuro, el libertino, el pródigo, el soldado que descuidaba sus deberes, el magistrado que por debilidad descuidaba de la salud pública, todos encontraban en las elevadas funciones de los censores el castigo de sus faltas. Por esto Cicerón llamó á la censura *magistra pudoris et modestiæ*. Cuando la forma republicana degeneró, cuando las facciones destruyeron la libertad, la censura quedó de hecho abolida; para serlo mas paladinamente, cuando Augusto, reuniendo en sí con las demás magistraturas de la República la de censor, vino á ser el árbitro de los destinos del imperio. Asi es que durante su dominacion, de los últimos censores que hubo, Paulo y Planco se dice eran personas particulares (*privati*), no porque no hubieran desempeñado funciones públicas, sino comparándolos con el Emperador, ante quien todos los funcionarios quedaban oscurecidos.

El campo de Marte era el teatro en que los censores formaban el censo. Sentados en sus sillas curiales, rodeados de sus subalternos, señalaban las clases, la centuria y la tribu á que debia pertenecer cada ciudadano: completaban el Senado y el órden ecuestre, ponian notas degradantes á los que las merecian, separaban del Senado á los indignos de pertenecer á él, privaban del caballo á los caballeros indignos (*equites*), trasladaban á los ciudadanos de una tribu á otra menos apreciada, y llegaban hasta el punto de quitar á uno todos sus privilegios, menos la libertad; si bien esta facultad última nunca estuvo bien definida, y aun aparece disputada. Aunque obraban, segun su prudente arbitrio, para la imposicion de las notas degradantes solian, sin embargo, cuando removian á alguno del Senado, espresar el motivo, *subscriptio censoria*: algunas veces se apeló de las decisiones de los censores al pueblo.

Las sentencias ó providencias de los censores, *animadversio censoria*, *juditium censoris*, producian solo su efecto respecto al carácter ó rango de las personas. Por esto se les daba el nombre de *ignominia*, porque solo disminuía la reputacion, y la dignidad de las personas: *quia in nomine tantum versabatur*. Pero la nota impuesta por unos censores, podia ser quitada por los que les sucedian.

Concluido el censo, el censor á quien por suerte tocaba, ofrecia un sacrificio en el mismo campo de Marte.

La memoria de lo que habian hecho los censeres era custodiada en el templo de las ninfas, y las familias la conservaban con estremada diligencia.

El régimen imperial debia naturalmente producir cambios notables en esta importante magistratura. Antes de este cambio radical, en los últimos tiempos de la República, la censura se habia hecho incompatible con el desórden que por todas partes prevalecia, y el encarnizamiento de las facciones: puede decirse, por lo tanto, que de hecho estaba estinguida. Asi es que vemos al Senado nombrar á Julio César para inspeccionar las costumbres de los ciudadanos por el espacio de tres años; pero no con el nombre de *censor*; sino con el de *præfectus morum*, y segun Tácito, lo fué tambien Pompeyo en su tercer consulado con un objeto parecido (*corrigendis moribus delectus*).

Augusto unió á sus muchas atribuciones la de censor, como lo habia hecho tambien Julio César. El Senado se las otorgó sucesivamente por dos veces, para que las ejerciese por cinco años, segun Dion Casio; mas Suetenio dice que se las concedieron por su vida bajo el nombre de *megister morum*. Despues nada importa que unos emperadores admitieran y que otros desecharan el título de censores: la magistratura ya no existia. (Véase CENSO ROMANO.

CENSOR. (*En las sociedades económicas de amigos del pais*). Desde que se establecieron las sociedades económicas de amigos del pais, se erigió en ellas el cargo de censor. No sujetas antes á las mismas reglas, porque cada una estaba regida por sus estatutos especiales; fueron uniformadas por el real decreto de 2 de abril de 1835. Segun este, el censor debe ser oido de palabra ó por escrito en todos los espedientes (1).

Sus atribuciones y deberes son:

1.ª Cuidar de la puntual observancia de los estatutos y acuerdos de la sociedad, y de que las clases, las comisiones y los sócios cumplan con sus encargos y obligaciones (2).

2.ª Promover los asuntos que estime convenientes al bien de la sociedad y mejor desempeño de los objetos de su instituto, debiéndole franquear la secretaría los antecedentes que pida bajo su nombre (3).

3.ª Llevar un libro en que anote los encargos que se hiciesen á las clases, ó comisiones particulares, para recordar su despacho (4).

4.ª Reasumir lo controvertido en las discusiones, y fijar la cuestion siempre que lo encargue el director (5).

5.ª Corregir las pruebas de todo lo que

(1) Art. 62.
(2) Art. 64.
(3) Art. 86.
(4) Art. 64.
(5) Art. 65.

se imprima de acuerdo con la sociedad, cuando puedan ó no quieran hacerlo los autores (1).

6.ª Publicar los apuntes de los acuerdos de las juntas que estienda el secretario al tiempo de celebrarlas, si los halla conformes con lo acordado, y cuando no, advertirlo para su enmienda (2).

7.ª Leer y corregir en caso necesario el borrador del acta antes de presentarlo á la sociedad (3).

La enumeracion de las atribuciones de los censores manifiesta su importancia: por esto es que se considera su cargo como el primer oficio despues del director. Su eleccion se hace del mismo modo que la de los demás oficios. Véase SOCIEDADES ECONOMICAS.

CENSOR DE TEATROS. La importancia de los espectáculos dramáticos; la influencia que ejercen en las costumbres; la concurrencia de edades, sexos y condiciones que van á presenciarlos, exigen medidas de precaucion, que eviten que la religion, la moral, el culto y los intereses políticos del Estado sean perjudicados. Y esto sucede aun en el caso de que estén impresas y en circulacion las piezas que se han de ejecutar, porque en el teatro adquieren una nueva vida, y con la mágia de la representacion y con el incentivo de la concurrencia agitan, á las veces á la multitud, fácil de ser movida en estos espectáculos. El órden material, por lo tanto, viene á hacer necesaria una censura, que los intereses morales y permanentes del Estado harian por sí solos indispensable.

Estos principios, hace cerca de un siglo, en el reinado ya del señor don Fernando VI, eran ya, y son los dominantes en nuestra pátria, sin que se hayan desconocido, ni por cambios políticos, ni por diversidad de tiempos y de circunstancias.

La ley 9, tít. 3, lib. 7.° de la Novísima Recopilacion en su disposicion 18, ordenó que no se pudieran representar en la corte comedias, entremeses, bailes, sainetes ó tonadillas, sin que (despues de obtenida la licencia del juez eclesiástico) se presentaran por los autores de las compañías á la sala de alcaldes, para que, mandadas reconocer de su órden, se pudieran representar, lo que se hizo estensivo á las composiciones representadas ya, é impresas con las licencias necesarias: previno además, respecto á las composiciones ya aprobadas, que si el alcalde de corte que presidiera, advirtiere algun reparo que no se ofreciera al leerlas, las recogiese despues y prohibiese su repeticion. Esta inspeccion se confirmó de nuevo respecto del teatro de la ópera en el reglamento, que para su buen régimen y policía se dió por real órden de 11 de diciembre de 1786, y que, reproducido en diferentes bandos, es hoy una ley recopilada (1). Habia en este reglamento tres artículos que están íntimamente ligados con la censura de los teatros. En el artículo 15 se ordenaba que no pudieran los actores hacer gestos, señales, ni aun corresponder con cortesías á las que recibian, ó á los aplausos que les daban al retirarse de la escena, y se dá por razon, que además de los inconvenientes morales que resultan de algunos de estos abusos (debe sin duda aludirse á los gestos y señales) todo conspirar á destruir la ilusion teatral. Preveníase en el 18, muy cuerdamente, aunque hoy se halle en completo olvido, y aun en escandaloso abuso, que no pudieran los actores añadir cosa alguna al testo literal de las composiciones, ni permitirse gesto alguno equívoco: el que contraviniera debia ser conducido inmediatamente desde el teatro á la cárcel por el tiempo que el alcalde estimara conveniente. Por último, mandaba el art. 19, que ninguna composicion dramática se representara sin haber sido examinada y aprobada por la comision de hospitales, la que debia cuidar de que todas fueran, ó inocentes ó útiles, y cercenar cuanto tuvieran de menos conforme con las máximas de la religion y buenas costumbres: y si eso no obstante, al tiempo de la representacion ó baile advirtiera el alcalde

(1) Art. 66.
(2) Art. 67.
(3) Art. 68.

(1) Ley 12, tit. 33, lib. 7, de la Nov. Rec.

alguna cosa reparable, podia prohibirlo inmediatamente, como estaba prevenido respecto á los teatros de la Cruz y del Príncipe, donde solo se representaban comedias en castellano.

Pero las disposiciones referidas se limitaron á los teatros de Madrid: y aunque en ellas aparece ya la censura, ni era general para todos los teatros, ni estaba confiada á personas elegidas espresamente al efecto, y que por sus circunstancias particulares ofrecieran garantías necesarias de acierto. Esto se verificó por la real instruccion de 14 de enero de 1801 (1). En ella se confiaba á una junta presidida por el gobernador del Consejo y compuesta de un director, de un censor y de un regidor de Madrid, la direccion y reforma de todos los teatros y compañías cómicas del reino, y el encargo de delegar sus facultades en otra junta particular en cada capital ó pueblo en que hubiera teatro abierto. Estas juntas subdelegadas debian componerse del corregidor ó alcalde mayor, que presidiera el ayuntamiento, de un regidor y un diputado nombrados por el mismo cuerpo municipal, y de un censor literato é inteligente, elegido por la junta general. Vése, pues, aquí ya un sistema adecuado, una regla uniforme para todos los teatros; y que se daba á las representaciones teatrales una importancia en el órden político y en el moral, antes desconocida. Pero dejando aparte las consideraciones á que dá lugar la referida real instruccion de 1801, nos limitaremos en este artículo, como lo exige su objeto, á hablar de los censores, no considerando en ellos las atribuciones que tenian como individuos de la junta, lo que no corresponde á este artículo, sino las individuales que les imponia la especialidad de su cargo.

La espresada real instruccion decia á este propósito: «La censura de las piezas que »hayan de representarse acerca de la propie»dad ó impropiedad de cada una, y supuesta »la aprobacion del vicario eclesiástico, cor»responderá al censor subdelegado, asi »como la aplicacion ó repartimiento de pa»peles á cada parte ó actor, segun su ca»rácter, y las reglas y correcciones ó refor»mas que estime convenientes en cuanto á la »regularidad, decoro y buen gusto de la es»cena, como puntos facultativos que re»quieren especiales conocimientos.» La simple lectura de esta disposicion manifiesta que el censor no tenia solo atribuciones relativas al órden político y moral de los espectáculos, sino otras que se referian á la parte literaria de las composiciones, y á la direccion de las compañías, propiedad ó impropiedad con que los espectáculos se presentaban al público, y hasta al buen gusto con que se ponian en escena. Y que estas atribuciones iban mas allá de los justos límites á que debia sujetarse la censura, aparece como indudable. Es menester dejar á las empresas la justa y prudente libertad que necesitan para promover sus intereses: nadie mejor que ellas puede conocerlos: la tutela de la administracion llevada hasta tal estremo, sin aprovechar al interés público, perjudica notablemente al de los particulares. Impida el gobierno todo lo que puede perjudicar al órden público, todo lo que sea contrario al órden moral, á las creencias religiosas, á la tranquilidad de los pueblos y al respeto á las leyes; pero deje á la apreciacion de las compañías la eleccion de lo que les conviene, que bastante correctivo encontrarán en la censura pública, que en último resultado es tambien competente para juzgar del mérito de las composiciones, de la propiedad con que se presentan en escena, y de la regularidad y buen gusto del espectáculo. Tanto por razon de su comision, como para que pudiera ejercer sus funciones, tenia el censor entrada y asiento libre en las lunetas (1). No se hizo innovacion alguna en las atribuciones del censor, por haberse disuelto la junta de que era parte, por real órden de 1.° de marzo de 1803 (2).

Con motivo de haberse decretado la libertad de imprenta, cuando se estableció el

(1) Ley 13, tít. 38, lib. 7, Nov. Rec.

(1) Ley 13, tít. 38, lib. 7, de la Nov. Recop.
(2) Nota 6.ª del mismo título y libro.

gobierno representativo, creyóse por muchos que ya no podia existir la censura en los teatros, y de hecho quedó en algunas partes suprimida. En un principio, como suele acontecer en los grandes cambios políticos, no se fijó bien la opinion acerca de este punto; pero pronto se conoció la necesidad de la censura, reducida á sus legítimos límites, para proteger la moral y el órden público de la sociedad. En efecto, las composiciones dramáticas, aunque hayan visto la luz pública en la prensa, segun queda dicho, adquieren una nueva existencia cuando son puestas en escena, y así lo ha comprendido la suprema autoridad, como aparece por las disposiciones diferentes que se han tomado en los últimos años.

Entre ellas ocupa el primer lugar la real órden de 27 de febrero de 1840. Ordenó que en todas las capitales y pueblos en que hubiera teatros, procedieran los jefes políticos, como encargados del órden público, al nombramiento de censores dramáticos, cuya eleccion deberia recaer en sugetos de reconocidas luces, de moralidad y de esperiencia (1), y que debiendo los censores por razon de su encargo asistir á las representaciones teatrales, disfruten asiento gratuito en el mismo local, ó en el palco de la presidencia (2).

Mas completo acerca de la censura fué el real decreto de 30 de agosto de 1847. Creáronse en él juntas de censura. Estas, que habian de instalarse en todas las provincias para sus respectivos teatros, se componian de individuos elegidos por los jefes políticos (3), debiendo ser personas acreditadas por la rectitud de sus costumbres, celo por el lustre de la poesía española, inteligencia en la poesía dramática, y en las artes que tienen relacion con el teatro (4). El cargo de los individuos de la junta era honorífico, gratuito, voluntario y trienal (5), y les daba asiento gratuito en el palco de la presidencia ó en luneta de preferencia (1). Estas juntas examinaban si las obras dramáticas, adoptadas por las empresas, correspondian al repertorio del teatro en que debian ejecutarse; y si eran admitidas en los repertorios de los teatros de Madrid, podian ser representadas sin inconveniente, atendidas las circunstancias de localidad: daban su dictámen sobre si debian ó no ser ejecutadas las obras nuevas dramáticas: devolvian á los autores las que exigian algunas rectificaciones ó eran susceptibles de mejora, por si convenian voluntariamente en estas reformas: atendian en la censura al mérito literario, al fin moral y al honesto recreo del público que, como dice el real decreto, lleva por objeto la correccion del vicio é instruir deleitando (2). Mas antes de acordar su censura, oía al autor, si este lo solicitaba y tomaba en consideracion sus observaciones, tanto sobre la parte moral, como sobre la literaria (3). Con objeto de garantir la propiedad de los autores, se estableció tambien que no se calificaran composiciones nuevas, si no iban acompañadas del permiso de los autores para ponerlas en escena (4). No solo celebraban la juntas sesiones ordinarias; sino tambien estraordinarias (5), de modo que en el término de ocho dias estuvieran calificadas las piezas sometidas á su exámen (6). Para hacerlo con acierto, quedaban sobre la mesa de la presidencia por dos dias (7), y hecha la censura, pasaban sus calificaciones razonadas, juntamente con la obra sobre que recaian, al jefe político de la provincia, que bajo su responsabilidad aprobaba ó desaprobaba, concediendo ó negando el permiso para la representacion (8).

A pesar de las reformas importantes que acabamos de referir, no pueden desconocerse los graves inconvenientes del referido real

(1) Art. 1.°
(2) Art. 2.°
(3) Art. 29.
(4) Art. 30.
(5) Art. 31.

(1) Art. 32.
(2) Art. 33.
(3) Art. 37.
(4) Art. 39.
(5) Art. 35.
(6) Art. 40.
(7) Art. 36.
(8) Art. 41.

decreto de 30 de agosto. Dábanse en efecto á la censura atribuciones que, en el hecho de no referirse al órden moral y político, no debian corresponderle. Examinar si las composiciones corresponden ó no al repertorio del teatro en que habian de ejecutarse, constituirle como una garantía de la propiedad literaria, y examinar el mérito de las obras, no son atribuciones que debieran corresponder á la censura que está naturalmente llamada á otras funciones, segun dejamos espuesto. Pero otro inconveniente habia aun mayor: el que una junta fuera la que censurara, estaba sujeto á muchas dificultades en la práctica, ya por las ocupaciones de los censores, ya por las demoras que llevan siempre consigo los dictámenes colectivos, ya por la atenuacion de la responsabilidad, que es tanto menor, cuanto es menos directa y personal. A esto se agregaron los perjuicios que necesariamente debian originarse á los autores y empresarios por la detencion, que inevitablemente tenia que esperimentar la censura, y que no podia fácilmente ser despachada en el término de los ocho dias señalados. A este inconveniente no puso remedio el real decreto orgánico de los teatros del reino de 7 de febrero de 1849, si bien redujo la censura á sus límites justos y naturales.

Segun él habria una junta de censura en Madrid (1) compuesta del director de gobierno del ministerio de la Gobernacion, del jefe político, del jefe superior de policía, de un individuo de la Academia española y otro de la Academia de la historia, nombrados por el gobierno, y del secretario del gobierno político de Madrid, que lo era de la junta, sin voto (2). Las atribuciones de esta junta, que acordaba á pluralidad absoluta de votos (3), se limitaron á la parte moral y política esclusivamente, prescindiendo del mérito literario de las obras (4). Esto debian hacerlo sin dejar pasar el término de quince dias, contados desde la presentacion de cada obra (5), debiendo observar en el órden de exámen el de rigurosa antigüedad (1). En los casos árduos, y dentro del espresado término de los quince dias, podia la junta consultar al gobierno acerca de la censura de una obra (2). Para todo se entendian directamente los autores dramáticos con la junta (3), la cual fundaba su dictámen cuando era negativo, y autorizaba con la firma del secretario las obras cuya representacion permitia, rubricando ó sellando además sus fólios, y devolviendo á los autores las que exigian alguna modificacion por si convinieran en hacerla (4). Contra las resoluciones de la junta podia acudirse al gobierno (5). Los títulos de las obras nuevas, aprobadas por la junta de censura, se publicaban en la *Gaceta* de Madrid (6), y así estaba autorizada su representacion en todo el reino.

Además de estas atribuciones, tenian otras los individuos de las juntas. Estas eran, cuidar de que en los teatros de Madrid no se pusiera en escena pieza alguna, que antes no estuviera aprobada por la junta, y vigilar la ejecucion de las piezas dramáticas, cuidando de que no se altere su testo, y de que los actores, ni con acciones ni ademanes, ni con palabras no escritas en aquel, ofendieran á la moral ó faltaran al decoro (7). Esta misma inspeccion ejercian en las poblaciones de provincia los censores nombrados por los jefes políticos (8), y que desempeñaban un cargo honorífico y gratuito (9).

Pero los inconvenientes que quedan espuestos respecto á las dificultades de que fuera una junta la que censurase, las graves y apremiantes ocupaciones de algunos de los funcionarios que las componian, y la disminucion del número de sus individuos por la supresion de algunos cargos que desempeñaban, movió al gobierno á introducir nuevamente importantes reformas. Esto se hizo

(1) Art. 7.° del real decreto de 7 de febrero de 1849.
(2) Art. 8.
(3) Art. 9.
(4) Art. 10.
(5) Art. 13.

(1) Art. 12.
(2) Art. 14.
(3) Art. 14.
(4) Art. 15.
(5) Art. 16.
(6) Art. 17.
(7) Art. 18.
(8) Art. 19.
(9) Art. 21.

por el real decreto de 25 de febrero de 1852, que es el vigente en la actualidad.

Segun él, para la censura moral y política de todas las producciones dramáticas, y argumentos de bailes y demás espectáculos escénicos, que han de representarse en todos los teatros del reino, hay en Madrid cuatro censores nombrados de real órden por el ministerio de la Gobernacion, número que puede aumentarse, si las necesidades del servicio lo reclaman (1). Este cargo es honorífico y gratuito (2), y los que lo ejercen se entienden directamente con el gobernador de la provincia de Madrid (3).

En cuanto al modo de proceder para la censura, los autores dramáticos ó las empresas remiten dos ejemplares de la obra, cuyo exámen solicitan al gobernador, el cual los pasa al censor, á quien por turno corresponde. Este la examina, dá su dictámen, y en su virtud el gobernador devuelve al interesado uno de los dos ejemplares, rubricado en todos sus fólios por el censor, concediendo ó negando su permiso para su representacion, ó señalando las modificaciones con que puede verificarse. El segundo ejemplar, unido á la calificacion del censor, y rubricado por este en su primera y última hoja, se conserva en el archivo del gobierno de provincia (4). En estos trámites no se puede esceder de un mes, contado desde el dia de la presentacion de la obra en el gobierno de la provincia (5).

Pero si el dictámen del censor no es favorable á la representacion, ó si para esta se imponen modificaciones, con las cuales no se conforma el autor ó empresario, puede el interesado apelar de este fallo á una junta, compuesta de los cuatro censores, y presidida por el gobernador, á la cual asiste el interesado para dar sus esplicaciones, haciendo de secretario el de gobierno de la provincia. En vista de esta segunda censura, el gobernador resuelve definitivamente, debiendo quedar todo terminado dentro de un mes, contado desde la fecha de la apelacion (1). Los títulos de las obras aprobadas por la censura de teatros deben publicarse en la *Gaceta* de Madrid (2), y en la secretaría del gobierno de esta provincia se lleva un registro, rubricado en todos sus fólios por el secretario, en el cual consta por su órden la entrada y salida de todas las obras presentadas á censura, juntamente con la calificacion que cada una ha merecido (3).

Deben además concurrir los censores con oportunidad y frecuencia á las representaciones, vigilar la ejecucion de las obras dramáticas, para que no se alteren los testos aprobados, ni se consientan palabras ó acciones ofensivas á la moral ni al decoro público. Para que esta inspeccion pueda ser ejercida, las empresas deben remitir cada dia de funcion á la junta de censores un asiento de los de primera clase de sus teatros respectivos (4).

Los gobernadores de las provincias, y los alcaldes de los pueblos, á su vez, deben cuidar de que no se representen en sus respectivas jurisdicciones producciones no aprobadas por la junta de censura (5): y cuando por circunstancias particulares no considerasen oportuna la representacion de una obra, aprobada ya, pueden suspenderla participándolo al gobierno con las razones en que se funden, para que este acuerde lo conveniente (6). Con estas medidas se ha consultado ciertamente á los fines que debe proponerse la administracion en la censura de los testos, toda vez que sean observadas con celo y perseverancia por la autoridad competente (Véase **TEATROS**).

CENSORES DE IMPRENTA. Véase **CENSURA: IMPRENTA: LIBROS: PRENSA.**

CENSOS DEL CLERO (y demás *manos muertas*). Sobre su estado actual de *desamortizacion*, *venta*, y *redencion*, véase **CENSO**, (*como contrato*).

CENSOS DEL ESTADO. Comprende esta denominacion los que el Es-

(1) Art. 1 y 9 del real decreto de 25 de febrero de 1852.
(2) Art. 2.
(3) Art. 3.
(4) Art. 9.
(5) Art. 5.

(1) Art. 6.
(2) Art. 8.
(3) Art. 8.
(4) Art. 11.
(5) Art. 9.
(6) Art. 10.

tado cobra y los que paga. Son los primeros los que constituyeron el *censo de poblacion* de Granada: los impuestos en Indias por concesiones de terrenos, ó en España por cesion, ó enajenacion de otro modo, de fundos que llevan ese gravámen: los constituidos sobre bienes de *manos-muertas*, convertidos en *bienes nacionales* por virtud de las modernas disposiciones de *esclaustracion*, y demás análogas: y los que de tiempo en tiempo ha sido preciso constituir sobre *baldíos* y otras fincas del Estado usurpadas ó malversadas, como sucedió durante la guerra de la independencia, y sucede en las *composiciones* de tierras en ultramar (*V. su artículo*), cuyo medio se ha adoptado reiteradas veces, para asegurar al Estado sus derechos y cortar perjuicios á los poseedores, muchos de los cuales lo eran ya de buena fé.

Los otros son los que gravitan sobre bienes de particulares, adquiridos con ese gravámen por el Estado, como el que paga el mismo, por ejemplo, á los duques de San Cárlos por la casa de correos generales de Madrid; y muchas veces por las fincas de *comisos*, *mostrencos*, *secuestros*, *adjudicaciones en pago*, etc.: y los que gravitan, asi bien sobre *bienes nacionales*, ora procedan de la concesion apostólica de 1806 y anteriores, para vender bienes de capellanías y otros eclesiásticos; bien de las citadas disposiciones modernas de *esclaustracion* y *desamortizacion*, pues si el Estado las retiene, las retiene con sus cargas; y si las enajenó, es sabido que en 1806 y despues las enajenó sin ellas, y lo propio ha verificado despues. Sobre el cumplimiento, y mas bien sobre el no cumplimiento de estas cargas de justicia, y defraudacion en la mayor parte de los casos de la voluntad de los fundadores, véanse, entre otros análogos nuestros artículos CAPELLANIA, CARGAS EN LOS BENEFICIOS. Por lo demás, y en virtud al estado civil y rentístico de los censos del Estado, todo pende hoy de las leyes de 1.° de mayo de 1855, y última de febrero de 1856. Véanse ambas en la parte legislativa del artículo CENSO (*como contrato*).

CENSOS DE NAVARRA. No habiendo sido modificada la legislacion foral de Navarra por la ley de 1841 sobre arreglo de fueros de la misma, rige aun aquella legislacion en cuanto á censos, en cuyo supuesto nos es preciso notar que la misma es por cierto bien diferente de la legislacion castellana. Pero en la misma citada ley de 1841 se establece ya que la legislacion foral será uniformada con la de Castilla: en la Constitucion política de la Monarquía de 1855, aun no promulgada hoy; pero concluida y votada con intervencion y sin protesta de los diputados á Córtes por Navarra, se consigna que unos mismos Códigos regirán en toda la Monarquía: motivos por los que no descendemos á los estensos pormenores que eran indispensables para esponer aquella legislacion; aunque sí consignaremos algunos de los mas notables, y aun frecuentes en la práctica.

Es el primero que el célebre *Motu propio* de San Pio V, sobre censo consignativo, está de todo punto vigente en Navarra, por ley de aquel reino desde un año despues de su publicacion en el mismo (1); al paso que en Castilla, esto es, en el resto del reino, no está recibido.

Segun su párrafo 2.°; «solo puede constituirse el censo con dinero contado á presencia de los testigos y del notario, y en el acto del otorgamiento de la escritura; y no con precio, aunque justo é íntegro, recibido anteriormente.» Y sin embargo, con el fin de facilitar los matrimonios, sin duda, y la entrada en religion; por breve de 10 de julio de 1570, declaró el mismo Pontífice, que para ambos fines, esto es, para dotar monjas, y mugeres que pasaban al estado de matrimonio, pudiera constituirse censo sin dinero de presente, ni fé de notario; sino estableciendo hipoteca, y obligándose el otorgante á pagar los réditos hasta solventar la cantidad dotal. A peticion de las Córtes se admitió tambien y mandó observar este breve declaratorio; siendo verdadero y riguroso censo consignativo para todos los efectos civiles el que asi

(1) Ley 6, tit. 1, lib. 5 de la Nov. Recop. de leyes de Navarra, y petic. de Córtes de 1580.

se constituyera (1); esto es, consignando sobre bienes propios la cantidad de la dote con el rédito correspondiente, que se pagará, hasta poder entregar dicha dote.

Los censos al quitar, que primero corrieron al 7 por 100, y despues al 6 (2), se redujeron por último al 5 por 100, pena de nulidad (4).

El comiso por falta de pago se entenderá, no de toda la heredad ó de todas las hipotecas, sino de la parte de ellas necesaria para pago del principal rédito vencido y costas; quedando intacto lo demás (4).

Los contratos de censo, además de las hipotecas, admiten para su mayor seguridad fiadores y pactos aditicios por parte de los constituyentes, obligando sus demás bienes, no ya raices; sino á un muebles y *semovientes*. Todas estas garantías son subsidiarias para en el caso que falle la hipoteca, ó no sea cierta. En ese caso, hecha excusion en los bienes del deudor, se procede contra la fianza de abono, ó garantía de saneamiento. Empero, si el fiador se obliga como principal pagador, ó si al obligarse renunció el beneficio de la auténtica, *Præsente, De fideijusoribus*, se puede proceder desde luego contra sus bienes. Háblase de la auténtica romana, como en otras leyes se habla de leyes del derecho romano, porque sabido es, que en Navarra, segun fuero, rige aquel derecho, como subsidiario, en defecto de fuero, ó ley de Córtes del mismo reino. El fiador por último, tiene la facultad de designar desde luego bienes del censuario para que se ejecuten y vendan, obligándose él á posturarlos en almoneda pública (5).

La costumbre primero, y despues la ley, como diremos, han autorizado, por último, en Navarra el llamado *retracto gracioso*, muy análogo á lo que en Castilla se ha llamado *vía de asentamiento*. Tiene lugar este retracto, cuando el deudor censualista usa del remedio de la disposicion romana, *Hoc nisi debitor*, del tít. *De solutionibus*, del Código, en virtud del cual se impide la venta de los bienes hipotecados, si el deudor señala de los suyos en *prenda pretaria* ó *posesion prendaria*. En este caso en Navarra, pedida ejecucion, se ponen al pregon los bienes señalados. El acreedor entonces pide mandamiento posesorio, y se le pone en *posesion prendaria* de ellos. Arrendados en público remate, percibe sus rentas por cuatro años, y si al cabo de ellos no se hubiere reintegrado, pide se le apropie, ó dé *in solutum* la parte de bienes necesarios para su completo reintegro, teniendo para esta peticion de adjudicacion cuatro meses, concluido el cuadrienio, para verificar la liquidacion y tasacion conveniente y por virtud de ellas, pedir la adjudicacion. El deudor puede, sin embargo, durante los cuatro años y cuatro meses *retraer* sus bienes, pagando en metálico. Las manos-muertas pueden en todo tiempo, esto es, aun pasados los cuatro años y cuatro meses. (Ley 102, de las hechas en las Córtes del reino de 1817 y 1818). Véanse sobre la materia el tít, 9. lib. 3 del Fuero: todo el título 4, lib. 3. de la Nov. Recop. de aquel reino: y el tít. 3, lib. 6 de la Recop. y comentarios de Fueros y Leyes de Navarra por Don José Alonso.

CENSOS EN LAS PROVINCIAS VASCONGADAS. No tienen estas legislacion especial de censos, como Navarra. Ni el fuero de Alava, ni el de Guipúzcoa los mencionan. El de Vizcaya menciona solo el censo de *cien mil maravedís* debido á *Su Alteza*, esto es, al Rey; y eso únicamente para prohibir que los que habitan casas de las gravadas con él, las abandonen, en cuyo caso, si requeridos no volviesen á poblarlas, las hará poblar ó habitar á costa de los mismos el corregidor, para que asi el censo sea cierto, y no sufran gravámen los demás pagadores (1). Pero como allí es supletoria la legislacion de Castilla (2) por ella habrán de decidirse los censos que ocurran.

CENSOS SUELTOS. Son una de las especies que constituyeron el *censo de*

(1) Ley 18, id. id.
(2) Ley 2, id. id.
(3) Ley 4, id. id.
(4) Ley 2, id. id.
(5) Leyes 14, 15, 16 y 17, id., id.

(1) Leyes 1 y 2, tit. 36 del Fuero.
(2) Ley 3, id., id.

poblacion de Granada hasta 1743, y desde esta época en que aquel se incorporó al Estado, la *renta de poblacion*. Véanse ambos artículos.

CENSOS EN ULTRAMAR. La Recopilacion de Indias no tiene título especial de *censos*. Por consecuencia esta materia se rige en aquellos dominios por la legislacion de Castilla sobre ellos. En lo rentístico se llaman censos en aquellos dominios el tributo de los indios, y el rédito ó rendimiento de las *composiciones* de tierras usurpadas á la corona. Véase COMPOSICION: INDIOS: TRIBUTO; y sobre uno y otro los títulos 5, lib. 6, y 12, lib. 4 de la Recop. de leyes de Indias. Sobre censos de indios véase BIENES DE COMUNIDAD DE INDIOS: y CENSO (*como contrato*) en la parte legislativa y en la reseña histórica.

CENSIDO. Voz impropia, que equivale á *acensuado*. Usóla alguno de nuestros autores de testo, ó de escuela, y de ahí el haberse hecho casi técnica en el lenguaje jurídico y forense. Debe economizarse y aun desterrarse su uso.

CENSUAL. Lo correspondiente al censo. Asi decimos contrato, cánon, escritura censual.

CENSUARIO. Segun la Academia de la lengua, es voz antigua, equivalente á *censualista*. En lo forense y legal no es asi sin embargo; sino que se usa en contraposicion, ó formando antítesis con aquella voz, como sucede con todas sus análogas en los respectivos contratos: asi decimos *censualista* por el dueño ó acreedor del censo, *censuario*, y tambien censatario, por el que lo paga; como en sus casos decimos *cedente*, y *cesionario*, *mutuante* y *mutuatario*, etc.

CENSURA. Version de la voz latina *censura* y esta de *census*, juzgar, apreciar, etc. Aplícase al juicio que se forma y anuncia de una cosa. En castellano ha dado orígen al verbo *censurar*, que significa formar ese juicio ó apreciacion de las cosas. Frecuentemente las voces *censurar*, *censura*, simplemente enunciadas, indican juicio desfavorable: así, censurar las acciones ó conducta de uno, dicho en términos generales, es desaprobarlas, ó agravarlas. En el mismo sentido decimos que tal accion es *censurable*: que siempre censuraremos tal cosa: *voto de censura*, etc. En el propio, en fin, ha prevalecido en lo canónico el llamar *censuras* á ciertas penas eclesiásticas; resultado de juicios condenatorios. En la mayoría de los casos, sin embargo, las indicadas voces espresan meramente, y á su vez, formar el juicio, y el juicio mismo formado, el cual puede ser favorable, ó adverso, siendo necesario, por lo tanto, añadir la calificacion de la *censura*, como *favorable*, *perjudicial*, *acerba*, etc., sucediendo entonces con las voces *censurar*, y *censura*, lo que con las de *crítica* y *criticar*, segun decimos en su artículo. Infiérese de lo dicho, que las mencionadas voces deben de tener diversas accepciones, como asi es en efecto. Las mas usuales en el derecho son las indicadas en los artículos subsiguientes.

CENSURA ECLESIASTICA DE OBRAS. Véase CONGREGACION DEL INDICE: INDICE: LIBROS PROHIBIDOS.

CENSURA DE OBRAS. El juicio emitido por personas, ó corporaciones competentes, oficialmente autorizadas, acerca de la bondad, ó malicia moral y política de los impresos, sobre si se ha de permitir, ó prohibir la circulacion, y cuyo juicio es unas veces *prévio*, otras posterior á la impresion y publicacion. Desde luego se vé que limitamos la definicion á la censura *civil*, pues de la eclesiástica se trata en su artículo correspondiente. Limítase tambien á las obras bajo el punto de vista de su publicacion por la imprenta.

PARTE DOCTRINAL.

SUMARIO.

SEC. I. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA CENSURA.

SEC. II. RESEÑA HISTÓRICA: DERECHO CONSTITUIDO SOBRE LA CENSURA CIVIL.

SECCION I.

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA CENSURA.

Los inconvenientes de una institucion humana, como á su vez los del carácter personal,

guardan siempre analogía, pero analogía *antitética*, con sus ventajas. Cuanto mas relevantes son estas, mas funesto y temible es su abuso: deplorable verdad, que en todo y siempre ha demostrado la esperiencia; y que la antigua filosofía elevó al conocido principio, *corruptio optimi pessima*: no hay peor corrupcion, que la corrupcion de lo *optimo*: *no hay peor abuso que el abuso de lo mejor*.

No podia eximirse de esta condicion natural la admirable institucion de la imprenta. Apenas inventada, ya empezó á ser temida; y todavía bajo los trasportes del entusiasmo con que fué saludada, aparecen ya las restricciones de los legisladores contra su abuso. ¡Violentísima *antitesis* la de la *libertad* del pensamiento y su *restriccion*, sino fuese necesaria! ¡Lamentable condicion humana, si lo fuese! Y por desgracia no enseña otra cosa la esperiencia, y cada dia con lecciones mas amargas. Cuando se piensa en la libertad natural del pensamiento, en su escelencia y condicion nobilísima, indigna la *restriccion*: cuando se palpan sus abusos, y se tiene en cuenta la *existencia de la sociedad*, irrita la licencia. En esta contraposicion de dos entidades, ambas naturales, el *pensamiento*, y la *sociedad* ¿cuáles son los fueros de cada una? ¿Cuáles, respecto de cada una, el justo límite de la libertad, y el funesto alcance del abuso? En esta árdua cuestion, á veces candente y peligrosa, y siempre importante, ¿cuál es el derecho *constituyente*? ¿Cuál el *constituido*? Del primero vamos consignando en esta seccion las indicaciones que permite la naturaleza de nuestra obra: del segundo lo hacemos en la siguiente.

En cuanto al primero grande es la escelencia del pensamiento; pero sus fueros no pueden ser absolutos. No lo son los de ninguna facultad natural: y la *moral* que impone leyes á la *conciencia*, la *sociedad* que las impone al *libre albedrío*, pueden ciertamente imponerlas al pensamiento. Asi la competencia de la *sociedad* para atajar los abusos del *pensamiento* es tan incontestable, como el derecho de la misma á su *existencia*: como su derecho y competencia para remover cuanto la *destruye*, *imposibilita ó dificulta* sus *fines*. Cuando es incompatible con ella la *libertad humana*, la *coarta*: cuando lo es la *vida* misma; priva de ella á los asociados. ¿Cómo no tendria competencia sobre el *pensamiento*, que no es facultad mas imprescriptible que la *libertad* y la *vida*?

De este mismo principio se deduce el alcance de la autoridad social contra el abuso. Si la *emision del pensamiento*, como facultad natural, no es superior á las demás facultades, naturales tambien, la *libertad natural*, por ejemplo, y la *vida*, no puede ser distinto respecto de ella el poder restrictivo de la sociedad; y podrá, segun el caso, no solo *moderarla*; sino aun *reprimirla*, y si tal fuese la gravedad de los motivos, *impedirla*. No es otra cosa, aun en los paises mas libres en política, y aun en la forma de emision del pensamiento mas escepcional y privilegiada, la *censura* en general, aunque sea *posterior*; y técnicamente, la *recogida* de un periódico, y su remision al *jurado*: la *suspension*: la *supresion*; no por ira, ó lujo de represion; sino por necesidad y provecho comun, como, por ejemplo, en una plaza sitiada, en un campamento. Ni la razon, ni la esperiencia dejan concebir la *libertad absoluta de emision del pensamiento*; y de hecho ninguna nacion la ha practicado, ni ninguna forma de gobierno. Las leyes llamadas de *libertad de imprenta*; son por el contrario leyes de *restricciones de esa libertad*.

Traemos estas indicaciones, que en buena filosofía nadie puede rechazar, á propósito del empeño, natural; pero lamentable, con que en las transiciones políticas, de un estado *represivo* á otro de mayor *libertad*, se clama por la libertad absoluta del pensamiento. Calificamos de natural esta tendencia, porque, para bien ó para mal, es lo comun, es flaqueza, ó condicion de la razon humana, cuando huye de un estremo, correr casi sin reflexion hasta el estremo opuesto; sin meditar bastante que asi se determina en el hecho la *reaccion*, pronto ó tarde, hácia el estremo abandonado, y eso con tanta mas violencia, cuanto que es por *reaccion*. Lejos de nosotros el empeño, que seria insensato por cierto, de rebajar los fueros de la razon: an-

tes la engrandecemos, cuando la emancipamos de la pasion: cuando precavemos y rechazamos el monopolio de una de sus facultades sobre las demás: cuando queremos librarla de los escesos, que la degradan, como la degrada siempre el abuso.

En favor del poder social, hay todavía una razon, y es, que los abusos en la emision del pensamiento, se diferencian de los demás abusos de la libertad natural, de un modo fundamentalísimo. Los demás delitos y abusos de las facultades del hombre, son de una gravedad, como *taxativa*; los del pensamiento por la imprenta de una gravedad *trascendental*. La diferencia *esencial* en esto es, que los primeros, en su mayor parte, son mas ó menos *reparables*; los de imprenta apenas lo son, ó no lo son nunca de un modo absoluto. Como la nube lleva en su seno el rayo; asi los abusos de la imprenta llevan de ordinario en su esencia la *injuria* ó la *calumnia*, cuyo rastro nunca, ó apenas alguna vez, se borra *asolutamente*. Está asi de un modo irremediable en la naturaleza de las cosas. El que roba, el que incendia, puede reparar. Siendo delitos, que de ordinario requieren preparacion, puede esta ser conocida, ó denunciada, y el delito impedido por la autoridad, ó precavido por la víctima designada, ó sus amigos, y aun por los estraños bien intencionados. Estas mismas dificultades de hecho y trámites, hacen infinitas veces que el delito proyectado, no pase de conspiracion, de tentativa, y aun de conato. Estensiva, en fin, la *injuria* y la *calumnia* por dicho ó hecho, como la trascendencia de los demás delitos, á un ámbito reducido, es fácil hacer llegar á la noticia y á la conciencia de todos la *vindicacion*, la *defensa*, la *absolucion*, la *reparacion*. En los delitos de la imprenta no es asi. La injuria y la calumnia se conciben y estampan en un momento: algunos momentos despues tienen por ámbito un reino: dentro de algunas horas, pasados pocos dias, el mundo. Los que leen unas publicaciones periódicas, no suelen leer las contrarias: los que pueden comprar unos impresos, no tienen inclinacion, ó facultades para comprarlos todos. ¿Quién dará la misma rapidez, estension y trascendencia á la reparacion que al agravio, ya que la víctima haya podido arrostrar, y por su fortuna realizar, su vindicacion? ¿Quién tiene, aun asi, bastante poder para borrar omnímodamente el vestigio infernal de la calumnia; y mas propagada por la prensa, y sobre todo por la prensa periódica? ¡Y cuán nulo es en la mayor parte de los casos el remedio y el consuelo asegurado en un simil poético, en una invencion mitológica, en la enfática, y tantas veces falaz enunciativa de la *lanza de Aquiles*!

Pero si la sociedad tiene sus fueros, la libertad humana y el pensamiento los tienen tambien. Y ¿cómo no; si ellos constituyen al hombre, y por el hombre es la sociedad; y no por la sociedad el hombre? Pero en esto las leyes, entre estos y aquella, la correlacion entre ambos, no consienten escepcion. La sociedad no puede limitar el ejercicio de las facultades naturales del hombre, sino en cuanto sea incompatible con sus fines bien entendidos: y esta, que es una ley general, esencial y constitutiva de los fueros sociales, se hace particular, asi como en los demás casos de aplicacion, en el de la emision del pensamiento por la prensa, como de cualquier otro modo.

Sobre esta base está fundada, y no puede ser sobre otra, ni debe, la diferencia entre la *censura prévia*, y la *censura posterior*. Una y otra son restriccion: aquella mas grave que esta: la razon del caso decidirá cuando su mayor gravedad es justa; y cuando será injusta y abusiva la restriccion menor, y aun la mas insignificante.

Hay formas de emision del pensamiento, que admiten con menos dificultad, ó con ninguna, la *censura prévia*, y es la que se verifica por *obras* ó *libros*. La natural lentitud de su impresion y propagacion ofrece tiempo para que la sociedad ejerza su inspeccion suprema, sin perjuicio de la libertad, ni de los intereses del autor.

En la prensa, llamada *periódica*, sucede lo contrario. El *periodismo*, que le dá nombre, es por lo comun diario, y hay periódico que duplica sus ediciones en un dia. Pueden llamarse publicaciones del momento: en un momento está tambien su *oportunidad*; y en un momento de retardo se sacrifica esta, el

objeto y efecto de la publicacion, y el interés de la empresa. En un momento tambien se hace un daño, imposible de impedir despues, y de ordinario irreparable. Inevitables son, por otra parte y á un tiempo, los males y perjuicios de uno y otro estremo. La libertad de la prensa periódica sucumbe ante la *prévia censura*. La defensa de la sociedad, colectiva ó distributivamente tomada, sucumbe ante la *omnímoda libertad* de emision del pensamiento. ¿Cómo conciliar estos estremos? En derecho constituyente tienen una conciliacion mas fácil, que en derecho constituido; si este fuese tal, como el establecido por nuestras constituciones políticas de 1837, 1845 y 1856. En teoría, no oyendo al interés de empresa, ni al de partido: no escuchando el lenguaje de la pasion; sino el de la razon; la sociedad asegura sus fines, y la emision del pensamiento no queda sacrificada con una *revision*, *por breves momentos*, hecha ya la impresion, y *antes de la espendicion*. Pero si el derecho constituido estableciese, como las mencionadas constituciones, la libertad de la imprenta, sin prévia censura; esta será la ley; y ni aun consiente la *revision*. En este caso la garantía hay que buscarla, por mas que nunca sufrague del todo, en la penalidad y responsabilidades por el abuso. Conduce al mismo fin el reservar á la accion de los tribunales ordinarios las acciones de *injuria* y de *calumnia*. Una libertad omnímoda de censura prévia, y posterior, de recurso á los tribunales, de revision; y de todo punto la lenidad en las garantías de responsabilidad, dará por resultado inevitable el *descrédito* de la institucion, *los duelos*, perturbatorios del órden político y moral, y las *violencias del poder*, por *medidas de gobierno*, y á nombre de la *necesidad*; que tan fácil camino abre al abuso. En derecho constituyente, pues, hecha completa abstraccion de todo derecho constituido, y de toda situacion política, nadie puede rechazar, como violenta, nadie puede dejar de hallar conciliadora de los fueros de la *sociedad* y del pensamiento, en lo que son objeto de este artículo, la *revision momentánea* del impreso por un breve período, media hora por ejemplo, antes de su espendicion, y el derecho de *retencion* y obligacion de *denunciar* en su caso, y entendiéndose permitida la espendicion, no reteniendo dentro de dicho período. Otro medio será el de presentar á la autoridad un número firmado del impreso, antes de haber empezado su espendicion. Una cosa puede tenerse por cierta, y es, que cualquiera restriccion racional y conciliadora, consignada en la ley, es menos perniciosa á la libertad del pensamiento, que las demasías *obligadas* de los gobiernos y autoridades.

El derecho público, por otra parte, sanciona la *teoría conciliadora* de alguna restriccion y garantías en la emision del pensamiento por la imprenta. La constitucion mas libre consigna, no la libertad absoluta, sino *arreglada*, *ó conforme á las leyes*. La constitucion mas libre tambien escluye algun caso, ó materia, como los asuntos, por ejemplo, sobre religion. Si á todo esto se llega que los gobiernos reputados por mas libres entre nosotros, han tenido que ocurrir á los abusos de la emision con medidas violentas y estralegales, eso revelará que *hay vicio en la organizacion*, *y exageracion en las teorías de omnímoda libertad*.

No siendo este artículo sino genérico, en otros descenderemos á mas pormenores sobre la materia. La tecnología corriente que podemos llamar nueva, porque son nuevas tambien las ideas y las cosas á que se refiere, hace necesarias algunas indicaciones sobre el particular, con que terminamos la presente seccion.

Hemos encabezado el artículo con la enunciativa de *censura de obras*, por cuanto hoy no sufragaría la de *censura de libros*, ni la de impresos.

Hasta el establecimiento del régimen constitucional en España, la enunciativa *obras*, comprendia todo género de escritos, dados á luz por la imprenta, aun cuando constasen de una sola hoja; si bien ya en el reinado de Felipe IV se estableció la diferencia, como mas adelante decimos, entre libros y papeles. Introducida con el régimen constitucional la *libertad de impren-*

Lorenzo Arrazola

ta, y con ella lo que se llama *periodismo*, *prensa periódica*, esto es, la publicacion del pensamiento de cada uno en hojas ó reducidos escritos, ora diaria, ora con interposicion de algunos dias; pero siempre en breves períodos, siguiendo en ello el movimiento de la política, y no el movimiento ordinario; sino el estraordinario; por dichas publicaciones periódicas, diarias, alternardas, semanales etc. en el primer caso; por publicaciones del momento, *ojas volantes*, *números estraordinarios*, *alocuciones*, *proclamas*, etc., en el segundo; ha aparecido la necesidad de una nueva legislacion, y por tanto, de una nueva clasificacion ó nomenclatura de *impresos*, diferenciándolos en *periódicos*, *ojas volantes*, *folletos* y libros, circunscribiéndose principalmente á estos la denominacion de *obras*. El exámen, pues, por personas ó corporaciones competentes y oficialmente autorizadas, del contenido de los impresos, bajo el punto de vista de la política y de las costumbres, es lo que se ha llamado, y aun se llama *censura* en el sentido de este artículo; con la diferencia de que hasta hace cuarenta años, la censura de *obras*, se estendia á todo género de *impresos* periódicos, ó no, y cualquiera que fuese su volúmen ó estension: introducida la libertad de imprenta, solo á aquellas, que esceden de *folletos*, y por tanto á los *libros*. Hasta la Constitucion de 1812, la censura fué siempre *prévia* ó precedia á la impresion: despues de dicha época, no precede sino en las obras y escritos que traten de *religion*. En todos tiempos, sin embargo, antes, como ahora, el supremo poder ha tenido y tiene el derecho, asi como tambien el deber, de someter á *censura* las obras y todo género de impresos, de que pueda recibir daño la sociedad, en sus fueros, leyes y costumbres; si bien ejercido bajo diversas formas ese derecho; ora por medio de una como *magistratura* censoria, y digámoslo asi *pericial*, unipersonal ó colectiva; ora por un tribunal, aunque de mero sentido comun, por el *jurado*.

Hemos hablado de *impresos*, porque es el medio mas ordinario de publicacion de obras ó escritos: pero por identidad de razones, porque cuando es una la razon de la ley, debe tambien ser la misma su disposicion, procede la censura, y el derecho de ella, por parte del poder ejecutivo, conforme á las leyes, cuando el pensamiento se publica y perpetúa por *grabados*, *litografías*, *relieves*, ó de cualquier otro modo análogo conocido, ó que puede inventarse, toda vez que el efecto, en cuanto á la *perpetuidad* y demás, sea el mismo que el de la imprenta.

El movimiento sucesivo de la inteligencia y de la industria, la variedad de fines de unos y otros ha diversificado tambien sus aplicaciones, y la legislacion por lo tanto, en el uso de la censura. De aquí la diferencia en la forma y en la materia entre la censura *civil* y la *eclesiástica*: y aun respecto de la primera entre la censura de *periódicos*, de *obras dramáticas*, ó *piezas teatrales*, y de libros ú obras literarias en general. Traémoslo á propósito de espresar que el presente artículo se limita á la *censura civil en general*, reservando para su lugar las censuras especiales, como la religiosa, la pericial ó científica, la de piezas teatrales, etc.

SECCION II.

RESEÑA HISTÓRICA: DERECHO CONSTITUIDO SOBRE LA CENSURA CIVIL.

Apenas habia empezado la imprenta á difundir sus beneficios, se estableció la censura. Los Reyes Católicos, por pragmática de 8 de julio de 1502 (1), prohibieron que los libreros, impresores, mercaderes de libros y factores de este comercio pudieran hacer imprimir, directa, ni indirectamente, ningun libro, pequeño ó grande, en latin ó en romance, sin que tuviera real licencia, ó la de los presidentes de las audiencias de Valladolid y Granada, ó de los arzobispos de Toledo, Sevilla y Granada, ó de los obispos de Búrgos y Salamanca, los cuales podian autorizar la impresion en sus respectivas residencias, siendo estensiva la facultad del obispo de Salamanca á las obras que se imprimian en Za-

(1) Ley 1, tit. 16, lib. 8, de la Nov. Recop.

mora. Vemos, pues, establecida ya la censura prévia, y hasta hecha mencion de las ciudades en que entonces se imprimia. Pero no era esto bastante, segun las ideas entonces dominantes. Solo hubieran conseguido los Reyes Católicos perjudicar á la industria nacional, si la prohibicion no se hubiera estendido á los libros impresos en el estranjero: estableciόse, pues, que no se pudieran poner en venta, sin que fueran antes vistas y examinadas por las referidas autoridades ó por las personas que al efecto comisionaran, y aprobadas. En la misma pragmática se fijó bien el modo de realizar la censura, y se señalaron las obras para que habia de concederse autorizacion. Debian pasarse al exámen de *algun letrado, muy fiel y de buena conciencia, de la facultad de que eran los libros y lecturas*, el cual prestaba juramento de cumplir lealmente con su cargo: este trabajo era módicamente retribuido por los mismos que presentaban las obras á la censura. Los censores no se limitaban á censurar lo que era contrario á la religion, á la moral ó á las leyes; debian además atender á *si la tal obra era verdadera, y si era lectura auténtica ó aprobada y que se permita leer, y que no haya duda*, lo que se ordenó, como dice la misma ley, para prohibir la impresion y circulacion de las obras apócrifas ó supersticiosas ó reprobadas, y de cosas vanas y sin provecho. Los mismos censores debian recorrer las obras, despues de impresas, para examinar, si lo estaban ó no en los términos permitidos. Por último, una sancion penal rigorosísima venia á completar la obra de la censura, y era la pérdida de todos los ejemplares, que debian ser quemados en las plazas públicas: la del precio de los vendidos, y otro tanto mas, aplicable por terceras partes á denunciador, censura y juez; y la inhabilitacion al impresor, librero, mercader ó factor, para poder usar de su oficio: penalidad durísima y que no se concebiria si no se considerara el fin político que se proponian los Monarcas, y los estravíos de la opinion respecto á la prensa desde el momento en que apareció al público tan señalado adelantamiento.

Don Cárlos I siguió el camino que le dejaron trazado sus ilustres abuelos. Creyendo que se habia, con demasiada facilidad, permitido la impresion de libros inútiles, de cosas impertinentes y sin provecho, mandó que en adelante todas las licencias se dieran por el Consejo, y que en él quedaran las obras originales para que nada pudiera añadirse ó alterarse en la impresion (1). En este sistema los censores debian entender tambien en la utilidad y conveniencia de la obra.

Subió al trono Felipe II, y en su carácter severo, fácil es comprender que los grandes acontecimientos religiosos y políticos de su tiempo le determinarian á medidas severísimas, y asi fué en efecto, llegando hasta castigar con la *pena de muerte* y confiscacion de bienes á los que sin real licencia imprimiesen en España ó introdujesen del estranjero, cualquiera clase de libros; ordenando todavía, que los que tuviesen libros en romance impresos en el estranjero, y que hubieran importado antes de la publicacion de la pragmática, los presentaran á los alcaldes mayores para que los remitiesen al Consejo, á fin de que en su vista proveyesen; quedándole entre tanto prohibido el derecho de poseerlos y venderlos, so pena de confiscacion de bienes y de estrañamiento perpétuo (2). Todavía añadia la pesquisa, la denuncia y los medios de terror, aun contra las obras y papeles manuscritos.

Los arzobispos, los obispos, y los demás prelados, juntamente con la justicia y corregidores, en sus respectivos territorios, y con dos doctores ó maestros en las ciudades de Salamanca, Valladolid y Alcalá: los generales provinciales, abades, priores y guardianes, en sus respectivas órdenes y monasterios, debian hacer visitas domiciliarias, examinar los libros que cada uno poseia, mandar una relacion al Consejo, de los que encontrara sospechosos ó reprobados, erróneos ó falsos y que tratasen materias deshonestas ó de mal ejemplo; y depositarlos en personas

(1) Ley 2, id., id.
(2) Ley 3, id., id.

de confianza, en tanto que el Consejo resolvia lo que estimara conveniente. Por otra parte, alentábase la denuncia con el cebo del interés, concediéndose al que la hacia la tercera parte de la pena pecuniaria que se imponia al delincuente, lo cual producia en la mayor parte de los casos, un lucro considerable, porque la pena que se aplicaba, era la total confiscacion de bienes.

Y no se concretó á perseguir esta clase de delitos, y á castigar tan severamente á sus autores; sino que puso el mas esmerado cuidado en precaverlos. Con este fin, estableció numerosas reglas acerca del modo con que el Consejo habia de hacer la censura, y los libreros las impresiones. El original de la obra, que se deseaba dar á la imprenta, habia de ser presentado al Consejo: examinábala este, y si le parecia que debia darse licencia para imprimirla, se pasaba á alguno de los escribanos de cámara, á fin de que signase y firmase todas sus planas, y para que al fin de él declarara tambien bajo su firma el número de sus hojas. Asi señalado, rubricado y numerado, era entregado al librero para su impresion, el cual quedaba obligado á devolverlo al Consejo, con otros dos volúmenes impresos, á fin de examinar si estaban estos conformes con aquel. Y todavía no eran suficientes requisitos estos para la circulacion del libro: era además indispensable que en su portada ó principio se pusiera la real licencia, la tasa, el nombre del autor, el del impresor, y el del lugar en que se hacia la impresion. No obstaba para imponer todas estas restricciones y trámites que la obra hubiera sido con anterioridad impresa. Cada nueva edicion exigia nueva licencia, y cada licencia los requisitos espuestos, bajo pena, al que la imprimiere ó diere á imprimir, ó vendiere impresa, sin ellos, de destierro perpétuo del reino, y confiscacion de bienes. Algunas escepciones, aunque pocas, sufria esta regla. Los libros, propios de los oficios de la Iglesia, las constituciones sinodales, cartillas para enseñar á los niños, vocabularios, artes de gramática y algunos otros latinos, habiéndose antes impreso en España, bastaba que fueran presentados é los prelados respectivos, y que estos, despues de oir el dictámen de personas doctas en letras y en conciencia, autorizaran su reimpresion. Tampoco intervenia el Consejo, sino el inquisidor general y el comisario general de cruzada respectivamente, en las cosas tocantes al santo oficio, y en las bulas y asuntos pertenecientes á la cruzada. Era, por último, completamente libre la impresion de las informaciones y memoriales que se hacian en los pleitos, justo respeto tributado á los tribunales, y medida acertada que dejaba á las partes espedito el uso de un medio que podia contribuir á hacer triunfar la justicia de sus pretensiones.

No menos diligencia que Felipe II, emplearon Felipe III, Felipe IV y Cárlos II, para evitar la circulacion de libros, sin obtener antes la licencia de la censura. Las leyes 7.ª 9.ª y 10 del tít. 16, lib. 8.º de la Nov. Recopilacion, en que se recuerda la observancia de las anteriores pracmáticas y en que se hacen algunas ligeras innovaciones acerca de la censura, son prueba bastante de la importancia que dieron á estos trabajos aquellos monarcas.

En su esencia las mismas ideas abrigaron, los mismos principios proclamaron é hicieron acatar, los primeros reyes en España de la casa de Borbon, en cuanto á la censura. Felipe V, Fernando VI y Cárlos III, no solo hicieron observar las antiguas leyes, sino que dieron otras disposiciones encaminadas á hacerlas mas eficaces, y á darles mayor estension, á corregir los defectos que en ellas habia descubierto la esperiencia, á evitar los fraudes que se hacian á su espalda y los abusos que á su nombre se iban introduciendo.

En esta época, como en la que acabamos de recorrer, el Consejo continuó en el alto ejercicio de la censura; pero si los libros que habian de ser examinados, trataban de asuntos mercantiles, se exigia precisamente la censura de la junta de comercio (1): si de medicina, la de un médico, al efecto designado por el presidente del protomedicato (2): si de ciencias eclesiásticas, la del prelado res-

(1) Ley 15, id. id.
(2) Ley 20, id. id.

pectivo (1); y la Academia de la historia habia á su vez de dar precisamente su voto acerca de la impresion de mapas de la frontera del reino (2). Materias habia tambien que eran consideradas tan importantes y peligrosas, que ni el Consejo mismo podia conceder licencia para la impresion de los libros ó papeles que de ellas hablasen. Eran estas las de Estado, tratados de paz, y otras semejantes (3), y las versiones literales de los oficios de la Iglesia (4). Los que querian verificar esta clase de impresiones, habian de acudir al Rey, que despues de hacer reconocer los originales, resolvia lo que estimaba conveniente en el particular.

La jurisdiccion y facultades del Consejo de Castilla, se estendian á cuantos libros se imprimian ó reimprimian en Castilla, Aragon, Valencia y Cataluña (5): y el Consejo de Navarra era el tribunal competente para las licencias, de las impresiones, que en este antiguo reino se hacian; pero observando los mismos trámites y formalidades que por estilo, leyes, cédulas y autos acordados estaban en práctica en Castilla (6), y no siéndole permitido nunca la impresion ó reimpresion de las obras nuevas, cuya impresion se hubiere negado por el Consejo de Castilla (7).

La distincion, que para el mejor ejercicio de la censura, tuvo orígen en tiempo de Felipe IV (8), entre libros y papeles, recibió oportuna confirmacion en el período que venimos examinando. En tanto que en la impresion de libros, como acabamos de decir, intervenia siempre el Consejo; era bastante, para la publicacion de los papeles sueltos, que solian correr con el nombre de cartas, relaciones, panegíricos, gacetas, memoriales y otras análogas, en la corte la aprobacion de un consejero de Castilla, que al efecto designaba el comisario de este: en las ciudades donde habia audiencia, la del regente: y en los demás puntos la de las respectivas justicias (1). La censura, asi ejercida, era una inmensa losa, que pesaba sobre el pensamiento, una red estendida que lo abarcaba todo. Y sin embargo, la frecuencia con que se confirmaban las mismas leyes, y se repetian los propios requisitos, y refulminaba contra sus contraventores las mismas terribles penas, dá á entender que todas las prescripciones establecidas no eran bastantes para impedir á las veces la impresion de algunas obras y papeles; y que por una parte el espíritu humano, obedeciendo á la ley natural, que le impele á comunicar sus ideas y pensamientos, y por otra la codicia de los libreros, sabian encontrar medios de burlar el rigor de la ley, y la vigilancia de los magistrados encargados de su cumplimiento. Los fraudes mas frecuentes solian cometerse en las reimpresiones, publicándolas por terceras partes, suponiendo nombres de autores para disfrazarlas, y añadiendo á los libros lo que parecia, al tiempo de darlos á la estampa: á esto daba ocasion el que las licencias corrian por distintas manos y escribanías: y conociéndolo asi el Consejo, estableció que solo el escribano de gobierno entendiese en lo sucesivo en esta clase de peticiones (2), que asi centralizadas presentaron nuevas dificultades que vencer á los que deseaban eludir el cumplimiento de las leyes. Tambien debió abusarse con el tiempo del libre derecho, concedido á las partes, de imprimir, sin mas requisito que la firma de un letrado, informaciones en derechos y defensas legales, ó bien, corriendo los dias, y cambiando las circunstancias, pareceria perjudicial y dañoso, lo que antes se estimó inocente y justo: lo cierto fué que á la antigua y absoluta libertad, concedida para la impresion de los escritos forenses, se puso la cortapisa de presentarlos antes al Consejo ó tribunal en que radicara el asunto litigioso, á fin de que, si lo estimaba conveniente, autorizar su impresion.

Tal fué la legislacion y tal la jurisprudencia y práctica, que acerca de la censura dominaba en España desde el reinado de los Re-

(1) Ley 38, id. id.
(2) Ley 21, id. id.
(3) Ley 17, id. id.
(4) Ley 23, id. id.
(5) Ley 13, id. id.
(6) Ley 30, §. 4, id. id.
(7) Ley 30, §. 5.°, id. id.
(8) Ley 9, id. id.

(1) Ley 19, id. id.
(2) Ley 12, id. id.

yes Católicos hasta el de el Sr. D. Carlos IV, en que fué radicalmente cambiada, separando el conocimiento de estos asunto del Consejo y demás tribunales y encomendándolos esclusivamente á una autoridad creada *ad hoc* con el título de *Juez de imprentas*.

Las razones, que para llevar á cabo tan grave reforma, tuvo Carlos IV, las consignó de esta manera en la ley 41, título 16, libro 8.° de la Nov. Recop. «El abuso que se ha hecho y hace en varios paises estranjeros de la libertad de imprenta, con grave perjuicio de la religion, buenas costumbres, tranquilidad pública y derechos legítimos de los príncipes, exige providencias eficaces para impedir que se introduzcan y estiendan en mis dominios los impresos que tantos males ocasionan. El órden que hasta ahora se ha observado en cuanto á las licencias para imprimir, como tambien para la introduccion de libros estranjeros; no basta á evitar el gran daño que causan las malas doctrinas. Los muchos negocios, que están á cargo de mi Consejo, no le permiten atender á esto con la vigilancia y celo que hoy se necesitan. El ministro del mismo que tiene la comision del juzgado de imprenta y librerías del reino y sus subdelegados en provincias, ocupados en otros negocios, se ven precisados á fiarse de subalternos, cuyo interés privado suele prevalecer al público. De ser inconexas y divididas las autoridades de quienes dependen las licencias para imprimir, resulta el poder conseguirlas por un conducto, cuando justamente se han negado por otro. Como los censores no tienen premio ni estipendio alguno, se elude la responsabilidad, no se suelen desempeñar estos cargos, con el celo necesario, ó se rehusa admitirlos, mayormente teniendo la debida libertad para informar imparcialmente, sin comprometerse con los autores, por la falta del sigilo por parte de los subalternos. Para evitar estos y otros graves inconvenientes, simplificar y uniformar el gobierno de un ramo tan importante, facilitar el curso de las obras útiles é impedir la publicacion y circulacion de los perjudiciales; he resuelto, despues de una madura deliberacion, que la autoridad relativa á las imprentas y librerías de mis dominios se reuna en un solo juez de imprentas, con su inhibicion del Consejo y demás tribunales.»

El juez de imprenta, desde esta época, fué, pues, la autoridad privativa, encargada de vigilar y de impedir la circulacion de todo impreso que no fuere precedido de la oportuna licencia. Para que pudiera dedicarse al ejercicio de su cargo con la asiduidad y celo que el Rey exigia, declaróse su destino incompatible con el de ministro efectivo de ningun consejo, se le retribuyó de un modo conveniente, y se le hizo independiente de todo tribunal. Responsable de los escesos, que por su descuido ó connivencia se cometieran en sus dependencias, tenia en cambio la facultad de nombrar las personas que habian de desempeñar los cargos de censores, subdelegados en provincia, de secretario para estender los decretos y licencias; de escribano para las causas que pudieran ocurrir, notificar órdenes y visitar las imprentas y librerías, archivero que á la vez habia de llevar la cuenta y razon de los caudales que entraran en el juzgado, y portero para las diligencias de oficio. Justo derecho, porque si de las faltas de sus dependientes era el juez responsable, á él esclusivamente debia dejarse la eleccion de personas. Sus principales obligaciones eran, cuidar con el mayor celo de la observancia del reglamento y de las leyes relativas al ramo: formar y sustanciar causas contra los impresores y libreros que contravinieren á lo mandado en órden á imprenta y librerías, imponiéndoles las penas prescriptas por las leyes: nombrar para censurar las obras, sujetos de acreditada ciencia, celo y probidad, usando en esta eleccion de toda la imparcialidad que exigia la responsabilidad á que se obligaba: espedirles los títulos en toda forma, encomendándoles el mas exacto cumplimiento de su obligacion y encargándoles la responsabilidad: procurar que fueran pocos los censores; pero que reunieran entre todos los conocimientos de todas las facultades: cuidar de reconocer y hacer examinar todos los libros que se introdujeran en España de paises estranjeros, y nombrar en las provincia subdelegados de

responsabilidad y de toda su confianza, para que visitasen las librerías y reconociesen las obras que en ellas existieran.

En cuanto á los trámites y modos de realizar la censura, hiciéronse tambien notables variaciones. Desde luego conviene distinguir los libros, que se introducian impresos del estranjero, de los que se imprimian en España. La aduana debia remitir al juez de imprenta la lista de los primeros, y este los repartia entre los censores, segun su competencia en las materias de que trataban. Estos examinaban detenidamente las obras, no fiándose de sus títulos, ni de que estuviesen ya permitidas, pues en las nuevas ediciones podian añadirse prólogos, notas y disertaciones perjudiciales; y daban despues su censura fundada, acerca de las que debian ser detenidas ó prohibidas, y en su vista el juez procedia á recogerlas y archivarlas. El introductor de estos libros no podia exigir que se le volvieran, ni se le daba indemnizacion alguna.

Mas estensas eran las formalidades que habian de cumplirse en la concesion de licencias para imprimir. Presentada la obra al juez de imprenta, la pasaba al secretario, para que la registrara en el libro de asiento, y luego era remitida al vicario eclesiástico, para que la hiciese examinar por personas de su confianza, encargando el mayor sigilo á sus dependientes; si trataba de cosas pertenecientes á América, era precisamente remitida al Consejo de Indias, y si la materia tenia relacion con alguno de los ministerios de Estado, se enviaba al que correspondia. Aprobada la obra por estos conductos, volvia al juez de imprenta que la remitia al censor.

Conviene aquí advertir, que los censores no formaban asociacion, para que el espíritu de cuerpo no llegara nunca á pervertir la rectitud de los juicios. Teníase tambien gran cuidado en ocultar el nombre de aquel á cuya censura habia pasado la obra: si faltaba al sigilo el secretario, debia ser sucesivamente reprendido, multado y suspendido en su empleo, y al censor que directa ó indirectamente manifestaba que tenia algun tratrabajo literario para censurar, se le debia quitar al punto la obra y remitirla á otro, reprendiéndole severamente. El censor, no solo debia examinar, si el libro que se deseaba dar á la prensa contenia cosa contraria á la religion, buenas costumbres, leyes y regalías; sino además apreciar si era útil al público y si podia perjudicar por sus errores en materias científicas ó por los vicios de su estilo y lenguaje. Debia igualmente especificar las razones que tuviera para aprobar ó reprobar cualquiera obra; y si el autor pedia traslado de la censura, se le concedia, y á las razones que espusiera debia contestar el censor. En vista de lo espuesto, el juez de imprenta podia decidir por sí, ó remitir la obra á otro censor. Una vez aprobada la obra por el censor, era responsable de sus consecuencias, sin que pudiera alegar ignorancia de las leyes ni eximirse de la pena con el efugio de que no habia comprendido la malicia de lo que aprobó; pues en caso de no tener las suficientes luces para censurarla, tenia la facultad de devolverla al juez de imprenta, escusándose y manifestándolo asi. Al que por espíritu de parcialidad reprobaba injustamente un trabajo de mérito, ó por interés aprobaba una perjudicial, se le recogia el título. Mayor castigo se imponia al censor que aprobase una obra que contuviera cosas contrarias á la santa fé, buenas costumbres, leyes del reino, regalías ó algun libelo infamatorio, sátiras personales, calumnias ó imposturas contra algun cuerpo ó individuo, pues que además de perder su empleo sufria las penas impuestas por las leyes contra los fautores de estos delitos. Obligados estaban tambien los censores á delatar al tribunal correspondiente las traducciones de las obras prohibidas por el tribunal de la inquisicion ó por el gobierno, y los originales que en su concepto merecieran igual prohibicion. En cuanto á las obras que eran reprobadas, por contener doctrinas peligrosas, no se devolvian á sus autores, sino que se archivaban, y aun á las veces se les precisaba á entregar todas las copias y hasta los borradores del manuscrito.

Obtenida, por el contrario, la aprobacion del censor en la forma indicada, volvia la

obra al juez de imprenta, que espedia la licencia de impresion y pasaba el original al secretario para que rubricare cada una de sus páginas, tachara los espacios en blanco, salvara las erratas y tomara las precauciones necesarias para evitar todo fraude. Impresa ya, el autor estaba obligado á presentar al tribunal un ejemplar de ella, á fin de que fuese cotejado con el original. Todavía para su espendicion se necesitaban otros requisitos de que no hablamos, porque no tienen relacion con el objeto de este artículo.

Estas son las disposiciones que han regido á la imprenta durante el gobierno absoluto. Desde que se inauguró el gobierno representativo, las cosas debieron cambiar, y cambiaron efectivamente de aspecto. El art. 1.° del decreto de las Córtes de 10 de noviembre de 1810, declaró que todos los cuerpos y personas particulares de cualquiera clase y estado que fueran, tenian libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revision ó aprobacion alguna anteriores á la publicacion; pero al mismo tiempo estableció ciertas restricciones, que en parte modificaron este principio general. Desde entonces quedaron abolidos los juzgados de imprentas y la censura de las obras políticas precedente á su impresion (1). Mas esta libertad no se hizo estensiva á los escritos sobre materias de religion, que quedaron sujetas á la censura de los ordinarios eclesiásticos, segun lo establecido en el concilio de Trento (2). Los impresores que infringian esta disposicion, incurrian en una pena pecuniaria, sin perjuicio de las demás establecidas en las leyes, segun el esceso (3). Mas los ordinarios no podian negar la licencia que se les pedia, sin prévia censura y audiencia de los interesados (4); y cuando la negaban, quedaba á estos el remedio de acudir con copia de la censura á la Junta suprema de censura, la cual examinaba la obra, y si la hallaba digna de aprobacion, pasaba su dictámen al ordinario, para que, mas ilustrado sobre la materia, concediera la licencia, si le pareciera, á fin de escusar recursos ulteriores (1). No espresaba el decreto de las Córtes, cuáles eran estos recursos ulteriores: atendido, sin embargo, el espíritu dominante en aquella época y el decreto de las Córtes de 10 de junio de 1813, parece que solo podian acudir en queja al Congreso, único cuerpo legislativo existente entonces. En efecto: decia este decreto en su artículo 10, que las juntas de censura estaban bajo la inmediata proteccion de las Córtes, y que ninguna autoridad podia mezclarse en el ejercicio de sus funciones sino en los casos espresamente establecidos por las leyes. Todo lo que se referia al libre ejercicio de la imprenta, tenia entonces cierta independencia del gobierno, habiéndose llegado hasta el caso de establecer que las juntas de censura eran responsables á las Córtes (2).

La Constitucion de 1812 (art. 371), dió nueva forma al principio de libertad de imprenta: pero antes (art. 12) habia dicho, que la Religion de la Nacion española era y seria perpétuamente la católica apostólica romana, única verdadera, que la nacion la protegía por leyes sábias y justas, y prohibia el ejercicio de cualquiera otra. Para impedir pues, la circulacion de doctrinas, que pudieran hacer decaer la unidad católica en nuestra pátria, se creyó que era necesario conservar la censura. Y asi lo hizo la ley, que estando vigente la espresada Constitucion, fué sancionada en 12 de noviembre de 1820, que es la vigente en la actualidad, si bien no está en práctica en todas sus partes. Segun ella (3) no pueden imprimirse libremente los escritos que versan sobre Sagrada Escritura y sobre los dogmas de nuestra santa Religion, los cuales necesitan la licencia del ordinario. No es lícito al ordinario negarla sin prévia censura, de la cual ha de darse traslado al autor ó editor, y si estos no se conforman con ella, pueden contestar, esponiendo sus razones, para que recaiga sobre el escrito se-

(1) Art. 2 del decreto de las Córtes de 10 de noviembre de 1810.
(2) Art. 6.
(3) Art. 12.
(4) Art. 19.

(1) Art. 20.
(2) Art. 8 del decreto de las Córtes de 10 de junio de 1813.
(3) Art. 2 de la ley de 12 de noviembre de 1820.

gunda censura (1). Si la segunda censura fuere contraria, segun la misma ley (2), quedaba al interesado espedito el derecho de acudir á la junta de proteccion de libertad de imprenta, la cual pasaba el espediente con su dictámen al ordinario, para que con mayor instruccion concediera ó negara la licencia, lo que debia hacer á lo sumo en el término de tres meses contados, desde que el autor hubiera presentado por primera vez la obra. Mas en el caso de que el ordinario rehusara dar ó negar la licencia, ó faltara de cualquiera modo á las disposiciones que quedan referidas, el interesado podia recurrir á la junta de proteccion de libertad de imprenta, la que lo elevaba al conocimiento de las Córtes (3). Hemos dicho antes que esta ley es la vigente, si bien no está en práctica en todas sus partes, porque si fué restablecida en 1854 (4) no ha llegado el caso de que las Córtes nombren la junta suprema de censura, ni es de creer que lo hagan, cuando van á formar una ley nueva que arregle el ejercicio de la libertad de imprenta.

Con el establecimiento de la censura prévia respecto á los escritos que versan sobre la Sagrada Escritura y dogmas de religion, se creyó que no era necesario espresar en la ley los impresos que atacaran tan respetables objetos.

Debemos tambien manifestar, que por el real decreto de 9 de abril de 1844 se suprimió la censura prévia, y se calificaron de subversivos los impresos contrarios á la Religion católica apostólica romana, y los en que se hiciese mofa de sus dogmas ó culto (5). Pero este decreto quedó del todo derogado por el de 1.° de agosto de 1854, que, segun queda espuesto, restableció la censura en las materias que á la religion se refieren, al dar nueva vida á la ley de 12 de noviembre de 1820.

Para esplicar mas esta ley, se dió la real órden de 19 de agosto de 1854. Reconocióse en ella de nuevo que á los obispos corresponde conservar en toda su pureza el sagrado depósito de la fé, y censurar y calificar los escritos en que se ataquen el dogma ó la moral cristiana; pero se les encarga que procedan en la forma prescripta por las leyes recopiladas al tenor la Bula de Benedicto XIV, *Sollicita, et provida*, oyendo la esplicacion del autor antes de ordenar su obra, escrito ó impreso, absteniéndose de publicar la prohibicion ó condenacion hasta que S. M. preste su consentimiento, no olvidando que hay doctrinas controvertibles dentro de la esfera católica, que han dado nacimiento á diferentes escuelas; pero que no deben servir de pretesto, mientras no estén prohibidas por la Iglesia, para iniciar un procedimiento, ni dictar una condenacion mancillando la reputacion y buen nombre de los autores, presentándolos como sospechosos en la fé.

Algunas veces en fin, antes de ahora, y segun ya queda indicado, los acuerdos de las Chancillerías y audiencias ejercian la censura oyendo por escrito á los fiscales de S. M., y sin perjuicio de todo, y segun lo especial ó grave del caso, se cometia la censura de obras determinadas á la censura de personas ó corporaciones, nombradas particularmente para ello.

Véase CENSOR: CENSOR DE TEATROS: CENSURA DE OBRAS EN LO ECLESIASTICO: CENSURA PERICIAL Ó CIENTIFICA: INDICE: IMPRESORES: LIBERTAD DE IMPRENTA: LIBROS PROHIBIDOS.

CENSURA DE OBRAS EN ULTRAMAR. Respecto de aquellos dominios son tan complejas y correlacionadas las disposiciones sobre censura, impresion, é importacion de libros, periódicos, etc., que para no repetir, ni romper la continencia de la materia, preferimos tratarla conjuntamente en el artículo LIBROS É IMPRESOS EN ULTRAMAR. Véase.

CENSURA CIENTIFICA DE OBRAS O ESCRITOS. Algunas veces la censura de obras ó escritos no es para publicarlos; sino para señalarlos por testos de enseñanza, por ejemplo, para recomendar el gobierno su adquisicion á las corporacio-

(1) Art. 3.
(2) Art. 4.
(3) Art. 5.
(4) Real decreto de 1.° de agosto y real órden de 8 de setiembre.
(5) Art. 35 del Real decreto de 9 de abril de 1844.

Lorenzo Arrazola

nes ó autoridades: para subvencionarlas, ó auxiliar su publicacion: para premiar á sus autores, etc. En estos casos la censura es pericial, científica, ó facultativa. Se acude al gobierno solicitando alguna de las gracias indicadas, y es claro que no deben concederse sin el debido conocimiento de causa. La censura en estas ocasiones es estraordinaria; pues por estraordinario se nombra á la persona ó cuerpo facultativo que ha de verificar el exámen, y emitir juicio sobre el mérito, conducencia ó necesidad de la obra, segun los términos de la comision. Y dicho se está que este género de censura, lo mismo tiene lugar respecto de las obras, aun manuscritas, que de las ya impresas. No debiera tenerlo en cuanto á obras, aun no escritas; y sin embargo, algunas veces hemos visto ejemplares de lo contrario, siendo tan fácil en ello el error, ó el abuso.

CENSURA DE PERIODICOS. Véase: CENSURA DE OBRAS: IMPRESORES: LIBERTAD DE IMPRENTA.

CENSURA DE PIEZAS DRAMATICAS. Véase CENSURA DE TEATROS: CENSURA DE OBRAS.

CENSURA PREVIA. V. CENSURA DE OBRAS: IMPRESORES: LIBERTAD DE IMPRENTA: LIBROS PROHIBIDOS: PREVIA CENSURA.

CENSURA Y CORRECCION (TRIBUNAL DE). Dióse este nombre en el plan literario de estudios y arreglo general de las universidades del reino, decretado en 14 de octubre de 1824, á una junta, que en cada universidad debia haber, encargada de velar y hacer que se observaran las reglas de policía escolástica, y de disciplina moral y religiosa, que obligaban á los maestros y á los discípulos (1). Componíase cada tribunal del rector y de cuatro doctores, nombrados por el cláustro general, debiendo ser dos de ellos eclesiásticos, seculares ó regulares, y todos acreditados por su doctrina y conducta. Sus trabajos eran reservados, y para evitar el peligro de que se traspirasen, el mas antiguo de los vocales era el secretario (2).

Las atribuciones de este tribunal, descritas muy cumplidamente en el referido plan de estudios, tenian por objeto la disciplina académica y la vigilancia de la conducta política, moral y religiosa de estudiantes y profesores: venia á ser por lo tanto, una especie de policía escolástica. El haber entendido estos tribunales en los juicios de purificacion, y tomado algunos un carácter político, muy pronunciado, dió lugar á que fueran mirados con prevencion: prevencion que se aumentó por el secreto con que procedian, sin que los mismos que eran objeto de sus medidas supieran á las veces la causa, porque se les molestaba. Asi es que en los planes de estudios posteriores ya no ha aparecido, ni el nombre ni la institucion de los tribunales de censura y correccion, habiéndolos reemplazado los Consejos de disciplina, fundados bajo otras bases, y con otra forma de procedimiento.

CENSURA ECLESIASTICA. Grande es el cambio que ha esperimentado en la opinion, en su uso, y en su eficacia, este medio coercitivo del poder eclesiástico entre los presentes y pasados siglos. Antes, á estas demostraciones de la Iglesia seguia el respeto; hoy la indiferencia, ó el desprecio, si alguna vez no fuese tambien el escarnio: antes se prodigaban hasta el abuso; despues se han economizado hasta parecer caducadas: antes herian, consternaban, y aun prosternaban, como el rayo del cielo, dichas por eso *espada de la Iglesia, rayos del Vaticano*; despues, en vez de sumisos, hacen rebeldes; en vez de respetuosos, blasfemos; en vez de piadosos y creyentes, herejes. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la Iglesia, ó en el mundo? ¿Qué es lo que se ha cambiado en la sociedad política, y en la sociedad cristiana?: en esa Iglesia contra la cual *no prevalecerá el poder del infierno*?

Nada ciertamente en la esencia de las cosas; mucho, desgraciadamente, en las personas. Y decimos de propósito en la *esencia de las cosas*; concretándonos á las eclesiásticas; pues en lo temporal, las cosas han cambiado tambien.

Ciertamente la Iglesia no ha cambia-

(1) Art. 266 del plan de estudios de 1824.
(2) Art. 267.

do en sus dogmas y fundamento divino, porque no puede cambiar: los mismos son su cabeza invisible, la union mística de sus miembros, sus dogmas, sus medios santificantes; pero no los medios de ser en el siglo, de existir en la sociedad civil y marchar con ella. Las turbulencias de los tiempos, los crímines y escesos de todo género, el vicio, y la audaz é impía ignorancia, hicieron que la Iglesia viniera en su propia defensa y en defensa de la sociedad civil, vibrando sus rayos: la necesidad impelió hasta el abuso, y el abuso atrajo el descrédito. El vicio y la ignorancia recurrieron entonces al auxilio de las ciencias humanas, que en la providencial alternativa de las cosas, empezaban á iluminar al mundo: tomaron de ellas lo que deslumbra y ciega; y dejaron lo que ilumina: invocaron la razon contra la autoridad: proclamaron el arbitrio contra el precepto: la Iglesia se creyó mas en necesidad de lanzar sus rayos; que ya se despuntaban contra el escudo de la incredulidad ó la impiedad. El celo mismo de las potestades eclesiásticas subalternas no fué siempre bastante ilustrado; y es preciso reconocer con dolor el abuso; sin que por eso sea menos vituperable la protervia de los ya, no hijos protervos; sino apóstatas de la Iglesia, que hasta hacian intervenir el fuego y el hierro, la guerra en todos sus horrores, en el sostenimiento y para la decision de sus querellas.

En este estado pavoroso, precisamente en las regiones civilizadas del mundo, la Iglesia, afligida, como madre, turbada como sociedad, desoida como autoridad, combatida como institucion, apeló al remedio supremo, se reunió en concilio general, y ciertamente para añadir uno mas al catálogo honroso de sus grandes concilios. Tal fué, y siempre será el de Trento. Poniendo mano á todo lo que requeria remedio, lo hizo, como era ya inevitable, al uso de censuras. Escrito está su meditado y prudente cap. 3, ses. 25 *De reformatione*. Lo que es estraño y lamentable es, que todavía, despues de él, haya sido en algun caso tan poco adecuado, y aun tan irreflexivo, el uso de censuras, como es sabido y veremos en la última seccion, haciendo así mas para el desprecio, que para el respeto de esta arma, y recurso espiritual.

De todo ello resulta que, sea hoy el que quiera el uso y el estado de la opinion sobre censuras, ellas forman, como siempre han formado y formarán, una parte importante, no ya de la historia y de la jurisprudencia eclesiástica; sino esencial de la institucion divina llamada Iglesia. Son la sancion penal de sus leyes, sin la cual estas son ineficaces; asi como no se concibe sociedad posible sin unas y otras. Por todo ello: por cuanto el abuso no pertenece á la institucion, sino al hombre; y pues que en todo caso hay que combatirlo, hemos creido indispensable en nuestra obra dar al presente artículo la estension, y distribucion que presenta, y la índole de la materia requiere, pues de nada menos se trata que del poder coercitivo de la Iglesia, en su base y en su ejercicio. De propósito reservamos la definicion de la censura eclesiástica para el párrafo 3.° de la seccion 1.ª: véase.

PARTE DOCTRINAL.

SUMARIO.

Sec. I. Origen, fundamento, naturaleza y clasificacion de las censuras eclesiásticas.

§. 1.° *Origen de las censuras eclesiásticas.*

§. 2.° *Fundamento de las censuras eclesiásticas.*

§. 3.° *Naturaleza de las censuras eclesiásticas.*

§. 4.° *Clasificacion de las censuras eclesiásticas.*

Sec. II. Autoridad competente para imponer censuras: sugeto de ellas: motivo.

Sec. III. Solemnidad en la imposicion de censuras: efectos de estas.

Sec. IV. Remedios contra las censuras: ineficacia, á veces, de las mismas: absolucion: reserva de absolucion.

§. 1.° *Apelacion y otros medios de*

invalidar, ó dejar sin efecto la censura.

§. 2.° *Absolucion.*

§. 3.° *Reserva de absolucion.*

SEC. V. PARSIMONIA EN EL USO DE CENSURA: INTERVENCION DEL PODER TEMPORAL SOBRE LA MATERIA.

SECCION I.

ORÍGEN, FUNDAMENTO, NATURALEZA Y CLASIFICACION DE LAS CENSURAS.

§. 1.° *Orígen de las censuras eclesiásticas.*

No siendo otra cosa las censuras que el derecho de castigar, reducido á práctica, inquirir el orígen de ellas es inquirir el de esta potestad, tan antiguo ciertamente como la Iglesia, como coetáneo al orígen de cada sociedad y esencial á ella, segun diremos. Pero ni la palabra censura ha tenido siempre la misma significacion en lo eclesiástico, ni la pena espresada por ella ha tenido siempre la misma intension, ni se ha aplicado en la propia forma; y de aquí el diverso orígen de la *censura* en estos tres conceptos, esto es, el orígen etimológico, y filológico, histórico y judicial.

El primero queda ya indicado en el artículo genérico CENSURA. Establecida la sociedad eclesiástica sobre la sociedad civil, tomó de esta con frecuencia cosas y denominaciones, como sucedió con la de censura. Y decimos que tomó de la sociedad civil romana la denominacion de la censura y no la censura misma en sus formas, pues siempre fueron diferentes las de la censura romana. La denominacion, sin embargo, la adoptó la Iglesia de tan antiguo, que ya algunos de los primeros Padres, como Tertuliano y San Cipriano, usaron de la palabra *censura*, para espresar las demostraciones penales de la Iglesia (1).

En cuanto al orígen histórico, si se tratara del orígen *ejemplar*, digámoslo asi, se hallaria en todas las sociedades civiles, y aun técnicamente en la romana: como poder eclesiástico en todas las creencias, aun las gentílicas. Porque en efecto, la historia revela que las sociedades páganas, concedian á sus sacerdotes esta potestad de jurisdiccion (1). Atribuida á los sacerdotes de Israel por autoridad divina (2), fué esta á su vez trasferida por Jesucristo á los apóstoles y sus sucesores que la han ejercido constantemente (3).

El uso de la palabra *censura* lo hallamos introducido en la Iglesia cristiana, segun hemos dicho ya, á imitacion en cierto modo, de la que en el imperio romano se conocia como facultad encomendada á los censores, para enmendar y corregir cuanto los ciudadanos hiciesen contra las buenas costumbres, y no tuviese por las leyes pena señalada. Es de notar, sin embargo, que los antiguos escritores latinos espresaban con el nombre genérico de censura toda nota que recayese sobre la persona, sus hechos ó escritos (4); pero los escritores eclesiásticos de siglos mas recientes, como asimismo los cánones y los pontífices, restringieron la acepcion de la palabra, dando á entender por ella la *excomunion*, la *suspension* y el *entredicho*, cuando antes toda censura se conocia con el nombre genérico de excomunion.

Tan cierto es esto, que Gregorio IX y los siguientes colectores de Decretales, comprendieron bajo el título que llamaron de

(1) Tertuliano, Apol. Cap. 39, y el mismo De judit. Cap. 16: San Cipriano, Epist. 55 á la 59, *ad Corret.*

(1) De los sacerdotes Druidas es muy notable lo que refiere César; *de Bello Gall.*, lib. 6, cap. 1, diciendo, que lo mismo se practicó entre los germanos y los galos. *Si quis*, dice, *privatus aut publicus eorum decreto non steterit, sacrificiis INTERDICUNT. Hoc pœna apud eos est gravissima: quibus ita est interdictum, is numero impiorum ac sceleratorum habentur; IIS OMNES DECEDUNT, ADITUM EORUM, SERMONEMQUE DEFUGIUNT, neque iis petentibus jus redditur, neque ullus honos communicatur.*

(2. Que entre los judios hubo varios modos de censura se prueba por los cap. 25 del Deuteronomio, 9, vers. 22, y 16, vers. 2 de S. Juan.

(3) S. Mateo, cap. 18, vers. 17.—S. Pablo, epist. 1, ad Corinthios, cap. 5,—cap. 16, vers. 22: epist. ad Galatas, cap. 1, vers. 8, y epist. 2, ad Thesalonicenses, cap. 3 vers. 14.

(4) Esto fué causa de no precisarse siempre su significacion, y de los distintos modos de enunciarla, como se vé por los siguientes: *canonica districtio*, cán. 23, dist. 86, can 21, causa 12, quæst. 2, cán. 2, causa 15, quæs. 7,—*districta ultio*, cán. 19, causa 24, quæst. 3,—*canonica pœna*, cap. 20, tit. 3, lib. 5 de las Decretales.—*gladius spiritualis*, can. 2, causa 15, quæst. 6.°, cap. 6, tit. 11, lib. 5 del Sexto,—*pœna spiritualis*, cán. 1, causa 24, quæst. 3,—*nervus ecclesiasticæ disciplinæ*, cap. 5. tit. 4, lib. 1, de las Decretales: Concil. Trident. lug. cit.,—*fœlix mucro*, cán. 1, caus. 16, quæst. 2, cit. cap. 6,—*ferrum putridas carnes secans*, cán 18, caus. 24, quæs. 3,—*separatio morbidarum orium a sanis*, cán. 17, causa 24, quæst. 3,—*pœna medicinalis*, cán 18, caus. 2, quæst. 1. cap. 1, tit. 11, lib. 5 del Sexto, etc.

sententia excommunicationis, no solo lo que específicamente á ella se refiere, sino á la suspension, entredicho y aun deposicion, que entonces se comprendian bajo el nombre apelativo de excomunion. De donde resultaba una confusion y oscuridad en los cánones antiguos, tal, que dificultaba la inteligencia de cuál era la especie de excomunion que en ellos se espresaba, tanto mas, cuanto que muy frecuentemente llamaban excomunion á la sujecion voluntaria de un delincuente á las estaciones y grados de penitencias públicas. A fines del siglo XII y principios del XIII, comenzó á usarse en sentido mas determinado, como veremos; pero todavía en el Pontificado de Inocencio III se dudaba de su verdadero significado, y por eso hubo de definir en el rescripto contenido en el cap. 20, tít. 40, lib. 5 de las Decretales, que por censura se debia entender la sentencia, no solo de entredicho, sino tambien la de *suspension* y *excomunion*; *per eam* (por la censura), *non solum interdicti*; *sed et suspensionis, et excommunicationis sententia valet intelligi*. En rigor, aun así no queda *taxativa*, ni *preceptivamente* definido qué era *censura*, ó á qué penas eclesiásticas se estendia. La locucion *valet intelligi*; que no significa otra cosa, sino *puede entenderse*, es seguramente *potestativa*. Eso, no obstante, la disciplina ha tomado dicha declaracion como regla, y hoy en la enunciativa de *censuras eclesiásticas*, vienen en concepto de todos la *excomunion*, la *suspension*, y el *entredicho*. No tratamos nosotros en el presente artículo sino de la censura en general: véase cada una de aquellas penas en sus artículos respectivos.

Lo que no se comprende á primera vista, es la importancia de disputar sobre la acepcion de la palabra *censura*, inquirir y esponer separadamente de otras penas eclesiásticas, su *orígen*, *naturaleza*, *fundamento estension*, etc. Y ciertamente: siendo las censuras una parte, y aun la parte principal del *poder coercitivo*, del *sistema penal*, digámoslo así, de la Iglesia; teniendo la *escomunion*, la *suspension* y el *entredicho*, el mismo fundamento *potestativo* que la *deposicion*, *degradacion*, *reclusion*, *cesacion á divinis* en su tiempo, y otras muchas disposiciones penales, ora *vindicativas*, ora *precautorias*, *correccionales*, *medicinales*, etc.; completando todas ellas el sistema penal y correccional de la Iglesia, no parece concebirse cómo se trata por separado la cuestion de las censuras, y no en conjunto. Nace este inconveniente legislativo y jurídico de cuatro principios: 1.° de que la legislacion canónica es *casuística* y no *sistemática*: se ha formado *resolviendo*, ocurriendo á casos y necesidades parciales, y no *codificando*; y si bien se coleccionó al fin esta legislacion, fué reuniendo lo esparcido; *compilando*, no *codificando*; por *autoridad privada* al principio, no por el legislador, pues en ese caso está el *Decreto de Graciano*; y si despues tenemos compilaciones hechas por el legislador, como la de Gregorio IX, son parciales, y dejando el antiguo derecho constituido como lo fué, esto es, cada disposicion de las no derogadas, como casuística: 2.° de la mutuacion de formas y prácticas de la sociedad civil, como así bien de las fórmulas y lenguaje de escuela introducido en lo canónico: 3.° de que ni aun en lo civil han sido bien conocidos, y menos practicados, los buenos principios de codificacion penal hasta los últimos tiempos; y 4.° de la novedad introducida en la disciplina y régimen de la Iglesia, con la diferencia de *fuero interno* y *fuero esterno*, reteniendo el primero, como de esclusiva competencia, algo de lo que por diez ó mas siglos le correspondió y practicó, y llevando el segundo parte de eso mismo, elevada su aplicacion á forma contenciosa, segun decimos mas adelante. La conveniencia, pues, y no solo eso, sino la necesidad de distinguir entre las *censuras* eclesiásticas y otras sanciones penales de la Iglesia, es á un tiempo de disciplina, histórica y jurídica, como se comprende: es, además, de competencia de ambos fueros; pues las *censuras* competen al *esterno*; mientras otras penas y sanciones corresponden al *interno*, como tambien á lo gubernativo.

Concluiremos con una observacion en lo relativo al orígen histórico de las *censuras*, y es

que, si las mismas, segun dejamos indicado, como hecho histórico, y como poder coercitivo, tienen ejemplares, digámoslo así, en todas las legislaciones, y con mayor analogía en la romana; la *censura*, juicio y calificacion de los *censores*, eran, sin embargo, muy diferentes de la censura eclesiástica. Cierto es que el censor eliminaba en el censo de la categoría respectiva al que habia perdido las calidades legales para pertenecer á ella: era una cierta *excomunion* categórica; pero la Iglesia no tuvo que tomar la fórmula y efectos rituales de ninguna legislacion profana, pues Jesucristo, su autor y cabeza, se la dictó y prescribió: *si autem Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus.*

La censura, en fin, si por censura se entiende un acto del poder coercitivo de la Iglesia, ora aplicando una pena *vindicativa*, ora *medicinal*, es tan antigua como la Iglesia misma: si por ella se entienden determinadas penas eclesiásticas, aplicadas en vía contenciosa, y por la potestad de jurisdiccion del fuero *esterno*, el orígen de las censuras en este sentido corresponde á la moderna disciplina, y de ello hablamos mas adelante.

§. 2.° *Fundamento de las censuras eclesiásticas.*

Si las censuras son al cabo una pena, su fundamento es el poder coercitivo que, compete á toda sociedad, y no puede rehusarse á la sociedad cristiana, ó sea á la *Iglesia*. Pero en la Iglesia hay que considerar sus *fines*, sus *medios*, y sus *miembros*.

Sus fines son de todo punto *espirituales*: y como el poder *coercitivo*, el poder *penal* en una sociedad se ejerce privando á los asociados de todos ó algunos de los bienes que ella procura y garantiza, segun el caso, de aquí se sigue, que las censuras y penas eclesiásticas, privaran de todos estos bienes como la *excomunion mayor*: otras de algunos, como la *excomunion menor*, la *suspension*.

Los *medios* son los sacramentos, el culto, la observancia de la ley y práctica de las virtudes cristianas. Los medios son un *bien*, porque, sobre su bondad intrínseca, aseguran el *fin*. La Iglesia, pues, tiene potestad tambien sobre los medios. Mas como la práctica de ellos es esterna, en contacto con otros medios y objetos profanos, como son el Estado y sociedad civil, el órden público; la Iglesia ampliará, restringirá, interrumpirá el uso y libertad práctica de esos medios: aplicará en esto su sancion como pena *medicinal*, como medida *precautoria*, como medio político de establecer y conservar la conveniente armonía entre la *Iglesia* y el Estado: y tal es en general la índole del *entredicho* y de otros medios.

Los *miembros* de la Iglesia, en fin, son súbditos de otra sociedad profana: alguna vez por tanto las demostraciones coercitivas, las disposiciones de buen gobierno, aunque encaminadas siempre al fin espiritual, serán esternas y de índole, ó como de índole profana, en cuyo caso se hallan muchas de las reglas y actos de la *disciplina esterna*: algunas veces tambien serán profanas del todo, como ejercidas por consentimiento de la autoridad temporal. En el primero y segundo de los tres casos mencionados, la potestad es *espiritual* totalmente: en el tercero será unas veces espiritual, otras mista, otras del todo *profana*. Tal es la llamada jurisdiccion *atribuida*, y en virtud de la que la Iglesia usó, y usa algunas veces de penas meramente *civiles*. Es, pues, el resultado, que en el primero y segundo caso de los indicados, ora el poder coercitivo de la Iglesia se ejerciese por virtud solo de la *potestad de órden*, ora de la *potestad de órden* y *potestad de jurisdiccion*, como en la moderna disciplina: ya se distinga entre *penas* y *censuras*, como en esta; ya no se distinga, como en la disciplina antigua, siempre la potestad era *divina*: siempre el fundamento de las penas, como el de las censuras, era *potestas clavium*, el *poder de las llaves*, concedido á la Iglesia por Jesucristo, su fundador y cabeza.

Y efectivamente: Jesucristo, de todos los que abrazaron y abrazasen su santa doctrina, formó un cuerpo místico llamado *Iglesia*, esto es, una sociedad organizada segun sus fines:

super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam: Iglesia de que el mismo fundador divino se declara cabeza, y los fieles miembros de este cuerpo místico: *ego sum vitis, vos palmites*. Dió á la misma prelados y superiores, que en su nombre la rigiesen, revistiéndolos de un poder espiritual y sobrehumano, hasta omnímodo: *pasce oves meas*: *attendite vobis, et universo gregi, in quo vos Spiritus Sanctus possuit episcopos regere Ecclesiam Dei* (1): *dabo tibi claves Regni Cœlorum*: *quæcumque alligaveritis super terram, alligata erunt et in Cœlo*, etc. Y revistió asi mismo á esta Iglesia del poder de separar de sí á los protervos contumaces, aun cerrándoles el camino de la vida eterna, sino abjurasen su protervia: *quod si non audierit eos, dic Ecclesiæ*: *si autem Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus*. Tan inmensa autoridad aun seria ineficaz, dice Inocencio III, sin una potestad coercitiva: *Jurisdictio illa nullius videtur esse momenti, si coercitionem aliquam non haberet* (2). El concilio de Trento, en fin, la llama *espada de la Iglesia*, nervio de la disciplina (3). Tal es, pues, el fundamento potestativo de las *censuras* y penas eclesiásticas; es decir, el *poder de castigar*, que como sociedad la compete, y además por institucion divina.

§. 3.° *Naturaleza de las censuras.*

Al tratar de las censuras, este es seguramente el punto mas complicado, aunque no sea por fortuna el mas importante, toda vez que sea indubitado, como lo es, qué clase de demostraciones penales se comprenden en la enunciativa de censuras, quién, á quién, en qué forma y por qué causas puede imponerlas, como asi bien absolver de ellas. Segun la definicion antes consignada, la censura es una *pena*; y sin embargo, se sostiene que guarda un medio entre la *penitencia* y la *pena*, que es pena *medicinal*, por el fin de corregir que en ello se propone la Iglesia, como si en todo no se lo propusiera esta madre piadosa: que además es *medicinal* porque puede *alzarse*; como sino se alzaran y dispensaran tambien otras penas ó demostraciones penales, ó agravatorias, como la reclusion, la irregularidad, y antes la *cesacion á divinis*, etc.: que puede alzarlas ordinariamente la misma autoridad que las impone, como si con otras medidas coercitivas no sucediera lo mismo. Queremos decir con esto, y mas répetir, que la tecnología canónica no ha podido precisar aun filológicamente la verdadera acepcion, y por tanto la naturaleza de la censura. De todos modos, hé aquí la doctrina comun de los canonistas.

Segun ellos, censura es *pœna spiritualis, et medicinalis, privans aliquorum spiritualium bonorum, per ecclesiasticam potestatem ita impositam, ut per eamdem ordinarie absolvi possit*. Adoptada por los autores esta definicion de Suarez (1), ha llegado á ser comun, si bien reconociendo los mismos no ser exacta (2), como no lo es ciertamente.

Pretenden los mismos autores y asientan que la censura ocupa un lugar medio entre la penitencia, general ó particular, y la pena. Aquella y estas reconocen su fundamento en la potestad de jurisdiccion de la Iglesia y pertenecen al fuero esterno. Pero mientras la *penitencia* supone una especie de voluntaria sumision que tiende á la espiacion y la Iglesia al imponerla usa de una jurisdiccion suave y casi voluntaria; la *censura* supone contumacia y la iglesia adopta por sí una parte de una jurisdiccion coerectiva, usando de severidad y de terror para obligar al delincuente á que con ánimo sumiso pida perdon y se enmiende: la pena supone perdida toda esperanza de enmienda, y la Iglesia, al imponerla, ejerce una jurisdiccion mas severa, siendo su fin principal, no la correccion y el castigo; sino mirar por el decoro de las cosas sagradas y divinas y cuidar de que la comunidad de los fieles se retraiga con el temor de las penas de perpetrar semejantes crímenes, espeliendo de ella al delincuente para

(1) Actor. Apost. 20, vers. 28.
(2) Cap. 3, tit. 4, lib. 1 de las Decretales.
(3) Ses. 25, de refor., cap. 3,

(1) *De censuris, disp.* 1, *sect.* 1.
(2) Vanespen, *Jus ecclesiasticum*, part. 3, tit. 11, cap 3, *De censuris in genere.*

Lorenzo Arrazola

que no se corrompa. Las principales diferencias entre la censura y la pena consisten por lo tanto en que aquella priva del uso de los bienes espirituales comunes, y esta, no solo del uso, sino de la potestad y de la facultad: en que la primera es temporal en el sentido de deber alzarse tan luego como el reo se enmiende; mientras la segunda es perpétua por su naturaleza: y por último en que la una tiende esclusivamente á la enmienda y correccion; y la otra directamente á la vindicta y castigo del crímen.

Bajo este aspecto puede muy bien llamarse la censura *pena saludable* y *medicinal* (1).

Sobre la diferencia entre la *censura* y la *reserva de casos* de absolucion, véase el artículo CASOS RESERVADOS.

§. 4.° *Clasificacion de las censuras.*

Las censuras pueden clasificarse en tantas, cuantos son los distintos puntos de vista de su exámen. Es conocida la division adoptada por la generalidad de los tratadistas, como mas capital, en censuras *á jure*, y *ab homine*, tomada de la diferencia de su orígen. Parecíanos mas adecuada y precisa la que resulta del exámen de la autoridad que pueda imponerla, de los que pueden ser objeto de censura, de las causas que pueden justificarla, del mayor ó menor tiempo de su duracion, de los bienes ó derechos de que priva, y de la autoridad á quien toca su absolucion ó relajacion.

Con relacion á la autoridad de que procede la censura, unas se llaman *á jure*, otras emanadas de precepto singular del superior, y otras impuestas por sentencia judicial declaratoria. Las primeras son la sancion penal de una ley general preceptiva ó prohibitiva, entendiendo por ley cualquier constitucion dada en concilio general ó particular, ó fuera de concilio por el Papa ó por el obispo diocesano. Las segundas son las que el prelado señala á la persona ó corporacion que le está subordinada, si no obedece á su mandato ó prohibicion. Las terceras, en fin, son aquellas que el juez eclesiástico impone por ciertos hechos consumados, y principalmente por contumacia. Diferéncianse estas últimas de las censuras *á jure*, y de las dadas por precepto del superior, en que aquellas pueden referirse á lo pasado en general, y á lo presente, si se trata de cohibir la contumacia; mas las últimas unirán á los casos futuros, pues tal es la naturaleza de la ley, á saber, el darse solo para lo venidero, aunque en punto á penas pueda atender á lo pasado, si se espresa; si bien esta doctrina no es aplicable á las censuras, cuyo principal fundamento es la contumacia verdadera, y ficta ó presunta. Diferénciase tambien la censura *á jure* de la impuesta por precepto del superior, como la ley se diferencia del precepto. Asi la segunda solo obliga á la persona ó corporacion que le está sujeta, y espira con la muerte del mismo, mientras la primera comprende á todos los que al tiempo de promulgarse la ley ó despues sean súbditos; sin que espire por muerte del legislador.

Las censuras *á jure*, lo mismo que las emanadas de precepto, se subdividen en dos clases, que en la jurisprudencia canónica se conocen con los nombres de *latæ*, y *ferendæ sententiæ*. Incúrrese en las primeras en el instante mismo en que se ha cometido el hecho para cuyo castigo las estableció la ley ó el superior; de modo que la sentencia judicial solo es precisa para declarar el hecho, no para imponer la censura (1). Las de esta clase han sido combatidas en el terreno de la doctrina por algunos canonistas, que las consideraron como de disciplina, cuya antigüedad no es anterior á la coleccion Gregoriana, y como poco acomodada á la naturaleza de las censuras, que siendo un remedio supremo, deben solo usarse contra los contumaces y prévias las moniciones (2). Ocupán-

(1) De la diferencia entre la censura y la irregularidad que procede de delito y se considera como pena, se tratará en su artículo propio. V. IRREGULARIDAD.

(1) Cap. 26 y 58, tit. 39. lib. 5 de las Decretales.

(2) *Gybel*, lib. 3, cap. 4., §. 482, nota, 6, asegura que las escomuniones *latæ sententiæ* se introdujeron con el libro Sesto de Decretales, donde se hallan 52 casos de esta clase de censuras: que las clementinas hay 50, reconociéndose como fuentes de las demás infinitas en número las estravagantes, bula de la Cena, constituciones sinodales, visitaciones y reformaciones de regulares y tantas bulas y rescriptos pontificios. Véase tambien Gelleiner, instit. juris. eccl.

dose de esta cuestion el célebre comentarista Berardi (1) dice: que Bonifacio 8.° en el capítulo 19 tít. 2., lib. 5., vindicó ya en esta parte la doctrina de los cánones con el ejemplo de la jurisprudencia civil, el cual prueba lo conveniente que es al bien público usar á veces de mayor asperidad para el castigo de los reos de crímenes mas graves, señalando penas á los que hayan de quedar sujetos, sin necesidad de que el juez las pronuncie: que las fórmulas, que dan á entender las censuras *latæ sententiæ*, no se hallan indudablemente en coleccion anterior á la gregoriana. Pero aparte de que estas debieron inventarse para esplicar con mas claridad la idea, vistas las comunes disputas de los prácticos para diferenciar las censuras en que se incurria *ipso facto*, de las en que era precisa declaracion solemne, no es difícil encontrar ejemplos de aquellas entre los antiguos, como se vé en los cánones del concilio de Gangres, copiados por Graciano en su Decreto, desde el cánon 1 al 15, dist. 30, y en el 24, caus. 7, quest. 1 que es del Concilio Antioqueno, celebrado en el mismo siglo, cuya forma de censuras, parece haberla deribado los Santos Padres del Evangelio de S. Mateo, cap. 18, en donde el que, amonestado no oye á la Iglesia, en el momento se condena por su propio hecho en tales términos que debe tenerse por separado como *etnico*, del pueblo fiel. Dicho autor añade, que si en épocas mas recientes aparecen con mas frecuencia que antes las censuras de que tratamos, provino solo de que la inaccion de muchos jueces eclesiásticos se manifestaba indulgente con reos de crímenes gravísimos, á quienes por prescripcion de los cánones debian castigar con censuras, tanto mas, cuanto conocian que estaba en su arbitrio imponerlas ó no (cap. 21, tít. 1, libro 5 de las Decretales), y por lo tanto pareció oportuno que la sentencia del derecho se anticipase al oficio del juez. Añade que no hay duda en que debe considerarse como contumaz al que, conociendo, no solo que le está prohibido por la ley el crímen, sino que en el momento de cometerlo queda sujeto á censura, no se retrae de cometerlo; y que conteniendo en el caso propuesto dos partes la ley, una en que se prohibe el hecho, y otra en que se castiga con censura su ejecucion, el que viola la primera comete desobediencia, y el que viola la segunda, se muestra contumaz; concluyendo que á lo sumo lo que podrá colegirse será, que las censuras *ipso facto* no deben imponerse sino por causas muy graves y urgentes, para que se guarde asi cierto modo de refrenar á los reos, y la gravedad de la represion corresponda á la del delito. Por último las censuras *ferendæ sententiæ* son aquellas que el juez está obligado por la ley ó por el derecho á imponer, tan luego como se cometió el hecho; pero siendo preciso que preceda un juicio declaratorio con la citacion ó monicion correspondiente.

Para distinguir las dos clases de censura de que acabamos de hablar, ningunas reglas se hallan en el derecho canónico. Asi es que los tratadistas han procurado suplir este vacío, acudiendo á una especie de apreciacion gramatical de las diversas frases que pueden hallarse en los cánones y demás disposiciones eclesiásticas, en que se imponga alguna especie de censura. Enumeraremos las mas principales con la debida separacion, no sin reconocer que muchas de ellas pueden dar lugar á controversia, que en un caso dado deberia decidirse conforme á los principios universales de legislacion criminal, que aconsejan se siga en los casos dudosos la interpretacion mas benigna que siempre favorece al reo, y por consiguiente declarar que la censura era *ferendæ sententiæ*.

Las espresiones ó frases *eo ipso*, *ipso jure*, *ipso facto*, *latæ sententiæ*: los adverbios *statim*, *confestim*, *continuo*, *extunc*, *illico*, *incontinenter*, *protinus*: las cláusulas *sciat*, *noverit se esse excommunicatum*, *debet pro excommunicato haberi*, *sit excommunicatus tamdiu*, que todas se refieren á tiempo pasado; y las que denotan tiempo presente indicativo, como, por ejemplo, *hac lege excommunicatur*, *suspenditur*, etc., es indudable que suponen impuesta la censura de la primera clase, ó sea LATÆ SENTENTIÆ. Pero si las cláusulas están

(1) Tom. 4, part. 2.ª Disert. 3, cap. 5.

concebidas en presente de sujuntivo, *debet damnari, plecti, excommunicari, suspendi: damnetur, plectatur, excommunicetur, suspendatur*, etc., ó en futuro como, v. g. *excommunicatione damnabitur, suspensioni subjacebit, jus communionis non habebit, anathematizandus erit, tamdiu reddi debet communionis expers*, suponen la censura FERENDÆ SENTENTIÆ. La duda será en el caso de que la fórmula, espresada en tiempo sujuntivo, no se refiera, como la anterior, al hecho del superior eclesiástico; sino al reo, por ejemplo, *reus excommunicationi subjacebit, incurrat excomunicationem, locum suum amittat, reum excommunicationi subjacere, excommunicationem incurrere, locum suum amittere*. Muchos creen que en tales casos debia reputarse *latæ sententiæ* la censura, puesto que la ley, que asi se espresa, nada deja que hacer al juez: sin embargo esta opinion nos parece insegura, puesto que si bien se mira, tales fórmulas lo mismo indican la sujecion á censura por hecho del juez, que por virtud de la ley: y aunque todavía subsistiese la dificultad, deberia interpretarse del modo mas benigno, pues el principio de legislacion que lo aconseja, es con gran fundamento aplicable á las censuras por su especial naturaleza, como los cánones mismos lo han reconocido (1).

Con relacion á aquellos á quienes se impone la censura, puede esta dividirse en local y personal. Solo el entredicho merece con propiedad el nombre de censura local; pero asi como tambien puede ser personal, siempre lo son la escomunion y la suspension, importando poco que se impongan á individuos determinados ó á los que constituyan un colegio ó corporacion.

Con relacion al hecho que dá causa á la censura, esta puede inferirse por un grave crímen pasado, ó presente, á que vá aneja contumacia; ó con el fin de evitar un crímen futuro, que es el que se propone la censura dada por ley general ó precepto singular. En las de la tercera clase, que acabamos de enumerar, conviene distinguir la comunicacion de la imposicion, pues aunque, segun antes digimos, la censura que emana de precepto del superior, espira con la muerte de este, la en que el derecho declara incurso *ipso facto*, ó por sentencia tan luego como se cometa la infraccion, subsiste aun despues de la muerte del superior, y el reo necesita absolucion. Del propio modo, y por igual razon, cuando la censura solo está impuesta por derecho ó por precepto, y despues alguno incurre *ipso facto* en ella por un hecho posterior, cualquier sacerdote con jurisdiccion en el foro interno puede absolver de ella, si no es reservada, pues aunque un inferior no pueda desatar la ley ó precepto del superior, puede absolver de la censura en que por la violacion se incurre, como absolveria de un crímen no reservado, que se comete violando una ley ó precepto.

Con relacion á su duracion, unas censuras se circunscriben á tiempo determinado, y otras son indefinidas, por ejemplo, hasta que se enmiende ó satisfaga, etc. En realidad, las primeras no merecen propiamente el nombre de censuras, puesto que tienen mas afinidad con las penitencias ó con las penas, segun que se pidan con ánimo sumiso ó se impongan contra la voluntad del delincuente; y en el primer caso son espiatorias; mientras en el segundo su principal objeto es el intimidar á los demás, por lo cual toman el nombre de censuras *penales* (1). Las segundas son propiamente censuras y se distinguen del mismo modo con la calificacion de *medicinales* y *saludables* (2), porque tienden, como ya digimos, á reprimir ó moderar por este medio al criminal, obligándole á la enmienda. Es muy de notar en este punto la sabiduria y caridad de la Iglesia, que solo ha impuesto por tiempo determinado la censura de suspension y entredicho (3), nunca la de

(1) Regla 49, tit. 12, lib. 5 del Sexto.—Berardi en el lugar citado, es de parecer que en cualesquiera de los casos supuestos debiera adoptarse un termino medio, cual seria investigar cada una de las circunstancias de las edades, lugares, costumbres de hablar, contestos integros de las fórmulas, causas de imponerse la censura y de la interpretacion admitida, confirmada por constituciones subsiguientes; y presenta algunos ejemplos para demostrarlo.

(1) Cán. 24, dist. 86: cán. 6, dist. 89: cán. 101, causa 1, quæst. 1.ª, cap. 7, tit. 6, lib. 1 de las Decretales.

(2) Cán. 21 y 23, caus. 24, quæst. 3: Cap. 8, tit. 11, lib. 1 de las Decretales.

(3) Asi se vé.

escomunion mayor, á fin de evitar que se convirtiese en peligro de las almas, *in destructionem*, mas bien que en su utilidad, para la cual se instituyó, *in ædificationem*. Consecuencia de su distinta naturaleza es, que las censuras impuestas por tiempo determinado, desaparecen trascurrido este, sin necesidad de absolucion (1); lo cual no sucede cuando llevan en sí la cláusula *hasta que* (2), ó se designa tiempo, pero no de modo que signifique que, trascurrido, desaparecen; sino que mas bien se quiere dar á entender, que antes de trascurrir el término, no debe admitirse al reo á absolucion, pues entonces, aun despues de concluido, es aquella necesaria (3).

Con relacion á los que pueden conceder la absolucion, se dividen las censuras, en reservadas, siempre que aquella haya de pedirse necesariamente á otro prelado superior, y no reservadas, si su absolucion se deja á los ministros ordinarios. Es un principio fundado en la esencia misma de la jurisdiccion y sancionado por la Iglesia (4), que tienen facultad de reservar los que gozan de la de imponer censuras; y siendo asi que estas emanan del derecho, *á jure*, ó del hombre, *ab homine*, claro es que pueden ser por uno ú otro reservadas, sin consideracion á que las primeras sean *latæ* ó *ferendæ sententiæ*. De donde se infiere que la impuesta por sentencia es por su naturaleza reservada al que pronunció aquella, ó á su superior, y que semejante reserva es tan antigua, como la disciplina de su imposicion en virtud de sentencia: mas si es por derecho ó por precepto, aunque la facultad de reservar sea antiquísima é inherente á la potestad misma de imponerla, las reservas de hecho no son tan antiguas, pues que solo hácia los tiempos de Gregorio Magno se encuentran los primeros ejemplos de ellas (5).

Con relacion á los bienes y derechos de que privan las censuras, se llaman unas *tales* y otras *parciales*. Como todos los derechos que la Iglesia otorga se estienden siempre á los que están en la comunion competente al grado y condicion de cada uno en particular, de aquí la múltiple division de la comunion en laical, clerical, y peregrina, y la subdivision que antiguamente se hacia de la primera en tantas especies, cuantos eran los grados ó estaciones de penitentes, y de la segunda en otras tantas como órdenes y grados de clérigos, además de los que eran peculiares de los obispos, como tales, ó en participacion con el metropolitano ó el concilio provincial. De modo que toda censura priva de los bienes que se poseen en comun por la universalidad de los fieles, ó por determinado órden de ellos; y en tal sentido, y no sin fundamento, en la antigua disciplina se llamó con el nombre genérico *escomunion* cualquier censura, no solo la que separa de todo género de comunion; sino aun la que escluye de ciertas especies de ella, pues en realidad, ya sea total, ya parcial la censura, siempre envuelve en sí la idea de denegar la comunion, que es lo que significa aquella voz, cuya acepcion es mas estricta y concreta en la nueva y actual disciplina (1).

SECCION II.

AUTORIDADES QUE PUEDEN IMPONER CENSURAS: SUGETO DE ELLAS: MOTIVO.

Desde luego es indudable que, no tratándose de otro poder, que *el de las llaves*, esto es, de un poder *espiritual* y eclesiástico, solo la potestad eclesiástica puede imponer censuras, con esclusion de las potestades seculares, de lo cual hablaremos en la seccion cuarta; aunque no todas las autoridades eclesiásticas y personas revestidas de órden sácro. En los once primeros siglos de la Iglesia el *sacerdocio* ó la potestad sacerdotal alcanzaba á todo. La moderna disciplina ha distinguido entre la *potestad de órden* y la

(1) Cap. 1, vers. *si quis autem*, tit. 11, lib. 5 del Sexto.
(2) Cap. 5, tit. 39, lib 5.
(3) Cap. 1, tit. 8, lib. 5 de las Clementinas.
(4) Cap. 29, tit. 39, lib. 5 de las Decretales.—Concilio Tridentino, ses. 14, cap. 7 de ref.
(5) Cán. 34, dist. 63.—Cán. 52, caus. 16, quæst. 1.

(1) Son muy dignas de leerse para la inteligencia de las varias clases de escomunion que con diversos nombres se hallan en los cánones antiguos las reglas que presenta con las deducciones á ellas consiguientes Berardi en los lugares citados.

de *jurisdiccion*; y solo pueden imponer censuras los que ejerzan esta; y tampoco todos, sino los que la ejercen en el *fuero esterno*, asi como por la misma la imposicion de penitencia sacramental, y la absolucion de pecados, solo compete á los que ejercen jurisdiccion en el fuero *interno*: en este solo el *sacerdote*, en aquella un clérigo, ó tonsurado meramente, como sucede á los vicarios generales y forenses muchas veces.

Y en efecto: recordado lo que hemos dicho en la seccion primera sobre el orígen de las censuras, y la diferencia en este punto entre la antigua y moderna disciplina: siendo la facultad de imponer censuras inherentes á la potestad de jurisdiccion, ó mejor dicho, á la potestad coercitiva de la Iglesia, claro es que solo debe corresponder á los que ejercen aquella; de modo que no basta tener potestad de remitir los pecados en el tribunal de la Penitencia; y por lo tanto se requiere y aun es suficiente la potestad de jurisdiccion, aunque esté separada de la de órden, cual es la que ejercen los jueces eclesiásticos, aunque no sean sacerdotes, con tal que estén iniciados al menos con la primera tonsura y desempeñen legítimamente su oficio (1).

Conforme, pues, á los principios sentados, compete esta facultad á los ordinarios en sus diócesis, y á los obispos electos confirmados, aunque no consagrados (2): al delegado ó legado pontificio, aunque no sea obispo, pues ejerce una jurisdiccion emanada del Pontífice: y al delegado para cierta causa, aunque la facultad de imponer censura no se esprese en la delegacion, pues de lo contrario su jurisdiccion podria venir á ser ineficaz (3): al prior sobre los canónigos de su iglesia (4): al cardenal en la iglesia de su título (1): al plebano que la adquirió por título singular, por ejemplo, de prescripcion ó costumbre (2): al cabildo catedral que la hubiese adquirido tambien legítimamente (3): á los vicarios generales nombrados por prelados, que conservando esta facultad, se la hayan delegado, puesto que forman con él un mismo tribunal, y constituyen una misma persona: á los arciprestes, arcedianos y demás, si tienen comision del obispo, ó hay costumbre de ello (4): á los vicarios capitulares que ejercen la jurisdiccion del cabildo, al cual se devuelve la del obispo, que mientras vivia, no podia, atendiendo al derecho comun, tratar negocios graves ni por consiguiente imponer censuras sin contar con el cabildo (5): á los arzobispos respecto de los súbditos de sus sufragáneos, pero solo en causa de apelacion ó visita (6): á los abades, aunque no sean presbíteros, que tengan autoridad sobre los monjes de sus monasterios, y á los generales, provinciales y priores de órdenes de regulares, pues se les considera como mayores que los arciprestes y arcedianos en el estado eclesiástico; cuya facultad les conceden, no solo las constituciones respectivas de su órden; sino tambien el derecho comun (7); y por último, al clérigo de prima tonsura, que ejerza jurisdiccion, porque esta por sí y por su naturaleza, no supone carácter, perteneciendo al foro contencioso (8). De donde se deduce que el superior en jurisdiccion, aunque menor en órden, puede, imponer censura al que, siendo mayor en órden, tenga sin embargo jurisdiccion superior, como sucede al vicario general del arzobispo, que ejerce jurisdiccion sobre los obispos sufragá-

(1) Siempre se ha reconocido como inherente al *poder de las llaves* el derecho de imponer censuras; pero como en lo antiguo rara vez se distinguia entre el foro interno ó penitencial y el esterno ó contencioso; de aquí que aquel derecho se tuviese como tan anejo al *poder de las llaves* que por lo comun las censuras se imponian bajo el punto de vista del fuero interno ó penitencial. Pero introducida despues la diferencia de ambos fueros, se distinguió tambien entre la potestad de órden y la de jurisdiccion, y admitida la doctrina de que las censuras eran como ciertos medios coactivos de la potestad eclesiastica, la potestad de imponerlas se restringió á solos los que estuviesen revestidos de jurisdiccion ordinaria en el foro esterno.

(2) Cap. 15, ti. 6, lib. 1 de las Decretales.

(3) Cap. 5-7-11 y 23, tit. 29: cap. 7, tit. 30, y cap. 10, titulo 33, lib. 1 de id.

(4) Cap. 10.

(1) Cap. 11 id.

(2) Cap. 2 y 3, tit. 31, lib. 1 de id.

(3) Cap. 13 de id. id.

(4) Como que son jueces inferiores que no tienen jurisdiccion ordinaria. V. Engel., *Collegium universi juris canonici*, libro 5, tit 39, §. 12.

(5) Cap. 1, tit. 31, lib 5 de id.

(6) Cap. 7, tit. 11, lib. 3 del Sesto—cap. 1, tit. 20, libro 3 de id.

(7) Cap. 10, tit. 33, lib. 1 de las Decretales—cap. 8, titulo 33, lib. 3.—cap. 33, tit. 3, lib. 5 de id.—Memorias del clero, tomo 7 citadas por el abate Andrés en su Diccionario de derecho canónico.—Engel, núm. 13, §. 1, tit. 39, lib. 5 de su obra *Collegium universi juris canonici*.

(8) Tal es el comun sentir de los canonistas, tanto mas cuanto es sabido que á tales clérigos puede competer jurisdiccion. V. Suarez, cit. por Van-Espen, part. 3, cap. 2, §. 20.

neos (1), aunque seria mas honesto y decoroso, que, llegado el caso, pronunciasen los obispos por sí la censura, segun los mismos cánones lo aconsejan (2), en cuya consideracion, los pontífices concedieron algunas veces á los obispos sufragáneos el privilegio de no poder ser censurados por los vicarios ú oficiales de los metropolitanos (3).

Hecha indicacion de los que pueden imponer censuras conforme a las prescripciones del derecho, enumeraremos los que, segun estas, carecen de semejante facultad.—Tales son los legos, por mas elevada que sea su dignidad (4), en razon á que, constituyendo la censura una privacion de los bienes ó derechos espirituales y eclesiásticos, solo deben imponerla aquellos á quienes por derecho divino se halla encomendada la administracion de dichos bienes, como son los clérigos llamados á tomar parte en la de las cosas sagradas: los párrocos contra sus feligreses, ni los sacerdotes en el foro penitencial ó interno, puesto que en ambos casos no les compete jurisdiccion del foro esterno (5) por mas que en algun tiempo lo hayan ejercido, como algunos autores pretenden (6); y la denegacion de sacramentos que puede imponerse por el tribunal de la penitencia no es censura: las abadesas respecto de sus monjas ú otros súbditos, porque el derecho declara á las mugeres incapaces del poder de las llaves (7) y todo lo mas que pueden hacer las que tienen jurisdiccion y autoridad sobre sus clérigos, cuando se nieguen á obedecer sus órdenes, es obtener del ordinario un mandamiento que, bajo censura, les obligue á ejecutar las disposiciones de su superiora, y podrá compelerlos á ello en virtud del mismo.

Resta solo advertir para completar la doctrina que vamos esponiendo, que si la facultad de imponer censuras puede, como hemos visto, ejercese por derecho propio, por delegacion de otro, ó por privilegio, los que se hallan en el primero de estos casos no pueden usar de ella, si á su vez se encuentran ligados con censura, que prive del ejercicio de la jurisdiccion, como son la escomunion mayor y la suspension del oficio, puesto que inherente dicha facultad á la potestad de jurisdiccion, se perderá aquella solo cuando esta se halle en suspenso; y los que la ejerzan en virtud de delegacion ó privilegio, solo podrán imponer las censuras, que aquella ó esta espresen, en términos que, siendo ambos ó el uno de ellos general, se considerarán facultados para todas, y si solo especial, para la que se determine ó esprese; á menos que esta sea la de escomunion, pues como la mas grave de todas las especies de censura, militan respesto de ella las reglas de derecho de que lo mas contiene siempre lo menos, que al que se le permite lo mas se le permite lo menos, y que en el todo se contiene la parte. Por último, cuando el que tiene por derecho propio la potestad de imponer censura, delegase en otro, este no podrá esceder la facultad concedida, y su delegacion espirará con la muerte natural ó civil del delegante; ni tampoco el delegado podrá comunicarla ó subdelegarla en otro (1).

En España solo pueden usar de censuras los que tienen jurisdiccion eclesiástica. Nuestras leyes han consagrado la libertad é independencia de los prelados y jueces eclesiásticos en el ejercicio de nativa potestad y jurisdiccion, y por el uso y publicacion de las cartas, monitorios ó mandamientos, en lo to-

(1) Cánon 1, dist. 31—cán. 3, causa 6, quæst 4: cap. 52, título 39, lib. 5 de las Decretales.
(2) Cánon 4, 9, dist. 21.
(3) Cap. 1 infine, §. 1, cap. 1, tit. 16, lib. 1 del Sexto.
(4) Hé aqui cómo se espresa Santo Tomás sobre este punto: *Sacerdotes parochiales habent quidem jurisdictionem in subditos suos, quantum ad forum conscientiæ; sed non quantum ad forum judiciale, quia non possunt conveniri coram eos in causis contentiosis, et ideo excommunicare non possut; sed absolvere possunt in foro pœnitentiale: et quamvis forum pœnitentiale sit dignius, tamen in foro judiciali major solemnitas requiritur, quia in eo oportet, quòd non solum Deo; sed etiam homini satisfiat.* Suplem. part. 3, q. 22. Véase tambien lo que dice en la 4.ª sent., dist, 18, quæst. 2, art. 2, quæstiunc 1.
(5) *Nulli hodie competere auctoritatem infligendi censuras, nisi jurisdictionem aliquam contentiosam sive fori externi ecclesiasticam habeat...* Van Espen, lug. cit.: y véanse las notas siguientes.
(6) Asi lo enseñan comunmente los doctores fundándose en el testo final del cap. 10, tit. 22, lib. 5 de las Decretales donde el Pontífice Inocencio III dice: *Licet beatissima Virgo Maria dignior et excellentior fuerit Apostolis universis, non tamen illi; sed istis dominus* CLAVES REGNI CŒLORUM *commisit.*
(7) Aunque el cap. 12, tit. 33, lib. 1 de las Decretales parece hallarse en contradiccion con lo que se cita en la nota precedente, los canonistas lo esplican de comun acuerdo en el sentido que lo hacemos en el testo. Véanse entre otros Van-Espen, lug. cit.—Berardi, lug. cit. cap. 2.—Engel, lugar citado, num. 15.

(1) La ampliacion de esta doctrina, que en su esencia es de derecho comun, se encuentra perfectamente hecha en Berardi, lug. cit., cap. 2.

cante á aquella, prohibiendo todo estatuto ú oposicion de hecho por los jueces reales, corporaciones, personas poderosas, caballeros ú otras personas de cualquier estado, ó condicion que fuesen, cuando los prelados y jueces eclesiásticos obrasen dentro de su jurisdiccion y contra personas sujetas á su competencia, y castigando severamente toda infraccion de esta clase. Asi se reconoce, entre otras, por las leyes 1.ª y 2.ª, título 1, lib. 2 de la Nov. Recop.

No basta tener jurisdiccion para conocer de un asunto civil ó criminal y sentenciar en él: es necesario tambien que, el que haya de ejercerla, sea competente por razon de cualquiera de las causas, que limitan ó atribuyen aquella á determinado juez. Hé aquí la razon jurídica de la competencia, que domina del propio modo en la censura, como que su imposicion supone la potestad de jurisdiccion. No es, pues, suficiente hallarse en el gremio de la Iglesia, ó lo que es igual, estar sujeto á su jurisdiccion en general; sino que además debe ejercerse aquella en el territorio donde haya de imponerse la censura. Así se ha reconocido por la Iglesia al declarar que ningun superior eclesiástico puede imponer censura á súbdito ajeno (1), á menos que hubiese delinquido en su diócesis ó hubiese celebrado allí algun contrato ó se tratase de prédio ó cosa sita en ella, que hubiese dado ocasion á censura (2), ó que el diocesano propio de aquel lo consienta (3); y que sea de ningun valor ni efecto la censura dada fuera del territorio contra súbditos propios (4), por mas que la censura personal dada dentro del territorio afecte á los súbditos, una vez notados, sea cualquiera el punto adonde se trasladen (5), escepto si se trata de un súbdito ausente, que falte á lo que en su diócesis está obligado á cumplir, como, por ejemplo, á las leyes de residencia, pues entonces se atiende, no al lugar en que se halla la persona, sino al lugar del delito ó del que abandonó contra las leyes ó deberes que su cargo ú oficio le imponian (1). Por lo tocante á los regulares, el Concilio de Trento en su sesion 25, cap. 12 de regulares, ha establecido espresamente la obligacion que les incumbe de publicar y guardar en sus iglesias, no solo las censuras y entredichos que emanen de la silla apostólica, sino aun los promulgados por los ordinarios cuando el obispo lo mande (2).

Sugeto. Siendo la potestad de jurisdiccion el fundamento de derecho para la imposicion de las censuras, y consistiendo estas en una privacion de bienes ó derechos espirituales por delito, claro es que no es capaz de ella el que no esté sujeto á la jurisdiccion de la Iglesia (3), ni á los que son incapaces de delinquir porque falta en ellos el primer fundamento que es la voluntad deliberada. A la primera de estas clases pertenecen los paganos, y tambien los catecúmenos, porque aun no han entrado en la Iglesia por el bautismo, y no cabe despojar de los bienes espirituales y de los derechos eclesiásticos á los que nunca los gozaron ni pueden disfrutarlos: á cuyo propósito es bien sabida la cita, tomada del dicho de S. Pablo en su primera carta á los de Corinto, cap. 1, vers. 12, *¿Quid mihi de iis, qui foris sunt judicare?* La excomunion, pues, que se lee impuesta en algunos testos canónicos á los judíos, no es propiamente censura, sino mas bien una sustitucion de ella, y en rigor una pena civil y temporal, que encaminada á la enmienda, no tiene tiempo definido para su duracion (4). No sucede asi respecto de los hereges, apóstatas y cismáticos, á los cuales la Iglesia puede castigar con censura, para que de esta suerte vuelvan á la fé y obediencia de que torpemente se desviaron. En la segunda

(1) Cán. 1, y 2, caus. 6, quæst. 3.
(2) Cán. 4 y 5, id, id. y cap. 1, tit. 7, lib. 5 del Sexto.
(3) Cán. 7, caus. 9. quæst. 3.
(4) La razon es bien obvia, puesto que carece de jurisdiccion contenciosa, y asi se declara en el cap. 2, tit. 2, lib. 1 del Sexto.—Pero podrá usar de la graciosa absolviéndole de la censura y dándole dimisorias.—Cabassucio, *Theorica et praxis juris canonici*, lib. 5, cap. 10, § 9.—Y si un obispo fuese indebidamente espulsado de su diócesis, puede permanecer en la vecina, y pedida la venia al obispo del lugar, ejercer entre sus propios súbditos la jurisdiccion contenciosa, y por consiguiente imponer censura. Asi se declara en el cap. único., tit. 2, lib. 2 de las Clementinas.
(5) Cán. 21, caus 7, quæst 1.—cap. 1, tit. 17, lib. 5 de las Decretales.—cap. 16, tit. 11, lib. 5 del Sexto.

(1) Cap. 11, tit. 4, lib. 3 de las Decretales.
(2) Véanse las declaraciones y remisiones de *Gallemart*.
(3) Cán. 10, dits. 96.
(4) Véase en Berardi, lug. cit. cap. 3, la esplicacion de los caps. 13 y 11, tit. 6 y caps. 12 y 18, tit. 19, lib. 5 de las Decretales que á este punto se refieren.

clase se comprenden todos los que carecen del uso de razon necesario para que puedan serles imputables los hechos criminales, y recaer sobre ellos la pena, como son los mentecatos, furiosos, infantes, etc.

Generalmente los autores, al tratar de este punto, presentan la cuestion de si los muertos pueden, y cómo, ser capaces de censura, siempre que esté probado, que mientras vivian, y se hallaban dentro de la Iglesia, cometieron crímenes, que merecieran castigarse con censura. En realidad, no cabe censura directa y propiamente dicha contra los muertos, porque ni parcial, ni totalmente puede privárseles de la comunicacion con los vivos, entre quienes no se hallan, y sobre que no están ya sujetos á la jurisdiccion de la Iglesia, su causa se reserva al juicio divino, como lo ha declarado la Iglesia (1). Pero, á pesar de todo, no le está prohivido anatematizar y execrar al muerto, y por consecuencia escomulgarle indirectamente al prohibir á los fieles que le dén sepultura eclesiástica, ú ofrecer por él preces, sacrificios ó sufragios, de lo cual se encuentran frecuentes ejemplos en la historia antigua eclesiástica (2). Esta disciplina se concilia perfectamente con la declaracion á que arriba nos referimos, y con la que á primera vista parece contradictoria, puesto que no se les impone á los muertos la escomunion menor ni la suspension de que absolutamente son incapaces, y solo sí la escomunion mayor y el entredicho porque de ellos son capaces. No obstante, es preciso reconocer, que en tal caso, no son con propiedad censuras, porque no pueden ya imponerse para la correccion y enmienda, y que, mas que otro nombre, merecen el de una declaracion execratoria (3). Otra cosa es que, impuestas en vida del delincuente, duren aun despues de su muerte, ínterin no se borran por medio de la absolucion, pues entonces se llamarán censuras con relacion al tiempo en que se impusieron y á su fin y objeto, lo que no sucede en la escomunion menor y la suspension que acaban con la muerte del notado con ellas.

Considerado individualmente el católico, puede ser capaz de todas las censuras; mas no cuando se le considera colectivamente ó formando parte de alguna comunidad ó corporacion. Asi es que á esta no puede imponerse la escomunion, sino solo la suspension y el entredicho. La razon de esta regla, que vemos consignada en varios pasajes del derecho canónico (1), consiste en que la escomunion es mas directa al alma conminándola con el peligro de la salvacion, lo cual no puede decirse de las corporaciones; y en que además no es conveniente ni justo, que por el delito de un colegio ó corporacion, cometido por la mayoría de sus individuos ó con su consentimiento, se impusiera censura de escomunion á alguno de aquellos que no consintió ni tuvo en él participacion (2). Lo que se dice de la corporacion es aplicable al oficio ó cargo público, respecto del cual cabe del mismo modo la suspension y el entredicho, no la escomunion, que segun los cánones solo puede imponerse á la persona, que lo ejerce, si delinque por este concepto; mas de ninguna manera á su sucesor en él, como no dejase de satisfacer á la Iglesia ó á los demás perjudicados por la administracion del predecesor (3).

Considerado el católico con relacion á su estado en la Iglesia, puede ser clérigo ó lego, y esta diferencia le hace tambien capaz de todas las censuras, como sucede bajo el primer concepto, é incapaz de la de suspension, como se verifica bajo el segundo. Respecto de los monjes ó regulares, cabe la suspension del oficio ó administracion del derecho electoral, si lo tienen, y del beneficio que siempre es regular ó manual, y aun de las

(1) Cán. 1, 2, y 4, caus. 24, quæst. 2, cap. 28, tit. 39, lib 5, —cap. 12 y 14, tit. 28, lib. 3 de las Decretales.

(2) En comprobacion véase el cán. 6, caus. 21, quæst. 2, —El cán. 81 del Codigo africano, tom 1, col. 907 de Hardduino. imponia anatema para despues de la muerte, y prohibia recitar su nombre entre los sacerdotes de Dios ni obispo que osase instituir por herederos suyos á hereges ó paganos.

(3) Véase Engel, lug. cit., núm. 3 a 5.

(1) Cán. 1, caus. 21, quæs. 3. —cap. 5, tit. 11, lib. 5 del Sexto.—cap. 11, tit. 1, lib. 4.—cap. 15, tit. 35, lib. 5 de las Decretales.—Cap. 16, tit. y lib. cit. del Sexto.

(2) La interpretacion de los capítulos 22, tit. 5, lib. 3 y 11, tit. 25, lib. 2 de las Decretales, que se citan como ejemplos de censura de escomunion impuestas, á colegios y corporaciones, puede verse en Berardi, lug. cit., §. Praterea.—Véase ademas lo que sobre este punto dice el cardenal de Luca en su discurso 13, núm. 20 que se halla en la edicion del Concilio de Trento anotada por Gallemart.

(3) Cap. 7, tit. 39, lib. 3 de las Decretales.

pensiones ó *prestimonios*, pero nunca del órden, como respecto de los clérigos, á menos que se trate de monges que profesen vida monástica y clerical. La diferencia en este caso se funda en la regla de que á nadie puede privársele sino de los derechos que goza ó que puede gozar.

Considerada la censura con relacion á los lugares y personas, hay tambien la diferencia de que mientras estas son capaces respectivamente de todas las especies de censura, solo puede pronunciarse para aquellos la de entredicho, que por esta razon y aunque afecte á los que en él se hallan, se llama local. Hay, sin embargo, algunas personas respecto de las cuales su capacidad para toda censura se limita, ó con relacion á determinados prelados que las impongan, ó á las personas con quienes moran, ó á la ley general de la que se tienen por esceptuadas, siempre que de ellas no haga mencion especial. Esplicaremos con separacion estas diferencias.

Con relacion á determinados prelados, son incapaces de censura los que tienen privilegio singular para que no se les imponga ninguna ó alguna que el prelado señale (1); entendiéndose como privilegiados para el efecto los que han sido admitidos bajo la especial proteccion de la Santa Sede (2), si bien unos y otros, en el caso de incurrir en las censuras de la ley, pueden ser declarados por el ordinario, como notados con censura, sin que obste el privilegio, puesto que entonces no se ejerce acto alguno de jurisdiccion en forma contenciosa; sino que se hace el oficio de denunciador ó publicador que cualquiera puede desempeñar, mayormente el obispo ú ordinario local (3). Por lo demás, este privilegio es, no solo directo, sino tambien indirecto en cuanto á que el que goza de él no puede ser censurado por el ordinario, prohibiendo, v. g. á los súbditos que comuniquen con él, pues en el efecto vendria á ser una escomunion, que haria ineficaz el privilegio, por mas que las palabras no fuesen directas, y esta manera de imponer censura, solo puede ser aplicable á los judíos que, no teniendo parte en la comunion cristiana, tampoco podian ser directamente privados de ella.

Los obispos sufragáneos tambien están exentos de censura de los vicarios generales de los metropolitanos respectivos, mas no de la que estos mismos les impongan (1). Fúndase la exencion, no en la falta de jurisdiccion, pues que atendida esta competeria la facultad á dichos vicarios, sino en el doble principio de dignidad episcopal, reconocido para este caso en la antigua disciplina, y de analogía: de dignidad, porque no es decoroso que un obispo esté sujeto á censura del vicario general del metropolitano, y en este sentido los antiguos cánones atribuian esclusivamente esta facultad á los metropolitanos, en union con el concilio provincial (2), y á pesar de que, en tiempos posteriores, vino á concentrarse aquella facultad en el metropolitano, por haberse hecho mas rara ó menos frecuente la celebracion de concilios provinciales, no se creyó decoroso trasferirla al oficial del metropolitano de analogía, porque al modo que este no puede, escepto en caso de apelacion, imponer censura á los súbditos de los sufragáneos, asi el obispo no puede imponer ninguna á sus súbditos luego que apelaron al metropolitano, por lo tocante á la causa en que interpusieron este recurso (3), si bien, cuando el crímen es público, les está permitido denunciar públicamente despues de la apelacion al censurado, sin que obste que aquella se haya interpuesto despues de impuesta la censura (4).

Con relacion á aquella con quienes moran, no están sujetos algunos á censura. Para la inteligencia de esta materia debe observarse, que la censura vale respecto del notado y de los demás, cuando lo es verdaderamente tal y se le ha denunciado en público: respecto solo de los demás, sin que nadie esté notado,

(1) Cap. 9—10—21—tit. 33, lib. 5 de las Decretales.—cap. 5, tit. 7, lib. 5 del Sexto de Decretales.
(2) Cap. 1, tit. 12, lib. 5 del Sexto.
(3) Vease el discurso citado del cardenal de Luca, núm 7.—Por lo respectivo á los regulares; véase el cap. 1, tit. 7, lib. 5 de las Clementinas.

(1) Cap. 32, tit. 29, lib. 5 de las Decretales.—Cap. 1, in fine tit. 16, lib. 1. del Sexto.
(2) Cán. 1, dist. 34.—cán. 1, 2, 3 y 8, causa 6, quæst 4.—cán. 6 y 7, caus. 11, quæst 3.
(3) Cap. 14, tit. 11, lib. 5 de l Sexto.—cap. 57 y 60, tit. 28, lib. de las Decretales.
(4) Cap. 13 y 53, §. 1, tit. 28, lib. 12 de id.

cuando, por ejemplo, se prohibe á los fieles que comuniquen con determinada persona á quien no puede imponerse censura, como á los cristianos con los judíos (1): y respecto solo del notado con ella y no de los demás, cuando aun no ha sido denunciado el que incurrió en censura, pues no pueden guardarla los que ignoran su imposicion (2).

Con relacion á la ley general, en la que no se entienden comprendidas determinadas personas, si de ellas no se hace mencion especial, el Concilio 1.° general de Leon (3) y Bonifacio VIII (4) establecieron que asi fuese, respecto de los obispos, por lo tocante á la suspension y al entredicho, con el fin de evitar que se infirieran á las iglesias, cuya administracion les está encargada, males muchísimo mas graves, por causa de tales censuras (5).

La escepcion que acabamos de indicar, fundada en principios de utilidad espiritual de los fieles, á que siempre ha atendido la Iglesia, nos ofrece ocasion oportuna de decir algo acerca de una cuestion muy agitada, para cuya solucion afirmativa no entran por menos las razones de utilidad espiritual de los subordinados que las de conveniencia social y política. Tal es la de si puede un príncipe ser válidamente escomulgado. Sin entrar ahora en el exámen de las doctrinas que niegan ó conceden á la potestad eclesiástica el derecho de imponer censura al soberano temporal (6): prescindiendo de la cuestion de derecho en la cual opinamos por la omnímoda potestad de la Iglesia sobre todos sus hijos, limitándonos á la cuestion *de hecho*, esto es, de *oportunidad y conveniencia*, diremos, que aun supuesto aquel derecho, no debe ejercerse nunca respecto de los príncipes ó de los que en cualquiera forma de gobierno reasumen en sí la soberanía, ya se atienda al objeto de la censura, ya al sugeto sobre quien recae, ya á sus efectos en el órden moral, religioso y social, ya á la práctica antigua de la Iglesia, ya á las precauciones que esta, iluminada siempre por el espíritu divino, ha reencargado á los que en su nombre ejercen jurisdiccion, para que el uso de una arma, puramente espiritual y saludable, no se convirtiese en política y perjudicial á la tranquilidad de las conciencias y á la seguridad de los estados. En efecto la facultad concedida por Dios á la Iglesia de separar de su seno á los que quebrantan sus leyes y se oponen á su doctrina, no le fué concedida sino para su conservacion, y asi el uso que aquella haya de hacer de esta autoridad, deberá ser limitado y reducido al mismo fin. Por lo tanto, cuando, por ejemplo, la censura de escomunion haya de ser perjudicial á la misma Iglesia y tienda mas bien á destruirla que á conservarla, la prudencia y la razon dictan que los pastores eclesiásticos se abstengan de la ejecucion de semejante pena, pues vale mas tolerar al pecador que separarle con perjuicio ó comun desventaja. Y si esta atencion debe guardarse respecto de los particulares, debe ser aun mayor y mas exacta, siempre que se trate de un príncipe. Su dignidad y el alto puesto en que Dios le ha colocado, no pueden menos de exigir que se use con él de cauta moderacion, porque su ira, ó contumacia podria traer consecuencias funestas y perjudiciales á la Iglesia. Por lo comun, si bien se observa, el cisma es por su naturaleza consecuencia casi inevitable de una escomunion fulminada contra aquel ó aquellos, que ejercen el sumo imperio sobre los pueblos, porque es muy difícil que entre tantos súbditos deje de haber algun número de estos, que frecuentemente adictos al que los preside por disposicion divina, prefieran favorecer al príncipe y aun sostenerle contra quien quiera imponerle la censura. La práctica de la Iglesia

(1) Cap. 13 y 14, tit. 6; lib. 5, cap. 12 y 18, tit. 19, lib. 5 de las Decretales.
(2) Cap. 28, tit. 39, lib. 5 de Id.
(3) Cap. 4, tit. 11, lib. 5 del Sexto.
(4) Cap. 37, vers. *Porro*, tit. 6, lib. 1 del Sexto.
(5) Berardi, lug. cit. §. *Ratione habita* dice: que no se atreve á decir lo mismo tocante á la escomunion, porque no hay sobre ello constitucion espresa; y añade que acaso el citado primer concilio general de Leon no mencionó la escomunion porque se impone por crímenes mas graves, en los cuales si los obispos incurriesen, seria oportuno que ni aun ellos se eximiesen de la sancion de la ley general.
(6) No hay duda que todo cristiano, ya sea rico ó pobre, ya súbdito ó sumo imperante, debe obedecer y respetar las leyes de la Iglesia; pero este principio reconocido no está en contradiccion con la prudencia y con la conveniencia social que casi nunca permite usar de este derecho respecto de los soberanos. Al menos esta cuestion habria cambiado no poco de aspecto despues de la doctrina del Concilio de Trento, de economizar las censuras, y en vista del hecho y práctica constante de economizarse hasta el punto que es notorio aun respecto de los legos.

viene en apoyo de esta doctrina. Cuando los príncipes antiguamente, no bien instruidos, ú olvidados de su deber, trabajaban en aniquilar la fé y perseguir á sus defensores, los Pontífices y los obispos se contentaban con advertirlos y amonestarlos con circunspecta y aun respetuosa libertad, suplicándoles, exhortándolos, instándoles encarecidamente; pero nunca fulminaron contra ellos la escomunion, ó lo hicieron rara vez, pues para un Teodosio en Milan; y mas en los últimos siglos, se hallarian muchos Enriques de Inglaterra, y muchos príncipes de Orange. En la historia eclesiástica no se lee que aquella se impusiera por los Papas Julio y Liberio, ni por los obispos San Atanasio, San Hilario y Osio á Constancio, aunque era el principal patrono de los Arrianos: por Liberia á Juliano: por San Dámaso á Valente, atroz perseguidor de los católicos: por San Dámaso á la emperatriz Justina, patrona del Arrianismo: por San Siricio á Teodosio, á pesar de su muy conocido y atroz crímen: por Leon á Teodosio el mas jóven, protector de Dioscoro y del concilio 2.° de Efeso; por Simplicio y Eelit al emperador Zenón, destructor del concilio de Calcedonia; ni, en fin, por Viteliano ó Constante, nieto de Heradio, herege, fratricida, sacrílego, etc. Si se considera que, asi como en lo antiguo se economizaron con provecho comun del bien de la Iglesia las escomuniones de los sumos imperantes, asi las censuras de esta clase que en siglos mas recientes se fulminaron no produjeron otro efecto que turbar la paz de la Iglesia y de las mismas repúblicas; y si á los consejos y doctrina de algunos santos doctores y célebres escritores eclesiásticos sobre la inutilidad de la censura, cuando el que ha de sufrirla tiene por cómplice á la muchedumbre, y sobre la necesidad de reservar al juicio divino el castigo de los reyes y príncipes que, abusando alguna vez de su poder, no hacen caso de las advertencias de los sacerdotes: si á esto, repetimos, se añaden los saludables decretos del Concilio de Trento, que recomendó la sobriedad y una gran circunspeccion en el uso de la escomunion, puesto que la esperiencia enseña, que, si se impone temerariamente y por causas leves, mas se desprecia que intimida, y ocasiona mas daño que provecho, preciso será concluir que los sumos imperantes pueden sujetarse á censura, absolutamente hablando, mas no en la esfera de la *prudencia y conveniencia* que los antiguos tuvieron presente, salvas sus advertencias y salvo el espíritu de los antiguos cánones. Podrán oponerse de contrario los ejemplos de Arcadio y de Teodosio, de quienes se dice les fué impuesta censura; pero casi todos los autores é historiadores canónicos, entre ellos el célebre Bossuet, tienen por no cierta ó inventada la que se refiere al emperador Arcadio; y por lo que toca á Teodosio, él mismo se sujetó voluntariamente á la penitencia que San Ambrosio determinase, doliéndose de sus pecados y con el deseo de espiar el escándalo de Tesalónica (1).

Esta doctrina ha tenido desde muy antiguo aplicacion en la disciplina de la Iglesia española, que honró y distinguió á los Reyes en todo cuanto pudo, principalmente en materia de censuras canónicas, llevando tan adelante el miramiento, que los obispos guardaban al monarca, que hasta le consideraron exento de pena eclesiástica y sujeto solamente á los castigos que la mano de Dios se dignase enviarles. A su vez los Reyes agradecidos á tan señaladas distinciones, no se cansaron jamás de ser bienhechores generosísimos de nuestras iglesias y monasterios.

Motivo ó causa legal para las censuras. La regla de derecho reconocida de que la gravedad de la pena debe guardar proporcion con la del delito, no ha podido dejar de tenerse muy presente al determinar cuando debia ser este causa de censura. La Iglesia, pues, en consideracion á ella, y guiada siempre por el espíritu de caridad y mansedumbre, ha fijado las circunstancias que han de concurrir en el delito; y los tratadistas del derecho canónico no han dejado de inculcar la gran necesidad de que se examine con

(1) Devoti, Iustit. Canon. tom. 4. tit. 18. §. 12 nota 3. enumera varios casos de haberse sujetado los magistrados y príncipes á las censuras eclesiásticas lo mismo que todos los demas.

todo cuidado si falta alguna de aquellas, á fin de no esponerse á usar indiscretamente de arma tan terrible en sus efectos para el cristiano.

En primer lugar el hecho debe ser *esterno*, ya porque la jurisdiccion ó potestad coercitiva de la Iglesia solo se estiende á los actos del mismo género (1), ya porque los bienes y derechos de que priva la censura son puramente esteriores y públicos, aunque espirituales y eclesiásticos. Asi el hereje, que no manifiesta esteriormente la heregía, no incurre en las censuras pronunciadas contra los herejes en general, y por el contrario, el que, llevado solo del miedo ó del temor, incurriese en un acto de heregía sin profesarla en su interior, no pasaria por escomulgado mas que en el foro esterno.

En segundo lugar el hecho debe ser *grave* y *mortal*, y que se halle *prohibido bajo pena de censura por precepto eclesiástico*. El primero de estos requisitos es una consecuencia de la gravedad de la censura, con la que el delito debe guardar relacion, y por eso los antiguos cánones (2) reprobaron se suspendiese á ninguno de la comunion eclesiástica por causas leves ó pequeñas, prohibicion sábiamente renovada por el Concilio Tridentino (3). El segundo requisito se funda en la razon de que, siendo la censura el castigo de los rebeldes y de los contumaces, introducido para conservar la disciplina esterior, no puede haber contumacia ni resistencia cuando se ejecuta un acto que la Iglesia ó el superior eclesiástico no han prohibido. Puede, no obstante, ser enorme, sin merecer censura, á la manera que el escándalo ó daño causado por sus consecuencias, mas bien que por su naturaleza, pueden hacerle digno de ella, sin que aparezca grave á los ojos del público. De esta clase se hallan ejemplos en los antiguos cánones, que pronuncian censuras por causas, que en la actual disciplina parecen leves, aunque al promulgarse aquellos fuesen de suma trascendencia. Es de notar á este propósito la diferencia entre las censuras á *jure*, ó *latæ sententiæ*; y las que el juez eclesiástico impone por sentencia y se llaman *ferendæ*. Las primeras, como mas graves, deben imponerse por delitos ó crímenes de igual gravedad, á menos que sea preciso usar de rigor respecto de algun crímen frecuente, del cual convenga cuanto antes proteger á la Iglesia, ó que circunstancias semejantes exijan mayor severidad. En estas censuras incurre el que comete un crímen esterno, aunque sea oculto y no esté probado, si bien en este caso deberá probarse siempre que el juez haya de pronunciar sentencia declaratoria; de modo que aunque el reo incurra en censura, aun antes de que conste la comision del delito, los demás no estarán obligados á observar las consecuencias que segun las definiciones canónicas son á aquella inherentes. Las segundas censuras, esto es, las llamadas *ferendæ*, se imponen por pecados que son tanto mas graves, cuanto media costumbre ó contumacia; y por eso están regularmente señaladas por derecho para los casos en que deba corregirse el pecado habitual, la negligencia de la disciplina, la rebeldía á comparecer en juicio, etc., no pudiendo nunca el juez imponerlas ó declarar incurso en ellas, si el crímen no es cierto y probado (1), no bastando que sea notorio en el foro interno (2). La razon de estas diferencias es muy óbvia al que observa la que hay entre el oficio judicial y el poder legislativo.

En tercer lugar debe el delito ser *personal* para que pueda serlo la censura (3). Esta regla solo admite escepcion respecto del entredicho, el cual, aunque se refiere á las personas, es local, pero no se impone á determinado individuo en particular.

---

(1) Cap. 34. tit. 3, lib. 5 de las Decretales.—Cap. 2 tit. 30, lib. 1 de id.—cán. 23. caus. 32 quæst. 5.— cán. 11. dist. 32.—cán. 20. caus. 2. quæst. 5.

(2) Cán. 8, 41, 42, caus. 11. quæst. 3.—Cán. 7, dist. 56. La inadvertencia, la falta de suficiente deliberacion y la parvidad de materia escusan á veces de las censuras de esta clase.—Engel, lug. cit., num. 6.

(3) Cap. 1 y 3. cit., ses. 25 de ref.

(1) Cán. 12, caus. 2, quæst. 1.—Cán. 41, caus 11, quæst. 3.

(2) Can 2 y 3, caus. 6, quæst. 2.—Cap. 2, tit. 31, lib. 1 de las Decretales.—Sabido es que se entiende manifiesto y cierto en juicio el delito, cuando el reo lo ha confesado ó está convicto. Este principio de legislacion criminal está reconocido en el derecho canónico, como se ve en los cán. 1, 12, caus 2, quæst. 1.—Cán. 2 y 3, caus, 6, quæst. 2.—Cán. 2, caus 15, quæst. 5. cán 2, caus. 15, quæst. 7.—Cap. 23 y 24, tit. 40, lib. 5 de las Decretales y otros.

(3) Cap. 2, tit. 11. lib. 3 de las Decretales.

En cuarto lugar debe el delito ser *completo y consumado* en su género, para que la censura sea eficaz y valedera. Esta regla es principalmente aplicable á las censuras *latæ*, y se funda en el principio de que las palabras de las leyes penales han de interpretarse estrictamente y entenderse en todo su efecto (1). Además, en el mismo Evangelio solo se manda considerar como étnico y publicano al que, despues de la correccion fraterna y de la amonestacion de la Iglesia, no quisiese oir á esta (2). Nada obsta, sin embargo, para que el legislador pueda imponer censura por un crímen no consumado, como asi p. e. espresamente se encuentra previsto en la disposicion de que, el que comience á ejecutar un crímen, quede sujeto á censura (3).

Por último, el delito debe ser *escandaloso*, esto es, que altere ó perturbe la disciplina esterior para cuya conservacion y órden se ha introducido la censura. Esta no es en su resultado sino la privacion temporal de los bienes espirituales y de los derechos concedidos por la Iglesia á los fieles que se hallan en su comunion; y asi como no debe cortarse un miembro del cuerpo animal, sino cuando dañe á los demás, asi tampoco el delincuente debe ser separado, siquiera sea temporalmente, de la sociedad y participacion con los demás fieles, sino en cuanto su delito sea de tal naturaleza, que cause escándalo á aquellos, y haga por lo mismo necesaria tan terrible separacion para enmienda del reo y provecho de los demás.

Consecuencia de lo que acabamos de indicar es que no debe imponerse la censura, cuando el hecho no perjudica de presente á nadie, ni puede ser causa de futuros males; ó cuando ha sido ya suficientemente reparado; asi como tampoco (á no ser en cánon ó estatuto ordinario) por culpas futuras, ó por haberse omitido la satisfaccion de las pasadas; escepto en los casos en que, no solo se teme la ofensa ó tardanza en satisfacer, sino que, aun despues de la monicion y de haberse prefijado término para satisfacer, se cometa de hecho la culpa (1). Basta atender á que la censura es por su propia naturaleza una pena medicinal y saludable, que tiende á la enmienda, y que solo se impone con derecho á los contumaces ó rebeldes, para convenir en que deja de tener efecto legal en cualquiera de los casos indicados, porque sin ella se consiguió el fin deseado, y porque si se impusiera, vendria á ser ineficaz, cuando no perjudial, además del carácter de vindicta que implicaria. Esta es la doctrina que se deduce de las disposiciones mismas de la Iglesia al establecer que por derecho y por costumbre debe restituirse á la sociedad de los fieles al que por contumacia fué privado de ella, tan luego como dé cóngrua satifaccion (2).

Resta solo observar, que á ninguno puede imponerse censura por crímen determinado, si en razon de él sufrió ya alguna especie de censura (3); y por el contrario, en el caso de ser los crímenes diversos (4); asi como pueden imponerse censuras de una misma especie, cuyos efectos sean diversos; cuando se trate de muchos delitos ó de uno cometido con reiteracion frecuente ó multiplicada (5).

Tal es la doctrina acerca de las circunstancias que deben concurrir en el delito para que sea causa de censura. Por lo relativo al delincuente, es regla general canónica, basada en principios de justicia, que ninguno puede ser notado con censura, si no fué causa del crímen ó consintió en él, de modo que se libra de aquella el que solo dió ocasion para delinquir (6).

Hay, sin embargo, crímenes, que por la ley ó cánon tienen señalada censura; y llegado el caso de uno de aquellos, podria dudarse si se entiende impuesta á los partíci-

(1) Cap. 4, tit. 4, lib. 3 de las Decretales.
(2) San Mateo, cap. 18, vers 17.
(3) De esto se hallan ejemplos en los cánones, como se vé en el cap. 1, §. 2, tit 4, lib. 5 del testo.—Véase Berardi, lug. cit., cap. 4, final del §. Debet.

(1) Antiguamente se imponian alguna vez estas censuras generales por culpas futuras, diciendo: v. g. «el que hurte será excomulgado,» ó por culpas pasadas sino se seguia la satisfaccion dentro de cierto tiempo. Pero el cap. 5, tit 11, lib. 5 del testo de Decretales en su §. *Caveant* las prohibió, escepto en los casos que en el testo espresamos.
(2) Cap. 14, tit. 2, lib. 1 de id.
(3) Cán. 11, dist. 8.
(4) Cap. 27, tit. 39, lib. 5 de las Decretales.
(5) Cán. 24 de los llamados Apostólicos—cap. 27 y 42 cit., tit. 39, lib. 5—cap. 11, tit. 11, lib. 5, del Sexto—cap. 2, tit. 10, lib. 5 de las Clementinas—cap. único, tit. 4, lib. 5 de las Extrav. com.
(6) Cán. 5, caus. 1.ª quæst. 4.

pes del crímen, aunque no se espresen en la disposicion legislativa. Por lo que toca al mandante, al que lo ejecutó, y al codelincuente, está fuera de duda, como espreso en los cánones, que deben considerarse comprendidos (1). No está la opinion tan de acuerdo respecto de los que dieron consejo ó ayuda sin concurrir directamente al acto, ni consentir, ó de los que, pudiendo impedirlo, no lo hicieron. Pero si se atiende á la recta interpretacion de las leyes penales, puede tenerse como regla, que no se entienden comprendidos en la censura señalada por la ley, á menos que asi se esprese, como lo ha hecho respecto de los que patrocinan á los herejes (2), ó ayudaron como mediadores ó procuradores en el crímen de simonía (3): maltrataron á clérigos, mayormente á obispos (4): despojaron á los beneficiados (5): aconsejaron á incendiarios de la Iglesia (6): dieron consejo y prestaron auxilio por razon de delito, contra el cual se pronunció sentencia de entredicho (7), ó favoreciendo el rapto ó la profesion monástica por fuerza, ó cooperaron á que esta no se verificase (8), y los que de cualquier manera coadyuvaron á la monomaquía ó duelo, ó estimularon á los que le habian comenzado (9).

¿Qué ignorancia escusa de la censura? Esta cuestion solo puede tener lugar tratándose de la impuesta por derecho, llamada *latæ sententiæ*: y prescindiendo nosotros de la múltiple division de la ignorancia bajo sus aspectos moral y legal (10), diremos que la invencible, no solo escusa enteramente de censura general (11), sino que si es tal que escuse de la gravedad del crímen, escusará tambien de la censura, que se entiende impuesta al delito precisamente por su gravedad. El argumento de que á ninguno aprovecha la ignorancia del derecho, puede ser aplicable en lo civil; mas no en lo penal, mayormente tratándose de penas espirituales y medicinales como la censura, y no pudiéndose decir que comete crímen el que ignora la ley. De tal manera un célebre comentarista juzga verdadero este aserto, que no duda afirmar, que si alguno tiene conocimiento de la ley prohibitiva; pero ignora inculpablemente la que impone censura general, de esta podrá eximirse, mas, no de aquella, toda vez que una cosa es delinquir contra la ley que prohibe el crímen, lo cual constituye desobediencia, y otra contra la que impone censura, lo cual supone desde luego contumacia. De donde se deduce que, para librarse de la censura de que tratamos, no basta escepcionar el miedo, aunque sea grave, ó un movimiento menos deliberado del ánimo, ó una inaccion que participe del verdadero dolo, ó un olvido grande del precepto que se confunda con negligencia grave; pues cuando no valen para eximir de la ley, que prohibe el hecho punible, tampoco de la que señala censura por su comision (1). Esceptúanse, no obstante, los impúberes, siempre que no se trate de escomunion por haber puesto dolosamente manos violentas en clérigos, pues entonces incurren en dicha censura (2), aunque se use con ellos de menos rigor, concediéndoles que puedan ser absueltos por el ordinario (3).

(1) Cán. 4, caus. 15, quæst. 3—cap. 6, vers. *Illi verò*, y cap. 29, *In primo*, tit. 39, lib. 5 de las Decret.
(2) Cap. 15, vers. credentes, tit. 7, lib. 5, de id.
(3) Cap. 2, tit. 1, lib. 5 de las Estravag. com.
(4) Cit. cap. 6, vers. *Illi verò*, y cap. 37, tit. 39, lib. 5 de las Decretales—cap. 5, tit. 9, lib. 5 del Sexto.
(5) Cap. 1, tit. 8, lib. 5 de las Clementinas—cap. 12, tit. 6, lib. 1, del Sexto.
(6) Can. 32, caus. 23, quæst. 8.
(7) Cap. 21, tit. 11, lib. 5 del Sexto.
(8) Concilio tridentino, ses. 24 de ref. matrim., cap. 6—ses. 25 de regul., cap. 18.
(9) Cit. Concilio, ses 25 de ref., cap 19.
(10) Vease, entre otros, en Cabassucio, *Theoria et praxis juris canonici*, cap. 2, lib. 5, esplicada toda la teoria acerca de la ignorancia con relacion á las censuras.
(11) Can. 5, caus. 9, quæst. 1.—Can. 117 de consecrat., dist. 4—cap. 9, tit. 6, lib. 3—cap. 4, tit. 39, lib. 5 de las Decretales—cap. 2, tit. 2, lib. 1 del Sexto.

SECCION IV.

SOLEMNIDADES DE LAS CENSURAS: EFECTOS.

Ha sido disciplina constante de la Iglesia, dirigida á su salud y bien comun, no usar de su potestad coercitiva, sino despues de empleados sin fruto todos los medios de

(1) Cán. 16, dist. 37—cap. 3, tit. 40, lib. 1—cap. 4, tit. 39. lib. 5 de las Decretales.
(2) Cap. 58, tit. 39, lib. 5 de id.
(3) Asi se deduce de los cap. 1, tit. 23, y cap. 1 y 60, tit. 39, lib. 5 de id.

penitencia y de reconciliacion, con los fieles poco solícitos, ú olvidados de su salud y felicidad eterna. Por eso ha considerado siempre como subsidiaria la censura, y haciendo compatibles los principios de justicia con la caridad, que es el espíritu que la guia, ha prescrito en sus cánones (1) y enseñado por medio de sus doctores (2) á los obispos y prelados el uso moderado de las censuras, principalmente de la escomunion, recordándoles que no deben proponerse otro fin que la gloria de Dios, la salud de los fieles, la estirpacion del pecado, la enmienda del delincuente y la reparacion del escándalo, y que se haria reo de abuso de potestad el que impusiese la censura, solo por vengar una injuria privada, á menos que esta se hubiese cometido contra una dignidad con ánimo aparente de injuriar á Cristo y á su Iglesia; y dándoles desde el principio ejemplos de sentimiento y amargura, cuando por necesidad ha tenido que pronunciar alguna censura contra reos notoriamente contumaces y merecedores de ella (3). Deben, por lo tanto, los prelados eclesiásticos, que no tienen otras armas que las espirituales, ni para otro fin que el provecho espiritual de los fieles, usar de ellas con mucha sobriedad y circunspeccion, segun la cualidad del hecho, conminando, pero no llevando á ejecucion las censuras, si puede echarse mano de otros medios eficaces; no imponiéndolas jamás por causa que pueda siquiera sospecharse de pasion, violencia ó avaricia; economizando su uso, á fin de que no causen desprecio en vez del temor, porque es indudable que la censura solo es pena para el que la teme; y cuando un cristiano es tan malo y protervo, que se atreve á despreciarla y violarla impunemente, no causa otro efecto que irritarlo sin corregirlo, porque dicho efecto no se funda sino en la fé y en el respeto del poder de la Iglesia, no sucediendo lo mismo con las penas temporales, pues todo hombre teme naturalmente, la pérdida de sus bienes, de su libertad y de su vida (1).

Hechas estas observaciones preliminares, veamos las solemnidades y modos que deben guardarse en las censuras, generalmente consideradas.

Las censuras llamadas *latæ sententiæ*, deben, lo mismo que la ley, ser justas, equitativas y promulgadas suficientemente por el que ejerce esta potestad legislativa; de modo que no necesiten de especial monicion, pues hace veces de tal la ley ó cánon que declara *ipso facto* incurso en ellas al infractor (2).

A las llamadas *ferendæ sententiæ*, ya las que impongan espontáneamente y á su prudente arbitrio los prelados, ya en virtud de la obligacion que para ciertos casos les prescribe el derecho comun, ya, en fin, las pronuncie solo para declarar incurso á alguno en las que el derecho señala, son aplicables casi todas las solemnidades que los cánones requieren. Bajo cualquiera de los tres aspectos indicados deben hacerse por escrito, ante testigos, con espresion de causa, dándose al reo un ejemplar dentro del término de un mes, si lo pide (3); publicarse su nombre para que cada uno sepa cómo ha de tratar con él (4); si el delito es público, hacerse públicamente la denuncia (5), y aun reiterarse esta, si lo exige la utilidad pública ó la privada del censurado. El modo de hacerla está al arbitrio del ordinario; pero generalmente se hace fijando la sentencia en el cancel de la iglesia, y si la causa es muy grave, en varios lugares. Cuando no hay necesidad de esto, ni de manifestar los nombres de los censurados á los obispos vecinos, basta publicar la censura á aquellos á quienes inte-

(1) Cán. 27, 28, 30, caus. 23, quæst 4.
(2) Son notables á este propósito los pasajes de San Ambrosio, lib. 1, de offic., cap. 27, y de San Leon, ep. 93.
(3) Pueden citarse, entre otros, los de los concilios Efesino condenando á Nestorio, y Calcedonense reunido contra Eutiques y Dioscoro.

(1) El cardenal de Luca en su cit. discurso 43, sobre el cap. 3, ses. 25 de ref., dice muy oportunamente al núm. 18, que la cualidad mas válida y eficaz para esgrimir con robusta mano los obispos y prelados eclesiásticos, la espada de la censura, es la que resulta de su vida ejemplar y de sus costumbres, juntamente si la causa que obligue á usar de ella no es otra que el buen celo, y el pueblo se convence de ello. Véase Van Espen, parte 3.ª, tit. 11, cap. 7.
(2) Cap. 2, tit. 39, lib. 5 de las Decretales.
(3) Cán. 9, caus. 2, quæst. 1—cap. 1, tit. 11, lib. Sesto.
(4) Can. 20 y 106, caus. 11, quæst. 3—cap. 3, tit. 25, lib. 2 de las Decretales.
(5) Cap. 13, tit. 36, lib. 2 de id.—cap. 24, tit. 13 lib. 5 de id.—cap. 1, tit. 8, lib. 5 de las Clementinas.

rese (1), y á menos que se halle notado tambien con censura, deberá comunicarse al obispo diocesano (2). Respecto de la forma, ninguna hay establecida, bastando que se usen palabras, que espresen claramente la censura (3).

Todas las censuras, sin distincion, exigen como requisito indispensable, que el delincuente sea principalmente reo de negligencia próxima al dolo, y de grave desprecio del precepto eclesiástico. Si se trata de censura *ferendæ sententiæ*, ha de imponerse por crímen anterior, y si fuere *latæ sententiæ*, no declararse tampoco hasta que conste haberse aquel cometido, con todas las circunstancias de gravedad, y publicidad y demás que quedan espresadas.

Ultimamente: tratándose de un acto judicial, y de jurisdicion del fuero esterno y contencioso, nada se omitirá de lo que para casos judiciales previenen las leyes y los cánones, relativamente á la validez del acto. Hay censuras que tienen formas especiales; pero ha de verse en el artículo particular de cada una, esto es, en los de **ESCOMUNION**, **ENTREDICHO** y **SUSPENSION**.

Cuando el ordinario no hace mas que declarar impuesta la censura por virtud del derecho, *juris potestate*, debe citarse legítimamente al reo, probarse el delito y admitírsele justificacion cuando las pruebas no sean evidentes y solo resulten conjeturas ó presunciones (4).

Cuando la ley le prescribe que imponga censura por ciertos crímenes, bastará que si está determinada la especie de ella, la pronuncie ó con palabras generales declare que el infractor queda sujeto á la censura impuesta por derecho; mas sino lo está, pende de su prudente arbitrio determinarla (5).

(1) Cán. 7, dist. 18—cap. 25, tit. 1, lib. 5 de las Decretales. —Concil. Trid., ses. 24 de ref., cap. 1.
(2) Cap. 17, tit. 17, lib. 5 de las Decretales.
(3) Cap. 15, tit. 40, lib. 5 de id.
(4) Cap. 4, tit. 39, lib. 5 de las Decretales.
(5) Berardi, lug. cit. cap. 9, §. 4, dice: que si el juicio comenzó por *acusacion*, es necesaria citacion y prueba, pudiendo condenarse al reo omitidas las moniciones, aunque no sea pertinaz, á menos que la censura por derecho señalada sea por causa de contumacia; pero si comenzó por denuncia ó inquisicion, podrá y deberá moderar cada una de las solemnidades, como lo haria si hubiera de imponer la censura espontaneamente y en virtud de su prudente arbitrio.

Cuando fuera de la sancion de las leyes el ordinario ha de imponer por su voluntad la censura, si esta es por vía de **PRECEPTO**, segun en su lugar se indicó, habrán de guardarse todas las solemnidades que en una ley, salva la debida diferencia, y en caso de violacion, preceder como en el de declaracion por virtud del derecho, sentencia declaratoria. Mas, si es por vía de **SENTENCIA**, debe distinguirse si se trata de *crímen perpetrado*, pues entonces debe preceder la citacion personal, siéndolo la censura (1), así como la prueba del delito en juicio, alegándose y probándose por el reo las escepciones ó escusas que tenga, sin que pueda imponerse censura no estando probado el delito, y si aquella es local, citarse á todas las personas del lugar en que se perpetró el delito, á fin de que conste la causa de pronunciarla, aun en el caso de ser aquel **NOTORIO**, pues nunca debe condenarse á nadie sin oirle, y muchas cosas suelen llamarse notorias, no siéndolo en realidad. Todo esto debe tener lugar, ya esté espreso en el derecho, que el ordinario proceda en el momento á imponer la censura en pena del crímen cometido, ya sea tan enorme el delito, que el ordinario estime prudentemente imponerla á su arbitrio sin demora para terror de los demás (2). Por último si la censura se impone por causa de *enmienda*, no hay necesidad de citacion, sino de monicion por escrito (3), trina (4). Y con señalamiento de término, pues tales censuras solo se dan contra contumaces (5); y aunque alguna vez ha bastado una monicion perentoria (6) en la actualidad son necesarias al menos dos, cuando se trate de la censura mas grave de todas, que es la de escomunion (7).

(1) Cán. 12, caus. 2, quæst. 1—cán. 2, caus. 15, quæst. 5—capítulo 3, título 23, lib. 2 de las Decretales—cap. 1, tit. 1, libro 5 de las Clementinas.
(2) Cán. 30 de los apostólicos—cán. 18 y 20, caus. 2, quæst. 1—cán. 21, caus. 12, quæst. 2—cán. 5, caus. 16, quæst. 7—capítulo 26, tit. 28, lib. 2 de las Decretales—cap. 2, tit. 7, libro 5 de id.—cap. 1 y 13, tit. 11, lib. 5, del Sexto—Concil. trid. ses. 25 de ref., cap. 14.
(3) Cán. 21, dist. 81—cit. cán. 21, caus 12, quæst. 20, cap. 16, tit. 2, lib. 2 de las Decretales—cap. 24, tit. 13, lib. 5 de idem.
(4) Cán. 30 y 31 de los apostólicos—cán. 20, caus. 2, quæst. 1—cap. 5 y 9, tit 11, lib. 5 del Sexto.
(5) Cán. 22, d. st. 81—can. 5, caus. 16, quæst. 7—cap. 2, 3, 4 y 6, tit. 2, lib. 5 de las Decretales—cap. 8 9—14-16, título 1, lib. 5 de id.
(6) Cap. 6, tit. 11, lib. 5 del Sexto.
(7) Concil. tridentino, ses. 25 de ref. cap. 3.

En la jurisprudencia canónica se conocen con el nombre de CENSURAS GENERALES las sentencias que á veces pronuncian los jueces eclesiásticos *ad finem revelationis*, esto es, para que los que han hallado una cosa perdida la devuelvan, ó designen al detentador de cosa ajena, si saben quien es (1). Toda la doctrina sobre esta clase de censuras está contenida en el cap. 3 de reforma, ses. 25, del Concilio Tridentino, que exige la prévia monicion á los inventores ó detentadores (2) faculta á solo el obispo para decretarlas (3), prescribe que no se eche mano de ellas sino subsidiariamente á la ejecucion real ordinaria (4), por causa no vulgar ó de poco momento, sino grave, que despues de examinada diligentemente y con gran madurez incline el ánimo á su imposicion (5), y prohibe á los obispos imponerlas á escitacion ó mandato de los magistrados seculares, dejándolos enteramente á su arbitrio y conciencia, segun las circunstancias de la cosa, lugares, tiempos y personas (6).

Las censuras de que hablamos no obligan á revelacion ó denuncia, á los que no pueden hacerlo sin infamia propia ó de los suyos, aunque deban ocultamente, ó por medio de tercero, procurar la restitucion, si ellos no son detentadores; ni tampoco á los que no lo saben de cierto, no pueden probarlo al menos por un testigo, ó sin injuria del dueño retienen la cosa por vía de compensacion. Las revelaciones, subsiguientes á las censuras generales, no hacen fé para proceder criminalmente contra el denunciado, segun asi suele espresarse en las cláusulas monitorias (7).

De la doctrina que acabamos de esponer acerca de las solemnidades necesarias para la imposicion de las censuras, pueden sacarse las siguientes conclusiones:

1.ª La monicion no es precisa, cuando se incurre en aquellas *ipso jure*, cuando el juez ha de declararla por virtud de la ley, ó cuando se adopta una providencia por decoro de las cosas sagradas.

2.ª Será siempre necesaria citacion y audiencia del reo, para la imposicion de censura por sentencia judicial, á fin de que no se viole el principio de justa defensa que á todos se concede por derecho natural.

3.ª Es precisa suma circunspeccion para imponer censura por sola la prueba del delito, sin prévia monicion, á no ser en causas muy graves, pues aun las censuras *ferendæ sententiæ* señaladas por la ley, llevan envuelta la condicion tácita, «si el reo no se enmienda» «si se obstina» «si urge causa grave (1).»

4.ª Obrará con mas prudencia y de acuerdo con las prescripciones de la Iglesia, el obispo ó prelado que se abstenga de imponerlas, cuando haya conjeturas de que puede seguirse gran detrimento, como por ejemplo, el cisma (2).

5.ª Cuando está al arbitrio del ordinario imponerlas, debe proceder gradualmente de menor á mayor en proporcion de la contumacia, á no tratarse de crímenes atroces; (3) mayormente si han de tener lugar contra prelados (4).

La disciplina de la Iglesia de España ha estado siempre en armonía con las prescripciones del derecho canónico comun, acerca de las solemnidades que han de guardarse en las censuras, y del uso moderado, que debe hacerse de ellas, para que produzcan el efecto saludable de su institucion. Nuestras le-

(1) Solo asi puede el detentador ó inventor constituirse en verdadera contumacia.

(2) Sobre el origen de estas censuras véase Morino, lib. 6 de sacram. pœnit. cap. 25.

(3) Las palabras del concilio *á nemine prorsus* inducen á creer que el vicario general no puede imponer estas censuras sin especial mandato.

(4) Esto se funda en que la censura requiere siempre causa grave para que tenga lugar.

(5) En cuanto á la suma ó valor de la cosa perdida ó hurtada, queda al arbitrio del obispo fijarlo. Segun estilo de la curia romana, ha de ser al menos de 50 áureos . En Madrid deben valer por lo menos 20 ducados todas juntas, y cada una mas de 12 rs. Véase Salcedo *Curia eclesiastica*, página 278, nota p. donde inserta las fórmulas de monicion ó carta y declaracion de estas censuras.

(6) Véase sobre este punto el cit. discurso del cardenal de Luca al núm. 9 y siguientes, y las declaraciones y remisiones á dicho cap. del tridentino en la edic. de Gallemart.

(7) Tal es, por ejemplo, la fórmula siguiente: *nolumus autem quod ex revelatione hujusmodi, si eam fieri contingat, vim pro civili interesse et civiliter tantum agi possit; alias revelatio ipsa neque in judicio neque extra fidem faciat.*—Pueden verse Barbosa, de off. Episcopi, allegat 96, y Riccio *Praxis aurea*, resolut. 244 y sig.

(1) Can 7, caus. 33, quæst. 4.

(2) Cán. 19 y 32, caus. 23, quæst. 4.

(3) Cán. 8, dist. 54—cán. 4, dist. 84—cán. 2, dist. 34—cap. 8, tit. 24, lib. 2 de las Decretales.

(4) Cap. 2, tit 14, lib. 1 del Sesto Concilio tridentino, ses. 13 de ref. cap. 1, vers. *hi autem*—De las solemnidades propias y peculiares á cada especie de censura, se trata en sus artículos correspondientes.

yes no han cuidado menos de dar fuerza á las sanciones canónicas y de procurar la conservacion de la disciplina, en particular de la establecida por el Concilio tridentino, y que habia comenzado á relajar el abuso de imponerlas de ordinario, y por causas meramente temporales. No habian bastado entre otras las prohibiciones contenidas en las leyes 10, título 1, lib. 1: 11.ª, tít. 1: y 3.ª, tít. 3, libro 2, de la Novísima Recopilacion, para los prelados con jurisdiccion temporal no procedieran por censuras, ni usasen de ellas, aunque el asunto pudiera en cierto modo considerarse eclesiástico, como sucedia, por ejemplo, en la exaccion de deudas de bulas, alcabalas ó prestaciones decimales. Al celebrarse el Concordato de 1737, fué preciso consignar en la 10 de sus cláusulas, que no debiendo usarse las censuras sino *in subsidium*, conforme á la disposicion de los sagrados cánones, y al tenor de lo mandado por el Santo Concilio de Trento en la sesion 25 de reforma, cap. 3, se encargaria á los ordinarios que observaran la disposicion conciliar y canónica, y que no solo las usaran con la moderacion debida, sino que tambien se abstuvieran de fulminarlas, siempre que con los remedios ordinarios de la ejecucion real ó personal se pudiera ocurrir á la necesidad de imponerlas, y que solamente se valieran de ellas, cuando no se pudiera proceder á alguna de dichas ejecuciones contra los reos, y estos se mostraran contumaces en obedecer los decretos de los jueces eclesiásticos. Este acuerdo, inserto en cédula de 12 de mayo de 1741, que forma en parte la ley 9, tít. 9, lib. 1 de la Novísima Recopilacion, fué confirmado por Breve de 14 de diciembre del referido año 1737, (nota 6 al tít. y libro citados), dirigido para cumplimiento del Concordato á los arzobispos y obispos del reino, previniéndoles la discrecion necesaria para saber cuando habian de fulminarse las censuras eclesiásticas, que segun los cánones y el citado Concilio, nunca debian librarse sino por via de socorro, y con mucha cautela. Aun en el caso en que un magistrado ó juez real se entrometiera á conocer de asuntos propios de la competencia del eclesiástico, no podria este, conforme á las leyes del reino, defender su jurisdiccion, perturbada por medio de censuras. Asi se declaró, con motivo de un caso igual, por la real cédula de 19 de noviembre de 1771, que forma la ley 10 del título y libro citados, en cuyo primer artículo se reencarga el uso de las censuras con la sobriedad y circunspeccion que previene el Santo Concilio de Trento, y se manda que, si los jueces reales diesen motivo de queja, entrometiéndose á conocer de cosas eclesiásticas, los prelados lo representaran en derechura del Consejo, ó por conducto de los fiscales, para que se proveyera del remedio conveniente, y en caso de no tomarlo, lo pudieran hacer por la vía reservada del despacho universal, á fin de que S. M. mandase dictar la providencia mas justa y conveniente (1). Esta disposicion, fundada en el espíritu de la Iglesia, que no ha cesado de inculcar desde el principio la sobriedad en la imposicion de las censuras, se hizo necesaria en España, á imitacion de la adoptada en Bélgica por Cárlos V., convenida por los concordatos, de Bravante, hecha saber por Felipe II al Concilio provincial de Cambray y establecida ya, y observada de antemano en Francia, luego que dieron lugar á ella algunos casos de fuerza notoria de los jueces eclesiásticos, que publicaban censuras contra los regentes de la real jurisdiccion, con motivo de actos ejercidos por aquellos, como tales, ó á virtud de competencias entre ambas autoridades suscitadas; siendo, entre otros, muy notable el caso que produjo la real cédula de D. Felipe V. de 27 de enero de 1746, que es la ley 23, tít. 2, lib. 2 del citado Código, y el que á pesar de tan terminantes disposiciones dió despues motivo á la espedida por D. Cárlos III en 2 de setiembre de 1778, y forma la ley 25 de dichos título y libro, que puede llamarse capital en la materia.

Efectos de las censuras. Unos son comunes á todas las censuras, y otros peculiares de cada especie de ellas, asi como tambien son distintos los que producen las llamadas *latæ* ó *ferendæ sententiæ*, y no deben confundirse los que acompañan al acto mismo

(1) Véase la nota 7 al tít. y lib. citados.

de su imposicion con los que resultan de su desprecio ó violacion despues de impuestas.

En toda censura la apelacion interpuesta, atribuye al superior el conocimiento de la causa, mas no suspende la ejecucion de la sentencia, ó lo que es lo mismo, solo se admite en el efecto devolutivo; no en el suspensivo (1), á no ser que sea condicional el precepto de censura, y antes de apelar, no se haya verificado la condicion (2). Además el notado con censura por la ley ó por el hombre, si es justa, lo está tambien para con Dios (3), y si lo fué en una iglesia, se entiende notado en todas (4), porque se le priva del derecho en aquella, no como iglesia particular; sino como universal, y en esto están conformes lost estos canónicos, respecto de cada especie de censura, por lo cual en la antigua disciplina se acostumbraba á hacer saber los nombres, principalmente de los escomulgados, á todos los obispos vecinos ó á aquellos á quienes mas interesase (5). Tambien es comun á toda censura, que si despues de publicada, alguno comunica con el censurado en lo que por aquella se prohibe, incurre en la misma, si conviene á su estado ó condicion; ó en otra que tenga esta cualidad (6). Por último, ninguna censura priva de lo necesario para la vida del hombre, ni para la salud espiritual (7), como tampoco de escepcionar en juicio (8), ni del carácter sacramental, que por su naturaleza es indeleble, aunque sí del ejercicio de las órdenes (9). De los efectos de cada especie de censura se trata en sus artículos correspondientes (10).

Las censuras que se imponen por sentencia, aunque sea en virtud de la prescripcion de derecho, no causan efecto antes de pronunciarse aquella; ni hasta que sea pública, pues hasta entonces es imperfecta. Si únicamente se hizo saber al reo sin noticiarla á los demás, solo tendrá efecto respecto de aquel, no respecto de estos (1). Asi sucede en la censura llamada *latæ sententiæ*, que al incurso en ella obliga á conducirse como tal, escusándose los demás, si, no estando aun publicada, comunican con el censurado en lo que á este se le prohibe.

Los efectos de violacion de la censura son producidos, ó por la permanencia en ella por largo tiempo sin pedir perdon á la Iglesia con ánimo devoto, demostrando en lo contrario contumacia; ó perseverando en el crímen que dió lugar á la censura, ó ejerciendo actos de que esta priva. En el primer caso el censurado no goza del beneficio de la absolucion, que se concede por rescriptos pontificios á los que obtienen estos (2). En el segundo debe imponérsele mayor censura, ó si esta fué muy grave, proceder á imponerle pena, segun el prudente arbitrio del superior, como si hubiese ejecutado actos prohibidos; y en el tercero se declara írrito lo hecho (3). En cuanto á la violacion de la censura ajena, el que la comete, comunicando con el censurado en lo que á este se prohibe, se sujeta á censura, en proporcion al hecho (4); y si viola la propia, personal, ó la local, incurre por el mismo hecho en irregularidad (5), y se le imponen además otros castigos: de modo, que si son legos y violan, por ejemplo, el entredicho, se les impone escomunion; y si no guardan esta, el anatema (6): mas si son clérigos, como puede suspendérseles, se les

(1) Cap. 15, 14, 37, tit. 28, lib. 2 de las Decretales—cap. 8, tit. 31, lib. 1 de id.: cap. 20, tit. 11, lib. 5 del Sexto—Conc. Trid., ses. 22 de ref., cap. 1.
(2) Cap. 40, tit. 28, lib. 2 de las Decretales.
(3) Cán. 6, caus 24, quæst. 1.
(4) Cit., cap. 8, tit. 31, lib. 1 de las Decretales.
(5) Cán. 106, caus. 11, quæst. 3—cap. 1, tit. 17, lib. 5 de las Decretales.
(6) Cán. 14, caus. 16, quæst. 7.
(7) Cán. 105, caus. 11, quæst. 3.
(8) Cap. 8 y 10, tit. 25, lib. 2 de las Decretales.
(9) Así deben entenderse los cán. 2, 3, 4 y 5, caus. 9, quæst 1.
(10) Véase en Eybel, lib. 3, cap. 4, §. 482, nota k, esplicados los efectos de las censuras en general con relacion á las clases de comunion *mere interna, mere esterna, y mixta.*

(1) Esta disciplina comenzó á regir despues de publicada en el Concilio de Constanza la Estravagante *ad evitandum.*
(2) Así se dispone por la regla 66 de Cancelaria. En la jurisprudencia canónica se ha adoptado la palabra latina *indescentia* para significar con toda propiedad la permanencia en la censura, si es de escomunion; en cuyo caso el cap. 18, tit. 7, lib. 5 de las Decretales y el cap. 3, ses. 25 de ref. del Concilio Tridentino, consideran como hereje, ó sospechoso de heregía al contumaz: cuando se trata de otras censuras, los ordinarios pueden proceder á castigarla con mayores censuras ó penas, como se dispone en el cán. 8, dist. 55 y en los cap. 2, tit. 27, lib 5 y cap. 8, tit. 14, lib. 1 de las Decretales.
(3) Cap. 18, tit. 35, lib. 5 de las Decretales.
(4) Cap. 3, tit. 19, cap. tit. 17, lib. 5 de las Decretales—cap. 2. tit. 2, lib. 5 del Sexto—cap. 1, tit. 7, lib. 3 de las Clementinas.
(5) Cán. 6 y 7, caus, 11, quæst. 3—cap. 1, tit. 8, lib. 1—cap. 12, 14, 18, tit. 12, lib. 5 de las Decretales—cap. 1, 5, 6, y 9, tit. 27, id., id.—cap. 47, tit. 39 id., id., cap. 1, in fine. —cap. 18, §. 1, cap. 20, tit. 11 y cap. 1, tit. 14, lib. 5 del Sexto.
(6) Cap. 11, tit. 33, lib. 5 de las Decretales—cap. 2, tit. 10, lib. 5, de las Clementinas.

sujeta á mayor censura ó pena (1), escomulgándolos, privándolos del beneficio ó deponiéndolos de su grado. Los clérigos, que estando notados con censura, promueven tumultos ó sediciones contra la potestad eclesiástica, pierden el fuero y son entregados al brazo seglar (2). Por último, los efectos de la violacion de la censura con relacion á la iglesia ó lugar sagrado en que aquella se comete, son, entre otros, profanarse la iglesia, si en ella se entierra el cadáver del escomulgado ó entredicho (3), y perder el derecho de sepulcro, si se dá sepultura en ella á los cadáveres de los hereges ó sus fautores (4).

No terminaremos esta materia sin hacer algunas observaciones, que creemos necesarias acerca del efecto de la censura con relacion al soberano de un estado católico. En otro lugar de este artículo, sin negar la subordinacion, que como cristiano católico debe el soberano prestar á los preceptos de la Iglesia, hemos puesto de manifiesto la conveniencia, y aun la necesidad de no usar nunca del derecho de censura contra el mismo, siguiendo en esto las reglas de la prudencia, la práctica de la Iglesia primitiva, y los consejos de sus sábios y santos doctores. Aquí añadiremos, que en el supuesto de que se usara semejante derecho contra un príncipe católico, los efectos de la censura serian meramente espirituales, y los súbditos no estarian menos obligados á obedecerle en todo lo que no contrariase la ley divina. Basta á este propósito considerar, por una parte el fin de la censura y los bienes y derechos de que priva, y por otra los derechos que corresponden al ciudadano y jefe de un Estado, cualquiera que sea la religion que profese, enteramente diversos de aquellos de que goza el cristiano, como tal y sin relacion á la sociedad de que es individuo. La autoridad de los príncipes no está fundada en la caridad cristiana, ni en la fé, como dice San Pablo, el cual, escribiendo á los romanos, aun cuando hablaba de potestades seculares é infieles, manda que les prestasen obediencia, como ministros de Dios. San Pedro en su primera carta, cap. 11, enseñó, que no solo se debe servir y obedecer á los amos buenos y morigerados, sino tambien á los díscolos. En esto los dos mencionados Apóstoles no hicieron otra cosa que reproducir el precepto de su maestro, mandando á la turba que le seguia que obedeciese á los escribas y fariseos. Por esta razon fué condenada en el Concilio de Constanza la proposicion de Wicleff: *nullus est dominus civilis, dum est in peccato mortali*. La disciplina de la Iglesia en los primeros tiempos ha sido muy conforme con la doctrina de su divino fundador, y con la tradicion de los Apóstoles. En la época de su decadencia, muy especialmente en los siglos X y XI, fué perdiéndose ya la antigua parsimonia, no solo por parte de los obispos, precisados á pronunciar censuras y penas, sino tambien por parte de los Papas, cuya autoridad, por multitud de causas, que la historia nos manifiesta, habia llegado á estenderse sobremanera, y que celosos de restablecer la disciplina y el honor del pontificado, usaron de las censuras con un rigor, hasta entonces inusitado. En el estado de costumbres y de preocupacion, fué fácil el abuso, y el medio puramente medicinal y espiritual llegó á convertirse en arma terrible y de efectos muy trascendentales en el órden social, empleándose la escomunion, como la mas grave de todas las censuras, contra los reyes, con la mira de hacer dependiente su poder del espiritual, pues tales eran los efectos señalados á aquella y las consecuencias de ciertas pretensiones, que empezadas á manifestarse cerca de dos siglos antes de Gregorio VII, fueron elevadas por este á máximas ciertas y reconocidas fundadas en el omnímodo poder de atar y desatar, concedido por Dios á sus Apóstoles, y puestas en práctica por el mismo, aunque no con los mejores resultados (1).

(1) Cap. 13. §. 6, tit. 7, lib. 5 de las Decretales.
(2) Can. 7, caus. 11, quæst. 3—cap. 10, tit. 1, lib. 2 de las Decretales.
(3) Cap. 7, tit. 40, lib. 3 de id.
(4) Cap. 2, tit. 1, lib. 5 del Sexto.

(1) Véanse los discursos 17 y 18 de Fleuri, sobre la historia eclesiástica.

La disciplina de la Iglesia de España, sin dejar de reconocer el principio de independencia de la potestad eclesiástica para la imposicion de las censuras, ha limitado sobremanera respecto de los soberanos los efectos de aquellas. El Rey, segun declaracion del 7.° Concilio Toledano, podia tratar con quien quisiese, por mas que fuese descomulgado con el mayor rigor: el 10 permitia que todos tratasen á aquel á quien el Rey honrára con su trato, y eso por respeto y miramiento al soberano, exigiéndolo otras veces los negocios públicos: y el 12, mas espreso que los anteriores, estableció, que si la real potestad admitiese á la gracia de su benignidad á algunos culpados, ó los hiciese participantes de su mesa, el pueblo y los sacerdotes deberian tambien admitirlos á su comunion elesiástica, para que no aparezca como ajeno á los ministros de Dios, lo que no desdecha, sino admite la piedad.

SECCION IV.

REMEDIOS CONTRA LAS CENSURAS: INEFICACIA Á VECES DE LAS MISMAS: ABSOLUCION: RESERVA DE ABSOLUCION.

El remedio ordinario contra las censuras; como contra todo agravio inferido jurisdiccionalmente, es la apelacion, ora por nulidad, ora por injusticia: y hay además de la apelacion, otros medios y causas canónicas para invalidarlas, ó hacer ineficaces sus efectos. Reputadas, no como pena *vindicativa* absolutamente, sino tambien como pena medicinal, acercándose además á penitencia, admiten absolucion, que tambien, como en los pecados, y por las mismas razones, se reserva: de todo lo cual tratamos en la presente seccion.

§. 1.° *Apelacion y otros medios de invalidar, ó dejar sin efecto las censuras.*

Los fundamentos naturales de la apelacion son la nulidad y la injusticia de las censuras.

Es nula la censura por defecto de jurisdiccion, cuando el que la impuso, carece absolutamente de ella, ó es incompetente respecto del sujeto censurado, ó si dejó de serlo en cierta causa, como sucede á aquel, de cuya sentencia se interpuso apelacion, que fué propuesta ante el superior (1).

Por defecto de ánimo ó intencion, cuando se pronunció, v. gr., por un amante, ó compelido del miedo ó de la violencia, ó dominado de cólera, ó ébrio, etc., con error en la persona (2).

Por defecto de forma ó de solemnidades esenciales, siempre que se hayan omitido la monicion (3) y la citacion en los casos en que ambas, ó una de ellas, son necesarias, ó se hayan hecho ilegítimamente; y tambien cuando no se ha pronunciado por escrito, con espresion de causa, y entregando al reo, dentro de un mes, si lo pidió, el ejemplar ó testimonio de la sentencia (4).

Es injusta la censura, absolutamente hablando, cuando, sin concurrir ninguno de los defectos, que acaban de enumerarse, se pronunció sin causa, ó esta no fué grave, legítima ni suficiente, ó medió error de hecho ó de derecho (5). Lo será respecto del que la impone, y no de aquel á quien se impone, cuando, teniendo, por ejemplo, el prelado causa justa para escomulgar, no impone la censura, en virtud de aquella; sino movido de cierto ódio privado (6).

Siendo nula la censura, ó alegando su nulidad el censurado, debe este acatarla hasta que así lo declare el superior, pudiendo, mientras el recurso se sustancia, pedir la absolucion *ad cautelam* (7), á menos que la

(1) Cán. 4 á 7, dist. 21—quæst. 2, caus. 9—cap. 2; tit. 29, y cap. 15 y 38 in fin., tit. 30, lib. 1—cap. 12, tit. 33, lib. 5—cap. 37, tit. 28, lib. 2 de las Decretales, y cap. 2, tit. 2, lib. 1 del Sexto.

(2) Cán. 89, caus. 11, quæst. 3—cap. 4, tit. 40, lib. 1—cap. 17, tit. 32, lib. 3 de las Decretales.

(3) Así se deduce de las palabras del Concilio IV Lateranense cap. 48, tit. 39, lib. 5 de las Decretales): *etiamsi justa fuerit excommunicationis sententia*; pero el Concilio I Lugdunense (cap. 3, tit. 11, lib. 5 del Sexto), fué mas esplícito al declarar irrita é insubsistente la escomunion pronunciada sin prévia monicion: *aliter autem excommunicatio prolata non tenear*. Véase, en cuanto á la interpretacion de las palabras que subrayamos, á Berardi, lug. cit. final del §. *Gravis*.

(4) Cap. 1, tit. 11, lib. 5 del Sexto.

(5) Cán. 11, caus. 2, quæst. 1—cán. 32, 33, 35, 41, 42, 43, 46, 50, 53, caus. 11, quæst. 3—cán. 4, caus. 24, quæst. 1—cap. 3, tit. 13, lib. 2 de las Decretales—cap. 7, §. 3, 5 y 6, tit. 11, lib. 5 del Sexto—cap. 2, tit. 10, lib. 5 de las Estravag. com.

(6) Esta clase de injusticia no pertenece al fuero esterno de la Iglesia el revocarla, sino que está reservada al juicio divino.

(7) Así se dispone en el §. 2 del cap. 7, tit. 11, lib. 5 del Sexto.

nulidad sea manifiesta, por defecto de jurisdiccion bajo cualquiera de los tres aspectos indicados. Si la censura es injusta, debe tambien guardarse hasta que la revoque el que la impuso ó el superior la declare tal (1), sirviéndole de merecimiento, si la sufre con ánimo cristiano (2), y no debiendo sentirla en su interior, porque ante Dios no tienen valor las sentencias injustas ó inícuas de los hombres (3); pero interin entabla el recurso de queja y apelacion, puede pedir que se le repare la injuria y se le dé satisfaccion por el que se la infirió, si procedió de oficio ó en defensa de sus derechos (4), ó por el acusador ó denunciante, si el juicio comenzó á virtud de acusacion ó denuncia; y aun segun las circunstancias del hecho puede pedir que el juez le castigue á su arbitrio.

Es regla general, que el que abusa de la facultad de imponer censuras, debe ser privado de ella (5): y si, amonestado dos veces, insiste, castigarle tambien con censura (6), quedando *ipso jure*, y en el momento, sujeto por un mes á la sentencia de entredicho, si no hubiese guardado en la imposicion de la censura la forma prescrita por los concilios Lateranense 4.° (1), y Lugdunense 1.° (2).

De lo dicho se deduce tambien, que los legos, por carecer de jurisdiccion eclesiástica, no pueden imponer censuras, ni tampoco inquirir su injusticia, pues esto se reserva solo á la potestad eclesiástica (3). Sobre este punto es terminante la decision del concilio de Trento en el capítulo 3 de la seccion 25 de reforma: «No sea lícito á cualquier magistrado secular, prohibir al juez eclesiástico que escomulgue á alguno, ni mandarle que revoque la escomunion impuesta, so pretesto de que no se ha observado lo contenido en el presente decreto; pues este conocimiento no corresponde á los seglares, sino á los eclesiásticos.» Esta disciplina, admitida en España y mandada observar, como las demás disposiciones tridentinas, en cuanto no se opongan al ejercicio de las regalías, no deroga de modo alguno el recurso de fuerza y proteccion que puede y debe presentarse ante la real jurisdiccion contra los jueces eclesiásticos, que en el uso de las censuras no se arreglasen á lo establecido por las leyes de la Iglesia y del Estado, imponiéndolas en asuntos meramente temporales, cuando puede echarse mano de otros remedios ordinarios, ó sin guardar el órden y formalidades que los cánones y leyes establecen para que pueda dictarse válidamente sentencia condenatoria. Negar á los particulares este recurso de apelacion *tuitiva* y no reconocer el derecho de la potestad soberana, equivaldria á despojar á esta de la parte mas esencial y necesaria de su regalía, que consiste en la defensa y proteccion de sus vasallos, y la cual no puede abdicar, sin renunciar parte de su independencia, sin dividir el imperio, y sin faltar á su primera obligacion, y seria tanto como privar á los súbditos del único remedio natural y posible contra el abuso ó usurpacion de autoridad, de los que no por ejercer ju-

(1) Cán. 1 y 27, caus. 11, quæst. 3—cán. 11, caus. 2, quæst. 1—cán. 2 y 6, caus. 24, quæst. 3.—Fúndase esta doctrina en el principio de obediencia que todo inferior debe prestar á los preceptos del superior, sin serle permitido juzgar de su justicia ó injusticia por su propia autoridad.

(2) *Erit ad meritum*, dice Santo Tomás: y San Agustin añade en el cap. 6, trat. de VERA RELIGIONE: *Hos coronat in occulto Pater in occulto videns*. Así se esplica tambien el testo del cap. 13, tit. 13, lib. 2 y 44 tit. 39 lib. 5 de las Decretales.

(3) Cán. 46, 47, 49, 50, 51, 54, 89, 90, caus. 11, quæst. 3—cán. 4 y 7, caus. 24, quæst. 3. El testo tan sabido de San Gregorio y que Graciano inserta en el cán. 4, cau. 11, quæst. 3 *Sententia pastoris, sive justa, sive injusta fuerit, timenda est*, ha de entenderse en el sentido de que el súbdito debe temerla en tanto, en cuanto recela haber dado causa á ella por su culpa, acaso sin conocerlo. Si en su conciencia está seguro de la injusticia de la sentencia, pero el público la desconoce, está del mismo modo obligado á conformarse con ella, y en este sentido es verdad que puede suceder lo que dice Inocencio III en el cap. 28, tit. 39, lib. 5 de las Decretales. *Ut, qui liber est apud Deum, ecclesiastica sit innodatus sententia*: mas si la injusticia de la sentencia es pública y notoria, puede públicamente despreciarse, porque á quien daña es al que la impone, y no obliga en el foro interno ni en el esterno, de modo que no debe cuidarse de la absolucion. Esta doctrina está reconocida y sentada ya por el Papa Gelasio, cán. 46, causa 11, quæst. 3..... *Ita ergo ea se non absolvi desideret, quia se nullatenus perspicit obligatum*; y como fundada en principio de moral y de justicia, no han podido menos de aceptarla aun los canonistas de opiniones mas rígidas. Véase Devoti, lib. 4, tit. 18, §. 13, nota 3, donde menciona los autores de opuestas escuelas que interpretan de distinto modo el pasaje de San Gregorio; y Van Espen, part. 3, tit. 11, cap. 5, número 12 y sig.

(4) Cap. 48, tit. 39, lib. 5 de las Decretales—cap. 6 y 7, tit. 11, lib. 5 del Sexto.

(5) Cán. 60 y 65, caus. 11, quæst. 3—cap. 8 y 23, tit. 31, lib. 1—y cap. 7, tit. 39, lib. 5 de las Decretales.

(6) Cán. 11, caus. 2, quæst. 1—cán. 6, caus. 24, quæst. 2—cap. 1, tit. 31, lib. 5 de las Decretales.

(1) Cit. cap. 48, tit. 39, lib. 5 de id.

(2) Cit. cap. 1.°, tit. 11, lib. 5 del Sexto.

(3) En sentido católico no puede negarse la independencia de la potestad espiritual para la imposicion, relajacion o absolucion de las censuras. Véase en Devoti, tom. 4, tit. 18, §. 12, nota 4, indicados los autores de las escuelas opuestas sobre este punto.

risdiccion eclesiástica dejan de estar sujetos á la observancia de las leyes, que en apoyo de aquella, no menos que en defensa de los derechos reales, emanan de la autoridad temporal. Véase la seccion 5.ª

Además de lo dicho, consideradas las diversas clases de censuras, puede decirse que estas se estinguen por la *abrogacion, la revocacion, la casacion, muerte del que las impone, muerte del afecto con ellas, trascurso de tiempo y absolucion* (1). Tiene lugar la abrogacion en las impuestas por derecho, y se verifica como la de la ley, á la cual se equipara, por la publicacion de otra nueva ó por la costumbre: de modo que, el que despues de abrogada delinque contra ella, no se sujeta á censura. La revocacion solo es aplicable á la censura impuesta por precepto del superior, cuando este lo revocó; ó por sentencia, cuando el juez la reforma despues de mejor examinada la causa (2). La casacion, aplicable tambien á las censuras, impuestas por precepto ó por sentencia, se efectúa por autoridad del superior, en virtud del recurso de queja ó apelacion, *interim*, y en eso se diferencia de la revocacion; de modo que si el superior declara irrita la censura, se estingue sin necesidad de absolucion, como cuando solo la declara injusta (3). Por muerte del que la impone, se acaba, mas bien la indiccion de censura por precepto, que la misma censura; pues si el inferior delinque, despues de muerto el superior que la señaló, no incurrirá en censura alguna, como si en vida del superior hubiera violado su precepto (4).—Por muerte de aquel á quien se impone se estinguen únicamente las censuras de suspension y escomunion menor, no las de escomunion mayor ni entredicho (5). Por el transcurso de tiempo, claro es que se estinguen las censuras que lo tienen determinado, y que segun ya queda en su lugar, son mas bien penas, que censuras propiamente dichas (1).

(1) La suspension, en cuanto á veces produce efectos de irregularidad, se estingue por la *dispensa*, cap. 2, tit. 28.—cap. 2 y 3, tit. 30.—cap 52, tit. 39, lib. 5 de las Decretales.—cap. 2, tit. 9, lib. 10 el Sexto.

(2) Cap. 48, tit. 39, lib. 5 de las Decretales.—cap. 10, tit. 15, lib. 2 del Sexto.

(3) Cap. 1, tit. 11, lib. 5 del sesto.

(4) Cán. 31 de los apostolicos.—can. 4, causa 11, quœst. 3, —cán. 5 y 8, caus. 33, quœst. 9, cap. 21, tit. 39, lib. 5 de las Decretales.

(5) Véase lo que decimos antes, final del §. *generalmente.*

§. 2.° *Absolucion.*

La absolucion, (2) voz, la mas general de que usan los canonistas, para significar la estincion de las censuras, es el medio aplicable á todas las que son propiamente tales é impuestas legítimamente; y se concede solo á los que la piden con ánimo sumiso, dando muestras de penitencia y manifestándose preparados para la competente satisfaccion. Diferénciase de la *relajacion*, en que aquella tiene lugar en las censuras personales, y esta solo respecto del entredicho local, prévio conocimiento de causa (3).

Para dar á esta parte del artículo la unidad conveniente, trataremos de la absolucion de las censuras con relacion á los que pueden concederla, á los que pueden obtenerla, á las censuras en que es necesaria, á la forma de darse y á las cargas que se imponen á los que han de ser ó sido absueltos.

1.° Puede absolver de las censuras el que tiene autoridad para imponerlas; sin que de este principio general deba deducirse que carezcan de aquella facultad los que no gozan de esta. Es tambien regla general que cualquier sacerdote puede absolver de toda censura al que, ligado con ella, se halla en el artículo de la muerte (4); mientras que nada hace el que destituido de facultad para ello absuelve (5): y que el que tiene esta facultad por derecho ordinario, puede encargarla á otro. Sin embargo, estas enunciaciones generales no serian suficientes para conocer en un caso concreto quien podria ó no absolver de la censura. Como esta puede dimanar á *jure* ó *ab-*

(1) Sobre esta materia debe leerse como ampliacion lo que trae Berardi, cap. 11, final del §. 1.

(2) En los antiguos cánones no se halla esta palabra para indicar la estincion de la censura, sino solo las frases *reconciliari, recipi ad pacem, veniam, communionem*, en favor de los que demostraban su enmienda.

(3) Cap. 10, tit. 11, lib. 5 del Sexto.

(4) Cap. 25, tit. 28, lib. 2 de las Decretales.—cap. 11, §. 1, tit. 31, lib. 1 de id.—cap. 7, ses, 14 de pœnitentia del Concilio Tridentino.

(5) Cap. 11, tit. 35, lib. 5 de las Decretales.

homine, no será fuera de propósito esponer la distinta doctrina que debe tenerse presente, segun que se trate de una ó de otra.

En la censura *ab homine* solo el que la dictó, ó su sucesor en el oficio ó jurisdiccion, pueden absolver en el foro esterno (1); y por lo tanto el cabildo en sede vacante (2): el superior, ya sea este el obispo con relacion al prelado inferior constituido en su diócesis, con tal que le dé noticia de ello y procure que el absuelto le satisfaga (3); ya sea el metropolitano respecto del obispo, cuando lo haga por virtud de querella ó apelacion ante él entablada, noticiándolo del propio modo al obispo (4). Es de notar que no por eso le está prohibido á este absolver, pendiente la apelacion, antes bien el metropolitano ú otro superior debe remitir á él al apelante, para que le absuelva, si fué notado justamente con censura; no asi cuando la apelacion fué interpuesta por causa de nulidad, pues entonces debe oírsele sin absolucion, á no ser que el metropolitano prefiera absolver *ad cautelam*, cuya absolucion se concede con el fin de que ínterin el recurso se decide, no esté escluido de todo comercio religioso y social (5); y que no obstante la apelacion y la absolucion del superior, puede el obispo imponer de nuevo censura, si el reo permanece obcecado en el crímen. Esta doctrina es tambien aplicable, segun derecho, á los delegados apostólicos, siempre que la causa de la censura haya motivado el juicio de la delegacion.

En la censura llamada *latæ sententiæ* conviene distinguir, si aquella es impropia, porque tenga tiempo determinado, pues entonces, como es, mas bien, dispensa, que absolucion, podrá concederla solo el que pueda dispensar del derecho. Si es censura propiamente dicha, todavía debe distinguirse, si se pronunció sentencia declaratoria, en cuyo caso al que la dió corresponde absolver, á no ser que obste una reserva especial en gracia del prelado superior; y si no hubo tal denuncia, como acontece por lo comun en los crímenes ocultos, puede cualquiera ser absuelto por su propio obispo, entendiéndose como tal, el que le impuso la censura ó el que sucedió á aquel en su jurisdiccion, ó por el propio sacerdote, entendiéndose tal absolutamente el párroco y por ampliacion todo sacerdote legítimamente aprobado y con autoridad para absolver, como ministro del Sacramento de la Penitencia, de los pecados mortales (1). Esta teoría reconoce por base el texto espreso del capítulo 29, tít. 39, lib. 5 de las Decretales, y la práctica constante de la Iglesia, y lo dá bien á entender la fórmula que, establecida por el ritual, precede á la absolucion sacramental, con el fin de que esta no se esponga á ser inválida por censura contraida por el penitente (2), y la que se acostumbró insertar en todos los rescriptos, bulas y privilegios apostólicos con el propio fin de que pueda conseguirse el efecto de la gracia ó privilegio, sin que obste la censura en que pudo

(1) Cit. cap. 11, tit. 31, y tit. 33.
(2) Cap. único, lit. 17, lib 1 del Sexto.
(3) Cap. 2, tit. 31, lib. 1 de las Decretales.
(4) Cap. 8 y 9 de id.—cap. 1, tit. 16, lib. 1 del Sexto.—cap. 40 y 18, tit. 39, lib. 5 de las Decretales.—Cap. 1 y 7, §. 1, tit. 11, lib. 5 del Sexto.—cap. 3, §. 9, tit. 15, lib. 2 del Sexto.—cap. 3, tit. 31, lib. 1 de las Decretales. Antiguamente se apelaba del obispo que rehusaba alzar la censura al Concilio provincial, segun lo dispuso el cánon 5 del Concilio Niceno; pero la censura impuesta por el obispo conservaba su vigor hasta que el fallo conciliar declaraba que debia quitarse, y de su sentencia no cabia ulterior recurso. V. Van Espen, Parte 2, tit. 11, cap. 11, núm. 3 y sig.
(5) Esta absolucion es en el *foro esterno*: suele á veces concederse *á peticion de parte*, cuando se duda si p. e. incurrió en escomunion, ó si esta es injusta, ó finalmente cuando hay peligro de muerte, ó ha de obtenerse un fin cierto y determinado, p. e. dar testimonio, comparecer en juicio, obtener un beneficio, etc. En todos estos casos no se disuelve enteramente la censura, sino en cuanto á cierto efecto ó mientras dura el impedimento, pues acabado este reincide de nuevo en escomunion y está obligado á pedir de ella absolucion, y por eso se llama tambien *absolutio cum reincidentia, ad reincidendum*. Las absoluciones de esta clase no se conocieron hasta el siglo IX ó X luego que comenzaron á ser frecuentes las escomuniones, pues antiguamente era regla de derecho que ningun escomulgado fuese absuelto antes de discutirse y acabarse la causa de la escomunion, como se vé en el cap. 1, tit. 1, lib. 2 de las Decretales. El primer ejemplo de esta absolucion se halla en el cap. 9, tit. 25, lib. 2 de id. Véase Van Espen, Part. 3, tit. 11, §. 16 y sig.

(1) Suarez *De censuris*, disput. 1, sect. 3.
(2) He aquí la fórmula: *Absolvo te ab omni vinculo excommunicationis, suspensionis et interdicti, in quantum possum ac tu indiges.* Es indudable que despues de introducida la distincion de foro interno y esterno la absolucion en el uno, no la supone en el otro; pero por lo tocante á las censuras de que tratamos, seria mas conforme al fin de aquellas que se considerase libre de ser molestado en el foro esterno aquel, que en el de la conciencia fué absuelto. Toda la cuestion, pues, suscitada por los canonistas sobre la incompetencia del que solo tiene jurisdiccion del foro interno, para absolver de censuras impuestas en virtud de la jurisdiccion del fuero esterno, está terminada con advertir los términos condicionales y el objeto á que se dirije la absolucion que se concede de las censuras latæ en el tribunal de la penitencia, como preliminar á la de los pecados mortales. Véase sin embargo Berardi, lug. cit., cap. 11, §. *Quod si*. Esta absolucion *ad cautelam* llamada tambien *ad superabundantiam* se concede, como es visto, en el *foro interno*, y *al que no la pide* y ni aun duda ni sospecha haber incurrido en censura.

haber incurrido el impetrante (1) por lo cual estas absoluciones han solido llamarse *generales*, porque no dicen relacion á especie determinada de censura.

§. 3.° *Reserva de absolucion.*

La doctrina hasta aquí espuesta, sobre la autoridad, que conforme al testo del cap. 29, tit. 39, lib. 5 de las Decretales puede absolver de las censuras, debe entenderse si la absolucion no se reservó al Papa, á los obispos ú otros prelados inferiores. Siendo la materia de reserva de censuras muy importante, si no por la aplicacion diaria de estas, al menos como punto vigente de disciplina general y particular, y en razon de las cuestiones de jurisdiccion á que puede dar orígen; creemos conveniente esponerla con alguna detencion, refiriendo para mayor complemento á nuestros lectores á lo que se dijo en el artículo CASOS RESERVADOS en cuanto dicen relacion con las censuras reservadas. Mas antes de enumerar estas, será oportuno indicar la autoridad, fin, y modo de hacerse y terminar estas reservas.

Es un principio reconocido que la potestad de reservar la absolucion de la censura, reside en todo aquel que tiene la de imponerla (2); de modo que, pudiendo esta ser *á jure* ó *ab homine*, cabe tambien bajo ambos conceptos su reserva, entendiendo por derecho, no solo el comun, sino además las constituciones particulares dadas en sínodo ó fuera de él (3). Como la costumbre legítima tiene fuerza de ley, mayormente en punto de jurisdiccion, no repugna que en su virtud se haya introducido la reserva, y de ello hay ejemplos en los cánones (4).

El fin de la reserva en las censuras se dirige á la mas segura observancia de la disciplina, á elevar y sostener el prestigio y respeto de la autoridad, ya episcopal, ya superior, y principalmente á la mayor facilidad en la correccion y enmienda (1).

La causa de la reserva debe ser muy grave, pero mas que la que puede dar ocasion á imponer la censura, por que la reserva la hace aun mas acerba.

El modo de reservarse las censuras es vario, en términos que su absolucion esté reservada al Pontífice, al patriarca, al obispo, al prelado, secular ó regular con jurisdiccion cuasi episcopal, mas no á los inferiores. En este punto es de notar que el Pontífice puede absolver de censuras reservadas al obispo ú otro prelado con jurisdiccion episcopal; y no al contrario: que en muchos casos no pueden los obispos absolver de censuras reservadas al Papa, si no solo en el foro interno, quedando á aquel la del foro esterno (2): que puede asimismo absolver por medio de sus legados ó delegados (3), y si se comete al obispo esta facultad, ha de ejercerla por sí (4): que los simples presbíteros tienen menos derecho en las censuras reservadas, que los obispos en las que lo están al superior (5): y, por último, que en los casos en que el inferior puede absolver de reservados, debe inculcarse al absuelto que, en cuanto ser pueda, se persone ante aquel, á cuyo favor se hizo la reserva, para que con su autoridad y prudencia se asegure lo hecho (6).

Cesa la reserva, cualquiera que sea, en el artículo de la muerte (7): por su naturaleza misma, cuando cesa la censura (8): y en fin, por todos aquellos modos que la infliccion ó señalamiento de ella, ya haya sido hecha por la ley, ya por precepto, ya por sentencia (9).

---

(1) He aquí la fórmula: *Te, ab omni vinculo excommunicationis, quod incurristi absolventes, vel absolutum fore censentes, ad effectum præsentium litterarum consequendum et non alias.*

(2) Cap. 29, tit. 39, lib. 5 de las Decretales.—cap. 7, ses. 14 del Conc. Trid.

(3) En el derecho comun no aparece reserva alguna, sino las hechas por los concilios ó el Papa, aunque conste de la facultad de que gozan los obispos: cit. cap. de las Decretales y Tridentino.

(4) Así se prueba entre otros por el cap. 1, tit. 7, lib. 5 de las Estravag. com. vers. *Incendiarios.*

(1) Cap. 29, tit. 5 lib. 3 de las Decretales.—cap. 3, tit. 9, lib. 5 de las Estravag. comunes.—Conc. Trid. ses. 14; cap. 7.

(2) Así sucede cuando hay grave impedimento para hacer el viaje á Roma.—cap. 11, 29 y 58, tit. 39, lib. 5 de las Decretales.—cap. 3, tit. 10, lib. 5 de las Clementinas.

(3) Aunque el legado ó delegado tenga solo mandato general, si la censura es de aquellas, cuya absolucion acostumbró á delegar el Papa—cap. 4, tit. 30, lib. 1 de las Decretales.—cap. 13, tit. 39, lib. 5 de las Decretales.

(4) Concil. Trid. ses. 24 de ref. cap. 6.

(5) Fúndase esta diferencia en que los presbíteros solo pueden absolver en el artículo de la muerte; y los obispos cuando haya urgente necesidad.

(6) Cap. 11, 29 al fin, y 58, tit. 39, lib. 5 de las Decretales.

(7) Concilio Tridentino ses. 14, cap. 7.

(8) Cap. 3, tit. 23, lib. 3 del Sexto.

(9) Cán. 52, caus. 16, quæst. 1.

Las censuras reservadas, ó lo están al Papa, ó en gracia de los patriarcas, ó de los prelados, ya seculares con diócesis separada de la del obispo, ya regulares con jurisdiccion cuasi episcopal.

Las reservadas al Papa mas frecuentemente y que se mencionan en el cuerpo del derecho ó en el Concilio tridentino (1) son:

La de escomunion, considerada antes *ferendæ*; y hoy *latæ sententiæ*.

Las relativas á los incendiarios, denunciados por sentencia episcopal (2).

A los que tuviesen en su poder letras apostólicas falsificadas, si no las presentasen dentro de 20 dias ó las rompiesen (3).

La de escomunion *latæ sententiæ*.

A los que pusiesen manos violentas en clérigo ó monge (4).

A los clérigos, que á sabiendas y por su voluntad, participasen y admitiesen en sus oficios á los escomulgados por la Santa Sede (5).

A los que quebrantan y despojan los sagrados edificios (6).

A los que sin conocimiento del romano Pontífice se ingieren en la eleccion de dignidades romanas (7).

A los que exigen ciertas pensiones de personas y sobre cosas eclesiásticas (8).

A los que impiden á los prelados de la Iglesia el uso de su potestad para imponer censuras (9).

A los negligentes en castigar á los herejes, si son inferiores á los obispos (10).

A los regulares que administrasen ciertos sacramentos reservados á los párrocos (11).

A los que indujesen á hacer voto, juramento ó promesa de elegir sepultura en sus iglesias ó de no mudar la elegida (1).

A los que prohiben la observancia de la censura rectamente impuesta (2).

A los que exhuman los cadáveres (3).

A los religiosos mendicantes, que pasan á otra órden, que no sea de mendicantes (4).

A los regulares, que sin pedir venia, pasaren el mar (5).

A los que detestasen ó zahiriesen á los veneradores de la Bienaventurada Vírgen María concebida sin mancha (6) (7).

A cualesquiera simoniacos (8).

A los que diesen ausilio á los infieles contra los cristianos con instrumentos militares ó subsidios de guerra (9).

A las prelados, que castigan á sus súbditos, porque acuden á refugiarse á Roma (10).

A los que diesen ó prometiesen algo para obtener rescripto de la Santa Sede (11).

A los que violasen la clausura de monjas ó fuesen cómplices de un duelo (12).

La de suspension (13) impuesta

Al que se ordena prometiendo no irrogará molestia alguna al ordenante (14).

A los colegios ó cabildos que cometieren simonía (15).

A los que reciben prelados sin letras de la Santa Sede (16).

A los ordenadores que vienen de puntos remotos (17).

---

(1) Las reservas singulares, que se hacen por precepto especial pontificio en ciertas causas, aunque contenidas en el cuerpo del derecho, no constituyen derecho comun. Tales son las de que hablan el canon 52, causa 16, quæst. 1, y el cap. 5, título 2, lib. 3 de las Estrav. com.

(2) Cap. 19, tit. 39, lib. 5 de las Decretales.

(3) Cap. 4, tit. 20, lib. 5, id.

(4) Can. 29, caus. 17 quæst. 4.

(5) Cap. 18, tit. 30, lib. 5 de la Decretales.

(6) Cap. 22, id. id.

(7) Cap. 17, tit. 6, lib. 1 del Sexto.

(8) Cap. 3, tit. 23, lib. 3 de id.—Esta Decretal se modificó por las disposiciones contenidas en el cap. único, tit. 17, libro 3 de las Clementinas, y cap. ún., tit. 13, lib. 3 de las Estrav. com.

(9) Cap. 11, tit. 11, lib. 5 del Sexto.

(10) Cap. 1, tit. 3, lib. 5 de las Clementinas, §. 4.

(11) Cap. 1, tit. 7, lib. 3 de id.

(1) Cap. 3, tit. 8 de id.

(2) Cap. 2, tit. 10 de id. id. En el vers. *Et si forsan*, cap. 1, tit. 9, lib. 1 de las Estravag. com. se halla una censura de escomunion reservada por el Papa Sixto á la Santa Sede con motivo de la forma de procedimiento judicial en causas beneficiales.

(3) Cap. 1, tit. 6, lib. 3 de las Estrav. com.

(4) Cap. 1, tit. 8 id. id.

(5) Cap. 2, id. id.

(6) Cap. 2, tit. 12 id. id.

(7) Hoy este caso se agrava, declarado de fé el misterio de la Inmaculada Concepcion.

(8) Cap. 1 y 2, tit. 1, lib. 5 de id.

(9) Cap. 1, tit. 2, id. id.

(10) Cap. 3, tit. 7, id. id.

(11) Cap. 1, tit. 10, lib. 5 de las Estrav. com. En los capítulos 3 y 5, tit 9 de id. se encuentran otras muchas reservas.

(12) El Concilio Tridentino, ses. 25 de ref. cap. 5 y 19, señaló á tales delitos censuras de escomunion, que las recientes constituciones pontificias, no admitidas en todas partes, reservaron á la silla apostólica.

(13) Los cap. 8 y 15, tit. 2, lib. 1 y cap. 33 in fin., tit. 30, libro 2 de las Decretales, contienen ejemplos de reserva de esta censura, que impuesta en virtud de precepto singular y acomodados al caso que la motivó, ciertos hechos incidentes, no constituyen derecho comun.

(14) Cap. 45, tit. 4, lib. 5 de las Decretales.

(15) Cap. 1, tit. 1, lib. 5 de las Estrav. com.

(16) Cap. 1, tit. 3, lib. 1, de id. id.

(17) Cap. 1, tit. 9, lib. 1 del Sexto.

De las censuras reservadas en gracia de los patriarcas no se halla en el derecho otro ejemplo, si no la de los obispos suspensos por el concilio provincial, para la colacion de beneficios, por haberse desviado en este punto de las reglas eclesiásticas (1).

Respecto de los obispos, ya se ha dicho antes que son reservadas á ellos las censuras que imponen por su sentencia: de las censuras llamadas *latæ sententiæ* encontramos reservadas en su favor, además de las impuestas, las relativas:

A los que injuriaron á sus compañeros clérigos, y se les concede en ciertos casos que no acudan á Roma (2).

A los incendiarios y despojadores de las iglesias, cuando no han sido públicamente denunciados (3).

De las reservadas á los prelados seculares, que tienen diócesis separada, ó á los regulares con jurisdiccion cuasi episcopal, solo se encuentra en el derecho un ejemplo, cual es la de escomunion impuesta á los clérigos ó monjes, que mútuamente se hieran (4).

Solo pueden ser absueltos los vivos, porque únicamente respecto de ellos cabe la censura. Es de notar que, á la manera que puede declararse á uno entredicho ó ligado con escomunion mayor, mas no suspenso ni ligado con escomunion menor, asi absolvérsele de dichas dos primeras censuras, porque solo ellas producen efecto, aun despues de la muerte. Sin embargo, asi como, imponiéndolas en este caso, no se ejerce jurisdiccion propia eclesiástica, asi tampoco absolviendo de ellas se hace otra cosa que declarar que alguno falleció absuelto ante Dios, y por lo tanto se le restituye á la comunion (1). La facultad de hacer semejante declaracion corresponde al prelado, que habria podido absolverle si viviese, y en lo que aun pueda rectamente absolverse, deben guardarse las mismas formalidades que en la verdadera absolucion, imponiéndose, cuando el caso lo exija, al heredero la obligacion de satisfacer bajo conminacion de censura (2). Ninguno puede absolverse á sí propio de la censura, si bien el que goza de la potestad general de absolver, puede mandar á otro que le absuelva, del propio modo que sucede en la absolucion de pecados. A ejemplo tambien de esta, puede cualquiera ser absuelto de toda censura, donde quiera que se halle, si no es reservada. Importa poco que la absolucion se obtenga personalmente, por procurador, verbalmente, ó por escrito (3).

Ninguno puede ser admitido á absolucion, sin verdadero arrepentimiento de la culpa que motivó la censura (4), aunque no se duela de los demás delitos que no la produjeron (5): y si solo diese señales esteriores de penitencia, parecerá, no obstante, que para con la Iglesia habrá obtenido la absolucion, en tanto, en cuanto en el foro esterno se le restituya al uso y beneficio de la comunion.

3. La absolucion de las censuras puede ser *general* de todas, ó *particular* de solo una (6), pues la condicion de las censuras, no es como la de los crímenes, cuya absolucion no concede la Iglesia si no general, toda

(1) Cap. 29, tit. 5, lib. 3 de las Decretales.
(2) Cap. 9, tit. 1, lib. 3, cap. 11, 13, 17, 33, tit. 39, lib. 5 de las Decretales.
(3) Cap. 19 y 22 de id. La facultad concedida á los obispos por el cap. 6, ses. 24 de ref. del Concilio Tridentino para *dispensar* de la suspension é irregularidad, provenientes de delito oculto, á escepcion de la que nace del homicidio voluntario y de otros de que se conozca en el fuero contencioso, y para *absolver* en el fuero de la conciencia á cualesquiera delincuentes, que les estén sujetos, de cualesquiera delitos ocultos, aunque sean reservados á la Santa Sede; es, mas que reserva, una indulgencia singular, que el Concilio concedió, atendiendo á que las reservas de censuras se habian aumentado mas de lo regular con el trascurso de los siglos, y se hacia muchas veces difícil recurrir á la Santa Sede. Sobre la inteligencia de este decreto, vease Van-Espen, part. 2, tit. 10, cap. 6 y 7.—Berardi Part. 2. Disert. 3, cap. 11, §; *Gratia Patriarcharum*, y lo que decimos en la seccion 3.ª del artículo CASOS RESERVADOS. Debemos á este proposito observar, que si en los casos en que el obispo tiene facultad de absolver, puede delegarla á otro, no basta para ello el mandato general, con el cual suelen crearse los vicarios generales, segun se dispone en el cap. 2, tit, 15, lib. 1 del Sexto; y que donde está admitido el citado decreto del Tridentino, de tal modo le está reservada al obispo la facultad de absolver de los delitos ocultos de heregía, que no puede delegarla á otro.
(4) Cap. 2, 13 y 33, tit. 39, lib. 5 de las Decretales. Sin embargo, no competerá á estos prelados inferiores la facultad concedida á los obispos en la citada ses. 24 y cap. 6, segun se deduce de las singulares palabras del Concilio, dirigidas á los obispos, á quienes debió sin duda concederse aquella por una razon tan obvia como consecuente con el principio de su nativa potestad. Por lo demás, siempre que se trate de tales prelados seculares ó regulares, si se suscitase controversia sobre su facultad respecto á la reserva y absolucion de censuras, convendrá atender á sus singulares derechos y privilegios, pues no todos suelen gozar de igual jurisdiccion y potestad (cap, 1, título 7, lib. 5 de las Clementinas).

(1) Cán. 1, 2, 3, 4, caus. 24, quæst. 2—cap. 28, tit. 39, lib. 5 de las Decretales.
(2) Cap. 5, tit. 17, lib. 5—cap. 14, tit. 28, lib. 3—cap. 28, tit. 39, lib. 5, de las Decretales.
(3) Cán. 8, caus. 2, quæst. 5.ª
(4) Cán. 108, caus. 11, quæst. 3.
(5) Cap. 23, tit. 40, lib. 5 de las Decretales.
(6) Cap. 27, tit. 39, id.

vez que la gracia divina, con que se borran los pecados, es individua; mientras los derechos de la Iglesia pueden dividirse, concediendo unos; y negando otros. Tan cierto es esto, que puede uno ser absuelto de la censura y no del pecado (1); pero la absolucion particular seria subrepticia, si el que la obtiene, callase estar ligado con otra censura (2). Hay tambien absolucion *necesaria*, que se pide, cuando la censura es cierta, y no írrita, aunque se tache acaso de injusta, ó cuando alguno cree estar notado con ella, aunque cometa error en ello, si no lo depone (3): y *ad cautelam*, cuando se duda, si ha incurrido en censura; pues, aunque en caso de duda de derecho debe creerse que no existe aquella, en la duda de hecho debe pedirse la absolucion, puesto que en el hecho y en la absolucion se atiende á lo mas seguro (4). Y aunque la duda sea leve, se concede para mayor seguridad la absolucion, ora la censura aparezca írrita, ora válida; pero de débil ó ningun fundamento (5). Solo se prohibe esta clase de absolucion, cuando es manifiesta la injuria, por la cual es uno notado con censura (6).

4. En cuanto á la forma de la absolucion no basta que esta sea tácita (7), para que se considere uno absuelto de la censura, propiamente dicha; del mismo modo que esta nunca se entiende tácitamente impuesta. Debe, pues, absolverse segun la forma establecida por la Iglesia (8); y si bien el derecho comun no ha determinado las palabras, que constituyen aquella, y que deben usarse en general, hay no obstante en los antiguos cánones, en los pontificales modernos y en los manuales designados, ciertos ritos de los cuales consta la absolucion (1). Antiguamente estaba admitida una *fórmula deprecatoria* (2) que debió de regir hasta el siglo VIII (3); pero despues comenzó á usarse la *indicativa*.

Puede ser la absolucion *solemne*, cual la que antes se usaba en la escomunion, y que el obispo concedia con asistencia de doce presbíteros, recitando los siete salmos penitenciales y tocando con una varita al escomulgado, para significar asi la reconciliacion pública, reservada al obispo, con tanta mas razon, cuanto que lo estaba la de los que habian hecho pública penitencia (4); y *menos solemne* la que se espresa con palabras sencillas que la den á entender.

Para poder determinar qué absolucion se concede en un caso dado, debe observarse que aquella puede ser *parcial*, esto es, para determinado efecto, como la que conceden, el Sumo Pontífice, á fin de obtener un beneficio, rescripto ó privilegio: el prelado, para que uno pueda perseguir en juicio su derecho, elegir ó presentar: y el sacerdote, con el fin de que uno obtenga remision de sus pecados, pues en cualquiera de dichos casos la absolucion es menos solemne, ó *total*: y entonces debe distinguirse, si se concede en el *foro externo*, como cuando alguno ha sido públicamente denunciado, pues necesita de la absolucion solemne, usándose, si se trata de escomunion, la fórmula antes mencionada: y si de las demás censuras, redactándose por escrito (5); ó en el *foro interno*, pues tiene lugar la menos solemne al tiempo que se absuelve de los pecados al penitente, ó cuando este se halla en el artículo de la muerte; y la solemne, aunque deba darse privadamente cuando el obispo, en virtud de la facultad del Tridentino, absuelve de censuras ocultas.

(1) Cit. cap. 23.
(2) Cap. 42, tit. 39, cit. Cap. 20, tit. 3, lib. 1 id.
(3) Cap. 35, tit. 3, lib. 5 id.
(4) Cap. 5, tit. 27 id.—cap. 15 y 52, tit. 39, id id.
(5) Cap. 16, tit. 28, lib. 2—cap. 40, tit. 39, lib. 5 de id.—cap. 6, tit. 11, lib. 5 del Sexto.
(6) Cap. 7, §. 1, tit. 11, lib. 5 del Sexto.
(7) Así se deduce indudablemente de los cán. 1, 2, 3 y 4, caus. 24, quæst. 2—cap. 28 y 41, tit. 39, lib. 5 de las Decretales, y cap. 4, tit. 10, lib. 5 de las Clementinas, en los cuales se declara que, el notado con censura no se entiende absuelto, solo porque conversó con el Papa que le admitió con honor, sino consta de la absolucion; y que aunque se crea uno absuelto ante Dios, porque diese muestras de penitencia y de obediencia á la Iglesia, si muriese antes de obtener la absolucion, todavía en el foro esterno se entenderá ligado con censura y deberá ser absuelto por la Iglesia.
(8) Cap. 15 y 28, tit. 39, lib. 5 de las Decretales.

(1) Cit. cap. 41, tit. 39 id.
(2) Así aparece del canon 108, caus 11, quæs. 3—del lib. 2, cap. 4 y 14 de Reginon y lib. 2, cap. 8 de Burchardo.
(3) Esta creencia se forma en vista de la disposicion final de la Decretal de Inocencio III en 1812, que es el cap. 28, tit. 39, tantas veces citado, donde dice: *Ad absolutionis autem formam, servetur, ut fiat cum pœnitentiali psalmo, et tam oratione Dominica, quam alia consueta.*
(4) Can. 52, dist. 50—cán. 108, caus. 11, quæst. 3—cán. 4 de pœnit. dist. 5. En el Pontifical Romano, bajo el título *Ordo excommunicandi et absolvendi*, se hallan las formulas que actualmente están en uso.
(5) Cán. 9, caus. 2, quæst. 1—cap 41, tit. 39, lib. 5 de las Decretales.

En general toda absolucion debe ser libre, no arrancada por fuerza ó miedo (1): impetrarse con ánimo sincero, esto es, sin vicio de obrepcion ó subrepcion (2): con voluntad del censurado (3): mediando justas causas, cuales son la cesacion del delito, el dolor de haberlo cometido y la satisfaccion (4): y gratis, sin mediar precio, ni intervenir vicio alguno de simonía.

5. En cuanto á las cargas que se imponen á los que han de ser absueltos de censura, consisten en dar satisfaccion al ofendido (5), si la injuria es manifiesta: prometer que obedecerá los mandatos de la Iglesia, si la obediencia no consta lo bastante: ó dar caucion de presentarse ante el superior, cuando le llame, si la censura se le impuso por contumaz (6). Esto se entiende cuando el censurado no se halle en el artículo de la muerte; pues entonces debe con juramento dar caucion de que satisfará cuanto antes pueda, si sale del peligro: ó cuando no se le absuelva en el foro interno, en los casos en que se puede, y no haya sido públicamente denunciado el reo, pues en tal circunstancia deberá prestar igual caucion juratoria de obedecer los mandatos de la Iglesia, siempre que se llamase (7). Del propio modo, el que estuviese censurado por diversos prelados, absuelto por uno, debe jurar, que satisfará al otro (8).

Las condiciones y cauciones de que hablamos, no suspenden el efecto de la absolucion (9), si no que solo indican una obligacion de necesario cumplimiento, cuya falta haria recaer en nueva censura, que deberia pronunciar el que tuviese facultad de imponerla, denunciándose tambien de nuevo al censurado por reincidencia (10).

(1) Cap. un., tit. 40, lib. 1 de id.
(2) Cap. 5, tit. 35, lib. 1—cap. 27 y 42, tit. 39, lib. 5—cap. 20, tit. 3, lib. 1 de las Decretales.
(3) Sin ella no puede decirse que hay verdadera enmienda ni deseo de recuperar los bienes ó derechos espirituales de que fué privado.
(4) Can. 108, caus. 11, quæst. 3—can. 13, caus. 11, quæst. 4—can. 52 caus. 23, quæst. 8—cap. 5, tit. 31, lib. 1 y cap. 27, tit. 39, lib. 5 de las Decretales.
(5) Cap. 52, tit. 39 id.
(6) Cap. 23, tit. 40 id., cap. 20, 21, 25, tit. 28, lib. 2—cap. 15, tit. 39, lib. 5—can. 32, caus. 23, quæst. 8—can. 23, caus. 17 quæst. 4—Cap. 29, tit. 20, lib. 1—cap. 23, cit. de las Decretales.
(7) Así se infiere de los cap. 12, 51, 58, tit. 39, lib. 5 de las Decretales.
(8) Cap. 42 id. id.
(9) Cap. 22, tit. 11, lib. 5 del Sexto.
(10) Inocencio III en el cap. 8, tit. 31, lib. 1 de las Decretales, parece fué el primero que determinó se redujese á la antigua censura al que no satisfaciese despues de absuelto, durante el tiempo señalado.—Bonifacio VIII en el cap. 28 citado, fué mas adelante, declarando incurso *ipso jure* en censura al que no satisfizo y faltó á su palabra.

SECCION V.

PARSIMONIA EN EL USO DE CENSURAS: INTERVENCION DEL PODER TEMPORAL SOBRE LA MATERIA.

En la seccion anterior hemos hablado de los remedios contra las censuras por parte de los particulares: en esta mencionaremos otros recursos contra ellas por parte de la potestad secular.

Ejerciéndose la jurisdiccion sobre censuras en el *fuero esterno*, y siendo por lo tanto la parte del poder eclesiástico coercitivo mas en contacto con el poder temporal: afectando su ejercicio, no ya á las personas, súbditos al propio tiempo del poder tempóral; sino á localidades, mas ó menos estensas, y aun á toda una nacion, como sucede en el *entredicho* general: afectando en este caso hasta el órden público, asi como sucede en la escomunion, cuando se fulmina contra autoridades superiores, y tribunales civiles en ejercicio de sus funciones, y aun contra el soberano mismo; esta parte del poder eclesiástico es la mas espuesta á conflictos entre una y otra potestad. Pueden servir de ejemplo, en lo antiguo la escomunion, ó demostracion severísima, sino, al emperador Teodosio, y otros soberanos; y en los últimos tiempos el célebre y ruidoso *Monitorio de Parma*; y en su caso la tambien célebre *Bula de la Cena*: conflictos, que han influido en el órden público, y se han resuelto, segun la índole de los tiempos, en lo antiguo con profunda sumision; hasta postrarse como penitente, ó reconocerse destronado un soberano; en los últimos siglos, resistiendo, luchando de poder á poder, desplegando la potestad temporal el aparato imponente de su poder coercitivo; llegando unas veces hasta la fuerza; otras hasta una completa escision.

La Iglesia, como ya hemos indicado al principio, reconoció y deploró este mal; buscando su remedio en la represion del abuso,

prescribiendo por el contrario la mayor parsimonia en el uso de censuras. El Concilio de Trento, recibido, y con fuerza de ley, en España, en la ley 25 ya citada, *de reforma*, y su notabilísimo cap. 3, ordenó lo siguiente:

«Aunque la espada de la escomunion sea el nervio de la disciplina eclesiástica, y sumamente saludable para contener á los pueblos dentro de su deber; ha de esgrimirse, sin embargo, *con sobriedad y con gran circunspeccion* (*sobrie tamen; magnaque circunspectione exercendus est.*), habiendo enseñado la esperiencia, que si se verifica imprudentemente (*temeré*), ó por leves motivos, mas bien se desprecia el anatema, que se teme; sirviendo asi, mas bien para perdicion, que para salud. Por lo que, aquellas escomuniones, que, prévias las correspondientes moniciones, suelen pronunciarse, á fin de que se haga alguna revelacion, segun dicen, ó por las cosas perdidas, ó robadas; por nadie absolutamente se decreten, mas que por el obispo, y eso por motivo no vulgar, y examinada diligentemente la causa por la autoridad de los obispos; hallándola tal, que mueva su ánimo; sin que se muevan para fulminarlas por la autoridad de ningun particular, aun cuando sea magistrado; si no que todo descanse en su arbitrio y conciencia, cuando el mismo obispo juzgue que deben pronunciarse, habida consideracion al *lugar*, *tiempo* y *personas*. En cuanto á las causas judiciales, se ordena á todos los jueces eclesiásticos, de cualquier dignidad que sean, que cuando baste su sola autoridad para la ejecucion real ó personal sobre cualquiera parte del juicio; se abstengan, tanto en el procedimiento, como sentenciando, de censuras eclesiásticas ó entredicho...» Ordena aun en corroboracion, que en las causas civiles, que de cualquier modo pertenezcan á los tribunales eclesiásticos, puedan estos proceder, aun contra legos, por medio de multas con inmediata aplicacion á lugares píos: por embargo, apremio personal, privacion de beneficios, y todos los demás medios coercitivos autorizados por el derecho.» «Pero, si por estos medios, continúa, no se puede conseguir la ejecucion real, ó personal, habiendo contumacia contra el juez; entonces, además de las otras penas, puede, segun su prudencia, usar del anatema contra los reos.» Es decir que todo ha de apurarse, antes de recurrir á censuras.

Lo propio dispone el Concilio respecto de las causas criminales; pero en el caso de que la calidad del delito asi lo requiera, y precediendo, á lo menos dos moniciones, como por edicto. Omitimos el resto del capítulo, por hacernos cargo de él en el artículo **EXCOMUNION**, y únicamente añadiremos aun lo relativo á las potestades seculares, de lo cual hemos hecho ya mencion en la seccion anterior. «*Nefas autem sit*, dice el Concilio, *sæculari cuilibet magistratus prohibere ecclesiastico judici, nequem excommunicet, aut mandare, ut latam excommunicationem revocet, sub pretextu, quod contenta in præsenti decreto non sint observata; cum non ad sæculares; sed ad ecclesiasticos hæc cognitio pertineat.*»

A pocos soberanos se dirigirá mas de lleno esta declaracion del Concilio, de no mezclarse las potestades temporales, bajo pretesto de que en la imposicion de censuras *no se ha observado lo prescrito en este capítulo*; que á los monarcas de España, por cuanto, habiéndose declarado *protectores del Concilio*, fundan su intencion, á veces, para los recursos de fuerza ó proteccion, en que el Concilio no ha sido observado. No es aquí donde vamos á tratar de esta potestad, ó prerogativa de nuestros Reyes: tampoco de la justicia y procedencia de los recusos de fuerza; y en su caso del *pase régio* de *bulas* y *breves*, contentivos de censuras, ó no, como la *bula de la Cena*. Solo si diremos, ceñidos aquí al derecho constituido, que el Concilio mismo reconoció se habia hecho abuso de las censuras: que los soberanos temporales se precavieron contra ellas, ora por la necesidad del *pase régio*, á las que procedian de bulas, ó *ex jure*; ora por los recursos de fuerza y proteccion, llamados en otras partes, *como por abuso*, contra las censuras *ab homine*, ó que procedian de decreto y sentencias de autoridades y tribunales: que estos medios de defensa se erigieron en *regalías*, y han sido aplicados y defendidos en ese

concepto: que en España se vienen practicando, sin formal oposicion á la silla romana, ni sus representantes en España; siendo de notar, que el tribunal mismo de la Rota, que en cuanto á la jurisdiccion es tribunal del Papa, y procede en caso por delegacion de los nuncios apostólicos, se somete en recursos de fuerza al Tribunal Supremo de Justicia, y obedece las decisiones de este; y tal es hoy la disciplina y derecho comun de España.

Cierto que esto no es material, é imperativamente «prohibir á un juez eclesiástico que escomulgue á alguno, ni mandar que revoque una escomunion,» segun el testo del Concilio. Pero es la verdad, que en los reales autos y provisiones de las Audiencias y Tribunal Supremo de Justicia, se manda en un recurso de fuerza al eclesiástico que *revoque y absuelva*, ó en otro caso *remita lo obrado*; y apenas se vé claro que la *disyuntiva* evite el mandato, que al fin vendrá á hacerse directo, cuando *por no haber revocado*, ni *absuelto*, remite los autos, y se declara *que hace fuerza*, cuyo auto es obedecido y ejecutado, aun cuando la fuerza consista en haber usado de censuras.

No son menos decisivas las leyes, que la práctica de los tribunales en este punto; para convencerse de lo cual, basta recorrer las del tít. 8, lib. 1, y tít. 1, 2 y 3, lib. 2 de la Nov. Recop. La ley 9 del primero de estos títulos encarga á los tribunales eclesiásticos observen en el uso de censuras lo dispuesto por los cánones y por el Concilio de Trento. Lo propio se previene en la ley 10; pero mandando ya, que en caso contrario, se dé cuenta al Consejo, para que, oyendo á los fiscales, se provea de remedio. Hay algunas, además, en que directamente se prohibe el uso de censuras; pero sobresalen entre todas por su tenor las disposiciones dictadas en 1767 y 1778, por actos, que habian tenido lugar en distritos de las dos Chancillerías del reino.

En 1767, habiendo ocurrido al Rey el obispo de Valladolid, en queja de que la Chancillería habia declarado, que el dicho obispo hacia fuerza en un recurso, promovido por aquel cabildo catedral, decia en su esposicion, que por bien de la paz, *se habia abstenido de fulminar contra los ministros el remedio de las censuras, aunque lo tenia en su mano.*» Pasada la esposicion al Consejo, en consulta de 18 de marzo de 1767, espuso al Rey: *que no habia podido oir sin escándalo*, que el R. obispo *hubiese proferido semejantes espresiones, vulnerando con tal atentado una de las regalías mas acertadas de la corona.....* y que por lo mismo era de opinion *se tachasen y borrasen tales cláusulas, tan mal consideradas*, previniendo al obispo se abstuviese de usar de las censuras; sino en el caso prevenido por el Concilio. El Rey se conformó con el parecer del Consejo (1): y á pesar de la invocacion del Concilio, la disposicion de este quedó realmente eludida; pues el obispo podria pretender, que no pudiendo de otro modo tener *ejecucion real ni personal*, lo que, como autoridad eclesiástica, habia decretado, era el caso autorizado por el concilio para usar de censuras. Todo ello convence lo que hemos ya indicado, y y es sabido, esto es, que los *recursos de fuerza* constituyen una especialidad, que no siempre se conformará con el Concilio, ni con los cánones; pero que está en práctica, y la Corona la sostiene como una regalía.

El otro caso mencionado fué mas ruidoso, y ciertamente violento, y aun escandaloso por parte del juez eclesiástico. Un regidor del pueblo de Fiñana, que regentaba la jurisdiccion real, arrestó á un clérigo de menores, hallado de noche á deshora en traje secular y con armas; en lo que ciertamente hizo muy bien. Remitiólo con la informacion del hecho al provisor de Guadix, que en vez de aplaudirlo y haber desplegado la severidad de su cargo contra el clérigo, lo hizo contra el regidor, declarándolo público escomulgado, y obligándole á recibir la absolucion pública en la catedral con inaudito estrépito, y escándalo. Cárlos III, á consulta del Consejo de 2 de setiembre de 1778, dictó la severa disposicion que contiene la ley 23, tít. 2, lib. 2, Nov. Recop. «Para que

(1) Nota 11, tit. 2, lib. 2, Nov. Recop.

los atropellamientos, dice, desprecios, injurias y violencias cometidas contra mi real jurisdiccion, y contra el juez y tribunal que la ejerce, representando mi real persona, se *castiguen* condignamente, y *no se ejecuten por otros en adelante*, he venido en mandar..... que la Chancillería de Granada *exija inmediatamente* de las temporalidades del provisor de Guadix, *los quinientos ducados en que multó*..... y *le haga salir desterrado por el tiempo de mi voluntad, no solo de aquel obispado; si no tambien del reino de Granada, sin que pueda entrar en esta corte, ni en diez leguas en contorno, ni ejercer en dicho tiempo jurisdiccion eclesiástica en parte alguna de mis dominios, ni pueda volverla á ejercer jamás en dicho reino de Granada, y por tiempo de cuatro años no pueda ser consultado, ni provisto en dignidad, prebenda, ni beneficio de mi real patronato.....*» Mandóse además se previniese al promotor fiscal eclesiástico usase en adelante de su oficio con prudencia y moderacion, no pidiendo nunca contra el tenor de las leyes del reino, pena de ser tratado con toda severidad.

Mandóse asi bien despachar acordada de todo al obispo de Guadix, haciéndole entender los abusos cometidos en el uso de censuras, en el modo de dar la absolucion, y en las indulgencias que el mismo provisor concedió á los que rogasen por la conversion del regidor....., ordenándole «*remita*, dice, *inmediatamente y sin dilacion el testimonio de las diligencias abusivas y escandalosas de la absolucion del regidor, el cual se archive con los autos en el Consejo*». Y por último, que se librase cédula por la Chancillería, dándole conocimiento de todo para su inteligencia y cumplimiento, y *para que se tenga presente en casos de igual naturaleza.*

Severísima fué esta disposicion. Evidentemente la conducta del provisor fué de todo punto opuesta al Concilio. Mas este prohibe al poder secular coartar la libertad de los tribunales eclesiásticos, como hemos visto, ni aun con pretesto, dice el Concilio, de *no haberse observado las disposiciones del mismo.* Volvemos por tanto á repetir nuestra observacion sobre este punto, consignada en la seccion anterior, y por último con ocasion del caso relativo á la Chancillería de Valladolid, sobre la índole de los recursos de fuerza.

Sobre *censuras en general*, además de los lugares y autoridades citadas en el cuerpo del artículo, véase la obra lata de Cavalario, cap. 11, part. 3: Van-espen, *Jus Ecclesiasticum*, tom. 2, part. 3, tít. 11, cap. 3: Suarez, *De censuris*: Gonzalez, á las Decretales de Gregorio IX, tom. 1, tít. 3, part. 1, cap. 30; tomo 2, tít. 28, cap. 40; y tomo 5, tít. 39. Véase además **ABSOLUCION, ANATEMA, CASOS RESERVADOS, ENTREDICHO, EXCOMUNION, FUERO, JURISDICCION, RECURSOS DE FUERZA, SUSPENSION.**

CENSURAS ECLESIASTICAS. (*Dominios de Ultramar*). Por el hecho de no haber nada en contrario en las leyes de Indias, rigen sobre censuras en aquellos dominios la legislacion, prácticas y disciplina de Castilla. Algunas indicaciones, sin embargo, contienen las leyes de Indias, de que vamos á hacer mencion.

Como especie histórica, no puede omitirse, tratando de esta materia, la censura general, contenida en la célebre Bula de Alejandro VI, espedida en Roma á 4 de mayo de 1493, es decir, un año despues del descubrimiento del Nuevo Mundo por Colon. En ella el Sumo Pontífice concedió á los Reyes Católicos la propiedad y dominio de cuantas tierras descubriesen al occidente de la grande Antilla, ó sea haciendo rumbo hasta las Indias orientales; fulminando escomunion, *ipso facto incurrenda*, contra los que sin licencia de los Reyes de Castilla entrasen á conquistar, ó comerciar en los nuevos dominios. Cualquiera que fuese el efecto que produjesen estas censuras en un principio, que lo produjeron sin duda respecto de portugueses y otros pueblos católicos; hoy, despues de tantas y tales vicisitudes de aquellos dominios y de la dominacion española, bien puede asentarse que en los reducidos territorios, que esta conserva, su principal garantía, si ya no es la única, es el derecho de gentes. En su tiempo, sin embargo, fué

esta bula objeto de empeñadas polémicas; no en el sentido precisamente de negarle eficacia; sino mas bien en el de hacerla estensiva á otros estados. Los publicistas ingleses sostenian competer igual derecho que á los Reyes de Castilla, á los de Inglaterra sobre el mar británico, y es conocida en el particular la obra de Juan Seledeno, secretario del monarca inglés, titulada *Mare Clausum*. Véase en su caso, y á Solorzano, *Política Indiana*, cap. 10 y 11, y al final de este último capítulo la Bula de Alejandro VI.

En cuanto á españoles é indios, las leyes de la Recopilacion de Indias disponen: que ni los prelados de regulares, ni sus religiosos se escusen de publicar las censuras pronunciadas por los diocesanos (1): los oidores semaneros librarán despacho para que los provisores absuelvan en casos de fuerza (2): las audiencias no despachen provisiones rogatorias, ó exortatorias para que los prelados no fulminen censuras, omitiendo en aquellas el caso, ó casos en que se hayan fulminado con abuso, ó haciendo fuerza, y por tanto, no encaminadas dichas provisiones á que esta se alce, como procede (3): que los vireyes y audiencias no den lugar á que se use de censuras para el cobro de alcabalas, ni en otros casos análogos (4): y que los obispos no fulminen censuras contra los oficiales reales para el cobro de sus adeudos por la hacienda (5).

CENTEN. Nombre usual, que se dá al *doblon de Isabel*, única moneda de oro que en la actualidad se acuña, conforme al artículo 3.° del real decreto de 15 de abril de 1848, que ha introducido la unidad monetaria en los dominios españoles. Su valor, conforme al artículo 9 del mencionado decreto, es de diez escudos, ó *cien reales*, ó diez mil décimas de real, que es la unidad monetaria reconocida, y moneda efectiva de plata: de su equivalencia con los cien reales es de donde ha nacido el nombre usual de *centén*. La ley del *centén* ó del doblon de Isabel, es de nueve partes de oro fino y una de cobre, permitiéndose dos milésimos de aligacion en mas ó en menos, sin que por eso pueda decirse alterada la ley de esta moneda, ni por consiguiente rehusarse legalmente en el cambio, como la diferencia en el peso no sea mayor de un grano. El peso legal del centén es de 167 granos, y su diámetro de 11 y 1|2 líneas. No hay para qué describir la posicion del busto de la real persona, ni los emblemas que adornan el cuño del centén, porque además de ser iguales en todas las monedas de esta clase, su signo distintivo es la espresion de su valor que se hace en guarismo al reverso de la moneda. Aunque segun el decreto antes citado, no se acuñarán en adelante mas monedas de oro, que la del doblon de Isabel; el art. 10 del mismo permite la circulacion de los demás existentes por su valor nominal, entretanto que se procede á su refundicion, cuyo caso prevee el art. 11 siguiente.

CENTENA. Múltiplo de 10: espresion abstracta, colectiva, numérica, del sistema comun de numeracion, equivalente á cien unidades. Segun se nota, tiene por base la palabra *ciento*, como algunas de sus equivalentes concretas en el nuevo sistema métrico, tienen la voz griega *hecta*, que significa lo mismo: v. g. *hectárea hectólitro*, etc., cien áreas, cien litros.

CENTESIMA. Una parte de ciento, lo propio que *céntimo*, aunque esta última voz tiene otra acepcion, que se vé en su artículo.

CENTIAREA. Centésima parte del *área*, que es la unidad legal de las medidas superficiales agrarias, y representa cien metros cuadrados, ó ciento cuarenta y tres varas cuadradas y 745 milésimas de pié cuadrado, segun los datos publicados en la *Gaceta* para la aplicacion de la ley de de 19 de julio de 1849, por la cual se ha introducido un solo sistema de pesos y medidas en los dominios de España. Siendo el *área* una equivalencia de cien metros cuadrados, como hemos dicho; la *centiárea*, que es su divisor inmediato, y representa el cen-

(1) Ley 43, tit. 7, lib. 1 Recop. de Ind.
(2) Ley 159, tit. 15, lib. id., id.
(3) Ley 149, id., id., id.
(4) Ley 45, tit. 13, lib. 8, id.
(5) Ley 22, tit. 27, id., id.

tésimo de aquella, será igual á un *metro cuadrado*, ó sea el cuadrado de una vara, siete pulgadas y 74 centésimos de línea próximamente; pues haciendo el cálculo con mas de tres cifras decimales, que es como aquí está hecho, resultará alguna ligerísima diferencia con respecto á los resultados que ofrece D. Gabriel de Ciscar en su memoria de 1800, en donde la operacion está hecha con seis decimales. Lo mismo la medida agraria *área*, que su múltiplo la *hectárea*, y su division la *centiárea*, cada una de ellas cien veces mayor ó menor respectivamente, que la primera, están destinadas á medir la cabida de los campos y terrenos, formando entre las tres el conjunto de esta clase de medicion superficial, capaz por sí solo de espresar las mas pequeñas diferencias. La *centiárea* es además de frecuente uso en la arquitectura, y, como todas las medidas cuadradas, sirve en general para apreciar las demás superficies; pero cuando se trata del globo, ó una gran parte de él, se usa mas comunmente del *kilómetro* y del *miriámetro* cuadrados, medidas lineales, mas apropósito por sus divisiones de espresar mayor estension de terreno en menos guarismos (1).

CENTIGRAMO. Medida ponderal ó de peso, que representa la cienmilésima parte del *kilógramo*, el cual, segun la ley de 19 de julio de 1849, es la unidad usual de las pesas introducidas en España en virtud de aquella disposicion. Equivaliendo el *kilógramo*, conforme á los datos publicados por el gobierno para la aplicacion de aquella ley, á 2 libras, 2 onzas, 12 adarmes y 52 céntimos de adarme, de los pesos legales de Castilla, se vé que el *centígramo* es próximamente medio *céntavo* de adarme, cantidad poco apreciable, á no ser en union con algunas otras. La siguiente tabla esplica, sin embargo, el valor exacto del *centígramo*, con relacion al kilógramo, que es el punto único de comparacion, pudiéndose observar al mismo tiempo el lugar que ocupa entre los divisores de aquella unidad.

Kilógramo.	Hectógramo.	Decágramo.	Gramo.	Decígramo.	Centígramo.	Miligramo.
1	10	100	1,000	10,000	100,000	1.000,000
	1	10	100	1,000	10,000	100,000
		1	10	100	1,000	10,000
			1	10	100	1,000
				1	10	100
					1	10

CENTILITRO. Medida de capacidad perteneciente al sistema decimal establecido por la ley de 19 de julio de 1849, que ha uniformado los pesos y medidas en España. Representa la centésima parte del *litro*, que es la unidad acordada por dicha ley para determinar la capacidad y arqueo en los áridos y los líquidos. Como el valor del *centilitro* es relativo, es preciso para conocerlo bien, apreciar antes el de la unidad de que forma parte. Hé aquí próximamente la relacion que guarda el *litro* con los pesos y medidas que se usan en Castilla.

Litro.		*Su equivalencia en medidas de Castilla.*
De vino...	equivale á	1 cuartillo, 3 copas y 93 céntimos de copa.
De aceite.	»	1 libra, 3 panillas y 96 céntimos de panilla.
De grano.	»	0 cuartillos, 865 milésimos de cuartillo.

Por consiguiente, el *centilitro* representará 7 centésimos de copa y 93|1,000 en el vino: 7 centésimos de panilla y 96 milésimos en el aceite: y algo mas de 8 y 1|2 milésimos de cuartillo en los granos.

CENTIMETRO. La centésima parte del *metro*, que es la base fundamental del nuevo sistema de pesos y medidas establecido por la ley de 19 de julio de 1849. La longitud del *metro*, conforme á los datos publicados por el gobierno, es de 1 vara, 7 pulgadas, y 74|100 de líneas; y segun cálculos mas minuciosos y exactos, es igual á 3'8,892 piés. La pequeñísima diferencia que resulta, consiste en la mayor ó menor

(1) Estando decretado, y debiendo empezar á regir en breve el sistema métrico entre nosotros, daremos cabida, con la conveniente estension y posible precision matemática, á los artículos relativos al mismo con su peculiar tecnología, como en el presente.

exactitud que se quiera obtener, para lo cual hay que hacer los cálculos con mayor ó menor número de decimales. El *metro* es una medida lineal ó de longitud, y lo mismo su divisor el *centímetro*, el cual, siendo, como hemos dicho, la centésima parte de aquel, equivale próximamente á 9 líneas y 16 3/4 centésimos de línea. El metro y sus inmediatos divisores el *decímetro*, el *centímetro* y el *milímetro*, son las medidas mas usuales, porque se acomodan á objetos de cortas dimensiones: despues vienen el *decámetro* y el *hectómetro*, y finalmente para las grandes longitudes el *kilómetro* y el *miriámetro*. Hé aquí la relacion que existe entre cada una de estas medidas, que juntas todas, forman el sistema completo de las lineales ó de longitud.

	Miriámetro.	Kilómetro.	Hectómetro.	Decámetro.	Metro (unidad.)	Decímetro.	Centímetro.	Milímetro.
Valor relativo.	10,000	1,000	100	10	1	1/10	1/100	1/1,000

CÉNTIMO. Lo propio que centésimo, esto es, una parte de ciento, en que se considera dividida la unidad de que se trata. En el moderno sistema y lenguaje rentístico tiene otra acepcion técnica equivalente á las de *suplemento*, *recargo*. Entonces suele decirse tambien *décimos adicionales*. Y con efecto: de tiempo en tiempo, desde que se conoce la contribucion directa, ha sido aumentada esta por medio de suplementos proporcionales, ya para acrecentar los ingresos del Tesoro público, ya para atender á los gastos locales de las provincias y ayuntamientos, ya para cubrir las partidas fallidas y el coste inherente á la recaudacion. A estas cantidades alícuotas, que se exigen con el objeto indicado sobre el cupo principal de la contribucion, se dá el nombre de céntimos adicionales, y entre nosotros con mas propiedad el de *recargos*. Hay céntimos adicionales ó recargos que son *generales*, y que siendo por lo mismo de interés general á todo el reino, son establecidos por el poder legislativo, al mismo tiempo que el principal de la contribucion: tal es, por ejemplo, el 1 por 100 que se consigna en el presupuesto de este año para gastos de estadística. Hay otros que son *provinciales* tan solo, los cuales siendo únicamente en interés de la provincia, son votados por ella, representada por su diputacion: concedidos por el ministerio de la Gobernacion de acuerdo con el de Hacienda, no pueden esceder de cierto límite de la contribucion sobre que pesan, y solo pueden exigirse dentro de la propia provincia. Hay, por fin, otros puramente municipales, respecto de los que se observa la misma diferencia en su imposicion y demás que la que existe entre los recargos generales y los provinciales. La jurisprudencia observada en este asunto se halla consignada en el real decreto de 18 de junio de 1847. Tambien se conocen entre nosotros al tanto por ciento de fallidos, cuyo nombre se dá á las cuotas incobrables, y el de recaudacion, conduccion y entrega de caudales en tesorería, que consistiendo antes en un 4 por 100 de la cantidad recaudada, ha quedado hoy reducido á solo el 3 por 100.

CENTINELA. Segun unos, de la voz latina *scintilla*, centella ó luz, por la intensa mirada del centinela: segun otros, del verbo latino *sentio*, sentir, por lo vigilante y atento que debe estar el mismo. Y dícese *centinela*, propia y técnicamente, el soldado ú otra persona, ordinariamente armada, que se coloca en algun puesto para que vele por su conservacion, ó para la guarda de cosas ó de personas, observar cualquier objeto, ó impedir alguna cosa, con arreglo á la consigna que se le dá. Por estension se aplica tambien este nombre á todo el que guarda, acecha ú observa alguna cosa.

En la milicia se dan diversos nombres á los centinelas, segun el objeto ó lugar que vigilan, ó el puesto que se les encarga: asi, se llama centinela *de armas*, al que cuida de que nadie las toque ó se acerque á ellas: *de banderas*, al que las custodia para que no se saquen sin el permiso y formalidades debidas: *centinela partida*, la que está avanzada del cuerpo de tropa que la destaca para observar los movimientos del enemigo, ó con

cualquier otro objeto; *perdida*, la que sale á esplorar el campo del enemigo, y vá por lo tanto espuesta á ser cogida ó muerta por él: centinela de *campamento*; de *retaguardia*; de *vanguardia*; de *vista*, etc.

No se concibe, ni existe reunion alguna de fuerza armada, ó cuerpo de guardia, sin que haya en él centinelas: estos velan por la seguridad de los demás individuos; y de su vigilancia depende las mas veces la conservacion de una plaza ó de todo un ejército, que fácilmente podria ser sorprendido y derrotado por el enemigo, si aquellos no cumpliesen con todo rigor sus deberes. Por eso las leyes militares de todos los paises y de todas las épocas han marcado minuciosamente las obligaciones del centinela; han castigado con penas muy severas sus infracciones, y hasta la mas pequeña omision ó negligencia que puedan cometer en el cumplimiento de esos importantes deberes, siendo inexorables con el que á ellos faltare; y al mismo tiempo les han rodeado de todo el prestigio y fuerza, tanto moral como material, que son indispensables para hacerse respetar y para atender á su seguridad. De poco provecho seria hacer un estudio comparado de esta parte de la legislacion, que en todos los paises se funda en unos mismos principios; y por eso nos concretaremos únicamente á dar una ligera; pero exacta idea, de lo que nuestras leyes prescriben sobre el particular, y en cuanto conduce al objeto de esta obra.

En el art. 34 y siguientes, tit. 1.°, trat. 2.° de las Ordenanzas del Ejército, de 26 de enero de 1716, se consignaron los principales deberes que está obligado á cumplir todo centinela. Se le prohibe, segun dicha Ordenanza, sentarse, dormir, comer, fumar, beber, tener conversacion con persona alguna; hacer cosa que le distraiga, ó desdiga de la decencia; pasear á mas de diez pasos de distancia de su puesto; dejar el arma de la mano, ó entregarla á otro; permitir ruidos, pendencias ó *porquerias* á la inmediacion de su puesto; dejarse relevar sin hallarse presente el cabo, ó abandonar su puesto sin órden de este; y entrar en la garita, á no ser en caso de crecida lluvia ó nieve, y en las horas de mucho calor en que el gobernador ó comandante lo permitan, pero jamás podrá cerrar las ventanillas de ella. Tambien debe cumplir con puntualidad las obligaciones particulares de su puesto; comunicarlas con claridad al que le releva; hacer respetar su persona; reservar las órdenes en que asi se le prevenga, escepto al cabo, á quien solo reservará las que el comandante le indique; cubrir la llave de su arma cuando llueva; poner el arma al hombro al pasar un oficial, mirándole, á no ser que estuviese en la muralla, en cuyo caso deberá dirigir su vista hácia el campo; presentar el arma cuando pase alguna ronda, mirando al objeto cuya guarda le está confiada, ó al campo si se hallase en la muralla; rendir el arma al pasar su Divina Magestad; presentarla á las reales personas, príncipes é infantes, y ponerla al hombro á los oficiales, como se ha dicho, y además á los condecorados con la cruz de San Fernando, y grandes cruces: si fuere de noche solo dará un golpe con la mano á la culata, si tuviere el arma al brazo; ó un culatazo sobre el suelo, si se hallase en posicion de descanso. Cuando estuviere en muralla, recinto cerrado, ó cordon, dará la voz de *centinela alerta*, cada cuarto hora, desde el toque de retreta, hasta el de diana, y el *¿quien vive?* á cuantos se le aproximen, siempre que el paraje que custodie exija precaucion; y cuando le contesten *España*, preguntará *¿qué gente?* y estando en campaña, ¿qué *regimiento?* Si no le contestasen ó lo hiciesen mal, repetirá el *quien vive* dos veces, y ocurriendo lo mismo, avisará á la guardia, y si entonces huyere el que se le aproximaba, le hará fuego. Tambien debe avisar al cabo cuando vea incendio, oiga tiros, ó note alguna pendencia ó desórden; cuando observe que se aproxima ronda, algun jefe ú otra persona á quien correspondan honores; cuando se tratare de atropellarle y el agresor no obedezca su intimacion de que se contenga; cuando vea reconocer la artillería ó minas, hacer daño en las estacadas, escalar ó medir con pasos, cuerdas, ó de otra manera las murallas ú otro objeto de fortificacion; tomar apuntaciones ó hacer observaciones con ins-

trumentos, mandando detener al que lo haga, y si no le obedeciese á la tercera intimacion, le hará fuego. Además de estas obligaciones generales, deben tambien cumplir exactamente las especiales del puesto en que prestan el servicio, las cuales ordinariamente se comprenden en la consigna que se les comunica al entrar de centinela.

Los centinelas del cuerpo de alabarderos tienen algunas obligaciones particulares, indispensables para llenar el objeto de su instituto, y otras que pueden considerarse como privilegios concedidos á un cuerpo tan distinguido, y cuyo elevado objeto es la custodia de la Real persona. Estas obligaciones se hallan en su reglamento publicado en 16 de noviembre de 1845, declarado vigente por el real decreto de 25 de agosto de 1854 al restablecerse dicho cuerpo. Las principales, estando de servicio en el Real Palacio, son: dar la voz de *á las armas*, cuando pasen por las salas SS. MM., el heredero del trono ú otra persona real: no dar el santo á otros, que al comandante general, al oficial mayor de servicio, ó á los jefes de la guardia que vayan rondando con alabarderos, si bien exigiéndoles antes la contraseña: hacer honores únicamente á los ministros de la corona, á las comisiones de Senadores y diputados, capitanes generales y demás personas que se espresan en los artículos 59 al 65 de dicho reglamento, reduciéndose dichos honores á dar un golpe en el suelo con el regaton de la alabarda, ó con el pié si hiciesen el servicio con carabina: no permitir que sin licencia del comandante general pasen á los cuartos de las Reales personas los que no tengan entrada en ellos; y cuando estas se hayan recogido, á ninguno que no dé el santo y seña y contraseña, á no ser que vaya con órden de aquel jefe ó del oficial mayor de servicio; y si viere salir á alguna persona de los espresados cuartos, avisará al comandante del puesto para que la detenga y reconozca, á fin de asegurarse de que puede dejarla marchar sin inconveniente; y por último, participar cualquiera novedad que advierta al comandante del puesto, para que este lo comunique al oficial mayor de servicio. Si el centinela alabardero no estuviese en palacio ó cerca de las Reales personas, hará los honores que previene la ordenanza del ejército á su Divina Magestad, á las Reales personas, á los comandantes generales y oficiales mayores del cuerpo, y á las tropas transeuntes, sin que los hagan á otras personas (1).

Las mismas ordenanzas del ejército castigan con severas penas á los centinelas que faltan al cumplimiento de sus deberes. Por ellas se impone la pena de muerte al centinela que se dejare relevar por otro que no sea su cabo; al que no hiciese fuego, ó diere parte, si viere escalar ó saltar la muralla, pared, foso, ó estacada de una plaza, de un fuerte, ó de un recinto cerrado; al que observare que se aproximan los enemigos, y no lo avisa á la voz ó disparando, ó si se retira sin órden; y finalmente al que abandona su puesto sin órden de su cabo. Se castiga con pena capital, presidio ú obras públicas, segun los casos, al centinela que roba: con dos carreras de baquetas por doscientos hombres, relevándole inmediatamente, y destinándole á obras públicas por el tiempo que le falte que cumplir, al que se halle dormido: con veinte y cinco palos dentro del cuartel y dos meses de prision, pagando su servicio, al que se sienta, trabaja, fuma, ó deja el arma de la mano; y por último, será castigado corporalmente el centinela que no siga al cabo cuando vayan á apostarse ó vuelvan (2).

Tambien las ordenanzas de ingenieros previenen (3) que cuando un zapador ó minador, estando de centinela ó escucha, se hallare dormido, se mudará inmediatamente, y asegurado en el cuerpo de guardia, será escluido ignominiosamente del regimiento, y destinado por tres años á obras públicas en alguna de las plazas de la Península: pero si cometiese solo la falta de distraerse trabajando, sentarse, fumar, ó dejar su arma de la mano, sufrirá quince dias de arresto. En

(1) Artículos 55, 46, 47, 48 y 67 del Reglamento del cuerpo de Alabarderos.

(2) Artículos 56, 57, 58, 59 y 60, tit. 10, trat. 8.°, ordenanzas del ejérc.; y reales órdenes de 31 de agosto de 1772, 17 de febrero de 1780, 12 de mayo de 1786 y 20 de noviembre de 1797.

(3) Art. 6, tit. 21, Reg. 6.

los demás casos están sujetos los ingenieros, lo mismo que los demás cuerpos del ejército, á las penas antes espresadas, prescritas por las ordenanzas generales para los centinelas que faltan al cumplimiento de sus deberes.

Tampoco las ordenanzas de la armada podian dejar de prever estos delitos, cuya represion es tan necesaria para la seguridad de sus bajeles y arsenales. Segun ellas se castiga con diez años de presidio al centinela que se hallare dormido estando en tierra enemiga, ó su bajel cerca de enemigos; y con la de ser pasado por las armas, si la falta hubiese procedido de trato con estos (1). El centinela que estando á bordo abandonare su puesto sin órden del cabo de escuadra ú otro de la guarnicion, será pasado por baquetas, y condenado á cuatro años de destierro en arsenal, si no le faltaren tantos de su empeño; pero si el abandono fuere malicioso, con el fin de facilitar desercion ú otro desórden, será pasado por las armas. Con esta misma pena será castigado el centinela que, estando á bordo ó en arsenal, hubiese disimulado por trato, ó no diere parte prontamente, ó no disparase el arma, viendo arrojarse gente al agua, ó desatracarse embarcacion sin la presencia ni la órden del oficial, sargento ó cabo de guardia; y con ocho años de presidio, si no se hubiere justificado el trato. El que permitiere salir del navío gente de guerra ó de mar, sin licencia del oficial, será puesto en prision por el tiempo que determine el comandante: si de esto hubiere resultado desercion, será condenado á ocho años de galeras; y á ser pasado por las armas, si se verificare haber procedido por trato. El que permita la estraccion de pertrechos, municiones, ú otros géneros pertenecientes á los navíos de la armada, será condenado á galeras (2).

El que estando de centinela á bordo permita encender luz sin órden del oficial, sargento ó cabo de guardia, será condenado á un mes de prision en grillos á pan y agua; y á llevar veinte y cuatro palos en presencia de la tropa, despues de haber sido relevado, el que permita llegar á las luces puestas á su cargo, á otro que al sargento ó cabo de escuadra de guardia, ó al de luces; y lo mismo al que saque luz fuera del farol, ó encienda, ó permita encender en ella, aun al mismo cabo de luces, sin órden del oficial, sargento ó cabo de la guardia. Los centinelas de los fogones, y los que tengan luces consignadas, si permitiesen desórden con ellas ó con el fuego, de que pueda resultar incendio, serán juzgados en consejo de guerra, y condenados á presidio, á proporcion del riesgo á que haya espuesto su descuido ó tolerancia. Con igual pena se castiga al centinela de la puerta de Santa Bárbara, que permita sin órden introducir luz ó géneros fáciles de quemar (1).

Las ordenanzas, que como hemos visto imponen tan severas penas á un centinela por la falta mas leve, procuran á la vez atender á su seguridad, haciéndole respetar con otras no menos severas. Así vemos que, además de prohibir que se le castigue ni reprenda de palabra, aun por el mismo oficial de guardia, antes de ser relevado (2); no solo impone la pena capital al que le atacare, si que tambien le priva de su fuero, sometiéndole en tales casos á la jurisdiccion del tribunal militar de la plaza. La claridad con que está redactado el artículo relativo á este objeto, escusa todo comentario, bastando insertar literalmente sus palabras; dice así (3): «El que atacare á cualquiera soldado que estuviese de centinela, sea con arma blanca, ó apuntando con arma de fuego, ó golpe de piedra, de palo, ó de manos, será condenado á muerte; y si fuere paisano, será juzgado por el consejo de guerra de la plaza, con inhibicion del tribunal á que competa. Esto, sin perjuicio de las facultades que tiene para hacer respetar su persona, tanto que si alguno quisiera atropellarle, debe prevenirle que se contenga; si no le obedeciere, llamará á su cabo

(1) Art. 44, tit. 1.°, trat. 5.° Orden. de la Arm.; y art. 10, título 35, Orden. Nav.
(2) Arts. 40, 12, 43 y 64, tit. 1.°, trat. 5.° Orden. de la Armada; y art. 9, tit. 35, Orden. nav.

(1) Art. 37, tit. 1.°, y 45, tit. 1.° trat. 5.° Ordenanzas de la Arm.; y arts. 1.° y 2.°, tit. 33 de la Ordenanza nav.
(2) Art. 36, tit. 1.° trat. 2.°, Ordea. del ejército.
(3) Art. 61, tit. 10, trat. 8.° id.

para dar parte á su comandante; y si nada de esto bastase para contener á la persona que tratase de atropellarle, debe usar de su arma en la forma que crea conveniente para hacerse respetar (1).» Una disposicion análoga contiene la Ordenanza naval. «Cualquiera (dice su art. 23, tít. 34) que á bordo hiciere armas contra algun centinela, ó se valiese de piedra, palo ó manos para atropellarla, será condenado á muerte; y si fuere paisano, será juzgado por el consejo de guerra de oficiales, con inhibicion del tribunal á que competa; bien entendido, que todo centinela que descubriese en alguno el intento de insultarlo ó atropellarlo, le advertirá que se modere, gritando á su cabo para que dé parte al oficial de guardia; y si no obstante continuase el designio manifestado de forzar la centinela ó atropellarla, en cualquiera manera que sea, usará de su arma.»

Tambien el Código penal publicado en 1848 se hizo cargo de este delito, designando la pena con que debia ser castigado el que lo perpetrara. El párrafo 2.° del art. 189 decia lo siguiente: «Los que cometieren este delito (el de acometer ó resistir con violencia) contra una guardia ó centinela, incurrirán en la pena de prision mayor, si llegaren á impedirles el libre ejercicio de sus funciones, y en la de prision menor en otro caso.» Y por el párrafo 2.° del art. 193 se castigaba con la pena de prision correccional al que insultare de palabra á una guardia ó centinela. No faltó quien impugnara estas disposiciones, sosteniendo, ora que los delitos de que en ellas se trata eran puramente militares, y su castigo correspondia, por lo tanto, á la ordenanza militar, ó ya que era conveniente no sacarlos de esta esfera para sostener la disciplina militar, y la preponderancia de la fuerza armada, á toda la altura que las circunstancias exigian. Tambien se suscitó la duda de si deberian aplicarse á los criminales las penas marcadas por el Código, ó las designadas por la ordenanza, toda vez que aquel no prejuzgó la cuestion de fueros, y debian, por tanto, los reos de dichos delitos ser juzgados militarmente por el consejo de guerra de la plaza, con arreglo á ordenanza. Las reclamaciones de las autoridades militares y las cuestiones que con tal motivo se provocaron, dieron por resultado suprimir del Código penal los dos párrafos antedichos, lo cual se efectuó en la última reforma del mismo, practicada por el real decreto de 7 de junio de 1850. En su consecuencia, han quedado en toda su fuerza y vigor los dos artículos antes trascritos de las ordedanzas del ejército y de la armada, y con arreglo á ellos serán castigados los que cometieren el delito de atropellar ó insultar á un centinela.

(1) Art. 33, tít. 1.°, trat. 2.° id.

CENTRAL. V. JUNTA CENTRAL.

CENTRALIDAD. V. CAPITAL (*en lo territorial*).

CENTRALIZACION. Suena retraccion hácia el centro, hablando de fuerzas, facultades, aun ideas, fondos, etc., si bien diciéndose unas veces *concentracion*: otras *centralizacion*: *fuerzas centrípetas*, en fin, las que obran hácia el centro, como en el órden físico, y astronómico, hablando de la *gravedad*. Por analogía, y en el propio concepto, la nueva tecnología de la ciencia política y administrativa, llama centralizacion á aquella organizacion de atribuciones y facultades del poder público que las acumula, como en su centro, en el poder ejecutivo, el cual las conserva como retenidas, ya ejerciéndolas por sí, ya delegando su ejercicio, pero con inmediata dependencia de él ó de los primeros mandatarios.

La palabra *centralizacion*, pues, presenta una idea compleja, ó sea un sistema completo, ora político, ora administrativo, que no basta definir brevemente para darlo á conocer en toda su significacion, si al mismo tiempo no se esplanan algunos de sus rasgos mas característicos. Como concepcion moderna, cuyo sentido no creemos bastante bien precisado todavía, y como pensamiento complejo á la vez, no se presta fácilmente á una esposicion científica de su índole, sin incurrir en el riesgo de decir de ella demasiado, ó tal vez demasiado poco.

De cualquiera modo que sea, es induda-

ble que la idea ó el hecho de la centralizacion encierra en sí una de las mas grandes cuestiones que pueden agitarse en la actualidad, ya se la considere bajo el punto de vista histórico, político, económico ó administrativo; ya limitándose á su conjunto, sin descender á aplicaciones especiales; considerándola mas bien filosóficamente y como una abstraccion moral. Bajo todas y cada una de estas fases, es digna esta materia, no solo de la meditacion del publicista, sino de la atencion sostenida del hombre de Estado. Por nuestra parte, contrayéndonos al carácter de esta publicacion, la trataremos en su concepto mas general, sin mas escursiones en el terreno de la aplicacion, que las precisas para dar una idea clara é inequívoca del objeto.

Ante todo debemos empezar por establecer la diferencia que existe entre dos voces que suelen usarse casi indistintamente, confundiéndose con frecuencia, pero que realmente espresan dos cosas muy diversas: la *unidad* y la *centralizacion*. La centralizacion suele muchas veces esplicarse por la unidad, y esta por aquella, siendo asi que pueden existir independientemente, y aun en realidad existen siempre de hecho. Un pais es susceptible de unidad, ya en su constitucion política general, como en los estados federales; ya con respecto á su idioma, ideas religiosas, pesos, medidas y monedas, etc.; y sin embargo, es posible que no haya en él centralizacion. En otro por el contrario, subsistiendo las diferencias mas contradictorias y notables, respecto á su manera interior de existir, puede hallarse establecida una centralizacion fuerte y vigorosa. Este último era el carácter distintivo, que principalmente dominaba en la mayor parte de los grandes pueblos antiguos; y asi vemos que, cuando la soberbia y poderosa Roma se hallaba en el apogeo de su grandeza, al paso que sus Emperadores tenian entre sus manos todo el poder para manejar á su antojo las fuerzas todas del imperio; existian dentro del pueblo romano, no solo costumbres y hasta razas diversas; no solo provincias gobernadas por leyes especiales, y digámoslo asi aparte; no solo municipalidades poderosas y activas, que en muchos casos obraban por su cuenta; sino que un gran número de los detalles de la vida social y de la existencia individual, que hoy se hallan coartados y sujetos á reglas determinadas, se encontraba fuera de la órbita de la administracion central. Casi el fenómeno contrario es el que se observa en la mayor parte de los pueblos modernos, si se esceptúa entre ellos la vecina Francia y nuestro propio pais. Conseguida en gran manera su *unidad*, lo cual es fácil de esplicar por medio de una existencia prolongada y aparte, en que las razas primitivas han llegado á desaparecer, confundiéndose: en que sus distintos dialectos han venido con el trato mútuo á refundirse en un solo y general idioma, sin mas diferencia entre provincia y provincia que ligeras modificaciones de pronunciacion ó acento: en que los intereses particulares, formando cierta solidaridad, han creado ideas comunes en literatura, en las artes, en religion: teniendo, en fin, hoy cada nacion lo que se llama una fisonomía especial y propia; se desconoce, sin embargo, la centralizacion en su sentido mas lato, ó ha sido modificada por la organizacion moderna, que cada cual ha recibido; ó existe tan solo bajo el punto de vista puramente político. Todo el mundo sabe que en Inglaterra las autoridades de los condados y de las ciudades gozan de un poder casi ilimitado en muchos casos, y baste solo citar el nombre del lord mayor de Lóndres, para que se recuerden las prerogativas inmensas de que se halla investido este magistrado, puramente municipal, y cuya eleccion se somete á la aprobacion real por mera fórmula tan solo.

Dada á conocer brevemente, bien que con ejemplos prácticos, la distancia que media entre la unidad y la centralizacion, se deduce fácilmente, que en un pais donde aquella existe, viene á ser esta una consecuencia lógica y natural de la primera, y puede ejercitarse sin embarazos de ningun género y casi por sí propia. Solo cuando dos ó mas cosas son asimiladas ó idénticas, es cuando pueden reunirse y marchar juntas, aumen-

tándose de este modo la fuerza de cohesion que existe entre ellas: como este lazo de union falte, como no exista préviamente la homogeneidad, cuantos resortes se añadan á aquel mecanismo, cualquiera que sea la forma que se le dé, no pueden conducir á otro resultado que el de paralizar su accion ó retardar sus movimientos, á hacerlos duros y descompasados, á producir por último la descomposicion por medio del desequilibrio entre cada una de sus partes. Asi que, al paso que la unidad conduce á la centralizacion bien entendida; el querer establecer aquella por medio de esta última, es pretender un imposible, es lo mismo que trazar un círculo sobre otro, que tocándose casi, ó aproximándose siempre, no llegan á encontrarse nunca. La unidad no se manda siempre: se forma de ordinario por sí sola, ayudada del tiempo, y á este es preciso dejarle obrar con su accion poderosa, aunque lenta: la centralizacion puede mandarse, pero no puede constituir aquella mas que de una manera imperfecta y débil; porque no será mas que simulada: llegarán á percibirse algunos de sus rasgos; pero no será mas que esteriormente, porque no pasarán de la superficie, quedando su fondo inerte como el de un lago, cuyas aguas las brisas agitan suavemente. Numerosos ejemplos podrian citarse en apoyo de este aserto; pero basta á nuestro propósito aducir uno tan solo. No habrá uno siquiera de nuestros lectores que no conozca los esfuerzos hechos en una nacion vecina, para establecer la uniformidad ó unidad de los pesos y medidas: habia constituido este deseo uno de los votos mas ardientes desde Carlo-Magno (y obsérvese por lo que acaeció despues de su muerte, si este Emperador participaba del espíritu de centralizacion), de Felipe el Largo, de Luis XI, de Francisco I, de los Enriques II y III, de Luis XIV, hasta la asamblea constituyente; y á pesar de la actitud severa de este cuerpo, de su voluntad de hierro y de su fuerza casi salvaje; á pesar del tiempo trascurrido desde entonces, y del empeño sostenido despues, como demuestra la ley de 4 de julio de 1837 que ha venido á poner el sello á la reforma, véase hasta qué punto han sido vencidas todavía las preocupaciones locales y los hábitos envejecidos de la generalidad. La unidad de pesos y medidas se encuentra hoy resuelta en Francia, como principio; los monumentos legislativos en que esta se halla consignada, forman sin disputa un conjunto brillante de jurisprudencia, y á su vez lleno del mayor interés; pero su aplicacion práctica, los resultados de aquel principio distan mucho todavía de ser lo que serán con el tiempo, y lo que de consuno aconsejan que sea la opinion pública ilustrada y la conciencia general.

Hechas estas reflexiones, podemos ya pasar libremente á esponer, qué es la centralizacion, para el objeto de la Enciclopedia, que ciertamente no es otra cosa, segun hemos dicho, que la concentracion de todas las atribuciones del poder público en las manos de un gobierno único y central. Si este gobierno reasume en sí, no solo la direccion é inspeccion que legítimamente le corresponde en los negocios generales, sino que además se mezcla directamente en la gestion de ellos, y aun abanza hasta tomar parte activa en otros que no participan de aquel carácter de generalidad, la centralizacion será indudablemente mas lata, pero no será por eso mas eficaz, pudiendo llegar á ser abusiva. De aquí la consecuencia indeclinable de que la centralizacion, para que pueda constituir un buen elemento de gobierno, para que pueda alcanzar el nombre que se le dá por algunos de conquista brillante de la civilizacion, es preciso que se halle encerrada dentro de ciertos límites: si los traspasa, si penetra en el dominio de los hechos aislados y de los intereses que afectan al mayor número, puede conducir del mismo modo á la arbitrariedad y á la opresion, que al desconcierto y á la anarquía mas repugnantes. Estos límites, y el terreno dentro del cual pueda ejercerse la centralizacion, sin que sus efectos se neutralicen entre sí, quedarán mas claramente deslindados, cuando hablemos de sus ventajas y de sus inconvenientes.

Entretanto la centralizacion, cualquiera que sea el aspecto bajo que se la considere,

presenta siempre rasgos que son generales á todo: se ejerce sin esceptuar caso alguno, como una derivacion del principio de accion tutelar, que el gobierno ó la autoridad central debe ejercer sobre todos los actos en que la sociedad se halla interesada: de ahí se deriva tambien el nombramiento de todos los funcionarios públicos y autoridades locales: de ahí igualmente tienen que proceder todas las disposiciones; en virtud de las cuales se reclama al pais su concurso en hombres ó dineros, y se hace la distribucion de estos recursos conforme á las necesidades del territorio. Como esta accion tutelar, en virtud de la cual corresponden al gobierno las atribuciones que acabamos de indicar, y otras análogas, es susceptible de ser interpretada, mas ó menos latamente; la centralizacion puede abarcar tambien un círculo mas ó menos dilatado. En un estado de cosas en que las autoridades locales obran con cierta independencia; pero al mismo tiempo con responsabilidad propia, para el caso de faltar á su cometido, la centralizacion existe sin duda alguna, porque el poder central puede exigir á sus delegados cuenta del modo con que han ejercido su mision; pero la centralizacion entonces se halla contenida dentro de ciertos límites. Si por el contrario, las autoridades espresadas no tienen independencia alguna para obrar, si cuantos actos ejercen son en virtud de órdenes espresas al efecto, sino tienen iniciativa en los asuntos, si les falta la facultad de promover ciertos intereses con preferencia á otros, si en su marcha administrativa por último, no pueden separarse del camino que se les ha trazado de antemano; en tal caso la centralizacion es practicada en su sentido mas estenso, las localidades entonces son poca cosa, ó nada; lo es todo la autoridad central: el poder supremo bajo tales condiciones se ha abrogado, no solo la facultad de gobernar, sino la de administrar juntamente: un estado de cosas semejante no puede subsistir por mucho tiempo, sin grave daño del pais que lo soporta, y sin riesgos inevitables para el poder que está á su frente. Estas consideraciones, sobre las cuales es inútil estendernos mas, porque dan á conocer bastante los diferentes grados en que puede practicarse la centralizacion, siempre dentro de la acepcion genérica de la palabra, nos conducen naturalmente á esponer los diferentes conceptos, bajo los cuales puede ser digna de un estudio especial.

Centralizacion bajo el punto de vista histórico. Las naciones, lo mismo que los pueblos, no se presentan nunca de un golpe á la mente del filósofo y del hombre pensador, como aparece Minerva armada de punta en blanco saliendo de la cabeza de Júpiter. Todas tienen su orígen é historia particular, antes de haber llegado á ser lo que son: sus leyes, sus monumentos, sus instituciones todas, han de haber tenido por precision un principio y un fin, ley fatal de que no se esceptúa ninguna de las cosas humanas. La centralizacion, como medio de gobierno, y como resultado de diferentes combinaciones para dirigir las sociedades en un sentido ó en otro, no podia sustraerse á aquella condicion general, y tiene tambien su historia digna de ser tomada en cuenta. No nos remontaremos á los pueblos antiguos para desentrañar en ellos un sistema que pudo muy bien existir, que existió en efecto, por que ¡cuál será la concepcion que pueda decirse moderna en este sentido!; pero que pasó desapercibida por los mismos que la practicaban, ó no formó un pensamiento completo como ha sucedido en nuestros dias. Tampoco recorreremos el mundo moderno para encontrar en tal caso dado, en esta ó la otra época, uno ó mas rasgos de la centralizacion, tal como hoy se presenta á los ojos de la ciencia. Hemos dicho mas arriba, que solo en la vecina Francia y nuestro propio pais, de entre todos los de Europa, era donde la centralizacion se presentaba con todo aquel colorido, con esos toques especiales que constituyen la composicion de un cuadro acabado: en la una porque allí ha tenido su orígen; en la otra porque ha tomado gran parte de la civilizacion de la primera. Pero ni en Francia ni en España se ha presentado la centralizacion desde luego tal como existe actualmente: en el primero de estos paises, durante la edad media, el poder central se hallaba de tal manera diseminado,

que cada señor, cada duque, conde, marqués ó baron, ejercia independientemente su accion; y el Rey era entonces tan poca cosa, que ni gobernaba ni administraba mas, que en sus propios Estados, lo mismo que cada señor en los suyos. Es verdad que se le reconocia el derecho de soberanía, y por tal concepto le eran debidos homenajes y asistencia en casos dados; pero esta obligacion, que estaba reducida á prestar cierto concurso en armas, hombres y caballos, no alcanzaba mas que á los señores, no á los súbditos de aquellos, los cuales con frecuencia y por cualquiera pretesto solian muchas veces sustraerse á semejante obligacion, llegando algunas hasta hacer armas contra el propio soberano. Esta situacion, que dominó en los siglos X, XI y XII, fué modificándose despues algun tanto, ya invadiendo el trono unas veces la autoridad local, por medio de protestas, como la de establecer tribunales propios, ya sometiéndola otras abiertamente por medio de la fuerza. Sin entrar nosotros detalladamente en la marcha, siempre progresiva, del poder real, por los medios que hemos señalado en otros parecidos estudios, mas propios de un bosquejo histórico especial, que del presente trabajo, diremos sin embargo, que ya por los tiempos de Luis XIV empezaron á verse trazados los primeros rasgos de la centralizacion: por entonces, si las localidades, como poder independiente, no habian desaparecido del todo; se hallaban por lo menos sojuzgadas: si todavía ejercian algunas funciones por derecho propio, no eran de aquellas que pueden alarmar al poder central, ni entorpecerlo en su marcha. Existian todavía, es cierto, algunos derechos señoriales; habia muchos pueblos y ciudades que conservaban aun privilegios ó franquicias; las corporaciones ó los gremios de artes y oficios no habian llegado á desprenderse de un gran número de derechos abusivos; pero el nivel, sobre tan distintas condiciones, el borrar de una vez, digámoslo así, los restos de las antiguas inmunidades locales, el sentar los cimientos al edificio de la centralizacion, tal cual hoy se conoce, estaba reservado al tremendo poder de la gran revolucion acaecida en Francia á principios del presente siglo: lo que despues se ha trabajado en este sentido no ha sido sino para plantear definitivamente los elementos preparados por aquella.

En España tampoco se ha presentado la centralizacion desde el primer dia con los caractéres que hoy le son peculiares. Antes de venir á ella, ha pasado tambien por otras y muy diferentes pruebas. En tiempo de la conquista por los romanos, no era nacion, bajo ese aspecto, ó no merecia por lo menos, el verdadero nombre de tal, puesto que la componian, un conjunto de varios pueblos; cada uno de los cuales tenia sus leyes, sus costumbres, su idioma y su gobierno propio. Los godos no pudieron hacer tampoco sino un ensayo de centralizacion, que desapareció con la misma rapidez con que los sarracenos se hicieron dueños de todo el pais; pues los pocos que al abrigo de Covadonga pudieron protestar contra la dominacion que se les imponia, tuvieron necesidad de ver trascurrir muchos años antes de formar por sí un verdadero pueblo, y aun este, que salió como del centro de un monton de ruinas, no fué nunca el que para siempre habia sucumbido en Guadalete. Es verdad que en tan lamentable destrozo pudo todavía salvarse íntegro el principio religioso, y alguna tradicion propia de aquella época caballeresca; pero al paso que se adelantaba lentamente en la reconquista, se iban creando sin apercibirse de ello siquiera, pequeñas nacionalidades, en que el astúr rivalizaba con el leonés y el castellano, y estos con los vascos, aragoneses ó catalanes; situacion por lo tanto, que distaba mucho de dirigirse á un mismo objeto ó centro general. Ni podia ser otra cosa: émulo cada uno de la gloria que habia alcanzado en aquella lucha de gigantes, mas digna de la apopeya que otra alguna de su clase, no queria dar gran participacion á su vecino, y los caudillos, alentando este mismo espíritu, como camino de su propia dominacion, contribuían á su vez á la desmembracion general. De aquí la division del territorio en monarquías independientes, y como consecuencia inmediata, los privilegios ó franquicias á ciertas ciudades, las car-

tas pueblas, los derechos señoriales y exenciones á personas determinadas, el sistema feudal, en fin, no tan desarrollado como en otras partes, pero iniciado en gran número de sus efectos. Para salir de un estado de cosas tan anómalo, se hicieron varias tentativas en diferentes épocas. D. Alfonso el Sábio, bajo pretesto de uniformar la legislacion penal y civil por medio del *Fuero Real*, quiso centralizar la administracion de justicia; y aunque sus esfuerzos no tuvieron resultado por entonces, preparó el camino al Código de las *Siete Partidas*. Los Reyes Católicos, D. Fernando y doña Isabel, dieron otro gran paso hácia la centralizacion, y la unidad, no solamente por la union que se verificó, con motivo de su matrimonio, de los reinos de Leon, Castilla, Aragon y Navarra; sino por el empeño tenaz con que se dedicaron á destruir gran número de privilegios abusivos que poseía la nobleza, privándola de grandes concesiones y tierras; por haber llevado á efecto la ley del reino que concedió la apelacion ante los tribunales reales contra las decisiones de los jueces de pueblos de señorío, y por haber alcanzado de la silla apostólica la administracion de los maestrazgos, destruyendo asi el temible poder de los grandes maestres de las órdenes de Calatrava, Alcántara y Montesa, que poseyendo inmensas riquezas, teniendo á su disposicion numerosas tropas, y siendo dueños de un gran número de villas, fortalezas y encomiendas, podian combatir en casos dados contra el Soberano, y lo habian ya verificado mas de una vez. Una política igual seguida por sus sucesores Cárlos I y Felipe II, condujo á los propios resultados, estendiendo el uno la fuerza de su poder en los campos de Villalar; y borrando el otro los fueros de Aragon, en cuanto se oponian á su autoridad soberana. Todos estos hechos, producidos durante un largo periodo, iban sucesivamente preparando el terreno á la centralizacion; pero esta no ha tenido lugar en nuestro pais, hasta que, adoptada en gran parte la organizacion francesa en muchos ramos, ha llegado á aparecer constituida casi á su imágen.

Centralizacion en lo político. Cualquiera que sea la forma de gobierno que exista en un pais, si ha de cumplir su mision esencialmente protectora, es menester que reuna en sí todas las atribuciones necesarias para poder mantener el órden en la sociedad, para vigilar y reprimir llegado el caso los abusos que ya en sus transacciones, ya por sus fueros reunidos pudieran cometer grandes aglomeraciones de individuos. Por eso es preciso que reuna en su mano el derecho esclusivo de dictar las leyes generales y procurar su ejecucion; por eso debe tener la facultad de establecer y levantar los impuestos que interesan al Estado en su conjunto; por eso la de mantener y distribuir convenientemente la fuerza pública, que ha de velar por la defensa del territorio, tanto interior como esteriormente. La centralizacion considerada desde este punto de vista, ha sido reconocida siempre y lo es en la actualidad, no solo como de todo punto conveniente para la prosperidad y grandeza de las naciones, sino como eminentemente necesaria para alcanzar dichos objetos. Cuantas modificaciones se han introducido en la organizacion de los gobiernos modernos, cuantas combinaciones se han hecho con el fin de mantener al poder dentro de ciertos límites, no han tenido, no han podido tener por objeto, privarle de esas facultades tan necesarias para llevar á cabo todos los servicios públicos, sin resistencia, al mismo tiempo que sin embarazos; ha sido mas bien para impedirle que los traspase, tomando el pretesto ó invocando el nombre de la conveniencia general. La centralizacion, asi entendida, lejos de ser atacable, no puede tener mas que defensores; es la facultad de gobornar, es el gobierno mismo, si es lícito tomar el efecto por la causa.

Centralizacion en lo administrativo. Asi como hemos dicho que tratándose de los intereses generales de un pais, es, no solo conveniente, sino necesaria la centralizacion, de tal modo que el gobierno no puede abdicar la direccion é inspeccion que le corresponde sobre todos ellos; asi tambien, cuando es solo de los intereses locales ó particulares de los que se trata, la autoridad central debe

evitar todo lo posible el mezclarse en ellos de un modo directo, sino ha de perder su prestigio, si no quiere descender del rango que ocupa en gobernar al de administrar pura y simplemente negocios que deben estar encomendados á varios subalternos. ¿Cómo ha de ser posible, ni puede ser conveniente que el gobierno sustituya su accion eminentemente política y social á la accion particular y privada de las localidades de ciertas asociaciones, de los individuos mismos? ¿Cómo ha de ser conveniente que ejerza ciertas industrias por su cuenta, ó que se reserve la facultad de conceder el ejercicio de otras á personas determinadas? Aunque hablamos aquí en principio, y sin desconocer que en casos dados la práctica puede modificar algun tanto la solucion do estas cuestiones, ya con relacion á un tiempo mas ó menos corto, ya concretándose á puntos determinados, basta solo la simple enunciacion de aquellas, para que queden resueltas por sí mismas. Se dirá tal vez que entre los intereses generales del Estado y los particulares de las localidades existe un gran número de puntos de contacto, que hace muchas veces que la centralizacion política y la administrativa se alcancen, y sea difícil señalar los límites de cada cual. En buen hora; pero esto no quiere decir que semejante dificultad sea invencible, ni que ambas centralizaciones sean inseparables, ni que examinando con cuidado el conjunto de los objetos que se encuentran bajo el dominio de cada una, no pueda llegarse con facilidad á distinguirlos. En Francia, en donde la centralizacion se ha llevado hasta un grado mas absoluto que en otra nacion alguna, no existe apenas el deslinde que acabamos de señalar, y el gobierno por lo mismo abraza todo; gobierna y administra á la vez. España, cuya organizacion ha sido tomada en muchos casos de aquella, participa no poco de algunos de sus inconvenientes. Inglaterra, en donde no se conoce la centralizacion administrativa; pero donde la política propiamente dicha, se ejerce en toda su estension, puede mover á su antojo masas considerables, dispone de recursos inmensos de todo género, lleva por todas partes el esfuerzo de su poder, sucediendo lo propio y por los mismos motivos en el pequeño reino de Bélgica y en el coloso de los Estados Unidos. La Alemania, en donde se desconoce igualmente la centralizacion política y la administrativa, y en donde falta esa cohesion precisa para que las naciones puedan marchar con resolucion y con energía hácia un objeto dado, no puede esperar, mientras no consiga salir de semejante estado de cosas, sacar gran partido de los grandes recursos que encierra su estenso territorio, porque la fuerza nacional no está centralizada, porque cada una de las partes de este gran cuerpo, puede conceder ó negar su concurso á la autoridad comun, como en los casos en que existe un verdadero interés general. Hemos presentado estos ejemplos de gran bulto, y haciéndoles de propósito formar contraste entre sí, para hacer mas palpable, la diferencia que hay entre la centralizacion política y la administrativa, diferencia que se nota mucho mas estudiando en detalle la organizacion respectiva de cada uno de los paises citados.

Centralizacion en lo económico. Seremos muy breves en la esposicion del tema que antecede, diciendo solo lo necesario para que no aparezca un vacío en el cuadro completo que vamos presentando de la centralizacion. Por lo demás, cuanto digamos en este lugar, será todo de referencia á otros puntos que, ó se han tratado ya, ó se tratarán sucesivamente en este artículo. La centralizacion económica entendiéndose por tal un sistema rentístico, ó fiscal, cuyos resortes estén todos sujetos á un movimiento único y comun, se halla bajo el dominio de la centralizacion política, á la cual hemos dicho que corresponde el establecimiento, manejo y contabilidad de los impuestos generales, y en donde puede verse lo que aquí pudiéramos decir. Si al hablar de la centralizacion económica, se hace con relacion á los principios que la ciencia económica aconseja respecto al manejo de las fuerzas vitales de la sociedad, en tal caso las consideraciones que pueden hacerse, se hallan dentro de la esfera de la centralizacion administrativa, que ha sido ya

espuesta, ó corresponde á la de las ventajas é inconvenientes de la centralizacion en general, que vá á esponerse en seguida.

No hay medalla que deje de tener su reverso: no hay institucion humana que, aun siendo conocida por sus ventajas, deje de presentar los inconvenientes. La centralizacion como tal, tiene que participar de unas y otras, y deben por lo mismo tener apasionados en gran número, al mismo tiempo que considerables detractores. La ciencia, que en este terreno no reconoce partidos, que no se deja llevar apasionadamente de impresiones del momento, que estudia primero los hechos, ya aislados, ya en su conjunto, para deducir despues consecuencias inflexibles, no puede tener preferencias inmotivadas hácia ningun sistema: por eso nosotros, despues de haber estudiado la centralizacion bajo cada uno de sus principales aspectos, vamos á considerarla en general con relacion á sus ventajas é inconvenientes, para dar en seguida nuestro juicio imparcial y lógico.

Inconvenientes y ventajas. La centralizacion se dice, produce desde luego el resultado de establecer un gobierno mas robusto, porque claro es que las fuerzas reunidas lo constituyen mucho mayor y mas propio para ser ejercido sin obstáculos. De que el gobierno sea fuerte y vigoroso, se deduce que debe hallarse organizado de una manera mas apropósito para ejercer la mision de órden y de paz que le está encomendada: para impulsar á igual desorrollo en todas las fuerzas sociales y derramar por todos los ámbitos la ilustracion: para imprimir, en fin, á todos sus movimientos, rapidez, unidad y conjunto. De estas propiedades se derivan otras grandes ventajas de gobernacion general: y asi, tratándose, por ejemplo, de vías de comunicacion, se establece en ellas un sistema completo, que puede satisfacer igualmente á las necesidades del comercio, de la agricultura, de la estrategia, sin espíritu de localidad, y sin otras miras que las del interés general. Encomendados de este modo los negocios públicos, se previenen los errores de los agentes subalternos, y se crean funcionarios y hombres eminentes, que se acostumbran á mirar todas las cuestiones desde una altura, en que todo se domina sin hallarse ofuscado por miras mezquinas de interés ó de personalidad. Esto en cuanto á las ventajas.

En cambio, los enemigos de este sistema, oponen á ello razones que son tambien de mucho peso. Si el gobierno es mas fuerte, dicen, puede, centralizando demasiado, llegar á ser abusivo, y en todo caso no ofrece seguridades de duracion, en cuanto que puede ser destruido de un solo golpe lanzado por sorpresa ó de otro modo al corazon, que es donde se halla concentrada toda su vida; y los ejemplos que se aducen por lo ocurrido en Francia durante este último siglo, no dejan de ser concluyentes bajo este aspecto. Por otra parte, aunque el gobierno aparezca de este modo, fuerte en principio, deja de serlo en realidad, desde el momento que derrama su accion por todas partes, sin contraerse á los actos puramente de gobierno. ¿Y quién es capaz en semejante caso de fijar límites al poder, desde el instante en que, una vez por lo menos, le sea permitido desconocer los derechos particulares ó de localidad, aunque sea bajo el pretesto, que él entrevea ó suponga, de interés público? ¿Quién le impide, que con motivo de modificar ó variar derechos ó franquicias abusivas, llegue á confiscarlos en provecho propio, no haciendo entonces mas que trasladar el mal de un punto á otro, aun supuesta su existencia? Además, si bien se examinan las ventajas que lleva consigo la centralizacion de precaver ciertos errores en los agentes subalternos, y de formar elevados funcionarios; llegan á convertirse en inconvenientes de la mayor trascendencia en la generalidad de los casos. Para uno de estos errores que se precava, y que pudiera haberse corregido en tiempo y sin desprestigio de la autoridad central, tendrá esta que pasar por otros que se cometan en su propio seno: y si trata de enmendarlos, tiene que desautorizarse á sí propia, confesando ó reconociendo su yerro. Para un buen funcionario que pueda formarse en aquel sistema, se mata en gérmen

la actividad y la inteligencia de otros muchos, acostumbrándolos desde luego al simple papel de trasmision ú ejecucion pasiva. Esto sin contar para nada el mayor número de brazos arrancados á la industria y á las artes, que la centralizacion necesita: la lentitud y aun paralizacion en los negocios, consecuencia natural de su aglomeramiento: la poca garantía de su buen despacho: el enervamiento general de todas las fuerzas sociales y la muerte del verdadero espíritu pátrio: el camino recto que prepara al socialismo, y con él los trastornos subsiguientes en todo lo que existe, carrera llena de graves peligros. Aunque cada uno de estos cargos necesitaria por su magnitud un capítulo separado, es preferible presentarlos así condensados, para que no pierdan nada de su fuerza. Nadie duda que en medio de una centralizacion absoluta, el gobierno necesita á su inmediacion un número de empleados infinitamente mayor: que á pesar de eso, los ministros ó agentes supremos del poder, agoviados bajo el peso de los detalles, no tienen apenas tiempo para pensar en los grandes negocios ni para ultimar los pequeños, teniendo que esquivar los unos y aplazar los otros: y siguiéndose para el pais, como es consiguiente, los inmensos males de tener en suspenso por mas ó menos tiempo muchos asuntos, cuya oportunidad era absoluta, y cuya pronta decision necesaria. No teniendo siquiera tiempo material para autorizar con su firma documentos, que no han leido, y cuya sustancia apenas conocen; tienen que encomendar el despacho de aquellos asuntos, que merecen verdaderamente su solicitud, á manos secundarias, sino inespertas; pero á las que seguramente falta las mas de las veces esa elevacion de miras, que necesita la direccion de intereses generales, ó ese conocimiento práctico y puramente de localidad, que naturalmente y sin esfuerzo, posee el que se encuentra sobre el mismo terreno, aunque oficialmente no se halle tan caracterizado. De aquí la poca garantía de acierto en la decision de muchos negocios. Si caminando de este modo, guiado por el espíritu centralizador, absorve el gobierno los asuntos grandes y pequeños, y priva á los individuos de esa natural intervencion, que le corresponda en los intereses que le están mas inmediatos, indudablemcate habrá conseguido matar el espíritu de localidad, que no carece de inconvenientes en casos dados; pero habrá concluido al mismo tiempo con ese sentimiento verdaderamente pátrio, que tantos prodigios de abnegacion y entusiasmo ha engendrado en épocas antiguas y modernas, y que tan digno es de fomentarse para un momento de crísis, en que desgraciadamente pueden encontrarse todos los pueblos, y cuyo solo esfuerzo es capaz de salvarlos en tan supremo caso. Porque es necesario no desconocer, que el elevado sentimiento que acaba de indicarse, no descansa en una idea abstracta, que se traduce por apego á todo el pais y á todas sus instituciones: es por el contrario un sentimiento concreto de cariño al lugar en que cada uno ha nacido, y á los intereses que cada cual ha regido por sí mismo; es el conjunto de todos estos sentimientos parciales, sin los cuales deja de existir el primero. Ahora para demostrar que la centralizacion absoluta conduce realmente por medio de los peligros al socialismo, baste decir que por este sistema se empieza proclamando la impotencia del individuo aislado, para deducir despues la intervencion de la autoridad social en todos los actos de la vida privada. De estos principios á los que sustenta la centralizacion hay un solo y bien ligero paso: aquel quiere destruir los intereses individuales en su delirio de crear un interés único y social; este quiere suprimir los intereses locales, pretendiendo formar un sentimiento central y tambien único: véase, pues, si puede verse sin temor, la corta distancia que separa ambos sistemas.

Espuestas sin pasion, igualmente que sin entusiasmo, las ventajas é inconvenientes, que alternativamente atribuyen á la centralizacion sus amigos y enemigos, resta para concluir que á nuestra vez emitamos tambien nuestro juicio severo é imparcial respecto á un objeto de tanta trascendencia: tarea, por otra parte, mucho mas fácil de lo que á primera vista pudiera parecer, despues de la

forma y distribucion que se ha dado á este artículo. La centralizacion, sin que en ello pueda caber duda alguna, limitada á aquellos asuntos verdaderamente generales, á aquellos que, aun participando del carácter de localidad, tienen para el porvenir una influencia directa sobre otra generacion que la presente, á aquellos negocios, en fin, que hemos esplicado recaer bajo el dominio de la centralizacion política, es un adelanto inmenso, hecho en la verdadera ciencia de gobierno: es una conquista brillante, alcanzada sobre la moderna civilizacion: es un conjunto de todas y cada una de las ventajas que anteriormente la hemos atribuido. En el momento en que la centralizacion traspasa aquellos límites, para no imponerse cortapisa alguna; crea una situacion enteramente insostenible, y que nada esplica mejor, aunque la comparacion sea muy conocida, que aquel estado del cuerpo humano, en que retirándose la sangre de cada uno de los miembros, se agolpa toda al corazon, y quedando primero aquellos sin vida por atonía, perece despues este de pletora, arrastrando consigo la muerte de todo el individuo. El juicio que acabamos de formar se halla en completa armonía con la asertiva, que Mr. Cormenin, uno de los defensores mas distinguidos y absolutos de la centralizacion, pone á la introduccion de su obra del derecho administrativo, que por eso copiamos en este lugar. «La centralizacion, dice, llevada al estremo, »se halla llena de peligros, no solo con rela»cion á la seguridad del gobierno; sino tam»bien por lo que respecta á la libertad de los »ciudadanos y á la buena gestion de los in»tereses locales: admitamos, pues, este prin»cipio; pero no abusemos de él: centralize»mos por lo tanto los grandes asuntos; pero »descentralicemos los pequeños.»

CENTRALIZACION. La centralizacion puede ser de *atribuciones*, y de *autoridades*; que mas bien deberia llamarse *concentracion*. De la primera hablamos en el artículo anterior. La centralizacion de autoridades, ó concentracion de las mas que sean posibles en un punto, capital, diócesis, etc., se liga á la cuestion de *centralidad*. De una y otra hemos hablado en el artículo CAPITAL (*en lo territorial*): véase: y hay tambien centralizacion de fondos.

CENTRALIZACION DE FONDOS. Hacemos referencia á la concentracion, bajo una sola mano, de todas las rentas y caudales públicos, sin la cual seria imposible la existencia de cierto órden y regularidad en la recaudacion é inversion de los fondos del Estado; y no podria llegarse nunca á establecer un buen sistema de cuenta y razon. Como las mejoras obtenidas entre nosotros en estos dos ramos de organizacion rentística, en el último sobre todo, son muy recientes todavía, se deja ver tambien que la centralizacion de fondos es de creacion moderna, en la práctica sobre todo, sin que por eso pueda decirse que no venga intentándose hace largo tiempo.

Seremos breves en la esposicion de las diferentes medidas adoptadas con aquel objeto en distintas épocas, para venir desde luego á lo existente: y para mayor claridad, las dividiremos en tres períodos, que son el de su orígen, el de su desarrollo, y el de su planteamiento.

Mientras las rentas de España no fueron mas que un conjunto informe de diferentes recursos, llamados unas veces *pedidos*, otras *servicios*, todos de diversa índole, sin base fija de exaccion, entregados casi siempre á asentistas en pago de anticipos hechos, rara vez manejados por el Estado, que habia tenido que enajenarlos por mas ó menos tiempo; claro es que no pudo existir esa centralizacion de fondos, que supone una administracion mas ó menos adelantada. El orígen de ella se debe á Felipe V, que fué el primero que sentó las bases de nuestra organizacion rentística, que dictó acertadas reglas para la cuenta y razon, y el que creó la Tesorería general en la corte, para la recaudacion y distribucion de los caudales de todo el reino. Posteriormente se dieron todavía algunos pasos en ese sentido, principalmente en 1811, 813 y 817, cada vez que se ha tratado de dar unidad á nuestro sistema financiero, bien reduciendo el número de las rentas y aumentando sus productos, bien simplificándolas al

mismo tiempo que su contabilidad, bien por los dos caminos á la vez; pero todos estos pasos apenas son perceptibles.

Cuando el pensamiento de la centralizacion empieza á tener ya alguna consistencia, y desde cuando verdaderamente principió á adquirir desarrollo, es desde la ley de presupuestos de 26 de mayo de 1835, cuyos artículos 4.° y 5.° dicen así. «Art. 4.° Toda contribucion ó impuesto conocido bajo cualquier denominacion que sea, entrará en el real tesoro, al que pertenece esclusivamente su distribucion, segun los presupuestos aprobados. Art. 5.° En consecuencia de la anterior disposicion, quedan suprimidas todas las receptorías ó depositarías particulares de ramos ó fondos, que dimanan de impuestos directos ó indirectos, que se satisfagan por los súditos de V. M.» No puede darse nada mas esplícito ni mas terminante, que el contesto de los anteriores artículos; y sin embargo, por las disposiciones posteriores, que iremos anotando, podrá observarse, que su importancia práctica es casi nula, y que todo lo mas que en ellos se hizo, fué acertar con la fórmula del pensamiento, que solo mas tarde, y despues de varias veces reproducido, es cuando debia tener aplicacion. Así vemos que en 7 de setiembre de 1837, casi como primera medida de ejecucion de la ley anterior, se mandasen publicar por la Direccion del Tesoro y las oficinas de provincia, estados mensuales, en que resulte la entrada, salida y distribucion de caudales, igualmente que las órdenes y operaciones relativas al movimiento de aquellos, en la inteligencia de que cualquiera *falta voluntaria* en el cumplimiento de dichas disposiciones, será corregida con la inmediata destitucion del empleado ó empleados que incurran en ella. Asi vemos tambien que algo mas tarde, el 4 de noviembre de 1840, la regencia provisional, como sino existiera la ley que acabamos de trascribir, ó como si aquella ley no tuviera necesidad de ser cumplida y no lo hubiera sido en efecto, sin hacer mencion de ella, decreta lo que sigue: «Art. 1.° Se centralizarán en el »Tesoro público desde 1.° de noviembre corriente, todos los ingresos de la nacion, sin »escepcion alguna; desapareciendo de una »vez todas las administraciones especiales, »cualquiera que sea su orígen y naturaleza. »Artículo 2.° Desde la publicacion del presente decreto no se hará en la Nacion pago »alguno, como no sea dispuesto por el ministro de hacienda y se comunique por el Director general del Tesoro público la órden correspondiente al jefe que deba disponer su »cumplimiento.» Las reiteradas disposiciones dadas en el mismo año 40 y en el 41 siguiente, para la ejecucion del anterior decreto, prueban lo que hemos dicho antes, respecto de la ley de presupuestos de 1835, á saber, que no llegó tampoco á tener verdadera observancia. No haremos sino anotar las principales, para que pueda observarse el curso de esta medida rentística y sus efectos en la administracion. En 13 del mismo noviembre se fijan las bases, segun la cuales deben llevarse á efecto la centralizacion de fondos decretada, y su aplicacion á las diversas atenciones del servicio público: en 27 del propio noviembre, se hacen á la direccion del Tesoro público varias prevenciones para la mas exacta observancia de la centralizacion de fondos y modos de verificar los pagos: en 30 de diciembre, lamentándose la regencia de la falta de observancia del decreto citado, dictó nuevas prevenciones á los intendentes, contadores y tesoreros, sobre pagos y movimiento de caudales. En 1841, y en 12 de febrero se vuelven á dictar nuevas medidas para restablecer el órden y regularidad en la cuenta y razon, y para corregir abusos en la recaudacion é inversion de los fondos: en 25 de mayo se dictan nuevas prevenciones para facilitar la centralizacion de aquellos: en 28 del mismo se añaden otras reglas para mejor llevarla á efecto: en 20 de julio se trata de dar la conveniente unidad al sistema de centralizacion de fondos, y se aclaran algunos puntos, sin destruir, se dice, las bases esenciales en que dicho sistema está fundado. Desde entonces se puede decir que no vuelve á aparecer disposicion alguna que indique la persistencia con que el departamento de hacienda queria llevar á efecto la centralizacion de todos los fondos públicos; y

es que, desesperanzado tal vez en su empresa por corruptelas antiguas, ó por no encontrar bastante apoyo en los demás departamentos, ó poca solicitud en los dependientes del suyo mismo; el pensamiento se hallaba todavía en el período de su desarrollo, y necesitaba algun tiempo para germinar, y empezar á ser un hecho.

Este período llega desde principios de 1850. Aleccionada ya la administracion con el ejemplo de lo pasado; vistos los puntos capitales en que habia existido la resistencia, y fortificada la opinion algun tanto con las doctrinas que se habian estado sentando, pudo ya prepararse el Ministerio de hacienda con el decreto de 24 de octubre de 1849, en que sábiamente se eludieron los principales escollos, á realizar la centralizacion de fondos desde 1.° de enero siguiente. Basta trascribir los dos primeros de sus artículos para comprender el espíritu con que está redactado el decreto. Dice así:

«Artículo 1.° Desde 1.° de enero de »1850, ingresarán *material* ó *formalmente* »en el Tesoro público los productos íntegros de todas las rentas, impuestos y derechos, cualquiera que sea su clase ó denominacion, aplicados al pago de obligaciones comprendidas en el presupuesto general del Estado. Los fondos que tengan »una aplicacion especial, no serán, sin embargo, distraidos para atender á otras obligaciones, sino en la parte sobrante, despues »de cubiertas las del objeto especial á que »estuvieren destinados.»

«Art. 2.° Desde dicho dia dependerán »del ministerio de hacienda, en todo lo concerniente al manejo de fondos y rendicion »de cuentas, los empleados encargados ó »que se encargaren de la recaudacion de »rentas, impuestos ó derechos que en el dia »está, y que *por ahora continuará unida á »servicios dirigidos por otros ministerios.*»

Se vé por solos los dos precedentes artículos, que reina en el decreto anterior, al par que un gran miramiento por lo existente y un gran deseo de no atacar de frente ningun interés, por pequeño que sea, una resolucion firme y tenaz de llevar adelante el pensamiento por completo. Esta resolucion se trasluce mas todavía en la instruccion de 25 de enero de 1850, comprensiva de 178 artículos, formada esclusivamente para llevar á efecto la centralizacion de los productos íntegros de todas las contribuciones, rentas, impuestos y derechos del Estado, en las cajas del Tesoro público; la distribucion de los fondos que ingresan en el mismo, y la ordenacion de las cuentas en la forma que previene el real decreto de 24 de octubre antes citado. Tal es la legislacion existente sobre el particular, que vino muy pronto á recibir su complemento con la publicacion de la ley de contabilidad de hacienda pública, fecha 20 de febrero siguiente, y otras disposiciones orgánicas de igual importancia.

Desde luego se comprende que la *centralizacion de fondos* no podria ser siempre *material*; y antes en ello resultarian embarazos, gastos y riesgos de traslacion de caudales, que harian relacion á ella. No podria ser por tanto sino, ó *material*, ó *formal*, ó figurada, segun los casos, y asi hemos visto lo declara la ley.

Grandes eran las razones que persuadian la centralizacion, y no ya de buena contabilidad, como queda indicado; ni solo de conveniencia y equidad, sino de rigorosa justicia. Si el Estado no es mas que uno, una misma debe ser tambien la suerte de sus servidores, lo cual con la excentralizacion de fondos no podia ser. Produciendo mas unos ramos de la administracion, que otros, los empleados en aquellos eran pagados al corriente; con ventajas sino, y algunas veces, como lo hemos conocido, aun con pagas escedentes por causa de atrasos; mientras los empleados en los segundos sufrian atraso; y aun postergacion y olvido casi completo. De ese modo, mientras alguna clase de empleados, los de hacienda pública, por ejemplo, de correos, etc., recibian el completo de sus pagas, ó próximamente, otros, los profesores universitarios, v. g., percibian solo algunas, á veces dos ó tres únicamente al año. La propia desigualdad se verificaba aun entre empleados de un mismo ramo; pero en diversas provincias, segun que estas eran mas ó me-

nos productivas. Veíase en consecuencia, que la órden de pagos mensuales, no era una para todas y á un mismo tiempo; sino tantas, cuantos eran los ministerios, y aun los centros superiores de administracion especial, como si hubiera otros tantos Estados. Tampoco las grandes atenciones del material podian ser satisfechas con igualdad y uniformidad, siendo anormal y casi imposible en ciertos casos el trasladar fondos de unas á otras tesorerías, de unos á otros ramos.

Grandes eran tambien las dificultades, y bien lo ha demostrado la lentitud de los buenos resultados. La primera era la de vencer la fuerza del hábito. La segunda la que ofrecia el interés individual y de clase. Y éralo, entre otras, la posibilidad de disminuirse los ingresos especiales, dejando de ser fomentada por el interés individual y de clase; y entiéndase que hablamos del interés aun en el mejor sentido. Los profesores, por ejemplo, de un establecimiento público, pagados de los fondos especiales de este, se sentian fácil y naturalmente dispuestos á aumentarlos. Asi redoblaban su celo, aun multiplicando sus tareas hasta lo estraordinario, v. g., para aumentar asimismo el número de matrículas, y con ellas los ingresos; pero no sentian con igual energía ese estímulo, no les impelia igualmente á tareas estraordinarias, que no eran debidas, sino espontáneas, cuando los emolumentos, fruto en parte de sus desvelos, habian de centralizarse, para pagar á clases diversas, mientras las productoras eran tanto menos atendidas, cuanto aquellas lo eran mas. Razones de suprema justicia y conveniencia, sin embargo, fueron neutralizando los inconvenientes, y acabaron por superarlos del todo.

El primer resultado material de la centralizacion era el aumento de un presupuesto, del central, digámoslo asi, del de hacienda; y la natural disminucion de los restantes. En virtud de la traslacion de fondos, no material, sino formal, los empleados de ramos, y de provincias, en que hay recursos sobrantes, son pagados, sí, de ellos; pero cuando todos, y en proporcion con todos los del Estado, pasando el escedente de esta proporcion, absoluta ó relativa, á otras consignaciones. Y decimos relativa, porque á veces la urgencia de un servicio hace que otros, por medida de gobierno, queden desatendidos, ó lo sean menos. Esta es la penosa incumbencia de las *juntas de distribucion de fondos* unas veces, otras del Consejo de gabinete. V. sobre esto el artículo CAUDALES (*distribucion de*).

Háse puesto en planta todavía un medio de centralizacion, que pudiera decirse por la *tácita*, sin que por eso sean menos positivos sus resultados. Ha tenido lugar, y de haber centralizacion, es el único posible en ramos de emolumentos inestimables, ó que no pueden serlo sino con suma dificultad. Tales son los derechos llamados de *estola* y *pié de altar*: los provenientes del cumplimiento de memorias y aniversarios en las parroquias y cabildos: los diezmos y mandas: los derechos de jueces y otros funcionarios, que los han tenido ó tienen, como relatores, cónsules, etc. En estos casos la *centralizacion* se ha verificado del único modo en que podia serlo, por *imputacion en pago*; pero *á priori*, al prefijar la asignacion. Asi, estimados tales productos por un cálculo alzado, que á veces habrá sido provechoso al individuo; otras al Estado, se han tomado en cuenta para fijar el sueldo ó asignacion de tales clases y funcionarios. La parte imputada equivale á igual cantidad salida del Tesoro, pues á lo propio equivale que este pague eso de menos, y la cual, de no apreciarse, y tomarse en cuenta, habria de cubrirse por una salida efectiva de fondos. Todavía esta materia volverá á tocarse en numerosos artículos conexos, como DERECHOS DE ESTOLA, DISTRIBUCION, JUNTA DE DISTRIBUCION, PENAS DE CAMARA, etc. (véanse).

CENTUMVIROS. Jueces populares, que en Roma formaban tribunal con el pretor. Se llamaron *centumviros* de la palabra *centum*, aunque nunca constó el cuerpo ó colegio del número exacto de *ciento*. Eran elegidos tres por cada tribu; y siendo estas 35, resultaban 105 jueces. Despues llegó á constar el colegio de 180 jueces. Ad-

ministraban justicia en la *Basílica Julia*. De ordinario se dividian en cuatro secciones; y segun la gravedad del caso en cuestion, el pretor despachaba con una seccion sola, ó reunia dos, tres, y hasta las cuatro. En el punto en que se verificaba el juicio ó se formaba el tribunal, se fijaba una hasta, y segun algunos autores, dos, para indicar el tribunal á la muchedumbre, é imponer respeto. De aquí las frases *hastæ judicium*: *judicium centumvirale*: *centumviralem hastam cogere*. Ciceron (De Oratore, lib. 1, núm. 38) indica asi la competencia del tribunal de los *centumviros*: «*Nam volitare in foro..... jactare se in causis centumviralibus, in quibus usucapionum, tutelarum, gentilitatum, agnationum, alluvionum, circumluvionum, nexorum, mancipiorum, parietum, luminum, stillicidiorum, testamentorum ruptorum, aut ratorum, cæterarumque rerum innumerabilium jure versantur...*» Véase Heineccio, Antigüedades romanas, lib. 4, tit. 6, §. 8 y 9.

CENTURIA. Entre los romanos, y segun el censo, la seccion de cien almas. De aquí comicios centuriados y leyes centuriadas, cuando el pueblo se reunia y votaba por centurias. En lo militar, la compañía de cien soldados, y de ahí centurion al que la mandaba. Véase CENSO ROMANO: COMICIOS.

CENTURIA. Distribuida la poblacion de Roma en *curias*, *centurias* y *tribus*; centuria espresa una de estas divisiones. Venian las *centurias* desde *Servio Tulio*: y aunque toman su denominacion de *ciento* (*céntum*) ni ellas eran ciento, sino treinta y cinco; ni constaban solo de cien individuos, como vemos que tampoco se componia de solo ciento el colegio de los *centumviros*: y sin embargo, se denominaban asi: ni el juicio dado por ellas lo era siempre por ciento; y con todo se decia *judicium centumvirale*. Las asambleas, ó grandes reuniones del pueblo de Roma se verificaban sobre la base de alguna de las mencionadas divisiones, y tomaban de ello su denominacion, lo propio que las leyes ó decisiones adoptadas, y de aquí comicios *centuriados*, ley tribunicia, etc. Véase CENSO ROMANO: COMICIOS.

CENTURIONES. Género de adivinos, que pretendian penetrar lo futuro por las rayas de las manos, como los llamados gitanos. Llamáronse en la iglesia griega *hecatontarchæ*. El sínodo *trullano* por su Cánon 61, los condenaba á penitencia pública.

CEPO. Del latin *cippus*; que significa lo mismo, esto es, aparato, ó medio material, de tener á uno asegurado, ó sujeto, sin necesidad de puertas, ni llaves. Otros lo derivan del verbo latino *capio*, en su tiempo *cepi*, ó en su modo *capere*: aprender, retener, sujetar. Es un medio de *prision*, y seguridad muy antiguo, y debe de serlo tanto mas, cuanto mayor y mas general era la falta de cárceles formales; y puesto que asi, aun al aire libre, se detiene con seguridad al apresado ó retenido. Empleábase para los reos, para los prisioneros de guerra y para los cautivos, y de ordinario para los primeros, aun desarrollada la civilizacion general, la fuerza y medios coercitivos de otro género del poder público: hoy se halla en práctica todavía en muchas naciones, y entre nosotros ha llegado hasta nuestros dias. En lo antiguo era un trozo, ó pedazo considerable de piedra, madera, ó hierro, al que amarraban al preso, ó prisionero; el cual, no pudiendo arrastrarlo, estaba ciertamente seguro. Bajo esa forma se llamó tambien *maza*. Despues eran dos vigas, ó piezas prolongadas de madera, sujetas con un gozne por un estremo, cerrándose por el opuesto con cadena y llave, ó candado, quedando asi fuertemente sujetos uno á otro. Cada una tenia por la cara interior escopladuras de medio punto, correspondientes á las de la otra, formando cada dos un círculo completo al cerrarse, dentro del cual quedaba estrechada ó sujeta una de las piernas del reo por la canilla. Alguna vez se sujetaba este al cepo por las dos piernas. Otras, el cepo se aplicaba al pescuezo, en posiciones mas ó menos violentas; pero violentas siempre. Cuando el cepo podia arrastrarse, y el reo estaba sujeto á él por una cadena con grillete, se llamaba *maza*, y era como se vé, el cepo antiguo, aplicado solo para difi-

cultar la fuga, no para sujetar absolutamente. Aun habia otras formas de cepos. Véase *Corma*. En el dia se halla prohibido el uso de los cepos, como de todo aparato y medio material violento, ó inhumano de aprisionamiento.

El llamado *cepo de campaña*, era un medio de sujecion de otra forma que el cepo carcelario; pero violento tambien y seguro. Puesto el soldado en *cuclillas*, se le pasaba un fusil, (y el mismo efecto hacia una barra ó pértiga inflexible) por bajo de las rodillas, por la parte interior, esto es, por una y otra corva: luego por bajo del fusil se le traian los brazos, hasta encontrarse las manos por las palmas delante de la espinilla de las piernas, sujetándoselas fuertemente pulpejo con pulpejo. Lo ordinario era caer el soldado rendido, y aun acongojado al poco rato. Para evitar atenuase la penalidad de la situacion asentándose, solia ponerse una bayoneta, apoyando el cubo en la tierra, y la punta en la asentadera del sujeto al cepo.

CEPO. Y tambien *cepillo*. La caja de hierro, ó madera, colocada en los templos y lugares sagrados, para que los fieles depositen sus limosnas, aplicables á diferentes objetos del culto religioso. Tomando el efecto por la causa, estas cajas ó depósitos, se llaman *cepos*, por estar fuertemente sujetos para que no sean sustraidos, ó arrancados.

CERA. Del latin *cera*, y esta voz de la griega *ceros*, la parte crasa del panal formado por las abejas, esprimida la miel. Resulta, que por la etimología y por el uso, la enunciativa de *cera*, sin otro aditamento, indica siempre cera de abejas. La antigüedad la usó para alumbrar en actos religiosos y domésticos; y la Iglesia cristiana adoptó desde el principio este uso de la cera en los templos y actos religiosos; y siempre que en lo eclesiástico se habla de *cera*, y *cirios*, ha de entenderse por la cera de abejas. Asi constantemente lo ha practicado y mandado la Iglesia, y lo ha consignado en los ceremoniales y hasta en los rezos eclesiásticos: asi, por ejemplo, dice en la solemne bendicion del cirio pascual: «*quod tibi in hac cerei oblatione solemni, per ministrorum manus*, de operibus apum, *sacrosancta reddit Ecclesia. Alitur, enim, liquantibus ceris*, quam, *in substantiæ prætiosæ hujus lampadis*, apismater eduxit.»

Hay ciertamente otras sustancias crasas, que imitan la cera, hacen su servicio, como luminaria, y aun llevan su nombre, como la llamada *cera vejetal*. La química demuestra que entre la cera de abejas, la vejetal, el sebo y los aceites, ó sustancias oleosas, hay ciertos principios comunes, ó idénticos, ó muy análogos, como por ejemplo, los ácidos *esteárico*, *margárico* y *palmítico*; pero contienen tambien otras diferentes: la inmoralidad, ó la pericia facultativa podrian aun mezclar grasas diversas; y ciertamente que nada seria mas impropio del altar, y ritos sagrados, que la grasa de carnes inmundas, ó repugnantes. La Iglesia, por tanto, sostiene el uso de la cera de abejas. En razon de ello, en 1853 un estranjero anunció en Madrid la venta de *cera vejetal* de su invencion. Los fabricantes y espendedores de cera de abejas acudieron á la vicaría general eclesiástica pidiendo fuese aquella reconocida, y se declarase no ser aplicable á los usos de la Iglesia. Sobre ello se travó polémica facultativa y se publicaron dictámenes impresos de acreditados químicos de la Corte, relativos al análisis y composicion de una y otra cera, y que deben consultarse en controversias de igual género (1). La vicaría declaró no ser admisible dicha *cera vejetal* para los usos del culto sagrado.

El tít. 18, lib. 7 de la Nuev. Recop. estaba todo dedicado á tratar de la cera, de los fabricantes de ella, y de los veedores; pero no se trasladó á la Novísima. Por real órden de 3 de octubre de 1818 se derogó el privilegio esclusivo que tenian las fábricas de Cádiz y de Sevilla para esportar cera blanqueada en marquetas para América, concediendo franquicia á todas las fábricas del reino. En otra de 20 de mayo de 1838 se declaró libre de derechos de puertas la cera que se introdujese para el culto de iglesias y conventos, como comprendida en el art. 13 de la real

(1) Del Ingeniero Escosura, y de los químicos Lleget, Masarnau, y Blesa.

instruccion de 16 de enero de 1835. Despues de la reforma arancelaria, la cera es uno de tantos artículos de ella, y allí puede verse.

Antes de introducirse y generalizarse el uso de papel y tinta para lo escriturario, los romanos, como es sabido, barnizaban con cera tablas, ó planchas, sobre las cuales escribian con buril, ó estilete (*stilus*), especialmente los testamentos, y de ahí las locuciones *prima cera*, *secunda cera*, por primera oja ó página, segunda, etc.

CEREALES. Como si se dijera los frutos de Céres, diosa de las mieses. Y como se dijo asi del antiguo verbo latino *céreo*, criar, alimentar, seria *cereal*, todo lo que alimenta, siendo fruto de la tierra. Y sin embargo, la denominacion se limita á las sustancias farináceas, pero no á todas; sino á las mas clásicas y comunes, como el trigo y cebada en todas sus clases, la avena y escanda. En un sentido, lato las legumbres se comprenden en la enunciativa genérica *cereales*; pero no en sentido específico; por lo que en cada caso ha de estarse á los términos de la ley ó disposion administrativa, y á la causa y fin de ella. Asi, cuando una ley ó decreto dice, por ejemplo, que la esportacion, ó importacion de *cereales* se permitirá cuando el precio del trigo llegue á tal cantidad, y á tal el de la cebada, es evidente que limita la acepcion de *cereales* á solas estas especies. Es de notar que trayendo específicamente el mismo principio las denominaciones de *granos*, y *cereales*, en el uso es aquella mas estensa que esta, pues comprende sin necesidad de mas espresion las legumbres; y no asi siempre la otra. Véase **GRANOS** (*comercio de*) **GRANOS: HARINAS: LEGUMBRES.**

CEREMONIA. Apenas parece prestarse esta palabra á un artículo estenso en lo jurídico; y sin embargo, *ceremonia* y *ceremonial*, son, como el epígrafe que encierra y supone una teoría fundamentalísima, eminentemente filosófica, necesaria y convenientemente política, jurídica y moral. La fisiología nos enseña hasta qué punto el hombre vive en *vida de relacion* con todo lo que afecta sus sentidos: la filosofía platónica nos dirá que *nihil est, ni intellectu*; *quin prius fuerit in sensu*: la psicología proclama el principio de que *voluntas humana sine motivis sese non determinat*; segun hemos espuesto ya en el artículo **CAUSA** (*por motivo*): la esperiencia propia, en fin, y la general de todos los tiempos nos enseñan cuánta verdad hay en las anteriores enunciativas; y seria, no ya inconveniente, sino aun absurdo, sostener, que el legislador no debe estudiar, y estudiar sériamente, y tener presente en todo la humana naturaleza, el influjo de lo físico sobre lo moral, el corazon humano, en fin; como el hombre se determina, y como se retrae, para afirmarle en esas vías, cuando asi convenga á su propio bien, ó á los fines del legislador, que no debe perder de vista este principio.

Pero, si tan inmensa es la teoría fisiológica, del influjo físico sobre lo moral, del de los actos esternos sobre las deliberaciones de la voluntad; imposible es que toda pueda ni deba esponerse bajo el epígrafe de este artículo, y menos aun en una obra enciclopédica alfabética, determinada por ello á dividir y á reservar á cada epígrafe alfabético lo que le es peculiar. Algo lo es del presente, doblemente por ligarse, asi al órden civil, como al religioso, y por eso no podemos menos de consignar en él consideraciones que en otra parte tienen su complemento, pero de que aquí no puede prescindirse.

Notaremos desde luego, que el empeño que se ha tomado en averiguar, aunque casi sin resultado cierto, el orígen etimológico de la palabra *ceremonia*, revela la importancia de su objeto. Es, en efecto, la *ceremonia* en lo sagrado, en lo moral y legal, lo que en lo lógico y psicológico el *lenguaje de los hechos*: es en la region del sentimiento, lo que la palabra á la idea en la region de lo intelectual; y aun corresponde al órden intelectual muchas veces, como es sabido y espondremos.

Dícese del latin *cæremonia*; pero etimológicamente viene, segun unos, de la palabra latina anticuada *cero*, que significaba cosa santa, sagrada: segun otros, de *gero*, llevar, y *munus*, don ú ofrenda, y por tanto

de *gerere munia*, y en lo antiguo *cerere munia*, pues solia usarse la *c* por la *g*, como vemos tambien en la etimología de Céres: segun otros muchos, en fin, del hebreo *cherem*, consagrar, santificar: de *cor* y *moncre*, hablar al corazon: de *Céreris munia*, ofrendas ó sacrificios á la diosa Céres; y dejando algunas mas, de Cære, ó Cere, poblacion cerca de Roma, á la cual, durante la invasion de los gaulas, se refugiaron los romanos con las vestales y los ídolos: el peligro hizo los sacrificios allí mas frecuentes y fervorosos, quedando despues, como un recuerdo indeleble y antonomástico, *Cæris munia*, los *sacrificios de Cére*. Esta opinion de Valerio Máximo es la mas comun.

Por ella, sin embargo, no se deduciria la etimología de la voz, sino en su aplicacion al culto; aunque nada obsta á que por traslacion, por analogía de fines, se haya aplicado despues á todos los actos de correlacion social, moral y oficial entre los hombres. De dichos principios podria provenir tambien el que la palabra ceremonia, aunque con una acepcion universal á todo acto de correlacion en la region de la inteligencia y del sentimiento, sea como antonomástica en lo religioso.

La misma dificultad, que en su etimología, hay para precisar su significacion; lo uno, por su universalidad á todos los actos esternos: por las muchas voces que la sustituyen como sinónimos, ó equivalentes, cuales son, segun los casos, *rito*, *costumbre*, *prácticas*, *uso*, *solemnidades*, etc.: porque unas veces, en fin, significa lo grave, espresivo, solemne en los actos esteriores; otras lo ficticio: la sincera realidad unas veces; otras la apariencia, la frivolidad, la simulacion, hasta la hipocresía: tal es hacer las cosas buenas, debidas, mandadas, ó acostumbradas, por *pura ó mera ceremonia*, como muchas veces se hacen; esto es, con ficcion, sin atencion, verdad, ni sinceridad, con hipocresía, con mofa tal vez.

Ahora, segun la Academia de la lengua, ceremonia es «accion, ó acto esterior arreglado por ley, estatuto, ó costumbre, para dar culto á las cosas divinas, y reverencia y honor á las profanas;» asi como, segun la misma, es otras veces, «afectado obsequio, de alguna cosa ó persona.» Segun el Diccionario de Trevoux, «Ceremonia es el conjunto de acciones, formalidades y modos de hacer una cosa mas magnífica, y mas solemne.» La verdad es que infinitas veces hay *ceremonia y ceremonias*, sin llegar á lo mas *solemne*, y ni aun á lo *magnífico*. El mismo Diccionario estiende la ceremonia á los miramientos y atenciones del trato humano; espresando ser entonces *vitæ communis obsequiositas, comitas*.

De todo ello se deduce que en su acepcion mas lata, ceremonia es todo acto, y formalidad esterior, de dicho, ó hecho, mandada, ó acostubrada en la correlacion de los hombres entre sí, y de los hombres con Dios, con el fin de aumentar la dignidad, ó espresar mejor la verdad y sinceridad del acto ó propósito para que se practican. Siempre la ceremonia versa, como hemos dicho, cuando es sincera, en la region de la inteligencia ó en la del sentimiento, pues tiene por fin, ó el hacer una cosa mas perceptible, ó el interesar al corazon: el fijar mas la atencion; inculcarla con la conveniente energía, ó eficacia; conciliarla respeto, adhesion, veneracion en su caso.

Ceremonial es el libro, registro, ó ley en que se prescriben, ó compilan las ceremonias: otras veces, tomando el contenido por el continente, se llama asi el conjunto de las ceremonias, preceptuadas, ó acostumbradas en cada caso, hecha abstraccion del libro que las contiene, ó costumbre que las impone, ó requiere.

Las ceremonias son á veces tan esenciales, que afectan la validez de los actos profanos ó sagrados, por que se practican. Tal sucede en lo eclesiástico, en cuanto á ciertos ritos de los sacramentos, por ejemplo: en lo civil, en las llamadas solemnidades de derecho, como v. g., las solemnidades de los testamentos: y todas las que se llamen *profanas*. De aquí nace, que en cosas graves, solo es competente para establecer ceremonias, modificarlas, ó abolirlas, la autoridad correspondiente, ó la que hace veces de tal, esto es, en lo eclesiástico, la autoridad eclesiástica, ó la

costumbre, cuando asi lo autoriza la ley: en lo civil la autoridad secular, y á su vez la costumbre legítima. Despues de esta regla general, ha de estarse en cada caso á las prescripciones de la ley ó la costumbre para el mismo, asi como en el trato social á lo que prescriben y tienen recibido el buen sentido y la cultura. De aquí el ridículo, el vituperio, la mofa en sus casos, y á veces la responsabilidad efectiva, que acompaña al que se empeña en singularizarse, menospreciando, ó no observando lo mandado ó recibido.

Tanta importancia han dado los legisladores á las ceremonias, que siempre se ha reputado conveniente, y necesario muchas veces, el cargo público y pericial de consultor y director, y aun, como fiscal de ellas, denominado, segun los casos y negocios, chambelan, introductor de embajadores, maestre de palacio ó de la etiqueta, maestro de ceremonias, etc. Véanse sus artículos.

Hay dos puntos en que principalmente ha prevalecido la denominacion y tecnología de *ceremonia* y *ceremonial*, y es en lo eclesiástico, y en lo diplomático, y como es consiguiente, en los actos y solemnidades religioso-políticas. Y no porque en todos los actos sociales, en la estensa region de lo *moral*, de la *inteligencia*, y del *sentimiento* no domine, inevitable, necesaria y siempre convenientemente la idea, aunque con tecnología diversa. Segun las anteriores indicaciones filosóficas ¿que otra cosa son en su caso, los ritos, la liturgia, las formalidades y solemnidades esternas de derecho, el aparato en las ejecuciones de muerte, los usos y costumbres sobre el trato humano, etc., qué otra cosa son, decimos, que *ceremonias*? ¿Qué otra es la base cardinal teórica del *culto esterno*, tan combatido por los que temen su eficacia y resultados, porque realmente no quieren ningun culto, aun cuando invocan el *interno*; si bien para desecharlo despues, hasta parar en el *deïsmo*, que al propio tiempo es en ellos el fin y el punto de partida, como esponemos en su artículo? De todo ello se deduce la naturaleza filosófica y la conveniencia política y religiosa de las *ceremonias* en el sentido propio y legal de la palabra. Los legisladores de todos los tiempos lo han comprendido asi, y asi es preciso lo comprendan, como asi tambien lo proclaman los pensadores de antes, como los de hoy, sobre lo cual bastaria el testimonio del pensador Benthan, y una ligera ojeada sobre su sistema penal y carcelario.

La Iglesia, con especial razon, debia fijar, y fijó, en efecto, en ello su atencion y cuidado. Fácil es comprender, que en los primitivos tiempos debió de ser, y fué bien sencilla, su liturgia. La estension protectora del rito cristiano, y la tibieza de los fieles, exigió despues otra cosa, y los tiempos la permitieron. Tal vez en algunos casos hasta se ha recargado la liturgia; pero siempre lo esplendoroso del culto esterno, como de todos los ceremoniales profanos, descansa y descansó en un principio filosófico, en la naturaleza del hombre, en el conocimiento del corazon humano; mientras los cultos frios, desnudos de toda solemnidad, se apartan de este principio; y si son eficaces para almas elevadas, para espíritus no comunes; y antes privilegiados, singulares; es demasiado cierto que no es privilegiado en ese sentido todo el género humano. «Las ceremonias dice, un escritor sagrado (1), fueron instituidas por los Apóstoles y por sus sucesores, para que, segun el alcance de nuestro entendimiento, en los signos visibles, sean como ayuda para poder elevarnos á los sagrados misterios.» Muchos siglos despues repetia el Concilio de Trento, relativamente al ceremonial de la misa, como hablando del libre alvedrío, habia dicho San Agustin (2): «*Cumque natura hominum ea sit, ut non facile queat sine adminiculis exterioribus ad rerum divinarum meditationem extolli, propterea pia Mater Ecclesia ritus quosdam.... instituit. Cœremonias item adhibuit, ut mysticas benedictiones, lumina, thymiamata, vestes, aliaque hujus generis multa, ex apostolica disciplina, et traditione, quo, et majestas tanti sacrificii commendaretur, et mentes fidelium per hæc visibilia reli-*

(1) San Dionisio, *Divina gerarchia*.
(2) De libero arbitrio, cap. 20.

gionis, et pietatis signa, ad rerum altissimarum, quæ in hoc sacrificio latent, contemplationem excitarentur (1).»

Todavía el mismo sagrado Concilio, decidió en materia sacramental. «*Si quis dixerit receptos, et approbatos Ecclesiæ catholicæ ritus in solemni sacramentorum administratione adhiberi consuetos, aut contemni, aut sine peccato á ministris pro libito ommitti, aut in novos alios, per quemcumque ecclesiarum pastorem mutari posse, anathema sit* (2).»

Como á veces ceremonia, rito, y liturgia, se toman unas por otras indistintamente; otras, segun se vé en el cap. 3, ses. 22 del Concilio, antes inserto, se hace cierta distincion, es constante que una gran parte de las materias relativas á este artículo, se esponen y tratan en lo eclesiástico, bajo la palabra **RITO**, como tambien en las de *liturgia* y *rúbrica*. Véanse estos artículos y además los de **CEREMONIAL, CULTO, MAESTRO DE CEREMONIAS, RITO, RITUAL.**

Hemos indicado que otro de los asuntos públicos en que mas particularmente se han hecho técnicas las fórmulas *ceremonia y ceremonial*, es en lo diplomático. Véase sobre ello **AGENTE DIPLOMATICO, CEREMONIAL, DIPLOMACIA, EMBAJADOR.**

CEREMONIAS. (*Maestro de*). V. este artículo.

CEREMONIAL. El libro de las ceremonias; y el conjunto mismo de ellas. Llámase otras veces *rito* y *ritual*. Asi decimos el *rito griego*, el *rito muzárabe*, el *ritual romano*, el *ceremonial de obispos*, etc. Sobre *ritual romano*, V. **RITO, RITUAL.** Sobre el *ceremonial de obispos*, V. **OBISPO.**

Fuera de lo eclesiástico, y aun cuando las *ceremonias*, segun queda espuesto en su artículo, sean estensivas á todos los órdenes é instituciones prácticas, no todas han formulado *ceremoniales*, en la primera acepcion de la voz; aunque todas los tienen en la segunda. En la diplomacia es técnica en este sentido la voz ceremonial. El Congreso de Viena acordó que cada nacion pudiese formar, y era árbitra de formar su ceremonial diplomático, por lo que hace al interior de su territorio, y asi se practica; mientras para el esterior ó para Congresos generales ha de estarse al derecho de gentes positivo; y el Congreso mismo de Viena estableció ciertas reglas obligatorias para todas las naciones en tales casos, y aun en las reuniones del Cuerpo diplomático estranjero en cada córte. Véase **AGENTE DIPLOMATICO, DIPLOMACIA, EMBAJADOR, ETIQUETA.**

CERIBONES. Corrupcion de la frase latina *cedere bonis*. Lo mismo que *cesion de bienes*. Tomando el efecto por la causa, la frase *hacer ceribones*, significaba, no solo la cesion de bienes, sino el lamentable papel que jugaba, esto es, el sin número de humillacioones, súplicas y demostraciones de obsequio que practicaba el que cedia los bienes á sus acreedores, para que estos no mirasen la cesion y quiebra como fraudulentas, cuando era tal el rigor de las leyes, que no solo habia prision por deudas; sino que los acreedores eran entregados como es sabido, en manos y á discrecion de sus acreedores.

CEROFERARIO. V. **ACOLITO.**

CERCA, CERCADO. En el sentido de heredad defendida ó cerrada con pared, estacada, coto, etc., y cuando cada uno puede ponerla á sus heredades, véase **CAZA Y PESCA: CERCAR.**

CERCAR. En el sentido de cerrar ó acotar las heredades, véase **CERRAR.** En el de fortificar, véase **CASA FUERTE, CASTILLO, FORTALEZA, MURO, PEÑA BRAVA.**

CERCO. En lo militar se ha tomado y aun toma unas veces por bloqueo, y otras por sitio, llevando asi á las mismas cuestiones de derecho de gentes que estos artículos. Véase, pues, **BLOQUEO, CAPITULACION** *(en lo militar)*. **SITIO** *(en lo militar)*.

CERRAR. CERRAMIENTO. Tómase en lo rural por el que en casos determinados puede hacer cada uno de sus heredades, y tómase, no solo por el cerramiento material, ó por medio de cerca, estacada, coto, etc., sino aun por el cerramien-

(1) Ses. 22, cap. 5.
(2) Can 12, ses. 7.

to meramente legal, digámoslo así, como lo es el acotamiento. Véase APORTILLAR: ACOTAMIENTO: CAZA Y PESCA: COTO: PASTOS: VEDA.

CERTEZA. En todo el órden filosófico, sin escluir ninguna de sus innumerables y diversas ramificaciones, no hay acaso, una palabra mas *sintética*, que la de *certeza*, así como su equivalente en determinada acepcion, *certidumbre*, segun esplicamos en su artículo. El objeto providencial, y por tanto natural del entendimiento humano es la verdad. Todos los esfuerzos normales y racionales de la humana inteligencia se encaminan á conocerla. Cuando lo hemos conseguido omnímodamente, esto es, cuando acerca de un objeto hay *percepcion clara*, y *asentimiento* omnímodo de la inteligencia; cuando esta se aquieta, dando por terminada su tarea de exámen é investigacion, por no sentir ya la necesidad de ella, hemos llegado á la certeza. Certeza es, pues, la *conviccion*, la *seguridad intelectual de la verdad*. Así en cada caso particular la *certeza* es el término de la tarea cognoscitiva de la inteligencia: es en *abstracto* en el terreno de lo cognoscitivo, en el órden lógico y crítico, ora estas operaciones del espíritu se apliquen á lo metafísico, á lo físico ó á lo moral, lo que *cierto*, y *evidente* son en *concreto*. Es, por tanto, repetiremos, la enunciativa mas *sintética* en el mencionado sentido, de todo el órden filosófico.

Por eso mismo, en su apreciacion y esposicion es casi inseparable de las de *idea*, *verdad*, *evidencia*, *criterio*, y aun algunas mas, filosóficas todas por su índole, y que por tanto no ofrecen solo cuestiones etimológicas y filológicas, como otras muchas; sino filosóficas, trascendentales al órden moral, legal y jurídico. Y todavía estas cuestiones presentan hoy mayor importancia que en lo antiguo; pues si antes el *principio de la certeza* era una cuestion *filosófica*, siempre importante, hoy, en la nueva tecnología y sistemas es comun el tomarla por la *filosofía* toda, entendiendo por tal frecuentemente la ley, el principio y regla cierta de la *cognoscibilidad*, de la *humana certeza*, con el singular fenómeno, sin embargo de *haber corrido mucho*, y *correr siempre*, *para apartarse de la cogitacion personal de Descartes*; y *hallarse siempre cerca de ella*. Ni en este, ni en otros artículos análogos, podemos entrar de lleno en las altas cuestiones filosóficas á que se prestan; pero en todos tendremos que descender á las indicaciones que requiere la índole, filosófica tambien, de nuestra obra.

De lo dicho se infiere con cuanta razon y lógico fundamento se repite, como una regla, que en cada uno de nuestros juicios *la verdad está en las cosas*; *la certeza en la persona*.

Pero por una razon de reciprocidad se llama tambien *certeza* la verdad misma de que estamos ciertos, y en este sentido cosa cierta es lo mismo que *verdadera en sí*, *indubitada*.

En estas acepciones, pues, en el órden legal, como en el filosófico, la certeza es el órden legal, en las cosas una cualidad de *su ser*, ó *de su modo de ser*: en la humana inteligencia *una situacion lógica*; en el ánimo. esto es, en la inteligencia y la voluntad una *situacion moral*: en las cosas lo *claro*, *evidente*, *indubitable* de ellas, bajo el punto de vista en que se aplique respecto de las mismas, la voz *certeza*: en la inteligencia el grado de *claridad*, *seguridad*, *evidencia*, conque las percibimos: en el ánimo la seguridad, la *indubitabilidad* con que las creemos, como sucede respecto de las cosas ciertas para nosotros por *adhesion*, segun esplicaremos.

La certeza, pues, es en sentido lógico *objetiva* y *subjetiva*. Y decimos en sentido lógico, porque, aun cuando no siempre concurran los dos conceptos, esto es, no siempre hay certeza de *códem secundum idem*, de una misma cosa bajo el mismo punto de vista, no siempre, decimos, hay esta certeza en el *objeto*, y en el *sugeto*, pues no es del hombre el conocer todo lo que existe y es verdad en sí; basta que puedan concurrir, para que la lógica tenga que considerarles. Hay certeza en el *objeto*, y en el *sugeto* respecto de aquellas ideas, hechos, ó nociones conocidas, tan evidentes en sí, como indubitadas para todos, cual suele suceder en

Lorenzo Arrazola

ciertas verdades y nociones físicas. Asi es tan cierto en sí, como para todos, que la aparicion del Sol trae el dia, ó su ausencia ocasiona la noche; mientras lo contrario sucede en muchas verdades y nociones científicas y morales: en matemáticas, por ejemplo, hay verdades *objetivas*, ó ciertas en sí; pero que *subjetivamente* lo son solo para el profesor; no para el comun de las gentes: las verdades reveladas son *objetivamente* ciertas, pero *subjetivamente*, lo son solo para aquellos á quienes Dios ha favorecido con la luz de la revelacion: en la esfera, en fin, de la fé humana, es cierto en sí, por ejemplo, que hubo un César, un Anibal, un Alejandro, que hay Pekin, Meca, Medina; pero no lo es igualmente para todos.

Dedúcese de aquí, repetimos, que certeza es la *claridad*, la *indubitabilidad* de la *idea*, ora considerada en sí, lo cual constituye la certeza *objetiva*; ora en el sugeto, ó en nuestro entendimiento, en la humana inteligencia; y segun que se dé esta evidencia, este grado de claridad cognoscitiva, esta seguridad del ánimo, sobre lo que conoce, resultará, ó no, la certeza *subjetiva*: que por tanto puede darse certeza en las cosas, y no en las personas. Infiérese, asimismo, que no siendo en todos igual la capacidad, la aplicacion, ni la instruccion; lo que es cierto para unos, será incierto y aun desconocido para otros: que la certeza misma admite grados, asi como los admite la *claridad* lógica de toda idea, y la evidencia; pues en otro caso las voces *claridad*, *certeza*, *evidencia*, no tendrian *superlativo*, si ellas filosóficamente lo presentaran desde luego: que la *verdad* que se subentiende ó menciona al esponer la certeza es en general la *verdad lógica*; algunas veces la *verdad metafísica*, y aun la *verdad física*; pero no precisamente la *verdad moral*; como sucede cuando tenemos certeza de la *verdad y realidad de la mentira moral*; que no puede entenderse sino de la verdad *lógica* y *metafísica*: y últimamente, que, como al cabo, la certeza, lo propio que la verdad y la evidencia, son correlativas á sus motivos y causas, la que es certeza física, y personal, por ejemplo, para uno; será certeza moral para otro: asi los que han visitado á Roma, Pekin ó Petersburgo tienen certeza física y personal de que existen estas ciudades; mientras los que juzgan en el caso por el testimonio de ellos, solo la tienen moral.

Fácil es comprender además que si la certeza *objetiva* no es en suma otra cosa que la verdad metafísica, ó moral en el objeto; y la *subjetiva* física la nocion clara y segura, la conviccion de esta verdad; si aspirar á tener *certeza* es aspirar á conocer la verdad; en primer lugar emplearemos los mismos medios para lo uno que para lo otro, pues los dos estremos no constituyen sino un mismo fin; y en segundo la *certeza*, asi como la verdad conocida, será de tantas especies, como los medios de llegar á ella. Asi tendremos certeza por *intuicion*, por *esperiencia*, por *deduccion* ó *induccion*, y por *autoridad*; esto es, *por fé* divina ó humana; ó de otro modo, certeza *metafísica*, *física*, *especulativa*, y de *adhesion* ó por *creencia*, lo que no ha de confundirse con la *creencia* dogmática de la escuela filosófica escocesa, la cual sostiene y enseña que en último término en toda *certeza* hay *creencia*, y ciertamente es asi. En la certeza, no solo la mente *percibe* con *plena claridad*, sino que *asiente*. Ni ¿cómo se conciliaria, ni aun comprenderia en otro caso, la contradiccion de tener seguridad, conviccion, *certeza* de una cosa, y no *asentir* á ello, *no creer*? Pero en primer lugar, esta es una creencia puramente *lógica* y *psicológica*; no *moral*: y en segundo, los motivos de la creencia no son *la autoridad de otro*, la fé, como en las verdades de creencia; siendo por tanto distinto haber fé en toda certeza, y provenir la certeza de fé.

Pero, si la certeza es *la verdad conocida*, la seguridad y conviccion de la verdad, por mucho debe entrar esta parte filosófica en el órden moral y judicial. ¿Cómo hacer al hombre responsable *sin certeza* de que lo es? Mas no siempre es dado á la razon humana llegar á la certeza. Pero sin llegar á ella, infinitas veces columbra la verdad; tiene motivos la voluntad para determinarse con mas ó menos seguridad. En estos casos ¿cómo sin

graves males para la sociedad y las costumbres, se reputará al hombre absolutamente irresponsable, por que falte algun ápice para la certeza de que no lo es; y mas que muchas veces proviene de su criminal cautela el que lo ilícito é imputable de sus actos no sea plenamente conocido? Hay además que, si ese sistema se autorizara en lo jurídico, equivaldria casi á sancionarse la impunidad. Aun castigando por *probabilidades*, por *presunciones*, por *indicios* y *conjeturas*; es decir, sin plena certeza *lógica* y *psicológica*, es preciso sancionar muchas veces la impunidad: en el sistema contrario habria que sancionarla siempre, ó casi siempre, pues la depravacion concertaria aun con mayor empeño y artificio los medios de su hipocresía; lo bastante al menos para que rara vez se diese *certeza*. Si por otra parte la duda y el error parecen el patrimonio del entendimiento humano: si la limitacion le es esencial, pues de otro modo seria inteligencia, no humana, sino divina: si la duda, la fluctuacion, la dificultad de llegar siempre á la certeza, es como una ley de la humana naturaleza, del género asi humano, como del individuo, ¿cómo al juzgarlos han de despreciarse ó desatenderse los rayos de luz, los grados de verdad que esclarecen sus acciones? ¿Los grados de luz, decimos, que median hasta llegar á la *certeza*? La razon humana, sin desconocerse, sin anularse, sin condenarse á sí misma, sin hacer imposible la sociedad humana, no podria autorizarlo asi, ni lo autoriza; y antes convertida en *sentido comun*, en *razon universal*, en ley moral y civil, ha consagrado el principio contrario; y se vé generalmente recibido y sancionado el sistema *conjetural* y de *probabilidades*.

Pero la ley moral y la ley civil, en casos estremos, han adoptado en la aplicacion de este principio, medios opuestos, y justamente. En lo moral, en caso de duda, entre razones y pruebas igualmente probables; estando en ello á lo mas seguro, (*tutius, securius*) el tribunal de la conciencia condena al reo; el tribunal civil lo absuelve: en caso de duda en lo moral *tutior pars eligenda*, debe seguirse el juicio, el impulso que favorece á la ley; no á la libertad, al capricho, al gusto, al vicio: en lo civil por el contrario, en caso de duda se está por la libertad, se absuelve el reo. Y muy racional y justamente: cuando uno es el juez de sí mismo, no es tan de temer que á sabiendas emplee su ignorancia, ó su pasion contra sí propio; no hay que temer, ni prevenir el influjo pernicioso del ódio, de las dádivas, promesas, amenazas, cohecho, etc.: en el juez de otro, cuando este juez no es un ángel, cuando es otro hombre, hay que temerlo y prevenirlo todo.

Pero despues de un escollo aparece otro. No siendo igual la capacidad y la ciencia en todos los hombres; ni siquiera la laboriosidad y la prudencia: no siéndolo tampoco, ni el pundonor ni la probidad: no siendo, ni pudiendo ser iguales, las convicciones en materias cuestionables, y son cuestionables aun muchas reglas doctrinales y de crítica; la certeza no significa una misma cosa en cada caso en todos los hombres; y antes cabe muy bien, es casi inevitable á veces la diversidad de juicios, y el que para uno sea dudoso, probable meramente, algun tanto oscuro á lo menos, lo que para otro sea cierto. No siendo por motivos inmorales, lo que no es decoroso, ni justo admitir, y menos como regla y supuesto general ¿cómo se esplicarian sino en lo judicial, la diversidad de sentencias, la absolucion y la condena, aun interviniendo las penas mas graves, la suprema entre las graves, la de muerte, en un mismo caso? El legislador humano ha tenido que recurrir á la *certeza facticia*, *taxativa*: al *criterio legal*. Pero ¡con cuántos inconvenientes para la moralidad y la sociedad! ¡Con cuánto riesgo para la inocencia! De esta importante cuestion trataremos en los artículos **CRITERIO**, **CRITICA**: véanse.

Como si todo no bastase, la justicia y la inocencia tienen que temer todavía otro escollo, y aun otros. En materia de hechos justiciables, el juzgador no puede presenciarlos todos, y es lo comun que no presencia ninguno. La *certeza legal* en estos casos habrá de adquirirla el juez por el testimonio de otro: no de su razon; sino de la razon, y mediando la voluntad ajena. Lo propio su-

cederá en los asuntos periciales; y volveremos al *criterio facticio*. ¡Grande es en ese caso el deber, árduo el empeño del legislador, al haber de trasladar la filosofía á lo judiciario! ¡Casi mas árduo aun el cerrar sus caminos á la maldad; y hasta el prevenir los efectos no menos posibles, ni funestos de la debilidad, de la ignorancia, del natural error!

Despues de tanto, y en materia de teorías filosóficas, el legislador tiene que luchar hoy con nuevos obstáculos, con que no ha tenido que luchar por muchos siglos. Por muchos siglos ha dormido el viejo *escepticismo*; hoy lo invade todo, y en todo domina. Antes se dijo: *de omnibus serio dubitandum*; hoy, despues de 20 siglos viene á decirse lo mismo: se pone de nuevo en tela de juicio el *principio* de la certeza humana: se busca la prueba de la realidad del mundo en el hombre, en cada uno: la prueba del *no yo* en el *yo*: la del *yo*, en la *cogitacion cartesiana*, en la *razon pura*, en la *idea*, en lo *absoluto*, en todo, sin hallarla en nada. Casi es ese hoy el estado de la filosofía, digámoslo asi, *racional*, *lógica* y *psicológica*. Casi se ven renacer las sectas, las aberraciones mas insignes de la humana inteligencia, el delirio por una parte, de los *materialistas*, ó realistas, que todo lo reducian á *materia*, ó *cuerpos*; por otra el de los *idealistas*, que negaban *la realidad y verdad de los cuerpos*, la *realidad* de toda *materia*, que todo lo reducian á *espéctros* mentirosos de los séres; á *fantasmas* de las que se creen y parecen cosas: y todos, unos y otros, aunque por opuestos medios, á la nada, al caos, á la mentira de lo que somos, vemos, creemos, y esperamos. ¡Lucida está la humana razon, si estos son sus adelantos y progresos! ¡Inmortalizada la moderna filosofía, si estos son sus triunfos! No nos es dado aquí, ni espresar toda nuestra amargura, ni descender á demostraciones. Pero sí nos será lícito preguntar ¿qué es en tal estado de cosas la *certeza*? ¿Quién se atreve á invocarla, á definirla, sin parecer que vive muchos siglos atrás, ó que engaña al género humano? ¿Quién hace aplicacion de ella en lo moral y jurídico, sin estremecerse? Sin embargo, despues de una escitacion á los legisladores, que han de buscar en la filosofía la autoridad de sus leyes: despues de una protesta contra lo que tiene de febril, y de aterrador en este punto el movimiento del género humano; contra las brillantes aberraciones de la razon, mas temibles cuanto mas brillantes; todavía hay seguridad en afirmar y puede anunciarse con consuelo, que en lo práctico, esfera privilegiada de la ley y de la conciencia, la filosofía del legislador es la *razon universal*, el *comun sentido*, levantados sobre la base providencial del *sentido íntimo*. En este terreno la razon humana descansa en reputar por verdad lo que creen *todos*, en *todas partes* y *siempre*: *quod semper*, *quod ubique*, *quod ab omnibus*. Por este medio, levantando un juicio colectivo de los juicios personales idénticos, se llega al criterio universal del género humano, llamado *certidumbre*: véase su artículo.

A la inversa de los demás artículos y por la índole especial del presente, hemos reservado para este lugar las indicaciones sobre la cuestion filológica y comunes apreciaciones de la *certeza*, porque mejor puedan comprenderse.

Certeza es traduccion de la voz latina *certitudo*, que ha tenido dos versiones: *certeza* y *certidumbre*. Véase este artículo. Derívase de *certum*, cosa cierta, en el sentido que venimos dando á la palabra, y los latinos vierten en *res conspicua*, *indubitata*, *evidens*. Segun la academia de la lengua; *certeza* es, «*el conocimiento cierto y seguro de alguna cosa* (certitudo):» y certidumbre, conforme á la misma, es «certeza»; resultando asi, que, á juicio de la Academia, *certeza y certidumbre* son una misma cosa. Despues en el artículo CERTIDUMBRE veremos la diferencia. Segun los autores del Diccionario de Trevoux, certeza es «*una cualidad de nuestros juicios: la adhesion del ánimo á la proposicion que afirmamos: la fuerza con que nos adherimos á ella.*» Otros, en fin, la definen de otro modo; pero conviniendo siempre en la *seguridad del ánimo* en lo que conoce. La definicion anterior á esta puede inducir á error, y es además inexacta. No solo hay certeza respecto de las *proposiciones*

que afirmamos; sino cuando *negamos*: y no la hay solo en las *proposiciones*, sino en los *juicios internos*; y aun meramente en las *ideas*. Si las percibimos *clara é indubitadamente*, tenemos certeza de ellas, y á la inversa tenemos certeza, de que no las percibimos del modo dicho. Cabe además certeza, aun en los casos negativos: puedo tener certeza de una cosa: tambien de que no la conozco, de que es oscura, de que no la comprendo, etc. La certeza es entonces de mi propio juicio: distincion que es preciso hacer en cuanto á la *certeza moral* y *legal*. Dos testigos afirman haber visto á Pedro matar á Juan. El juez no tiene por eso certeza personal de que Pedro es el matador; sino del testimonio unánime de los dos testigos, lo que basta para la *certeza legal*, *taxativa*, como hemos dicho; tiene certeza de juez: por ella condena al reo, porque asi lo manda la ley; lo que no podria hacer por certeza individual, ó meramente de su propia ciencia, porque la ley no lo autoriza, sino que por regla general quiere que falle únicamente *juxta allegata et probata*.

Ahora se vé claro, que la palabra *certeza* es de tal manera sintética en el órden filosófico cognoscitivo, que, como ya hemos observado, no se la puede esponer cumplidamente sin mencionar y esponer á su vez las enunciativas de *idea*, *verdad*, *juicio*, *criterio*, *crítica*, *evidencia*, *intuicion*, y todavía otras muchas; de que haremos mérito en sus artículos: véanse, con los demás mencionados en el cuerpo del artículo.

Hemos indicado que no siendo otra cosa la *certeza* que la verdad bien conocida, lo mismo es buscar la *verdad*, que procurar la certeza: que para uno y para otro se emplean los mismos medios: que el fin, ó el resultado es de la índole de los medios; y que siendo estos *intuitivos* ó *metafísicos*, *físicos*, de *induccion*, y de *autoridad*, ó de *fé divina y humana*; la certeza recibirá denominaciones análogas; y será por tanto, certeza *metafísica*, *física*, de *induccion*, y de *adhesion*, *moral*, ó *de fé*. La primera estriva en razones y motivos de pura intuicion; y asi bien *ontológicos* en algunos casos. Siendo *intuitivo* todo lo que aprendemos por pura inteligencia, con abstraccion de causas físicas, de esperiencia, induccion, autoridad, ó fé; y siendo *ontológico*, ó *psicológico*, metafísico, por tanto, todo lo que es *intuitivo*; es metafísica la certeza que tenemos de estos dos principios: *bis tria sunt sex*: *el todo es mayor que la parte*. Por razones inversas *es física* la certeza de esta enunciativa, *el fuego quema*: certeza *inductiva* la de esta otra: *todos los cuerpos son porosos*, *graves*, *impenetrables*. Fundase la certeza en este caso, no en que conozcamos todos los cuerpos del universo; sino en que son *porosos*, *graves*, *impenetrables*, todos los que conoce la ciencia; y en la uniformidad de la naturaleza en su modo de obrar. Prescindiendo de la revelacion por un momento, en el terreno meramente filosófico, es tambien certeza *inductiva*, la que resulta de estas otras enunciativas: existe Dios, ó una primera causa: el alma humana es espiritual. Respecto de ellas cabe tambien *certeza moral*, de creencia, por fé humana, y por fé divina; porque Dios lo ha revelado; porque la ha creido y enseñado la mayor parte del género humano.

Pero en estos casos, á escepcion de los de fé divina, pues que es precepto divino, asi bien, *captivare intellectum in obsequium fidei*, la humana inteligencia es el juez y regulador de su certeza: examina, hasta que se aquieta: puede uno no aquietarse con lo que otros, y buscar y exigir mas y mas grados de certidumbre. Tan libre es en este caso en el alma humana la inteligencia, como la voluntad. Pero hay en lo humano tambien certeza *facticia*, *taxativa*, pendiente de un *criterio*, ó regla preceptiva, sobre lo cual la inteligencia no tiene arbitrio. Tal es, segun queda ya insinuado, la *certeza legal*. Véase su artículo, y tambien CERTEZA RELIGIOSA.

CERTEZA LEGAL. Véase CERTEZA: CERTIDUMBRE: CRITERIO: CRITICA:

CERTEZA RELIGIOSA. Véase CERTEZA: CERTIDUMBRE: CREENCIA:

CERTIDUMBRE. Segun la Academia de la lengua, lo mismo que *certeza*: véase este artículo. Sin embargo, en

el lenguaje científico, y ni aun en el lenguaje comun, no es asi. Certeza y certidumbre, vienen sin duda de un origen etimológico, como esponemos en el artículo *certeza*: ambas son traduccion de la voz latina *certitudo*, derivada á su vez de *certum*, lo *cierto, la verdad plenamente conocida, la conviccion de ella*: *notio perspicua, indubitata, explorata, evidens*. Y ciertamente, ni la *certeza* ni la *certidumbre* admiten *duda*: ninguna sombra que empañe ni oscurezca la exactitud de la verdad. Entonces habria *duda, probabilidad*; no *certeza* ni *certidumbre*: habrá certeza si: no de lo que es la cosa *en su sér* ó en su *modo de ser*; sino de que es *oscura, dudosa, probable*, etc.; de que no es bien conocida; de que no es cierta, plenamente clara, evidente para nosotros.

Pero si hasta ahí convienen la *certeza* y la *certidumbre*, en lo filológico, y técnico hay un caso en que se diferencian. La *certeza* tiene el doble carácter, ó la doble acepcion de aplicarse á las personas y á las cosas; al *sugeto*, y al *objeto*; y se dice con propiedad que hay certeza en la *inteligencia* que *percibe, examina y juzga*; en la inteligencia que *conoce*; y á su vez en la *cosa conocida*. Con igual propiedad se dice que el ánimo está *cierto*, y que es *cierta* la cosa bien conocida. Pero la certidumbre no admite esta *equipolencia*: se predica solo del ánimo, de la potencia inteligente, del sér racional y activo que conoce; no del sugeto del juicio, que infinitas veces es cosa *inanimada*, no inteligente. Verdad es que en decirse que en las cosas inanimadas hay *certeza*, se procedió tal vez en un principio por *metonimia*, tomando la causa por el efecto, la *verdad* por el *juicio* acerca de ella; pero lo cierto es que despues la enunciativa es técnica, y nunca es arbitrario el alterar la tecnología. No es seguramente de la misma naturaleza, ni individualmente la misma, la certeza en la *cosa*, y la certeza en la *inteligencia*, ó sea en el *objeto* y en el *sugeto*: en aquel es la *verdad*, en este la percepcion clara y completa, el juicio en su caso acerca de ello: aquí la idea, la nocion, el juicio; allí el sugeto y el fundamento del juicio ó la nocion; pero aun asi, no se dice, igualmente que de la *certeza*, que hay *certidumbre* en una cosa inanimada, ó que esta es *certidumbre*; sino que hay certidumbre acerca de ella; es decir, en solo el sugeto, en el entendimiento únicamente; y esa es precisamente la diferencia esencial y filológica que venimos esponiendo entre las dos enunciativas de *certeza* y *certidumbre*.

Científicamente hay aun otra diferencia. La certeza en el juicio lógico acerca de ella, se presenta á la razon, á la humana inteligencia, como *cualidad*; la *certidumbre* como *hábito* y *facultad*: la certeza en cada *caso*; la certidumbre respecto de todas las cosas, respecto del ejercicio habitual, y completo de la inteligencia humana, al recorrer el período de su mision en la tierra, en la cárcel del cuerpo y asistida por sus órganos: la certeza se ofrece como casuística, en cada caso, en cada acto de la inteligencia; por consiguiente *en el individuo*; la certidumbre mas bien, y en tésis general, *en la clase*, en el *género humano*: la *certeza*, en fin, se presenta como *efecto*, por lo menos en las verdades de *induccion* y de *creencia*; la *certidumbre* como *causa*: es como una luz comun del género humano, en virtud de la que el género humano y el individuo, la razon universal y la razon individual, llegan despues á tener *certeza* en cada caso. La certidumbre es asi, como la gran luz que alumbra al mundo, á cuyo resplandor aparece la verdad; y la conviccion de ella en casos particulares es la *certeza*, que haciéndose trascendental de casuística, llegando á ser general y uniforme, pasa á aumentar el gran depósito de luz, el gran *criterio* de verdad, la *certidumbre humana*. En este sentido la humana certidumbre es á la vez *sentido comun, razon universal, tradicion, conciencia pública, fé humana, ciencia, principios, axioma, etc.*

El género humano, pues, como el mundo en su caso, no son una entidad *imaginaria*, sino *real*: no un fenómeno *casual*; sino una *creacion*: no una creacion *fortuita, informe*; *exlex*; sino con *designio, providencial*: con *fines* que llenar; y *medios* para cumplirlos: con *luz natural* para conocerlos; y *conciencia* para apreciarlos; y de aquí dos de las bases cardinales de la *humana certidumbre*, esto

es, razon para *discernir* y *proponer*; y alvedrío para elegir, para querer, ó repugnar: y hé aquí al mundo inteligente *sugeto de ley*: hé aquí por lo mismo el principio de la *imputabilidad*, del *mérito* y *demérito*; hé aquí, en fin, al género humano, *entidad política*, *organizable*: al hombre racional y *moral*, *sociable* y *social*, en fin.

Tal es la obra portentosa de la creacion racional. ¿Quién le confundiria con el caos? Al contrario, la luz es su esencia. No es el mundo moral, como la rosa, que segun la bella espresion de Pascal, *es bella; pero no conoce su belleza*. El mundo moral tiene certidumbre de su existencia, de sus fines y medios, de su destino. Cada hombre lleva en sí la antorcha *de su razon*. Por ella se guia, y adquiere certeza de lo que no es superior á su alcance: en lo que lo es; si su razon desfallece, ó vacila, si el error obscurece sus caminos; la *razon universal*, la *humana certidumbre* es luz y criterio de verdad para todos, y cada uno.

Otra vez repetiremos, como en el artículo certeza, que en el órden moral y jurídico nada deben embarazar, y nada realmente embarazan, las teorías sucesivas, la polémica filosófica, hoy mas empeñada que nunca, acerca del principio cardinal, del primer principio de la *certeza individual*, y por tanto, de la *humana certidumbre*. El género humano puede ignorar cual es ese primer principio: puede hasta ignorar que se disputa acerca de él: puede no pensar en él, como no pensó de hecho por tantos siglos; pero no por eso el género humano deja de tener conciencia *de su sér*, *de su modo de ser*, de su *destino racional* y *moral*, por lo tanto. Si tiene que asistir al gran debate *psicológico* de la razon *con la razon*; si ya no fuese *del error contra esta*, como muchas veces lo será, pues vemos sucederse los sistemas á los sistemas, cada uno rechazando, como erróneos, los demás; y es cierto, por tanto, que en todas ellas ni domina la razon, ni triunfa la verdad: si la luz del debate le deslumbra: si fluctúa, duda, se siente sucumbir desorientado entre la *cogitacion cartesiana* y *la razon pura*, entre las fórmulas del *yo*, y del *no yo*, entre el *excepticismo absoluto* y el *excepticismo metódico*; todavía los argumentos, y la duda son únicamente *ad ignorantiam*; no ciertamente *ad rem*. Existen la certeza y su primer principio. En lo práctico la razon humana, fundada en el *hecho* de la *humana certidumbre*, rompe sus cadenas, como en otro tiempo se respondió incontestablemente al sofisma de la *imposibilidad del movimiento*: *moviéndose*. Venimos ciñendo nuestras enunciativas y deducciones á lo *moral* y *legal*: pero en lo *psicológico*, podriamos y podremos siempre decir: *¿es cierto, ó ciertamente conocido el primer principio psicológico de la certeza humana? ¿Es verdad, sino, que no es conocido?* Pues en ambos casos *resulta certeza. Antitética*, es verdad; pero tan certeza es la que tengo de la verdad, como la que tengo en su caso de que no la conozco. De ello resulta indubitadamente que hay certeza humana: que reside en mí la facultad, ó potencia *psicológica* que la forma, y adquiere; y por una deduccion indeclinable, que residiendo en mí, reside en todos lo séres que estén formados como yo: y que habiendo cosas acerca de las que, por los medios que á todos son comunes, esto es, por *intuicion*, *experiencia*, *deduccion*, *autoridad*, *etc.*, todos ó los mas de los hombres han formado el mismo juicio; el conjunto y coincidencia de estos juicios individuales idénticos, la suma, digamoslo asi, de estas certezas personales de *eodem secundum idem*, de la misma cosa bajo el mismo punto de vista, forman la *certeza universal*, el gran centro ó foco de luz, que llamamos *razon universal*, *certidumbre humana*. Véase **CERTEZA**, **CREDUBILIDAD**, **CRITERIO**, **CRITICA**, **ENTENDIMIENTO**, **RAZON**, **SENTIDO COMUN**, **VERDAD** y demás análogos, como **EVIDENCIA**, **INDUCCION**, ó **DEDUCCION**, **JUICIO**, **PERCEPCION**, **RACIOCINIO**, etc.

CERTIFICACION. CERTIFICADO. Parece version del verbal latino, no en uso, *certificatio*; ó bien de *certum* y *facio*, hacer á uno cierto, cerciorarle, asegurarle acerca de alguna cosa.

Certificacion, segun el *Diccionario de la lengua*, es «instrumento en que se asegura

la verdad de una cosa.» Y como los intrumentos son *públicos* ó *privados*, certificacion en el derecho será el *instrumento* ó *documento* público ó privado en que una autoridad ó persona pública en el primer caso, y una persona privada, ó que procede, como tal, en el segundo, aseguran alguna cosa bajo su fé y palabra, autorizándolo con su firma, signo, ó sello, segun el caso. Decimos persona *privada ó que procede como tal*; porque muchas veces una persona que tiene el doble carácter de pública y privada; una autoridad, por ejemplo, un escribano público; no certifica en virtud de su cargo; sino como particular y en asuntos particulares tambien, ó no oficiales. Asi, *certificar no oficialmente* se diferencia esencialmente en el derecho de *dar fé*; y en el mismo órden se diferencia una *certificacion*, ó *certificado*, oficial del *testimonio autorizado por escribano público*. No asi la *certificacion* oficial, y el *documento auténtico*, que muchas veces son lo mismo, si la autoridad, corporacion ó persona pública, que certifica, tiene *sello oficial* ó autoridad *superior*, *suprema*, *ó casi suprema*. En el primer concepto certifica una diputacion provincial, un ayuntamiento: en el segundo un *director general del Tesoro*, una *direccion ó inspeccion general*: en el tercero el *monarca absoluto*, una *cámara política* si ella autorizase un documento con las firmas individuales, ó de otro modo, como suele autorizarse una carta ó constitucion política: en el cuarto *los Ministros de la Corona, los secretarios del Senado ó del Congreso* de diputados, que autorizan como tales, á nombre del cuerpo. Si el ministro de Gracia y Justicia, ú otro ministro, proceden como *notarios mayores de reinos*, entonces, aun cuando usen de la fórmula, *certifico*, en vez de la de *doy fé*, como pueden, y de uno y otro modo lo hemos visto practicar, el documento asi autorizado, es *auténtico*, y tambien *testimonio público de verdad*. La fuerza probatoria de estas dos clases de documentos, véase en sus artículos y en el de **INSTRUMENTO**. La certificacion, ó certificado, solo equivaliendo en su forma y procedencia á las dos clases de documentos públicos mencionados, surte los efectos de los mismos en lo jurídico: en otro caso, y aun cuando sea *certificacion pública*, hace *prueba* en lo gubernativo; pero solo prueba parcial en lo jurídico, salvo si fuese redargüido de *civil*, *ó naturalmente falsa*, como puede serlo el testimonio mismo del escribano y el documento auténtico. Asi una certificacion expedida por un escribano de cámara, por ejemplo, como tal, aun cuando no tiene fé pública, surte en su caso los mismos efectos en lo judicial y gubernativo, que un testimonio de escribano *numerario ó de reinos*. Por ella, en infinitos casos, se procede sin vacilar á la ejecucion de lo ejecutoriado, cuando en vez de carta ejecutoria en lo civil, y en todos los casos en lo criminal, se provee por certificacion del escribano de cámara.

De lo dicho se infiere cuán numerosas sean en lo jurídico y administrativo las equivalencias de certificacion; y mas aun las especies de esta. Asi todo documento público asertivo, y autoritativo, que no sea técnicamente *testimonio* de escribano, ó documento auténtico, es en sustancia *certificacion ó certificado*, y asi en todas las demás materias del órden social. En este sentido, por lo tanto, lo mismo es *certificacion* una *fé de existencia*, que un pasaporte, un atestado de vida y costumbres, una certificacion de embarque, etc., que la espedida por un escribano de cámara, por un profesor científico, unas testimoniales, etc., lo cual no traemos precisamente como cuestion filológica; sino como *equivalencia*, y bajo el punto de vista del valor, por regla general, de tales documentos en lo jurídico y administrativo, en lo civil y eclesiástico, en todos los órdenes, al tenor de los principios arriba asentados. Y dicho se está que las certificaciones de personas puramente privadas, no prueban en lo oficial, sino en su contra, supuesto, en su caso, el reconocimiento, cotejo y prueba correspondiente.

Infiérese asimismo, que pudiendo certificar toda clase de personas, y sobre todo género de asuntos; por parte de la materia es imposible determinar las clases de certificaciones, ni menos consignar en un solo artículo lo que hay determinado respecto de cada una; sino que ha de verse en los ar-

tículos y casos particulares de cada materia, ó negocio, pues para evitar el abuso unas veces, otras para determinar el valor y efecto de una certificacion, es inevitable que en el órden administrativo y económico, como en lo jurídico; en lo civil, como en lo eclesiástico, se hayan dictado reglas y disposiciones; pero casuísticamente, cada autoridad en su ramo y á sus subordinados; y asi el derecho constituido ha de verse en cada caso particular. Está, por ejemplo, mandado ó recibido, que las fées de vida ó certificaciones de existencia, hayan de estar autorizadas por el párroco y alcalde: que las que hayan de surtir su efecto pasados puertos, lo propio que los testimonios ó escrituras públicas, hayan de legalizarse hasta por tres escribanos, habiendo ese número: que todas se estiendan en el papel correspondiente, esto es, sellado, ó timbrado, segun el caso, y oficina, ó autoridad de que proceden, y usó que de ellas haya de hacerse. Está mandado asi bien, que en el Consejo, hoy Tribunal de las Ordenes militares, se admitan las certificaciones de prueba, espedidas por la secretaría de la de Cárlos III, como en este las procedentes de la secretaría de Cámara de aquel (real cédula de 14 de febrero de 1817): que ni los comisarios de guerra, ni las justicias den certificacion de enfermos, sin tener presente la del médico ó facultativo correspondiente (real órden de 17 de setiembre de 1828): que los párrocos y alcaldes den con la debida precaucion las de vida, para evitar fraudes y cobros indebidos (idem 3 de abril de 1826): que la toma de razon en el oficio de hipotecas de documentos públicos ó privados, pues se autoriza la de todos, cualquiera que sea su antigüedad, no altera su valor legal (idem 18 de octubre de 1855): que de los derechos que devenguen las espedidas por los contadores de hipotecas, se aplique la tercera parte al Tesoro, etc. (idem 16 de noviembre de 1855). De todo ello se infiere lo que arriba hemos asentado, esto es, la imposibilidad de circunscribir á un artículo todo lo relativo á certificaciones. Sabido es por cuanto entran esta clase de documentos en el asunto capitalísimo de la deuda del Estado; pues que la mayor parte de los artículos que le forman estrivan en certificaciones, como de suministros, de préstamos, de liquidacion, de juros, etc. Embarazada la *Junta de exámen y reconocimiento de la deuda del Tesoro*, para determinar el valor de tales documentos consultivos, como no podia menos, pidió reglas sobre el particular; para que en real órden de 28 de febrero de 1852 se le contestase, «que no pudiéndose determinar con precision, y como regla absoluta y general, cuáles formalidades hayan de observarse para el reconocimiento en cuestion, la junta establezca prudencialmente y con vista de las circunstancias de cada caso la clase de comprobaciones que juzgue convenientes.....»

De paso observaremos, que la real órden de 18 de octubre de 1855, antes citada, puede dar lugar á equivocaciones y cuestiones jurídicas, hasta de importancia. Desde la pragmática de 1768, sobre toma de razon en las oficinas de hipotecas, venia mandado que las escrituras que careciesen de aquel requisito *no hiciesen fé en juicio ni fuera de él*. Habiéndose coartado el término para la toma de razon, y solo prorogado por gracia y equidad muchas veces, y aun asi con restricciones, la mencionada real órden las alza todas en el particular, y autoriza la presentacion de todo documento á la toma de razon, cualquiera que sea la época de que proceda, y sin diferencia entre documentos públicos y privados. Claro es, que las que no producian efecto en juicio, ni fuera de él, por carecer de la toma de razon en tiempo, *ahora lo producirán*; y, sin embargo, la real órden declara, que por la toma de razon ahora no se altera ni prejuzga su valor legal. Error notable repetiremos. Se altera tanto *cuanto vá de lo ineficaz á lo eficaz y válido*. Pero sobre ello hablaremos en los artículos correspondientes como **DOCUMENTOS, ESCRITURAS, HIPOTECAS, INSTRUMENTOS, TOMA DE RAZON, PRUEBA INSTRUMENTAL**, etc.

Todavía sobre algunos pormenores relativos á certificaciones y certificados, véanse los artículos análogos que subsiguen.

CERTIFICACION (de *contenta.*) Véase **CONTENTA.**

CERTIFICACION DE CREDITO. Véase **CREDITOS CONTRA EL ESTADO, DEUDA PUBLICA, DOCUMENTOS DE CREDITO.**

CERTIFICADO. Lo mismo que certificacion: y tambien lo que se comprueba ó garantiza por medio de ella. Asi se llama *certificado* un pliego ó bulto de la correspondencia pública, que vá garantido por el testimonio de la administracion de correos de que parte, y la cual certifica, unas veces del *contenido*, y otras, meramente de que el pliego ó carta han sido puestas en la administracion. Tómase esta precaucion por los remitentes, para asegurar la conduccion y recibo de su correspondencia. Verifícase la operacion de dos maneras: la mas antigua y comun es la de estampar la administracion su *sello* con la nota de *certificado* en la cubierta ó sobre; ó poniendo el remitente un sello suelto, y especial de *franqueo*, de la misma procedencia que los de franqueo; que es el modo comun actual de franquear. En ambos casos se paga á la hacienda pública el derecho establecido por esta mayor garantía; antes en la misma oficina, segun tarifa, hoy el marcado en el *sello* especial de franqueo.

El otro modo de certificar es interviniendo testimonio de escribano. Háse introducido, cuando se han hecho frecuentes las *operaciones de crédito*, y el tráfico y circulacion, por lo tanto, de documentos de giro, como *libranzas, vales, billetes del Tesoro, títulos de la deuda pública*, etc. Para estos testimonios se presentaban los domentos que habian de remitirse en la oficina de correos de que partian. El oficial correspondiente se cercioraba, y firmaba la conformidad, ó debia firmarla, quedándose con uno de los duplicados del contenido y devolviendo otro á la parte. Además de esto se garantizaba la entrega y envio del pliego ó bulto con el correspondiente sello de franqueo en el sobre.

En ninguno de estos casos el administrador del punto á que el certificado vá dirigido, debe entregarlo, sin que la parte á quien se dirige firme el *recibí* en el sobre, entregándolo al administrador, que devolviéndolo á la administracion, que certifica, queda á cubierto de la entrega. Claro es, que sin que la administracion presente el sobre con el recibí, responde de la conduccion y entrega del pliego, á lo cual se obligó, y para ello el Estado devengó y percibió, además del premio de conduccion, el de franqueo. Pero sirve, pues, esa responsabilidad al remitente, cuando se limita á certificar por la mera imposicion del sello. La administracion ignora entonces el contenido: el franqueo es en tal caso una garantía mas, sobre la general, para la conduccion cierta y mas segura del pliego. La no llegada, ó estravío de este, no puede producir otro resultado que el de una reconvencion, suspension, ú otro castigo personal del conductor, administrador, ú oficial que resulte culpable.

Pero no asi respecto de los certificados interviniendo escribano. Cuestan mas, porque se responde de mas, y por ello aseguran mas tambien; si bien es verdad, que en ello mismo se encierra el estímulo para el abuso criminal, para la sustraccion de los títulos y valores y el abuso de confianza en este irritante latrocinio. El remitente es árbitro de adoptar el un modo de certificar mas bien que el otro; pero cuando elige el mas costoso, es mayor la iniquidad en ser defraudado, y robado.

Severas son las prescripciones del derecho constituido en esta parte, y sin embargo, no solo no son raros siempre, sino frecuentes á veces, asi como perturbatorios de la pública confianza, lesivos del crédito y prestigio de la pública administracion, perniciosos para la industria y el crédito, funestos para un particular, familia, ó establecimiento que entregó toda, ó parte de su fortuna á la pública confianza y garantía del gobierno; y por todo irritantementes, escandalosos los abusos, y depredaciones, ejecutadas y repetidas con cínica impudencia en el particular.

Hé aqui ahora el testo de la Ordenanza general de correos sobre certificados, tít. 21.

«Capítulo 1. Se destinarán en todos los oficios generales las balijas necesarias con las

llaves correspondientes para llevar los pliegos y cartas certificadas. Pero derogo y prohibo la costumbre de que los correos lleven dichas llaves, á pretesto de que deben responder de los certificados, y de que en algunas estafetas se metan dichas balijas dentro de las grandes, por ser un evidente abuso y manifiesta contravencion de lo dispuesto por regla general, para su custodia en los oficios, y cuyos abusos pueden causar gravísimos atentados en lo mas importante de la correspondencia del público, que es la fidelidad del secreto. Y desde luego impongo la pena de privacion de oficio al correo ó conductor, y administradores, que lo tolerasen ó consintieren.

Cap. 2. Los referidos pliegos y cartas se incluirán en la dicha balija á presencia del conductor, de los que se hará cargo, y se anotarán por menor (además de su asiento en los libros correspondientes, conforme se previene en la instruccion particular del gobierno de administradores), en la carta de aviso que debe acompañar, y por piezas en el parte que llevará el conductor, arreglado segun su citado recibo, y por él los entregará.

Cap. 3. Si ocurriese alguna queja sobre el estravío, ó falta de carta ó pliego certificado, se retendrá el sueldo al administrador que haya recibido la carta ó pliego, la misma cantidad, que hubiere percibido por la certificacion, y se devolverá al que la pagó, verificada que sea dicha falta ó estravío, y además quedará sujeto á las resultas de daños y perjuicios.

Cap. 4. En tal caso se reservará al mismo administrador su derecho contra el conductor de la balija, por deber cuidar que no se le estravien en el camino los certificados de que vá particularmente encargado, ó el administrador en cuyo oficio haya parado el certificado, por ser de su obligacion tomar recibo de la persona que recoge la carta ó pliego, y devolverle al administrador que lo remitió, para quedar solvente, presentándole al interesado: con la prevencion de que se castigará con la separacion de los empleos y oficios, además de otras penas, á los que resulten culpados.

Cap. 5. Cuando no acudieren, ni se hallaren los sujetos á quienes se dirijan las cartas ó pliegos certificados, se avisará por el administrador que los reciba al que los hubiere certificado; pero no se les devolverá hasta que los dueños los pidan, ó recojan, para evitar quejas, que debilitan la confianza pública y la responsabilidad, en que desde luego le declaro comprendido para todas las resultas.

Cap. 6. Si á la falta de cartas ó pliegos certificados, hubiere dado causa la omision, descuido ó culpa del conductor encargado de su conduccion y entrega en el oficio á donde se dirigen, y de que debe responder, segun está obligado por su recibo, se le castigará por la primera vez con la pérdida del sueldo de un mes, aplicado al fondo de la renta, además de la responsabilidad indicada anteriormente; y por la segunda en privacion de empleo.»

Ni estas disposiciones, ni las que se han dictado posteriormente, con el fin de atajar nuevos abusos, han bastado á evitarlos, y de tal entidad y escándalo, como el que ha tenido lugar en los dias en que se escriben estas líneas, de haberse puesto en la administracion central de correos de Madrid un pliego, certificado y testimoniado por escribano público, comprensivo de títulos de crédito, por valor de un millon de reales, ó muy aproximadamente, dirigido á Barcelona, á donde llegó, sí, pero *sustituidos los títulos con papel de estraza*; mientras aquellos, solo dos dias despues de certificarse el pliego, se cotizaban en la bolsa de Madrid: hecho gravísimo, sobre el cual se hallan conociendo los tribunales.

La opinion pública, escandalizada, espera del gobierno central nuevas y mas adecuadas medidas, para contener la inmoralidad y el abuso. Entre tanto, la direccion general de correos ha publicado la circular, que como actual derecho constituido sobre la materia, insertamos á continuacion:

«Sin perjuicio de las prevenciones que el gobierno de S. M. estime oportuno acordar para la admision y envío de los pliegos certificados con efectos públicos, esta Direccion,

teniendo á la vista las reales órdenes de 8 de mayo de 1846, 28 de octubre y 30 de diciembre de 1850, y 16 de marzo de 1854, considera indispensable sujetar por el pronto dicho servicio á las formalidades siguientes:

1.ª La entrega de los efectos públicos tendrá lugar en las horas que se designen en cada administracion, presentándolos en pliego abierto. Este contendrá en su parte esterior una nota especificada del contenido, y llevará los sellos del franqueo que correspondan á su peso, además del de certificados.

2.ª La persona remitente presentará con su firma cuatro facturas enteramente iguales, detallando en ellas la clase, série, fecha, numeracion y capital de los esfectos, y tambien los números de los cupones que les estén unidos. Las facturas contendrán las señas de la habitacion del sugeto remitente, y del que ha de recibir los efectos.

Los interesados, á quienes conviniere, podrán acompañarse de un escribano para que dé testimonio de la entrega.

3.ª Una de las facturas se devolverá en el acto al interesado, con la conformidad del administrador que reciba los efectos; otra se enviará por la misma espedicion al administrador del punto á que vaya dirigido el pliego; la tercera quedará en la administracion remitente, y la cuarta se remitirá en el mismo dia á la Direccion general de la Deuda, con el objeto de que, mientras no se le avise por el mismo conductor haber sido entregados los efectos á quien iban dirigidos, no autorice con su reconocimiento negociacion alguna.

4.ª Las administraciones harán los asientos de dicha clase de pliegos en un libro destinado al efecto, independiente de los demás certificados, y para su envio al punto de su destino pondrán tambien una hoja especial, haciendo mencion de esta circunstancia en el *vaya* del conductor respectivo.

5.ª En el libro y en la hoja deberá precisamente acreditarse el peso y tamaño del pliego.

6.ª Los conductores de las respectivas carreras presenciarán el cierre de estos pliegos, y, autorizado con su firma, pondrán «conforme» debajo de la nota puesta en la cubierta, espresando el contenido. En seguida los guardarán bajo llave, que conservarán hasta la hora de la salida.

7.ª Las administraciones cuidarán de que los pliegos vayan bien precintados, lacrados y con el sello de la administracion.

8.ª Los conductores presentarán esta clase de certificados á todos los administradores principales del tránsito, quienes certificarán en la hoja designada en las reglas 4.ª y 5.ª ir sin fractura.

9.ª Los administradores de correos del punto á que vaya dirigido el pliego, lo conservarán en su poder hasta que en virtud de aviso, que dirigirán al efecto, se presente la persona indicada en el sobre, ó apoderado suyo. Luego que se haya hecho cargo á su presencia de los efectos espresados en el sobre y en la factura recibida por separado, firmará su conformidad en ambos documentos, consignando la fecha.

10. La factura indicada quedará en dicha administracion, y el sobre lo devolverá esta certificado á la remitente por la primera espedicion que despache despues de hecha la entrega, y no á los ocho dias como se verifica actualmente.

11. En seguida que se reciba el sobre con el requisito indicado en la administracion remitente, dará á la Direccion general de la Deuda el aviso que corresponde, segun lo prescrito al final de la regla 3.ª

12. Las formalidades indicadas anteriormente para los particulares, que dirigen por el correo efectos públicos, serán estensivas á las dependencias del Estado.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 13 de marzo de 1856.—Angel Iznardi.—Sr. administrador principal de correos de....»

Lleva consigo la substraccion en este caso el doble delito de *infidelidad en la custodia de documentos*, y el de *hurto* con abuso de confianza, de lo cual tratamos en otro lugar, y acerca de lo que, véanse principalmente los artículos 278, 279, 280, 281; 437, 458, y 459 del Código penal, y asimismo el artículo de

CORRESPONDENCIA PUBLICA.

Adelantándose á otros inconvenientes y escándalos, se hallaba prohibido «admitir ó cer-

tificar ningun pliego, que probablemente se conozca contiene dinero ó alhajas, pena de privacion de oficio.» (1) Y si se prohibia admitir á certificacion dichos pliegos ó bultos, cuando se creia *probablemente* que contenian dinero ó alhajas; con mayor razon constando *ciertamente* que los contienen, aun cuando sea por manifestacion de la parte; lo uno porque los correos públicos se han instituido para la correspondencia; y no para el trasporte de cosas: y lo otro, porque la manifestacion de la parte, y ni aun su conformidad prévia respecto de lo que acontezca; precaven; y antes hacen mas verosimil ese escándalo, y por consiguiente, el descrédito de la administracion, que es lo que esta ha querido y debe evitar.

Sin embargo: la mayor estension en las negociaciones comerciales y operaciones de crédito, y la ordinaria perentoriedad de estas, han persuadido la indisputable conveniencia de que se admitan á certificar *valores*, esto es, letras de cambio, libranzas, títulos de la deuda pública, documentos de giro, etc. El peligro no es menos que en el trasporte de dinero y alhajas. Se ha creido hallar el remedio en las precauciones; y muy de temer es que ningunas alcancen, como no alcanza ninguna para evitar los hurtos y robos. ¿Qué garantía puede exigirse, por otra parte, á un conductor, acosado tal vez de la pobreza, y que sabe conduce cantidades superiores á la fortuna en que él ha podido soñar, con la facilidad además de no embarazarle para la fuga al estranjero el peso, ni el volúmen, por consistir en papel? Si al cabo todo lo que podrá la administracion y alcanza la humana prudencia, será, no impedir absolutamente el abuso; sino embarazarlo, aumentar sus dificultades; podria contribuir á ello, un secreto, ó especial apartamento de hierro en cada silla, y siendo parte fija de ella, con fuertes y difíciles cerraduras, para depósito y conduccion de certificados de valores; y cuyas llaves no estuviesen nunca en manos del conductor, debiendo además verificarse la apertura, asi como el depósito en la caja de hierro, no por el administrador solo; sino con intervencion, ó asistencia de oficiales. Véase **CORREOS, EMPLEADOS, CORRESPONDENCIA, PUBLICA.**

(1) Ley 17, tit. 15, lib. 3, Nov. Recop.

CERTIFICAR. En el lenguaje comun *certificar*, *testimoniar*, dar testimonio de la verdad, espresan, en términos generales, el hecho de asegurar uno alguna cosa bajo su palabra ó firma, respondiendo moralmente de la certeza de lo que dice, en cuyo sentido decimos otras veces *testificar*, *aseverar*. Hablamos del órden moral, y en él cualquiera persona puede *testimoniar*, *certificar*, aseverar. Pero en lo *oficial*, en lo *jurídico*, *escriturario* y *administrativo* no es asi. Puede *certificar* cualquier persona que ejerza autoridad ó cargo; pero no pueden dar *testimonio*, tomadas las voces técnicamente, sino los oficiales ó funcionarios *de la fé pública*: los que reciben de la ley esta facultad específica. Certifican, pues, los meros *secretarios*, no *escribanos*, de cualquier corporacion ó institucion: todo funcionario además con carácter público, desde el fiel de fechos, hasta los primeros funcionarios del Estado; y eso aun cuando en el primer caso lleve el funcionario en lo oficial el nombre ó denominacion de *escribano*, como *escribano de cámara*, *de rentas*, *de hacimientos*, *de mesta*, *de ayuntamiento*, pues que alguna vez se llama asi al *secretario*. Ninguno de estos oficiales y funcionarios puede usar en los *certificados*, *actas*, ú otros documentos que autoricen, de otra fórmula que la de *certifico* á la cabeza, y *de que certifico* al final; salvo si además fuesen *escribanos con fé pública*, en cuyo caso, por este concepto; y no por los antedichos, pueden *dar fé* y *testimoniar*. Pueden solo *testimoniar y dar fé* por escrito, aquellos oficiales que tienen *fé pública*, esto es, un título para hacerlo con oficio anejo, mandándose por la ley que á su testimonio se dé fé en juicio y fuera de él, haciendo plena prueba, cuando está dado con las solemnidades y requisitos establecidos por la ley, esto es, cuando, hablando técnicamente, no puede ser redargüido el instrumento, ó escritura pública, de falso, *civilmente*, ó *naturalmente*.

Hállanse únicamente en este caso, *los escribanos numerarios de los pueblos y juzgados: los escribanos reales, ó notarios de reinos: el ministro de Gracia y Justicia*, cuando procede, como *notario mayor de reinos*, v. g., en las capitulaciones matrimoniales, y actas de nacimiento y defunciones de las personas reales, etc.: cualquier otro ministro ó funcionario á quien el Rey autorice especialmente para este efecto. Hay documentos públicos que hacen fé, ó prueba, sin intervencion testimonial de escribano público, y son los documentos llamados auténticos; pero no tratamos aquí del valor legal de los documentos *auténticos*, ú otros; sino de las *fórmulas oficiales* en lo escriturario. Las fórmulas de los *escribanos* con fé *pública*, son, á diferencia de los meros *secretarios*, aun cuando estos sean de los llamodos de S. M., ó del despacho; á la cabeza, *doy fé* y *verdadero testimonio*: al final, *de que doy fé*: *á cuyo otorgamiento presente fué*: en la cabeza y antefirma, *ante mí*: testimoniando de hecho propio, *por mí* y *ante mí*: antes del signo, *en testimonio de verdad*. V. **CERTIFICACION**, **ESCRIBANO**, **ESCRITURA PUBLICA**, **SECRETARIO**, **TESTIMONIO**.

CERVEZA. Bebida fermentada, que por lo mismo corresponde á la clase de *caldos*; y sin embargo nunca habia sido asi en el lenguaje rentístico, hasta que por la ley de consumos, recientemente abolida, se declaró pertenecer á la clase de aquellos la cerveza y la sidra. Su elaboracion y uso, tomada la acepcion en un sentido lato, son antiquísimos en los mas de los pueblos; pero no podian prevalecer demasiado donde el vino es abundante, y asi ha sucedido en España, por cuyo motivo ha sucedido lo que no podia menos de suceder, y es que el gobierno protegia su elaboracion; sin que nunca haya correspondido á este empeño el desarrollo de esta industria; mientras en Inglaterra, por ejemplo, los derechos sobre la cerveza y sus elementos, esceden á las contribuciones de algunos Estados, aun de segundo órden.

Y con efecto: en 13 de marzo de 1816 se prohibia entre nosotros la importacion de la estranjera, á fin de fomentar la de nuestras fábricas. En 14 de abril de 1827, se prohibió asimismo la que se introdujese en barriles ó cascos de madera. En 14 de julio siguiente se gravó con un derecho protector la introducida en botellas. Por la inversa, en 1.° de setiembre de 1830 se gravó la cerveza, como otros artículos de consumo y estraccion, para la continuacion de las obras del teatro de Oriente de esta Corte; si bien en 27 de noviembre del mismo año, se declaró libre de derechos la elaborada en las fábricas de Madrid. En 14 de noviembre de 1835 se gravó la importacion de la de la Península en Filipinas. En 31 de diciembre de 1837 se alzó por sola una vez el derecho impuesto en el trasbordo de la que se importaba en barriles. En el real decreto de 1.° de julio de 1850, en la contribucion de subsidio, las cervecerías fueron comprendidas para el pago del tributo en la 7.ª clase; y por tanto sujetas al cupo de 30, ó de 50 rs., segun la poblacion: en el de 31 de diciembre, en fin, de 1851, se uniformó el gravámen en todo el reino de la contribucion de consumos á 3 rs. cántaro de cerveza.

Aunque suprimida la contribucion de consumos, la cerveza será siempre artículo arancelario y de arbitrios, ora generales, ora locales; si bien siempre la administracion deberá tener presente que es uno de los medios de ofrecer salida y consumo á nuestros cereales, que tanto lo necesitan. La administracion deberá asimismo vigilar con mas esmero, que hasta aquí, la elaboracion y espendicion de este fermentado, que si antes era simplicísimo, y saludables sus elementos, reducidos á la cebada, al trigo, y al lúpulo; hoy, utilizando el interés individual los adelantos de la ciencia, hace entrar en su composicion todo género de granos, yerbas, y aun maderas. V. **CALDOS**.

CESACION (*á divinis*). Se subentiende *officiis*, y esta frase, mitad castellana, mitad latina, es técnica, en lo canónico, para indicar que se suspende, ó cesa temporalmente en alguna ó algunas iglesias la celebracion de los divinos oficios.

Este hecho canónico, como todos los de su índole, se presentan bajo bien diferente

aspecto en la antigua, que en la moderna disciplina eclesiástica; esto es, antes de admitirse la diferencia de jurisdiccion en el fuero interno y en el esterno; y despues de introducida. Asi lo hemos hecho notar al hablar de las *censuras eclesiásticas* en general, y aun tenemos que repetirlo, al tratar en particular de la *excomunion, suspension, entredicho*, penas eclesiásticas, jurisdiccion contenciosa, etc. Hasta esa época, profanada (*polluta*) una iglesia por la perpetracion de un crímen; no ya por precepto; sino aun por decoro y sentimiento religioso, erigido en costumbre, naturalmente dejaba de celebrarse en ella, hasta que nuevamente era purificada, ó *reconciliada*. Bajo este punto de vista, sin necesidad de requerir el testimonio de la historia, puede tenerse por cierto que la *cesacion á divinis* existió, y fué en este concepto practicada desde los primeros tiempos, pues no era en ellos menos el horror á los crímenes sacrílegos, ni el respeto á lo sagrado.

Con el tiempo, este medio de decoro religioso se exageró, y aun degeneró en vituperable abuso; y esto último, no ya en la forma, sino convirtiéndolo en un recurso disciplinario, de represion unas veces; otras de animadversion. Antes espresaba la piedad, el respeto á las cosas santas y sagradas, el dolor profundo de su profanacion; despues ese sentimiento, llevado algunas veces á una exajeracion, hasta irrespetuosa, y vituperable, como hemos dicho; otras, un medio jurisdiccional, coercitivo, de índole contenciosa, de los que despues se llamaron de disciplina *externa*. En el primer concepto, cuando una iglesia era *profanada* por violenta efusion de sangre, ú otro crímen, aun mas repugnante, cometido en ella, no solo cesaba el culto; sino que para inculcar un saludable terror, esta interrupcion, angustiosa para los cristianos, se prolongaba inconvenientemente, hasta perjudicar á los fines santos de la Iglesia, pues los males espirituales que se seguian, superaban al escándalo que habia dado causa á la cesacion. Añadíase aun, creyendo espresar mejor el dolor, y hacer mas eficaz la impresion de santo terror, el echar por el suelo las imágenes de Cristo y de la Vírgen, cubriéndolas con abrojos.

En el segundo concepto, esto es, convertida la cesacion en la celebracion de los divinos oficios en un medio y recurso coercitivo de disciplina y jurisdiccion esterior, no solo se declaraba la *cesacion* por haber sido profanada la iglesia; sino como apremio personal, como defensa de la jurisdiccion esterna, en contiendas sobre ella, como desahogo vituperable de punible animosidad contra un prelado ó sacerdote, de un cabildo contra su obispo. Entonces ya la cesacion era con mas frecuencia personal que local: no cesaba la celebracion en la iglesia para todos; sino para sacerdotes determinados; y apenas se recuerda sin una especie de asombro, por mas de un concepto, que la interdiccion personal tuviese lugar alguna vez del cabildo para con su obispo; y no solo eso, sino contra el obispo por un mero vicario, ó provisor.

La Iglesia universal no autorizó, ni era dable, tales escesos; y tan luego como la acervidad de los tiempos permitió un regular ejercicio de la autoridad, y la razon; acudió á reprimirlos y estirparlos, por las enérgicas y saludables determinaciones que hoy forman parte del derecho,

Asi se vé, que habiendo el obispo *antisidorense* reducido á prision y excomulgado á un presbítero, que se negaba á restituir á la Iglesia lo que de ella habia sustraido; pretendiendo el dean del propio cabildo que el conocimiento de la causa le correspondia, y en vista de que el obispo habia recurrido á la autoridad del metropolitano; el mencionado dean, aspirando á hacer triunfar su jurisdiccion, ó su empeño, se arrojó al medio temerario de declarar, que mientras el obispo se hallase en la ciudad, *cesaban* los oficios divinos en la iglesia catedral; cuyo escándalo sometió, en fin, á decision de Inocencio III (1213) (1).

Dos años despues, el mismo Soberano Pontífice, en el Concilio de Letran, se veia pre-

(1) Decretales de Gregorio IX, cap. 55, tit. 28, lib. 1.

cisado á decretar que, «Si los canónigos, sin causa notoria y racional, decretaren la *cesacion á divinis*, sobre todo *en menosprecio del obispo*, este, si quisiere, puede, sin embargo de ella, celebrar en la catedral; y el metropolitano, á queja suya, y como delegado nuestro para el caso, instruida la causa, *castigue* de tal suerte por censuras á los canónigos, que el temor de la pena los contenga en lo sucesivo (1).»

Aun no se corrigieron los abusos, y no solo los abusos, diremos mas bien el escándalo repugnante de ver cerrados los templos, suspendido el culto, afligido y consternado el pueblo cristiano, por contiendas personales, que tenian natural y mas digna solucion en los trámites prácticos de la jurisdiccion ordinaria y gerárquica, cuando todavía 60 años despues Gregorio X decretaba en el Concilio general lugdunense: «Reprobando absolutamente el detestable abuso de horrenda indevocion por parte de aquellos, que tratando con irreverente atrevimiento las imágenes de la Cruz, de la Vírgen, y de los santos; para aumentar el horror de la *cesacion*, las tienden por tierra, cubiertas de ortigas, y abrojos, ordenamos, que contra los que asi procedieren, se dicte dura y vindicativa sentencia, que de tal suerte castigue á los delincuentes, que retraiga á los demás hasta de presumir tal esceso.» (1273) (2). Al propio tiempo y en el mismo Concilio el mencionado romano Pontífice precisaba la forma en que los cabildos habian de decretar la cesacion en su caso, segun luego diremos. Una cosa notaremos aquí, y es la acepcion en que en las Decretales citadas se toma el verbo *cesar*, que siendo *neutro*, es usado como *activo*, lo que se presta á equivocaciones: *Si canonici*, dice la resolucion de Inocencio III, *maxime in contemptum episcopi, cessaverint á divinis*, etc., lo cual no espresa que ellos solos se abstienen, en cuyo caso, solos ellos eran castigados, y por sí mismos; si no que cesaba la celebracion en la iglesia para todo sacerdote, incluso el obispo, que ya hemos visto, quedaba sujeto á la prohibicion, siendo notoria y justa la causa; pues solo le autoriza el Pontífice á celebrar, no obstante la prohibicion del cabildo, en el caso opuesto. En el propio sentido dice la decretal de Gregorio X: *Si canonici á divinis cessare voluerint, ei contrà quem cessare intendant*, etc, y no es solo que cesaban ellos en perjuicio de alguno; sino que este tambien cesaba, y aun á veces solo él.

No nos incumbe, ni podemos descender der aquí á una cuestion crítica; pero sí puede asegurarse, que de la natural, necesaria, piadosamente aflictiva; pero pacífica *cesacion* por causa de profanacion de la Iglesia; provino la *cesacion* ruidosa, contenciosa, y á veces perturbatoria, que ha obtenido en lo canónico la denominacion técnica de *cesacion á divinis* y que de esta, ora queriendo mitigar su rigor, pues fué mas rigorosa que el *entredicho* parcial, ora considerándola como medio jurisdiccional coercitivo, y precautorio, provino el *entredicho*, como censura. V. su artículo

Otra cosa aparece cierta, y es que, segun lo que dejamos espuesto, cuando los autores dicen, como por regla general y comun se verifica, ser la *cesacion á divinis*, la suspension ó *interdiccion en la celebracion de los oficios divinos por profanacion de una iglesia*, definen lo que venia siendo, y lo que debia ser dicha *cesacion*; no lo que llegó á ser; pues hemos visto se pronunciaba por otras causas no siempre legales, ó no siempre por profanacion.

Resulta demostrado, en fin, que la cesacion *á divinis*, en el sentido técnico y jurídico, en que venimos esponiéndola, y en que se toma en lo canónico, pertenece al derecho moderno.

Y con efecto: el orígen histórico de esta parte de la disciplina eclesiástica, se vé claro en la Coleccion de Gregorio IX (1), y despues en la de Bonifacio VIII, (2) y en la de Clemente V (3), y no mas allá del siglo 11. En

(1) Id. id., cap. 13, tit. 31, dicho libro 1.
(2) Cap. 2, tit 16, lib 1, id. id.

(1) Cap. 55, tit. 28 lib. 2.—Cap. 13, § 1, tit. 31, lib. 1 de las Decretales.
(2) Cap. 2 y 8, tit. 16, lib. 1 del Sexto.
(3) Cap. 1. § *Quod etiam* y sig. tit. 10, lib. 5 de las Clementinas.

dichas colecciones se vé usada la denominacion para denotar la especie de pena, y medida precautoria, que en el caso de haber sido violada una iglesia, deberia establecerse por virtud de la ley, ó por autoridad del superior eclesiástico, ya sea en el concilio provincial ó diocesano, ya por el obispo, ó por convenio de los canónigos ó clérigos, donde esto estuviese admitido por costumbre ó privilegio, en señal del grave dolor de que está poseida la iglesia y para infundir á los fieles un saludable terror y horror al delito cometido.

Es, pues, la cesacion una especie de entredicho local, en cuanto por aquella, lo mismo que por este cesa toda funcion sagrada donde se ha decretado, y en cuanto es un hecho que priva de beneficios espirituales y se impone por autoridad eclesiástica, como la de los obispos, los concilios y los cabildos.

Diferéncianse, sin embargo, la cesacion *á divinis* del entredicho local:

En que no recibe el nombre de censura, ni constituye especie alguna de ella, puesto que no se impone para enmienda de determinada persona.

En que no afecta omnímodamente á las personas; sino solo al lugar, de modo que fuera de él está permitido á cualquiera asistir á las funciones y misterios sagrados:

En que la cesacion es absoluta y de una acepcion estricta y universal con relacion á la iglesia en que está señalada ó anunciada, lo cual no sucede en el entredicho local general, que puede, segun derecho, relajarse ó limitarse en ciertos casos:

En que la violacion de la cesacion *á divinis* no causa irregularidad (1) aunque sujete á censura de escomunion; (2) de modo que si un clérigo celebra en la iglesia donde han cesado los divinos oficios no se hace irregular.

En que la cesacion local *á divinis* se revoca ó alza sin necesidad de absolucion ó relajacion, y solo por la satisfacion ó reconciliacion en la forma establecida por derecho:

Aunque no usada hace mucho tiempo, por las razones que diremos, la cesacion *á divinis*; trae su aplicacion menos inconvenientes, que la censura de entredicho, mayormente si este es general, puesto, que, segun derecho, aquella tiene lugar por causa de crímen cometido en la iglesia, cesándose de celebrar los divinos oficios cuando esta ha sido profanada con algun crímen especial, por ejemplo, de adulterio, ú homicidio, ó efusion de sangre, etc. (1). Como el objeto de su introduccion fué principalmente el de infundir un saludable terror y horror al crímen, no solo no seria perjudicial; sino en muchos casos conveniente, que la reconciliacion de la iglesia profanada se difiriese por algun tiempo notable; mucho mas si se tratase de un crímen enorme, y no faltasen otras iglesias en que celebrar los divinos oficios.

Queda ya indicado, que conforme al derecho comun, los prelados eclesiásticos con *jurisdiccion ordinaria*, y los calbildos catedrales en sede vacante, pueden declarar la cesacion *á divinis*. Del mismo modo los obispos pueden dar licencia á otros cabildos y conventos de iglesias regulares ó seculares, para que por justas causas puedan cesar en la celebracion de los divinos misterios, siempre que en tal cesacion se observen las prescripciones del derecho contenidas principalmente en los capítulos 2 y 8, tít. 16, lib. 1.° del Sexto de Decretales; á saber, que llamados los ausentes del cabildo, se delibere sobre la cesacion, espresándose la causa de ella en instrumento público ó cartas patentes, y se entregue á aquel contra quien se declare, poniéndose dentro de un mes el asunto en conocimiento del Sumo Pontifice, ó del juez ordinario (2).

Por las diferencias características, que hemos establecido entre el entredicho local y la cesacion, se deduce tambien que esta es absoluta, en términos que todo cuanto se comprende bajo la acepcion de oficios divinos ó

(1) Bien terminante es en este punto la declaracion de Bonifacio VIII contenida en el cap. 18, tit. 11, lib. 5 del Sexto de Decretales.
(2) Cip. cap. 1, §. *In cessationibus*, tit. 10, lib. 5 de las Clementinas.

(1) Cap. 10, tit. 40, lib. 3 de las Decretales.
(2) Vease Silvester, *Cessatio á divinis*, y Juan Honorio, sobre este título, número 80.

ministerios sagrados, otro tanto cesa en la iglesia sujeta á tal declaracion (1).

En el caso de que la cesacion sea justa, deberá observarse exactamente, cometiendo grave culpa el clérigo ó seglar que la quebrantase, si bien, como queda advertido, el hecho de la infraccion, principalmente respecto del clérigo, no produzca irregularidad. Los regulares, aunque sean exentos, si violasen la cesacion decretada por la Silla Apostólica, por el ordinario local, por el concilio provincial, por el cabildo catedral ó por la iglesia matriz; quedan sujetos *ipso facto* á excomunion, sin que en contrario obsten privilegios, convenios, costumbres y estatutos (2):

No obstante la *cesacion á divinis* podian administrarse los sacramentos de Bautismo, y Penitencia á enfermos; y celebrarse el sacrificio de la misa una vez á la semana, para renovar la sagrada reserva.

Hemos indicado no estar en uso hace tiempo, la *cesacion á divinis*; aun cuando es mas adecuada, menos violenta, que el *entredicho* general, lo que no tiene nada de estraño, cuando ya está casi sin uso el entredicho mismo, que la sustituyó, y apenas usadas las demás censuras eclesiásticas. La *cesacion á divinis* dejó de practicarse además, porque la local fué suplida en gran parte con el *entredicho*, cuya censura eclesiástica prevaleció; la personal lo fué en parte tambien por la *suspension*: y dejó de practicarse en fin, porque la desautorizó el abuso, de que hemos aducido algunos ejemplos.

Empero, el no hallarse en uso la *cesacion á divinis*, no es estar abolida; como no lo están las censuras eclesiásticas, por mas que apenas estén en uso, como es notorio; la del *entredicho* especialmente; y de seguro no incurrirá en pena, ni otra responsabilidad legal el prelado ó cabildo, que por causa *canónica*, *justa* y *notoria*, ordenase la cesacion local *á divinis* de una iglesia, no abusando en el modo, ni en la duracion. Y todavía lo dicho sobre el no uso ha de entenderse de la cesacion *jurídica*, y digámoslo asi, *técnica*, segun queda espuesto; pues la cesacion ordinaria, pacífica, gubernativa meramente, la de reverencia y decoro religioso, la que siempre se usó de hecho, por el hecho tambien de profanacion ó violacion de un templo; como siempre se ha usado, siempre se usará; y el dejar de usarla, el no dejar de celebrar en un templo violado, hasta su reconciliacion, será, sobre un atentado, un escándalo. Véase **CONSAGRACION**, **ENTREDICHO**, **IGLESIA**, **PROFANACION**, **RECONCILIACION**, **VIOLACION**.

CESACION DE EMPLEADOS. En teoría está sin duda en la naturaleza de las cosas el que un empleado público cese en el desempeño de su cargo, desde el momento en que se le comunica la órden de su cesacion en él por traslacion, ó ascenso, y mas aun por cesantía, jubilacion, ó destitucion. No teniendo mas autoridad que la que le dá su nombramiento *oficial y local*; y cesando este por una voluntad contraria del poder ejecutivo, como se realiza en los casos antes mencionados; ninguna autoridad pública, ú *oficial*, le queda, si es del todo removido, como por *cesantía*, *jubilacion*, destitucion: así como cesa su autoridad *local*, y por tanto su *competencia*, aunque solo sea trasladado á otro cargo, ó ascendido; adoleciendo por tanto de *nulidad* cuanto practicare en ambos casos, en uso, y mas bien en abuso de una autoridad y competencia, que ya no tiene. Esto en teoría: pero en la práctica la cuestion se presenta bajo punto de vista muy diferente. Desde luego es un mal público la falta de autoridad: mal, que puede ser hasta gravísimo por las circuntancias, ora cese de todo punto la autoridad; ora recaiga interinamente, hasta la llegada del nombrado en vez del removido, ascendido, etc., en manos ineptas, ó adversarias del gobierno, del órden público, etc.; y en el órden judicial en manos parciales. ¿Cuántas veces hemos visto decidirse, aun violentando los trámites, por un alcalde ó mero regidor, en el período que media entre la cesacion de un juez y la llegada del nombrado

(1) Véase lo que decimos al espresar la 4.ª diferencia entre la cesacion y el entredicho.
(2) Cit. §. In cessationibus, cap. 1, tit. 10, lib. 5 de las Clementinas.

para reemplazarle, difíciles, ó empeñadas contiendas judiciales, que requerian mayor detenimiento y aptitud legal, y cuya gravedad, ó dificultad habia detenido tal vel al juez de derecho? No queremos consignar todo lo que hemos conocido, ó ha llegado á nuestra noticia sobre este punto; así como están al alcance de cualquiera los inconvenientes que en momentos dados pueden resultar de la cesacion repentina, y subsidiaria sustitucion de autoridades, sobre todo judiciales y políticas.

De aquí la diversa práctica en las dependencias de los respectivos Ministerios; continuando en unas los empleados ascendidos, trasladados, etc., hasta la llegada de su sucesor; y de detenerse, mientras se lo permita el término para tomar posesion de su nuevo destino; cesando en otras en el momento de comunicárseles la órden de traslacion, ó cesacion por otro concepto. Alguna vez en las órdenes de cesacion se les previene que esperen para entregar la jurisdiccion ó el mando á que llegue su sucesor: otras, y es lo general, se omite este encargo; ó por la inversa, se previene entreguen desde luego el mando al que deba sustituirles subsidiariamente, segun las leyes.

No hay, pues, uniformidad, ni regla segura en punto de tal gravedad en la administracion del Estado; y es lo peor, que por parte de los buenos resultados, no cabe tampoco. Lo natural seria que el gobierno supremo, en posicion de conocer las circunstancias de los funcionarios y las necesidades locales, ó de gobierno, previniera en el nombramiento, si el relevado habia de cesar desde luego, ó esperar hasta la llegada de su sucesor. Pero, en primer lugar, el conocimiento y juicio del gobierno no es siempre exacto, ora por no serlo los informes y partes de sus autoridades; ora por otras causas: y en segundo, alguna vez el estado de cosas y circunstancias de una localidad cambian súbitamente; y lo que podia ser acertado al tiempo de espedir una real órden, puede ser perjudicial y aun peligroso al recibo y ejecucion de la misma. ¿Cuántas veces en estos casos, en circunstancias calamitosas, ó á largas distancias, ha sido útil al órden público, y en vez de castigar, ha habido que aplaudir, una desobediencia; la de una autoridad relevada, á la cual se la manda entregar el mando, que ha retenido sin embargo, y retenido con éxito provechoso por haber sobrevenido acontecimientos que así se lo hicieron creer? En tal caso, la única regla normal que procede, es que el funcionario relevado resigne luego el mando, y cese en sus funciones, salvo que en la órden de relevo, ó remocion ó de otro modo por el gobierno, se prevenga otra cosa.

En este sentido en 8 de marzo de 1849 se espidió por Gracia y Justicia la real órden siguiente:

«Para evitar los inconvenientes y falta de uniformidad que en la práctica resultan de la facultad que tienen los magistrados, jueces y promotores que son nombrados para otros destinos, de continuar ó no, como mas les convenga, ejerciendo los suyos respectivos hasta la llegada de su sucesor, la Reina (Q. D. G.) se ha dignado resolver que los funcionarios del órden judicial, que fueren ascendidos, trasladados ó nombrados para alguna comision incompatible con el ejercicio de su cargo, cesen en el desempeño de este, tan luego como les sea comunicada la órden del nuevo nombramiento por la autoridad á quien competa; salvo cuando por exigirlo así el bien del servicio, se disponga otra cosa espresamente.»

Ya antes por analogía de razones, y consultando la energía necesaria en momentos perturbatorios, en 11 de enero de 1840 se encargó á las audiencias territoriales «que en el caso de no haber juez en el partido, hallarse ausente, ó enfermo, ó resultando inhabilitado para conocer por la fuerza de los sucesos; mas bien que abandonar los procedimientos á los alcaldes; nombren al primer aviso un letrado de reputacion conocida, que provisionalmente se encargue de la jurisdiccion.»

Los mismos inconvenientes, pero con mayor anomalía, resultan de la práctica perturbatoria de resignar el mando á su placer y sin esperar resolucion de S. M. los que ha-

cen dimision de sus destinos. El que no servia el cargo público por propia autoridad; no puede, ni debe por propia autoridad cesar en él en el momento en que le conviene; sobre todo cuando la dimision se hace, no por motivos de pública conveniencia, ó por la violencia de las circunstancias, con relacion á las personas; sino por conveniencia ó motivos privados. Sobre el grandísimo desacato que hay en ello, hay verdadera perturbacion del órden administrativo, y pueden resultar perjuicios al órden ó al interés público. El gobierno supremo debe dictar sobre ello una regla uniforme; y en todo caso la prescriben el buen sentido, y decoro público, y es que, el que haya de dejar un cargo público, que voluntariamente ha aceptado, haya de esperar sobre, ello, como es conveniente y justo, la resolucion de S. M. Y esto que siempre ha sido, y siempre es por la naturaleza misma de las cosas, mas que una mera regla, un principio de buen gobierno; lo es hoy con mayoría de razon, en que los Consejeros de la Corona responden, no solo de sus actos, sino de los de sus subordinados; y en que además los modernos principios administrativos, porque no cese ni se conturbe, ni por un momento, la administracion general, han hecho aceptar, como teoría legal, la doctrina, violentísima por cierto, si no fuera un sacrificio, que se cree necesario al órden, y regularidad administrativa, de que el poder judicial, ni ha querella de parte, ni por delitos notorios, puede ejercer su accion contra funcionarios del órden administrativo, sin prévia autorizacion del ministro del ramo: y esto, repetimos, porque no se interrumpa la administracion pública, ni por un momento, sin prévia y oportuna noticia del superior gobierno. ¿Cómo no pugnará con esta teoría, violenta, repetimos, y depresiva de la *justicia pública*, la corruptela, ó demasía de que aquella cese por arbitrio privado del que mas obligado se halla á cooperar á la buena administracion general, pues que espontáneamente aceptó ese compromiso con el destino? Véase DIMISION, EMPLEADOS PUBLICOS.

CESANTES. Esta palabra en los últimos tiempos ha recibido una acepcion oficial y técnica, y espresa en tal concepto la clase y situacion de aquellos empleados del órden civil, que podriamos llamar, como lo son en realidad, *empleados sin ejercicio, empleados en su casa*; pues, como tales empleados cesantes, devengan sueldo sin servir al Estado, en la forma y en los casos que pasamos á esponer. Lo numeroso y costoso de esta clase, por un lado favorecida; por otro desgraciada; la frecuencia inevitable de las cuestiones que ocurren en cuanto á la misma, hacen que demos á este artículo la forma y estension, que por otra parte parecia no necesitar. Por las razones indicadas el derecho constituido relativo á cesantes es inmenso, tanto mas, cuanto que es una parte del complejo y mas inmenso aun sobre *clases pasivas*; si bien nos concretaremos en el presente artículo á lo principal del derecho estricto sobre cesantes, cuya ampliacion y complemento ha de buscarse en su caso en el citado artículo de CLASES PASIVAS. La legislacion, en fin, sobre cesantes propiamente tales, es toda posterior á la Nov. Recopilacion, lo cual determina la forma especial que presenta el sumario legislativo.

PARTE LEGISLATIVA.

SUMARIO.

Leyes y disposiciones sobre cesantes.

REAL ÓRDEN DE 6 DE JULIO DE 1814.

Se resuelve por punto general: «que todos aquellos que estén sin ejercicio alguno de sus empleos, y que se consideren en calidad de cesantes, disfruten solo de las dos terceras partes de sueldo.»

REAL ÓRDEN DE 13 DE AGOSTO DE 1819.

Con motivo de la supresion de la Direccion general de reales provisiones, se ordenó entre otras cosas: «Todos los demás empleados que queden cesantes ó sin ejercicio, tanto en la direccion general como en

las dependencias particulares de las provincias é islas donde estén en arriendo las provisiones, disfruten las dos terceras partes de su sueldo, siempre que sus destinos fuesen de nombramiento real y de reglamento, y no de los eventuales; debiendo ser colocados los que queden con sueldo en los ramos de la real Hacienda.»

REAL ÓRDEN DE 26 DE NOVIEMBRE DE 1819.

«Que á todos los demás que queden cesantes y fueren de nombramiento real y de reglamento, se les abone solo las dos terceras partes, interin se les coloca con arreglo á lo dispuesto en la espresada real órden de 13 de agosto último.»

REAL ÓRDEN DE 20 DE JULIO DE 1826.

«Conformándose el Rey nuestro señor con lo que ha consultado el consejo de Estado, se ha servido S. M. mandar que se quiten los sueldos personales, y que ninguno tenga en adelante mas que la dotacion que se señala al destino por reglamento.»

REAL DECRETO DE 8 DE FEBRERO DE 1827.

Despues de determinar las clases, sueldos y distintivos de los consejeros, intendentes de provincia, jefes de administracion, y oficiales de real Hacienda, ordena los siguientes:

«Art. 7.° Todos los empleados contenidos en las clases que quedan espresadas, serán de mi real nombramiento, y como tales gozarán los honores, distinciones y preeminencias que respectivamente les correspondan, con arreglo á reales órdenes.

Art. 8.° Del mismo modo tendrán derecho á gozar de los beneficios del Monte-pío á que pertenezcan, y de las dotaciones que les correspondan, aunque sean jubilados ó cesantes.»

REAL ÓRDEN DE 6 DE FEBRERO DE 1828.

Se declara que solo gozan derecho de cesantía los empleados de real nombramiento y no otros.

REAL DECRETO DE 3 DE ABRIL DE ID., SEÑALANDO LOS SUELDOS QUE SE DEBERÁN ABONAR Á LOS EMPLEADOS DE TODAS CLASES.

«Siendo una de las medidas de economía que el interés y las circunstancias del real Erario reclaman para que puedan cubrirse con los productos de las rentas los moderados presupuestos á que precisamente se deben reducir las obligaciones del servicio en cada uno de los brazos de la administracion, el arreglo de sueldos, no solo de los empleados efectivos, sino tambien de los que pertenecen á las clases de jubilados, cesantes, suspensos y procesados, y de los que de cualquier modo se hallen fuera del ejercicio de sus destinos; he mandado formar espediente instructivo de las órdenes y prácticas que estaban en observancia acerca de estos objetos, con el fin de establecer reglas ciertas y uniformes que al mismo tiempo que entren en el plan de ahorros necesarios para igualar los gastos con los fondos del real Tesoro, fijen las épocas y condiciones con que por punto general se han de abonar los sueldos y haberes á los empleados, ya se hallen en actividad de servicio, ya en el caso de cesacion. Y habiendo oido al Consejo de Estado en esta importante materia, me consultó entre otras cosas parecerle útil y justo que, dejándose separadas las clases militares de Guerra y Marina, fuese estensivo el arreglo á todos los empleados en las carreras civiles, que dependen de los Ministerios de Estado, de Gracia y Justicia y de Hacienda, sin perjuicio, no obstante, de las escepciones que tuvo por conveniente indicar. En su consecuencia he venido en aprobar las reglas propuestas en el particular á mi soberana deliberacion, como conformes, aunque dolorosas algunas de ellas, al órden indispensable de economía, y en resolver, como resuelvo, que se observen las disposiciones siguientes:

EMPLEADOS DE ACTIVO SERVICIO EN PROPIEDAD.

Artículo 1.° Los empleados por real nombramiento que se hallaren en actividad de servicio gozarán el sueldo señalado por re-

glamento á sus destinos, haciéndoseles el abono desde el dia en que principien á servirlos, si fueren empleados de nueva entrada; y en caso de haber sido ascendidos ó trasladados de otros destinos, continuarán gozando el de estos hasta que principien á servir el nuevo.

2.° Para verificarlo deberán presentarse dentro del término prescrito por instruccion, pasado el cual no se les abonará el sueldo correspondiente á los dias que hayan dilatado presentarse, aunque obtengan habilitacion.

3.° Ningun empleado efectivo percibirá sueldo personal, sino el que por reglamento esté señalado al destino que sirviere, conforme á la real órden de 20 de julio de 1826, espedida á consulta del Consejo de Estado.

4.° A los empleados efectivos que estén usando de licencia temporal para restablecer su salud, se les abonará el sueldo por entero de su empleo mientras dure la licencia. Igual abono se les hará en las prórogas que se les concedieren para el mismo objeto. A los que obtengan licencia para negocios propios se les abonará la mitad del sueldo, y nada en las prórogas.

5.° Los empleados efectivos, á quienes la autoridad competente, por algun motivo especial y grave, confiera encargos ó comisiones del real servicio, que hayan de desempeñar fuera del pueblo de su residencia, gozarán el sueldo del destino que obtengan en propiedad, y una cuarta parte mas de este mismo sueldo.

6.° A los empleados en la carrera diplomática, como embajadores, ministros plenipotenciarios y ministros residentes, se les abonarán los sueldos desde el dia en que llegaren al punto de su mision, dejando de percibirlo desde aquel en que presenten su credencial; sin perjuicio del abono que se hace para viaje, el cual debe considerarse como gasto.

EMPLEADOS JUBILADOS.

7.° En lo sucesivo no se concederá jubilacion á los empleados sino por imposibilidad absoluta de continuar sirviendo, ya dimane esta de su avanzada edad, ya de achaques habituales é incurables.

8.° La dotacion que ha de servir de base para designar el haber de las jubilaciones será la señalada por reglamento al empleo de mayor sueldo que por real nombramiento hubiere servido en propiedad el empleado que se jubile.

9.° Para esta regulacion no se considerarán como parte de sueldo los sobresueldos, gratificaciones, ayudas de costas, regalías ni otros emolumentos, aun cuando hasta ahora se hayan tenido como anejos é inherentes á los empleos, y como parte de su dotacion.

10. Los empleados que no disfruten sueldo fijo del real Erario, no tendrán derecho al haber de jubilacion sobre sus fondos.

11. Para graduar el haber de las jubilaciones se observarán las reglas siguientes: 1.ª no tendrán derecho á gozarlo los empleados que no hayan cumplido quince años de servicio: 2.ª los que hayan servido mas de quince años, y no pase de veinte el tiempo de servicio, gozarán una quinta parte de su sueldo, regulado conforme á los artículos 8.° y 9.°: 3.ª los que hayan pasado de veinte años de servicio, y completaren veinte y cinco, gozarán dos quintas partes: 4.ª los que lleven mas de veinte y cinco años, y no escedan de treinta, gozarán tres quintas partes: 5.ª los que completaren treinta y cinco años de servicio gozarán de cuatro quintas partes; y ningun jubilado percibirá cuota mayor: 6.ª el tiempo de servicio se deberá contar desde que los empleados en propiedad por real nombramiento cumplan la edad de diez y seis años hasta el dia en que se determine su jubilacion.

12. En el tiempo regulado de este modo se comprenderá el que los empleados efectivos hubiesen servido en clase de meritorios, aun cuando lo sean sin sueldo, siempre que hayan sido admitidos con real aprobacion ó en plaza de reglamento; pero no el que hayan servido sin estos requisitos.

13. A los empleados efectivos, que habiendo servido en la carrera de las armas, pasaren á las carreras civiles, se les contará en

estas para su jubilacion el tiempo de activo servicio que hubiesen contraido en aquella; pero sin el aumento de tiempo que por disposiciones generales ó especiales se les haya concedido.

14. El tiempo que los empleados hubiesen permanecido en clase de cesantes ó de reformados, se les abonará por mitad para las jubilaciones, siempre que la cesacion no provenga de faltas que hayan cometido.

15. De los años de servicio, computados en la forma espresada en los artículos 11, 12, 13 y 14, se harán las deducciones siguientes: 1.ª como regla constante y general: el tiempo que los empleados hubiesen estado suspensos ó separados de destino en virtud de providencia gubernativa ó de sentencia judicial en pena de faltas ó escesos que hayan cometido: 2.ª como regla accidental de las circunstancias actuales, el tiempo que hubiesen servido al gobierno intruso de José Bonaparte, ó permanecido en pueblos ocupados ó dominados por él, y el que hubiese mediado hasta ser empleados de nuevo en consecuencia de su purificacion ó rehabilitacion: 3.ª tambien como regla accidental de las circunstancias actuales, el tiempo de activo servicio prestado desde 7 de marzo de 1820 hasta el establecimiento de la regencia del reino en Madrid el 26 de mayo de 1823.

16. Las jubilaciones, en los casos en que deben tener lugar, no solo podrán intentarse por los empleados interesados, sino que los mismos jefes deberán promoverlas, instruyendo espedientes en que se justifique la imposibilidad absoluta de que aquellos continúen sirviendo, y las causas de que proceda.

17. A dichos espedientes han de acompañar la fé de bautismo, las hojas de servicio, y los demás documentos que están en práctica y fuesen precisos para justificar legalmente la necesidad de la jubilacion, graduar el haber, y determinar los años de servicio de legítimo abono que han de servir de regla para ello, conforme á lo prevenido en los artículos 11, 12, 13 y 14.

18. Los jefes no darán curso á los espedientes de jubilacion, sin que en ellos estén plenamente justificados todos los estremos arriba prevenidos, tomando además las noticias é informes que estimen oportunos para asegurarse de la verdad de los hechos.

19. Instruidos los espedientes en la forma espresada en los artículos 16, 17 y 18, los jefes los pasarán con su informe y parecer á la autoridad superior inmediata de que dependa el empleado que se deba jubilar, á fin de que me proponga y consulte por conducto del respectivo secretario de Estado y del despacho lo que corresponda al mejor real servicio.

20. La retroaccion tendrá lugar con los jubilados actuales que gozan mayor sueldo que el que les corresponderia por el presente arreglo; pero los que lo gozan menor seguirán disfrutando el que se les haya señalado al tiempo de jubilarse.

21. Las reglas espresadas en los artículos antecedentes no se entederán con los embajadores, ministros plenipotenciarios y ministros residentes, cuya jubilacion tendré á bien determinar, graduando sus servicios como juzgue conveniente.

22. Las jubilaciones de las demás clases dependientes del ministerio de Estado estarán sujetas á lo que queda determinado en los artículos 7.°, 8.°, 9.°, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20.

23. Los ministros y fiscales de los Consejos de la corte, que por absoluta imposibilidad fueren jubilados, gozarán sin consideracion de años de servicio de las cuatro quintas partes del sueldo señalado á sus plazas, en concepto de ser el último término de la carrera.

24. Los alcaldes, la real casa y corte, los regentes, oidores, alcaldes del crímen y fiscales de las chancillerías y audiencias que del mismo modo fueren jubilados por absoluta imposibilidad, tendrán siempre el haber correspondiente á quince años de servicio efectivo, aunque no los hayan cumplido, atendiendo á la preperacion y estudios que exige la carrera; pero fuera de este caso quedarán sujetos á las reglas proporcionales establecidas en el artículo 11.

25. Los empleados de las demás clases

dependientes del ministerio de Gracia y Justicia no tendrán ninguna escepcion.

EMPLEADOS CESANTES.

26. Los empleados cesantes ó fuera de servicio activo, que sin culpa ó delito hubieren quedado sin destino, gozarán un sueldo ó haber proporcionado á sus años de servicio, el cual nunca podrá esceder de la mitad del que gozaren al tiempo de la cesacion.

27. Para el señalamiento de este sueldo ó haber se observarán las reglas siguientes: 1.ª á los que no hubieren contraido 10 años de servicio, se les abonará la cuarta parte de su sueldo: 2.ª á los que llevasen mas de 10 años, y no hubiesen cumplimido 20 de servicio, se les abonará la tercera parte: 3.ª á los que hubiesen servido mas de 20 años, se les abonará la mitad del sueldo.

28. En la computacion de los años de servicio de los cesantes se observarán las reglas que para los jubilados se contienen en los arts. 11, 12, 13 y 14.

29. Se escluirán de las regulaciones de los haberes los emolumentos anejos al destino, en los términos que el art. 9.° previene para las jubilaciones.

30. Los cesantes, que accidentalmente ó por casos de conocida utilidad al real servicio, fueren ocupados en comision ó en empleo vacante interinamente en el pueblo de su residencia, gozarán, durante su desempeño, todo el sueldo del empleo que servian en propiedad antes de su cesacion. Si por iguales motivos y objetos, pasaren á pueblos distintos de los de su residencia, gozarán todo el sueldo de sus anteriores destinos, y de una cuarta parte mas mientras dure la ocupacion.

31. Quedan sujetos á las disposiciones contenidas en los precedentes artículos los empleados que actualmente se hallaren cesantes.

EMPLEADOS SUSPENSOS Y PROCESADOS.

32. Los empleados suspensos en virtud de providencia gubernativa de la autoridad competente por falta de subordinacion, ó de otras cometidas en el cumplimiento de sus obligaciones, no gozarán ningun sueldo por el tiempo que hubiesen estado suspensos; pero si la autoridad superior, con vista del espediente instructivo que debe formarse con arreglo á instruccion de 3 de julio de 1824, declarase haber sido injusta la suspension, se les abonarán los sueldos que hubiese dejado de percibir.

33. A los empleados en propiedad por real nombramiento con sueldo del Erario, que se hallen procesados judicialmente en los tribunales, juzgados ó comisiones competentes por faltas en el cumplimiento de su obligacion, por delitos de infidencia, ó por otros comunes que no tienen relacion con los deberes que les incumben como á empleados, se les abonará mientras lo estén la parte de haber que les corresponderia como á cesantes, graduándola en los términos prevenidos en los artículos 26, 27 y 28.

34. Quedan nulas y sin efecto en todo lo que se oponga al presente decreto, las reales órdenes y disposiciones dadas hasta ahora sobre abonos de sueldos, á los empleados de los referidos ministerios de Estado, Gracia y Justicia y Hacienda.

Tendréislo entendido, y dispondreis lo conveniente á su cumplimiento. Señalado de la Real mano de S. M. En Barcelona á 3 de abril de 1828. A D. Luis Lopez Ballesteros.»

REAL ÓRDEN DE 28 DE AGOSTO DE ID.

Prévia consulta de la comision y junta del presupuesto de Hacienda, se resuelve «que el art. 5.° del real decreto de 8 de febrero (antes citado) se limita á solo los descuentos que se hacen á los empleados por contribucion de sueldos y de Montes-píos...»

REAL ÓRDEN DE 25 DE SETIEMBRE DE ID.

«Enterado el Rey nuestro señor del espediente que se ha instruido acerca de los sueldos que deben abonarse á los empleados cesantes y jubilados clasificados; se ha servido S. M. mandar que los sueldos declarados

por la clasificacion á estos empleados, se abonen desde la fecha del documento que se espida á cada interesado para acreditar aquella, y que solo queden libres de todas clases de descuentos los que entren en destinos de nueva clasificacion, pues los cesantes que cobran la parte correspondiente de los antiguos sueldos, sin haber entrado en los nuevos, y en las clases últimamente señaladas, sufrirán el descuento del Monte-pío correspondiente.»

REAL ÓRDEN DE 18 DE NOVIEMBRE DE ID.

«Enterado el Rey nuestro señor de los que V. S. espone en 12 del corriente, sobre que á los jubilados y cesantes que no están clasificados exige los descuentos de Montepío: que á los clasificados ya por la comision, cuyos haberes quedaron reducidos á seis años de servicio activo, no hace descuento alguno; y que asi á los cesantes sin clasificar, como á los clasificados, cuando se destinan temporalmente á algun trabajo ó comision del real servicio, por el que cobran todo su sueldo antiguo, descuenta lo correspondiente á Monte-pío, si están incorporados en él, y el 4 por 100 á los que comprende; se ha servido S. M. aprobarlo como V. S. propone.»

REAL ÓRDEN DE 20 DE MARZO DE 1833.

«Artículo 1.° Que á los hijos y huérfanos de empleados antiguos y beneméritos, que entren á servir en la real Hacienda á los 14 años de edad, con arreglo al real decreto de 19 de agosto de 1825, debe abonárseles para su clasificacion el tiempo que hayan servido desde dicha edad, no obstante lo determinado por punto general en el art. 11 del soberano decreto de 3 de abril de 1828.

Art. 2.° Que todo empleado cesante de la Real Hacienda, pueda solicitar el aumento del haber que le haya correspondido por su clasificacion, cuando cumpla el tiempo prefijado para obtener la tercera parte ó la mitad del sueldo de su último empleo, con sujecion á las reglas establecidas en el citado real decreto de 3 de abril de 1828.»

REAL DECRETO DE 13 DE JUNIO DE ID.

Entre otras reglas se establecen las siguientes:

«Regla 1.ª Desde primero de julio próximo ningun empleado gozará mas que de un solo y único sueldo, á su eleccion, aunque accidentalmente ó por comision, desempeñe dos destinos de nombramiento real, de aquellos que por su naturaleza y funciones están separados ó pueden repararse con dos distintas dotaciones, y aunque una sola esté situada sobre los fondos del Erario.

Regla 2.ª Tampoco disfrutará de sueldo personal, sino del que esté asignado á su destino, y á la clase de jubilado, cesante, emigrado de América, ó cualquiera otra que tenga sus haberes señalados por reglamento.»

REAL ÓRDEN DE 31 DE MARZO DE 1834.

«He dado cuenta á S. M. la Reina Gobernadora del espediente instruido á consecuencia de las reclamaciones, que han hecho varios empleados de Real Hacienda, en solicitud de que se les abone el tiempo de servicio de la época constitucional, á pesar de lo mandado en el real decreto inserto de 3 de abril de 1828; y enterada S. M., se ha servido resolver, conformándose con el dictámen del Consejo Supremo de Hacienda, que á todos los empleados que lo eran en 7 de marzo de 1820, bien se hallen en activo servicio, ó ya ausentes y jubilados, se les abone el tiempo de servicio de la época constitucional, siempre que hubiesen obtenido su purificacion; entendiéndose respecto de los que ya estén clasificados, con deduccion de dicho tiempo, que el aumento de haberes que les resulta por el de sus años de servicio, solo tendrá lugar desde la fecha de esta soberana resolucion.»

REAL DECRETO DE 30 DE DICIEMBRE DE ID.

«Habiendo tomado en consideracion la peticion que me dirigió el Estamento de procuradores del reino, relativa á los honores, gra-

dos, empleos y distinciones concedidas por mi augusto esposo (Q. E. E. G.) desde 7 de marzo de 1820 hasta 30 de setiembre de 1823: oido el Consejo de gobierno y el de ministros, en nombre de mi excelsa hija doña Isabel II, he venido en decretar lo siguiente:

Art. 1.° Los que obtuvieron títulos, despachos ó nombramientos reales en las carreras civil ó militar desde 7 de marzo de 1820, hasta 30 de setiembre de 1823, quedan habilitados desde la publicacion del presente decreto para el goce de los honores, grados y distinciones á su respectivo título ó nombramiento, y con la antigüedad del mismo.

Art. 2.° Desde 1.° de enero percibirán por el presupuesto de su ramo respectivo la parte de sueldo que por razon de su empleo les corresponda como cesantes, conforme á las reglas de clasificacion establecidas, ó que se establecieren.

Art. 3.° Las viudas y huérfanos de los que hubiesen adquirido derecho al Monte-pio en la referida época, le tendrán al goce correspondiente á la clase á que llegaron sus maridos ó padres.

Art. 4.° No tendrá lugar el art. 2.° respecto de aquellos que hubiesen capitalizado sus sueldos, quedando sujetos los que conservaren el papel, á lo que se resuelva para el de igual clase en el arreglo de la deuda interior del Estado (1).

Art. 5.° Los que desde 1.° de octubre de 1823 solicitaron y obtuvieron declaracion de cesantes con sueldo, tendrán opcion al aumento que les corresponda conforme al artículo 2.°

Art. 6.° Los empleados que lo fueron durante la espresada época en ramos y dependencias estinguidas en 1823, y que no se han restablecido posteriormente, tendrán derecho á los honores y haber como cesantes, que correspondan á la primera carrera, segun el grado ó empleo que obtenian al separarse de ella.

Art. 7.° Los eclesiásticos, agraciados por mi augusto esposo con prebendas ó beneficios eclesiásticos, durante el tiempo que espresa el art. 1.°, serán reintegrados en ellos, si se hallaren vacantes en la actualidad; y si no lo estuviesen, me reservo colocarlos en otros de igual clase.»

Tendréislo entendido, etc.

(1) Véase el decreto de Córtes de 3 de setiembre de 1820, artículo 9.°, sobre la facultad de las clases pasivas para capitalizar sus haberes por reglas de vitalicios.

REAL ÓRDEN DE 4 DE ABRIL DE 1835.

«Art. 1.° El sueldo regulador para las clasificaciones de los empleados rehabilitados por el real decreto de 30 de diciembre de 1834, será el señalado por los reglamentos, en el dia vigentes, á los destinos que obtuvieron en la época desde 7 de marzo de 1820, á 30 de setiembre de 1823, en que fueron nombrados, existiendo sus dependencias, ó habiendo sido restablecidas despues del 1.° de octubre de este último año, conforme al artículo 6.° del citado decreto; no reconociéndose de consiguiente los sueldos que en la propia época tenian asignados los mismos destinos, por deber acomodarse á los actuales.

Art. 2.° Los empleados que lo fueron en los dos ministerios de la Gobernacion de la Península y de la de Ultramar, y de sus respectivas dependencias de jefaturas políticas, direccion de estudios, universidades, medicina, cirujía, farmacia y demás semejantes, que por los reglamentos y leyes vigentes en el dia tendrian derecho á la clasificacion y haber de cesantes, tendrán ahora el que les corresponda; pero no los que no se hallen en este caso.

Art. 3.° No bastará para dichas clasificaciones la sola presentacion de los reales nombramientos, ó títulos de los destinos que obtuvieron los interesados; sino que deberán acreditar haber tomado posesion de los mismos, con lo cual, y no sin ella, se adquiere el derecho á los goces que les están señalados, aun cuando los sirviesen por poco tiempo, sin que obste á que se sigan las reglas que rigen en cada carrera sobre este punto.

Art. 4.° Queda sin efecto el real decreto de 22 de marzo de 1833 (1) en cuanto á la

(1) Espedido por Guerra, en el cual se determinan las reglas que deben observarse para el abono de haberes á los comprendidos en el real decreto de amnistía de 15 de octubre de 1832.

clasificacion y goce de haberes que por él se determinó á favor de los empleados rehabilitados por el de 30 de diciembre de 1834, en razon á que les corresponden ahora las gracias concedidas en este último decreto, debiendo, no obstante, continuar percibiendo las asignaciones, que por el primero obtuvieron, hasta 1.° de enero del corriente año, en que entrarán á disfrutar las que por la nueva clasificacion les corresponda.

Art. 5.° Las mejoras de clasificacion de que trata el art. 5.° del mencionado real decreto de 30 de diciembre, se entienden solamente en favor de los que, habiendo quedado cesantes, no volvieron á ser colocados desde 1.° de octubre de 1823, no comprendiendo en consecuencia á los que despues de dicha época obtuvieron destino activo, y se hallan hoy tambien cesantes, los cuales han debido y deben continuar clasificados con el sueldo respectivo á los mismos destinos de que últimamente quedaron cesantes, con arreglo al real decreto de 3 de abril 1828 y su artículo 26.

Art. 6.° Declarando, como ya lo queda en el art. 1.°, que para las clasificaciones de dichos empleados no se reconocen los sueldos, que obtuvieron por sus destinos en la época desde 7 de marzo de 1820 á 30 de setiembre de 1823, por deber referirse á los que tienen en el dia señalados los mismos destinos, si existen ó han sido restablecidos, se arreglarán las jubilaciones en todos ellos á los sueldos que por los reglamentos vigentes estén asignados á los empleos que se les revalidan, respecto á que para las jubilaciones rige, por el art. 8.° del mencionado decreto de 3 de abril de 1828, distinta regla que para las cesantías, cual es la dotacion mayor que por reglamento y real nombramiento en propiedad hubiere gozado el empleado que se jubile, entendiéndose esto, sin perjuicio de las variaciones que en el particular se hicieren.

Art. 7.° A los que se les despojó de sus empleos en el año 1814, y que habiendo sido rehabilitados despues del 7 de marzo de 1820, lo quedan tambien ahora por el real decreto de 30 de diciembre último, se les abonará el tiempo de servicio por mitad, conforme á las reglas establecidas en el citado período de 1814 á 1820, como cesantes.

Art. 8.° La clasificacion de los que fueron empleados en la referida época de 1820 á 1823 en ramos y dependencias estinguidas en este último año, y que no se han restablecido posteriormente, se entenderá por los destinos de su *carrera inmediata anterior*, y no por la de *primera* entrada, cuya declaracion se hace para evitar toda duda en el cumplimiento del art. 6.° del real decreto de 30 de diciembre.

Art. 9.° En las declaraciones de pensiones de Monte-pío á las viudas y huérfanos de los que hubieren adquirido derecho á él en la referida época, segun la clase á que llegaron sus maridos ó padres, y á que tengan opcion en el dia con arreglo al art. 3.° del citado decreto de 30 de diciembre, se procederá conforme á las reglas establecidas en los reglamentos y órdenes con que se gobiernan los respectivos Montes-pios para el goce de las pensiones de viudedad y horfandad, como si el fallecimiento de los causantes ocurriere ahora.

Art. 10. Los empleados, que en dicha época manejaron efectos y caudales del gobierno, acreditarán para su clasificacion haber rendido cuentas por el tiempo de su responsabilidad, y no resultarles alcance alguno en sus cargos y datas, aun cuando todavía no estén finiquitadas.

Art. 11. Se guardará y estará á lo que resuelvan las Córtes en cuanto á la clasificacion de sueldos de los secretarios cesantes del Despacho para proceder con arreglo á ella á la de los que los fueron en propiedad desde 7 de marzo de 1820 á 30 de setiembre de 1823.

Art. 12. Todas las clasificaciones que en virtud del real decreto de 30 de diciembre y las aclaraciones contenidas en esta resolucion se hicieren por las autoridades á quienes están encomendadas, se someterán á la aprobacion de S. M. por el ministerio ó ministerios respectivos, sin que hasta que esta recaiga y se comunique á las dependencias en que deban cobrar los clasificados, se les

abone su correspondiente haber. De real órden, etc.»

LEY DE PRESUPUESTOS DE 26 DE MAYO DE 1835.

«Art. 15. El máximum de sueldos para jubilados y cesantes será de 40,000 reales vellon, cualquiera que sea su destino y clase, no pudiendo acumular dobles sueldos bajo pretesto alguno, segun lo mandado por real órden de 13 de junio de 1833.

Art. 16. Los sueldos de jubilados y cesantes serán proporcionados á los que disfrutaron como empleados efectivos, y á los años de servicio, con sujecion á reglamento, quedando desde luego abolidas las escepciones personales con la adopcion de esta regla.

Art. 18. A los cesantes que lo sean por separacion del destino que desempeñaban, se les abonará la cuarta parte del sueldo si cuentan quince años de servicio, y la mitad si pasan de veinte. Pero los que fueron destituidos por causa probada, ni tendrá derecho á parte alguna de sueldo, ni á ser reemplazados.

Art. 19. Los cesantes que se hallan en esta clase por supresion ó reforma del empleo ó destino que desempeñaban, gozarán de la cuarta parte de sueldo, si cuentan doce años efectivos de servicio al Estado; la tercera parte á los diez y seis, y la mitad del sueldo á los veinte años. Pero á los empleados que quedaron privados de sus destinos á virtud del real decreto de 1.° de octubre de 1823, y han sido rehabilitados por el de 30 de diciembre de 1834, y por la amnistía concedida en 1832 y sus declaraciones, se les abonará por entero, tanto para la clase de cesantes, como para la de jubilados, el tiempo trascurrido entre ambas épocas.

Art. 20. Para fijar la cuarta parte, tercera ó mitad del sueldo á los cesantes, servirá de regla el empleo efectivo del mayor sueldo que hayan desempeñado en propiedad con real nombramiento ó de las Córtes.

Art. 21. A los cesantes por supresion ó reforma, del empleo ó destino, se les abonará por mitad el tiempo que permanezcan en esta clase para las jubilaciones. Pero á los que hayan sido separados, no se les hará abono alguno de tiempo desde 1.° de enero de este año.

Art. 23. Los embajadores, ministros, encargados de negocios y cónsules generales, estarán sujetos á lo prevenido en las disposiciones décimaoctava, décimanona, vigésima y vigésimasesta, respecto á los años de servicio. Para fijar la cantidad que les corresponde en clase de cesantes ó jubilados, se supondrá á los embajadores el sueldo de 90,000 reales anuales; á los ministros plenipotenciarios, el de 60,000; á los ministros residentes, el de 50,000; á los encargados de negocios, el de 36,000; á los cónsules generales que disfruten mas de 40,000 reales de sueldo, se graduará la parte del que les corresponda como cesantes ó jubilados, por el mayor que hayan disfrutado en clase de efectivos; pero á los cónsules generales, cuyo sueldo no llegue á 40,000 reales, se les abonará el mismo sueldo que á los encargados de negocios.

Art. 25. Igualmente quedan sujetos á las reglas generales de cesantes y jubilados los que hayan sido secretarios del Consejo de Estado, y los subsecretarios del Despacho.

Art. 27. A los cesantes y jubilados que estén ó pasen á paises estranjeros, se les aplicará la misma regla establecida para pensiones y viudedades, no pudiendo disfrutar de sus respectivos haberes fuera del reino, sino por el preciso término de cuatro meses improrogables.»

REAL ÓRDEN DE 28 DE ABRIL DE 1837.

«Se declara que á los rehabilitados por el real decreto de 30 de diciembre de 1836, en sus clases y empleos de la anterior época constitucional, que obtuvieron destinos con posterioridad, y volvieron despues á quedar cesantes, se les abonará el tiempo de servicio por entero desde la reaccion de 1823 hasta que hubieren obtenido colocacion por el gobierno absoluto.»

REAL ÓRDEN DE 26 DE AGOSTO DE ID.

«Habiéndose dudado si los empleados separados de sus destinos y á quienes despues

se declara *cesantes*, devengan la pension de cesantía desde esta declaracion; ó desde la fecha de la separacion; ó lo que es lo mismo, si la declaracion subsiguiente de cesantía tiene efecto retroactivo, se resuelve que siempre que el empleado separado sea declarado despues cesante, se le abone su haber solo desde la fecha de esta declaracion; como en ella no se disponga cosa en contrario.»

REAL ÓRDEN DE 16 DE MARZO DE 1840.

«Que deben reputarse por meras comisiones los destinos de administradores de los ramos decimales, y demás que no disfrutan sueldo fijo, y sí un tanto por 100 de los productos de las rentas que administran... y que no tienen derecho á jubilacion ni cesantía.»

REAL ÓRDEN DE 29 DE ABRIL DE ID.

«Se resuelve por punto general que para el señalamiento del haber que hayan de gozar los empleados cesantes, se tengan únicamente en consideracion el sueldo determinado por reglamento para los empleos de que deban ser clasificados, sin que el disfrutar otras gratificaciones ó emolumentos, sean de la especie que fueren, ni el tener honores ó graduaciones superiores á su clase respectiva, altere en modo alguno aquella base.»

LEY DE 10 DE AGOSTO DE ID.

«Art. 1.° Se abona el doble tiempo de servicio á los individuos que sirvieron en el ejército constitucional, y en la armada, durante la campaña de los años 1820 á 1823, con sujecion á las reglas establecidas en real decreto de 20 de abril, aclaracion de 11 de junio y real decreto de 26 de agosto de 1815, sobre abonos de campaña.

Art. 2.° Esta gracia deberá contarse á los comprendidos en ella, desde el 7 de mayo de 1820 hasta el dia en que las generales á cuyas órdenes servian dejaron las armas; y comprende á los prisioneros, á quienes V. abonará el doble tiempo de campaña hasta el momento en que dejó de considerárseles como tales.»

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LAS CONTADURÍAS DE RENTAS DE 31 DE OCTUBRE DE 1842.

«Art. 2.° Los contadores de provincias y los oficiales de las contadurías, serán como hasta aquí de nombramiento real; pero solo tendrán derecho á cesantía, jubilacion y Monte-pío los que en la actualidad le tengan adquirido y los que en lo sucesivo opten á las plazas de oficial 4.° inclusive arriba. A los que sin tener aquellos derechos asciendan á esta clase; se les contarán para obtenerlos los años que hayan servido en las anteriores.»

REAL ÓRDEN DE 23 DE DICIEMBRE DE 1843.

«Que para el abono de años de servicio en las clasificaciones de empleados civiles, se proceda con arreglo á lo mandado en el espíritu y letra de la ley de 10 de agosto de 1840 y 28 de igual mes de 1841.»

Nota. Esta última ley habla de la clasificacion y abono de tiempo á los individuos del ejército y armada en España y en Ultramar.

REAL ÓRDEN DE 8 DE FEBRERO DE 1844.

«S. M. se ha dignado declarar, que no tienen derecho á cesantía, jubilacion ni Monte-pío, los individuos que hayan obtenido en algun tiempo, ú obtuviesen en adelante por efecto de real nombramiento destinos que carezcan de tales derechos, y cuya provision corresponde á los jefes de las oficinas centrales ó de las de provincia, segun las órdenes é instrucciones vigentes; siendo su real voluntad, que no se entienda nunca haberlos adquirido por el solo hecho de haber obtenido la plaza por real nombramiento, asi como no le adquieren los oficiales de las contadurías de rentas de las provincias, que no optan á las plazas de oficial cuarto arriba, sin embargo de nombrarlos S. M., conforme á lo dispuesto en el decreto de 31 de octubre de 1842.»

REAL ÓRDEN DE 14 DE FEBRERO DE ID.

«Enterada S. M. del oficio de V. E. de 31 de enero último, proponiendo que las últimas

plazas de las administraciones de los partidos sean provistas por esa direccion; se ha servido resolver, que su provision debe hacerse por S. M. á propuesta de la referida direccion, sin que por esto adquieran los agraciados derecho á cesantía, jubilacion, ni Monte-pío, asi como no lo adquieren los oficiales de las contadurías de provincia desde quinto inclusive abajo, no obstante de ser de real nombramiento, segun lo mandado en el decreto de 31 de octubre último, cuyo segundo artículo debe aplicarse al caso presente.»

LEY DE PRESUPUESTOS DE 23 DE MAYO DE 1845.

«Capítulo 10.—Art. 3.° Desde la publicacion de la presente ley, ningun empleado de nueva entrada tendrá derecho al goce de sueldo por cesantía.

Ningun ascenso de los actuales empleados ó cesantes dará derecho á aumento en el haber de cesantía, si el nuevo empleo se sirve menos de dos años, gozando en otro caso del que por el anterior destino corresponda, regulado segun la ley vigente sobre la materia.»

REAL ÓRDEN DE 8 DE ABRIL DE 1854.

«Habiendo recurrido á S. M. un depositario de fondos de ayuntamiento solicitando se declarase no ser incompatible su asignacion en este concepto con la cesantía de empleado, de conformidad con el dictámen de la direccion general de lo Contencioso, se resolvió:

1.° «Que la incompatibilidad en el percibo de haberes de que se trata en la real órden de 2 de agosto de 1847, se entiende únicamente respecto de los empleados activos ó cesantes del gobierno que sean nombrados para desempeñar al propio tiempo cualquiera otro cargo del mismo.

2.° Que el ejercicio de empleos retribuidos de fondos provinciales ó municipales, es compatible con el percibo del haber que por cesantía corresponda á cualquier empleo del Estado.»

REAL ÓRDEN DE 1.° DE OCTUBRE DE 1854.

Habiéndose suprimido los consejos provinciales, y mandado les reemplacen las diputaciones provinciales se declara se consideren cesantes todos los auxiliares de contabilidad provincial desde el dia en que las diputaciones les mandaron cesar en aquellos destinos; y desde el 31 de agosto último los que no hubieren recibido de dichas corporaciones la órden de cesantía, debiendo abonárseles el sueldo que les corresponda.»

REAL ÓRDEN DE 5 DE OCTUBRE DE ID.

«1.° Que á los individuos declarados cesantes, ó que hayan sido separados por las juntas (de gobierno), se les considere como tales, desde el dia en que tomaron posesion los nombrados por las mismas en reemplazo de aquellos; pasando á la situacion pasiva, y cobrando los haberes que por dicho concepto les corresponda hasta el dia en que hayan sido ó sean repuestos por el gobierno de S. M., ó nombrados para dichos destinos.»

REAL ÓRDEN DE 3 DE DICIEMBRE DE ID.

«Que desde 1.° de enero de 1855, se consideren cesantes por reforma, con el haber que por clasificacion les corresponda, todos los empleados de real nombramiento en el ramo de puertas, cuyo servicio cesa en dicha fecha.»

REAL ÓRDEN DE 30 DE JUNIO DE 1855.

Se declara que la situacion pasiva temporal de los individuos de la carrera jurídico-militar, en vez de la de *cesantes*; sea la de *reemplazo*, como lo venia siendo la de los capellanes castrenses.

REAL ÓRDEN DE 6 DE JULIO DE ID.

«1.° Los empleados, cuyos destinos fueron suprimidos por las juntas, tienen derecho al abono de sueldo por el tiempo que medió desde 1.° de agosto en que se resta-

blecieron las plantas de las oficinas hasta que fueron rehabilitados por el gobierno ó declarados cesantes.

2.° Los empleados de nueva entrada ó trasladados, que se hallaban en marcha para sus destinos al verificarse el alzamiento, y á los cuales las juntas se negaron á dar posesion, tienen derecho al abono de tiempo y sueldo; los primeros desde el dia de la presentacion en el punto de su destino; y los segundos desde el mismo dia por el menor sueldo anterior, siempre que unos y otros hayan sido rehabilitados en sus destinos por el gobierno, ó nombrados para otros análogos.

3.° Los demás empleados de quienes no hubiere dispuesto el gobierno, cuya situacion no estuviese declarada ya, se consideran cesantes desde el dia anterior al en que los nombrados por el gobierno se posesionaron de los destinos que sirvieron aquellos.»

LEY DE 9 DE JULIO DE ID.

«Artículo 1.° Se prohibe, tanto en la Península como en todos los dominios de Ultramar, la simultaneidad de dos ó mas destinos, sueldos, comisiones y cualesquiera otros emolumentos, sean cuales fueren, en todas las dependencias del Estado, y que se paguen con fondos generales provinciales ó municipales.

Se esceptúan de esta disposicion aquellos empleados que desempeñen á la vez dos destinos, uno de ellos profesional, de nombramiento de cualquiera de los cuerpos colegisladores, obtenido en virtud de oposicion.

Art. 2.° A los quince dias de publicada esta ley en la Península, y de tres meses en Ultramar, optarán los que en la actualidad se encuentren comprendidos en cualquiera de los casos del artículo anterior por el sueldo que mas les convenga, y las cantidades que por jubilaciones, cesantías ó en cualquier otro concepto estén percibiendo, quedarán á beneficio del Estado.»

LEY DE PRESUPUESTOS DE 23 DE JULIO DE ID.

«Art. 4.° El descuento gradual sobre los haberes de las clases dependientes del Tesoro se exigirá en el año de 1853 de todos los individuos, inclusos los del clero, esceptuando los cuerpos armados del ejército y de la marina, carabineros del reino y monjas en en clausura, al tenor de la siguiente escala:

Hasta	6,000	rs. inclusive	el	10 por 100
Desde	6,001	á 12,000	el	12 por 100
Desde	12,001	á 20,000	el	14 por 100
Desde	20,001	á 30,000	el	16 por 100
Desde	30,001	á 40,000	el	18 por 100
Desde	40,001	á 50,000	el	20 por 100
Desde	50,001	á 80,000	el	22 por 100
Desde	80,001	en adelante	el	25 por 100

Art. 14. Los empleados no tendrán jubilacion si no cuentan sesenta años de edad cumplidos, ó acreditan, por medio de espediente instruido en forma legal, su absoluta imposibilidad física para continuar en el servicio activo. Para los ascensos que desde la publicacion de esta ley obtengan los empleados activos, ó cesantes, servirá como sueldo regulador de las declaraciones de haber de cesantía, jubilacion y Monte-pío el del nuevo empleo, siempre que se haya desempeñado en propiedad por espacio de dos años con el goce del haber señalado al mismo dentro de los presupuestos respectivos.»

SECCION V.

2.ª «Cuando el sueldo del mayor ó el último empleo para las cesantías, jubilaciones ó Monte-pío, no pueda ser base del señalamiento de haber pasivo, porque no se haya servido dos años con las circunstancias marcadas, se acumulará el tiempo invertido en dicho empleo al del anterior ó anteriores, siendo regulador el sueldo de aquel en que los dos años se completen.

4.ª Con el fin de precaver ocultaciones y fraudes en la percepcion de los haberes de las clases pasivas, dispondrá el gobierno revistas periódicas de presente, que le aseguren de la existencia de los individuos en la provincia donde radican sus pagos, asi como de no haber sufrido alteracion el estado de las personas que fundan en él el derecho que disfrutan.»

SECCION XV.

DISPOSICIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

«1.° El descuento gradual se entenderá concedido sobre las clases á que afecta, solo por el corriente año, en consideracion á los apuros del Tesoro, sin que desde 1.° de enero de 1856 sufran las viudas descuento alguno.

2.° En el caso de que los apuros del Erario exigieran que el gobierno presentara el descuento gradual como ingreso de 1856, procurará que no grave á los interesados en mayor cantidad del producto del tanto por ciento sobre que recae la contribucion territorial.»

LEY DE 26 DE JULIO DE ID.

«Art. 1.° Se declaran de abono para los efectos de clasificacion y demás derechos pasivos el tiempo trascurrido desde el 20 de mayo de 1843 hasta fin de agosto de 1854, á los empleados en todas las carreras del Estado que fueron separados del servicio ó hicieron dimision de sus destinos por motivos pura y esclusivamente políticos desde la citada fecha de 20 de mayo de 1843, hasta fin de junio de 1844, y que durante los once años hayan permanecido en situacion pasiva, sin haber solicitado ni obtenido comision, destino ó cualquier otro cargo público lucrativo.

Art. 2.° Para aplicar esta declaracion, se tendrán presentes las disposiciones de las leyes de presupuestos de 26 de mayo de 1835, y 23 del mismo mes de 1845 en sus respectivos casos, á fin de no conceder derechos á los que por sus empleos no los tengan adquiridos con arreglo á aquellas disposiciones.»

REAL ÓRDEN DE 22 DE AGOSTO DE ID.

A consulta de la junta de clases pasivas y previniendo los fraudes que se suponen posibles en retrasadas reclamaciones de derechos pasivos, se resuelve:

«1.° Que esa junta no admita nuevas solicitudes para la declaracion de ningun derecho pasivo que proceda de la época mediada desde la publicacion de la ley de presupuestos de 1835 á la de 1845.

2.° Que para la admision de las que se contraigan al período trascurrido desde la última hasta 31 de diciembre de 1860, se señala el plazo improrogable de un mes, á contar desde la fecha de esta real disposicion.

Y 3.° Que se entiendan esceptuados de la misma los individuos á quienes comprendan las leyes de 26 de julio y 2 de agosto del presente año.»

Nota. La ley de 2 de agosto trata de recompensas á los deportados por consecuencia de los sucesos de 1848. Entre sus disposiciones hacen al presente artículo las siguientes:

«Art. 4.° A los que hubiesen sido empleados del gobierno antes de la deportacion, destierro ó emigracion, como á los que entrasen de nuevo en las carreras del Estado, solo en virtud de esta ley, se les abonará como tiempo de servicio el que medió desde la deportacion, destierro ó emigracion hasta su vuelta á la Península.

Art. 10. Se concede el término de cuatro meses desde la publicacion de esta ley, para que los interesados entablen sus solicitudes con arreglo á las instrucciones que publique el gobierno de S. M., teniendo á la vista los estados que obren en el espediente.»

REAL ÓRDEN DE 30 DE SETIEMBRE DE ID.

«Para cumplir lo mandado por la disposicion sesta de la seccion quinta de la ley de presupuestos, publicada en 23 de julio último, desenvolviendo su espíritu y facilitando su ejecucion sin perjuicio de los intereses de la administracion ni de las clases á que se contrae, he venido, de acuerdo con mi Consejo de ministros, en decretar lo siguiente:

Art. 1.° Las juntas directivas de Hacienda de las provincias ultramarinas, acordarán provisionalmente, cuando los interesados no prefiriesen acudir desde luego á la junta de

clases pasivas de la metrópoli, las clasificaciones de los empleados de aquellas, declarados por el gobierno cesantes ó jubilados, y el señalamiento de las pensiones de Montepío, remitiendo los respectivos espedientes á la revision y aprobacion definitiva de la citada junta de clases pasivas, por conducto de la direccion general de Ultramar.

Art. 2.° Los superintendentes delegados de Hacienda de Ultramar continuarán, como hasta ahora, con la facultad de decretar, bajo fianza, los pagos correspondientes á las clasificaciones y señalamientos á que se refiere el artículo anterior, que las juntas directivas acuerden provisionalmente con arreglo á las disposiciones que deban observarse en esta materia.

Art. 3.° Los acuerdos y resoluciones definitivas de la Junta de clases pasivas de la metrópoli, serán comunicadas á las autoridades de las islas por conducto de la direccion general de Ultramar.»

REAL ÓRDEN DE 16 DE OCTUBRE DE ID.

«Vistas las diferentes consultas elevadas por esa junta, el ministerio de Estado, la direccion general de contabilidad de Hacienda pública, varios gobernadores de provincia y las esposiciones de algunos empleados relativas á la inteligencia que á dicha ley debiera darse en determinados casos que no se creían comprendidos en la misma:

Considerando, que atendido el espíritu de la citada ley, el objeto con que ha sido publicada, y los abusos que ha tratado de corregir, es evidente que no afecta de ninguna manera á derechos legítimamente adquiridos, sino á concesiones hechas por pura gracia:

Considerando que conforme á este principio no puede reputarse como incompatible el haber que perciben las viudas ó los huérfanos por razon de Monte-pío, que les pertenece por derecho propio, por ser el capital del interés impuesto en aquel por sus causantes, con el que además perciben las mismas viudas ó huérfanos, y se les haya concedido por leyes especiales ó por el gobierno en cumplimiento de lo dispuesto en estas como premio de servicios estraordinarios:

Considerando que por el mismo principio no existe incompatibilidad entre el haber que se haya señalado por sus años de servicio á los militares retirados, y el que puedan disfrutar por el premio de constancia, ó por haber obtenido alguna cruz pensionada por los reglamentos militares, ni tampoco entre el sueldo que perciba en situacion activa un empleado, y la pension que en remuneracion de grandes servicios hechos al Estado se les haya concedido por una ley especial, como se ha verificado con los generales Lopez Baños, Odal y otros:

Considerando que asimismo no hay incompatibilidad respecto de los haberes que perciben los empleados cesantes á quienes se les ha nombrado para una comision ó cargo temporal, siempre que dichos haberes no escedan de los que disfrutaron en situacion activa, porque el sueldo de pasivo le perciben por derecho propio, y la diferencia hasta el que se les ha señalado por el servicio temporal que prestan en remuneracion de este mismo, que no podria exigírseles por solo el haber de la situacion pasiva:

Considerando que si estas comisiones temporales se confirieran á personas estrañas á la administracion, ó que no disfrutaran ningun haber de cesantía, sufriria el Tesoro un daño positivo igual al importe de los haberes pasivos que gozan los que actualmente las desempeñan:

Considerando, finalmente, que tampoco hay incompatibilidad entre el sueldo que percibe un empleado y el premio que las leyes de presupuestos ó los reglamentos é instrucciones, espedidas para su ejecucion, conceden á los mismos, como sucede entre otros á los oficiales habilitados de los gobiernos civiles para la espedicion de los documentos de vigilancia pública á indemnizacion del quebranto de moneda, ni debe existir respecto del sueldo de los jueces de primera instancia de las capitales de provincia, y la asignacion que además perciben por conocer de los negocios y causas de Hacienda, puesto que dicha asignacion se ha comprendido en

la ley vigente de presupuestos, no como un sueldo distinto, sino como aumento de aquel en razon del mayor servicio que prestan; la Reina (Q. D. G.) de conformidad con el parecer del Consejo de ministros, se ha servido resolver, que interin las Córtes interpretan de la manera que estimen mas acertada la ley de 9 de julio último, se declara la compatibilidad de haberes:

1.° Con respecto á las viudas, huérfanos y militares retirados, cuando además de la pension de Monte-pío ó de retiro disfruten otra concedida por ley especial ó por disposicion del gobierno autorizado por aquella.

2.° Entre el sueldo del empleado activo, y la pension que en remuneracion de servicios hechos al Estado, se le haya concedido por las Córtes ó por el gobierno legalmente facultado.

3.° En cuanto á los empleados cesantes á quienes se haya señalado sueldo por desempeño de un cargo ó comision temporal, cuando en el propio sueldo vaya embebido el haber pasivo, y no esceda del que disfrutó en su última situacion activa.

Y 4.° Entre el sueldo de un empleado activo y el premio que á algunos de ellos conceden las leyes de presupuestos, ó los reglamentos é instrucciones publicadas para su ejecucion.»

REAL ÓRDEN DE 11 DE DICIEMBRE DE ID.

«Se declara estar sujetos al descuento gradual establecido por la ley de presupuestos todos los haberes fijos que se satisfagan en virtud de nombramiento de autoridad competente, salvo los esceptuados por el art. 4.° de dicha ley de 23 de julio, y las asignaciones para gastos de residencia y representacion, los sobresueldos y demás emolumentos, que señalan los presupuestos á varias clases de funcionarios, sobre el haber de su destino.

LEY DE 21 ID. ID.

«Art. 1.° Son compatibles con el goce de los haberes que, al tenor de las leyes que rigen ó rigieren respecto á las clases pasivas, correspondan á los individuos pertenecientes á las mismas, las pensiones de gracia remuneratorias concedidas por leyes especiales á los propios individuos.

Art. 2.° Las pensiones otorgadas por leyes especiales, y en igual concepto que las antes espresadas, en favor de empleados en activo servicio, son asimismo compatibles con los sueldos que estos disfruten por los cargos que desempeñen.

Art. 3.° Son igualmente compatibles con los sueldos y haberes, tanto de las clases activas como de las pasivas, las pensiones que conforme al decreto de las Córtes Constituyentes de 12 de mayo de 1837 hayan sido declaradas comprendidas en cualquiera de las siete categorías que el mismo decreto espresa.

Art. 4.° Tambien son compatibles con los haberes que gocen los empleados cesantes, jubilados y retirados, las asignaciones que sobre dichos haberes concediese á alguno de ellos el gobierno, por razon de los cargos ó comisiones temporales que, cuando asi lo exigiere la conveniencia del servicio público, les confiera, siempre que el haber y la asignacion no escedan del sueldo mayor que disfrutó el individuo en situacion activa.

Art. 5.° Se consideran en el propio caso las asignaciones que se concedan á los mencionados individuos por las corporaciones provinciales ó municipules, por los servicios que prestan á las mismas.

Art. 6.° Son asimismo compatibles con los sueldos de empleados activos los premios, remuneraciones é indemnizaciones que en determinados casos les conceda la ley de presupuestos, ó con que el gobierno estime justo retribuirles por los servicios especiales y estraordinarios que prestaren.

Art. 7.° Tanto el importe de los espresados premios, remuneraciones é indemnizaciones, como el de las asignaciones de que tratan los artículos 5.° y 6.°; se cargarán cuando no tengan artículo determinado en la ley de presupuestos, á la partida de gastos imprevistos ó eventuales, ó á la de material, que figuren en los respectivos presupuestos

de los diferentes ministerios, dándose cuenta circunstanciada por estos á las Córtes, al presentarles el presupuesto general del año siguiente, de las cantidades aplicadas á los conceptos antes referidos, con espresion de los individuos en quienes se invirtieren, y las razones de necesidad ó conveniencia pública que para ello hubiere habido.

Art. 8.° El gobierno dispondrá lo conducente á que tenga debido efecto á la mayor brevedad lo prevenido en los artículos 1.° y 9.° del citado decreto de 12 de mayo de 1837.

Art. 9.° Queda derogada la ley de 9 de julio último en cuanto no está conforme con la presente.»

LEY DE PRESUPUESTO DE 17 DE ABRIL DE 1856.

«Art. 18 Desde 1.° de mayo de este año se exigirá un descuento del 13 por 100 de todos los individuos que perciban haber del Estado en la Península y Ultramar, incluso el clero, sea cual fuere la forma en que estos figuren en los presupuestos, esceptuando los cuerpos armados del ejército y de la marina, los carabineros del reino, el resguardo especial de sales, las viudas y las monjas en clausura.»

PARTE DOCTRINAL.

SUMARIO.

SEC. I. DE LA CLASE DE CESANTES EN GENERAL.
§. 1.° *Acepcion propia de la denominacion oficial y teórica de cesantes.*
§. 2.° *Orígen de la clase de cesantes.*
§. 3.° *Consideraciones generales sobre la clase de cesantes.*
SEC. II. VICISITUDES LEGISLATIVAS DE LA CLASE DE CESANTES.
SEC. III. CLASIFICACION Y SUELDO DE LOS CESANTES.
§. 1.° *Autoridades á las cuales ha competido y compete la clasificacion de los cesantes.*
§. 2.° *Computacion y abono de años de servicio.*
§. 3.° *Pension.*
SEC. IV. DESCUENTOS.
SEC. V. MEDIOS ADOPTADOS PARA DISMINUIR LA CLASE DE CESANTES.
SEC. VI. CASOS EN QUE SE PIERDE EL DERECHO DE CESANTÍA.
SEC. VII. DE LOS CESANTES DE DESTINOS DE ULTRAMAR.

SECCION I.

DE LA CLASE DE CESANTES EN GENERAL.

Antes de tratar de los derechos y gravámenes de la clase de cesantes, conviene precisar la acepcion oficial de la palabra, y esponer el orígen de la clase, reseñando al propio tiempo los inconvenientes y ventajas políticas de esta creacion, por lo que hace al Estado y á ella misma; segun lo verificamos en los párrafos subsiguientes.

§. 1.° *Acepcion propia de la denominacion oficial y técnica de cesantes.*

Los cesantes forman una de las clases comprendidas bajo la denominacion general de *clases pasivas*, llamándose así á los que cesan en el desempeño de un cargo público ú empleo civil en virtud de una medida puramente gubernativa, y sin que haya precedido á su separacion causa alguna justificada, bien de imposibilidad física ó moral, ó bien proveniente de falta ó delito en el desempeño de su cargo. En el primero de estos dos casos, al empleado que reuna las circunstancias que marca la ley, se le jubila con el haber á que le hagan acreedor sus años de servicio, y en recompensa de haberse inutilizado sirviendo al Estado: en el segundo se le separa sin la declaracion de *cesante*, y algunas veces, segun la gravedad de la falta, se le inhabilita para obtener en lo sucesivo cargo alguno oficial ó público. En ninguno de estos dos casos pertenece, el que es así separado, á la clase de cesante, porque en ambos media una causa que afecta perso-

nalmente al individuo de una manera favorable ó desfavorable, y acabamos de manifestar que para ello es preciso no exista causa alguna privada; sino otra genérica, como razones de conveniencia pública, ó reformas generales introducidas en algun ramo de la administracion. Cuando asi se procede á la separacion de un empleado ó funcionario público, medie en el acto, ó mas tarde, la declaracion de *cesante*, puesto que es necesaria (1); y tenga ó no derecho á haber como tal, el individuo que de esta manera cesa en el desempeño de su destino, es considerado como cesante y con opcion á los beneficios que las leyes le tienen declarados. Tales son los caractéres distintivos de la numerosa clase de cesantes.

Alguna vez se declara cesante á un empleado, y aun se añade la cláusula ordinaria de que la cesacion se entienda *con el sueldo y honores que por clasificacion le correspondan*; y suele suceder que acaba de entrar en la carrera de los destinos, y por tanto que nada le corresponde, ni puede corresponderle. Merece de ordinario esta declaracion, como que se dá, ó debe suponerse dada con conocimiento de causa, esto es, con vista del espediente y carrera del empleado, como un sarcasmo. Y sin embargo, no solo no es depresiva, sino honrosa; no es aérea; sino útil para los efectos oficiales; en oposicion á las *depresivas* y *perjudiciales* de *exoneracion*, *destitucion*, ó *separacion*, sin aditamento alguno favorable; y á la *perjudicial*, aunque no depresiva, de simple *admision* de *dimision* ó de *renuncia* voluntaria, ó por motivos de propia conveniencia. En todos estos casos, sobre la nota desfavorable que imprime la fórmula de la separacion, se pierde para derechos pasivos el tiempo servido; si despues, oidos los descargos, ó por pura espontaneidad del poder ejecutivo, reservándose, ó sin reservarse los motivos de justicia, ó de equidad que á ello le han movido, no sobreviene *rehabilitacion*. Otras veces la rehabilitacion viene del poder legislativo, ó por medio de una ley; de lo cual presenta infinitos casos el período de los últimos veinte años trascurridos, como es notorio, y aun volvemos á mencionar mas adelante. Hablamos de estas declaraciones y rehabilitaciones, porque solo por alguno de estos cuatro modos se fija la clase, y crean los derechos pasivos del cesante, y solo conforme á ellos puede tener lugar la *clasificacion* de haber: 1.° simple declaracion de *cesante* en la órden misma, ó decreto de cesacion del empleado: 2.° declaracion de que la cesacion, v. g., remocion, relevo, etc., cualquiera que sea la fórmula de esta, se entiende *con los honores y sueldo que por clasificacion le correspondan*: 3.° cuando esta declaracion, ó la de cesante se pueden subentender por los términos honrosos de la órden de cesacion, y cualquiera que sea tambien la fórmula de esta; como v. g. vengo en relevar á N. del cargo de.... en admitir la dimision, *etc.*, *quedando satisfecha del acierto, fidelidad, etc., con que lo ha desempeñado*, ó reservándome utilizar sus servicios, cuya fórmula tiene lugar en cuanto á los Ministros de la Corona, y empleados de primer órden; y alguna vez, aun respecto de empleados de órden inferior, como si en ello se confesara, y por tal medio se quisiera reparar, ó atenuar la injusticia, ó la violencia de la separacion: 4.° por rehabilitacion posterior del poder ejecutivo, espresando ó no la razon: y 5.° por declaracion ó rehabilitacion del poder legislativo, segun dejamos espuesto. Asi en estos últimos veinte años hemos visto declarados y rehabilitados los derechos pasivos de empleados destituidos, ó separados por motivos políticos, ó que de otro modo; pero que con tal causa, ú ocasion perdieron sus destinos de 1824 á 1836; de 1840 á 1843; de 1843 á 1851, etc.

En la definicion de *cesante* indicamos que lo ha de ser de empleos, ó cargos *civiles*, debiendo tomarse esta calificacion en oposicion á cargos *militares* ó *eclesiásticos*, en cuyas categorías no hay *cesantes*, propiamente dichos, si bien en la militar pueden considerarse como equivalentes, las clases y situaciones de *reemplazo*, y aun alguna otra. En lo eclesiástico no hay mas que jubilados, ó pensionados por imposibilidad.

(1) Real órden de 26 de agosto de 1857.

El presente artículo, en fin, se concreta á los cesantes de empleos de la administracion general del Estado; pues si bien los hay de otras muchas clases, como, por ejemplo, de casa real, de ayuntamientos, etc., se rigen por otras reglas, ó su derecho es puramente precario.

Véase aun el párrafo 2.°

§. 2.° *Origen de la clase de cesantes.*

Como consecuencia, que es, de las vicisitudes políticas á que viene sometido el pais, tiempo hace, ó de las reformas políticas y administrativas á que el mismo ha tenido que lanzarse, no siempre con la preparacion necesaria, la clase de cesantes es relativamente moderna entre nosotros, porque modernamente tambien hemos entrado en el camino de las reformas ocasionadas por los cambios políticos, y es de esperar que desaparezca pronto, conciliando á un mismo tiempo los fueros de una clase respetable por su desgracia y por su número, y la conveniencia y necesidades de la nacion, no poco perjudicada en sus intereses con la existencia de aquella. La primera reminiscencia que se encuentra en nuestra legislacion, no ya de los *cesantes* propiamente tales, porque esta denominacion es todavía mas moderna, sino de la clase de *reformados*, primer embrion de aquella, y á quienes posteriormente se vino á dar ese nombre, no se remonta mas allá de los últimos años del siglo pasado. Dió ocasion á su existencia y hasta á la denominacion especial que recibieron, la gran reforma rentística verificada por real decreto de 25 de setiembre de 1799, con el laudable objeto de simplificar la administracion, haciéndola mas económica y eficaz, y en virtud de lo cual se redujeron en las capitales de provincia á una sola las diversas administraciones especiales que hasta allí habia habido: se estinguieron en su consecuencia la direccion general de rentas, y la administracion general del tabaco en la Corte, juntamente con las administraciones, contadurías, y tesorerías de las provincias para las rentas provinciales, sus agregadas, las de salinas y demás: y se creó un solo centro general, del que se halló escluido gran número de empleados, que quedaron sobrantes y sin ocupacion. Aumentado poco despues el número de estos con algunas otras reformas parciales, y mas tarde con los repetidos cambios políticos, habiendo crecido hasta el punto que hoy conocemos todos, empezó por el hecho de cesar en sus destinos á llamárseles *cesantes*, siendo la real órden de 6 de julio de 1814 la primera en que hallamos usada esta palabra con su acepcion actual. No debió, sin embargo, tener una significacion bien fija, á pesar de haberse usado despues diferentes veces, cuando en real órden de 10 de junio de 1824, espedida por el Ministerio de Hacienda, y apropósito de la poca exactitud é igualdad con que se habia cumplido otra disposicion dictada sobre abono de sueldo á los cesantes, se alega por el ministro Ballesteros la razon de que «al »nombre de cesantes cada uno le ha dado la »interpretacion que ha creido mas justa.» Prueban tambien esto mismo otras disposiciones dadas por aquel tiempo, en las cuales, ó se esplica la palabra cesantes al usarla, ó se aplica conjuntamente con otra que dá idea de la primera. Asi en real órden de 13 de agosto de 1819, al señalar las dos terceras partes de su sueldo á los empleados, que con motivo de suprimirse la direccion general de reales provisiones quedaron *cesantes*, se añade despues ó *sin ejercicio*: en otra real órden fecha 30 de junio de 1823, al disponerse el abono de una mensualidad á todas las clases que cobran del Tesoro, se emplea la doble fórmula de *cesantes ó reformados*. Solo desde mediados del año de 1825 es cuando empieza á tener una acepcion fija la palabra cesantes, y cuando llega á emplearse con esclusion de los demás.

Para completar la idea, que es objeto de este párrafo, añadiremos en conclusion, que además de la clase de *reformados*, hubo otra análoga, durante el régimen absoluto, que puede enumerarse entre las que se han refundido en la actual de cesantes, y era la de los agraciados con *cédula de preeminencias*: empleados, que sin servir el destino por otra ocupacion en favor del Estado, por pura

Lorenzo Arrazola

gracia, por imposibilidad física, ó moral, por mejorar en este caso la jubilacion, ó atenuar la amargura, como *defuntoria*, que trae consigo, gozaban del sueldo y honores del destino sin servirlo. Véase CEDULA DE PREEMINENCIAS. En el dia, creada ya por la ley la clase de cesantes, los agraciados con tales cédulas, que no hayan procurado entrar, ó procuren, en la clase de cesantes, jubilados, ó pensionistas, segun su caso, habrán perdido su prerogativa y derechos.

§. 3.° *Consideraciones generales sobre la clase de cesantes.*

En buenos principios de administracion y de gobierno, la situacion de cesantes es una situacion completamente anómala, puramente accidental, y que solo puede sostenerse como medida de transicion á otro estado de cosas, normal y ajustado á las sanas doctrinas. Se comprende que un gobierno tenga el número de empleados necesario para llevar adelante la gobernacion del Estado y dar impulso á todos los ramos de la riqueza pública: se comprende que á estos empleados se les dote convenientemente segun la importancia de las atribuciones y conforme á los recursos del pais, porque esto redunda siempre en crédito del mismo, y es una garantía de moralidad para las clases que cobran del Tesoro: se comprende tambien que al empleado que ha consumido su salud y los mejores años de su vida, sirviendo al Estado, se le remunere, llegado el caso de inutilizarse para el trabajo, asegurándole una subsistencia decorosa y digna, como premio de sus servicios, de su laboriosidad, y hasta como interés del capital intelectual, que ha consumido en provecho de la sociedad. Todo esto se comprende y tiene una esplicacion natural y sencilla en buenos principios de administracion y de justicia, asi como la tiene el que al empleado que falte á su deber, se le separe, sujetándolo, si es necesario, á formacion de causa. Pero lo que no tiene esplicacion alguna, á no buscarla fuera de la esfera de lo razonable y de lo justo, es que al empleado probo, capaz y activo, que cumple exactamente con los deberes de su destino, que se halla todavía lleno de salud y de vida para llenar satisfactoriamente su cometido, que ha abandonado tal vez una carrera honrosa ó una profesion lucrativa, para dedicarse al trabajo, honroso tambien, de servir al Estado, se le separe de aquel servicio sin causa alguna especial ostensible, aunque se alegue la general, y por desgracia harto vaga, sino especiosa, de conveniencia pública, y como no se tenga la firme resolucion de volverlo á colocar inmediatamente que hayan cesado las circunstancias reales y positivas que motivaron su separacion temporal.

No hay necesidad de remontarse á elevadas consideraciones morales, políticas, ni económicas para demostrar el mal profundo que causa á la sociedad entera un hecho de esta naturaleza, cuando el mal desgraciadamente es á todos notorio, cuando se hace palpable todos los dias y á cada momento por los resultados, y cuando puede decirse sin exageracion es uno de los que mas eficazmente obran en contra de nuestra organizacion actual, siendo un verdadero cáncer que devora su existencia. En medio de todo, lo peor de semejante situacion no es el sistema presente, á pesar de su gravedad alarmante; es el porvenir que revela, de ir siempre en aumento y con caractéres cada vez mas imponentes y dignos de consideracion. De manera que un mal de facilísimo remedio, al que solo bastaria un poco de constancia, una voluntad firme, y verdadera abnegacion de parte de los que mandan; presenta el aspecto de interminable ó crónico: no se divisa su fin, al menos racional y prudente, ó hay que esperarlo violento, como lo tienen todas las cosas, cuando llegan á un término, en que hay que prescindir hasta de las codsideraciones de equidad y de justicia. Mientras la responsabilidad ministerial no se halle bien definida, mientras por una ley no se fijen clara y terminantemente los casos en que aquella debe tener lugar; el precepto constitucional será un precepto muerto, la autoridad ministerial continuará siendo cada vez

mas absoluta, la facultad de nombrar y remover empleados se ejercerá con menos cortapisa cada dia, la suerte de millares de familias será gradualmente mas precaria, y el mal que se deplora continuará en aumento, siendo parte especial de este la perturbacion administrativa. Solo llegando este último caso; solo imponiendo severas trabas á la facultad omnímoda, y como tal, absurda de disponer discrecionalmente del porvenir, y aun de la vida de tantos individuos, solo haciendo efectivo el pensamiento de no dar á nadie colocacion, mientras exista un solo cesante digno de servir, y cuya separacion fué por tanto injusta, ó inconveniente, disposicion tantas veces dictada y nunca llevada á cabo por falta de verdadera abnegacion y de energía; es cuando podrán enjugarse verdaderas y ardientes lágrimas, es cuando el Tesoro llegará tambien simultáneamente á verse libre de la carga insoportable que lleva sobre sí, mas insoportable todavía, si se considera la enormidad de la cifra y que esta representa tan solo gastos verdaderamente improductivos. Véase aun el artículo **CESANTIA**.

SECCION III.

VICISITUDES LEGISLATIVAS SOBRE PENSION Y CLASIFICACION DE CESANTES.

Mientras el número de cesantes no llegó á ser tan considerable, como es en la actualidad; mientras verdaderas y exigidas reformas causaron la separacion momentánea de algunos empleados, y se conservó el propósito de irles dando colocacion en las vacantes que fueran ocurriendo, como sucedió en un principio, la legislacion relativa á aquellos, que quedaban *sin ejercicio*, fué sumamente benigna y favorable á sus intereses. Mas que en el gravámen que pudiera resultar al Erario, entonces poco atendible, teniendo en cuenta el escaso número de los que se hallaban en semejante situacion, el gobierno fijó principalmente sus miras en la suerte que aguardaba á aquellos brazos arrancados de pronto á una ocupacion, si no estendia sobre ellos su mano protectora y benéfica. Y era propio de un gobierno previsor y justo semejante conducta, porque si hoy mismo, cuando á consecuencia de una medida económica ó política desaparece una industria, ó sufre alteracion considerable el ejercicio de ella, se marcan siempre ciertos plazos, ó se hacen algunas concesiones, para dar tregua á que los capitales empleados en ella reciban una direccion distinta mas conveniente, y á fin de no lastimar intereses creados; no es menos atendible y difícil que la de un fabricante ó empresario, la posicion del empleado, que hallándose de repente sin ocupacion, tiene que pensar en el giro que ha de dar á su propia industria y á su único capital, intelectual por supuesto, y eso durante el período, mas ó menos corto, en que el gobierno pueda reclamar de nuevo sus servicios; pues tal es precisamente la situacion del cesante, de espectativa, de inactividad, desde que la ley castiga al que no acude cuando es llamado. Asi es, que apoyándose tal vez en estas consideraciones, se vé por el primer decreto de 25 de setiembre de 1799 antes citado, que á varios de los funcionarios que por él quedaron sin ocupacion, se les deja con todo su sueldo hasta que tengan cabida en los nuevos destinos. Mas tarde, cuando fué mayor el número de reformados, ó cesantes, se les designaron por punto general las dos terceras partes del sueldo de su empleo, sin relacion á años de servicio (1), hasta que poco á poco, sin atenerse á una regla uniforme, fué dictándose para cada caso una resolucion especial, y puede calcularse, que no guardando todas las resoluciones grande analogía, la jurisprudencia que resultó seria por demás varia é inconstante.

Esto fué lo que motivó una real órden fecha 29 de julio de 1823, espedida por el ministerio de Hacienda, por la cual se ordenó instruir un espediente general, comprensivo de las órdenes y prácticas que entonces se hallaban en observancia, con el fin de establecer reglas ciertas y uniformes para el abono de sueldos á los cesantes, tomándose por nor-

(1) Real órden de 6 de julio de 1814, modificando varios decretos de las Cortes, entre ellos el de 25 de febrero de 1811.

ma los años de servicio de cada uno, y la importancia del empleo que se habia desempeñado. A consecuencia de dicha órden, las contadurías generales de valores y distribucion del indicado ministerio, y principalmente la direccion general del Tesoro, formaron varios proyectos, que despues de maduramente examinados, y de haber sido sometidos al Consejo de Estado, produjeron la real órden de 3 de abril de 1828, primera general sobre computacion de años de servicio y señalamiento de haber, y base de las demás que se han dictado mas tarde. En esta real órden, á pesar de decirse en su preámbulo que eran dolorosas algunas de las reglas propuestas al par que indispensables al órden de economías que se decretaba, y en efecto salian perjudicados en ellas los cesantes relativamente á lo dispuesto anteriormente; se observa, sin embargo, cuán beneficiosas eran á sus intereses comparativamente á lo que vino á establecerse siete años despues. Baste decir, que segun el art. 27, se designaba la cuarta parte de su sueldo á los cesantes, que *no hubieren contraido* diez años de servicio, siendo por lo tanto bastante un solo dia para adquirir aquel derecho que desde diez años hasta veinte se señalaba la tercera parte del sueldo, y que desde veinte años en adelante se abonaba la mitad, máximum de lo que se podia percibir en aquella situacion.

Pero llegó la ley de presupuestos de 26 de mayo de 1835, y atendiendo á las escaseces del Tesoro, son coartados de nuevo los derechos de los cesantes: segun las reglas 18 y 19 de dicha ley, para tener opcion á la cuarta parte del sueldo, es necesario contar quince años de servicio, ó doce siendo la cesantía por reforma; para la tercera parte diez y seis años de servicio, siendo por reforma, y para la mitad el que los años de servicio pasen de veinte. En la regla 29 de la misma ley, se dice que el gobierno propondria á las Córtes los destinos que debieran dar derecho en adelante á cesantías á los que entren de nuevo en ellos. Como consecuencia de esta disposicion, fué dictada sin duda la ley de presupuestos de 8 de junio de 1845, cuyo art. 3.° niega desde su publicacion derecho al goce de sueldo por cesantía á los empleados de nueva entrada, y no concede, á los entonces existentes, que puedan tomar por tipo el sueldo del mayor destino, como no lo hayan servido dos años por lo menos. Por la rápida reseña que acabamos de hacer de la legislacion general referente á los cesantes, puede observarse la exactitud de lo que indicamos al comenzar este párrafo: benigna y protectora de sus intereses en un principio; poco á poco han ido restringiéndose.

La simple declaracion de cesante, no basta para saber si hay ó no derecho á haber de cesantía: puede muy bien hacerse aquella declaracion, y sin embargo no tener, la persona á cuyo favor se hace, derecho á disfrute alguno de sueldo. Por eso, en las órdenes que se espiden declarando á uno cesante, suele usarse de la fórmula «con el haber que por clasificacion le corresponda», y añadirse cuando mas, si es por causa de reforma; porque esta circunstancia hace variar algun tanto el modo de computar los años de servicio, y consiguientemente el haber que debe abonarse. Es, pues, necesario que preceda esta declaracion; y solo desde que está hecha, es cuando la posicion del cesante es reconocida.

Diferentes son las comisiones y juntas que se han establecido, desde que por primera vez se creyó que debia darse á una oficina ó dependencia especial el encargo de clasificar á los cesantes. En real órden de 17 de abril de 1828, se nombró una comision temporal que tenia á su cargo señalar los años de servicio abonables á los cesantes y jubilados, prévia formacion de sus respectivas hojas de servicio, y espedirles certificacion del haber que les correspondia con arreglo á aquellos. Suprimida la anterior comision por el art. 3.° de la real órden de 20 de marzo de 1833, se dispuso que toda nueva clasificacion de empleados cesantes se hiciera por los jefes respectivos de los interesados. Poco tiempo despues, en 17 de octubre de 1834, se mandó que las clasificaciones de los empleados en rentas que quedasen cesantes en provincias se hiciera por las

contadurías principales de las mismas, y por la Direccion general de Rentas y la Contaduría general de distribucion las de los demás empleados pertenecientes á la administracion central y á los ministerios de Estado, Gracia y Justicia, é Interior. Esta real órden fué modificada en su primera parte por otra de 31 de enero de 1853, en la cual se dispuso que corria á cargo de la Direccion general de Rentas Provinciales la clasificacion de los que resultasen cesantes en las provincias: antes, sin embargo de que finalizara el año, en 24 de noviembre del mismo, se varió lo anteriormente dispuesto, y se dijo que la seccion de clasificaciones que estaba unida á la Direccion general de Rentas Provinciales, formara una oficina independiente de aquella. Pero dicha seccion fué sustituida en 29 de mayo de 1840 por otra junta titulada «de calificacion de derechos de los empleados civiles,» que á su vez fué suprimida por real órden de 1.° de setiembre de 1841, mandando que la clasificacion la hiciera la Direccion general del Tesoro, y mas tarde, por otra de 8 de julio de 1845 que creó otra junta especial. Asi continuó esta dependencia, tantas veces modificada y sin llegar á consolidarse nunca, hasta que por real decreto de 28 de diciembre de 1849 se creó la junta titulada de «Clases pasivas» que hoy subsiste, y cuyas atribuciones se esplican detalladamente en la Instruccion que con este objeto se espidió en 8 de febrero de 1850. A pesar de haber sufrido algunas modificaciones en su organizacion interior por real órden de 29 de diciembre de 1854, y real decreto de 31 de julio de 1855, sus atribuciones continúan siendo las mismas, y la indicada junta ejerce siempre la autoridad directiva y decisiva en los negocios pertenecientes á la calificacion y declaracion de derechos de los cesantes, y demás clases pasivas. A esta dependencia, por lo tanto, tienen que acudir los que se hallen en la situacion de cesantes y deseen obtener la declaracion del haber que les corresponda. Los documentos que deben acompañar segun el art. 45 de la mencionada instruccion de 8 de febrero, son los siguientes: 1.° fé de bautismo en forma legal, y á no ser posible su adquisicion, documento que acredite la edad del empleado al comenzar sus servicios: 2.° copias literales de todos los nombramientos para destinos que deban producir abono de tiempo al interesado: 3.° toma de posesion del primer empleo en propiedad, y de los sucesivos, si los nombramientos no guardan la debida correlacion y enlace: 4.° documentos que justifiquen la época y duracion de las cesantías, suspensiones ó cualquiera otra vicisitud que haya podido esperimentar en la carrera: 5.° copias á la letra de las hojas de servicio espedidas por las inspecciones generales de las diversas armas del ejército ó las licencias absolutas, si se trata de servicios militares que hayan de agregarse á los civiles; y 6.° hojas de servicios, por último, en que se comprendan todos los que hayan de computarse para la clasificacion de los interesados, y para la declaracion de la parte de haber que les corresponda:

§. 2.° *Computacion y abono de años de servicio.*

Lo primero que hay que considerar en la clasificacion de los cesantes es el abono de tiempo de servicio. En este punto deben tenerse en cuenta dos cosas: hay años de servicio, que aunque prestados en destinos de planta ó de nombramiento real, no son, sin embargo abonables, tales como los prestados antes de cumplir los 16 años (1), ó los 14, si es hijo ó huérfano de algun antiguo empleado (2). Hay otros de servicio que aunque legítimamente abonables no dan derecho á haber de cesantía por no partir de nombramiento real ó de las Córtes. Fuera de estos dos casos, la regla general respecto á abono de años de servicio, es la de que han de haberse prestado aquellos en destino, en propiedad de nombramiento real ó de las Córtes, ó en plazas de reglamento en que los jefes nombran por delegacion. Hay destinos, sin embargo, de real nombramiento, que no

(1) Art. 1.° de la Real órden de 20 de marzo de 1833.
(2) Art. 11 de la Real órden de 5 de abril de 1838.

dan derecho á cesantía; tales son los años de nuevos servicios posteriores á la ley de presupuestos de 1845, y algun caso de escepcion respecto de empleos y nombramientos que no atribuían derecho á cesantía; por no proceder de la corona, los reservó á su provision; pero declarando que no por eso serian de abono para obtener aquella. Véase, por ejemplo, la real órden de 14 de febrero de 1844.

Los años de servicio deben ser, por lo tanto, reales y efectivos para que puedan abonarse, quedando en este punto abolidas las escepciones personales (1): asi es que el tiempo de cesantía no es abonable mas que para las jubilaciones; pero circunstancias políticas y consideraciones de otro género han hecho que en varias ocasiones se hayan dictado diferentes medidas para abonar años en que realmente no se ha servido al Estado, ó que habiéndose servido, se habian declarado como de no abono. La real órden de 31 de marzo de 1834, y mas particularmente el real decreto de 30 de diciembre del mismo año, esplicado despues por otro de 4 de abril de 1835, declara abonable el tiempo trascurrido desde el 7 de marzo de 1820 al 30 de setiembre de 1823, sin mas que acreditar el interesado haber tomado posesion de su destino.

En real órden de 27 de febrero de 1837, se manda abonar á los empleados civiles el tiempo servido al gobierno intruso. En otra real órden de 28 de abril del mismo año 37, se dispone á favor de los empleados civiles, el abono por entero del tiempo de cesacion desde la reaccion del año 23 hasta que hubiesen obtenido colocacion por el gobierno absoluto. En 23 de diciembre de 1843, se dispone respecto á los empleados civiles el abono de doble tiempo á los que sirvieron en el ejército constitucional durante la campaña del 20 al 23, y se entable la escala gradual, lo mismo que respecto á los militares, de conformidad á lo resuelto para estos en las leyes de 2 de agosto de 1840, y 28 de igual mes de 1841. Por otra real órden de 19 de marzo de 1844, espedida por el ministerio de la Guerra, se considera como de servicio efectivo todo el tiempo transcurrido desde el 4 de junio de 1840; hasta el 15 de mayo de 1843 con respecto á los que fueron víctimas de las turbulencias políticas de aquella época. Por otra real órden de 28 de agosto de 1847, se abona como de servicio, á los empleados que fueron nacionales, todo el tiempo transcurrido desde que abandonaron su domicilio en la época del 20 al 23, hasta que fueron colocados ú obtuvieron rehabilitacion, con tal que hayan obtenido en tiempo oportuno el real despacho ó la cruz de distincion que les fué concedida, y que ingresaran en las carreras civiles antes del 1.° de junio de 1837. Finalmente, por la ley de 26 de julio de 1855, se declara como de abono para los efectos pasivos, todo el tiempo que media desde el 20 de mayo de 1843, á fin de agosto de 1854, á los empleados en todas las carreras del Estado que fueron separados ó hicieron dimision de sus destinos por motivos políticos, y que durante los once años han permanecido en situacion pasiva, sin haber solicitado ni obtenido comision, destino ó cualquier otro cargo lucrativo. Fuera de las disposiciones escepcionales de que sucintamente queda hecha relacion, para que sean abonables por regla general los años de servicio, es preciso, como queda dicho, que hayan sido prestados en destinos en propiedad con nombramiento real ó de las Córtes; en plazas de plantilla aprobada, en las cuales, aunque el nombramiento no proceda directamente de la corona ni de las Córtes, lo hacen los jefes por delegacion especial, y con autorizacion espresa. Tambien son de abono los servicios prestados por los cesantes en alguna comision ó cargo público, aunque sea con el carácter de interinidad y no se les designe sueldo; del mismo modo que los prestados en clase de auxiliares con sueldo, si para el nombramiento ha precedido real órden. La única modificacion que sufre la regla anterior, es la establecida por reales órdenes de 8 y 14 de febrero de 1844, segun las cuales, el nombramiento real no crea derechos pasivos, si las plazas en que aquel ha recaido, no daban ya por sí mismas opcion á aquellos

(1) Regla 46 de la Ley de 26 de mayo de 1855.

derechos, y son los que menciona el real decreto de 7 de febrero de 1827, en sus artículos 9 al 15, cuyo decreto hizo la clasificacion general de los empleados civiles.

§. 3.° *Pension.*

Otra de las cosas que hay que considerar en la clasificacion de los censantes, es la declaracion del haber que les corresponda. La base de aquella declaracion, es el sueldo del último destino desempeñado durante dos años completos, haciendo luego el cómputo de la mitad, tercera, ó cuarta parte por el número de años de servicio, admitidos como de abono. La limitacion de esta regla es que el *máximum* de pension que se puede disfrutar en clase de cesante, consiste en solo la mitad del sueldo, y esta mitad no puede esceder en ningun caso de 40,000 reales. Tampoco pueden acumularse para hacer aquella regulacion, las dotaciones, sueldos y emolumentos que vayan unidos á un destino (1): ha de ser precisamente el sueldo fijo asignado en la ley de presupuestos al destino que se ha desempeñado, teniendo en cuenta que por real órden de 20 julio de 1820, se han mandado cesar los sueldos personales. Por igual razon no cabe tampoco, á título de equivalencia de categorías, fijar por tipo para la designacion del haber que corresponda, un sueldo mayor del que se haya disfrutado, ni asimismo sirven para dicho tipo, conforme á la real órden de 16 de marzo de 1840, los destinos en que solo se disfrute un tanto por ciento de los productos de las rentas que se administren, porque, mas bien que como destinos, se consideran como comisiones, semejantes cargos en que no hay señalado sueldo fijo. Una vez hecha la designacion del haber de cesantía, que conforme á la legislacion existente será de una cuarta parte á los quince años de servicio y de una mitad á los veinte, siendo por separacion del destino; ó de una cuarta parte á los doce años, una tercera parte á los diez y seis, y una mitad á los veinte años, siendo por reforma; el individuo asi clasificado, adquiere el derecho al goce de sus haberes y empieza á percibirlos desde las fechas que se designen en las órdenes de la direccion general del Tesoro consignando el pago. Tales son las reglas que hay que tener presentes para la designacion del haber de cesantía.

(1) Real órden de 29 de abril de 1840.

SECCION IV.

DESCUENTOS.

De tres clases pueden considerarse los descuentos á que han estado ó están sujetos los cesantes: unos han sido decretados para hacer frente á compromisos de los mismos, tal como á pago de acreedores: otros para ir creando con ellos un fondo de reserva destinado al Monte-pío de oficinas ó de ministerio: otros, por fin, han sido exigidos por las necesidades del Erario, á los cuales unas veces se ha considerado como imposicion, y por tanto no abonables, y alguna vez se han acreditado en cuenta para ser exigidos en otra época en concepto de atrasos, y segun las reglas qne se han marcado para el caso. Los descuentos que proceden de la primera clase de los mencionados, es decir, para pago de acreedores particulares, no pueden esceder en ningun caso de la tercera parte del sueldo que disfrutan, considerándose las otras dos terceras partes de su mensualidad como alimentos necesarios á su subsistencia, y teniéndose por nulos cualesquiera convenios celebrados en contrario, que reprueba la real órden de 10 de mayo de 1850, al restablecer en su fuerza y vigor la de 8 de febrero de 1828, que por primera vez dispuso esto mismo.

Cuando el acreedor no es un particular, sino la hacienda misma, como sucede cuando al ajustar su cuenta á algunos de los que cobran sueldos del Erario, resulta salir alcanzado por haber recibido mas cantidad de la que le correspondia, se hace tambien la rebaja ó descuento de la tercera parte del haber sucesivo hasta cubrir el importe del descubierto, librándose íntegras por las oficinas las dos partes res-

tantes, pues no pueden hacerse á la vez dos descuentos por una misma causa.

El descuento que se hacia para el Montepío, sobre el que fundan su subsistencia las viudas y huérfanos, consistia en 18 maravedís por cada escudo de 10 reales, para todos los que servian en las secretarías de Estado, consejos y tribunales de justicia, el cual constituía el Monte-pío, titulado del ministerio, y de 8 maravedís tambien por escudo para los demás empleados en rentas, con aplicacion al Monte-Pío, titulado de oficinas: véase MONTES PIOS CIVILES.

Los cesantes han tenido épocas en que han estado sujetos á aquellos descuentos, y por eso es preciso hacer alguna indicacion, aunque ahora estén libres de ellos. En real órden de 18 de noviembre de 1828, se aprueba el descuento que se hace para Monte-pío, á los cesantes que no están clasificados, asi como el que no se haga descuento alguno á los que clasificados ya, y cuyos haberes quedan reducidos á lo que arrojan sus años de servicio: lo propio, aunque en términos diferentes, viene á decir la real órden de 25 de setiembre del mismo año. Suprimidos en el dia estos descuentos, tanto para la clase activa como para la pasiva, quedan los cesantes en este punto libres de ver disminuidos sus haberes por tal concepto.

Quedan, por último, los descuentos á que ha habido que acudir por los apuros del Tesoro. Unas veces los indicados apuros, han traido descuentos fijos, como sucedió con el establecido para los gastos de la guerra desde el 19 de setiembre de 1836 hasta el 31 de julio de 1842: otras veces, sin marcarse la entidad de los descuentos, ha producido el mismo resultado la irregularidad y considerable atraso con que se han verificado los pagos, si bien en este caso las mensualidades no percibidas á su tiempo, quedan abonadas en cuenta y forman un verdadero crédito contra el Estado. Regularizado despues algo mas el pago de haberes; pero no permitiendo todavía el estado del Tesoro satisfacerlos íntegro y puntualmente á las clases dependientes de él, hubo necesidad en los años de 1850 y 1851, de rebajar á los cesantes dos mensualidades en cada uno de aquellos, aunque con el carácter de abono en cuenta, y á satisfacer en la forma y época que determinan las leyes sobre arreglo de la Deuda pública. Véase DEUDA DEL PERSONAL. En el año de 1852, aunque la ley de presupuestos no dispuso rebaja alguna de mensualidades, como en los años precedentes, estableció, sin embargo, para los cesantes y demás clases pasivas un descuento fijo por *vía de imposicion* de un 15 por 100 equivalente á las rebajas de los dos años anteriores, y no abonable en cuenta para ser satisfecho en época alguna. En vez de este descuento fijo, se dijo por real decreto de 1.° de julio de 1853, que desde 1.° de enero siguiente fuese gradual para las clase pasivas dicho descuento, en igual forma que para los activos habia determinado el real decreto de 18 de diciembre de 1851, al poner en ejecucion el presupuesto de 1852. Por la ley de 9 de febrero de 1853, autorizando al gobierno para poner en planta el presupuesto del mismo año, se siguió fijando, con el mismo carácter de imposicion, un descuento gradual para todas las clases, incluso el clero, que empezaba con el 10 por 100 para los sueldos menores de 6,000 reales, y seguia progresivamente para los sueldos de mayor entidad. Finalmente, por el art. 18 de la ley de Presupuestos de 16 de abril del año actual de 1856, se determina que desde 1.° de mayo de este año se exigirá un descuento de 13 por 100 de todos los individuos que perciben haber del Estado en la Península y Ultramar, incluso el clero, sea cual fuere la forma en que estos figuren en los presupuestos, esceptuando los cuerpos armados del ejército y de la marina, los carabineros del reino, el resguardo especial de sales, las viudas, y las monjas en clausura. Por consiguiente, toda vez, que en las escepciones anteriores no se hallan comprendidos los cesantes, se deduce por los términos de la misma ley que el descuento á que actualmente están sujetos, es fijo de 13 por 100, cualquiera que sea su haber, y que este descuento no es reintegrable, pues no se espresan los términos en que deberia hacerse el abono en su caso.

Para el reintegro de los atrasos y de las mensualidades rebajadas ó aplazadas desde 1.° de mayo de 1828 hasta fin de diciembre de 1831, que es lo que constituye la deuda del personal, en la que se hallan interesados los cesantes, se han dictado diferentes disposiciones que por su importancia merecen un exámen especial y detenido que puede verse en el citado artículo de la DEUDA DEL PERSONAL. Baste decir en este lugar, que todos estos diferentes créditos se hallan sujetos á una liquidacion general, y que despues de practicada la particular á cada individuo, les serán satisfechos en títulos al portador sin interés, cuya aplicacion hasta ahora es la de poder ser admitidos por todo su valor como fianza de los empleados que necesitan prestarla, asi como en compensacion de débitos contraidos por los mismos empleados en el desempeño de sus destinos.

De propósito no mencionamos la cuestion relativa á la justicia de los descuentos, ora como imposicion, ora en otro concepto, lo que verificamos en otros artículos, como los de CESANTIA: CLASES PASIVAS.

SECCION V.

DIFERENTES ÓRDENES SOBRE COLOCACION DE CESANTES.

Diferentes son las medidas adoptadas para la colocacion sucesiva de los cesantes, siguiendo en esta parte el pensamiento reconocido por todos de lo conveniente que seria el que fuese estinguiéndose poco á poco aquella clase. Desde el año 1828, en que por primera vez fué organizada, con arreglo á un plan general, apenas ha pasado año, ni casi ministerio alguno, por efímera que haya sido su existencia, sin dictar alguna disposicion encaminada á renovar ó realmente á entretener, al menos por un momento, la esperanza, tantas veces perdida, de entrar alguna vez de lleno en una marcha leal, constante y sistemática que condujera al objeto deseado. No enumeraremos todas y cada una de las disposiciones dirigidas al indicado fin, porque sobre ser muy parecidas unas á otras, hasta el punto de repetirse las mas casi textualmente, formarian un catálogo demasiado largo, que sin embargo no dejaria otra impresion, que la muy penosa de ver que no han sido puestas en observancia. Señalaremos, no obstante, algunas de las que nos parezca mas notables, tanto para que se conozca desde cuán lejos viene el mal, como para que, pudiendo fijar la atencion sobre su intensidad, llegue alguna vez á aplicársele el oportuno remedio. Sin hacer mérito de varias reales órdenes espedidas desde el año 1820 en adelante, dando preferencia á los cesantes para colocacion, citaremos entre los mas terminantes el real decreto autógrafo, fecha 8 de marzo de 1828, escrito todo de puño y letra de S. M., en que encarga á los secretarios del despacho, haciéndoles resposables de su observancia, que no se dé colocacion á nadie, mientras haya un solo cesante de buena conducta, y que no se dé oidos á recomendacion alguna, *sea de quien quiera*. Despues de este real decreto se han dictado numerosas disposiciones, unas veces concediendo á los cesantes preferencia absoluta en la provision de empleos, otras veces determinando que de cada tres vacantes se provean en ellas dos, ó una mitad, y hasta una tercera parte. Como garantía de la aplicacion de una de esas disposiciones, la del real decreto de 7 de setiembre de 1849, en que se asignaba á los cesantes con sueldo de todas las carreras civiles, dos vacantes de cada tres que ocurriesen, distribuyéndose la otra tercera parte entre los empleados activos que debieran ascender, entre los cesantes sin sueldo y los aspirantes de nueva entrada, llegó á crearse con fecha 3 de junio de 1850 una comision temporal encargada de calificar la capacidad, conocimientos y demás circunstancias de los cesantes que aspirasen á ser colocados. Con fecha 30 del mismo mes de junio se dió una instruccion especial para la organizacion y gobierno de la anterior comision calificadora, y además se han repetido despues diferentes reales órdenes encaminadas siempre á que los cesantes sean preferidos en la provision de em-

pleos; pero una especie de fatalidad hace que no hayan tenido cumplido efecto, y que parezcan dadas únicamente para ser inmediatamente relegadas al olvido. Casi no puede inferirse otra cosa de la frecuencia con que se han sucedido, como suponiendo cada una la ineficacia, ó nulo resultado de la anterior. Y no se crea por esto que nosotros demos por resuelta la cuestion de que todo cesante, sin mas que porque lo es, y porque grava al Erario, debe ser empleado nuevamente. Es esta una cuestion que merece seguramente un ámplio exámen y toda la atencion del legislador; y nosotros, aunque no con la estension que reclama, nos hacemos cargo de ella en el artículo CESANTIA. Sobre el contesto de la presente seccion, pueden verse, además de las disposiciones en ella citadas, las siguientes: real decreto de 5 de enero de 1855: real órden de 23 de enero de 1855: real órden de 19 de enero de 1855:

SECCION VI.

CAUSAS POR QUE SE PIERDE EL DERECHO Á CESANTÍA.

Hemos mencionado anteriormente el modo de computar los años de servicio, y de realizarla la consiguiente declaracion de cesantía. Una vez declarado el haber á los cesantes, puede sin embargo quedar en suspenso su pago, y aun perderse definitivamente segun los casos. Se suspende el pago de haber de cesantía, conforme á la real órden de 2 de agosto de 1847, aclarada por otra de 7 de noviembre del mismo año, y la real órden de 8 de abril de 1854, por percibir otro haber del Erario, quedando obligado al reintegro el que, contraviniendo á quellas disposiciones, recibiera indebidamente cualesquiera cantidades, por razon de sueldos, pensiones, etc. Se suspende tambien el pago de cesantía, por permanecer en pais estranjero, donde no se permite disfrutar el haber sino durante cuatro meses improrogables, segun la regla 27 de las contenidas en la ley de presupuestos de 26 de mayo de 1835. Segun la real órden de 29 de diciembre de 1850, pierde el derecho de cesantía, entendiéndose que lo renuncia, el empleado que hace dejacion de su destino por conveniencia propia, ó por haber obtenido colocacion en la real casa y patrimonio, ó en algun establecimiento ó empresa particular. Del mismo modo pierden aquel derecho los empleados cesantes, á quienes el gobierno destina á un empleo igual ó mayor que el que anteriormente desempeñaron con carácter efectivo, y no lo aceptasen; pues en tal caso se entiende igualmente que renuncian su derecho. Cuando por cualquiera causa pierda un cesante temporalmente el derecho de percibir sus haberes; no puede volver á recuperarlo sin real habilitacion, y esta habilitacion se cuenta entre las atribuciones de la actual junta de clases pasivas, segun el art. 11 del decreto orgánico de la misma, fecha 18 de diciembre de 1849, confirmado mas tarde en esta parte por real órden de 20 de enero de 1852.

Es tambien una cuestion que merece tratarse, la facultad que el gobierno tenga ó deba tener para disponer de la persona y libertad de los cesantes; de lo cual nos hacemos cargo en el artículo CESANTIA.

SECCION VII.

DE LOS CESANTES DE DESTINOS DE ULTRAMAR.

A pesar de ser leyes especiales las que rigen en nuestras provincias de Ultramar, es muy pequeña la diferencia que existe, en punto á la legislacion sobre cesantes, con respecto á lo que se ha venido observando en la metrópoli. Comunicados allí desde luego, aunque no se han puesto inmediatamente en práctica, el real decreto de 3 de abril de 1828, y la ley de presupuestos de 26 de mayo de 1835 en lo que hace relacion á clases pasivas, lo mismo que el art. 3.° de la ley de presupuestos de 1845, casi puede decirse que la legislacion ha sido una misma, hasta que por el real decreto de 26 de octubre de 1849 se introdujeron algunas modificaciones. No obstante este decreto, y si se esceptúa el modo de computar el haber á los cesantes, y el descuento de 13 por 100

establecido por el art. 18 de la ley de presupuestos para el año actual de 1856, que la hace estensiva á Ultramar, introduciendo en esta parte alguna novedad respecto á lo que hasta aquí se ha venido observando; en lo demás ha quedado inalterable todo lo que hace relacion á abonos de años de servicio y al modo de adquirir y perder el derecho ó haber de cesantía. La alteracion mas considerable introducida por el citado decreto de 26 de octubre, consiste en lo dispuesto en su art. 3.°, acerca de que la base para fijar el haber de cesantía no ha de ser, como en la Península, el sueldo del mayor destino que se ha servido; sino el importe de las dos terceras partes de aquel, que se considerará reducido á 6,000 pesos, aunque realmente esceda de aquel límite, á fin de que en ningun caso esceda la cesantía de 40,000 reales. Hay que tener presente tambien que esta última disposicion ha sido alterada posteriormente respecto á los sueldos que no pasen de 1,000 pesos, á los cuales no se hace rebaja de la tercera parte al tratarse de computar el haber. Mucho tiempo hace que, tanto en la Península como para Ultramar, se está anunciando una ley general de clases pasivas, sin que llegue el dia de que esta necesidad se vea satisfecha. En ninguna parte, sin embargo, está causando y ha causado aquella tardanza mayores males al servicio que en las provincias de Ultramar. La interinidad con que desde el principio ha sido aplicada esta parte de la legislacion administrativa, y la aplicacion que en el particular se ha hecho de preceptos y máximas, que no son para aquellos paises, verdaderamente escepcionales, ha producido anomalías chocantes y creado intereses, contrarios en su mayor parte, no solo á la metrópoli, sino al buen gobierno de tan lejanos paises. Mientras pueda suceder, como sucede hoy, sin faltar á la ley, que un empleado que lleva algunos años de servicio en la Península, con solo obtener un destino en Ultramar por espacio de dos años, de los cuales puede todavía pasar uno en España en uso de real licencia, y algunos meses en el campo con permiso de la autoridad de la Isla; mientras pueda suceder, decimos, que este empleado adquiera derecho á cesantía ó jubilacion, tomando por base de estas situaciones los sueldos naturalmente crecidos que allí se disfrutan, aparte de honrosas escepciones, que las hay como en todo, y que nos complacemos en reconocer existen en mayor grado todavía de lo que debiera esperarse; un gran número de los empleados, que se resuelven á atravesar el Océano, no llevarán mas mira que la de adquirir derechos pasivos de consideracion á costa de un pequeño sacrificio, ó la de enriquecerse en poco tiempo, fundándose en ahorros que sueñan y que no pueden realizar. Sin embargo, si la abnegacion, el celo y el verdadero patriotismo son necesarios siempre en todo funcionario público, en ningun caso seria mas conveniente que les acompañaran estas circunstancias, que cuando pasan á prestar sus servicios á un punto, en donde desde el primer dia tienen fija sobre sí la atencion de los naturales, y la idea, que nunca deben los mismos perder de vista, de que por su dignidad y su decoro, se forma la del gobierno y del pais que les envian. Para conseguir este fin, nada mas apropósito que la publicacion de una buena ley general de clases pasivas, que desde luego llevaria ya en parte este sello, siendo dictada segun las exigencias de los puntos donde debe regir.

Dos palabras nada mas para concluir, acerca de las bases que deberian adoptarse para alcanzar aquel objeto, sin separarse demasiado en la esencia, de las que rigen en la Península. Hasta aquí los tres grandes inconvenientes de servir en Ultramar, que son los riesgos que lleva consigo toda navegacion, lo que acortan la vida abrasados climas ó poco saludables generalmente al europeo, y la carestía de los artículos de primera necesidad, todo se ha querido recompensar, y se ha recompensado de una misma manera, que es, aumentando los sueldos y consiguientemente los derechos pasivos á que sirven de base. Preciso es, ya que la esperiencia ha acreditado lo vicioso y perjudicial de semejante sistema, adoptar otro diferente, al par que mas filosófico, cuando

se trate de conceder derechos pasivos. En buen hora que donde las subsistencias son caras se aumenten proporcionalmente los sueldos, para que el empleado pueda vivir con decoro, y hasta con cierto desahogo, porque esta es la única manera natural de remediar aquel inconveniente: justo tambien que en aquellos paises, donde hay cierto número de funcionarios, que tienen que representar directamente al gobierno, se les conceda un sobresueldo para poder mantener su rango, y sufragará los mayores gastos de representacion. Pero todo esto deberia ser condicionalmente y mientras durasen las causas que motivaron aquel aumento, es decir, mientras el empleado continuase habitando el pais para que fué nombrado, ó desempeñando el cargo que llevaba consigo los gastos mencionados de representacion. En cuanto á los otros inconvenientes, que hemos hecho notar, que son los peligros de la navegacion, los del clima y los achaques que puedan contraerse acortando consiguientemente la vida, el medio natural y lógico de recompensarlos, y de atender á ellos, no es el aumento de sueldo; sino el de abono de años de servicio. Asi, como base de una buena ley, empezaríamos fijando los verdaderos sueldos, separando de ellos lo que no es tal, sino gastos representativos, con lo cual quedarian dentro de su verdadero límite. De esta manera, el sueldo de un intendente de Ultramar, por ejemplo, quedaría reducido á seis ó siete mil pesos, segun se creyese oportuno para guardar debida proporcion con los sueldos de los demás empleados de su ramo, y este sueldo seria el tipo regulador de sus futuros derechos pasivos. Una vez determinado el sueldo, al fijar el haber de pasivo, deberia ser tambien en la suposicion de que el empleado continuaba residiendo en Ultramar, que es, donde por considerarse las subsistencias mas caras, son mas altos tambien los sueldos; pues en el caso de hacer uso de la real órden de 1.° de junio de 1851, que faculta á los cesantes, jubilados y pensionistas para elegir el punto de residencia que les convenga, deberia quedar reducido dicho haber á peso sencillo por peso fuerte, ó á la cantidad que se juzgue mas proporcionada á la diferencia en el costo de los objetos necesarios. De adoptarse igual determinacion con los empleados activos en uso de licencia en la Península, seria mucho menos chocante el número de licencias que se pedian, y no se daria tan frecuentemente el escándalo de verse los destinos años y años servidos por sustituto, ó en comision. En cuanto al abono de tiempo de servicio, deberian tenerse presentes las tablas de mortalidad, aunque fueran solo aproximadas, de los respectivos paises, y algunas otras circuntancias que no hay necesidad de enumerar aquí; pero es indudable que por cada año de servicio efectivo prestado en Ultramar, no considerándose como tal el tiempo de licencia fuera del pais, ni el prestado en comisiones, fuera tambien del pais, si se ha disfrutado mayor sueldo por ella, deberia abonarse año y medio, dos años, y dos años y medio, segun la salubridad y la distancia de cada una de nuestras principales posesiones ultramarinas en el dia, que son Puerto-Rico, Cuba é Islas Filipinas. Con solas las tres modificaciones que se acaban de indicar, aunque en lo demás se partiera de las bases que se siguen en la Península, habria de salir muy mejorada la ley de clases pasivas de Ultramar, desaparecerian gran número de inconvenientes que hoy se tocan, y se reduciria el gravámen, en lo que tiene de inmotivado, que sufren las cajas de Ultramar, y el cual viene, como refractando, á producir su efecto sobre el Tesoro de la Península que percibe aquello de menos.

Véase CESANTIA: CLASES PASIVAS: CLASES PASIVAS (*Junta de*): CLASIFICACION: DERECHOS PASIVOS: EMPLEADOS. Véanse tambien en la parte legislativa las disposiciones relativas á Ultramar.

APÉNDICE.

En prensa ya el presente artículo, para evitar dudas en la aplicacion de la ley de 26 de julio de 1855, sobre abono de tiempo á los

empleados separados del servicio, ó que hicieron dimision de sus destinos desde el 20 de mayo de 1843, hasta fin de junio de 1844, por causa política, se ha hecho la declaracion de que en caso de duda, se repute política por la Junta de Clases pasivas la causa de separacion ó dimision.

Además de las multiplicadas disposiciones insertas ó citadas en este artículo, como documentos históricos é instructivos en la materia; y algunas de ellas como fundamento ó precedente de disposiciones posteriores, podrán consultarse las siguientes en su tenor:

Decreto de Córtes de 2 de diciembre de 1810, sobre el mayor sueldo de los empleados.

—De 23 de febrero de 1811, sobre sueldos de cesantes y jubilados.

—De 4 de julio del mismo.

—De 22 de id. sobre empleados de Ultramar.

—De 28 de marzo de 1812, sobre descuentos.

—De 10 de noviembre de id., sobre abono de sueldos á los empleados de contaduría de propios, pósitos y otros, removidos por el gobierno constitucional.

—De 23 de junio de 1817, sobre abono de sueldo y toma de posesion.

—De 16 de agosto de id., sobre retirados militares, que sirven empleos civiles.

—De 2 de setiembre de 1820, sobre eclesiásticos, que sirven empleos civiles.

—De 3 de id., sobre cesantes y jubilados.

—De 9 de noviembre y 19 de diciembre de 1824, sobre sueldo de impurificados.

—De 29 de abril de 1825, sobre empleados de Ultramar, que sirven en la Península.

—De 21 de mayo de id., sobre sueldo de impurificados, y otra de igual fecha sobre sueldo de cesantes, que han de rendir cuentas.

—De 8 de agosto de id., sobre sueldo de militares, que sirven á la Hacienda.

—De 12 de febrero de 1826, sobre abono de sueldo á los cesantes despues del 7 de marzo de 1820.

—De 20 de julio de id., sobre sueldos personales.

—De 28 de agosto de id., sobre descuentos.

—De 30 de marzo y 6 de agosto de 1829, sobre sueldo de cesantes que sirven interinamente.

—De 24 de diciembre de 1831, sobre sueldo de cesantes.

—De 13 de junio de 1833, para que ningun empleado disfrute mas de un solo sueldo.

—De 28 de enero de 1836, sobre sueldo de militares que sirven empleos civiles.

—De 10 de abril de id., sobre sueldo de empleados separados por las juntas.

—De 12 de junio, sobre sueldo de cesantes, que sirven en comision.

—De 15 de id., sobre privacion de sueldo á los funcionarios separados por inmoralidad, negligencia, etc.

—De 1.° de octubre, sobre sueldo de empleados, que residen en el estranjero.

—De 14 de id. sobre que el sueldo regulador sea el que por planta está señalado á los destinos, y no el que tuvieron cuando se sirvieron.

—De 30 de abril y 23 de agosto de 1837, sobre abono de sueldo á empleados separados por las juntas.

—De 30 de setiembre, sobre reclamacion de abonos de la época constitucional.

—De 17 de mayo de 1839, sobre abono á empleados prisioneros por las facciones.

—De 8 de setiembre, sobre abono de sueldos á empleados nombrados, ó suspensos por las juntas.

—De 9 de diciembre de 1844, sobre sueldos de eclesiásticos, que sirven empleos civiles.

—De 2 de agosto de 1847, sobre incompatibilidad de sueldos.

—De 17 de setiembre de 1849, sobre abono á empleados de Ultramar, desde el dia en que se embarcan.

—De 26 de octubre, sobre incompatibilidad de sueldos de empleados de Ultramar.

—De 3 de enero de 1850, sobre percepcion de sueldo de los empleados que se embarcan para Ultramar.

—De 1.° de febrero, sobre la época en que empieza el mayor sueldo para los empleados ascendidos.

Lorenzo Arrazola

—De 21 de marzo, sobre sueldo y pensiones devengados de 1823 á 1840.

—De 25 de octubre, sobre la fecha en que empieza á correr el sueldo de empleados activos y pasivos.

—De 13 de mayo de 1851, sobre la época en que empieza á correr el aumento de sueldo de empleados de Ultramar.

—De 21 de setiembre, sobre sueldo fijo de jueces de primera instancia y promotores.

—De 18 de diciembre, sobre descuentos establecidos por la ley de presupuestos de 1852.

—De 20 de junio de 1852, sobre plantilla de sueldos de empleados del órden judicial.

—De 1.° de julio, sobre residencia en la Península y cobranza de sueldos de empleados de Ultramar.

CESANTIA. *La situacion pasiva* del empleado público *sin ejercicio* de su propio empleo, llamado por eso cesante: la pension ó *haber* á que el mismo tiene derecho por tal concepto. Reuniendo las dos acepciones resulta, que *cesantía*, como teoría, es la estraña institucion administrativa de *empleados sin destino; pero con sueldo.*

La sola enunciativa previene contra la institucion; y sin embargo hay una cosa aun mas disonante, mas funesta, mas reprobable que ella; y es la facilidad, de todo punto arbitraria, de *hacer cesantes*: facilidad tan vituperable, tan ruinosa y pertubatoria, que con ser tan gravosa, y administrativamente tan repugnante la *cesantía*, en contraste con el abuso que le dá existencia, se presenta, sin embargo, como conveniente, moral, y justa.

En el artículo anterior hemos tratado de esta creacion; mas bien, de esta necesidad y calamidad de los tiempos modernos; si no se dijera mejor de las revueltas políticas, del abuso y del desgobierno; y sin embargo, es tal su importancia, que merece le dediquemos aun algunas consideraciones. Por otra parte en el artículo anterior hemos tratado principalmente de los *cesantes*, de la *clase*; ahora de la *institucion*: allí como hecho y cuestion personal de derecho *constituido*; aquí como teoría administrativa, y por tanto cuestion de derecho *constituyente*.

La cesantía en tal concepto, como medida reparadora de violentas injusticias, como remedio temporal de males irrogados por la acervidad de los tiempos, ó por el arbitrio mas vituperable y despótico, no á una ó algunas personas; sino á clases enteras y numerosas: como atenuante, en fin, de desaciertos lamentables, ó de punibles abusos, la cesantía decimos, reducida asi á un hecho transitorio, pierde su gravedad trascendental, como mal económico, y que revela por otra parte rudas perturbaciones, ó un completo desgobierno. Revistiendo además ese hecho el carácter de reparacion de males inmerecidos; si no fuera plausible, seria tolerable; pues hablan en su favor lo irritante del desafuero, la injusticia del agravio, y hasta la conmiseracion de los atropellados. De aquí la indignacion, cuando por una medida injustificable se reducen en un momento á la mendicidad clases numerosas, y á la administracion pública al caos, al desacierto, á una inevitable anarquía: de aquí tambien el sentimiento general de compasion, cuando la cesantía se considera por parte solo de las víctimas, del probo y esperto funcionario, lanzado desapiadadamente á la miseria, y con él á su inofensiva familia.

Pero la *cesantía*, como teoría administrativa y de gobierno; como hecho permanente; como *institucion* y parte esencial de nuestro derecho público, es insostenible; económica y moralmente funesta; reflejo por otra parte de un estado lamentable y habitual de perturbacion política, ó de completo desgobierno.

Y en efecto: solo bajo tales supuestos y situaciones es necesaria una medida permanente de reparacion, porque tambien en ellas son permanentes; siquiera se sostenga que son inevitables, la violencia y la injusticia en el sentido del presente artículo; y puesto que en la moderna civilizacion y teorías sociales es preciso admitir, como siempre, y aun con mas verdad que nunca, que los Estados no subsisten ni se perpetúan sino por la justicia. La *cesantía* es, pues, justa; mientras sea *necesaria*. Los esfuerzos de la administracion, por tanto, han de encaminarse, y es preciso se encaminen de un modo perentorio en el mismo grado

en que el mal es grave; y lo es hasta el punto de que, aun siendo *justo*, empieza á ser *insoportable*; á no tener tal vez otro remedio, que el de aumentar y hacer mas solemne la injusticia; eliminando á sabiendas su remedio; los esfuerzos, decimos, de la administracion, han de dirigirse en este estado de cosas, no á combatir la *cesantía*; sino su *necesidad*: lo cual conduce, necesariamente tambien, á examinar la causa incontestable de aquella; ya antes indicada, esto es, nuestra situacion política, y administrativa, y del sistema; y mas bien; pues que la cuestion es en gran parte de abuso, mas que de teoría, la marcha de nuestros gobiernos en la última media centuria.

En el artículo *cesantes* hemos manifestado que el principio, y como embrion de esta clase de las pasivas, empezó con la de *reformados* ó excedentes, á fines del siglo anterior. La cesantía tuvo entonces un fundamento justo y moral: é inculpable tambien, porque no procedia de abuso: este en tal caso resultaria de la prolongacion de la situacion pasiva, pues funcionarios que habian merecido bien del Estado, debian ser empleados luego en su servicio activo en otros ramos análogos. La clase por otra parte era entonces poco numerosa, y aun supuesto el abuso, era este poco gravoso al Erario.

Pero bien poco despues el sistema de *cesantías* recibió desarrollo y tomó su verdadero carácter. Desde entonces se nos presentará siempre como consecuencia de perturbaciones políticas, de desgobierno, voluntario ó necesario: nacida de abuso punible, ó de las circunstancias: como instrumento tambien y resultado de rencores y venganzas, de prevenciones y pasiones políticas. Desde aquí la *cesantía* se presenta al criterio del legislador, bajo dos puntos de vista: como *hecho* reparador, autorizado por la necesidad en parte; y siempre por la justicia, por la conveniencia de no lanzar al empleado activo en vías inmorales, á la sola idea de la inseguridad de su destino, y de su desamparo, tal vez de la indigencia despues, como castigo de su pureza: y como hecho *que debe cesar*; pero *que debe regularizarse, mientras subsista.*

En el primer concepto, como hecho reparador, el orígen de la cesantía propiamente tal, lo hallamos en la época, en parte constitucional, de 1810 á 1814. En ella eran casi inevitables las separaciones violentas de empleados; tanto como justa, ó equitativa la atenuacion de la violencia. La segunda época es la de 1814 á 1820: la tercera de 1820 á 1823: la cuarta de 1824 á 1836: la quinta de 1836 á 1838: la sesta de 1838 á 1840: la sétima de 1840 á 1843: la octava de 1843 á 1854: y la novena de 1854 hasta que esta época política, que es la actual, sea reemplazada por otra opuesta; y esta á su vez por una série de ellas, opuestas entre sí, y cuyo término no seria fácil prefijar. En todas ellas se vé la *reaccion alternativa*, con todos sus incidentes inseparables de perturbacion, de abuso, de pasion, de venganza, de desgobierno: convertida en instrumento, funestamente fecundo, de *cesantías*, en el doble sentido de este artículo; como *situacion pasiva*, con su violencia, y su injusticia; y como *haber*, pension, ó sueldo *reparador*.

Tres caminos se ofrecen en esta situacion aflictiva al legislador, al gobernante previsor, al hombre político, llamado á regir los destinos de la nacion: poner término á la necesidad de la cesantía, como medio reparador: continuar el sistema de cesantía y el Tesoro se abruma cada vez mas: suprimir de todo punto los derechos pasivos de cesantía, lo cual, subsistiendo siempre la causa, es lo mismo que preconizar el sistema de *injusticia* permanente *sin reparacion*.

El primero de estos medios es el adecuado y conveniente. Pero ¿quién pone límites, ni en la intensidad, ni en el tiempo, al vértigo político, que viene agitando años hace al pais, y cuyo término no se alcanza? ¿Quién estingue de pronto los ódios políticos, las exigencias de los partidos, y de los tiempos, los impulsos de reaccion, que siguen siempe á las oscilaciones políticas? ¿Quién atinaria á formar, y hacer eficaz una ley, que contenga al arbitrio ministerial, que enfrene á un tiempo la ambicion y el nepotismo? ¿Quién imprimirá tal cambio en las costumbres públicas, que la empleomanía sea de pronto reempla-

zada por el apego al estudio, al trabajo, á otro género de ocupaciones lícitas, y honrosas; pero modestas, y tal vez penosas; la intriga por la probidad y respeto al mérito; la inmoralidad por la virtud contraria? ¿Quién, en fin, organizará, de pronto tambien, y con tal fijeza la administracion, quién cambiaria hasta tal punto los hábitos de gobierno, que sean á un tiempo innecesarios, é imposibles los cambios violentos é irresponsables del personal de empleados; asegurando á la aptitud, á la laboriosidad y providad el premio de la continuacion; hasta llegar al término de un retiro, ó jubilacion honrosa? ¡Trazamos sin duda un cuadro de imposibles! Sin embargo, el mal inmenso, que deploramos, no tiene otro remedio radical.

El segundo medio de los propuestos, en vez de un remedio, es un mal, es la continuacion del que ya subsiste. El tercero, además de ser un mal, es un escándalo; el escándalo de dejar sin base, de despojar de las mejores condiciones á la administracion, de sancionar la irreparacion de la injusticia. En este camino se ha entrado ya, tal vez porque no se halla otro posible: ha empezado á suprimirse el sistema de cesantía; y tal es la magnitud del mal; tal es ya lo gravoso de este sistema, que hace mirar el opuesto como bueno, sin eliminar su necesidad; lo cual no es realmente sino sustituir un mal á otro, el mal de la administracion al mal del Erario; con la circunstancia desventajosa además, de que ese bien aparente adormece y aquieta, para no emprender con valor y energía el remedio radical.

Pero, si fatalmente este se reputa imposible; aun cuando él conduciria á eliminar sin injusticia; antes con justicia y ventajas, el sistema, que aun siendo cesantes los que esto escriben, llamaremos funesto, de cesantía: si huyendo del mal de su supresion, sin eliminar su necesidad; hubiese de correr por algun tiempo, ó tal vez indefinidamente dicho sistema, entonces debe regularizarse, atenuándose asi los daños que ocasiona; ya que el medio único y eficaz de prevenirlos, es tal vez un medio indirecto; mientras los directos, el de mejorar de pronto las personas y las cosas, no lo permite la rudeza de los tiempos; y el de suprimir la *cesantía* sin suprimir los cesantes, la supresion de la reparacion sin evitar las víctimas, lo repugnan la moral, la política, y la justicia.

En tal hipótesis, en la de continuar el sistema de cesantía, por poco, ó por mucho tiempo; poniéndose en todo caso en esto último, bien porque irresistibles razones de justicia obliguen á conservarlo; ó suprimido, hagan restablecerlo; mientras no se estinguan ó eliminen las causas que lo hicieron, y continúan haciéndolo necesario; es menester, decimos, regularizarlo, despojarlo de sus inconvenientes; hacerla servir á los fines de la administracion; compensar con el mejor servicio el gravámen del Tesoro. Hé aquí algunas de las reglas que podrian contribuir á resolver este difícil problema.

1.ª La facultad de separar empleados con declaracion de *cesantes*, no será absolutamente arbitraria. Una ley determinará en el particular lo conveniente, conciliando la libertad de accion que necesita el gobierno, y las garantías de estabilidad que conviene á la administracion pública, y á la moralidad administrativa, tengan los empleados. Asi las últimas constituciones políticas han hecho compatibles la facultad constitucional del gobierno para nombrar y remover empleados, y la inamovilidad de jueces y magistrados: es decir, que es un hecho histórico y jurídico entre nosotros, que la omnímoda libertad del gobierno en el punto en cuestion, se puede coartar, sin destruirla; y que pueden darse garantías á los empleados, sin destruir la necesaria y conveniente libertad del gobierno. No se deduce de ello que á todas las carreras pueda aplicarse una misma regla. La carrera militar, la judicial y la de destinos rigorosamente políticos serán siempre una especialidad, una escepcion entre las restantes. Tambien lo serán en su género las diversas carreras facultativas, que necesitando mas preparacion y sacrificios que otras, necesitan, por lo tanto, mas aliciente y garantías de futuro para emprenderlas.

2.ª El derecho de cesantía no se considerará como una gracia, sino como un derecho del empleado. De donde se sigue que el gobierno no será árbitro de concederlo, ó rehusarlo; sino que la ley tendrá determinado en qué casos procede y en qué casos se pierde. Síguese asi bien, que ni el gobierno, ni el poder legislativo podrán gravarlo, suspender su cumplimiento en proporcion con las demás cargas del Estado, ni imponer descuentos. En otro caso, no teniendo la cesantía el carácter de *derecho*, quedan frustrados los fines políticos de su creacion, y que pueden hacerlo tolerable, ó menos gravoso, á saber, el servir de estímulo y garantía para que el empleado público se consagre con mayor asiduidad, seguridad y decision, al cumplimiento de un deber, garantido contra las sugestiones de la inmoralidad, de la esperanza, y del temor de un porvenir de miseria y desamparo, respecto de él, y de su inofensiva familia.

3.ª El derecho de cesantía, sin embargo, no será absoluto, sino *hipotético*, y con *restricciones* en favor del Estado, encaminado uno y otro á atenuar el gravámen del Tesoro.

Por el primer concepto se entiende, que el sueldo de cesantía no se concederá, ni devengará, sino en cuanto sea necesario, como medio reparador de perjuicio personal inevitable en las carreras públicas, y como razon de decoro por parte del Estado, hácia los que se han dedicado á servirle, lo han hecho con pureza é inteligencia, y han consumido, tal vez, su juventud y parte de su fortuna para prepararse á ello.

Síguese de aquí, que el sueldo de cesantía es justo, moral y político, y en tales conceptos conveniente al Estado mismo, mientras su necesidad no sea reemplazada con mayor seguridad, y garantías sólidas é indubitadas de estabilidad del empleado; y mientras este, arrancado violentamente de su destino, haya de deshonrar al Estado, y servir de escándalo y desaliento á los demás empleados, y por tanto, de incalculable perjuicio á la administracion pública, entregado desapiadadamente con su familia á la miseria y al desamparo, por el Estado mismo á quien servia. Síguese asi bien, que el cesante no podrá acumular otros sueldos del Estado al que goza por cesantía, que por el hecho perderia la cualidad de necesario, como medio de reparacion y de decoro público.

Esto en cuanto á la índole de derecho *hipotético*: en cuanto á la otra cualidad de derecho, no absoluto, sino con *restricciones* en favor del Estado; el cesante deberá estar pronto á desempeñar las comisiones, cargos y servicios interinos que el gobierno le encomiende, toda vez que no deprima su categoría, que es parte de sus derechos justamente adquiridos. La ley determinará lo necesario para que esta obligacion del cesante no se convierta en medio de arbitrariedad, ó de venganza en manos del poder ejecutivo para imponer al cesante violentas mutaciones de domicilio; que obligándole tal vez á renunciar la cesantía, fustren los fines políticos de la ley al establecerla por bien de la administracion y decoro del Estado.

4.ª Considerado el sueldo de cesantía como derecho, se tomará en cuenta al prefijar los sueldos de los destinos públicos, de donde nacerá el atenuar el gravámen del Tesoro con crecidos sueldos, y el hacer por otra parte mas sagrado aquel derecho.

5.ª La ley, y la ley sola, establecerá la escala proporcional de haber de cesantía, segun el número de años de servicio del empleado reducido á esa situacion, y la calidad del empleo, consultando en ello siempre las dos razones indicadas de necesidad y de decoro público.

6.ª La ley fijará tambien los casos en que se pierde el derecho de cesantía, una vez concedido por el poder ejecutivo, y en qué casos tambien puede rehabilitarse como *cesante*, al que sin esa declaracion fué *destituido, separado, exonerado*, etc., con formacion de causa ó sin ella.

Proclámase de ordinario, como un medio de atenuar los gravámenes de la cesantía, la nueva colocacion esclusiva ó preferente de cesantes: recurso vulgar, de popularidad efímera de ordinario, pues nunca se vé que lo

Lorenzo Arrazola

realicen los que lo proclaman; y que solo podria ser precepto legal ó principio teórico estando regularizada la administracion; en cuyo caso el medio indicado es ocioso, pues no habria cesantes. Regularizada la administracion, no serán nombrados empleados públicos sino los que lo merezcan: serán respetados en sus puestos, porque no será arbitrario en el poder ejecutivo el removerlos: si á pesar de ello los removiese alguna vez; entonces la nueva colocacion era de toda justicia, pues contra ella, por abuso y punible arbitrariedad habria sido arrancado de su destino. Pero mientras la administracion es un caos; mientras se *busque el destino para el hombre*; y no el *hombre para el destino*; mientras las turbulencias políticas, ó el estado de perturbacion de un pais obliguen á colocar á los que debian encausarse y condenarse, si ya no están condenados; es por demás aventurada la teoría de la colocacion esclusiva de cesantes, removidos tal vez por ineptitud; y tal vez tambien haciéndoles favor en ello, pues merecian mas severa demostracion. En todo caso el mejor remedio contra los gravámenes de la cesantía, es el no hacer cesantes; y el mejor remedio para no hacerlos, es el no ser necesario ni posible lo primero, porque esté regularizada la administracion y prefijadas las cualidades de los candidatos para empleos; la segunda porque esté regularizada asi bien la accion del poder ejecutivo. Véase CESANTES: CLASES PASIVAS: EMPLEADOS.

Hasta aquí el derecho constituyente, la lógica de los principios. Por derecho constituido, sin embargo, cediendo ante el clamor general, ante las urgencias, siempre crecientes, del Tesoro, defiriendo mas allá de lo justo á lo que parece popular, se dictó la real órden de 31 de julio de 1843, que si no la esplicasen las circunstancias, se reputaria inconcebible en buenos principios de administracion. «El gobierno de la nacion, dice, en nombre de S. M. la Reina doña Isabel II, respetando los derechos adquiridos por los empleados, y deseando *poner coto* á los males que la *arbitrariedad* y *los abusos puedan* ocasionar al Tesoro público, siempre apurado, no obstante los sacrificios de los pueblos, ha venido en decretar: Que desde el dia de la fecha *todos los nombramientos* que se hagan *por el ministerio de la Gobernacion* de la Península en cualquiera de sus dependencias, y sin escepcion alguna de categorías ni clases, se entiendan sin derecho á cesantía, *jubilacion ni otro gravámen del Erario.*»

Los *abusos* que se invocan para justificar esta resolucion, no están en la esencia del derecho inmemorial y justísimo de *jubilacion*: tampoco en los servidores del Estado, que no se *clasifican* á sí mismos: estarán en la *administracion*, en el gobierno; y era por tanto la administracion la que debia corregirse en vez de castigar á sus buenos servidores. Las jubilaciones son por otra parte uno de los derechos pasivos contra los que menos se ha clamado: su supresion es ciertamente una medida administrativa inusitada. Reune tambien el establecer una repugnante desigualdad entre los servidores públicos de un mismo Estado, pues, mientras los de Gobernacion quedaban destituidos de todo derecho pasivo, los de las clases restantes continuarian en la plenitud de ellos; mientras los unos quedaban hasta sin jubilacion, los otros continuarian hasta con el derecho de cesantía.

La ley de presupuestos de 1845 confirmó en parte; pero corrigió en lo mas violento la anterior resolucion, suprimiendo para en adelante las cesantías, pero en todas las clases en general, y respetando las jubilaciones, en los términos que pueden verse en la parte legislativa del artículo CESANTE.

Hay una cesantía que constituye especialidad, y es la de los ministros, consejeros responsables de la corona. V. su artículo.

Una especialidad es y debe ser tambien la cesantía de empleados de Ultramar; pero la ley la tomará en cuenta; en el antedicho supuesto de que mientras la justicia obligue á conservar la cesantía, como medio reparador, debe ser regularizado por la ley, que prevendrá la necesidad, ó hará aquella menos gravosa; previniendo la arbitrariedad ilimitada de *hacer cesantes*.

CESANTIA DE LOS MINISTROS. De propósito tratamos de ella con separacion de la cesantía general de empleados, porque, aun coincidiendo ambas en el mismo fin político; la opinion y la ley las consideran de un modo diverso. La opinion rechaza una y otra, pero mas aun la primera que la segunda; y la ley misma participa de esta prevencion perjudicial. La índole de nuestra obra, que siendo enciclopédica y de consulta, abarca con igual necesidad el derecho constituyente y el constituido, hace que tengamos que consagrar algunas consideraciones á esta cuestion.

La cesantía de los ministros viene juzgada con desventaja desde el principio por la opinion, y actualmente lo es por la opinion y por la ley. El político observador halla fácilmente la razon de ello. La España ha entrado en nuevas vías políticas y administrativas, en que observa que el gobierno y la administracion le salen á muy subido precio; sacrificio, que por otra parte se le hace inevitablemente mas sensible, por cuanto hasta ahora, sea por las personas, sea por las cosas, los resultados no han respondido á las esperanzas, las ventajas no parecen compensar los gravámenes. Contribuye asimismo á ello la índole de las contribuciones directas, nuevamente introducidas, y que ponen mas al descubierto los sacrificios que las indirectas: siendo de todo el resultado incontestable, que *si el pueblo no sufre mas; siente mas lo que sufre*: rechaza todo gravámen nuevo; tanto mas, cuanto menos necesario parezca: la cesantía de los ministros, sin un exámen fundado en altas razones de conveniencia y de política, poco al alcance del pueblo, presenta este carácter, y es por tanto comprendida por aquel, aun con predileccion odiosa, en la condenacion general de gravámenes públicos.

La España por otra parte se halla al principio de su nueva carrera política: se halla en aquel período de desconfianza y de recelo contra el poder público, que ha sido, ó se le presenta como abusivo y opresor: si esta disposicion de ánimo no es realmente una aversion, no hay de ella á la aversion efectiva un paso de distancia; y mal pudiera ser bien mirada la cesantía del ministro, cuando el ministro no es bien mirado: habrá en ello justicia ó exajeracion: no lo examinamos; pero examinamos la verdad que se desprende de la naturaleza de las cosas, y la verdad es la que esponemos.

La España, en fin, se halla en aquellos momentos de transicion en que la política es de polémica, de vértigo, de pasion, de accion y reaccciones sucesivas. Las situaciones y el espíritu de partido elevan con frecuencia al altísimo cargo de consejeros de la Corona á personas, que la opinion no creía aun preparadas para ello. La opinion se cree autorizada muchas veces aun para escandalizarse en tales promociones. Ciñéndose á los resultados, como mas á su alcance que las cuestiones de principios, que pudieran rectificar su juicio, no aprende ni justicia, ni conveniencia entre algunos meses, semanas y aun dias alguna vez, de un servicio eminente; pero que el público no mira sino como privilegiado, ya que no como poco merecido; y es de una necesidad tan irresistible, como la fuerza de las cosas, el juicio perjudicial del funcionario y de su fortuna, la reprobacion de ventajas, ya categóricas, ya económicas, que la opinion, decimos, no aprende proporcionadas, merecidas, ni debidas.

Mas razones pudiéramos añadir para esplicar la mencionada prevencion perjudicial de la opinion y de la ley; pero ciertamente no son necesarias en una contienda, en una cuestion de hecho y de actualidad, en que cada uno puede ser, y es aun sin quererlo, juez y parte. Posible es, sin embargo, que en la cuestion práctica, ni la opinion, ni la ley sean del todo consiguientes; pero eso tiene la misma esplicacion.

Y ciertamente no son consiguientes. La opinion y la ley, que claman con justicia contra la inmoralidad; no pueden sin inconsecuencia rechazar en principio los medios políticos de prevenirla, tanto mas eficazmente, y con sacrificios tanto mas adecuados, aun cuando sean gravosos, cuanto mas aquella es de temer; y en ninguna posicion lo es mas, que en la mas alta y trascendental á que puede llegar el súbdito de una nacion.

Ni la opinion, ni la ley rechazan el principio del premio, como testimonio de justicia, como aliciente para grandes servicios y sacrificios, como precaucion contra la inmoralidad; y no es posible llevar la exajeracion y las prevenciones hasta admitir en principio que todos los ministros son indignos de serlo; ni de consideracion alguna. La opinion pide diariamente, y la ley acuerda recompensas por servicios políticos; y no cabria en lo justo escluir de este principio en sus casos los servicios de los ministros, de los que los prestaren, asi como no puede llevarse la prevencion perjudicial hasta querer que solo para ellos no sea una razon la de *decoro público*, que tanto consultan y deben consultar los Estados para sus fines. La ley, en fin, ha hecho reflejar la altura é importancia del cargo de consejero responsable de la Corona en el mayor sueldo de los que disfrutan los servidores del Estado: ha prevenido en ello la posible inmoralidad y corrupcion: la opinion vá en ello conforme con la ley; y no habria sistema legal y político, sino incoherencia y desconcierto, en prevenir los mencionados riesgos durante el cargo, y no contra el desamparo, perdido aquel, cuando no puede ser desconocida de nadie la influencia del porvenir sobre el presente en cada uno de los hombres; y con mayoría de razon en los hombres públicos.

Despues de todo, y en buenos principios de gobierno, cuatro cosas son incontestables en este punto, respecto de los consejeros responsables de la Corona: que por la fuerza de las cosas, y al tenor de las razones indicadas, esa posicion, despues de servido el cargo, es por decoro y conveniencia pública, digna de consideracion: que tal es en el particular el juicio de las naciones, y aun el de las personas y fracciones políticas menos favorables á la cesantía de los ministros; pues no la niegan absolutamente, sino dejando de concurrir ciertas circunstancias; y sustituyendo el sistema de *cesantía* al de *pension personal*: que al caso de los ministros no son aplicables las reglas relativas á los demás empleados, que cesan: y que es por demás difícil, si ya no fuese imposible en situaciones dadas, hallar un temperamento adecuado, esto es, una fórmula sin inconvenientes, ni gravámen; y por otra parte justa, digna, y segura, sin cuyo conjunto de requisitos, hasta donde los tiempos los hagan posibles, ni el Estado debe acordarla; ni es garantía eficaz para asegurar sus fines políticos, y admistrativos.

Lo primero es una verdad de principios: una verdad, segun las consideraciones espuestas de todos profesada. En el terreno de los principios, la base de justicia, de conveniencia y decoro público de las jubilaciones, tan antiguas, como la civilizacion de los pueblos; de los retiros, pensiones, y cesantías, esa es, aunque en escala especial, la de la regla á que nos referimos.

Y lo que es una verdad y principio de buen gobierno en todos los Estados y en todos los tiempos, lo es con mayoría de razon en los presentes, por la índole comparativa y diversa del régimen político de los pasados siglos, y del que le ha sucedido. Entonces los Reyes sacaban sus ministros de las clases que mas querian, y preferian siempre las mas acomodadas. ¿Para qué querian la cesantía el arzobispo, el cardenal, los duque de Alba, de Frias, del Infantado, ni otros prohombres de igual rango? ¿Cuándo el Estado podria parecer injusto, ó presentarse deshonrado en el desamparo, en la posicion depresiva, en la miseria tal vez, del que habia admitido, como ministro, á los consejos de la corona? Hoy en los nuevos gobiernos no es asi. El Rey debe sacar sus ministros de las mayorías parlamentarias. Los pueblos envian á ellas, no á los potentados, que ya no tolera la division de fortunas: no á los mas acomodados; sino á los que reputan favorables á sus intereses; sujetos por tanto, en quienes no pocas veces rivalizan lo elevado del mérito con lo humilde de la fortuna. Antes la posicion social, y la opulencia ni aun dejaban pensar en la posibilidad de la corrupcion; hoy está, sin arredrarse ante los obstáculos, ni aun de una probidad intachable, toma bríos y audacia, y columbra la posibilidad, por lo menos, en una posicion contraria. Antes la duracion en el cargo, casi era normal, y era en sí misma un medio, por

otra parte lícito y moral, que prevenia el porvenir; hoy, por el contrario, lo normal es la instabilidad; á veces lo instantáneo. Pasando, en fin, del decoro del Estado al de los individuos, ¿cuántos pueden ser dignísimos repúblicos, eminentes políticos, probos y entendidos consejeros de la Corona; que despues de dejar de serlo, no podrán sostener con la superioridad que el decoro público y privado exigen, y que no á todos es concedida, la rivalidad, mas inevitable y temida despues del infortunio, en el foro, en el profesorado, ó en cualquier otra posicion pública?

Todavía hay respecto de España una especialidad. En ella ha concluido toda vinculacion y amortizacion de bienes; mientras en algunos de los Estados de Europa, sometidos al régimen representativo, en el reputado por mas liberal de todos, en Inglaterra, las grandes vinculaciones subsisten en altísima escala, y el parlamento cuenta en su seno opulentísimos potentados, en vez de meros representantes de sus colegios. Si hubiera que añadir todavía alguna razon no seria desatendible la del módico sueldo asignado á los ministerios en España, relativamente á los demás Estados de Europa.

El segundo punto de los cuatro indicados es histórico. Entre nosotros en el antiguo régimen no habia cesantía; pero estaba superabundantemente representada por lo cuantioso de los emolumentos, durante el cargo, y la largueza de los soberanos al retirar al Ministro. Así el caso del que entró en esa elevadísima escala simple licenciado Gaspar de Somodevilla, y acabó marqués de la Ensenada, igualando ya su gloria á su fortuna, y todo merecido, tiene no pocos ejemplos en nuestra historia política, sin ir á buscarlos (¡lejos de nosotros!) entre los ministros favoritos. En el nuevo régimen la cesantía es coetánea del gobierno representativo. Y en cuanto al esterior, vemos á Inglaterra señalando medio millon de cesantía al ministro que gozó de asignacion mas de un millon de reales: á la Francia no considerar menos la cesacion de un consejero responsable, que sobre una asignacion de 400,000 francos, entra al ministerio con palacio ostentosamente decorado, surtido y servido, y al cual el ministro, para usar de la fórmula *gráfica*, empleada en este caso por nuestros vecinos, *no tiene que llevar mas que el gorro de dormir*. No pedimos nosotros lo que nuestro pais no puede hacer; y ciertamente no puede hacerlo. Sostenemos solo una tésis de gobierno, de derecho público. Pedimos solo, que no se rechace como improcedente é indebido, lo que el derecho público tiene reconocido en principio como conveniente y justo. Hemos indicado arriba que somos cesantes: ahora toca á nuestra delicadeza declarar, que si el autor del presente artículo ha sido consejero responsable de la Corona; ni goza, ni espera cesantía de Ministro; sino de empleado público, con opcion á jubilacion además por el mismo concepto.

El tercer punto de los espresados, es asimismo evidente. El cargo de Ministro no se puede equiparar en autoridad, responsabilidad, y asi para el bien, como para el mal, en trascendental importancia con ningun otro de la administracion del Estado. Lo que asi estaba en la naturaleza de las cosas, acaba de sancionarlo solemnemente una reciente ley, como veremos. Por otra parte, el simple empleado vé madurar y acercarse con paso lento, pero seguro, no el beneficio de la cesantía, pero sí el de la jubilacion; mientras el ministro, como tal, nunca tendrá, entre nosotros á lo menos, y en la índole del régimen representativo, derecho á ella.

El cuarto punto, en fuerza de violento, parece inverosímil; y sin embargo, no es sino cierto. Dos medios se han escogitado, y apenas caben otros, para formular la garantía de moralidad, y el testimonio de público decoro, que necesita el cargo de Ministro: la *cesantía*, ó una *pension* personal que una ley estableceria en cada caso, pesando todas las circunstancias. En cuanto á lo priro, rodean á la cesantía tales inconvenientes, que no nos atrevemos á sostenerla, sino hipotéticamente; como un medio transitorio de reparacion; mientras la administracion general no entre en las condiciones que le son propias para merecer ese nombre. Por lo

que hace á la pension en los términos propuestos, la enunciativa seduce desde luego; pero los tiempos y la esperiencia desengañan, no ya enérgica, sino cruelmente. ¿Quién, en el estado de los partidos en España, en la intolerancia y prevenciones, en las aversiones personales, en la lamentable incandescencia de la política, se atreveria á esperar desapasionada justicia de su adversario, predispuesto por el influjo de las circunstancias, á no ver en él sino instintos de revolucion ó de reaccion? Por otra parte, si para obviar inconvenientes, la pension se establece préviamente para todos los casos, y por tanto, antes que la cuestion sea personal; falta la justicia distributiva, base esencial del sistema de pensiones personales: si se espera, para acordarla, á que la cuestion sea personal, casi se necesita valor para esperar siempre justicia absoluta. ¿Cómo exigir de ningun partido político que no premie á sus hombres? ¿Que no se halle dispuesto mas bien á disculparlos que á condenarlos? ¿Cómo esperar que prodigue igual benevolencia á sus contrarios? Eso lo trae el tiempo; pero no el tiempo de las transiciones políticas.

Hé aquí ahora el derecho constituido sobre cesantía de los Ministros. La ley de presupuestos de 1835, fijó su índole y cuantía, diferenciándola de la cesantía de empleados. Su artículo 22 decia así:

«A los secretarios del despacho y consejeros de Estado, que hayan desempeñado estos destinos en propiedad, se les abonará el sueldo de 30,000 rs. (de cesantía) sin sujecion á años de servicio; pero si contaren mas de veinte en cualquiera carrera, optarán al *máximum* de 40,000.»

Suprimiéronse las cesantías de ministros por el artículo 3 de la ley de presupuestos de 1.° de setiembre de 1841; pero restablecióse el pago de las mismas por real órden de 1.° de mayo de 1844.

En 1854 la junta de gobierno de Madrid las suprimió para en lo sucesivo; no obstante lo cual se pidieron y obtuvieron las que tuvieron orígen despues; hasta que en 25 de abril de 1856, despues de un gran debate en las Córtes constituyentes sobre su supresion, se sancionó, y en 30 del mismo se promulgó la siguiente ley, que constituye el derecho vigente.

«Art. 1.° El cargo de Ministro de la Corona es el empleo público de mas importancia en el gobierno de la nacion.

Art. 2.° Tendrán derecho á cesantía los ex-ministros que hubiesen desempeñado su cargo por tiempo de dos años, en una ó mas veces, ó que cuenten 15 años de servicio al Estado, con nombramiento real ó de las Córtes, ó hayan ejercido el cargo de senadores ó diputados, en tres elecciones generales.

Esta disposicion comprende, no solo á los que en lo sucesivo sean consejeros de la Corona, sino tambien á los que lo hayan sido desde que se declararon estinguidas las cesantías de todos los empleados públicos. (Ley de presupuestos de 1845.)

Art. 3.° Se declara abolida la acumulacion de años de servicio, establecida por la ley de presupuestos de 1835, en virtud de la cual, los que habian servido cargos públicos, disfrutaban la cesantía superior de 40,000 reales.

Art. 4.° Los Ministros cesantes que tengan adquirido el derecho á cesantía por razon de otros empleos que hayan desempeñado, optarán entre ella y la que les corresponda por el solo empleo de consejeros de la Corona.»

Esta ley, como se vé, no establece un sistema absoluto: no es la solucion de las dificultades administrativas, á que dá lugar la materia, segun quedan indicadas en el artículo: es solo un término medio: término medio, que espresa todas las prevenciones perjudiciales contra derechos y prerogativas de los Ministros; y participa de muchos de los inconvenientes de la cesantía de empleados, ya en el terreno económico, ya en el de los principios administrativos y de gobierno.

La ley no descansa sobre la base de *justicia distributiva*, porque entonces la pension de los Ministros seria gradual y proporcionada al número de años; y vemos no es así. No descansa tampoco sobre la base de *decoro*

público; pues entonces tendrian derecho á cesantía todos los que hubieren sido Ministros; y vemos no lo tienen todos. La circunstancia de haber servido dos años el cargo de Ministro, para tener cesantía, se aparta de la base absoluta de *decoro público*, pues este es inherente al mero hecho de haber tenido el honor de ser Consejero responsable de la Corona, cuyo hecho es el mismo, ya se haya desempeñado el cargo por dos años, ya por dos años menos un dia, por un año solo, y aun por menos. El medio de computar los dos años de desempeño del ministerio, por 15 años de servicio en otras carreras, ó tres elecciones para senador ó diputado; se aparta á un tiempo, del principio de *justicia distributiva*, pues no altera gradualmente la pension; y del de *decoro público*; pues no es entonces el cargo de ministro el que se considera; sino requisitos que le son de todo punto estraños, y tan eterogéneos para poder sumarse con el cargo de Ministro, que el primero, el de servicios en cualquiera carrera, ó no tiene ya cesantía, si han empezado despues de la ley de presupuestos de 1845; ó la tiene muy de otro género, si empezó antes de esta fecha; y el cargo de senador ó diputado, no la tiene de ninguna manera.

El artículo 3.° de la ley, está dando lugar á dudas sobre clasificacion. Por él «se declara abolida la acumulacion de años de servicio establecida por la ley de presupuestos de 1835, en virtud de la cual, los que habian servido cargos públicos, disfrutaban la cesantía superior de 40,000 rs.» Es referente este artículo al 22 de la ley citada, segun el que los Ministros, por el hecho de haberlo sido, esto es; por puro *decoro público*, gozarian del sueldo de cesantía de 30,000 rs. «sin sujecion á años de servicio,» añadiendo la ley, que si los consejeros y Ministros «contaren mas de 20 años en cualquiera carrera, optarán al *máximum* de 40,000 rs.» Algunos de nuestros suscritores se han dirigido con sus dudas á la redaccion de la Enciclopedia, y hé aquí lo que nos parece. En los 15 años de servicio al Estado, de que hace mencion el art. 3.° de la ley de 1856, pueden computarse el tiempo de ministerio que no llegue á dos años, para atribuir por sí derecho á cesantía de Ministro; pues la ley exige solo en tal caso, «15 *años de servicio al Estado*;» y ni ella, ni otra han declarado que no sean de servicio al Estado los años de ministerio. Aunque acumulando años, al tenor de la ley de 1855, cuente el que ha sido Ministro *mas de* 20 *años* de servicio, no podrá optar hoy en tal concepto á mayor cesantía que la de 30,000 rs., y por consecuencia, de ninguna manera á la de 40,000. No estando declarado por ninguna ley que los años de ministerio no sean de servicio al Estado, ó de real nombramiento; ninguna tampoco impide que se computen y acumulen con los servidos en otras carreras, para optar á cesantía por el mero concepto de empleado público; y no de Ministro, cuya opcion les concede el artículo 4.° de la ley antes inserta. Véase CESANTES: CESANTIA: EMPLEADOS: MINISTROS.

CÉSAR. Del latin *cæsar*; apellido *entre* los romanos de incierta etimología, que la importancia categórica de la voz ha hecho buscar empeñadamente, y parécenos que en vano, segun la múltiple y vaga, al mismo tiempo que verosimil, diversidad de orígenes. Pudo provenir, segun unos, del verbo latino *cædo*, *cæsum*, herir, herido, y en alusion á este orígen, de operacion *cesárea*, porque algun ascendiente de la familia Julia fuera por ella estraido del vientre materno, diciéndose asi César, *á claustro materno cæso*: de la muerte, segun otros, dada á algun elefante en accion bélica, ó arriesgada, por cuanto dicho animal, en lengua púnica, ó mauritánica, se decia *cæsar*: de *cæsarie*, sino, la cabellera: del latin *cæsius*, por último, el de los ojos garzos. Julio César ennobleció este nombre, como todo lo que perteneció á su persona, y como Marco Tulio la voz Cicerón, que en suma espresaba, como es sabido, un efecto, ó afeamiento de una parte del semblante. Desde entonces prevaleció la voz en la acepcion de *magestad imperial*; y los emperadores romanos continuaron llamándose *Césares*. En ese sentido ya articuló Jesucristo la sabida sentencia, *dad á Dios lo que es de Dios, y al César, lo que es*

del César: y en ese tambien las turbas judáicas, pidiendo su muerte, amenazaban á *Pilatos*; *si no le condenas á muerte, no eres amigo del César*. ¡Terrible invocacion, que contra la inocencia, decidió el ánimo vacilante del juez de un justo! En los tiempos posteriores se aplica alguna vez á los soberanos, si bien como genérica, ó meramente apelativa, la enunciativa y calificacion de *César*. De ella se deriva la de *Czar*, tratamiento peculiar de los Emperadores de Rusia.

CESE. Designase con este nombre el documento ó nota, por medio de los que un empleado debe hacer constar la fecha en que ha quedado cesante del destino que desempeñaba, ó en que cesó en la percepcion de un sueldo ó pension. Puede espedirse aquel documento por dos motivos; ó por pasar el empleado de un destino á otro, bien sea de mayor, igual, ó menor categoría y sueldo, ó por quedar en la situacion de cesante, jubilado, etc. En cualquiera de los dos casos, el *cese*, no tiene otro objeto que fijar la ép[illegible] cual el funcionario tien[illegible] sueldo del destino que [illegible]ñalar por consiguiente e[illegible] para disfrutar el del nuevo [illegible] ha sido nombrado; el de la [illegible] lacion, si para tales situaciones [illegible] declarado derecho; ó ninguno, si ha sido separado con esta circunstancia, ó sus años de servicio no le dejan opcion á percibirlo. Por eso es condicion precisa, y asi está mandado, que el *cese* ha de abrazar, no solo la fecha de la cesacion, sino tambien la causa por que esta tiene lugar, cual se deduce siempre de la real órden ó decreto que la motiva.

Mientras hubo cierta tolerancia, tanto respecto á la obligacion que tiene todo empleado de proveerse del título, diploma, credencial ó despacho de su nombramiento, como acerca del papel sellado en que habian de estenderse aquellos documentos, no habia tampoco una regla fija para los *ceses*, ni la fórmula con que acreditaban los jefes respectivos aquella situacion era la misma. Regularizado el primer estremo por el real decreto de 28 de noviembre de 1851, y la real órden de 2 de diciembre del mismo año, espedida para su cumplimiento por lo respectivo á hacienda, se fijó tambien allí, y se espresa detalladamente la forma en que deben estenderse los *ceses*. Con arreglo á estas disposiciones, en el mismo título del empleado, é inmediatamente despues del *cúmplase* y *toma de posesion* respectiva, el jefe de la dependencia que ha posesionado á aquel, certifica tambien de la cesacion, conforme á los modelos que acompañan á la citada real órden de 2 de diciembre. Las oficinas de contabilidad, á su presentacion, son las encargadas despues de fijar donde se cierra una cuenta y donde empieza. Véase **TITULOS DE EMPLEADOS: CUMPLASE: TOMA DE POSESION.**

CESION. En términos generales cesion es en el derecho, lo que *enajenacion*, en términos mas específicos: *hacer de otro lo que es nuestro*; mas ó menos espontáneamente; pero siempre interviniendo nuestra voluntad. Ceder, pues, ó hacer *cesion* en este sentido teórico, es traspasar á otro nuestra propiedad, derechos, ó acciones. En la enunciativa jurídica de *cesion* se atiende principalmente al resultado; haciendo abstraccion de los motivos; y antes con relacion á estos, siendo ellos específicos muchas veces, muchas veces tambien la cesion por parte de los motivos admite nombre específico, y se darán las cosas por donacion, permuta, venta, transaccion, etc. Siendo la cesion, como vá dicho, una acepcion genérica, se atiende solo en ella al hecho del traspaso de derechos, y cambio de dueños; rigiendo en esta parte los principios generales: *nemo dat, quod non habet*: *tantum est jus accipientis, quantum est dantis*: es decir, que, aun traspasando el cedente al cesionario todo su derecho; sea por venta, donacion, transaccion, etc., nunca este podrá alegar mas derecho que el que competia á aquel.

Alguna vez la voz cesion se hace específica, y entonces no solo se atiende al resultado final y genérico del convenio ó contrato á que se refiere, sino á su principio y pormenores, como en **CESION DE ACCIONES: CESION DE BIENES: CESION EN MATERIA BENEFICIAL.** Véanse estos artículos.

CESION DE ACCIONES. En el artículo ACCION JURIDICA (pág. 279 del tomo 1.°), hemos esplicado las diferentes acepciones de esta palabra, demostrando que se llama *accion* en sentido jurídico, no solo el derecho de pedir y de reclamar una cosa, sino tambien el medio legal de que se vale aquel á quien compete ese derecho para ejercitarlo y hacerle valer en juicio; y que, usada dicha voz en plural, equivale á créditos ó deudas activas. Aunque todas estas acepciones entran por estension en la esfera del presente artículo, puesto que en la cesion de todo derecho, ya sea real, ya personal, vá comprendida la de la accion para hacerlo efectivo, y la facultad de ejercitarla en juicio, sin lo cual seria aquel ilusorio en muchos casos; sin embargo, concretándonos á la significacion verdadera y propia que se dá en el foro á aquellas palabras, debemos referirnos especialmente á la primera de dichas acepciones. Y en efecto, asi como sin faltar al tecnicismo jurídico decimos con igual propiedad, «tengo *accion* para reclamar tal cosa», que «tengo *derecho* para reclamar tal otra,» del mismo modo *cesion de acciones* es equivalente á *cesion de derechos*. Esto supuesto, por *cesion de acciones* se entiende la subrogacion de un tercero en el derecho que otro tiene sobre alguna cosa, ó para reclamar de otra persona el cumplimiento de alguna obligacion.

Para comprender la importancia de esta materia, que como dice un ilustrado tratadista de ella (1), es *difficilis*, *utilis*, *et subtilis*, segun la comun sentencia de los intérpretes; basta solo considerar que no hay traslacion de dominio, ya proceda de contrato, ya de última voluntad, á que no vaya unida la cesion de acciones ó derechos, espresa ó tácita, principal ó accesoria, necesaria ó voluntaria. El objeto directo de la venta de una finca, por ejemplo, es que el dominio de ella se trasfiera del vendedor al comprador; pero al verificarlo, cede aquel á este tácita ó espresamente todas las acciones y derechos que le corresponden sobre la cosa vendida, sin lo cual no le habria trasferido su pleno dominio. Lo mismo sucede generalmente en las donaciones, legados y demás traslaciones de dominio á título gratuito. No se crea por esto que vamos á tratar aquí de todas esas cesiones: siendo, como son, accesorias, ó consecuencia necesaria del contrato principal, ó última voluntad de que proceden, las examinaremos en sus lugares respectivos para no dividir la materia, ni dar ocasion á repeticiones. En el presente artículo trataremos tan solo de las cesiones que son meramente de acciones ó derechos; cuando constituyen la base esencial ó el objeto principal del acto ó contrato en que se hacen. Para mayor claridad dividiremos este artículo del modo siguiente:

(1) Oléa, *De cessione jur. et action.*, exord. del tit. 1.°

PARTE DOCTRINAL.

SUMARIO.

Sec. I. Observaciones generales sobre el orígen y fundamentos de la cesion de acciones.

Sec. II. De la cesion de acciones en general.

Sec. III. De la cesion convencional de acciones.

Sec. IV. De la cesion legal y necesaria, y del beneficio de cesion de acciones.

§. 1.° *De la cesion de acciones meramente legal.*

§. 2.° *De la cesion necesaria, y del beneficio de cesion de acciones.*

Sec. V. De la cesion de derechos litigiosos.

SECCION I.

OBSERVACIONES GENERALES SOBRE EL ORÍGEN Y FUNDAMENTOS DE LA CESION DE ACCIONES.

La conveniencia, la justicia, y aun la necesidad en muchos casos, de la cesion de acciones ó derechos son tan notorias, que no debemos detenernos á demostrarlas: basta

considerar que ella es una desmembracion del derecho de propiedad; que su ejercicio es el ejercicio de este mismo derecho. Por eso en todas las legislaciones se encuentran reglas, mas ó menos directas, para fijar los límites de esta facultad, las obligaciones del cedente, los derechos adquiridos por el cesionario, y para evitar los fraudes que á su sombra pudieran cometerse.

Segun los rigorosos principios del derecho civil de los romanos, fuera de los casos de sucesion universal, en los cuales se reputaba haber continuacion de persona, por considerarse una misma la del sucesor y su causahabiente, no era permitida absolutamente la cesion de acciones. Decian aquellos jurisconsultos, que siendo la obligacion un vínculo del derecho, que liga á dos personas determinadas, variándose una de ellas, ya no existe el mismo vínculo ni el mismo derecho, sino una nueva obligacion; de consiguiente, para que el deudor quedase obligado al cesionario, ó reconociese en este la facultad de reclamar la deuda, era preciso que asi se estipulara con él, y entonces ya no era cesion, sino una novacion de contrato. «*Quod mihi ab aliquo debetur*, dice el jurisconsulto Gayo (1), *id, si velim tibi deberi, nullo eorum modo, quibus res corporales ad alium transferuntur, id efficere possum; sed opus est, ut, jubente me, tu ab eo stipuleris: quæ res efficit, ut á me liberetur, et incipiat tibi teneri; quæ dicitur novatio obligationis.*» A cada paso se tocaban los inconvenientes de este rigorismo legal, y para salvarlos, era necesario arbitrar algun medio, alguna ficcion de derecho, á fin de que, sin faltar al rigor de los principios, pudiera trasladarse á otro el beneficio de una obligacion. Este medio indirecto lo encontraron aquellos jurisconsultos en la facultad de litigar por medio de procurador. El mismo Gayo, en el lugar antes citado, añade (2): «*Sine hac verò novatione non poteris tuo nomine àgere, sed debes ex persona mea, quasi cognitor, aut procurator meus, experiri.*»

Este, pues, fué el principio de la cesion de acciones entre los romanos. Por derecho estricto, el deudor no quedaba obligado para con el cesionario, sin que mediase una solemne estipulacion, que, estinguiendo la obligacion primera, produjese otra nueva; pero sin esta solemnidad podia el cesionario reclamarle la deuda bajo el carácter de mandatario ó procurador del cedente, de modo que la cesion de acciones se verificaba por el *mandato*. A esto llamaron los jurisconsultos romanos *mandare actiones*: *actiones persequendas præstare*, ó *cedere actiones*. De este modo no era necesario el consentimiento del deudor: ni variaba la forma de la obligacion, ni la calidad de las personas obligadas. El acreedor quedaba siempre como tal acreedor; conservando el derecho de reclamar el pago, si bien en tal caso con la obligacion de restituir ó entregar al cesionario lo que por este medio hubiese cobrado; pues en realidad la deuda ya no le pertenecia, y si el deudor hubiese sido demandado por el cesionario antes que por el cedente, podia alegar contra este la escepcion de dolo. El deudor quedaba tambien en la misma posicion que antes, conservando contra el cesionario los mismos medios de defensa que hubiera podido emplear contra el cedente. Y aunque el cesionario por derecho estricto no tenia otro carácter que el de procurador ó mandatario del cedente, y bajo tal concepto no podia intentar ni ejercitar otras acciones que las que á este correspondian, y en nombre ó representacion del mismo, la jurisprudencia, confirmada por las constituciones imperiales, vino por último á concederle las acciones como propias, bajo la denominacion de *acciones útiles*. De aquí resultó que este mandato era de un carácter especial: no podia ser revocado, ni terminaba por la muerte del mandante ni la del mandatario, como sucedia con los otros procuradores: este lo trasmitia á sus herederos, como cualquier otro derecho real ó personal, y aun podia tambien cederlo ó sustituirlo en otra persona: tampoco, de consiguiente, estaba obligado á dar cuentas, y en su daño ó provecho recaian los beneficios ó perjuicios re-

(1) Gaii instit., com. 2.°, §. 38.
(2) Gaii, id., id., §. 39.

sultantes de sus gestiones: obraba, en fin, como verdadero dueño de la cosa. «*Si in rem suam datus sit procurator, loco domini habetur,*» dijo la ley 13, tít. 14 *De pactis*, libro 2.° del *Digesto*. Por todo lo cual al cesionario se le llamaba *procurator in rem suam* (1).

Debe inferirse de lo dicho, y asi era en efecto, que entre los romanos la cesion de acciones era permitida á todo el que podia nombrar procurador, y de consiguiente contratar y obligarse; y no tenia otras limitaciones que las prefijadas para los derechos en la cosa y á la cosa. Podian hacerse á título oneroso y á título gratuito; pero siempre dando el cedente al cesionario facultad ó mandato para ejercitar en nombre, y como procurador de aquel, las acciones cedidas y todas las demás que fuesen necesarias para exigir del deudor el cumplimiento de la obligacion, sin cuya circunstancia este no estaba obligado á reconocer la personalidad del cesionario. De esa omnímoda facultad resultó un abuso, que fué necesario reprimir: los créditos y derechos litigiosos formaron un ramo de especulacion de fatales consecuencias para el bien público y privado; unos procuraban con afan su adquisicion, con el objeto de lucrar y enriquecerse; otros, con el de vengar algun resentimiento particular, ó el de molestar á su adversario. De uno y otro modo se aumentaban los pleitos, y se turbaba la paz de las familias. El mal llegó á tal estremo, que en el siglo V de nuestra era, el emperador Anastasio se vió en la necesidad de poner freno á la desordenada codicia de los compradores de derechos litigiosos, para evitar los pleitos que con tal motivo iban en aumento, lo cual hizo en virtud de las varias quejas que con tal motivo se elevaron á su autoridad: *per diversas interpellaciones ad nos factas*, segun dice en el principio de la constitucion (2) que promulgó al efecto, *tam humanitatis quam benevolentiæ plena*, como en el siglo siguiente la calificó el emperador Justiniano al confirmarla por otra constitucion (1).

Por estas leyes se ordenó, que los compradores de derechos litigiosos no pudiesen exigir del deudor otra cosa que el importe de lo que hubiesen dado como precio de la cesion, y el de los intereses correspondientes, lo cual era en pena de ser ellos mismos los que ordinariamente solicitaban la cesion. «*Nec enim dubium est* (dice la ley, *Per diversas*, antes citada), *redemptores litium alienarum videri eos esse, qui tales cessiones in se confici cupiunt: ita tamen, ut si quis, datis pecuniis hujusmodi subierit cessionem, usque ad ipsam tantummodo solutarum pecuniarum quantitatem, et usurarum ejus actiones exercere permittatur.*» Pero solamente se circunscribió esta prohibicion á las cesiones de créditos litigiosos, hechas á título de venta, no á las que se hacian por donacion, en las cuales el cesionario pedia ejercitar todas las acciones del cedente contra el deudor, sin deduccion alguna: «*Si autem per donationem cessio facta est*, añade la misma ley, *sciant omnes hujusmodi legi locum non esse: sed antiqua jura esse servanda.*» Tambien se establecieron otras escepciones fundadas en justas causas. Segun dicha ley, aun cuando no se hiciesen á título gratuito, eran permitidas las cesiones entre los coherederos de los derechos litigiosos pertenecientes á la herencia comun: las que los herederos hiciesen al legatario en pago de su legado, siempre que el crédito litigioso cedido perteneciese á la herencia: las que hiciera de un crédito litigioso contra un tercero, el deudor á su acreedor en pago de la deuda; y cuando al poseedor de una finca se le cede un derecho litigioso, que gravita sobre ella, y que necesita para asegurarse en su libre goce. Posteriormente Justiniano por una constitucion griega, que no se insertó en el *Cuerpo del derecho* (2), derogó en esta parte la de Anastasio, mandando, que en todo caso, siempre que la ce-

(1) Toda esta doctrina está fundada en las leyes 13 y 16, tit. 14; 17, tit. 15 lib. 2.°; 3.°, §. 5, tit. 3, lib. 15; 76, tit. 3, lib. 16; 8.°, tit. 1, lib. 17; 2, tit. 1, lib. 18; 31, tit. 1, lib. 19; 4.°, §. 18, tit. 4, y 7.°, tit. 7, lib. 41 del *Digesto*; y leyes 1.ª y 6.°, tit. 10; 5.°, 7.° y 8.°, tit. 39, lib. 4; 5.°, tit. 12, lib. 8 del *Código*.

(2) Ley 22, tit. 35, lib. 4.° del *Código*.

(1) Ley 23, tit. 35, lib. 4.° del *Código*.

(2) Se encuentra esta constitucion en las *Basílicas*, y Cuyacio la copió en sus *Observac.*, lib. 16, art. 16.

sion no sea enteramente gratuita, el cesionario de derechos litigiosos no podrá pretender del deudor otra cosa ó cantidad que la que hubiese dado al cedente como precio de la cesion.

Cuando el derecho romano llegó á ser el de la mayor parte de las naciones europeas, se adoptó en ellas la doctrina de la cesion de acciones en los mismos términos que en aquel se establecia; siendo notable, que aun en la parte del reino francés, que no se sometió al *derecho comun*, se siguieron sus prescripciones sobre esta materia, lo mismo que en otros muchos Estados; como basadas en la conveniencia, en la equidad, y en la justicia; mas, no fué admitida la constitucion griega de Justiniano, que indudablemente carecia de estos requisitos. La ley de Anastasio no tuvo otro móvil, que el ódio á los compradores de pleitos, ni otro objeto que el de evitar ese tráfico inmoral; y de consiguiente, solo contra aquellos debia aplicarse su rigor, y no hacerla estensiva á las cesiones de derechos litigiosos que deben su orígen, no á la avaricia ni á otra causa inmoral, sino á una causa justa y quizás necesaria. Tambien nuestras leyes de Partida, originarias del derecho romano, adoptaron los mismos principios que este sancionó sobre la cesion de toda clase de acciones y derechos, con las modificaciones que veremos en las secciones siguientes; y como esos principios son de eterna justicia, han sido tambien seguidos por los Códigos modernos de Francia, Cerdeña, Nápoles, Holanda y otras naciones, si bien desentendiéndose, como era natural, de la ficcion del derecho de que el cesionario no podia obrar sino como procurador ó mandatario del cedente. Los ha aceptado igualmente el proyecto de Código civil español, que se publicó en 1851, cuyo capítulo 8.°, título 7.°, lib. 3.° está consagrado á esta importante materia, titulándose «De la trasmision de créditos y demás derechos incorporales;» en cuyo capítulo y en la seccion 3.ª, capítulo 5.°, tít. 5.° del mismo libro, que trata de la subrogacion, se resuelven muchas dudas y cuestiones importantes, nacidas unas del rigorismo metafísico del derecho romano, y suscitadas otras por las sutilezas de sus espositores.

La reseña, que precede, nos servirá de guia en la esposicion del derecho pátrio que vamos á examinar en las secciones siguientes; pues si se esceptúan las leyes que se refieren á los derechos litigiosos, no hay ninguna en nuestros antiguos Códigos que trate directamente de la cesion de acciones: alguna lo hace por incidencia, y la jurisprudencia hasta ahora establecida, ha tenido que apoyarse en los principios en esas pocas consignados, en las reglas generales del derecho, y en las prescripciones del romano, que nunca desmerecerá el renombre que lleva de *razon escrita*.

Esto en cuanto al tecnicismo jurídico: como principio, la cesion de acciones tiene el mismo orígen y fundamento que las demás transacciones sociales, que los demás pactos y contratos, á saber, la necesidad y conveniencia recíproca.

SECCION II.

DE LA CESION DE ACCIONES EN GENERAL.

La cesion de acciones es otro de los medios que tenemos para trasmitir á otros los derechos que nos pertenecen. Segun sea su objeto y las circunstancias que en ella concurran, asi serán su naturaleza y efectos. Si se hace á título oneroso, estará sujeta á las condiciones de la compra-venta, ó del contrato bajo cuyas solemnidades se verifique: si se hace á título gratuito, será como la donacion ó cualquier otro contrato de esta clase; y si se hace en testamento, participará de la naturaleza de las últimas voluntades.

Algunos autores la confunden con la *renuncia*: si bien es verdad que tiene completa analogía con la renuncia llamada *traslativa*, que es aquella por la que nos desprendemos voluntariamente de algun derecho trasfiriéndole á otra persona; se diferencia mucho de la renuncia que los autores dicen *estintiva*, la cual consiste en el desprendimiento voluntario de un derecho, sin trasmitirlo a nadie, ó sin espresar la persona á quien lo

trasferimos. Y en efecto; por la cesion nos desprendemos de un derecho en favor del cesionario; por esta renuncia nos desprendemos de él absolutamente, sin espresar la persona á quien haya de aprovechar: para la validez de aquella es indispensable el consentimiento del cedente y del cesionario; para que esta surta sus efectos, basta la voluntad del renunciante. Mayor analogía existe entre aquella y la *delegacion*, aunque tambien tienen sus caractéres distintivos, que consisten en que para esta se requiere el consentimiento del deudor; cuando para la validez de la cesion es absolutamente innecesario. A pesar de esto, algunos de nuestros espositores consideran la cesion como una especie de delegacion, y con mayor motivo se la tiene por igual á la *subrogacion personal*, cuando esta se verifica por adquirir uno los derechos que á otro competen contra su deudor.

Dividen los autores la cesion de acciones en *legal* y *convencional*: es la primera la que emana de la misma ley, cuando esta, por razones de equidad ó necesidad, dispone que la accion que compete á uno se trasmita en favor de otro. La *convencional* es la que se verifica por convenio ó voluntad de las partes; y puede ser *espresa* ó *tácita*, *principal* ó *accesoria*, *voluntaria* ó *necesaria*, *onerosa* ó *gratuita*, segun sea el modo de espresarse la voluntad, la forma en que tenga lugar la cesion y la causa que la motiva. La *necesaria* pertenece con mas propiedad á la clase de las legales, pues aunque no se verifica sin que la parte interesada la reclame, y en esto se fundan los autores para colocarla entre las convencionales, es lo cierto que la ley impone el deber de prestarla, competiendo el *beneficio de cesion de acciones*, ó la accion *cedendarum actionum*, como le llamaron los romanos, al que tiene el derecho de exigirla. Por eso consideramos mas exacto hacer dicha division en *meramente legal*, *necesaria* y *convencional*, comprendiendo en la primera las cesiones que se verifican por ministerio de la ley: en la segunda, las que emanan de la misma ley; pero que no tienen efecto si la parte interesada no las reclama; y en la tercera, las que no reconocen otra causa que la voluntad de las partes: division que hemos adoptado como mas adecuada para esplanar esta importante materia con mayor claridad, segun se vé en las secciones siguientes.

SECCION III.

DE LA CESION CONVENCIONAL DE ACCIONES.

La cesion convencional de acciones tiene efecto mediante la voluntad de las partes. Ya hemos indicado que puede hacerse por contrato ó por última voluntad. Si se verifica de aquel modo, tendrán capacidad para hacerla todos los que puedan contratar y obligarse; y si de este, todos los que pueden hacer testamento. Está, por lo tanto, sujeta dicha capacidad á las prescripciones del decho relativas á las personas que pueden obligarse ó enajenar sus bienes, hacer donaciones y testar. Tambien en sus respectivos casos deben acomodarse á las solemnidades y requisitos, que para la validez de tales actos exigen las leyes. De lo uno y de lo otro se tratará en sus lugares oportunos, no haciéndolo aquí para evitar repeticiones. Véase **COMPRA-VENTA: CONTRATO: DACION EN PAGO: DONACION: OBLIGACION: PERMUTA: TRANSACCION: TESTAMENTO**, etc.

Las acciones y derechos aumentan nuestro patrimonio y entran en el dominio de los hombres, lo mismo que las cosas corporales. De aquí se sigue, que por regla general pueden ser objeto de la cesion todas las acciones y derechos que nos pertenecen, y de que podemos disponer libremente. Pero asi como el derecho de propiedad tiene sus limitaciones, fundadas unas en el bien público, y otras en la naturaleza de las cosas, ó en las relaciones entre determinadas personas, tambien los autores, fundados en las mismas causas, establecen varias escepciones de dicha regla, que han sido admitidas por la jurisprudencia, como apoyadas en la ley, en la razon ó en la equidad. Las indicaremos sumariamente, porque su esplanacion

tendrá lugar en los tratados ó artículos á que las mismas se refieren, dividiéndolas en tres grupos para mayor claridad, á saber: acciones que absolutamente no pueden cederse; acciones, cuya cesion solo puede tener efecto bajo ciertas limitaciones; y acciones que no pueden cederse á personas determinadas.

Las acciones ó derechos que absolutamente no pueden cederse, son: todos los privilegios y derechos personalísimos, porque van inherentes á la persona: el uso ó derecho de los vecinos de un pueblo en los pastos y demás aprovechamientos comunes, porque son un privilegio concedido á la comunidad de aquel vecindario: el derecho que tienen los parientes mas próximos del ausente para administrar sus bienes: el que antiguamente tenia el dueño de una casa, cuando queria habitarla, para obligar al inquilino á que la desocupase, lo cual hoy no puede verificarse, como se verá en su lugar oportuno: el derecho de sociedad, cuando para su formacion solo se tiene en cuenta la capacidad de las personas, como sucederia en una empresa literaria, por ser personalísimo este derecho, por estar basado sobre la capacidad en concreto, y quedar por lo tanto estinguido con la muerte, y asi como no pasa á los herederos, tampoco puede cederse: el que compete á la mujer para repetir su dote durante el matrimonio por ir empobreciendo su marido: la prerogativa que antiguamente tenian varios señores de usar horca y cuchillo: el derecho de revocar la donacion por causa de ingratitud: el pacto de estar al juramento del acreedor respecto de los daños ó intereses: el derecho que procede de la edad: la accion pupilar: la que tiene la mujer respecto de los alimentos que debe darla el marido: la pension eclesiástica: el uso de una cosa: lo que se deje ó mande en un testamento cerrado antes de que sea abierto judicialmente: y las acciones criminales por injuria, calumnia, adulterio, violacion y estupro.

Las acciones y derechos que no pueden cederse sino con ciertas limitaciones, son: el derecho de retracto de comunion, como no sea con la parte que pertenece al sócio cedente: el de retracto gentilicio cuando se cede á un estraño, aunque no exista ningun pariente, ni al consanguíneo remoto en perjuicio del próximo: los derechos que tiene el señor del dominio directo, como no ceda á la vez el mismo dominio: el de primogenitura ó sucesion á un mayorazgo, á no ser en favor del inmediato; pero podrán cederse sus frutos y rentas durante la vida del cedente que lo posee: el de sociedad sin consentimiento de los consócios: el de los alimentos futuros que se deben por testamento, como no intervenga aprobacion judicial; pero no será necesario este requisito para la cesion de los que se deban en virtud de contrato; la accion hipotecaria, sin que se ceda la personal: la accion contra el fiador sin ceder la principal: el usufructo, ni la accion al usufructo no constituido, aunque sí los frutos ó comodidad que de él resultan: y los derechos y créditos litigiosos en la forma que luego espresaremos.

Finalmente, hay acciones que nadie debe ceder á ciertas personas, ni estas aceptarlas. La accion que uno tenga contra el pupilo ó menor, no puede cederse en favor del tutor ó curador, ni aceptarse por estos: tampoco puede aceptar el prelado la cesion de una accion contra su iglesia: y por último, segun las leyes 15 y 16, tít. 77, Part. 3.ª, es nula la cesion de acciones hecha por contrato entre vivos en favor de persona mas poderosa ó mas *enredadora* que el cedente, ya sea este demandante ó demandado, lo cual hoy, que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, no puede tener aplicacion sino con las limitaciones que diremos en la seccion 5.ª

Por regla general toda cesion de acciones produce el efecto de trasmitir al cesionario, no solo el derecho principal, sino tambien todos sus accesorios, y cuantas acciones y recursos son necesarios para hacerlos efectivos ó exigirlos del deudor, privándose de ellos el cedente. Lo mismo dispone el artículo 1159 del proyecto de Código civil. Asi, si lo que se cede es un crédito con hipoteca, se entenderá tambien cedida la hipoteca; si es una accion real, se considerará igualmente cedido el derecho de reclamar la cosa de

cualquiera poseedor. Esto sin perjuicio de los pactos ó condiciones que puedan establecerse entre el cedente y el cesionario, que serán permitidos mientras sean lícitos y honestos, como en las demás convenciones. (Véase CONDICION: OBLIGACION: PACTO.)

De aquí se sigue que una vez hecha la cesion, como ya no pertenece al cedente el derecho cedido, no podrá reclamarlo del deudor ú obligado á prestarlo. Sin embargo, como la cesion se hace sin que este intervenga para nada en ella, sin exigirse su consentimiento, y aun quizás ignorando el hecho, es consiguiente que no quede obligado por esos hechos ajenos, mientras legítimamente no se le dé á conocer la persona del cesionario, y se le haga saber que con este, y no con el cedente, ha de entenderse en lo sucesivo. Esta notificacion se considerará hecha desde el momento en que el cesionario demande judicialmente al deudor el cumplimiento de la obligacion ó la prestacion del derecho cedido, ó desde que por el cesionario ó por el cedente se le haga saber en debida forma el traspaso de la accion ó derecho. Esta es la opinion que siguen la mayor parte de los espositores, los cuales fundados en una ley romana (1), convienen en que el deudor pagará legítimamente á su acreedor mientras no haya sido emplazado por el cesionario, ó no haya empezado á pagar á este, ó no le haya sido denunciada ó notificada la cesion; deduciendo del mismo principio, que hasta tanto que se verifique alguna de estas tres cosas, el cedente podrá válidamente cobrar, ó condonar su crédito, darlo á otro en pago, transigir con el deudor, y hacer cualquiera declaracion favorable á este y en perjuicio del cesionario, á quien no quedará otro recurso que repetir contra el cedente.

En cuanto al modo de denunciar ó hacer saber al deudor la cesion, para que esta surta sus efectos, nada disponen espresamente nuestras leyes, y por lo tanto habrán de seguirse las reglas generales. Bajo tal concepto, podrá la parte interesada acudir al juez presentando la escritura de cesion, y pidiendo que se notifique ó entere de ella al deudor, á los efectos consiguientes, requiriéndole para que en lo sucesivo no reconozca á otra persona con facultades para demandarle el cumplimiento de la obligacion ó derecho cedido. Este procedimiento es de los que, segun la ley de enjuiciamiento civil, pertenecen á la jurisdiccion voluntaria, y deberá, por lo tanto, acomodarse á las reglas que establece el artículo 1208 de dicha ley. Deberá, pues, presentarse la solicitud ante el juez de primera instancia, á cuya jurisdiccion pertenezca el deudor, cuyo juez, si entiende que la cesion está hecha con los requisitos legales, sin dar traslado alguno, dictará providencia por ante escribano público accediendo á la solicitud, y éste desde luego la notificará al deudor, siendo para ello hábiles todos los dias y horas, sin escepcion. Si el deudor, por haber satisfecho el crédito, ó estinguido el derecho cedido, por no reconocer en el cedente facultades para la cesion, ó por cualquier otra causa, creyere conveniente oponerse, podrá hacerlo, y entonces se hará contencioso el espediente, y se seguirá por los trámites establecidos para el juicio que corresponda (1).

Esta es la forma mas regular y conforme, y la menos espuesta á dificultades, de hacer saber al deudor la cesion ya realizada. No creemos, sin embargo, que puedan considerarse escluidos otros medios: el objeto es que conste plenamente que el deudor ha sido enterado de haberse realizado la cesion, y podrá emplearse, por tanto, cualquier otro medio, con tal que se consiga este objeto. Si un escribano público hubiere requerido al deudor con la escritura de cesion para que se dé por notificado de ella á los efectos consiguientes, acreditándolo por nota al pié de la misma, dando fé del acto, como en algunas partes se practica; si el cesionario, en virtud de la cesion, le hubiere demandado en acto de conciliacion; si se la hubiese hecho saber á presencia de testigos, exhibiéndole la escritura

(1) Ley 3, tit. 12, lib. 8.° del Código.

(1) Reglas 1.ª, 2.ª, 6.ª y 7.ª del art. 1208 de la ley de enjuiciamiento civil.

y dejándole copia de ella; el deudor, si no reclamare, quedará obligado á no reconocer en otro que en el cesionario personalidad para demandarle el crédito ó derecho cedido. Así lo exigen la equidad, la buena fé y la naturaleza del acto de que se trata, y esta es tambien la opinion mas seguida de los autores. Se reduce á uno de los muchos modos indefinidos de obligarse, por virtud de los cuales, de cualquier modo que se pruebe que quiso obligarse, se entiende que lo está al tenor de la ley del Ordenamiento.

Mientras la cesion no haya sido notificada al deudor, no puede ligar á este para nada, ni surtir respecto de él efecto alguno, como ya hemos indicado, porque le escusa su ignorancia, y él ninguna obligacion ha contraido con el cesionario. Así es, que legítimamente puede pagar al cedente, y transigir y celebrar con este cualquiera otro convenio, respecto del crédito ó accion cedida, quedando libre de la obligacion, sin que el cesionario tenga entonces accion alguna contra aquel: lo mismo dispone el art. 1438 del proyecto de Código civil, segun el cual, «el deudor, que antes de tener conocimiento de la cesion, satisface al acreedor, queda libre de la obligacion.» Del mismo principio se deduce, que si el cedente hubiere cedido á varios una misma accion ó derecho, el deudor solo puede reconocer personalidad para demanarle en aquel que primero le haya hecho la notificacion; este será preferido á todos aunque su cesion haya sido la última.

Tambien los espositores deducen del mismo principio, que los acreedores del cedente podrán embargar legítimamente antes de dicha notificacion el crédito ó derecho cedido, pues mientras esto no se realice, ni el cesionario es tenido como verdadero dueño del derecho cedido, ni el deudor está abligado para con otra persona que no sea su primitivo acreedor. Justo es que la notificacion de la cesion sea el punto de partida respecto de las obligaciones del deudor para con el cesionario, pero no nos parece conforme á los buenos principios que sea esa misma la fecha desde la cual la cesion ha de surtir su efecto contra un tercero. El cedente se desprende de todos sus derechos desde el momento en que verifica la cesion y la acepta el cesionario, y si bien este acto no puede perjudicar ni obligar al deudor, no así respecto de un tercero que ningun derecho tenia adquirido sobre la cosa cedida. Mas conforme á equidad y justicia, y á los principios de nuestro derecho es lo que sobre este punto establece el proyecto de Código civil. Dice así su artículo 1437: «La cesion de un crédito, derecho ó accion no surte efecto contra un tercero, sino desde que su fecha debe tenerse por cierta en conformidad á los artículos 1201 y 1209.» Estos disponen que las escrituras públicas harán fé contra tercero en cuanto al hecho de haberse otorgado el contrato y á su fecha; y que la fecha de un documento privado no se cuenta respecto de un tercero, sino desde el dia en que ha sido incorporado en un registro público, desde el de la muerte de uno de los que lo han firmado, ó desde el dia en que ha sido escrito o inventariado por algun escribano ó empleado público, procediendo por razon de su oficio. Así se evita todo temor de la suplantacion de las fechas; consta de una manera auténtica que estas son verdaderas; y no pudiéndose dudar del dia en que se ha realizado, ó estaba ya realizada la cesion, es consiguiente que desde aquel dia, y sin esperar á la notificacion del deudor, surta sus efectos respecto de un tercero, lo mismo que los surtiria una escritura de venta de una finca, ó cualquier otro contrato. Esto es lo justo, y lo que debe sancionar la jurisprudencia, salvo siempre el caso de que la cesion haya sido fraudulenta, pues entonces tendrá el tercero espedito su derecho para invalidar tal cesion, en razon á que nunca puede prevalecer en el derecho el funesto principio de que las leyes favorezcan el dolo.

La legislacion alfonsina, siguiendo las ficciones del derecho romano, supone tambien que el cesionario no puede hacer uso de la accion ó derecho cedido, sino como mandatario ó procurador del cedente. Así se vé claramente en la ley 64, tít. 18, Part. 3.ª cuya rúbrica es; «Como debe ser fecha la carta, quando un ome á otro vende el derecho que él ha en alguna cosa,» Esta ley, al fijar las

cláusulas que debe tener dicha escritura, despues de espresar el nombre del vendedor ó cedente, del cesionario, y de la persona obligada al pago del crédito ó derecho, como tambien la causa ó razon de donde este procede, añade, que el cedente hace al cesionario su «*personero* para demandar aquella debda assi como su cosa, poniéndole en su logar, é *otórgole poderió* para poder demandar aquella debda, é la pena, é los daños, é los menoscabos,..... bien assi como el vendedor lo podria facer en juycio, é fuera de juycio.» Y aunque por la célebre ley del Ordenamiento de Alcalá (1) debieron haber desaparecido todas esas fórmulas y sutilezas del derecho romano, es lo cierto, que aun se conservan en la práctica, y que apenas se otorga una escritura de traslacion de dominio, en que se cedan los derechos que se tienen sobre alguna cosa, sin que se ponga la cláusula de que el vendedor dá ámplio poder al comprador para que pueda ejercitar cuantas acciones y derechos á aquel pudieran corresponder sobre la cosa cedida ó enajenada, constituyéndole al efecto su procurador ó mandatario; cláusula que tenemos por redundante, pues lo mismo con ella que sin ella tendrá hoy el cesionario derecho para ejercitar en nombre propio todas las acciones que haya adquirido del cedente.

Segun se deduce de la misma ley, y de la naturaleza de la cesion, el cedente debe entregar al cesionario todos los títulos de pertenencia, ó documentos que acrediten la legitimidad del crédito ó derecho cedido; y este no tendrá derecho á exigir del deudor otra cosa que lo que resulte de su obligacion para con el cedente. Dedúcese tambien, y es conforme á equidad y justicia, que al deudor competan contra el cesionario todas las escepciones que hubiera podido utilizar contra el cedente, como igualmente la compensacion de lo que este le debiera antes de que legalmente se le hubiese hecho saber la cesion; aunque no asi la de cualquiera deuda contraida despues entre ambos, pues luego que ha sido hecha la notificacion del traspaso, el deudor está obligado á reconocer al cesionario por su legítimo acreedor, y á este tampoco pueden ya perjudicar los hechos del cedente. Tambien el deudor podrá oponer al cesionario la compensacion de lo que este le deba, por la razon de que se ha constituido en verdadero dueño del crédito, accion ó derecho cedido: y como sus gestiones contra el deudor son en nombre propio y como dueño verdadero, competen tambien á este contra él todas las escepciones que las leyes conceden al deudor contra el acreedor.

La cesion onerosa ó remuneratoria es irrevocable, y el cedente queda obligado á la eviccion y saneamiento como en los demás contratos bilaterales. Esta obligacion en los créditos se hace estensiva, no solo á la certeza de ellos, sino á la solucion de la parte que pueda resultar fallida, pues pueden ser legítimos y no cobrables. Sin embargo, si el cesionario se dá por satisfecho con el deudor, el cedente queda libre de responsabilidad. Lo mismo sucederia si el cesionario no hubiere reclamado la deuda cuando el deudor era solvente; pues si despues vino á pobreza, y la deuda se hizo incobrable en todo ó parte, ninguna indemnizacion podrá pedir al cedente en castigo de su negligencia, salvo siempre el pacto en contrario. Esta doctrina, aceptada por la jurisprudencia, por ser la que es conforme á las reglas generales de toda clase de obligaciones, ha sido desenvuelta con la mayor precision en el proyecto de Código civil, en los dos artículos que trasladamos á continuacion.

«Art. 1460. El vendedor de buena fé responde de la existencia y legitimidad del crédito al tiempo de la venta, á no ser que se haya vendido como dudoso; pero no de la solvencia del deudor, á menos de haberse estipulado espresamente, ó que la insolvencia fuese anterior y pública.»

«Aun en estos dos casos, solo responderá del precio recibido y de los gastos del número 1.° del art. 1447.» (Estos gastos son los del contrato y cualquiera otro pago legítimo hecho para la venta.)

«El vendedor de mala fé responde siempre

(1) Ley 1.ª, tit, 1.°, lib. 10, Nov. Rec.

de la solvencia de todos los gastos y de los daños é intereses.»

«Art. 1461. Cuando el cedente de buena fé se ha hecho responsable de la solvencia del deudor, y no han pactado las partes sobre la duracion de esta responsabilidad, se limita á un año, que se contará desde la cesion del crédito, si estaba ya vencido el plazo.»

«Si el crédito era pagadero á un término ó plazo todavía no vencido, la responsabilidad cesa un año despues del vencimiento.»

«Si el crédito consiste en una renta perpétua, la responsabilidad se estingue con el trascurso de diez años, á contar desde la fecha de la cesion.»

La revocacion y saneamiento de las cesiones voluntarias ó convencionales hechas á título gratuito, están sujetas á las mismas reglas que las donaciones y últimas voluntades, en cuyos artículos podrán consultarse.

Por último; debemos tambien tratar espresamente de los efectos que produce la cesion á título oneroso del derecho á una herencia, y de la que se hace en globo de varios derechos, rentas ó productos. La ley 34, tit. 5, Part. 5.ª los determina espresamente, y dice asi: «Si alguno que fuese establecido por heredero, vendiesse á otro todo el derecho que avia en los bienes, é en la heredad de aquel que le estableció por su heredero; maguer acaezca despues que á tal comprador como este venzan por juicio alguna cosa señalada de los bienes, con todo esso tal vendedor non es tenudo de facerla sana aquella cosa señalada de los bienes que le vencieron. Mas si por toda la heredad le vencieren, tenudo seria entonce de facerla sana la heredad, ó de pecharle el precio que rescibió por ella, con todos los daños, é los menoscabos. Esso mismo decimos que seria, si algund home comprasse todas las rentas de algund almoxarifadgo (véase este artículo), ó de alguna heredad; que maguer lo venciessen en juicio por alguna cosa señalada que saliesse de aquellas rentas, que non seria tenudo el vendedor de la sanear, nin de la descontar. Pero si por todas las rentas le venciessen, ó por la mayor parte dellas, entonce tenudo seria de gela sanar, ó de tornarle el precio, con todos los daños, é los menoscabos que ende vinieron.» De esta ley se deduce que el cedente ó vendedor de la herencia ó del conjunto de ciertos derechos, rentas ó productos, no es responsable de la efectividad de una cosa en particular, sino del todo ó la mayor parte de ellas. Y la razon es muy clara: porque no se venden en este caso las cosas singulares, sino el derecho que á todas ellas tiene el vendedor. Sin embargo, puede pactarse lo contrario porque no está prohibido. *Evictio quoque non præstatur in singulis rebus, cum hæreditatem jure venisse constet, nisi aliud nominatim inter contrahentes convenit*, dice la ley 1, tit. 45, lib. 8 del *Código*. Las disposiciones del proyecto de Código civil, referentes á esta materia, están basadas en los mismos principios, que ha sancionado la ley de Partida: dicen asi:

«Art. 1462. El que vende una herencia sin enumerar las cosas de que se compone, solo está obligado á responder de su cualidad de heredero.»

«Art. 1463. El que vende alzadamente ó en globo la totalidad de ciertos derechos, rentas ó productos, cumple con responder de la legitimidad del todo en general; pero no está obligado al saneamiento de cada una de las partes de que se componga, salvo en el caso de eviccion del todo ó de la mayor parte.»

«Art. 1464. Si el vendedor se hubiere aprovechado de algunos frutos ó percibido alguna cosa de la herencia que vendiese, debe abonarlos al comprador, si no se hubiese pactado lo contrario.»

«Art. 1465. El comprador debe por su parte satisfacer al vendedor todo lo que éste haya pagado por las deudas y cargas de la herencia y sus propios créditos contra la misma, salvo si se hubiere pactado lo contrario (1).»

(1) Lo mismo disponen los arts. 1696, 1697 y 1698 del Código civil francés; 1703, 1705 y 1704 del Sardo; 1573, 1574 y 1575 del holandés; y 1541, 1541 y 1542 del de Nápoles.

Sobre esta materia es necesario tener presente, que con arreglo á la ley 13, tít. 5., Partida 5.ª, si bien pueden cederse y enajenarse todos los derechos que podemos adquirir por razon de herencia, indeterminadamente, no puede hacerse igual enajenacion del derecho que se tenga á la herencia de una persona determinada, si no fuere con el beneplácito ó consentimiento de la misma, la cual, por este solo hecho, no queda ligada á no variar de voluntad nombrando otro heredero, como podrá hacerlo hasta su muerte. El cesionario no adquiere, en suma, mas que un derecho indefinido, é hipotético, y por tanto no *individual*, ni *exequible*; no mas que la esperanza, que es lo que tiene el cedente hasta que por la muerte del testador adquiere la herencia, y entonces como aquel se subroga en lugar de este, tendrá todos los derechos que competan al mismo, incluso el de acrecer. Para ejercitarlos, el segundo deberá entregar al primero todos los documentos que tenga referentes á la herencia cedida; lo mismo que debe hacerse en la cesion de créditos. Véase COMPRA-VENTA.

La cesion convencional de acciones puede quedar sin efecto del mismo modo y por las mismas causas, que pueden disolverse los contratos ó actos de cuya naturaleza participe. Tambien segun su índole especial producirá otras obligaciones y otros efectos entre el cedente y el cesionario, de que nos haremos cargo en las secciones siguientes.

SECCION IV.

DE LA CESION LEGAL Y NECESARIA, Y DEL BENEFICIO DE CESION DE ACCIONES.

La facilidad con que pueden confundirse la cesion legal y la necesaria, nos obliga á hacer una breve esplicacion de sus diferencias antes de esponer la doctrina relativa á la naturaleza y efectos de cada una. Ambas proceden de disposiciones del derecho; ambas pueden realizarse contra la voluntad del poseedor de las acciones, cuya cesion ha de verificarse; pero se efectuarán de diferente manera. Para que la cesion legal se entienda perfeccionada, basta que occurra el caso en que la ley lo dispone, sin que se necesite escritura, declaracion, ni otro acto posterior que la confirme; porque se verifica por ministerio de la misma ley. No sucede asi con respecto á la cesion necesaria: el derecho dispone que tenga lugar en ciertos casos; pero exige que el cesionario la reclame; que el cedente la haga espresamente; y si se negase, que pueda ser obligado judicialmente. Es decir, que la primera adquiere su eficacia meramente por ministerio de la ley; la segunda, aunque prescrita en la misma ley como obligatoria, necesita para que surta sus efectos que el poseedor de las acciones las ceda, ya voluntariamente, ya en virtud de precepto judicial, competiendo al pagador lo que se llama *beneficio de cesion de acciones*. Esas diferencias justifican la division que de esta seccion hemos hecho, para examinar la materia con el método y claridad convenientes en los subsiguientes párrafos.

§. 1.º *De la cesion de acciones meramente legal.*

Ya hemos dicho que esta cesion tiene efecto simplemente por ministerio de la ley: se verifica de pleno derecho, sin necesidad de que el cesionario la reclame, y aun tambien contra la voluntad del cedente y del deudor. La equidad y la justicia exigen, que cuando la ley obliga á uno á que pague por otro, se subrogue aquel en todas las acciones y derechos que contra este tuviere el acreedor que ha recibido el beneficio, por mas que esa obligacion traiga orígen de un acto voluntario. Cuando uno se constituye fiador ó se obliga á pagar por otro, ejerce un acto de beneficencia, fundado en la caridad cristiana, en motivos de beneficencia, en el principio natural de hacer respecto de los demás, lo que deseamos hagan con nosotros; y por eso la ley debe proteger al que tales actos ejecuta, concediéndole medios para reintegrarse de lo que hubiese pagado por otro, solo por evitarle la vejacion que le amenaza, mas no para li-

brarle enteramente de la obligacion. Pero como esto es un beneficio ó privilegio que la ley concede, no puede tener lugar sino en los casos espresamente determinados por la misma: de aquí el principio; *Non transeunt actiones nisi in casibus jure expressis.*

Disputan los espositores del derecho comun acerca de si tendrá lugar de pleno derecho en algun caso la subrogacion ó cesion de acciones; ó si aun en los casos en que la ley la concede, será necesario que al tiempo de pagar, la reclame el que paga por otro. Nos parece inútil entrar en el exámen de las opiniones encontradas, en que se dividen, cuando la recta razon, la equidad y las mismas leyes nos indican el camino que debe seguirse. Si uno paga por otro espontáneamente, sin ningun compromiso anterior que á ello pudiera obligarle, y sin que el deudor lo sepa, está clara su intencion de que quiere hacer una donacion al mismo deudor, y librarle absolutamente de la obligacion que sobre él pesaba, siempre que en el acto de pagar no diga espresamente lo contrario: si, pues, en tal caso no ha reclamado del acreedor ó protestado ante el juez, ó de otro modo legal, la cesion de acciones, no debe considerarse subrogado en lugar de este, ni podrá utilizar dicho beneficio, por haberse constituido *ex-postfacto*, *principal pagador*, *expromisor espontáneo*. Lo mismo sucederá al que se obligó solidariamente con otro, si paga el todo de la deuda sin reclamar del acreedor las acciones que contra este le competian, pues se entiende que el pago lo hace en nombre propio como principal obligado; y se entiende asi en ambos casos, por la incontestable razon de que, siéndole potestativo su reintegro, ó salvar sus acciones, no lo hizo. Hay en esto, sin embargo, cierto rigorismo de derecho, un tanto duro y no bien conciliable con la equidad. Por lo que, si se diera la costumbre de que en tales casos procede la cesion de acciones, toda vez que en el pago no haya sido perjudicado el deudor, ni en la *cantidad*, ni en las *resultas*, ni en el *modo*, ni en el *tiempo*; la jurisprudencia debe favorecer tal costumbre, lo cual limitariamos al caso en que el mismo pagador *voluntario* reclamase las acciones, y no sus herederos, ó derecho habientes, pues nadie puede interpretar mejor la intencion y motivos del pago, que el pagador; procediendo entonces el supuesto de que, cuando no reclamó, es porque fué su ánimo no reclamar. Pero el acreedor que paga á otro acreedor mas preferente; el simple fiador que se vé obligado á pagar por el deudor principal, deben en justicia quedar, por el simple ministerio de la ley, subrogados en todas las acciones y derechos que el acreedor, á quien pagaron, tuviere contra el deudor, porque no hicieron el pago con absoluta espontaneidad, ni con la intencion de librar al deudor de su obligacion. Estas consideraciones nos servirán de norma para la resolucion de las dudas que puedan ocurrir sobre esta materia.

Los casos en que, segun nuestras leyes, el que paga por otro adquiere de pleno derecho, ó simplemente por ministerio de la ley, las acciones que el acreedor tenia contra el deudor, son las siguientes:

1.° Cuando el acreedor hipotecario posterior ha pagado al hipotecario anterior; ó por oposicion de este, ha consignado el importe del credito: pero no obtendrá este beneficio un tercero á no mediar pacto ó cesion espresa. Asi se disponia en las leyes romanas (1), y lo mismo está mandado espresamente por la 34, tít. 13, P. 5. «A dos omes, dice, podria ser empeñada una cosa, al uno primeramente, é al otro despues. E si acaeciesse que despues desso el señor de la cosa la empeñasse aun á otro tercero, en tal manera podria ser fecha la obligacion, que este tercero avria el derecho en la cosa empeñada que avia el primero. E esto seria, si en la obligacion fuessen guardadas estas tres cosas. La primera es, que este tercero recibiesse la cosa á peños, con entencion que los dineros que diessen sobre ella fuessen dados á aquel á quien fué obligada primeramente. La segunda, que ficiesse tal pleyto (*convenio*) con aquel que gela empeñó, que el derecho que el

(1) Leyes 22, tít. 14; y 1.°, 5.° y 8.° tít. 18, lib. 8 del *Código*; 11 §. 4.°, y 12 §. 6.°, tít. 4.°, lib. 20 del *Digesto*.

otro avia sobre la cosa empeñada quel oviesse él. La tercera, que los dineros le fuessen dados assi en todas guisas al primero. Mas si el segundo, á quien fuesse otrosí empeñada la cosa, pagasse los dineros al tercero, maguer non ficiesse otro pleyto ninguno con él, entonce el derecho que avia el tercero en la cosa tornaria al segundo. Otrosí decimos, que si otro estraño á quien non fuesse obligado el peño sobredicho, nin oviesse derecho ninguno en él, lo quitasse del primero á quien fuera empeñado sobre tal pleyto, que le otorgasse el otro el derecho que avia sobre el peño, entonce tambien le fincaria obligada la cosa, como si gela oviesse empeñado primeramente el señor della.»

2.° Cuando el fiador paga la deuda por el deudor principal. En este caso el acreedor no puede darle carta de lasto contra los demás confiadores, porque al pagar en nombre del deudor estinguió la obligacion y todos los derechos y acciones que de ella pudieran resultar respecto de sus compañeros en la fianza; pero la ley le concede entonces la facultad de repetir del deudor lo que por el satisfizo. Asi lo establece la 11, tít. 12, P. 5, con estas palabras. «Mas si acaeciesse, que alguno de los fiadores pagasse todo el debdo en nome de aquel que fió, é non en el suyo, entonce aquel que recibe la paga dél, non puede otorgar poder para demandar alguna cosa á los otros fiadores. E esto es, porque todo el derecho que él avia contra los fiadores para demandarles la debda, ó para otorgar poder para la demandar á aquel que gelo pagó, todo se remata, porque el fiador le fizo la paga en nome del debdor principal. Empero el fiador que assi pagasse la debda como sobredicho es, en salvo finca su demanda, para poder demandar lo que pagó á aquel por quien entró fiador.»

3.° Cuando un tercero, por intervencion, ó por honor á la firma del librador ó de alguno de los endosantes de una letra de cambio, paga el importe de ella sin ser deudor. En tal caso quedan en su favor todas las acciones y derechos que el portador tenia contra el librador, si pagó por honrar la firma de este; y si lo hizo en consideracion á la de uno de los endosantes, adquirirá las acciones contra este, los anteriores á él, y el librador, pero no contra los endosantes posteriores, que por tal hecho quedan exhonerados de su responsabilidad (1). La misma cesion de acciones se verifica cuando un endosante hace el reembolso de una letra protestada por falta de pago, pues se subroga en todos los derechos del portador contra el librador, los endosantes que le precedan, y el aceptante (2). Véase LETRAS DE CAMBIO.

En el proyecto de Código civil se halla desenvuelta esta materia con la precision y claridad convenientes. Segun él, tiene lugar la cesion de acciones de pleno derecho, ó simplemente por disposicion de la ley, en favor de las personas siguientes:

1.° Del fiador que paga por el deudor principal.

2.° Del que siendo acreedor, paga á otro acreedor preferente.

3.° Del tercero no interesado que pague, consintiéndolo espresa ó tácitamente el deudor.

4.° Del que paga por tener interés en el cumplimiento de la obligacion, sin perjuicio de su derecho contra los otros que con él se hubiesen obligado mancomunadamente.

5.° Del heredero que admite la herencia á beneficio de inventario, y paga con sus propios fondos las deudas de la misma.

6.° Del que adquirió un inmueble, y paga á cualquier acreedor que tenga hipoteca sobre el mismo inmueble, anterior á su adquisicion.

7.° Del poseedor de una finca hipotecada con otras, pertenecientes á diversos dueños, que paga en su totalidad un crédito impuesto sobre ellas. Lo mismo se entiende respecto del poseedor de parte de una finca hipotecada en su totalidad y perteneciente á varios dueños; si bien en estos casos, y en el del número anterior, el subrogado ó cesionario legal solo podrá ejercer su derecho contra los demás poseedores, en proporcion al valor actual que tenga la finca, ó parte de ella á cada

(1) Art. 531 del Código de Comercio.
(2) Art. 539 de id.

uno correspondiente, de modo que el pago de la obligacion se divida proporcionalmente entre todos, incluso el que la pagó (1).

En todos estos casos el que paga por otro se subroga en todas las acciones y derechos que el acreedor tuviese contra el deudor; y esto se verifica por ministerio de la ley, de pleno derecho, en virtud y como consecuencia del hecho mismo de verificar el pago, y sin necesidad de la *carta de lasto*, ó de que el acreedor ceda espresamente sus acciones. Todos esos casos están fundados en los principios que hemos consignado anteriormente, y que tiene sancionados nuestra antigua jurisprudencia; por cuya razon, y por ser notoria su justicia, con arreglo á ellos deberán resolver los tribunales las cuestiones que se sometan á su fallo.

Los efectos de esta cesion de acciones son los mismos que hemos consignado en la seccion anterior: al cesionario competen todos los derechos que tenia el acreedor contra el deudor, y este puede utilizar contra aquel, no solo las escepciones que tuviere contra su primer acreedor, sino tambien las que tenga contra el mismo cesionario. Véase FIADOR; FIANZA, y los demás artículos que van citados.

§. 2.° *De la cesion necesaria, y del beneficio de cesion de acciones.*

Esta cesion puede tener su apoyo en la ley ó en la convencion de las partes: en la ley, cuando esta impone al acreedor el deber de ceder sus acciones al que paga por el principal obligado; en la convencion de las partes, cuando á falta de disposicion legal estas estipulan el traspaso de las acciones y derechos para un caso dado. Aunque esta cesion es voluntaria en su orígen, y se regirá por las reglas que hemos espuesto en la seccion anterior, una vez convenida, se convierte en necesaria para sus efectos ulteriores, y no puede prescindir de su cumplimiento la parte obligada. En uno y otro caso, el acreedor está obligado á ceder todas las acciones y derechos, que en virtud de su crédito le competan contra su deudor, en favor del que paga por este, otorgándole *carta de lasto* (véase este artículo) para que pueda repetir el pago del obligado ú obligados á verificarlo; y si aquel no lo hace, tendrá este la escepcion *cedendarum actionum*, como le llamaron los romanos, para eximirse del pago antedicho, ó de la responsabilidad por él contraida subsidiariamente, mientras el acreedor no cumpla con dicha obligacion. Esto es lo que se entiende por *beneficio de cesion de acciones*.

Es como un principio general en esta materia, que todos aquellos que contrajeron la obligacion de pagar una deuda por otros ó con otros, adquieren el derecho de hacer que el acreedor, al tiempo de pagarla, les ceda sus acciones contra los demás co-deudores. Fundado en este principio decidió Juliano, que el fiador, al tiempo de verificar el pago, debia obtener del acreedor la cesion de acciones, tanto contra el deudor principal, como contra los demás obligados por la deuda: *fidejussoribus succurri solet, ut stipulator compellatur ei qui solidum solvere paratus est, vendere cæterorum nomina* (1). Por la misma razon el acreedor no puede negar á un deudor solidario, de quien exige el total de la deuda, la cesion de sus acciones contra los demás co-deudores. Este deber nace de aquella regla de equidad, que nos obliga á conceder á nuestros semejantes, lo que necesitan cuando nada nos cuesta esta concesion. No admite duda que un deudor solidario tiene un justo interés en adquirir las acciones del acreedor contra sus deudores solidarios, á fin de que le reintegren de la parte de deuda que á cada uno corresponda, y el acreedor no puede negársela, como tampoco la puede negar á un fiador, ni generalmente á todos aquellos que siendo responsables de la deuda, tienen interés cuando la han pagado de que se les reintegre en todo ó parte por aquellos, con

(1) Arts. 1117 y 1753 del proyecto de Código civil.

(1) Ley 17, tit. 1.°, lib. 46 del *Digesto*.

los cuales ó por los cuales son deudores. Si el acredor se negase en tal caso á ceder sus acciones al fiador ó deudor solidario, tendrian estos el *beneficio de cesion de acciones*, del cual dice Godofredo (1), *est hujus generis, ut fidejussor possit solutionem denegare creditori, antequam actiones ab eo cessas accipiat.*

En los mismos principios del derecho romano está fundada la legislacion alfonsina, segun la cual la cesion necesaria de acciones tiene lugar en los casos siguientes:

1.° Cuando son varios los fiadores responsables subsidiariamente del pago de una deuda, y uno de ellos la paga, no en nombre del deudor principal, sino en el suyo propio. En este caso el acreedor está obligado á cederle sus acciones contra el deudor y los confiadores, para que el que pagó pueda repetir, de aquel el todo de la deuda, y de estos la parte que á prorata les corresponda; y asi lo dispone terminantemente la ley 11, título 12, Part. 5. «Pagando alguno de los fiadores todo el debdo en su nome, puede demandar á aquel á quien face la paga, *que le otorgue el poder que avia* para demandar el debdo contra los fiadores, que fueran sus compañeros en aquella fiadura, é otrosí el que avia contra el debdor principal; *é él devegelo otorgar*: é despues que le fuere otorgado este poder, en su escogencia es, de demandar á cada uno de los otros fiadores, aquella parte que pagó por ellos... E si esto non quisiere facer assi, puede demandar él por sí mismo al principal debdor todo el debdo; maguer el señor del debdo non le otorgase el poder que avia contra él.» Del literal contesto de esta ley resulta bien clara la diferencia entre la que hemos llamado cesion meramente legal y la necesaria. Si el fiador paga en su nombre, por ministerio de la ley tiene todas las acciones del acreedor para dirigirse contra el deudor, y no puede hacerlo contra los confiadores sin que aquel se las ceda; y en tal caso queda á su arbitrio reclamar del deudor principal el todo de la deuda, ó de los confiadores la parte que á cada uno corresponda, distribuyendo con igualdad la deuda entre todos, incluso el mismo pagador.

2.° Cuando el fiador al tiempo de verificar el pago no manifestó si lo hacia por sí, ó en nombre del deudor principal. En este caso debe pedir al acreedor la cesion de acciones en el acto de pagar, y entonces este viene obligado por la ley á otorgársela; pero no, si la reclamare despues, porque en tal caso se presume que pagó por el principal y no por sí mismo, como aparece de la citada ley de Partida. «E si alguno de los fiadores pagasse todo el debdo simplemente, non diciendo que lo facia en nome del debdor principal, ni en el suyo, si luego que la paga ha fecha, demanda á aquel que la face, que le otorgue poder de demandar lo que pagó á los otros fiadores; decimos, que le deve ser otorgado. E si entonce non lo demanda, dende adelante non gelo deve otorgar; porque semeja que fizo la paga en nome del debdor principal, é non en el suyo. Pero bien puede demandar al debdor, que le dé lo que pagó por él.» La diferencia que hay entre este caso y el anterior es, que en el primero se puede pedir la cesion de acciones en cualquier tiempo, y en el segundo se ha de reclamar precisamente en el acto del pago, de modo que no haciéndolo asi, solo le queda al fiador que pagó la deuda el derecho de reclamar del deudor el todo de ella, sin necesidad de la cesion ó carta de lasto.

Las doctrinas de los dos párrafos que anteceden son aplicables á los co-deudores mancomunados ó solidarios, cuando uno de ellos paga la deuda á que todos se habian obligado, porque los casos son idénticos. Estos, lo mismo que los fiadores, al tiempo de contraer su obligacion, contaron con los recursos que podrian tener en su caso contra los demás obligados mancomunadamente, sin cuya circunstancia quizás no se hubiesen comprometido; y no seria justo privarles de esos recursos.

La cesion de acciones para que produzca sus efectos, segun la opinion mas seguida por los espositores del derecho romano, ha

(1) Glosa 18 á la ley del *Dig.* antes citada.

de reclamarse precisamente al tiempo de verificar el pago; y se fundan para ello en que, como este estingue la obligacion principal, y con ella todas las acciones que el acreedor tuviese contra su deudor, en vano se pretenderia que aquel cediese lo que ya no tenia. Asi lo deducen de la ley *Modestinus* (1) que dice: «*Si post solutum sine ullo pacto omne, quod ex causa tutelæ debeatur, actiones post aliquod intervallum cessæ sint, nihil ea cessione actum, cum nulla actio superfuerit.*» Sin embargo de ser tan filosófica esta razon, la mayor parte de nuestros autores, y entre ellos Gregorio Lopez (2), no siguen con razon esa doctrina, por no creerla equitativa ni conforme á la ley de Partida antes citada. Ya hemos dicho que segun esta ley, cuando el fiador no espresa terminantemente que hace el pago en nombre del deudor principal, no tiene derecho á la cesion de acciones si no la reclama en el acto, porque se supone que pagó en nombre de este, y no por su propia obligacion. Mas cuando espresa que paga en su nombre, entonces la ley no fija término para reclamar la cesion, y la equidad aconseja que pueda pedirla aun despues de hecho el pago, porque no es justo que quede privado de ese derecho cuando su intencion no haya sido renunciarlo.

La razon de equidad que acabamos de esponer, justifica la falta de *verdad real*, que como decimos en el artículo CESIONARIO, resalta en estos casos de derecho, en los cuales contra la regla general *memo dat, quod non habet*, por una ficcion del derecho se permite al acreedor que ceda lo que en realidad no tiene ya, pues si está pagado, nada se le debe, y nada por tanto tiene derecho á reclamar. Este inconveniente lo salvaban los jurisconsultos romanos, con otra *ficcion de derecho*, pues suponian que el pago hecho con subrogacion de acciones, mas bien que un verdadero pago, debia reputarse como una venta que de su crédito, y derechos anejos, hace el acreedor á aquel de quien recibe el dinero. «*Cum is, qui et reum et fidejussores habens*, dice una ley (1), *ab uno ex fidejussoribus accepta pecunia præstat actiones, poterit quidem dici nullas jam esse, cum suum perceperit, et perceptione omnes liberati sunt; sed non ita est. Non enim in solutum accipit, sed quodammodo nomen debitoris vendidit, et ideo habet actiones, quia tenetur ad idipsum, ut præstet actiones.*» ¿Para qué tantas ficciones cuando puede haber realidad? Y que puede haberla lo demuestran los hechos, lo dicta el sentido comun, y lo confirma el proyecto de Código civil estableciendo que, cuando son dos ó mas los fiadores de un mismo deudor, y por una misma deuda, el que de ellos la haya pagado á virtud de demanda judicial, ó hallándose el deudor principal en estado de quiebra, podrá reclamar de cada uno de los otros la parte que proporcionalmente le quepa, recayendo sobre todos en la misma proporcion la parte del que acaso resultare insolvente (2). Esto mismo se determina respecto de los deudores mancomunados (3); y eso es lo racional, lo justo y lo conveniente. Con el pago queda estinguida la primera obligacion; pero por ministerio de la ley debe nacer otra de este hecho, en favor del que pagó, contra los demás que con él estaban obligados de mancomun, para que le indemnicen proporcionalmente, sin necesidad de que el acreedor ceda sus acciones. Esto es lo que debe ser segun los buenos principios; pero no es lo que preceptúa la ley de Partida antes espuesta, cuya disposicion habrá de observarse mientras otra cosa no se resuelva por el poder legislativo. Véase, sin embargo, el artículo CESIONARIO.

La doctrina espuesta hasta ahora es referente á la cesion necesaria de acciones, que tiene su fundamento en la ley. La que se deriva de pacto ó convenio entre las partes, se regirá por las reglas de los contratos, y será exigible cuando llegue el caso para el cual la hayan estipulado los interesados. Los efectos de una y otra son los mismos que

(1) Ley 76, tit. 5.°, lib. 46 del *Digesto*.
(2) Glosa 1.ª á la ley 11, tit. 12 Part. 5.ª

(1) Ley 36, tit. 1.°, lib. 46 del *Digesto*.
(2) Art. 1758 del proyecto de Código civil.
(3) Art. 1063 de id.

hemos espuesto en el párrafo anterior respecto de la cesion meramente legal: el cesionario adquiere todos los derechos que el acreedor tenia contra el deudor, y tambien los que tuviese contra los confiadores del que pagó, y contra los otros deudores obligados con él mancomunadamente, si bien con deduccion de la parte de la deuda que al mismo corresponda, como hemos dicho; y estos podrán oponerle las mismas escepciones que habrian correspondido al deudor principal contra el acreedor, y que no fuesen puramente personales de aquel. Asi se dispone tambien en el proyecto de Código civil (1), no por virtud de la cesion, que no es necesaria, sino de pleno derecho y por ministerio de la ley.

Consecuencia de esos mismos efectos es, que el acreedor no puede exigir el pago del obligado subsidiariamente, si al propio tiempo no le cede sus acciones contra el deudor principal y contra los demás obligados mancomunadamente con el que pagó, al cual compete la escepcion *cedendarum actionum*, ó el *beneficio de cesion de acciones*, el cual, como se deduce de la doctrina antes espuesta, solo puede tener lugar en las obligaciones mancomunadas. Cuando estas son simples, como cada deudor ó fiador no responde mas que de la parte á él correspondiente, si se le reclama el todo de la deuda, podrá escepcionar la *plus-peticion* oponiéndose al pago de lo que no debe; y si llegó á realizarlo, podrá repetirlo del mismo deudor como indebidamente pagado, cuando lo haya hecho por ignorancia, ó no tendrá accion alguna si lo hizo á sabiendas; mas en ninguno de estos casos le compete el beneficio de cesion de acciones. Tampoco compete al fiador que paga la deuda en nombre del deudor principal, y no por su propia obligacion, como antes hemos dicho, esponiendo la doctrina de la ley 11, tít. 12, Part. 5.ª

Una cuestion importante promueven algunos autores sobre esta materia. Cuando el acreedor por su culpa, ó por un hecho propio y voluntario, se ha constituido en el caso de no poder ceder sus acciones, ¿podrá el fiador oponer esta escepcion para eximirse de los efectos de la fianza? La resolucion afirmativa es indudable en buenos principios. La fianza es un contrato accesorio, que queda estinguido con la obligacion principal: si esta ha dejado de existir, bien por prescripcion, ya porque el acreedor haya hecho condonacion de su crédito en favor del deudor principal, ó por cualquiera otra causa, la fianza por ese mismo hecho ha quedado estinguida; ha quedado disuelta la obligacion del fiador, y por esta escepcion, mas bien que por la de *cedendarum actionum*, deberá repelerse la demanda del acreedor. Además; la misma ley 11, tít. 12, P. 5, impone á este la obligacion de ceder sus acciones contra los demás fiadores en favor del que le paga: y si por su culpa no puede cumplir este deber, mal podrá exigir que el fiador solvente la deuda, cuando este se oponga porque aquel no pueda llenar las condiciones en dicha ley requeridas.

Cuando el acreedor haya dejado libre de su obligacion á uno de los fiadores mancomudados, y pretenda de los otros el pago de toda la deuda, podrán estos en virtud del beneficio de cesion de acciones oponerse al pago, no en cuanto al todo, sino solo respecto de la parte que á ellos debia reintegrar el fiador que quedó libre de la fianza. Por ejemplo, si eran cuatro los fiadores, el acreedor solo podrá reclamar su deuda á los otros tres con deduccion de la cuarta parte que á estos debia reintegrar el otro fiador si no se le hubiese librado de su fianza. Esta decision se funda en que cuando muchos se constituyen fiadores por un deudor, cuentan con las acciones que los unos tendrán contra los otros, y con esta confianza pactan una obligacion que sin tal consideracion tal vez no hubieran contraido, y no es justo que el acreedor les prive de estos derechos por su voluntad, ó por su capricho. Esta razon no milita cuando el fiador que quedó libre de la fianza, contrajo esta obligacion subsidiariamente despues que los otros estaban obligados, y por lo tanto en tal caso no competirá á estos el beneficio de cesion de acciones, toda vez que el hecho del acreedor en nada les ha perjudicado.

(1) Arts. 1063, 1735, 1735 y 1759.

Lo que acabamos de manifestar con respecto á los fiadores es aplicable á los deudores solidarios. Cuando muchas personas contraen una obligacion solidaria, se obliga cada uno por el todo con la confianza de que tendrá acciones contra los otros, caso de pagar el total. De aquí se sigue que cuando el acreedor por su voluntad les priva de estos medios de reintegrarse, constituyéndose en estado de no poder cederles sus acciones contra aquel á quien ha dejado libre de aquella obligacion, no es justo que dirija su accion contra los otros, como no sea deduciendo las porciones que podian haber reclamado de dicho deudor; y si lo hiciere, les competerá el beneficio de cesion de acciones. Véase DEUDOR: FIADOR: FIANZA.

SECCION V.

De la cesion de derechos litigiosos.

La cesion de derechos litigiosos se hace las mas veces con un fin reprobado. Por regla general nadie desea la adquisicion de una cosa, en cuya posesion pueda ser perturbado; y si á pesar de conocer este peligro, la adquiere, es de presumir que se propone un lucro escesivo, ó causar molestias y vejaciones á su adversario. En uno y otro caso el fin es inmoral, y las leyes, por lo tanto, no deben proteger esa clase de enajenaciones, que tienden además á perturbar la tranquilidad de las familias y hasta el órden público. En estas consideraciones, altamente morales, se fundaron los Emperadores Anastasio y Justiniano para prohibir la cesion de derechos litigiosos, aunque con justas escepciones, como hemos demostrado en la seccion 1.ª; y en las mismas se han fundado nuestros legisladores para trasladar á nuestro derecho esa misma prohibicion, que encontramos en las leyes del Fuero Real (1) y en las del Código alfonsino (2), calificando de fraudulentas ó maliciosas tales enajenaciones.

Estas leyes se hacen cargo de todos los casos en que podrá verificarse la trasmision de derechos litigiosos, estableciendo para cada uno de ellos su sancion correspondiente. Hablan de cuando la verifica el actor, y de cuando la hace el reconvenido, y tambien de cuando esto tiene lugar antes ó despues del emplazamiento. De todos estos casos trataremos, esponiendo la doctrina de dichas leyes, y la jurisprudencia que debe considerarse vigente.

Antes debemos indicar que es necesario no confundir los derechos *inciertos* con los *litigiosos*, porque en realidad son cosas muy diferentes. *Inciertos* son los derechos cuando se ignora la importancia de lo que se cede, como en la cesion de una herencia; y *litigiosos*, cuando consta la cuantía del derecho cedido, ó cuando se cede una cosa específica sobre la cual otro pretende tener derecho, y hay ya pendiente, ó por lo menos anunciado pleito sobre ella. Sin esta circunstancia no puede considerarse el crédito como litigioso, y faltando ella, la cesion del mismo estaria sujeta á las reglas generales espuestas en la seccion 3.ª; y si el derecho es incierto, se rige por las reglas indicadas en la misma seccion respecto de esta clase de derechos. En la presente solo nos haremos cargo de la cesion de aquellos derechos sobre los cuales hay pleito pendiente, ó se teme que lo haya, llamados por esto litigiosos, sin comprender los inciertos, por mas que para su reclamacion ó designacion haya necesidad en algun caso de acudir á los tribunales.

No puede menos de seguirse en esta materia la regla general de que todo hombre puede ceder ó enajenar aquello que le pertenece, sin mas restricciones que las que exijan el bien público ó privado. Este mismo principio se reconoce en la ley 16, tít. 7, Partida 3.ª, la cual, despues de prohibir las enajenaciones de derechos litigiosos hechas con dolo, como luego veremos, añade: «Mas si por aventura el demandado enajenase su derecho á otro ome que non fuesse mas poderoso quél, é esto liziesse desamparándose de todo el derecho que y avia, é otorgándolo *verdaderamente* al otro, ante que emplazase á su contendor; decimos que tal enajena-

(1) Leyes del tít. 12, lib. 1.º del Fuero Real.
(2) Leyes 20, tít. 2; 13, 14, 15, 16, y 17, tít. 7, Part. 3.ª

miento es valedero, *porque semeja que fué fecho sin engaño.*» Resulta, pues, de esta ley, que cualquiera puede ceder sus derechos litigiosos antes del emplazamiento, siempre que lo haga sin dolo ó engaño, y se supone que no lo hay cuando la cesion es verdadera y no simulada, y cuando el cedente traspasa al cesionario todo su derecho en aquella cosa, sin reservarse nada para sí, porque si se reserva alguna parte, es de inferir que el cedente se propone obtener alguna utilidad de las gestiones del cesionario, y entonces la cesion tiene todas las apariencias de ser simulada ó maliciosa, y la ley no debe protegerla.

Y no la protege, en efecto: antes bien la declara nula, como hemos dicho, imponiendo al cedente la pena de cuanto hubiera cedido con este vicio. «Si algun demandador, dice la misma ley, ante que emplace en juicio á su contendor, ó despues, enajenare aquel derecho, que él ha contra él, en otro ome que fuesse mas poderoso que si, por razon de algun oficio que toviesse, otorgándole aquel derecho en razon de vendida, ó de cambio ó de donadio, ó enajenándole en otra manera cualquier semejante destas: mandamos, que el tal enajenamiento non vala, é quel demandado non sea tenudo de responder á ninguno dellos sobre esta razon. E demás, el que gelo enajenó, pierda quanto derecho avia contra el otro, en aquel pleyto que enajenó.» Esta ley, como hemos visto, habla del demandante, pero igual prohibicion hace la anterior al que puede ser demandado. «Si algund ome dice (1), sospechando que algund otro lo queria emplazar, por razon de alguna cosa de que era tenedor, la enajenasse, ante que fuesse emplazado sobre ella, *engañosamente*, á otro ome que fuesse mas poderoso que sí, ó de otro señorío, ó ome que fuesse muy escatimoso, ó reboltoso, mas que él, porque al otro fuesse mas embargado su derecho, aguisándole que oviesse mas fuerte adversario que él; mandamos, que el que *tal engaño* ficiere, que non le vala; é que sea en escogencia del demandador de aquella cosa, de la demandar á él, bien assí como si la toviesse en su poder, ó al otro, á quien fué enajenada. E esta demanda se puede facer con todos los daños, é los menoscabos, que ficiere por esta razon.» Lo mismo dispone la ley 30, tít. 2.°, de la Part. 3.ª, añadiendo que si el demandante obtuviese el precio de la cosa del cedente, no podrá despues demandarla al cesionario.

Penetrando en el espíritu de estas leyes, se vé la justicia que encierran sus disposiciones, por mas que hoy resistan su aplicacion literal los principios fundamentales de la sociedad, como luego veremos. Su objeto fué prohibir las cesiones fraudulentas y maliciosas de los derechos litigiosos, y en su sistema casuístico designaron las que entonces se cometian ó podian cometerse: los demandadores y demandados buscaban *carreras para facer engaño*, y el legislador se vió en la necesidad de *catar* tambien *carreras para contrastar la maldad de ellos*. Esta es la razon de la ley, que como de eterna justicia, nos servirá de guia para determinar hoy las cesiones de derechos litigiosos que no deben tener efecto. No podrá anularse una cesion porque se haya hecho á persona mas poderosa, segun luego demostraremos; pero en la razon de la ley y en la conciencia de todo el mundo está que no sea válida la cesion hecha fraudulenta, simulada ó maliciosamente, y con la conocida intencion de perjudicar á la parte contraria. Es nulo todo contrato en que interviene dolo, segun los principios generales del derecho; y de consiguiente lo será tambien la cesion de derechos litigiosos que se haga con ese vicio antes del emplazamiento de la demanda. Esto es lo justo y lo que han querido dichas leyes, como se deduce de sus mismas palabras, y como lo confirma la siguiente 17 del mismo título y Partida, segun la cual son válidas esas cesiones cuando se hacen en testamento, por la razon de que «sospechar non deve ome, que aquel que está cerca de su finamiento, que dexasse torticeramente en su manda, ninguna cosa escrita, que fuesse á daño de otro, é á peligro de su ánima.»

En cuanto á los derechos litigiosos deducidos ya en juicio, es absoluta la prohibicion

(1) Ley 15, tít. 7, Part. 3.ª

de cederlos, venderlos, donarlos ni enajenarlos de otro modo, despues de hecho el emplazamiento, que establece la ley 13 del mismo título y Partida, suponiendo que tal enajenacion es hecha siempre con malicia ó con engaño; prohibicion que alcanza tanto al demandante como al demandado, con declaracion de nulidad y la pérdida del precio de la cosa por vía de pena, cualquiera que sea la persona, á cuyo favor se haya hecho la trasmision. Tres escepciones, sin embargo, se establecen por la ley 14 siguiente á esta prohibicion general, á saber: 1.ª Cuando el derecho litigioso se cede ó traspasa por razon de casamiento; esto es, cuando se dá por vía de dote ó donacion propter nupcias. 2.ª Cuando se cede á un condueño del mismo derecho. 3.ª Cuando se traspasa por razon de legado ó manda hecha en testamento. En los dos primeros casos, está obligado el cesionario á contestar la demanda sobre que fué hecho el emplazamiento, y á seguir el pleito como dueño de la cosa; y en el último, debe hacer esto el heredero, quien quedará relevado de entregar la cosa al legatario si perdiese el pleito sin su culpa, si bien éste está facultado para personarse tambien en el litigio y seguirlo con el heredero, si temiese que éste no ha de poner en él toda la diligencia necesaria.

Este es el derecho constituido respecto á la cesion de acciones deducidas en juicio. Sin embargo, debemos advertir que no están en uso las penas antedichas de la ley de Partida, siendo en su lugar condenado el que cede ó enajena la cosa litigiosa á la indemnizacion de daños ó perjuicios causados al comprador ó cesionario, cuando éste ignoraba dicha circunstancia; pero si el adquirente sabia que la cosa estaba en litigio, y la adquirió con la condicion de estar á sus resultas, nada podrá reclamar.

Nótese tambien que aunque la prohibicion es absoluta, la ley se refiere únicamente á las enajenaciones de derechos litigiosos hechas *maliciosamente ó con engaño*, como lo demuestra la razon que dá de su mandato. «Muchas vegadas acaece, dice la ley 13 antes citada, que los emplazados, *por facer engaño* á los que los ficieron emplazar, venden, ó enajenan *maliciosamente*, las cosas sobre que los emplazaron...» Luego si la enajenacion ó cesion no ha sido hecha con malicia ni con engaño; si el cedente prueba que ha tenido para hacerla justas causas, será válida por no hallarse comprendida en la razon de la ley: esto se confirma con las escepciones que establece la siguiente, en las cuales es manifiesta la justicia de la causa en que se fundan. La cesion, pues, en tal caso surtirá desde luego todos sus efectos respecto del cedente y del cesionario. En cuanto al deudor, no producirá efecto alguno mientras no se le notifique en la forma que hemos espuesto en la seccion 3.ª; y si el pleito estaba ya contestado, la naturaleza del cuasi-contrato, que segun nuestras leyes se contrae por la contestacion entre el actor y el demandado, exige, que éste no venga obligado á reconocer en el cesionario personalidad para seguir el litigio á no ser que el cedente le hubiese hecho su procurador, otorgándole el poder necesario al tiempo de cederle sus derechos y acciones.

La doctrina de las leyes de Partida que acabamos de esponer sobre la cesion de derechos deducidos en juicio, está conforme con lo que disponen las del título 37 del *Código, De litigiosis*; pero es de notar que aquellas no hayan admitido las justas prescripciones de la constitucion de Anastasio. En la seccion 1.ª hemos visto que con arreglo á esta constitucion, los compradores de derechos litigiosos solo podian exigir del deudor lo que hubiesen dado por la cesion y los intereses correspondientes, y que estos mismos principios, atendida su justicia y conveniencia, habian sido adoptados por la mayor parte de las naciones antiguas y modernas. Y ¡cosa singular! nuestros mas eminentes jurisconsultos proponen hoy lo mismo que hace catorce siglos, mandó el emperador Anastasio, supliendo asi la omision cometida por el Rey Sábio en su inmortal obra de las Partidas. Véanse, sino, y compárense con la ley *Per diversas*, del *Código*, que es la constitucion antes citada, los artículos del proyecto de Código civil, publicado en 1851; dicen asi:

«Art. 1466. Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tiene derecho á estinguirlo, reembolsando al cesionario el precio que pagó, las costas que se le hubieren ocasionado, y los intereses del precio, desde el dia en que este fué satisfecho.»

«Entiéndese litigioso un crédito, desde que se contesta á la demanda relativa al mismo.»

«El deudor tendrá nueve dias para usar de su derecho, desde que el cesionario le reclame el pago.»

«Art. 1467. Se esceptúan del artículo anterior la cesion ó venta hechas:

1.° A un coheredero, ó condueño del derecho cedido.

2.° A un acreedor, en pago de su crédito.

3.° Al poseedor de una finca sujeta al derecho litigioso que se cede (1).»

A primera vista se comprende la justicia, que ya hemos demostrado, de esta novedad que se proyecta introducir en nuestro derecho. La facultad que se concede al deudor para hacer suyo el derecho cedido á título oneroso por la cantidad que hubiese costado al cesionario, con mas las costas é intereses, es una especie de retracto, tan justificado como puede serlo el de los condueños. A la paz y buena armonía de las familias, no menos que al órden público interesa, la disminucion de los litigios, y por lo tanto, es conveniente, equitativo, y hasta humanitario, que el deudor se subrogue en lugar del cesionario, reembolsando á este todos los gastos ocurridos, y haciendo suyo el contrato, como sucede en los retractos, con lo cual queda fenecido el pleito. No nos estendemos en mas consideraciones, porque no se trata de un derecho constituido, en cuya aplicacion puedan ocurrir dificultades. Notaremos, sin embargo, que segun el proyecto debe contestarse la demanda para que el crédito se considere litigioso, y es la razon porque en buenos principios, y hablando con propiedad, no hay litigio mientras no haya contestacion: antes de que esto suceda, el derecho podrá ser *dudoso*, pero no plenamente *litigioso*, y su cesion se regirá por las disposiciones generales. Las leyes de partida, aunque reconocen tambien que no hay pleito sin demanda y contestacion (1), consideran asimismo el emplazamiento como la «raiz é comienzo de todo pleito,» (2) por cuya razon y porque con el emplazamiento se interrumpe la buena fé, es el reputar como litigioso, para los efectos de que se trata, el crédito cedido despues del emplazamiento, aun cuando la demanda no haya sido contestada.

En resúmen: por regla general es nula entre nosotros la cesion de derechos litigiosos, hecha maliciosamente ó con dolo, tanto antes como despues de haberse principiado el pleito, ó de haber sido emplazado el demandado. Si se hizo antes de principiarse el pleito, se reputará válida la cesion, y lo será de derecho mientras no se justifique que hubo dolo, cuya prueba incumbirá á la parte que reclame la nulidad. Y si se hizo despues del emplazamiento, se presume de derecho el dolo en el cedente, y de consiguiente se tendrá por nula la cesion á no ser que éste justifique que tuvo causa justa para verificarla. Esta es la principal diferencia entre los dos casos de que se trata, que se deduce de su naturaleza y del espíritu de las leyes de Partida, además de la que resulta de los efectos que producen y que antes hemos espuesto.

Réstanos solo examinar una dificultad, que ya antes hemos indicado. Todas las leyes de Partida que hemos citado referentes á esta materia, prohiben la cesion de derechos litigiosos, tanto antes como despues del emplazamiento, á persona *mas poderosa* que el cedente. ¿Podrá hoy considerarse vigente esta prohibicion? De ningun modo; ni está en práctica por haber cesado la razon de la ley. Esta prohibió esas cesiones porque siempre se hacian con el objeto de oponer un adversario mas fuerte al colitigante, y de consiguiente eran hechas con malicia. Sabidos son los privilegios de que en aquellos tiem-

(1) Lo mismo disponen los arts. 1699, 1700 y 1701 del Código civil francés; 1705, 1706 y 1707 del Sardo; 1543 y 1544 del napolitano, y otros.

(1) Ley 3. tit. 10, Part. 3.ª
(2) Proemio del tit. 7, Part. 3.ª

pos gozaban algunas personas, y los medios que tenian para elegir un tribunal que les fuera propicio y aun tambien para torcer la justicia en su favor: por esto hizo muy bien la ley en declarar nulas esas cesiones por estar hechas con dolo. Pero hoy han cambiado las leyes fundamentales, y han desaparecido aquellos privilegios; hoy es otra la constitucion de la sociedad: todos son iguales ante la ley; nadie influye, ó no debe influir, en los fallos de los tribunales, y de consiguiente ha desaparecido la razon que tuvo la ley para prohibir por regla general la cesion de derechos litigiosos en favor de persona mas poderosa que el cedente.

Aun pudiera añadirse, y es realmente fundado el supuesto de que lo contrario es lo que sucede en el dia: es muy comun ceder derechos litigiosos, no á persona mas poderosa, sino á persona mas pobre, la cual, obteniendo la declaracion de pobreza, puede litigar sin el gasto del papel sellado, y sin pagar derechos á los curiales: á personas que carezcan además de responsabilidad para el caso de una condenacion de costas, con lo que se consigue causar impunemente molestias y gastos á la parte contraria, la cual por librarse de estas vejaciones suele entrar en una transaccion y ceder parte de unos derechos que de justicia le corresponden. No hay disposicion legal que tienda directamente á prohibir estas cesiones, ni casi podria darse sin parecer que se ultraja la pobreza; pero lo dicho está en el sentido de las leyes de Partida que antes hemos citado. El objeto de estas es, como hemos demostrado con sus mismas palabras, prohibir las cesiones de derechos litigiosos, hechas maliciosamente. ¿Y quién puede dudar de que es, ó puede ser maliciosa la cesion que en el caso supuesto se hace en favor de persona pobre, sin causa justa que la escuse? Otro de los objetos de la ley es impedir que sea desigual la condicion de los litigantes. ¿Y quién no vé esa desigualdad entre el pobre y el rico? ¿Quién no conoce la ventaja que aquel lleva sobre este en la contienda judicial, en la cual puede ganar, sin esponerse á perder? Si pues concurren todas las razones que la ley ha tenido para prohibir las cesiones de derechos litigiosos, ya se hagan por venta, donacion, permuta, ó de otro modo; por el principio de que *ubi eadem est ratio, eadem esse debet juris dispositio*, seria lógico deducir y establecer que es nula la cesion de derechos litigiosos, que tanto antes como despues del emplazamiento haga un rico en favor de un pobre, sin otro objeto que el de que este sostenga el litigio con las ventajas que las leyes conceden á los pobres, ó sin mediar causa justa para hacerla. Escepciones de esta regla deben ser las mismas que establece la ley 14, tít. 7, Part. 3.ª, á saber: cuando la cesion se hace por vía de dote ó donacion *propter* nupcias; cuando se hace á un coheredero ó condueño del derecho cedido; ó cuando es hecha en testamento por vía de manda ó legado.

Respecto á las personas que pueden ceder derechos litigiosos, y á los efectos que producen estas cesiones cuando sean válidas, es aplicable lo que sobre toda clase de trasmision de derechos hemos dicho en las secciones anteriores. El cedente estará obligado á entregar al cesionario todos los documentos que tenga relativos al derecho cedido, y á darle las instrucciones y noticias que conduzcan al buen éxito del pleito; y si á pesar de esto fuere en él vencido, el cedente no estará obligado á la eviccion, ni á indemnizacion de otro género, á no haberse pactado espresamente, porque en esta clase de enajenaciones, mas bien que el crédito ó derecho cedido, lo que se trasmite es la esperanza, ó el éxito incierto de un pleito promovido ó por promover. Mas, para que así suceda, es necesario que el cedente, sino el convencimiento, tenga al menos duda acerca de la justicia, ó injusticia de su pretension; porque si estuviese seguro de que su derecho era mal fundado, faltaria á la buena fé y obraria con dolo, si lo cedia como dudoso ó litigioso, y entonces vendria obligado á la restitucion del precio con indemnizacion de perjuicios al cesionario.

CESION DE ACCIONES DE BANCO: DE MINAS: DE SOCIEDAD, etc. Véase BANCOS DE CRE-

DITO: MINAS: SOCIEDADES MERCANTILES, etc.

CESION DE ARRIENDO. Véase SUBARRIENDO.

CESION DE BIENES. Si atendiésemos á la significacion general y comun de la palabra *cesion*, deberia entenderse por *cesion de bienes* la accion y efecto de traspasar á otro el dominio de los que nos pertenecen. Por mas que en algun caso se use con propiedad de esa enunciativa en este sentido, la ciencia tiene adoptadas voces técnicas y especiales para espresar estas cesiones, como la de *venta*, si se han hecho mediando precio cierto; *donacion* si han sido á título gratuito, etc.; y ha dado á aquellas palabras su significacion tambien técnica y especial. Pero *cesion de bienes* es en lo jurídico el abandono que un deudor hace de todos ellos en favor de sus acreedores, á fin de que puedan reintegrarse de sus créditos, aplicando, ya los frutos solamente, si bastasen para su pago, ya el valor que produzcan en venta los mismos bienes cedidos: y tomando el efecto por la causa, como sucede con frecuencia en el lenguaje forense, es un beneficio dispensado por la ley á los deudores de buena fé, al cual pueden recurrir en determinadas circunstancias para obligar á sus acreedores á que reciban los bienes cedidos en pago de sus créditos. En estas dos acepciones trataremos de ella en el presente artículo, añadiendo algunas observaciones sobre los efectos que produce en materias de comercio.

PARTE DOCTRINAL.

SUMARIO.

Sec. I. Observaciones generales sobre el orígen y naturaleza de la cesion de bienes.

Sec. II. De la cesion judicial de bienes: personas que no pueden gozar de este beneficio: sus requisitos, y efectos.

§. 1.° *De las personas que no pueden gozar del beneficio de la cesion de bienes.*

§. 2.° *De los requisitos para la cesion judicial de bienes.*

§. 3.° *De los efectos de la cesion judicial de bienes.*

Sec. III De la cesion de bienes estrajudicial ó convencional.

Apéndice á las dos secciones anteriores.

Sec. IV. De la cesion de bienes en materias de comercio.

SECCION I.

OBSERVACIONES GENERALES SOBRE EL ORÍGEN Y NATURALEZA DE LA CESION DE BIENES.

En los artículos *deudor* y *prision por deudas* puede verse cuán triste era ya desde el tiempo de los romanos la suerte de aquellos deudores que, abrumados por la desgracia, carecian de medios para pagar á sus acreedores. Mirábase entonces con tanto respeto la fidelidad en la ejecucion de las obligaciones de esta especie, que el ódio de la opinion, y la severidad de la ley no podian dejar de caer sobre el que faltaba á ellas y las violaba. Sin embargo, esa severidad llegó á ser escesiva, y aun cruel por espacio de algunos siglos, hasta que la civilizacion de los tiempos posteriores pudo suavizarla, introduciendo algunos beneficios en favor de los deudores.

Uno de ellos fué la *cesion de bienes*, otorgada por la ley *Julia*, de que hace mencion Gayo (1), atribuida generalmente á Julio César. Esta nueva legislacion, despues de haber moderado el rigor inexorable de la antigua, concediendo al deudor la facultad de dar en pago de sus deudas bienes raices por *su valor y justa tasacion*, dispensó á los que no tenian bienes bastantes para satisfacer á todos sus acreedores el medio de sustraerse á sus reclamaciones, y de conservar la libertad de su persona, abandonando en favor de estos los bienes que poseyeran. Sabido es que los deudores que no pagaban ó no podian pagar las deudas juzgadas ó confesadas,

(1) Gaii, inst., coment. 3°. §. 78.

eran entregados á sus acreedores y se constituian en siervos suyos, *lege nexus*; lo cual era, segun las palabras de Covarrubias, *obligatio qua corpus, ut pignus, afficitur*. La ley Julia abolió un derecho tan degradante, y restableció la proporcion que la justicia prescribe entre la insolvencia, no fraudulenta ó no culpable del deudor, y los derechos de los acreedores. Las leyes posteriores conservaron este beneficio, y el mismo Justiniano dictó varias disposiciones para regularizar su accion. Tan patente era su utilidad, su conveniencia y su justicia, que en ninguna ocasion dejaron de conocerse los principios de moderacion y de humanidad en que se fundaba la concesion de aquel beneficio.

La legislacion española siguió poco mas ó menos los mismos pasos que la romana en punto á los deudores. El Fuero Juzgo, adoptando la severidad de las antiguas leyes de aquel pais, hacia siervo de los acreedores al deudor que no tenia con que pagarles (1), y las leyes del Fuero Real mandaban que en el caso de no ser suficientes sus bienes para el mismo objeto, el acreedor *fuese apoderado del cuerpo* del deudor (2). A este se le permitia ceder sus bienes á los acreedores; pero al mismo tiempo se mandaba que, el que hiciese la cesion, estuviera en la cárcel nueve dias, en los cuales se pregonara como se hallaba preso á peticion de tal acreedor, quien antes de ser entregado del deudor jurara que lo recibia por su deuda sin fraude, y el juez limitara tiempo en que le sirviera, y fenecido, lo entregara á otro acreedor por su respectiva deuda. Se mandaba asimismo que el que hiciere la cesion, hasta *que se parta de ella* ó dé fianza de pagar á sus acreedores, trajera al cuello una argolla de hierro, y siendo hallado sin ella, fuese puesto en la cárcel, haciéndose ejecucion en su persona y bienes, sin gozar de la cesion de ellos ni de la renuncia de la cadena. Finalmente, que ejecutada la cesion, si el primer acreedor en derecho, dentro de seis dias despues de requerido, no hiciese echarle la argolla, para que la trajese, como mandaba la ley, la justicia lo entregara al acreedor siguiente en grado, y succesivamente á los demás, hasta que todos quedasen pagados de sus respectivas deudas (1).

Las leyes de partida (2), siguiendo los buenos principios y la doctrina filosófica de la legislacion romana, adoptaron la cesion de bienes como un beneficio dispensado á los deudores desgraciados. Segun ellas podian estos *desamparar sus bienes ante el judgador*, y los acreedores estaban obligados á aceptar la cesion, distribuyendo entre sí los bienes cedidos, quedando aquellos libres de la prision cuando por sus circunstancias personales podia serles impuesta en razon de deuda. Una diferencia introdujeron, sin embargo, las leyes de Partida, y fué que segun ellas la cesion de bienes como beneficio, no podia formalizarse sino judicialmente; al paso que entre los romanos podia verificarse tambien fuera de juicio, segun se infiere de una ley del *Digesto* (3). Por lo demás, la cesion de bienes quedó establecida bajo los mismos principios, y en la propia forma ha continuado y subsiste todavia entre nosotros.

No se crea, sin embargo, que el deudor no pudiera, ni pueda ceder hoy sus bienes estrajudicialmente á los acreedores. Ni habia entonces, ni como es fácil observar puede haber consideracion alguna legal que se oponga á ello. Lo que hay es que la cesion hecha estrajudicialmente no tendrá otro carácter que el de un acto puramente convencional entre los interesados, y voluntario de parte de los acreedores; al paso que la cesion judicial era y es un acto esencialmente legal entre aquel y estos, y obligatorio para los acreedores, supuesto que es el ejercicio legítimo de un derecho de parte del deudor. La cesion estrajudicial recibiria en su caso y recibirá hoy toda su fuerza de la convencion que se celebre, al paso que la judicial la recibe de la disposicion legal que la autoriza. La primera, en fin es un *convenio* voluntariamente celebrado; la segunda es un *beneficio legal* que ejercita el

(1) Ley 5.ª, tit. 6, lib. 5.º F. J.
(2) Ley 17, tit. 20, lib. 5.º, F. R.

(1) Ley 5.ª tit. 13, lib. 5.º de las OO. RR; y 5.ª, 7.ª y 8.ª, tit. 16, lib. 5, Rec.; ó sea la nota 1.ª al tit. 32, lib. 11 de la Novísima Rec.
(2) Leyes del tit. 15, Part. 5.ª
(3) Ley 9, tit. 3, lib. 42, *Dig.*

deudor por un derecho inherente á su posicion desgraciada.

Las legislaciones estranjeras no discrepan sustancialmente de estos principios. El Código francés, cuya doctrina han seguido los que se han publicado con posterioridad, reconoce la cesion judicial ó forzosa y la estrajudicial ó convencional; la primera, como un beneficio concedido al deudor desgraciado y de buena fé para conservar la libertad de su persona; la segunda, como un acto convencional entre el deudor y sus acreedores cuyos efectos son los que se estipulan entre ellos. La primera, es decir, la cesion judicial, no pueden rehusarla los acreedores; la estrajudicial es un acto voluntario de su parte. Aquella impide la prision y no extingue las obligaciones del deudor sino en la cantidad concurrente de los bienes cedidos. En la última pueden acordarse las condiciones que tengan por conveniente los interesados, y ellas formarán las reglas á que deban atenerse (1).

Ni en la legislacion romana ni en la estranjera, como se acaba de ver, el beneficio de la cesion de bienes estingue la deuda. Es únicamente, como dice Mr. Toullier, un medio de llegar á la estincion de este género de obligaciones. En tal sentido ha colocado el Código del mismo pais la cesion de bienes en el capítulo de la estincion de las obligaciones y en la seccion correspondiente á la paga. En el mismo concepto han seguido esta doctrina los redactores de nuestro proyecto de Código civil (2), considerando sin duda que para que renazca la obligacion del deudor, es necesario que adquiera bienes de nuevo con los que pueda satisfacerla, y que mientras esta circunstancia no se verifique, el deudor no está sujeto á reclamacion alguna de parte de los acreedores.

Estas últimas observaciones demuestran á primera vista que el beneficio de cesion no puede confundirse con la dacion en pago. De aquí el principio romano: *Aliud est bonis cedere, aliud res suas creditoribus in solutum dare.* Y en efecto, la dacion en pago, que es una especie de venta, como decian los jurisconsultos romanos; *hujusmodi contractus vicem venditionis obtinet*; trasfiere inmediatamente al acreedor la propiedad de las cosas recibidas en pago, dejando completamente libre al deudor de toda obligacion y responsabilidad; efectos que no se verifican en la cesion de bienes, como diremos mas adelante.

Ahora, consignadas estas observaciones generales dirigidas á fijar el orígen y la naturaleza de este acto, vamos á entrar en el exámen de la doctrina de nuestro derecho relativamente á esta materia.

SECCION II.

DE LA CESION JUDICIAL DE BIENES: PERSONAS QUE NO PUEDEN GOZAR DE ESTE BENEFICIO: SUS REQUISITOS, Y EFECTOS.

El deudor de buena fé, que por desgracias inevitables no se halla con medios suficientes para satisfacer á sus acreedores, tiene, como hemos visto, el derecho de presentarse ante el juez competente, poniendo sus bienes á disposicion de aquellos á fin de evitar las consecuencias de sus reclamaciones. Esto se considera como un *beneficio de ley*, por las ventajas que proporciona, con arreglo á las leyes comunes, al que hace la cesion llenando todas las condiciones por estas exigidas. Pero no todos los deudores pueden gozar de este beneficio: verémos los que están esceptuados, como tambien los requisitos que son necesarios para hacer válidamente la cesion judicial de bienes, y los efectos que produce.

§. 1.° *De las personas que no pueden gozar del beneficio de la cesion de bienes.*

Ya hemos dicho que la ley solo concede este beneficio á los deudores de buena fé, que por desgracias inevitables se hallan en el caso de no poder cubrir sus compromisos. Esta regla general tiene varias escepciones, fundadas unas en circunstancias especiales del deudor, y otras en la presuncion de faltar en él la buena fé. Las personas, pues, á

(1) Arts. 1265 al 1270 del Código civil francés.
(2) Sec. 7.ª, del cap. 5.°, lib. 3.°

quienes la ley niega el beneficio de la cesion de bienes, son:

Primero. Los arrendatarios de rentas reales y sus fiadores, los cuales no pueden hacer cesion de sus bienes, y deben estar presos hasta que paguen. Para la mayor eficacia de esta prohibicion deben jurar su cumplimiento, y que no pedirán relajacion de este juramento (1).

Segundo. Los deudores, que en fraude de sus acreedores enajenaron ó malbarataron sus bienes. La ley 4, tít. 15, Part. 5 que asi lo establece, habla solo del deudor que ejecutare estos actos fraudulentos estando preso: «E si entre tanto que yoguiesse en la prision, malmetiese los bienes todos ó parte dellos:...» Pero Gregorio Lopez, interpretando esta disposicion, dice que la ley se contrae al caso de la prision, porque dada esta, se infiere evidentemente el fraude. De manera que, segun su opinion, siempre que se haga constar la malversacion ú ocultacion de parte del deudor con el designio de perjudicar á los acreedores, no cabe el beneficio de cesion. Y ciertamente: el que apela al fraude, despreciando el beneficio de la ley, se hace indigno de esta, y no es ya la ley la que le juzga, sino que él mismo se ha juzgado.

Tercero. Los mercaderes y cambiantes alzados con los caudales ajenos (2). La ley declaraba á estas personas ladrones públicos, y los condenaba á graves penas, lo mismo que hoy el art. 443 del Código penal.

Cuarto. Los mercaderes, cambiantes y sus factores, aunque no se alcen con caudales ajenos (3). El Código de comercio confirma esta escepcion calificando desde luego de quebrado al comerciante que hiciere cesion de sus bienes (4).

Quinto. Los deudores por deudas procedentes de delito ó cuasi delito. Esta prohibicion se entendia antes en cuanto á las multas ó penas pecuniarias; no respecto del interés particular del agraviado: de modo que los reos, que no tenian bienes suficientes para indemnizar á los ofendidos, podian hacer la cesion legítimamente. Asi lo dispuso la ley 8.ª, título 32, lib. 11 de la Nov. Recop. Pero este precepto legal debe considerarse modificado por el art. 49 del Código penal, segun el cual, si el sentenciado no tuviere bienes para satisfacer en todo ó parte la reparacion del daño causado ó indemnizacion de perjuicios, el resarcimiento de los gastos ocasionados por el juicio y la multa en que hubiere sido condenado, debe sufrir la pena de prision correcional, por vía de sustitucion y apremio, regulándose á medio duro por cada dia de prision, bien que esta no pueda esceder nunca de dos años. De consiguiente, está hoy privado del beneficio que pudiera reportarle la cesion de bienes.

Ha sido muy controvertido entre los comentadores de nuestro derecho, si los deudores que hubiesen renunciado con juramento el beneficio de cesion, podrian, sin embargo, hacerla válidamente; ó si como dice Covarrubias, es renunciable este beneficio. La razon principal de los defensores de la opinion negativa se funda en que por medio de la renuncia abdica el deudor su libertad, desprendiéndose de aquel medio legal de conservarla, lo cual suponian no era lícito, toda vez que el hombre no es árbitro de privarse de la libertad que Dios le ha concedido, y de que no es dueño. Mas como hoy no procede la prision por deudas civiles: como habiendo cesado aquella razon, cualquiera que fuese su valor en el órden legal, solo queda en el caso de que se trata, la simple concesion de un beneficio dispensado á los deudores, al cual pueden renunciar por su naturaleza; parece que esta renuncia hecha válidamente, deberia cumplirse, toda vez que ni es irritante de suyo, ni contraria á la ley, ni á las buenas costumbres. Sin embargo, nos parece mas atendible la opinion contraria, por ser mas conforme á la equidad. Asi como es digno de castigo el que por su culpa ó fraudulentamente se ha constituido en insolvencia, merece toda consideracion el que por desgracias inevitables ha venido á tan lamentable estado; y no es justo, ó por lo

(1) L. 9, tit. 32, lib. 11, Nov. Recop.
(2) L. 1.ª, 2 y 3, tit. 32, lib. 11, Nov. Recop.
(3) L. 7, tit. 32, lib. 11, Nov. Recop.
(4) Art. 1176 del Código de comercio.

menos, equitativo, que con perjuicio suyo y de su inocente familia, se agrave su situacion, dando valor á una renuncia, que mas bien que voluntaria, debe considerarse como nacida de una necesidad hija del pundonor, de un cálculo equivocado, ó del deseo de inspirar mayor confianza á los acreedores; pero siempre efecto de su situacion desgraciada. Sin duda en estas consideraciones de equidad se habrán fundado los autores del proyecto de Código civil para declarar por el artículo 1148, que no se puede renunciar este beneficio.

§. 2.° *De los requisitos para la cesion judicial de bienes.*

Para usar del beneficio de la cesion de bienes, segun la ley de Partida (1) era menester que el deudor hubiera sido condenado préviamente al pago de las deudas, ó que las confesara y reconociera: si dictado el fallo condenatorio, se resistia aun á realizar el pago ó á ceder los bienes, debia ser reducido á prision, á instancia de alguno de los acreedores, hasta que pagara ó los desamparase. Estas disposiciones no tienen aplicion en el dia, porque, como es sabido, despues de las leyes de Toro, nadie puede ser preso por deudas civiles. De consiguiente, desde el momento en que un deudor, convencido de la imposibilidad de cubrir sus obligaciones, se resuelve á ceder los bienes á sus acreedores, podrá ejecutarlo libremente sin necesidad de que preceda el fallo judicial ni la confesion de la deuda, siempre que no le haya sido posible obtener de ellos un acuerdo ventajoso, una espera ó remision, que le ponga en el caso de evitar el abandono de su fortuna.

Segun el derecho antiguo, eran además indispensables tres requisitos, para que la cesion se considerara legítima: 1.° que se hiciese ante juez competente; 2.° que comprendiera todos los bienes del deudor; 3.° que este espresára y reconociera todas las deudas. Las mismas circunstancias exige la nueva ley de enjuiciamiento civil en sus artículos 503 y 506; pero agregando otra; á saber: que el deudor consigne en una memoria las causas que hayan motivado su presentacion en concurso.

El primer requisito lo exige terminantemente la ley de Partida (1); «é dévelos desamparar, dice, ante el judgador.» Algunos jurisconsultos antiguos, que no tuvieron presente acerca de este particular, sino lo dispuesto en la ley del Digesto (2), afirmaron que la cesion de bienes podia hacerse estrajudicialmente; y Gregorio Lopez, que no halló términos hábiles para conciliar el testo de la ley de Partida con esa opinion, creyó salvar la dificultad diciendo, podria verificarse el acto estrajudicialmente con tal que despues se presentara el instrumento de la cesion ante el juez. Pero esta circunstancia no basta, porque si ejecutada la cesion estrajudicialmente hay necesidad de producir despues la escritura en juicio; si en virtud de esta exhibicion deben presentarse los interesados y practicarse, como seria necesario en la suposicion de que vamos hablando, todas las actuaciones y diligencias que exige la legalidad de la cesion, es evidente que esta recibirá su fuerza de la intervencion judicial, produciendo sus efectos en tanto, en cuanto haya sido observada dicha formalidad. Quede, pues, sentado que el deudor no puede hacer uso del beneficio de la cesion sino haciendo ante el juez competente el abandono de sus bienes. Este juez ha de ser el del domicilio del que hace la cesion, ó del que se presenta en concurso voluntario, como lo preceptúa el art. 503 de la ley de enjuiciamiento civil.

El segundo requisito es que el deudor ceda todos sus bienes. La ley de Partida antes citada, esceptúa únicamente los *paños de lino* que vistiere el deudor, y añade que el juez no le debe dejar ninguna otra cosa. El derecho romano no estaba espreso sobre el particular, y esta circunstancia daba ocasion, como era consiguiente, á dudas é inter-

(1) Ley 1.ª, tit. 15, Part. 5.ª

(1) Ley 1.ª, tit. 15, Part. 5.ª
(2) Ley 9, tit. 3, lib. 42, *Dig.*

pretaciones diversas, siendo la opinion comun que debian reservársele, no obstante las palabras restrictivas de la ley, los vestidos ordinarios, el lecho cotidiano y los instrumentos propios del arte, profesion ú oficio del deudor. Esta opinion era ya incuestionable en la práctica de nuestros tribunales, puesto que al deudor no se le podian embargar esos objetos, aunque no cediera sus bienes; siendo esta una escepcion introducida en beneficio público y aun en el de los acreedores mismos, á quienes ninguna esperanza podria quedar de que sus deudores adquiriesen en lo sucesivo nuevos recursos para pagar, si no les dejaran siquiera los instrumentos de sus oficios y profesiones. Y esto, que tenia admitido la jurisprudencia, ha sido sancionado por la Ley de enjuiciamiento civil, segun la cual (1), de la relacion firmada de todos sus bienes, hecha con individualidad y exactitud, que debe acompañar con su instancia el que se presenta en concurso voluntario, ó sea, el que hace cesion de sus bienes, solo se esceptúan el lecho cotidiano del deudor, y de su muger é hijos; las ropas del preciso uso de los mismos, y los instrumentos necesarios para el arte ú oficio, á que el primero pueda estar dedicado.

Mas, no es esto solo á lo que hoy tiene derecho el deudor que cede sus bienes á sus acreedores. El art. 632 de dicha ley le concede tambien el derecho de reclamar alimentos, los cuales han de serle concedidos por el juez; pero solo en el caso de que, á juicio de este, asciendan á mas los bienes que las deudas. De este modo se concilian equitativamente las atenciones que se merece el deudor desgraciado, con los sagrados derechos que competen á los acreedores, poniendo fin á las disputas que solian suscitarse, acerca de si deberia ser aplicable á los deudores del fuero comun el art. 1098 del Código de Comercio, segun el cual, el quebrado que, al solicitar la declaracion de la quiebra, ha llenado las formalidades que prescribe la ley, tiene derecho á una pension alimenticia, proporcionada á su clase, al número de personas de su familia, al haber que resulte del balance general y á los caractéres que se presenten para la calificacion de la quiebra. Este precepto del Código mercantil es mas absoluto y general que el de la ley de enjuiciamiento civil: ésta mira en todo caso como mas preferentes los derechos de los acreedores, y por eso solo concede al deudor alimentos cuando á juicio del juez los bienes asciendan á mas que las deudas. El juez debe señalar los que crea necesarios, teniendo en consideracion las circunstancias del deudor y la cuantía de los bienes y de las deudas, de modo que no salgan perjudicados los acreedores, á quienes el art. 633 concede el derecho de aprobar, modificar y aun suprimir los alimentos señalados por el juez del concurso. Véase **CONCURSO DE ACREEDORES.**

Aunque por regla general el cedente debe abandonar todos sus bienes, sin que le sea lícito reservar, sino los efectos esceptuados de que antes hemos hecho mencion, hay algunas personas que, hallándose en el caso de acojerse al beneficio de cesion, tienen el derecho de que se les reserve la parte suficiente para vivir con decencia; «tanta parte de sus bienes de que puedan vivir guisadamente (1).» Este es el derecho que constituye el *beneficio de competencia*, del cual, asi como de las personas á quienes compete, y de su estension hemos hablado en su lugar oportuno. Véase **BENEFICIO DE COMPETENCIA** (tomo 6.°, pág. 78).

El tercer requisito indispensable para que la cesion sea legítima, es que el deudor esprese todas sus deudas y designe á todos los acreedores. Cualquier fraude de parte del cedente y toda omision maliciosa viciaria el acto, y daria derecho al acreedor perjudicado para invalidarle. Además, en el juicio de cesion hay necesidad de calificar los créditos, para fijar el órden que les corresponde en su graduacion y pago, y este acto esencial seria incompleto si se omitiese alguno de ellos. Por estas mismas consideraciones el autor de la cesion, despues de verificada esta, no

(1) Arts. 506 y 954.

(1) Ley 1.ª, tít. 15, Part. 5.ª ya citada.

puede pagar á ninguno de los deudores en particular, y si lo hiciere, la paga no producirá efecto alguno legal, pudiendo reclamarla cualquiera de los demás acreedores perjudicados. Precisamente para evitar esa injusta y fraudulenta preferencia es por lo que la ley exige que el deudor designe á todos sus acreedores, y la práctica habia introducido que empezara por presentar una lista nominal de ellos y de sus créditos respectivos. Asi lo ha sancionado tambien la ley de enjuiciamiento civil, mandando por el número 2.° del art. 506 ya citado, que el deudor presente «un estado de las deudas, con espresion de su procedencia y de los nombres y domicilios de los acreedores,» á fin de que puedan ser convocados al concurso.

Y el cuarto requisito es, que «acompañe una memoria en que se consignen las causas que hayan motivado su presentacion en concurso.» Asi lo dispone el núm. 3.° del citado artículo de la ley de enjuiciamiento, introduciendo esta novedad en los concursos del fuero comun, á imitacion de lo que estaba preceptuado para los negocios mercantiles (1). El art. 448 del Código penal, castiga con la pena de arresto mayor si la deuda escede de cinco duros y no pasa de ciento; y con la de prision correccional, si escediere de esta cantidad, al deudor no dedicado al comercio; que se constituya en insolvencia por ocultacion ó enajenacion maliciosa de sus bienes; y aun son mayores las penas que por los tres artículos anteriores se imponen al que, ejerciendo habitualmente el comercio, aunque no sea comerciante matriculado, se constituyere en insolvencia fraudulenta ó culpable. Además; con arreglo á lo que prescriben los artículos 604 y 605 de la ley de enjuiciamiento civil, los síndicos deben manifestar en una esposicion razonada el juicio que hayan formado de la cesion de bienes y de sus causas, y el promotor fiscal debe instar el procedimiento criminal que corresponda contra el deudor, cuando su insolvencia fuese culpable. La memoria antedicha, sirve, pues, para que puedan este y aquellos formar su juicio sobre estos particulares, á cuyo fin debe dárseles comunicacion de ella con los demás antecedentes del concurso; es la defensa ó esculpacion del cedente, y por lo tanto debe poner el mayor esmero en espresar las causas que le hayan conducido á su estado de desgracia; pero causas ciertas y legítimas, porque los síndicos, y los acreedores, tienen el derecho, y el promotor fiscal el deber de rebatirlas, cuando no sean legítimas.

Estas son las circunstancias ó requisitos que la ley exige para que se tenga por legítimamente hecha la cesion de bienes, y los exige con tal precision, que la omision de cualquiera de ellos impide el ingreso en el juicio. Son terminantes sobre este particular las disposiciones citadas de la nueva ley de enjuiciamiento civil, que dicen asi:

«Art. 505. El juez del domicilio del que se presente en concurso voluntario, es el competente para conocer de este juicio.»

«Art. 506. El que se presente en concurso voluntario debe acompañar á su solicitud:

1.° Relacion firmada de todos sus *bienes*, hecha con individualidad y exactitud. Solo se esceptuarán de ella los bienes, que con arreglo al art. 931, no pueden ser objeto de ejecucion. (Estos bienes son el lecho cotidiano del deudor, su mujer é hijos; las ropas del preciso uso de los mismos, y los instrumentos necesarios para el arte ú oficio á que el primero pueda estar dedicado, como antes hemos dicho.)

2.° Un estado de las deudas, con espresion de su procedencia, y de los nombres y domicilios de los acreedores.

3.° Una memoria en que se consignen las causas que hayan motivado su presentacion en concurso.

Sin estos documentos no se admitirá ninguna solicitud de concurso voluntario.»

Como se vé por estas disposiciones, la ley de enjuiciamiento civil llama *concurso voluntario* al juicio que se sigue para admitir y llevar á efecto la cesion ó abandono, que de sus bienes hace voluntariamente un deudor en favor de sus acreedores, y el art. 519 or-

(1) Art. 1018 del Cód. de Com.

dena que la sustanciacion de este juicio se acomodará á las reglas establecidas para el concurso necesario. Por esta razon no pasamos á esponer estos procedimientos, que reseñamos al tratar del **CONCURSO DE ACREEDORES.**

§. 3.° *De los efectos de la cesion judicial de bienes.*

En tanto se reputa la cesion judicial de bienes como un beneficio concedido por la ley á los deudores de buena fé, que por consecuencia de desgracias inevitables se ven imposibilitados de pagar á sus acreedores, en cuanto produce en favor de aquellos varios efectos que les son beneficiosos. Estos efectos son:

Primero. Librar al deudor de la prision; y si hiciere la cesion estando en ella, debe ser inmediatamente escarcelado. Esta era la doctrina de la ley romana: «*Hoc beneficium tantummodo eis prodest, ne judicati detrahantur in carcerem* (1);» doctrina que adoptó la ley 4, tít. 15, Part. 5, y que ha sido observada constantemente, segun enseña el jurisconsulto ya citado: «*Quod si creditor bonis cedere velit, á carcere dimittendus est, nam præter alios effectus hunc potissimum cessio bonorum habet* (2).» Hoy esta doctrina no tiene uso por la razon alegada anteriormente, de no proceder la prision por deudas civiles.

Segundo. Estinguir los créditos hasta la cantidad concurrente, á que asciendan los bienes cedidos; y mientras el deudor no adquiera otros en cantidad considerable, no puede ser reconvenido. Asi lo establece la ley 3, tít. 15, Part. 3.ª: «El desamparamiento que faze el debdor de sus bienes ha tal fuerza, que despues non puede ser el debdor emplazado, nin es tenudo de responder en juicio á aquellos á quienes deviesse algo; fueras ende si oviesse fecho tan gran ganancia, etc.....» De manera que los créditos se consideran pagados mientras no llega el caso previsto por la ley, pudiendo dejar de responder en juicio el deudor á los acreedores, si fuese demandado por alguno. Los autores han disputado tambien acerca de la inteligencia de esta disposicion y de la latitud que debe dársele, siendo la opinion comun que la cesion no estingue la obligacion natural ni la civil, y que únicamente dá al deudor una escepcion contra los acreedores, mientras no se haya realizado el caso de mejor fortuna. Por lo mismo asienta Covarrubias que «las palabras «non es tenudo de responder» *intelligenda sunt cum effectu, siquidem respondere tenetur et exceptionem litis contestationem impedientem objicere.*»

Tercero. El deudor que despues de la cesion adquiriere bienes, no puede ser demandado por sus acreedores en el todo de ellos, debiéndosele dejar con qué vivir decentemente, segun su clase y circunstancias. Es decir, que el deudor, que hizo cesion de bienes, goza del *beneficio de competencia* en el caso de venir á mejor fortuna. Asi lo dispone la ley 3, tít. 15, Part. 5, tomada del derecho romano: «*Cum eo quoque, qui creditoribus suis bonis cessit, si postea aliquid adquisierit, quod idoneum emolumentum habeat, ex integro in id, quod facere potest, creditores experiuntur: inhumanum enim erat spoliatum fortunis suis in solidum damnari* (1).» El Código francés, respetando en mas el derecho de los acreedores, que la profunda razon de conveniencia en que descansan estas disposiciones, se separó de ellas, y condena al deudor á pagar íntegramente hasta agotar los bienes adquiridos con posterioridad; pero esta disposicion ha sido censurada por los mas distinguidos intérpretes de aquel pais, señaladamente por Toullier que dice de ella: «Este favor (el concedido por las leyes romanas á los deudores), tan conforme á los sentimientos de humanidad y que pudiera servir de un estímulo poderoso para escitar la industria y laboriosidad de los deudores desgraciados, no les ha sido otorgado por el derecho francés, de donde resulta que los jueces no podrian declararlo

(1) Ley 1.ª, tit. 71, lib. 7 del *Código*.
(2) Covar. lib. 2, cap. 1, var. resol.

(1) Inst. §. 40, tit. 6.°, lib. 4. Véanse tambien las leyes 4 y 6, tit. 3.°, lib. 12 del *Digesto*.

en favor de los mismos, sin traspasar el límite de sus atribuciones.»

Hemos dicho, que el deudor, que hizo cesion de sus bienes, no puede ser demandado por los acreedores, á cuyo favor la efectuó, en el todo de los bienes adquiridos con posterioridad, y podria dudarse si gozará de este mismo derecho y beneficio respecto de los acreedores posteriores á la cesion. Creemos que no, y nos fundamos en que la razon de la ley para conceder el beneficio de competencia al cedente respecto de los acreedores anteriores á la cesion, no puede aplicarse á los créditos contraidos con posterioridad. La ley, con suma prevision en favor de los intereses del deudor y de los acreedores mismos, no quiso cerrarle el camino á nuevas adquisiciones, como lo habria cerrado, quitándole todo estímulo saludable, si hubiese ordenado que cuanto adquiriera el deudor despues de la cesion, hubiera de servir sin restriccion alguna para pago de sus acreedores, sin tener siquiera el consuelo de reservar para sí lo indispensable para su manutencion y decencia. Esta razon, repetimos, no concurre en los acreedores nuevos que prestaron al deudor despues de la cesion, y á ellos no se refiere la disposicion de la ley citada.

Cuarto. La cesion de bienes dá lugar á un juicio universal, que atrae las reclamaciones de todos los acreedores, en los términos que veremos en su lugar correspondiente. Esta era la jurisprudencia antigua, y asi lo ha sancionado la ley de enjuiciamiento civil por los arts. 157 y 523.

Quinto. La cesion confiere á los acreedores el derecho de hacer vender los bienes cedidos, y de que su producto, asi como el importe de las rentas, se invierta en el pago de los créditos. Es decir, que por la cesion no se desprende *ipso facto* el deudor de la propiedad de los bienes, y esta es precisamente la diferencia esencial que, como al principio hemos dicho, existe entre este beneficio y la dacion en pago. El efecto de la cesion es simplemente conferir aquel derecho para que el juez, prévios los trámites legales, haga vender los bienes, adjudicando á cada acreedor lo que le corresponda. Por eso decia una ley del Código: «*Non tamen creditoribus sua auctoritate dividere hæc bona, et jure dominii detinere; sed venditionis remedio..... permissum est.*» Y la ley 2, tít. 15, Part. 5, adoptando esta doctrina decia tambien: «De una manera, ó natura, seyendo todas las debdas que ha de pagar aquel que desampara todos sus bienes, entonces debe el judgador partir entre ellos los maravedís, porque fueron vendidos los bienes del.»

El derecho de los acreedores, y la venta de los bienes cedidos que es su consecuencia, no tendrán, sin embargo, efecto cuando el deudor, despues de realizada la cesion, la retirase, como puede hacerlo, para defenderse ó para pagar á los acreederes. La misma ley 2.ª que se acaba de citar, en su última parte lo dispone espresamente: «Pero si el debdor, que ovisse assi desamparado lo suyo, dijesse, *ante que fuessen vendidos sus bienes*, que los queria cobrar para fazer paga á sus *debdores*, (debe entenderse *acreedores*), ó para defenderse luego con derecho contra ellos, estonce non deven vender ninguna cosa de lo suyo; ante decimos, que deve ser oydo.» Lo cual tiene lugar, segun Gregorio Lopez en la glosa de esta ley, ora el deudor hubiese procedido con acuerdo y deliberacion, ora inadvertidamente: en ambos casos puede arrepentirse, dejando sin efecto la cesion.

Sesto. La cesion no estingue la obligacion de los fiadores, sino que la deja salva é íntegra; de forma que asi como el deudor hecha la cesion no puede ser reconvenido, aunque las deudas no hayan sido del todo satisfechas, sino en el caso esceptuado, el fiador sigue en su obligacion y compromiso, pudiendo ser demandado en este concepto. Asi lo establece la ley 3 del título y Partida citados, en su segunda parte, donde dice: «E maguer los que desampararon lo suyo, se pueden defender contra aquellos á quien deviessen algo,... con todo esso non se podrian defender sus fiadores por tal razon, que tenidos serian de fazer pagamiento de lo que fincare por pagar de aquellas debdas,

porque entraron fiadores, maguer los principales non hayan de lo fazer.»

Téngase, en fin, presente, que la cesion judicial de bienes no priva al deudor de la facultad de hacer con sus acreedores todos los convenios que estimen oportunos, relativamente al pago de sus créditos. Pueden hacerlo en cualquier estado del juicio de concurso, y el juez está obligado á acceder á toda solicitud que se le dirija por el deudor ó por cualquiera de los acreedores para convocar á junta general que tenga por objeto tratar del convenio. Asi estaba admitido por la jurisprudencia, de acuerdo con lo que aconsejan el buen sentido y la naturaleza de estos actos, y eso mismo ha sido sancionado por los arts. 611, 612 y 613 de la ley de enjuiciamiento civil, haciendo al mismo tiempo las justas y convenientes declaraciones de que, el que deduzca dicha solicitud debe obligarse á pagar los gastos á que dé lugar, y que la convocacion de junta para tratar de convenio lleva consigo la suspension del juicio de concurso, hasta que se delibere y acuerde sobre las proposiciones presentadas. Del modo de celebrar estas juntas, llevar á efecto sus acuerdos, y de todo lo demás relativo á estos convenios, se tratará tambien en el artículo **CONCURSO DE ACREEDORES** (véase).

SECCION III.

DE LA CESION DE BIENES ESTRAJUDICIAL Ó CONVENCIONAL.

Ya hemos dicho que la cesion estrajudicial es un acto que recibe toda su fuerza obligatoria del convenio celebrado entre el deudor y sus acreedores; y que la ley no la establece, porque siendo una convencion lícita, recibe por este concepto fuerza de obligar en la esfera del derecho. Autorizando la ley, como hemos visto, los convenios celebrados despues de principiado el juicio de concurso, con igual ó mayor razon debe autorizar y favorecer los que se celebren antes de que este tenga principio, con el fin manifiesto de evitar los perjuicios consiguientes á dicho pleito.

Es, por tanto, la cesion voluntaria un contrato bilateral *sui generis*, que consiste esencialmente, de parte de los acreedores, en renunciar á toda reclamacion que pudieran intentar contra el deudor comun, relativamente á los bienes comprendidos en la cesion; y de parte del deudor, en el abandono que hace de ellos en favor de los acreedores para que se reintegren de sus créditos con arreglo á las condiciones del convenio.

Compréndese por esta sencilla indicacion, cuáles son los caractéres de la cesion convencional. En primer lugar, exige esta cesion, que se haga entre el deudor y sus acreedores, sin intervencion de la autoridad judicial. En segundo lugar, es un acto puramente voluntario de parte del deudor y de los acreedores; sin cuyo consentimiento, de todo punto espontáneo, la cesion no puede realizarse. En tercer lugar, la cesion estrajudicial trasfiere á los acreedores la posesion y goce de los bienes, ya para que los vendan, ya para que los administren ó perciban sus productos, segun los términos del contrato.

Esta última circunstancia marca claramente la diferencia que hay entre la cesion estrajudicial y la dacion en pago. Por esta, como ya se dijo, se trasfiere á los acreedores la propiedad de la cosa ó cosas entregadas por el deudor en pago de sus deudas, quedando este por lo tanto libre de la obligacion; al paso que por la cesion, ni se trasfiere la propiedad, como hemos visto, ni queda estinguida la deuda. Por eso digimos al hablar de la cesion en general, que es únicamente el medio de llegar á la estincion y liberacion de las obligaciones del deudor.

Puede dudarse si la cesion estrajudicial produce la estincion completa de las deudas, ó solo en la cantidad concurrente de los bienes cedidos y de sus frutos, quedando, como sucede en la cesion judicial, obligado el deudor por el resto de aquellas en el caso de adquirir otros bienes, salvo el beneficio de competencia. Con arreglo á la naturaleza de la cesion estrajudicial, deberá estarse en este punto á lo que se haya convenido por los interesados: y si nada se hubiese estipu-

lado espresamente, creemos que la obligacion del deudor no se considerará estinguida por entero, sino solo en la parte á que hayan alcanzado los bienes cedidos. Los que adquiera con posterioridad, sea por herencia, sea por compra, ó por cualquier otro concepto, estarán sujetos á las nuevas reclamaciones de los acreedores. El Código civil francés, establece esta doctrina añadiendo (1), que si el deudor hubiera renunciado una herencia en perjuicio de los derechos de los acreedores, estos podrian pedir que se les autorizase para aceptarla ellos en representacion y lugar de aquel. Lo mismo dispone el proyecto de nuestro Código civil en el artículo 831. Esta doctrina la creemos aplicable en la actualidad, porque los principios de justicia, que suplen siempre la omision de las leyes, no pueden permitir que por medio de una renuncia maliciosa queden perjudicados los derechos de acreedores legítimos, reconocidos por el mismo deudor.

Hemos dicho antes que el deudor conserva la propiedad de los bienes cedidos hasta tanto que los acreedores los vendan. De aquí se siguen dos consecuencias igualmente incontrovertibles:

1.ª Que hasta el momento de consumarse la venta, el deudor tiene el derecho de recobrar la posesion y goce de los bienes cedidos, pagando á sus acreedores. Pero téngase presente esta circunstancia; pues no de otro modo puede ejercer el deudor semejante facultad, en razon á que, como la cesion estrajudicial es un contrato bilateral entre el deudor y sus acreedores, en virtud del cual pasa la posesion de los bienes á estos, y adquieren el derecho de percibir el valor ó productos de los mismos, en pago, ó á cuenta de sus créditos, es evidente que solo pagando íntegramente, es como el deudor puede dejar sin efecto ese contrato solemne. Verificado el pago, desaparece el objeto del contrato y el motivo de la cesion, y no existe razon alguna legal que autorice la permanencia de los bienes en manos de los acreedores. Si estos reusaran la devolucion, aquel podria obligarles á ello, pero haciendo préviamente la consignacion judicial del pago.

2.ª La segunda consecuencia es, que si vendidos los bienes, quedase algun sobrante despues de cubiertos los créditos, no pertenecerá este á los acreedores, sino al deudor cedente.

El convenio celebrado entre el deudor y los acreedores, para llevar á efecto la cesion estrajudicial, debe contener las condiciones oportunas acerca de la cesion, de la cuantía de los bienes cedidos, modo de administrarlos, forma en que han de venderse, distribuir sus productos, etc. Si no se hubiese hecho asi en el mismo convenio en que se acepte la cesion, deberá ser objeto de un arreglo posterior. Tampoco debe omitirse, para evitar cuestiones ulteriores, lo relativo á la responsabilidad posterior del deudor para el caso de que los bienes cedidos no alcanzasen á cubrir todas las deudas. Téngase en fin, presente que «los efectos de la cesion convencional serán los pactados entre el deudor y sus acreedores,» como dice el artículo 147 del proyecto del Código civil, de acuerdo con el 1257 del Código civil francés, y con los principios que rigen en nuestro derecho.

APENDICE

Á LAS DOS SECCIONES ANTERIORES.

La doctrina que hemos espuesto en las dos secciones que preceden acerca de la naturaleza y efectos de la cesion de bienes, tanto judicial como convencional, ha sido admitida por el proyecto de nuestro Código civil, en el cual se desenvuelve con mucha precision y claridad. Por esto y porque puede considerarse como un resúmen, y resúmen de doctrina muy autorizado, de lo que hemos dicho, creemos conveniente insertar á continuacion la seccion 7.ª del cap. 5.º, libro 3.º de dicho proyecto, que trata *de la cesion de bienes*. Dicen asi los artículos que comprende:

«Art. 1145. La cesion de bienes es el abandono que un deudor hace de todos ellos en favor de sus acreedores.

(1) Art. 788.

La cesion puede hacerse, aun cuando sea uno solo el acreedor.»

«Art. 1146. La cesion de bienes puede ser convencional ó judicial.»

«Art. 1147. Los efectos de la cesion convencional serán los pactados entre el deudor y sus acreedores.»

«Art. 1148. La cesion judicial es un beneficio concedido por la ley á los deudores de buena fé que, por consecuencia de desgracias inevitables, se ven imposibilitados de pagar á sus acreedores.

Este beneficio no se puede renunciar.»

«Art. 1149. Para que la cesion judicial de bienes sea admisible, deberá hacerse en la forma que se establece en el Código de procedimientos.»

«Art. 1150. La cesion de bienes produce los efectos siguientes:

1.° El deudor queda libre del apremio personal.

2.° El crédito ó créditos se estinguen, hasta la cantidad en que sean satisfechos con el producto de los bienes cedidos para su pago.

3.° El deudor que despues de la cesion adquiera bienes, goza del beneficio de competencia, respecto de los acreedores á cuyo favor la hizo, pero no respecto de los posteriores.

En virtud del beneficio de competencia, el deudor tiene el derecho de que se le deje lo necesario para vivir honestamente segun su clase y circunstancias.»

«Art. 1151. La cesion judicial no concede á los acreedores la propiedad de los bienes cedidos, sino el derecho de hacerlos vender, y de que su importe, como el de las rentas, se invierta en el pago de sus créditos.»

«Art. 1152. La cesion de bienes de un deudor no aprovecha á sus codeudores mancomunados ni á sus fiadores, sino hasta el importe de los pagos hechos con los bienes cedidos.

Tampoco aprovecha á los herederos del que hizo la cesion, si han recibido su herencia sin el beneficio de inventario.»

«Art. 1153. Los acreedores pueden dejar al deudor la administracion de sus bienes, y hacer con él los arreglos ó convenios que tuvieren por conveniente, siempre que en ello se conforme la mayoría de los acreedores concurrentes, y que esta mayoría represente las tres quintas partes del total de los créditos.»

«Art. 1154. El acuerdo de la mayoría de los acreedores, hecho con arreglo al artículo anterior, es obligatorio para todos los interesados de la masa que hayan sido citados, segun se prescribe en el Código de procedimientos.»

«Art. 1155. La resolucion de la mayoría de los acreedores no perjudicará á los hipotecarios ó privilegiados que se abstuvieren de votar, aunque tomen parte en la discusion.»

SECCION IV.

DE LA CESION DE BIENES EN MATERIAS DE COMERCIO.

En nuestros antiguos códigos no encontramos distincion alguna entre los comerciantes y los deudores comunes, relativamente al beneficio de cesion de bienes. Pero ya en tiempo de los Reyes Católicos, y en épocas posteriores, cuando el comercio fué adquiriendo mayor importancia, hubo necesidad de sancionar ó establecer penas severas contra los comerciantes, que faltando á la buena fé, que es el alma de las transacciones mercantiles, se constituyeran por negligencia ó dolo en el caso de no poder pagar á sus acreedores: véanse, sino, las leyes del título 32, lib. 11 de la Nov. Rec. y el capítulo 17 de las Ordenanzas de Bilbao. Los que por su culpa ó con dolo se declaraban en quiebra, eran tratados como ladrones públicos; y no se les concedian los beneficios de la cesion de bienes, aunque la insolvencia fuese fortuita. Los mismos principios han sido sancionados por el Código de comercio. Dos artículos dedica á este objeto, cuyo contenido es el siguiente:

«Art. 1176. Las cesiones de bienes de los comerciantes se entienden siempre quie-

bras, y se regirán enteramente por las leyes de este libro.

Esceptúanse solo las disposiciones relativas al convenio y á la rehabilitacion, que no tendrán lugar en los comerciantes que hagan cesion de bienes.»

«Art. 1177. La inmunidad en cuanto á la persona que por el derecho comun se concede á los que hacen cesion de bienes, no tiene lugar, siendo estos comerciantes, sino en el caso de ser declarados inculpables en el espediente de calificacion de quiebra.»

Estas disposiciones son una consecuencia necesaria de lo que el mismo Código prescribe en el art. 1001. Por este artículo se considera en estado de quiebra á todo comerciante que sobresee en el pago corriente de sus obligaciones; y como el que acude al tribunal haciendo cesion de bienes por consecuencia de las deudas que tiene contra sí y que no puede satisfacer, ha suspendido el pago de ellas, es evidente que se halla en estado de quiebra y que debe sujetarse á las disposiciones del mismo Código, por las que se rige esta materia.

Pero esta cesion no produce ni debe producir los mismos efectos que le conceden las leyes comunes, por la necesidad que hay de poner trabas á la infidelidad en el comercio. El comerciante que hace cesion de bienes, no goza de la inmunidad en cuanto á su persona, y debe desde luego decretarse su arresto en su casa, si diere en el acto fianza de cárcel segura; y en defecto de darla, lo sufrirá en la cárcel, sin poderse decretar su libertad sino en el caso de ser declarado inculpable en el espediente de calificacion de quiebra, lo mismo que se verifica con los demás quebrados. Tampoco goza del beneficio de competencia, y los acreedores que no sean satisfechos íntegramente de sus derechos con lo que perciban de los bienes cedidos hasta el término de la liquidacion de la quiebra, conservan su accion por lo que se les reste debiendo sobre los bienes que ulteriormente pueda adquirir el que hizo la cesion (1).

(1) Art. 1186 del Código de comercio.

Sobre no disfrutar de estas ventajas, está privado el comerciante que ha hecho cesion de bienes, como antes hemos visto, de entrar en proposiciones de convenio con sus acreedores, y tambien de obtener la rehabilitacion para el ejercicio del comercio, equiparándole en esto á los alzados y á los quebrados fraudulentos. A primera vista es preciso encontrar dura esta determinacion, no siendo muy fácil hallar la razon que la justifique. El que acude al tribunal esponiendo simplemente en la forma prevenida por la ley el mal estado de sus negocios y que no puede cubrir sus obligaciones, para que se haga la declaracion formal del estado de quiebra; y el que verifica esto mismo, cediendo todos sus bienes en favor de sus acreedores, manifiestan igualmente su plausible deseo de pagar lo que puedan: igual es el resultado de ambos procedimientos. ¿Por qué la ley, sin embargo, introduce entre ellos tan dura y notable diferencia? ¿Por qué concede al primero los beneficios del convenio y de la rehabilitacion; y los niega al segundo? La ley presume sin duda que el que abandona sus bienes, trata de renunciar al comercio, y *no piensa* en procurar medios para cubrir sus compromisos. No nos parece suficiente esta razon; pero está escrito en la ley.

Reputándose como quiebra la cesion de bienes de un comerciante, y debiéndose regir por las mismas disposiciones que están prescritas para aquellas, es claro que debe hacerse la cesion en la propia forma que la solicitud que está obligado á presentar todo comerciante que sobresee en el pago corriente de las obligaciones; pero debiendo tratar de estos procedimientos en su lugar oportuno, nos abstenemos de hacerlo en este artículo. Véase CONCURSO DE ACREEDORES: QUIEBRA.

La doctrina que acabamos de esponer es referente á la cesion judicial. No puede regirse por ella la cesion estrajudicial ó convencional, que debe ser tambien permitida á los comerciantes, sin otro carácter que el de un contrato especial celebrado entre el deudor y sus acreedores, como hemos dicho en la seccion anterior. No estando, pues, prohibido este convenio por la ley, es claro que podra

tener lugar válidamente, y se llevará á efecto lo convenido entre el deudor y sus acreedores, siempre que con ello no se perjudique á tercero. Véase lo que sobre esto hemos dicho en la seccion anterior, cuya doctrina por regla general es aplicable al caso presente. Véase además, DEUDA: DEUDOR, y PRISION.

CESION (*en materia beneficial.*) Las palabras *cesion*, *dimision*, *permuta*, *renuncia*, *resignacion*, ora *simple*, ora *in favorem*, han sido y son en materia beneficial la rúbrica de cuestiones empeñadas, y que admiten diversa solucion, segun que se las considera bajo el punto de vista del derecho comun canónico, ó del derecho concordado: distincion indispensable, para obviar equivocaciones y errores, como á los que dan lugar algunas obras estranjeras, hechas usuales entre nosotros. En este caso se hallan, entre otras, los diccionarios canónicos del abate Andrés, y de Durand; el primero por su laconismo y oscuridad en el artículo CESION, aplicada á los beneficios; y el segundo por la misma razon, y por asentar que en las cesiones con trasmision de derechos en favor de un tercero es indispensable acudir al Papa.

En el presente artículo diremos únicamente, que aunque las palabras *cesion*, *dimision* y *renuncia simple* de derechos beneficiales, se toman á veces en materia canónica por una misma cosa; otras significan cosas diversas, y es lo mas técnico y seguro. *Dimision* y *renuncia*, suponen entonces que se deja ó traspasa un beneficio que ya se posee: *cesion* tiene lugar en lo judicial, y es relativa por tanto á beneficio, no que se posee ó disfruta pacíficamente; sino que se disputa; lo cual puede ser con derecho, ó sin él. La *cesion* en tal caso es un mero *apartamiento*: una cesion de derechos al beneficio, como quiera que ellos sean intrínsecamente, fundados ó infundados; ciertos tal vez en rigor de justicia; pero en el foro esterior y contencioso, litigados. El efecto de la cesion es entonces puramente judiciario ó contencioso: el cedente libra de un contendiente á su contrario: este se libra á su vez de contender: el derecho que segun los cánones y en rigor de justicia le competiera, ese le queda espedito, pues no lo recibe del cedente; pero si el derecho era de este, no por eso lo adquiere aquel por la mera *cesion*, ó apartamiento: la cesion en este caso es ya *renuncia*, ó *resigna in favorem alicujus*; y para que surta efecto, para la adquision del beneficio, no basta solo el acto y desistencia del cedente ó renunciante: tiene además que intervenir, como condicion, *sine qua, non*, la autoridad y asentimiento del *colador*, y de la potestad eclesiástica, si los dos conceptos no concurrieren en una misma persona. Por eso es erróneo asentar, como Durand, que en tal caso hay que recurrir al Papa. Alguna vez será, y es asi: cuando el Papa es *colador*, ó por lo menos, *institutor* y *preconizante*; pero no en todos los casos en general. En España, por ejemplo, sucede lo primero, esto es, es *colador* de los beneficios reservados á su provision en los Concordatos de 1753 y 1851: es meramente *institutor* y *preconizador*, v. g. respecto de los obispados y arzobispados de presentacion de la Corona: no tiene ninguno de los tres conceptos en cuanto á los demás beneficios de los patronatos, *universal* y *absoluto*, ó *entero* de nuestros Reyes, en que basta la colacion del obispo; y menos en aquellos en que, ni aun esta es necesaria, como sucede respecto de las plazas beneficiales de *capellanes de honor*, en que, si bien por delegacion pontificia; pero delegacion *perpétua*, que por tanto ha pasado á *regalía*; el nombramiento de la Corona lleva implícita la *institucion canónica*.

Pero todo esto corresponde ya á la *resignacion* en *favor*, y allí lo trataremos. Diremos solo en conclusion de este artículo, que la *cesion* de las *acciones* y *derechos* que pudiera tener el que cede, siendo un mero apartamiento, se consigna en autos, como cualquiera otra *desistencia* ó *separacion*, esto es, en virtud de poder especial, pedimento, ratificacion, y auto aprobatorio: y que en este caso, si el colitigante que queda tiene derecho propio, que no adquiere del cedente, sino que se hace espedito por su separacion; el juez se lo declara. Pero si no tuviere tal

derecho, el juez no puede declararle ó confirmarle, esto es, adjudicarle el que el otro le cede; pues para eso no tiene competencia, sino que es del prelado *institutor*, sea el obispo ó el Papa, que en sus casos habrán de proceder aun, salvando los derechos del patrono ó presentero.

Si fuera de juicio se hiciere *cesion*, ó será de *acciones* ó *derechos* que puedan competer á uno, ó de beneficio poseido pacíficamente. Lo primero se reduce al caso de cesion judicial; y véase lo dicho: lo segundo al de *resigna*, de que hablaremos en su artículo.

Todavía la cesion puede hacerse meramente ante el patrono ó patronos, lo cual no produce otro efecto que el dejar espedita la accion de estos, respecto del que cede, si pudiera tener derecho; pero ni obliga al patrono á confirmar, caso de ser en favor de un tercero, ni atribuye derecho al mismo para presentar, contraviniendo á la fundacion, ó fundamento legal del patronato, presentando ó confirmando en *persona indigna*, ó *escluida*. Véase **DIMISION**, y **PERMUTA DE BENEFICIOS: RESIGNA.**

CESIONARIO. Esta voz implica en algun caso una contradiccion *real*, si bien no legal, con los principios que dejamos asentados en el artículo genérico **CESION**: contradiccion real *en la fuerza* de las cosas; aparente y de *valor entendido* en lo legal: cuestion filológico-jurídica, que merece le consagremos algunas líneas; pues que habiendo allí asentado el principio general de que *nadie trasmite lo que no tiene*; en *cesion de acciones* se verifica en realidad de verdad lo contrario.

Diremos ante todo que *cesionario* es aquel en quien el cedente trasmite las acciones ó derechos de cuya cesion se trata. Sabido es que en el lenguaje del derecho, las palabras de esta terminacion son correlativas de las en *ante* ó *ente*, presentando estas una accepcion *activa*; y *pasiva* aquellos, espresando así un contrato ó convenio entre dos ó mas, en que hay trasmision de cosas ó derechos: como *donante y donatario*, *mutuante y mutuatario*, *cambiante* y *cambiatario*, etc., y así *cedente* y *cesionario*, como ya hemos indicado en el art. **CESIONARIO**. Pero en todos los casos, en que tiene aplicacion esta tecnología forense, hay *verdad real*; mientras en alguno de aquellos, en que la palabra *cesion* y *cesionario* son *específicas*, al tenor de lo que decimos en el artículo genérico **CESION**; á saber, en el de *cesion de acciones*; no hay sino *verdad legal*; esto es, verdad por *supuesto*, ó *ficcion de la ley*. En los demás casos el que trasmite ó cede, traspasa *lo que en el acto mismo le compete*; en el de cesion de acciones ya *ejercitadas*, *lo que le competió*, *lo que tuvo*, y no le compete ya en el momento en que lo traspasa. Así el fisco, *despues de ejecutar* á un deudor, que lo es mancomunadamente con otros, le cede las acciones para que él pueda, sustituido en lugar de la hacienda pública, ejecutar á los demás. Pero la hacienda pública ejecutó ya: hizo efectivo su crédito: nada mas tiene que pedir ni demandar: cuando cede, pues, *sus acciones*, ya no las tiene. ¿A quién, sino, podria ejecutar ni demandar en virtud de ellas, si ya está satisfecha? Sin embargo, lo que ella no podria hacer, pues á nadie le es lícito demandar en juicio lo que no se le debe; lo podrá hacer *el cesionario*. Pero se vé claro lo que dejamos sentado, y es, que en esta cesion no hay verdad *real*; pero sí *legal*, por ficcion de derecho, retrotrayendo mentalmente el hecho al tiempo en que el fisco, no estando pagado, tenia acciones que podia ejercitar contra todos y cada uno de los deudores solidarios. La ley ha establecido por equidad, que cuando el fisco elige este último medio, y lo elige siempre, supuesto que el ejecutado paga por sí, y por los demás; pueda luego repetir de estos á nombre de la hacienda, que en él ejecuta á todos, á reserva de sustituirle luego en su lugar, para con los demás; habiendo en todo ello una *ficcion legal*, un *valor entendido*, que reemplaza á la verdad *material*. Lo propio sucede en los censos, cuando, habiendo muchos deudores hipotecarios, se ejecuta á uno por todos: la *carta de lasto*, ó *de pago*, y cesion de acciones, lleva el mismo valor entendido, que produce los efectos civiles, que ha querido la

ley, y porque ella lo ha querido, conciliando la equidad con la justicia, ó *intentando* conciliarla; hallando justo facilitar al acreedor su cobro, sin perjuicio del ejecutado. Pero este sufre siempre perjuicio, y grande, en el segundo juicio que está precisado á entablar y seguir, con todos los gastos, dilaciones, y vicisitudes que son consiguientes, inclusa la posibilidad de hallarse con la *insolvencia* de los ejecutados. Por eso hemos dicho, ó *intentando conciliarla*, pues no siempre, y mas bien nunca, se concilia absolutamente: y si esta teoría es siempre justa, si debe modificarse, si el fisco sobre todo debe gozar de esta prerogativa sobre sus deudores, es materia que trataremos en su lugar oportuno. Véase CENSO (*como contrato*): CESION: CESION DE ACCIONES: FISCO: MANCOMUNIDAD.

CETRERIA. Corrupcion sin duda de *accipitrería*, y esta voz de la latina *accipiter* el ave de rapiña. Otros quieren que sea de *cetro*, por llamarse así la pértiga de madera, hincada verticalmente en tierra, y sobre la cual posaba el alcon, neblí, gerifalte y cualquier otra ave de rapiña, sometida á enseñanza para la caza de volatería. Sea lo que quiera del orígen etimológico, cetreria espresaba el arte de criar, curar y amaestrar para la caza á las aves de rapiña; y tambien el ejercicio mismo de la caza. Habiendo sido la de halcon dominante en los siglos medios, no solamente tuvo apoyo en las leyes, sino que participó de la galantería de la corte, y dió lugar á la creacion de oficios honoríficos en la casa del Rey. Por las leyes *ripuarias* y demás de los siglos medios, el robo ó muerte de un halcon constituía el delito de *felonía*, y los reos de este delito eran castigados con severísimas penas. Para los casos de indemnizacion un halcon maestro tenia por la ley la estimacion de doce bueyes. (1) Con ser tales en aquellos tiempos las prerogativas y fueros del acreedor sobre su deudor; á ninguno podian embargarse por deudas la espada ni el halcon. (2). En España, sin llegar á tal estremo el favor de la cetreria, estuvo, sin embargo, en grande honor. En los palacios se conocia el elevado cargo de *halconero mayor*, y los juicios y contiendas sobre robo ó propiedad de un halcon merecian que los decidiese el Rey, como puede verse en algunas de las llamadas *fazañas* y *albedríos*. Véase CAZA Y PESCA, Y CAZA *en lo canónico*.

CETRO. Del latin *sceptrum*, y esta del griego *skeptron*, sustentáculo, apoyo, y por tanto baston, báculo. En su orígen etimológico, pues, era la vara ó pértiga inflexible que servia para apoyarse. Despues se tomó como signo de autoridad, diversificándose esta por la forma de aquel; y varió tambien de denominacion, segun la especie de autoridad que espresaba, reservando la de *cetro* para espresar *autoridad soberana*, siendo entonces de cortas dimensiones, que aun se han reducido mas en el dia, segun conocemos los cetros de los Reyes. Los antiguos, en tal supuesto, representaban á Júpiter con el cetro del universo en la mano, y á veces el cetro solo era símbolo de esta autoridad universal. Con la misma significacion respectiva lo usaban y usan los Emperadores y los Reyes, ó sean las potestades *soberanas*. Comparando la etimología con el uso, es fácil reconocer el mismo origen material y etimológico en el *baston de autoridad, vara de la justicia, báculo prelacial y cetro de los Reyes*. En lo jurídico y diplomático, como en el lenguaje comun, siguiendo la alegoría, se toma con frecuencia ahora tambien *cetro*, por la autoridad soberana. Es de notar que en los tiempos actuales los Reyes, aun en los actos mas solemnes, no llevan el cetro en la mano, como ni la corona en la cabeza; y á lo mas, salvo rarísima escepcion, como en los actos de coronacion, por ejemplo, se presentan el cetro y la corona sobre una mesa al lado del trono ó sillon régio, segun vemos en la solemne apertura de Córtes.

Con análoga significacion de autoridad, se llaman *cetros* en lo eclesiástico, las pertigas, ordinariamente de plata, con remate arbitrario, ó alegórico, como una corona, un tem-

(1) Canciano, ley 11, tit. 3.° de las Ripuarias.
(2) Canciano, ley 16 de las de Luis el Piadoso.

plete, un escudo de armas, etc., con que asisten á las misas de pontifical, conventuales, ó solemnes, dos prebendados, ó eclesiásticos de capa pluvial.

En algunas partes, en fin, se llaman cetros con la propia significacion alegórica, las *mazas* con que los empleados con librea ó traje correspondiente, como reyes de armas, heraldos, bedeles, porteros, etc., asisten armados á ciertas solemnidades, como coronaciones de Reyes; ó preceden á ciertas corporaciones, como cuerpos colegisladores, cláustros universitarios, ayuntamientos, etc.

Añadiremos por vía de ampliacion, que aun en el lenguaje figurado, en lo antiguo se tomaban á veces *vara* y *cetro* en la misma acepcion; así en unas partes dice la Escritura sagrada: *non auferetur sceptrum de domo Juda*, etc.: en otras, *virga directionis, virga regni tui*, etc. En lo alegórico, un cetro con un ojo al estremo significaba la vigilancia y solicitud del Rey. Un cetro que termina en una mano con una espada, llevando unas veces la leyenda *non sine causa*; y otras sin ella, significa el *imperio mero*, la *jurisdiccion penal*, el *jus gladii*, la *potestad armada* del Rey; empresa ó emblema tomada de la sentencia de San Pablo, hablando del Rey ó Emperador: *non sine causa gladium portat*.

CICLO. Del griego *kiklos*, círculo: en su acepcion natural se ha aplicado al *círculo* ó *cerco* material: en sentido figurado á determinados *períodos* de tiempo, trascurrido el cual, comienza de nuevo otro período de igual duracion, y sucesivamente otro y otros, empezando cada uno en circunstancias idénticas, ó que se reputan, ó reputaron serlo, á las del primero y ulteriores, relativas á la astronomía, ó á la cronología, esto es, el mismo dia de la luna, ó del sol, la misma hora, etc.

Fácil es deducir que el *ciclo*, en este sentido, es uno de los muchos medios de computar ó determinar el tiempo. Bajo este concepto genérico son ciclos en realidad, la semana, el mes, el año, el siglo, la olimpiada, el lustro, etc.; pero solo se ha hecho técnica la voz en las divisiones de tiempo, denominadas *ciclo lunar, ciclo solar, y ciclo de las indicciones*; espresando el primero la duracion de 28 años astronómicos; la de 19 el segundo, y la de 15 el tercero. Este se llama algunas veces simplemente *indiccion* y el segundo simplemente *áureo número*. Hasta la correccion gregoriana, estos ciclos y períodos cronológicos tuvieron grande uso y aplicacion, en lo eclesiástico especialmente, y por la poderosa razon de haber el concilio de Nicéa adoptado el *áureo número, ó ciclo lunar*, para la celebracion de la Pascua de resurreccion. Véase PASCUA. Despues de la correccion gregoriana, los *ciclos*, inventadas las *epactas*, quedan reducidos á un recuerdo histórico y astronómico; no obstante lo cual, interviniendo por necesidad los ciclos en las cuestiones de crítica, cómputo eclesiástico, nos es indispensable consignar algunas indicaciones acerca de ellos. Añadiremos antes, que la voz ciclo se ha aplicado y aplica en el uso, no solo al período entero de los dichos 15, 19 y 28 años, sino á cada año de los mismos períodos; y lo propio se dice *ciclo lunar* 60, v. g., que ciclo lunar 5.°, por el 5.° año de los 19 del ciclo total de que se trata.

Ciclo lunar. En el año 4.° de la olimpiada 86, y por tanto 432 antes del nacimiento de Jesucristo, y 316 de la era de Nabonassár, Metón, celebrado astrónomo griego, hijo de Pausanias, creyó haber hallado que, á pesar de la alterabilidad de los años lunares entre sí, y respecto de los solares; habia un período de tiempo, pasado el cual, las *sizigias, ó fases* de la luna, esto es, los novilunios, cuartos, y plenilunios, correspondian á los mismos dias del mes en que habia empezado el período, ó ciclo, aunque no á las mismas horas; pero sí muy aproximadamente. Anunció que la duracion de este período era la de 19 años solares; ó sea 12 años lunares de á 12 lunaciones cada uno, y 7 mas de á 13, en todo 235 lunaciones ó 228 meses solares, y por tanto los dichos 19 años solares; y era decir, que pasado este período de tiempo, el sol y la luna volvian á hallarse en la misma posicion astronómica respectiva, que hacia 19 años solares en el mismo dia, ó

al mismo tiempo. El anuncio tenia realmente novedad, y fué acogido con tal entusiasmo por los atenienses, que se acordó notar, ó escribir con oro el mencionado número del *ciclo*, y de aquí la denominacion técnica de *áurco número*, ó *número áureo*, por el *ciclo lunar* de 19 años, y tambien por cada uno de los años de este período, segun queda dicho. La esperiencia enseñó despues, que la *conjuncion*, y á su vez la *oposicion* de los dos astros, coincidian, sí, en el mismo dia, despues de los 19 años; pero con una diferencia de horas, calculada en hora y media, poco mas ó menos.

Sin mas que esta diferencia, se vé bien, que al determinar la Iglesia la celebracion de la Pascua y demás fiestas movibles por el ciclo lunar, habia de haber error, que con el tiempo seria sensible; mientras puede decirse que nunca se apreció la mencionada diferencia, para la debida correccion.

No sucedió asi con otra diferencia mas notable y sensible, entre los años lunares y solares. Y en efecto, calculado el año lunar en 29 dias, 12 horas, 44 minutos, 3 segundos y 20 terceros, dan las 12 lunaciones una suma de 354 dias y 8 horas con corta diferencia; siguiéndose de aquí, que el año solar tendria sobre 11 dias mas, que el lunar. Formando estos cada 3 años, un mes y 3 dias resultaron los *embolismos*, ó años *intercalares*; llamados asi los que constaban de 13 lunaciones, para embeber el mes de esceso. Los años *intercalares* ó *embolísmicos* eran 7 de los 19 años del *ciclo*: 6 de los 7 meses añadidos eran de 30 dias, y el 7.° de 29; absorviendo asi entre los siete los 209 dias de diferencia total entre 19 años lunares comunes y 19 solares. Los *embolismos*, ó años *intercalares*, eran el 3.°, 6.°, 9.°, 11, 14, 17 y 19 del ciclo.

Aplicada la invencion de Metón al cómputo eclesiástico, venia á resultar, que el año del nacimiento de Jesucristo correspondia, segun los cristianos de Oriente al 2.° año del ciclo lunar; segun los de Occidente, al 3.°: diferencia que al fin se arregló en el uso, mediando en ello Dionisio el Exiguo, y tal vez por veneracion hácia el Concilio Niceno, que mandó observar el ciclo lunar, como hemos dicho, para la celebracion de la Pascua. Segun este sistema, para hallar el áureo número se añadirá una unidad al guarismo del año corriente, dividiendo despues el todo por 19: el cociente indica el número de ciclos, corridos desde la era cristiana; y el resto ó resíduo el número del año del ciclo corriente. Asi el presente año de gracia de 1856 es el 14 del ciclo 98 de la era cristiana; pues $1856 \times 1 = 1857 : 19 = 97\ \frac{14}{19}$ ó sean 97 ciclos, y 14 años.

Reconocióse al fin, que tampoco era exacto el año solar de los antiguos, segun espresamos en su lugar oportuno y de aquí la correccion gregoriana, y la introduccion de la *epacta*, cuyo sistema ha sustituido al del ciclo lunar, si bien conservando la tecnología y práctica tradicional del *áureo número*.

Ciclo solar. Es el período de 28 años solares. Llamóse solar, no del sol, sino del domingo llamado en lo antiguo *dia del sol*, por cuanto se trata en este cómputo de la coincidencia del *domingo* ó *dominicas*. La diferencia entre el año solar moderno y el antiguo, dió lugar á la *epacta*, y esta á los años *bisiestos*, por cuyo medio se corrigió aquella diferencia, imperfectamente, antes de la correccion gregoriana; y mas perfectamente despues de esta. Para computar estas diferencias y arreglar la coincidencia de dias y tiempos en la aplicacion astrónomica de estos á la celebracion de los misterios y fiestas movibles de la Iglesia, se introdujo el sistema de *letras dominicales* y *letras feriales*, entre los romanos *lundinares*, de lo cual hablamos en su artículo. La letra dominical se busca en cada año, asi como el correspondiente á *ciclo solar*, por una operacion idéntica á la empleada para conocer el *áureo número*, con la diferencia de que aquí se añadirán 9 años al año de la fecha, por suponerse que el nacimiento del hijo de Dios aconteció en el año 10 del ciclo solar, que entonces corria: el todo se divide por 28: el cociente espresa el número de ciclos solares, que cuenta la era cristiana: el resíduo el año del ciclo corriente. Si no hubiere resíduo, denota que el año corriente es el 28 del ciclo so-

lar; asi como el mismo resultado indica en su caso el año 19 del ciclo lunar.

Ciclo de las indicciones. Hemos dicho que su duracion es de 15 años. Se atribuye su introduccion á Constantino el Grande en el año 312 de la era cristiana. No se reconoce su utilidad, y es fundado inferir que el celo ardoroso de Constantino inventó este ciclo, para desterrar los ciclos paganos, pues mandó se computase el tiempo en adelante por *indicciones*; y no por *lustros*, ni *olimpiadas*. Retrotrayendo el sistema de *indicciones* á los tiempos anteriores á la era cristiana, vendria á coincidir el nacimiento de Jesucristo con el año 4.° de la *indiccion* que supondremos entonces corriente. En tal supuesto, hallaremos en cada año el de *indiccion*, añadiendo 3 al número del año de la fecha, y dividiendo el todo por 15, apreciando despues los resultados de un modo análogo á lo espuesto respecto de los *ciclos lunar y solar*.

Veáse AÑO: CALENDARIO: COMPUTO, CORRECCION GREGORIANA: CRONOLOGIA: EPACTA: ERA INDICION: LETRA DOMINICAL: TIEMPO.

CIEGO. En su sentido propio y natural, el que carece absolutamente del órgano de la vista.

En todos tiempos el legislador, el moralista y el filósofo han considerado el sentido de la vista como el primero de los sentidos: «Ver, dice la ley de Partida (1), es primero de los cinco sentidos de fuera, de que ficieron semejanza Aristóteles, é los otros sábios al pueblo.» De aquí el que antiguamente se aplicara á los delitos mas graves la pena de *sacar los ojos* (2), que con los adelantos de la civilizacion ha caido en desuso, hasta haber sido desterrada de los códigos modernos, como bárbara é inhumana: que siempre haya sido reputado el ciego como uno de los séres racionales mas desgraciados, digno, por lo tanto, de compasion y de la proteccion del gobierno: y que se considere como un delito grave cualquier atentado dirigido á privar al hombre de la vista.

Dejando para su lugar correspondiente la esplanacion de estas materias, en el presente artículo nos concretaremos á dar una ligera idea: 1.° de los deberes de la Administracion respecto de los ciegos: 2.° de la aptitud de estos para el ejercicio de los derechos civiles y políticos: 3.° de su incapacidad para cargos públicos: y 4.° de sus irregularidades canónicas.

Deberes de la administracion para con los ciegos.—Importantes son los deberes que corresponden al gobierno respecto de los ciegos. No solo debe prestarles toda la proteccion que exige su desgracia, recibiendo bajo su tutela y amparo á los que carezcan de medios de subsistencia, sino que á ricos y pobres debe proporcionar los medios necesarios para hacer menos penosa su lamentable situacion. En todos los paises civilizados se han abierto asilos para recojer á los ciegos desvalidos, y establecimientos públicos para proporcionarles la educacion elemental y artística, compatible con su estado, á fin de que, desarrollando sus facultades intelectuales, puedan á la vez tener un medio de distraccion y adquirir recursos para hacer mas soportable su desgraciada situacion. Esta educacion ha adquirido un desarrollo admirable desde que á mediados del siglo anterior Valentin Hatiy inventó el modo de enseñar á leer y escribir á los ciegos, valiéndose de caractéres en relieve para que por el tacto pudiesen adquirir la idea de las letras. Despues de muchos ensayos para asegurarse del resultado de sus procedimientos, en el año de 1784 abrió en París un establecimiento para la instruccion de ciegos bajo la proteccion de la Sociedad filantrópica de dicha capital. En 1790, aquel gobierno tomó á su cargo este establecimiento en vista de los buenos resultados que estaba proporcionando; y, á pesar de los trastornos políticos, ha continuado siempre floreciente, en cuyo estado se halla en la actualidad.

(1) Ley 1.ª, tit. 13, Part. 2.ª

(2) La ley antes citada equipara á la de muerte la pena de *sacar los ojos*, toda vez que deja al arbitrio del juez el castigar con la una ó con la otra al que «cobdiciasse ver muerte de su Señor el Rey, diciéndolo paladinamente.» Con esta misma pena castiga la ley 2.ª, tit. 14, Part. 5.ª, á los que «consejassen facer deshonra á fija de Rey, ó su hermana, ó otra su pariente, faciendole facer maldad de su cuerpo.» Si bien la ley 6.ª, tit. 31, Part. 7.ª prohibe por regla general imponer la pena espresada. Véase PENAS.

En los primeros años del presente siglo se abrieron establecimientos iguales en Inglaterra, Rusia, Prusia, Austria, Holanda, Dinamarca, Bélgica, Suiza, y en los Estados-Unidos de América. Aunque en España se habian hecho algunas tentativas para plantear este medio de instruccion, no se consiguió hasta el año de 1834, en que el director del colegio de Sordo-Mudos, se encargó de la enseñanza de los ciegos bajo la proteccion de la Sociedad económica Matritense. Despues se han hecho algunas tentativas para establecer un colegio normal en esta corte, donde se les enseñase lectura, escritura, principios de religion, geometría, geografía, música, etc., y los oficios ó industrias á que pudieran dedicarse; y acogido el pensamiento por el gobierno, en 20 de febrero de 1842, se inauguró solemnemente, bajo la proteccion de S. M., la escuela de ciegos agregada al colegio de Sordo-Mudos, en la cual se proporciona la instruccion gratuita á cuantos ciegos de ambos sexos la pretendan.

A pesar de esto, la generalidad de los ciegos continúa sumida en la ignorancia y la miseria, porque no todos buscan la instruccion antedicha, ni es posible tampoco proporcionarla á todos. En la necesidad de que la mayor parte de ellos queden abandonados á la caridad pública ó privada, desde muy antiguo nuestras leyes les han protegido en este terreno, si bien adoptando precauciones para corregir los abusos que se lamentaban, pues muchos se finjen ciegos para escitar por este medio la caridad pública. La ley 8, tít. 39, lib. 7 de la Nov. Recop. concedió á los que fuesen *verdaderamente* ciegos, facultad para pedir limosna sin licencia alguna en los lugares de donde fueren naturales ó moradores, y á seis leguas en contorno. Esta ley fué modificada por la 14 del mismo título, segun la cual los ciegos y demás pobres impedidos no pueden pedir limosna sin licencia por escrito del cura de la parroquia, y aprobacion de la justicia del pueblo, cuya prohibicion se repitió en otras leyes posteriores del mismo título, y ha venido á ser confirmada por el art. 263 del Código penal, segun el cual debe ser condenado con las penas de arresto mayor y sujecion á la vigilancia de la autoridad, por tiempo de un año, el que pidiere habitualmente limosna sin la debida licencia.

Aptitud de los ciegos para el ejercicio de los derechos civiles y políticos.—Como la falta de vista no priva al individuo de sus facultades intelectuales, es permitido á los ciegos, por regla general, el ejercicio de todos los derechos civiles y algunos políticos; así es que pueden contratar y obligarse, comparecer en juicio como actores y como reos, contraer matrimonio, hacer donaciones, testar, ejercer el derecho electoral, etc. Como pudieran ser engañados ó perjudicados, las leyes, en beneficio de ellos mismos, les han restringido el ejercicio de algunos de estos derechos. Así es, que los ciegos no pueden otorgar testamento cerrado (1); y para otorgarlo abierto han de concurrir cinco testigos con escribano (2). Tampoco puedan ser testigos de los testamentos: aunque no hay ley que lo prohiba espresamente, se deduce de la 1.ª, tít. 18, lib. 10, de la Nov. Recop., la cual exige para la validez del testamento que los testigos *vean al testador*, y mal podrá llenar este requisito el que carezca totalmente de la vista: así lo ha sancionado la jurisprudencia, y se establece tambien por el art. 590 del proyecto de Código civil, el cual dispone terminantemente, que los ciegos no puedan ser testigos en los testamentos. La razon de esta incapacidad es tan clara que está al alcance de todos. Pero esta prohibicion no debe hacerse estensiva á los contratos, ni á las causas civiles ni criminales, si bien no será válida la declaracion del ciego cuando la falta de vista sea incompatible con la percepcion y apreciacion de los hechos y circunstancias sobre que verse.

Incapacidad de los ciegos para cargos públicos.—La falta de vista naturalmente imposibilita al hombre para el ejercicio de los cargos públicos: aunque la ley no escluya en algunos casos espresamente á los ciegos, basta la razon natural para comprender su incapacidad

(1) Ley 14, tít. 1.° Part. 6.° Igual prohibicion contiene el artículo 692 del proyecto de Código civil.
(2) Ley 2, tít. 18, lib. 10, Nov. Recop.

física y material, que es la mas poderosa de todas las incapacidades. En otros casos parece que no concurra esta incapacidad, y sin embargo la ley, por razones de conveniencia, los escluye espresamente. Nos haremos cargo de las incapacidades consignadas espresamente en la ley, y de aquellas en que puede haber dificultad. Los ciegos, pues, están incapacitados:

1.° Para ser jueces. Esta prohibicion se halla consignada espresamente en las leyes 4.ª, tít. 4.°, part. 3.ª y 4.ª, tít. 1.°, lib. 11 de la Nov. Rec., las cuales se fundan en que el ciego no vería á los hombres ni los sabria conocer ni honrar. En ambas leyes se encuentra la misma razon de conveniencia, de la cual será lógico deducir, que no pueden desempeñar ningun cargo en las diversas gerarquías del órden judicial los que carezcan absolutamente del sentido de la vista. Pero ¿podrán ser árbitros? ¿Podrán ser arbitradores? No están de acuerdo los autores sobre este punto. Unos consideran el árbitro y el arbitrador con el carácter de jueces ordinarios, bajo cuyo concepto sostienen que ninguno de estos cargos puede desempeñarse por los ciegos, con arreglo á las leyes antes citadas. Otros creen que los arbitradores no son verdaderos jueces; pero que no se puede negar este carácter á los árbitros, segun la ley de Partida (1), la cual previene que anden por el pleito «como si fuesen jueces ordinarios;» de donde deducen, que el ciego no puede ser árbitro, pero sí arbitrador. Nuestra opinion es que los ciegos pueden desempeñar uno y otro cargo, por las razones que hemos consignado al final de la seccion 6.ª del artículo **ARBITROS** (pág. 410 del tomo 3.°).

2.° Para ser abogados por otro. «El que fuesse ciego de ambos los ojos non puede ser abogado por otri. Ca pues non viesse al judgador, non le podria facer aquella honra que devia, nin á los otros omes buenos que estoviessen y.» Esto dice la ley 3.ª, tít. 6, partida 3.ª, la cual dá á entender que la falta total de vista no imposibilita al hombre para ejercer la abogacía en sus propios negocios.

3.° Para ser escribanos. Aunque no hay ley que espresamente prohiba al ciego ejercer este cargo público, la naturaleza y carácter de sus funciones le incapacitan para ello. «Escrivano, tanto quiere decir como ome que es sabidor de escrevir,» dice la ley 1.ª, tít. 19, part. 3.ª Estos funcionarios deben escribir por sí mismos las declaraciones de los testigos (1); deben dar fé de los actos que pasan ante ellos y del conocimiento de las partes; y es imposible desempeñar todas estas funciones careciendo totalmente de vista.

4.° Para ser procuradores judiciales. Tampoco existe prohibicion espresa legal, pero se deduce de la naturaleza de sus funciones. La ley 5.ª, tít. 5.° de la part. 3.ª, prohibe ser *personero por otro* al mudo y al totalmente sordo; y la misma razon existe y aun mayor, por ser mas fácil el error acerca de las personas, respecto del totalmente ciego. Esta prohibicion no puede alcanzar al mandatario para negocios comunes y privados, ó peculiares del comitente, y sin que el encargo obligue á un tercero á tratar con él, mejor que con el poderdante.

5.° Para ser tutores ó curadores. Los espositores de nuestro derecho convienen en que el ciego no puede ser tutor ni curador, fundándose en las palabras con que termina la ley 14, tít. 16, part. 6.ª «Otrosi, dice, el que fuesse mudo, ó sordo, non puede ser guardador de mozos; nin el que fuesse ocasionado, ó *embargado de su persona*, ó en *otra manera*, de guisa que non pudiesse entender, nin trabajarse en pró dellos.» Sin embargo, como la esclusion del ciego no es terminante; como pudiera suceder que por la poca importancia de los bienes del menor y por la aptitud y capacidad del ciego, este pudiera desempeñar el referido cargo con beneficio y provecho de su pupilo, parece que no debe considerársele incapacitado cuando concurran estas circunstancias. La falta total de vista podrá ser una escusa legítima de la tutela, pero no un impedimento

(1) Ley 25, tít. 4.°, part. 3.ª

(1) Ley 7, tít. 11, lib. 11 de la Nov. Rec.

absoluto: así lo dispuso el derecho romano (1), y esto mismo se propone en el proyecto de Código civil, como resulta de los artículos 202, núm. 3.°, 210, núm. 6.°, 278 y 279.

6.° Para ser alcalde. En ninguna de las leyes electorales y de atribuciones de los ayuntamientos hasta ahora publicadas, han sido privados los ciegos de ser electores y elegibles: en todas ellas se prohibe que lo sean los que estuviesen bajo interdiccion judicial por incapacidad física ó moral; y como segun nuestras leyes, el ciego, por el hecho de serlo, no está sujeto á curaduría, es claro que no está comprendido en la prohibicion antedicha, si bien su defecto físico es causa suficiente de escusa para el desempeño de los indicados cargos. Estos mismos principios han sido consignados en los arts. 36, 37 y 39 de la reciente ley de organizacion y administracion municipal, sancionada en 5 de julio de 1856. Pero como el art. 38 de la misma previene, que no son elegibles para alcaldes los que no sepan leer ni escribir; de aquí se sigue que los ciegos no podrán desempeñar este cargo. Tampoco les está prohibido el que sean diputados provinciales ni á Córtes. Sin embargo, como el sentido de la vista es tan importante para el desempeño de las funciones anejas á los cargos antedichos, será muy raro el caso en que un ciego sea elegido para desempeñarlo, ó que no se escuse si lo fuere. Varias veces hemos visto ejercer el derecho electoral activo á los ciegos; pero ni una sola vez el que sean elegidos.

Estas cuestiones son de sentido comun, y ella nos lleva á resolver otra, á saber, si el *ciego* podrá ser elegido regidor. El derecho estricto no dice nada, pero la resolucion negativa está en primer lugar, en el buen sentido, cuando vemos que sin prohibicion espresa, nunca son elegidos: y lo está tambien en la fuerza de las cosas, pues el regidor sustituye con frecuencia al alcalde, esto es; al agente *administrativo, político y judicial*, cuyas funciones requieren ciertamente el órgano de la vista. ¿Cómo, si no, desempeñaría adecuadamente, funciones de alcalde en la recepcion y honores, por ejemplo, de autoridades superiores, en la represion de atentados contra el órden público, en los juicios y audiencias públicas, en solemnidades y actos públicos corporativos, etc.?

7.° La ley 6.ª, tit. 26, part. 4.ª, que trata de quien debe heredar el *feudo*, dice: «Pero si el vassallo, despues de su muerte, dejasse fijo, ó nieto, que fuesse mudo, ó *ciego*, ó enfermo, ó ocasionado de manera que non pudiesse servir el feudo, non lo meresceria aver, nin lo deve herederar en ninguna manera.» Esta es otra incapacidad legal que antiguamente tenian los ciegos, y que hoy no es de aplicacion.

8.° Por último, la falta total de vista es uno de los defectos físicos que eximen del servicio militar, así como del de la milicia nacional. Tambien se hallan exentos los que tengan cataratas, ceguera diurna y crepuscular permanentes, y otras enfermedades y defectos de los órganos de la vista, comprendidos en el órden segundo de las clases 1.ª y 2.ª del cuadro que acompaña al reglamento de exenciones físicas, aprobado en 10 de febrero de 1856.

Añadiremos una observacion general, hoy de mas eficacia que nunca. La aptitud del ciego en negocios civiles privados, ha sido algunas veces, y muchas lo será, caso judicial, esto es, caso en que la prudencia judicial, apreciando las circunstancias, suple á la ley, ó mas bien la hace eficaz. Hemos hecho ya mérito de este caso relativamente á los sordo-mudos, sin perjuicio de que volveremos á tratarla ámpliamente en su artículo. Sabida es cuanto la administracion y las ciencias han hecho en el último medio siglo, en favor de estas clases desgraciadas. El ciego llega á *ver* y *leer* mecánicamente; y á *leer*, *escribir* y *espresarse* el *sordo-mudo*. Otras veces el ciego no lo es *de nacimiento*, sino que contrajo la ceguera cuando ya sabia leer, escribir, contar, ciencias tal vez: cuando habia tenido hábilmente trato y comercio con los demás; cargos públicos acaso; conocimiento práctico y espedito de la so-

(1) Leyes 40, tit. 1.°, lib. 27; 16, tit. 8.°, lib. 20, *Digesto*, y ley única, tit. 67, lib. 5.° del *Código*.

ciedad; prácticas, formas, etc. ¿quién duda que este conjunto y diversidad de circunstancias autorizan, y aun obligan, no ya en equidad, sino en rigorosa justicia, á formar juicios y apreciaciones diversas sobre los actos del ciego, asi en lo administrativo como en lo judicial? Repetiremos, y aun habremos de hacerlo en su lugar, que habiendo solicitado un sordo-mudo la administracion de sus bienes y los de su mujer, fundado en la pericia que habia adquirido en el colegio de Sordo-mudos de esta corte, el gobierno remitió la solicitud á consulta del Consejo Real y Tribunal Supremo de Justicia, opinando estos cuerpos, que mientras una ley especial no determine lo conveniente al caso, habria de dejarse á la resolucion de los tribunales, segun las circunstancias; lo cual tiene aplicacion respecto de los ciegos.

En cuanto á lo criminal, la ceguera es circunstancia de que hablamos en su lugar oportuno.

Irregularidades canónicas.—Réstanos solo tratar de las irregularidades que produce la falta de vista segun los cánones y doctrina de la Iglesia.

El que carece totalmente del órgano de la vista; el que está casi ciego, ó el que tiene una notable predisposicion á contraer este defecto, tiene *irregularidad*, y no se le pueden conferir ni aun las órdenes menores. La pérdida de la vista en uno de los ojos tambien la causa, aunque para el uso de las dispensas, se ha introducido la distincion del ojo izquierdo llamado del *cánon*, porque está al lado en que se halla el misal durante el cánon de la misa. Varios autores opinan que si la falta de vista en el ojo derecho fuese sin notable deformidad; ó aunque estuviese vacío, se colocase otro de cristal con tal artificio que apenas se conociese, cesaria la irregularidad; como asimismo si hallándose privado del ojo izquierdo, tuviere tan buena la vista del derecho que pudiera leer el cánon sin una conversion deforme ó notable, hallándose en este caso facultado para aproximar el misal mas al medio del altar.

(1) Barbosa, De offic. et potest. Episcop. Part. 2.ª, allegat. 41; Lacroix, lib. 7, núm. 800, y otros autores.

Estos defectos, si se adquieren despues de conferidas las órdenes sin culpa del deforme, no le hacen del todo irregular, y solo causan *suspension* en el ejercicio de las funciones correspondientes á las órdenes ya recibidas; pero no le privan de los beneficios que posea. Sin embargo, el diácono que pierde la vista del ojo del cánon, no puede ser promovido al sacerdocio (1). Pero estas, como otras irregularidades, pueden ser dispensados en la forma que diremos en su lugar correspondiente. Véase **DISPENSA: IRREGULARIDAD.**

CIENCIA: Del latin *scientia*, y esta palabra del verbo *scire*, saber, tener conocimiento de las cosas. Pero *cosa* es uno de los *géneros supremos, ó universales*, tratándose de las categorías de los séres: todo lo comprende: lo individual, lo específico, lo genérico: lo finito é infinito: lo físico y moral: lo material y formal: los efectos y las causas: la accion y la negacion: el modo, en fin, las relaciones y las correlaciones de los séres. De todas y cada una de estas cosas se puede tener conocimiento, y eso por diversos medios y causas; por todos aquellos medios por que llegamos á tener *certeza* (véase este artículo). Puede serlo tambien, y lo es por necesidad, en muy diversa escala, y con relacion á multiplicados fines, deduciéndose de todo cuan ámplia y compleja es, cuan varia debe de ser en sus aplicaciones la enunciativa *ciencia*: unas veces será puramente lógica, y se limitará á la nocion, al mero conocimiento de lo que hacemos, enunciamos ó sentimos: otras el conocimiento se estenderá ó muchas cosas, y esto será por autoridad, por reglas, por principios, y tendremos *tradicion, fé, pericia, arte, ciencia*: y como no solo se sabe por recreo; sino tambien por deber, bajo este punto de vista viene la *ciencia* á ser objeto del derecho y de la administracion.

En las secciones subsiguientes haremos mérito de las acepciones mas comunes, ora técnica, ora oficial ó usualmente de la palabra *ciencia*, en lo civil y canónico, con las reglas y prescripciones de cada caso.

(1) Van-Espen, Juris ecclesiast. univers. Part. 2.ª tit. 10.

PARTE DOCTRINAL.

SUMARIO.

Sec. I. Indicaciones generales acerca de la ciencia en lo filosófico.
Sec. II. De la ciencia en el órden civil
§. 1.° *De la ciencia en lo político.*
§. 2.° *De la ciencia en lo administrativo.*
§. 3.° *De la ciencia en lo jurídico-civil.*
Sec. III. De la ciencia en lo canónico.

SECCION PRIMERA.

INDICACIONES GENERALES ACERCA DE LA CIENCIA EN LO FILOSÓFICO.

Lo propio que en el lenguaje comun, y en el legal, *ciencia* en lo filosófico, segun queda insinuado, es unas veces la mera nocion ó noticia del hecho ó hechos de que se trata. Asi decimos, por ejemplo, que sabemos una cosa de *propia ciencia*: que tal cosa sucede á *vista, ciencia y paciencia* de tal persona: y en el mismo concepto, en fin, procede y se entiende la enunciativa, elevada á principio moral, y legal, *scienti, et volenti nulla fit injuria*, esto es, que el que sabe lo que hace, ó tiene *ciencia* de lo que hace, no puede decirse engañado.

Otras veces la voz *ciencia* es técnica, es compleja, y espresa el conocimiento *por principios* ó verdades generales y ciertas de muchas cosas en el órden natural y social; ya en cuanto al *sér* de las mismas, ya en su *modo de ser*. Entonces el conocimiento ó noticia no es singular, sino general: no individual, sino *colectivo y distributivo*; y es además análogo y uniforme: lo que sabe uno, lo sabe la generalidad de los que han cultivado los mismos estudios, y comprenden los mismos principios. En la primera de estas acepciones de la palabra *ciencia*, cada uno sabe ó puede saber por motivos particulares y diversos; en la segunda todos por los mismos motivos y fundamentos. En la primera no se sabe hasta que los hechos se realizan; en la segunda muchas veces antes que se realicen; y se alcanzan á ver entonces, se predicen, se dan por ciertos por *induccion*. En este caso, ya la *ciencia* se dice tal por antonomasia, y espresa una parte organizada, digámoslo asi, del saber humano, sobre bases naturales, unas veces, otras convencionales ó mistas, bajo cuyo punto de vista la *ciencia* se diferencia esencialmente del *arte*, como diremos.

En el propio concepto, y pues que la *ciencia* elevada á esa altura, no es individual, sino general por necesidad, por la naturaleza misma de las cosas, habrá *ciencia* en *abstracto*, y ciencia en *concreto*.

En el primer caso, es *una coleccion de principios*, esto es, de *verdades evidentes y generales, subordinadas á un mismo fin, acerca del cual autoriza á deducir consecuencias necesarias, y por tanto ciertas tambien*. En este sentido, las verdaderas ciencias existen y existirán, aunque nadie se dedique á ellas: á *parte rei*: *in rerum natura*: como existe la verdad trascendental y su Autor Supremo, aunque la ceguera del mundo fuese tal, que todos los desconocieran. Asi es una verdad eterna, por ejemplo, *que no hay efecto sin causa*, con la consecuencia indeclinable de que *la causa precede al efecto*.

Pero desde que alguno se aplica á conocer estas leyes naturales, y la natural ó necesaria conexion de sus correlaciones se traslada á la inteligencia; ya la *ciencia* se presenta en *concreto*. Los filósofos la definen en este caso la *aptitud ó facilidad de demostrar por principios lo que proponemos: habitus demostrandi, quod affirmamus, aut negamus*.

Ahora bien: de lo dicho se infiere en primer lugar, que las consecuencias, las deducciones é inducciones serán de la misma naturaleza, verdad, y energía, que los principios de que se deducen; en cuyo supuesto, es necesario tener presente que los principios de una ciencia, de las ciencias llamadas por eso *naturales*, son naturales siempre. Asi, *el todo es mayor que la parte: no hay efecto sin causa; es imposible que una cosa sea y no sea al mismo tiempo; tres mas tres son seis*: como asimismo estos principios físicos: *todo cuerpo es grave: la gravedad obra en razon directa de*

las masas é inversa del cuadrado de las distancias: todo cuerpo es poroso, impenetrable: el calórico dilata: el frio contrae, etc.; son siempre principios independientemente del arbitrio humano; si bien todos no son eternos; sino hipotéticos algunos, dependientes del estado y desarrollo de la ciencia, cuales son los principios, reputados tales por induccion, como lo relativos á las propiedades generales de la materia. En las ciencias no rigurosamente *naturales*, por la inversa, sus principios ó algunos de ellos son *convencionales*, hipotéticos. La *economía política*, por ejemplo, traida al terreno práctico, puede partir del principio no natural; sino legislativo, de la propiedad territorial *acumulada*, ó de la *personal ó distribuida, alodial, feudal, vincular, etc.*: la *administracion*, del fundamental y diverso de la *centralizacion*, ó de la *excentralizacion*: la legislacion, en sus diversos ramos, de la existencia ó no de *vinculaciones*, del *sistema dotal*, del de la *sociedad conyugal* de *gananciales*, ó del opuesto; por ejemplo, el de *bailío*: del juicio por *jurados*, etc. Desde que la administracion, la legislacion admite uno de estos sistemas, el sistema admitido es para todos una verdad indubitada, *un principio*, y de él se deducen consecuencias precisas, y ciertas, que es el carácter de la *ciencia*.

La ciencia en este concepto se llama por antonomasia y segun el caso, *facultad*, como en lo académico; *pericia*, como en los juicios denominados por eso *periciales* y *facultativos*; si bien estos juicios se llaman tambien asi, aunque se trate, en vez de una *ciencia*, de un *arte*.

Indícase aquí la cuestion sabida sobre la diferencia entre *el arte* y la *ciencia*; de alguna importancia en el órden legislativo; de alguna mas en el administrativo; pero menos en ambos casos, que en el órden filosófico. En este concepto *antitético* se dice *ciencia* el saber humano que estriba en *principios*; *arte* cuando estriba en *reglas*, tomadas estas y aquellos en la rigorosa acepcion de escuela, esto es, el principio por una verdad fundamental, evidente, que es tal, independientemente del arbitrio humano, como *bis tria sunt sex*; *el todo es mayor que la parte*: la regla por un mero *precepto*, práctica ó verdad de convencion: el *principio* en su acepcion estricta es inalterable, perpétuo; la regla arbitraria, falible: en las *reglas*, en su acepcion estricta tambien, tiene dominio el uso, la costumbre, la moda, hasta el capricho; en los *principios* rigorosos nunca. ¿Qué moda ó arbitrio cabe sobre la gravedad de la materia, sobre la impenetrabilidad de los cuerpos, sobre que el todo es mayor que la parte, el efecto posterior á la causa, etc.? Pero no asi sobre el modo de vestir, de guerrear, de edificar, de decorar, etc. Véase PRINCIPIO: REGLA.

De aquí la cuestion, debatida tambien, sobre si tal facultad, profesion ó ramo del saber humano es *ciencia* ó *arte*. Niegan unos el primer concepto á la Medicina, por ejemplo, reduciéndola á puro arte; mientras otros sostienen lo contrario. No se sabe, ni nunca se sabrá con certeza metafísica, lo que es la vida: se sabe solo lo que es la vida, y lo que es la salud, *á posteriori*; se sabe el *efecto*, no la causa: y si la Medicina tiene principios, añaden, son *mutuados*, de la física, de la química, de la mecánica, etc. No adelantamos estas indicaciones para tomar parte en la mencionada polémica; sino para precisar mas y mas la idea de *ciencia* en el sentido técnico filosófico. En el mismo concepto añadiremos que el que una profesion ó ramo del saber humano tome sus principios de otro, toda vez que sean tales principios en rigor técnico, no es bastante, ni debe ser, para negarle el carácter de ciencia. En el terreno filosófico es menester considerar que la verdad universal es *una* en sí, como su Autor, aunque sea diversa en el modo de *comprenderla*, de *esponerla*, ó de *aplicarla*, lo que procede, no de ella esclusivamente, sino de su inmensidad, de la limitacion de la humana inteligencia, y facultades del hombre, de las multiplicadas y diversas necesidades del género humano: que los principios lo son siempre de la *ciencia universal*, de la *verdad*: que ningun precepto de esta filosofía trascendental, universal, de la verdad *in genere*, prohibe que los

principios se apliquen á los casos particulares de la ciencia universal; y por consecuencia que el que un ramo del saber humano tome sus principios de otro, toda vez que sean principios naturales ó rigorosamente filosóficos, y que cuadren al fin filosófico de tal enseñanza ó facultad, no basta para negarle el carácter de *ciencia*. La *filosofía universal*, la gran ciencia de la *verdad universal*, es el gran foco en que encienden, con igual derecho, sus antorchas las ciencias particulares; que á su vez, al apropiar un principio general á sus fines, no tienen el derecho de hacerlo *esclusivo*, estinguiendo en el hecho la competencia de las demás ciencias particulares para aplicarlo tambien, como propio, á su fin especial. De otro modo, la jurisprudencia misma no seria *ciencia*, en el tecnicismo filosófico. Véase lo que decimos en esta razon en el artículo correspondiente: véase ARTE: y sobre la diferencia filosófica, y filológica entre *ciencia* y *sabiduría*, véase este último artículo.

Concluiremos estas indicaciones filosóficas inculcando el principio tan sabido, y al mismo tiempo la verdad, amarga y á la vez salvadora, enseñada por una esperiencia no desmentida, á saber, *parum scientiæ nocet; multa prodest*: poca ciencia mata, mucha salva.

SECCION II.

DE LA CIENCIA EN EL ÓRDEN CIVIL.

La ciencia es uno de los grandes deberes de una sociedad bien constituida, así como es el gran principio civilizador de los pueblos. Consignar algunas indicaciones acerca de la ciencia en lo político, en lo administrativo y en lo judicial, es el objeto de esta seccion.

§. 1.° *De la ciencia en lo político.*

Si política es el arte de gobernar, mal podrá ser estraña á ella la ciencia; y antes es uno de sus objetos preferentes: una de las atenciones capitales en la organizacion de un Estado. En el órden político la *ciencia* y las *costumbres* son la *síntesis* de la *civilizacion*.

Pero en lo político la ciencia no puede tomarse siempre *técnicamente*, y por tanto en un sentido estricto; sino, por el contrario, en una acepcion latísima; tan lata, como es universal y trascendental la administracion de un Estado. En tal concepto, la ciencia, descendiendo al terreno práctico, admite denominaciones, mas ó menos específicas, y es entonces, ora en el terreno de la teoría, ora bajo el punto de vista de los resultados, y segun el caso, *ilustracion*, *civilizacion*, como *fines*: *educacion pública y privada*, *ciencias*, ya en sentido técnico, *artes*, *facultades*, *carreras literarias*, *escuelas*, *colegios*, *universidades*, *estudios*, *enseñanza*, *etc.*, como *medios*. En vano seria buscar nada de esto en las naciones bárbaras; y antes son bárbaras por carecer de ello. La ciencia, pues, bajo la fórmula latísima que queda espresada, constituye el carácter distintivo entre una nacion bárbara y una nacion civilizada, entre un pueblo culto y un pueblo salvaje. Aplicado este deber supremo de la sociedades, de su administracion pública, á la política, se ha dicho con verdad, y siempre se dirá con razon y pública conveniencia á las naciones: *apoderaos de los andadores de la infancia, si quereis regir bien las riendas del Estado.*

Trayendo esta máxima general al terreno de la aplicacion, se resuelve ya en deberes especiales. De aquí la *enseñanza* y *profesorado público*: la instruccion *primaria*, la *secundaria*; la *facultativa*; las *enseñanzas especiales*, ora industriales, ora de otro género: la ciencia militar tambien, y asimismo la eclesiástica, si bien acerca de esta en muy diversa forma, como espondremos, entre otros artículos, en el de ENSEÑANZA. Todo es de la incumbencia de la administracion general: suyo es, en términos generales tambien, el deber de plantear, organizar y costear la enseñanza: suyo el de alentarla con premios y honor, encaminándola á fines convenientes al Estado y útiles al individuo, colocando así el estímulo en el empeño mismo, el premio en el sacrificio. Como la administracion

central, y bajo su inspeccion é impulso las provinciales y locales, hayan de satisfacer á este deber altísimo, capital, distintivo, como hemos dicho, entre la civilizacion y la barbarie, lo esplanaremos en sus artículos correspondientes, entre otros, en el ya citado de ENSEÑANZA. En lo restante del presente hacemos indicacion de cómo las sociedades secular y eclesiástica han aplicado este deber en algunos de los casos mas peculiares y propios de la ENCICLOPEDIA.

§. 2.° *De la ciencia en lo administrativo.*

Tomamos aquí la administracion en oposicion á jurisprudencia y legislacion civil. Tan vasta como es, aun en este sentido estríeto, no se comprende como en ninguno de sus ramos haya nunca requerido, y ni casi requiera aun una *carrera científica*, mientras es un hecho que por su naturaleza, y por causa de pública utilidad lo necesitaba. Ya en el artículo ARCHIVO hemos notado y vituperado este abandono. Algo de ello hemos indicado tambien en el artículo CESANTIA; y lo mismo habria que repetir en muchos ramos de hacienda y gobernacion. ¿Porqué, por ejemplo, en lo judicial será carrera pública, ó exigirá cierta instruccion facultativa el mero oficio de *procurador* de causas, mientras en lo administrativo, ni la requiere ni la supone el cargo complejo y difícil de gobernador de provincia, como ni tampoco los de intendente, director general, secretario de gobiernos políticos, y otros análogos? En los últimos tiempos se han dictado algunas reales resoluciones prescribiendo los estudios y conocimientos que serian indispensables para optar á ciertos cargos del órden administrativo; al de gobernadores políticos, por ejemplo; pero se han dictado para caer desde luego en el olvido. Bueno es, sin embargo, que haya empezado á presentirse la necesidad, revelada en los testimonios de insigne ignorancia, que con público escándalo y daño del Estado se consignan cada dia en los fastos de la administracion; y reconocida en esas mismas reales resoluciones, aunque muertas al nacer, haciendo una carrera facultativa los gobiernos políticos, por ejemplo; y la creacion asi bien de carreras nuevas facultativas, como la de *ingenieros civiles*, *ingenieros industriales*, etc. Añadiremos, que esto que siempre ha sido una necesidad por el bien de la administracion; lo es hoy además por el bien de la moralidad y de las costumbres. La *empleomanía*, ese cáncer de las sociedades recien constituidas; estímulo de revoluciones; peligro constante de la paz pública; recurso de la ignorancia ó de la negligencia; rémora de los gobiernos; premio de la audacia: la empleomania, decimos, que llevada al estremo á que se la vé llegar, es el aricte de la moralidad y de la buena administracion, hallaria en ello un conveniente correctivo, casi el único que admite en circunstancias dadas. ¿Cuántas pretensiones exhorbitantes, irresistibles, segun los tiempos, y á que sigue un éxito á la par infalible, que escandaloso y funesto, dejarian de incoarse por falta de carrera y título, siendo estos necesarios?

Y lo son, además de lo dicho, por dos razones, que no puede desconocer, ni desatender impunemente la administracion pública. Es la primera el nuevo giro y amplitud tomados por la misma en los últimos tiempos, y tambien mas en contacto cada dia con las ciencias.

La otra razon es la separacion y aislamiento entre lo administrativo y lo judicial En medio de los inconvenientes que tenia lo contrario, al menos una inteligencia ilustrada con el seguimiento de una carrera literaria, un alcalde mayor, un corregidor, un magistrado, un consejero, podian suplir y suplian en mucho al *empleado facultativo*, al facultativo especial; llevando siempre incontestables ventajas al empleado improvisado, lego de todo punto en lo económico y administrativo, como en todo. Así los corregidores, las audiencias y chancillerías, los Consejos supremos de Castilla, de Indias, etc., dictaron, ó aconsejaron medidas, leyes y reglamentos en materias puramente administrativas, que en vano se esperan de funcionarios improvisados, de todo punto legos, sin título público de aptitud. No abogamos de

ninguna manera por el sistema antiguo indicado de promiscuidad de atribuciones; pero notamos las necesidades que inevitablemente nacen de su supresion.

Es en fin, un recoconocimiento de estas necesidades, de las ventajas é inconvenientes que quedan espuestas, la creacion de la nueva *carrera* literaria, llamada de *administracion*. Pero la que se dice *carrera*, no lo es. Son meramente estudios sin porvenir legal, cierto, indubitado, legalmente seguro, como lo es en la de *leyes*, por ejemplo, la exclusiva en los juzgados y en la magistratura. Mientras falte esa seguridad, y porvenir cierto, no hay *carrera pública*: los estudios se emprenderán por pocos y sin decision; y aun seguidos con el mejor éxito y mayor honor, pueden no ser mas que una decepcion amarga del que ha consumido en ellos su juventud, y los intereses de su familia, no pudiendo fundar en los mismos un título ni aun para concurrir con los legos. Proclamemos, sin embargo la organizacion de la administracion, la necesidad de la *ciencia*, y del porvenir de ella en lo administrativo; y lo que no hagan los hombres, lo impondrá el tiempo.

§. 3.° *De la ciencia en lo jurídico-civil.*

Hemos formulado así el epígrafe, para diferenciarlo completamente de lo *canónico*. Si hubiéramos dicho de la ciencia en lo *jurídico* meramente, se confundian lo canónico y lo civil, pues es un término comun á ambas legislaciones. Y sin embargo, la ciencia, en lo *legal civil*, técnicamente tomada, se limita á lo *jurídico*. En este órden todos los empleos, que no son mecánicos, salvo alguna excepcion inconveniente, requieren por la ley estudios obligatorios, ó carrera literaria en el rigor de la palabra. El procurador, el escribano real, el numerario, el de cámara: el promotor fiscal, el teniente fiscal, los fiscales de S. M.: el relator, el juez de partido, el magistrado, todos se hallan en ese caso. Unicamente el canciller-registrador, y los archiveros, meramente tales, están malamente esceptuados.

En lo *contencioso-administrativo* no sucedia así, ya en el sistema de consejos provinciales y Consejo Real. Asentada esta nueva creacion sobre el límite de lo *administrativo* y *judicial*, parece que lo primero habia atraido y asimilado lo segundo, pues ninguna carrera literaria se necesitaba para pertenecer á este elevado cuerpo. En el dia sucede lo contrario. Las diputaciones provinciales deciden con asesor: el Tribunal Supremo de lo contencioso-administrativo no admite para ministros del mismo sino á magistrados. En sus artículos correspondientes esponemos la organizacion de estos estudios necesarios, y los relativos que supone la ciencia requerida, y la aptitud legal por lo tanto.

En lo jurídico tambien la palabra ciencia, tiene la acepcion comun que hemos manifestado al principio de este artículo; esto es, la de mera nocion de las cosas, como igualmente la de pericia, en el sentido de ciencia por reglas y principios. Así decimos *saber* una cosa de *propia ciencia*: haberse realizado un hecho á vista, *ciencia* y pacieucia de alguno: testigos de *propia ciencia*, y de *creencia*, *etc.*

SECCION III.

DE LA CIENCIA EN LO CANÓNICO.

En lo canónico la voz *ciencia* tiene las mismas acepciones que en lo civil y filosófico, y como allí tambien equivale algunas veces á *aptitud legal*, esto es, la instruccion, y estudios prefijados por la ley para cada caso: lo que cada uno debe saber para cumplir su cargo. Esta instruccion y aptitud relativa se llama mas bien en lo canónico *idoneidad*; y aquel se dice *idóneo*, que reune la ciencia ó instruccion necesaria que requieren los cánones en cada caso. Y decimos *ciencia* ó *instruccion*; porque en contraste los dos conceptos, el primero espresa la ciencia en sentido técnico, y probada por un título legal de aptitud, como el de doctor en derecho para el cargo de *doctoral*, y en sagrada teología para magistral ó lectoral; mientras en otros casos la aptitud, ó *idoneidad*

no se prueba por título académico ó de escuela; sino por exámen. Asi sucede para la primera *tonsura* y *grados*, para el subdiaconado, para licencias de celebrar, predicar, confesar, etc. Ahora: en lo canónico la regla general es que para cargos eclesiásticos no pueden ser propuestos ni nombrados sino los *idóneos*.

En lo civil, sin embargo, cuando la *aptitud legal* pende de título público, la exhibicion de este es el todo, sin otro exámen posterior de actualidad. En lo canónico, por el contrario, aun interviniendo título, es necesario exámen ó prueba especial de *idoneidad* en cada caso: tal es el exámen sinodal para licencias de celebrar, confesar y predicar, y reiterable cuantas veces el diocesano lo estima conveniente: la *esposicion*, ó exámen sinodal, que tambien precede á la institucion canónica de curatos de presentacion, de patronato laical sobre todo: la prueba pública de *concurso* para beneficios curados, aplicable segun el último concordato, aun á los curatos de presentacion, ó patronato particular: la *oposicion* á prebendas de *oficio*, etc.

La *ciencia* requerida, sin embargo, es diversa aun en lo eclesiástico, en lo jurídico y gubernativo. En el primer órden es el conocimiento de los cánones, y leyes, probado con título público de *aptitud* legal, esto es, de haber seguido la carrera de derecho, como con mas amplitud espondremos en artículos especiales, relativos á la materia, como los de *provisor*; *juez eclesiástico*, etc. Hay en España, eso no obstante, algunas singularidades. Tal es la del tribunal de la Rota, entre cuyos jueces los hay á veces meramente teólogos: y el tribunal de las Ordenes militares, que siendo colectivamente *metropolitano*; los jueces son de ordinario magistrados civiles, y por tanto de carrera civil.

En lo gubernativo y disciplinal, siendo tan varia la categoría y los cargos eclesiásticos; y consistiendo la idoneidad en que cada uno sepa lo que, segun disposiciones canónicas, se repute necesario para desempeñar debidamente su cargo, la *ciencia*, no solo no es siempre *taxativa*, digámoslo así, y técnicamente tal, como los años, y asignaturas de una carrera; sino que, por el contrario, es respectiva y varia. Hé aquí en demostracion de ello algunas indicaciones, que para mayor claridad consignamos en órden distributivo.

El que haya de recibir la primera tonsura ha de saber por lo menos leer, y escribir y la doctrina cristiana. (*Cap.* 4.° *de temp. ordinand. in Sexto.*)

Las órdenes menores requieren el conocimiento de la lengua latina, y el de las funciones de las mismas órdenes, anunciando además la suficiencia necesaria para prepararse idóneamente á las órdenes mayores. (Concilio de Trento, cap. 11 y 13, sec, 23 *de reform.*)

El órden sácro requiere, sobre todo lo dicho, el conocimiento conveniente en materia de sacramentos, y sobre la aplicacion de estos, conocimiento asi bien del rezo sagrado, y aptitud para recitarlo.

Los párrocos han de conocer, sobre lo dicho, la Escritura sagrada, el salterio, y el ritual romano. (Cán. 1, 2, y 5, dist. 38: cap. 14 *De ætate et qualit.*)

Los prebendados de oficio han de ser licenciados ó doctores, el doctoral en derecho; el magistral, lectoral y penitenciario en teología.

Véanse además en cuanto á estos cargos, al de *canónigo*, y á los restantes de la gerarquía eclesiástica, sus artículos particulares.

Para concluir este artículo genérico, réstanos hacer mencion de dos cuestiones generales tambien, aun cuando en rigor solo la segunda merece el nombre de cuestion.

En cuanto á la primera, el temor del abuso, y un deseo plausible, pero exajerado, de perfectibilidad mística, han hecho aprender á algunos que el mero conocimiento de las verdades reveladas y la *simplicidad religiosa*, la *santa rusticidad*, ó *santa ignorancia*, eran la única ciencia necesaria en el sacerdote cristiano.

Algunos testos y autoridades canónicas parecian inculcarlo así. *Non in dialectica*, decia el Papa Adriano á Carlo Magno, *complacuit Deo salvum facere populum suum*; *Regnum, enim, Dei in simplicitate fidei*

est; *non in contentione sermonis* (Cán. 6, Dist. 37). Lo propio habian repetido otros Santos Padres (San Ambrosio, lib. I De Fide, capítulo 3): y con todo no es posible entender de un modo absoluto, ni estos, ni otros testos análogos; y antes lo contrario, no solo viene inculcado por la Iglesia desde el principio, sino que siempre lo será en el buen sentido, como todo lo demostramos en la cuestion segunda; y hé aquí además la doctrina eclesiástica espresa, y opuesta sobre el particular: *Sancta rusticitas, solum sibi prodest; et quantum ædificat ex virtutis merito Ecclesiam Christi, tantum nocet, si destruentibus non obstat* (San Gerón., epist. ad Paulinum). Y ciertamente, que si ya en tiempo de este padre de la Iglesia, la *santa ignorancia* no era útil, sino para sí misma, ¿qué seria despues que la impiedad, las heregías, el ateismo han tomado el broquel de las ciencias, y apoyados en ellas, citan á su campo, con toda la arrogancia y audacia de un triunfo anticipado, á la revelacion y al dogma?

Y aquí naturalmente se presenta la segunda cuestion, á saber, si á los eclesiásticos les es, no ya útil, sino lícito; ó si por el contrario les está prohibido el estudio de las ciencias humanas.

Testos canónicos hay para probar esto último; pero modificados, y aun totalmente reemplazados por otros de todo punto opuestos. Es menester sin embargo tener en cuenta que la reprobacion de la Iglesia, y lo propio en su caso la de las leyes civiles, ha tenido por objeto el *abuso*, no el *uso* de tales estudios; y además que por regla general se ha ceñido á estudios supérfluos ó perniciosos, ó que bajo cualquier punto de vista desdicen del carácter y dignidad eclesiástica. La cuestion en sus dos estremos puede verse con amplitud en las distinciones 36, 37 y 38 del Cuerpo del Derecho canónico. La importancia de ella, sin embargo, no ya menos ociosa hoy que nunca; sino mas importante, hace que consignemos algunas indicaciones canónicas sobre el particular.

Y en efecto: los cánones parecen, no solo no aprobar, sino espresamente reprobar el estudio de las letras y ciencias profanas; y hé aquí el testo de algunos de ellos.

Sacerdotes Dei, ommissis Evangelio, et Prophetis, videmus comœdias legere, amatoria Bucolicorum versuum verba canere, Virgilium tenere, et id, quod in pueris necessitatis est, crimen in se facere voluptatis (Cán. 2.°, dist. 37).

¿Nonne vobis videtur in vanitate sensus, et obscuritatis mentis ingredi, qui diebus ac noctibus in dialectica arte torquetur? Qui Physicæ perscrutator oculos trans cœlum levat, et ultra profundum terrarum et abyssi, in quoddam inane demergitur? Qui jambum ferit? qui tantam metrorum sylvam in suo studiossus corde distinguit, et congerit? Et (ut ad alteram partem transeam) qui divitias per fas et nefas quærit? qui adulatur Regibus, hæreditates captat alienas, et opes congregat, quas in momento, cui sit relicturus, ignorat? (Cán. 3.° de id.)

Omnem vim venenorum suorum in dialectica disputatione constituunt hæretici, quo, Philosophorum sententia, definitivam non adstruendi vim habere, sed studium destruendi. (Cán. 6.° de id.)

Legimus de beato Hieronymo, quod, cum libros legeret Ciceronis, ab Angelo est correptus, eo quod, vir Christianus, Paganorum figmentis intenderet (Cán. 7.° de id.).

Las Partidas, que en tanto siguieron á los Cánones, lo hicieron tambien en esto. Por la ley 38, tít. 7.°, Part. 1.ª, ningun hombre de religion podia estudiar física ni leyes. Por la 37, tít. 5.° de la misma, los prelados no pueden aprender aritmética, geometría, ni astronomía. Y sin embargo, segun la ley 2.ª, título 2.°, Part. 3.ª, el *monje* y el *calonje* podian ser *voceros* por sus iglesias y conventos y lugares pertenecientes á estos y aquellas; y por la citada del tít. 5.°, Part. 1.ª, se establece que los prelados hayan de ser sábios en la fé; «en los *saberes que llaman artes*, como gramática, lógica, retórica y música para el canto; y en las cosas temporales, *para saber gobernar bien sus obispados*, é mantener sus pueblos.»

Imposible es ver en todo ello otra cosa, que una prohibicion relativa, ora por causa

del abuso, ora por la índole de los tiempos. La ley de Partida, que prohibe al monje estudiar física ni leyes, esplica el por qué: esto es, para que no se hiciese mundano; mientras por otra parte, llegando á ser obispo, le exige haya de ser sábio, aun en los *saberes que llaman artes.*

Los Cánones llegaron á ser mas esplícitos sobre el particular. Por *el* 1.°, *dist.* 36, los *iliteratos* no pueden ser admitidos á la recepcion de órdenes; y segun la *palea* 1.ª de la propia dist., no son disculpables los que confunden la *simplicidad* del sacerdote con la *estulticia*. El cánon 2.° reitera el mismo precepto, y priva á los que ordenaren contra el del órden que tuvieren.

El Cánon 5.° de la *distincion* 37 reprueba la conducta de los obispos y presbíteros que permiten la corrupcion de sus hijos con la lectura de las letras humanas, de comedias y escritos torpes. El 35, por último, dice así: *Ideo prohibetur Christianis figmenta legere Poetarum, quia per oblectamenta inanium fabularum mentem excitant ad incentiva libidinum. Non enim solum thura offerendo, dæmonibus immolatur, sed etiam eorum dicta libentius capiendo.*

Todavía son mas terminantes las sanciones de la Iglesia contra la ignorancia: *quia tu scientiam repulisti, repellam te, ne sacerdotio fungaris mihi. (Oseas, cap. 4.°, vers. 6.°)*

Non omnis ignorans immunis est à pœna. Ille enim ignorans potest excusari à pœna, qui, à quo disceret, non invenit. Istis autem non ignosci petit, qui, habentes, à quo discerent, operam non dederunt. Hujusmodi non licet ignorare. (*Can*: 16, *dist.* 37.)

Ignorantia, mater cunctorum errorum, maxime in sacerdotibus Dei, vitanda est, qui docendi officium in populi susceperunt. (*Can.* 1.°, *dist*, 38.)

Si in laicis, vix tolerabilis videtur inscitia: ¿quanto magis in iis, qui præsunt, nec excusatione digna est, nec venia? (Can. 3.°, *de idem.*)

Nulli sacerdotum liceat Canones ignorare.... (*Can.* 4, *de id.*)

El cánon 25, de la cuestion 1.ª, causa 1.ª, consigna, en fin, esta gravísima sancion: *vilissimus computandus est, nisi præcellat scientia et sanctitate, qui est honore præstantior.* Véanse aun entre otros canónes, que para cargos y categorías particulares inculcan la necesidad de la *ciencia* y condenan la *ignorancia*, *el* 2, *dist.* 49: 5, *dist.* 51.: 4, *dist.* 55: 7 *de elect.*: 34 *de elect. in Sexto.* Véase, por último, en el Concilio de Trento, el cap. 1.°, ses. 7.ª *de reform.* en que reitera la constitucion de Alejandro III, *cum in cunctis* (cap. 7.°, tít. 6, lib. 1.° de las Decretales) sobre la ciencia necesaria en los obispos: el cap. 2.°, ses. 23, sobre la ciencia de los que han de ser nombrados para catedrales: el 11, ses. 23, sobre la ciencia de los que han de ser ordenados: el cap. 12 de la propia ses. sobre lo mismo: el cap. 18, ses. idem, sobre ereccion de seminarios; y el capítulo 12, por último, ses. 24 *de reform.*, sobre la ciencia en los nombrados para catedrales, «Exhorta, dice, este Santo sínodo á que en las provincias en que sin gravámen notable pueda así verificarse, *todas* las dignidades, y por lo menos *la mitad* de las canongías en las catedrales y colegiatas insignes, se confieran solamente á *maestros y doctores*, ó bien á *licenciados* en teología ó derecho canónico.....»

Las disposiciones canónicas son igualmente espresas y terminantes en recomendar el estudio de las letras y ciencias humanas. La distincion 37 del cuerpo del derecho tiene este objeto exclusivo, bajo el epígrafe *An secularibus literis oporteat esse eruditos?*

Episcopus, dice el cánon 1.°, *gentilium libros non legat; hæreticorum, autem, pro necessitate, aut tempore.*

Turbat acumen legentium, et deficere cogit, qui eos à legendis secularibus literis omnimodo æstimat prohibendos, in quibus, si qua inventa sunt utilia, quasi sua sumere licet. Alioquin nec Moises, et Daniel sapientiâ, vel literis Ægiptiorum paterentur eruditi, quorum tamen superstitiones simul et delitias horrebant. Nec ipse magister gentium aliquot versus poëtarum suis vel scriptis indidisset, vel dictis. (Can. 8, *dist. id.)*

Si quis artem grammaticam noverit, vel dialecticam, ut rationem recte lequendi habeat, et inter falsa et vera judicet, non improbamus. Geometria, quoque, et arithmetica, et musica habent in sua scientia veritatem: sed non est scientia illa, scientia pietatis. Scientia pietatis est, noscere legem, intelligere Prophetas, Evangelio credere, Apostolos non ignorare: Grammaticorum autem doctrina etiam potest proficere ad vitam, dum fuerit in meliores usus assumpta. (*Can* 10, *dist. id.*)

De quibusdam locis ad nos refertur, neque magistros, neque curam inveniri pro studio literarum. Idcircò ab universis episcopis, subjectis plebibus, et aliis locis, in quibus necessitas occurrerit, omnis cura, et dilligentia adhibeatur, ut magistri et doctores constituantur, qui studia literarum, liberaliumque artium dogmata, assiduè doceant; quia in his maximè divina manifestantur atque declarantur mandata. (*Can.* 12, *dist. id.*)

Qui de mensa regis, et de vino potûs ejus, nolunt comedere, ne polluantur; utique si ipsam sapientiam atque doctrinam babyloniorum scirent esse peccatum, nunquam acquiescerent discere, quod non licebat. Discunt autem, non ut sequantur, sed ut judicent, atque convincant: ¿quomodo, si quispiam adversus mathematicos velit scribere, imperitus mathematicis, risui pateat, et adversus philosophos disputans, si ignoret dogmata philosophorum? Discunt ergò ea mente doctrinam chaldæorum, quâ et Moyses omnem sapientiam ægyptiorum didicerat. Si quando cogimur literarum secularium recordari, et aliqua ex his discere, quæ olim ommisimus, non nostræ est voluntatis, sed, ut ita dicam, gravissimæ necessitatis; ut probemus ea, quæ à sanctis prophetis ante secula multa prædicta sunt, tam græcorum, quam latinorum, et aliarum gentium literis contineri. (*Can.* 11, *dist id.*)

Los cánones, pues, son tan esplícitos, como bastaba lo fueran en la época en que se dictaron. Hoy lo serian mucho mas, toda vez que en buen gobierno la Iglesia, como toda sociedad, consulta y debe consultar siempre sus necesidades de actualidad; y las actuales de la Iglesia en los últimos tres siglos, vienen siendo, y amenazan ser tales, que ni aun se concebiria, no ya que al clero fuese prohibido el estudio de las letras y ciencias humanas; sino el que una parte de él puede prescindir de instruirse sólidamente en ellas. Alguna razon de esta necesidad hemos indicado ya, y aun indicaremos en varios artículos, como en los de CAUSA, CIRCUNSTANCIA, etc.; pero todavía es preciso notar aquí, y repetir con insistencia, que el espíritu de los tiempos, las tendencias del género humano, el giro de la humana inteligencia, ha cambiado en un todo para la Iglesia y para los Estados, y lo que es aun mas grave, para la sociedad humana. No examinaremos aquí si este estado de cosas es mas ventajoso que temible; mas lisonjero que pavoroso: decimos solo que es un hecho, y un hecho que no importa menos consigo que un nuevo sér y un nuevo modo de ser de la sociedad política y de las ciencias. Repetia Quintiliano en su tiempo, segun ya indicamos en otro lugar, que era preciso *generalizar convenientemente nuestros estudios, pues, si no en cuanto hacemos y decimos, se conoce todo lo que sabemos; en todo se conoce lo que no sabemos.* Ciceron proclamó con la misma tendencia la mútua union de las ciencias: la antigüedad, en fin, asentó, y la historia de ellas mismas demostrará siempre, que nadie rompe impunemente el lazo que las une. ¿Qué dirian hoy la antigüedad y sus grandes hombres, qué dirian y dirá la historia en los siglos que han de seguir á los ya harto notables 17, 18 y 19? Sabemos que la Iglesia prevalecerá contra todo poder, en cuanto á la verdad de sus dogmas; pero *implantada en el siglo*; vive en lucha con él; y en lucha de todos géneros, de disciplina, de principios, de autoridad, aun sobre el dogma; las menos veces con mesura hácia ella: las mas con audacia, y no pocas con escarnio.

Mientras las contiendas religiosas, reconociendo el mismo principio de autoridad, versaban sobre la inteligencia de los testos sagrados; estos encerraban siempre, encierran y encerrarán la solucion. De este género fueron las heregías, errores y cuestiones mas ó

menos tenaces, de los primeros siglos, y muchas de los posteriores. Pero cuando la polémica se ha establecido sobre lo *histórico* y *científico*, y se empieza rechazando á veces la autoridad de la Iglesia, escluyendo aun la existencia de Dios, como el *ateo*: no reconociendo mas autoridad que la de la razon, como al *racionalista*: negándola, tal vez, y su base la espiritualidad del alma, como el *sensualista* y *materialista*: cuando se hacen servir contra el dogma, contra el testo bíblico, á la física, á la química, á la cronología, á la geografía, á la geología, á la historia; en vano se buscará la solucion contra una razon ya desbordada, emancipada, rebelde, en el testo sagrado, que escarnece; y cuando por otra parte es una verdad, y verdad ortodoxa, que *el espíritu divino inspiró en los libros santos preceptos de vida eterna; no tésis de física, de química, ni otras ciencias profanas.* Asi las decisiones memorables de los concilios de Nicéa, de Efeso, y aun del de Trento, sobre la Trinidad, la naturaleza divina del Hombre-Dios, la maternidad deífica, el pecado original, la gracia santificante, etc., son muy de otro género en sus medios de polémica, que las que cada dia provoca y podrá hacer necesarias, la contienda empeñada, atea unas veces, materialista otras, alguna vez tambien racional y científica, buscando entonces la verdad en la polémica, como se arranca la luz del pedernal; sobre el movimiento del sol, la cronología sagrada, el diluvio universal, el paso del Mar Bermejo, la unidad de razas, y su consecuencia necesaria de una lengua matriz, etc. Al que niega, no ya la autoridad de los libros santos, sino aun la existencia de Dios, como el ateo; su unidad, como el panteista; la existencia del alma, como el materialista; el mundo moral, en fin, y todo ello fundado en lo que llama imperio de la razon, en la historia, en los nuevos descubrimientos de las letras y de las ciencias, ¿cómo se le atrae al buen camino, ó se ataja el efecto de su escándalo, sino con armas del mismo temple? Sin profundos conocimientos filosóficos, filológicos, históricos; hablando, en fin, á la razon con la razon, y á la ciencia con la ciencia? Asi, ante la estátua inmoble de la verdad han caido, caen cada dia, y caerán siempre despuntadas las flechas del error, las armas con que en la revolucion religiosa y científica, que hace años viene esperimentando el mundo, creyó la impiedad atravesar, y aun destrozar su escudo, tomadas de los inmensos arsenales que parecieron presentar los descubrimientos y adelantos en las lenguas orientales, en la arqueología, en geología, y en tantos otros ramos, nuevos en sí, ó nuevamente cultivados del saber humano. Sin armas del mismo temple; sin haber penetrado en los propios arsenales, sin haber descubierto á la luz de la razon y del génio que donde el error guardaba sus armas; ostentaba tambien las suyas la invencible verdad, ¿cómo hubiera venido á tierra, la máquina formidable de argumentos nuevos, que si bien lo eran solo *ad ignorantiam*, lo parecian contra el dogma, ó el testo santo, enérgicamente auxiliados por la fuerza, siempre temible de la novedad? ¿Cómo, queriéndolo unos, y otros sin pensarlo, hubieran hecho tan insignes servicios á la Religion, Cuvier en sus adelantos zoológicos; Champollion y los que le han seguido en la arqueología egipcia, Humbol en sus estudios sobre las lenguas, Wisseman en los suyos sobre las lenguas y las razas, William Buckland en su geología sagrada, y tantos otros, que seria interminable enumerar? ¿Quién pulverizó con mayor éxito las apreciaciones impías, las bufonadas sacrílegas de Voltaire sobre la parte histórica, geográfica, y cronológica de la Biblia, que el anónimo autor de las cartas judías; y eso con razones del mismo género, ora físicas, ora químicas, alguna vez, como Wisseman, con razones tambien arqueológicas, y fisiológicas? Mejor conocidas la *gasología*, la *electrología*, las afinidades químicas, ¿qué es ya de el algun dia embarazoso argumento sobre el orígen, y desaparicion despues, de la masa inmensa de aguas que fué necesaria para cubrir en la tierra hasta la mas alta de sus montañas en un dia de cataclismo de que todo testifica en el esterior y en el interior del globo? Despues de los adelantos en el estudio de la Astronomía, y de las leyes de la

gravedad, de las fuerzas *centrípetas* y *centrífugas*, del movimiento, en fin, y sorprendente mecanismo del sistema planetario, ¿por qué el pueblo creyente tendria que estremecerse hoy del descubrimiento de Galileo? ¿Por qué habria que reducirle á este á encarcelamiento? ¿Quién podrá sostener hoy que el astro solar carece de movimiento? ¡Oh! ¡Cuánto hay que temer del reducido saber! Y ¡cuán victoriosas son, por el contrario, las armas de la verdad; cuán hermoso y consolador al ancho campo de las ciencias! A impulso de este esfuerzo, y razonado estudio, ¿qué es ya del temido descubrimiento de los *zodiacos* de Dindara, y de Henne? ¿De los misterios pavorosos que se suponia ocultar el testo *sanskrito* en los *vedas* de la India? ¿Qué de aquellas cronologías interminables del Egipto y del oriente, que apenas parecian tener su orígen en el tiempo? ¿Qué, en fin, entre otras concepciones, enfáticamente ponderadas, y esplotadas sin moderacion, los espéctros formidables, que de las perforaciones geológicas se levantaban á contradecir el órden dela creacion y los dias del Génesis?

No es nuestro ánimo, al adelantar estas indicaciones, entrar en una polémica *científico-religiosa*, que tampoco rehuiriamos, si lo exigiese, ó si alguna vez lo exige nuestro deber; sino consignar nuestra profunda conviccion sobre la necesidad, impuesta por los tiempos, de reformar convenientemente los estudios ecleciásticos: del deber en que está el clero, abierta la lucha del siglo contra la moral y el dogma en el palenque de las ciencias, de ampliar sus estudios, en términos de no acudir á la lid con armas desiguales, entrando así vencidos, y pareciendo serlo con ellos, no por argumentos *ad rem*; sino *ad hominen* ó *ad ignorantiam*, la causa santa que están encargados de defender. Y no que exijamos igual ampliacion de estudios en todos los clérigos indistintamente: ningun ejército se compone de solo generales; pero la prudencia de la Iglesia y del Estado establecerán, viniendo al caso práctico, el justo temperamento. A esto, entre otras cosas, se encaminó entre nosotros en un principio, y segun el plan de alguno de los ministros de la Corona, que tuvo parte en la formacion del Concordato de 1851, la institucion de los *Seminarios centrales*, remedo disimulado de los antiguos *colegios mayores*.

Trayendo la cuestion á terreno menos candente; al terreno pacífico de la piedad y del sentimiento: cuando adelanta la humana civilizacion: cuando el siglo así se empeña en llamarse filosófico; y, ora columbre, ó meramente invoque; ora realmente siga los caminos de la filosofía, el *filosofismo* se infiltra en las masas: cuando estas, ó presumen saber, ó saben realmente mas de lo que se supo, ¿cuánto decae el prestigio del sacerdote, cuánto la divina mision, si el penitente, si el oyente, aunque piadoso, vé que no responde á ella en saber y prudencia no comun el sacerdote que la ejerce en el confesonario y en el púlpito: á la cabecera del moribundo á quien han estraviado pretensiones de ciencia: al que abrumado por las sugestiones de esta, acude en vida al ministro de una religion, que nada teme de la verdad?

No hacemos en esto sino repetir el testo mismo de los Cánones. Aparece por demás rebajado, dice el *cán.* 25, *cuest.* 1, *causa* 1, antes inserto, destituido del debido prestigio, hasta despreciable, el que, sobresaliendo en honor, y posicion, no sobresale tambien en *ciencia* y santidad.

Réstanos todavía una cuestion para concluir. Despues de encarecer tanto la necesidad de la *ciencia* ¿podrá ser, no ya conveniente; pero aun canónico el dispensar de ella? De la que constituya la *idoneidad* canónica, apenas se concibe; aunque sí de la que llamaremos ciencia de supererogacion, y eso no de un modo absoluto; sino como todas las dispensas de ley; para mejor utilidad de la Iglesia, ó por lo menos sin daño de ella ni escándalo. Hé aquí como el abate Andrés, recopila en su Diccionario canónico la doctrina de los canonistas sobre el particular.

«Se halla establecido en los cánones que el obispo que ha ordenado á personas iliteratas debe destruir él mismo su propia obra, es decir, deponer á los que haya elevado á las órdenes. *C.* 3, *dist.* 55. Los que consagran á obispos sin *ciencia* deben ser depues-

tos, como tambien aquellos que son consagrados. *C.* 5, *dist.* 51, *c.* 15 *de Ætate et Qualit.* Lo mismo sucede con los examinadores que han admitido por gracia á ignorantes á la ordenacion, *cap.* 1, *dist.* 24. Los mismos obispos que ordenan á presbíteros ignorantes deben ser severamente castigados, juntamente con aquellos que han ordenado. *C.* 14, *de ætate et qualit.* El capítulo 4.° *de tempore ordin. in* 6.° declara que el obispo que confiere la tonsura á una persona sin letras, quede suspenso por un año de poder conferirla á ningun otro.

La irregularidad de falta de *ciencia* cesa por la *dispensa* ó por la adquisicion de conocimientos. Regularmente no se puede dispensar la irregularidad de defecto de *ciencia* para el ejercicio de las funciones, órdenes y beneficios que no pueda hacer un ignorante sin peligro de pecado. Tampoco hay en todo el cuerpo del Derecho canónico ningun ejemplo de dispensa con respecto á la irregularidad que produce la ignorancia, ni ningun cánon que la permita espresamente; únicamente se deduce que el Papa puede dispensar de lo que no sea mas que *derecho eclesiástico*. Tambien se infiere del *cap.* 34 *de Elect. in* 6.°, que el obispo puede admitir en una parroquia á un eclesiástico que no tiene toda la capacidad requerida, obligándole á que vaya á estudiar. Pero de cualquiera parte que provenga la dispensa, es necesario, dice Gibert, que tenga cuatro condiciones:

1.ª Que el defecto de *ciencia* no sea estremado, y que el individuo sea capaz de adquirir la que le falta.

2.ª Que no desempeñe funciones que requieran mas *ciencia* que la que tiene.

3.ª Que tenga mucha piedad.

4.ª Que haya falta de sugetos. *C.* 15, *de ætat. et qualit.*, *c.* 11 *de renunc.*: c. 1, dist. 57. Si un ignorante por medio del estudio y del trabajo llega á ser sábio, cesa la incapacidad: *c.* 11 *de renunc.* Tambien puede hacer cesar esta incapacidad pasando de beneficio superior, ó con cura de almas, á un beneficio simple.»

CIENTOS Y CUATRO UNOS. Eran una especie de recargos ó adicion á la alcabala, que consistia en el 4 por 100 sobre el 10 que se cobraba por aquella. Además del nombre de *cientos*, se designaba tambien esta contribucion con el de *cuatro unos*, porque sucesivamente y en distintas épocas habian ido concediendo las Córtes el aumento de 1 por 100 hasta completar los 4 por 100 que queda dicho. El primer 1 por 100 se otorgó en 1639, el segundo en 1642, el tercero en 1656 y el cuarto en 1663. Los valores de este impuesto se cobraban con los demás ramos de rentas provinciales, y llegaron á importar poco despues de establecido mas de 40 millones de reales. El gobierno enajenó esta renta, como hizo por entonces con casi todas las demás. En 1668 se redujeron los cuatro unos á medios; pero fueron restablecidos íntegramente en 1703, aplicando á la real hacienda los medios que antes habian sido enajenados, de donde provino la distincion, con que hoy se conocen, *de cientos antiguos ó primitivos y cientos modernos*. Véase **millones**.

CIERTO. Del latin *certum*, cosa cierta verdadera, indubitada, evidente. Como hemos dicho en el artículo **certeza**, *cierto* es en concreto lo que *certeza* en abstracto. Por un juicio reflejo, deducido de la naturaleza de la *verdad*; partiendo de que esta *es inalterable*, y de que lo que es inalterable es *seguro*; *cierto* se dice tambien de lo que es *seguro*, *positivo*, *real*, en existir, en obrar, en el modo de obrar, ó de ser, segun el punto de vista, bajo el cual se considere. Así es verdad, y por eso inalterable, y porque es inalterable es *seguro* para todos, que cada dia saldrá el sol: que á la primavera seguirá el estío. En este sentido se dice en el derecho *á dia cierto*, cantidad cierta, madre incierta, etc. Usase tambien por anología en el sentido de cosa *determinada*, *definida*, *individualizada*, como *legatarius in re certa*. Por la propia razon etimológica, en fin, y con significacion análoga se dice *cerciorar*, *cerciorado*, *certificar*, *certificado*, etc. V. **certeza**, **certificacion**.

Usase tambien como calificacion contumeliosa, ó de menosprecio, en cuyo concepto, y

segun el caso, esto es, segun las circunstancias, dignidad ó categoría de la persona, y el principio de que *offensa est in offenso*, podria llegar á ser injurioso, puesto que hoy, segun el art. 379 del Código penal, la injuria no es *taxativa*; sino *existimable*: no se vincula á palabras determinadas; sino que es toda espresion proferida, ó accion ejecutada en deshonra, descrédito, ó *menosprecio* de otra persona. Creemos que este *desprecio* ha de ser tal que asi sea reputado en la estimacion comun de los hombres; pero se concibe bien que asi podria serlo en algunos casos.

Dícese *cierto*, por último, en el sentido de definido, determinado, prefijado: por ejemplo, *cantidad* cierta, obligacion, *ó derecho cierto*. De estas obligaciones se dice en el derecho que el dia apremia por sí, sin necesidad de aviso prévio: *dies interpellat pro homine*.

CIFRA. Si nuestras leyes prohiben en ciertos casos escribir en *abreviatura*; con mayoría de razon parece habrá de entenderse prohibido en los mismos casos escribir por *cifras*; lo uno porque muchas veces son una misma cosa la *cifra* y la *abreviatura*; y lo otro, y principalmente porque ambas conducen al mismo resultado, á la *oscuridad* ó *ambigüedad*; y mas aun la *cifra*, hablando en rigor, que la *abreviatura*; de lo cual volvemos á hablar al fin de este artículo.

Segun Covarrubias en su Tesoro de la lengua, *cifra* es «*Escritura enigmática*, con *caractéres* peregrinos, ó los nuestros trocados unos por otros, ó en valor, ó en lugar.» Segun el Diccionario de la Academia es la cifra «*Modo* de escribir con *caractéres arbitrarios, para que solo pueda entenderlo* el que tiene *la clave*.»

Ambas definiciones necesitan de alguna esplicacion; sino han de inducir á error, viniendo al terreno práctico, ó aplicadas á cuestiones jurídicas. En la primera será menester entender la palabra *escritura*, no en la acepcion comun; sino en la mas lata posible; como uno de los dos medios capitales, ó mas genéricos de espresar nuestro concepto, á saber, por *signos* ó *figuras materiales*; y por *señas* ó *ademanes*. Tomada la palabra *escritura* en el primero de estos dos conceptos habrá de decirse tal, para que la definicion resulte exacta, no solo la que se ejecuta por medio de *letras*, sino de *números* ó *guarismos, geroglíficos, emblemas, signos*, en fin, de cualquier género, aun los mas arbitrarios, pues de todos estos modos puede ser la *cifra*, que sin otra ley fija recibe su carácter del *arbitrio* y del *valor entendido*. De la misma manera, y por las propias razones, la palabra *caractéres* habrá de entenderse en el sentido latísimo que dejamos espuesto.

En cuanto á la segunda definicion es indudable, que el *modo* no es la cosa *de que es modo*; sino que entre este y aquella hay siempre una diferencia lógica y real. El *modo*, por tanto, no es en rigor la *cifra*; ni la cifra el *modo*; así como la *letra* no es todavía el *modo de escribir* por medio de ellas, en vez de hacerlo v. g. por geroglíficos. La palabra *caractéres* es menester entenderla con la misma generalidad que antes hemos manifestado; y la de *clave* por la de *inteligencia recíproca*. Despues de todo diremos que cifra es el *signo, letra, figura, ó el conjunto de signos, letras, ó figuras, ya comunes, y conocidas, ya de peculiar invencion, empleadas de otro modo que el ordinario, bajo un valor entendido, en sí, ó en el modo de combinarlas, para espresar conceptos, con el fin de que nadie pueda entenderlos; sino el que sobre ello esté en inteligencia*.

Segun los autores del Diccionario de Trevoux, *cifra* se dijo del hebreo *sipkre*, nombre y numeracion. La etimología en este caso no guarda consonancia con el significado de *cifra*, que esencialmente suena *cosa oculta, disimulada, oscura*. ¿Para qué se emplearian, sino, otros caractéres que los comunes, ni de otro modo que el acostumbrado? De ahí las calificaciones de *arcano, enigma, alegoría, emblema, lenguaje misterioso, etc.* que se aplican, ó son aplicables á la cifra, con otros muchos análogos. Parécenos mas fundada, por lo tanto, la etimología griega. San Isidoro en sus *orígenes* la llama *criphia*. Covarrubias, antes citado, la deriva del griego *cryphios*, que dice ser cosa oculta. Parécenos que aquí toma el *phi* griego (φ) por el *psi* (ψ) y que en vez de *cryphios*, debe ser *crypsio* (κρύψω)

futuro del verbo *crypto* (κρυπτω) ocultar.

La voz *cifra* se usa unas veces, como específica, y es cuando nos referimos á cifra determinada. Otras veces en sentido genérico, y entonces su acepcion latísima no se desenvuelve por completo, sino en infinidad de artículos, directos unos, otros solo conexos, ó indirectos, como *abreviatura, número, guarimos, singla, signo, enigma, gero glífico, taquigrafía, emblema, cita, etc.*

No es de nuestra incumbencia el descender al orígen de la *cifra*. La historia puede no encontrarlo, y eso con incertidumbre, vacilacion, é incoherencia, sino en Lacedemonia; aunque la Caldea, el Egipto, y la Fenicia podrian reclamarlo con mayor razon: puede creer hallarlo en el renombrado *scytalo* de los *ephoros*: atribuirlo á *Táctico*, á *Trithemo*; pero la filosofía lo encontrará mas allá, mientras, por otra parte, ni ella misma puede fijar su término, ni definir el número, ritualidad, y novedad de sus formas; pues no le es dado fijar, ni circunscribir la fecundidad prodigiosa de la humana inteligencia, ni del influjo apremiante de la necesidad. La verdad es ciertamente hermosa; mas, para baldon del género humano, es peligrosa con frecuencia, y lo es mas, cuanto mas desnuda. De aquí la necesidad de disimularla, no ya en la idea; sino, como es consiguiente, en el signo, en los medios de comunicarla: y de aquí asimismo la antigüedad necesaria de la cifra, y su alterabilidad indefinida en su acepcion genérica.

En su acepcion específica es mas limitada, sin embargo; y aunque multiplicadas y diversas las formas *gráficas* y materiales de la cifra, son en general conocidas, las hay hasta comunes y hasta convencionales: esto es, cifra solo en lo material gráfico; pero no en el secreto, que es de todos conocido, como sucede en las cifras, abreviaturas, signos por todos admitidos, segun sucede, por ejemplo, en los casos de *abreviaturas* y *citas* convencionales. Véanse ambos artículos. Y no solo la literatura y la escritura comun tienen su cifra convencional y de valor por tanto de todos entendido, sino las artes y las ciencias. La *polygrafía*, *estenografía*, y en sus casos la *paleografía*, la *taquigrafía*, la *numismática*, la ciencia *lapidaria*, la de los *geroglíficos*, como otros muchos ramos todavía del saber humano, tienen por objeto *descifrar* los enigmas, dar á conocer el ardid de la verdad en su lucha perenne contra el error y las pasiones; y el de estas, del interés bastardo contra la verdad y la justicia.

Traémoslo todo á propósito de hacer siempre aplicable y eficaz la sancion de las leyes sobre *cifra*. Limítase su *letra* á algunos casos de ella, como es principalmente á las *abreviaturas* y *singlas* en la escritura ordinaria, y aun en la numeracion; pero ha de entenderse que su espíritu se estiende á toda especie de *cifra*, ó á la *cifra en general*, segun la dejamos indicada.

Hé aquí ahora las disposiciones capitales del derecho constituido sobre la materia: esto es, testualmente sobre abreviatura; pero en su espíritu en cuanto á cifra.

«Escribir deben tambien los escribanos de la corte del Rey como los de las ciudades é de las villas en los privilegios, é en las cartas que ficieren (de cosas señaladas que mostraremos en esta ley, por guardar que non venga yerro, ni contienda en sus escritos) las razones cumplidamente, é *non por abrebiaduras*. E esto es, que en los privilegios, é en las cartas que ficieren en cual manera quiera que sea, que non pongan una letra por nombre de ome, ó de muger, asi como A. por Alfonso, nin en los nombres de los lugares, nin en cuenta de haber ó de otra cosa, assi como C. por ciento: essa misma guarda debe haber en la era que pusieren en la carta. E qualquiera de los escribanos que de otra guisa ficiese si non como en esta ley manda: decimos que el privilegio, ó *la carta que ficiese, que non valdria*, é el daño, é el menoscabo que la parte recibiese por esta razon que seria tenudo de lo pechar.» (Ley 7, tít. 19, Partida 3.ª)

»Mandamos á los escribanos de las nuestras audiencias, que asienten los autos de las presentaciones que ante ellos hicieren luego cumplidamente, y lo firmen, y *no lo pongan por abrebiado*..... (Ley 8.ª, tít. 24, lib. 5.ª Novísima Recopilacion.)

Gregorio Lopez en sus glosas y citas á la ley de Partida antes inserta, espresa que ya lo que en ella se ordena estaba antes mandado por pragmática de los Reyes Católicos en Alcalá (Ley 13, tít. 23, lib. 4 de la Nueva Recopilacion, ahora ley 10, tít. 23, lib. 10 de la Novísima) lo cual es una equivocacion. En ella se establece ciertamente lo relativo al protocolo, y forma de las escrituras: se dice que el escribano «escriba *por estenso* las notas de las escrituras que ante él pasaren, pero la voz *por estenso* no es relativa á *cifras*. ó abreviaturas, sino al contesto de las notas, en razon de lo cual añade la misma pragmática, que «en la cual dicha nota se contenga *toda la escritura* que se hubiere de otorgar *por estenso*;» por donde se vé que aquí el *estenso* equivale *al contesto al pié de la letra*, ó no en minuta. La ley, pues, que prohibió las abreviaturas fué de D. Fernando y doña Juana en Medina del Campo en 1815: ley 7, tít. 20, lib. 2, Nueva Recop., ahora 8, tít. 24, lib. 5 de la Novísima arriba inserta.

Viniendo ahora al derecho, es constante que nuestras leyes no hablan mas que de las *abreviaturas*, ó del escribir *abreviado*; pero limitándolo á la *escritura ordinaria* ó por letras, á la espresion *numérica* de *cantidades*, y de las fechas: «que escriban en sus *escritos* las razones *cumplidamente*, é non por *abreviaduras*.... que non pongan *una letra* por nome de ome, nin de muger..... nin *en cuenta de aver*..... asi como *C. por ciento*, é esa mesma guarda debe haber en la *era* que pusieren en la carta.....» Pero es indudable que el testo de la ley no corresponde al fin de la misma. Desde luego se comprende que el fin no podria ser otro que el de evitar oscuridad, error, equivocacion; pero además lo dice asi la ley misma: «Escribir deben los escribanos..... en sus escritos..... las razones cumplidamente, é non por abreviaduras..... *por guardar que non venga yerro, nin contienda*.....» Si, pues, el fin es *que no venga yerro ni contienda*; de alterar la integridad de la espresion escrita, es claro que el espíritu de la ley vá mas allá de su letra: y pues es cierto que las razones pueden *no escribirse cumplidamente* por abreviar la *espresion grdfica*; sino por ampliarla, por invertirla, por sustituir los caractéres ordinarios por otros, lo cual todo corresponde mas bien á la *cifra* que á la mera abreviatura; como además algunos casos de la abreviatura, sino todos, son *cifras*, es evidente que la prohibicion ha de estenderse, aun cuando solo hable de *abreviaturas*, á toda alteracion en la integridad del lenguaje escrito comun, y á toda alteracion ó sustitucion de la escritura y numeracion comun, *ocasionada á yerro ó contienda*. Es cierto que de ello no habla la ley; pero tampoco habla de no escribir los instrumentos públicos en inglés, ó en griego; y no por eso dejaria de ser ineficaz, *civilmente falso* tal instrumento, otorgado por un particular, sobre todo si este no conociese otro idioma que el suyo. Aun pudiera suceder que algun *yerro ó contienda*, que no quiere la ley, naciera, no de abreviatura, ni de sustitucion de caractéres; sino escrita íntegramente la razon, intercalando, empero, y añadiendo letras, que desfigurasen su sentido, que es uno de los infinitos casos de la *cifra*; como diremos. Este y todos los que conducen al mismo resultado, han de considerarse comprendidos en el *espíritu* de la ley, en su razon; de otro modo la ley no hubiera provisto á lo que se propuso proveer; y eso no como quiera, sino ni aun á una *milésima* de los casos que puedan ocurrir; y á que alcanza su razon y no su letra.

Apreciando la razon de la ley, es preciso modificar tambien su tenor en la práctica, al haber de aplicar la pena establecida por ella. «E cualquier de los escribanos, dice que de otro guisa ficiese, si non cuomo esta ley manda, decimos quel privilegio ó la carta que ficiese, *que non valdria*, é el *daño*, ó el *menoscabo* que la parte recibiese por esta razon, que *seria tenudo de lo pechar*.» Paréce-nos, sin embargo, que cuando, á pesar de las *abreviaduras* ó *cifras*, no resultase *yerro, nin contienda*: cuando no sean *ocasionadas* á estos resultados, segun decimos arriba, por tener un *valor entendido, conocido de todos* por uso ó práctica, la razon misma de la ley exige que el instrumento no sea nulo. Tal sucede con las abreviaturas rituales, *idem*,

item: con las de títulos y tratamientos, como *Exmo.*: *Ilmo.*: S. M. (Su Magestad): Q. D. G. (que Dios guarde): en las voces truncadas por los medios ordinarios, y recibidos de *aféresis*, *síncopa*, y *apócope*: en términos provinciales, modismos locales, etc., partiendo siempre del principio de que de ello no resulte ni pueda resultar *yerro nin contienda*. Asi lo tiene recibido la práctica; y asi en casos análogos lo sentian los comentaristas del derecho comun. *Notæ significativæ numeri*, decia Bartulo, *positæ in instrumento*, *non vitiant instrumentum*, *dummodo tales notæ sint in communi usu*. Baldo decia á su vez: *Si reperitur in instrumento promississe* sub pœna du... *intelligitur* de pœna dupli, *quia non potest aliud sonare dicta syllaba abreviata*, *et ideo recurrendum est ad mentem*. Oponiéndose Gregorio Lopez á esta doctrina, es singular que se inclina á ella si la abreviatura consta aun de sílaba ó sílabas, y no de una sola letra. *Adverte tamen*, dice, *quia ista lex loquitur quando ponitur tantum una litera*; *et non loquitur in syllaba*. ¡Cuántas veces una abreviatura ó cifra inducirá mas confusion, reducida á una ó mas sílabas, que á una sola letra, segun que la una esté en uso y la otra no, como sucedia en los *prenombres* romanos! La verdad es, y parece ser la regla mas fundada y racional, que la abreviatura ó cifra podrá dar lugar á prevenir ó multar al escribano; mas para la nulidad del instrumento, la prudencia judicial decidirá, apreciando las circunstancias del caso, el fin del otorgante, los antecedentes y consiguientes consignados en el propio instrumento, y si en vista de todo resulta el caso de la ley, esto es, el de dar la cifra ó abreviatura ocasion á yerro, ó contienda. Véanse las glosas de Gregorio Lopez á la preinserta ley de Partida.

La ley, como en ella se vé, limita su disposicion á los instrumentos públicos autorizados por escribano ó notario, y de ninguna manera á otro género de documentos privados y mucho menos oficiales. Ni podia ser otra cosa, en algunos ramos sobre todo, como en el de guerra y en la diplomacia, en que es tan comun escribir en cifra las comunicaciones que median entre el gobierno supremo y sus agentes principales. En diplomacia es sabido que ha llegado á creerse conciliable con la moralidad y buena fé el levantar los sellos y reconocer los despachos de los embajadores y ministros estranjeros en las secretarías de Estado del reino en que están acreditados, prestando á ello ocasion el haber de remitir los pliegos por los correos del pais estranjero. Si fuera este el lugar diríamos hasta qué punto se ha llevado la perfeccion en este medio de abusar de la confianza y violar la correspondencia ajena, levantando y volviendo á asentar los sellos sin indicio ni vestigio de quebrantamiento. Los resultados, sin embargo, lo han dado á conocer en repetidas ocasiones, y las naciones han recurrido á la doble precaucion de la cifra y de remitir sus pliegos á las legaciones por correos propios, llamados por eso *de gabinete*, huyendo de los correos del estranjero. Pero se ha adelantado hasta en penetrar en breve el secreto de la cifra; y de aquí la práctica y la necesidad de una doble clave, y no bastando ni aun eso, de variar la cifra y la clave con frecuencia. La variedad gráfica de la cifra en este caso no tiene ya límite, y la hemos visto con signos de todos géneros y aun de los géneros mas estraños, en documentos sobre todo de sociedades secretas; hemos visto emplear cinco guarismos arábigos para espresar una sola vocal del alfabeto comun: palabras enteras para espresar una vocal ó sílaba: las letras del alfabeto comun haciendo de guarismos: las palabras del alfabeto comun usadas en el sentido mas opuesto, como *rosa* por *degüello* ó *fusilamiento*; *puñal* por *cuartel*, ó *indulto*, etc.: hemos visto, en fin, planas enteras, cubiertas de letras apiñadas y en desórden, de entre las cuales solo seis ú ocho sílabas tenian significacion, teniendo que buscarla en el conjunto, cubriendo la plana escrita con otra agujereada con desórden, con cuyo artificio solo quedaban en descubierto, y legibles, haciendo sentido entre sí, las pocas letras ó sílabas destinadas á eso, y únicas que quedaban ostensibles y legibles por los intersti-

Lorenzo Arrazola

cios, ó taladros de la clave. Aun asi no se ha creido, ni ha estado el secreto bastante asegurado, y la necesidad legítima unas veces, otras el crímen, han sugerido el medio, además de la cifra, de la tinta simpática y otros. Véase ABREVIATURA: CITA: SINGLA.

CILLA. Del latin *cella*, y esta voz del verbo *celo*, ocultar, cubrir, resguardar: *cilla* por tanto, como version de *cella*, es propiamente aposento cerrado, resguardado. *Cella*, dice San Isidoro en sus *origenes*, *dicitur, quód nos occulet, et celet.* Entre nosotros se ha llamado cilla el edificio ó casa rural en que las comunidades religiosas, no mendicantes, reunian sus rentas en granos; pero especialmente el granero, troje, ó panera en que se reunian los diezmos de una feligresía, ó término diezmatorio, en el caso en que del *acervo decimal* hubiese varios partícipes, como el párroco, el cabildo, el Rey por sus tercias y los partícipes legos. No entraban en la *cilla* de ordinario las primicias, porque de ordinario tambien eran del párroco: los *diezmos menudos*, por la propia razon: los diezmos del escusado, ó de la casa *diezmera* ó *de Rey*; y por regla general ni los *novales*. Así cilla espresaba desde luego un acervo decimal de diversos partícipes. El encargado de la cilla, nombrado por los mismos, se llamaba *cillero*, quien nombraba á su vez á los *colectores*, ó encargados de percibir el diezmo en las eras, ó de los contribuyentes. Alguna vez los partícipes, ó alguno de ellos, enagenaban préviamente su porcion decimal, y espedian *recudimento*, ó el despacho para percibir en su nombre al posturador, pues que la enajenacion solia hacerse en remate. Tomando, en fin, el contenido por el continente, se llamaba cilla tambien el *acervo decimal*, ó conjunto de diezmos, y así se decia que el párroco, el cabildo, los beneficiados, etc., tenian tal parte en la cilla. La cuota del Rey era siempre fija, como *alicuota*, esto es, sus *tercias*. Véase DIEZMO: TAZMIA.

CILLERERO. Con la misma analogía etimológica que espresamos en el artículo cilla, se llamaba *cillerero* en las comunidades monásticas, no mendicantes, y principalmente en las llamadas monacales, el monje que desempeñaba el cargo de mayordomo y administrador de las rentas de la comunidad. El cillerero autorizaba los arriendos, cobraba, daba esperas, transigia, tenia á su cargo el proveer á la comunidad; era, en fin, en esta lo que entre particulares, ó en el siglo, el doble cargo de mayordomo y administrador, ó apoderado. En algunas comunidades el cargo de *cillerero* llegó á ser beneficio regular, como los demás oficios y beneficios claustrales.

CIMARRON. Usóse esta voz en América en el sentido de *salvaje, indómito*, y se aplica la denominacion como específica á los negros y gentes de color, que desertan, ó se fugan del poder de sus amos. Siendo el esclavo una propiedad, era propio de la ley el fijar en este concepto su atencion sobre la desercion y fuga de ellos; pero lo era con no menos razon bajo el punto de vista de la pública seguridad; pues los cimarrones, en su situacion peligrosa, se complotaban buscando su seguridad personal en el crímen, infestando las rancherías y caminos públicos. Algunas veces, reunidos en número de siete ó mas, establecian palenques, ó rancherías; y entonces se llamaban *apalencados*, circunstancia agravante y con razon. Sobre ellos se dictaron desde tiempos remotos disposiciones coercitivas y penales, algunas de ellas de escesivo y aun denigrante rigor, como la *castracion*, la cual revela por su parte el género de escesos entre otros á que se entregaban aquellos semisalvajes, sin Dios, y sin ley. La Recopilacion de Indias regularizó y mitigó la legislacion sobre cimarrones, como puede verse en el título 5 del lib. 7, segun vamos á reseñar.

Por la ley 19 del mismo se ocurre al abuso de autoridad, prohibiendo á los *rancheadores* de cimarrones, nombrados por las justicias, causar vejacion con este pretesto en las casas de los morenos *horros*.

Por la 20 se ordena á los presidentes y gobernadores la *reduccion* de cimarrones á costa pública, y de los pudientes y dueños: el castigo ejemplar de los principales ó mas culpables; y la devolucion de los restantes á sus amos.

Por la 21: « que al negro ó negra ausente del servicio de su amo cuatro dias, les sean dados en el rollo cincuenta azotes, y que esté allí atado desde la ejecucion hasta qne se ponga el sol; y si estuviere mas de ocho dias fuera de la ciudad una legua, le sean dados cien azotes, puesta una calza de hierro al pié con un ramal, que todo pese doce libras, y descubiertamente la traiga por tiempo de dos meses, y no se la quite, pena de doscientos azotes por la primera vez, y por la segunda otros doscientos azotes, y no se quite la calza en cuatro meses, y si su amo se la quitare, incurre en pena de cincuenta pesos, repartidos por tercias partes iguales, que aplicamos al juez, denunciador y obras públicas de la ciudad, y el negro tenga la calza hasta cumplir el tiempo.

»A cualquiera negro ó negra huido y ausente del servicio de su amo que no hubiere andado con cimarrones, y estuviere ausente menos de cuatro meses, le sean dados doscientos azotes por la primera vez; y por la segunda sea desterrado del reino: y si hubiere andado con cimarrones, le sean dados cien azotes mas.

»Si anduvieren ausentes del servicio de sus amos mas de seis meses con los negros alzados, ó cometido otros delitos graves, sean ahorcados, hasta que mueran naturalmente.

»Cualquier vecino ó morador de aquella provincia, ó que tuviere en administracion su hacienda, si se le fuere ó ausentare negro ó negra del servicio, tenga obligacion á lo manifestar y declarar dentro de tercero dia, ante el escribano de cabildo de la ciudad.

»Y si el amo del negro no lo manifiesta dentro del dicho tiempo, incurra en pena de veinte pesos de oro, aplicados por tercias partes al juez, denunciador, y obras públicas: y el escribano de cabildo no lleve ningunos derechos por la manifestacion; y si no la asentare, incurre en pena de dos pesos para los presos de la cárcel, y tenga un libro á parte donde siente las manifestaciones.»

Ley 22. Ordena que toda persona libre, blanca ó de color que prenda á un cimarron, que haya estado ausente del servicio de su amo cuatro meses, sin que lo haya denunciado, ó dado cuenta, lo haga suyo, y lo mismo si el cimarron fuere libre, probándose su ausencia por el mismo tiempo: si el aprehensor prefieriese el premio de cincuenta pesos de plata, se le darán de las rentas municipales, quedando el cimarron por esclavo de la ciudad, todo sin perjuicio de las penas en que él hubiere incurrido. Si el aprehensor fuere esclavo, adquirirá al cimarron para su amo.

La ciudad tiene siempre derecho de tanteo, pagando el premio al aprehensor por tasacion.

Si el negro ó negra cimarron debiere morir por delitos cometidos, ó si sufriere pena que lo inutilice, será de cargo de la ciudad pagar el premio que se taso ó regule.

El negro ó negra cimarron, que en cualquier tiempo que sea, regrese á la ciudad, trayendo consigo á otro cimarron, quedará libre, y si el cimarron traido es esclavo de la ciudad, ó de amo conocido, además de la libertad, se dará un premio pecuniario, segun regulacion.

El que denunciare á algun cimarron, no pudiendo prenderlo, llevará una tercera parte del premio, y las dos terceras restantes el aprehensor.

Si alguna persona de color persuadiere á algun negro á ocultarse por tiempo de cuatro meses, para poderlo denunciar despues con el fin de adquirirlo por esclavo, ambos incurran en pena de muerte: si el ocultador ó aconsejante fuese español, será desterrado de las Indias, sin perjuicio de otras penas de derecho: si la ocultacion hubiese sido por menos de cuatro meses, ambos incurrirán en pena proporcional.

El que auxiliare ú ocultare á un cimarron ó tratare con él sin denunciarlo, si fuere persona de color, incurra en la misma pena que mereciere el cimarron, con pérdida además de la mitad de sus bienes: si fuere español, sea desterrado de todas las Indias, sin perjuicio de otras penas de derecho.

Ningun esclavo salga á buscar cimarrones sin licencia de su amo y de la justicia; y en

otro caso, aun cuando presente algun cimarron, no ganará el premio.

Tampoco lo ganará el esclavo que se ausente por su voluntad, aunque luego regrese trayendo cimarrones; y antes será castigado conforme á derecho, y los cimarrones que trájere, quedarán esclavos de la ciudad.

Y últimamente, que el registro de negros huidos y denunciados que deben hacer sus amos, se lleve esclusivamente por el escribano de cabildo.

Ley 23. Prohibe se imponga á los cimarrones la pena de *castracion*.

Ley 24. Los presidentes y oidores tienen facultad para indultar por una vez á los cimarrones que se presentaren espontáneamente.

Ley 26. Si los cimarrones tomaren parte en una sedicion, no se forme proceso criminal para su castigo, y antes sin él los corifeos ó cabezas serán desde luego castigados ejemplarmente, y los demás reducidos á esclavitud.

Con el tiempo, la esperiencia persuadió que tal vez con menos rigor se conseguirian mejores resultados en la persecucion y castigo de cimarrones, conciliando la utilidad de los amos y de la causa pública. A este propósito, el Instituto consular de agricultura y comercio propuso y fueron aprobadas diferentes disposiciones sobre el trabajo y ocupacion de los cimarrones en obras públicas, durante su prision. Sobre ello se formó el conveniente reglamento para la isla de Cuba, el cual aprobado por Real órden de 20 de diciembre de 1796, reformado por Real cédula de 7 de febrero de 1820, y posteriormente por Real órden de 22 de abril de 1822; impreso, en fin, por acuerdo de la junta consular de 26 de mayo de 1824, es como sigue:

«*Parte primera. — Apalencados.*

1.° Merecerán este nombre los que en número de siete lleguén á reunirse.

2.° Pondrán el mayor cuidado en su reduccion y escarmiento los capitanes generales y demás justicias de esta isla.

3.° Para evitar su reunion, para poder perseguirlos, y tal vez aprehenderlos antes de que merezcan el nombre de *apalencados*, habrá una especie de registro en que se tome razon de todo esclavo que está huido.

4.° Correrá con este registro el que fuese contador del consulado de esta isla, con la asignacion de 1,000 pesos anuales; y asimismo tendrá dos oficiales: el primero, dotado con 840 pesos, y el segundo con 360, debiendo entenderse que estas consignaciones son por vía de compensacion á este nuevo trabajo.

5.° Y á fin de que sea tan exacto como se debe desear, se previene que todos los hacendados, amos de ingenios, cafetales, algodonerías y añilerías que existen en esta provincia, tendrán obligacion de dar noticia mensualmente al referido contador, del número de esclavos que cada uno tiene huidos, ó de que no hay novedad en sus haciendas, porque con arreglo al número de prófugos, deberá la junta de gobierno tomar las providencias que crea convenientes.

6.° La contaduría coordinará por partidos estas noticias, sacará con claridad el resultado que ofrezcan, y anotará asimismo las haciendas que han faltado á tan justa obligacion.

7.° El dia 1.° de enero y el de julio de cada año remitirán tambien los referidos hacendados un resúmen igualmente circunstanciado de los esclavos que les quedan dispersos, y la contaduría cuidará de arreglar estas otras noticias en los términos que esplica el artículo anterior.

8.° Será tambien obligacion de los capitanes de partido el avisar mensualmente á la misma contaduría lo que pudiesen saber de las rancherías ó palenques que existan en su distrito, y no hayan podido destruir, remitiendo de todos modos una lista de los esclavos que en aquel mes hubiesen aprehendido, con especificacion de los destinos que han llevado.

9.° Los síndicos de la ciudad y consulado tendrán la indispensable obligacion de examinar mensualmente el registro que ha de formarse de todas estas noticias, y la de pro-

mover con vigor lo que conceptúe uno y otro que puede ser conveniente.

10. El fondo del consulado anticipará los gastos necesarios para las esposiciones que con urgencia se hagan contra alguna ranchería ó palenque, precediendo para esto acuerdo de la junta de gobierno, y quedando obligado el que capitanee la espedicion á conducir al mismo consulado los esclavos que aprehendiere, para que allí se le pague lo que tuviere que haber, y pueda el consulado reintegrarse de todos sus suplementos.

11. Se conserva á las justicias ordinarias el derecho que ahora tienen para perseguir palenques, con tal de que se arreglen al arancel del gobierno, y que le den noticia de las espediciones que emprendan y de las resultas que haya habido.

12. Los capitanes de partido podrán atacar por sí mismos las rancherías ó palenques que en su distrito se formen, y tendrán la nueva obligacion de visitarlos mensualmente con el único objeto de descubrir cimarrones; quedando advertidos de que será muy reparable cualquiera omision ó descuido que tengan en esta parte.

13. No pueden dictarse reglas para que en el momento del ataque se trate á los apalencados con dulzura y cristiandad, pero pasado aquel, desarmado ya el esclavo, se prohibe maltratarlo.

14. Lejos de poder hacer costas y formar procesos, para inquirir los delitos que anteriormente hayan cometido los esclavos, debe observarse á la letra la ley 26, tít. 5, libro 7.° de la Recopilacion de Indias, que lo reprueba.

15. Solo en los casos de motin, salteamiento de caminos ó de ladrones famosos, se llevarán á la cárcel, y aun entonces, castigados que sean las cabezas de motin, se entregarán los demás á sus verdaderos amos, sin la menor demora. Y si estos no les reclaman, ó no pagan de contado lo que por el arancel adeudan, se ocurrirá al instante al señor prior del consulado, que mandará abonar todo lo que se deba, y dispondrá igualmente, que tomada razon en la contaduría, se pongan en una obra pública los esclavos aprehendidos.

16. Con los demás apalencados que no sean reos de motin, salteamiento de caminos ó ladrones famosos, se escusará la entrada en la cárcel: entregándolos á sus amos ó al señor prior del consulado, en los términos y casos que previene el artículo anterior.

17. Que á menos que no sea persona conocida del contador, no se entregue ningun negro del depósito sin que haga comparecer el esclavo ante el diputado de obra, y se examine si conoce la que lo solicita, debiendo los amos enviar algun operario ó negro de las mismas haciendas que pueda reconocerlos, y ser reconocidos por ellos, sin cuyo requisito deberá presentarse certificacion por el reclamante, del juez del partido en que resida, de ser de su pertenencia el esclavo.

18. Se faculta al tribunal del consulado para que haga la calificacion y entrega de los esclavos, cuando se ofrezcan dudas sobre la legitimidad de las personas que los reclamen, bastando la órden escrita de uno de los vocales para quedar á cubierto la contaduría.

Parte segunda.—Cimarrones simples.

1.° Se estimarán como tales, el esclavo ó los esclavos que á tres leguas de distancia de las haciendas de criar en que sirven, y legua y media de las de labor, se hallen sin papel de su amo, mayoral ó mayordomo, ó con papel que pase de un mes de fecha.

2.° Qualesquiera podrá aprehenderlo, y ganará para sí el precio de la captura, como no esté asalariado por el amo del cimarron.

3.° Dentro de 72 horas precisas deberá salir el esclavo de manos del aprehensor.

4.° Será obligacion del aprehensor llevar el negro á su dueño cuando lo sepa esplicar, y solo en el caso de resistirse al pago de la captura, lo presentará al juez del partido mas inmediato, donde tomará el competente recibo, para que le sea abonada aquella, cuando este la cobre del consulado.

5.° Las justicias remitirán inmediatamente al consulado los esclavos que espresen corresponder á vecinos de esta ciudad; y solo permanecerán 10 dias en su poder, cuando no sepan esplicar el nombre de su dueño ó de las haciendas á que pertenecen.

6.° Si su verdadero amo pareciere en este tiempo, se le devolverá sin demora, con tal de que antes pague los costos de la captura y demás que haya causado, y de que deje tambien su competente recibo.

7.° Si no pareciere el amo, ó no paga puntualmente lo que el arancel previene para semejante caso, al cumplimiento de los 10 dias, se traerá al cimarron á esta ciudad, y por la contaduría del consulado se abonarán todos los gastos legales.

8.° Se destinará al instante con toda seguridad á las obras del consulado, y se mantendrá allí hasta que reclame su amo, y reintegre los desembolsos que el consulado tenga hechos, advirtiéndose, que nada se abonará por jornal, ni se exigirá tampoco por lo que gaste en el alimento y curacion el tiempo que los cimarrones estén á las órdenes del consulado sin que se sepa su dueño; porque sabiéndose y avisándoselo, corre la curacion de su cuenta, facultándose al contador los cobre ejecutivamente.

9.° Todos los negros cimarrones que existan en el consulado se reunirán en la casa de depósitos los domingos y dias preceptuados, para que puedan allí concurrir los que tengan negros fugitibos, reconocerlos y reclamar los que les pertenezcan.

Artículos adicionales.

1.° Se establecerá un oratorio en la casa de depósito y se dotará un capellan, que además de la obligacion de celebrar el santo sacrificio de la misa en los dias festivos, tenga la de enseñar la doctrina cristiana á los esclavos del consulado y á los prófugos que se encuentran en el depósito.

2.° Todos los dias primeros de cada mes se publicará una lista que comprenda los negros cimarrones que existan en las obras del consulado, dándose cada seis meses noticia á la intendencia de la misma existencia.

Arancel de capturas de negros apalencados.

1.° En los casos estraordinarios se señalará por el gobierno el premio que sea conveniente, con audiencia del cuerpo que costea la espedicion.

2.° Si no precede este señalamiento, y entre muertos, heridos y presos pasaren de 20 los esclavos, se darán 18 pesos por cada uno que se coja, sea á donde fuere el lugar de la ranchería. Nada por los que en la refriega perecieren ó viniesen tan estropeados que los renuncien sus amos. Por los palenques en que pasen de 12 los aprehendidos, muertos y heridos, se pagarán 16, y por los que pasen de 6, 10; autorizándose al contador á consultar en cada caso con los jueces del tribunal del consulado, el que le parezca merecer mayor premio, á fin de que recayendo su aprobacion, pueda exhibir la contaduría á los rancheadores los premios aprobados.

3.° Si alguno de los aprehensores saliese herido en la refriega, se pagará por el consulado su curacion, y todo el tiempo que dure, se le dará el salario que ganaba por su oficio.

4.° Supuesto que con competente comision de cualquier justicia puede atacarse un palenque ó ranchería, y que los que de ella se aprehendan, deben llevarse á la ciudad en que reside la justicia que dió la comision, para que proceda con arreglo á las leyes, se previene que el consulado pagará la captura de aquellos esclavos, que hallándose en los casos de la ley, merezcan ejemplar castigo.

5.° Además de lo que se señala por la captura de los apalencados, se contribuirá un real diario por su alimento, otro real por la custodia, y por su conduccion 3 por cada legua.

6.° Lo que resulte de las capturas de apalencados, se repartirá por iguales partes entre los de la espedicion, y solo al que capitanee la cuadrilla se dará una sesta parte mas que á los otros. Pero las justicias que no asistan al ataque, no pretenderán parte alguna por haber dado la comision, ni llevarán mas derechos que los que se señalan á los jueces de hermandad por la ley 1.ª, libro 8, tít. 13 de la Recopilacion de Castilla, que es la única que puede aplicarse á semejante caso.

Cimarrones simples.

7.° La reunion de cuatro ó cinco fugitivos no forma palenque, porque á nadie puede causar el mayor susto ó cuidado: se estimarán, pues, como cimarrones simples. Será en todos casos igual el precio de la captura, sin que se admita prueba sobre la docilidad ó resistencia del cimarron; pero en cualquiera ocasion que el aprehensor sea herido, se le dará la asistencia y socorro que previene el artículo 3.° del arancel.

8.° Se pagarán 4 pesos por el hecho de la aprehension, y 2 reales por cada legua de las que tienen que andar desde su casa hasta la de la justicia mas inmediata, á donde irremisiblemente debe estar el esclavo 72 horas despues de su aprehension.

9.° Si el aprehensor no estuviese domiciliado en aquella vecindad, se graduará la distancia desde la casa en que durmió la noche anterior, con tal de que esta exista dentro del mismo partido, y si no existiere, se la abonará un peso.

10. Nada podrá pedir por el mantenimiento y hospitalidad que en aquellas 72 horas tiene obligacion de dar.

11. Pero al capitan de partido se abonará un real para alimentar al esclavo en cada uno de los 10 dias que estuviere en su poder, otro real diario para el cuidado que en aquel tiempo ha tenido, y en caso de enfermedad, se pasará por la relacion jurada que de los gastos presente.

12. Por la conduccion de estos cimarrones se abonará lo mismo que por la de los apalencados.

Penas contra los infractores de este reglamento.

1.ª El hacendado que hubiese faltado á remitir la lista, que solo para su bien se le pide, no perderá por esto el derecho de probar la propiedad que sobre su esclavo conserva: pero se le impone la pena de dos pesos, aplicados al fondo del consulado, por cada esclavo que lleve sin aquella circunstancia, facultándose al contador para exigir estas multas, y porque no se tengan condescendencias en esta parte, será obligacion de los síndicos de la ciudad y consulado comparar el registro con los recibos, y reclamar lo conveniente dos veces al año lo menos.

2.ª Las justicias y capitanes de cada territorio procederán criminalmente contra todo el que con conocimiento mantuviese un negro por mas tiempo que el que se permite en este reglamento á los aprehensores, ó que los hubiese entregado á quien no es el verdadero dueño, y sustanciado el sumario, se remitirá con el reo á la intendencia de mostrencos; y además de la pena que por la ley merezca el esceso, se impondrá la multa de cien pesos para el delator.

3.ª Lo mismo se hará con la justicia que ocupe al negro que debe estar en el cepo: al que con mala fé lo tenga mas dias de los diez prevenidos, ó que con la misma mala fé lo entregue al que no fuere su dueño.

4.ª Tambien se procederá criminalmente contra el aprehensor que por ganar la captura, quitase el papel, alterase la distancia, ó de cualquier manera le supusiese huido sin que en realidad lo sea; pues en todos los casos de este artículo deberá hacer de fiscal uno de los dos síndicos, de cuyo celo se espera que tenga la debida indulgencia con las pequeñas faltas, pues decaeria de lo contrario el oficio de rancheador.

5.ª Obligadas las justicias de cada partido á exigir del dueño ó del consulado el precio de la captura y demás costas, no tardarán un momento en pagar las que corresponde al aprehensor; advertidas de que, si asi no lo hiciesen, y este reclamare con justicia, serán condenados en el triplo.

6.ª Se castigará igualmente con un mes de cárcel al conductor de cimarrones que los dejare huir; y sin perjuicio de la demás que merezca su malicia, se impondrá la misma pena al que entregue á cualquiera otro los que al consulado se dirijan.

7.ª El tribunal del consulado exigirá de los síndicos de la ciudad y consulado, la multa de veinte pesos, siempre que hubiesen faltado á la obligacion que se les impone en el art. 9 del reglamento.» Véase ESCLAVO: NEGROS.

CINCO GREMIOS. Véase GREMIOS.

CINCUESMA. Llamóse asi en lo eclesiástico la Pascua de Pentecostés, y tambien el período de cincuenta dias que median hasta ella desde la Pascua de Resurreccion.

CINGULO. Véase VESTIDURAS SAGRADAS.

CIRCADA. Díjose tambien *circata*. Llamóse asi en lo antiguo la visita diocesana del obispo. Sin duda de circo, ó círculo, porque circulaba dentro de ella. Aplicóse tambien á la prestacion con que el clero acudia por ella al obispo. Quieren algunos que fuera el *censo catedrático*; otros que la prestacion que despues se ha llamado *procuracion*. Aunque hoy no interese gran cosa, sino como cuestion comparativa de disciplina, nos inclinamos á esto último, pues el *censo catedrático* indica bien se referia, no á la visita apostólica del prelado, sino á la *silla*, á la enseñanza, como prelado.

CIRCUNCISION. Sabido es que Dios la impuso á la descendencia de Abraam, como signo material del que habia de decirse pueblo de Dios. Pero esta denominacion, la alianza que espresaba, y los signos materiales que la hacian ostensible, todo se ligaba á la venida del Redentor prometido, descendiendo de la raza de Abraam. Por consecuencia todo tenia su cumplimiento, verificada esta. De aquí es, que establecida la ley de gracia, cesaron los signos y figuras místicas, y cesó la *circuncision*. Asi estaba en la naturaleza de las cosas, y asi lo sintieron los Padres de la Iglesia y escritores sagrados. Sin embargo de eso, muchos cristianos continuaron practicando la circuncision; y no como cosa profana, por cualquier mira higiénica ó de salubridad que quiera suponerse, y en cuyo concepto de los hebreos se generalizó á varios pueblos orientales, y despues á los mahometanos; sino como práctica sagrada. En este concepto los coptos, y en general en el patriarcado de Alejandría, habia de preceder al bautismo. Todavía en el siglo XII recomendaba su práctica Juan VI, el 74 de aquellos patriarcas, mientras por otra parte suprimia la confesion auricular. Tres siglos despues, el Concilio de Florencia, creyó aun necesario condenar tales prácticas por declaracion espresa, como lo hizo en su decreto *pro jacobitis*. *Omnes ergo, post illud tempus* (la promulgacion de la ley de gracia), *circuncisionis..... reliquorumque legalium observatores, alienos a Christi fide denuntiat* (el Concilio), *et salutis æternæ minime posse esse participes; nisi aliquando ab iis erroribus resipiscant. Omnibus igitur, qui cristiano nomine gloriantur, præcipil omnino, quocumque tempore, vel arte, vel post baptizmum, á circuncisione cessandum, quoniam sive quis in ea spem ponat, sive non, sine interitu salutis æternæ observari omnino non potest.* Sobre mas pormenores, véase á San Isidoro, *De gentium vocatione*, cap. 16: Bollando, *Tesoro de antigüedades eclesiásticas*, tom. 3: *historia cronológica de los patriarcas de Alejandría*, capítulo 10: id. apéndice de *coptis jacobitis*, §. 7.° y preliminar al mismo.

CIRCUNSCRIPCION. Usase en lo canónico para espresar la fijacion de la estension y límites de una diócesis. Vista la monstruosa desigualdad de las de España, constando unas de solas diez pilas, por ejemplo, como la de Tudela, mientras pasan otras de mil, y en terreno, en parajes, no como quiera fragoso, sino inaccesible, como las de Búrgos, Leon, Lugo, etc., en el novísimo Concordato de 1851 se ajustó, se verificaria de acuerdo de ambas potestades una *nueva circunscripcion* de diócesis, de lo cual tratamos en su lugar oportuno.

Usase tambien por *limitar*, ó rodear de límites una heredad.

CIRCUNSTANCIAS. Version de la palabra latina *circunstantiæ*, y está derivada de *circum*, alrededor, y *stare*, estar, existir, y por tanto, estar ó existir una cosa, ó cosas al rededor de otra. Trasladada la acepcion material á todos los órdenes de la inteligencia; esto es, al órden lógico, físico, metafísico y moral, y por lo tanto, á lo legal y jurídico, llamamos *circunstancias*: 1.° á los hechos, entidades, y conceptos, que lógica, física, metafísica ó moralmente se presentan

conexionados con el hecho que se examina como principal, ó de cuya apreciacion se trata; y 2.° los que *suelen* acompañar á los de su especie, aplicando entonces para la formacion de nuestro juicio lógico, moral ó jurídico, las reglas de la analogía ó induccion filosófica. Esto por lo que hace á la apreciacion de los hechos: en cuanto á *calificacion* de personas, son circunstancias cuanto concierne á las mismas en lo intelectual, físico, moral, ó político; interno, ó esterno, como sexo, edad, estado, capacidad, complexion, temperamento, fortuna, nacimiento, etc. Cuando las circunstancias se determinan y exigen por la ley para algo, se llaman *requisitos*. Véanse las secciones 3.ª y 4.ª

La apreciacion de las circunstancias entra por tanto en todos los órdenes que quedan mencionados; esto es, en todos los órdenes de la inteligencia y de la vida humana, física, racional, moral y social, que en el terreno de la aplicacion alteran, unas veces la índole del hecho principal de que se trata; otras deciden totalmente de él. Así no es de estrañar la suma importancia que el comun sentido, la ciencia, y la legislacion han dado siempre á las circunstancias, y que requieren ciertamente la que les atribuimos en el presente artículo, y aun mucho mayor, si la naturaleza de la obra lo consintiera.

PARTE DOCTRINAL.

SUMARIO.

Sec. I. Indicaciones filosóficas sobre circunstancias.

Sec. II. Reseña histórica y derecho comparado sobre apreciacion de las circunstancias en lo moral y legal.

Sec. III. De las circunstancias en lo civil y político.

Sec. IV. Derecho constituido sobre circunstancias en lo criminal.

§. 1.° *De las circunstancias eximentes.*

§. 2.° *De las circunstancias atenuantes.*

§. 3.° *De las circunstancias agravantes.*

§. 4.° *Consideraciones comunes á los tres párrafos anteriores.*

Sec. V. Reglas para la aplicacion de la teoría jurídica de circunstancias eximentes, atenuantes y agravantes: observaciones sobre las mismas.

SECCION I.

INDICACIONES FILOSÓFICAS SOBRE CIRCUNSTANCIAS.

El comun sentido, lo propio que la ciencia, con el admirable laconismo con que se espresan los conceptos profundos, han reducido á una espresion *gráfica* el valor lógico, la importancia *sicológica*, el poder moral de las circunstancias en el espresivo apotegma, *el hombre es todo circunstancias*. Despues de anunciar que el hombre es el portento de la creacion, el rey del universo; no podia en menos decirse mas sobre el influjo de las circunstancias. Si por esa enunciativa, sin embargo, quisiera significarse que las circunstancias son superiores al imperio de la razon y del libre alvedrío; seria un dislate y hasta un sacrilegio contra la escelencia del hombre. Si en ello se pretendiese enseñar que el hombre, sustituyendo el egoismo á la razon, ha de tomar las circunstancias por norma de su conducta, consultando solo su utilidad, seria una vulgaridad inmoral, sino fuera una blasfemia. Si se entiende, empero, que las circunstancias sirven admirablemente para conocer al hombre y para juzgarlo: que obran con mas ó menos energía, pero con energía siempre, sobre todos, ó alguno de los tres elementos *del mérito y demérito*, de la imputabilidad en los actos humanos, á saber; *la advertencia, la voluntad*, y *la libertad*: que atenúan, neutralizan, á veces hasta anulan *de hecho* la accion *sicológica* de dichos elementos, como por ejemplo, la infancia, la demencia, la embriaguez respecto del primero: esas mismas circunstancias, como así bien el dolor, la pa-

sion, el acaloramiento, el error invencible, respecto del segundo: otras el tercero, como algunas de esas mismas circunstancias, la coaccion, etc.: si se entiende, añadiremos, que no hay *plena imputacion*; sino cuando en la accion humana concurre omnímodamente espedito, libre y por completo el ejercicio de dichas tres facultades, esto es, la *accion sicológica y moral de la advertencia, de la voluntad*, y *de la libertad*, ó sea *pleno conocimiento, plena voluntad, completa libertad*: que las circunstancias, en fin, *ora eximen, ora atenúan, ora agravan*; entonces se anuncia una gran verdad filosófica: la mencionada enunciativa presenta en compendio la *sicologia* del hombre moral. De este modo, examinar las circunstancias, es hacer el exámen del hombre en accion: conocerlas es conocerle: juzgar de ellas es juzgarle. ¿Pero cuánta filosofía no se necesita para conocer y juzgar al hombre? ¿para conocerle sin error, y juzgarle sin injusticia? Así se comprende que el exámen y conocimiento de las circunstancias, no como quiera son asunto eminentemente filosófico, no solo de una trascendencia suma, sino decisiva con frecuencia, como indicamos al principio, en la apreciacion de los actos humanos.

En un tratado filosófico especial del hombre, examinaríamos y espondríamos esta admirable entidad, su composicion y su organizacion, su modo de ser y de obrar, su *fisiologia*, en fin, por completo, *à priori* en lo que es dable; y *à posteriori* le examinaríamos, en primer lugar, en abstracto, considerándolo tan solo, ora física, ora metafísicamente, como un conjunto de facultades, fuera todavía de accion. Entonces tendríamos un *sugeto de ley*; pero aun no *en vida de relacion* con los demás seres: capaz ya de *mérito* y *demérito*; pero sin merecer ni desmerecer todavía.

El profundo estudio del compuesto, sin embargo, nos daria ya á conocer lo que habrá de ser, puestas sus facultades en accion, entrando ya en vida de relacion con los demás seres. Hasta ahora no habria que examinar el influjo de las circunstancias: el influjo de estas empieza, y su exámen es necesario, cuando el conjunto de facultades entra en accion. Hasta entonces el estudio del hombre era en abstracto; ahora en concreto: antes como *capacidad*; ahora como *agente*, sujeto al influjo de cuanto está con él en vida de relacion: antes, en fin, bastaba que el estudio fuese físico en abstracto, y *sicológico*; ahora tiene que ser *fisiológico*: físico y moral, y todo en concreto. Por eso hemos hablado antes del hombre *en accion*: el primer estudio pudiera ser solo del filósofo; el segundo es ya del legislador, y del juzgador. Empero, ambos estudios, por la fuerza á las cosas, son en lo moral inseparables: ambos forman la base fundamental del estudio del jurisconsulto, que aspira á merecer este nombre, pues que ambos completan el verdadero estudio y conocimiento del hombre; cómo es, y cómo debe ser, segun su destino racional, moral y social.

Pero precisamente ese estudio complejo, *esa monografía* amplísima del hombre, no es del todo posible en una obra enciclopédica, sujeta al rigor alfabético. La unidad en este caso se fracciona por necesidad: ni aun en el artículo *hombre*, aunque será, como todos, una *monografía*, lo será amplísima; y antes su complemento ha de buscarse, y se hallará de seguro en infinidad de artículos, mas ó menos análogos, y mas ó menos conexos, además del presente, como los ya publicados ACCIDENTES, ACCION (en sentido filosófico) ACTOS INTERNOS Y ESTERNOS: CAUSA: (en sus acepciones filosóficas), CERTEZA, CERTIDUMBRE Y CAUSALIDAD. Para el propio fin ha de consultarse, como especial, el artículo HOMBRE; y todavía los multiplicados de índole filosófica que dicen relacion á las facultades y actos humanos, como ENTENDIMIENTO: FISIOLOGIA: INTELIGENCIA: IMPUTACION: LIBRE ALVEDRIO: LIBERTAD: MORALIDAD: MOTIVO: NECESIDAD: VOLUNTAD: VOLUNTARIO, etc. Esto por lo que hace á la apreciacion de los actos humanos: sobre calificacion de la persona, los de APTITUD: CALIFICAR: CUALIDAD: HABIL: REQUISITO, etc.

Hemos dicho por incidencia, y en otra parte esplicaremos, que hablando de los actos humanos, no hay *plena imputacion*, sino cuando hay *plena advertencia*, *plena voluntad*, y *plena libertad* en la accion. Por consecuencia el legislador al hacer la ley, y el juzgador al aplicarla, han de examinar, para arribar en la apreciacion de los actos humanos á la certeza, y justicia que es posible:

1.° La cuestion de *hecho* del número de circunstancias concurrentes, segregando las que deben apreciarse por tener conexion con el hecho principal.

2.° El influjo *ordinario* de cada una en casos análogos.

3.° El influjo *complejo* ordinario del conjunto en casos análogos.

4.° El influjo individual, y el complejo *ordinario*, en el caso dado, en concreto, y segun el axioma filosófico, *quidquid recipitur*, *ad modum recipientis recipitur*.

5.° Su influjo *accidental*, por el concurso de otras circunstancias estraordinarias, por la fuerza del hábito, por ejemplo, como en los casos de *avezamiento*, *reincidencia*, *reiteracion*, etc.

6.° Si las circunstancias concurrentes conspiran á un mismo efecto, ó mútuamente, se contraponen.

7.° Si influyen respecto de alguna de las tres enunciadas bases de *plena imputacion*, contra dos, ó contra todas tres.

8.° Si no son conocidas las circunstancias del caso dado, las que *suelen acompañar* á los de su especie, segun el principio de la *armonía* y *uniformidad de la naturaleza* en su modo de obrar, y la regla filosófica *De regulariter contingentibus judicium ferendum est*.

9.° Y en fin, si las circunstancias influyen turbando la razon, retrayendo la voluntad, disminuyendo ó destruyendo la libertad; ó á la inversa, y en qué grado, de donde resultará la necesaria y filosófica clasificacion de circunstancias *eximentes*, *atenuantes*, ó *agravantes*.

Hemos asentado, como primera base en el exámen de las circunstancias, la cuestion de *hecho*, ó sea del número de circunstancias concurrentes, segregando de entre ellas las que deban apreciarse, por haber influido, ora *ordinaria*, ora *accidentalmente* en el hecho: y esta cuestion misma, aunque sencilla en su enunciacion, es ciertamente compleja en su resolucion acertada y completa. Ya entra por mucho, y requiere una sagacidad, un conocimiento no vulgar de las cosas, del giro y filiacion de los sucesos, el comprender y determinar con precision el número de las circunstancias, que concurren en cada caso; pero supone superiores conocimientos filosóficos, un conocimiento profundo del corazon humano, el decidir con acierto las que entre ellas han influido, y el grado ó energía de su influjo. Los autores, dando al juicio sobre las circunstancias sobre apreciacion de los actos humanos la importancia que no es posible reusarle, han creido auxiliar al legislador, pero principalmente al juzgador, reduciéndolas á temas capitales, que con acierto y precision innegables han reunido en el dístico conocido.

Quis, *quid*, *ubi*, *per quos*, *quoties*, *cur*, *quomodo*, *quando*.

Pero debiendo notar que cada una de las enunciativas de esta regla, como dejamos indicado, es un tema ó base general y complejo; que todavía, para su acertado desenvolvimiento requiere atencion y estudio filosófico no vulgar.

Nuestra conviccion de ello hace que agreguemos algunas indicaciones á la antedicha regla, que pareciendo vulgar por vulgarizada, es sin embargo la *síntesis* de meditados estudios sobre el curso y filiacion de los sucesos, sobre el movimiento de la vida fisiológica, racional y moral del hombre.

Antes de eso es preciso notar que no hay una sola accion en la vida humana desnuda de circunstancias: que estas son *fijas* en tésis general y *accidentales*; y que estando el hombre en vida de relacion con todo lo que le rodea, no solo todo lo que le rodea en cada caso dado son circunstancias, ora fijas, ora accidentales, respecto de él, sino que el mismo hombre es un complejo de circunstancias de una y otra índole, ó sean accidentales y fijas.

Fácil es reconocer entre las de la primera clase la edad, el sexo, por ejemplo; entre la de segunda la educacion, la ilustracion, la posicion, etc. De las circunstancias esteriores que le rodean en el órden físico y moral, las fijas tienen término, como el *tiempo*, el *lugar*: las accidentales no lo tienen; y á encontrárselo ó determinarlas en cada caso, ayuda admirablemente la regla preinserta.

Quis: espresa el *agente*; pero el agente puede pertenecer á todos los órdenes de la naturaleza: *persona*, *animal*, *cosa inanimada*; y de ahí la diferencia de responsabilidad, *personal*, *noxal*, de *daños*. Si fuese persona, será *responsable* ó *irresponsable*, y todo se determinará por la apreciacion moral y jurídica de multiplicadas circunstancias personales, como el sexo, la edad en todos sus grados, el temperamento, la capacidad intelectual, la ilustracion, estado civil ó de fortuna, cargo, conducta anterior, cuanto constituye, en fin, la personalidad *moral*, *social*, *familiar*, *política*; y todo examinando, primero con independencia de las demás bases generales de la regla, despues en concreto, ó en mútua correlacion, de donde resultará alteracion en el juicio; ora relevando de responsabilidad, ora meramente atenuando, ora agravando. El principio general *offensa est in offenso, et honos in honorante*, tiene proporcional aplicacion en la delincuencia y penalidad. Si el hijo ofende al padre, es de ordinario una circunstancia que agrava; mientras puede atenuar el que el padre ofenda al hijo, y todavía, aun en este caso, la índole de los hechos puede hacer cambiar el juicio; como cambia siempre que recibimos el escándalo de quien debemos esperar el ejemplo. Del mismo modo en punto á irreligion, es mayor el delito del sacerdote obligado á enseñar el dogma y á estimular su observancia. Lo propio sucede en aquellos hechos que llevan en sí abuso de confianza, de autoridad, de atribuciones, de promesa, de palabra empeñada, concusion, prevaricato, etc., cuyo juicio reflejo, habrá de repetirse, y tiene aplicacion de inferior á superior en sus casos respectivos. No hemos hecho mas que indicar el exámen complejo que encierra y requiere la base relativa al *agente* en sí, y de ello se inferirá el que requieren las demás bases.

Quid: el *hecho*, y el *sugeto* sobre que recae. La ley natural y la positiva, reconocen y establecen la *diferencia moral* de las acciones. La filosofía de las costumbres, fundada en principios sicológicos y fisiológicos, establece el principio de que se dan *actos indiferentes in specie*; pero no *in individuo*. El derecho constituido establece á su vez los actos que prohibe, los que recomienda y los que tolera. Con arreglo á todas estas prescripciones, ha de ser examinada la naturaleza *sicológica*, *moral* y *jurídica* del hecho, de cuya apreciacion se trata. La sicología nos dirá, *si es imputable por ser voluntario*: la moral, si es *lícito*; el derecho, si *es legal*. Asi el *hecho* en sí, no solo es la materia *penable*, de mérito ó demérito, sino que su *índole* es *circunstancia* para su penalidad ó remuneracion. Asi resalta la gravedad del parricidio, del infanticidio, del sacrilegio: el hecho en estos casos arguye aun mayor depravacion que la que necesita el mismo. Para la ingratitud, por ejemplo, hay que sobreponerse á mayor número de sentimientos delicados que para otros actos de delincuencia: arguye mayor deprabacion moral, que el robar, por ejemplo, por pura y grave necesidad.

Hemos indicado que en el tema del *hecho* se envuelve tambien la entidad *paciente*. Puede ser esta *persona* ó *cosa*; y vuelven aquí por lo tanto á tener aplicacion las consideraciones que hemos indicado al hablar del *agente*. *Offensa est in offenso*. Así el parricidio, el regicidio, el infanticidio, importan mayor delincuencia que el simple homicidio: mas el robo sacrílego, y el doméstico, que el robo simple.

Ubi. Todo sucede en algun lugar, y la calidad de este agrava ó atenúa el hecho. No es lo mismo, ni debe ser, delinquir en lugar sagrado, que en profano: en público que en lugar reservado: en el desamparo del campo, que en poblado, etc.

Per quos. Los medios, la calidad de los cómplices y auxiliantes caracterizan tambien singularmente el hecho. ¡Cuán criminal es el

padre que toma por cómplice para un crimen á su propio hijo; el jefe que para el mismo fin induce y se asocia al subalterno, el párroco al feligrés, el maestro al discípulo, etc.! Lo mismo diremos en cuanto á los medios materiales: unos arguyen mayor perversidad; otros mayor alevosía, etc.

Quoties. La *reiteracion*, la *reincidencia*. Un primer delito puede argüir impremeditacion: la *reiteracion* mayor malicia; la triple, cuádruple *reincidencia* completa depravacion, que aumentan las circunstancias de lugar, tiempo, persona, etc. Así indigna la reiteracion ó reincidencia abusando de indulto, de perdon generoso de la parte; alarma un segundo homicidio: irrita la depravacion de un malvado que uno tras de otro envenena á todos sus hijos. La esperiencia en diversos cargos del Estado nos ha suministrado enseñanzas tristísimas, desengaños amargos sobre indultos, reincidencia, y reiteracion, y en su lugar esplanamos convenientemente nuestras ideas en esta materia.

Cur. El motivo, el fin. Este tema encierra en sí casi toda la filosofía del hombre. La filosofía ha elevado á principio, que el hombre no se mueve sin motivos, ni razon determinante. *Nihil contingit in rerum natura sine ratione sufficienti, cur potius sit, quam non sit.* Y en el mundo moral, repetiremos el principio *sicológico*, ya en otra parte consignado, *voluntas humana sine motivis sese non determinat.* La filosofía de las costumbres nos repite en fin, *sunt actus indifferentes in specie; non vero in individuo.* Nada en el mundo moral sucede, ningun *acto imputable* tiene lugar sin motivo, sin fin, sin causa determinante, que impulse ó retraiga: de este modo la calificacion de la accion pende mas ó menos, siempre mucho, algunas veces omnímodamente, de la apreciacion de sus motivos. ¡Cuanta disculpa no tiene el hijo que hiere ó mata por defender al autor de sus dias, amenazado de muerte! ¡El que repele al injusto agresor de su vida! ¿Cuán distinta calificacion merece el hurto por apremiante necesidad, y el hurto por destruir, y por vicio, ó para vicios? No puede aceptarse, y menos generalizarse la falsa máxima, la enunciativa vulgar, de que *el fin justifica los medios*: antes es mas sólida moralmente la máxima *non sunt facienda mala, unde prove niant bona*: pero es indudable que el motivo agrava, atenúa, ó disculpa; que muchas veces el fin justifica los medios. Así el profesor quirúrgico que amputa un brazo para contener la gangrena, es irresponsable: así no es homicida, ni asesino, ni siquiera delincuente en ningun grado el que priva de la vida al criminal, á nombre y por los medios de la ley. El motivo, pues, es un tema cardinalísimo en el órden moral, porque decide con frecuencia de la *bondad ó malicia* de la accion: y capitalísimo en el órden sicológico, porque decide con frecuencia tambien de la *voluntariedad*, de la *imputabilidad* de la accion, puesto que aun en el fondo estricto de la conciencia, es una verdad absoluta, enunciada por las letras sagradas, *non nisi voluntate peccatur.* El exámen, pues, de los motivos, requiere mayor estudio mas profundo conocimiento del corazon humano, que el de todas las demás reglas que vamos esponiendo. Véanse especialmente, entre otros artículos ya mencionados, el de CAUSA (*por motivo*).

Quo modo. Nada se hace sino de alguna manera. El modo es, pues, parte de la deliberacion. Es por tanto imputable; influye para graduar el hecho; y es menester apreciarlo. Así en lo moral una accion buena, hecha con publicidad estudiada, pierde su mérito: así en lo jurídico agrava el ensañamiento.

Quando. Como todo lo humano sucede en el tiempo, el tiempo es circunstancia fija en todos los actos de la vida, y como tal influye á veces en agravar, ó atenuar la delincuencia, ó mérito de la accion. El que aflige ú oprime cuando debe auxiliar, muestra poca humanidad, ya que no depravacion.

Parece que siendo el tiempo inseparable de todo hecho, no puede ser circunstancia eximente, atenuante, ni agravante. Y ciertamente no lo es siempre, y antes muchas veces es circunstancia de todo punto indiferente. En todas no es así. Tómase aquí tiempo por la *sazon* ú *ocasion* en que el hecho se realiza, y no hay duda en que la ocasion es circunstancia influyente. El que ejerce una venganza per-

sonal, precisamente cuando la víctima acude con afan á apagar, por ejemplo, el fuego de su casa, á salvar á su esposa, ó sus hijos, espuestos por momentos á perecer, agrava sin duda su criminalidad: lo mismo el que roba ó incendia en momentos apremiantes de peste, de avenidas, terremotos, etc. Cierto es que el *tiempo*, ó la *sazon*, puede en este caso no haber sido premeditada; pero no se necesita la premeditacion para el *consentimiento*, que induce *imputacion*. Aquel puede ser prévio, ó *concomitante*, así como en casos hasta subsiguientes. La presencia de una calamidad inminente hiere bastante la atencion, impresiona con bastante energía, para dejar de ser desapercibida; y antes debe suponerse no desapercibida, notada lo bastante para argüir *consentimiento actual*.

Añadiremos en conclusion, que las circunstancias no solo son fijas y accidentales, como hemos dicho, sino *ordinarias* y *estraordinarias*: que el influjo de las primeras es mas conocido por haber ocurrido, y apreciádose mas veces: que por la razon inversa las estraordinarias requieren mas detenido exámen: que aquellas y no estas, son las que por induccion pueden suponerse haber ocurrido en los casos dudosos, por el principio ya consignado, de que en caso de duda, nuestro juicio ha de ceñirse á lo que ordinariamente acontece: que las circunstancias influyentes, revisten en el hecho el carácter de causas, ó concausas, y en este concepto es como ha de apreciarse su influjo, sobre lo cual véanse los artículos CAUSALIDAD y CAUSA en sus numerosas acepciones: que el influjo de las circunstancias es á veces tan pronunciado, ó de tal índole, que por sí constituye su afecto, un hecho separado, plausible ó justiciable, en cuyo caso reviste á su vez el carácter de hecho principal, respecto del que han de apreciarse las demás circunstancias, mientras él lo es á su vez del otro hecho principal, de cuya apreciacion se trataba; como por ejemplo, cuando para cometer un crímen se han consumado *como medios* otro ú otros: y últimamente, que circunstancias que en términos generales agravan, ó atenúan, por *licitud*, ó *ilicitud* en su fondo ó principio, dejar de hacerlo, ó surten el efecto contrario. En las secciones sucesivas veremos como el derecho constituido ha desenvuelto y aplicado estas indicaciones teóricas; y concluiremos ahora en esplicacion de la última con un caso notable de jurisprudencia, de tanta mayor autoridad, cuanto que procede del Tribunal Supremo de Justicia.

En una de nuestras capitales de provincia, un hombre del pueblo, insultó y maltrató brúscamente y sin precedentes á otro de su oficio, por el irracional motivo de que vendiendo fruta como él, le hacia mal tercio. Ninguna provocacion habia precedido de parte del otro: ninguna usurpacion de puesto: ningun mal medio empleado para quitar compradores al agresor. Hombre pacífico; pero enérgico el ofendido, apurado su sufrimiento, dió una bofetada al provocador. Este se fué sobre aquel con arma blanca: el desgraciado, hallándose inerme, ó no queriendo contienda, buscó su salvacion en la fuga; pero al llegar á su casa, fué alcanzado y asesinado. La Audiencia territorial impuso al homicida cadena perpétua, y no la última pena, por suponer mediaba una circunstancia atenuante, cual era la espresada en la regla 7.ª, art. 9.º del Código penal, la de «obrar por estímulos tan poderosos que..... hayan producido *arrebato*.....,» apreciando la Audiencia en tal concepto el *bofeton* dado por la víctima al provocador. Elevada queja al Tribunal Supremo, este, oido el fiscal, decretó no habia mérito para exigir la responsabilidad á la sala sentenciadora; mas sí para espedir *acordada*, previniendo á los magistrados que en casos iguales *apreciasen con mas legal criterio las circunstancias*, pues si bien el bofeton en el caso dado, pudo producir *arrebato*, éste no era *justo* é inofensivo en su fondo; no era escusable, no podia *atenuar*, pues *procedia de agresion y provocacion injusta*: de otro modo la *ley vendria á conceder su favor* á hechos *punibles*, justiciables: y ciertamente que no puede ser de otro modo. Santa y aceptable es la beneficencia, la caridad; pero el que las emplea como medio vituperable de seducir mas fácilmente á una persona en desgracia, no puede, seria un es-

cándalo, una perversion de ideas, que pudiera invocarlas, como circunstancias atenuantes del crímen de seduccion ó corrupcion.

SECCION II.

RESEÑA HISTÓRICA Y DERECHO COMPARADO SOBRE APRECIACION DE CIRCUNSTANCIAS EN LO MORAL Y LEGAL.

Hemos hablado en la seccion anterior del poder de las circunstancias; y lo que allí enseña la teoría, eso mismo vemos profesado y adoptado por el comun sentido. En lo moral, como en los asuntos comunes de la vida, tratándose de los actos de la voluntad, de imputacion, de exculpacion, el poder de las circunstancias aparece consignado en multiplicados axiomas comunes: no lo quise hacer: no pude menos: así lo exigieron las circunstancias: las circunstancias no permitieron otra cosa: las circunstancias son superiores á los hombres: ¿quién resiste al poder de las circunstancias? etc.

Lo propio se observa en lo oficial y político. Nada mas comun en este género que el dar por toda regla en infinidad de casos al funcionario público el proceder *segun las circunstancias del caso*. Tales son los tiempos que corremos, se dice tambien: hoy no puede ser otra cosa: *temporibus serviendum est, decia Ciceron*. En suma, las palabras *prudencia*, detenimiento, circunspeccion, prevision, necesidad, temeridad, ¿qué espresan en último resultado, sino la lucha de la razon y el albedrío con las circunstancias?

Mal podria eximirse el órden judicial de esta condicion del género humano. Si las leyes han querido escluir el arbitrio del juzgador, enumerando las circunstancias que he de apreciar, no ha sido sino para detenerse al principio de este camino; acabando por autorizar al juez á apreciar las demás circunstancias análogas á las enumeradas; que es decir, cuantas pueden ocurrir, y la sana razon y la filosofía del hombre aconsejan se tomen en cuenta. La autorizacion es de todo punto absoluta, cuando la legislacion, dándose desde luego por vencida, renuncia á enumerar circunstancias, dejando á la prudencia judicial el apreciar las del caso. Las legislaciones de todos los pueblos no han tenido arbitrio para moverse en este punto sino dentro del ámbito estrecho que cierran estos dos estremos; punto sobre el que aun volvemos á añadir nuevas consideraciones mas adelante.

Sobre la materia es notable, en sí y por el tiempo á que se remonta, la ley 16, tít. 19, lib. 48 del Digesto, *de pœnis*: «*Aut facta* puniuntur, dice, ut furta cædesque: aut dicta, ut convicia, et *infidæ* advocationes: aut scripta, ut falsa, et famosi libelli: aut *consilia*, ut conjurationes et latronum conscientia: *quosque alios suadendo juvisse, esceleris est instar*. § 1.° Sed hæc quatuor genera consideranda sunt septem modis: causa, persona, loco, tempore, qualitate, quantitate et eventu. §. 2.° *Causa*, ut in verberibus: quæ impunita sunt á magistro allata, vel parente, quoniam emendationis, non injuriæ gratia videntur adhiberi; puniuntur, cum quis per iram ab extraneo pulsatus est. §. 3.° *Persona* dupliciter spectatur: ejus, qui fecit, et ejus, qui passus est. Aliter enim puniuntur ex iisdem facinoribus servi, quam liberi: et aliter, qui quid in dominum parentemve ausus est, quam qui in extraneum; in magistrum vel in privatum. In ejus rei consideratione ætatis quoque ratio habeatur. §. 4.° *Locus* facit, ut idem vel furtum vel sacrilegium sit, et capite luendum, vel minore supplicio. §. 5.° *Tempus* discernit emansorem á fugitivo: et effractorem, vel furem diurnum á nocturno. §. 6.° *Qualitate*, cum factum vel atrocius, vel levius est: ut furta manifesta á nec manifestis discerni solent, rixæ á grasaturis, expilatione á furtis, petulantia á violentia..... §. 7.° *Quantitas* discernit furem ab abigeo: nam qui unum suem subripuerit, ut fur coercebitur; qui gregem, ut abigeus. §. 8.° *Eventus* spectatur, ut á clementissimo quoquo facta (quanquam lex non minus eum, qui occidendi hominis causa cum telo fuerit, quam eum qui occiderit, puniat:) et ideo apud græcos exilio voluntario fortuiti casus luebantur..... §. 9.° Evenit, ut eadem sce-

lera in quibusdam provinciis gravius plectantur, ut in Africa messium incensores, in Mysia vitium, ubi metalla sunt, adulteratores monetæ. §. 10. Nonnunquam evenit, ut aliquorum maleficiorum supplicia exarcerbentur, quotiens nimium multis personis grassantibus exemplo opus sit.»

Segun esta ley las circunstancias que deben apreciarse son *causa*, *persona*, *locus*, *tempus*, *qualitas*, *quantitas*, *eventum*. La enumeracion no es exacta. Se omiten las circunstancias siempre atendibles, de los *cómplices*, y de *los medios*. La de *modo* puede subentenderse en la *cualidad* del hecho. Espresa la *cuantidad*. Nuestros modernos criminalistas tambien. Sabido es que Lardizabal establece como medida *de la penalidad* el *daño* causado y la *intencion*. El *daño* es ciertamente en ocasiones la *cuantidad* de la ley romana. Es necesario sin duda tenerla en cuenta, pero es solo en ciertos delitos: en los de *robo*, *hurto*, *daños*; como base de *restitucion* ó *indemnizacion*, no como *medida de la voluntariedad*. Siendo esta completa, porque no la atenúen las circunstancias, el delincuente es plenamente responsable, sea poco ó sea mucho el daño, hurto, robo, esto es, la *cuantidad*.

Pero la teoría de la legislacion romana se completa, ó amplía por lo menos, por otras disposiciones parciales. La ley 47, tít. 10, libro 3 del mismo Código, exime de responsabilidad al loco y al impúbero. *Sunt quidam qui* (injuriam) *facere non possunt, ut puta furiosus, ei impubes, qui doli capax non est; namque ii pati injurian solent, non facere*: lo mismo al que obra en defensa propia, la ley 9, tit. 14, lib. 2 del Código, *Is qui agressorem*.

El Derecho canónico, aplicando justamente al *foro esterno* la ya citada sentencia del apóstol para el *foro interno*, *non nisi voluntate peccatur*, adopta sobre el particular, bien que casuísticamente, y por tanto en diversos lugares, entre estos la causa 2,ª cuestion 3.ª y el título *De pœnis*, cuanto prescriben la filosofía y las buenas legislaciones. Sobre esto los escritores canónicos han escrito obras estensas y metodizadas; y aun pueden hoy consultarse con utilidad, Tiraqueli, *De pœnis temperandis*; y Farnáceo, *De delictis, et pœnis*.

Las leyes de Partida tambien aceptaron esta doctrina, y la desenvolvieron con toda la claridad y precision que era entonces posible, entre otras leyes, en la 8.ª, tít. 31 de la Part. 7... «Otrosí, dice, deben catar los judgadores las personas de aquellos contra quien fué fecho el yerro, ca mayor pena meresce aquel que erró contra su señor ó contra su padre, ó contra su mayoral ó contra su amigo, que si lo ficiesse contra otro que non obiesse ninguno de estos debdos..... E aun decimos que debe catar el tiempo en otra manera. Ca mayor pena debe haber aquel que face el yerro de noche que non el que lo face de dia..... Otrosí deben catar el logar en que facen el yerro, ca mayor pena meresce aquel que yerra en la Egleisia ó en casa del Rey, ó en logar donde judgan los alcaldes, ó en casa de algund su amigo que se fió en él, que si lo ficiesse en otro logar. E aun debe ser catada la manera en que fué fecho el yerro. Ca mayor pena meresce el que mata á otro á traicion ó aleve, que si lo matase en pelea ó en otra manera.» Y espuesta de esta suerte la teoría de las circunstancias atenuantes y agravantes, añade la misma ley: «despues que los judgadores obieren catado acuciosamente todas estas cosas sobredichas, pueden crecer é menguar ó toller la pena, segun que entendieren que es guisado é lo deben facer.» En el mismo código hallamos otras muchas declaraciones análogas para casos especiales, como la de la ley 2, tít. 8, Partida 7, que despues de imponer al homicida la pena de muerte, dice «..... fueras ende, si lo matare defendiéndose, viniendo el otro contra él..... ca estonce..... non cae en pena ninguna por ende.» Asi bien añade la ley 12, tít. 15, Part. 7: «..... si alguno derribase la casa de otro su vecino que estubiese entre aquella que ardiese y la suya, non cae por ende en pena, nin est tenudo de facer enmienda de tal daño como este:» indicando la ley que esto debe ser asi, porque el fuego, no solo podria devorar la casa del

vecino; sino espareirse por la poblacion y abrasarla toda.

En ellas y en otras muchas citas que pudieran aducirse, se vé que nuestras leyes de Partida reconocian y aceptaban la doctrina de las circunstancias *eximentes*, *atenuantes* y *agravantes*. Otro tanto hallaremos examinando los demás códigos españoles y estranjeros, que aun citaremos en la sec. 4.ª En este punto la legislacion romana, la de Partidas, y en general la de todas las naciones, era completamente análoga; y su resultado, por la fuerza de los tiempos, vino á ser uno mismo en todas partes, á saber; el de autorizar la arbitrariedad judicial. Una vez declarado que los tribunales debian modificar las leyes en su aplicacion, segun las circunstancias, sin establecer para esto reglas algunas, natural era que cada cual obrase en esta parte segun su arbitrio y prudencia; siendo innegable que en el período de algunos siglos la legislacion criminal era en suma el arbitrio de los criminales. No era fácil que sucediesen las cosas de otro modo, así porque en los tiempos á que nos referimos, ni estos consentian otra cosa, ni la ciencia legal habrá adelantado lo bastante para desarrollar esa teoría de la gradacion de las penas en proporcion á la entidad de los delitos, habida consideracion en sus circunstancias, como tambien porque el interés de la sociedad preponderaba entonces sobre el del individuo, y se cuidaba mucho mas de asegurar aquel interés por medio de leyes severas, que de consultar al bien de los particulares, disminuyendo el rigor de las penas en casos dados. Se temia que esta consideracion dejase indefensa la sociedad y comprometidos los intereses públicos; y se creyó mas prudente, ó fué necesario dejar este poder discrecional en manos de los jueces y magistrados.

Esta arbitrariedad, que acaso evitó muchas injusticias, y sirvió en ocasiones para interpretar y aplicar equitativamente las leyes, no pudo menos de producir grandes abusos, porque si en manos de un juez íntegro é inteligente representaba la balanza de la justicia, que iguala la entidad de la pena á la criminalidad del delincuente, en manos de un juez inícuo é ignorante, debia de ser la fuente de todo género de iniquidades y escándalos. Así es que á fines del siglo pasado era ya general el clamor que de todas partes se levantaba pidiendo para el mal el remedio que ya permitian los tiempos; y no debemos estrañar que la reaccion viniese, como vino en efecto, á llevar las cosas en parte al estremo opuesto. El código promulgado en Francia en 1791, fué una de las mas notables manifestaciones de esta reaccion: en él se sustituyó el rigorismo inflexible de la ley á la arbitrariedad ilimitada. Este sistema de rigorosa igualdad, que en el hecho traía consigo una desigualdad monstruosa, dió lugar á nuevos y mayores abusos, porque el juez prefería en muchos casos declarar inocente al verdadero criminal, á aplicarle una pena mas grave de lo que merecia. La esperiencia dió á conocer muy luego que la causa de la justicia no habia ganado nada con la abolicion del antiguo sistema, y que era preciso hacer conciliables dos cosas que hasta entonces habian pugnado entre sí, á saber, el interés de la sociedad y el respeto que merece el individuo. Así lo reconoció ya diez y nueve años despues la misma Francia al formar el Código penal de 1810, en que, al fijar las penas, se concedió á los jueces la facultad de graduarlas desde un *máximo* hasta un *minimum* y se dieron á los tribunales correccionales otras aun mas latas, como era la de poder imponer á los simples delitos en que concurrieren circunstancias atenuantes, muy atendibles, una pena distinta de la señalada para ellos. La reforma de 1832 avanzó mucho mas todavía, porque amplió á todos los crímenes y delitos las facultades que en un principio solo se concedieron para estos últimos.

En España, donde, como en el resto de Europa, el arbitrio del juez suplia tambien la falta de disposiciones penales acomodadas á los adelantos de la civilizacion, se verificó la reaccion treinta años despues que en Francia, ó mejor dicho, se formuló entonces el espíritu de ella en un Código penal, que aunque no llegó á adquirir fuerza de ley, es

un documento muy importante doctrinalmente y para apreciar los progresos que hasta entonces habian hecho entre nosotros las doctrinas modernas, en asunto de jurisprudencia criminal. Hablamos, como comprenderán nuestros lectores, del Código penal de 1822, en el cual se asignaron tres gradaciones al delito para la aplicacion de la pena. Creemos deber insertar aquí las disposiciones de este Código sobre circunstancias cuyo conocimiento es de interés para la historia de esta parte de nuestro derecho penal, como escelente repertorio de doctrina, segun verán nuestros lectores, para aplicar la teoría del Código penal vigente sobre circunstancias y muy especialmente el tema general sobre circunstancias análogas, ó de *igual cantidad*, de los arts. 9.°, núm. 8, y 10, núm. 23.

«Artículo 106. En todo delito ó culpa se tendrán por circunstancias agravantes, además de las que espresa la ley en los casos respectivos, las siguientes: *primera*, el mayor perjuicio, susto, riesgo, desórden ó escándalo que cause el delito: *segunda*, la mayor necesidad que tenga la sociedad de escarmiento, por la mayor frecuencia de los delitos: *tercera*, la mayor malicia, premeditacion y sangre fria con que se haya cometido la accion; la mayor osadía, impudencia, crueldad, violencia ó artificio; ó el mayor número de medios para ejecutarla: *cuarta*, la mayor instruccion ó dignidad del delincuente, y sus mayores obligaciones para con la sociedad, ó con las personas contra quienes delinquiere: *quinta*, el mayor número de personas que concurran al delito: *sesta*, el cometerle con armas ó en sedicion: tumulto ó conmocion popular, ó en incendio, naufragio ú otra calamidad ó conflicto; *sétima*, la mayor publicidad ó autoridad del sitio del delito, ó la mayor solemnidad del acto en que se cometa: *octava*, la superioridad del reo respecto á otro á quien dé órdenes, consejos ó instrucciones para delinquir, ó le seduzca, instigue, solicite ó provoque para ello: *novena*, en todos los delitos contra las personas, serán circunstancias agravantes contra el reo la tierna edad, el sexo femenino, la dignidad, la debilidad, indefension, desamparo ó conflicto de la persona ofendida.

«Art. 107. Del mismo modo se tendrán por circunstancias que disminuyan el grado del delito, además de las que la ley declare en los casos respectivos, las siguientes: *primera*, la corta edad del delincuente, y su falta de talento ó de instruccion: *segunda*, la indigencia, el amor, la amistad, la gratitud, la ligereza ó el arrebato de una pasion que hayan influido en el delito: *tercera*, el haberse cometido éste por amenazas ó seducciones, aunque no sean de aquellas que basten para disculparle: *cuarta*, el ser el primer delito, y haber sido constantemente buena la conducta anterior del delincuente, ó haber hecho éste servicios importantes al Estado: *quinta*, el arrepentimiento, manifestado con sinceridad inmediatamente despues de cometido el delito, procurando voluntariamente su autor impedir ó remediar el daño causado por él, ó socorrer ó desagraviar al ofendido: *sesta*, el presentarse voluntariamente á las autoridades despues de cometido el delito, ó confesarlo con sinceridad en el juicio, no estando convencido el reo por otras pruebas.»

Esta doctrina, y sobre todo la que suministraban los códigos modernos, dió ya á los jueces alguna luz para guiar su criterio en la apreciacion de los delitos y en la aplicacion de las penas; pero todavia quedó á su arbitrio el modo de hacerlo hasta que se promulgó el Código penal de 1848. Así es, que en los autores criminalistas anteriores al Código se recomienda á los jueces tomar en cuenta las circunstancias, espresándolas detalladamente, porque la jurisprudencia las habia ido deduciendo del testo de las leyes, y formando con ellas un gran cuerpo de doctrina; pero dando por supuesto los mismos que queda siempre al arbitrio de los jueces el determinar la entidad de la pena.

El Código español de 1848, formado en una época en que el francés, el de las Dos Sicilias, el del Brasil y otros, contaban muchos años de existencia, y se habian apreciado ya sus ventajas é inconvenientes, ha podido aprovecharse de lo mejor de cada uno de ellos y aún añadir por su parte lo que en los otros faltaba. Y así lo ha hecho en efecto. De todos

en general está tomada la idea de espresar las circunstancias eximentes, atenuantes y agravantes; pero en especial del Código del Brasil, que es en esto el mas preciso, ó el mas metódico á lo menos. En los demás códigos se trata de las circunstancias y del efecto que deben producir para la agravacion ó atenuacion de la pena, cuando se trata de cada uno de los delitos, espresando la pena si se comete con premeditacion, cuál si con armas prohibidas, y así de los demás: lo cual, como puede inferirse, hace mucho mas enojosa y pesada la redaccion de los códigos.

Se ha discutido, si es ó no conveniente el sistema adoptado en esta parte por el Código; si conviene, en primer lugar, prefijar las circunstancias que hayan de apreciarse al imponer las penas, y si supuesto que convenga, es admisible una declaracion que abre de nuevo la puerta al arbitrio judicial. Sobre todo esto se puede argüir con buenas razones y sostener diversas teorías; pero si la buena fé y el deseo del acierto guian al espíritu en estas investigaciones, no podrá menos de hallarse en el Código un sistema conciliador y prudente, al par que fundado en la justicia. La designacion de las circunstancias eximentes, atenuantes y agravantes, si bien no añade nada nuevo en el fondo á lo que la antigua jurisprudencia conocia y practicaba, hace que no pueda haber lugar á la arbitrariedad en la mayor parte; ó por lo menos en un gran número de casos, porque están previstas y espresadas las circunstancias que suelen concurrir en ellos; pero no satisfecho el legislador de haber tenido presentes cuantas pueden ocurrir, y creyendo injusto que si ocurren y no están mencionadas, dejen de tomarse en cuenta y estimarse por el juez, ha permitido á este que pueda hacerlo. No se ha remediado en totalidad el mal, que es irremediable de un modo absoluto, pero se ha remediado hasta donde es dable.

SECCION III.

DE LAS CIRCUNSTANCIAS EN LO CIVIL Y POLÍTICO.

La apreciacion de circunstancias en lo político y gubernativo, dicen mas frecuentemente relacion á la persona y su estado, que á los actos de su voluntad; mientras en lo judicial es á la inversa: diferencia de medios que nace de la diferencia de fines. En lo criminal se trata principalmente de determinar el acto humano, de precisar la determinacion de la voluntad, ora libre, ora coartada; pues esa es la norma y medida de la delincuencia; en lo político y gubernativo de *aptitud*, de la *capacidad* legal. La ley prefija en qué casos y con qué condiciones concede á las personas cierto estado de derechos, cierta categoría, la aptitud para cargos y honores. Las circunstancias entonces, en razon á requerirlas la ley, se llaman *requisitos*; y con ellos, y no con otros, se llega al beneficio, ó fin de la ley. La cuestion entonces, menos que filosófica, es oficial, reglamentaria, legal: eso como cuestion de derecho constituido: como cuestion de derecho constituyente, es siempre filosófica; pero la filosofía debe presidir siempre al contesto y organizacion á un pueblo, siempre al legislador.

En lo judicial ya es otra cosa. En este órden se atiende á las cualidades y aptitud legal de las personas; pero tambien, y muy principalmente á su *voluntad*. Mas aun en este órden hay sustancial diferencia entre lo *civil* y lo *criminal*: diferencia y dificultad para el legislador, y mayor aun para el juzgador.

Y ciertamente: las circunstancias en el órden civil, penden y penderán siempre, menos del arbitrio judicial, que en lo criminal. La razon es bien sencilla. En lo criminal, el malvado oculta sus designios; hay que adivinárselos por indicios y conjeturas, por induccion; en lo civil, por la inversa, el agente propone sus planes sin rebozo, porque puede hacerlo impunemente, sin escándalo ni baldon; y por ello, no solo propone y contrata sin reserva, no solo busca él mismo *publicidad*, sino *perpetuidad*, reduciendo á veces á escritura pública sus hechos, y buscando testigos para ello. El criminal, en fin, se mueve para cosas inícuas, ó punibles; el agente en lo civil para cosas lícitas y legales; pues si se moviese en otro sentido, sustituyendo, por ejemplo, el dolo á la buena fé, la usurpacion ó la rapiña á la justa adquisicion;

entonces ya no se trata de asuntos propiamente civiles; sino punibles ya, penales, criminales acaso.

Fundado en esta cardinal diferencia, la legislacion civil es mas fácil y de suyo mas estable que la criminal. Los hechos civiles tienen por base la razon y la justicia, que son estables, de todos por regla general, y en teoría al menos acatadas y conocidas; los hechos criminales por la inversa, tienen por base el abuso multiforme de ellas; la versatilidad indefinida, é indefinible de la veleidad, del arbitrio abusivo, de la perversidad. De aquí el que con mayor facilidad los pueblos mas civilizados, lleguen á tener una escelente legislacion civil, y no así legislacion criminal: de aquí la perpetuidad de la primera, y la alterabilidad inevitable de la segunda. El pueblo romano presenta ejemplos de uno y otro. Solo por esos principios el derecho civil romano viene siendo y es, aun despues de dos mil y mas siglos, el derecho civil europeo y de las naciones cultas. Es preciso, pues, repetir como un principio: los caminos de la recta razon son constantemente los mismos y se andan de una vez para siempre: los de la perversidad varían siempre, y siempre hay que estudiarlos.

De aquí nacen, como necesarias, las consecuencias siguientes. Las circunstancias de un caso son siempre numerosas y variables; pero en lo criminal mucho mas: la ley no puede nunca prevenir y enumerar todas las circunstancias posibles, pero en lo criminal mucho menos: el arbitrio judicial, por tanto, es inevitable en lo criminal, y siempre en grande escala; mientras es casi reducible en lo civil; pues que en lo civil puede prevenir la ley y considerar como ordinarias y generales un gran número de circunstancias, infinitamente mayor, y con menos riesgo contra la verdad y el acierto, que en lo criminal.

Y así sucede en efecto, por lo cual esta seccion es reducible y fácil. La ley civil en materia de circunstancias, previene en la mayor parte de los casos al arbitrio judicial: fundada en principios seguros de induccion filosófica, ha supuesto cierto lo contingente, ya elevándolo á *principio*, ya á *prueba probada*. No son otra cosa las llamadas presunciones *juris*, y *juris et de jure*, y aun las *ficciones del derecho*. Puede ser que en un parto vean la luz dos ó mas fetos, sin que conste la prioridad: que perezcan en un incendio jóvenes y ancianos, sin que conste tampoco la *premoriencia*: que un marido se ausente, sin que en un número considerable de años haya noticia de su persona y paradero: en estos é infinitos casos análogos, sucesos y circunstancias de la vida, el juzgador no tiene que ejercitar el criterio racional, sino el legal: la ley lo ha prevenido. No tendrá que hacer tampoco lo primero, aun cuando las mas vehementes apariencias pongan en duda la fidelidad conyugal, y la filiacion legal de uno ó mas hijos. Tales apariencias no se apreciarán; mientras no se pruebe en forma lo contrario, *ille pater est, quem justæ nuptiæ démomtrant*. En tal supuesto el oficio del juzgador es espedito: cuando la ley resuelve, apreciándolo préviamente, el valor de las circunstancias, cuando no, aplicar á la apreciacion las reglas de la induccion filosófica; que no está en lo contrario la diferencia entre lo civil y criminal; sino en que en el primero de estos órdenes la ley previene los casos en mayor escala, y el esponer la razon filosófica de ello, era el objeto de esta seccion.

SECCION IV.

DE LAS CIRCUNSTANCIAS EN LO CRIMINAL.

Grande es siempre, como hemos visto, la importancia de las circunstancias. ¿Qué será pequeño respecto del hombre, al apreciar precisamente lo que en el terreno de los hechos le distingue de los demás séres, los actos de su razon y de su voluntad, los actos de su vida racional, moral y social? Pero en este último concepto, y por lo que hace al órden legal, la importancia de las circunstancias sube de punto en lo criminal. En los demás órdenes, y por lo que hace á los asuntos profanos, en lo civil, por ejemplo, el hombre aventura intereses respectivamente

de un órden secundario; en lo criminal todos; cuanto debió á la naturaleza y á la fortuna, y la sociedad, á espensas de no pocos gravámenes, le garantiza: la hacienda, la libertad, la vida y la honra. ¿Y á quién no estremece que en infinitos casos, cada uno de estos bienes, ó todos juntos, penden de la buena ó mala apreciacion de una circunstancia? Asi por mucha importancia que diéramos al presente artículo, nunca seria demasiada. Quisiéramos mayores fuerzas para inculcar, para arraigar hondamente en el corazon de los hombres de ley, de los llamados á decidir de la vida de los demás, que la filosofía de las circunstancias, con todas las apariencias de un asunto comun, y aun trivial, es el nervio de la filosofía jurídica; y es en lo *sicológico*, moral y jurídico, en lo criminal, sobre todo, casi toda la filosofía del hombre. Pero siendo preciso circunscribir esta vasta materia, diremos que al metodizar la doctrina de circunstancias, habrá de examinarse como de derecho constituyente, su índole, filosóficamente apreciada: la posibilidad ó imposibilidad de consignarse en las leyes, ora en materia civil, ora en materia criminal; y la conveniencia ó inconveniencia de ello: bajo el punto de vista del derecho constituido, como han considerado las circunstancias las diversas legislaciones, inclusa nuestra legislacion antigua: como las considera la actual, sobre todo la legislacion penal; y reglas, consideraciones y juicio práctico sobre la aplicacion del sistema adoptado. El primer punto lo esponemos en la seccion 1.ª: el segundo en la 3.ª: el tercero en la 2.ª; y los restantes en la presente.

Antes de descender á cada una de sus partes, debemos advertir que nuestras observaciones tienen por principal objeto las circunstancias en general; pues las mas de ellas, si ya no fuesen todas, requieren artículo aparte, como la edad, la demencia, la necesidad, la fuerza, etc.

§. 1.° *De las circunstancias eximentes.*

Adoptamos en esto el lenguaje convencional; pero no preciso. Para eximir de responsabilidad era menester haber incurrido en ella; y en los casos á que vamos á referirnos el operante no ha incurrido en responsabilidad. La ley no la impone á los hechos *puramente materiales*. Por eso Lardizabal establece como base de la delincuencia la *intencion*. ¿Quién hará responsable, dice, á una casa que se desploma y ocasiona desgracias? En vez de *intencion*, sin embargo, debia decir mas bien *voluntad*, único elemento *sicológico* de imputacion, pues que considerada prácticamente implica *advertencia* y *deliberacion*. ¿Y cómo se supondrian estos elementos absolutamente necesarios para la *imputacion*, en el *párbulo*, en el *demente*, etc.? Lo que se llama circunstancia en este caso es un estado *fisiológico* ó *moral*, que incapacita para el mérito y demérito. Entendiendo, pues, que *eximir* de responsabilidad es hacer fisiológica y moralmente imposible que exista; hé aquí el testo del Código penal sobre circunstancias *eximentes*.

«Están exentos de responsabilidad criminal:

1.° El loco ó demente, á no ser que haya obrado en un intervalo de razon.

«Cuando el loco ó demente hubiere ejecutado un hecho que la ley califique de delito grave, el tribunal decretará su reclusion en uno de los hospitales destinados á los enfermos de aquella clase, del cual no podrá salir sin prévia autorizacion del mismo tribunal.

»En otro caso será entregado á su familia bajo fianza de custodia, y no presentándola, se observará lo dispuesto en el párrafo anterior.

»2.° El menor de nueve años.

»3.° El mayor de nueve años y menor de quince, á no ser que haya obrado con discernimiento.

»El tribunal hará declaracion espresa sobre este punto para imponerle pena, ó declararlo irresponsable.

»4.° El que obra en defensa de su persona ó derechos, siempre que concurran las circunstancias siguientes:

»Primera. Agresion ilegítima.

»Segunda. Necesidad racional del medio empleado, para impedirla ó repelerla.

»Tercera. Falta de provocacion suficiente por parte del que se defiende.

»5.° El que obra en defensa de la persona ó derechos de sus ascendientes, descendientes, cónyuge ó hermanos, de los afines en los mismos grados, y de sus consanguíneos hasta el cuarto civil, siempre que concurran la primera y segunda circunstancia, prescritas en el número anterior, y la de que, en caso de haber precedido provocacion de parte del acometido, no tuviera participacion en ella el defensor.

»6.° El que obra en defensa de la persona ó derechos de un estraño, siempre que concurran la primera y segunda circunstancias prescritas en el número 4.° y la de que el defensor no sea impulsado por venganza, resentimiento ú otro motivo ilegítimo.

»7.° El que para evitar un mal ejecuta un hecho que produzca daño en la propiedad ajena, siempre que concurran las circunstancias siguientes:

»Primera. Realidad del mal que se trate de evitar.

»Segunda. Que sea mayor que el causado para evitarlo.

»Tercera. Que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo.

»8.° El que en ocasion de ejecutar un acto lícito con la debida diligencia, causa un mal por mero accidente, sin la menor culpa ni intencion de causarlo.

»9.° El que obra violentado por una fuerza irresistible.

10. El que obra impulsado por miedo insuperable de un mal mayor.

»11. El que obra en cumplimiento de un deber ó en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio ó cargo.

»12. El que obra en virtud de obediencia debida.

»13. El que incurre en alguna omision, hallándose impedido por causa legítima ó insuperable.»

Sobre irresponsabilidad del *demente*, véanse la ley 9.ª, tít. 1.°, lib. 12 del Digesto: la ley 40 de *regulis juris*: ley 21, tít. 1.°, Partida 1.ª: ley 9.ª, tít. 1.°, y 3.ª, tít. 8.°, Part. 7.ª: Código francés, art. 64: Código austriaco, artículo 2.°: Código napolitano, art. 61: Código del Brasil, art. 1.° y 12: y Código español de 1822, art. 26.

Sobre la circunstancia *de edad*, véanse la ley 3.ª, tít. 10; lib. 47 del Digesto: ley 4.ª título 19, Part. 6.ª: ley 9.ª, tít. 1.° y 7.ª, título 31, Par. 7.ª: ley 3.ª tít. 14, lib. 12, Novísima Recopilacion: Código de 1822, art. 23: idem francés, art. 66: id. austriaco, art. 2.°: idem napolitano, art. 64: id. del Brasil, art. 10.

Sobre *defensa propia*, véase ley 1.ª, tít. 2.°, libro 9.° del Digesto: ley 2.ª, 3.ª y 4.ª, título 14, lib. 9.° del Código romano, ley 2.ª y 3.ª, tít. 8.°, Partida 7.ª: ley 1.ª, tít. 21, lib. 12, Novísima Recopilacion: Código de 1822, artículo 621: id. francés, arts. 327, 328 y 329; idem austriaco, artículo 127: id. del Brasil, artículo 14.

Sobre defensa de *parientes y allegados*, véase ley 1.ª, tít. 21, lib. 12, Nov. Recop.: Código de 1822, art. 621: id. francés, artículos 328 y 229: id. austriaco, art. 127: idem del Brasil, art. 14.

Sobre *daño* causado para *evitar un mal*, véanse la ley 12, tít. 15, Part. 7.ª

Sobre el mal causado por *accidente*, véase la ley 5.ª, tít. 16, lib. 9.° del Código romano: leyes 4.ª y 5.ª, tít. 8.°, Part. 7.ª: leyes 1.ª, 2.ª, 3.ª y 7.ª, tít. 5.° lib. 6.° del Fuero Juzgo: leyes 1.ª, 5.ª y 7.ª, tít. 17, lib. 4.° del Fuero Real: ley 1.ª, tít. 21, lib. 12, Novísima Recopilacion: Código austriaco, artículo 2.°: id. del Brasil, art. 1.°

Sobre *fuerza irresistible*, véase la ley 7.ª, título 33, Part. 7.ª: Código de 1822, art. 21: idem francés, art. 64: id. austriaco, art. 2.°, idem del Brasil, art. 10.

Sobre mal causado cumpliendo con *su deber*, véase la ley 55 de *regulis juris*: leyes 5.ª, tít. 15 y 13, tít. 33, Part. 7.ª: Código de 1822, art. 21.

Sobre omision por *imposibilidad*, véase la ley 185 de *regulis juris*.

§. 2.° *De las circunstancias atenuantes.*

Hé aquí el testo del Código penal.

«Artículo 1.° Son circunstancias atenuantes.

»1.ª Las espresadas en el capítulo anterior, cuando no concurran todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos.

»2.ª La de ser el culpable menor de 18 años.

»3.ª La de no haber tenido el delincuente intencion de causar todo el mal que produjo.

»4.ª La de haber precedido inmediatamente provocacion ó amenaza de parte del ofendido.

»5.ª La de haberse ejecutado el hecho en vindicacion próxima de una ofensa grave causada al autor, sus ascendientes, descendientes, cónyuge, hermanos ó afines en los mismos grados.

»6.ª La de ejecutar el hecho en estado de embriaguez, cuando esta no fuere habitual ó posterior al proyecto de cometer el delito.

»Se reputa habitual un hecho cuando se ejecuta tres veces ó mas, con intervalo á lo menos de 24 horas entre uno y otro acto.

»7.ª La de obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato y obcecacion.

«8.ª Y últimamente, cualquiera otra circunstancia de igual entidad y análoga á las anteriores.»

Véase sobre el número 1.°, el párrafo anterior y la ley 3.ª tít. 8,°, Part. 7.ª: ley 7.ª, título 5.°, lib. 6.° del Fuero Juzgo: ley 7.ª, título 17, lib. 4.° del Fuero Real: Código de 1822, arts. 107, 109 y 621: id. del Brasil, artículo 18: id. de Austria, arts. 39 y 40.

Sobre la circunstancia de *menor edad*, véase la 108 de *regulis juris*: ley 16, tít. 19, libro 48 del Digesto: leyes 4.ª, tít. 19, y 1.ª y 8.ª, tít. 31, Part 7.ª: Código de 1822, artículo 107: id. austriaco, art. 39: id. de Napoleon, art. 66: id. del Brasil, art. 18.

Sobre *falta de intencion* para todo el mal causado, véase el Código de 1822, art. 626: idem de Napoleon, art. 391.

Sobre *prévia amenaza ó provocacion*, véase el Código de 1822. arts. 107 y 625: idem del Brasil, art. 18.

Sobre *embriaguez*, véanse las leyes 6.ª, título 2.°, y 5,ª, tít. 8.°, Part. 7.ª: Código de 1822, art. 26: id. austriaco, art. 267: idem del Brasil, art. 18.

Sobre *arrebato y obcecacion*, véase el Código de 1822, art. 107: id. austriaco, artículo 39.

§. 3.° *De las circunstancias agravantes.*

Artículos del Código penal.

«Artículo 10.. Son circunstancias agravantes:

»1.ª Ser el agraviado ascendiente, descendiente, cónyuge, hermano ó afin en los mismos grados del ofensor.

»2.ª Ejecutar el hecho con alevosía, entendiéndose que la hay cuando se obra á traicion ó sobre seguro.

»3.ª Cometer el delito mediando precio, recompensa ó promesa.

»4.ª Ejecutarlo por medio de inundacion, incendio ó veneno.

»5.ª Aumentar deliberadamente el mal del delito, causando otros males innecesarios, para su ejecucion.

»6.ª Obrar con premeditacion conocida.

»7.ª Emplear astucia, fraude ó disfraz.

»8.ª Abusar de superioridad, ó emplear medio que debilite la defensa.

»9.ª Abusar de confianza.

»10. Prevalerse del carácter público que tenga el culpable.

»11. Ejecutar el delito como medio de perpetrar otro.

»12. Emplear medios, ó concurrir circunstancias que añadan la ignominia á los efectos propios del hecho.

»13. Cometer el delito con ocasion de incendio, naufragio ú otra calamidad ó desgracia.

»14. Ejecutarlo con auxilio de gente armada ó de personas que aseguren ó proporcionen la impunidad.

»15. Ejecutarlo de noche ó en despoblado.

»Esta circunstancia la tomarán en consideracion los tribunales, segun la naturaleza y accidentes del delito.

»16. Ejecutarlo en desprecio ó con ofensa de la autoridad pública.

»17. Haber sido castigado el culpable anteriormente por delito á que la ley señale igual ó mayor pena.

»18. Ser reincidente de delito de la misma especie.

»19. Cometer el delito en lugar sagrado, inmune, ó donde la autoridad pública se halle ejerciendo sus funciones.

»20. Ejecutar el hecho con ofensa ó desprecio del respeto que por la dignidad, edad ó sexo mereciere el ofendido, ó en su morada, cuando él no haya provocado el suceso.

»21. Ejecutarlo por medio de fractura ó escalamiento de lugar cerrado.

»22. Ejecutarlo haciendo uso de armas prohibidas por los reglamentos.

»23. Y últimamente, cualquiera otra circunstancia de igual entidad y análoga á las anteriores.»

Sobre *circunstancias agravantes*, véase la ley 8, tít. 31. Part. 7.ª: Código del Brasil, artículo 16.

Sobre *alevosía*, ley 3.ª, tít. 27, Part. 7.ª: ley 2.ª tít. 17, lib. 4.º del Fuero Real: Código francés, arts. 296 y 298: id. del Brasil, artículo 16.

Sobre *precio*, *recompensa*, ó *promesa* para delinquir, ley 3.ª, tít. 27, Part. 7.ª: Código del Brasil, art. 16.

Sobre *inundacion*, *incendio* ó *veneno*, como medios, ley 1.ª tít. 18, lib. 9.º del Código romano: ley 7.ª, tít. 8.º, Part. 7.ª: Código francés, arts. 301 y 302: id. del Brasil, art. 16.

Sobre aumento no *necesario del mal*, código de 1822, art. 106: id. del Brasil, artículo 17.

Sobre *premeditacion*, *astucia*, *fraude* ó *disfraz*; Código francés, arts. 296 y 297: id. del Brasil, art. 16: id. español de 1822, art. 106.

Sobre abuso de *superioridad* ó de *confianza*: Código de 1822, art. 106: id. francés, artículos 406, 407 y 409; y el 408 primitivo reformado en 1832: id. del Brasil, art. 16.

Sobre abuso de *carácter público*: Código de 1822, art. 106: id. francés, art. 198: idem del Brasil, art. 275.

Sobre circunstancias que causan *ignominia*: Código del Brasil, art. 17.

Sobre delincuencia con *ocasion de incendio*, ú *otra calamidad pública*, ley 8.ª tít. 3.º Part. 5.ª: Código de 1822, art. 106.

Sobre delincuencia *con gente armada*, *de noche* ó en *despoblado*: Código de 1822, artículo 106: id. austriaco, art. 37: id. napolitano, arts. 147 y 149: id. del Brasil, art. 16.

Sobre delincuencia *en desprecio ó con ofensa de la autoridad*, véanse los art. AUTORIDAD: ATENTADO Y DESACATO.

Sobre *reiteracion* y *reincidencia*: Código francés, arts. 57 y 58, y el 56 primitivo y su reforma en 1832: id. austriaco, art. 37: idem napolitano, art. 78: id. del Brasil, art. 16.

Sobre delincuencia en *lugar sagrado*, ó *ante la autoridad*, ley 16, tít. 19, lib. 48 del Digesto: ley 8.ª tít. 31, Part. 7.ª: Código de 1822, art. 106.

Sobre las circunstancias contenidas en el número 20, véase el Código napolitano, artículos 175, 176 y 177: id. del Brasil, art. 16.

Sobre la circunstancia de *fractura ó escalamiento*, el Código francés, art, 381 y 382 y su reforma en 1832: id. del Brasil, art. 16.

Sobre la de uso de *armas prohibidas*: Código de 1822, art. 360.

Sobre la enunciativa general contenida en el número 23, Código de 1822, art. 109: idem austriaco, art. 36.

§. 4.º *Consideraciones comunes á los tres párrafos anteriores.*

Clasificadas ya las circunstancias segun el Código, debemos notar dos cosas: 1.ª que no obstante el empeño loable de consignar el número posible de circunstancias, al fin el legislador español, como todos los legisladores, se dá por vencido ante esta dificultad sin solucion, y tienen que encomendar al arbitrio judicial el apreciar las demás *análogas* que puedan ocurrir; lo que en suma es consignar el testimonio de que jamás el arbitrio judicial, aun en el código mas casuístico, y sistemático, puede escluirse omnímodamente: enseñanza importante, para buscar en las dotes de la magistratura y en la disciplina judicial, las garantías que de otro modo hace imposibles la naturaleza de las cosas: y 2.ª que en las circunstancias *eximentes*, la ley es

como *taxactiva*: las enumera todas, sin dejar nada al arbitrio del juez; mientras en las atenuantes y agravantes, despues de enumerar las mas ordinarias, deja á la prudencia judicial las de *igual entidad* que puedan ocurrir. Ciertamente: la razon de la ley, supuesta la *igual entidad*, es la misma; y la misma debe ser en su disposicion. Por otra parte, es cosa sumamente grave y peligrosa el dejar al arbitrio del juzgador el relevar totalmente de responsabilidad á un reo; y sin embargo, si se diera un caso de *igual entidad*, que los espresados, no seria consecuente la ley sino la autorizase: seria falsear el principio sabido de que á identidad de razon legal corresponde idéntica disposicion de la ley. Lo que hay en el particular es que, fuera de las circunstancias *eximentes*, espresadas en el art. 8.° del Código, no se conciben otras *directas*. Pero ¿no podria indirectamente llegarse á ellas? En fuerza de acumularse circunstancias *atenuantes* ¿no podria llegarse á la irresponsabilidad? Sin duda que sí; pero entonces, pues que desaparecerian la *plena imputabilidad*, ó sea la *plena advertencia*, *plena voluntad* y *plena libertad*, por necesidad nos hallariamos en algunos de los casos espresados en el art. 8.°, y ya la cuestion seria de la aplicacion de este, no de la del art. 9.°

Como quiera que sea, por esta ú otra razon, por imposibilidad tal vez de llegar á un sistema perfecto, por temor al mismo tiempo al nimio arbitrio judicial, la ley ha autorizado la atenuacion de la pena hasta algunos grados solamente, descendiendo cinco grados en el caso en que mas, esto es, el término máximo, medio y mínimo de la pena suprema, si los tiene, ó es divisible, y el máximo y medio de la inmediata; pero nada mas. Esto no será siempre omnímodamente justo; pero es ciertamente razonable. En lo falible de los juicios humanos es llegar hasta donde se puede, porque es preciso pararse en algun punto, no con seguridad; sino únicamente con la de haberla deseado y buscado. No de otro modo ha sido preciso fijar el número de sentencias que han de causar ejecutoria, y tener por verdad lo ejecutoriado, que á veces lo seria mas con una sola sentencia; pero no quedaria la especie de tranquilidad de conciencia de haberla buscado mejor con dos ó con tres. Por eso no llevamos, ni en este punto, ni en otros del presente artículo, mas adelante nuestro comentario, que él solo podria absorver una gran parte de la Enciclopedia, y aun no habríamos llegado á la verdad absoluta; porque no es posible llegar.

Como es consiguiente, ofrece dificultades de igual monta la facultad concedida al juez de aumentar la pena por circunstancias agravantes de *igual entidad*. En lugar de tranquilizar; afligen las reflexiones que ocurren con este motivo. Por de contado que en cuanto á esta autorizacion, se viene formando una opinion unánime y conteste en sentido negativo. Casi todos los comentaristas del Código penal, algunos espositores de derecho y el colegio de abogados de Madrid en contestacion á las preguntas formuladas para la reforma del Código en 1831, combaten la espresada cláusula final del artículo 10 del Código, como una puerta abierta á la arbitrariedad: todos manifiestan, que aunque parezca haber analogía entre ella y la del artículo 8.°, no la hay en realidad; porque en esta se trata de no negar al reo nada de lo que pudiera serle favorable, y en aquella de no dejar de prever nada de lo que le perjudique: que la primera idea es aceptable, y aun lleva consigo el cumplimiento de un deber de que no puede prescindirse; pero que la segunda solo revela esceso de rigor, facultando al juez para declarar culpables acciones no declaradas tales por la ley, y esponiendo al reo á ser juzgado por un derecho que no existe; además de que es innecesaria, porque de todos modos el criminal recibiria el castigo de su delito, aunque la vindicta pública no quedase entera y completamente satisfecha. Añádese que la arbitrariedad judicial es admisible hasta cierto punto en beneficio de los particulares, pero nunca en perjuicio de ellos; y que habiéndose enumerado tantas circunstancias agravantes en el art. 10 del Código, que no parece posible haber olvidado ninguna esen-

cial; pues son estas veinte y dos, al paso que solo son siete las atenuantes, no debiera haberse dejado abierta la puerta al arbitrio judicial sobre este punto.

No puede negarse la fuerza de las razones; pero por las antes indicadas, poniéndonos en lo posible, y no siéndolo aquí lo absoluto, esta opinion nos parece mas fundada en consideraciones de humanidad, y de justicia absoluta, que de justicia posible. Porque si las disposiciones finales de los artículos 9.° y 10 reconocen en suma la misma causa, el mismo fundamento filosófico y legal, á saber, que el legislador no ha estado seguro de prever todos los accidentes que deben consignarse como circunstancias atenuantes ó agravantes, y ha creido que debia dejar al juez en libertad de poder apreciar las que él no hubiese previsto y puedan ocurrir, mas bien, que de seguro ocurrirán, que es forzoso que ocurran en la práctica, ¿por qué no ha de ser la misma esta disposicion en ambos casos? Ni valga decir que las circunstancias agravantes están espresadas todas, en atencion á ser muchas, puesto que ni lo primero es, ni puede ser cierto, ni lo segundo prueba otra cosa, sino que por desgracia de la humanidad, el mal es muy fecundo en sus ramificaciones, y varía hasta lo infinito en sus formas y caractéres: fuera de que el legislador no puede, sin ofensa de la moral, sin dejar indefensa la sociedad, apreciar como escusas de la delincuencia, sino muy pocos y muy señalados accidentes; porque obrando con nimia amplitud relajaria considerablemente los vínculos sociales. Hay fundamento ciertamente en las consideraciones alegadas contra la disposicion final del art. 10 del Código y repetidas en tantos autores, pero no debe exagerarse esa peligrosa arbitrariedad que se deplora y deploramos; y antes es preciso considerar tambien, que si es peligroso dejar al arbitrio del juez la agravacion de la pena por circunstancias apreciadas á su arbitrio, no lo es menor el que, concurriendo en un delito una circunstancia que agrave enormemente su criminalidad, esta deje de tomarse en cuenta, porque la ley no lo espresa. Así, pues, la resolucion de este punto en uno ó en otro sentido, adolece sin duda de dificultades; pero aunque en la duda nos inclinemos, por regla general, á lo que favorezca al reo; no podemos adherirnos á la opinion formulada contra la disposicion final del art. 10; por la razon indicada de que con ella la sociedad se veria privada en muchos casos de defensa, y del desagravio á que tiene derecho.

Pero aun debemos añadir algunas consideraciones en esta cuestion importante, establecida entre la humanidad y la justicia; entre el individuo y la sociedad; entre la impunidad y la justicia severa. En primer lugar, admitidas las circunstancias atenuantes *análogas*, seria una falta de sistema, seria mucho desamparar á la sociedad para favorecer al individuo, el no establecerla recíproca, y mas cuando ya la cuestion no se plantea sobre la presuncion legal de que el hombre se reputa inocente mientras no se pruebe que es culpable, en cuyo supuesto, aun en caso de duda, es reputable inocente; si no aquí se trata de un individuo, culpable ya con legal evidencia en cuanto al hecho principal. En segundo lugar no es cierto del todo que el caso no esté previsto por la ley, la cual por el contrario ordena que habiendo circunstancia de *igual entidad*, agrave. El principio está aquí autorizado por la ley. Despues del principio no quedan mas que dos cuestiones en que ya la arbitrariedad no es tan de temer: la primera es *de hecho*; la segunda *de derecho*. Aquella reducida á la *existencia cierta* con certeza legal de la circunstancia, y bien se vé que aquí la prueba es de hecho: que la apreciacion de las pruebas de hecho está en todos sus casos concretada al discernimiento del juez, aplicando en ello el criterio, ora racional, ora legal, que para el caso haya autorizado el derecho; y bien se vé que en este punto nada nuevo se establece respecto de las circunstancias posibles de *igual entidad*, que no sea comun á todas las cuestiones de hecho. Pero evidenciada la cuestion de *hecho*, la de derecho no es ya tan árdua. Sabido es lo que reprueban la sociedad y la ley, y fácil por tanto el determinar si la circunstancia supervemente se

halla en ese caso. Nótese que en él en cuestion, no es solo á apreciar y decidir el juez de primer fallo: lo son á su vez los cualificados y en número considerable de los tribunales superiores y supremos, á que aun hay que agregar el juicio del promotor y fiscales de S. M: hay en todo ello una notable garantía de certeza y acierto, y garantía sobre todo que en paises en que se halla establecido el juicio del jurado, ó en que este se reclama como una mejora, no puede desecharse, á no pretender y conceder que debe esperarse mas del juicio de imperitos, que del de magistrados instruidos, probos, familiarizados con las cuestiones de hecho y de derecho, acostumbrados á hacer justicia, no al arbitrio é impunemente, sino con responsabilidad. Y para que se vea que traida la cuestion al terreno práctico, puede ser hasta de mero buen sentido, entre los infinitos casos que podríamos suponer, concluiremos estas observaciones con un suceso histórico y reciente. Hace aun pocos años que en el estranjero, uno, que se supuso armenio, mostraba al público por especulacion á una joven *salvaje*. Ciertos rasgos del semblante de esta, y la coincidencia de haber ocurrido en cierta aldea la desaparicion de una niña hacia sobre veinte años, que era la edad que aquella representaba, hicieron nacer sospechas, que la justicia providencial habia de convertir en hechos. Cediendo todo á sus altos designios, llegó á evidenciarse jurídicamente que el *armenio* no lo era; sino un infame raptor, y especulador desnaturalizado, que para especular un dia, no se habia horrorizado de afligir á una familia, formar el proyecto horrible de degradar en el aislamiento á un ser racional, con la irritante fiereza de acariciar sin remordimiento por 18 ó mas años el execrable concepto de un verdugo de tal género. Y ahora bien: ¿seria razonable, seria ni conveniente, ni justo que los tribunales encargados de la aplicacion del Código penal, no viesen, ni castigasen en este caso mas que un simple delito de *rapto* ó *sustraccion* de menores? Una cosa sí es preciso admitir; y es que en caso de duda de si agrava una circunstancia, se reputa que no: pero creemos en cuanto al fondo de la cuestion, que habiendo peligros en uno y otro estremo, los hay mayores para la sociedad en abandonar la teoría del Código.

Cuestiónase tambien si en los artículos 8, 9 y 10 del Código, están comprendidas todas las circunstancias eximentes, atenuantes y agravantes posibles, ó si debieran añadirse algunas otras, limitando así mas el arbitrio del juzgador.

En diferentes obras consagradas á ilustrar el Código, ó á hacer observaciones sobre el mismo, se echan de menos algunas circunstancias que sus autores quisieran ver comprendidas entre las eximentes y atenuantes. Las que se indican en este sentido son: 1.ª como *eximente*, la del marido que *sorprendiendo á su mujer en adulterio, mata ó hiere* á ella, ó á su cómplice; y en el mismo sentido y como *atenuantes*, 2.ª la *ignorancia invencible* de la ley, y 3.ª la estremada *ancianidad*: como *atenuantes* tan solamente, 4.ª el *parentesco*, que hoy figuran entre las agravantes: 5.ª la *corta entidad del mal* causado cuando pudo causarse mucho mayor: 6.ª la *irreprensible conducta* anterior del procesado: 7.ª la de *presentarse y confesar su delito* cuando pueda ocultarse y sustraerse por medio de la fuga: y 8.ª la de *haber reparado* ó procurado *reparar el mal* causado atajado, ó procurado atajar sus consecuencias.

En cuanto á la 1.ª, ciertamente que si hay algun caso en que la ley pudiera conceder al hombre el derecho de vida y muerte sobre sus semejantes, éste con razon seria uno de ellos. No son meramente un sentimiento de venganza y una mera reparacion del honor ofendido los móviles que pudieran impulsar al marido á procurarse por sí tan terrible justicia; sino otra multitud de motivos capaces de producir completa obcecacion y arrebato.

No hay tema bajo el cual no pueda ser aquí encarecido el justo enojo, disculpado y justificado el arrebato del marido. Sin embargo, siempre se ha dado mucho en ello á prevenciones y conceptos exagerados de cada época. *Que el lecho es del marido*: *que el honor de éste pende de la mujer*, *etc.* Estas ideas,

elevadas á principios de legislacion, se han exagerado hasta el punto de que no parece sino que la muger no tiene derechos que invocar, fundados en la bendicion nupcial, en la santidad misma del matrimonio. No parece sino que la muger no tiene derecho tambien á la *fidelidad conyugal*, á la no *malversacion* de los bienes del consorcio en estravíos y relaciones vituperables, por parte del marido; á la *paz* del consorcio; al *bien de familia*; al *ejemplo*, en fin, y no al *escándalo* para los hijos. Y decimos que no parece tienen derecho á nada de esto, porque á nadie se le ha ocurrido el igualarla en todo al marido, si cediendo á un arrebato inevitable, matare *in fraganti* al mismo con la adúltera, ó manceba, que la usurpa la unidad esclusiva del lecho conyugal, fundada en el convenio social y santificada por la bendicion de la Iglesia. Hay, sin embargo, una gran razon por parte del marido: y es que su infidelidad no introduce en la familia filiaciones y sucesiones estrañas, como la de la muger; pero es cierto que sus estravíos pueden impedir las sucesiones y filiaciones legítimas; y de todos modos esa razon podia autorizar sanciones severas; pero no es preciso que sean el derecho de vida ó muerte sobre la esposa y su cómplice; de la esposa, á la que puede haber ofendido muchas veces sin que se tomase en cuenta, y á la que tal vez *un cálculo criminal*, su mal ejemplo, sus infidelidades habian hecho meditar una punible venganza. Hubo ciertamente legislaciones que concedieron al marido ese terrible derecho, que solo tiene esplicacion, pero no plena justificacion, en tiempos en que, siendo ineficaz la accion de los tribunales, no habia que esperar justicia en ciertos casos, sino aplicándola cada uno por su mano. Paréccnos, pues, que en el dia, restituido á la ley y á los tribunales su vigor debido; dada así seguridad al desagravio; teniendo en cuenta el grado de civilizacion, la tendencia de los tiempos, y tanto como es debido las máximas y prescripciones de la moral cristiana, basta que la ofensa y arrebato en el caso supuesto atenúen la delincuencia y la penalidad, y que la atenúen hasta donde se quiera, en vez de atribuir el derecho de vida ó muerte. Una cosa sí diremos, y es que, en nuestro concepto, apreciada filosóficamente la índole de las cosas, y por tanto en este caso la del arrebato de un marido, que puede ser modelo de fidelidad, de esposos y de padres, requeria mayores grados de atenuacion, y por tanto mas lato arbitrio judicial. Véanse las razones que sobre esto esponemos en la seccion 5.ª

En cuanto á la *ignorancia invencible*, no hay mas que fijarse en la cualidad de *invencible*, para convenir en que tiene que eximir ó atenuar, segun el caso. El obstáculo contra el consentimiento, que es *invencible*, impide aquel; y sin consentimiento, no hay imputacion. La cuestion estará reducida á determinar con certeza, si la ignorancia es *invencible*, ó hasta dónde es vencible. En tal concepto, preciso seria suplir la omision del Código, si la hubiere; pero sin duda está comprendida en el *impedimento insuperable* de que habla la disposicion 13 del art. 8.º Véase IGNORANCIA.

Otro tanto podemos observar, y con mayoría de razon, respecto á la estremada *ancianidad*. Dícese que cuando el hombre llega á esa edad, su razon declina y su entendimiento se debilita, por lo que la vejez caduca viene á ser una segunda infancia: que en tal estado, y cuando es ya marcada la decadencia de las facultades mentales, el anciano cree que todo le es permitido por sus años, y por efecto de esta disposicion de espíritu se ha visto á algun anciano cometer escesos, nacidos de su debilidad mental, que la ley ha calificado de verdaderos delitos, porque en efecto lo eran, sin que su autor hubiese tenido plena conciencia de haberlos cometido, abreviándose con el proceso y la imposicion de la pena la vida de un ser que ya tocaba el fin de ella, mas digno de compasion que de castigo.

No es nueva, ciertamente, la idea de establecer una atenuacion de la pena en favor de los ancianos septuagenarios. Así lo hizo el derecho romano, y de él pasó esta doctrina á la jurisprudencia antigua, que la conservó largo tiempo. El Código francés de 1791 la adoptó, mandando que si la pena

impuesta al anciano pasaba de cinco años, se redujese á este número cuando tuviese 75 de edad. El que rige hoy en el mismo país, tambien ha aceptado el principio, aunque modificándolo en su aplicacion, porque en vez de acortar la duracion de las penas, dispone que sean estas mas benignas. Así se vé en los artículos 70, 71 y 72 del Código francés reformado en 1832. El primero prohibe que se impongan las penas de trabajos forzados perpétuos, de deportacion y de trabajos temporales á los que tuviesen 70 años cumplidos al pronunciarse la sentencia: el segundo sustituye á estas penas las de detencion perpétua y reclusion perpétua ó temporal, segun los casos: el tercero declara exento de las penas de que habla el 70, á todo reo sentenciado que, cumpliendo su condena, llegare á esta edad, debiendo reemplazarlas la reclusion.

Mas aunque no desconocemos el valor de estas consideraciones, ni dudamos de la posibilidad y de la verdad de los hechos ántes alegados; aunque creemos que cuando ocurran en la práctica, el juzgador debe estimar la ancianidad caduca y falta de discernimiento como una circunstancia *atenuante*, y nunca como *eximente*; no por esto juzgamos que deba consignarse en la ley. Tratándose de la ancianidad, lo que la razon y la esperiencia nos enseñan, es, que en esta época de la vida hay mas juicio, mas sensatez y mas calma, porque el fuego de las pasiones se ha estinguido ya: de suerte, que por regla general, la ancianidad no puede ser considerada como *absoluta* circunstancia atenuante: antes bien, si tenemos en cuenta que el anciano está mas obligado á proceder en todo con sano y maduro juicio que un hombre de menos edad, pudiéramos inclinarnos á la opinion contraria. El criterio judicial, pues, es el que podrá apreciar si en algun caso estraordinario la ancianidad puede ser circunstancia atenuante de responsabilidad criminal, y aplicarle la disposicion final del artículo 9.° En esto no hay peligro y lo habria en considerar la ancianidad desde luego como circunstancia eximente, ó como atenuante, pues entonces eran ya *absolutamente* tales.

Nuestra opinion, respecto al *parentesco*, dista igualmente de la absoluta que emite el Código penal clasificándolo desde luego como circunstancia agravante, y la que tambien sin restriccion alguna esponen escritores de nota, queriendo colocarlo asimismo de un modo absoluto entre las atenuantes: y dista de ambas, porque no es posible desconocer, que si el parentesco en la persona agentes es en unos casos circunstancia atenuante de los delitos, lo es en otras agravante. Mas escusable es en efecto el hurto de una pequeña suma, que el hijo estrae del bolsillo de su padre, que si lo hiciera del de un estraño; pero la injuria hecha por el hijo á su padre es mucho mas criminal y escandalosa que la que hace á otra cualquiera persona; y al paso que merecerian disculpa las lesiones leves que el padre hubiese causado á su hijo, estralimitándose de sus facultades correccionales, una puñalada dirigida por un hermano á otro tendria un carácter mucho mas criminal que la que el mismo agente hubiese dado á una persona estraña.

La verdad es, que el parentesco, unas veces agrava, y otras atenúa. Unas veces servirá para persuadir que hubo intencion de *cometer menos daño que el cometido*, como sucederia si un padre, corrigiendo meramente á un hijo por causa leve, lo hiriese, ó matase, no constando de otra intencion: asi tambien el pequeño hurto, por ejemplo, del hijo al padre, en que puede interpretarse que ha entrado por mucho la confianza filial. Hay, pues, inconveniente en asentar en términos absolutos que *el parentesco* en el reo *agrava siempre*, y que *el parentesco* en el reo *atenúa siempre*: es caso de apreciacion prudencial. el influjo y valor de la circunstancia de parentesco ha de apreciarse en estos casos por otras circuntancias; apreciacion que la buena jurisprudencia ha de estimar comprendida en la cláusula y autorizacion genérica de circunstancias de *igual entidad*. Los romanos exajeraron tambien la teoría, cuando quisieron que la substraccion de bienes del marido, hecha por la muger, fuese siempre *remocion de cosas* y no *hurto*: pero en todo lo criminal la exageracion es ya mas peligrosa.

Póco tendremos que notar respecto de las demas circunstancias requeridas como atenuantes, porque les son aplicables las consideraciones espuestas al tratar de otras tambien indicadas en el mismo sentido. La corta entidad del mal causado, cuando este ha podido ser mucho mayor, la irreprensible conducta anterior del procesado, la de presentarse y confesar su delito, cuando pudo ocultarse y sustraerse á la justicia, la de haber reparado ó procurado reparar el mal causado, impedido, ó procurado atajar sus consecuencias, son hechos, cual mas, cual menos, dignos todos de tomarse en cuenta en favor del reo y de producir la atenuacion de la pena; pero no sabemos si el consignarlos en el Código produciria los resultados que se desea. Por de pronto esta espresion rebajaria mucho el valor moral de alguna de estas circunstancias, pues desde que se consignasen como atenuantes en el testo de la ley, ya no serian actos espontáneos y completamente honrosos presentarse á la justicia, confesar el delito y reparar el daño, como lo son cuando la ley no los toma en cuenta para atenuar la pena; sino que se ejecutarian por interés y conveniencia personal del mismo reo. La conducta irreprensible de este último no debe ser motivo de atenuacion en todo caso, sin que al propio tiempo deba serlo de agravacion la mala conducta, porque en uno y en otro caso militan análogas razones, fuera de que ni una ni otra circunstancia se ligan *directamente*, ni por tanto aumentan ni disminuyen *directamente* tampoco la gravedad del delito, porque solo dicen relacion á los antecedentes, á la vida pasada del reo, siendo de todo punto indudable que un homicidio, un parricidio, un infanticidio, no serán menos execrables en una persona de mala conducta que en otra de buenos antecedentes. Además, cuando se trate de una persona de esta última clase, preciso es que concurran otras circunstancias atenuantes en su favor, como la provocacion, la obcecacion, el arrebato ó la embriaguez accidental, y es por lo tanto probable que haya siempre un medio de atenuar la pena. Así, pues, sin que nosotros desconozcamos el valor que tienen la buena conducta anterior del procesado y las demás circunstancias que se desea ver consignadas entre las atenuantes; y antes creyendo que el juez debe estimarlas siempre que se le presenten como dignas de ser tomadas en cuenta, y que pueden servirle de mucho para apreciar la mayor ó menor fuerza de intencion con que se procedió en la comision del delito, juzgamos que no son absolutamente necesarias ni convenientes en el testo de la ley, bastando que lo estén en cláusula genérica, con lo cual no habrán de estimarse siempre *precisamente*; sino cuando realmente influyan, cuando sean de *igual calidad*, de las testualmente consignadas. Diremos en conclusion de este punto que la corta entidad del mal cuando este pudo ser mucho mayor ya se considera en la práctica como circunstancia atenuante, y se ha estimado como tal; mas como en los casos en que es estimable la entidad del mal, como sucede en los hurtos, la ley proporciona á ella la cuantía de la pena, y como en aquellos, en que no puede apreciarse materialmente, tendrá la espresada declaracion alguna vaguedad, nosotros hallamos preferible que el juez la estime, cuando crea que hay en ella un verdadero y justo motivo de atenuacion: es decir cuando real y verdaderamente sea muy pequeño el mal causado en comparacion del que el reo pudo causar, si hubiese querido hacerlo.

Antes de concluir este punto debemos decir dos palabras acerca de la primera circunstancia atenuante, segun la cual lo serán «las espresadas en el capítulo anterior (las »eximentes) cuando no concurran todos los »requisitos necesarios para eximir de respon»sabilidad criminal en sus respectivos casos.» Esta declaracion tan racional y sensata, puesto que no hay nada mas justo que dar á la circunstancia eximente á lo menos el valor de una atenuante cuando no puede valer en el primer concepto porque le faltan los requisitos necesarios, no es aplicable igualmente á todas las circunstancias eximentes, sino que siéndolo por completo á algunas, lo es menos á otras y deja de serlo á alguna, y asi debe entenderse para que sobre ella no se susciten

dudas en la práctica. Es, por ejemplo, enteramente aplicable á todas las circunstancias complejas, como la sétima eximente, ó sea cuando para evitar un mal se ejecuta un hecho que produzca daño en la propiedad ajena, con estos requisitos: 1.° realidad del mal que se trata de evitar; 2.° que sea mayor que el causado para evitarlo, y 3.° que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo. Figurémonos que ejecutado un daño por evitar un mal, se probare, que si bien era real este mal y hubiera sido mayor que el causado, habia otros medios menos perjudiciales para impedirlo: en tal caso la circunstancia espresada no valdria como eximente, pero valdria como atenuante, pudiendo aplicarse aquí fácilmente la declaracion 1.ª del artículo 9.° Mayores dudas se ofrecerán en el caso de demencia, porque entre estar loco ó cuerdo no hay medio, y aun en los que tienen intervalos lúcidos, tampoco cabe vacilacion, una vez fijado el estado en que se hallaba el reo al tiempo de delinquir; pero si acerca de este estado se suscitare duda, si no se pudiese decidir á punto fijo si estaba ó no el reo en intervalo lúcido, cuando cometió el delito ó falta, valdrá la duda de demencia como circunstancia atenuante y tambien será aplicable á este caso la declaracion referida. No lo será, sin embargo, bajo ningun concepto cuando se trate de la 2.° circunstancia eximente, esto es, de que sea el reo menor de 9 años, porque entonces no cabe medio: si es menor de esta edad, queda exento de responsabilidad: si es mayor entra en el caso número 3.° del artículo 9 y en la doctrina del 72, sin que de aquella circunstancia eximente pueda formarse nunca otra atenuante.

Hay hechos que estinguen la accion criminal y que sin embargo no figuran ni pueden figurar entre las circunstancias: tales son la prescripcion; el perdon de la parte agraviada cuando los delitos solo se persiguen á instancia de esta, el arrepentimiento en los de apostasía; el casamiento en los atentados contra el pudor; el desistimiento y revelacion en las conspiraciones y proyectos de delitos; el parentesco, que en ciertos casos y como antes hemos observado, exime de responsabilidad criminal; y algunos otros. No falta quien quisiera ver enumerados estos hechos entre las circunstancias eximentes de responsabilidad criminal; pero es imposible hacerlo asi, porque hay una enorme diferencia entre estos hechos y las circunstancias eximentes ó atenuantes: estas son accidentes del delito, y accidentes tales que hacen que deje existir ó que se minore su gravedad: aquellos son posteriores al delito, independientes de él, como se vé en el perdon de la parte ofendida, la prescripcion, etc., y no hacen que sea mayor ó menor su gravedad, sino que estinguen la accion criminal que contra él se habia entablado. El único de los referidos hechos que no se encuentra en este caso, es el parentesco, y respecto de él nos referimos á lo dicho anteriormente.

Hemos oido notar á algunos que, leidas las disposiciones del Código sobre circuntancias, parece notarse en ellas cierta desigualdad, porque se establecen muchas agravantes y pocas atenuantes: asi se vé que el capítulo de las primeras solo contiene siete, al paso que contiene veintidos el de las segundas. Esto, sin embargo, no es cierto, como á primera vista parece. Debe notarse ante todo que la primera de las circunstancias atenuantes declara tales á las eximentes, cuando no concurren en ellas todos los requisitos necesarios para pronunciar la completa exencion del reo, lo cual basta para aumentar considerablemente el número de atenuantes; pero aun siendo todavía mucho menor que el de las circunstancias agravantes, no debe esto parecernos estraño, porque son muchos mas los motivos y consideraciones que pueden agravar la delincuencia, que los que tienden á disminuirla. La atenuacion de los delitos solo reconoce una causa general, y es la de que falte alguno de los elementos que los constituyen, ya sea por la corta edad del reo, ya por su estado mental, ya por la necesidad en que se vió de cometer el delito, ya por la falta de intencion, ya en fin, por otro motivo: al paso que las causas de agravacion pueden ser muy distintas. «Unas (dice á este propósito un comentarista del Código) vienen

de lo subjetivo del crímen, como acabamos de ver en las atenuantes, de la intencion mas dañada, mas perversa, del que lo comete: otras del esceso del mal que se causa, ó sea de la parte objetiva de aquel: un tercer género de la alarma que se infunde en la sociedad: un cuarto de respeto que se debe al lugar en que se delinque, á la situacion legal de que se goza; la quinta clase, en fin, de la dificultad de que recaiga la pena, queriéndose agregar la eficacia de la intimidacion á la escasa seguridad del mismo castigo.» El mismo escritor observa que en la mayor parte de los casos, no es uno solo de estos motivos el que produce la agravacion; sino dos, tres ó mas, que concurren á aumentarla, como la alevosía, en que se vé el primero y tercero de los indicados: el disfraz, en que concurren el primero, tercero y quinto; y asi de otros.

SECCION V.

REGLAS PARA LA APLICACION DE LA TEORÍA JURÍDICA DE CIRCUNSTANCIAS EXIMENTES, ATENUANTES Y AGRAVANTES; OBSERVACIONES SOBRE LAS MISMAS.

El legislador del Código penal, aun prefijadas las circunstancias, como lo hace, pudo autorizar al juzgador á aplicarlas segun su prudencia. Era sin duda un sistema adoptable; pero adoptó el opuesto, y así parecia lógico. Pero en las reglas prescriptas para la aplicacion y sobre el valor jurídico de las circunstancias, hay todo el acierto que podia desearse, ó si por el contrario merecen reformarse, lo trataremos despues. He aquí ahora el sistema del Código.

«Artículo 67. Las circunstancias atenuantes ó agravantes se tomarán en consideracion para disminuir ó aumentar la pena, en los casos y conforme á las reglas que se prescriben en esta seccion.

»Art. 68. No producen el efecto de aumentar la pena las circunstancias agravantes, que por sí mismas constituyen un delito, especialmente penado por la ley, ó que ésta haya espresado al describirlo y penarlo.

»Tampoco lo producen aquellas circunstancias agravantes de tal manera inherentes al delito, que sin la concurrencia de ellas no pueda cometerse.

»Art. 69. Las circunstancias agravantes ó atenuantes que consistan en la disposicion moral del delincuente, en sus relaciones particulares con el ofendido ó en otra causa personal, servirán para agravar ó atenuar la responsabilidad de solo aquellos autores, cómplices ó encubridores en quienes concurran.

»Las que consistan en la ejecucion material del hecho ó en los medios empleados para realizarlo, servirán para agravar ó atenuar la responsabilidad únicamente de los que tuvieren conocimiento de ellas en el momento de la accion ó de su cooperacion para el delito.

»Art. 70. En los casos en que la ley señala una sola pena indivisible, la aplicarán los tribunales sin consideracion á las circunstancias atenuantes ó agravantes que concurran en el hecho.

»Cuando la ley señale una pena compuesta de dos indivisibles, los tribunales impondrán la mayor, á no ser que concurra alguna circunstancia atenuante.

»Se esceptuan de estas disposiciones los casos de que se trata en los tres artículos siguientes:

»Art. 71. Cuando no concurran todos los requisitos que se exigen en el caso del número 8.° del art. 8.° para eximir de responsabilidad, se observará lo dispuesto en el artículo 480.

»Art. 72. Al menor de 15 años, mayor de 9 que no esté exento de responsabilidad por haber declarado el tribunal que obró con discernimiento, se le impondrá una pena discrecional, pero siempre inferior en dos grados por lo menos á la señalada por la ley al delito que hubiere cometido.

»Al mayor de 15 años y menor de 18 se aplicará siempre en el grado que corresponda la pena inmediatamente inferior á la señalada por la ley.

»Art. 73. Se aplicará asimismo la pena inmediatamente inferior á la señalada por la

ley, cuando el hecho no fuere del todo escusable, por falta de alguno de los requisitos que se exigen para eximir de responsabilidad criminal en los respectivos casos de que se trata en el art. 8.°, siempre que concurra el mayor número de ellos, imponiéndola en el grado que los tribunales estimen correspondiente, atendido el número y entidad de los requisitos que falten ó concurran.

»Esta disposicion se entiende sin perjuicio de la contenida en el art. 71.

»Art. 74. En los casos en que la pena señalada por la ley contenga tres grados, bien sea una sola pena divisible, bien sea compuesta de tres distintas, cada una de las cuales forma un grado, con arreglo á lo prevenido en los arts. 83 y 84, los tribunales observarán para la aplicacion de la pena, segun haya ó no circunstancias agravantes, las reglas siguientes:

»1.ª Cuando en el hecho no concurrieren circunstancias agravantes, ni atenuantes, impondrán la pena señalada por la ley en su grado medio.

»2.ª Cuando concurriere solo alguna circunstancia atenuante, la impondrán en el grado mínimo.

»3.ª Cuando concurriere solo alguna circunstancia agravante, la impondrán en el grado máximo.

»4.ª Cuando concurrieren circunstancias atenuantes y agravantes, las compensarán racionalmente para la designacion de la pena, graduando el valor de unas y otras.

»5.ª Cuando sean dos ó mas, y muy calificadas, las circunstancias atenuantes, y no concurra ninguna agravante, los tribunales impondrán la pena inmediatamente inferior á la señalada por la ley, en el grado que estimen correspondiente, segun el número y entidad de dichas circunstancias.

»6.ª Cualquiera que sea el número y entidad de las circunstancias agravantes, los tribunales no podrán imponer pena mayor que la designada por la ley en su grado máximo.

»7.ª Dentro de los límites de cada grado, los tribunales determinarán la cuantía de la pena en consideracion al número y entidad de las circunstancias agravantes y atenuantes, y á la mayor ó menor estension del mal producido por el delito.

»Artículo 75. En la aplicacion de las multas, los tribunales podrán recorrer toda la estension en que la ley les permite imponerlas, consultando, para determinar en cada caso su cuantía, no solo las circunstancias atenuantes y agravantes del hecho, sino principalmente el caudal ó facultades del culpable.»

Tal es el testo del Código, y viene ahora naturalmente la cuestion de acierto, que hemos indicado al principio de esta seccion. Desde luego hallamos mas acertado el sistema de haber, por una parte coartado, por otra ilustrado y auxiliado el arbitrio judicial; y en términos absolutos hallamos aceptable tambien el sistema contenido en las reglas preinsertas. Parécenos, sin embargo, que requiere algunas variaciones, y señaladamente dos; á saber, en cuanto á los delitos de *omision*; y respecto de los que *no proceden de depravacion*, aunque correspondientes al mismo género que otros que proceden de ella, segun espondremos.

En cuanto á los primeros la sicología nos demostrará que para las omisiones se necesita por regla general *menos actividad de espíritu*, digámoslo asi, *menos fuerza actual de voluntad, menos grado de energía*, que en los de *comision*. En los de *omision* predomina de ordinario la *negligencia*, la falta de actividad de la voluntad; en los de comision la *deliberacion activa* de hacer el mal.

No es menos evidente la diferencia esencial que media entre un delito que proviene de pura *perversidad*, y otro del mismo género que proviene de otro principio; de un *arrebato*, de una *impresion* de irresistible energía, de una *perturbacion del espíritu*. La muerte dada *in fraganti* por el marido ofendido á la esposa adúltera y al cómplice, es sin duda un *homicidio*: está en el mismo *género* que todos los demás *homicidios*; pero no ciertamente en la misma *especie*; y requeria por tanto otra *especie de pena*. El Código no lo especifica, sin embargo. Halla, sí, en ello circunstancia *atenuante*; pero tam-

bien puede haberla en los demás homicidios; y como el juzgador no puede arbitrar en este caso sino entre la pena *superior* y la *inmediata*, y «dentro de los límites de cada grado..... cualquiera que sea el número de las circunstancias agravantes, »(art. 74, disposiciones 7.ª y 6.ª), el marido ofendido, á quien disculpará la sociedad, se verá castigado con la pena específica, si bien gradual del *homicidio*; es decir, con el mismo género de pena que el homicida, cuyo delito procede de perversidad. Lo propio sucederá en el hombre, pacífico y probo, modelo de buenos ciudadanos, de padres, y de esposos, que despues de ofendido, es arrastrado á un duelo, y mata, y lo mismo en otros muchos casos. Está bien que las penas durísimas de muerte, de cadena, etc., se apliquen á la depravacion; pero la relegacion, el destierro, etc., serian mas propias del homicidio, con regla análoga á otros casos, en que el orígen de la delincuencia no sea la *depravacion*. El Código, pues, tiene necesidad de especificar en esta parte, y de ampliar la escala de gradacion de penas, cuando no es la *depravacion* la base del caso justiciable.

Nada diremos de la primera regla (artículo 67) en que se enuncia el principio de que al aumentar ó disminuir la pena en atencion á las circunstancias, esto ha de hacerse «conforme á las reglas que se prescriben en este Código;» manifestando asi que su objeto es el de poner coto al arbitrio judicial ilimitado.

La segunda (art. 68) envuelve dos declaraciones: segun ella el juez no puede estimar como agravantes: 1.° las circunstancias de este género que constituyen un delito especial, penado por la ley; y 2.° las que son inherentes al delito de tal modo que sin él no puede cometerse. Segun esto, el juez no podrá considerar como circunstancia agravante del homicidio la del parentesco en el caso en que el homicida fuese hijo, padre, hermano, etc., del muerto, porque esto constituye el delito de parricidio, especialmente penado por la ley; ni tampoco las demás circunstancias constitutivas del delito de homicidio, sin las cuales no seria tal delito; pero puede considerar en él como agravantes muchas otras que no son necesarias para cometerlo, tales como la premeditacion y el ensañamiento. ¿Y qué diremos cuando se dude si tal ó cual circunstancia es ó no constitutiva de un delito? Diremos únicamente que el Juez, á quien se dá esta regla, debe meditarla mucho en su aplicacion á la práctica, siempre que ocurran estos casos dudosos. En una rebelion, por ejemplo, no puede menos de haber auxilio de fuerza armada: esta circunstancia, pues, no se considerará como agravante; pero si en una conspiracion hay premeditacion, ¿podremos decir, sin conocimiento del caso, si esta ha sido ó no necesaria para la comision del delito? Hé aquí lo que no puede prejuzgarse *á priori*. El exámen detenido de cada caso es el que dará la regla mas segura para el acierto en el fallo.

La disposicion del art. 69 no ofrece dificultad alguna. Si un hombre mata á otro, ayudado por un tercero, que se halla en estado de embriaguez, el delito será el mismo; pero la pena será menor para el segundo, que para el primero: otro tanto sucederá si uno de los dos era mayor de edad y otro menor de quince años; porque en ambos casos existe á favor de uno de ellos una circunstancia atenuante meramente personal, que el otro no tiene. Esto con relacion á la primera parte del artículo. La segunda no es menos clara: véase un ejemplo. El que hiriese á un prelado con el auxilio de otro que ignorase su carácter sacerdotal, sufriria mayor pena que el coautor, porque tenia contra sí la circunstancia núm. 20 de las agravantes, y esta no concurria contra el segundo, toda vez que no pudo haber intencion de despreciar la dignidad de la persona en quien no tenia conocimiento de ella. Lo mismo diriamos si uno de ellos hubiese recibido premio para cometer el delito, hubiese abusado de su superioridad ó de cualquier modo concurriese en él un motivo de agravacion estraño á los demás. Las dos disposiciones de este artículo, se fundan en el principio de que nadie debe ser castigado por culpas ajenas, ni aprovecharse de lo que á otro es favorable.

Los arts. 70, 71, 72 y 73, forman un cuer-

po de doctrina, consignando el primero ciertos principios, de los cuales se establecen escepciones en los tres últimos. Pero en realidad los cuatro artículos pueden considerarse á su vez como escepciones del 74; y si este se hubiera colocado antes que aquellos, seria mucho mas clara en esta parte la redaccion del Código, que tantas dudas y cuestiones ha suscitado. Vamos á esponer su doctrina, invirtiendo el órden de los artículos en la forma indicada; y asi la haremos mas perceptible.

El art. 74 contiene la fórmula general para la aplicacion de las penas á los delitos segun sus circunstancias, en la mayoría de los casos. Hasta llegar al 70, no se habia hecho mas que asentar principios que debian servir de base á las reglas: en el 74 se establecen estas, teniendo en cuenta como vamos á ver los casos mas sencillos y mas comunes en la práctica. Cuando la pena tiene tres grados, máximo, medio y mínimo, se aplica el primero, si solo hay alguna circunstancia atenuante: el segundo si no hay ni unas ni otras: el tercero si solo hay alguna atenuante. Esta es la clasificacion mas natural; pero las circunstancias pueden presentarse en los delitos con mayor complicacion ó en mayor número, y esto produce la necesidad de nuevas reglas que se contienen en el mismo artículo. Si concurren muchas, unas agravantes y otras atenuantes, se compensarán entre sí y por el resultado de la compensacion, se impondrá la pena: si son todas agravantes, no por esto se aumentará nunca el máximo de la pena; por el contrario, si son todas atenuantes y muy calificadas, se bajará á buscar la pena inmediata. Por último, dentro del máximo, medio ó mínimo de una pena, cabe todavía mayor ó menor cantidad de ella, porque estos grados de penalidad tienen cada cual su escala de tantos á tantos años. Por esto dice la regla 7.ª que dentro de los límites de cada grado el arbitrio judicial puede modificar la pena, segun el número y la entidad de las circunstancias, y segun la cuantía del mal producido.

Hé aquí las reglas contenidas en el artículo 74: como acabamos de ver, las tres primeras dicen relacion al caso de no haber circunstancias ó concurrir una sola; las tres siguientes al en que concurren muchas, ya agravantes, ya atenuantes, ya de ambas clases; la última es general para todos los casos del artículo; determina la *cuantía* de la pena, una vez elegido *el grado* que debe imponerse segun las circunstancias. En estas reglas es, pues, donde comienza ya á precisarse y á ponerse en práctica el sistema moderno en materia de aplicacion de las penas; sistema que consiste, como mas arriba hemos dicho, en hacer compatible el arbitrio judicial con una legislacion que prevee todos los casos posibles y establece preceptos para cada uno de ellos, quedando siempre aquel arbitrio para suplir lo que la ley no alcanza.

Establecidas en el artículo 74 estas reglas, que son aplicables á la mayoría de los delitos, y en que se parte de la base de penas compuestas de tres grados, que es la forma mas acomodaticia de ellas, convenia establecer otras para los casos en que no se apliquen estas penas, lo cual supone tambien que se trata de otra clase de delitos. Hé aquí el espíritu de la disposicion del artículo 70, que determina el modo en que se debe aplicar una pena indivisible ó una compuesta de dos indivisibles. Sus dos disposiciones son muy claras: ninguna duda puede ocurrir acerca de ellas: solo es de notar que ambas se separan de los principios que sirven de base á la aplicacion de las penas, aunque con diversa tendencia, pues la primera establece una escepcion gravosa al reo, y la segunda una escepcion favorable. En efecto, segun este artículo, al culpable de los delitos de traicion y regicidio, únicos á que se impone una sola pena indivisible, que es la de muerte (1), no le eximirá de sufrirla en todo su rigor el concurrir á su favor circunstancias atenuantes; y al que la ley castigue con una pena compuesta de dos indivisibles, no se le impondrá mas que la mayor, aunque haya en su contra circunstancias agravantes. Estas escepciones se fundan, á nuestro juicio: la primera en el carácter odioso y exacrable de los

(1) Artículos 139 y 140.

delitos sobre que recae, y en que, para impedir su comision, la ley ha querido quitar al que los intente toda esperanza de vida: la segunda en que tratándose de ciertos delitos que llevan consigo penas gravísimas como son las que se componen de dos indivisibles, v. g. cadena perpetúa á muerte, el legislador ha creido que no debia pararse nunca del máximo de ella cualquiera que fuesen las circunstancias agravantes del delito.

Por analogía se pretende que la segunda disposicion del artículo 70, sea aplicable al caso en que la pena se componga de dos grados de una divisible, v. g. destierro desde el grado medio al máximo: la razon que se alega en apoyo de esta opinion es que los grados de una pena valen tanto como las penas indivisibles que concurren para formar un castigo entero, y debe por lo tanto aplicarse á aquellos la doctrina establecida para estas. Sin duda se funda en buenas razones esta opinion; pero las hay tambien notables por la contraria. No basta, dicen los patronos de esta, para dar á las leyes interpretacion estensiva, que haya analogía ó semejanza entre los casos; es preciso que exista la misma razon legal en uno y en otro; y como la razon de la ley, al disponer que no se imponga nunca mas pena que la mayor, cuando esta se compone de dos indivisibles, es la enorme cuantía de la misma pena, que parece no consentir agravacion alguna, y esto no tiene lugar en las penas divisibles, no creemos arreglada á derecho, añaden, la interpretacion en sentido opuesto. Parécenos que pugnando en este punto, por una parte la rigorosa justicia, y por otra la humanidad, ha de esperarse del legislador ó de la jurisprudencia, la interpretacion mas adecuada.

Mucho mas grave y controvertida es la cuestion, de si, concurriendo en el caso del artículo 70, dos ó mas circunstancias atenuantes muy calificadas, tendrá ó no aplicacion la regla 5.ª del artículo 74. En favor de la negativa se alegan razones concluyentes en el terreno del estricto derecho y de los principios que presiden á la severa y rigorosa interpretacion de las leyes. Se vé en efecto que el art. 70 dice de un modo claro y esplícito que en los casos á que se refiere, se aplicará la pena, que establece, *sin consideracion á las circunstancias atenuantes ó agravantes*. Se vé además que en nada se refiere á la regla 5.ª del artículo 74; y no es menos evidente que las disposiciones de este último, estriban todas sobre la base de que se impongan penas *que contengan tres grados* ó se compongan de *tres distintas*, lo cual no sucede en el artículo 70, que se refiere á otros casos escepcionales y diversos. Pero á pesar de la gran fuerza de estas consideraciones para rechazar la aplicacion de la regla 5.ª del artículo 74 de lo dispuesto en el 70, un sentimiento de equidad ha suscitado argumentos en favor de la opinion afirmativa, y esta ha llegado á adquirir el apoyo de algunos escritores y á ganar terreno en la teoría y en la práctica. Dícese que el art. 70, al determinar que se prescinda de las circunstancias en los casos para que se establece, se refiere á cuando haya solamente *alguna* circunstancia en uno ú otro sentido ó deje de haberlas, como parece probarlo la redaccion de su segunda parte, donde se habla en singular; pero que no ha podido querer precindir de la regla 5.ª del 74, para el caso en que concurran muchas y sean muy calificadas: que el artículo 70 no se ha hecho cargo de la disposicion de la regla 5.ª, porque no era preciso repetirla toda vez que tratándose de una sola pena indivisible, era indispensable descender á la inmediata inferior, siempre que hubiese de atenuársela: que el artículo 74 no se refiere solo al caso en que la ley imponga una pena compuesta de tres grados, sino tambien al de que la pena se componga de *tres distintas*, y como entre estas pueden hallarse las indivisibles, viene á serles aplicable la regla espresada. Tales son los argumentos, que mas esforzados y mas desenvueltos, han servido de apoyo á la opinion, admitida por algunos, de que lo dispuesto en la regla 5.ª, es aplicable á lo que ordena el artículo 70. Estos argumentos son fuertes, sin duda, pero no parecen decisivos á todas las opiniones, ni bastantes para estimar como recta y legal una interpretacion tan benigna de un precepto tan rigoroso, interpretacion

que viene á echar por tierra su espíritu severo é inflexible, en el que no cabe atenuacion de ningun género para la imposicion de las penas en los casos á que se refiere. Solo como un ingenioso recurso, que la equidad y la humanidad han buscado para evitar la imposicion de la pena de muerte en las traiciones ó regicidios, cuando concurran á favor del reo muchas circunstancias atenuantes, es como puede considerarse y admitirse la indicada interpretacion, y es punto en que mas que en otros conviene estar á la buena jurisprudencia.

Establecidas en el artículo 74 las reglas generales de aplicacion para las penas que constan de tres grados ó se componen de tres distintas, y en el 70 algunas que son especiales para cierta clase de delitos, se consignan en el 71, 72 y 73 ciertas escepciones de lo dispuesto en ambos artículos, por mas que en el Código solo se dicen escepciones del primero de ellos.

La disposicion del artículo 71 es bien sencilla. Siempre que, concurriendo en algun caso la mayor parte de los requisitos que se exigen en el 8.° del artículo 8.° para eximir de responsabilidad criminal, no se reunan sin embargo todos: cuando no pueda decirse que se causó el daño ejecutando un acto *lícito*, con *la debida* diligencia, por *mero accidente*, y *sin la menor culpa ni intencion*; sino que falte alguna de las cuatro condiciones que marca esta circunstancia, concurriendo sin embargo las demás, el hecho se castigará como imprudencia temeraria, segun el artículo 481 á que este se remite; y dentro de sus disposiciones se aumentará ó disminuirá la pena segun la importancia y entidad de los requisitos que falten para declarar la exencion de responsabilidad criminal: por ejemplo; mayor culpa habrá, cuando haya faltado diligencia, que cuando haya habido intencion criminal ó cuando el acto no haya sido lícito.

Dispuesto en el número 3.° del artículo 8.° que el menor de 15 años está exento de responsabilidad criminal, cuando ha obrado sin discernimiento, sobre cuyo punto debe hacer el tribunal declaracion espresa, el artículo 72 determina la pena que ha de imponérsele cuando hubiere habido discernimiento, y esta será inferior por lo menos en dos grados á la que se impone al delito, quedando al arbitrio del juez aplicarle la que crea justa desde este límite para abajo, de suerte que considere la pena inferior en dos grados como el último término de agravacion posible. En este artículo se dá gran latitud al arbitrio de los tribunales; pero no podia ser de otro modo, porque desde el punto en que empieza á haber delincuencia hasta aquel en que la hay por completo, se ofrece una escala llena de gradaciones, que la ley no ha podido apreciar y cuya estimacion debia quedar necesariamente al prudente arbitrio de los tribunales.

En la segunda parte de este artículo se establece otra penalidad especial para los mayores de 15 años y menores de 18, fundada en que la razon no se halla tan completamente desenvelta en esta edad, ni el juicio tan adelantado, ni el ánimo tan exento de la influencia de las primeras pasiones, que pueda castigarse en ella el delito con la misma pena que se impone á un hombre de mas madurez y que obra con mayor conocimiento de causa. La pena que ha de aplicarse á los que delincan en este período de la vida, será, pues, la inmediatamente inferior á la que se impone al delito cometido y en el grado que corresponda segun las circunstancias. El Código penal ha seguido en esta parte el ejemplo de nuestra legislacion antigua y el de la moderna en los demás paises. La ley de Partida establece la minoracion de la pena en favor de los menores de 17 años; el Código francés en favor de los menores de 16; y los códigos de las Dos Sicilias, Austria y el Brasil conceden igual beneficio hasta la edad de 18 años el primero, 20 el segundo y 21 el tercero: de suerte que nuestro Código se ha colocado en un término medio entre estas disposiciones.

La tercera y última escepcion á lo dispuesto en los artículos 70 y 74 es la que contiene el 73. La disposicion del 71 es análoga; pero se limita á un solo caso de las circunstancias eximentes de responsabilidad criminal. Este los comprende todos, menos aquel, otorgando al que ha cometido un delito con

una circunstancia eximente de criminalidad no completa por faltarle alguno de los requisitos que la harian tal, la gracia de rebajarle la pena á la inmediatamente inferior, no pudiendo el juez recorrer todos los grados de esta, segun sea mayor ó menor la fuerza de los requisitos que faltaron para constituir una circunstancia eximente. Se preguntará quizá ¿cómo es posible hacer esta aplicacion de grados, cuando la pena que deba imponerse, segun este artículo, sea de las perpétuas é indivisibles? Pero en estos casos los delitos tendrán casi siempre circunstancias de agravacion, que les harán inaplicable la disposicion de este artículo: en cambio á algunos puede ser aplicable el 71, el cual se cumplirá sin perjuicio de lo dispuesto en el 73, como en el último se espresa.

Haremos dos observaciones generales sobre los tres artículos que acabamos de examinar.

1.ª Que es uno mismo el espíritu que á ellos preside, á saber, el de buscar un término medio para ciertos casos en que así lo exige la conveniencia, entre declarar al reo inculpable y aplicarle con todo rigor la pena marcada por la ley. Hay, en efecto, una inmensa distancia entre ser absolutamente inculpable de un mal causado, y haberlo hecho con deliberada intencion y propósito; y para los casos que puedan ocurrir en las gradaciones de que es susceptible la distancia que separa estos dos puntos, se redactó el artículo 71: la hay tambien entre el menor de nueve años á quien la ley no supone capaz de delinquir y el mayor de diez y ocho á quien es imputable toda la criminalidad del delito; y para ayudar al juez á recorrer esta escala se formuló el art. 72: la hay, por último, entre estar exento de responsabilidad criminal por tener á su favor una circunstancia eximente, y no tener absolutamente ninguna, ni eximente, ni atenuante; y para los casos que puedan presentarse en esta escala de criminalidad está escrito el art. 73.

2.ª Hemos indicado mas de una vez que las disposiones de estos tres artículos, no solo son escepciones del 70, sino tambien del 74; y la verdad de esta observacion, que se presenta clara por sí misma en vista de la esposicion de su doctrina, se confirma con la cláusula que en ellos se contiene, de deber imponerse la pena «en el grado que corresponda.» Si estos artículos se refiriesen solo al 70, fácil es conocer que como en los casos á que se contrae su primer párrafo, se impone la pena de muerte; y en los del segundo una compuesta de dos indivisibles, v. gr., la de cadena perpétua á muerte, y como las penas inmediatamente inferiores á estas no tienen grados, pues son las de reclusion perpétua, relegacion perpétua y estrañamiento perpétuo, no podrian cumplirse estos artículos como están escritos, y se habria puesto en ellos sin razon ni oportunidad esa frase «en el grado que corresponda.» Así, pues, para poder aplicar, tal como han sido redactados los espresados artículos 71, 72 y 73, es preciso considerarlos como escepciones del 74 en que se imponen penas compuestas de diferentes grados, á la vez que lo son del 70 como en este se espresa.

La última de las reglas que examinamos crea, digámoslo así, una nueva circunstancia cuando se trata de la imposicion de multas, encargando al juez que, no solo consulte las agravantes ó atenuantes ordinarias, sino tambien la *fortuna* del culpable. La justicia de este principio es evidente, puesto que una multa, que á un hombre opulento no le causaria vejámen alguno, arruinaria por completo á un pobre, ó escederia de la cuantía de sus haberes. Una disposicion análoga se consignó en la ley 8.ª, tít. 31 de la Partida 7.ª, que encarga á los jueces mirar si es pobre ó rico aquel á quien imponen la pena. La cuestion se presta, sin embargo, á consideraciones que esponemos en su lugar oportuno. Véase PENA: MULTA.

CIRIO. Version de la voz latina *cereus*, vela ó blandon de cera. Usanse estos en el culto eclesiástico desde el principio de la Iglesia. *Cirio pascual* el gran cirio que desde tiempos remotos se bautiza ó bendice con rito singular en los oficios del Sábado Santo, adornándolo con cinco piñas de incienso puro. Encendido en dicha solemnidad, es alegoría sagrada de la ley de gracia, ó nueva

ley divina. Las piñas de incienso significan el aroma sagrado, la pureza y eficacia santificadora de la nueva doctrina. Durante 40 dias, desde la dominica de Pascua de resurreccion hasta el dia de Ascension, se enciende en todas las dominicas al empezar el evangelio de la misa: en el dia de la Ascension, acabado el evangelio, se apaga, para no volverlo á encender mas. La accension del cirio y su estincion en la forma dicha, representa el período en que Jesucristo resucitado se dejó ver en la tierra hasta su ascension gloriosa. Hemos dicho en otra parte que los cirios, velas ó blandones usados en el culto católico, han de ser precisamente de *cera de abejas* y no de otra cera. Véase CANDELAS: CERA.

CIRUJANO. Del latin *chirurgus*, y esta voz de las griegas *Keir* (χειρ) mano, y *ergon* (εργον) trabajo, operacion, y de ahí *cirujía*, del latin *chirurgia*, y esta palabra del griego *Keir-ourgia* (Κειρουργια), operacion manual *curativa*, ó del arte de curar. La idea de cirujano, sin embargo, no es hoy, meramente, y segun la etimología, la de un *operador manual* cualquiera, sino que por valor entendido lleva en sí el concepto de practicarse la operacion como medio curativo, ó encaminado al bien de la salud del hombre. Asi se dirá que cirujano es etimológicamente un profesor del arte de curar, cuya ciencia y pericia consiste principalmente en operaciones manuales. De esta idea se deduce otra, y es que la *cirujía* tiene por objeto principal las afecciones morbosas esternas. Despues veremos si la opinion y la legislacion van y han ido de acuerdo con estas ideas etimológicas y cardinales.

PARTE DOCTRINAL.

SUMARIO.

SECCION I. INDICACIONES GENERALES SOBRE LA CIRUJÍA: RESEÑA HISTÓRICA.

§. 1.° *Indicaciones generales sobre la cirujía.*

§. 2.° *Legislacion relativa á la organizacion y enseñanza de la profesion de cirujía.*

SEC. II. DIVERSAS CLASES DE CIRUJANOS.

SEC. III. DEBERES Y PREROGATIVAS DE LOS CIRUJANOS.

SECCION I.

INDICACIONES GENERALES SOBRE LA CIRUJÍA: RESEÑA HISTÓRICA.

La reseña que anunciamos no es la de la historia de la ciencia, sino de la legislacion respecto de ella. Usamos de la enunciativa *ciencia*, siguiendo la regla filosófica de que las cosas han de denominarse *á formosiori*, de lo que es mas noble ó superior en ellas, porque no somos de los que reducen la cirujía al rebajado concepto de un arte manual, y poco mas que mecánico; sino que la comprendemos como una profesion teórico-práctica, como una facultad en que concurren para constituirla la *ciencia*; y el *arte*, ó *pericia operatoria*. Como *profesion científica* y *pericial*, tendrá su fórmula, su objeto y limitacion en la naturaleza de las cosas: como *carrera* pública tendrá su organizacion y su término legal esclusivo en cuanto á su ejercicio, cuya circunstancia la atribuye el concepto de *facultad*, segun el que la ley esplicará á quien concede la de enseñarla y ejercerla, y bajo qué condiciones y prescripciones, todo lo cual es el objeto del presente artículo.

§. 1.° *Indicaciones generales sobre la cirujía.*

Hemos dicho que no hacemos la reseña histórica de la ciencia, sino la jurídica, por cuanto aquella no nos compete; sin que podamos escusarnos, sin embargo, de consignar algunas indicaciones de las muchas á que se presta la índole y la historia científica de la cirujía, y que importa mucho á la administracion pública tener presentes al organizar la enseñanza y autorizar el ejercicio de dicha profesion, ora separada de la medicina, ora unida á ella.

Desde luego es preciso é importante notar que vienen en pugna al través del tiempo y con la naturaleza de las cosas los principios filosóficos entre sí, y hace dos mil y mas años en pugna entre sí tambien la ciencia y la legislacion, la filosofía y la historia. La filosofía mas trivial de las cosas nos enseña en multiplicados de sus principios y prescripciones, que la division destruye la unidad: que nunca la parte puede equivaler al todo, etc.; y no hay duda que en la ciencia de curar constituyen unidad, forman complemento, no cada uno de sus ramos, por importante que sea, sino todos juntos: la *física*, la *química*, la *botánica*, la *medicina*, la *cirujía*, la *farmacia*, etc. Al propio tiempo es igualmente incontestable el principio psicológico, *pluribus intentus, minor est ad singula sensus*: y no menos el célebre aforismo de Hipócrates: *ars longa; vita brevis*. De este modo los principios filosóficos pugnan entre sí: y fundadas, ora en unos, ora en los opuestos, la historia y las legislaciones, nos presentan, unas veces, como una sola la ciencia de curar, siendo el profesor á la vez *médico, cirujano, botánico, farmacéutico*, etc.: otras reunidos el estudio y la práctica de algunos de estos ramos solamente: otras, en fin, pasando al estremo opuesto de suma division, en la formacion de *especialidades*, siendo de notar que en este punto se dan la mano los tiempos mas remotos, los de Herodoto con los presentes. ¿Cuándo se yerra, y cuando se acierta en sistemas tan opuestos? ¿Es, sino, que se trata de un problema sin solucion, ó que la ciencia no se ha conciliado aun consigo misma, ni ilustrado en este punto lo bastante á los legisladores? De todos modos merecen atencion por parte de la administracion general las indicaciones hasta aquí consignadas, y que aun consignaremos en el contesto de este artículo, y de otros análogos, como los de MEDICINA: MEDICO: MEDICO-CIRUJANO, etc.

Sin duda que la solucion del problema, que parece no tenerla, pende, no de la teoría y principios absolutos; sino de la práctica, de las necesidades sociales. Indudable es que el mismo derecho tienen las poblaciones pequeñas que las populosas á los medios de salud, á la solicitud y proteccion del Estado en este punto: evidente es tambien que en un Estado son en mayor número las poblaciones pequeñas; y no lo es menos, y antes es un hecho histórico, universal, que los Estados, hallando escesiva ó superior á sus fuerzas la carga de sostener por sí solos á los facultativos del arte de curar, la comparten, cuando mas, con los pueblos mismos, si es que todo no lo hacen recaer sobre ellos, que es lo comun: y notorio es, por último, hasta dónde pueden en suma estenderse los esfuerzos de los pueblos pequeños y pobres. ¿Cómo pueden estos retribuir, segun es justo, una asistencia facultativa de superior órden, que suponga el sacrificio de la juventud y de cuantiosos intereses en el seguimiento de una carrera interminable y dispendiosa? ¿Cómo sin esa remuneracion proporcional, y lo que es mas, aunque fuera posible, que no lo es, ni nunca puede serlo; cómo aun con ella se podrá esperar que se sepulte en una aldea, que se relegue y oscurezca en una poblacion diseminada un profesor aventajado, á quien una larga carrera, prolongados y esmerados estudios, una reputacion merecida y conquistada á gran costa, brindan con otra posicion y ventajas; con las ventajas siquiera de un mayor grado de cultura y de comodidades sociales? Y hé aquí al legislador precisado, unas veces á dividir la *unidad científica* en el arte de curar, y de aquí, por ejemplo, los *médicos de segunda clase*, y subdividiendo y fraccionando aun mas, buscando proporciones que puedan ser aceptables, no ya los cirujanos puros, sino aun los cirujanos *romancistas*, los meros *flebotomianos*, etc., y otras veces á acumular ó sustituir funciones, como respecto de los físicos de los ejércitos y armadas. La legislacion de que vamos á hacer mérito en el párrafo subsiguiente, así como el resto del artículo y sus análogos, pondrán mas de relieve cuanto dejamos indicado.

§. 2.° *Legislacion relativa á la enseñanza de la profesion de cirujía.*

Al esponer la legislacion sobre cirujía, y cirujanos, habrá de recordarse, como para

otros infinitos asuntos é instituciones, que la unidad y nacionalidad española y su legislacion general, no se improvisaron; sino que se constituyeron paulatinamente sobre otras civilizaciones y legislaciones, de las que tomaron, unas cosas *esplícitamente*; otras por vía de *supuesto*; ó dando por supuesta su existencia, y legislando acerca de ellas en tal concepto, esto es, parcialmente, en referencia; esplicando, ó modificando, no instituyendo. En este caso se encuentra la cirujía, asi como la medicina, la farmacia, y otras ciencias y profesiones. Nuevos tiempos traen despues nuevas necesidades, y se modifica ó transforma lo recibido. Tal es el cuadro de nuestra legislacion sobre cirujía, y otros ramos del arte de curar.

La mas antigua de las colecciones jurídicas españolas, el *Fuero Juzgo*, no habla de ella; pero sí de los cirujanos, y de solo alguno de sus deberes y derechos, como veremos en la seccion 3.ª En la version al *romance* les llama *físicos*: en el testo latino, *medicus*. Sus prescripciones comprenden sin duda á médicos y cirujanos; pero mas bien á estos.

El Fuero Real hace distincion entre los *físicos* y los *maestros de las llagas*, y habla ya de título y formalidades para ejercer una y otra profesion. «Ningun home, dice, non ovre de física sino fuere ante aprobado por buen *físico* por los físicos de la villa do hubiere de obrar é por otorgamiento de los alcaldes, é sobre esto haya carta testimonial del Consejo: y esto mesmo sea de los *maestros de las llagas...*» (Ley 1.ª, tít. 16, lib. 4.º) Es de notar que asi á los *físicos*, como á los *maestros de las llagas*, los reputa cirujanos ó en aptitud de practicar operaciones quirúrgicas, como veremos en la seccion 3.ª

Las leyes de Partida hacen diferencia entre *físicos* y *cirujanos*, pareciendo designar por la primera de estas denominaciones á los médicos; con alguna confusion, sin embargo, pues que en la ley 10, tít. 9, Part. 2.ª, por ejemplo, comprende bajo la denominacion de *físicos del Rey* á los profesores del arte de curar, que con este objeto residian cerca de su persona, y bien se comprende que no podrian ser *médicos* solamente. La ley 11, título 8.º, Part. 5.ª, comprende tambien, bajo la denominacion de *físicos*, á todos los profesores del arte de curar. La 6.ª, título 8.º de la Part. 7.ª, por el contrario, distingue claramente entre el *físico* y el *cirujano*, y lo propio la ley 9.ª, tít. 15 de la misma Partida.

Todavía en tiempo de los Reyes Católicos se conservaba la distincion de *físicos* y *cirujanos*. Ya antes de esta época se habia prestado notable atencion á la enseñanza y ejercicio de dichas profesiones, creando el *proto-medicato* y los llamados alcaldes mayores examinadores, como espondremos en sus artículos correspondientes (tít. 10, lib. 8.º, Novísima Recopilacion). Los planes generales prescribian ya los estudios que constituían la carrera de cirujía y las leyes encomendaban el exámen y espedicion de título de los profesores, no á las universidades ó establecimientos que les habian enseñado; sino á corporaciones especiales y de órden superior creados sucesivamente al efecto, como el *proto-medicato* y *alcaldes examinadores mayores*, el *proto-cirujanato*, *la junta superior de la facultad reunida*, el *proto-medicato* otra vez, etc. Véanse estos artículos, y las leyes 4.ª, 6.ª y 8.ª, tít. y lib. de la Novísima Recopilacion antes citados.

Asi llegaron las cosas hasta los reinados de Fernando VI, y de Cárlos III, en que la enseñanza de la cirujía recibió un impulso especial con la creacion de colegios de cirujía médica. La cirujía requiere especialmente, para ser enseñada y aprendida, cual corresponde, el teatro de grandes hospitales, por la anatomía singularmente, y claro es, que el nuevo celo del legislador por el perfeccionamiento de la cirujía, consultaria esta circunstancia. Asi fué establecido por Fernando VI, el célebre colegio de cirujía de Cádiz. Declarando Cárlos III, que este colegio no bastaba por sí solo *para la completa instruccion de los que ejercian la facultad quirúrgica en sus reinos*, creó en 1760 el colegio de cirujía de Barcelona. Pero el de Cádiz apenas podia proveer de cirujanos á la Real marina, y el de Barcelona al Principado: con

vista de ello y consultando las necesidades de todo el reino, por real cédula de 13 de abril de 1780, ratificada en 29 de julio de 1783, fué creado el célebre colegio de San Cárlos de Madrid, conforme en un todo al de Barcelona (Leyes 1.ª y 2.ª, tít. 12, lib. 8.° Novísima Recopilacion).

Ya entonces se anunció el sucesivo establecimiento de otros colegios en el reino, prescribiendo al Consejo señalase desde luego los pueblos, cuyos propios pudieran soportar el salario de un cirujano, de que ninguno, teniendo fondos, debia de carecer. (Ley 3.ª, idem idem). Y con efecto, reconociendo el legislador, que no bastaban para ocurrir á tan justa atencion los tres colegios creados, por real decreto de 12 de marzo de 1799, lo fueron los de Búrgos y Santiago (Ley 8.ª idem idem). A un celo tan pronunciado, correspondian disposiciones, privilegios y restricciones, ya para fomentar el estudio, ya para asegurar el ejercicio mas adecuado de la cirujía, previniendo ó corrigiendo abusos de que hacemos indicacion en la seccion 3.ª En el período que media entre el reinado de Fernando VI y de Cárlos IV, es en el que principalmente tuvieron lugar los ensayos y combinaciones á que obligaron al legislador, unas veces el deseo del acierto, otras el de la novedad, y con frecuencia las necesidades de los pueblos, y que dieron por resultado las multiplicadas divisiones y subdivisiones de la *unidad científica* de la ciencia de curar, que espresa la compleja nomenclatura de *médicos, cirujanos, cirujanos-médicos, cirujanos latinos, romancistas, de tercera clase, prácticos, ministrantes, comadrones, flebotomianos*, etc.; nomenclatura que habia de aumentarse despues.

Fácil es deducir el miserabilísimo estado del estudio de la cirujía en España antes de Fernando VI, cuando vemos que, aun existiendo ya los colegios de Cádiz y Barcelona, que además eran de reciente creacion, se erigió el de San Cárlos de Madrid, precisamente *para que pudiera proveerse de cirujanos á todo el reino*, y cuando entonces se encargaba al Consejo *viese los pueblos que podian sostener cirujanos para que no faltase en ninguno*. Infiérese además que, pues toda la atencion y proteccion del legislador parecia concentrarse en los colegios, debia ser menor la que mereciese la enseñanza de la cirujía en las universidades. Y así era en efecto. Aun en las de primer órden dicho estudio estaba reducido á su última espresion; si bien hallamos escesivamente acerba la censura hecha en este punto por el gobierno supremo en el preámbulo *del plan de estudios médicos de* 1843. Antes del plan de 1771, dado á la universidad de Valladolid, habia en ella un solo catedrático de cirujía, que además habia de practicar las disecciones; dotado, decia la universidad al Rey, «*con la cortísima asignacion de 452 rs. vn.*» Habia diseccion por lo menos una vez por semana; y siempre que fuese posible seria catedrático *un cirujano latino*; lo que supone que siempre no lo era: estado de cosas que vino á quedar casi el mismo por el dicho plan. En el plan de 1786, sobre grados académicos en las universidades mayores, ni siquiera se menciona la cirujía. En el general de 1807, art. 4.°, se dispone que «en las universidades en que por falta de rentas, instrumentos y auxilios necesarios, no pudiera hacerse, cual conviene, la enseñanza de medicina y cirujía, cesen todas las cátedras de una y otra profesion...» Y en el art. 7.° de la disposicion 7.ª del capítulo de medicina del mismo plan, aplicado á la universidad de Salamanca, decia esta que *únicamente* los cirujanos *romancistas* podrian hacer en ella su carrera. El plan, en fin, del 1824 establece solo enseñanza de medicina, limitándose (art. 97) á reconocer los grados y estudios de cirujía y farmacia de los colegios, los cuales seguirian rigiéndose por sus ordenanzas generales y reglamentos particulares, sobre lo que conviene consultar la ordenanza general de cirujía de 1804.

Así corrieron las cosas hasta el citado *plan de estudios médicos* de 10 de octubre de 1843. Ya la innovacion habia empezado á prepararse por el reglamento de 16 de junio de 1827 para los colegios de cirujía, y por nombramiento de una comision que madurase y propusiese las mejoras que fuesen posibles en los estudios médicos. Con vista de

todo se dictó el plan mencionado de 1843, por el que se suprimian los antiguos colegios de medicina y cirujía de Cádiz, Barcelona y Madrid; y así mismo la enseñanza de estas ciencias en las universidades. (art. 1.°). En lugar de dichos estudios se crearon dos clases de escuelas de medicina, cirujía y farmacia, llamada una de ellas *facultades* y la otra *colegios* (id. 2.°). Habia *facultades* en Madrid y Barcelona, y *colegios* en Sevilla, Valencia, Zaragoza, Valladolid y Santiago, agregados á las respectivas universidades (id. 3.° y 5.°). En las facultades y colegios se enseñaria (ciñéndose al objeto de este articulo) medicina y cirujía reunidas, con estension nunca conocida. Hé aquí en demostracion de ello las asignaturas que formaban la *facultad reunida*.

Física. . . . .
Mineralogia. .
Química. . . . médicas.
Botánica. . . .
Zoología, . . .

Anatomía humana general y descriptiva.
Fisiologia.
Patologia general.
Anatomía patológica.
Clínica de patologia general.
Higiene pública y privada.
Terapéutica.
Materia médica.
Arte de recetar.
Patologia quirúrgica.
Medicina operatoria.
Anatomía quirúrgica.
Vendajes.
Patologia médica.
Obstetricia.
Enfermedades de mujeres.
Enfermedades de niños.
Medicina legal.
Moral médica.
Historia médica.
Bibliografía médica.
Clínica quirúrgica.
Clínica médica.
Clínica de partos.
Clínica de enfermedades de mujeres y niños.
Materia farmacéutica.
Manipulaciones químico-farmacéuticas.
Farmacia galénica.
Farmacia químico-operatoria. (Artículos 6, 7 y 8).

Habría además *escuela práctica*, en que los 20 catedráticos y 12 agregados darian lecciones á prudencia sobre las materias de las facultades (id. 18).

No habria mas grados que de bachiller y doctor. Los doctores podrian ejercer la medicina y cirujía en todo el reino (id. 27, 28 y 29).

En los colegios se enseñaria la *cirujía menor*, que constituiría una sola facultad, denominada *Práctica del arte de curar* (idem 30), la cual, sin embargo, abarcaria las asignaturas siguientes, esplicadas en cinco cursos.

Anatomía descriptiva.
Fisiología.
Higiene.
Terapéutica.
Materia médica.
Arte de recetar.
Anatomía quirúrgica.
Patologia id.
Clínica id.
Vendajes id.
Patologia médica.
Obstetricia.
Clínica de partos.
Patologia general.
Medicina legal.
Clínica médica (Arts. 31 y 32).

En los colegios habria tambien *escuela práctica* (id. 41).

En esta carrera no se conferiría mas grado que el de *práctico en el arte de curar*, al fin de la carrera (id. 46). Con él podria el *práctico* ejercer la *cirujía menor y la obstetricia* en todo el reino; y la medicina y cirujía en los pueblos en que no hubiese licenciados ó doctores de estas facultades (id. 48).

Este plan cedió bien pronto al plan general universitario de 29 de setiembre de 1845, dando en este por sentado que aquel habia ofrecido considerables inconvenientes en la

práctica, señaladamente por el escesivo número de profesores y en lo relativo á las *escuelas prácticas*. Segun él, el estudio de la facultad reunida de medicina y cirujía se haria solo en las universidades; y con el título de licenciado que se restablecia, podrian los que le obtuviesen ejercer aquellas facultades en todo el reino (Arts. 1.°, 22, 23 y 25). Un reglamento determinaria las condiciones, bajo las que podria autorizarse la flebotomía y *cirujía menor*, ó *ministrante*, á los practicantes de los hospitales (id. 27).

Estas mismas determinaciones repitió el plan subsiguiente universitario de 8 de julio de 1847 (art. 1.°, 14, 15, 16 y 17).

El mismo estado de cosas en cuanto á *facultad reunida, flebotomianos y cirujanos ministrantes*, se conservó en el plan general universitario de 31 de agosto de 1850 (Artículos 1, 9, 20, 21 y 27). Además se crearon médicos cirujanos de *segunda clase*, por ser sus estudios mas elementales, especialmente en lo teórico. El estudio se hacia en seis cursos. El título de médico de segunda clase autorizaba para ejercer la facultad en todo el reino y obtener cátedras de medicina y cirujía (id. 22, 24 y 25).

En 10 de diciembre, por último, de 1852 se publicó el reglamento para la aplicacion del plan anterior, y en el cual se ratificó la existencia de médicos de *segunda clase*, sin alterar ni mencionar lo demás.

Seria interminable el hacer mérito de las infinitas disposiciones particulares relativas á las materias de medicina y cirujía, y á las dudas á que, cada vez mas, han dado ocasion los planes y reformas sucesivas; pero que, por una parte, no alteran lo asentado en esta seccion sobre la carrera y enseñanza de la cirujía; y por otra, ó pertenecen mas principalmente á la MEDICINA, FARMACIA, COLEGIOS, etc., en cuyos artículos han de verse; ó á las clases de cirujanos, grados, títulos y deberes de aquellos, y han de verse en las secciones subsiguientes.

SECCION II.

DIVERSAS CLASES DE CIRUJANOS.

En la presente seccion se pone mas de relieve lo que hemos dicho en la anterior sobre la division multiforme de la ciencia de curar, que en suma es única. Allí hemos insinuado nuestro juicio sobre las causas de esa division, que no siempre procede precisamente de error ó desacierto; sino de una insuperable necesidad en la esfera de gobierno. Verdad es que en este punto no siempre van de acuerdo con las nuestras, las teorías del gobierno supremo; pero tambien lo es que tampoco estas lo están entre sí. Con el mas loable empeño, aspirando el gobierno español á la mayor perfeccion de la ciencia en el *plan de estudios médicos de* 1843, se decide, no ya contra la division acostumbrada de *medicina* y *cirujía*; sino contra las subdivisiones de esta, rechazando en su preámbulo hasta la necesidad de esta por causa de lo reducido y pobre de infinitas poblaciones, suponiendo por el contrario que la desigualdad de clase y de fortuna entre estas y las de superior órden son superables á la accion del gobierno. «Ningun gobierno de Europa, dice, *se ha atrevido á resolver* este problema, sin duda porque hasta ahora no ha habido ninguna administracion, que fomentando la riqueza en las pequeñas poblaciones, igualmente que en las grandes, las haya puesto en disposicion de *procurarse un facultativo de primer órden.*» Ciertamente que el conseguirlo era vencer, no una dificultad, sino un imposible.

En cambio, abundando en los mismos deseos el gobierno central, que preparó la reunion de facultades y *plan de* 1845 por el reglamento enunciado de 16 de junio de 1827, decia, asi bien en su preámbulo. «Y convencido además de que es *imposible* que los *pequeños pueblos y aldeas* puedan mantener *un médico-cirujano*, ni aun un *médico puro*, y que por tanto se hace necesario haya *otra clase de facultativos*, etc...»

Esta será siempre la verdad práctica; mientras no puede dudarse que seria mas provechoso el que la última aldea pudiera sostener un facultativo de primer órden, y que este quisiera resignarse á vivir en ella. En la seccion anterior, dejamos indicado ya nuestro juicio, asi sobre la cuestion científica, como en la cuestion de go-

bierno. Nuestra legislacion espresa además la subdivision de la ciencia por infinitas y estrañas denominaciones facultativas, de que ya en su mayor parte hemos hecho mérito. En la presente seccion nos ceñiremos á las que puedan ser todavía alguna vez cuestion de derecho, y reputamos en ese caso aquellas denominaciones, que aunque esclusivas y opuestas unas á otras, y procedentes hasta de legislaciones antiquísimas, han venido coexistiendo hasta nuestros dias, ya por haberse renovado dichas legislaciones, como lo fueron muchas de las antiguas leyes por la promulgacion de la Novísima Recopilacion en 1805, ya porque en las leyes y disposiciones de tiempos posteriores se han venido respetando justamente los derechos adquiridos. Hé aquí, pues, las denominaciones que pueden hallarse en dicho caso por tener su fundamento en la legislacion recopilada ó disposiciones posteriores.

Cirujanos prácticos.
Cirujanos latinos.
Cirujanos romancistas.
Cirujanos-médicos.
Cirujanos puros y mixtos.
Cirujanos-sangradores.
Cirujanos ministrantes.
Prácticos en el arte de curar.
Cirujanos de 1.ª clase.
Id. de 2.ª
Id. de 3.ª
Id. de 4.ª
Cirujanos comadrones.

Cirujanos prácticos. Esta es sin duda la denominacion mas antigua, como que por la naturaleza de las cosas debió preexistir al establecimiento de toda escuela teórica formal. Eran facultativos meramente *prácticos*, los que se formaban al lado de otros *físicos*, cirujanos, *maestros de las llagas*, etc., que á su vez se habian formado como ellos. Otros hacian un estudio práctico, señaladamente en tiempos posteriores, en los hospitales. Hablan de ellos nuestras leyes mas antiguas, y pueden verse sobre el particular las indicaciones consignadas en la seccion anterior. Allí vemos que segun las antiguas leyes, señaladamente las del Fuero Real, el medio legal ordinario de formarse los cirujanos y físicos, era el aprendizaje privado con otros físicos ó cirujanos, cuya certificacion daba aptitud legal y facultativa; y el nombramiento del alcalde con testimonio del concejo, título y distrito para ejercer la profesion. Mas tarde las leyes dieron forma á este género de estudio, fijando el número de años de práctica en cuatro, y exigiendo ya hubiera de ser en hospitales, ó cerca de profesores acreditados, y terminando con exámen de idoneidad. Todavía se viene hablando de esta clase en los planes modernos universitarios; clase que no ha de confundirse, sin embargo, con la mas adelante enunciada de *prácticos en el arte de curar*. Véanse la ley 1.ª, tít. 16, lib. 4.º del Fuero Real: leyes 2.ª y 5.ª, art. 4.º, tít. 10, lib. 8.º, Nov. Recop.: Plan de estudios de 8 de julio de 1847, artículo 17: id. de 28 de agosto de 1850, artículo 27.

Cirujanos latinos. Esta clase revela ya distinta organizacion administrativa y académica. Digéronse *latinos* en oposicion á *romancistas*, por cuanto segun los antiguos planes universitarios, y leyes posteriores, al estudio teórico de la cirujía, debia preceder como preparacion en aquellos, el de la *latinidad*, y el grado de *bachiller* en artes. El cirujano *latino* fué el cirujano por antonomasia, ó de órden superior, hasta la reunion de facultades, ó creacion de la clase de *cirujanos-médicos*, con la creccion de los colegios de Cádiz, Barcelona, Madrid, Búrgos y Santiago á fines del último siglo.

Tales fueron los primitivos *cirujanos latinos*, puramente tales. Despues se llamaron tambien cirujanos *latinos* los *cirujanos-médicos*, formados en estos colegios, y posteriormente aun otros; pero constituyendo todos, menos los primitivos, clase especial. Véanse las subdivisiones sucesivas. Véanse además las leyes 4.ª y 6.ª, lib. 8.º, tít. 10 Nov. Recopilacion: leyes 5.ª, 6.ª, 8.ª, y 10, tít. 12 de dicho libro 8.º, por las cuales se declara á los cirujanos *latinos* de colegios iguales en categoría á los médicos: el título de cirujano latino equivalente en honor al de abogado y á los grados mayores universitarios: se les

dá facultad para ejercer su profesion en todo el reino, y preferencia, en igualdad de circunstancias con los romancistas, para las plazas de cirujía de Casa Real, hospitales, y establecimientos públicos, y del ejército y armada: y se declara, en fin, su superioridad de presidencia y precedencia sobre los romancistas. Véanse asimismo, y á mayor abundamiento las ordenanzas generales de los colegios de cirujía de 1787 y 1804.

Cirujanos romancistas. Los cirujanos romancistas, fueron realmente una transformacion ventajosa de los *cirujanos prácticos.* Por pragmática de 1603 se ordenó hubiesen de probar ante el *protomedicato* cinco años de práctica, tres en hospitales, y los dos restantes con médico ó cirujano. El título que recibian les autorizaba á ejercer su arte en todo el reino (Ley 7, tít. 10, lib. 8.°, Novísima Recop.); salva, sin embargo, la preferencia concedida, como hemos visto antes, á los *cirujanos latinos* y *cirujanos-médicos.*

La carrera de *cirujanos romancistas* terminó por la creacion de la de *cirujanos sangradores.* Véase el art. 8.°, cap. 21 del reglamento antes citado de 1827 para los estudios de cirujía. Nótese lo consignado en la subdivision anterior, sobre preferencia entre cirujanos latinos y romancistas.

Además del plan de estudios, ya citado, de 1807, véanse sobre cirujanos romancistas las leyes 3, art. 6: 11, art. 7, y 12, artículos 8.° y 13, tít. 12, lib. 8.°, Nov. Recop.

Cirujanos médicos. De estos es preciso reconocer, segun la legislacion, una clase solamente; segun la verdad y naturaleza de las cosas, tres por lo menos. La clase única seria la de los cirujanos latinos de los colegios de Cádiz, Barcelona, Madrid, Búrgos y Santiago, y demás que se creasen y organizasen bajo el mismo pié y enseñanza que aquellos, como espresamente lo establecian sus ordenanzas. La enseñanza superior en ellos era, segun el testo literal de aquellas, la *cirujía médica,* y los profesores por lo tanto eran en el rigor técnico de la ley y de la ciencia cirujano-médico.

Las clases equivalentes por la verdad y fuerza de las cosas, son todas aquellas cuyos profesores hacen para una sola profesion el doble estudio de medicina y cirujía, y á quienes, por tanto, ó desde luego autorizan las leyes para ejercer la facultad reunida; ó solo en ocasiones, como á falta de médico, y en los casos mixtos. En el primer caso se encuentran los *médicos-cirujanos,* formados segun los planes y reglamentos posteriores al Plan general universitario de 1824; y en el segundo los antiguos cirujanos latinos, y otras clases inferiores de cirujanos. Así, por ejemplo, en el siglo XVI, el médico, que además de haber cursado cuatro años necesarios para medicina, estudiaba uno de cirujía, y si cirujano tres de medicina, era autorizado para ejercer ambas facultades. (Leyes 5 y 6, tít. 10, lib. 8, Nov. Recop.)

Cirujanos puros y mistos. A estas denominaciones, y á su correlativa de *médicos puros,* dió orígen principalmente al ereccion de los *Reales colegios* de cirujía médica, y el reglamento científico é interior de los mismos de 16 de junio de 1827, en virtud del cual, aquellos se denominaron de *medicina y cirujía.* Vinieron despues los *médicos-cirujanos* por el *plan de estudios médicos de* 1843, ya citado y de que aun hablaremos, y los de los planes posteriores. Reunidas las facultades de medicina y cirujía, resultaba de aquí el contraste necesario de *médicos puros* ó meramente tales, como lo eran los médicos universitarios: *cirujanos puros,* en cuyo caso se hallaban los meros *cirujanos latinos,* y aun por estension los *romancistas*: y *cirujanos mixtos,* como resultaban serlo los *cirujanos-médicos* y los médicos-cirujanos. Lo relativo, pues, á esta clase ha de verse en sus subdivisiones, ó artículos particulares.

Cirujanos sangradores. Esta clase fué creada por el mencionado reglamento de 1827. Es realmente la de cirujanos romancistas mejorada. Esta carrera no necesita mas preparacion que el conocimiento de las primeras letras, y elementos de aritmética y gramática castellana, consistiendo la misma en tres años de colegio, y tres de práctica con cirujano-sangrador ó cirujano mero, antes ó despues de aquellos. El título de revá-

lida contiene la autorizacion para ejercer en todo el reino, salvas por supuesto las preferencias concedidas por la ley á los facultativos de superior categoría, como los cirujanos latinos, y los médicos-cirujanos. La misma espresa, así como el art. 9.°, cap. 24 de dicho reglamento, los puntos á que se ciñe el ejercicio de la referida facultad.

Aunque la sangría es realmente parte integrante de la medicina, alguna vez se la ha separado, creando así la profesion de mero sangrador ó flebotomiano; atendiendo sin duda á que no faltase este servicio en aldeas é infinitos pueblos pequeños que no podian sostener cirujano. Erigida en profesion la mera flebotomía, algunos cirujanos querian añadir este título al suyo principal, y eran entonces *cirujanos-sangradores*; lo eran por la fuerza de las cosas; pero no por tecnología rigorosa y exigencia de la ley, ni todos; como la clase creada por el reglamento de 1827.

Prácticos en el arte de curar. No han de confundirse estos prácticos con los que se espresan en la primera subdivision. Aquellos, como hemos visto, son meramente prácticos; estos teórico-prácticos, y aun cirujano-médicos. Esta clase de *prácticos en el arte de curar* fué creada por el *plan de estudios médicos de* 1843. En la seccion 1.ª quedan espresadas las 16 asignaturas, que además de filosofía, gramática castellana y elementos de matemáticas, debian estudiar en cuatro cursos los *prácticos en el arte de curar*, con cuyo título podian ejercercer la *cirujía menor* en todo el reino; y la cirujía y medicina en toda su estension en donde no hubiese doctores ó licenciados en medicina. Los prácticos en el arte de curar se formaban en los colegios creados por el mencionado plan de 1843, que no han de confundirse con los antiguos de Cádiz, Barcelona, San Cárlos de Madrid, etc. Véanse los arts. 31, 32 y 44 al 48 del Plan citado de 1843.

Cirujanos ministrantes. Dióse este nombre á los practicantes de los colegios antiguos de San Cárlos, Barcelana, etc., á quienes llegaba á darse título para ejercer la *cirujía menor* y la sangría; prácticos que no han de confundirse siempre con los antiguos de que habla la primera subdivision, ni con los *prácticos en el arte de curar* de que habla la precedente. Véase el art. 17 del Plan universitario de 1845, y el 27 del de 1850: y la real órden de 13 de diciembre de 1851, prorogando á la Junta de medicina y cirujía la facultad de conceder á los alumnos para cirujanos *ministrantes* el estudio de la *flebotomía*.

Cirujanos de 1.ª, 2.ª, 3.ª *y* 4.ª *clase.* Estas clasificaciones, introducidas para asimilar y simplificar las multiplicadas especies de cirujanos; aumentaron la confusion, sin haber resuelto cuestion alguna, ni es posible, mientras de una vez para siempre no se fije lo que es, y lo que siempre ha de ser, la carrera de cirujía. No queremos hacernos cargo de si esto es posible ó no; pero mientras veamos que, ora por la necesidad; ora por el prurito de innovar, añadiendo algo cada corporacion facultativa, cada gobierno, cada legislador: mientras compelan á la variacion lo infinito de las necesidades sociales: mientras el progreso ó retraso de la ciencia, como el de la civilizacion, abran nuevas vías, obstruyan las conocidas, arrastren á la perfeccion, á la novacion, ó al error: mientras por algunas de estas causas ó por todas juntas, y aun otras, veamos sucederse todos los dias los planes de estudios; crearse y abolirse las carreras públicas; aumentar, disminuir, ó anular las ventajas ó atenciones de ellas; clasificaciones, como la que es objeto de esta subdivision, son temporales, ó meramente una fórmula mas, que á cada paso queda sin aplicacion. Así, antes de la creacion de los colegios de cirujía-médica al fin del siglo anterior, eran por la fuerza de las cosas cirujanos de 1.ª clase los *latinos*, de 2.ª los *romancistas*, de 3.ª los meros *prácticos*. Creados los colegios, y con ellos la combinacion científica de la *cirujía médica*, eran sin duda cirujanos de primer órden los nuevos profesores *cirujano-médicos*, y de 2.°, 3.° y 4.° las tres clases antiguas, que por la fuerza de las cosas perdian un lugar en su clasificacion. Igual trasformacion irán sufriendo las categorías de cirujanos, si recorremos los

Lorenzo Arrazola

multiplicados planes posteriores. Como quiera que sea, en 1836, los *cirujanos-sangradores* del Colegio de San Cárlos de Madrid, cuya clase habia sido creada por el reglamento de 1827, ocurrió á S. M. suplicando, entre otras cosas, que en vez de dichos títulos, se les diese meramente el de *cirujanos de colegio*, suprimiendo la adicion de *sangrador*. Con vista de todo, por real resolucion de 31 de marzo se ordenó, que hasta la reforma definitiva de los reglamentos del arte de curar «para distinguir las diversas categorías de cirujanos, se adopten las denominaciones siguientes.... de 1.ª clase los denominados en la actualidad *cirujano-médicos*: de 2.ª, los conocidos con el nombre de *cirujanos de colegio*: de 3.ª, los *cirujano-sangradores*; y de 4.ª, todos los demás de inferior categoría, no comprendidos en las tres clases anteriores.»

Si se consideran las nuevas clases de profesores quirúrgicos, creadas despues de la fecha de esta real resolucion, y las modificaciones de las antiguas clases, se tendrá la demostracion de cuanto hemos indicado poco antes.

Otras declaraciones posteriores lo demostrarán tambien. En 1844, los cirujanos de 3.ª clase residentes en la corte, solicitaron de S. M. que todas las clases de cirujanos se redujeran á una sola, con la simple denominacion de *cirujanos*. Por real órden de 26 de julio se declaró, entre otras cosas, que los cirujanos de 3.ª clase se reputasen de 2.ª Los facultativos de ciencias médicas reclamaron contra esta declaracion. Otra de 11 de octubre del mismo año la modificó restrictivamente, lo cual ocasionó nuevas reclamaciones de los cirujanos de 3.ª clase, reclamaciones que dieron lugar á otra declaracion de 22 de febrero de 1845 sobre consignas y nuevos estudios para pasar de 3.ª clase á 2.ª

La clasificacion indicada produjo aun otras y otras resoluciones sobre mejora de clase ó de carrera, y por tanto de los estudios y formalidades para ello; en razon de lo cual, véanse asi mismo la real órden de 25 de noviembre de 1846, sobre pase de los cirujanos de 2.ª clase á la carrera de medicina.

Real órden de 24 de abril de 1847, reproduciendo la anterior.

Real órden de 31 de mayo de id., esplicando la de 26 de julio de 1844.

Otra de 18 de diciembre de id., declarando que los practicantes en los hospitales del ejército durante la guerra puedan obtener el título de cirujanos de cuarta clase.

Otra de 16 de setiembre de 1848 esplicando la de 25 de noviembre de 1846.

Id. de 13 de julio de 1849 con el propio objeto.

Id. de 25 de setiembre de id., aclaratoria de las de 11 de octubre de 1844 y 22 de febrero de 1845.

Id. de 14 de junio de 1850, abonando como de curso á los practicantes que siguieron al ejército en la espedicion de Italia el tiempo empleado en dicho ejercicio.

Id. de 20 de noviembre de id., sobre abono de tiempo á los cursantes para cirujía de segunda clase á quienes haya cabido la suerte de soldados.

Id. de 10 de mayo de 1853, sobre los estudios que han de hacer los cirujanos de segunda clase para pasar á la de médicos de segunda clase.

Id. de 29 de julio de 1846, para que á los médicos de segunda clase, no se les impida el ejercicio de la cirujía, teniendo presentes los artículos 25 y 103 del reglamento de 1827.

Id. id., para que los que hubieren obtenido título de médico y de licenciado en cirujía puedan conmutarlos por el de licenciado en ambas facultades.

Cirujanos comadrones. Los autorizados para ejercer la *obstetricia*. Realmente la obstetricia, como la flebotomía, son partes esenciales de la cirujía plena. Mas como las necesidades públicas han dado lugar á la llamada *cirujía menor*, la obstetricia no forma parte de esta. Asi alguna vez forma estudio separado, lo que es parte esencial ó meramente integrante de una de las clasificaciones de cirujanos. Asi, por ejemplo, los llamados *prácticos en el arte de curar*, tenian que estudiar la *cirujía menor*, la *medicina elemental*, la *flebotomía* y la *obstetri-*

cia. El cirujano, pues, que ha hecho el estudio de esta, y sufriendo exámen especial, y con cuyo título por tanto se le autoriza ó para ejercer la cirujía en toda su amplitud científica, ó en particular para ejercer la *obstetricia*, esos son cirujanos *comadrones*. Véanse la subdivision de *prácticos en el arte de curar*, y la ley 10, tít. 10, lib. 8 Novísima Recopilacion, arts. 1.° y 3.°

SECCION III.

DEBERES Y PRERROGATIVAS DE LOS CIRUJANOS.

No reina en esto menor confusion é incoherencia, que en cuanto á las diversas clases de cirujanos y estudios de la facultad. Ni puede ser otra cosa en una legislacion que abarca tantos siglos, pues que no podemos prescindir aun de las leyes mas remotas, consideradas como doctrina y bajo el punto de vista de la legislacion comparada.

Aun debemos notar otra cosa. Igualadas en honor, como facultades, la medicina y la cirujía, y con ellas la farmacia, una gran parte de las leyes del caso hablan simultáneamente de las tres facultades, ó por lo menos de la medicina y cirujía. Ninguna dificultad ofrece el reproducir en los artículos particulares de las mismas las propias leyes y disposiciones que les son comunes; pero siendo esta una repeticion, que puede evitarse, lo verificaremos así, consignando aquí la disposicion que sea comun, y citándola luego en referencia al hablar de la medicina y de la farmacia.

Deberes de los cirujanos. Hemos dicho en la primera seccion, que ya la mas antigua de nuestras colecciones legales, el Fuero Juzgo, hablaba de los cirujanos; aunque no de la cirujía; y hablaba por cierto en términos un tanto severos. El título 1.° del libro 11 está consagrado á esta materia. Segun las leyes del mismo «ningun físico non deve sangrar ni melecinar mujer libre, si non estubiere hy su padre, ó su madre delantre, ó sus fiios, ó sus hermanos, ó sus tios, ó otros sus parientes; fueras ende, si la dolor le acoitare mucho, así que non puedan atender á aquellos sus parientes, y estonce deven estar los vecinos que son omes buenos, ó sus siervos, ó sus siervas dela. E si dotra manera la melecinase, peche diez moravedís á sus parientes della ó á su marido. Ca mucho aina podrie avenir que so tal corazon podrie avenir algun enganno de maldade» (Ley 1.ª, id. id.)

Ningun *físico* debia visitar al encarcelado sin la presencia del alcaide ó guardador. (Ley 2.ª, id. id.)

Los físicos, examinada la enfermedad y vistas las llagas, podian ajustar su asistencia, y exigir caucion para su pago (Ley 3.ª, idem, id.). Si el ajuste fuere á sanacion, no podian exigir nada, si el enfermo moria. (Ley 4.ª)

Si el físico sangrare á persona libre, y á esta viniere mal de la sangría, pagaria aquel 150 sueldos por indemnizacion: muriendo el enfermo, el físico seria entregado á los parientes de este para que hicieran de él lo que quisieran: si el enfermo era siervo y se empeoraba ó moria por la causa dicha, el físico estaba obligado á entregar otro tal siervo al señor de aquel. (Ley 6.ª)

El tít. 16, lib. 4.° del Fuero Real, lleva por epígrafe *De los físicos é de los maestros de las llagas*.

Ningun *físico, ni maestro de las llagas* podia ejercer sin ser antes aprobado por el físico ó físicos de la villa en que hubiere de hacerlo, y permiso del alcalde con testimonial del consejo. No podian sajar, ni estraer hueso, dar cauterio, sangrar ni medicinar de cualquier otro modo á ninguna mujer sin mandato de su marido, padre, madre, hermano, hijo ú otro pariente cercano, pena de 10 maravedís al mas propinquo en cada caso. El que ejercia sin título, y sin autorizacion pagaria 500 sueldos al Rey. Si mataba ó lisiaba á hombre ó mujer, quedaba con su persona y bienes á merced del Monarca, no teniendo hijos; y teniéndolos, solo con el cuerpo (Ley 1.ª, id. id.)

Si ajustaba la curativa y el enfermo moria; ó si ajustaba sanarlo á cierto tiempo; y el plazo vencia sin que el enfermo hubiese sanado, perdia el derecho á cobrar. (Ley 2.ª id.)

Los *físicos* del Rey, que á sabiendas le irrogasen daño por medios curativos, cometian traicion, é incurrian en la pena de los traidores con alevosía. (Ley 10, tít. 9, Part. 2).

Los *físicos* y los *cirujanos*, que ocasionaren daño en la curativa de particulares, llevando precio por ella, incurririan en la pena correspondiente, segun que causasen el daño por malicia ó por ignorancia (Ley 10, título 8, Part. 5). En el primer caso, si el enfermo moria, el facultativo incurria en pena de muerte: en el segundo, si el enfermo era siervo, debian dar otro tal á su señor (Ley 6, tit. 8, Part. 7).

Si el físico diere ó vendiere yerbas, ó venenos para matar á alguno, incurria en pena de muerte, aunque el comprador no consiguiese su dañado intento. (Ley 7, id. id.)

El físico ó cirujano, que siendo depositario de esclavos ó animales, les aplicasen medicamentos ó practicasen operaciones facultativas, por las que recibiesen perjuicio ó muriesen, quedaban obligados á indemnizar al dueño, y lo propio si el daño proviniese por abandonar la curativa de que se hubiesen hecho cargo. Si el daño recayere sobre persona libre, ó esta muriere por culpa del facultativo, seria este castigado con pena arbitraria. (Ley 9, tít. 15, id.)

El físico, cirujano ó farmacéutico, que, sin licencia estableciere tienda de drogas ó especerías, ó usase del conjuro ó del oficio de *ensalmador*, serian castigados con la multa de 3,000 mrs., sin perjuicio de otras corporales (Ley 1, tít. 10, lib. 8, Novísima Recopilacion).

En las instrucciones y ordenanzas de corregidores debia consignarse la obligacion espresa de inquirir y castigar el abuso de ejercer sin título la medicina ó cirujía (Ley 6, id. id.).

Los médicos y cirujanos « guarden lo dispuesto por derecho canónico en advertir á los enfermos que se confiesen, especialmente en las enfermedades agudas, en las cuales el médico y el cirujano que las curase, sean obligados, á lo menos en la segunda visita, de amonestar al doliente que se confiese, so pena de 10,000 mrs. para la nuestra cámara y fisco por cada vez que lo dejaren de hacer (Ley 1, tít. 9, id.).

Los médicos, cirujanos y farmacéuticos que tuvieren hijos ó yernos boticarios, no espidan recetas para las boticas de estos. (Ley 2, id. id.)

Los médicos y cirujanos están obligados á presentar sus títulos á la justicia del pueblo en que hubieren de ejercer (Ley 3, id. id.: cap. 29 del Reglamento citado de 1827. Véase mas adelante la ordenanza de 1804.

El médico ó cirujano que curaba sin carta de exámen, incurria en la pena y multa de 6,000 mrs. (Ley 4, id. id.): 12,000 mrs. por la segunda vez; y por la tercera, la misma multa y dos años de destierro de la corte, y á cinco leguas de la ciudad, villa ó lugar en que cometieren el esceso. En las mismas penas incurrian los que curaban por falsas cartas. El médico ó cirujano que sin licencia confeccionare y espendiere medicamentos, en vez de recetar para botica autorizada, incurria por la primera vez en la pena de 10,000 mrs.; 20,000 por la segunda; y la misma con dos años de destierro de la corte, ó á cinco leguas del pueblo en que cometieren el abuso, por la tercera. (Ley 6, id. id.).

Los médicos, cirujanos y boticarios que ejercieren fuera de la corte, al regresar ó venir á ella, debian presentarse al protomedicato para ser nuevamente examinados; pena de 30,000 mrs. por la omision. (Ley 7, idem id.)

Los médicos puros no ejerzan la cirujía, ni los cirujanos puros la medicina, sino en los casos *mistos*: los cirujanos romancistas, en ningun caso (Leyes 5.ª y 7.ª, tit. 12, libro 8.°, Nov. Recop.). En la actualidad, todo profesor debe sacar título: en este deben espresarse sus funciones y calidad facultativa, y á ellos se atendrán las justicias y autoridades para perseguir los abusos.

Las ordenanzas generales para el régimen de los colegios de cirujía de 6 de mayo de 1804 reformaron en gran parte la legislacion anterior sobre penas y prerogativas, con sagrando á este objeto los capítulos 16 y 18. Segun sus disposiciones, todo cirujano de-

beria obtener título para ejercer, y por tanto, ninguna justicia ni autoridad podria admitirlos ni reconocerlos sin exhibirlo (cap. 16). Los cirujanos estranjeros, para poder ejercer, deben revalidar su título (art. 5, id.: ley 11, tít. 12, lib. 8.° Nov. Recop.).

Hé aquí los artículos principales del citado capítulo 18 (Ley 12, tít. y lib. citados de la Nov. Recop.).

«Artículo 1.° No siendo justo que persona alguna, de cualquier clase ó profesion que sea, ejerza la cirujia, sin que con documento legítimo acredite tener la instruccion é idoneidad necesarias; mando, que en ninguno de los pueblos de mis dominios se permita el ejercicio de esta facultad á quien no presente ante las justicias respectivas el título correspondiente, *que deberá registrarse* en los libros de ayuntamiento, como está mandado por Real cédula de 21 de noviembre de 1757 despachada por mi Real junta superior gubernativa de cirujía (1).

Art. 3.° En las leyes del reino y en varios reales decretos están prescritas las penas que deben imponer las justicias á los que sin el competente título ejercieren la cirujía, y señaladamente en mi real cédula espedida á consulta del mi Consejo en 12 de mayo de 1797 (ley 4). Conforme, pues, á lo dispuesto en ella mando, que los transgresores en esta parte sufran por la primera vez la multa de cincuenta ducados; doble por la segunda, con destierro del pueblo de su residencia, de Madrid y sitios reales, diez leguas en contorno; y que si incurrieren tercera vez, se les exija la multa de doscientos ducados, destinándolos á uno de los presidios de Africa ó América.

Art. 4.° El interés de la salud pública, la equidad y el buen órden exijen, que los intrusos en la cirujía sean castigados ejecutivamente para evitar los gravísimos daños que causan á la humanidad los que ejercen tan importante facultad sin la instruccion y aprobacion competentes, y el perjuicio que irrogan á los legítimos profesores, usurpándoles su privativo derecho: en consecuencia quiero y mando, que cuando las justicias tuvieren noticia, ya de oficio ó ya á requerimiento de parte, de que alguna persona ejerce la cirujía sin tener el título necesario, la aprehendan, é inmediatamente, cerciorándose de los hechos sin sujetarse á prueba ó forma de juicio, por ser comunmente semejantes escesos de notoriedad pública, impongan al transgresor ó transgresores las penas establecidas en el artículo anterior.

Art. 5.° Si las justicias (aunque no es de esperar de su celo por el bien público) olvidadas de sus mas sagradas obligaciones, permitiesen ó disimulasen estos escesos, los querellantes darán parte á la Junta superior gubernativa, la cual en consecuencia espedirá (como deberá ejecutarlo de oficio siempre que tuviere noticia de algun intruso) á las mismas justicias los exhortos necesarios para el cumplimiento de lo que queda prevenido; pero en el caso de que esta diligencia no produjese el efecto que corresponde, me lo hará presente por mi secretario de Estado y del despacho de Gracia y Justicia, para que en su vista resuelva yo, que se impongan las penas convenientes, asi á los intrusos, como á las justicias que los disimulasen ó protegiesen.

Art. 6.° Para que mis reales benéficas intenciones tengan todo el efecto que conviene á la salud de mis pueblos, encargo al mi Consejo cuide con el mayor esmero y vigilancia que se cumpla y ejecute cuanto dejo dispuesto en esta parte; dando las órdenes mas eficaces y terminantes para la imposicion y ejecucion de las penas que quedan espresadas, para cortar de raiz los contínuos males que acarrea la tolerancia de los curanderos é intrusos en el ejercicio de la cirujía.

Art. 7.° Asi como no deben establecerse en los pueblos, para ejercer esta facultad, sino los que tuvieren el título correspondien-

(1) Por la citada Real cédula se mandó: que los que ejerciesen las profesiones de médico, cirujano y boticario, sin el exámen prevenido en las leyes del reino, incurran por la primera vez en la pena de 500 ducados, y destierro del lugar de su residencia y diez leguas en contorno; por la segunda, en la de 2,000 ducados y destierro de la provincia; y por la tercera, en la de otros 2,000 ducados, y seis años de presidio de Africa, con aplicacion de las penas pecuniarias por terceras partes á la Cámara, proto-medicato y denunciador, y que las justicias que los admitieren en los pueblos sin dicho requisito, sufran iguales penas. (Nota 6 á dicho título).

te, tampoco podrán elegirlos para sus cirujanos, á los que careciesen de esta indispensable circunstancia, los hospitales, cabildos, ayuntamientos ni otros cualesquiera cuerpos que tuviesen plazas asalariadas de esta clase; y en el caso (aunque no es de esperar) que lo hiciesen, quedando esta mi real determinacion, anulo y derogo desde ahora tales nombramientos; y mando á mi Real Junta superior gubernativa, que me lo represente, para que yo disponga la separacion de los sugetos nombrados, y tome las demás providencias conducentes á evitar en lo sucesivo semejantes abusos, contrarios á las leyes y á la salud de mis vasallos. Y *mando*, que las mismas justicias, cada una en su respectivo distrito, *cuando se verifique el fallecimiento* de alguna de las personas que tuvieren cualquiera de los títulos de reválida que se espresan en esta ordenanza, *los recoja* inmediatamente, y *los remita* á la Junta superior gubernativa para su *cancelacion*, á fin de precaver el abuso punible que muchos han hecho de títulos espedidos á otros sugetos, que se los han adoptado por medios siempre reprobables; castigando ejecutivamente á los que se les retuvieren con las penas establecidas en el art. 3.°»

Tal era la legislacion general y especial sobre los deberes y penalidad por los abusos de los cirujanos hasta la publicacion del Código penal vigente. Despues de éste, el estado de la legislacion es en el particular no poco perplejo. El Código es en este punto diminuto, como resulta de su letra. Podria en un caso suplirse, aplicando subsidiariamente la legislacion anterior; pero precisamente él derogó en su último artículo toda otra legislacion penal. ¿Será aplicable esta determinacion á cuantas leyes y disposiciones, quedan citadas en esta seccion? De ahí resultará que infinidad de abusos habrán de quedar impunes por falta de ley. Pero mencionaremos las disposiciones del Código, y diremos luego una palabra mas sobre esta cuestion. Hé aqui estas disposiciones.

Art. 232. El facultativo que librare certificacion falsa de enfermedad ó lesion con el fin de eximir á una persona de algun servicio público, será castigado con las penas de prision correccional y multa de 20 á 200 duros.

Art. 251. El que se fingiere autoridad, empleado público ó profesor de una facultad que requiera título, y ejerciere actos propios de dicha profesion ó cargos, será castigado, en el primer caso, con la pena de prision menor; en el segundo y tercero con la pena de prision correccional.

Art. 254. El que hallándose autorizado para el tráfico de sustancias que puedan ser nocivas á la salud, ó productos químicos de la clase espresada en el artículo anterior, (los que puedan causar grandes estragos) los despachare ó suministrare, sin cumplir con las formalidades prescritas en los reglamentos respectivos, será castigado con las penas de arresto mayor y multa de 10 á 100 duros.

Art. 282. El empleado público que revelare los secretos de que tenga conocimiento, por razon de su oficio, será castigado con las penas de suspension y multa de 10 á 100 duros.

Si de la revelacion resultare grave daño para la causa pública, las penas serán inhabilitacion absoluta perpétua, prision mayor y multa de 50 á 500 duros.

Art. 284. El empleado público, que sabiendo por razon de su cargo los secretos de un particular, los descubriere, incurrirá en las penas de suspension, arresto mayor y multa de 10 á 100 duros.

En estas mismas penas incurrirán los que, ejerciendo algunas de las profesiones que requieren título, revelaren los secretos que por razon de ella se les hubieren confiado.

Art. 288. El empleado público que, requerido por la autoridad competente, no preste la debida cooperacion para la administracion de justicia ú otro servicio público, será penado con la suspension de oficio y multa de 10 á 100 duros.

Si de su omision resultare grave daño para la causa pública, ó á un tercero, las penas serán la de inhabilitacion perpétua especial, y multa de 20 á 200 duros.»

El tít. 8.°, lib. 2.° del Código, habla de los delitos de

Infidelidad en la custodia de presos.

Infidelidad en la custodia de documentos.
Violacion de secretos.
Resistencia á la autoridad ó sus ajentes.
Desobediencia á las mismas.
Denegacion de auxilio.
Abandono de destino.
Nombramientos ilegales.
Abusos contra particulares.
Usurpacion de atribuciones.
Cohecho.
Fraudes y exacciones ilegales, etc.

En una gran parte de los delitos comprendidos bajo estos epígrafes generales, usa el Código de la denominacion de *empleados*; en razon de lo que declara:

«Art. 331. «Para los efectos de este título se reputa empleado todo el que desempeña un cargo público, aunque no sea de Real nombramiento, ni reciba sueldo del Estado.»

Art. 337. El que de propósito causare un aborto será castigado: 1.° con la pena de reclusion temporal, si ejerciere violencia en la persona de la mujer embarazada: 2.° con la de prision mayor si, aunque no la ejerza, obrare sin consentimiento de la mujer: 3.° con la de prision menor, si la mujer lo consintiere.

340. El facultativo que abusando de su arte, causare el aborto ó cooperare á él, incurrirá respectivamente en su grado máximo en las penas señaladas en el art. 337.

Art. 392. La suposicion de parto y la sustitucion de un niño por otro, serán castigadas con las penas de presidio mayor y multa de 50 á 500 duros.

Las mismas penas se impondrán al que ocultare ó espusiere un hijo legítimo con ánimo de hacerle perder su estado civil.

Art. 393. El facultativo ó empleado público que abusando de su profesion ó cargo, cooperare á la ejecucion de algunos delitos, espresados en el artículo anterior, incurrirá en las penas del mismo, y además en la de inhabilitacion temporal especial.

Art. 483. Se castigará con la pena de arresto de cinco á quince dias, ó multa de 5 á 15 duros.....

4.° Los que ejercieren sin título actos de una profesion que lo exija.....,

10. A los facultativos que notando en una persona, ó en un cadáver señales de envenenamiento, ó de otro delito grave, no dieren parte á la autoridad oportunamente.

Art. 495. Incurrirá en la multa de medio á cuatro duros.....

1.° El que no diere los partes de defuncion, contraviniendo á la ley ó reglamento.

2.° El facultativo que no diere conocimiento á la autoridad, cuando por el ejercicio de su profesion entendiese haberse cometido un delito menos grave.»

Todavía sobre intervencion de facultativos en delitos comunes convendrá consultar en su caso las disposiciones del Código que hablan de la falsificacion de sellos públicos, y de la de documentos públicos y oficiales; de la estafa, alteracion de sentencias, etc.

Como se ve, el Código no comprende en toda su estension los delitos, y abusos de que hablan la vieja legislacion y las ordenanzas y reglamentos facultativos. Si no hubiera tratado de ellas absolutamente, apareciendo en el hecho que los reputaba objeto de leyes especiales, la cuestion estaba resuelta. El artículo 7.° del Código declara no son objeto del mismo, entre otros, «los delitos... que estuvieren penados por leyes especiales.» En consonancia con esta declaracion, se dice en el art. 506, quedar derogadas «todas las leyes penales *generales*... salvo las *relativas* á los delitos no sujetos á las disposiciones del mismo, con arreglo á lo prescrito en el art. 7.°» Pero el Código ha tratado de dichos delitos y abusos; y como no trata sino de delitos comunes, es preciso reconocer que los ha reputado de esta índole, y no propios de *leyes especiales*. Esta deduccion indeclinable, puede ser, sin embargo, la solucion de la dificultad y fundamento legal de la jurisprudencia. Los delitos de facultativos de que habla el Código serán reputados comunes; pero no los multiplicados abusos, desaciertos, y faltas facultativas, así bien, que no espresa, y que no pudiendo suponer que haya querido sancionar su impunidad, es lógico admitir que pueden y deben ser castigados por leyes especiales, pues que especiales son; y de todos modos pueden y habrán de ser reprimidos, penados, y corre-

gidos disciplinariamente. Así vemos, por ejemplo, que respecto del cohecho, ó prevaricacion de un facultativo en el reconocimiento de defectos que eximen del servicio militar, acaba de publicarse un reglamento especial, de entre cuyos artículos conducen á la cuestion los dos siguientes.

»Art. 13. Los facultativos que declarasen en los espedientes justificativos de aptitud ó de inutilidad para el servicio militar, y los que practiquen los reconocimientos de los mozos sorteados, quintos, suplentes, sustitutos y prófugos, serán responsables:

1.° De las faltas de observancia y de ejecucion de este reglamento en la parte que les pertenece.

2.° De la exactitud y *verdad* de los hechos de que declaren ó certifiquen.

Y 3.° De los juicios ó deducciones que hagan de los hechos observados ó reconocidos por ellos ó por otros que no estén fundados en los principios de la ciencia; pero no lo serán de los juicios ó deducciones legítimas que hagan de hechos observados ó reconocidos por otros y consignados en forma legal, sobre todo, si estos son tales, que puedan no manifestarse á su esploracion facultativa en el acto del reconocimiento, ni de la diferencia ó discordancia de sus respectivos diagnósticos y calificaciones, fundadas en los principios de la ciencia, cuando solo dependa del diferente modo de considerar la cuestion en los casos conocidamente difíciles ó controvertibles.

»Art. 14. Sin embargo de lo que se dispone en el artículo anterior, en ningun caso se procederá á hacer efectiva la responsabilidad de unos y otros facultativos, sin que en vista del correspondiente espediente de declaracion de aptitud ó de nulidad para el servicio militar, de los resultados de los demás medios de comprobacion que se crean convenientes, y de lo que espusieren en su descargo los profesores interesados, preceda el dictámen fundado y afirmativo de la Academia médico-quirúrgica del distrito, con respecto á los facultativos civiles, y *del director y junta superior* facultativa del cuerpo de sanidad militar, respecto de los oficiales del mismo.» (Reglamento de 10 de febrero publicado en 7 de marzo de 1855.)

Ultimamente á los cirujanos latinos está prohibido afeitar, ni tener tienda de barbería. (Leyes 3, arts. 1 y 12; art. 18, tít. 12, lib. 8, id. id.) A pesar de eso en los partidos se ajustan, tomando á su cargo la barbería, bien que servida por barbero.

Obligados los cirujanos, como los demás facultativos, á prestar auxilio y obediencia á las autoridades, cuando la reclamaren para la administracion de justicia, segun antes hemos visto, su principal intervencion es en las autópsias y en las causas criminales. Véase sobre este punto á Matheu, y *De re criminali*, y el formulario para la instruccion de causas criminales del licenciado D. Miguel Cayetano Sanz: y sobre la necesidad de prestar auxilio á los tribunales y autoridades, además de los artículos ya insertos, del Código penal, véanse las reales órdenes de 21 de junio de 1842 y 4 de agosto de 1852.

En los casos perentorios de heridas ó golpes *de mano airada*, socorrerán la primera urgencia, y darán conocimiento á la autoridad, absteniéndose entre tanto de ulterior procedimiento; y aun el socorro de *primera intencion* ha de estar muy justificado. (Nota 2.ª, tít. 11, lib. 8 Nov. Recop: Art. 495, Cód. penal.)

Prerogativas de los cirujanos. Aunque indicadas las principales en las secciones anteriores, creemos conducente resumirlas por conclusion del presente artículo.

Segun las leyes del Fuero Juzgo, ningun *físico* podia ser puesto en la cárcel «*magüer que non sepa conocido,*» salvo por homicidio. Para librarse de la prision por deudas, bastaba que diese fiador abonado. (Ley 8.ª, título 1.°, lib. 11.)

Los médicos, cirujanos y boticarios, gozaban de fuero criminal privilegiado ante el *proto-medicato* y *alcaldes examinadores mayores.* (ley 1.ª, tít. 10, lib. 8.°, Novísima Recopilacion); si bien despues debian y deben ser juzgados por la justicia ordinaria. (Ley 6.ª id. id., y siguientes, tit. 11, id.: 4.ª y 6.ª, tít. 12, id. id. y legislacion actual.

Por cédula de 24 de febrero de 1787 (ley

2.ª, tít. 12, lib. 8.º, Nov. Recop.) la facultad de cirujía del colegio de S. Cárlos y demás, es declarada de igual honor y categoría que las demás facultades mayores: los que hubieren hecho esta carrera, se titularán cirujanos *latinos*, y serán iguales en honor y preeminencias á los demás graduados en facultad mayor, cuyas prerogativas se hacen estensivas á todos los cirujanos latinos que se formen en los demás colegios que se fundaren sobre el mismo método y principios que el de San Cárlos de Madrid: y tendrian preferencia *absoluta* en las plazas del ejército y hospitales, y de los pueblos, villas y ciudades sobre los cirujanos romancistas; preferencia que como veremos se modificó despues.

Los mismo cirujanos adquirian el derecho de establecerse en cualquiera poblacion del reino, y ejercer libremente en ellos la cirujía en todas sus partes, inclusa la sangría: y volvió á repetirse su igualdad de categoría con los demás graduados en cualquiera otra facultad mayor (ley 3.ª, id. id., arts. 1.º y 2.º). La prerogativa de establecerse y ejercer libremente la cirujía en cualquier pueblo, no es incompatible con la admision de cirujanos y médicos titulares de los pueblos *á puerto cerrado*, ó con esclusion, pues esta se entiende en el sentido de que el titular ha de ser pagado íntegramente, ó de los propios ó por los vecinos, aun cuando no se asistan con él, lo que no quita á estos la libertad de asistirse con otro, ú otros, pagándolo tambien. V. **CIRUJANOS TITULARES.**

Por el cap. 14 de la ordenanza de 1804, artículo 5.º (ley 10, tít. 12, id. id.), fueron declarados exentos de quintas los cursantes de los colegios de medicina; cuya prerogativa está por supuesto derogada.

Por la misma ordenanza, cap. 18 (ley 12, título 12, id. id), se modificó la prerogativa de preferencia absoluta de los cirujanos *latinos* sobre los romancistas para plazas dotadas de fondos públicos; limitándola al caso de igualdad de *circunstancias*, de *tiempo de ejercicio*, *buena práctica*, y *mérito respectivo*. En la misma ordenanza y la citada son testuales los artículos siguientes:

«10. Teniendo, como tengo, declaradas iguales las facultades de medicina y cirujía, por consecuencia, ordeno y mando: que en todas las consultas, ya públicas, ya privadas, que tuviesen médicos y cirujanos latinos, se precedan mútuamente por el órden de antigüedad del grado de reválida, por manera, que presidirá el médico, si su título de reválida fuese mas antiguo; y el cirujano latino, si lo fuese el de esta.

»11. Los cirujanos-latinos, como licenciados en facultad mayor, disfrutarán los mismos privilegios, honores, exenciones y prerogativas, que por leyes del reino están concedidas á los abogados y médicos, y de que gozan los licenciados en las demás facultades mayores de las universidades de mis dominios.»

Los médicos y cirujanos latinos presidirán siempre en la forma dicha, á los romancistas; pero en juntas de facultad que tengan los de una misma clase, se presidirá por antigüedad de reválida (art. 13, ley id.).

Se reitera la exencion de quintas y leyes, y se amplía á la de cargas concegiles, y personales (art. 14, id. id.)

Se reitera asi bien la igualdad entre las facultades de cirujía, medicina, y farmacia, y la de honores, exenciones, y prerogativas de sus profesores (art. 19, id. id.)

Ya queda indicado que por el plan general de estudios universitarios de 1824 (artículo 97), se confirman las prerogativas é igualdad de honor y grado con los demás grados en facultad mayor por las universidades, concedidas por las leyes, á los médicos, cirujanos, y farmacéuticos de los colegios.

Véase **AUTORIDADES: AUXILIO CIRUJANOS DE EJERCITO: EMPLEADOS: FACULTAD: FACULTATIVO: FARMACIA: FLEBOTOMIA: GRADOS ACADEMICOS: JUNTA SUPERIOR DE MEDICINA Y CIRUJIA: MEDICOS: MEDICOS-CIRUJANOS: PROTO-MEDICATO: PROTO-CIRUJANATO: SANIDAD MILITAR.**

CIRUJANOS DE LA ARMADA. Hallándose hoy en el mismo caso y situacion legal que los del ejército, véase lo que decimos en dicho artículo.

Lorenzo Arrazola

CIRUJANOS DE EJERCITO. Antes de la creacion del *cuerpo de sanidad militar*, este era un artículo separado; despues de dicha creacion, el artículo *cirujanos de ejército*, forma parte del de sanidad militar, y allí lo trataremos; pues si bien la clase de cirujanos de ejército se ha refundido y trasformado, no ha desaparecido su historia jurídica, ni los muchos casos de derecho á que aun puede dar lugar. De paso diremos que los cirujanos de ejército, podian ejercer libremente, y pueden en los pueblos en que los cuerpos hagan permanencia, cuya prerogativa no se estiende á los jubilados, si no estuviesen revalidados por el *protomedicato*. (Ley 6, tít. 12, lib. 8.°, Nov. Recop., y nota 4.ª al mismo título. Véase CIRUJANO, SANIDAD MILITAR (*Cuerpo de.*)

CIRUJANOS TITULARES. El que se contrata por *dotacion*, para la asistencia de un cuerpo ó establecimiento; ó por *dotacion ó iguala* para la asistencia de un pueblo; ora la dotacion provenga de fondos públicos ó municipales; ora de *derrama* ó repartimiento vecinal. Su admision no escluye el que otros cirujanos puedan ejercer; pero por avenencia con los particulares, y sin que la retribucion convenida y personal pueda perjudicar al íntegro pago del titular. Los titulares por *iguala* se contratan, segun la fórmula usual, á *puerto cerrado* ó á *puerto abierto*. En el primer caso los vecinos tienen que pagar la iguala, aunque se asistan con otro; en el segundo, solo en el caso de asistirse con el titular; quedando en libertad omnímoda de hacerlo con otro. Siempre es obligacion de los titulares la asistencia de los enfermos pobres. Sobre ello, unas veces se estipula así en la contrata con aumento, ó no el de asignacion por ese servicio: otras se hace de ello *caso omiso*, y se subentiende la obligacion de asistir á pobres sin retribucion especial. Es fundado y legal que contratando facultativo la municipalidad para el pueblo, en esta enunciativa se comprenden pobres y ricos; y cuando el titular no estipula nada en contrario, justamente se presume que consiente, y debe imputarse á sí mismo el no haber escepcionado. Ultimamente, obviando dudas, y aspirando á regularizar mas y mas este servicio público y de humanidad á la vez, se publicaron y han de verse la real órden y estenso reglamento de 5 de abril de 1854, sobre admision de cirujanos, médicos y farmacéuticos *titulares* para la asistencia de pobres. Véase FACULTATIVO TITULAR.

CIRUJANOS (*en Ultramar.*) Deben ser considerados bajo un doble concepto: como cirujanos civiles ó de poblaciones, y como cirujanos de la armada.

Acerca de los cirujanos civiles, pocas son las leyes de la Recopilacion de Indias, y de ellas las mas hablan del *protomedicato* en aquellos dominios, de lo cual hacemos mencion en su artículo particular. Trata de unos y otros cirujanos el tít. 6.°, lib. 5.° de la Recopilacion. Las leyes 4.ª y 5.ª prohiben, como en España, el ejercicio de la cirujía sin título legítimo: la primera de ellas encomienda á los fiscales de S. M., vigilen y procuren se castiguen los abusos; y en cuanto á los magistrados, la negligencia en este punto será capítulo de cargo en los juicios de residencia. Por la segunda de las mismas se declaran vigentes en aquellos dominios las prescripciones, restricciones y prohibiciones en cuanto á títulos y grados establecidas para España. Como además es sabido que las leyes de Castilla son supletorias para aquellos dominios, véase el artículo CIRUJANO y los demás subsiguientes análogos.

En cuanto á los cirujanos de la armada, véanse asimismo los artículos CIRUJANO, y CIRUJANOS DE EJERCITO con sus referencias.

CIRUJIA. En el terreno de la ciencia la cirujía es *única*. En lo académico y oficial, los métodos de enseñanza y las necesidades sociales, que obligan á la division de la ciencia, hacen que se la considere como *multiforme*. Las denominaciones mas usuales y fundadas en este caso, son las de *cirujía mayor*, ó cirujía por antonomasia y como *facultad*: *cirujía menor*: cirujía *practica*, y cirujía *ministrante*. La cirujía mayor, esto es, la que se estudia y puede ejercerse en toda la amplitud oficial, ó sea en la

mayor amplitud que las leyes han dado á dicha profesion, se halla elevada al rango de *facultad mayor*, léase sobre todo el artículo **CIRUJANO**.

En términos generales está prohibido á los clérigos aprender, ni ejercer la cirujía. Cap. 9, tít. 50, lib. 3 de las Decretales, *sententiam*: ley 28, tít. 7, Partida 1.ª: Van-espen, *Jus, eccl.*, tomo 4. *Observationes ad cánones Concilij lateranensis* 4, cap. 18. Véase **CLERIGO**.

CISMA. Aun en asuntos profanos, y tomada la voz en sentido muy lato, siempre significa *escision, division, rompimiento* de una *unidad*, ora social, ora política, familiar, mística; hasta de opiniones. En sentido canónico tiene tambien la voz una acepcion general y se aplica por traslacion á cualquier escision, desacuerdo, separacion, disrupcion de unidad, de disciplina, de doctrina, de vida comun, etc. entre cuerpos eclesiásticos, clases, categorías, ó iglesias particulares. Esta escision conduce de ordinario á la indisciplina, al desgobierno, á polémicas doctrinales, á la creacion de escuelas y bandos, al escándalo tal vez: aun suele ser el principio del cisma propiamente tal; pero no es aquel mal de la Iglesia católica que rompe esa *unidad* mística y dogmática; que rasga la túnica *inconsutil*, del Hombre Dios, la túnica sagrada de la esposa del cordero. Este es el cisma propiamente tal; el cisma tomado en su sentido canónico estricto, y á él consagramos el presente artículo; y no al cisma en sentido lato, ó á los cismas particulares entre iglesias y cuerpos, segun quedan indicados. Solo si diremos que si en todo la discordia es el orígen de grandes males, y la division el principio del aniquilamiento; en nada con mas trascendencia que allí donde lo que se aventura es la vida eterna; en aquel cuerpo místico y creencia divina, en que la unidad es dogmática, el principio y el fin, el todo, condicion insustituible, necesaria con *necesidad de medio*: tal es la Iglesia y creencia católica: *et unan sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam.* Diremos asi bien que el cisma propiamente tal, prepara á la heregía, si ya no la lleva implícita, ó se confunde con ella, como veremos: asi las escisiones parciales, el cisma en su acepcion génerica entre iglesias particulares, cuerpos, clases, y comunidades eclesiásticas, conducen al cisma propiamente tal.

Díjose *cisma* del griego *sjisma* (σχισμα) que los latinos tradujeron *schisma* y suena siempre division, escision, discordia. Los latinos le llamaron tambien *scissio*, escision, del verbo *scindo* hendir, rasgar, romper, desgarrar.

Pero como no toda escision, separacion, divergencia, es cisma, aun respecto de la Iglesia universal en su cabeza visible, hé aquí en este asunto gravísimo la definicion y juicio de autoridades competentes, ya en el órden filológico, ya en el doctrinal.

En el siglo III eran reputados cismáticos, *qui sese, ultra præpositos, sine ulla ordinationis lege constituebant, qui, nemine episcopatum dante, sibi nomen episcopi assumebant.*

Adversus auctoritatem illarum ecclesiarum, quæ ab apostolica sede epistolas accipere meruerunt, temere credendo, immanissimum schismatis crimen á se propulsare non poterit. (San Agustin, *Cent.* 6: *Cán.* 34, *Causa* 24, *quæst.* 1.)

Sucesivamente la idea se desenvolvió y fijó segun vemos á continuacion.

Inter hæresim et schisma hoc esse arbitror, quod hæresis perversum dogma habet; chisma, post episcopalem decissionem, ab Ecclesia pariter seperat. (San Gerónimo, *epist. ad galatas*).

Schisma á scissura animorum nomen accepit; eodem enim cultu, eodemque ritu credit ut cæteri: solum congregationis delectantur, dissidio. Fit autem schisma cum dicunt homines nos justi sumus, nos sanctificamus immundos, et cætera similia. (San Isidoro, *Originum, lib.* 8, *cap.* 3.)

Schisma, siquidem ipsum nomen græcum est, scissuram sonat. Sed in vnitate scissuram esse non potest; non ergo unitati communicant, qui shismaticis communicant. (*Cánon.* 34, *Causa* 24, *quæst.* 1.)

Schisma est separatio propria sponte, et intentione ab unitate Ecclesiæ, renuens subesse

Lorenzo Arrazola

Papæ, et communicare membris Ecclesiæ. (*Santo Tomás*, 2.ª 2.æ *quæst.* 39.)

Schisma græcum nomen est, scissuram sonans, ut habet can. 34, *caus.* 24, *q.* 1, *posseque juxta hanc latiorem significationem, quælibet societatis ac communitatis dirruptio, sive scissura schismatis apellatione contineri. Hic autem sumitur pro scissione vel divisione ab unitate Ecclesiæ catholicæ, quæ, ex pluribus particularibus ecclesiis sub uno capite coalescens, universalem, sive catholicam et unam ecclesiam constituit. Ut ergo aliqua ecclesia sit schismatica, vel aliqui dicantur schismatici, non sufficit, quod non communicent cum aliqua particulari ecclesia, aut societate, quæ universalem ecclesiam non constituunt; sed requiritur, ut non communicet cum Ecclesia catholica, seu universali.* (*Van-Espen, Jus. Ecc., part.* 3, *tit.* 4, §. 51.)

Schismaticis tribus modis dicuntur: 1.° *Schismatici sunt hi, qui ab unitate romanæ Ecclesiæ se segregant, constituendo sibi ecclesiam, et ordinando sibi clericos, et sacerdotes:* 2.° *Largissimé schismatici dicuntur omnes in mortali peccato constituti.* 3.° *Largé verò ex excommunicati schismatici vocantur, quia sunt extra Ecclesiam et communionem fidelium.* (Rebufo.)

«Cisma, del nombre griego *schisma*, vale tanto como discordia, division, separacion, desercion.» (Covarrubias, Tesoro de la lengua.)

Cisma, en fin, segun la Academia de la lengua, es «division, ó separacion entre los individuos de algun cuerpo ó comunidad.»

De los testos preinsertos se desprenden, no solo las diversas acepciones de la palabra *cisma*; sino la esencia de este en el rigor canónico; esto es, la separacion de la unidad de la Iglesia, por mas que se pretenda conservar sus dogmas; verificándose el cisma, ora la fórmula que se adopte sea la separacion de la Iglesia universal, y por tanto única, ora meramente de su cabeza, como tal; lo cual supuesto, lo mismo puede adoptarse la definicion dada ordinariamente por teólogos que por los canonistas. Estos entienden por cisma la sustraccion de la obediencia del Sumo Pontífice, considerado *formalmente*, es decir, en cuanto es jefe espiritual de la Iglesia y centro de la unidad: los teólogos, siguiendo á Santo Tomás, dicen, que es aquella division por la cual uno se separa de la unidad de la Iglesia, en cuanto esta es un cuerpo místico, compuesto de todos los fieles como miembros, y del romano Pontífice como cabeza. Es visto en todo caso, que no toda desobediencia al Sumo Pontífice, ni todo desacuerdo entre las iglesias particulares, merece la calificacion canónica de cisma. Para incurrir en semejante nota, se requiere que el Sumo Pontífice obre como cabeza visible de la Iglesia en cosas que afecten á la unidad de esta, y que haya al menos intencion indirecta de romperla. La desobediencia á las demás disposiciones, que emanen del mismo orígen, sobre cosas profanas, como la prohibicion de hacer la guerra y la paz, ó á las medidas que tome, como señor temporal de sus Estados, serán actos de irreverencia ó rebelion, segun las circunstancias; pero nunca actos cismáticos. Tampoco basta romper la unidad con tal ó cual iglesia particular, sino que es además necesario separarse del todo místico, que constituye la Iglesia universal, tronco comun, por el cual circula la sábia vivificadora que dá vida espiritual á todas las ramas particulares. En la seccion 1.ª ampliamos convenientemente estas consideraciones.

PARTE DOCTRINAL.

SUMARIO.

SECCION I. NATURALEZA Y CLASIFICÁCION DEL CISMA.

SEC. II. RESEÑA HISTÓRICA DE LOS PRINCIPALES CISMAS.

§. 1.° *Cismas anteriores al gran cisma de Oriente.*

§. 2.° *Gran cisma de Oriente.*

§. 3.° *Cismas posteriores al de Oriente.*

SEC. III. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL ORÍGEN Y CONSECUENCIAS DE LOS CISMAS: REGLA PRÁCTICA DE CONDUCTA EN TIEMPO DE CISMA.

SEC. IV. EFECTOS CANÓNICOS DE LOS CISMAS: ABSOLUCION: RECONCILIACION: EFECTOS CANÓNICOS DE ESTA Y AQUELLA.
SEC. V. PENALIDAD CONTRA LOS CISMÁTICOS.
§. 1.° *Disposiciones penales de la Iglesia.*
§. 2.° *Disposiciones penales del poder temporal.*

SECCION I.

NATURALEZA Y CLASIFICACION DEL CISMA.

De la definicion que hemos dado del cisma se deduce, que las Iglesias particulares pueden algunas veces disentir en puntos de disciplina, tanto entre sí, como con la Iglesia romana, que no deja de tener el mismo carácter; por mas que ejerza el primado; sin incurrir en la nota de cismáticas. Dos hechos alega Van-Espen (1) en apoyo de esta opinion, que lo prueban de una manera evidente, si bien para su inteligencia y debida aplicacion, es necesario tener presentes dos circunstancias, que en su lugar espresaremos. El primer hecho que cita es la diversa disciplina que observaban las iglesias del Asia en la celebracion de la Pascua, respecto de la Iglesia romana, y demás de Occidente; y el segundo la errada práctica y opinion que la Iglesia de Africa sostuvo con San Cipriano, respecto de la necesidad de volver á bautizar á los que lo habian sido por los herejes. Veamos como estas dos graves desavenencias no llegaron á producir un cisma.

En cuanto al primer punto, la Iglesia romana, siguiendo la antigua costumbre, celebraba y celebra la Pascua el domingo siguiente al dia 14 de la luna de marzo, en honra de haber resucitado en domingo su divino fundador. Por el contrario las iglesias del Asia celebraban la Pascua, como los judíos, en el mismo dia 14 de la luna de marzo, cualquiera que fuese el de la semana en que cayese. Esta diversidad de disciplina no produjo al principio ningun contratiempo, pues es sabido, que habiendo pasado á Roma San Policarpo obispo de Esmirna, y no accediendo al parecer del Pontífice Aniceto sobre este particular, se retiró con las mismas muestras de amistad y afecto que á su llegada habia recibido. Pero á fines del siglo II, en el pontificado de Victor, la disputa se hizo mas viva. Polícrates, obispo de Efeso, reunido en sínodo con otros prelados de su parecer, contestó al Papa Victor, que los obispos de Oriente no creian que les era permitido celebrar la Pascua en otro dia que el 14 de la luna de marzo, cuyo rito, segun tradicion constante de aquellas iglesias, venia del mismo Apóstol S. Juan, que las habia fundado. El Pontífice acordó en su vista reunir en Roma otro sínodo, en el cual por unanimidad fué condenada la opinion de los obispos de Oriente, y en su consecuencia declaró fuera de su comunion á los que se separasen de la práctica observada en la Iglesia romana. Sin embargo de esta sentencia de escomunion, es tambien un hecho que las iglesias del Asia siguieron con su costumbre en la celebracion de la Pascua, sin que las demás iglesias, ni aun el mismo Pontífice, rompiesen la comunion con ellas. Asi se deduce de la epístola que el obispo de Lyon San Ireneo dirigió en nombre de todos los obispos de las Galias al Papa Victor, exhortándole á que no separase de su comunion á las iglesias del Asia por sola esta causa, cuando en otras se observaba variedad en la disciplina, ya por lo que mira á la observancia de los ayunos, ya en otros muchos puntos. La mayor parte de los historiadores (1) cree, que á consecuencia de esta carta volvió Victor la paz á las iglesias del Asia, aun cuando no hay documento que lo acredite, y á la verdad solo asi se esplica satisfactoriamente el hecho innegable de no haberse suspendido la comunion entre ambas iglesias.

El segundo hecho alegado por Van-Espen ocurrió en tiempo de S. Cipriano, Primado

(1) Van-Espen. *Jur. eccl.*, part. 3, tit. 4.°, supp. al capítulo 2.° de Delictis ecclesiastici.

(1) Historia eclesiástica de Cravesson, tomo 1.°, coloquio 5.°, edicion novisima.

del Africa, ocupando S. Estéban la silla de San Pedro. Era bastante general en Africa la opinion de que el bautismo, administrado por los herejes ó cismáticos, era nulo, y que por consecuencia debia reiterarse en los que volvian al seno de la Iglesia. Antes de San Cipriano, Agrippino, obispo de Cartago y Primado del Africa, habia reunido un concilio, en el que se dictó el cánon de la reiteracion del bautismo dado por los herejes. Este error venia ya del tiempo de Tertuliano, que lo propagó en su obras, y fué tambien comun al Oriente, pues en otro concilio celebrado en Frigia, se habia acordado igual disposicion. Exacerbándose la disputa, y estando muchos obispos de Numidia, inciertos sobre lo que habian de hacer en este caso, consultaron á San Cipriano, el cual reunió un segundo concilio en Cartago, que opinó y decretó conforme á los antecedentes indicados. Concluido el concilio, envió San Cipriano una epístola sinódica al Sumo Pontífice, comunicándole el acuerdo tomado por aquel. Asi que la recibió San Estéban, reprobó en el acto la resolucion del concilio, prohibiendo resueltamente, que nadie osara apartarse de la tradicion apostólica que autorizaba lo contrario. San Cipriano no se tranquilizó con este rescripto, sino que lo puso en conocimiento de Firmiliano, sábio obispo de Cesárea, que con otros de Capadocia, era de igual sentir que los africanos. Firmiliano en una carta muy erudita contestó, conviniendo en todo con San Cipriano, y asegurando que aquella era la práctica de su iglesia, que se creia traer su orígen de los Apóstoles. Con este apoyo, animado San Cipriano, convocó el tercer concilio de Cartago, al que asistieron 87 obispos de las provincias de Africa, Numidia y Mauritania, los cuales confirmaron en un todo los decretos del anterior. En vista de esta resolucion, acordaron enviar dos legados al Sumo Pontífice, quien al principio, no solo se resistió á recibirlos en su comunion, sino que hasta casa y hospedaje les fueron negados. Por fin los recibió, y dió una contestacion bastante dura, conminándoles, con las censuras eclesiásticas; pero á pesar de todo, la disidencia no llegó á romper la paz, como S. Agustin lo asegura en las siguientes palabras: «*vicit pax Christi in animis eorum, ut nullum schismatis malum inter eos oriretur.* Asi es que aun cuando este santo doctor confiesa que S. Cipriano, y los demás obispos erraron en este punto, alaba la prudencia del primero, que jamás amenazó con anatema á los que siguiesen su parecer, y quiso siempre permanecer unido de corazon á la Iglesia Católica. Su buena fé salvó su error, y lo hace disculpable, por no haber entonces ninguna determinacion de la Iglesia universal sobre este asunto; error que además pagó superabundantemente con el martirio que sufrió en tiempo de los Emperadores Valeriano y su hijo Galieno el año 258.

De estos hechos se desprenden dos graves consideraciones: 1.ª que cuando las desavenencias nacen de buena fé, y se sostienen con ella, inspiradas por un santo y religioso celo, sin olvidar que la unidad de la Iglesia es una parte del dogma católico, nunca puede confundirse con el cisma: 2.ª que la doctrina que de ellos saca Van-Espen, para probar que las iglesias particulares pueden ponerse en disidencia con la romana y con el Sumo Pontífice sin incurrir en la nota de cismáticas, exige dos restricciones para no ser peligrosa en sus aplicaciones. Es la primera, que los hechos alegados, no son precedentes aplicables en el dia, porque estando fijada de una manera sólida y estable la doctrina de la Iglesia por las decisiones conciliares, y constituciones de los Sumos Pontífices, no pueden ocurrir casos de igual naturaleza. Y la segunda la reconoce el mismo Van-Espen con todos los demás canonistas, á saber: que siendo la Iglesia romana, por el Primado de honor y jurisdiccion inherente á su silla; el centro de la unidad católica, que tiene por principal objeto el mantener puras las doctrinas y disciplina de la Iglesia, quitando ocasion y pretesto para cismas, el no estar con ella en comunion, es grave motivo de sospecha para ser reputado por cismático. *Quicumque non colligit cum romano Pontifice, spargit.*

Una vez esplicada la naturaleza del cisma, es muy importante para nuestro objeto señalar las disposiciones que le distinguen de la heregía, porque siendo crecidísimo el numero de las últimas, deben *ex professo* tratarse en su lugar oportuno.

Las heregías siempre empiezan negando alguno de los dogmas ó artículos que la Iglesia universal ha reconocido como de fé, y propuesto á la creencia de los fieles, obstinándose con pertinacia en el error. Los cismas, sin romper la unidad de doctrina, producen la separacion, ó bien por disidencia en algun punto de disciplina, ó bien por desconocer la autoridad del Sumo Pontífice, ó bien por discordias entre los obispos. La cuestion es por lo comun mas bien de hecho que de derecho. En una palabra, es hereje, segun S. Agustin (1), el que no sigue la unidad católica; y cismático el que no abraza su paz. *Hæreticus est, qui non sequitur catholicam unitatem; schismaticus est, qui non amplectitur cathoticam pacem*; es decir, que pudiendo considerarse el principio de la unidad de la Iglesia bajo dos puntos de vista; el de la doctrina, y el de la autoridad, será hereje el que rompa el lazo de una creencia comun, que une á los fieles en doctrina; y cismático el que desconozca el vínculo de autoridad, que los mantiene en paz. Por eso muchos autores dicen (2), que la heregía es un pecado contra la fé, y un error del entendimiento en su orígen y en su fin; el cisma una falta contra la obediencia y la caridad, y un error mas bien de la voluntad. Por lo demás, es tambien cierto, que apenas hay cisma, que, durando mucho tiempo, no degenere en heregía, como se confirma plenamente por la historia: pero es preciso advertir cuidadosamente, que si bien todos los herejes son cismáticos, no todos los cismáticos pueden llamarse herejes. Hay, pues, la misma diferencia que entre el género y la especie. Los cánones y decretos de los concilios, asi como las leyes civiles, pueden confundirlos é igualarlos en las penas y censuras, pero ello es lo cierto, que se distinguen por su naturaleza y conservan sus nombres propios en la historia.

El cisma puede dividirse en *puro* ó *simple*, y *misto*: *esterno* é *interno*: *activo* y *pasivo*. El cisma se llama puro ó simple, cuando se limita á romper la paz de la Iglesia, sin profesar ningun error en la fé, y *misto*, cuando además de la sustraccion de la obediencia á la Iglesia universal, mezcla la heregía, al menos en alguno de los puntos ó artículos de fé. Ya hemos indicado que apenas hay cisma, que no dejenere en esta última clase, lo cual espresa S. Gerónimo diciendo: *nullum schisma non aliquam sibi confingit hæresim, ut recte ab Ecclesia recessisse videatur*; y los autores canónicos, Cavalario, Ferraris y otros añaden, que todo cisma siendo largo, es por su misma índole herético, pues dá á entender con su obstinacion, que fuera de la unidad de la Iglesia Católica, puede existir la salvacion espiritual. Cisma *interno* es aquel que se promueve dentro de alguna iglesia particular por algunos individuos, como si un presbítero se aparta de su obispo y forma contra él partido. Cisma *esterno* es aquel que rompe el lazo de union entre las iglesias particulares, que vienen á constituir sociedad aparte, como sucedió con los donatistas, que se separaron de todas las iglesias del orbe católico. En este caso, los cismáticos son los que se apartan de la universalidad de las iglesias, y sobre todo de la romana, que es el centro de unidad, segun hemos observado.

La última division ha sido especialmente conocida despues de la reforma protestante. Algunos teólogos llamaron cisma *activo* á la division voluntaria de una parte de los miembros de la Iglesia del cuerpo universal, con el propósito deliberado de no volverse á asociar mas; y cisma *pasivo* á la separacion involuntaria de aquellos á quienes la Iglesia desecha de su seno por medio de la escomunion. Esta division ha tenido alguna importancia, porque de ella se han querido valer los protestantes, para hacer recaer sobre la Iglesia Católica la culpa de su cisma,

(1) San Agustin, lib. 1.°, contra Cresconium.
(2) Ferraris Biblioteca, artículo Schisma: Gonzalez, comentarios á las Decretales.

diciendo que ella era la que los habia arrojado, y no ellos los que voluntariamente se habian desunido. Desde luego saltan aquí á la vista dos errores, que en sí mismos llevan envuelta su refutacion: el primero es histórico, pues está probado que los reformadores se desataron en denuestos contra la Iglesia romana, llamándola *prostituta, la bestia de Babilonia, sinagoga de Satanás*, y diatrivas al modo. El segundo es de apreciacion, pues los que se forman y propagan una doctrina contraria á las creencias católicas, voluntariamente se alejan de su seno, y por la causa verdadera de su separacion. La Iglesia, siguiendo los preceptos de su divino maestro, *si autem Ecclesiam non audierit; sit tibi sicut ethnicus et publicanus*, no puede menos de considerar fuera de su gremio, á los que se colocan fuera de él, variando la doctrina. El pretender que la verdad y el error quepan juntos, es un solemne absurdo.

SECCION II.

RESEÑA HISTÓRICA DE LOS PRINCIPALES CISMAS.

Apenas nacida la Iglesia Católica, se vió interiormente combatida por un número tan crecido de errores, heregías, y divisiones, que hubieran ahogado en su cuna el progreso de cualquier institucion, que no hubiera contado en su apoyo mas que con elementos humanos. Pero muy lejos de obrar como causas ó síntomas de decadencia ó disolucion, parecian sacudimientos de una vida robusta, que á cada uno de estos golpes cobraba mayores fuerzas. Así la historia de las disensiones interiores, que durante los primeros siglos afligieron al Cristianismo, es la confirmacion mas palmaria de su orígen divino. Dejando, pues, para el artículo correspondiente el apurar cual fué, y cuando apareció la primera heregía, así como el trazar su diversa procedencia, nos limitaremos ahora á describir los principales cismas.

§. 1.° *Cismas anteriores al gran cisma de Oriente.*

Cisma de Novaciano. En el siglo III dos presbíteros de la Iglesia de Cartago, Felicísimo y Novato promovieron un cisma que luego degeneró en heregía. Nació de resultas de la persecucion terrible de Decio contra los cristianos, muchos de los cuales acobardados y faltos de espíritu, no le tuvieron para confesar el nombre que llevaban, y despues querian reconciliarse con la Igesia. De estos habia dos clases: unos que se llamaban *libelíticos*, porque ó bien con dádivas, ó por recomendacion de amigos, se habian proporcionado de los magistrados romanos un libelo de impunidad, pero no habian negado públicamente la fé; y *sacrificiarios*, que eran los que habian ofrecido incienso y sacrificios á los ídolos. La disciplina antigua no concedia el perdon de tan graves faltas, sino despues de una larga y rigurosa penitencia. Esta práctica fué la que quisieron abolir aquellos dos presbíteros, concediendo desde luego á los *lapsos* el perdon de su infidelidad. San Cipriano se opuso á esta novedad, y los reprendió, por lo cual Novato, persistiendo en su idea, se fugó á Roma, donde unido con Novaciano, diácono de aquella iglesia, produjeron juntos infinitos alborotos. No pararon hasta que Novaciano fué elegido Papa, ó mas bien Antipapa, por tres obispos que lo ordenaron. Pero Novaciano añadió al cisma la heregía, porque vino á dar en el estremo contrario, de que aquel habia tenido principio; y los que antes sostenian, que debia concederse desde luego el perdon á todos los *lapsos*, despues predicaron que á ninguno debia ni podia admitirse á reconciliacion, negando á la Iglesia la autoridad de perdonar á los que por miedo llegaban un dia á desamparar la fé. Para evitar los progresos de este cisma, reunió San Cipriano un concilio en el año 251, en el cual, haciendo diferencia de los *libelíticos* y *sacrificiarios*, por ser muy diversa su culpa, se acordó, que á los primeros podia admitírseles desde luego á la comunion; pero no á los segundos, que debian hacer antes pública penitencia. Hecho sabedor el sumo Pontífice San Cornelio de esta decision, reunió otro concilio en Roma compuesto de 60 obispos, en el cual se confirmaron dichos acuerdos y se publicó el anatema contra No-

vaciano y sus secuaces. Estos, sin embargo, siguieron constituyendo iglesia aparte, hasta el siglo VII en Oriente y hasta el VIII en Occidente.

Cisma de los donatistas. Mayor y mas terrible fué el cisma que abrasó toda el Africa en el siglo IV, conocido con el nombre de *Cisma de los donatistas*, contra el cual trabajó con tanto fruto como ardor San Agustin, obispo de una de sus sillas (1). Fué el Africa una de las provincias en que mas se enfureció la terrible persecucion ordenada contra los cristianos por los Emperadores Diocleciano y Maximiliano en el año 303. Vencidos del temor muchos fieles, no solo legos, sino clérigos y obispos, entregaron los libros y vasos sagrados, por cuyo hecho fueron notados con el nombre de *traditores*. Su número fué tan grande, que en un concilio celebrado en Numidia se acordó recibirlos en la comunion de la Iglesia, dejando á Dios el juicio de su conducta. A poco de darse la paz, y habiendo vacado la silla de Cartago por muerte de Mensurio, ocurrida al volver del destierro, se trató de nombrarle sucesor, á cuyo efecto se reunieron 70 obispos de los pueblos vecinos y eligieron á Ceciliano. Dos ambiciosos, *Bostro* y *Celeusio*, que aspiraban á la misma dignidad, se conjuraron contra Ceciliano, y apoyados por Lucila, mujer poderosa y enemiga de aquel, y con el auxilio además de varios ancianos á quienes Mensurio, en la persecucion anterior, habia confiado la custodia de los vasos y alhajas sagradas que les dolia volver, pudieron lograr que *Secundo*, primado de Numidia, reuniese un concilio para juzgar sobre la eleccion de Ceciliano. Entre otros asistió á él Donato, obispo de Casas-negras, que hizo cabeza de aquella faccion que tomó su nombre, y logró deponer á Ceciliano, alegando por primera y principal razon que habia sido ordenado por obispos *traditores*. No contentos con esto, nombraron en su lugar á Magorino, dependiente de Lucila, escomulgando á Ceciliano y á los demás obispos que seguian su parte.

(1) Historia de San Agustin por Mr. de Poujoulat, obra premiada en Francia.

De aquí nació aquel cisma terrible, que dió lugar á tantas escenas de sangre y devastacion, como fomentaron ciertos fanáticos de su secta llamados *circumcelliones*; cuyo celo, ó mas bien furor, los llevaba á andar rondando las casas de los católicos para robarlas y herirles, saquear las iglesias y poner asechanzas á la vida de sus pastores legítimos. A fin de atajar semejantes escesos, el Papa Melquiades, en un concilio celebrado en Roma, pronunció sentencia contra los donatistas, absolviendo á Ceciliano. Pero aquellos, lejos de ceder y conformarse, apelaron para otro concilio mas numeroso, y el Emperador Constantino, deseando cortar el mal de raiz, les concedió que se reuniese en Arlés, adonde el año 314 acudieron 200 obispos, que confirmaron la sentencia dada en Roma á favor de Ceciliano contra los donatistas. Ni aun así se aquietaron; sino que recurrieron en queja al Emperador, por lo cual este incomodado, se vió compelido á dictar disposiciones contra ellos, confiscando á favor del Estado todos los lugares en que se reunian. En tiempos de Graciano y Honorio estas medidas se hicieron mas severas, imponiendo multas á los legos, y desterrando, y confiscando los bienes á los clérigos. Teodosio confirmó sus disposiciones, fijando para los legos la multa de diez *áureos*, con lo cual vino á concluir casi del todo esta secta, y los pocos que quedaron, sufrieron lo mismo que los católicos, la persecucion de los vándalos. El error de los donatistas no atacaba directamente ningun dogma, sino que suponian que ellos solos constituian la verdadera Iglesia, y que todas las demás, habiendo estado en comunion con Ceciliano, se habian corrompido y manchado con la depravacion. De aquí venia el volver á bautizar á los católicos que pasaban á su secta, queriendo malamente interpretar á su favor la opinion de San Cipriano, al mirar como nulas todas las consagraciones y ordenaciones hechas por los católicos, tratándolas de profanacion de los misterios divinos, quemando los altares, rompiendo los vasos sagrados y persiguiendo á los ministros católicos.

Cisma de Melecio. Por el mismo tiempo que en Africa empezó en Asia el cisma de Melecio, llamado asi de su nombre. Era Melecio obispo de Licópolis, de cuya silla fué depuesto en un concilio celebrado por Pedro, patriarca de Alejandría, en el año 301, por haber sacrificado á los ídolos en la persecucion de Maximino. Melecio, lejos de conformarse ó apelar de esta sentencia, se separó de la comunion del patriarca de Alejandría y formó el cisma, invadiendo varias provincias que pertenecian á aquel. Sus secuaces degeneraron en la herergía de Arrio, con quien se unieron para confirmar su partido.

Cisma de los luciferianos. Despues de la heregía de Arrio, nacieron los cismas de los luciferianos y el de las iglesias de Antioquía, hijo de aquel. Lucífero, obispo de Cagliari, metrópoli de Cerdeña, habia sido acérrimo defensor de San Atanasio contra Arrio, por cuyo motivo habia tambien participado del destierro, que á aquel se le impuso. Cuando á todos ellos fueron levantados por el Emperador Juliano, con el fin de que se destruyesen mejor los católicos, y poder realizar su plan de rehabilitar el politeismo, volvió Lucífero á Antioquía, donde oscureció toda la gloria que habia conquistado. Hallábase la ciudad dividida en tres partidos: unos arrianos con su obispo Euzoyo; otros que reconocian á Melecio, que aunque católico, habia sido ordenado por obispos arrianos; y otros que por esta circunstancia no querian á Melecio, y se llamaban *eustasianos*, del nombre del Santo obispo Eustasio, que habia sido arrojado de su silla por los arrianos. Lucífero, para conciliar todas las voluntades, nombró á Paulino obispo, de lo cual resultó lo contrario que se proponia, pues en la parte católica hubo dos obispos Melecio y Paulino. Entretanto, restablecido San Atanasio en su silla de Alejandría, habia reunido un concilio en el año 362, en el cual se acordó que los obispos lapsos en el arrianismo, que volviesen á la Iglesia, fuesen restituidos en su dignidad, y comisionó á Eusebio, obispo de Verceli, para que sofocase todas las facciones que habia en Antioquía. Habiendo reprobado Eusebio el hecho de Lucífero, é irritado este además con la resolucion del Concilio de Alejandría, se separó de la comunion católica, formando un cisma, que se estendió, aunque con pocos sectarios, por Cerdeña, España y Egipto. Sostenia Lucífero, con escesiva rigidez, que no se debia tener comunion con los obispos lapsos en el arrianismo, aunque hubiesen hecho penitencia, ni con los que los habian admitido á reconciliacion.

De este cisma nació *el de las iglesias de Antioquía.* Unos estaban con Melecio, y eran la mayor parte de los obispos, y casi todo el pueblo de Antioquía. Otros, como San Atanasio y los obispos occidentales, reconocian á Paulino. Por fin se acordó, para cortar el cisma, que á la muerte de uno de los dos quedase el otro por obispo de toda la poblacion católica. Pero á la muerte de Melecio fué nombrado Flaviano por sucesor suyo, y á la de Paulino, ocurrida poco despues, fué instituido Evagrio. Con esto volvió á reproducirse el cisma, que concluyó á la muerte de Evagrio, habiendo sido reconocido por todos Flaviano como legítimo prelado.

Segundo cisma en Roma. Por el mismo tiempo ocurrió en la Iglesia romana el segundo cisma despues del de Novaciano, con el nombramiento de Pontífice por muerte del Papa Liborio. Elevado al sólio pontificio el español San Dámaso en 366, Ursicinio, diácono de la Santa Iglesia romana, promovió una sedicion, y apoyado por una gran parte del clero y pueblo, fué ordenado obispo de Roma. *Pretestado*, prefecto de la ciudad por el emperador Valentiniano, arrojó de Roma á Ursicinio; pero no por eso logró estinguir el cisma. Porque á la muerte de Valentiniano trató Ursicinio nuevamente de apoderarse de Roma, como lo prueban los concilios de Roma y Aquileya, reunidos con este objeto y el implorar la proteccion de los Emperadores para refrenar la osadía de este perturbador de la paz de la Iglesia. Accediendo á estos votos el Emperador Graciano, condenó á Ursicinio á perpétuo destierro, dejando á Dámaso desde

entonces en pacífica posesion de su silla.

Tercer cisma en Roma. Otro caso parecido ocurrió en el siglo V despues de la muerte del Papa Trosino, en que fueron elegidos dos Pontífices, Bonifacio, presbítero, y Eulalio, arcediano de Roma. Todo el clero estaba por el primero; pero Símaco, prefecto de la ciudad, favorecia á Eulalio, por cuyas falsas relaciones, engañado el Emperador Honorio, citó á los dos á Ravena, para que en un sínodo se ventilase su causa. Disuelto este, sin poder llegar á avenencia, se convocó otro para Espoleto; pero Eulalio, impaciente y receloso del éxito, sin aguardar á mas, se presentó en Roma para dar calor á su faccion. Con lo cual, irritado el Emperador, mandó al prefecto que le echase de la ciudad y restituyese en su silla á Bonifacio, legítimamente elegido, con lo cual concluyó el cisma. Desde entonces dispuso Bonifacio que siempre que saliesen dos elegidos para el pontificado, ninguno lo obtuviese, sino que se renovase la eleccion en un tercero.

Cuarto cisma de Roma. A fines del mismo siglo V estalló otro cisma á la muerte de Anastasio II y eleccion del Papa Símaco, verificada el año 498. Fué el caso, que Festo, senador romano, habia prometido al Emperador Atanasio que el nuevo Pontífice que se eligiera suscribiría al *henoticon* de Zenon; y no creyéndolo fácil del carácter de Símaco, procuró con toda clase de artes y dinero que fuese nombrado Pontífice, ó mas bien Antipapa, *Celio Lorenzo*, arcipreste de santa Práxedes. De aquí, discordias, tumultos y muertes entre el pueblo, el clero y el senado, hasta el punto de verse obligados á recurrir á la autoridad de Teodorico, Rey de Italia, que residia en Rávena, el cual, oido un sínodo, se decidió por Símaco. Estinguido por de pronto el cisma, con un obispado que el Papa concedió á *Celio Lorenzo*, volvió á recrudecerse en el año 503 por las intrigas de Festo y Probino, que, valiéndose de falsos testigos y calumnias, acusaron al Papa Símaco de diversos crímenes, y trajeron de nuevo á Roma á *Celio Lorenzo*. Instado Teodorico por ambas partes, convocó en Roma el concilio llamado *palmario*, en el cual fué absuelto Símaco y declarado inocente, saliendo condenados el Antipapa y sus secuaces.

Cisma del patriarca Acacio. En el Oriente nacian unas heregías de otras heregías, y los que ganaban lauros combatiendo, con frecuencia incurrian en el estremo contrario, y á su vez eran condenados por hereges, como sucedió á *Eutiques*, acérrimo impugnador de Nestorio. La intervencion de los Emperadores en estas disputas fué casi siempre fatal, y sembró los gérmenes de disidencia entre el Oriente y Occidente, que mas tarde produjeron sus resultados. A fines del siglo V, con motivo de la division que ocurrió en las iglesias de Oriente, aceptando unas el Concilio calcedonense, cuarto ecuménico, en que se condenaba la heregía de Eutiques, y negándose otras á recibirlo, promulgó el Emperador Zenon, por consejo del patriarca de Constantinopla Acacio, un edicto unitivo, llamado *henoticon* ó conciliatorio, porque tenia por objeto conciliar los ánimos y procurar la union entre unos y otros. Dicho edicto, si bien admitia el *símbolo* niceno, y condenaba á Nestorio y Eutiques, pasaba en silencio el Concilio calcedonense, la profesion de fé en el hecha, y la epístola de San Leon, y admitia y restablecia en sus sillas y dignidades á los que hubiesen seguido las opiniones de Eutiques sin abjuracion espresa de sus errores, por lo cual fué mirado por los católicos como favorable á esta secta, y se negaron á admitirlo. El Papa Félix III, que ocupaba la silla de San Pedro, condenó el *henoticon*, y envió sus legados al Emperador para que lo revocase. Pero, lejos de conseguir su objeto, fueron encarcelados, y ni aun quiso recibirlos el patriarca, llegando su osadía hasta el punto de borrar el nombre del Papa de los *dípticos* ó libros sagrados. Con este acto, el primero de su especie, tuvo principio el cisma, que duró treinta años, hasta que en tiempo del Papa Hormisdas, el Emperador Justino, tan pronto como subió al trono, alzó el destierro á los obispos católicos, y publicó un edicto reconociendo el Concilio calcedonense. El Papa envió de nuevo sus

legados para que obtuviesen del Emperador el que fuese borrado de los libros sagrados el nombre del patriarca Acacio, condenado por sus antecesores, así como el de los Emperadores Zenon y Anastasio, tambien escomulgados, lo cual consiguieron fácilmente, delegando despues todas sus facultades en Juan, patriarca de Constantinopla, para que obrase con la prudencia que demandaban las circunstancias, respecto de los demás que tuvieron parte en aquel cisma. Así fué por entonces restituida la paz, y vueltas aquellas iglesias á la comunion romana: paz que fué turbada repetidas veces hasta la separacion definitiva.

§. 2.° *Gran cisma de Oriente.*

Los hechos que acabamos de referir en la seccion anterior sirvieron para preparar el gran suceso de la separacion de la Iglesia griega de la latina, que habiendo principiado en el siglo IX, se consumó definitivamente en el XI. Convertido el Oriente en foco perpétuo y constante de heregías, que nacian unas de otras, interviniendo los emperadores mas de lo que debian, y de lo que convenia á la paz de la Iglesia y del Estado, guiados en parte por celos de poder, y en mucho por la ambicion de los patriarcas de Constantinopla, que fueron aumentando su prepotencia hasta creerse bastante fuertes para rivalizar con la autoridad de los Papas, iban insensiblemente acumulándose elementos de division, que algun dia debian dar resultados deplorables, sobre todo si una mano hábil sabia reunirlos y esplorarlos á su favor. Todas las heregías conocidas, tanto de Arrio, Nestorio y Eutiques, como las sectas de los *acéfalos*, *monotelitas* ó *iconoclastas*, habian tenido sus representantes en el imperio y en el patriarcado; y aun cuando la firmeza de la silla romana, unida á su prudencia y al celo en conservar pura la doctrina de la Iglesia, acababan por prevalecer, y renacia la paz, y los nombres de los patriarcas y Emperadores eran anatematizados; estos largos interregnos del error, por desgracia tan frecuentemente repetidos, no podian menos de dejar copiosa abundancia de mala semilla. Unase á esto la política hábil y ambiciosa de los patriarcas de Constantinopla, que, elevando las prerogativas de su silla, llegaron á obtener del Concilio constantinopolitano I la declaracion de que les correspondia por su dignidad el segundo lugar en la Iglesia, y el primado de honor despues del Pontífice romano, cuyos privilegios fueron confirmados en el Concilio IV calcedonense, á pesar de las reclamaciones de los legados de Su Santidad: téngase en cuenta sus perpétuas aspiraciones al título de patriarcas ecuménicos ó universales, y se verá cuán adelantada estaba la obra del rompimiento, y que solo faltaba un hombre bastante astuto y audaz para erigirse en cabeza de partido, y sacudir la autoridad de la silla romana. Este hombre fatal apareció y se llamaba Focio. En su persona reunia todas las cualidades necesarias, porque tenia ilustre cuna, talento perspicaz, astucia refinada, ciencia canónica, erudicion literaria y filosófica tan profunda y escogida, que entre sus contemporáneos brillaba de los primeros, y podia competir con los antiguos. Nada menos se requeria para su fatal empresa. Vamos á trazar brevemente los pasos que le condujeron al cisma, y le empeñaron en trabajar por hacer sus causas mas hondas y perpétuas.

Ocupaba el trono el Emperador Miguel III, nieto del llamado Miguel Balbo, y la silla de Constantinopla S. Ignacio, hijo del último Emperador. Entregado el actual á sus placeres, todo lo dominaba á su antojo el impío Bardas, tio materno del Emperador, el cual aborrecia al Santo Patriarca porque le habia reprendido su vida incestuosa, exhortándole segun su oficio pastoral á la penitencia; y porque además se habia negado á coadyuvar por su parte al injusto mandato de cortar el pelo y encerrar en un monasterio á Teodora Augusta, madre del Emperador, cuyas virtudes y buenas intenciones aborrecia Bardas. De aquí tomó éste pié para acusarle de reo de lesa magestad, logrando que fuese depuesto y desterrado á la isla de Terebinto en el año 857. Conseguido esto, completó su obra, haciendo que fuese nombrado en su lugar Focio, adicto suyo, á pesar de que to-

davía era lego, para lo cual un tal Gregorio, obispo de Siracusa, que con legítima causa habia sido depuesto por el patriarca Ignacio algunos años antes, se encargó de ordenarlo. El dia 20 de diciembre del mismo año 857 le constituyó clérigo; al otro lo ordenó de lector; al siguiente, de subdiácono; al cuarto, de diácono; al quinto, de presbítero; y al sesto, ó sea el 25 de diciembre, le instituyó obispo de Constantinopla. Colocado Focio en esta dignidad, no pensó mas que en asegurarse en ella. Primero intentó hacerse dentro un partido para conjurar mejor la oposicion de Roma. A este fin empezó á perseguir á todos los partidarios y defensores del anterior patriarca, ofreciendo premios á los que se adhiriesen á su causa. Con estos medios pudo reunir un sínodo en Constantinopla el año 859 en el cual solemnemente anatematizó á San Ignacio, ya para captarse mas fácilmente el amor del pueblo, como para presentarse con su apoyo al Sumo Pontífice Nicolás I, pidiendo la confirmacion de su nombramiento. En las cartas encíclicas que le dirigió manifestaba maliciosamente que S. Ignacio, lleno de años y de achaques, habia abdicado su cargo pastoral, á cuya silla se habia visto elevado por los votos de todo el clero y pueblo, y obligado á aceptar por el Emperador Miguel. El Sumo Pontífice, luego que recibió esta comunicacion, envió dos legados á Oriente, para que examinasen si en la deposicion de S. Ignacio se habian observado las prescripciones que ordenan los cánones. Engañados y seducidos estos legados por Focio, se pusieron de su lado, y con su consentimiento fué de nuevo condenado S. Ignacio en otro sínodo reunido por Focio el año 861. Habiendo sido enterado de todo el Sumo Pontífice, reunió en Roma un concilio el año 863, en el cual, probada por confesion de los dos legados su perfidia y prevaricacion, fueron condenados á perpétua deposicion, anatematizado Focio como invasor de la autoridad pontificia, y restituido S. Ignacio en su silla, así como todos los demás obispos depuestos por Focio. Sabedor este de semejantes decisiones, abandonó su máscara, y reuniendo en el año 867 otro concilio que presidió el Emperador Miguel, contra la costumbre general de la Iglesia, formuló graves cargos y acusaciones contra el Sumo Pontífice, concluyendo por dictar contra él sentencia de anatema, que solos 21 Obispos quisieron firmar. Despues envió sus encíclicas á todos los patriarcas de Oriente, llenas de calumnias contra el Papa y la Iglesia latina, repitiendo la sentencia de escomunion que antes habia fulminado. Conociendo, sin embargo, que si la separacion no la hacia consistir en otros motivos, era muy insegura y falsa su posicion, publicó un tratado contra el dogma y disciplina de los latinos, sembrando en él los gérmenes de la separacion definitiva que su sucesor con el tiempo, Miguel Cerulario, consumó dos siglos despues. Los cargos que hacia á la Iglesia latina fueron cinco: 1.° sobre la doctrina de la procedencia del Espíritu Santo del Padre y del Hijo, en virtud de la adicion de la palabra *filioque*, hecha por los latinos al símbolo niceno contra lo dispuesto en el Concilio general de Efeso: 2.° sobre el celibato impuesto á los presbíteros, cuya prohibicion envolvia una censura del matrimonio: 3.° porque ayunaban los sábados: 4.° porque no se abstenian del uso de las carnes las ocho semanas que precedian á la Pascua, y de los huevos y leche las siete anteriores: 5.° porque reservaban solo á los obispos la administracion del crisma despues del bautismo.

El incendio iba tomando vuelo, pero por entonces se cortó con la muerte del Emperador Miguel, pues así que quedó solo en el imperio Basilio el Macedon, recluyó en un monasterio á Focio, y restituyó en su silla á S. Ignacio, que fué recibido con señales de triunfo por todo el patriciado y demás clases del pueblo. Entretanto habia muerto el Papa Nicolás y habia sido nombrado Adriano II, quien para cortar de raiz los malos gérmenes del cisma incoado por Focio, convocó el Concilio VIII ecuménico en Constantinopla, al cual envió dos legados suyos que lo presidiesen. A este concilio, celebrado en el templo de Santa Sofía en 869, fué citado Focio, quien al principio se encerró en un riguroso silencio, y apremiado para que respondiese, si se sometia á las decisiones conciliares, advirtiéndole que con su táctica de callar no lograria evi-

tar su condenacion, respondió: *Nec Jesus tacendo damnationem evasit.* Por último cambiando de parecer, en otra sesion á que compareció, hizo alarde de su procacía, y fué por lo tanto anatematizado, y quemados sus escritos contra el Papa, asi como las actas de los conciliábulos por él tenidos. Por diez años duró esta concordia; pero muerto el Santo Patriarca Ignacio, volvió Focio á invadir la silla de Constantinopla con el apoyo del Emperador Basilio, quien logró del Papa Juan VIII que le recibiese en su comunion, y confirmase en su Dignidad. Es cierto, que esta debilidad se cohonesta y esplica por el bien de la paz y de la unidad, y porque además fué concedida con la condicion de que Focio habia de pedir perdon de sus faltas en un sínodo, que habia de celebrarse delante de los legados de Su Santidad. Pero usando Focio de sus artes, logró engañar al legado Pedro, Cardenal de S. Crisógono, quien le entregó las cartas de Su Santidad bajo pretesto de traducirlas al griego, las cuales, una vez en su poder, fueron alteradas y mutiladas á su sabor.

Armado así, convocó en 879 un concilio, al que asistieron 380 obispos, cuyo sínodo llaman los griegos 8.° general, en el cual Focio, sin cumplir con la condicion impuesta por el Papa, fué á su nombre restituido en la silla de Constantinopla. Se hicieron además tres cánones, que envolvian una segunda intencion contra la corte de Roma. En el 1.° se disponia que los obispos, clérigos y monges de Italia, depuestos ó escomulgados por el Papa, lo fuesen igualmente para Focio, y á su vez los depuestos ó escomulgados por Focio, fuesen igualmente tenidos como tales por el Sumo Pontifice Juan VIII. En el 2.° se ordenó, que si algun obispo quisiere abrazar la vida monástica para hacer penitencia, no conservase mas la dignidad episcopal, con lo cual indirectamente se queria condenar como ilegítima la restitucion del patriarca S. Ignacio.

Sabedor el Papa de estas resoluciones, y de la conducta torcida de Focio, rescindió con su autoridad apostólica, y renovó contra el segundo los anatemas pronunciados por sus antecesores Nicolás y Adriano, promulgando él por su parte nueva sentencia de escomunion. Los sucesores de Juan VIII, Marino, Adriano III y Estéban VI, persistieron en el mismo rigor; pero Focio se sostuvo mientras vivió el Emperador Basilio. Muerto este en 886, su hijo Leon el Filósofo le desterró inmediatamente á un convento de la Armenia, donde á los tres años murió.

Los gérmenes de division que sembró Focio, no desaparecieron con su muerte. Varios de sus sucesores los acogieron y fomentaron, y si bien no se rompió la unidad, mantuvieron vivo el espíritu de discordia, principalmente sobre el punto dogmático de la procedencia del Espíritu Santo. Por fin, Miguel Cerulario, elevado á la silla patriarcal en 1043, renovó á los diez años el cisma de Focio. Empezó dirigiendo al patriarca de Antioquía, Pedro, una acusacion contra la Iglesia latina, en que se hacen 17 cargos, inclusos en este número los cinco de Focio. Insistia en dicho escrito principalmente en acusar á los latinos del uso de los azimos en el sacrificio de la misa y de la Eucaristía, y añadia á este los siguientes, que por lo fútiles, y aun ridículos que son muchos de ellos, vamos á copiar literalmente. Que se afeytaban las barbas: que comian carnes sufocadas: que no se abstenian de los animales inmundos: que no cantaban la *aleluya* en tiempos de cuaresma: que los monges comian carne: que los obispos iban á la guerra, y manchaban sus manos con sangre: que usaban de anillos como esposos de la Iglesia: que dos hermanos se podian casar con dos hermanas: que en el bautismo usaban una sola inmersion: que no veneraban las reliquias é imágenes con el culto y respeto debidos: y que los ministros se besaban en el sacrificio de la misa. La relacion circunstanciada de estos cargos prueba que lo que se buscaban eran pretestos para un rompimiento con la Iglesia romana, pues el mismo Pedro, patriarca de Antioquía, contestó, que en muchos puntos juzgaba preferible la práctica de los latinos á la griega, y que aun cuando reprobaba la adicion de la palabra *filioque* al símbolo niceno, no la tenia por herética, ni

por causa suficiente para una escision. Es, pues, evidente, que los dos puntos de alguna gravedad eran el que versaban sobre la *procedencia del Espíritu Santo*, ya alegado por Focio, y el de los *azimos* sobre que insistió Cerulario. Vamos, pues, á manifestar que solo fueron un pretesto y no una causa.

Sobre cuándo empezó á cantarse públicamente en la misa el símbolo de la fé con las palabras «*qui ex Patre filioque procedit*, hay diversas opiniones; pero es indudable que su uso estaba muy estendido en el Occidente siglos antes del cisma de Focio, habiendo sido la Iglesia Española la primera que lo adoptó. El Concilio Toledano III, en que Recaredo con toda la nacion goda abrazaron la fé católica, abjurando el arrianismo en 589, pronunció el símbolo con la fórmula ya citada, y este es el documento mas antiguo hoy conocido sobre el particular. De la misma manera fué repetido en el 8.° 12, 13, y 15, así como en el de Mérida celebrado en 666, y en el 4.° de Braga. Los franceses imitaron á los Españoles, y siguieron su costumbre, especialmente desde que supieron que los griegos negaban la procedencia del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo. Por último, fué admitida en Roma y en todo el Occidente, pero jamás se hizo estensiva á la Iglesia griega, lo cual prueba evidentemente, que su innovacion tan tardía no fué mas que un pretesto. Asi es que despues de Focio los griegos permanecieron unidos casi por espacio de dos siglos á la Iglesia latina; y que el patriarca Cerulario, que renovó el cisma, se apoyó principalmente en el uso de los azimos en el Sacramento de la Eucaristía. La Iglesia griega se habia valido constantemente del pan fermentado ó comun para la consagracion, pero en el Occidente habia habido diversidad de prácticas (1). Documentos irrefragables prueban que en tiempos de persecucion se usaba del pan comun, ya para evitar sospechas, y poder llevar la Eucaristía á los cristianos presos ú ocultos, ó á su propia casa; ya porque no habia tiempo muchas veces de preparar el especial para este objeto; pero es tambien indudable, que el uso del pan sin levadura se remonta á la época de los Apóstoles. Esta variedad desapareció en el intermedio del siglo IX al XI, en que se hizo ya esclusivo el uso de los azimos que el patriarca de Constantinopla reprende á los latinos.

El fundamento de esta diversa práctica de las dos Iglesias estriva en la diferente opinion que siguen sobre el dia en que celebró el Señor la última Pascua con sus discípulos, é instituyó el Sacramento de la Eucarestia. Los griegos suponen que aquel año el Salvador se anticipó un dia á la costumbre de los judíos, y que por consiguiente usó el pan fermentado ó comun. Los latinos, apoyados en los testos de los tres Evangelistas San Mateo, S. Marcos, y S. Lucas, y en la tradicion unánime, dicen, que el Salvador celebró la Pascua segun la costumbre de los judíos en el dia señalado por la ley, y que por consiguiente instituyó el sacramento con panes azimos. Pero como quiera que no se obligaba á los griegos á guardar la práctica de los latinos, se deduce que sus deseos eran buscar motivos de discordia para realizar la separacion que intentaban. Aquellos patriarcas de Constantinopla que ambicionaban el título de ecuménicos; y que en el año 1019 y pontificado de Juan XIX, habian pedido para su Iglesia el dictado de universal, como la de Roma, llevaban muy á mal la dependencia necesaria para la unidad, la cual constituye una parte del dogma católico. En apoyo de esta opinion hay un hecho, que aunque pequeño, por lo pueril y vano que es en sí, sirve para demostrar quizá mejor que los documentos mas sérios, la verdadera causa de la disidencia. Asi que Miguel Cerulario logró su objeto, se apresuró á calzarse las sandalias encarnadas, que habia sido distintivo del Pontífice romano, para demostrar que en todo era igual á él. El Papa Leon IX, justamente alarmado con los escritos de Cerulario, envió dos cardenales con el carácter de legados al Emperador Constantino el Monomaco, y al patriarca, para evitar que pasase adelante aquella disputa. Aunque el Emperador los recibio

(1) Historia eclesiástica de Gravesson, tomo 3.°, Coloquio 3.° De gravibus controversiis quæ nono sæculo Ecclesiam perturbarunt.

bien al principio, y mandó quemar los escritos del patriarca, nada adelantaron con este, que se negó á verlos, sostenido secretamente por el primero; por lo cual se vieron obligados á escomulgarlo, y retirarse dejando la sentencia en el altar de santa Sofía. El Emperador se irritó con su marcha, é inclinado, como estaba á favor del Patriarca, se acabó de decidir del todo, convocando un sínodo de veinte obispos, en el que el patriarca Miguel con consentimiento del Emperador, escomulgó á los dos legados, y borró el nombre del Papa de los *dípticos* sagrados, repitiendo el ejemplo de su antecesor Acacio, y consumando el cisma que dura todavía. Repetidas veces se ha intentado la avenencia, y algunas llegaron á concebirse vivas y fundadas esperanzas de un éxito feliz. Ya en el Concilio lateranense IV, celebrado en 1213, bajo el pontificado de Inocencio III, se dieron algunos pasos, que tomaron un carácter mas formal en el Concilio Lugdunense II, convocado por Gregorio X, en 1274, especialmente para este fin. El Emperador griego Miguel Paleólogo acababa de conquistar de los latinos á Constantinopla, y temiendo una cruzada de estos príncipes contra su imperio, promovió con calor la union con la Iglesia romana, que esperaba le habia de conciliar su amistad. Para ello se hizo representar en el concilio por medio de sus oradores, al cual, además de los Patriarcas latinos de Constantinopla y de Jerusalen, asistieron varios obispos griegos. Se redactó y aprobó la fórmula de fé comun á las dos Iglesias. Su Santidad en accion de gracias celebró la misa del pontifical, en la que los griegos cantaron el símbolo repitiendo tres veces como los latinos «*qui ex Patre Filioque procedit*; acordándose, á súplica del Emperador, que la Iglesia griega podia continuar en el uso de decir el símbolo, como antes, del cisma hasta aquel dia. Cualquiera que hubiese sido el móvil primero de la conducta del Emperador Miguel Paleólogo, mientras vivió sostuvo la concordia, á cuyo efecto, oponiéndose á ella el patriarca de Constantinopla Josef, lo depuso de su silla, y nombró á Juan X, llamado *Veccus*, que permaneció siempre fiel á la unidad católica. Mas á la muerte del Emperador, su hijo Andrónico, que habia manifestado una viva y constante oposicion á las miras del padre, llevó el ódio y la animosidad hasta el punto de privar á su cadáver de sepultura, desterrando luego al patriarca Juan, y volviéndose á romper la union con Roma, á los diez años que contaba de existencia. Cuando, aumentado el poder otomano, empezó el imperio griego á concebir sérios temores por su existencia, sus ojos se volvieron al Occidente, creyendo que le seria mas fácil obtener socorros, si se verificaba una reconciliacion sincera entre ambas Iglesias. Juan Paleólogo V, fué personalmente á Roma, y firmó la profesion de fé católica, pero no pudo lograr que la aceptasen, ni el clero, ni el pueblo griego, con lo cual quedó sin efecto.

Por último en el Concilio de Florencia, celebrado el año 1439 durante el Pontificado de Eugenio IV, se celebró y firmó la deseada union. Acudieron allí el Emperador Juan VII Paleólogo, con el patriarca griego de Constantinopla José, los vicarios de los otros tres de Alejandría, Antioquía y Jerusalen, y varios Obispos. Ventiláronse de uno y otro lado las diferencias de doctrina, especialmente sobre la procedencia del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, y se redactó una fórmula de union, en que los griegos confesaban este dogma como los latinos, si bien se les confirmaba en el uso de cantar el símbolo como siempre: se ordenaba que cada iglesia consagrase con pan fermentado ó comun, segun su antigua costumbre, y se espresaba con claridad la doctrina católica sobre el purgatorio y vision beatífica de los santos, en que tambien habia algunas diferencias entre ambas iglesias. Solo Marco, arzobispo de Efeso, se opuso obstinadamente y se negó á firmar el decreto de concordia. A su vuelta logró, que el pueblo de Constantinopla, prevenido por los monges y el clero, se amotinase en contra de lo hecho en Florencia; que los tres patriarcas de Alejandría, Antioquía y Jerusalen rechazase n igualmente sus decretos, y que por consiguiente no se llevase á efecto la union deseada. La mayor parte de los obispos que habian firmado la concordia se retractaron, vista la actitud del Clero y pueblo, y la alegria

por tan fausto suceso se desvaneció como el humo. Sin embargo, algunos griegos aun reconocen hoy como legítimo el Concilio de Florencia y permanecen unidos á la Iglesia Católica, así como los pueblos cristianos del Líbano, llamados maronitas, y otros de la Siria, que durante el mismo pontificado de Eugenio IV celebraron su union con Roma (1).

§. 3.° *Cismas posteriores al de Oriente.*

Mientras se preparaba y consumaba el cisma de Oriente, debido, repetiremos, en gran parte á la escesiva intervencion de sus Emperadores en los asuntos eclesiásticos, la misma causa produjo efectos análogos en el Occidente. En tiempo de los Otones, habiéndose suscitado diferencias con el Papa Juan XII, fué el Emperador Oton I con un ejército á Roma, ahuyentó al Papa, y puso en su lugar á Leon VIII. Retirado Oton á los dos meses, volvió el Papa legítimo, y tuvo que huir Leon. Mas luego que murió Juan XII, fué nombrado en su lugar Benedicto V, cuyo nombramiento disgustó tanto al Emperador por no haberse hecho con su venia, que, volviendo sobre Roma, depuso á Benedicto, y restituyó á Leon en su silla. Afortunadamente murieron los dos en un año y cesó la division. A poco tiempo el cardenal Franconi dió muerte al Papa legítimo Juan XIII y se ciñó la tiara con el nombre de Bonifacio VII, pero al mes tuvo que huir á Constantinopla, desde donde volvió á Roma en 983 y encerró en el castillo de Santangelo al Papa Juan XIV, dándole despues una muerte cruel. No tardó él en seguirle, herido visiblemente por la mano de Dios; pero las discordias no cesaron, porque Cresconio, tirano de Roma, creó Antipapa á Juan, obispo de Plasencia, contra el legítimo pastor Gregorio V, hasta que acudiendo el Emperador Oton III, y tomada la ciudad, el tirano y el Antipapa pagaron con la vida la pena de sus escándalos.

Cisma de las investiduras. En tiempo de los Emperadores Enrique IV y Enrique V, fueron en aumento las disensiones, estallando esa lucha terrible y sangrienta conocida con el nombre de *cisma de las investiduras*. Elegido Papa Gregorio VII en 1073, se dedicó desde luego á reformar los graves abusos que se habian introducido, y uno de los que mas llamaron su atencion, fué el escandaloso tráfico que el Emperador Enrique IV hacia de los beneficios eclesiásticos por medio de las investiduras, que cercenaban la libertad de la Iglesia en la eleccion de sus prelados, y hacian en cierto modo derivar la jurisdiccion eclesiástica del poder temporal. Enrique, príncipe de carácter tan fiero y altivo como doble y solapado en sus proyectos, ofreció, y no cumplió, ceder á las miras del Pontífice, hasta que, vivamente apremiado, lo depuso en un concilio reunido en Wornis, notificándole este decreto con el siguiente sobre «Al monge Hildebrando.» Gregorio VII lo escomulgó entonces en un concilio celebrado en Roma: Enrique se abatió y reconcilió con la silla romana; pero luego volvió con nuevo furor á sus proyectos, nombrando Antipapa á Guiberto, arzobispo de Rávena, con el nombre de Clemente III. Gregorio pudo escapar de las manos de Enrique y retirarse á Palermo, donde murió en 1086.

Como este cisma fué célebre, diremos algo de sus causas. Los Emperadores sostenian, como un derecho de la soberanía, en virtud de haber dotado las iglesias y abadías con pingües rentas, la facultad de intervenir en la eleccion de los obispos y abades y concederles por el rito solemne del báculo y anillo (investidura) la posesion de los bienes eclesiásticos, á que iban anejos ciertos derechos temporales. Hay que advertir que la Europa estaba entonces organizada feudalmente, y á la posesion de los bienes territoriales iban unidos los derechos y obligaciones de vasallage. En este concepto, pues, los Emperadores pretendian intervenir en la eleccion de los prelados, que eran grandes feudatarios de la corona, conferirles la investidura de su cargo, y recibir el juramento de fidelidad.

(1) Historia de Gravesson, tomo 6.°, Coloquio 4.° De conciliis tum acumenicis, tum nationalibus, in quibus sæculo Ecclesiæ XV profligatæ sunt hæreses, extincta Schismata, et restaurata ecclesiæ disciplina.
Diccionario Teologico de Bergier, art. griego· id. Canónico del Abate André, art. Florencio.

que era costumbre. Mientras, procediendo de buena fé, se respetaron los derechos de la Iglesia, pudo esta tolerar una práctica propensa á abusos; pero Enrique IV llegó á quitar la libertad de las elecciones canónicas, nombrando personas indignas, y haciendo un tráfico vergonzoso de los beneficios eclesiásticos, pareciendo además, que los Emperadores eran quienes conferian la jurisdiccion espiritual, pues el báculo y el anillo eran signos propios de ella. Tales fueron los males á que Gregorio VII trató de poner coto, y por cuya causa se entabló aquella lucha que continuada por una y otra parte mandando los dos Enriques, y los Pontífices Gregorio VII, Victor III, Urbano II, Pascual II, Gelasio II y Calisto II, se arregló finalmente bajo el pontificado del último en el Concilio Lateranense I, celebrado en 1123. Allí se dispuso (1) que las elecciones de Prelados y Abades se hiciesen libremente por la Iglesia, presente el Emperador, quien conferiria *por medio del cetro* la posesion de los bienes y derechos temporales, renunciando á la institucion *por el báculo y el anillo*, y á la colacion del beneficio espiritual.

Cisma de Burdino. Un poco antes de este suceso, el Papa Gelasio II, por la misma causa que Gregorio VII, tuvo que abandonar á Roma, perseguido por Enrique V, logrando escapar de sus manos en una barca por el Tiber. Burlado el Emperador, hizo que se nombrase Papa á Mauricio Burdino, arzobispo de Braga, que natural de Limoges en Francia, habia venido á España con Bernardo arzobispo de Toledo, por cuya amistad habia sido elevado á aquella silla. Gelasio murió á poco de llegar á Francia de resultas del viaje, y en su lugar fué puesto Calisto II, quien á los tres años venció y prendió al Antipapa Mauricio Burdino, y entró con él triunfante en Roma, llevándole montado sobre un camello, y desterrándole despues á un monasterio de la Cava en los confines de Italia.

(1) Historia universal de Weter, tomo 2.° de la edad media, §. 296 al 300. Historia eclesiastica de Gravesson, tomo 4.°, coloquio 3.°, De schismatibus et hæresibus, quæ sæculis decimo et undecimo Ecclesiam funestarunt.

Cisma de Anacleto II. En la eleccion del Pontífice Inocencio II, en 1130 una faccion osada nombró Antipapa á Pedro de Leon con el nombre de Anacleto II. Para cortar el cisma se convocó el Concilio lateranense II en 1133; pero poco antes de su reunion murió Anacleto, y nada tuvo que hacer el Concilio sobre el objeto principal, limitándose á declarar nulas las ordenaciones hechas por el Antipapa.

Cisma de los cuatro Antipapas.

Las enemistades, que luego sobrevinieron entre la silla romana y el Emperador Federico II, dieron lugar á otro cisma que contó una série de cuatro antipapas. El principio fué el siguiente. A la muerte de Adriano IV, en 1159 fué nombrado Alejandro III por todos los votos menos, tres de los cuales uno, el cardenal de Santa Cecilia, Octaviano usurpó el nombre y título de Papa, llamándose Victor IV. El apoyo que le prestó el Emperador Federico, que tenia enemistad con Alejandro, dió fuerzas á su pequeño partido, que logró echar de Roma al verdadero Papa, y dominar en ella mientras vivió. Muerto Victor IV en 1164, eligieron los cismáticos á Guidon, llamado Pascual III, quien canonizó al Emperador Carlo-Magno. Muerto Guidon en 1168, nombraron á Juan Abad Strunense, conocido entre los suyos por Calisto III. Este reconoció al Papa Alejandro III en 1178; pero los mas rebeldes de su partido pusieron en su lugar á un tal Laudo Stirio, el cual fué cogido por Alejandro III y desterrado en 1180, con lo que concluyó un cisma que habia durado 20 años. Alejandro hizo paces con Federico, y se celebró el Concilio lateranense III en 1179, donde se acordó, para evitar los cismas en lo futuro, que no se juzgase canónica aquella eleccion de Papa, á cuyo favor no hubiesen concurrido las dos terceras partes de votos.

Gran cisma de Occidente, llamado por otros de Aviñon. Por último, á fines del siglo XIV se verificó el gran cisma de Occidente, llamado asi porque tuvo una duracion de 71 años, mucho mayor que la

que habia tenido ninguno de los que hasta entonces se habian verificado en Occidente y porque sus efectos fueron mas desastrosos, y afectararon á toda la cristiandad.

Para comprender el orígen de este cisma, debemos remontarnos al tiempo en que los Papas trasladaron su residencia de Roma á Aviñon. El choque ocurrido entre Bonifacio VIII y Felipe el Hermoso, Rey de Francia, hizo desear á este vivamente, que se nombrase un Papa de su devocion. Logró, pues, que saliese elegido en 1305 Bertrand de Goutte, arzobispo de Burdeos, que tomó el nombre de Clemente V. Este segun las ofertas que habia hecho al Rey, trasladó la silla á Francia, y aunque tomó las insignias pontificales en Lyon, su residencia habitual era Aviñon, que continuó siéndolo de sus sucesores en el Pontificado de Juan XXII, Benedicto XII, Clemente VI, Inocencio VI, Urbano V, y Gregorio XI, todos de nacion franceses. La ciudad de Roma y la Italia toda, ardian en vivas ansias de que volviese á su seno la silla de los Papas, á cuyo logro les ofreció favorable conyuntura la muerte del Papa Gregorio XI, acaecida el año 1378 en Roma, adonde habia ido á ruego de las Santas Catalina de Sena y Brígida, que interesaron su corazon con la pintura del estado deplorable en que estaba toda la Italia. Llamaban los romanos á aquella ausencia de los Papas, *babilónica*, porque como el destierro de los judíos contaba ya 70 años. Asi es, que enardecidos con esta idea, y temerosos de malograr tan propicia ocasion, asaltaron el cónclave de los cardenales reunidos para dar sucesor á Gregorio, y les amenazaron con la muerte, si no nombraban sin mas dilacion un Papa romano, ó al menos natural de Italia. Amedrentados los cardenales, aunque en su mayor parte eran Franceses, pues habia 13 de esta nacion, y solo 4 italianos, eligieron á Bartolomé Priguano, arzobispo de Bari, que se llamó Urbano VI. Fué coronado con la asistencia de todos los cardenales; pero á poco se turbó la paz, y ora porque aquellos se rehiciesen del susto, ora porque no pudiesen llevar la severidad y reprensiones del nuevo Papa, segun los mas, lo cierto es que se salieron de Roma bajo pretesto del ardor del clima, y reunidos en Anaqui, formaron un proceso, en que hicieron constar la violencia sufrida en la eleccion de Urbano, la cual por consiguiente declararon nula, y vacante la silla. Promulgada esta sentencia, se fueron á Fundi, y unidos los 13 en cónclave, nombraron Papa á Roberto, cardenal de Ginebra, que tomó el nombre de Clemente VII. Este se trasladó á Aviñon, y la cristiandad se halló dividida y dudosa, pues no era fácil deslindar cuál de las dos elecciones era la canónica y legítima. A Urbano VI siguieron la Italia, Alemania é Inglaterra. A Clemente VII la Francia y Escocia desde luego, despues España, decidiéndose primero Castilla, y en seguida Aragon. La pintura que hacen todos los autores de semejante estado de cosas es dolorosísima. Los Papas de Roma fulminaban sus censuras contra los de Aviñon, á que estos contestaban con otras iguales: lo que el uno ataba lo disolvia el otro: el prestigio de la autoridad quedaba hondamente lastimado: se tenian en menos las cosas esperituales, se gravaban con pensiones las rentas eclesiásticas, se traficaba con los beneficios, se despreciaban las censuras, se relajaba la disciplina, se encendian las malas pasiones, y todo andaba revuelto y confundido. Urbano VI tuvo por sucesores en Roma, á Bonifacio IX, Inocencio VII, y Gregario XII. A Clemente VII Papa en Aviñon, sucedió en 1394 por unanimidad de votos, el cardenal de Aragon Pedro de Luna, conocido con el nombre de Benedicto XIII. Era el Papa Luna, como suele llamarse en España, hombre de gran corazon y altos pensamientos, versadísimo en ambos derechos civil y canónico; infatigable en el trabajo, y de un carácter tan firme y apegado á su opinion, que rayaba en la terquedad. Fué uno de los que siguieron el partido de Clemente VII, y á sus esfuerzos se debió, el que España se inclinase de su lado. El Rey de Fracia Cárlos VI, hubiera querido que á la muerte del Papa Clemente, los cardenales de su obediencia hubieran suspendido la eleccion para facilitar mejor la concordia con Roma; pero estos se contentaron con hacer un

juramento, comprometiéndose á renunciar la tiara, caso de salir elegidos, siempre que lo hiciesen los de Roma, á fin de concluir la escandalosa division de la Iglesia, y procedieron á nuevo nombramiento. No pensó el nombrado Benedicto en darse mucha prisa, por lo que disgustado el Rey de Francia, y mas especialmente porque empezó á susurrarse si trataba de restituir la silla á Italia, fuese enfriando su amistad, convertido el antiguo afecto en desvío, hasta llegar al estremo de negarle en Francia la obediencia á consulta de la universidad de París. Lo mismo hizo Castilla á su imitacion el año 1400, de tal manera, sin embargo, que no por eso se sometió á su competidor, por lo que á ruegos del Rey de Aragon volvió tres años despues á reconocer á Benedicto, hasta que fué depuesto en el Concilio de Constanza (1).

Mientras tanto no cesaban los príncipes de solicitar á los dos rivales Gregorio XII y Benedigto XIII, para que convocasen un concilio general, en el cual renunciando cada uno su dignidad, se devolviese la paz á la Iglesia. Ninguno de los dos queria dar el primer paso, por lo cual, disgustados los cardenales de la obediencia de Gregorio con el nombramiento que hizo de otros cuatro, faltando al compromiso contraido de no nombrar ninguno, se retiraron á Pisa. Reunidos allí con los de Benedicto, convocaron un concilio, el cual, despues de citar á los dos llamados Papas, que no comparecieron, los declaró fautores del cisma, y depuso de su dignidad. Hecho esto, autorizó á los cardenales de ambas obediencias en número de 23 para que procediesen á nombrar nuevo Papa, saliendo elegido en 1409 Pedro Philargo, arzobispo de Milan, que tomó el nombre de Alejandro V. Murió al año Alejandro, y fué puesto en su lugar Juan XXIII. Pero lo que se creyó un remedio, aumentó mas el daño, pues se contaban tres Papas, los dos antiguos y el nuevamente nombrado.

En tal situacion no quedaba mas medio que el de un concilio general, y era lo que todos los príncipes pedian al Emperador Segismundo, el cual convencido de la misma necesidad, pudo recabar de Juan XXIII su convocacion para Constanza, ciudad de sus dominios. Abrióse el concilio el año 1415, estando presentes el Emperador y el Papa Juan XXIII. Como el único camino de atajar el cisma, se acordó desde luego que renunciasen los tres Papas. Juan XXIII lo hizo, si bien de no muy buen grado, pues habiéndolo ofrecido solemnemente en las primeras sesiones, se huyó al acercarse la época de su cumplimiento; pero fué cogido, y se vió obligado á renunciar. Con esto el príncipe Cárlos Malatesta, procurador del Papa Gregorio XII, hizo tambien la renuncia en su nombre, á cuyo efecto estaba provisto de los poderes suficientes. Restaba solo Benedicto, y de convencerle se encargó el Emperador. Acordaron verse en un punto de la frontera, que al cabo fué Perpiñan, á donde acudieron de una parte el Emperador Segismundo, y de la otra el Rey de Aragon D. Fernando con Benedicto. Ni el Rey ni el Emperador pudieron recabar de él que renunciase su dignidad. Alegaba que solo él era el legítimo Pontífice, y que ya no podia quedar duda, puesto que sus dos competidores habian renunciado, añadiendo que en caso de hacerlo, á solo él tocaba la facultad de nombrarse sucesor, pues era el único cardenal que habia sobrevivido de los tiempos anteriores al cisma, y el único en quien no podia recaer tacha (1). En fin, temeroso de que se le hiciese fuerza, se huyó á Peñíscola, ciudad fuerte en las confines de Valencia, casi toda ella bañada por el mar, á donde siguió tratándose como Pontífice los años que le quedaron de vida. El Rey D. Fernando, disgustado con estos subterfugios, y movido de los consejos de S. Vicente Ferrer, que á este objeto predicó un sermon en Perpiñan, le negó públicamente la obediencia en Aragon el año 1416. Quiso además hacer un viaje á Castilla para conseguir que este reino le imitase; pero la muerte atajó sus intentos, y Castilla

(1) Mariana, historia de España, lib. 19, cap. 11 al final.

(1) Mariana, lib. 20, cap. 7.°

continuó obedeciendo á Benedicto algun tiempo mas.

Entretanto el Concilio, perdida toda esperanza de reducir á Benedicto, procedió á dar contra él la sentencia de deposicion, declarándole cismático contumaz: herético además por esta última circunstancia é incurso en las censuras eclesiásticas. El mismo año 1417 se verificó la nueva eleccion de Pontífice, uniendo para este acto á los cardenales, que existian, 30 electores, á saber: seis de cada una de las cinco naciones, Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, y España. Fijáronse todos los votos en el cardenal Otton Coloma, que fué saludado con el nombre de Martino V, y bajo cuyo cetro fueron agrupándose poco á poco todas las naciones de la cristiandad. Solo se mantuvieron por Benedicto durante algun tiempo el Rey de Escocia y el conde de Armeñaque.

Encerrado aquel en Peñíscola, vivió y murió como Papa el año 1424, dejando ordenado que su cadáver fuese espuesto y enterrado con las insignias pontificales, y llevando su firmeza de ánimo hasta el punto de prevenir á los dos únicos cardenales que le habian quedado, bajo pena de perpétua maldicion, que le nombrasen sucesor. Así sucedió, eligiendo á un tal Gil Muñoz, canónigo de Barcelona. Vacilaba el electo en aceptar, como asombrado de tanta dignidad, pero el Rey de Aragon D. Alonso, por dar en ojos al Papa Martino V, que se inclinaba al bando de los angevinos, contrario en Nápoles á los aragoneses, le alentó para que aceptase con el nombre de Clemente VIII. Dióle al Papa pesar y temor de que se recrudeciese el cisma con tan impensada eleccion, por lo que disolvió al momento el Concilio de Sena para captarse la benevolencia del Rey de Aragon, y mandó por su legado al cardenal de Fox, quien pudo lograr que Gil Muñoz renunciase el año 1429 en un concilio celebrado en Tortosa, á cambio del obispado de Mallorca, con que se le agració. Así terminó este largo y terrible cisma, que de principios, al parecer razonables, vino á degenerar en un vil muladar, segun la enérgica frase de nuestro historiador Mariana (1). Solo nos resta observar que ni Clemente ni Benedicto fueron contados en el número de los Papas legítimos, por lo que el Cardenal Julio de Médicis, creado Papa á la muerte de Adriano VI el año 1523, tomó el nombre de Clemente VII, y el cardenal Orsini en 1724 el de Benedicto XIII. Véase la Coleccion de cánones de la Iglesia de España, por Gonzalez, traduccion de Tejada, tomo 3, pág. 633, sobre el *cisma de Occidente*.

La mala semilla no se arranca siempre de un golpe: así es que á pocos años retoñó con un motivo deplorable. El Papa Martino V, despues de disolver el Concilio de Sena, convocó para Basiléa el general, que correspondia celebrar á los 7 años, designando el legado que á su nombre lo habia de presidir; pero murió precisamente el año 1431, que era el de la convocacion. Puesto en su lugar Eugenio IV, autorizó las determinaciones de su antecesor y confirmó el nombramiento que habia hecho del cardenal Juliano para que presidiese el Concilio de Basiléa. Celebráronse varias sesiones: pero disgustado el Papa Eugenio del giro que tomaban las discusiones, segun unos, y movido, segun otros, del deseo de facilitar la union con la iglesia griega, cuyos prelados, cansados de tan largo viaje, no querian ir mas lejos, trasladó el concilio á Ferrara en 1438, y despues á Florencia. Los padres del Concilio de Basiléa no obedecieron este decreto en su mayor parte, y procedieron á deponer á Eugenio y elegir en su lugar á Amador, duque de Saboya, que tomó el nombre de Félix V. Este cisma, que duró nueve años, nunca tomó grandes proporciones, y concluyó con la muerte de Eugenio IV y nombramiento do Nicolao V, ante quien el Antipapa Félix renunció su efímera dignidad. Despues de este acto, Félix se retiró del bullicio del mundo al silencio de una vida recogida, que le proporcionó una santa muerte, y desde entonces no ha vuelto á alterar la paz de la Iglesia romana ninguno de los varios cismas que antes habian divi-

(1) Historia de España, lib. 20, cap. 14.

Lorenzo Arrazola

dido con frecuencia en partidos la Italia, y aun la misma ciudad de Roma (1).

Cisma de Inglaterra. El espíritu de reforma, inconvenientemente exajerado, produjo en el siglo XVI dias de luto y desolacion para la Iglesia Católica. Dejamos el tratar de los males y trastornos que las nuevas doctrinas religiosas causaron en Alemania, Suiza, Francia y todo el Norte de Europa para sus propios artículos, HEREJIA: PROTESTANTISMO: REFORMA, y por ahora nos limitaremos á referir el cisma de Inglaterra que tuvo diverso orígen. Habia sido la Inglaterra hasta el reinado de Enrique VIII, un pais eminentemente católico. Toda su superficie se hallaba cubierta de ricos monasterios y abadías, de que dan aun señales las pocas que subsisten, y las admirables ruinas de las muchas que fueron destruidas. El mismo Rey Enrique VIII mereció del Papa el título de *defensor de la fé*, con que aun se honran hoy los Reyes de Inglaterra, en justo premio de un libro que habia él mismo escrito en 1521 contra el reformador Lutero. Estaba Enrique VIII casado con Catalina de Aragon, hija de los Reyes Católicos de España don Fernando y doña Isabel, de cuya union habian sido fruto en el espacio de 17 años que vivian en paz, tres hijos y dos hijas muertos en su menor edad, escepto María, que fué luego Reina de Inglaterra.

Catalina habia sido hermosa, y pudo contener las pasiones sensuales del Rey por el largo tiempo que hemos indicado; pero le escedia en edad, de modo que, cuando este contaba 35 años, la Reina pasaba de 43. Puso aquel los ojos en una jóven, dama de honor de la Reina, la famosa Ana Boulen, y como su carácter impetuoso no admitia freno ni contradiccion, trató de divorciarse de su muger, para casarse con la que amaba. Un pretesto habia para cohonestar semejante proyecto, y era que Catalina no fué en un principio destinada para él: era la prometida de su hermano mayor Arthur, con quien se desposó en realidad; pero este murió sin consumar el matrimonio, quedando Catalina viuda, se puede decir, antes de ser casada. ¡Por cierto que Enrique VIII tuvo tiempo de recordar el especioso y antañado suceso despues de 17 años!

Entonces Enrique, que heredó la corona, quiso celebrar el matrimonio que su hermano no pudo consumar, y con el consentimiento de los padres respectivos, y prévia la dispensa de Su Santidad, realizó dicha union. Ocurrióle, pues, utilizar esta circunstancia, diciendo que tenia el escrúpulo de que su matrimonio era incestuoso, y que su conciencia le vedaba vivir mas tiempo en semejante estado. El cardenal legado Tomás Wolsey halagó en un principio las ilusiones del Rey, y con su apoyo y las sugestiones de los dos famosos personajes, Tomás Cranmer y Tomás Cromwell, que tanto figuraron en este drama, pidió al Papa que legitimase el divorcio con Catalina, y declarase nulo su matrimonio. Halló en la corte de Roma, á pesar de tenerle por uno de los hijos predilectos de la Iglesia, la oposicion que no podia menos de escitar tan injusta pretension; y sus reiteradas instancias no pudieron vencer la resistencia del Papa Clemente VII que ocupaba entonces la silla de San Pedro.

Dilataba, sin embargo, Su Santidad, el dar la sentencia, á pesar de los ruegos del Emperador Cárlos V, sobrino de la Reina Catalina, cuyos derechos defendia, por ver si podia traer á Enrique á buen camino, y apartarle de su inícuo propósito. Pero irritado este con la dilacion, en vez de agradecido, formó el plan de negar la obediencia al Papa, y constituirse en jefe espiritual de la Iglesia de Inglaterra: y para realizarlo mejor, nombró primado y arzobispo de Cantorbery al famoso Tomás Cranmer, que hizo un papel tan principal en las sangrientas y trágicas escenas que luego se sucedieron. Desde luego este primado acogió benignamente, como era de suponer, las súplicas del Rey, y en virtud de la jurisdiccion, que decia haber recibido de los Apóstoles, le citó ante su tribunal eclesiástico, y declaró la necesidad en

(1) Gravesson, tomo 6.°, coloquios 2.°, 3.° y 4.°: Diccionario de Bergier, art. Cisma de Occidente: Dicc. Canon. del abate André, art. Constanza.

que por derecho divino estaba de separarse de doña Catalina, muger de su hermano Arthur, *por razon de pecado*, quedando en libertad de contraer nuevo matrimonio. Sin aguardar esta declaracion el Rey, se habia casado ocultamente cinco meses hacia con Ana Boulen, que estaba embarazada, publicando despues su matrimonio en junio de 1533.

Sabedor el Papa de semejante atentado, procedió sin mas dilacion á dar sentencia en el pleito de divorcio ante él pendiente, y el 30 de julio del mismo año 1533, declaró que era válido el matrimonio con doña Catalina, y legítima Reina, y por consiguiente nulo el que habia contraido con Ana Boulen, ilegítimos los hijos que naciesen de esta union, é incurso el Rey en escomunion mayor; suspendiendo, sin embargo, por un mes en cuanto á sus efectos, las censuras eclesiásticas, para darle lugar al arrepentimiento.

No era Enrique hombre que cejaba tan fácilmente en sus propósitos: por lo que á estas amenazas contestó haciendo aprobar por un acta del parlamento la abolicion de la supremacía espiritual del Papa, declarando reos de alta traicion á los que se negasen á reconocer la autoridad espiritual del Rey, y á prestar el juramento que se exigia llamado de *supremacía*. Víctimas ilustres de su deber fueron el lord gran canciller sir Tomás More, el mas distinguido jurisconsulto de su siglo, apreciado en toda Europa por su modestia y elevado carácter, que habia servido lealmente á Enrique VII y á su hijo, hasta que se le exigió un juramento contrario á su conciencia. La misma suerte cupo al Rev. Juan Fischer, obispo de Rochester, el único consejero del tiempo de su padre, que habia quedado, á quien el mismo Enrique habia colmado de distinciones por su celo y lealtad. Estos dos personajes abrieron el camino á otros muchos de todas clases que subieron al patíbulo, unos por *papistas*, y otros por *herejes* ó protestantes.

Una vez declarado el Rey jefe de la Iglesia de Inglaterra, constituyó por su vicario general con facultades espirituales en el reino al insigne Tomás Cromwell, conde de Essex, quien hizo girar una visita á todos los monasterios del reino para preparar su abolicion. De sus resultas se aprobó en 1536 un acta del parlamento suprimiendo todos aquellos, cuyas rentas no llegaban á cierta cantidad, y en que el número de monjes era menor de doce, bajo el pretesto de relajacion de su instituto, y de no cumplirse bien las obligaciones de la fundacion; adjudicando á la corona todas sus propiedades, muebles, alhajas y ornamentos. Con esta ley fueron desde luego suprimidos cerca de 400 monasterios, y al año siguiente lo fueron tambien los restantes, que habian sido esceptuados. Asi se estimuló la codicia y el celo de los individuos del Parlamento para ayudar al Rey en su obra, pues empezaron á participar del fruto de sus disposiciones, y á adquirir grandes bienes y riquezas. Llegó á tanto su importunidad, que un dia quejándose el Rey á Cromwell de ella, esclamó: *¡Por nuestro Señor!: los cuervos acabarán por tragarse el plato, despues de haberse comido la carne!*

Sin embargo, Enrique VIII no quiso atentar al dogma ni al culto católico, y en él hallaron los protestantes un obstáculo invencible para publicar sus doctrinas en Inglaterra. A este efecto hizo promulgar en 1539 un estatuto de seis artículos, en que se mandaban creer los puntos mas disputados por los reformadores. En el primero se manda creer en la transubstanciacion en el Sacramento de la Eucaristía: el 2.° declara, que basta para la salvacion la comunion bajo una sola especie: el 3.° establece el celibato de los clérigos: el 4.° la necesidad de cumplir los votos de castidad y viudez: el 5.° la bondad y necesidad de las misas privadas; y por último, el 6.° previene, la conservacion necesaria en la Iglesia de la confesion auricular. Asi es que, tanto los amigos de la reforma, como los verdaderamente católicos, tenian que incurrir en sus iras: iras por cierto terribles, que llevaban á unos y á otros á la muerte; y los historiadores citan el caso, de que en un mismo dia fueron quemados, como

herejes, tres protestantes, y degollados por papistas otros tres católicos (1).

Para que aparezca mas al descubierto el verdadero móvil de la conducta de Enrique VIII, que fué el principio por donde toda la Inglaterra se despeñó en el cisma y luego en la heregía, convendrá fijar bien ciertos rasgos de su carácter dominante y sensual. Se divorció de tres mugeres: primero de Catalina de Aragon, por escrúpulos de conciencia: segundo, de Ana de Boulen, por considerar este matrimonio contraido en vida de aquella, como un adulterio: tercero, de Ana de Cleves, porque no le agradaba su figura: á dos las envió al patíbulo, á la citada Ana Boulen y á Catalina Howard, sobrina del duque de Norfolk; y todavía tuvo otras dos, Juana de Seydmur, que murió del parto de Eduardo VI, y la viuda Catalina Parr, que fué la última, y salvó la vida casi por milagro. No admitió contradiccion de nadie; y si el Parlamento iba algo despacio en adoptar los *bills* que le proponia, sabia hacer á sus individuos insinuaciones á que inmediatamente respondian. Su principal instrumento fué Tomás Cranmer, arzobispo de Cantorbery, quien declaró la validez de los tres divorcios, á pesar de fundarse en supuestos contradictorios; y en el reinado sucesivo tuvo mucha parte en la nueva Iglesia establecida por la ley. Si por una inversion imcomprensible de la naturaleza de las cosas, el cisma de Inglaterra pudiera parecer plausible, como lo parecerá á sus sectarios; siempre tropezaran en su principio con un orígen que sonroja. Veamos todavía sus fases.

El cisma de Inglaterra presenta en efecto cuatro fases diversas, á saber: bajo Enrique VIII, la primera; la segunda, bajo su hijo Eduardo; la tercera comprende el reinado de María: y la cuarta el de Isabel y sus sucesores. Concluida la primera, pasemos á la siguiente.

Muerto Enrique VIII en el año 1547, le sucedió su hijo Eduardo, de edad de diez años, bajo el cual, y la autoridad del Consejo de regencia, compuesto de diez y seis testamentarios, que su padre dejó instituido, puede decirse que principió la *Iglesia anglicana*. Entonces tuvieron franca entrada las doctrinas de la reforma, y acudieron á propagarlas instigadores estranjeros. El mismo Cranmer, que habia sostenido el estatuto de Enrique VIII, y condenado á ser quemados como herejes los que no creian en el dogma de la transubstanciacion, procedió á su derogacion y al establecimiento de los cuatro capítulos de Eduardo, en los que se negaba la presencia real en el Sacramento de la Eucaristía, se proscribia el uso de las cruces, imágenes, reliquias y vasos de oro y plata en las iglesias, se abolia la misa y se permitia el matrimonio á los clérigos. El cisma no era ya sino desbocada heregía. Ayudado Cranmer por el protector duque de Sommersset, publicó varias homilías para preparar el tránsito á la nueva religion, y por último compuso el llamado libro de oraciones, que, despues de varias reformas, rige todavía, y en el cual se establecia el nuevo rito. En su consecuencia (1) comenzó de nuevo el saqueo de las iglesias, se derribaron los altares, y en su lugar se pusieron mesas, y las catedrales y parroquias se vieron despojadas de las muchas alhajas y riquezas que Enrique VIII habia respetado. Hubo, es verdad, en algunos condados movimientos populares contra estas novedades; pero la fuerza triunfó, y los movimientos fueron sofocados.

Eduardo VI murió en 1553, á los seis años de reinado; y despues de la inútil tentativa de coronar en Lóndres á Juana Grey, casada con un hijo del protector duque de Northumberland, cuyo efímero reinado duró nueve dias; María, la hija del primer matrimonio de Enrique, subió al trono. Cranmer y sus secuaces hicieron todos los esfuerzos imaginables para oponerse, sabiendo que era católica; pero el pueblo, los nobles y hasta los grandes se fueron del lado de María, de modo que tuvieron que ceder ante la

(1) Manual del Derecho eclesiástico de Walter, cap. 3.° Bases del Derecho canónico protestante, lib. 1.°

(1) Historia de la reforma protestante en Inglaterra é Irlanda por sir Wilam Cobbett.

reprobacion universal, empezando asi la *tercera época.*

María era en efecto católica, y el entusiasmo, con que la nacion la acogió, algo queria significar en este punto. Aun antes de abolirse las disposiciones de Eduardo, en todas partes fueron echados de los templos los sacerdotes casados, vueltos á erigir los altares, y celebrado en ellos el sacrificio de la misa. El parlamento se prestó gustoso á abolir todas estas leyes; pero no mostraba tanta docilidad para reconciliarse con la corte de Roma, y reconocer la autoridad del Papa, que eran los deseos de la Reina. Por razones, tal vez enlazadas con dicho fin, se habia esta casado en 23 de julio de 1554 con el príncipe de España don Felipe, hijo y heredero del Emperador Cárlos V, quien como regalo de boda hizo un acto de galantería muy propio de su elevado carácter, y halagüeño al orgullo inglés. Poco antes de celebrarse el matrimonio, llegó á toda prisa un embajador suyo con la cesion del reino de Nápoles á favor de su hijo, alegando, que el Emperador no creía digno de una Reina de Inglaterra, el casarse con quien no fuera Rey. El enviado depositó los títulos en manos del lord gran canciller. Despues del casamiento, y puesta toda su mira en la reconciliacion de la Inglaterra con la Iglesia católica, logró la Reina que el parlamento alzara el decreto de proscripcion dado en tiempo de Enrique VIII contra el cardenal Pole, de la ilustre familia de los condes de Salisbury, á quien el Papa Julio III revistió con el carácter de legado *á latere*, y fué en su patria recibido con singulares muestras de aplauso. Llegado á Lóndres, el parlamento dirigió una peticion al Rey y á la Reina en 29 de noviembre de 1554, manifestándoles su profundo dolor por la separacion de la Iglesia católica, y solicitando de SS. MM., *que mediante no habian participado del pecado* (1), intercedieran con el Santo Padre para su absolucion. Esta se verificó al dia siguiente, y con gran solemnidad. Sentada la Reina en su trono, teniendo á su izquierda al Rey, y á su derecha al cardenal Pole, legado de Su Santidad, fueron introducidas las dos Cámaras, y el obispo Gardiner, en concepto de lord gran canciller, leyó la citada peticion. El Rey y la Reina conferenciaron brevemente con el cardenal Pole, y este, despues de pronunciar un discurso alusivo al acto, echó en nombre de Su Santidad la absolucion, que recibieron de rodillas los miembros de ambas Cámaras, pasándose luego á cantar un solemne *Te-Deum* en accion de gracias. Asi se verificó el fausto suceso de la vuelta de Inglaterra á la comunion católica, union que duró muy poco tiempo por la desgracia de morir pronto la Reina. ¡Grandes enseñanzas presenta bajo el punto de vista político, moral y religioso la historia del cisma de Inglaterra; resaltando entre ellos el gran poder que siempre tiene para lo malo y para lo bueno *el ejemplo de la cabeza*!

La historia nos conduce ya á la *cuarta época.* Muerta María en 1558, á los seis años de reinar, subió al trono su hermana Isabel, hija de Ana de Boulen, á pesar de haber sido declarada ilegítima por una acta del Parlamento, que anuló el matrimonio de su madre. Con su elevacion volvió la Inglaterra á separarse del catolicismo, y se renovaron las sangrientas escenas que antes habian tenido lugar. Preciso es decir que hasta cierto punto la política y la ambicion obligaron á Isabel á seguir este camino. Hija ilegítima de Enrique VIII, carecia de derecho para reinar, desde que el Papa Paulo IV se negó á reconocerla, con lo cual su altivo carácter se irritó. Por desgracia recaía el derecho de sucesion en María Stuart, Reina de Escocia, á la sazon casada con el Delfin de Francia. La rivalidad constante entre estas dos naciones, muy viva entonces en los ingleses, por la reciente pérdida de *Calais*, favoreció á Isabel, que vino á representar la bandera de la independencia; pues si María, Reina de Escocia y de Francia, lo hubiera sido tambien de Inglaterra, este reino no hubiera sido mas que una provincia suya. Esta circunstancia, unida al recelo que le causaba la ilegitimidad de su nacimiento y

(1) Historia citada de Cobbett.

el temor á los católicos, la empeñaron luego en apartarse de ellos, y en ser su mas cruel enemiga. Apenas subió al trono, se encaminaron sus actos á romper con la corte de Roma, restableciendo los decretos de su padre sobre la autoridad del Rey en los asuntos eclesiásticos, y el juramento de *supremacía*. Despues renovó algunos de los acuerdos del tiempo de su hermano Eduardo, entre ellos la ley del matrimonio de los clérigos y con ella el libro de oraciones de Cranmer, con algunas enmiendas y reformas. Por último, en un sínodo celebrado en Lóndres en 1562, se fijó la confesion de fé de la Iglesia anglicana en 39 artículos (1). En ellos se confiesan los misterios de la Trinidad, de la Encarnacion, de la Resureccion de Nuestro Señor Jesucristo y la Divinidad del Espíritu Santo. Se admiten como canónicos todos los libros del Nuevo Testamento; pero se quitan del Antiguo los libros de Tobías, de Judith, una parte del de Esthér, la Sabiduría, el Eclesiástico, Baruch, algunos capítulos de Daniel y los dos libros de los Macabeos. Se reconoce la existencia del pecado original, del libre albedrío, y la necesidad del auxilio de la gracia; pero se sostiene que el hombre queda justificado por la fé sola. Se desecha la doctrina católica del purgatorio y la veneracion á las reliquias é imágenes, así como la invocacion de los Santos. Solo se admiten dos sacramentos, el Bautismo y la Comunion. Respecto de la Eucarística se niega la transubstanciacion, y por consiguiente el uso de adorar y conservar este sacramento, diciendo que se recibe el cuerpo de Nuestro Señor solo de un modo celestial y espiritual, y que esto se hace por medio de la fé. Aunque se deja indeciso el punto de la presencia real en este sacramento, el anterior modo de espresarse parece ser mas favorable á los que le niegan. Así en los artículos siguientes se desecha la doctrina tocante al sacrificio de la misa, como una idolatría y una blasfemia. Se declara que los obispos, presbíteros y diáconos pueden casarse; y por último, que el Papa no tiene jurisdiccion ninguna en la Iglesia de Inglaterra.

Este sistema, para realizarse, necesitó apoyarse en leyes duras y represivas: el oir misa, el confesarse, el hospedar, sobre todo, á un sacerdote católico, eran delitos que se pagaban con la vida. Pero lo que prueba mas la tiranía con que se procedió, fué la ley que obligaba á los católicos á asistir á las iglesias *oficiales*, bajo pena de crecidas multas y de vejaciones severas, á que los esponia la sospecha de *papistas*. A los que tenian esta nota podian los magistrados, siempre que lo creyesen conveniente, exigirles el juramento de *supremacía*, y si se resistian á prestarlo, imponerles la pena de *prision perpétua* y confiscacion de bienes. Esta política fué seguida sin intermision por los Reyes sucesores de Isabel, y cada una de las infinitas revueltas que se sucedieron, aumentando el miedo, solo servia para agravar su rigor. Así, despues de las guerras civiles y religiosas en 1678, se exigió para entrar en el Parlamento, además del juramento de *supremacía*, la abjuracion de los dogmas católicos.

La llamada gloriosa revolucion, que arrojó del trono á Jacobo II y dió la corona á la Reina María y su marido Guillermo de Orange, aumentó la severidad de las leyes contra los católicos hasta el punto de cercenarles los derechos civiles de adquirir y poseer bienes territoriales; leyes que empezaron á modificarse luego que estalló la revolucion americana (1). Este suceso hizo variar la política inglesa y aflojar su rigidez inflexible, alzándose primero las trabas impuestas en los derechos civiles y despues en los políticos. Por último, el bill llamado de emancipacion de los católicos, que despues de rechazado tres veces, logró hacerlo pasar en la alta Cámara el ministerio del duque de Wellington en 1829, hizo cesar todas las formas de juramento inventadas, y

(1) Diccionario teológico de Bergier, art. anglicano: Enciclopedie moderne, art. Angleterre.

(1) Manual del derecho eclesiástico de VValter, lib. 1.°, cap. 5.° Derecho de la Gran Bretaña é Irlanda. Historia de la reforma por Cobbett.

los católicos pueden sentarse en ambas Cámaras, obtener destinos públicos y concurrir á las elecciones sin tener que ocultar sus principios religiosos. A pesar de tan largas persecuciones el catolicismo vive en Inglaterra y gana cada dia terreno en los espíritus imparciales y eminentes, como lo prueban la reciente division de provincias eclesiásticas hecha por el actual Pontífice Pio IX, la contínua ereccion de iglesias y capillas, y la numerosa lista de conversiones notables que cada año se publica. En Irlanda, mas castigada aun que la Inglaterra, el catolicismo cobija aun bajo sus alas las nueve décimas partes de la poblacion, dándoles virtud para sufrir y paciencia para esperar.

Cisma de Francia durante su revolucion. La revolucion francesa, hija hasta cierto punto de la inglesa, é inspirada por las ideas irreligiosas y reformadoras que difundió por el mundo la llamada secta de los *filósofos*, á cuya cabeza figura el *famoso Voltaire*, no desmintió las tendencias anti-católicas á que debió su orígen. Así, cuando se creyó dueña de la Francia, y aspiró á la propaganda universal, se mostró en su verdadera desnudez atea, cruel, intolerante. De aquí resultó un cisma que duró unos diez años. La Asamblea constituyente, que se propuso reorganizar la Francia á su modo, decretó en 1790 una constitucion civil del clero, cuyo nombre no correspondia á su esencia, pues se entrometia en su organizacion y facultades espirituales: porque en dicha constitucion, segun veremos mas por estenso en su artículo propio: se suprimian unas diócesis, se mudaban y erigian otras nuevas: sin contar para nada con la autoridad pontificia, se variaba el método de eleccion de los prelados y curas párrocos: adoptando el voto popular, se prohibia á aquellos que obtuviesen la institucion canónica del Sumo Pontífice, y se cercenaban las facultades espirituales de unos y otros, disposiciones á que ningun católico podia suscribir. Publicada la ley, se exigió á todos los eclesiásticos el juramento de obedecerla y cumplirla. De 135 obispos titulares, solo cuatro cedieron; uno de ellos, el despues tan célebre Talleyrand, obispo de Autun, con lo cual tuvo principio el cisma. En lugar de los obispos, que se negaron á jurar, se nombraron otros, que á su vez exigian igual juramento de los párrocos, despojando de sus beneficios á los que se negaban á prestarlo.

Asi se consumó en todo el reino un cisma dolorosísimo, que los Breves de Pio VI, tanto á los católicos, como á los cismáticos, no pudieron atajar, pues no solo eran cismáticos los obispos y curas jurados, sino aquellos que tenian con ellos comunion. La persecucion que á poco sobrevino contra toda idea religiosa, y en especialidad contra los eclesiásticos, comprendió á unos y á otros en su furor. Conviene, sin embargo, advertir que el clero constitucional no dejó consignadas muchas pruebas de valor ni de virtud, pues fueron bastantes los que apostataron y cometieron toda clase de crímenes por congraciarse con la revolucion.

Pasado el régimen del terror volvieron á abrirse algunas iglesias católicas; pero siempre con la incertidumbre y esposicion á que las sujetaba la variable conducta de gobiernos tan débiles, como fué el directorio. Mas cuando Napoleon fué creado primer cónsul y empezó á respirarse el sosiego de la libertad, el culto católico revivió con su antiguo vigor. Conocia Napoleon cuanto le interesaba restablecer la concordia con la Iglesia romana: y sus miras se fijaron en celebrar un Concordato, que firmó en 1801 con Pio VII. Era una de sus bases que Su Santidad interpondria todo su valimiento, para que los obispos existentes renunciasen sus sillas, y cortar de raiz las dudas sobre la legitimidad de su nombramiento, y volver la paz á las conciencias. La mayor parte cedieron y presentaron su dimision; pero otros, en número de 36, espusieron reverentemente que no creian legítima la convencion ni efecto de la libre voluntad de Su Santidad. A pesar de todo, el Papa suprimió todas las sillas y erigió otras nuevas, nombrando para ellas el primer cónsul en virtud de las facultades que le daba el Concordato, salva la institucion canónica al Sumo Pontífice, segun la costumbre antiguamente usada.

Lorenzo Arrazola

Empero, á instigacion de Fouché, fueron nombrados algunos de los obispos jurados con la idea de amalgamar los dos partidos, y con el mismo fin prohibió el gobierno que se exigiese retractacion alguna de los cismáticos. La Santa Sede, sin embargo, no prestó su asentimiento, ni confirmó á los obispos jurados, sin que antes hubiesen firmado su retractacion; pero el doctor Bernier, encargado de recibirlas, dió falso testimonio de varias, é indujo en error á la corte de Roma, segun luego se descubrió por la jactancia de algunos. En cuanto á los demás eclesiásticos, la mayor parte de los obispos la exigian de todos los clérigos jurados, ó al menos una protesta de adhesion al nuevo órden establecido, para no contrariar directamente las disposiciones del gobierno. Esta divergencia, de miras y de conducta, impedia que se cimentase de una manera sólida la tranquilidad de las conciencias: así que cuando Pio VII fué en noviembre de 1804 á coronar al Emperador, exigió de todos los obispos que se habian adherido al cisma, y eran sospechosos de no haberse retractado, un juramento de sujecion al juicio de la Iglesia romana en los negocios eclesiásticos pertenecientes á la Iglesia de Francia, cuya fórmula de juramento todos suscribieron (1).

De aquí resultó otra secta, tambien cismática, por el estremo contrario, llamada la *petitte eglise*. Muchos de los sacerdotes católicos, que habian sufrido mil persecuciones y trabajos durante la revolucion por negarse á apostatar, y permanecer fieles en el cumplimiento de sus deberes religiosos, llevaron muy á mal las disposiciones del Concordato: y fundándose en que Su Santidad se habia escedido de sus facultades, permitiendo que volvieran á ocupar las sillas y parroquias eclesiásticas cismáticos, que no habian hecho una pública retractacion de sus errores, trataban de alterar la paz y sustraer á los fieles de la obediencia á sus pastores instituidos. Esta doctrina tendia á crear otro cisma, pues todos los que se comunicaban con los dichos prelados y párrocos, se hacian por solo esto cismáticos, y resultaba que solo unos pocos, á la manera de los antiguos *luciferianos*, eran los verdaderos católicos, y por eso se apellidaban la *petitte eglise*. De los 36 obispos que resistieron en un principio, todos, menos uno, presentaron sus dimisiones en 1817, y fueron nombrados para otras sillas. Solo Mr. de Themines, obispo de Blois, sostuvo á los novadores, llevando su ridícula pretension hasta suponer que él solo podia legítimamente ejercer la jurisdiccion en toda la Francia. Semejante estravagancia, hija de la debilidad de su cabeza, la retractó antes de morir, siendo muy pocos desde entonces los que siguieron en la *pequeña iglesia*, hasta que fué del todo estinguida (1).

SECCION III.

CONSIDERACIONES GENERALES, SOBRE EL ORÍGEN Y CONSECUENCIAS DE LOS CISMAS: REGLAS PRÁCTICAS DE CONDUCTA EN TIEMPO DE CISMA.

La unidad de la Iglesia Católica, y la necesidad de estar dentro de ella para conseguir la salvacion espiritual, es un dogma constante del catolicismo. Desde su orígen aparece esta unidad, que su divino fundador quiso establecer de una manera clara y evidente. La designacion especial de Pedro para fundamento de su Iglesia, la mudanza del nombre en otro mas significativo y apropiado á este fin, las mayores pruebas de amor de él exigidas, su prontitud en responder por todos, la importancia que tuvo despues de la muerte del divino Maestro, el acto de haberse reconocido en sus sucesores sin interrupcion el primado de jurisdiccion, son razones que confirman el ánimo en esta verdad. Los Padres antiguos de la Iglesia la confiesan, y con mil figuras elegantes pretenden hacerla visible á nuestros ojos (2). Quien la enuncia *unum ovile, et unus pastor*, quien el arca Santa: quien, como S. Cipriano, la compara ya al sol que despide infinitos rayos, ya al

(1) Instituciones Thológicæ ad usum seminariorum, auctore T. B. Bouvier, episcopo cenomanensi, editio sesta, tomo 1.°: Diccionario teológico de Bergier.

(1) Instituciones ya citadas de Mr. Bouvier.
(2) Cours alphabetique de Droit canonique par Mr. Labbé Andrés, tom. 2, art. Schisma.

árbol que estiende sus copudas ramas salidas todas de un tronco, ó bien á los diversos, arroyos, que naciendo de una misma fuente, llevan la fecundidad á todas partes, y por opuestas regiones. Los rayos, las ramas, los arroyos, son las iglesias particulares, cuya vida parte de un foco, de un centro, de un mismo origen, que es la Iglesia universal. Los que se han separado de esta union, no han empezado combatiendo el principio en que se funda; sino que mal hallados con su freno, lo han roto primero, y despues han querido justificar su conducta. La reseña histórica de los principales cismas, que hemos hecho, derrama bastante luz sobre los vergonzosos motivos que han separado de la comunion católica á tantos pueblos y naciones, como, ya definitivamente; ya por intervalos mas ó menos largos, han vivido ó viven en la oscuridad del error. El orgullo, la ambicion, la incontinencia, los celos de poder, han sido el fecundo manantial de que han tomado orígen todas esas divisiones, errores y discordias que han desgarrado el seno de la Iglesia universal. Prescindiendo de las diversas heregías, aunque á ellas sea del mismo modo aplicable, cuanto acabamos de decir, detengámonos algunos instantes, en pasar revista á las causas de tan dolorosas escisiones.

Si empezamos por el cisma griego, se nos presentan de bulto tres, como las mas principales y verdaderas: 1.ª el celo de los Emperadores, que querian entremeterse en los asuntos de la Iglesia mas de lo que era permitido, y que llevaron muy á mal la ereccion del Imperio de Occidente, y la coronacion de Carlo-Magno por el Papa Leon III, verificada el año 800. Este poder rival, y la independencia que con su apoyo ganaba la silla romana, les preparó á desear primero, y realizar despues, la separacion de su Iglesia: 2.ª la ambicion de los patriarcas de Constantinopla, ávidos de prerogativas y émulos del Pontífice romano; causa que vino á combinarse y dar calor al elemento imperial, ya predispuesto á su favor. De muy antigua fecha databan sus aspiraciones, pues es sabido, que ya el Patriarca Juan *Jeunator* quiso arrogarse el título de obispo universal, que rechazó San Gregorio Magno, tomando para sí desde entonces el de *Servus Servorum Dei*, á fin de dar en ojos con su modestia al desmedido orgullo de tan insensata pretension. Mas no por eso cejaron aquellos patriarcas en sus propósitos de engrandecimiento; antes bien los renovaron en varias ocasiones, siempre con el mismo éxito, hasta que, decididos, se lanzaron en el único camino abierto a su ambicion: 3.ª y última la conquista de Constantinopla por los latinos y el efímero Imperio que estos fundaron, vino á hacer mas hondas las rivalidades que existian entre ambos pueblos, y creó sérios obstáculos á la union, que despues se vió no presentaba dificultades invencibles en las cuestiones dogmáticas y de disciplina.

Los otros cismas nacidos de la reforma, cuentan aun motivos mas bochornosos y menos disculpables. No hay mas que examinar quiénes son los héroes de la reforma, y qué les movió á declamar contra Roma, y se verá que todos eran hombres de mala nota, de peor conducta, y de bajas y súcias pasiones. Ellos se juzgan unos á otros de una manera tan espresiva, que nos ahorran este desagradable trabajo, y le quitan la nota de parcialidad con que pudiera tildársele. El motivo, que los impulsó en su fatal empresa, fué el orgullo ofendido, la avaricia refrenada, el aguijon punzante de las pasiones mas groseras que anhelaba un estado mas libre, ó mejor dicho, mas licencioso, en que poder satisfacer sus ilícitas aspiraciones. Ninguno llevó aquella vida irreprensible que conviene á un reformador: ninguno maduró ni enseñó un sistema completo de doctrina; sino que cuando se vieron arrastrados á romper con Roma, fueron inventando sus dogmas á medida de las circunstancias. De aquí las infinitas contradicciones en que incurrian á cada paso, no solo unos con otros, sino con las propias opiniones que cada uno habia emitido.

Bástanos enunciar estas indicaciones, que en su lugar recibirán toda la prueba y esplanacion necesarias, y pasemos á la Inglaterra. La incontinencia y el tiránico orgullo de Enrique VIII, despeñaron esta nacion en el cisma

primero, y despues en la heregía, á despecho de su primer causante. La obra de Enrique no duró mas que su vida, y aun ese corto tiempo sostenida por la violencia y la tiranía. A su muerte tomaron posesion del Estado aquellas doctrinas que él mismo juzgaba heréticas, y dignas de castigarse con la pena capital. Dos siglos de saqueos, muertes, persecuciones, guerras religiosas, discordias civiles se siguieron á este suceso y ensangrentaron todas las regiones y condados de la Gran Bretaña: dos revoluciones conmovieron hondamente sus cimientos: dos Reyes fueron destronados, muerto el uno en un patíbulo por pretestos religiosos, y arrojado el otro del suelo pátrio por motivos especialmente políticos. El cansancio puso fin á la lucha, y la tolerancia que hoy disfruta, fué mas bien su efecto y un hecho necesario, que no una máxima *á priori* introducida. Las causas, pues, de su doloroso cisma fueron las mismas que las de todos; si bien siempre han procurado cubrirse con la máscara de reforma de abusos, de celo por las buenas doctrinas, de amor á la verdadera religion, y ódio al fanatismo.

Las consecuencias podemos apreciarlas con exactitud, comparando solo hechos con hechos, y resultados con resultados. Desde que la Iglesia griega se separó de la latina, ¡cuán diferente ha sido la vida de una y otra! Aquella, tan fecunda antes en ingenios esclarecidos, en Santos Padres, en escritores elegantes arrastra una vida parásita, y, como encerrada en una atmósfera estrecha, respira con dificultad; mientras la Iglesia latina florece en doctrina, se fortifica en virtudes, se estiende por todas partes, cobija en su seno los gérmenes puros de la civilizacion moderna, propaga las ideas humanitarias, y dá fomento suave, y calor á todo lo grande, heróico y sublime que distingue las modernas edades. ¿Qué parte puede reclamar la Iglesia griega en esta obra magnífica y sorprendente? ¿Qué elemento ha llevado á la actual civilizacion? ¿Qué mejora en las costumbres, en las leyes y en la gobernacion de los pueblos le es debida? Y téngase en cuenta, que de todas las Iglesias disidentes, la griega, que es la que menos se separa del catolicismo, encierra mas prendas de vida, y de paz y ventura para los pueblos! Esta es una ley que viene á demostrar la verdad del catolicismo *á posteriori*, como los sentimientos del corazon y las necesidades del espíritu la confirman y enaltecen *á priori*, ante el mismo tribunal de la razon. Cuanto mas se acerca una religion á la católica, cuanto mas de ella conserva, mejor llena los fines sociales de su institucion. Así lo vemos confirmado en la conservacion de la Iglesia griega, que dura todavía formando un cuerpo unido en doctrina, costumbres y disciplina: asi lo vemos, entre las sectas protestantes, en la Iglesia anglicana, que conservó mas de las doctrinas, ritos y ceremonias católicas. Sin embargo, ese protestantismo, que tanta fuerza pregonaba, y con tan altas pretensiones se anunció en el mundo, apenas cuenta hoy poco mas de tres siglos de existencia y ya lleva en su rostro marcadas las señales de la decrepitud y de la muerte. Frutos suyos han sido el indiferentismo religioso, que aqueja á todos los paises, el culto de los intereses materiales, el resfriamiento de la caridad cristiana, la falta de apoyo sólido en las ciencias, en la moral, y en la politica. Por el contrario el catolicismo vive, y vive lleno de vigor, despues de diez y nueve siglos de combates, y su vida que debe parecer un milagro á los ojos del incrédulo, es para el católico la confirmacion de la bondad de su doctrina, la sancion irrevocable de su divinidad, el cumplimiento de una promesa eterna.

En todos estos cismas, de que hemos hablado hasta aquí, vá mezclada la heregía; pero cuando se limitan á romper la paz de la unidad, estableciendo la division por la multiplicidad de cabezas, como sucedió en el cisma de Aviñon, sus consecuencias no son tan graves. En este caso la cuestion es mas bien de hecho que de derecho. Porque todos reconocen el mismo principio, y la necesidad de vivir bajo un solo pastor: todos acatan los legítimos derechos del que juzgan verdadero, sino que cada parte cree que la justicia está de su lado. Es cierto que en la disputa no puede menos de padecer el prestigio de la

autoridad; pero no se le combate ni contraría de propósito.

El ejemplo citado lo prueba. La eleccion de Urbano VI, á pesar de las amenazas del pueblo romano, fué tenida por legítima, porque aquellos mismos cardenales que luego se digeron violentados, no protestaron en seguida, sino que asistieron á la coronacion del Papa, y además escribieron individualmente á los príncipes para que lo reconociesen. Por otro lado, el nuevo nombramiento de Clemente VII, que seis meses despues hicieron en *Fundi*, pudo parecer legítimo por la coaccion sufrida en la primera eleccion. La cuestion era á la verdad dudosa: los jurisconsultos, canonistas y teólogos llamados á resolverla, opinaron de distinto modo: por eso la cristiandad se dividió casi en dos partes iguales. Lo que aconseja en semejantes casos la prudencia, es abstenerse de reconocer á ninguno de los contendientes, hasta que la Iglesia pronuncie su fallo (1).

Este fué el camino que siguió España al principio durante algun tiempo, hasta que Castilla, á imitacion de la Francia y cediendo á la ansiedad general, se decidió á dar la obediencia á Clemente en una junta de prelados, jurisconsultos y personas notables del reino, habida en Salamanca. Díjose por entonces, segun afirma Mariana (2), que en esta resolucion se tuvo mas cuenta con la amistad del Rey de Francia, que con lo que pedian el derecho y la justicia. Aragon se mantuvo neutral todavía algunos años; pero á la muerte del Rey D. Pedro IV el Ceremonioso, su hijo D. Juan celebró en Barcelona otra junta, que acordó seguir el ejemplo de Castilla. A los pueblos y particulares no les toca mas que obedecer á sus prelados y gobiernos, porque como dice San Antonino, arzobispo de Florencia, no tienen obligacion de saber el derecho canónico, ni pueden juzgar cuál eleccion es la legítima y verdadera. Por eso en la obediencia de los dos Pontífices se cuentan varones que florecieron en virtudes y santidad, como San Vicente Ferrer en la de los Papas de Aviñon, y Santa Catalina de Sena en la de Roma. Mas, cuando la Iglesia universal pronuncia su fallo contra todos ó alguno de los que se disputan la legitimidad, ó por hechos indudables se adquiere el convencimiento de que se oponen con su terquedad á restituir la paz á la Iglesia, entonces nace ya un deber de apartarse de su obediencia. Asi el mismo San Vicente Ferrer, que con tanto ahinco trabajó á favor del Papa Luna en España y Francia, cuando se convenció de que su intento era conservar á toda costa la dignidad pontificia, y vió que se negaba al sacrificio de renunciar, que la Iglesia y la cristiandad unidas le pedian, y cuyo ejemplo le habian dado sus competidores, le abandonó y procuró con el Rey de Aragon don Fernando que hiciese lo mismo en su reino. La paz y la unidad de la Iglesia son la ley suprema para todos (1).

(1) Ferraris, Biblioteca canónica, art. Schisma.
(2) Mariana, Historia de España, lib. 18, Cap 4.°, y cap. 11.

SECCION IV.

EFECTOS CANÓNICOS DE LOS CISMAS: ABSOLUCION: RECONCILIACION: EFECTOS CANÓNICOS DE ESTA Y DE AQUELLA.

Todos los efectos del cisma podemos derivarlos de este principio, tan sencillo en sus términos, como general en su aplicacion: *los cismáticos se colocan fuera de la Iglesia.* De aquí el que en ella no pueden ejercer jurisdiccion, y este es uno de los mayores efectos de su pecado. Sobre este punto se hallan acordes todos los autores y espositores del derecho canónico, de modo que todo cuanto hagan dependiente de este órden jurisdiccional es nulo y de ningun valor. Por eso son nulas las absoluciones, indulgencias y censuras que impongan ó concedan, nulas las colaciones de beneficios que hagan, nulas tambien las enajenaciones de bienes eclesiásticos que autoricen. Los cánones de los concilios Lateranense (2) 1.°, 2.° y 3.° aprobados respectivamente por los pontífices Calisto III, Inocencio II y Alejandro III, lo

(1) Historia de Gravesson, tomo 6, coloquios 2, 3 y 4.
(2) Cán. 6.° del Concilio lat. 1.°: Cán. 30 del lat. 2.°: y Cánon 1.° del lat. 3.°

disponen en términos espresos respecto de dichos actos de los antipapas Burdino y Pedro de Leon en tiempo de los dos primeros, así como igualmente de los de Octaviano, Guidon y Juan Abad Strumiense, que dividieron la iglesia romana en tiempo de Alejandro III.

En cuanto á la facultad de conferir órdenes y á la validez ó nulidad de las conferidas añaden tambien dichos cánones (1) que son igualmente nulas las ordenaciones que hubiesen celebrado aquellos antipapas; pero es la opinion mas comun y universalmente seguida, que la nulidad de que hablan estos cánones debe entenderse, no en la sustancia, sino en cuanto al ejercicio, de modo que las órdenes son válidas en su esencia, y solo quedan suspendidas por lo que hace á la ejecucion. Así el que ha recibido órdenes sagradas de un cismático, ha recibido el carácter sacerdotal, pero se halla suspenso en cuanto al ejercicio de sus funciones, hasta que por la autoridad legítima eclesiástica se remueva este impedimento.

La diferencia de resolucion en este caso, respecto de los anteriores, cuenta en su apoyo una razon poderosa, nacida de la diversa fuente de que proceden. Hay ciertos sacramentos que imprimen carácter, como son el órden, el bautismo, la confirmacion. Los cismáticos, aunque dejen de pertenecer al gremio de la Iglesia, no pueden perder el carácter por ellos adquirido. Por eso todo lo que depende de este órden, si lo ejecutan, es válido, y á su vez imprime carácter en los que le reciben, de modo que dichos actos no pueden reiterarse. Solo que, como ellos tienen suspenso el ejercicio, este vicio pasa al ordenado, que tiene suspendido, en cuanto á la ejecucion, el uso de sus funciones. Por el contrario, aquellos actos que son de jurisdiccion, como la imposicion de censuras, colacion de beneficios y demás de esta especie, que hemos espresado al principio de este artículo, siendo de orígen y de institucion de la Iglesia, es evidente que este puede declarar privados de ella á los hereges y cismáticos, é imponer á sus actos la nulidad desde un principio (1).

Otro de los efectos canónicos es la inhabilitacion para adquirir beneficios eclesiásticos, y sobre todo la dignidad episcopal. ¿Esta inhabilitacion, es de suyo perpétua, ó cesa, si el cismático abjura su error, y vuelve al seno de la Iglesia? Cuestion grave y de importancia, que por uno y otro lado cuenta poderosos argumentos. Porque si la abjuracion del cisma, y la absolucion del pecado reintegran al cismático en los beneficios que ha perdido por el cisma, pues que este delito no lleva consigo la irregularidad como la heregía; parece que con mayoría de razon debe quedar hábil para adquirir nuevas dignidades y ocupar mas altos puestos en la gerarquía eclesiástica. Mas la opinion contraria tiene mas visos de probabilidad y es seguida por los autóres de mas nota. Véase á Gonzalez. Comentarios á las Decretales de Gregorio IX en el libro 5.°, título 8.°, cap. 2.°

A la verdad, el cisma, aun despues de abjurado, deja cierta nota de infamia en el que incidió en él, que le debe incapacitar para ulteriores dignidades, y sobre todo para el episcopado, á cuyo puesto solo ha de ser llamada la virtud probada y libre de toda mancha, que amengüe su prestigio. Así todos convienen en que para ello es necesario una dispensa especial de la Santa Sede, quien, atendiendo á los motivos poderosos, que pueden existir en casos dados, cree útil al bien de la Iglesia relajar su justa severidad. La absolucion pues, y consiguiente reconciliacion de los cismáticos con la Iglesia, si bien les basta para volver á adquirir lo que han perdido, no les habilita para nuevos ascensos sin una dispensa especial.

Esta reflexion nos lleva como por la mano á tratar de la absolucion y reconciliacion de los cismáticos, así como de los

(1) Cánon 30 del Concilio lateranense 2.° se espresa en estos términos «*Ad hæc ordinationes factas á Petro Leonis, etaliis schismaticis et hæreticis evacuamus, et irritas censemus.*» De los mismos términos usa Alejandro III.

(1) Gravesson, tomo 4.°, De conciliis cum generalibus tum nationalibus quæ duodecimo Ecclesiæ sæculo sive ad damnandas exortas hæreses, sive ad componendas enatas controversias, et collapsam restaurandam Ecclesiæ disciplinam fuerunt celebrata.

efectos que producen. El cisma es un pecado público y un delito que se castiga con graves censuras: necesita, pues, además de la reconciliacion en el foro interno, un hecho esterior que acredite su sumision á la cabeza de la Iglesia, y repare el escándalo causado. Cuando toda una nacion incurre en él, arrastrada por su gobierno, como sucedió en Inglaterra, la absolucion fué pública, y en nombre de la nacion la recibieron ambas cámaras solemnemente, despues de haberse retractado de sus errores. A los particulares no les quedó mas que verificar la reconciliacion penitencial en la forma ordinaria. Todo lo que mira al foro interno ó de la conciencia, es propio de los teólogos, por lo que se halla fuera de nuestro objeto; y en cuanto al foro esterno ó absolucion de censuras, casos en que está reservada á la Santa Sede, ó compete á los obispos por derecho propio ó delegado, véanse los artículos ABSOLUCION: CENSURA: ESCOMUNION Y SUSPENSION. Queda, pues, consignado, que para que cesen los efectos canónicos del cisma, debe preceder á la reconciliacion en el foro interno la absolucion pública, acompañada de algun signo esterior, que generalmente es la retractacion de sus errores, y en lo cual está demás advertir que se procede siempre con mucha cautela.

En algun caso particular se necesita además la rehabilitacion. Hemos notado ya que para adquirir mayores dignidades, y sobre todo el episcopado, no basta la abjuracion del cisma y consiguiente absolucion; sino que se requiere especial dispensa de Su Santidad. Los ordenados por un cismático necesitan tambien rehabilitacion particular. Si han recibido á sabiendas las órdenes, aun cuando son válidas y no deben reiterarse, como tampoco se reitera el bautismo dado por un herege, necesitan que Su Santidad los rehabilite, ó alce mas bien el impedimento que tienen para poder ejercitar su oficio eclesiástico. Si pecaron por ignorancia, deben recurrir á su obispo con el mismo fin. Esta rehabilitacion se verifica por algun signo esterior, que suele ser la imposicion de manos *reconciliatorias*. Véase el citado Gonzalez en sus Comentarios á las Decretales en el libro 1.°, título 6.°, cap. 5.

Como los efectos canónicos del cisma participan á la vez del carácter de penas, en la siguiente seccion los consideraremos bajo este aspecto para completar su tratado.

SECCION V.

PENALIDAD CONTRA LOS CISMÁTICOS.

Conviene tener aquí muy presente la division que en su lugar hicimos del cisma en puro, ó simple, y misto. Porque si al cisma vá unida la heregía, como suele acontecer, las penas son las mismas impuestas al último delito, pues la calificacion mayor, arrastra la menor; mas si el cisma es simple, las penas no son tan graves. Como este delito afecta á la Iglesia y al Estado, se halla penado por una y otro en sus colecciones canónica y civil. De aquí la conveniencia de dividir esta seccion en los dos párrafos siguientes, pues que claramente se deduce de lo dicho el doble concepto en el cisma de delito eclesiástico y delito civil, dado que no nos incumbe hablar de él bajo el concepto de *pecado*.

§. 1.° *Disposiciones penales del poder eclesiástico.*

Cuando el cisma es puro ó simple, las penas impuestas por los cánones, son las siguientes, empezando por las mas graves.

1.° Escomunion mayor. Sobre este punto se suscita una grave dificultad, á saber: ¿incurren los cismáticos en ella *ipso facto*, ó en virtud de sentencia? Las disposiciones de las Decretales no están tan claras que no den lugar á que los comentadores se dividan, adoptando una ú otra opinion: dudas, que la Bula *in cœna Domini* vino á disipar, declarando que *ipso facto* quedaban escomulgados los cismáticos que hubiesen sido públicamente denunciados, ó se adhiriesen á una secta tenida por tal de notoriedad. La cuestion, sin embargo, queda en pié en los paises en que esta bula no se halla admitida, como sucede en Francia y tambien entre

nosotros, donde fué y permanece suplicada. Allí es la opinion mas probable y comunmente seguida, que juzgamos aplicable á nuestra patria, de que es necesario que la escomunion se imponga por sentencia, para que produzca sus efectos sobre los cismáticos (1).

2.ª La privacion de la jurisdiccion espiritual, de que ya hemos hablado en la seccion anterior, respecto á sus efectos canónicos. Por lo que tiene de penal, que es ahora nuestro objeto, las misma dudas que en el caso anterior ocurrian en esto, no resultando conformidad de pareceres, sobre cuando incurrian en esta pena los cismáticos. En el dia, despues de la Extravagante del Papa Martino V, *Ad evitanda scandala*, promulgada en el Concilio de Constanza el año 1418, aparecen mas claras las reglas que rigen en esta materia. Quiso Su Santidad, con el objeto de evitar escándalos y peligros, asi como para atender á las conciencias timoratas, que nadie estuviese obligado á abstenerse de la comunion con otro, tanto en la administracion y recepcion de sacramentos, como en la participacion de las demás cosas y funciones divinas, bajo ningun pretesto de censura, de suspension ó prohibicion de cualquier género, sin que esta sentencia, prohibicion, suspension ó censura, fuese *á judice publicata, vel denuntiata specialiter et expresse* (2).

La claridad de los términos, las circunstancias en que se publicó esta bula, despues de un cisma tan largo, los motivos en que se funda Su Santidad no dejan duda, de que solo pierden la jurisdiccion los cismáticos que han sido públicamente denunciados. Aun cuando esta Bula no consta en las actas del Concilio, y solo se sabe su certeza por relacion de S. Antonino, arzobispo de Florencia, y otros doctores, se halla recibida en la Iglesia, y puesta en constante uso y aplicacion. Sin embargo, esta circunstancia hace que no sea tan conocida ni citada por los antiguos comentadores de derecho canónico, como su importancia y utilidad exigen. Solo añaden los artículos para su debida inteligencia, que pierden igualmente la jurisdiccion aquellos que se adhieren manifiestamente á una secta cismática, pues con su hecho público no dejan duda de que se han apartado de la Iglesia católica, y de consiguiente no están comprendidos ni en el espíritu, ni en la letra de la estravagante de Martino V. Fuera de estos dos casos, los fieles podrán recibir los sacramentos y estar en comunion con los cismáticos ocultos, sin incurrir en ninguna censura.

3.ª La pérdida y privacion de todos los beneficios, oficios y emolumentos adquiridos antes del cisma. El Sesto de las Decretales de Bonifacio VIII, impone esta pena *ipso facto*; pero su sucesor en el pontificado Benedicto XI la derogó en su Estravagante; de modo que los cismáticos conservan los beneficios y oficios legítimamente adquiridos antes de incurrir en el cisma, al menos hasta que una sentencia del juez los prive de ellos. La Estravagante citada de Martino V confirma esta doctrina (1).

4.ª La inhabilitacion para adquirir nuevos beneficios sin dispensa, de que ya hemos hablado por estenso en la seccion anterior, y la confiscacion.

5.ª A los legos, si son nobles, se les impone la privacion de la nobleza y se ordena que sean entregados al brazo secular para que los castigue.

6.ª Además se señalan las penas de pérdida del poder paterno, incapacidad civil de adquirir, heredar y disponer de sus bienes por testamento, la cárcel, el destierro, y por último la muerte. Claro es, que en caso de proceder estas penas, la autoridad eclesiástica, tenia que implorar el auxilio del brazo secular, y hacerle entrega de los reos, para que se las impusiera. Inútil es advertir que ninguna de estas penas se halla ya en uso, y que las que hoy se aplican son las que disponen los códigos de cada pais, como veremos en el párrafo siguiente.

(1) Instituciones de Bouvier, tomo 8.° Tratado del Decálogo, Cap. 1.°

(2) Van-Espen Juris ecclesiastici, Part. 3.ª, tit. 9. De pœnis et censuris ecclesiasticss, párrafos 14 y 15.

(1) Asi Ferraris, Biblioteca canónica, artículo Schisme: Boubier cum institucionesya citadas, tomo 8.° De pœnis schismaticorum.

§. 2.° *Disposiciones penales del poder temporal.*

Desde que el Estado abrazó el catolicismo, dándole la paz y formando con él esa *concordia* que ha sido por muchos siglos la base de la política y de la civilacion modernas, existen disposiciones penales contra los que se han apartado de la fé ó de la unidad de la Iglesia. Estas leyes han sido mas ó menos severas, segun las épocas y circustancias, habiéndose dulcificado mucho en el dia, aun en aquellos paises en que la unidad de religion es un principio de su vida histórica, política y social. Constantino se vió ya obligado á tomar disposiciones contra los donatistas y maniqueos, y su política fué seguida por los dos Teodosios, Arcadio, Honorio, Justiniano, y demás emperadores cristianos. Aunque sus disposiciones no distinguen entre los herejes y cismáticos, son aplicables á unos y otros, primero porque en el Código Teodosiano se comprenden bajo el epígrafe *De hæréticis, aliisque affinibus*, en cuyo segundo término están comprendidos los últimos; y segundo, porque en el cisma se creía encontrar siempre algo de herético, pues el romper la unidad de la Iglesia, es hacer ver que fuera de ella puede existir salvacion, y esta creencia es contraria al dogma católico, segun hemos dicho ya otra vez.

Las penas impuestas en el Código Justiniano son multas, y hasta la confiscacion: incapacidad civil de heredar y disponer de sus bienes: destierro, castigos corporales, y por último la muerte.

El Fuero Juzgo establece las multas, confiscacion y destierro.

El Código de las Partidas copió en este, como en otros muchos puntos, las leyes de Justiniano y las disposiciones canónicas, imponiendo á los herejes la pena de ser quemados, además de la confiscacion de sus bienes, si no tenian hijos católicos.

Por otra parte este era entonces el derecho comun en Europa. No se hace diferencia entre herejes y cismáticos, ó mejor dicho, no se hace mencion de los últimos, pero es indudable que están comprendidos entre los primeros, tanto por las razones que hemos dado al esplicar igual silencio en los Códigos romanos, como porque de no ser así, se seguiria el absurdo de que debian quedar impunes, cuando tan minuciosamente se detallan las penas de los apóstatas, judíos, infieles, adivinos, agoreros y otros. En el artículo heregía se tratará del modo y proporcion con que se aplicaban estas penas segun la pravedad de los errores, y la mayor ó menor continuacion en ellos: por ahora nos limitaremos ha hacer algunas observaciones sobre los cismáticos.

Si el cisma es público, es decir, si toda una nacion, ó un gobierno se apartan de la obediencia del Sumo Pontífice, como sucedió en Inglaterra en tiempo de Enrique VIII, y en Francia durante su revolucion, claro es que no hay tribunal que pueda imponer penas temporales á este delito; porque el cisma está en el poder público, que habria de castigarse á sí mismo. Entonces lo que acontece es lo contrario: los destierros, los castigos, las vejaciones de todas clases se emplean contra los verdareros católicos, que prefieren el cumplimiento del deber á la conservacion de sus empleos, honores y riquezas, y ante aquella imperiosa voz hacen acallar los gritos del interés, del miedo ó de una punible debilidad.

Cuando el cisma es tambien general, pero de buena fé, es decir, que la equivocacion es de hecho mas bien que de derecho, porque se reconoce la necesidad de la unidad, y se respeta y acata su principio, como sucedió en el gran cisma do Occidente, entonces tampoco hay sujeto sobre quien puedan recaer las penas, porque ninguno de los dos partidos se cree cismático, ni en realidad lo es, mientras dure la buena fé. Además que en todo evento esta calificacion abrazaria á su contrario, en quien ejercitaria la penalidad si pudiese.

Resta, pues, el solo caso en que dentro del Estado algunos individuos constituyan cisma, en cuyas circunstancias será únicamente, cuando tendrá lugar la cuestion de saber qué pena podrá y deberá aplicárseles por el poder temporal.

El Código penal vigente la determina en

Lorenzo Arrazola

su artículo 128 del título 1.°, libro 2.° que trata de los delitos contra la religion, que dice asi: «La tentativa para abolir ó variar en España la Religion católica, apostólica, romana, será castigada con las penas de reclusion temporal y estrañamiento perpétuo, si el culpable se hallare constituido en autoridad pública, y cometiere el delito abusando de ella. No concurriendo estas circunstancias, la pena será la de prision mayor, y en caso de reincidencia la de estrañamiento perpétuo.»

Este artículo, así como el párrafo tercero del 130 del mismo libro y título, que castiga con la pena de prision correccional al que, habiendo propalado doctrinas ó máximas contrarias al dogma católico, persistiere en publicarlas, despues de haber sido condenadas por la autoridad eclesiástica, y con la de estrañamiento temporal en caso de reincidencia, son aplicables á nuestro caso. Primero, porque en la calificacion de variar la religion *católica, apostólica, romana*, entra el delito de cisma, que desconoce la autoridad del Sumo Pontífice, cabeza y jefe visible de dicha Iglesia. Segundo, porque la tentativa de romper la unidad de la Iglesia católica, apostólica, romana, es un delito contra los dogmas de esa misma religion, segun ya hemos manifestado, cuyo hecho introduce confusion en el Estado, perturba la paz de las conciencias, y agita y subleva las malas pasiones. Interesa, pues, al poder público, sobre todo en donde la Religion católica es la del Estado, acudir á refrenarlas, impidiendo su nacimiento: interésale ahogar en gérmen todo motivo de division, discordia ó escision en materias religiosas. Por eso se castiga la tentativa y no se habla del delito consumado, pues como dice muy bien uno de los mas autorizados comentadores del Código (1); si el hecho llegare á consumarse, y el cisma ó variacion se realizan y triunfan en la sociedad ¿quién aplica las penas? No quiere, pues, decir el Código, que la consumacion de una tentativa criminal le quite su perverso carácter, porque esto seria absurdo; sino que omite el señalar penas inútiles para un caso en que no habian de tener aplicacion. Por otro lado la tentativa de producir un cisma, si bien lo es de un delito, puede ser, y es comunmente, delito consumado respecto del que la intenta, pues por lo que á él hace, se ha apartado de hecho de la unidad de la Iglesia, y trabaja porque los demás le sigan.

La pena de estrañamiento, que el Código impone siempre en caso de reincidencia, es la mas adecuada en una época en que todas las legislaciones ahorran las penas de sangre, y domina en la atmósfera social cierto espíritu de tolerancia, que el legislador no puede menos de apreciar como un hecho. El art. 137 añade justamente para los reos de estos delitos la pena de inhabilitacion perpétua para toda profesion ó cargo de enseñanza: y decimos justamente, porque es poco todo el cuidado que se ponga en evitar que las nuevas generaciones, esperanza de la patria, beban el error en los primeros manantiales de la ciencia.

Vamos á concluir este artículo, diciendo dos palabras nada mas sobre la naturaleza del delito del cisma. Segun la opinion mas comun, este delito no es meramente eclesiástico, pues no se trata en él de los artículos que afectan al dogma; sino que por cuanto tiende á pervertir la unidad religiosa, que es ley política del Estado, pertenece al resorte de la potestad secular. Asi lo dice Van-Espen en el tít. 4.° De *delictis ecclesiasticis*, capítulo 2.°, parte 3.ª, §. 52, donde cita en confirmacion de su parecer el Concordato del Bravante, que dispone lo siguiente: «*Si schisma non sapiat hæresim, tum cognitio et punitio ad solum judicem secularem pertinebit.*

Reasumiendo, pues, resulta, que en los paises en que la unidad religiosa forma una de las bases de su constitucion política, el cisma y la heregía no pueden menos de ser apreciados por el legislador, como delitos que tienden á subvertir la paz y tranquilidad pública.

Véase DELITO: HEREJIA: IGLESIA: RELIGION.

CITA. Del latin *cita* ó *citum*, cosa *mo-*

(1) Comentarios al Código penal por Pacheco.

vida, y despues por traslacion *cosa llamada*. Puede ser del antiguo verbo latino *cio* (*is, ire, ivi, itum*) llamar: tambien del verbo *cieo* (*es, ere, ivi, itum*), conmover, mover con fuerza, con energía.

Fácil es comprender que con energía es movido, impulsado, el que lo es por la fuerza de la ley, y de la autoridad, en cuyo caso se hallaban en los tiempos antiguos, así como hoy y siempre, los llamados á comparecer ante los tribunales. Entre los romanos sucedia todavía mas; y es que el *llamamiento á juicio*, la *in jus vocatio*, se verificaba á veces, como es sabido, por material impulso y violencia personal por parte del requirente, que no solo podia llevar á juicio á su adversario á viva fuerza, sujeto por el pescuezo, *obtorto collo*; sino aun á los testigos, asidos por la oreja. Así la ley de las doce tablas: *Si in jus vocat, ni it antestatus, manum injicito, aurem antestati capito*. Fuese, pues, por estas razones: porque anticuado sino el verbo *cio*, prevaleció á su vez el citado *cieo*: ó tomando, en fin, el efecto por la causa, además de su significacion de mover, recibió este verbo en lo judicial la de *llamar*, y tal vez de ahí *cita*.

Cita, en fin, ha podido decirse del verbo latino cito *(as, are, avi, atum)* frecuentativo de *cieo*, y que significa *citar*.

Por todo lo dicho se vé que *cita*, etimológicamente, ora en sentido natural, como si se deriva del antiguo *cio*; ora en sentido figurado, tomando el efecto por la causa, esto es, el movimiento del que ha de comparecer, por la comparecencia, derivándolo entonces de *cieo*, lleva en sí la idea cardinal de *llamamiento*, si bien en la variacion de sus aplicaciones despues en lo jurídico, en lo legal, en lo político, administrativo y disciplinario, en lo literario en fin, el *llamamiento* se reduce algunas veces á mera *invitacion* de comparecencia; aun á mera designacion de persona, de lo que podrá seguirse la comparecencia, como en las citas del reo ó testigos en un sumario. Esto en cuanto á personas: en cuanto á *cosas*, como sucede en lo literario, la cita es la designacion del testo, leyes ó autoridades, que *llamamos* en apoyo de nuestra razon ó propósito, lo cual es la cita en sentido figurado.

He aquí ahora como la Academia considera la *cita*, tomada en sentido natural. «*Cita: señalamiento, asignacion de dia, hora y lugar para verse y hablarse una persona con otra.*»

Fácil es conocer que esta no es la cita en lo judicial, en ninguna de sus acepciones. La enunciativa *persona* no cuadra á la *autoridad*, ni menos á un tribunal colegiado. Los tribunales no están *para verse y hablarse*, ni habria propiedad en tomar en ese sentido un emplazamiento, un comparendo, la presentacion en juicio del demandado, ó encausado. Tampoco la cita en lo judicial lleva siempre *señalamiento de dia, hora, y lugar*: las citas de los reos y testigos no los llevan nunca; como ni tampoco citan estos para verse y hablarse con el citado. La definicion de la Academia, pues, es solo aplicable á la *entrevista*, á la *avocacion* de una persona con otra en acto privado, y en todo caso estrajucial, como para un duelo, para una satisfaccion, ó esplicacion, etc. Aun pudiendo entenderse de las *entrevistas* entre autoridades, como la de dos generales enemigos, la de un jefe de fuerza armada y sus confidentes, etc.; nunca lo seria en lo judicial. En este órden la cita varia de acepcion, segun que se la considere por parte del juez, del actuario, y de los reos y testigos: y qué sea en cada uno de estos casos; lo vemos en las secciones siguientes.

PARTE DOCTRINAL.

SUMARIO.

SEC. I. DE LAS CITAS EN LO JUDICIAL.
§. 1.° *De las citas por parte del juez.*
§. 2.° *De las citas por parte del actuario.*
§. 3.° *De las citas por parte del encartado, y testigos.*
§. 4.° *De las citas de leyes, y autoridades por el juez ó las partes.*

Sec. II. De las citas en lo político, administrativo y disciplinario.
Sec. III. De las citas de leyes, cánones y cuerpos jurídicos.
Sec. IV. De las citas en lo literario.

SECCION I.

DE LAS CITAS EN LO JUDICIAL.

La cita en lo judicial, sin perder su acepcion cardinal de *llamamiento*, ora directo, ora indirecto, toma un carácter específico bajo otras denominaciones, y diversos puntos de vista, como sucede en *emplazamiento*, *citacion*, *comparendo*, etc., de lo cual no hablamos en el presente artículo; limitado á los casos en que la cita conserva en lo judicial esta denominacion específica.

En tal concepto, la cita asi en cuanto á las personas, como en cuanto á las cosas, ha de considerarse en lo civil y criminal, y en ambos casos, por parte del juez que la ordena: de la del actuario ó funcionario, que la intima, ó que notifica el mandato del juez: y del encartado ó testigos de un sumario. Y hay todavía en lo judicial la cita de leyes, ó autoridades por el juez ó las partes.

§. 1.° *De las citas por parte del juez.*

En el primer concepto, esto es, en lo civil, la cita, por parte del juez, que la manda hacer, no lleva *mandato*, de tal modo imperativo, que el no obtemperar á él, cause *delito*; aunque unas veces dará lugar á culpa, y siempre puede darlo á perjuicio ó responsabilidad civil del citado, que no comparece. Los latinos, de quienes tomamos la enunciativa *citacion*, espresaban el efecto de esta con exactitud, cuando decian sobre el particular, *citatio: injus vocatio, sen invitatio.* Porque en efecto, en términos generales, y por parte de los resultados, la citacion no es de ordinario sino mera *invitacion* á comparecer en juicio, hecha á la persona de cuyo interés se trata desde luego, ó á quien pueden alcanzar los resultados. Aun intimada, ó notificada esta invitacion del juez, es potestativo en la parte el comparecer ó no; pero en el caso negativo, no usa de su libertad, sino de su cuenta y riesgo; ó lo que es lo mismo, que la *citacion*, ó intimacion de la *cita*, le para perjuicio. Tal sucede en la *cita por retardado*, en la cita por *eviccion y saneamiento, para dar sentencia*, *ó providencia*, etc.

No es esto decir que la *cita*, mandada intimar por el juez, no lleve *llamamiento*; antes hemos dicho que ella en sí lo es. Tampoco que no lleve absolutamente *mandato* de comparecer; antes se cita precisamente para la comparecencia del citado; sino que este mandato se resuelve en invitacion, con resultados ó efectos meramente civiles en caso de no responder al llamamiento y mandato: es decir, que este no admite *compulsion*: la no comparecencia no constituye *delito*: atrae responsabilidad civil, pero no pena. Y esto es asi, aun cuando medie el derecho ó perjuicio de un tercero. Tomada la citacion en su mayor amplitud, si lleva emplazamiento, si es en pleito por retardado, si es para prueba, para juicio de conciliacion, para reconocimiento de vale, etc. los estrados suplirán al no compareciente: habrá multa, se tendrá la comparecencia por celebrada, se seguirá el juicio en rebeldía, etc., todo sucederá en el órden de la justicia, como si el citado hubiere comparecido; pero no habrá delito, encausamiento, ni pena criminal contra él.

En el sentido que queda esplicado, y no en otro, es exacta la definicion de la citacion, dada por alguno de nuestros autores modernos, diciendo ser, «el llamamiento que de órden del juez se hace á una persona para que comparezca *á estar á derecho*». La citacion aquí se limita al *emplazamiento*, y á la *citacion por retardado*, y despues veremos si en ello hay exactitud: pero limitando nuestra observacion á la frase *á estar á derecho*; hay solo exactitud en espresar de este modo que el citado ó emplazado queda obligado *por el hecho*, comparezca ó no, defiera ó no al llamamiento judicial, *á lo que se sentencie y ejecutorie* segun derecho.

Hasta aquí hablamos de la cita relativa á las partes. En cuanto á la citacion á testigos, aun en el órden civil, lleva mandato. Las le-

yes han hallado medio de suplir la no asistencia del citado, cuando es parte principal; pero no cuando es testigo. ¿Ni como se suplirá el testimonio de estos? En el primer caso además la parte principal, que no comparece, paga la pena de su propio hecho, de su no asistencia; en el segundo el demandante ó demandado que articulen prueba, si lo hicieren de la testifical, pagarán la pena de un hecho ajeno que es la noluntad ó resistencia del testigo á presentarse á declarar. Por otra parte la obligacion á declarar en juicio, á servir á la causa pública y á los fines de la justicia con nuestro testimonio, es una carga y *obligacion pública* general, que por lo tanto admite compulsion. Asi, aun en lo civil, la cita á testigos lleva *mandato de comparecer*, y admite, decimos, compulsion, hasta el punto de que la desobediencia pueda constituir delito. Hoy es artículo terminante del Código Penal. Véase **AUXILIO: DECLARAR: DESOBEDIENCIA.**

En lo criminal por las mismas razones; pero elevadas aun á mayor escala, tanto como lo está la vindicta pública sobre los intereses y derechos privados, la cita implica mandato. El encartado y el testigo, están obligados á comparecer. La contumacia en los primeros puede atraerles los mismos efectos que en lo civil; esto es, el haber de estar á las resultas del juicio criminal; que ya no serán solo civiles, sino penales tambien; pero además pueden ser perseguidos, aprehendidos, y traidos por fuerza pública ante el tribunal que los cita, emplaza, ó requiere á comparecer.

De paso diremos, nos es preciso notar, que en el uso y tecnología forense, no solo no se ha observado con precision la índole y filología etimológica; sino que se ha pecado y peca de redundancia en la aplicacion de la enunciativa *cita* con sus derivados *citacion* y *citar*. Segun Covarrubias en su Tesoro de la lengua, haciéndose la cita á la parte para su comparecencia, si le conviniere, ante el juez, y siendo comun que los jueces estableciesen su tribunal y audiencia en el foro ó plaza pública, de aquí el haberse llamado tambien la *cita*, *emplazamiento*. El uso forense ha hecho, sin embargo, un caso específico de la cita, cuando se llama emplazamiento; mientras en otros casos aquella se usa en sentido específico, como mera *citacion*. Hemos demostrado, en fin, que en la cita diversificada en sus formas, se conserva la idea cardinal de *llamamiento*, ó por lo menos invitacion á comparecer, parando perjuicio lo contrario. Síguese de aquí que el *emplazamiento* lleva implícita la *cita*; asi como esta el llamamiento. No habia por tanto que acumular estos conceptos. Y sin embargo, el uso ha autorizado esta acumulacion y viciosa redundancia. Asi se dice, *citacion y emplazamiento*: *citado y emplazado*: y lo que es mas, *se cita*, *llama y emplaza* á Ticio para ante tal juzgado ó tribunal. Fácil es comprender que el uso que há autorizado tan viciosa redundancia y falta de precision, no es el ilustrado; sino la rutina de curia, de la curia inferior, encargada por lo comun de la redaccion de los documentos judiciales, cuyas fórmulas corresponde rectificar á la jurisprudencia ilustrada. Sobre el particular véase **CITACION EN LO ECLESIASTICO.**

En la confusion y uso promíscuo de dichas voces y frases forenses, se envuelve alguna vez aun la palabra *notificacion*. El abuso por otra parte es tan inveterado, y general, que puede decirse ya *autorizado*, constituyendo asi la tecnología del foro. Aun en ese caso, haya de respetarse, ó de corregirse el abuso y falta de precision en la aplicacion de las frases y palabras *cita*, *citar*, *citacion*, *emplazamiento*, *notificacion*; no podemos dispensarnos de consignar algunas indicaciones que conduzcan á ilustrar la cuestion filológica.

Cita, *citacion y citar*, se usan á veces promíscuamente, y entonces llevan acumuladas la *accion del juez* y la del *actuario*. Pero siendo estas diversas, y conviniendo tanto diferenciarlas, como que el efecto de la primera pende de la segunda, pues esta, y no aquella, constituye en obligacion y responsabilidad al citado; si por ello conviniese distinguir y precisar dichas voces, *cita*, por parte *del juez* es meramente el *mandato de citar*: *citacion* por parte del *actuario* el cum-

plimiento del mandato, la intimacion de la *cita*: *citar*, por parte del juez espresa *la obligacion de oir*, y por tanto el *llamamiento á comparecer*, y el mandato de que se intime por el actuario: por parte del *actuario* la cita, ó citacion es esto último.

El *señalamiento espreso de término para comparecer*, no es, por regla general, de la esencia de la cita, pues que esta se comprende sin tal señalamiento, y en infinitos casos hay cita sin él. El llevarlo, constituye por tanto casos especiales de la *cita*, que por eso se designan con nombre, ó fórmula particular, como *emplazamiento*, *citacion de remate*. La cita con señalamiento de término, cuando es la primera, ó para incoar el juicio, se llama especificamente *emplazamiento*. Llevando implícita esta voz la de *cita* ó llamamiento, es notoriamente redundante, y carece por tanto de precision la fórmula de *citar*, *llamar y emplazar* á Ticio, etc.

La *notificacion* es mas genérica que *citacion* y que *emplazamiento*. Es el acto oficial por el que se hace sabedora á la persona ó parte á quien interesa lo mandado por el juez, lleve ó no *llamamiento*, como la simple cita, ó *llamamiento* y *término*, como el emplazamiento. Puede notificarse una providencia meramente para que la parte quede enterada: con quedarlo están satisfechos el fin de la ley y del juzgador; pero no se le *emplaza*, ni se la *llama*. Asi se notifica, por ejemplo, una sentencia sin apelacion: el haber accedido el tribunal á una cosa pedida por la parte, etc. Asi la *citacion* es siempre *notificacion*; pero la *notificacion*, no es siempre ni citacion ni emplazamiento. Véanse los artículos de estas voces.

§. 2.° *De las citas por parte del actuario.*

La intervencion de este se reduce á cumplir con el mandato del juez, intimando ó notificando la cita, llamamiento ó requerimiento acordado por aquel. El uso ha autorizado á decir que el actuario ó alguacil en su caso, *han citado* á Ticio, ó que han formalizado tal cita; pero es la verdad que tales funcionarios nada hacen entonces en nombre propio, ni menos una cita, por carecer de autoridad para llamar á juicio: lo hacen por autoridad ajena; y asi *citar*, *formalizar una cita*, *notificar*, *emplazar*, *requerir* para *comparecer*, etc., por parte del actuario, es meramente hacer notorio, intimar la providencia judicial que tal ordena. V. **CITACION.**

§. 3.° *De las citas por parte del encartado y de los testigos.*

La cita en este caso no es *llamamiento*; sino ocasion y fundamento legal para que lo haya. Tomando la causa por el efecto, llamamos cita á la designacion de personas como autores ó cómplices del hecho que se persigue, ó como testigos que pueden dar razon sobre ello. Asi no basta la designacion, ó la cita, para que el juez decrete comparencia, ó presentacion de la persona designada, á disposicion del tribunal; sino que vemos que la ley ha fiado como no podia menos, á la prudencia de este el mandar comparecer ó no, en virtud de la calificacion de las citas bajo el doble concepto de ser *pertinentes*, y ser *importantes*: calificacion de suma trascendencia, pues que á veces todo el resultado del sumario pende de evacuar, ó despreciar una cita, y aun de evacuarla á tiempo.

Poco se ha escrito sobre el particular; y sin embargo la materia de citas es una de las partes mas delicadas de un sumario. Hay reos, ya abezados al crímen, y á procesamientos, que han eludido muchas veces, los cuales con singular y criminal maestría acumulan citas, para desconcertar al juez, para complicar el sumario, para oscurecer la verdad, para ganar tiempo, á favor del cual puedan hacerse desaparecer el cuerpo ó huellas del delito; ponerse en salvo ó de acuerdo los cómplices, etc. Otras veces con el artificio de citas interminables, difíciles además de evacuar, por la distancia, por la calidad de las personas, etc., se aspira á ganar tiempo, ó hacer interminable el sumario, demorando así el auto de prision, ó dando lugar á que lleguen acontecimientos públicos, asonadas, indultos generales, ú otras circunstancias

que, aunque por diversos caminos, coinciden en el resultado de enervar, ó eludir la accion de la justicia.

Un juez esperimentado penetra sin gran dificultad el criminal artificio; si bien es verdad que ello supone, sobre una sindéresis organizada á propósito, esperiencia no vulgar, conocimiento filosófico del corazon humano, y no menor de las teorías filosóficas así bien, que dejamos consignadas en los artículos ACASO: CAUSA: CASO: CASUALIDAD: CAUSALIDAD, y otros análogos. El legislador no puede fiar al criterio del juez la apreciacion de las citas en el sentido dicho, sino suponiendo la aptitud, ciencia y esperiencia necesarias; y grande, hasta rayar en punible, es la responsabilidad del gobernante, que propone el nombramiento judicial de personas, que no las acreditan, ó de conocido no las reunen; y no menos vituperable la de los que, sin reunirlas, aspiran á cargos judiciales. No queremos decir cuanto se nos ocurre sobre este punto, por no lastimar instituciones y entidades, que queremos respetar; pero no cesaremos de clamar contra los abusos, que comprometen ó conculcan este necesario, y sagrado respeto.

Hé aquí ahora, resumiendo, lo dispuesto por la legislacion y autorizado por la jurisprudencia en el particular en un artículo del Reglamento Provisional de 1835. «Artículo 51..... *tercera*, omitirá la evacuacion de aquellas citas..... que sean *supérfluas*, ó *inútiles*. No prolongará el sumario luego que la verdad resulte bien comprobada; y nunca evacuará las citas que se hagan en la confesion, las cuales deben quedar para que el tratado como reo pruebe despues lo que le convenga.»

Hemos hablado antes de las citas no *pertinentes*; y de las *pertinentes*, é *importantes* además, ó conducentes. Las primeras, pues, que son relativas al asunto, no hay que evacuarlas; pero pueden ser tales, que merezca tomarse testimonio de ellas para pieza ó procesacion separada. Así hemos conocido descubrirse la existencia, y autores de crímenes desconocidos, olvidados, ó en cuya persecucion se levantó mano por falta de datos para continuar, sobre lo cual pudiéramos citar casos bien singulares. Hay sobre el particular dos abusos de que es preciso huir igualmente. El primero consiste en prestar atencion á todo, dejándose llevar el juez del artificio de un reo, que sagaz y esperimentado, remedando hasta la buena fé, el candor y aun arrepentimiento y pesar profundo, pareciendo que se agrava voluntariamente á sí mismo en ódio al crímen, le estravia en lo principal, lo cual era su propósito. El juez en este caso, dispuesto, como debe estar á repeler las citas no *pertinentes*, ó que no conducen al caso de que se trata, prestará atencion sin embargo á la enunciacion de hechos que puede convenir apurar ó perseguir; pero en cuerda separada, ó remitiendo testimonio de resultancia á otros jueces ó autoridades, en su caso.

El otro estremo consiste en prevenirse el juez contra todo lo que no se ciña estrictamente al caso; y no como es, ó puede ser en sí; sino como él lo aprende, ó quiere que aparezca, rechazando con desabrimiento las indicaciones del reo ó testigo, coartando así, y ahogando á veces la libertad de espresarse, aun en lo principal; no debiendo perderse de vista, que si hay reos audaces y amaestrados en la ficcion; hay reos y testigos á quienes impone y coarta, no ya el desabrimiento del juez; sino aun meramente en respeto, la sola idea de que están en su presencia. Hemos visto incidir en el estremo que censuramos á jueces inespertos; ó á jueces prevenidos y en vía de prevaricar, salvando ó complicando á quien se han propuesto.

A estos principios y justo temperamento es preciso ajustar la fórmula dada por el reglamento en la enunciativa de citas *inútiles*, que por tales no deben evacuarse. En cuanto á las *supérfluas*, habrán de entenderse por tales, las que, siendo *pertinentes*, y además *conducentes*, no son ya necesarias para el fin del sumario, que es asegurar, ó usando de las palabras de la ley, «*acreditar legalmente la verdad de los hechos*,» «*comprobar la existencia ó cuerpo del delito*.» Despues de declarar, por ejemplo, el supuesto reo que se

halló en el sitio del crímen y asegurarlo unánimemente dos testigos; serian ciertamente *supérfluas* las declaraciones de otros muchos, citados meramente sobre el mismo particular.

Lo espresado en el Reglamento provisional sobre las citas hechas en la confesion por el supuesto reo, no tiene hoy lugar, pues que ha sido suprimida la confesion judicial; pero podrian hallarse aun en ese mismo caso de reservar su evacuacion para la defensa del reo, si le conviene, las que puede él mismo haber hecho en la indagatoria, y aun declarando antes como testigo, adelantadas oficiosamente para alejar de sí sospechas de delincuencia. La regla general en este punto, si es que puede darse, cuando la ley se limita á prescribir una fórmula tan indefinida, como la de citas *supérfluas ó inútiles*, dejando al fin la calificacion de tales á la apreciacion del juez, la regla general, decimos, será: que toda cita que no conduzca, y aun conduciendo, que no sea necesaria para los fines legales del sumario, ó á otros fines de justicia, deje de evacuarse, y el reo verá despues si le conviene utilizarla para su defensa.

Hemos hablado en general de citas de personas, porque son las mas comunes; pero lo mismo ha de entenderse de las citas relativas á hechos ó cosas.

Concluiremos notando que la frase técnica *evacuar citas*, ofrece un sentido casi inverso de su etimología. Evacuar es sin duda dejar vacía una cosa, privarla de lo que contiene; mientras evacuar ó puntualizar la cita, es llenar ó satisfacer el propósito del que la hace, y de la ley en su caso: averiguar la certeza de ella.

§. 4.° *Citas de leyes, ó autoridades por el juez ó los partes.*

Estas son citas ciertamente de otro género que las anteriores. Son meras alegaciones de leyes, opiniones facultativas, ó doctrinas en demostracion, ó defensa de nuestro propósito. El evacuarlas es potestativo en el juez, y es además correlativo al grado de instruccion del mismo. Si es la suficiente, no tiene que enterarse de lo que ya sabe; y en todo caso el evacuar estas citas no está sometido á forma pública, siendo por el contrario una tarea puramente privada.

En cuanto al hecho, ó facultad de hacer estas citas, ha variado la legislacion. Por las leyes recopiladas estaba prohibido hacerlas para *alongar* los escritos; aunque bien podian hacerse, y copiarse leyes y textos en la informacion privada á los jueces, y aun en las alegaciones impresas, ó escritos en derecho. Lo primero se comprende: no habia ni hay términos hábiles para el temor de la ley, para el abuso de *alongar*, para el abuso de devengar. En el segundo caso el abuso estaba prevenido, determinándose taxativamente por la ley la estension de los escritos en derecho, en cuyo caso era negocio de la parte el calcular si le convenia consignar en la alegacion mas bien leyes, que doctrina, ó á la inversa (1).

Pero esta restriccion no tuvo lugar hasta en 1624 (2). Asi es que antes se hallaba espresamente mandado «que en adelante (3) las alegaciones en derecho se hiciesen breves y compendiosas, *en latin, sin romance alguno*; sino fuere algun dicho de testigo ó escribano, ó ponderacion de ley, alegando solemente la ley, ó doctor, que principalmente tocare el punto, y al que refiere á los otros, sin decir los referidos por él, so pena de 20,000 maravedís... (4).»

No por eso habia de entenderse, ni debe, que no fuera lícito citar, ó alegar alguna ley ó fuero: lo uno porque es compatible con el mayor laconismo de un escrito; lo otro porque la ley recopilada habla solo del *abuso*: y últimamente porque era coartar demasiado el derecho de la propia defensa. Agréguese que en muchos casos era, y es de necesidad, como en las cuestiones de puro derecho, y en las de derecho internacional, en que era precisa la cita y aun el texto de leyes estrañas.

Pero aun sin eso, en las últimas reformas

(1) Ley 1, tit. 14, lib. 11, Nov. Recop.
(2) Auto acordado de 19 de enero, nota 3 al tit. 14, libro 11, Nov. Recop.
(3) Auto acordado de 5 de febrero de 1594.
(4) Nota 4 al tit. 14, id., id.

nuestra legislacion ha sufrido un notable cambio. En los recursos de nulidad, por ejemplo, es hoy de derecho el haber de citar la ley infringida, ó doctrina legal no observada: lo es al fundar las sentencias, y en otros muchos casos, como esponemos en sus artículos respectivos.

SECCION II.

DE LAS CITAS PERSONALES EN LO POLÍTICO, ADMINISTRATIVO Y DISCIPLINARIO.

En estos órdenes la enunciativa *cita* personal, puede tomarse *activa* y *pasivamente*. En este segundo estremo las personas serán, ó habrán de ser citadas para responder de sus actos y por tanto para defenderse. Tambien para deponer, para ilustrar un espediente, sirviendo en ello á la causa pública. Así podrán ser citadas las personas ante un congreso ó senado, ante un juez ó tribunal, ante un gobernador, ayuntamiento ó diputacion provincial; ante un cabildo eclesiástico, ó concilio, y tambien como individuos de dichos cuerpos. Del segundo caso ya hemos hablado en la seccion 1.ª, y en cuanto á los restantes la cuestion es de procedimiento, y corresponde á otros artículos.

La *cita* tomada activamente es objeto de la presente seccion, en el sentido *del derecho* que pueda tener el individuo de una corporacion *de ser citado* para las deliberaciones de la misma, y de la *necesidad* de que lo sea para la *validez* de dichas deliberaciones.

Trátase, pues, de la vida y accion corporativa de los cuerpos colectivos, correspondientes, no ya á los órdenes enunciados; sino á todo órden social; á toda reunion organizada y lícita de personas; con cuya vida corporativa estén ligados así bien los fueros y derechos y la categoría del individuo. Mientras estos y los de la corporacion vayan de acuerdo, no hay cuestion. La habria al organizar la entidad colectiva; pero una vez organizada, el derecho constituido espresará la forma, y derechos respectívos.

Tampoco habrá cuestion, si este hubiere prevenido todos los casos, ó en aquellos que hubiere prevenido. Como lo primero no es posible, ó lo es rara vez, siempre en la práctica hay que tratar y resolver las cuestiones antes indicadas, á saber, ¿hasta dónde llegan los fueros y derechos individuales sobre cita, ó llamamiento y asistencia en las corporaciones colectivas? ¿Hasta dónde los de la corporacion sobre ó contra el individuo, bajo el mismo punto de vista? Así la que parece una cuestion de *fórmula* lo es de *sustancia*, y tanto, que decide, como hemos indicado, de la vida y actividad corporativa en todos los órdenes, si es cierto que siempre, como sucede en algunos de los mencionados, ó algunas veces, como sucede en otros, la falta de citacion de sus individuos induce *nulidad* de la deliberacion del cuerpo.

Sobre ello hay que distinguir entre corporaciones *deliberantes*, y corporaciones *consultivas*. En las primeras, puede darse la *nulidad*, segun las leyes, ó la práctica, como luego veremos; en las segundas no, pues que la potestad de decidir no reside en el cuerpo colectivo, sino en la autoridad que le consulta; y es claro que esta, siendo *individual*, no se menoscaba por la falta de uno ó varios individuos; y si no es nula su decision, porque la adopte contra el dictámen ó acuerdo de la corporacion consultiva; seria violento por demás que lo fuese por falta solamente de la asistencia y citacion de alguno individuo de ella.

Pero aun esta doctrina tiene una limitacion, ó restriccion que es preciso admitir. Hay casos en que la ley impone la *necesidad de oir* al cuerpo consultivo; mientras en otros lo deja á la prudencia de la potestad ó autoridad deliberante. ¿Se dirá en el primer caso que el cuerpo consultivo *no ha sido oido*, porque haya dejado de citarse á un individuo de él? Ardua es la cuestion; y si en términos generales habria que resolverla en sentido positivo pues metafísicamente y en la verdad de las cosas, la *unidad* de un todo desaparece cuando no es íntegro, cuando falta alguna, ó algunas de sus partes; con todo, como no se gobierna con principios *absolutos*; sino relativos por lo comun; de aquí la diferente solucion en la práctica, y mas en

la esfera de gobierno, en la cual es razon suprema la *necesidad*; razon *eminente* la *oportunidad*; y muchas veces *lo hecho, irremediable*, ó reparable solo con multiplicados inconvenientes; comprendiéndose en este conjunto la ley del caso. Y ciertamente que llegado este, la práctica ó la conveniencia dan la solucion, segun vemos al concretar estas observaciones generales.

Orden político. Aun ciñéndonos á lo rigorosamente político, los casos son varios y de ordinario importantes en este órden: un cuerpo ó colegio electoral: un cuerpo ó colegio eletivo para nombrar ó elegir soberano: un congreso diplomático: una cámara, ora soberana, ora colegisladora, etc. La ley, la costumbre, ó el pacto habrán determinado las clases ó individuos que han de ser citados, convocados, etc. ¿Inducirá nulidad el que alguno no lo haya sido? Dificilísima es la cuestion en la práctica, por mas que sea fácil y aun incontestable en términos generales y en teoría. Si la ley, la práctica, ó el pacto, el tratado, el protocolo, el *casus fœderis*, exigen la integridad del todo; el todo no es íntegro cuando falta una parte, descendiendo al terreno práctico; sobre todo faltando indebidamente. Sin embargo, solo una cosa es cierta en el particular, y es que siempre el vocal ó individuo no citado recibe menoscabo en sus fueros, y por tanto injuria; pero no es tan fácil, ni claro en términos absolutos, que su injuria estienda siempre sus efectos á invalidar omnímodamente la decision del cuerpo. Y decimos omnímodamente, ó en todo caso, porque aun en el mas estremado, y salva prohibicion legal ó condicion espresa del pacto, su adhesion posterior podria rehabilitar una decision que por dicha causa, ó falta de citacion adoleciese de algun vicio.

La citacion, es *actual*, ó *virtual*, con iguales efectos. Esta es en el segundo caso la que se hace *á priori*, ó de una vez para todas, al establecer sesiones *ordinarias*; y en el primero la relativa á sesiones *estraordinarias*, ó que no tienen un tiempo, ó período cierto, y de antemano conocido.

La validez, en fin, y legalidad del acto, se salva en la citacion, sin depender de modo alguno de la inasistencia voluntaria, salvo el de decisiones y votaciones que requieren número, que por la inasistencia voluntaria no se llene. Hablamos de la inasistencia *voluntaria*; porque la *involuntaria* entra ya en otro terreno, hasta en el terreno de la delincuencia, si mediase dolo, fuerza, cohecho, etc.

Asentando como principio general, que la *citacion* es de necesidad para la validez de las decisiones en los órdenes espresados en el epígrafe de la seccion; es menester reconocer que no en todos lo es igualmente, ó con igual rigor en la práctica. Admite menos escepciones cuando se liga á los judicial y jurisdiccional; y mas cuando se acerca á lo gubernativo, y administrativo. Asi la citacion es de interpretacion mas estricta en lo eclesiástico, por ejemplo, que en lo político y administrativo; pero los pormenores han de verse en sus artículos particulares, concluyendo con reiterar la regla general de que en ello ha de estarse en cada caso á lo dispuesto por las leyes y autorizado por la práctica. Véase CABILDO: CEDULA ANTEDIEM: CITACION: CITACION A DOMICILIO: CORPORACION: VOTACION.

SECCION III.

DE LAS CITAS DE LEYES, CÁNONES Y CUERPOS JURÍDICOS.

Adoptamos esta fórmula, no porque lo que consignamos en la presente seccion no pueda tener lugar en lo judicial; sino porque no le tiene precisamente, como lo espuesto en la seccion primera. Hablamos aquí, no de si puede citarse, sino del modo de citar, de la fórmula *gráfica* de espresar la alegacion de una ley ó doctrina; y eso limitado á las citas de leyes, glosas, y doctrinas de derecho; principalmente en el terreno legislativo, en una y otra jurisprudencia, y aun en lo literario.

Varias han sido las fórmulas *gráficas* autorizadas por el uso en este sentido; y hoy podria disputarse ciertamente su importancia,

su utilidad. Pero seria la importancia de actualidad. Cuando la lengua latina dominaba en todo; cuando era la lengua científica y oficial en el Estado: cuando se prevenia, no ya que las instancias, peticiones y actuaciones fuesen en *latin*; sino aun las alegaciones en derecho, y eso *sin romance alguno*, como hemos visto en la seccion anterior, no podia aquella disputarse, y aun hoy por lo que hace á los derechos romano y canónico, que es á los que principalmente concretamos esta seccion, por los muchos tratadistas que aun hay que consultar, y en cuyas obras se emplean dichas fórmulas.

Derecho romano. Cinco son los textos generales que puede ocurrir citar, á saber: el *Digesto* ó *Pandectas*, el *Código*, las *Instituciones*, las *Auténticas* y las *Novelas*; y hé aquí las fórmulas prácticamente.

Inst. §. 2 de jur. nat. gent. et civil. (Párrafo 2 del título del derecho natural, de gentes y civil de las Instituciones de Justiniano.) Otras veces se antepone el §. en esta forma: §. 1, Inst., etc.

L. 1, §. 3. D.; ó bien l. 1, §. 3. ff, *si quadr. paup. fec.*; esto es, ley 1, párrafo 3 del título del Digesto, ó de las Pandectas, *si quadrupes pauperiem fecerit*, esto es, del daño ocasionado por los animales. Queda notado que, hablando del Digesto, ó Pandectas, se espresa igualmente esta coleccion por lo singla, ó inicial D, que por la F doble, segun queda estampada. Otras veces suele hallarse *Digesto romano*, ley, etc.: *Pandectarum*, id.: *in Digestis*: *in Pandectis*: y simplemente *Digestis*: *Pandectis*.

L. 7. C. de nat. lib. (Ley 7 del título del Código *De natura liberorum*, De la naturaleza de los hijos.

Auth. Si qua mulier. La auténtica que empieza con las palabras *siqua mulier*, si alguna muger. Siendo aisladas las *auténticas*, y no teniendo por tanto, libro, título, etc, se indican por sus primeras palabras. Otras veces se indica además el título del Código en que se hallen insertas, asi: *Auth. Hoc amplius*, C. *De fideicom.* (La auténtica que empieza. *Hoc amplius, esto mas*, en el título del Código *De fideicommissis.*

Además de estas *auténticas*, ó sumarios autorizados, llevan, como es sabido, el nombre de *Colaciones auténticas* (*authenticæ collationes*) la coleccion de Constituciones genuinas de Justiniano, nombradas tambien *novellæ constitutiones*, constituciones nuevas, ó simplemente *novelas*. Compiladas por *colecciones*, ó grupos, títulos, novelas y capítulos; pero no por libros, suelen citarse así: *Auth Collat. 1, tit. 1, novell 1, cap 2. De leg. Falc., et invent*, esto es: auténtica colacion 1, tít. 1, novela 1, cap. 2. *De lege Falcidia et inventario.*

Derecho canónico. Respecto del Derecho canónico, las citas son mas complicadas por la multiplicidad de divisiones del mismo. Los textos generales de *cita* son tambien numerosos: el Decreto de Graciano, y en este *distinciones, causas, cuestiones, cánones, palcas, etc*: *Decretales de Gregorio IX*: *Sexto de las Decretales*: *Clementinas*: *Extravagantes comunes*: *Extravagantes de Juan XXII*: *Séptimo de las Decretales*: *Cánones penitenciales*: *Cánones de los Apóstoles*, etc.

Las fórmulas *gráficas* mas usuales para las citas ó alegacion de los cánones, son las siguientes por su órden, teniendo en cuenta que de ordinario las disposiciones del *Decreto* se citan por *cánones*; las de las Decretales por *capítulos*, y ora por la mera inicial, ora por la sílaba radical; cuya doble forma se usa tambien para espresar las *distinciones* y alguna vez las *causas*. Alguna vez tambien se callaba el número del cánon, poniendo la primera palabra de este. Así se verá en los tratadistas antiguos, segun se nota en la 3.ª fórmula.

Decreto de Graciano: *Distinciones.* Cánon (ó C.) 1. Dist. (ó D.) 1.: (Cánon 1 de la Distincion 1.)

Cán. Audite. dist. 34. El cánon de la distincion 34, que empieza con la palabra *Audite.*

76 *Distinct, scire*; esto es, el cánon que en la Distincion 76 empieza *Scire.*

Causas y cuestiones. Ha de tenerse en cuenta que siempre la C primera espresa el cánon; la segunda la causa.

Cán. Principatus, c. 1, q, 1. El cánon

que empieza *Principatus* en la *Cuestion* 1, de la causa 1.

C. 36. C. (ó ca.) 17. q. 5.

Cánon 36, *cuestion* 5 de la *causa* 1.

Cán. Aperté, 24, q. 1. El cánon que empieza *aperté* en la cuestion 1 de la *Causa* 24.

7. q. 1. *Denique*. Cánon que empieza *Denique* en la cuestion 1 de la *Causa* 7.

Debe tenerse presente que la Cuestion 3 de la causa 33 se subdivide en siete distinciones, diversas por tanto de las ya mencionadas de la primera parte del Decreto de Graciano, y que contiene disposiciones relativas á la penitencia. La fórmula de las citas es la siguiente.

Cán. *Perniciosé, de Pœnit. dist.* 1. El cánon que empieza *Perniciosé* en la *dist.* 1 de la *cuest.* 3, *Causa* 33.

De pœn, dist. 1. *Homicidiorum*. Cánon que empieza *Homicidiorum* en la *distincion* 1 de la *Cuestion* 3, *Causa* 33.

Tercera parte del Decreto. Reducida esta parte á los cánones nombrados *De Consecratione*, distribuidos en 5 distinciones, se citan asi:

De Con. dist. 4. *Postquam*. Cánon que empieza *Postquam* en la distincion 4. De *Consecratione*.

De cons. D. 3. *Nosse*. Cánon que empieza *Nosse*, en la distincion 3 *de Consecratione*.

C. *Triforme, de Consecrat. distinct.* 2.

El Decreto de Graciano, en fin termina con el apéndice moderno de los cánones penitenciales, y los de los Apóstoles, que suelen citarse asi:

Cán. pœnitential 1.

Cán. Apóstol 6.

Decretales de Gregorio IX. Siendo estas Decretales posteriores al Decreto de Graciano, se enunciaba esta circunstancia al citar la moderna disposicion pontificia ó conciliar, con las palabras *supra* ó *extra*; esto es, *supra* ó *extra Decretum*. Prevaleció la segunda de estas voces, y en el constante laconismo de los escritores canónicos la palabra misma *extra* se espresó por solo la letra X, segun se vé ordinariamente en las citas de estas decretales. El laconismo se ha llevado respecto de ellas á citar comunmente, espresando solo la primer palabra del capítulo y el epígrafe del título con la singla X, ó sin ella, y con frecuencia sin espresar el número del título, ni libro, segun las fórmulas siguientes:

C. *Quotiens*. X. *De pactis*. Capítulo que empieza *quotiens* en el título *De pactis* de las Decretales de Gregorio IX.

C. 6. X. *De decimis*. Capítulo 6 del título *De decimis, extra Decretum Gratiani*; esto es, de las Decretales de Gregorio IX.

C. *Quotiens, supra. De pactis.*

C. *Quotiens, extra. De pactis.*

C. *Quotiens*. X. *De pactis*. Capítulo que empieza *quotiens*, en el título *De pactis*, fuera del Decreto de Graciano; esto es, en las Decretales de Gregorio IX.

C. 6. X. *De decimis*: Capítulo 6 del título *De decimis*, en las Decretales de Gregorio IX.

De sponsalibus, Ex parte. Capítulo que empieza *Ex parte*, en el título *De esponsalibus* de la Decretales de Gregorio IX.

Extr. De simonia, Nobis. Capítulo que empieza *Nobis*, en el título *De simonia*, fuera del Decreto de Graciano (Decretales de Gregorio IX).

Sexto de las Decretales. Añadido este libro mas á los cinco de las de Gregorio IX, debió suprimirse, y de ordinario se suprime la singla X, citando así:

De elect. Provida, lib. 6.

Provida, de elect. in 6, (y tambien *in Sexto.*)

Cap. 44. *De elect. lib.* 6. *cap.* 44. Capítulo que empieza *Provida* en el título *De electione*, del libro 6 de las Decretales.

Clementinas. Vienen citándose de este modo:

Clem. (vel Cl.) *Dudum, De sepult...*

De sepult. Dudum in Cle.

Clem. 2. *De sepult.* Constitucion clementina, que empieza *Dudum* en el título *De sepulturis*: capítulo que empieza *Dudum* en el título de *sepulturis* en las Clementinas: Clementina segunda del título *De sepulturis*.

Extravagantes. Hay que diferenciar entre las llamadas *comunes*, y las de Juan XXII. Las primeras se citan espresando el conno-

tado de *comunes*: las segundas simplemente, subentendiéndose asi, que son de Juan XXII, segun se vé.

Extrav. Comm. Etsi, De injur.

Extrav. Comm. De injuris Etsi. Capítulo que empieza *etsi*, en el título *De injuriis* de las Extravagantes comunes.

Extrav. Antiquæ, De redempt.

Extrav. De redempt. Antiquæ. Capítulo que empieza *Antiq· æ*, en el título *De redemptione* de las Extravagantes de Juan XXII.

Séptimo de las Decretales. Sus cápitulos se alegan, ó citan como los del libro sesto de las mismas, salva la cifra 7, en vez de 6 hablando del libro.

Algunas veces las citas son menos lacónicas, ó contienen mayor espresion, como v. g. *apud Gregorium IX.* Cap. 28. *De jurejurando: extravag. de Joann XXII. unic. cum ad sacra, De sent. excomm*, etc. En estos casos la cita, como se vé, es clara, y no hay sino traducirla.

En cuanto á los Decretales de Gregorio IX hay que notar, que en las citas de las mismas se encuentran algunas veces las palabras *infra*: *in parte decisa*. Sabido es que San Raymundo de Peñafort, autorizado por Gregorio IX, suprimió, al compilar las Decretales, lo que estimó supérfluo, reducido por lo comun á las esposiciones de hechos, dejando solo la parte dispositiva. Muchas veces al citar una Decretal, se hace de la *primitiva*, y no de la reducida, lo cual es necesario espresar, para cortar sospechas ó errores. En tal caso si se añade á la cita la palabra *infra*, aquella se refiere á la Decretal compilada, ó reducida; si las palabras *in parte decisa*, (en la parte suprimida) se refieren estas á la disposicion canónica, ó constitucion decretal primaria, ó íntegra, pero fuera de la compilacion.

En las citas y referencias hay una infinidad de cifras; pero de valor entendido, por lo que no hacemos espresion de todas: como *AA.* autores: *DD.* doctores: *gl.* glosa: *h.* aquí: *h. t.* de este título, etc. Desde luego se hallará defectuoso, por oscuro, este método de citar, á causa de su laconismo, nacido sin duda de lo mucho que escribieron en derecho los antiguos, de lo versados que estaban en él, y de escribirse y citarse todo en latin, *sin ningun romance.*

Hoy han cesado esas causas por el nuevo giro de la literatura, de las ciencias y de las lenguas. Ciertamente que siempre el hallar dificultad en las citas preinsertas y otras análogas, probará estar poco versado en ciencias jurídicas, y sobre todo canónicas; pero la utilidad del modo ó del laconismo ha cedido su vez á las mas espeditas de citar numéricamente la disposicion legal, decretal, canónica, etc., y el título y libro á que corresponde en la coleccion, ó cuerpo jurídico de que se trata, y que se espresa; sino viene subentendido.

Así se citan nuestras leyes de España, é Indias, por lo que seria por demás hacer demostracion de la fórmula de citas de cada uno de nuestros códigos, y como se habrá notado, consultando la facilidad, citamos asi aun las leyes eclesiásticas y disposiciones canónicas en la ENCICLOPEDIA: esplicacion y declaracion que creemos necesario consignar, para que no se tenga nuestro método por vicioso, ó por arbitrario.

SECCION IV.

DE LAS CITAS EN LO LITERARIO.

Son estas, no *llamamiento* ó escitacion personal, como en lo judicial; sino alegacion, referencia, invocacion de ajena autoridad ó testimonio: son, segun la Academia de la lengua, «la nota de ley, doctrina, autoridad ú otro cualquier instrumento, que se alega para prueba de lo que se dice ó refiere.»

En lo literario la práctica de las citas ha versado entre estremos, igualmente opuestos, si bien parece que hoy se ha fijado en un término medio. En lo antiguo la norma era la profusion; despues la parsimonia y hasta la supresion absoluta. La vida de un hombre no bastaba para recorrer, aun ligeramente, las obras que se citaban. Alguna vez es preciso inferir que se citaba por tradicion, ya por la razon indicada; ya por la inexactitud de las citas: otras se conoce el prurito

de ostentar erudicion en lo supérfluo de las citas, acumulando indefinidamente las de obras que trataban de una misma materia y del mismo modo.

Sin embargo, si fuese posible optar entre estremos, sin titubear lo haríamos por el primero. La profusion abrumaba; pero instruía; el estremo opuesto toca en la esterilidad. En el de la profusion, los autores presentaban la comprobacion de sus doctrinas y opiniones; en la supresion omnímoda el autor nos dá por toda autoridad la suya propia. La confianza, en el primer caso, argüia un estudio profundo y una vasta erudicion; y admira algunas veces la precision y alcance de la de los antiguos. Si por otra parte se tiene en consideracion que los antiguos escribian obras de consulta, que aun hoy, merecian ser miradas con menos desprecio, que el que es comun, será aun menos censurable su profusion.

En el dia, sin haber abandanado del todo el segundo sistema de una parsimonia tambien exagerada, relevándose cada autor á sí mismo de pruebas; la práctica en este punto, sino se ha fijado; fluctúa en un justo medio: justo medio, que si en algunas obras fuera censurable, no lo seria de ninguna manera en obras de consulta, como lo es la ENCICLOPEDIA; aprovechando nosotros esta ocasion de justificar nuestro sistema de citar. Somos mas bien parcos, que profusos en citas; pero hay que tener en cuenta que á ellas equivalen los sumarios legislativos.

Y no ya en una obra enciclópedica de derecho y administracion; pero aun en un mero diccionario de derecho, no pueden escusarse las citas numerosas, cuando se trata de una legislacion inmensa, complicada, y con frecuencia contradictoria, como la nuestra. Aun decimos mas: aun las citas numerosas son ineficaces á veces; y solo puede sufragar el sumario ámplio y completo de las leyes y disposiciones del caso. ¿Quién de otro modo, y á pesar de numerosas citas, adquiriria la seguridad, que es posible, en artículos y materias como, por ejemplo, las de CESANTES: CESANTIA: CLASES PASIVAS, etc.?

En obras doctrinales tenemos tambien por viciosa y estéril la práctica de citar magistralmente, y sin denominar ó sin puntualizar la cita: *dice un profundo filósofo, un distinguido escritor, un autor moderno: dice una ley, etc.* Citas como estas no deben hacerse, sino cuando el hecho es tan célebre, ó la doctrina tan conocida, que enunciados, ocurra luego el nombre del autor. Tambien cuando la doctrina citada ó enunciada sea tan sólida, evidente y aceptable, que no necesite de otra autorizacion, ó comprobacion que su misma bondad, ó evidencia.

Hay, en fin, entre nosotros una razon múltiple y especial, para no poder, ni deber prescindir de las citas espresas y proporcionalmente numerosas, á saber, el tránsito reciente, pero sobre todo casi repentino, del estudio obligado de *los clásicos* al estudio libre: el tránsito reciente y repentino tambien de las obras latinas á los escritos en el lenguaje nacional ú otros: el casi abandono de la lengua latina, que fué la de los clásicos, la de los legisladores y tribunales, la de los tratadistas, la de los cronistas y de las asambleas; aun la lengua de la diplomacia europea: el estado de nuestra legislacion: el descuido, en fin, de nuestros planes generales universitarios sobre la enseñenza, no ya de la bibliografía general; pero aun de la faculta tiva. Véase BIBLIOGRAFIA.

CITACION. Es el sustantivo en *io* del verbo *citar*, version castellana del verbo latino *citare*. En la acepcion, que dice al propósito del presente artículo, significa *llamar á juicio*, y en otros casos *ofrecer audiencia en juicio* á la persona de cuyo perjuicio se trata.

En el artículo anterior CITA hemos espuesto la cuestion filológica sobre estas y otras palabras análogas, allí espresadas, y á él referimos á nuestros lectores. Solo repetiremos aquí, que citacion por parte del *juez*, es siempre *llamamiento*, ó por lo menos ofrecimiento de *audiencia* á la persona de cuyo perjuicio se trata en juicio: por parte del *actuario*, alguacil, ugier, ú oficial público encargado de ello, conforme á la ley, es la *notificacion* ó intimacion del mandato ó proveido del juez.

Resulta de lo dicho, y en ello reproducimos tambien lo insinuado en el artículo CITA, que en cuanto á la diferencia entre *citacion* y *notificacion*, notificacion es el acto oficial por el cual se cerciora conforme á la ley al litigante, ó encartado, de cualquier providencia del juez; *citacion* la notificacion de la *cita*. En la citacion hay siempre llamamiento; en la notificacion, solo á veces; y otras mera notoriedad. Se *cita* para *oir*, *esponer*, ó defenderse; se notifica lo proveido por el juez, ó espuesto de contrario, aunque no haya que esponer, ni mas que quedar enterada la parte.

De lo dicho se colige la suma importancia legal de la citacion. Implica uno de los requisitos esenciales del juicio: la *audiencia de la parte*. Ni las leyes divinas, ni las humanas, consienten que ninguno sea condenado sin ser antes oido, ni en todo el juicio, ni en alguno de sus trámites. Asi no es estraño que los escritores de derecho consagren prolijos tratados á la esposicion del importantísimo trámite de la citacion, que toman genéricamente, ó en su base cardinal, por *audiencia de parte*, por el derecho sagrado que á todos asiste de ser oidos para ser juzgados; pero en el sentido filológico y jurídico, que dejamos espuestos, esto es, la cita, ó citacion en su acepcion general, importa siempre llamamiento, ó invitacion de audiencia en cada trámite del juicio que asi lo requiere: la primera citacion para entrar en juicio se llama específicamente *emplazamiento*: las últimas simplemente citaciones: por parte del juez es mandamiento ó invitacion de audiencia: por parte del actuario, notificacion, ó intimacion.

Antes de pasar adelante; hé aquí, segun la tecnología recibida, aunque inexacta, las diversas definiciones de citacion.

«El llamamiento que de órden del juez se hace á una persona para que comparezca en juicio á estar á derecho (1).»

«*Citatio est alicujus vocatio, ut coram judice compareat* (2).»

«Citar, es lo mismo que emplazar, conviene á saber, llamar á uno ante la justicia por medio del ministro que tiene este oficio de emplazador. Díjose del verbo latino *cito, as, are, avi, atum*, frecuentativo del verbo *cieo, es*, por mover, á causa de que el emplazador, y tambien la parte le dán mucha priesa, para que vaya, y parezca ante el juez, cuyo tribunal ordinariamente residia en la plaza de la puerta de la ciudad, de donde se dijo *emplazamiento* (1).»

«Citacion, es una jurídica citacion y llamamiento, que se hace á alguno para parecer en juicio ante el juez á estar á derecho y cumplir su mandamiento (2).»

«Citacion: la accion de citar.» «Notificar, hacer saber alguna persona el llamamiento del juez (3).»

Si quisiéramos multiplicar aun las autoridades, seria para demostrar con mayor evidencia, si cabe, la confusion, la redundancia en las fórmulas, la falta de exactitud y de precision de que en este artículo y en el anterior dejamos hecho mérito. Si segun todas las difiniciones preinsertas, *citar* es lo mismo que *llamar*, ¿cómo no será redundante ó inexacta la doctrina de la Curia Filípica, por ejemplo, cuando esta asienta, que «*citacion* es una *jurídica citacion y llamamiento*, etc?

El mismo juicio resultará, si comparamos las demás definiciones con la incontestable filología que sobre ello dejamos espuesta en este artículo, y los de CITA y CITAM, y con la verdad, ó realidad de las cosas, con la precision de conceptos que de ella se desprende, lo que nos induce, despues de haber fijado la *filología*, y censurado la tecnología actual, á asentar la teoría jurídica de la *citacion*.

Tomada esta por *audiencia de parte para todo juicio*, por ese derecho que hemos llamado *sagrado*, pues que, sin escepcion de casos, lo hacen tal las leyes divinas y humanas, derecho contra el cual casi no ha atentado la barbarie originaria, ó natural; y sí la facticia, y voluntaria, esto es la tiranía,

(1) Escriche, Diccionario razonado de legislacion y jurisprudencia.
(2) Gregorio Lopez á la ley 1.ª, tit. 7, Part. 3.ª

(1) Covarrubias, Tesoro de la lengua.
(2) Curia Filípica, parte 1.ª, §. 12.
(3) Academia de la lengua.

el despotismo, que veja á sabiendas: la teoría, decimos, de la citacion en el sentido espuesto, es la misma que la de la ley. Esta reconoce un legislador, que la dicta, y una autoridad, pública tambien, que la promulga: hecho lo cual, cuando se ha dado la publicidad necesaria, para *que llegue*, ó *pueda llegar* á noticia de los que han de ser obligados por ella; entonces, y no antes, es cuando obliga. Hemos dicho para *que llegue ó pueda llegar* á noticia del súbdito; porque no siempre es posible, ni por tanto se requiere de necesidad natural, ni jurídica lo primero. Es la razon por que si *ad imposibilia nemo tenetur*, segun el principio eterno, asi sentido por la razon universal, y asi enunciado en todos los tiempos por la ciencia y por las leyes: si conforme á él, no debe el individuo ser obligado á un imposible, cual seria el de observar una ley que no conociera, ni pudiera conocer, como la no promulgada, ó que no lo fuese en términos prácticos y racionales; tampoco puede serlo la sociedad en hacer que siempre la promulgacion sea individual, que *realmente* llegue á noticia personal de todos, y *cada uno*, cuando tantos medios hay en manos del individuo para eludir dicho efecto á fin de poderlo hacer luego de la ley, si le conviene, alegando no habia realmente aquella llegado á su noticia. La sociedad política ha tenido por suficiente lo único *que es posible*, el que la promulgacion pueda *hacer llegar* la ley á noticia de todos. Así *á priori* se prefija que, promulgada aquella con formalidades de ante mano establecidas, observadas estas, se suponga *de todos conocida*, y para todos obligatoria.

No sucede otra cosa en la *citacion*. El juzgador dicta la *audiencia de parte*, el actuario la intima ó hace notoria, y el notificado desde entonces queda sujeto á las resultas. No siempre es posible que la notoriedad sea personal y por tanto real y positiva individualmente; pero dada esa imposibilidad, basta al legislador hacer lo que es posible, adoptar medios racionales de que el *llamamiento*, la promulgacion individual de la decision ó providencia que vá á obligarle, llegue á su noticia, para suponer que ha llegado. De aquí el precepto cardinal de que la citacion se haga en persona. Pero cuando asi no sea posible, y eso por culpa de la parte, basta poner en ejecucion los medios de que pueda llegar á su noticia: practicados, se supone que ha llegado; y es igual para los efectos que la citacion personal. No son otra cosa, ni tienen otro objeto la *cédula de citacion ó emplazamiento*; *el cedulon*; *la notificacion á la esposa, á la familia, ó vecinos*; los edictos y *pregones*, etc., bien que la equidad, y aun la justicia relativa, inducen alguna diferencia en los efectos en lo criminal, lo que no corresponde esplanar aquí.

La teoría conduce naturalmente á la esposicion filosófica y justa apreciacion de las fórmulas. Si la *citacion* es llamamiento, será estensiva la denominacion á todos los casos en que dicho llamamiento es necesario durante el juicio; y no limitadamente al primer llamamiento para incoar aquel. Por consiguiente hay inexactitud en tomar por una misma cosa *citacion* y *emplazamiento*, como lo hacen los autores. Todo emplazamiento es seguramente *citacion*, pero toda citacion no es emplazamiento. Lo seria, si esta palabra conservara su acepcion genérica, en cuyo sentido parece tomarla Covarrubias, en la definicion arriba inserta; pero no en el sentido *específico*, y antonomástico, que el uso ha dado, y la tecnología aplica á las fórmulas *emplazamiento*, *emplazar*. Resulta de todo, que aun en la tecnología actual, pero sobre todo en la verdad de las cosas, la fórmula *citacion* es especifica respecto de *notificacion*; genérica respecto de emplazamiento. La *notificacion* dá notoriedad á todos los actos y decisiones del juez, que la requieren, segun la ley, contengan llamamiento ó no: la citacion á solo lo que contiene *llamamiento*: el emplazamiento á solo el llamamiento para incoar el juicio; ó para entrar nuevamente el emplazado en el juicio ya pendiente.

Ahora se verá por qué los autores tratan tan estensamente de la *citacion*: es porque la toman por el *emplazamiento*; por la *audiencia en juicio*, á que todos tienen derecho, y aun por la *notificacion*; mientras que noso-

tros, hecha la distincion anterior, tratamos de cada una de dichas cosas en sus artículos respectivos (1).

La ley de enjuiciamiento civil de 5 de octubre de 1855, es sin embargo, mas precisa en el particular que las anteriores, salvo las recopiladas, y que los tratadistas: constantemente llama *emplazamiento* á la primera citacion, y precisando mas la acepcion de esta palabra. Véanse los artículos 227 al 232, como los que hablan despues de la citacion. La propia exactitud se vé en el título de la Novísima Recopilacion, lib. 11, del *emplazamiento*.

Como una consecuencia de lo que dejamos espuesto, y de la diferencia específica que hay entre *emplazamiento* y *citacion*, debe notarse que decimos con propiedad *emplazar*, para comparecer en juicio, para responder á la demanda; mas no *emplazar*; sino *citar* para prueba, para cotejo, para la vista, para definitiva, para todos los actos, en fin, que requieran llamamiento judicial, posteriores á la primera citacion, ó distintas de ella.

Pero dado que, segun la tecnología actual, la palabra citacion se toma, unas veces por la *audiencia necesaria de parte*, sin distincion entonces de primero, ni ulteriores llamamientos, que es como hemos visto la toman los autores: otras por el mandato del juez, y la notificacion de él por el actuario en cualquiera estado del pleito: otras, en fin, en sentido ya menos estricto, por este último estremo, como entre otras lo demuestra la fórmula frecuente de providenciar, á saber «con *citacion* de tal parte vuelva á darse cuenta,» «cotéjese con *citacion* contraria,» etc.; hé aquí algunas reglas, que aunque en sí adolecen de falta de precision, pueden ya aplicarse con el oportuno discernimiento, viendo el sentido en que toma cada autor la *citacion*.

1.° La citacion, en el sentido de audiencia para ser juzgado, es de derecho natural y de gentes: constituye por tanto en la organizacion de toda sociedad política un derecho imprescriptible. Ni el individuo puede siempre renunciarlo, ni nadie puede despojarle de él sin conculcar á sabiendas las leyes divinas. En este sentido fué siempre un principio de la antigua jurisprudencia: *Citatio, quoad defensionem, est Juris Naturalis, quia fit, ut is, cujus interest, se deffendat.*

2.° La citacion es acto de jurisdiccion, y no puede ordenarla, sino el que tenga aquella, ni practicarla sino el oficial público autorizado para ello por la ley. Por la misma razon no debe hacerse en dias, y á horas en que no pueden practicarse actos judiciales, como espondremos al hablar de la notificacion.

«Es el principio, fundamento y cabeza sustancial de la órden del juicio, aunque no se empieza por ella propia; sino impropiamente. Es introducida por todo derecho divino, natural y positivo. De lo dicho se sigue que todo juicio, aunque se trate ante el Príncipe, en que fué omisa la citacion, es nulo. Síguese tambien, que si en alguna comision se dijese que se proceda *sin guardar la órden del juicio*, no se entiende de la citacion, que no puede ser omitida por Príncipe, ni ley; y asi una ley de la Recopilacion que dice, «que la omision de las solemnidades del juicio no le vicie, se entiende de las demás, y no de la citacion (Curia Filípica.).»

Esta es la incontestable doctrina de todos los autores; y sin embargo, ellos mismos la destruyen, admitiendo esta y otras escepciones al modo: «aunque por el Príncipe y ley no se puede quitar la citacion *primera*, necesaria para la defensa, por ser de derecho divino y natural; se puede variar y alterar el modo de ella y *quitar las demás citaciones de la causa*; inductas para preparacion de la sentencia, por ser de derecho positivo (1).»

Los autores llevan la necesidad de la citacion hasta el estremo mas exagerado. Aducen para ello el ejemplo de Dios, que llamó á Adan antes de condenarle, y lo propio á

(1) Pueden verse en comprobacion de lo dicho la Curia Filipica ya citada: Gregorio Lopez, glosa al tit. 7, de la Part. 3.ª: Febrero, lib. 3.°, tit. 2.°, cap. 6: Escriche, Diccionario, palabra *citacion*. Covarrubias, *práct.* cap. 23. Salgado, *De reg. protec.*, Part. 2.ª, cap. 13. Paz, en su práctica eclesiástica. Gomez á la ley 76 de Toro; y Larrea, allegat. 107.

(1) Curia Filipica, en el lugar citado refiriéndose á otros.

Lorenzo Arrazola

Cain. Alguno añade, *que aun el demonio, si litigase, debe ser oido*, (1) y sin embargo, estos mismos autores asientan y admiten como corriente la siguiente escepcion; mas violenta aun que la anterior: «pero con causa bien puede el Rey dispensar *en que no haya citacion*, y *se proceda sin ella*: mayormente en aquellas cosas y actos, que pueda hacer sin voluntad de alguno, *no ha menester citarle* (2).»

Hay en esta doctrina algo de violento, y de repugnante, que se siente sin esplicarlo. Y ciertamente: despues de asentar que la citacion, la audiencia en juicio, es de derecho divino, se pone luego el derecho divino en mano y arbitrio del Príncipe, el cual podrá menoscabar ó suprimir uno de los mas santos derechos individuales. Si se quiere decir que en derecho constituyente, pueda la audiencia de parte comprenderse como un acto único, y por tanto como una sola citacion; nada tenemos que decir. El derecho constituido ordenará el procedimiento de modo que la audiencia única sea completa, en cuyo caso puede prescindirse de mas citaciones. Pero en tal supuesto no es que el Príncipe las suprime al aplicar el derecho constituido; sino al constituirlo. Mas, admitidas, ó establecidas por este diversas citaciones, como de *emplazamiento*, para prueba, para sentencia, etc.; ni el Príncipe, ni los tribunales, ni nadie sin tiranía, ó notoria injusticia puede suprimir ni todas ni una, las posteriores á la primera. La razon incontestable es *porque todas juntas*, y *no la primera sola, completan la audiencia de parte*: en ese supuesto se han establecido todas, en vez de una sola, pues en otro caso, habria que conceder eran supérfluas las posteriores á la primera, y no habria sentido comun en el procedimiento. Suprimirlas, por tanto, en un juicio es menoscabar la *audiencia de parte*, lo que en justicia no es dado, ni al Príncipe, ni á nadie.

Lo singular es, que para legitimar la violacion de un derecho, á todas luces *imprescriptible*, pues que se dice, y realmente es de derecho natural y de gentes, se trae por toda razon el ejemplo *semi-fabuloso* del Rey Creon, que se dice haber desterrado á Medea sin oirla, *por notoriamente mala*.

Y ciertamente: no es un prurito de ningun género, el que nos mueve á notar con frecuencia la falta de precision, de rigor filosófico, y á veces de inconsecuencia en nuestros antiguos autores. Nadie les presta un testimonio mayor de respeto y de justicia que nosotros: fácil es verlo consignado á cada paso en los artículos de la Enciclopedia: á cada paso tambien recomendamos la lectura de los mismos, y vituperamos el general menosprecio con que se miran sus obras; mas por esto mismo nos creemos mas obligados á indicar, lo que es evitable en ellas, y lo que, á fuer de escritores imparciales, no podríamos ni debemos omitir en una obra de conciencia y de consulta.

Fácil es notar, sino, en la primera de las citas anteriores, y entre otras cosas, la inexactitud filosófica de asentar que la citacion es «*de derecho divino y natural*,» como si el Derecho natural no fuera tambien divino. Asiéntase, asimismo con peligro, que despues de la primera citacion, pueden omitirse las demás por autoridad de príncipe «por ser inductas para preparacion de la sentencia, y ser de derecho positivo;» como si la sentencia pudiera prepararse debidamente sin audiencia completa; como si el derecho *positivo*, enunciado genéricamente, no fuera *divino y humano*: como si el derecho humano-positivo no debiera fundarse en el *divino natural*: como si fuera posible, en fin, que la *primera* citacion facilitara siempre y en todo juicio *completa defensa*, si *à priori* no se ha formulado la audiencia *única* con ese conocimiento y propósito; con toda la amplitud, en fin, que requiere el derecho que representa.

Sobre todo esto hay que reparar que los mencionados autores tratan aquí, no de la citacion específica; sino genérica, por el derecho de ser oido en juicio, y bien se vé que este derecho no consiste solo en el emplazamiento ó primera citacion. Es singular por último la futilidad de las razones alegadas pa-

(1) Bobadilla, Politica, lib. 2.°, cap. 5.°
(1) Bobadilla, id.

ra destruir ó amenguar un derecho de tal importancia, como el juicio del Rey Creon, y la de que la segunda y ulteriores citaciones son de *derecho positivo*. Las citaciones, esto es, la *audiencia de parte*, es de derecho positivo en cuanto á la *forma*, ó ritualidad del procedimiento; no en cuanto á la *sustancia*: esta ha de salvarse y atenderse siempre, cualquiera que sea el número de citaciones que se necesiten para ello: las que en terreno de la justicia no se reputen indispensables, para dicho fin, esas son las únicas que puede alterar ó suprimir el *derecho humano positivo*; pero no otras. Afortunadamente la teoría de nuestros publicistas deja de ser peligrosa, hoy que ha cesado el arbitrio de los príncipes, y el procedimiento general se rige omnímodamente por el derecho constituido. Ni aun la ley recopilada que se menciona (1) puede invocarse hoy, contra las leyes esplícitas de procedimiento judicial. Por la misma razon las anteriores reflexiones conducen principalmente, y aun de todo punto, al derecho *constituyente*.

3.ª Deben ser citados los que aparecen tener interés directo en el litigio; y no los que solo le tengan secundario ó remoto, salvo que ellos lo soliciten, ó alguna de las partes. Con arreglo á este principio ha sido doctrina de nuestros prácticos, que cuando dos señores territoriales contendian sobre la jurisdiccion de un pueblo, no habia que citar á los vecinos, por primera intencion al menos. De la misma manera en los mayorazgos y vinculaciones se citaba al poseedor actual, y no al inmediato: en litigio sobre bienes dotales, al marido y no á la muger. Sobre cosas arrendadas, en fin, prestadas y depositadas, dadas en comodato, etc., al señor ó dueño, y no al arrendatario, comodatario, etc., lo cual habia y ha de entenderse, cuando se trate de las sustancia de las cosas, y no del interés directo de aquellos.

4.ª La citacion primera ó emplazamiento ha de hacerse precisamente á la persona, pudiendo ser habida: y se dice no poderlo ser, cuando es buscada por el pueblo, y en ninguna parte es hallada, dando fé de ello el actuario. En tal caso se recurre al medio supletorio del *cedulon*, edictos y pregones, etc., como decimos en su lugar oportuno.

Otorgando poder el citado, ya las citaciones se entenderán con el procurador, asi como en caso de rebeldía con los estrados del tribunal, en lo que ha de estarse á las leyes y en su defecto á las prácticas recibidas, que arreglan el procedimiento. En lo criminal se observa la anterior doctrina de buscar al citado por el pueblo, cuando no es habido en su casa, y es porque de ordinario en este caso se trata de la *citacion real*, ó sea de detencion ó arresto; mas en lo civil se busca solo en su casa al que ha de ser citado, y asi lo disponen hoy las leyes sobre procedimiento y notificaciones.

5.ª En las citaciones ó emplazamiento á un pueblo, se mandaba á este nombrar *caucionero*, ó representante y con él se entendia la citacion: si esta se ordenaba respecto de la justicia y ayuntamiento, bastaba se citase al procurador síndico. En el dia en cualquiera demanda corporativa ó contra el concejo, se cita al alcalde, sobre lo cual ha de estarse á lo que en cada caso determinen las leyes municipales ó de ayuntamientos, que en los últimos tiempos han variado con frecuencia.

6.ª En las demandas contra la hacienda pública, se cita al fiscal de hacienda.

7.ª En las cuestiones contra el Real Patrimonio al intendente de la Real Casa en la corte, y á los bailes ó administradores en provincias.

8.ª Si el apoderado ó administrador del demandado ó requerido contestase que no tiene poder para litigar, se le podrá mandar que lo exhiba, á peticion de parte; y resultando, será personal la citacion al demandado, ó que haya de ser citado en otro concepto.

9.ª Por regla general la citacion es personal al principio de cada instancia ó recurso de justicia.

Ultimamente en cada caso y materia se estará á lo determinado por la ley especial, ó autorizado en su defecto por la práctica; y

(1) Ley 2 tit. 16, lib. 11, Nov. Recop.

ocurriendo duda ó á falta de determinacion especial, al que administra, ó lleva la principal representacion en cada localidad.

10. La falta de citacion, cuando la ley la requiere, induce nulidad, salvo si fuere por haberse presentado preventivamente la parte.

11. La nulidad proveniente de falta de citacion se subsana con el asentimiento posterior de la parte.

12. Las citaciones, lo propio que los emplazos y notificaciones en ajeno domicilio, se verificarán por exhorto al juez del mismo: en el estranjero por despachos legalizados en la forma que espresamos en su lugar oportuno.

13. El citado debe presentarse, por conveniente y justa deferencia á la autoridad, al juez ó tribunal que le manda citar, bien que sea para declinar jurisdiccion, ó para exhibir privilegio, ó fuero privilegiado, si lo tuviere (1).

14. El que sobre un mismo asunto fuere citado á un tiempo por varios tribunales, cumple con presentarse á uno de ellos para no incurrir en la nota de contumaz, respecto de los demás; sin prejuzgar, empero la competencia del que la tenga, si este fuere uno solo; y no precisamente aquel, ante el cual ha comparecido. La jurisprudencia de los últimos años presenta un hecho análogo de notable importancia. Las recientes leyes de supresion de señoríos, imponian á los señores de vasallos la obligacion de presentar sus títulos ante los jueces respectivos de primera instancia en el término preciso de *dos meses*. El término era por demás limitado para aquellos señores, cuyos estados correspondian á dos ó mas, y aun á numerosos juzgados de primera instancia. Debian presentar el título original: habia títulos asi bien colectivos, que comprendian diversos y apartados señoríos. La posicion de los señores no podia ser mas comprometida. Sin embargo, vino á reconocerse que el señor territorial, que dentro de los dos meses habia presentado el título ante juzgado competente, habia cumplido con la ley, respecto de los demás, sin perjuicio de presentar despues testimonio auténtico, ó fehaciente del título en los restantes juzgados en que correspondiera.

Hemos dicho que la comparecencia del citado por dos ó mas tribunales, le libra de la nota de contumaz, presentándose á uno de ellos; salva la competencia del que la tenga. Por lo tanto, si el caso no fuese de jurisdiccion preventiva, ó de aquellos en que procedia la prorogacion de jurisdiccion, el citado estaba y está obligado á comparecer ante el juzgado competente, aunque ya lo hubiere hecho ante otro: si fuere competente mas de uno, acudirá ante todos los que lo sean, bien que escepcionando la prevencion de jurisdiccion del primero, ó la litispendencia en su caso. Los autores limitaban esta doctrina á lo civil; pero ni en lo civil, ni en lo criminal debe el citado dejar de prestar su homenaje de respeto á la autoridad; asi como en ninguna de dichas vías pueden dos tribunales conocer á un tiempo de un mismo asunto. En caso de citar varios tribunales, y de comparecer el citado ante uno solo de ellos, las leyes de Partida quieren que sea ante el primero que cite.

15. La citacion previene el juicio en su caso entre jueces de igual grado; pero no de grado ó categoría diversa, lo cual revela diversidad de instancias y de competencia (1).

16. Radica ó perpetúa la jurisdiccion en el delegado, aunque el delegado fallezca, ó sufra mutacion de estado antes de la contestacion á la demanda (2).

17. Radica la jurisdiccion, ó conocimiento en el mismo caso en el juzgado competente en que compareció (3).

18 Interrumpe la prescripcion, por la razon incontestable de que perturba la buena fé; cuyo efecto produce aun la citacion ineficaz para el juicio por algun vicio en su forma; pues no por eso es menos cierta la noticia que el citado recibe de que su posesion

(1) Ley 2, tit. 7, Part. 3.

(1) Ley 2, id. id.
(2) Leyes 21, tit. 14 y 33, tit. 18, Part. 3 y glosa de Gregorio Lopez.
(3) Ley 19, tit. 7, Part. 3.

es tal vez viciosa, con lo cual deja de ser *quieta y pacífica*, toda vez que luego resulte, y ante aquel juez, ú otro, competente para el caso, se pruebe que en efecto no poseía bien (4).

19 Hace viciosa y revocable la enajenacion posterior de la cosa, objeto de la demanda, como hecha con dolo, y con ánimo de defraudar. Por la antigua legislacion era viciosa tambien en este caso la cesion de acciones á persona mas poderosas; pero no en el dia, en que, segun la actual, no hay *personas mas poderosas*; pues por la Constitucion política todos los españoles son *iguales ante la ley*.

20. La persona citada, de no comparecer personalmente, lo hará por procurador con poder bastante, ó con protesta de presentarlo, lo cual es suficiente solo en algunos casos; y siempre sin perjuicio de presentar poder en forma; salvos los casos escepcionales, y conocidos, como por ejemplo, el del curador *ad litem*, á quien basta el discernimiento judicial; y en lo criminal los casos de *citacion real*, en los de detencion, arresto, ó prision; el de nombramientos de abogados y procurador por el juez, etc.

Véase CITA: CITAR: CONTUMACIA: EMPLAZAMIENTO: JUICIO: NOTIFICACION: SENTENCIA: REVELDIA: y demás análogos, y referentes á la tramitacion de los juicios. Véanse además algunos casos especiales de *citacion* en los artículos subsiguientes.

CITACION ANTE-DIEM. Se llama asi aquella, que de necesidad lleva el plazo de un dia de intermedio para comparecer. La fijacion de término aquí es menos en contra del citado que en su favor, pues tiene por objeto en los mas de los casos el darle tiempo y desahogo para comparecer preparado. De aquí el indicarse, ó deberse indicar en la cita el objeto de ella. La citacion *ante-diem* tiene lugar alguna vez en lo judicial, como para el juicio de conciliacion, verbal, de faltas, y generalmente para toda comparecencia, acto ó solemnidad *verbal*. La razon es clara. En los juicios *escritos*, el traslado de la demanda instruye, y trae además término, mas ó menos ámplio. En ellos se dá al requerido tiempo *à posteriori* para contestar; en aquellos *à priori*, y por tanto debe ir preparado; y ya se comprenderá que la *citacion* en estos casos es verdadero *emplazamiento*.

Pero la citacion *ante-diem*, tiene mayor aplicacion en lo gubernativo, y disciplinario. Es casi regla fija, y debe tenerse por tal, la citacion *ante-diem* de los individuos de toda corporacion para las sesiones, no ordinarias de la misma, siempre que la perentoriedad de ellas lo consienta. La falta de citacion en la forma dicha, induce con frecuencia nulidad de la decision que se adopte; libra al no citado de responsabilidad en ella, y con ocasion de ella; y le atribuye el derecho de quejarse ó reclamar contra el acto y por su agravio personal.

La fórmula de *ante-diem*, y el fin mismo de la citacion parecian requerir no se escatimase cosa alguna al término de 24 horas para comparecer; y sin embargo, no se reputa dia *natural* el de dicho término, y basta para la validez del acto que la citacion se haya hecho el dia anterior al de la sesion ó comparecencia, á cualquier hora que haya sido, salvo que en lo judicial no podrá hacerse la citacion despues de puesto el sol, pues ya no seria tiempo hábil para actos de jurisdiccion, ó judiciales que admiten dilacion: en lo gubernativo valdrá la cita, aunque se haga despues de dicha hora, salvo que en ello se probase dolo.

Está en la índole de las citaciones *ante-diem* el que hayan de hacerse por *cédula*; y alguna vez se manda, y en asuntos graves deberá siempre prevenirse, que se firme la citacion en la misma. Las propias razones convencen que en la cédula se esprese el motivo. ¿Cómo en otro caso, siendo el fin de la antelacion de dia, el que el requerido pueda ir preparado, lo podrá ir? Ellas convencen tambien que, cuando el asunto sea grave, la cédula debe entregarse cerrada, y asi se practica, firmando entonces el re-

(4) Ley 29, tit. 20, id.

querido en el sobre ó cubierta que devuelve. Véase CITA: CEDULA ANTE-DIEM.

CITACION A DOMICILIO.

Dícese tambien *aviso á domicilio*, aunque siempre es *citacion*. Ha prevalecido esta frase en nuestro reciente derecho público, en el órden parlamentario; y si bien parece no anunciarse en el epígrafe sino una cuestion ritual, y formularia de escasa importancia; no es asi; sino que en los resultados es una grave cuestion constitucional; y la fórmula un modo de salvar un conflicto entre la Corona y el Parlamento, entre el derecho escrito y las dificultades de su aplicacion estricta en casos dados.

Sabido es que por nuestras constituciones políticas la facultad de suspender las sesiones, como de convocar, abrir y cerrar las Córtes es prerogativa del Rey. Si en algun caso, pues, las circunstancias; exigencias justas del gobierno supremo; el estado de la Cámara colegisladora; la falta, en fin, de asuntos preparados, exigen interrupcion en las sesiones por un breve período de dias solamente, la Corona no hará uso de la prerogativa de *suspender*, pues por un lado se rebaja en cierto modo dicha prerogativa, ceñida á un acto, no propio del alto prestigio de la Corona, sino mas bien reglamentario; y por otro, pudiendo ocurrir que en ambas Cámaras no haya necesidad de interrumpir las sesiones, la interrupcion de las de una, no es trascendental á la otra, que podrá continuar funcionando; lo cual no tendria lugar usando la fórmula y prerogativa de *suspension*, pues no puede hacerse de una Cámara sola; ni de las sesiones de una sola de las Cámaras, sino de las *sesiones* de las *Córtes*, y por tanto de ambas Cámaras; á lo que se llega el otro principio constitucional, de que cuando las Cámaras legislativas son dos, no puede funcionar la una, hallándose cerrada, disuelta, ó suspensa la otra.

A su vez el presidente de ellas no puede usar de la fórmula de *suspension*, sin parecer que invade ó comparte las prerogativas de la Corona; añadiendo á este inconveniente el no menor, ó muy trascendental por lo menos, de estar en manos del presidente embarazar la marcha del gobierno, y el un cuerpo la del otro, abusando en momentos críticos de la facultad de suspender.

De aquí la práctica de usar los presidentes, aunque bajo una fórmula modesta, como *reglamentaria*; no de *prerogativa constitucional*, de la facultad, no de *suspender*, sino de *interrumpir* las sesiones, de suspender en suma *las discusiones*, con la restriccion de que se *avisará á domicilio*. Lleva en sí esta fórmula el valor entendido, de que la suspension ó interrupcion es *accidental*, por un término reducido, de pocos dias; sin que por tanto los diputados ó senadores se separen, ni adquieran la libertad constitucional de hacerlo; como lo verificarian siendo largo el período de la interrupcion, en cuyo caso, sobre el escándalo de estar una Cámara funcionando, mientras la otra estaba realmente cerrada: sobre no revelar ese largo período, sino, ó desgobierno, no tolerable, en la mesa, presidencia, y comisiones en preparar trabajos, ó un plan sospechoso ó punible en el presidente, ó en el gobierno; dando este la facultad de menoscabar las prerogativas de la corona, que debe defender; consintiendo y autorizando una suspension simulada en las formas, y real en los resultados. Sucederia aun mas, y es, que despues de un largo período de interrupcion lo que procederia sin desprestigio y ludibrio del derecho público, era, no citar á domicilio; sino convocar, lo cual no podria hacer el presidente de la Cámara sin invadir atribuciones de la Corona.

Nuestros fastos parlamentarios ofrecen ejemplo, sin embargo, de una práctica contraria, pero que esplican bien lo anómalo y complicado de las circunstancias. Despues de una revolucion, se reunieron en 1854 Córtes Constituyentes, que desde luego se declararon poder único del Estado, y diríamos tambien que ley viva; pues callaron todas las vigentes hasta allí, inclusa la Constitucion política que habia venido rigiendo desde 1845. Si las Córtes, además de ser Constituyentes, eran tambien el único poder supremo del Estado, serían soberanas, y soberanas únicas: no ha-

bia poder sobre ellas que limitase el suyo, y por tanto que las suspendiese ó disolviese; ni menos habia que hablar de prerogativas del trono, pues que él mismo con la dinastía se reputó sometido á cuestion.

Resolvióse esto al fin, votando las Córtes la continuacion de la monarquía y de la dinastía; pero en bases aisladas; sin definir sus atribuciones; antes de concluir la nueva constitucion, que las Córtes habian venido á formar.

Dos años iban trascurridos sin llegar á ese término, cuando otra revolucion puso fin á las Córtes Constituyentes. Ya se deja conocer que en el transcurso de dos años, los constituyentes desearian y necesitarian desahogo ó descanso. Pero la Corona no tenia aun prerogativas formuladas y desembarazadas para suspender, y antes por el contrario subordinadas á la soberanía omnímoda que las Córtes continuaban proclamando en cuanto á sí mismas. Tampoco tenia formuladas esas atribuciones el presidente; aunque bien cabrian en la proclamada soberanía omnímoda de las Córtes. Fuese, sin embargo, por deferencia al poder monárquico existente, aunque en embrion indefinido aun: bien por miramiento á la persona que ocupaba el trono: bien por no parecer que se deprimia á la misma y á la institucion; en vez de *suspender*, ó cerrar la legislatura, se usó para el mismo efecto de la fórmula, y disimulo de cerrar una sesion, diciendo el presidente que para otra *se avisaria á domicilio*; y los constituyentes por un valor entendido se retiraron por meses á sus provincias para volverse luego á reunir sin *convocatoria*, por la Corona, como sucedió.

Comprendemos que esta dificultad podria tener una fórmula conveniente en la Constitucion, ó en la ley de relaciones entre los cuerpos colegisladores entre sí, y con la Corona; pero es el hecho que hasta hoy no la ha tenido ni la tiene, aunque deberia tenerla, no ya por el conjunto de dificultades indicadas; sino aunque solo fuera por una cuestion de gobierno. En el estado actual, aquel está precisado á *rogar* al presidente, y rogar *invocando* á la Corona, ó *de real órden*, que interrumpa las sesiones. Bien puede mediar para ello, ó comprometerse en la negativa el órden público, la salud del Estado, la existencia del gabinete aunque solo sea; pero si este y el presidente se hallasen en desacuerdo, el presidente la negara, ó por lo menos vienen reputándose en el derecho de negarlo, ó concederlo, lo cual solo es una grave cuestion de gobierno; asi como negándoselo, y suponiendo el gabinete en desacuerdo, ó propenso á abusar, media á su vez una grave cuestion parlamentaria.

CITACION EN LO ECLESIASTICO. Sabido es que la Iglesia ha tomado sus formas de enjuiciar en el *foro esterno* del órden civil. Por consiguiente con ligeras diferencias, estas han sido aquellas. En el dia se halla terminantemente mandando que los tribunales eclesiásticos se arreglen en el procedimiento á lo establecido para los tribunales civiles, y por tanto, véase en el artículo **CITA.**

Siendo normal en lo canónico la *trina monicion*, se admitió en los tribunales eclesiásticos que, para declarar á uno en rebeldía, precedieran tres citaciones. Los tribunales civiles siguieron la misma norma, pero en el dia es sabido que las tres citaciones se han reducido á una.

En cuanto á las formas, los autores eclesiásticos, tomando la palabra en su mayor estension, numeraban las especies siguientes, que es fácil reducir á las especies de citacion del derecho civil: *citatio realis*: *verbalis*; *á lege*: *ab homine*: *per adictum*: *per literas*: *per præconem*: *ore judicis*: *per nuncium, apparitorem, aut executorem*: *per tabellionem*: *per partem adversam*: *tuba, aut cimbalo.*

En cuanto á la *citacion real*, esto es, la detencion, arresto, ó prision, el eclesiástico no podia, ni puede hacerlo sin impartir el auxilio del brazo secular; salvo que este lo hubiese otorgado de antemano, por medio de la ley, ó real ordenanza, como sucedia, por ejemplo, respecto de los tribunales de la Inquisicion, autorizados, y organizados en gran parte por la ley civil.

En lo eclesiástico, como en lo civil, se conocian y conocen las citaciones á personas

desconocidas ó de domicilio incierto, y en su consecuencia por bandos, ó edictos. Algunas de estas se hacian en las mismas iglesias al ofertorio de la misa, antes ó despues de esta sino, lo que tenia lugar en las *paulinas*, ó escomuniones *pro deperditis, aut substractis*, y en casos análogos, puramente eclesiásticos. Los edictos se fijaban y fijan, en vez de los parages públicos profanos, en las puertas, ó canceles de las iglesias: en asuntos seculares, ó de jurisdiccion *atribuida*, se sigue de ordinario la práctica de los tribunales civiles.

Si no fuera positivo que en la actual disciplina, y aun en la de algunos siglos hace, los tribunales eclesiásticos *del foro esterno*, siguen las fórmulas y práctica de los civiles; lo probaria el reducido número de disposiciones, que sobre el particular contiene el Cuerpo del derecho canónico, y eso contando con que en lo eclesiástico la citacion se toma en su acepcion mas lata, comprendiendo por tanto el *emplazamiento*. Por vía de instruccion, hélas aquí.

Nadie puede ser citado por letras apostólicas á mayor distancia que de dos dietas. *Cap. Nonnulli, De rescriptis, X.*

No vale la citacion, cuando contiene tales condiciones, que hacen imposible, ó muy difícil su cumplimiento. *Cap. Accedens, ut lit. non contest. non procedat.*

Tampoco cuando el llamamiento se hace para lugar peligroso, ó indecoroso. *Cap. Ex literis, de offic. jud. deleg.*

El que es una vez citado legítimamente, debe estar á juicio en aquel tribunal, aunque luego mude de diócesis. *Cap. Proposuisti, De foro competenti.*

El citado debe comparecer, aun cuando solo sea para exhibir el privilegio que le exime, si lo tiene: en otro caso le obligará la sentencia que se dicte. *Cap. Proposuisti*, ya citado.

El citado por un tribunal, no está obligado á responder á la citacion de otro, á no haberse revocado la jurisdiccion al primero. *Cap. Ex tenore, De rescript.*

En la citacion por rescripto del Papa, se insertará el rescripto. *Cap. Prælerea, De dilat.*

Ausente el principal, se citará al procurador, y en defecto de ambos á la casa. *Cap. Si adversarius, De eo, qui mitt. in posses.*

No siendo suficientes estas disposiciones, y alguna otra que pudiera citarse, para arreglar el procedimiento, se vé bien que las reglas de este han de buscarse en la jurisprudencia, y en la doctrina de los tratadistas eclesiásticos y civiles, algunos de los cuales citaremos.

Concluiremos con una observacion filológica, y asimismo jurídica, por la cual en el artículo CITACION, nos hemos referido al presente. Los publicistas eclesiásticos, escribiendo en latin, no tenian mas voces técnicas para espresar el *llamamiento á juicio*, que las de *in jus vocatio*, y *citatio*, mas usada esta que la primera. Pero espresaban con una y otra, no solo la primera citacion, ó llamamiento para incoar el juicio; sino las ulteriores; y no ya el mandato del juez para citar, ó llamar; sino el acto del funcionario público que lo notificaba. Cuando en el primer caso querian distinguir, usaban de las enunciativas, *prima citatio*: *reliquæ, cæteræ citationes*. Era lo comun no hacer esta diferencia; sino que usando la palabra *citatio* en su acepcion genérica de *llamamiento*, ó *audiencia en juicio*, la tomaban por *el derecho de ser oidos, que á todos compete antes de ser condenados*, confundiéndose en una sola locucion la citacion primera con las ulteriores. Asi establecian y podian establecer, como doctrina cierta, hablando de la *citacion*: *omissio citationis reddit nullum omne judicium, etiamsi coram Principe ventiletur.* De la jurisprudencia eclesiástica es tambien la estremada sentencia, repetida por nuestros prácticos, como hemos insinuado en el artículo CITACION, *Etiam si diabolus in judicio esset, audiri deberet.*

Nuestros prácticos, escribiendo tambien en latin por mucho tiempo, siguieron la tecnología de los canonistas. Pero el *romance* introdujo, el uso autorizó, y la jurisprudencia hizo técnicas las voces *cita*, *citacion*, *emplazamiento*; y sin embargo, se ha continuado usándolas de ordinario sin distinguirlas; unas por otras; acumulándolas para es-

presar el mismo efecto, con la poca precision, en fin, inexactitud, redundancia y confusion indudable que dejamos demostrado en los artículos CITA y CITACION, y que volveremos á mencionar en el de EMPLAZAMIENTO.

Los escritores eclesiásticos, apreciando con rigor filosófico en cuanto á los efectos, ó segun la verdad de las cosas, el efecto de la *citacion*, aun usada en su acepcion mas ámplia, como lo hemos hecho nosotros en los artículos antes citados, usaban para ello de una fórmula disyuntiva y *equipolencia*, cuyo segundo término espresa completamente nuestro sistema. Asi definen la *citacion*, *in jus vocatio*, *seu invitatio*. Y ciertamente todos tienen el derecho de ser oidos para ser juzgados; pero todos tambien tienen la facultad de renunciar el derecho introducido en su favor. En tal caso, renunciando el citado á la audiencia que se le ofrece, no incurre, por regla general, en delincuencia, aunque sí en perjuicio propio, en pena disciplinaria tal vez; pero no en pena criminal, salvo los casos de escepcion que dejamos notados en dichos artículos. Asi el emplazamiento, las citaciones ulteriores, llevan, sí, mandato de comparecer; pero que por regla general se resuelve en *ofrecimiento de audiencia*, *invitacion á defenderse*, á usar el citado, si le conviene, del derecho que tiene *á ser oido*: *in jus vocatio*, *seú invitatio*, lo cual los canonistas declaran ser tambien de derecho divino y humano. Además de los artículos citados, véase JUICIO ECLESIASTICO, y asimismo á Rebuffo, de *Citatione*: Van-espen, *jus. eccles.*, Part. 3, tít. 7, cap. 2 de *Citatione*: Covar. *Pract. quæst.*, cap. 23: Sócino, *de Citatione*: Barbosa, *De jud.*, cap. 1.: Paz, *Prax. eccl.*, Part. 1, tom. 1.

CITACION DE EVICCION. La citacion *de eviccion y saneamiento* tiene lugar, á peticion de parte, cuando al comprador, ó adquirente de bienes ajenos por otro título legítimo, le promueven pleito de reivindicacion, contra la libertad de los bienes sino, contra el disfrute de los mismos, turbando en fin, de cualquiera manera, y por razones ajenas al contrato, ó que no nacen de él, ó del título de adquirir, los derechos reales adquiridos. La parte á quien interesa, puede prescindir de que se haga la citacion; pero si la pidiere, ha de verificarlo antes de hecha la prueba en el pleito que le han promovido. El citado puede comparecer ó no; esperando mas bien, á que el pleito se ejecutorie, pues podria serlo sin perjuicio suyo, ó con perjuicio que importara menos que el seguimiento del pleito. Por tal motivo, si citado el vendedor, ó trasmitente, no sale al pleito, la citacion lo es mera y simplemente: si comparece, tiene veces de *emplazamiento*, si viniere al principio del pleito, en cuyo caso gozará de los términos y escepciones propias del emplazamiento: si compareciere, concluso el pleito para prueba, tendrá que tomarlo en el estado en que se halla; y recibirá los autos por el término que segun su estado, sea comun á los demás. Véase EVICCION.

CITACION POR EDICTOS, PREGONES Y BANDOS. A veces la persona que ha de ser citada ó emplazada, no es conocida; ó siéndolo, se ignora su paradero. En estos casos no hay otro medio de cumplir con el precepto legal de la citacion, ó emplazo, que verificándolo por edictos. En lo antiguo tenian estos otra solemnidad y ritualidad, en lo criminal sobre todo, y de ahí las enunciativas de *edictos*, *pregones y bandos*. En el dia, en lo civil, la citacion, ó emplazo por edictos se hace por meros *anuncios oficiales*, reducidos á insertar el auto del juez ó tribunal por tres veces interrumpidas, en la gaceta del gobierno y en el boletin oficial de la provincia, cuidando el actuario de unir á los autos los números en que se contenga el anuncio.

Lo propio se verifica en lo criminal. En lo antiguo, sin embargo, se verificaba por edictos, fijados en los parajes públicos; y por *pregones* y *bandos* de la autoridad, que se fijaban tambien al público, y se insertaban en la gaceta, diario de avisos, ó periódico oficial, de cualquiera otra denominacion. El resultado era el mismo. La imponencia era mayor, llegando algunas veces en cuanto á los emplazados, hasta la calificacion de *bandi-*

dos. Véase CITACION: BANDO: BANDIDO: EDICTO: PREGON.

CITACION POR PLEITO RETARDADO. Simplificando, se dice tambien *citacion de retardado*. Es la que tiene por objeto llamar á la continuacion, ó prosecucion de un juicio ó pleito, interrumpido, ó suspendido por un tiempo considerable, á los que eran partes en él, ó á sus causahabientes. Cuando el tiempo de la suspension, ó interrupcion es muy considerable, la citacion equivale por la fuerza de las cosas á *emplazamiento*, y requiere por tanto ser personal. Aun cuando no proceda, segun la ley, la continuacion del pleito; la citacion de retardado produce siempre el efecto de haber de esponerlo asi los citados al tribunal requirente.

Grave es en su fondo la cuestion de los *pleitos retardados*. Establecidos los litigios para deducir en ellos y hacer efectivas las *acciones*: prefijado á estas por la ley un término para prescribir; sucede con frecuencia que una accion, que se prescribiría por 20 ó por 30 años, se perpetúa por siglos por medio de los pleitos renovados por *retardado*. La accion misma, que nace de la contestacion á la demanda, está en ese caso. Sabido es que dicha contestacion consuma un *cuasi-contrato*, del que nace accion personal, que, como tal, prescribiria á los 20 años. Y sin embargo por el sistema de *pleito retardado*, hemos conocido alguno perpetuarse por tres siglos en fuerza de multiplicar las citaciones de retardado: cuestion, que desenvolveremos en su lugar oportuno. Véase PLEITO RETARDADO.

CITACION DE REMATE. La que en el juicio ejecutivo se hace al ejecutado para oir la sentencia, llamada *de remate*, porque en ella se van á mandar vender en pública subasta ó público *remate*, los bienes embargados. Es en el juicio ejecutivo lo que en el ordinario la citacion para oir sentencia definitiva, con la diferencia de que en esta, habiéndose verificado la prueba en su caso, el citado no tendria que esponer, sino sobre haber trascurrido ó no el término probatorio; novedad ó cambio ocurrido en la representacion personal, como defuncion del poderdante, ó revocacion de poder: sobre restitucion *in integrum*, si procediese: presentacion jurada de documentos, cuya existencia no habia llegado antes á su noticia, etc.; mientras por la citacion de remate pueden tener lugar algunos de esos casos, y además el notable y principal de oponer pago, ó escepcion legítima, que probada en el término *encargado*, obliga, ó tienda á obligar, á declarar no haber habido méritos para espedir la ejecucion; ó no haberlos, aun en el caso opuesto, á sentenciar la causa de remate. Notables son las diferencias que en lo concerniente al juicio ejecutivo, sobre todo en cuanto á los trámites para la venta de bienes, ha introducido la reciente ley de enjuiciamiento civil; los cuales esponemos en su lugar oportuno. Véase JUICIO EJECUTIVO.

CITAR. Del verbo latino, *citare*, llamar, mover. Contraido á lo judicial, es por parte del juez llamar á juicio, si ofrece audiencia en él á la persona ó personas de cuyo perjuicio se trata; por parte del actuario es intimar ó hacer notorio á la parte llamada el mandato ó providencia judicial. Segun los casos, podia citarse en lo antiguo de palabra por la parte misma, por la *in jus vocatio*: entonces y despues por escrito, y segun el caso tambien por *notificacion*, por *cédula*, ó *cédulas*, por anuncios oficiales, edictos, ó pregones: y hay quien reconoce tambien la citacion *real*, por el arresto, ó detencion de la persona; lo cual, sin embargo, no es ya *llamar* á la persona, sino *traerla* á juicio. Tal era tambien la citacion, ó *jus vocatio*, *ob torto collo*, de los romanos.

Citar y emplazar, citacion y emplazamiento, equivale todo, segun la tecnología actual, al primer *llamamiento*, ó primera citacion para juicio. Véase CEDULA: CEDULON: CITA: CITACION: EMPLAZAMIENTO: NOTIFICACION.

CIUDAD Traduccion, no literal, de la voz latina *civitas*. La traduccion rigurosa seria *cividad*; observacion, que creemos muy apropósito, por la índole y para el fin del presente artículo. Y asi, sin duda, debió de empezar á hispanizarse la voz latina *civitas*, cuando vemos que el *romance* en sus

principios, conservando la misma cuantidad y asonancia, vertio *cibdad*. El uso despues, apartándose mas de la raiz etimológica, ha autorizado *ciudad*, corrupcion de *cibdad*, y contraccion tal vez de *cividad*, que es como acaso empezó á pronunciarse, y si no, como procedia, en el supuesto de que los antiguos usaban de ordinario la *ú* vocal por la *v* consonante, y de *ciuidad*, pudieron resultar *ciudad* por contraccion, y *cibdad* por corrupcion.

La voz *civitas* tuvo ya en su orígen romano diversas acepciones, que despues, transformada la misma en *civita, cité, city, cibdad, ciudad*, etc. en los diferentes dialectos latinos de Europa, se han aumentado, como sucede entre nosotros, segun esponemos en este artículo y subsiguientes, sin que aquí nos estendamos á mas, sobre este punto, hasta haber fijado los preliminares, que la índole de la materia hace necesarios.

Muchos tomos pudieran componerse, reuniendo cuanto los autores, antiguos y modernos, han escrito sobre *ciudad*, en su signicacion compleja: la enunciativa con sus derivados y anejos formó parte de la tecnología, y muy esencial además del derecho público de los romanos: han venido formándola al través de los siglos, como la forman hoy, del de todas las naciones, que recibieron su lenguaje y sus leyes del pueblo rey, ó las derivan de ellas; y sin embargo, es fácil notar mas confusion que precision en el particular, como despues aparecerá. Todavía añadiremos que, aun en el dia, es difícil por demás, si es que es posible, el asignar la diferencia *positiva* y *real*, no de mero título, segun nuestro derecho público, entre *ciudad* y *villa*; denominaciones, no como quiera técnicas del derecho público español; sino seculares entre nosotros, é identificadas con la historia, costumbres y tradiciones de los españoles, y parte tambien, hasta de su lenguaje comun.

Fuera de esto, la enunciativa ciudad, con las derivadas del mismo principio, como *ciudadano, civilizacion, civil*, etc., no solo importan cuestiones de derecho público español; sino de derecho internacional á veces, y son por otra parte fórmulas cardinales, la *síntesis* además, de cuestiones las mas elevadas y trascendentales de derecho *constituyente*, de derecho social, de la filosofía que preside nada menos que á la realizacion del destino racional, moral, y social del hombre y del género humano, á la organizacion política de la humana sociedad.

Porque, en efecto, en las diferentes acepciones de la palabra ciudad, veremos que si unas veces se localiza, digámoslo así, y espresa topográficamente una poblacion, mas ó menos importante; otras, asi como sus derivadas, y anejas *ciudadano, civil, civilizacion*, etc., se estiende á la *sociedad civil*, á la *organizacion política*, al *Estado*; y es fácil comprender que ya en ese concepto general, no son sino fórmulas de ese inmenso todo las muy importantes, y trascendentales asi bien, *civismo, ilustracion, humanidad, organizacion social, naturalizacion, gobierno, régimen político*, todas las que contrastan en fin, con *barbarie, estado natural, estado salvaje, anarquía*, etc.

Siendo parte, por último, de nuestro derecho público, como lo vienen siendo hace tantos siglos, las categorías de poblacion, y enunciativas políticas *villa* y *lugar*, asi como de la tecnología jurídica, é histórica, las de *aldea, pueblo, municipio, ciudadela, castillo* y otras análogas; no se comprenderá adecuadamente la diferencia real entre ellas, sin empezar el deslinde radical por alguna, y con mas ventajas por la que puede reputarse por la *primordial* y *normal*, en cuyo caso la historia de la civilizacion europea presenta á la *ciudad*, en todas sus acepciones.

Por esta razon daremos al presente artículo mayor estension, y acumularemos en él mayor número de pormenores, que los que corresponderian á *ciudad*, como objeto meramente del derecho constituido, como poblacion diferente de *villa* y *lugar*; y ya que, segun hemos dicho, aun bajo este concepto limitado, lo propio que en el mas ámplio que corresponde á la voz, reina en este punto importante de nuestro derecho público, de nuestra civilizacion y de nuestra historia,

mayor confusion de la que debiera; y no ya en el órden civil, sino en lo canónico. Asi se verá demostrado en este artículo y los subsiguientes y análogos, en que procuraremos esponer con la claridad y precision que sea dable, y segun nuestra obra lo permite, el orígen filosófico, histórico y filológico de la *ciudad* en sus diversas acepciones, sus vicisitudes al través de los siglos y de la civilizacion general; pero especialmente de la romana, gótica y moderna; y por último de la actual legislacion acerca de ella entre nosotros.

PARTE DOCTRINAL.

SUMARIO.

Sec. I. Orígen filosófico, histórico y filológico de la enunciativa y entidad política CIUDAD.

Sec. II. Continuacion del mismo asunto. Acepciones filológicas y doctrinales de la enunciativa CIUDAD.

Sec. III. De las ciudades romanas.

§. 1.° *De las ciudades durante la República romana.*

§. 2.° *De las ciudades durante el Imperio romano.*

Sec. IV. De las ciudades segun el derecho é historia de España.

§. 1.° *De las ciudades durante la dinastía goda.*

§. 2.° *De las ciudades durante la restauracion.*

§. 3.° *De las ciudades despues del reinado de los Reyes Católicas hasta el siglo XIX.*

Sec. V. De las ciudades en el siglo XIX. Correlacion entre las ciudades, villas y lugares.

SECCION I.

ORÍGEN FILOSÓFICO, HISTÓRICO, Y FILOLÓGICO DE LA ENUNCIATIVA Y ENTIDAD POLÍTICA CIUDAD.

La enunciativa *ciudad* es sin duda de orígen romano; pero su objeto general, *la entidad política* espresada por esta enunciativa, si bien algunas veces es tambien institucion romana, y objeto privativo de la legislacion y civilizacion de aquel gran pueblo; otras es mas universal, se remonta hasta el orígen del género humano, abarca sus vicisitudes, y se identifica con su destino providencial: es la *sociedad política*, para la cual nace el hombre. Asi en sentido abstracto, habrá habido *ciudad*, esto es, *asociacion política*, desde que el género humano contó algunas familias asociadas, y aun desde que contase con una sola, *regida por una ley comun*: en sentido concreto, y segun el derecho constituido, desde que estas asociaciones se localizaron, ya en un punto ó *lugar tópico*, ya en una *region*, formando en el primer caso una poblacion que podrá llamarse Enós, Babilonia, Nínive, Roma, París, Madrid; y en el segundo un pueblo que se denominara pueblo hebreo, egipcio, griego, romano, gótico, español: un Estado, en fin, que se llamara Imperio de los asirios, República de Atenas, ó romana, Imperio romano, de Occidente, ruso ó francés, reino de España.

La razon previene en este punto, cuanto despues ha enseñado la historia. Nace el hombre en la familia, que es su natural amparo y defensa; pero desvalido, inerme, rodeado de infinitas necesidades, á que por sí solo nunca podria ocurrir. Tampoco la familia es bastante poderosa siempre para ocurrir á todas. En las vicisitudes de las cosas, la familia unas veces se aumenta hasta formar un Estado, una nacion; pero otras, por infinidad de causas, naturales unas, criminales otras, se divide, desaparece, resolviéndose en individuos aislados, ó en grupos impotentes contra los peligros y eventualidades, contra los que ni aun la familia unida bastaba. Asi la razon aconseja la agregacion; y el instinto, el peligro, el temor, la esperanza, la necesidad, la conveniencia, de mil modos diversificadas, pero siempre compulsivas y eficaces, atraen ó impelen al hombre á mayores asociaciones; tal debia de suceder en el orígen de las naciones. Esto es seguramente inquirir y esplanar el orígen de la *sociedad humana*, y de las *sociedades políticas*,

pero no es otra cosa inquirir el orígen de la *ciudad*, que en su acepcion abstracta y general no es tampoco otra cosa que la *asociacion de muchos para vivir bajo un régimen comun*.

Parte de este régimen comun seria el guarecerse, el fortificarse, el preparar en la paz los medios, aun materiales, de defensa y de resistencia, segun las circunstancias de cada gran familia, de cada agregacion de familias, de cada asociacion política, segun sus fines y medios, segun su modo de ser, segun la vecindad, el peligro y las circunstancias del suelo, que le cupiese en suerte sobre la tierra, y he aquí ya á la *ciudad*, pasando, no como quiera de la teoría al hecho, del derecho constituyente al constituido; *sino localizándose*; siendo ya poblacion, ó Estado político con nombre propio.

Es esto, repetimos inquirir el orígen de las sociedades políticas; pero no es culpa ni del escritor, ni de la ciencia, si es necesario llegar hasta él, para comprender la idea en su vasta entidad, para comprenderla con verdad, para esponerla con certeza histórica y científica; para no incurrir en el error, no raro, de no comprender en la enunciativa *ciudad*, sino una entidad, ora política, ora meramente local, mas ó ménos ámplia, mas ó menos exígua; pero siempre comparativamente pequeña; meramente como poblacion tópica, lo opuesto á villa, aldea ó lugar; y eso, aun sin alcanzar, y sin poder demostrar tal vez, la diferencia positiva, real, no meramente titular ú honorífica en todos los grados de esta categoría de poblaciones.

Los escritores y pensadores mas autorizados han inquirido y espuesto tambien del modo ámplio y científico, que dejamos indicado, el orígen de la *ciudad*, si bien confundiendo á veces, ó no diversificando convenientemente sus connotados como *asociacion política*; ó sea la *ciudad*, segun la tecnología recibida, y que tenemos precision de seguir, asi como de esponerla y justificarla mas adelante; la ciudad, decimos, como *estado, nacion, pueblo, reino, imperio*; y la *ciudad* como *poblacion* meramente, murada ó no, mas ó menos ámplia; pero siempre localizada, en reducida escala, si bien aun asi puede constituir un estado soberano. No siempre la ciudad, esto es, la asociacion ó muchedumbre, organizada natural ó políticamente, en familia, ó en estado político, se encerraría en un recinto fortificado, ó no; pero debió de ser lo comun, asi como se comprende que debió de haber *ciudades*, ó asociaciones errantes, cuales debieron de ser las naciones ó grandes familias dedicadas á la vida pastoril. Asi vemos á Abraam decir á su sobrino Lot: «¿Para qué escisiones ni luchas entre nosotros? Ahí tienes la tierra toda delante de tí: elige lo que quieras. Si tomas á la derecha yo iré á la izquierda; si á la izquierda yo iré á la derecha (1).»

Pero la vida pastoril no es la normal, como que no se presta al desarrollo intelectual y moral del hombre; ni por tanto al perfeccionamiento racional y moral del género humano. Menos lo es aun la vida meramente *nómada*, que á veces se confunde con la errante individual y vagamunda, y aun la salvaje. Menos aun el estado de todo punto *salvaje*. Si la vida *ambulante*, en todas, ó en cualquiera de las gradaciones que dejamos indicadas, pudiera ser el estado normal del género humano; entonces el hombre no habria nacido para la sociedad: no estaba obligado á su perfeccionamiento: quedaba frustrado el gran designio providencial de la *sociabilidad* del hombre y del género humano: el mundo político seria un testimonio vivo permanente, é inmemorial de la no certeza de ese gran designio: y de tiempo inmemorial tambien el género humano, sin que pudiera, ni darse, ni aun comprenderse la razon de ello, viviria contra su ley y destino, en estado *anormal*; pues que en general vive *asociado políticamente*, organizado en *ciudad*.

Así los filósofos y escritores desde la mas remota antigüedad, tienen por normal, y presentan, lo propio que la historia, el estado de asociacion política del género humano, como su ley providencial y de hecho; y además como estado ordinario y comun

(1) Génesis, cap. 13.

el de la *ciudad localizada*, guarecida dentro de un recinto: como fin, la seguridad individual, el perfeccionamiento, el mútuo auxilio: como medio la asociacion y la organizacion política: como estímulo el instinto y propension natural á la *sociedad*; la conciencia de la debilidad, la inermidad individual, la esperiencia del peligro, de mil modos diversificado, el temor. De ahí la idea dominante y general de que la ciudad era, ó habria de ser murada, sin duda, y la opinion de muchos publicistas de los siglos medios y posteriores, segun veremos, de que *ciudad es la poblacion murada ó fortificada*; lo cual, aunque inexacto en las ulteriores civilizaciones, era comprensible, y de ordinario cierto en los primitivos tiempos, en que eran menos prepotente el imperio de la razon que el de la ferocidad; el de la justicia, que el de la fuerza; el de la ley que el de las armas.

Así decia Platon: «*Danda verò opera est, ut, quoad fieri possit, nihil sine custodia sit. Civitatem quidem curent exercitûs duces.....: Reliqua regio ita custodiatur... Cura verò, et opera singulis in locis talis sit, ut quàm maximè adversus hostium impetum regio munita sit: foveis, ubicumque opus sit, effosis, turribusque et claustris, pro viribus circumductis, nocère volentes arceant* (1).»

«*Fac nos singulos*: ¿*quid sumus*? *Præda animalium, et victimæ*: *hominem imbecilitas cingit. Non unguium vis, non dentium cæteris terribilem facit... nudum et infirmum societas invenit*: *societatem tolle; et unitatem generis humani, unde vita sustinetur, scindes.*» (*Séneca*).

«*Nemo est qui nesciat, initio genus humanum in montibus ac silvis dissipatum, prudentium consiliis compulsum, et disertorum oratione delinitum, se oppidis, mœnibusque sepsisse* (2).»

«*Ne inter hostes, aut prorsus inter sceleratos homines, ferasque versarémur, ædes civitatesque construximus, et muris circumdedimus, imperatores, et principes creavimus* (3).»

(1) Platon *De legibus*, diálogo 6.
(2) Ciceron, lib. 1.° *De Oratore*.
(3) Josefo, Antigüedades, lib. 4.

Puede tenerse por cierto, que si nos fuera dado acumular el testimonio de todos los que, desde la antigüedad mas remota, poética ó históricamente han tratado de la materia, todos la presentan bajo el mismo concepto.

Pero la poblacion agrupada, la asociacion política de individuos ó familias recibió en cada lengua una denominacion análoga á la misma; diversa por tanto en diversas lenguas; pero idéntica en la idea espresada; esto es, *multitud organizada para la vida comun*; *asociacion de personas ó de familias para vivir bajo un régimen comun*, etc.; y decimos siempre para la *vida comun*, porque este es el carácter fundamental de la *sociedad política, de la ciudad* en su mas ámplia acepcion; á diferencia de las asociaciones para una empresa, ó negocio particular, para la guerra, para la conquista, para el comercio, etc.: aquellas son de índole *perpétua*; estas de índole *temporal*.

Y ahora bien: los romanos pudieron denominar á estas asociaciones políticas del verbo *concurro*, y se hubiesen llamado *concursus*: del verbo *convenio*, y se hubiesen denominado *conventus*: de cualquier otro verbo, ó nombre que espresase la idea que les sirvió de fundamento para la denominacion y para la tecnología que de ella se derivó, á saber, la idea, ó circunstancia de *concurrir, acudir, reunirse, ó congregarse muchos á un tiempo con el fin comun de organizarse, para la vida social*; pero prefirieron, segun unos el verbo *cio*, llamar: segun otros el verbo *coeo*, concurrir á un tiempo: en fin, con el propio, segun otros, por último, y esa es nuestra opinion, el verbo antiguo *cieo* (*is, ire, ivi, itum*), moverse con energía, con afan, con movimiento acelerado, perturbatorio á veces, como si hubieran querido espresar un movimiento determinado por motivos poderosos, enérgicos, apremiantes, irresistibles en algun caso práctico, como fueron sin duda, y siempre lo serán, los que determinaron y determinan al hombre á buscar tarde ó pronto la sociedad. Del pretérito pues, *civi* de dicho verbo, digeron *civis*, por el que asi se movia con otros y concurria para asociarse políticamente. Sabido es, que segun la índole, y regla casi inalterable en la

lengua latina, los nombres derivados de la segunda y tercera declinacion se forman del primer caso acabado en *i* del primitivo, y parece indudable que del dativo *civi*, se formó y se derivó *civitas*. Así *civis, cives*, eran *todos y cada uno de los reunidos*; *civitas*, la *reunion*, el *conjunto*, la *unidad colectiva*. De aquí luego *civile, civicum*, lo correspondiente ó lo relativo á la *ciudad*: *civiliter*, lo practicado conforme al derecho de la ciudad: *civilitas*, lo que es conforme á la cultura, dulzura y humanidad propias de la ciudad, esto es, de una asociacion bien organizada y regida. De aquí igualmente la nomenclatura y tecnología generalizada, segun hemos indicado ya, en el derecho y en las costumbres de los pueblos de orígen latino, ó romano, y por tanto entre nosotros *ciudad, ciudadano, civil, civilmente, civismo, civilizacion*, etc.

Conforme á esta esposicion es fácil comprender, que no es *posible* tomar al pié de la letra, ni usar sino bajo un valor tácitamente subentendido, la anterior tecnología, ora castellana, ora latina, cuando nos referimos para los objetos que lo son del presente artículo, á escritores griegos y hebreos, ó de otro idioma, que por lo tanto no se espresaron en latin. Con la misma reserva y valor entendido hay que leer las enunciativas de nuestros publicistas, cuando asientan que los griegos, los hebreos, los egipcios, etc., tuvieron ya *ciudades y villas*, trayendo en comprobacion, no los testos originarios; sino la version latina. Asi, por ejemplo, para probar dicha asercion respecto de los hebreos, se citan pasages de la Biblia Sagrada, tales, como el versículo 6.°, cap. 19 del libro de Josué, en que tratando del repartimiento de la tierra prometida á las tribus de Israel, se dice, resumiendo, ó reduciendo á número las grandes poblaciones que en los versículos anteriores se habian espresado con su nombres propios: «*civitates tredecim, et villæ earum.*»

Hé aquí, concluyen los escritores, que ya entre los hebreos habia *ciudades y villas*; y ciertamente, que la idea que ocurre, desde luego, es que por la legislacion hebrea habia *ciudades* y *villas* en el mismo concepto *gráfico, filológico* y aun jurídico, que las mismas se conocian y enunciaban entre los romanos, y despues entre nosotros. Y realmente no es asi. Habia entre los griegos y hebreos, como en todas las naciones del mundo, mas ó menos cultas, lo que por el hecho no puede menos de haber y suponerse; caseríos y poblaciones *diseminadas*; y tambien poblacion *agrupada*, dividida en centros políticos de diferente estension y categoría: habia y hay el equivalente, pero no *técnicamente*, como lo hemos visto comprender y sostener, el *civitates et villæ* de los romanos, las *ciudades* y *villas* del derecho público español. En el versículo citado del libro de Josué, el *civitates* de la *Vulgata*, ó traduccion *latina* de la version *de los 70*, tiene por equivalente en hebreo ערים (*jarim*), que es como decir en castellano *pueblos, poblaciones*, nombre tomado de la raiz עדר (*concurrir*) ó עיר (*hervir, hacer calor* ó *ruido, tumultuari* latino: y donde dice la vulgata *et villæ earum*, dice el hebreo וחצריהן (*ujatsrehen*) que equivale á *y sus átrios*, esto es, *y sus cercados*, de la raiz חצר (*cercar, rodear de vallado*); de donde pasa á significar *la granja, villa* latino, dicho así *á circumdando, circumferendo, ornando, et muniendo, locus septo munitus*. En griego la Biblia dice *polis* (πολις), que suena conjunto, muchedumbre, *asociacion*, en el sentido que entre nosotros *poblacion, pueblo*: por villa *agroiigia*, (αγροιχια) que equivale á *quinta, granja, campo cultivado*.

En el supuesto, pues, de que nuestra tecnología sobre ciudad y sus derivados es toda latina; asi como de orígen romano, en totalidad tambien, el objeto á que la misma se aplica, procede el establecer ya mas en concreto, que sea técnicamente *ciudad*, y las diversas acepciones de esta palabra por derecho romano y por derecho español; lo cual es el objeto de las secciones siguientes.

SECCION II.

CONTINUACION DEL MISMO ASUNTO: ACEPCIONES DIVERSAS DE LA ENUNCIATIVA CIUDAD.

Atendiendo al remoto orígen de la enun-

ciativa latina *civitas*, á la propension de aquel pueblo al lenguaje figurado, usando con frecuencia la *metonimia* y de la *sinecdoque*, á las visicitudes en fin, de la legislacion y de la civilizacion romana, es fácil inferir que dicha voz tendria diversas acepciones, y asi fué en efecto. Tomábase pues:

1.° Principal, y como *antonomásticamente* por la *constitucion política y leyes de la asociacion*. De aquí *civitas*, *jus civitatis*, espresaban el conjunto de deberes y de prerogativas, que por aquel derecho político, peculiar de los romanos, incumbian y competian á los ciudadanos de Roma, y á los asociados bajo el espresado derecho. En este concepto se decia que el estado civil de un ciudadano romano era de tres maneras, esto es, *status libertatis, civitatis, et familiæ*. Asi tambien, cuando, vencidos los cartagineses, rogaban á los romanos que no destruyesen *su ciudad*; *non civitas, sed urbs*, respondieron aquellos: no la *ciudad*; pero los muros y edificios, (*urbem*), sí.

El derecho de ciudad en esta acepcion fué al principio esclusivo y peculiar de los que vinieron primero á formar el pueblo *colecticio ó de advenedizos*, que constituyó la primera poblacion de Roma; y los que sucesivamente nacian en ella, ó eran adscritos al censo. Pero naciendo este nuevo pueblo, aunque formado en su orígen de aventureros y hasta de malhechores, no para vejetar y morir dentro de sus muros; sino para llenar y domiuar el mundo; empezaron á comunicar su derecho político, y civil, su cualidad de ciudadanos á otros, ora peregrinos, ora enemigos vencidos; y de aquí *dare*, *impertiri civitatem alicui*: *adsribere aliquem civitati*: *communicare civitatem cum aliquo*, y otras frases análogas, hacer á uno ciudadano romano: *eripire alicui civitatem*, *ejicere ex civitate*, privarle de ese derecho y concepto.

La ciudad, en la acepcion antedicha, se daba, no solo á individuos; ó á poblaciones particulares, que ya desde entonces se llamaban *municipios*; sino á estados ó naciones enteras. Asi Julio César dijo, *civitas helvetica*, por la Helvecia toda, ó Suiza. En ese sentido, en fin, se ha dicho tambien y se dice, *ciudadano español*, *ciudadano francés*, etc.

2.° Tómase otras veces por el *pueblo*, por el conjunto de los asociados. Asi decia Platon, y es frase comun en los escritores antiguos: *civitates non lapides*; *sed homines faciunt*.

3.° Otras, tomando el continente por el contenido, se decia ciudad por los edificios, y los muros, por el casco de la poblacion: asi en los *Trenos* de Jeremías *¿quomodo sedet sola civitas plena populo?* Si bien, cuando querian distinguir, para hablar solo de la ciudad material, decian *urbs*. Algunos autores quieren que en tal caso no haya propiedad sino en este modo de decir; pero sin razon. Era sí lo comun; pero nada se opone en la lengua y en la oratoria romana ó que se tome en este caso; como en todos, el continente y el contenido bajo una sola voz. Por otra parte es propio en este punto cuanto el uso autoriza; y cuando se decia bien *pergere in urbem*, no habia de entenderse que solo entraban en la mente del viajante los muros y edificios; y no estos con los habitantes. En tiempos posteriores es conocida la fórmula solemne con que el Papa, en el dia de Resurreccion, bendice al mundo cristiano desde lo alto del Vaticano: *urbi et orbi*, y no ha de creerse que en el primer concepto bendice solo los muros y edificios de Roma, y no al pueblo que contienen.

4.° Otras veces, en fin, *civitas*, espresa el conjunto, el *pueblo* con sus leyes y la localidad, ora fija, ora variable, en que aquel hace asiento. No pueden entenderse de otro modo en la Escritura Santa y escritores antiguos las frases y enunciativas, Cain *primus ante diluvium civitatem condidite quæ de sola multitudinæ suæ posteritatis implebit.* (San Isidoro,) y otras análogas.

Estas acepciones se hicieron mas generales en la baja latinidad, y de todo punto generales y propias en nuestro idioma, por cuanto el romance, pudiendo haber acogido ó hispanizado las dos voces *civitas* y *urbs*; lo hizo solo de la primera para espresar la *ciudad* en lo material y formal en todas las acepciones. Así decimos bien *la ciudad ha*

espuesto al Rey: *la ciudad se ha sublevado*: *la ciudad ha sido demolida.*

Segun lo que queda espuesto, fácil es deducir, que á la enunciativa *civitas*, no iba aneja de necesidad y esencia, como no vá támpoco en los tiempos posteriores á la de *ciudad*, la idea de *magnitud*, y sí solo la de *organizacion política*; y bien se vé que esta puede darse en una asociacion reducida, lo propio que en la mas ámplia y numerosa.

Lo que se dice en este punto de la ciudad localizada, ó en su sentido estricto, tiene aplicacion igualmente en su acepcion mas ámplia. Inmensa debió de ser la ciudad de Cain, pues que segun los escritores sagrados *comprendia á toda su posteridad*; pero esa misma seria muy reducida cuando empezó por la primera generacion familiar, lo propio que las de otros fundadores, ó cabezas de pueblos ó naciones. En el dia es menor ciertamente; pero no es *menos estado* político, no es menos soberana la República de San Marino, por ejemplo, que el Imperio de los Czares: observaciones de que volveremos á hacer mérito, cuando tratemos de nuestras ciudades en los últimos siglos. Asi, despues de la constitucion de Antonino Caracalla, declarando ciudadanos romanos á todos los *ingénuos* del Imperio, la *ciudad romana*, en la primera de las acepciones de que queda hecho mérito, era todo el Imperio romano.

Resta que digamos algo sobre la ritualidad y prácticas de ereccion de ciudades, lo cual conduce á comprender muchas enunciativas, prácticas y circunstancias del derecho y de la historia. Desde luego intervenia en ello la religion, y aun la supersticion, hasta la puerilidad; pero puerilidad encaminada á hacer *santa* é *inviolable* la obra frágil del hombre, á conciliar el respeto á la nueva fundacion. Los gentiles, y por tanto los romanos, invocaban á sus dioses; los cristianos hacian, y aun hacen, intervenir algunas veces á la majestad divina y humana. Los conquistadores de América para erigir una ciudad, ó villa, constituian ayuntamiento en nombre del Rey, y fijaban la cruz.

Los antiguos, y á su vez los romanos, trazaban con el arado el área ó asiento de la nueva poblacion. De aquí entre estos *urbs*, de *urbo*, el arado, aunque, segun otros, de *orbis*, la redondez, porque era ordinario el trazar el área en redondo, alzando el arado é interrumpiendo el surco en lo que habian de ser puertas. Sobre tan humilde principio se levantaron los muros de Roma. El surco, algun tanto mas ahondado, formaba un pequeño foso. La religion y la ley lo hacian sagrado, inviolable (*sanctus*), y Remo con su muerte dejó consignada la verdad tremenda de esta sancion.

«*Urbs vocata ab orbe, quia antiquæ civitates in orbe fiebant: vel ab vrbo, parte aratri, quo muri designabantur; unde est illud:* «*Optavitque locum regno, et concludere sulco.*» *Locus, enim, futuræ civitatis sulco designabatur, id est, aratro. Cato, qui urbem, inquit, novam condit, tauro et vacca aret: ubi araverit, murum faciat: ubi portam vult esse, aratrum sustollat et portet, et portam vocet. Ideo autem urbs aratro circundabatur, dispari sexu juvencorum, propter commixtionem familiarum et imaginem ferentis, fructumque reddentis. Vrbs autem aratro conditur: aratro vertitur: unde Horatius:* «*Imprimerét que muris hostile aratrum.*» (1)

Segun los escritores antiguos, aun en los siglos medios era muy comun el iniciar la ereccion ó fundacion, no ya de una ciudad ó villa, pero aun de una iglesia rural, trazando un recinto, ora con uno, ora con mas, hasta siete y nueve surcos paralelos, que despues se ahondaban ó se forticaban de fábrica, empalizadas, ó de otro modo, dejando una zona ó espacio intermedio entre uno y otro, bastante ámplio, cuanto alcanzase á oirse la voz humana, y hasta de 20,000 pasos en ocasiones, para sembrar lo mas necesario, guarecer los ganados en caso de agresion de enemigos, y moverse los defensores. Asi las historias nos hablan de ciudades guarecidas de mas de un muro, como vemos á la antigua Jerusalen, las poblaciones de los celtas y etruscos, y en tiempo ya de los cruzados á Tolemaida. De aquí el tomarse *mœnia*, asi como hoy *fortificaciones*, por cualquier gé-

(1) San Isidoro, *Orígenes*, lib. 15, cap. 2.

nero material de estas, como *muro*, *foso*, *trinchera*, *empalizada*, *vallado*, etc., lo que conviene tener presente al inquirir la etimología de villa, y su diferencia de la de ciudad, y aldea ó lugar. Sobre estos pormenores puede verse á Canciano, *Barbarorum leges, indiculus superstitionum, et paganiarum*, capítulo 23. *De sulcos circa villas* (1).

Hé aquí ahora algunas autoridades y testos doctrinales sobre ciudad, relativamente al obbjeto de este artículo.

«Quandoquidem videmus omnem civitatem societatem quandam esse, omnemque societatem boni alicujus gratiâ coiri... apparet omnes quidem societates bonum aliquod sibi proponere, ut finem: eam verò, quæ est hominum princeps, quæque cœteras continet, id sibi bonum proponere quod sit omnium summum, ac præstantissimum: hæc autem est ea, quæ civitas appellatur, et societas civilis... Civitas á natura est... ex natura videtur pagus colonia domus esse, quos vocant nonnulli natusque, ac natorum natos. Quapropter et initio á regibus gubernabantur civitates (2).»

«*Civitas compositum et concretum quiddam est... civitas, enim, civium multitudo quædam est... Nam civitas societas quædam est in qua cives reipublicæ et vitæ civilis communionem inter se habent* (3).

Nihil est quod in terris Deo fiat acceptius quam concilia cœtusque hominum jure sociari, quæ civitates appellantur (4).

Cum conventicula hominum, quas postea civitates nominaverunt, tum domicilia conjuncta, quas urbes dicimus (5).

Cives vocati, quód, in unum coeuntes, vivant, ut vita communis, et ornatior fiat, et tutior (1).

Civitas est hominum multitudo, societatis vinculo, adunata, dicta á civibus, id est, ab ipsis incolis urbis, pro eo quód plurimorum consciscat et contineat vitas. Nam urbs ipsa mœnia sunt: civitas autem non saxa, sed habitatores vocantur (2).

Civitas, aliquando sumitur pro populo, aliquando pro situ civitatis, seu pro loco mœnibus cincto, vel denique pro coadunatione hominum (3).

«Ciudad, del nombre latino *civitas, á cive, dicitur, á coeundo, quód vinculo quodam societatis cives in unum coeant cœtum, et sub iisdem legibus vivant.* De manera que ciudad, cuando se trata de la antigüedad, significa un estado, un pueblo con todas sus dependencias, una república particular (4).»

Ciudad, es multitud de hombres ciudadanos, que se han congregado á vivir en un mesmo lugar debajo de unas leyes y un gobierno» (5).

SECCION III.

DE LAS CIUDADES ROMANAS.

Nos concretamos ya á las ciudades romanas, de que traen orígen, y conservan todavía no pocos caractéres, las de los pueblos latinos, y por tanto las nuestras. Pero estas asociaciones políticas han venido sufriendo esenciales alteraciones con las vicisitudes de los tiempos, y el mencionarlas y esponerlas es el objeto de esta y de las ulteriores secciones, empezando por los clásicos períodos de la republica y del imperio.

§. 1.° *De las ciudades durante la república romana.*

En un principio la *ciudad* de Roma estaba reducida á los muros, al surco y foso, sino,

(1) *Quem Cato in originalibus dicit morem fuisse. Condituri enim civitates taurum in dextra, vaccam in sinistra jungebant: et cincti, ritu sabino, id est, togæ parte capitis velati, parte succincti tenebant aliram obliquam, ut glebæ omnes intrinsecus caderent. Et ita sulco ducto, loca designabant murorum, aratrum suspendentes circa loca portarum. Vnde et territorium dictum est, quasi triforium, tritum bobus et aratro. (Servius in Virgilium, lib. 4.°)*

Oppida condebant in Latio, etrusco ritu, multa; ideat, junctis bobus, tauro, et vacca, interiore aratra circumagebant sulcum; hoc faciebant religionis causa, die auspicato, ut fossa, et muro essent munita: terram, unde excalpserant, fossam vocabant, et introrsum factum murum; postea quia flebat orbis, urbs. Varro *De Lingua latina IV*, 32.)

(2) Aristóteles politica, lib. 1.°
(3) Aristoteles, Politica, lib. 3.°, cap. 1.°
(4) Ciceron *De somnio Scipionis.*
(5) Ciceron *orat. pro sest.*

(1) San Isidoro. *Originum, lib.* 9.°, *cap.* 4.°
(2) *Id. lib.* 15, *cap.* 2.
(3) Ferraris Biblioteca jurídica, palabra *Civitas.*
(4) Diccionario de Trevoux, palabra *Cité.*
(5) Covarrubias, Tesoro de la lengua.

que trazó Rómulo á su ciudad. Pero aquella ciudad nacia para dominar el mundo conocido, poblado ya de ciudades, de reinos y de repúblicas, que habian de pertenecer á la naciente dominadora. Comprendiendo esta, como por instinto, su destino, empezó desde luego á realizarlo, atrayendo á su yugo, ó á sus ventajas á todas las gentes; empleando, apenas nacida, desplegando despues y aplicando siempre con perseverancia, asi como tambien siempre con éxito, los dos medios, que podia emplear, la *alianza*, y la *conquista*. Claro es que los resultados guardarian analogía con los medios, esto es, que las ciudades quedarian incorporadas, sí; pero unas *aliadas*, otras *sometidas*: unas, por lo tanto, con mayores ventajas, otras con menos. De aquí la necesaria diferencia de ciudades, dentro de la misma dominacion; y fué así en efecto.

Natural era tambien que el engrandecimiento, la aplicacion de dichos medios empezase por el *Lacio*, despues por toda Italia, sucesivamente por los demás reinos ó repúblicas; y de aquí por lo tanto la clasificacion y tecnología de la historia y del derecho al hablar de ciudades romanas, de ciudadanos romanos, de la propiedad, y de otros derechos.

Heineccio, segun su costumbre, lo reasume todo bellamente en pocas palabras. *Ex quo Roma, initio per Latium, tum per Italiam, ac denique per universum pene terrarum orbem, arma victricia circumtulit, quadripartita esse cœpit hominum, huic imperio subjectorum, differencia. Alio, enim, jure cives, alio* LATINI, *alio* ITALICI, *alio denique* PROVINCIALES *utebantur* (1).

La diferencia de estos derechos, durante la República, pues luego, como es sabido, y decimos en el párrafo subsiguiente, se igualaron, se espresa mejor al hablar de las diversas clases de ciudadanos romanos; por lo cual, V. CIUDADANO; limitándonos ahora á indicar que las ciudades, por las razones antedichas, unas eran *federadas*, otras *deditícias*: unas *latinas*, otras *itálicas*, otras *provinciales*: *estipendiarias*, ó *tributarias*, las que por *deditícias*, ó *subyugadas*, quedaban, sujetas á tributo ó estipendio, mas ó menos grave: *colonias*, de la clase de las *deditícias*, cuyos fundos y edificios se daban á ciudadanos romanos, de la milicia por lo comun; ó bien fundadas de nuevo, y pobladas con gente romana: *libres* llamadas tambien αυτονομον, del griego *autos*, yo mismo, y *nomon* ley; como si digera, *yo soy mi ley, me rijo por mi propio derecho*, y claro es que estas ciudades debian de ser de las *aliadas*, ó *federadas*, no de las sometidas. Las ciudades *auxiliares* se denominaban *oppida*, y diríamos por tanto ciudades *opidarias*, nombradas así de *opis*, el auxilio, y *do*, darlo ó prestarlo. Las mas favorecidas, en fin, de todas estas clases de ciudades, salvo las libres, eran las que participaban del derecho de *sufragio*, esto es, *del derecho activo y pasivo* electoral para la magistratura y cargos propios de la *ciudad romana*, y por ello se denominaban, *ciudades municipales* (municipia) de *munus*, el cargo público, y *capio*, tomar, recibir, etc.: prerogativa y derecho que se resumia en esta fórmulo: *jus ferendi suffragia, petendique honores*.

La fortuna puso fin á la conquista, llevando la dominacion hasta donde podia llegar, á todo el *mundo* conocido: el tiempo quebrantó las resistencias, atenuó y estinguió al cabo las aversiones, que por tanto no pasárian á las civilizaciones sucesivas, derivadas de aquella civilizacion universal; y en medio de todo, y al través de los tiempos, una cosa sobresale con preferencia y aparece trasmitida hasta las actuales civilizaciones de orígen latino: el *municipio*.

El elemento cardinal del régimen y de la civilizacion romana, dicen los publicistas modernos, era el *municipio*; régimen, añaden, el menos á propósito para constituir una grande *unidad política*, con condiciones de perpetuidad.

«En primer lugar es preciso representarse bien lo que era el Imperio romano, y como se ha formado.

»Roma en su orígen no era mas que *una municipalidad* ó un concejo. El gobierno ro-

(1) *Antiquitates rom. append. lib.* 1.°, §. 1.°

mano no ha sido sino el conjunto de las instituciones que convienen á una poblacion encerrada en el interior de una ciudad: estas son las instituciones municipales y este es su carácter distintivo.

»No sucedia esto á solo Roma en particular, pues cuando se mira en derredor suyo á la Italia en esta época, no se hallan mas que ciudades. Aquello que se llamaba entonces *pueblos*, no era mas que confederaciones de estas. El pueblo latino es una confederacion de las ciudades latinas, y los etruscos, los samnitas, los sabinos, los pueblos de la Gran Grecia, todos están en el mismo caso.

»En esta época no habia *aldeas*, es decir, los campos no se parecian de ninguna manera á los que hoy existen, porque si bien estaban cultivados, como era indispensable, no asi poblados. Los propietarios eran los habitantes de las ciudades, y salian á cuidar de sus propiedades rurales, manteniendo en ellas con frecuencia cierto número de esclavos; pero lo que llamamos en el dia *aldeas*, esta poblacion desparramada, ya en habitaciones aisladas, ya en lugares que cubren el suelo por todas partes, era un hecho casi desconocido en la antigua Italia.

»Cuando Roma se estendió, ¿qué hizo? Seguid su historia y vereis que ha conquistado ó fundado ciudades; que ha luchado solo con ciudades, y que solo envia colonias á ciudades. La historia de la conquista del mundo por Roma, es la historia de la conquista y de la fundacion de un gran número de ciudades. En el Oriente, la estension de la dominacion romana no trae absolutamente este carácter, porque la poblacion se hallaba allí distribuida de otro modo que en el Occidente, sometida á un régimen social diferente, y muy concentrada en las ciudades. Mas no tratándose aquí sino de la poblacion europea, poco nos interesa lo que pasaba en Oriente.

»Reduciéndose, pues, al Occidente, volvemos á encontrar por todas partes el hecho que he indicado. En las Galias y en España nunca hallareis mas que ciudades, pues, fuera de ellas, el territorio está cubierto de pantanos y selvas. Examinad el carácter de los monumentos romanos, y no vereis sino grandes caminos que parten de una ciudad y terminan en otra; y esta multitud de pequeñas rutas que hoy se cruzan en todos sentidos sobre el territorio, era entonces desconocida. Nada habia que se pareciera á esta innumerable cantidad de pequeños agrupamientos, aldeas, quintas é iglesias dispersas por el pais desde la edad media. Roma tan solo nos ha legado monumentos inmensos marcados con el carácter municipal, y destinados á una poblacion numerosa y aglomerada en un mismo sitio. Bajo cualquier punto de vista que considereis al mundo romano, siempre hallareis esta preponderancia casi esclusiva de las ciudades, y la no existencia social de las aldeas. Este carácter municipal del mundo romano, hacia con evidencia sumamente difícil establecer y mantener la ciudad y el vínculo social de un gran Estado, y si una municipalidad, como Roma, habia podido conquistar el mundo, le era mucho mas penoso gobernarlo y constituirlo (1).»

En la seccion 5.ª, en el artículo **civilizacion**; y en algun otro análogo volveremos sobre algunas de las especies tocadas en este pasaje, ciñéndonos al presente á lo que es el objeto esclusivo de este artículo, á saber, las ciudades antiguas y modernas; de estas por su significacion é importancia de actualidad; de aquellas, como ejemplar y base histórica, jurídica y tradicional de estas.

Desde luego resalta, como hemos dicho, en la historia y en el derecho, relativo á las primeras, el *elemento municipal*, nacido para llegar á nuestros dias, y puede, tal vez, decirse, para no morir.

Nótase en segundo lugar, que mientras en la República romana domina el *municipio*, esto es, *el gobierno local de todos por algunos de entre ellos*, en las poblaciones germánicas y en las ciudades griegas; por la inversa, el *elemento republicano*, hasta en su exageracion; la *democracia*, ó sea el *gobierno de todos por todos*; aquí las *asambleas populares*, allí la *curia*, que hoy diríamos el concejo.

(1) Guizot, de la *Civilizacion europea*, lec. 2.

Nótase por último que en la civilizacion romana la *municipalidad*, ó intervencion en los cargos y administracion local, fué una ventajosa adquisicion para los pueblos; pero no una *institucion originaria*; antes la *originaria y natural en el Universo es la familia*, y su imitacion *el gobierno de todos por uno*: tampoco fué una conquista; antes los pueblos las recibieron de sus *conquistadores*, ó dominadores: Roma de Rómulo; el Lácio, la Italia, y las provincias de Roma.

Pero de lo dicho se seguiria: 1.° que siendo la municipalidad una gran ventaja en lo administrativo; y una garantía en favor de la libertad, y contra los abusos del poder en lo político, los pueblos la anhelarian, y aun se lanzarian á conquistarla: y 2.° que por una razon inversa los príncipes y señores de vasallos la mirarian con prevencion, la concederian como una gracia, que les obligaria á los favorecidos; la emplearian en este caso como una arma de política, de guerra por tanto algunas veces, contra poderes rivales. El menos versado en la historia y en la legislacion europea podrá decir, si todo no ha pasado asi. De este modo una época, que no parece sino *etimológica* para nuestra legislacion y administracion, encierra sin embargo un principio, fecundo y temible, encarnado en una y otra: asi la civilizacion romana, que habia de ser la base de sucesivas civilizaciones, traia en su esencia el gérmen eficacísimo, causa y esplicacion de las contiendas de poder entre los reyes y los grandes, y despues entre los pueblos y los reyes, contienda de principios, antítesis política entre el *municipio*, y la prepotencia *unitaria*, lucha de poder á poder, que como una parte muy principal, forma la historia política de muchos siglos de la edad media, y aun de la de nuestro siglo, para continuar despues siéndolo perpétuamente de la de otro y otros.

Tal era el estado de la ciudad durante la República romana. Roma lo era todo para el mundo: el senado y el pueblo lo eran todo para la dominacion universal de Roma: las ciudades reflejaban el régimen de la metrópoli, y lo eran todo para la poblacion rural: la poblacion rural, si asi podemos llamar á lo que hoy diríamos cotos, caseríos, aldeas, no eran nada en la República: mutuaban su vida de las ciudades, que á su vez la absorvian. Sobre este inmenso todo, vendrá una frase mas, una nueva época, notable tambien y trascendental para las ciudades, y por tanto para la civilizacion europea: el *Imperio*. Durante él prevalecerá un nuevo principio, que opuesto al *municipio*, formará con él, como acabamos de indicar, la *antítesis* política, que dura y durará, formando parte siempre de las civilaciones sucesivas, como vamos á ver.

§. 2.° *De las ciudades durante el Imperio.*

La fuerza de las cosas viene gradualmente reduciendo las distancias. En las secciones 1.ª y 2.ª, hemos tratado del orígen filosófico, histórico y filológico de la *ciudad*, y por lo tanto de la ciudad en su mas ámplia acepcion, esto es, como *asociacion política*; relativamente á la civilizacion universal; y como hecho histórico, y caso de aplicacion especial á la civilizacion romana: en el párrafo 1.° de esta seccion nos hemos ceñido ya á las *ciudades romanas* en general, precedente histórico y jurídico de las *ciudades europeas*: en este párrafo 2.° nos concretamos á las *ciudades romanas ibéricas ó españolas*, precedente histórico y jurídico, asi bien, de las *actuales ciudades*: en la seccion 3.ª trataremos especialmente de estas, despues de haber reseñado en la 4.ª sus vicisitudes en los siglos medios; y mas bien desde la caida de la dominacion romana en España, hasta la constitucion y consolidacion definitiva de la *nacionalidad española*.

No nos incumbe examinar las causas por qué á la República universal sobrevino el Imperio; pero sí los efectos de este grande hecho, bajo el punto de vista únicamente del presente artículo; y fácil es inferir que el edificio secular no pudo desplomarse, sin que se conmoviera la base cardinal de su estructura: y asi fué. Las ciudades ibéricas del Imperio no serán ya las de la República; aunque conservando el nombre y las formas, el

Imperio las recibirá en el sentido de la República; pero las abrumará con su inevitable *pesadumbre*, y no podrá impedir su transformacion; y ni podrá quererlo, por condiciones esencialmente contrapuestas entre el mismo, y la *República*. Por esta contraposicion, sin embargo, despues de la lucha de principios, el uno no destruirá al otro: se atenuarán mútuamente; pero los dos prevalecerán, y el Imperio, al derruirse á su vez por fuerza mayor, legará en este caso á la *civilizacion europea*, con los elementos de la República, con el *municipio*, la *autoridad unipersonal*; y una legislacion, base cardinal y perpétua de ulteriores legislaciones.

Con efecto: el Imperio es realmente para la Europa la *Roma legislativa*; asi como la *España* del *Imperio* es, para el objeto del presente artículo, la *España romana*.

Antes de esto España fué para Roma teatro perpétuo de sangrientas guerras; y no infrecuentemente de humillantes, y nunca olvidadas derrotas. Los tres últimos siglos de la República abarcan, bajo nuestro punto de vista, la iniciativa de la dominacion romana en España, y las lides y vicisitudes, de que son enérgica espresion y esplicacion los nombres de Sagunto, Astapa, Numancia, Cartagena, Ilerda, Munda: y los de Asdrubal, Amilcar, Aníbal, los tres Escipiones, Viriato, Sertorio, Pompeyo, y César.

Ya se deja conocer cuál seria, durante este período, la suerte de las ciudades. Las unas no sometidas, y en el goce por tanto de su fiera libertad: otras subyugadas, y ya se sabe cual era la suerte de los vencidos, en la política avasalladora de un pueblo conquistador, que llevaba escrito en sus banderas *¡væ victis!*: otras, en fin, eran *aliadas*; pero *libres*; se gobernaban por su propio derecho (αὐτονομον), sino habian esperimentado la suerte de Sagunto. Las ciudades ibéricas, pues, anteriores al Imperio, consideradas en su generalidad, nada trasmitieron, que pueda reputarse como precedente jurídico de las nuestras en la actualidad; ni como precedente histórico; no siendo su heroismo, y el nombre, que muchas de ellas, como Barcelona, Tarragona, Lérida, Cartagena, Sagunto, Córdoba, etc., ligeramente hispanizado, ostentan todavía.

Pero César consumó la conquista de la disputada Iberia, consolidó en ella la dominacion romana; y mirando sin duda, como propia, su adquisicion, pues meditaba el Imperio, durante sus consulados, elevó á *municipios* á la célebre Gades (Cádiz) y á otras ciudades (1).

Fundáronse además varias colonias, como Pax Augusta (Beja, segun unos; Badajoz, segun otros). Augusto permitió á sus veteranos (*eméritl*) poblar colonias tambien, como *Augusta Emerita* (*Mérida*) *y César Augusta*, (*Zaragoza*) (2). Trajano prodigó, como era de suponer, el derecho municipal, y vino al fin la conocida constitucion de Antonino Caracalla, declarando ciudadanos romanos á todos los injénuos, que existiesen en el Imperio, lo que debió aun aumentar las franquicias de las poblaciones de España, siendo singular en este punto, cuán escaso de datos andaba sobre el particular, el compilador de las Pandectas; pues poniéndose á enumerar las *colonias* y *ciudades romanas* en España, lo hace solo de cinco, que parecen ser *Pax Augusta*, Mérida, Valencia, Helche, y Barcelona: *In Lysitania pacenses; sed et emeretenses juris italici sunt. Idem jus Valentini, et licitani habent: Barcinonenses, quoque ibidem immunes sunt* (3).

Todo parecia favorable, asi como honroso, al *municipio*. Los publicistas asientan que aun los Emperadores se honraban con el título de decuriones: Marco *Antonio*, Calígula, Germánico y Druso lo fueron (duumviros) de Cartagena y de Zaragoza: Juba, Rey de la Mauritania, de Cádiz y Cartagena: Germánico y Druso, de Guadix, etcétera (4). ¿Qué honor ni ventaja, además, se reusaria á una provincia que veía elevarse de entre sus hijos á los gaditanos Balbos, cónsul el uno, triunfador el otro, y á Emperadores como Adriano, Trajano y el Gran Teodosio? A pesar de todo, la segur estaba pues-

(1) Dion. Casio. Hist. rom. cap. 41 y 43.
(2) Dion. Casio. id. id., cap. 55: Estrabon, Geograf. lib 4.
(3) Digesto, ley 8, tit. 15, lib. 50, *De censibus*.
(4) Sempere, Historia del Derecho español, lib. 1.°, cap., 3: Masdeu, Hist. crit. de España, tomo 8, §. 21, y en la coleccion de medallas y lápidas, índice 41, ilustracion 6.ª

ta al pié del árbol, y el *antiguo municipio*, combatido á un tiempo por la ambicion, y por un principio contrario, por el *Imperio*: sino sucumbia, tendria que debilitarse, cuando no transformarse.

Ya en los últimos tiempos de la República, la ambicion y la corrupcion iban conmoviendo los cimientos del secular y gigantesco edificio, hasta dar con él en ruina. Si las tentativas habian sido espiadas con la vida alguna vez; tambien otras habian dado por resultado grandes fortunas, desusados honores, la dictadura perpétua, hasta el imperio; y no era sinò natural que el ejemplo trascendiese á las repúblicas aisladas, á los municipios. Los poderosos quisieron serlo mas, aspirando de ese modo á la dominacion local, para acabar por la opresion y el abuso, y fué preciso prohibir por una ley que nadie pudiese adquirir mas de 180 yugadas de tierra; medida ineficaz, pues aunque la codicia no impulsára al engrandecimiento y aun á la usurpacion, impulsaria la necesidad legal de poseer riquezas cuantiosas, para aspirar á los honores de la República, al sufragio, y á los cargos de curia, toda vez que no podia ser decurion el que no fuese propietario de 25 yugadas de tierra, caballero el que no poseyese un caudal de 400,000 *sextercios*, senador el que no lo poseyera de 800,000; y ya obtenida la curia, para sufragar los grandes gastos que los decuriones estaban obligados á verificar á sus espensas. Aumentáronse estos gastos con el boato del Imperio, y empezaron á temerse, en vez de codiciarse, los cargos municipales. Para eludirlos, muchos abandonaban la ciudad y fijaban su morada en los campos en medio de sus fundos, habiendo sido preciso recurrir, para evitar la despoblacion de las ciudades, al medio violento de confiscar los bienes en que asentaban su domicilio los decuriones que huian de ellas (1).

Algunos autores infieren la prosperidad de las ciudades en los primeros tiempos del Imperio de los grandes monumentos y obras gigantescas, que aun testifican de ello (1). No somos de la misma opinion. Eso seria lo mismo que inferir la riqueza y prosperidad de los pueblos subyugados, por los monumentos y templos de Roma, y por los tesoros sin cuento encerrados en ellos. Aquellos se habian erigido, y estos acumulados, saqueando y empobreciendo á los vencidos. En la dominacion romana de la República y del Imperio sucedia lo que aun hoy mismo en algunos Estados de Europa: el Estado es poderoso; la sociedad pobre. Tambien habria que inferir la prosperidad y aun opulencia de pueblos señoriales en la edad media por los castillos, ciudadelas y alcázares de sus señores. Hiciéronse aquellos, y es bien sabido, con el sudor y la sustancia de los gobernados: en cuanto á los romanos, con el sudor y la sustancia de los vencidos: con millares de *esclavos*: tratando como tales á los sometidos: arrancando millares de ellos de sus domicilios y familias: secuestrando, digámoslo asi, hombres, animales y haciendas: aumentando los tributos, tanto mas gravosos, cuanto mas brazos se arrancaban á las industrias y á las tareas productivas.

Aumentadas asi las exacciones, y respondiendo de su cobro los decuriones, tenian que ser inexorables en la exaccion, mientras era incontenible el abuso de hacerlas recaer principalmente sobre los pobres, sobre los que menos podian defenderse. Los códigos romanos están llenos de disposiciones encaminadas á refrenar la rapacidad y la tiranía de los magistrados (2). Dióse á los plebeyos intervencion en algunos asuntos de la administracion municipal, á la manera de nuestros *concejos*: dióseles un magistrado del estado llano, algo semejante á los *síndicos* y *personeros* de nuestros ayuntamientos, llamado por ello *defensor de la ciudad*: funcionario que no podia salir de la clase de los decuriones, ni de la militar (3). Enviábanse *censitores* ó *visitadores*, *censores*, *igualadores*, oficiales públicos con el cargo especial de corre-

(1) Ley 2, tit. 1 del Código Teodosiano, *Si curialis, relicta civitate, rure habitare malucrit.*

(1) Sempere, antes citado.
(2) Tit. 31. *De Decurionibus*, lib. 10 del Código de Justiniano.
(3) Tit. 55. *De Defensoribus civitatum*, lib. 1 del Código.

gir los abusos, y contener las violencias (1).

Lo enérgico de los remedios revelaba la profundidad y estension del mal, así como su acumulacion la ineficacia de los mismos. Como siempre los poderes abusivos suelen ser *débiles ó contemplativos con el fuerte; y fuertes con los débiles*; los débiles y oprimidos de los campos y ciudades se entregaron en manos de los *fuertes*; y nació el *patronado* y la *clientela* de la época que recorremos, remedo del antiguo patronado y clientela de Rómulo (2). Pero nó podia hacer la sumision lo que no habian hecho antes la moralidad, y el respeto á la humanidad y á las leyes; y aun cuando se supongan exageradas, no pueden leerse sin repugnancia la relacion y pintura, que los historiadores nos hacen del patronado y los abusos.

«Los pobres se entregan á los ricos, y se esclavizan para que los defiendan, y los protejan. No veria yo en esto un gravámen, ni una bajeza, y antes bien celebraria la generosidad de los poderosos, si estos no vendieran sus patrocinios, si los dispensasen por humanidad, y no por codicia. Pero es bien doloroso que no defienden á los pobres, sino para robarlos; no protegen á los miserables, sino para hacerlos mas infelices con su proteccion. Los padres se ven forzados á comprar la seguridad de sus familias, despojándose de sus bienes y dejando á sus hijos por herencia la mendicidad (3).»

La magistratura, aplicando fielmente las leyes, podia haber contenido, ó por lo menos atenuado el mal. Pero horroriza tambien la pintura, que escritores de aquel tiempo nos hacen de ella.

«¿De dónde pensais, decia Libanio, escribiendo á Teodosio el Grande, que proviene el que algunos de estos, que habiendo salido de la casa de sus pobres padres á pié, con el calzado roto, y aun sin calzado, venden ahora granos, fabrican casas, comercian y dejan á sus hijos pingües herencias? La única mina de todos ellos es el tribunal: los litigantes, tanto los que ganan, como los que pierden el pleito, son sus contribuyentes. Los artesanos quebrantan su gran poder, no solo regalándoles abundantemente, sino á sus domésticos, tan insolentes á su vez, que pende de su arbitrio el precio de sus manufacturas; y hasta el azotarlos y desterrarlos (1).»

Si el patronado era, como parece, el último remedio contra los desórdenes del municipio; el remedio por desgracia se convirtió en escándalo, y veremos despues que la ley tuvo que reprobar, y prohibir el patronado y clientela, aun con severísimas penas.

La autoridad superior, que, si bien por la índole del régimen imperial, y del espíritu de los tiempos, tenia que aumentar los tributos; autorizando, sin quererlo, el abuso, y aumentando la miseria; no desconociendo siempre su mision, y aun su propio interés y conveniencia, multiplicaba, como hemos visto, y y aun indicaremos, en la seccion siguiente, las medidas y disposiciones legislativas para contener el mal: tuvo que multiplicar tambien los *agentes y emviados imperiales*, y revestirlos de autoridad, hasta discrecional. Aun sin contar con el abuso, esta autoridad debió de irse aumentando y consolidando: se hizo, normal; y aparecen los gobernadores, los *condes militares*, corrigiendo, y reemplazando así en algunas funciones á la curia y régimen antiguo municipal. Así veremos encontró las ciudades la monarquía goda.

Véase ahora el juicio de un publicista de nuestros dias sobre el tránsito de la República al Imperio, por lo que hace á las ciudades.

«Así, cuando parece la obra consumada (la conquista universal), cuando todo el Occidente y una gran parte del Oriente han caido bajo su dominacion, veis á esta prodigiosa cantidad de ciudades y pequeños Estados, *hechos para el aislamiento y la independencia*, desunirse y despegarse, digámoslo así, y que esta es una de las causas que acarrearon la

(1) Tit. 57. *De censibus, et censitoribus, et perœquatoribus*, lib. 11 del Código: tit. 4.° *De muneribus, et honoribus*, lib. 10 de id.: en el Código Teodosiano título *De censoribus, perœquatoribus et inspectoribus*: y en el mismo Código título. *Ne damna provincialibus inferantur.*

(2) Dionisio de Halicarnaso, Antig. rom., lib. 2, cap. 4.

(3) Salviano, presbítero de Marsella en el siglo V: Libanio, *Oratione De patrociniis.*

(1) Libanio *oratione adversus ingredientes in magistratuum domos.)*

necesidad del Imperio, de una forma de gobierno mas concentrado y capaz de conservar unidos elementos tan poco coherentes. El Imperio procuró introducir la unidad y el enlace de esta sociedad dispersa, y lo consiguió hasta cierto punto; porque entre Augusto y Diocleciano fué cuando, al paso que se desplegaba la legislacion civil, se estableció este vasto sistema de despotismo administrativo, que ha estendido por el mundo romano un enrejado de funcionarios, gerárquicamente distribuidos, perfectamente enlazados, ya entre sí, ya con la corte imperial, y únicamente aplicados á hacer pasar á la sociedad la voluntad del poder, y al poder los tributos y las fuerzas de la sociedad.

Y este sistema, no solamente logró reunir y contener juntos los elementos del mundo romano; sino que la idea del despotismo, y del poder central, penetró en los ánimos con una facilidad singular. Es digno de admiracion ver en esta coleccion mal unida de pequeñas repúblicas, en esta asociacion de municipalidades, prevalecer rápidamente el respeto á la magestad imperial, única augusta y sagrada, y forzoso era que la necesidad de establecer algun vínculo entre todas estas partes del mundo romano, fuese muy poderosa, para que las creencias, y aun los sentimientos del despotismo, pudieran hallar en los ánimos una acogida tan fácil.

Con estas creencias, con su organizacion administrativa, y con el sistema de organizacion militar que se le habia añadido, fué con lo que el Imperio romano luchó contra la disolucion que le corroía interiormente, y contra la invasion de los bárbaros; y luchó largo tiempo en un estado contínuo de decadencia, aunque siempre defendiéndose; pero al fin llegó un momento en que la disolucion prevaleció, y en que, ni el *saber-hacer* del despotismo, ni el *dejar-hacer* de la servidumbre, fueron ya suficientes para sostener este gran cuerpo. En el siglo IV se le veía deshacerse y desmembrarse, entrando los bárbaros por todas partes, y las provincias no resistian ni se inquietaban ya por el destino general. Entonces fué cuando ocurrió á algunos Emperadores la idea singular que quisieron esperimentar, de si algunas esperanzas de libertad general, una confederacion y un sistema análogo á lo que llamamos hoy *gobierno representativo*, defenderia la unidad del Imperio romano, mejor que la administracion despótica. Ved aquí un rescripto de Honorio y Teodosio el jóven dirigido en el año 418 al prefecto de la Galia, y cuyo objeto se reduce al establecimiento en el Mediodia de la Galia de una especie de gobierno representativo; para conservar todavía con su auxilio la unidad del Imperio. (1) Véase aun la seccion siguiente.

SECCION IV.

DE LAS CIUDADES SEGUN EL DERECHO É HISTORIA DE ESPAÑA.

En 411 Ataulfo con sus godos se estableció en Cataluña, hechando así los cimientos á la dinastía goda, y disputando por tanto su lugar al Imperio romano en España. Ya antes lo habian hecho, asentándose en la Península, los vándalos, suevos y alanos, con quienes á su vez tendrian que pelear los godos, para quedar señores. De este modo á principios del siglo V, la Península ibérica era poseida, y disputada por las mencionadas naciones, y por el Imperio romano, que acometido por todas partes, pronto se dividiria, para acabar al fin.

En la época que hemos mencionado, los alanos eran dueños de Lusitania, ó Portugal con parte de Estremadura: los suevos de Galicia, que entonces abarcaba hasta treinta naciones ó pueblos diferentes, comprendiendo las Asturias, Cantabria y parte de Castilla la Vieja. Los vándalos, la Bética ó Andalucía. Los romanos solo Cataluña y en el interior hasta la Carpetania ó Toledo. El Emperador Honorio, dando á Ataulfo en matrimonio á su hermana Placidia, le habia encomendado la empresa de lanzar de la Península á los suevos, vándalos y alanos; empresa que empezó y no concluyó.

Por otra parte, ya en 329, á la muerte de Constantino el Grande se habia dividido el

(1) Guizot antes citado.

Lorenzo Arrazola

Imperio romano entre sus dos hijos, Constantino, Constancio y Constante, tocando al primero las Galias con España; si bien, muerto el primero y tercero, volvió el imperio á reunirse en Constancio en 353. Muerto, sin embargo, Teodosio el Grande en 395, el imperio, que desde el siglo III de su creacion corria á su ruina, se dividió para siempre, empezando en sus hijos Arcadio y Honorio, cabiendo á este, á la edad de once años, la porcion del que se llamó Imperio de Occidente, y por tanto la España.

Hacemos esta reseña, porque ella, mas que estensas esplicaciones, revela cuál pudo y debió de ser desde el siglo III al V el estado general de la legislacion y administracion pública, y por tanto el de las ciudades de la Península ibérica: para justificar tambien por qué respecto de España terminamos la época del imperio al empezar la dinastía goda; y es, porque de hecho para la Península concluyó entonces; y porque en la lucha de poderes entre el imperio y las razas germánicas, nos atenemos á la que quedó vencedora, dando á España la primera dinastía propia, encabezando en Ataulfo.

Al recorrer esta época notabilísima de nuestra historia, conviene tambien tener presente que Justiniano, el gran legislador de la Roma imperial, era emperador de Oriente, y por tanto, que cuando de 563 á 578 dictó sus leyes y publicó las Compilaciones que han inmortalizado su nombre, la España no pertecia á sus dominios; sino al Imperio de Occidente, lo que debe tenerse en cuenta, lo uno porque es comun, cuando se habla de las leyes de los romanos, hacer aplicacion de las de Justiniano á España, como si esta hubiese pertenecido á los dominios de aquel, y lo otro porque, si bien en algunas cosas se tendrian presentes dichas disposiciones imperiales, no seria sino por asimilacion y consuetudinariamente.

Debe notarse, en fin, que aunque Walia sometió á los vándalos muy al principio de la monarquía; Sisebuto no venció á los griegos de Andalucía, ni á los suevos de Galicia, hasta en el último tercio del siglo VI. Eurico á mitad del siglo V abatió el poder romano en España, pero todavía se dice de Gundemaro que á principios del siglo VII tuvo que opugnar y logró rendir algunas fortalezas romanas. Y fácil es inferir de todo lo dicho, que siglo y medio de los tres que abarca la dinastía goda, en lo administrativo y *municipal*, así como en lo legislativo, fueron de transicion; doblemente porque, como es sabido, godos y romanos se rijieron por algun tiempo cada uno por sus propias leyes, para mandar cesar estas al fin. Asi el *municipio*, que ya hemos visto, decayó tanto al pasar de la república al imperio, decayó aun mucho mas al pasar del imperio á la nueva dominacion goda.

Aquí debemos espresar lo que indicamos en la seccion anterior sobre los abusos y decadencia del régimen municipal, durante el imperio. El patronado y clientela, íntegro todavía el Imperio romano, tuvieron que prohibirse aun con severas penas (1).

En medio de todo el municipio conservó sus formas, que todavía vemos reproducidas en los *ayuntamientos*, *concejos*, *cabildos* de nuestros tiempos. Pero véase sobre ello AYUNTAMIENTO: CABILDO: CONCEJO: CURIA.

Quísose tambien mejorar el régimen municipal dando á las ciudades, así como en lo judicial los distritos judiciales y conventos jurídicos, los *concilios provinciales* para asuntos administrativos y procomunales; y no en tiempo de Honorio, como supone algun publicista (2), sino mucho antes, como esponemos en su lugar; pero no por eso fué posible sostener un poder, que por el peso de las cosas se venia abajo. Véase CONCILIO, CONVENTOS JURIDICOS: CORTES.

Durante el imperio, en fin, hemos visto levantarse al lado del *municipio* el poder *central unipersonal*, y prevalecer con atenuacion de aquel. Ahora, durante la dinastía goda, entre tantas causas y elementos para modificar el poder municipal de las ciudades, se levantan otros dos elementos: el elemento

(1) Código Teodosiano, ley 4, tit. *De patrociniis vicorum*: ley 1, id. tit. *Ut nemo ad suum patrocinium suscipiat rusticanos et vicos eorum.*
(2) Guizot antes citado.

eclesiástico y el elemento *militar gubernativo*.

Ya al principio del siglo V vemos á Justiniano asociando á la accion de la autoridad temporal la de la autoridad de la Iglesia, el poder é intervencion de los obispos para *castigar* unas veces, otras para denunciar los abusos de los magistrados. (1) La religion, que no desdeña al miserable y desvalido, y antes se pone á su lado con preferencia, le buscaba para consolarlo en la soledad, en el campo, en las cabañas y granjas, que al lado de una iglesia ó capilla rural se agrupaban, y formaban nuevas, aunque humildes, poblaciones, siendo el resultado substraerse á la opresion de la ciudad, y disminuir la importancia y prestigio de estas; circunstancia notable de que aun volvemos hablar mas adelante, como asimismo en el artículo VILLA.

El otro elemento que atenuaba ó trasformaba el poder de las ciudades, fué el *gubernativo militar*, el de los *condes*, *vizcondes*, *vicarios*, *vílicos*, etc.: institucion identificada con los hábitos guerreros de las razas invasoras, que si en las regiones germánicas se reunian en asambleas para deliberar con sufragio universal; aquí en huestes para combatir, y bajo un régimen, en analogía con su nuevo modo de ser, *central unitario*; y es lícito inferir de todo, que las ciudades, en cuanto al antiguo poderío y régimen *municipal*, ó sea *republicano local*, salieron de la dominacion goda aun mas debilitadas, que habian entrado en ella.

§. 2.° *De las ciudades durante la restauracion.*

Mas tenian que debilitarse aun en la época de la restauracion. Despues de tres siglos de existencia, en una sola batalla vino abajo la poderosa monarquía goda, y en 714, numerosas falanges africanas, se asientan vencedoras en el Mediodía de España, estendiendo desde entonces, y ampliando despues á la casi totalidad de ella una dominacion, que no habia de ser derrocada, sino despues de 7 siglos; mientras un poder contrario se iniciaba y organizaba en el estremo opuesto de la Península: una centella aun de la estinguida monarquía se trasformaba en nuevo poder, que aunque combatido con ventaja, pronto se ostentaria como monarquía de Asturias, de Leon, despues de Navarra, de Aragon, de Castilla, para prevalecer al cabo de siete siglos de heroicidades y de errores, de reveses y de gloria, como Monarquía española, que desde su elevado trono, bien asentado, no alcanzaria ya á ver á sus dominadores, sino buscando el último asilo, perdiéndose de vista en sus abandonados desiertos y arenales de la Libia.

Durante este largo período de la restauracion sucederán dos cosas, que, sino fueran históricas, parecerian paradógicas: el poder municipal se estenderá, y volverá á regularizarse; decayendo sin embargo el poder de las ciudades: y ese mismo elemento municipal, abatido ó atenuado por su elemento contrario, por el poder *central* y *unitario*, será llamado por este en su auxilio, y vencerá, primero en provecho del auxiliado; á lo largo para sí propio: lucha triple, en que primero aparece el poder central atenuando al municipal: despues el poder de los señores aniquilando el poder central: este á su vez abatiendo el poder de los señores, auxiliado del poder municipal, y aparecen *los comunes*: estos al fin, compartiendo el poder de las ciudades; pero comprimido el mismo, superado ya el peligro, por el central; para reiterarse despues la lucha y la alternativa, como nos demuestra la historia, y como lo será indefinidamente. En medio de todo, y al través de tales vicisitudes, dos poderes de los beligerantes han resultado vencidos: el de las ciudades y el de los comunes: uno preponderante, el *central*: otro atenuado; pero con condiciones de duracion indefinida, el municipal.

Y efectivamente: los tres elementos, que durante la dinastía goda atenuaban el poder de las ciudades, el poder *central unitario*, como asi bien el elemento *militar*, y el elemento *religioso*, seguirán obrando en su sentido; pues si en un principio todos sufrieron per-

(1) Novela 83, cap. 3.°

turbacion por la irrupcion sarracénica; no aniquilamiento el primero y segundo, toda vez que los invasores permitian á los vencidos y subyugados regirse por sus leyes, y observar su religion. Los árabes por otra parte no destruyeron, antes favorecieron la *ruricultura*; y era consecuencia necesaria el ampliarse mas y mas la poblacion rural. El boato y ahogo de las ciudades, y la mayor libertad del culto cristiano contribuirian á ello.

Esto en el pais dominado. En el pais de la resistencia y sucesivamente en el recobrado, no solo ya las antedichas, sino nuevas y mas vigorosas causas contribuian, con mayor éxito aun, al mismo fin. Hay en ello una circunstancia contraria. El desamparo de la poblacion rural, de las granjas y lugares, les obligaba á buscar el amparo de una metrópoli: á ella se acogian las gentes con familias y ganados, contra las *razias* y agresiones de los invasores, y esto aumentaba el poder de la *ciudad*. De aquí el *alfoz* de muchas ciudades, y aun de muchas villas principales: vestigio de la restauracion, que ha llegado hasta nuestros dias.

Pero ese peligro, que era inminente en un principio, empezó á ser menor en proporcion que abanzaba la reconquista, y se fortificaba á su espalda. Por necesidad estratégica se fortificaban, y poblaban puntos en que era preciso organizar la administracion y la justicia; y aun que dependiesen de alguna ciudad, tenian ya vida propia. El campamento de las huestes leonesas, castellanas, navarras, aragonesas, etc. se convertia muchas veces en nueva poblacion con las mismas condiciones de administracion, y conservando en su denominacion el recuerdo de su orígen (*Castrum*, Castro). Reuniones particulares de peninsulares denodados, ayudados de su valor y de los accidentes del terreno, se fortificaban y constituían en nueva poblacion por diversas partes. Los reyes y los caudillos compartian, como es sabido, y refieren las leyes y la historia, el territorio conquistado, que mediante convenio y *carta-puebla*, concedian á nuevos pobladores. Mas tarde la generosidad ó la debilidad de los monarcas hasta aniquilaron el poder de la Corona, por interminables desmembraciones de pueblos y territorios en favor de particulares, los cuales á su vez poblaban, repoblaban, organizaban á su modo sus dominios: y de todo lo espuesto resulta que la poblacion rural, iniciada apenas durante la república romana, y el laboreo por esclavos: que por las diferentes causas y vicisitudes, que dejamos reseñadas en este artículo, tomó incremento y como forma de vida propia, durante el imperio: que empezó á tenerla en el período de la dinastía goda: ahora ya, durante la restauracion, y principalmente por causa de ella, no como quiera se presenta desarrollada y organizada con amplísimas formas; sino rivalizando con las ciudades, cuyo antiguo poder, siendo asi compartido, se atenuaba por necesidad.

Los señores territoriales recibian, con el territorio, la jurisdiccion; ó de otro modo, fuera de la jurisdiccion suprema, y las prestaciones y sumisiones feudales en su caso, recibian el *señorío omnímodo*, lo *territorial*, *jurisdiccional* y *gubernativo*: organizaban sus poblaciones propias á su placer, y podía suponerse y es sabido, que lo seria y lo fué con centralizacion casi absoluta. Hechos asi soberanos y poderosos: fortificados en sus *castillos, fortalezas y peñas bravas*: debilitada la Corona por la misma causa, porque los señores eran poderosos y soberanos, ¿cuál seria ni su temor, ni su respeto hácia ella en cuestiones y contiendas de intereses opuestos, y las cuales por el estado mismo de las cosas ó por cálculo, eran ó se hacian frecuentes?

Empezaron las luchas. Débil la Corona para contrarestar el poder de tantos soberanos contrarios, se alió con su enemigo, llamó en su auxilio y dió vida al elemento municipal. Concedió este régimen en su mayor amplitud á las nuevas poblaciones. Codiciando estas ventajas las poblaciones señoriales *sui juris*, ó porque lo eran desde un principio, ó porque recobraban su libertad, emancipándose de sus señores, renunciando el protectorado de *behetría*, etc., se hacian de *realengo*. Las señoriales se resfriaban en su adhesion á sus señores, y envidiaban los *fue-*

ros de aquellas: diremos en una sola frase *que nacian propiamente los comunes*. Con ello se debilitó el poder de los señores, se engrandeció el de la Corona, y esta, que tanto engrandeció á los señores: que por el hecho asistió á la ereccion de sus castillos y fortalezas, luego los mandaria arrasar, y prohibiria su reedificacion, asi como nuevas erecciones de muros y fortalezas sin autorizacion real.

Inevitable era en este caso la debilitacion del poder de las ciudades. Las de la restauracion no son ya las de la república romana; ni siquiera las del imperio; ni aun las de la dinastía goda. Las villas les disputarán su importancia: se la disputaron de igual á igual: algunas las superaron y superan en ella. Asi entraron las ciudades en el tercer período de esta seccion; en el cuarto de su decadencia, para llegar por fin al último, en que apenas las diferenciará de las villas, sus hijas emancipadas, mas que el título, el honor tradicional ó de privilegio. En algunos casos ni aun eso: ¿cómo cederá Madrid, por ejemplo, su rango é importancia á Huete, Rioseco, Betanzos y otras infinitas ciudades? Esa transformacion, pues, es la que vamos á ver consumada en el período que abarca el párrafo que subsigue.

§. 3.° *De las ciudades despues del reinado de los Reyes Católicos.*

Los Reyes Católicos revocaron infinitas donaciones, hechas por los Reyes á los Grandes. Felipe V sometió aun á revision los títulos de las que no habian sido revocadas, muchas de las cuales lo fueron ahora á consecuencia de la revision. Todavía despues el ministerio fiscal ejército con frecuencia la accion de *reversion*, con lo cual infinitas villas y pueblos *revertieron* en efecto á la Corona. Pasaban asi de lo *señorial á realengo*: se atenuaba de este modo mas y mas el poder de los señores: el régimen señorial fué reemplazado por el municipal realengo: se amplió por tanto el *municipio*; pero no se aumentó, por eso el poder de las ciudades; antes se disminuyó aun mas con la emancipacion por *exencion* ó privilegios reales de *villazgo*; y de aquí las innumerables *villas eximidas*: de todo lo que hablaremos en su artículo.

El municipio, pues, llamado en sus principios en su auxilio por el poder central contra el poder de los señores, triunfó como hemos dicho, en favor del auxiliado: y á lo largo para sí; elevándose realmente á *ciudades sin título* tantos pueblos, arrabales, alfoces, erigidos en *villas*, y denominados asi desde entonces; pero *villas* en la acepcion del derecho moderno.

Temible era que en tal estado el elemento municipal, ampliado hasta tal punto, hubiera sustituido al poder quebrantado de los señores en sus exigencias é invasiones contra el de la Corona: pero el poder de esta se habia vigorizado lo suficiente para resistir todo embate, y además acudió á tiempo, templando y reprimiendo el poder municipal, ya por una *centralizacion* administrativa, á veces exagerada, ya con la institucion de alcaldes mayores, corregidores políticos, corregidores de *capa* y *espada*, é intendentes corregidores, que presidian los ayuntamientos, citaban oportunamente á sesion, y dirigian las discusiones: ya por la enajenacion de oficios municipales, haciéndolos perpétuos: ya en fin, por la intervencion de los *Acuerdos* en la eleccion y provision de las plazas electivas que se conservaban, quedando de este modo todo el movimiento municipal en manos del poder central. Asi llegaron, porque al través de tales vicisitudes no podian menos de llegar, á su apogeo el poder de las *villas*, á su último período y término el poder de las ciudades, como veremos en la seccion siguiente.

SECCION V.

DE LAS CIUDADES EN EL SIGLO XIX: CORRELACION ENTRE CIUDADES, VILLAS Y LUGARES.

El poder de las ciudades consistió en un principio en ser cabezas ó metrópolis de un territorio considerable, y aun vasto algunas veces. A esta circunstancia correspondia, como era indispensable, su poblacion urbana

y rural, y segun la índole de cada época, sus *fundos*, *valdíos*, *propios*, etc. Pero hemos visto irse disminuyendo ese poder al través de los tiempos; y puede decirse que en los últimos siglos el poder de las ciudades habia concluido.

En cuanto al poder primitivo de la ciudades, si en la última época hasta el siglo XIX no hubiera concluido, ha concluido sin duda en lo que vá del mismo, siendo sabido que por las diferentes leyes de ayuntamientos, publicadas en los últimos cincuenta años, la aldea mas pequeña, los arrabales rurales, el alfoz, en fin, de las ciudades, se han convertido en villas, no como antes las *eximidas*, por virtud de privilegio; sino por virtud de la ley. Elevadas á villas por este último medio infinitas poblaciones, que aun no lo eran, esto es, habiéndose estas emancipado de la ciudad, ó villa principal de que dependian, teniendo ahora ayuntamiento propio, y justicia ordinaria, las ciudades han quedado limitadas á su casco, salvo ligeras escepciones, reducidas á pequeños anejos, que por su corto vecindario no se han elevado á villas; algun despoblado con jurisdiccion, aun cuando esta tambien se ha concedido en lo general á la villa mas inmediata; y algun arrabal contiguo al casco, ó adyacente á los muros, que por tanto se reputa, no anejo, sino parte ya del casco de la ciudad. Aun estos arrabales, cuando eran considerables, como Triana respecto de Sevilla, Gracia respecto de Barcelona, etc., se han emancipado. Las antiguas ciudades, pues, han desaparecido ante la accion del tiempo, del espíritu sucesivo de los siglos, de las legislaciones correlativas.

Pero hay todavía ciudades. Ciertamente: mas son las ciudades de derecho moderno. Las antiguas no tenian rival, segun el derecho público de las épocas primitivas. Durante la república romana no podian formar competencia con ellas sus granjas de labor, caseríos y pequeñas poblaciones rurales, que eran partes integrantes del todo *ciudad*. Poco mas sucedia durante el imperio. Bajo la dinastía goda, ya anunciaban competencia los lugares con sus iglesias, los castillos poblados, y las *castellanías*. Desde la reconquista la formaron ya las villas, hasta muradas. Posteriormente y aun al fin de la conquista, todavía las villas rivalizaban con las ciudades, y aun algunas las superaban. Hoy hay que preguntar, dado que existen ciudades: ¿cuál es la diferencia *real* entre ciudad y villa? Sobre este punto vamos á consignar algunas indicaciones en conclusion del presente artículo.

Sabido es que entre nosotros se ha cultivado con proligidad y esmero el derecho privado; mientras no sucede asi respecto del derecho público. En esto no hemos hecho otra cosa que imitar al pueblo de donde originariamente venimos, ó de que viene principalmente nuestra legislacion: al pueblo romano. Asi apenas se hallara, y mas bien se buscara en vano un autor, que de propósito haya tratado del orígen, vicisitudes y actualidad de nuestras ciudades: de la diferencia *real* y no *meramente titular ú honorífica*, entre ellas y las villas: de la correlacion, en fin, y entre otras cosas de la clasificacion, admitida por nuestras costumbres y derecho público entre *ciudades*, *villas y lugares*.

Aun se nota mas en el derecho público general. Entre nosotros la enunciativa ciudad anuncia mayor categoría de poblacion, que la de villa; mientras en otras naciones las poblaciones, aun de primer órden, es decir, aun las grandes ciudades, se llaman *villas*, como las demás que se denominan asi entre nosotros.

Ni aun la legislacion es precisa, y decisiva sobre este punto. Cierto que ordinariamente, lo mismo la legislacion, que el uso general, al haber de hacer mérito de todas las clases de poblaciones, las enuncian siempre en el órden gradual de *ciudades*, *villas y lugares*, espresando asi la importancia respectiva; pero otras veces la legislacion es oscura é incoherente. «Otro sí, dice la ley 6, tít. 33 de la Part. 3.ª, do quier que sea fallado este nome *ciudad*, que se entiende todo *aquel lugar que es cercado de los muros*, con los arrabales, é con los edificios que se contienen en ellas.» Hay aquí una circunstancia, que luego rechazaremos, y es que la ciudad sea siempre *murada*. Pero además se vé que por

esta definicion no es posible diferenciar la ciudad de la villa, pues hay villas con muros. Tambien parece que aquí se toma la ciudad, no en sentido específico ó por la poblacion, que en el uso comun lleva ese rango entre nosotros; sino en la acepcion genérica en que de ordinario la usan con frecuencia los autores y comentadores latinos, por *comun, universidad, poblacion*, como por ejemplo, en esta enunciativa, *utrum civitati competant beneficia minorum?* en que se vé claramente que la denominacion de ciudad comprende; no á la ciudad sola, sino á la villa y al lugar, esto es, á todo género de universidad de poblacion con su pago, y dependencias.

Otras veces las leyes equiparan entre sí las villas y las ciudades, ya absolutamente, ya á las villas principales ó grandes, segun el lenguaje de aquellas. «Honra debe el Rey facer á su tierra, dice la ley 1.ª, tít. 12, Partida 2.ª, é señaladamente en mandar *cercar las ciudades é las villas.*.» «*Cercar* queriendo el Rey *villa* ó castillo... (1).» «Apartadamente son del comun de cada *Cibdad ó villa* las fuentes, etc... (2).» «*Ciudad ó villa*, seyendo otorgado usufructo... (3).» «De las rentas de los pontazgos... debe haber el Rey las dos partes; é la *cibdad, ó la villa*... la tercera, *para facer los muros* é las torres... (4).»

Otras multiplicadas leyes hablan en el mismo sentido. Hasta sobre derechos de título ó privilegio de ciudad ó de villazgo, la antigua cancillería igualaba á las ciudades y villas grandes. «Et si alguna *cibdad ó villa grande* diese término poblado, deben dar por el privilegio cien mil maravedises...» (5) En la tarifa, en fin, de *gracias al sacar* está en el dia igualado el servicio entre ciudad y villa, así como los derechos de saca del título ó real cédula, segun esplanaremos al tratar de la villa. De todo lo dicho se deduce cuán erróneo es el concepto de la primer ley citada; no menos que la opinion de algunos espositores, sobre que los muros son peculiares ó distintivo propio de ciudad: y se vé en segundo lugar, segun dejamos indicado, que muchas veces la ley iguala á las villas con las ciudades.

Y sin embargo en la apreciacion general, y en el derecho hay diferencia entre ciudades y villas. ¿Cuál es esta? ¿Qué son, pues, hoy; y qué fueron antes las ciudades? Fueron en un principio *metrópolis ó cabezas de considerables distritos, en un todo subordinados al régimen de las mismas, sin que en todos ellos hubiese una sola poblacion con jurisdiccion ordinaria y administracion municipal propia é independiente, salvo la del* poder central. En la actualidad, generalizado el *municipio local* y aumentadas las villas *eximidas*, las ciudades son meramente *poblaciones que por tradicion, ó por real privilegio llevan ese título de honor, al que van anejas algunas prerogativas; pero no el poderío jurisdiccional y municipal, como antiguamente*, sobre grandes pagos ó territorios con la poblacion contenida en ellos.

En un principio tres eran en efecto los caractéres *fijos*, y *esclusivos* de la ciudad: el ser *metrópoli* ó cabeza de su pago, ó distrito, en el cual, por tanto, todo les estaba subordinado: el tener *curia* ó *administracion municipal propia*, y única, sobre su casco y distrito: el tener *jurisdiccion ordinaria* en la propia forma en lo civil y criminal. Posteriormente, y en el dia sobre todo, las villas *eximidas*, y los pueblos elevados á villas por las recientes leyes municipales, son *capitales* muchas, porque tienen anejos, ó *alfoz*, y tienen asi bien *justicia y ayuntamiento*. En lo antiguo con esas circunstancias se hubieran reputado y llamado *ciudades;* hoy les falta ese título honorífico, tradicional ó de privilegio, y se llaman meramente *villas*.

Además de esos caractéres fijos, las circunstancias ordinarias, aunque eventuales, ó no fijas en todo evento, de las ciudades, por lo mismo que todas no la tenian, eran:

1.ª El ser poblacion de *muchos habitantes*, ó por lo menos regularmente populosas. En el dia las hay de muy reducido vecindario: hay villas mas populosas que muchas ciudades: y en cuanto á los tiempos anti-

(1) Ley 8, tit. 19, id.
(2) Ley 9, tit. 28, Part. 3.ª
(3) Ley 26, tit. 31, id.
(4) Id. 7.ª, tit. 8.º, Part. id.
(5) Ley 7, tit. 20, id.

guos, San Agustin, apostrofando á Belen, decia: «¡Y tú, Belen! antes ciudad, etc., hoy no cuentas mas de *ciento cincuenta vecinos.*»

2.ª El ser *muradas*. No todas lo fueron, y á su vez han llegado á serlo muchas villas. De ambas cosas tenemos multiplicados ejemplos en España.

3.ª El *tener obispo*, hasta el punto de haber definido algunos, aunque sin exactitud, la ciudad, *poblacion grande* y *murada*: otros con igual falta de precision, *poblacion con obispo*. V. CIUDADES EPISCOPALES.

4.ª En los últimos siglos el tener *alcalde mayor* ó *corregidor*. Pero alcalde mayor tuvieron tambien muchas villas: corregidor algunas, como Madrid, Bilbao, Valladolid, hasta que últimamente fué hecha ciudad; y todo sin contar hoy las cabezas de partido judicial por las modernas leyes.

5.ª El tener la prerogativa de *voto en Córtes*, la cual no obstante tuvieron asi bien las villas. Véase CIUDADES DE VOTO EN CORTES.

6.ª Ultimamente eran las ciudades capitales de reino, de provincia, de distrito judicial, militar, etc.; pero estas circunstancias no les competian precisamente por el connotado de ciudad; sino solo por razones de conveniencia y de gobierno, y asi es que, aun privadas de ellas, continuaban siendo ciudades; y además ha habido y hay villas en el mismo caso, y pueden recordarse las tres antes mencionadas.

¿Cuál es, pues, hoy, volveremos á preguntar, el *distintivo real*, no *meramente honorífico* entre ciudad y villa? Por la fuerza de la costumbre repugna el contestar, ó por lo menos falta seguridad para contestar, que hoy *no la hay*; y sin embargo *no puede asignarse*. El complemento de esta cuestion ha de buscarse en los artículos en que tratemos de las villas y los lugares.

Hé aquí ahora la definicion de la Academia de la lengua: «Ciudad: poblacion comunmente grande, que goza de mayores preeminencias que las villas. Algunas son cabezas de reino, y otras lo son por privilegio. Llámase tambien asi el conjunto de calles, casas y edificios, que componen la ciudad. El ayuntamiento ó cabildo de cualquiera ciudad, y tambien los diputados ó procuradores en Córtes que las representan.» En el dia seria muy difícil sostener, como regla fija, que la ciudad goce de *mayores preeminencias que las villas*. Por decontado que Valladolid ciudad reciente, Bilbao, y Madrid, corte de la monarquía, la pondrian en duda; y además véase lo que dejamos espuesto al enumerar las condiciones y prerogativas de las ciudades. Ha de entenderse por tanto la definicion de la Academia, como regla general meramente.

Y por regla general, efectivamente las ciudades en la moderna civilizacion gozaron, ó gozan aun, de algunos honores y preeminencias, que no competen á las villas, y menos por tanto á los lugares. De estas prerogativas unas son *eventuales* y otras *fijas*. Entendemos por las primeras, las que solo disfrutan algunas ciudades; pero no todas: por las segundas, las que competen á todas.

Hállanse en el primer caso, por ejemplo:

1.º La prerogativa de poder ser capitales de reino, de provincia, de distrito judicial ó militar, centro, en fin, superior administrativo. Ciertamente que esta prerogativa podria dispensarse á una villa, y vemos se ha dispensado, de lo que hoy son buen ejemplo Madrid y Bilbao; pero este caso no puede ser mirado sino como una escepcion, y lo que ordinariamente vemos es lo contrario. Mas fundada seria otra duda, y es, si las ciudades son capitales de provincia, *porque son ciudades*; ó si por el contrario *son ciudades; por que son capitales* ó centros superiores administrativos. Realmente puede ser uno y otro. Por una parte, hay ciudades que vienen siéndolo desde la dominacion romana y antes. Por otra, es sabido que, por ejemplo, para hacer cabeza de diócesis eclesiástica á una villa, se la declara ciudad. En cuanto al órden civil no habria consonancia ni regularidad administrativa en establecer las autoridades provinciales sino en grandes poblaciones, que ofrezcan por ello mismo decoro, comodidad para la vida, y seguridad; y en tal caso, pues que el derecho antes, y des-

pues las costumbres, hicieron que se repute mas honorífico el título de ciudad, que el de villa, está en la naturaleza de las cosas el que á una poblacion, que ha de ser centro superior administrativo, asiento de las autoridades provinciales ó de distrito, no se le rehuse el título y concepto honorífico de ciudad. Pero este título ó connotado es anterior, como hemos visto, á las modernas civilizaciones, y por tanto á las instituciones, autoridades y establecimientos provinciales que les son propios; y ha sido consiguiente el establecerlos en las ciudades. Asi habrá ciudades que son capitales, porque eran ciudades; y otras, que siendo villas antes, son ciudades, por que habian de ser capitales.

Hay entre nosotros la escepcion singularísima y ya repetida de Valladolid, Bilbao y Madrid; de lo cual hablaremos en el artículo VILLA.

2.° El poder ser cabezas de diócesis, sobre lo cual véase CIUDADES EPISCOPALES: DIOCESIS: METROPOLI en lo eclesiástico.

3.ª Poder sus ayuntamientos ó cabildos llevar delante de sí *cuatro maceros*, de cuya prerogativa gozaban las ciudades de voto en Córtes, pues los de las demás ciudades no llevan sino dos.

4.ª Las capitales de provincia tienen categoría de *Grandes de España*, y por tanto preceden á los barones y títulos de Castilla que no son grandes: y aun en asiento de cabildo el decano, aunque no sea grande, precede al título de Castilla, ocupando este la izquierda y aquel la derecha de la presidencia (1).

Las mas notables entre las fijas son:

1.ª La *precedencia* sobre las villas en solemnidades y actos públicos á que concurren por sus cabildos ó representantes; salvo en las Córtes, ó parlamentos actuales, por la razon constitucional de que los diputados, despues de jurar, son diputados de la Nacion; no de ciudad ó distrito determinado, y no hay por tanto precedencia.

2.ª El llevar sus ayuntamientos *dos maceros*.

3.ª El uso de *bandera* ó *pendon*; y por tanto el cargo honorífico de *alférez real* para tremolarlo en las proclamaciones.

4.ª Las *proclamaciones*, ó el publicarse en ellas con solemnidades heráldicas, las declaraciones de guerra, las paces, nacimientos, ó advenimentos de príncipes y sucesos análogos.

5.ª El escribirles *cartas* el Rey, ó regencia para este efecto, ó para comunicarles faustos, aciagos, ó fúnebres sucesos.

6.ª El *tratamiento*, que les daba el Rey al escribirlas; y que no ha de confundirse con los títulos ó dictados, dispensados á las mismas por concesiones particulares, como *heróica, muy heróica; muy noble y leal*, etcétera. Tampoco hablamos del tratamiento que igualmente competia á algunas ciudades, y no á todas, asimismo por concesiones particulares, como el de *excelencia*. Sino que en lo antiguo los Reyes daban á las ciudades tratamiento de *señoría*.

Fácil es reconocer cuáles de estas prerogativas están revocadas ó en desuso, asi como las vigentes.

Además de las espresadas hay otras muchas prerogativas que competieron, ó competen á las ciudades; pero no como inherentes al título de ciudad; sino en virtud de concesion ó privilegio especial; y por tanto la que les alegue, deberá exhibir ó justificar su privilegio. Tales son las exenciones de algunos tributos, ó gabelas: la imposicion de arbitrios ó prestaciones especiales: precedencial especial en actos públicos determinados: la prerogativa de voto en Córtes: la precedencia especial en ellas, y en el uso de la palabra, á cuya prerogativa se refiere la sabida y perpétua contienda entre *Búrgos y Toledo* y otras al modo. Desde luego se vé que muchas de estas prerogativas han podido concederse, y se han concedido en efecto á las villas, y que las mas han sido derogadas, ó venido en desuso por virtud de las reformas legislativas, y nuevas prácticas introducidas en los últimos 50 años.

Los privilegios de las ciudades eran sin duda honrosos; algunos tambien lucrativos; pero en general gravosos. Tenian las ciuda-

(1) Bobadilla.

Lorenzo Arrazola

des, y aun tienen algunos dilatados baldíos: cuantiosos propios, y arbitrios; pero enormes gastos.

Diremos, pues, en conclusion que entre las villas y lugares, la diferencia *real* es notoria é incontestable, á saber, la *justicia ordinaria* y *ayuntamiento propio*. Entre ciudades y villas no hay esa diferencia. La hay, pues, solo honorífica en los términos que dejamos reseñados; y para mayor demostracion de ello, ciudades hay de reciente creacion: Molina de Aragon y otras: no hay mas que comparar su anterior estado de villas y el actual, y ver que tienen hoy mas que tenian, fuera del título honorífico, con las ligerísimas distinciones y prerogativas que aun le son anejas, al tenor de lo espuesto. Antes fueron grandes, seguramente; pero gravosas tambien, hasta ser temidas por las villas.

Y con efecto: las preeminencias de las ciudades, no solo eran honrosas; sino á veces lucrativas: con frecuencia tambien gravosas y aun ruinosas, de lo que hablaremos con mas estension al hacerlo en particular de las villas. Tenian, es cierto, las ciudades, y aun tienen algunas dilatados baldíos, pequeños estados realmente, sobre lo cual bastaria nombrar á Toledo: cuantiosas rentas é ingresos de propios y arbitrios; pero enormes gastos. El mayor grado de cultura, y policía urbana, todo en grande escala, y por tanto los establecimientos de enseñanza, de recreo, de beneficencia: los medios de salubridad: empedrados, fuentes, calzadas, paseos: alumbrados, serenos, empleados de vigilancia y seguridad pública: proclamaciones: procuradores á Córtes: donativos, etc.: el cúmulo, en fin, de atenciones que van inherentes al connotado de ciudad, hacia temerlo; y muchas villas se han retraido de solicitarlo por no verse empobrecidas, ó en estado habitual de *quiebra*, ó suspension de pagos, que es el ordinario de casi todas nuestras ciudades; habiendo llegado el caso de que alguna de las de voto en Córtes, solicitase con empeño se le retirase la gracia, pagando un gran servicio para obtenerlo. Véase CIUDADES DE VOTO EN CORTES.

Hablando de ciudades, en fin, suele agitarse cuestion sobre la facultad de crearlas. Ripoll, en su tratado de las *regalías*, consigna el especial de *potestate creandi civitates*. Realmente no habia que hacer cuestion de ello, no contrayéndolo á Cataluña, ú otra provincia foral, mientras lo fueron, á causa de las facultades de sus Córtes generales; y ni aun asi. La potestad de crear ciudades no es diferente de la de crear villas, y fundar lugares: de la de conceder honores y distinciones. Es del poder ejecutivo supremo de la sociedad; y estando entre nosotros concentrado en los monarcas, á ellos compete la potestad de crear ciudades.

Algunos autores han creido que el Papa las puede crear; lo cual desde luego es de todo punto insostenible, como vemos en el artículo de las *Ciudades episcopales*. Véanse además los subsiguientes, y los de LUGAR: POBLACION: PUEBLO: VILLA.

Añadiremos además algunas indicaciones sobre el *arrasamiento* ó *demolicion* de las ciudades: no del arrasamiento ó destruccion por uso ó abuso del derecho de la guerra; sino del *arrasamiento jurídico*, digámoslo así, ó en espiacion del crímen de rebelion, ó traicion en el órden político; por crímenes eclesiásticos en este órden. Conocido es el principio romano de que el medio mas natural de deshacer una cosa es el mismo con que se hizo, ó constituyó: *Nihil tam naturale est, quam eo genere quidque disolvere quo coligatum est*. Aplicábase principalmente este principio en los contratos, en las transacciones sociales, en los actos de la voluntad legalmente esplicados: en la derogacion y abrogacion de las leyes: y por traslacion en algunos actos tremendos de justicia pública, ó que se queria que lo pareciesen. Tal era el *arrasamiento*, ó *demolicion* de una ciudad rebelde, ordenado por el señor, ó soberano de ella, como castigo ejemplar: práctica que tambien se infiere imitaron los invasores y conquistadores. Trazadas las ciudades en un principio, y aun en los siglos sucesivos por medio del arado, como hemos visto, aprendíase que en aplicacion del principio antes consignado, tambien por el arado debian ser destruidas, esto es, *demolida* ó *arrasada* la ciudad rebelde, contra la cual se ordenaba

ese castigo, y despues se pasaba el arado sobre su área, como última señal de que quedaba *yerma*, igualada con el suelo, reducida á tierra de cultivo.

Sin duda este sistema no fué ordinario, ni frecuente; pero es cierto que se practicó alguna vez, y de ahí las enunciativas históricas consignadas al principio de este artículo y otras análogas: *Urbs, autem, aratro conditur, aratro vertitur*: (Caton) *Imprimeretque muris hostile aratrum* (Horacio).

Sicuti pro ædificandis, seu definiendis urbibus aratrum adhibebatur, ita etiam in destructione ad aratrum condemnabantur... Civitas condemnata ad aratrum, seu ad demolicionem, non potest amplius ædificari absque speciali licencia principis..... unde civitas damnata ad aratrum desinit esse civitas, quia tunc mori dicitur, cuando superiorum auctoritate ad aratrum damnatur (1).

En las leyes civiles y eclesiásticas hay tambien indicaciones del *arrasamiento* ó *demolicion* de las ciudades. Asi la ley 21, tít. 4, lib. 6 del Digesto: *Si ususfructus civitati legetur. et aratrum in eam inducatur, civitas esse desinit, ut passa est Carthago.* «E las casas, é las heredades labradas, dice la ley 6.ª, tít. 13, Partida 2.ª, hablando de los regicidas, débenlas derribar, é *destruir, de guisa, que finquen por señal de escarmiento para siempre.*» Todavía la ley 26, tít 31, Part. 3.ª, y otras contienen indicaciones sobre el *yermamiento* de las ciudades.

Entre nosotros hay indicaciones en escritos antiguos de haberse aplicado alguna vez tan estremo rigor, añadiendo la tradicion que sobre el área de la poblacion arrasada, además de pasar el arado, se esparcia sal: especie de maldicion, ó imprecacion material de esterilidad.

Hemos hablado de las ciudades, porque en el tiempo en que tuvo orígen dicha práctica no habia mas que ciudades, y poblacion rural diseminada, sin organizacion, ni mas vida que la de la ciudad, metrópoli ó cabeza, y en su consecuencia solo esta podia sublevarse y ser castigada. Despues se hallaron en el mismo caso las villas: no todas; sino las grandes ó principales, pues bien se deja conocer que solo la rebelion de estas y de las ciudades podia tener importancia, y requerir un castigo ejemplar, y *que fincase por señal de escarmiento para siempre.*

Una práctica análoga se aplicó en los últimos siglos á las casas de los condenados á las llamas por la inquisicion y de los escomulgados por atentar contra la vida del propio obispo, de un cardenal ó del Papa; sobre lo cual volvemos á hablar en el artículo CIUDADES EPISCOPALES. En estos casos las poblaciones, y las casas particulares, segun el crímen, se arrasaban alguna vez, y su suelo se reputaba como maldito, y fuera del comercio humano. Se rehuía con horror, nadie edificaba, ni cultivaba sobre él. El horror cedió, sin embargo, á la codicia, y si Valladolid, por ejemplo, presenta todavía *yermo* el solar de la que fué *casa del doctor Cazalla*, condenado al fuego por el Santo oficio; á la verdad que se halla bien disminuido, ocupado el resto por los edificios contiguos. La civilizacion ha venido condenando, y condenaria hoy de todo punto la práctica y ruda penalidad del *arrasamiento* de una poblacion entera, anulando inmensos capitales por crímenes cometidos por las personas, á quienes la ley puede castigar condignamente, siendo, como es, en la actual civilizacion bastante enérgica y eficaz para ello.

CIUDADANO. Dícese de *ciudad*, y es, en sentido estricto el vecino de esta; en sentido lato el súbdito de un Estado: acepciones que aun necesitan mayor desenvolvimiento, que ya en parte han recibido en el artículo CIUDAD, y aun recibirán en el presente, y otros, como *español*, *natural*, *naturalizado*, etc. Hace poco mas de medio siglo que este artículo apenas hubiera merecido otra importancia que la de una definicion con alguna mencion histórica. Hoy las nuevas teorías y reformas políticas se la atribuyen mayor, y por esta consideracion damos al mismo la estension y forma que presenta.

(1) Ferraris, Biblioteca, artículo *Civitas*.

PARTE DOCTRINAL.

SUMARIO.

SECCION ÚNICA.—DE LA CUALIDAD, Y DERECHOS DE CIUDADANO.

§. 1.° *Indicaciones generales y filológicas.*
§. 2.° *Ciudadano romano.*
§. 3.° *Ciudadano español.*
§. 4.° *Ciudadano en la antigua corona de Aragon.*

La importancia exajerada que se ha dado en estos últimos tiempos á la cualidad y derechos del ciudadano, han renovado la que tuvo en tiempos antiguos, así en el derecho público, como en el privado: motivo porque no podemos hoy escusarnos de bajar la mano algun tanto, no ya á la historia; sino aun á la filología de esta voz y cualidad política.

§. 1.° *Indicaciones generales y filológicas.*

Volviendo sobre la definicion, *ciudadano*, segun la Academia, «es hombre bueno: el vecino de alguna ciudad: el que en el pueblo de su domicilio tiene un estado medio entre el de caballero y el de oficial mecánico: lo perteneciente á la ciudad.»

En cuanto al derecho por lo menos, esta definicion carece de toda exactitud. La acepcion de *hombre bueno* por ciudadano, no es usada en el derecho. Dícese sí, hombre bueno en muchos casos, en los juicios de conciliacion, por ejemplo; pero prescindiendo absolutamente de la cualidad de ciudadano, puesto que es hombre bueno para tal caso el que lleva cada parte al juicio, aun cuando no sea vecino, sino un mero domiciliado. Tampoco es corriente en el derecho, ni aun en el uso comun, la tercera acepcion, hoy que es tan indefinida la de caballero. Hay sí, una cosa análoga en la corona de Aragon; pero diversa, como veremos en el párrafo 4.° Segun la definicion, por último, no diriamos bien *ciudadano español*, de donde resultará que si la definicion de la Academia no fuese inexacta, es ciertamente diminuta.

En el derecho, pues, es ciudadano el vecino de una *ciudad*, esto es, de una poblacion que lleva el título de ciudad, y tambien el súbdito *natural ó naturalizado* de un Estado ó nacion, y en tal concepto se dijo *ciudadano romano*. En la acepcion mas ámplia de esta voz, decimos *ciudadano* español, *francés*, de los Estados Unidos, etc. Al decir súbdito *natural*, ó *naturalizado*, indicamos los dos medios de adquirir la cualidad de ciudadano, esto es, por nacimiento, y por *naturalizacion*; lo cual requiriendo artículo y aun varios artículos aparte, ha de verse en ellos, como en CARTA DE NATURALEZA: NATURALIZACION, y otros análogos, ó conexos como ESPAÑOLES: ESTRANJEROS: NATURAL: NATURALIZADO: SUBDITO: TRANSEUNTE: VECINO, etc.

En algunas provincias de España ha tenido y aun tiene la voz *ciudadano*, segun hemos indicado ya, una acepcion especial de que hablaremos tambien en este artículo.

Notaremos por último, que la enunciativa de ciudadano, por la fuerza de los hechos, por su orígen histórico, induce con frecuencia hoy, como en los tiempos antiguos, una cierta idea de mayor libertad política, que la de *vasallo*; por lo cual es comun aplicar la primera, cuando se habla de paises regidos por instituciones representativas; y la segunda á la inversa, cuando se trata de gobiernos absolutos. Así diremos con propiedad *ciudadano español, francés, de los Estados Unidos*, etc.; pero no con la misma *ciudadano ruso, napolitano*, etc. La voz súbdito, sin embargo, apartándose en el efecto algun tanto de su etimología, se usa con igual propiedad en uno y otro caso, y lo mismo diremos súbdito español, que *ciudadano español*: súbdito ruso, que vasallo ruso: ciudadano ó súbdito de los Estados Unidos, de la república de Méjico, etc., aunque todavía sin absoluta precision, como esponemos en el párrafo 3.°

A la cualidad de ciudadano van inherentes los deberes y derechos que las leyes y costumbres legítimas del pais ó nacion, el derecho internacional, y á su vez los estatutos, ú ordenanzas municipales establecen ó au-

torizan, respecto de los subordinados á ellas en concepto de súbditos propios. Y decimos de súbditos propios, porque si bien los transeuntes están sujetos á las leyes de órden público del pais, y los estranjeros, meramente domiciliados, con ánimo de naturalizarse, no por carta; sino ganando vecindad por los trámites de la ley, lo están á las leyes generales y locales, asi en lo gravoso, como en lo provechoso; no es aun por razon de *naturalizados*, y por tanto de súbditos propios; sino de las enunciadas cualidades de *transeuntes* y *domiciliados*, al tenor de las leyes recopiladas.

Es tambien comun al hablar *especialmente* de *ciudadanos*, como en el presente artículo, el hacerlo solo de los derechos inherentes á dicha cualidad; y no de los deberes. Nada hay que justifique esta práctica; ni aun el concepto de que al ciudadano hay que hacerle palpable el favor que le dispensa la ley, para inducirle mas á respetarla: ó que al particular es á quien hay que enterar de sus derechos; pues el Estado lo está de los suyos, y de los deberes de los subordinados. Nada hay, repetimos, que justifique dicha práctica; pues el ciudadano no goza de sus derechos; sino á condicion, deberes y sacrificios análogos, que tambien conviene conozca. Sin perjuicio, no obstante, de esponer esta materia en su lugar oportuno, nos limitaremos aquí á reseñar, siguiendo el método de los publicistas, las clases y derechos de los ciudadanos, consagrando un párrafo especial al ciudadano romano, ya que es tal la conexion, y tales los principios comunes entre aquella legislacion y la nuestra, que el ciudadano romano ha sido como el tipo de los demás.

Antes de eso, y ampliando todavía las indicaciones generales sobre el *ciudadano*, diremos, que entendiéndolo en la acepcion lata, por el individuo ó miembro activo del Estado que goza de los derechos y prerogativas de tal, resulta de aquí que este carácter ha sido tanto mas apreciado, cuanto mas ha significado en el sistema de gobierno la personalidad del individuo; y de tanto menos valor, cuanto menos ha representado este mismo individuo en sus relaciones con el poder público. Así en los gobiernos democráticos y republicanos ha sido y es siempre grande la importancia del ciudadano; y en los gobiernos monárquicos puros es por el contrario muy pequeña, porque en los primeros toca al individuo una parte del poder, que ejerce por medio de sus derechos políticos, al paso que en los segundos está sujeto á una obediencia pasiva, sin disfrutar otros de ordinario ó en último estremo que los civiles. Hay mas aun: en los gobiernos republicanos esta cualidad de ciudadano se considera siempre inherente hasta á las mas altas dignidades del Estado, y asi un Dux, un Senador, un Presidente en esta clase de gobiernos, son y se llaman ciudadanos, porque del seno de estos se eligen aquellos, y nace el poder público. En las monarquías puras en que el ciudadano no es mas que el súbdito, el hombre sujeto á la obediencia; los jefes del Estado, como los Emperadores y los Reyes, no se consideran, ni se denominan ciudadanos; sino que se les mira como hombres superiores, que por derecho propio, ó bien apropiado ya, gobiernan á sus pueblos, y á quienes los demás deben sumision y respeto, y puede decirse, que si se estralimitan de su poder, ejerciendo una dominacion tiránica y despótica, y los miembros del Estado la consienten, no hay ya en él verdaderos ciudadanos, sino vasallos ó esclavos.

El carácter de ciudadano lleva, pues, consigo cierta dignidad, y es noble y honroso, entendido tal como debe ser, y no como quieren entenderlo los que se dejan arrastrar de los delirios de ciertas doctrinas, de ciertos hechos sino, ó situaciones políticas á que nos referimos en el párrafo 3.° Porque la idea de ciudadano lleva consigo la del hombre que, conociendo el valor de sus derechos, encamina su ejercicio á la felicidad pública, la cual desea ver unida á su felicidad particular; amando sinceramente á su patria, interesándose por su prosperidad y sus glorias, y haciendo ceder ante ellas hasta su propia conveniencia. La antigüedad nos ofrece en esta parte rasgos admirables y ejemplos que no pueden olvidarse. El lacedemonio se pre-

senta para ser admitido en el Consejo de los Trescientos. Su pretension es desoida, y él se retira lleno de gozo al ver que se han encontrado en Esparta *trescientos hombres mas dignos que él*. Hé aquí al verdadero ciudadano. Una muger de Esparta tenia cinco hijos en el ejército y esperaba con impaciencia noticias de la batalla. Al ver llegar un *ilota*, se acerca á él y le interroga.—Tus cinco hijos han muerto, le responde aquel.—¿Acaso te pregunto yo eso, *vil esclavo*?—Pues bien, hemos ganado la batalla, la añade el mensajero. Y la espartana *corre al templo á dar gracias á los dioses*. Hé aquí un rasgo estraordinario que hace de una muger una noble y verdadera *ciudadana*. Curcio, precipitándose á caballo dentro de la fosa que no podia cerrarse, sino con la joya de mas precio que se encontrase en Roma, es tambien el tipo, temerario ciertamente, del ciudadano; pero noble tambien, y desinteresado, del buen patricio, modelo de generosa y honrosa abnegacion. Su entusiasmo aprende la necesidad de una víctima, y la encuentra en sí mismo, en vez de buscarla entre los demás.

Indudablemente convendria crear este espíritu y fomentarlo con gran sensatez, prudencia y recto juicio, en todos los miembros de un Estado. Desde que llegase á penetrar en los ánimos de todos, libre de las exajeraciones y errores que hoy de ordinario lo acompañan, el individuo dejaria de ser una personalidad aislada, egoista é indiferente, respecto de cuanto le rodea, turbulenta y temible á todos tal vez, para convertirse en una parte integrante de la entidad moral, representada en el Estado. Pero la civilizacion moderna ha creado hábitos y tendencias, que no siempre se avienen con ese espíritu de abnegacian y desprendimiento que constituyen al buen ciudadano. No es en verdad hoy cuando podemos lisonjearnos de ver generalizadas en la sociedad, ni menos imitadas esas cualidades, que admiramos en los ciudadanos de las antiguas repúblicas, aunque tal vez nos lisongeamos de ello y las invocamos á cada paso. Odiosa es hasta lo sumo la iniquidad y crueldad de los tiranos; pero no lo es menos, ni menos funesta, la tiranía y habitual turbulencia de los malos ciudadanos.

Para hallar esta personalidad, á la vez política y civil, revestida de una verdadera importancia y de todos los caractéres que pueden enaltecerla, es preciso llegar hasta Roma. Aquí es donde el ciudadano goza de amplísimos derechos y prerogativas, cuyo goce y ejercicio no se permite al que carece de esa consideracion: tal sucedió, con alternativas sin embargo, desde los tiempos mas remotos hasta casi los últimos del imperio romano. Asi en la época de Rómulo vemos concedida la *ciudadania*, como decimos en otro lugar, á los fugitivos, á los deudores insolventes y hasta á los malhechores, por el deseo de poblar la ciudad y crear en ella un espíritu de nacion que resistiese á las invasiones hostiles. Esta misma política siguieron los Reyes sucesores de Rómulo, y aun el gobierno republicano, admitiendo como ciudadanos de Roma á los de los pueblos inmediatos, siempre que asi convenia para el engrandecimiento del Estado, el cual se verificaba rápidamente por medio de esa poderosa fuerza de asimilacion que caracterizaba á los romanos.

En la época á que nos referimos, ó sea en los primeros tiempos de la República, ya habia medios legales establecidos para adquirir el derecho de ciudad: tales eran entre otros el nacimiento, teniendo en cuenta la condicion del padre cuando el hijo era de legítimo matrimonio, y el de la madre cuando no lo era: la manumision, hecha por un ciudadano romano, la cual daba este carácter al manumitido, ó la adopcion, que estaba entonces muy en uso. Tambien lo adquirían en un principio los que edificaban casas de campo contiguas á Roma, los que se hacian aliados de los romanos, y los que se rendian en la guerra, á los cuales se daban tierras á cultivar para interesarlos en la prosperidad y engrandecimiento de la nacion. Pero es de advertir que ni los manumitidos, ni los que se rendian en las batallas tenian por completo el carácter de ciudadanos romanos, sino que así como el concedido á las ciudades estranjeras les daba el de *municipio* y de *municipes*, á sus habi-

tantes porque podian obtener empleos en Roma, á las dos clases antes indicadas se les daba la denominacion de *ingenui*, se las colocaba en las cuatro tribus urbanas, en las cuales casi no tenia lugar el derecho de sufragio, y no podian obtener ninguna dignidad ni servir en el ejército, sino en la marina y en las cohortes, desempeñando en ellas servicios menos honrosos que los verdaderos ciudadanos romanos, esto es, los que lo eran en toda la plenitud de este derecho. Pero la ampliacion de estas indicaciones corresponde al párrafo siguiente.

§. 2.° *Ciudadano romano.*

A dos clases capitales se reducian en un principio los habitantes de Roma: *ciudadanos* (cives), y *enemigos* ó *adversarios*, (*hostes*). No parece sino que desde el principio comprendió y quiso Roma anunciar su destino de dominadora universal, reputando desde luego enemigo al que no era ciudadano romano. La fórmula se atenuó despues, y los estraños ó transeuntes, los no ciudadanos, se llamaron *peregrinos*.

Roma empezó á comunicar, y comunicó sucesivamente su derecho, esto es, la cualidad de *ciudadano romano* á los pueblos amigos y aliados, á los adheridos á su régimen, á los vencidos y subyugados; y desde luego se conoce que por la razon indicada en la misma clasificacion, no seria, como no fué á todos, con igual benevolencia y amplitud. Como ya hemos espuesto en el artículo CIUDAD, el derecho de ciudadanía se comunicó primero á los *latinos*, ó habitantes del *Lacio*: despues á los de Italia: por último á las provincias, resultando así cuatro especies de ciudadanos romanos, *jure latino*: *jure italico*: y *provinciales*, además de los *nativos* ó *urbanos*; diferencia que luego desapareció, refundidas en una las tres indicadas clases, cuya determinacion se atribuye al Emperador Claudio. «*Ex quo Roma*, dice Heineccio, ya citado en el artículo CIUDAD, *initio per Latium, tum per Italiam, ac denique per universum pœné terrarum orbem arma victricia circumtulit, quadripartita esse cœpit hominum, huic imperio subjectorum, differentia. Alió enim jure cives, alio latini, alio italici, alio denique provinciales utebantur. Priores tres gradus conjunxit Claudius imperator, apud Tacitum, Annal XI. 24.: Omnia. P. C. quæ nunc vetustissima creduntur; nova fuere; plebeii magistratus post patricios: latini post plebejos: cæterarum Italiæ gentium post latinos.» Habes hic cives, ex quibus patricii, et plebeii magistratus creati: habes latinos, et italicos, ita conjunctos, ut intelligas, civitatem jure Latii hoc jure italico præstitisse. Omnium postremæ conditionis erant provinciales, quos ideo italicis postponit Sueton. «Vesp. IX. ordines exhaustos supplevit, honestissimo quoque italicorum ac provincialium adlecto.»* (Heineccio, *Antiquit. roman., appendix*, lib. 1.°, §. 1.°

La comunicacion del derecho de ciudad á los estraños, produjo otra clasificacion de ciudadanos en ingénuos, (*ingenui*) y *municipes ó municipios*, (*municipes*). Eran los primeros los indígenas ú oricundos de Roma, y los ciudadanos de fuera de ella que se domiciliaban en la misma; los segundos los demás ciudadanos esparcidos por Italia y demás provincias.

Los ciudadanos no podian serlo á un tiempo de dos ó mas ciudades; pero sí podian cada uno ejercer la magistratura en su municipio respectivo y en Roma. Es la razon por que Roma era patria comun y por ello no se creía que en el caso antes indicado, los ciudadanos lo eran de dos ciudades á un tiempo, sino de una misma ciudad. Era sobre el particular un principio que el ciudadano tenia dos patrias, *la patria mayor*, que era Roma, y la *menor*, que era la originaria de cada uno (1). Entendíase lo dicho en cuanto al derecho público, y magistraturas superiores; pues en lo relativo al derecho civil privado, cada uno estaba sometido á la ley del domicilio.

Hemos indicado arriba, y antes lo hemos hecho en el artículo CIUDAD, como la ciudad romana, ó el derecho de ciudadano romano se empezó á comunicar á pocos, á los

(1) Ciceron, pro. Milone, 37.

latinos primero, luego á los itálicos, para acabar por estenderlo á los *ingénuos* de todo el imperio. Y en efecto: despues que Rómulo admitió á formar su ciudad á cuantos, sin distincion, quisieron venir á ella, aun los criminales que huían de la justicia de sus ciudades ó domicilios: *(quoslibet exteros)* (1) aun los enemigos, los vencidos, los subyugados: *At conditor noster, Romulus, tamtúm sapientia valuit, ut plerosque populos eodem die hostes; dein cives haberet.* (2) Hasta los libertos en fin: *ne iis quidem, qui é juxta servitute fuerant manumissi.* (3)

Constituida y poblada ya la nueva ciudad, transformados los advenedizos en romanos, se comunicó el derecho de ciudad á los vecinos *ceninenses*, *camerinos*, y hasta á los *sabinos* (4).

Los reyes sucesivos admitieron á los *albanos* y á otros pueblos. La misma práctica continuó, durante ya la república, y señaladamente con ocasion de la toma, y del incendio de Roma por los galos. Fueron entonces admitidos al derecho de ciudad los *veyentes, capenates, faliscos* y otros pueblos, asi como todo género de peregrinos, asignándoles campo ó término en el de la ciudad, y de aquí la diferencia en *tribus rústicas y tribus urbanas.*

Ampliése sucesivamente este derecho; pero todavía en los últimos tiempos de la república, se economizaba en cierto modo, restringiendo en general las concesiones á los latinos, respecto de los que habia además la regla especial de que el latino que acusaba *repetundarum* á un ciudadano ó senador romano, quedaba ciudadano, ó senador en lugar del acusado, si este era condenado en el juicio. Las leyes Julia y Phocia generalizaron ya este derecho *á los latinos é itálicos.* Hízose estensivo despues á los galos, á los gaditanos y otras provincias, en algunas de las cuales, ya se habia planteado, ó iniciado el sistema colonial.

Augusto continuó las concesiones; pero es notado en esto de economía. Prevalecia todavía entonces el principio, *Ne multos jure civitatis darent, quo magnum inter ipsos, et subjectos discrimen remaneret* (1).

Tiberio, Calígula, Galva, Othon, Vitelio, Vespasiano, Trajano y Adriano estendieron sucesivamente el derecho de ciudad; pero sin observar un sistema fijo, ni identidad de razon en concederlo ó economizarlo. Mientras Claudio hacia espiar con la pena de muerte en el *campo Esquilino* á algunos que llevaban usurpado el nombre de ciudadanos, concedian ese derecho con profusion, sin exámen y aun venalmente. *Immo multis eum confertim jura civitatis, ac sine discrimine dedisse, ac venalia prope illa jus liberos habuisse...* (2). Despues veremos que la célebre Constitucion que casi hizo universal el derecho de ciudadano, se dictó por una razon económica meramente, por aumentar el número de contribuyentes, y no por ninguna otra relativa al mayor ó menor prestigio del mencionado derecho, ni por honor ó favor de los agraciados, sino del fisco.

Dicha constitucion se ha atribuido á diversos emperadores: á Adriano, Antonino Pio, Marco. Ulpiano la atribuyó á Antonino Pio, como se vé en las Pandectas, en que dicha Constitucion, ley 17, lib. 1, tit. 5. *De statu hominum*, se reduce á estos términos: *In orbe romano, qui sunt, ex constitutione imperatoris Antonini civis romani effecti sunt.* Justiniano mismo la atribuyó en sus novelas al mismo Antonino Pio (3), y es lo cierto que la posteridad honró á este emperador con el dictado de *ampliator civium*; no obstante lo que está demostrado que despues de él se conocian aun las diferencias entre *latinos, itálicos* y *provinciales*, lo que convence que no fué este Antonino el autor de dicha constitucion; teniéndose hoy por demostrado que lo fué Antonino Caracalla. *Verus ergo famosæ illius constitutionibus auctor est*, dice Heinecio, *Antoninus Caracalla.* Augusto, en efecto, habia recargado con la *vicésima* de las herencias á los ciudadanos nuevos que

(1) Dionisio de Halicarnaso. *Antiquitrom., lib. 4.*
(2) Tacito, Anales, lib. 11, 24.
(3) Heineccio, antes citado.
(4) Dionisio de Halicarnaso antes citado.

(1) Dion. Cassio., lib, 56.
(2) Heineccio citado: Dion. Cassio lib, 59.
(3) Novella 78, cap. V.

fuesen herederos *extraños* ó *no agnados*. Nerva y Trajano suprimieron este gravámen. Las urgencias del Erario obligaron á Antonino Caracalla á pensar en la contribucion abolida; y como sus rendimientos estaban en razon del mayor número de ciudadanos nuevos; no solo la restableció agravándola, esto es, imponiendo la *décima* en vez de la *vicésima*; sino que declaró ciudadanos romanos á cuantos morasen dentro del imperio: «*specie quidem honorem eis tribuens*, dice Dion Casio (Adiciones ó suplemento (*excepta*) por Valesio); *sed revera ut fiscum suum augeret: quippe quum peregrini pleraque honorum vectigalia non penderent.*»

Entendióse esta ampliacion de solos los *ingénuos* y no de los *libertinos*; aunque esta jurisprudencia no estuviese de acuerdo con el hecho antes citado, y mas bien del primitivo derecho público romano, segun el que se hacian ciudadanos todos los que concurrian á formar parte de la ciudad, aun cuando fueran *libertinos*; *no eran excluidos*, dice Heineccio, *ni aun los manumitidos de servidumbre justa*. Esta práctica se generalizó sin duda adelantado ya el imperio, y se estendió respecto de los *dediticios*, cuando Juliano decia en su tiempo, se entendiese para siempre abolida la condicion de los dediticios, que aun sin estar en uso y reducida á un mero nombre, servia de molestia á la república, y pues que no constaba de hecho tal condicion, tampoco debia existir en las leyes: *sit penitus deleta, quia nec in usu esse reperimus; sed vanum nomen hujusmodi libertatis circumducitur. Nos, enim, qui veritatem colimus, ea tantummodo volumus in nostris esse legibus, quæ reipsa obtinent* (1). Justiniano, en fin, estendió la cualidad universal y amplísima de ciudadano romano á todos los latinos, á los dediticios, á los libertinos, y acabaron para siempre las diferencias (2).

Ya en otra parte hemos indicado que no todos los ciudadanos romanos, *latinos*, *itálicos* y *provinciales*, ó de otro modo los *municipes* eran igualmente privilegiados. Entre los latinos los habia, por ejemplo, que no tenian el *jus suffragii*: ahora todos, despues de Justiniano, quedaban iguales.

Resumiremos en conclusion los principales derechos que iban inherentes á la cualidad de ciudadano. Habia en ello el doble derecho comprendido bajo las denominaciones de *jus quiritium*, y tambien *quiritarium*, y *jus civitatis*. Véase **DERECHO QUIRITARIO**. Usanse promíscuamente ambas denominaciones por los autores; pero algunos quieren, y con ellos Heineccio, que se distinga. *Quare rogo*, decia Plinio, *des ei civitatem romanam, est enim peregrinæ conditionis, manumissus á peregrina: idem rogo des jus quiritium libertis Antoniæ Maximilliæ* (1). Dejando aparte esta cuestion, hé aquí el juicio de Heineccio sobre el particular, despues de sostener que los mencionados derechos eran diferentes. *Ats si accuratius singulas utriusque juris partes consideres, jus civitatis in jure census, militiæ tributorum, vectigalium, suffragiorum, honorum et sacrorum: jus quiritium in jure libertatis, gentis connubiorum, patria, legitimi dominii, hæreditatis, atque usucapionis fuit situm.* Puede verse la esposicion de estos derechos, segun quedan enumerados, en el mencionado escritor, §. 24 y siguientes de su apéndice al libro 1 de las Antigüedades romanas.

Llamarse ciudadano romano, era alegar la mas alta prerogativa que podia caber en la esfera comun de los hombres dentro de la república romana. Ciceron nos ofrece en su oracion contra Verres bellísimos ejemplos de esta verdad. *Cædebatur virgis*, dice, *in medio foro Messanæ civis Romanus; cum interea nullus gemitus, nulla alia vox istius miseri inter dolorem crepitumque plagarum audiebatur, nisi hæc: cibis romanus sum.* Y en otro lugar de la misma oracion dice «*Facinus est vincire civem Romanum; prope parricidium necare: ¿quid dicam in crucem tollere? Nihil addi jam videtur ad hanc audatiam, improbitatem, erudelitatemque posse:*» y todavía en otro lugar. «*Si tu apud Persas,*

(1) Ley única, tit. 5, lib. 7 del Código.
(2) Ley 1, tit. 6., id. id.: item Novela 78, prefacio y capítulos 1, 2 y 5.

(1) Epistola 10, § 4.

Lorenzo Arrazola

aut in extrema terra deprehensus.» Verres, ad supplicium ducerére, ¿quid aliud clamitares nisi te civem romanum esse?» Sabido es tambien que San Pablo evitó el suplicio y la muerte con solo esclamar que era ciudadano romano. Y en efecto, el ciudadano romano, además de que disfrutaba todos losderechos y prerogativas, de que mas adelante hacemos mencion, estaba seguro de su libertad, no solo de la libertad de derecho de gentes, ó libertad de esclavitud; sino de la libertad de tiranos ó abuso de los magistrados; salvo si él se vendia á sí mismo por codicia, ó le vendia su acreedor para hacerse pago, ó se le imponia la servidumbre como castigo de algun crímen, lo cual coustituía la clase de los *siervos de la pena (servi penæ)*; estando libre además de las penas de azotes y del tormento.

El respeto con que se miraba este derecho fué causa de que se empleasen ciertas ficciones para despojar de él á los que lo tenian: tal era la privacion de agua y de fuego, (*aquæ et ignis interdictio*), con lo cual se obligaba á los ciudadanos á retirarse á pais estranjero: tal fué tambien la *deportacion*; introducida por Augusto, por la cual se privaba al ciudadano de sus bienes y derechos, y se le señalaba el punto en que habia de residir. Cuando la deportacion no llevaba consigo la pérdida de los bienes y derechos se la llamaba *relegacion*. El derecho de ciudadanía no se consideraba perdido, sino en suspenso, cuando alguno caía prisionero; pero se perdia por completo cuando otro pueblo adoptaba á un ciudadano romano, porque entonces pasaba á ser miembro de una nueva corporacion política, y esto era incompatible con su primitivo carácter.

§. 3.° *Ciudadano español.*

El ciudadano romano viene siendo el tipo de los de otras naciones en las civilizaciones sucesivas. En los últimos tiempos se ha elevado el tipo á su mayor exageracion, y hasta se ha abusado de la palabra. Con la palabra ciudadano, no solo se ha querido revelar un mayor grado de libertad política, en el sentido que antes hemos insinuado; sino, aun los gobiernos mas libres, en los representativos, en los republicanos, la denominacion de *ciudadano* ha sido la fórmula de una *antítesis* social y política entre la clase media, é inferiores, y las clases superiores, la aristocracia sobre todo, contrayendo dicha denominacion, como antonomásticamente, á las primeras, y usada con énfasis y marcada tendencia de repulsion y aun desden, y ódio político de las segundas. Así algunos títulos y nobles de algunos paises de Europa, durante el fuego y demasías de una desecha revolucion política; para no ser, ni parecer *aristócratas*, como última é indubitada demostracion de que renegaban de su ascendencia, de su historia, de su pasado, de su personalidad *de ayer*, quisieron ser denominados *ciudadanos* solamente, tomando por investidura de su nueva trasformacion, en vez del casco *heráldico*, el *gorro de la libertad*. A pesar de todo, ni el abuso de la voz, ha dejado de serlo, ni en lo filológico ha prevalecido sobre el uso etimológico y genuino de ella, en las dos acepciones cardinales y comunes de *morador de una ciudad*, en contraposicion de los que lo son de una villa, ó aldea; *y súbdito de un Estado*: denominaciones generales, que comprenden sin distincion de clases, ni de individuos á todos los súbditos de una nacion, lo mismo al plebeyo que al noble, al miserable que al poderoso; habiéndose verificado acerca de esta voz el mismo abuso que respecto de la de *pueblo*, tanto entre los romanos, como entre nosotros, segun esponemos en su artículo.

En esta acepcion, decimos, *ciudadano español*: y véase sobre el uso y filología de esta voz, lo que indicamos al principio del presente artículo. En el propio sentido las voces *español*, *súbdito español*, *ciudadano español* se usan promíscuamente; aunque en realidad la palabra *súbdito* de un pais ó Estado tenga una acepcion mas lata, segun esponemos en otra parte.

La enunciativa *ciudadano español*, se ha hecho mas frecuente, y como técnica despues de las últimas reformas políticas, de medio siglo á esta parte, pues antes lo frecuente

era la de *españoles*. En su acepcion mas lata, asi la denominacion de ciudadano, como sus equivalentes mencionadas, han presentado analogías, mas ó menos marcadas con la de ciudadano entre los romanos. Hasta principios del presente siglo, era fácil distinguir en los súbditos, ó ciudadanos españeles, los *dediticios* en los miles de indios subyugados: *colonias* en las de Ultramar; asi como en estas mismas las *provincias*: y *peninsulares*, en fin, como si dijéramos los *nativos*. Habia y hay tambien la analogía de la desigualdad de derechos; pues uno era, y aun es, el de los indios: otro el de los habitantes españoles ó naturalizados en nuestras provincias de Ultramar, que, como es sabido, no rigiéndose por la Constitucion política de la Península, sino por leyes especiales, no gozan de los derechos políticos que aquella atribuye á los ciudadanos de la Península é islas adyacentes.

La cualidad, en fin, de ciudadano español se adquiere tambien, como en Roma, por *naturaleza*; y por gracia, ó *naturalizacion*, obtenida esta por los diversos medios que establecen la *Constitucion* y las leyes, de lo cual hablamos en sus artículos respectivos, sobre todo en el de ESPAÑOL, que es la fórmula adoptada por la Constitucion, y no la de *ciudadano* Véase NATURAL: NATURALEZA: NATURALIZACION: VECINO.

Retrocediendo ahora algun tanto, y dirigiendo una mirada retrospectiva á los tiempos y á los gobiernos, asi respecto de España como de Europa, hallaremos que el ejemplo que legó al mundo el pueblo rey, cuyas instituciones y leyes han servido al primero de norma por largo tiempo, hizo que se estimase aun en la edad media la cualidad de ciudadano de un Estado, y que en virtud de ella se disfrutasen ciertos derechos y prerogativas; pero la constitucion de los pueblos en la espresada época no era la mas apropósito para que se considerase y respetase el carácter de ciudadano. El sistema feudal no ofrecia por do quiera sino señores y vasallos: los hombres libres formaban entonces una muy pequeña parte de la sociedad, y carecian de importancia y de representacion. Esto no obstante, del seno del feudalismo nació á veces la constitucion libre de algunas poblaciones, á quienes, en circunstancias estraordinarias y por motivos especiales, concedian los señores la facultad de gobernarse por sí, tener su justicia de eleccion popular y gozar de estimables exenciones, derechos y libertades. En esta parte nos suministra España frecuentísimos y muy notables ejemplos en sus fueros y cartas-pueblas, hasta el punto de que no hay nacion alguna que pueda ofrecernos una historia tan interesante. El afan por llevar á cabo la reconquista justificaba estos privilegios que produjeron ventajosos resultados, porque desde que el vasallo se veía convertido en ciudadano libre, tenia interés en conservar los derechos que él y sus convecinos disfrutaban, defendiéndolos á costa de su sangre contra la invasion enemiga.

Para convencernos de esta verdad y de que los derechos de ciudadanía en España despues de la dominacion agarena renacen en los fueros y cartas-pueblas, nos bastaria abrir al acaso cualquiera de ellos. El fuero de Logroño, por ejemplo, que contiene las leyes relativas á la constitucion política de la ciudad y á los derechos de sus habitantes; que prohibe al sayon y al morisco entrar por fuerza en casa alguna: que exime á aquellos de todos los llamados *malos fueros*, como el de *fonsadera, anubda, hierro y agua caliente*: que concede á todo vecino la facultad de matar al sayon que entrare violentamente en su casa, sin pagar por eso la multa ó *omecillo*: que prohibe ejercer estos cargos en Logroño á los que no sean vecinos de la ciudad: que les permite comprar y vender heredades cómo y donde quisieren y utilizar todos los pastos, aguas, montes y tierras al rededor de su término: este fuero, decimos, es indudable que dá á los pobladores de Logroño un cierto carácter de ciudadanos, con notables derechos y prerogativas de tales.

Esto no obstante, el ciudadano de la edad media no tenia ya ni la mas remota semejanza como el que en Roma hacia las leyes y gozaba de tantos otros privilegios. Su influencia en el Estado era muy pequeña, y

entre nosotros puede decirse que no empezó á tenerla hasta que en las Córtes, compuestas al principio del clero y de la nobleza, tuvo ingreso el estado llano, que despues ha llegado á predominar en su constitucion, y entonces solo contó con un escaso número de representantes en las asamhleas nacionales.

Los filósofos y publicistas, sin embargo, no han dejado de abogar en los últimos siglos por las prerogativas sociales del individuo, formulando, ya sobre los datos de la historia, ya sobre nuevas teorías, los derechos que á su juicio debieran concederse á todos los que forman parte de un Estado ó cuerpo político, y sus doctrinas han prevalecido mas ó menos en las sociedades modernas, que todas reconocen en los miembros del Estado ciertos derechos. Estos son de dos clases, á saber, *civiles* y *políticos*, unos y otros análogos á los que hemos enumerado al hablar de la ciudadanía en Roma, por la sencilla razon de que el derecho civil moderno está enteramente basado sobre el romano, y de que en las antiguas repúblicas es tambien donde ha ido á buscarse la fórmula de todos los políticos, que no se debe por cierto al progreso de la civilizacion de nuestros dias.

Asi, pues, los derechos civiles de los ciudadanos son hoy dia entre nosotros el de patria potestad para los que están casados y tienen hijos; el de familia para todos los efectos que nacen de este vínculo social; el de dominio y libre disposicion de los bienes en vida y por causa de muerte, y como anejos á este último, el de comprar, vender, donar, arrendar, usufructuar, establecer servidumbres y demas que son consecuencia de la propiedad. Estos derechos se adquieren por ciertos medios; por ejemplo, los de la patria potestad y familia por el matrimonio, la legitimacion ó la adopcion: los de dominio y libre disposicion de los bienes por llegar el individuo á cierta edad de la vida sin que nada le estorbe el libre uso de ellos, ó por el matrimonio que le habilita para disfrutarlos antes de esta edad. Es necesario que el que haya de ejercerlos sea hombre (ó muger no sujeta á la potestad de otro) mayor de edad, en su sano juicio, natural del pais ó naturalizado en él, y que no esté desposeido de ellos por una declaracion judicial; pero cuando faltan estos requisitos, esto es, cuando las personas que tienen derechos no pueden ejercitarlos por ser mugeres, menores, dementes, estranjeros, quebrados, ó condenados por sentencia judicial, entonces los representan otras personas que suplen su incapacidad moral ó física, ó renace el ejercicio personal de los derechos cuando cesan las causas de incapacidad, como sucede á los menores que llegan á la mayor edad, á los dementes que recobran su juicio, á los suspensos por condena, cuando cesa el tiempo porque se impuso la suspension; y asi de otros. Los estranjeros naturalizados tienen los mismos derechos que los ciudadanos y los pierden por condena ó por no residir en el reino: todo con sujecion á las diferencias consignadas en las *leyes de estranjería*.

Los derechos políticos de los ciudadanos en las naciones modernas son: el de imprimir y publicar libremente sus ideas: el de poder representar á su pais en las asambleas políticas: el de nombrar á estos mismos representantes y á los individuos que componen los ayuntamientos: el de dirigir peticiones por escrito al rey ó á las Córtes: el de ser regidos por unas mismas leyes en todos sus juicios: el de ser admisibles á los empleos y cargos públicos, segun su mérito y capacidad: el de no ser detenido ni preso, ni allanada su casa, sino en los casos que marca la ley: el de no ser presos, ni procesados, ni sentenciados sino por sus jueces naturales, con arreglo á leyes preexistentes al hecho: el de no podérseles imponer por ningun delito la pena de confiscacion de bienes; y el de no ser privados de su propiedad sino por causa de utilidad pública y prévia indemnizacion. En contraposicion de estos derechos, pesa sobre los ciudadanos la obligacion de contribuir con sus haberes al sostenimiento de las cargas del Estado y de defender la patria con las armas cuando sean llamados por la ley. Los derechos políticos se conceden, ó todos, ó solo parte de ellos, ó aun se añaden algunos mas, como la libertad de

cultos, segun son los principios que sirven de base á los gobiernos. Siempre se estienden y amplían en los democráticos, en los republicanos ó en los monárquico-constitucionales, donde prevalece el principio de libertad; y desaparecen por completo ó se restringen en los teocráticos, en los absolutos, y en los constitucionales en que es fuerte y vigoroso el principio de autoridad.

Sucede con los derechos políticos, como con los civiles, esto es, que su ejercicio está sujeto á ciertas condiciones de sexo, de edad, de capacidad, de estado y otras. Asi es que las mugeres no pueden ser admitidas á los cargos públicos; los que no han cumplido cierta edad no pueden ser nombrados diputados: los que no han hecho ciertos estudios ó no tienen ciertos títulos no son admisibles en los empleos en que se exigen aquellos: los que no pagan cierta renta no pueden ser electores, y aun hay incapacidades temporales, como la que tienen los que desempeñan algunos empleos para ser agraciados con cargos de municipalidad. Tambien los derechos políticos se pierden ó queda en suspenso su ejercicio por *naturalizacion* en otro pais, por hallarse espatriado el ciudadano ó condenado por sentencia judicial á la pérdida de ellos ó á pena que la lleve consigo, ser deudor á los fondos públicos por malversacion de los mismos, etc. Véase INHABILITACION: sobre el recobro de los mismos véase REHABILITACION.

Hé aquí, brevemente espuesto, el conjunto de derechos que componen la personalidad del ciudadano. La doctrina indicada exige aun mas ámplia esplicacion que no es de este lugar. Véase DERECHOS en sus diversas acepciones. Además, como ya antes hemos dicho, nuestras leyes generales no han adoptado la denominacion de *ciudadano*: considerado el hombre en relacion con el ejercicio de sus derechos civiles se le llama PERSONA: con relacion al ejercicio de sus derechos políticos se le denomina ESPAÑOL. En todos estos artículos y sus análogos ó conexos, encontrará el lector el desarrollo de las ideas que aquí dejamos lijeramente indicadas. Pero si las leyes generales no adoptaron como dominante la denominacion de *ciudadano*, algunas leyes *forales* ó especiales sí, y de ello damos razon en el siguiente párrafo.

§. 4.° *Ciudadano en la corona de Aragon.*

Nada mas espresivo, y concreto que la notable cédula de Felipe V. Sobre el particular: dice asi:

«EL REY.—Mi Gobernador, Capitan General *in interim*, Regente y Audiencia del mi Reyno de Valencia: Por quanto me hallo informado, que los que en mis Reynos de Castilla se denominan con el nombre comun de hidalgos, con sola la distincion de ser unos de sangre y solar conocido, y otros de privilegio, estaban en mi Reyno de Valencia divididos en quatro especies, esto es, Nobles, Generosos, Caballeros y *Ciudadanos*: Que los nobles eran aquellos á quienes se habia dado Real título de tales, ya fuesen antecedentemente hidalgos de sangre, ó ya armados recientemente Caballeros (pues era preciso para serlo que tuviesen una de estas dos calidades) y aun por eso, quando al que no tenia ni una ni otra se le queria hacer Noble se le daban dos títulos ó privilegios, el primero para que fuese armado Caballero, y el segundo para que sobre este carácter recayese el de Noble, y estos se distinguian de los demas llamándose Don, de suerte que solo podian usar de este título los Nobles: Que los generosos son propiamente los hidalgos de sangre y solar conocido, descendientes de aquellos caballeros antiquísimos que fueron á la conquista de dicho mi Reyno de Valencia, ó se radicaron despues en él denominándose Generosos, como de generacion militar, los cuales no pasaron á ser Nobles, ó porque no se les concedió este privilegio ó título, ó porque contentos ó satisfechos de su hidalguía, no aspiraron á tenerle (como ha habido algunas casas que han hecho vanidad de esto). Que los Caballeros eran los hidalgos de privilegio, quienes por Real gracia se habian armado tales, ya fuese con calidad de que tuviesen voto en Cortes (como todos los antecedentes) ya fue-

sen sin ella (como regularmente se estiló limitar despues de las Córtes de ese Reyno del año mil seiscientos veinte y seis). Y que estas tres clases de Caballeros eran los que con los grandes, títulos y Barones de él concurrian y formaban todos el Estamento Militar, donde entraban sin distincion de asientos ni lugares, á diferencia de los Ciudadanos, que no entraban en este congreso. Que los *Ciudadanos* eran propiamente los que habian sido Regidores ó Jurados de la mi Ciudad de Valencia, ó habilitados con Real despacho para el concurso y sorteo que anualmente se hacia para estos oficios en dicha Ciudad, la de Alicante y San Felipe (ántes Xátiva) por particulares privilegios concedidos á estas Ciudades: los quales tambien se tenian por hidalgos, con la diferencia que los descendientes de aquellos patricios Regidores ó Jurados antigos que en los principios gobernaron la Ciudad de Valencia (que son los que se llaman *Ciudadanos de inmemorial*) se han tenido por hidalgos de sangre y solar conocido, de suerte que siempre han sido admitidos como tales sin dificultad á vestir el hábito de cualquier Órden ó Caballería Militar, no solo de las de España, sino tambien de la de San Juan, aunque de estos restan pocos que se hayan conservado en esta esfera, y los que se han mantenido en ella han procurado siempre mercedes de hábito para distinguirse de los demas, ya que no entraban en el Estamento Militar, ó porque no re les habia concedido privilegio de Nobleza, ó porque se reducian dificultosamente á entrar por privilegio: Y que los otros Ciudadanos (que se entienden los que modernamente fueron habilitados por Real despacho al concurso ó sorteo anual de Regidores ó Jurados) se han tenido por hidalgos de privilegio, considerándose el que sacaban para el concurso de estos oficios, y que estos participaban tambien los mismos privilegios que los otros, al modo que los Letrados y Médicos, y demas graduados en qualquier facultad mayor, en cuya esfera entraban todos los hijos ilegítimos de los Caballeros, los cuales aunque los padres fuesen Nobles, quedaban Ciudadanos, y no entraban en el Estamento Militar, sino estaban legitimados con Real despacho. Y porque tambien me hallo informado de los tratamientos, honores y preeminencias que gozaban los de dichas quatro clases antes del establecimiento del nuevo gobierno en dicho mi Reyno de Valencia; y aunque en la denominacion que tienen en él, distinguiéndose en dichas quatro clases de Nobles, Generosos, Caballeros y Ciudadanos, no se diferencian substancialmente de los que en Castilla y segun sus leyes gozan de las preeminencias de tales; porque así como están ceñidos en esta al concepto de derivarse de casa y solar conocido, ó traer causa de privilegio particular, convienen en Valencia con los primeros los Generosos, y en su caso los Nobles, como tambien los Ciudadanos de inmemorial; y equivalen á los segundos los que se intitulan Caballeros, y los que habian sido insaculados para sortear en oficios honoríficos de las ciudades de Valencia, Alicante y San Felipe (por especial privilegio concedido á estas). Y porque no solo dexa de ser contrario á lo establecido en la nueva planta se continuen á los que en tiempo hábil adquirieron las preeminencias de nobleza, como Generosos, Caballeros, Nobles y ciudadanos de inmemorial, y á los que han obtenido en las referidas tres Ciudades por el privilegio ó despacho para ser insaculados equivalente personal distincion, sino es que seria el restringirlos y derogalos opuesto á lo prevenido por la ley de Córdoba, por lo que toca á los que se hallan, y sus padres y abuelos estuvieron en posesion el término de veinte años prescrito en ella, y aun con notoriedad de hidalguía de sangre, y se seguirian perjudiciales consequencias y crecidos gastos contra la pública utilidad en sujetarlos á litigar con el empeño á que les estimularia el propio honor. Y en atencion á ser distantes y diversas las circunstancias en quanto á los Ciudadanos que no son de inmemorial, pues solo por particular fuero gozaban algunas prerogativas, y no por Reales privilegios; y es bien que una vez abolidos aquellos, no participen de diferencia ni otro distintivo de nobles, mayormente quando en Castilla no le

constituye el ser Capitulares ó Regidores, y únicamente podrá conferirles alguna recomendacion el haberlo sido para en el caso que en adelante pretendan privilegio de nobleza: He resuelto á consulta del mi Consejo de la Cámara de veinte y uno de junio de mil setecientos y veinte y tres declarar (como en virtud de la presente declaro) no se opone á los abolidos fueros que habia en dicho mi Reyno de Valencia, se estimen y tengan por hidalgos á los Generosos, Caballeros, Nobles y ciudadanos de inmemorial que ántes del establecimiento del nuevo gobierno fueron reputados y estuvieron, y sus ascendientes respectivamente á los de sangre y solar conocido en la posesion de tales, é igual personalmente á los que en virtud de privilegios, y que se concedieron á las Ciudades de Valencia, Alicante y San Felipe fueron insaculados, y tuvieron y gozan oficios honoríficos, y con la limitacion de participar de los efectos únicamente prefinidos por las leyes de estos mis Reynos de Castilla, sin estension á hijos ilegítimos ó espúreos, y sin perjuicio de mi real patrimonio, y lo que está mandado observar en lo tocante á contribucion para Quarteles y demas de mi Real servicio en dicho mi Reino de Valencia. Y que por lo que toca á los Ciudadanos que no son de inmemorial, cesen las preeminencias que por fuero obtenian, y se hayan y reputen sin distincion de nobleza. De que he querido preveniros para que lo tengais entendido, y cumplais y observeis, que así es mi voluntad. Fecha en Buen-Retiro á catorce de agosto de mil setecientos veinte y quatro.=YO EL REY.»

Trátase aquí, pues, de una acepcion especial de la voz *ciudadano*, no meramente usual ó comun; sino oficial y legal, y es además categórica, hallándose empleada en los primeros conceptos en las leyes, fueros, escrituras y documentos antiguos; y como categórica, formando clase con las de *nobles*, *generosos*, *infanzones*, *hombres de paraje*, etc.

No era solo en el reino de Valencia en donde se conservaba esta categoría especial de ciudadanos, esta clase media entre los *plebeyos* y *nobles*; sino en el Languedoc, en Italia y en otros puntos de Europa, de donde tal vez se trasmitió á nuestras provincias del Nordeste. Asi Bonfin, *De bannimentis* en los Estados de la Iglesia romana, cap. 46, número 10: *id circo dicendum est bannimenta nostra non intellexisse de civibus latè sumpto vocabulo; sed quatenus tertiam speciem constitutunt inter plebejos, et nobiles.* Esta tercera clase correspondia en general á lo que en Castilla y en otras provincias de España se ha llamado el *estado llano*. En algunas disposiciones legislativas especiales, sin embargo, los individuos del *estado llano* se denominaron *ciudadanos* en el mismo sentido. Asi se vé, por ejemplo, en las Ordenanzas dadas á Sevilla por Alonso el Onceno, y reformadas despues por los Reyes Católicos. «Por cuanto se contiene en la carta del Rey don Alonso, dicen aquellos Monarcas en el título *De los Mayordomos*, que los mayordomos de Sevilla han de ser dos, el uno hidalgo, el otro *cibdadano*..... por ende ordeno y mando..... que escojan dos hombres llanos y abonados y pertenecientes..... para mayordomos..... é que el uno sea fidalgo, el otro *cibdadano*: el cual mayordomo cibdadano, etc.»

Pero donde mas se generalizó y perpetuó esta denominacion, como vemos en la cédula preinserta, fué en la legislacion y prácticas de la Corona de Aragon. Distinguíanse, empero, dos clases de ciudadanos: los de *inmemorial*, que gozaban el concepto y prerogativas de hidalgos, y los simples ciudadanos. Eran estos, segun los publicistas aragoneses, *los que vivian de sus rentas sin tener necesidad de trabajar*. Constituían la clase media entre los plebeyos y los nobles. Llamábaseles tambien *ciudadanos honrados*, y *ciudadanos honorables*. La primera de estas calificaciones se aplicó despues aun á los nobles: la segunda por la inversa, hasta á las personas mas humildes. Los *ciudadanos honrados*, ó sean los ciudadanos simples, esto es, que no eran de *inmemorial*; eran los que tenian derecho á ser insaculados para los cargos de república, y por tanto los que habian sido, ó podian ser concejales por el es-

tado llano. Quien quisiere mas pormenores sobre estas clases, sus derechos y sus vicisitudes, vea á Madramany, *Tratado de la nobleza de la corona de Aragon*, señaladamente en los caps. 15, 16, 17, 18, 20 y 22 al 32.

Véase tambien á Matheu, «*De regimine regni Valentiæ*, lib. 4, §. 5: y Bas, *Theatrum jurisprudentiæ forensis valentinæ*, tomo 2, parte 1, cap. 49.

Hemos intitulado el presente §. Del ciudadano en la Corona de Aragon, por ser parte del antiguo reino el de Valencia, aunque casi especialmente concierne á este su contenido. Pero todavía se vé usada la voz en escrituras y documentos de Aragon, y lo propio respecto de Cataluña. Así dice, por ejemplo, el *utsage* 8, tít. 15, lib. 9 de las Constituciones de aquel Principado: «*Ciutadans*... sieu entre si pledejats, é exmenats axi com á caballers, etc.» Lo propio se vé en la Const. 3, tit. 11, lib. 10, y otras.

CIUDADES EPISCOPALES. Para el objeto de este artículo llamamos asi á las que son asiento de la cátedra ó silla episcopal. La enunciativa de ciudades episcopales encierra una cuestion de disciplina canónica, mas bien complicada por los autores, que bien comprendida ni espuesta. Hé aquí como Ferraris en su Biblioteca, artículo *Civitas*, reasume en este punto las diversas opiniones: *Solam eam dici civitatem, qüæ habet episcopum, quasi dignitas episcopalis civitatem constituat, et urbem cathedrali carentem appellari non posse, sustinent multi*; citando al efecto á Bártulo, Baldo y otros, el primero en el comentario á las leyes *Si hæres*, tít. *De legatis*, y final del tít. *De collegiis illicitis*, del Digesto: y el segundo en su comentario asi bien á la ley *Ex hoc jure*, tit. *De Justicia et jure* de la propia coleccion. Estos mismos autores en otros lugares sienten lo contrario, asi como otros muchos. *Alii autores plurimi censent*, añade Ferraris, *et quidem verius et melius, ad essentiam civitatis neque episcopum, neque ecclesiam cathedralem requiri*. Ya en el artículo CIUDAD, hemos indicado que, hablando de la materia, se hallan á cada paso en los autores estas enunciativas, y otras semejantes: *ciudad es la poblacion que tiene muros y obispo*: *la mera ereccion de obispo constituye ciudad*: *solo es ciudad la que tiene obispo*, etc., llegando por último á decir y asentar, por unos *que el Papa crea ciudades*; por otros que él solo las puede crear. Añádese á esto que hay *bulas* y disposiciones canónicas, que asi lo consignan, ó dan á entender. Hay en todo ello error, y verdad, confusion, y exactitud, y á discernirlas se encamina el presente artículo.

Porque efectivamente, que al príncipe secular compete el crear ciudades y villas, el conceder honores en el órden civil, atribuir autoridad y jurisdiccion, etc., sobre ser evidente en sí, es cosa que dejamos demostrada en el artículo CIUDAD. Sin embargo vemos al gefe de la Iglesia en infinitos casos hablar el mismo lenguaje potestativo en la materia de que vamos hablando, es decir, que *crea y establece ciudad*, *que eleva á ciudad á tal poblacion*; y por la inversa que la *priva del tal honor y denominacion, etc.* Entre las muchas bulas que pudiéramos citar en comprobacion de ello, lo haremos, por ejemplo, de la de Paulo V (21 de agosto de 1609) para la creacion del obispado de Arequipa en nuestras Américas: establecemos, dice el Pontífice, *oppidum Arequipa pro civitate erigi, et ut civitatem deinceps habendum*. Cuando el Papa, dice Benedicto XIV, (1) establece obispo por primera vez en una poblacion, *la eleva á ciudad* con estas fórmulas ú otras semejantes: *oppidum N. in cicivitatem, eclesiam verò in cathedralem pro uno episcopo, etc. erigimus, constituimus, etc.*

De todo ello es preciso inferir que *una cosa es la ciudad en el órden civil, otra en el órden eclesiástico*: que asi como los príncipes seculares pueden esclusivamente crear ciudades en el primer sentido; asi los Papas en el segundo: que una misma poblacion puede reunir ambos conceptos, como hoy, segun la prática y disciplina actual, los reunen todas las cabezas de diócesis, que son ciudades en sentido civil, y ciudades en sentido eclesiástico: que pueden perder, como

(1) De *Synodo diocesana*, lib. 13, cap. 7, 17 y 18.

muchas han perdido, uno de estos conceptos, sin perder el otro; aunque por conveniencia recíproca de la Iglesia y del Estado se procure que vayan unidos, como diremos y como vemos se practica: y últimamente, y segun la práctica universal lo acredita, que dichos conceptos no se escluyen, ni entre sí se perjudican, ni ninguno de ellos supone invasion de autoridad, de la secular, ó la eclesiástica, en el terreno y atribuciones de la otra. Hé aquí como Ferraris, antes citado, reasume esta misma doctrina, en parte, incontestable. *Videmus, quod regio dyademati jus civitates et villas creandi naturaliter inhæreat... de facto passim videmus plures civitates non habentes episcopum..... Vnde doctores asserentes illas solum dici civitates, quæ habent episcopum, intelligendi sunt secundum communem usum loquendi, ex quo ordinarium sit, ut unaquæque civitas unum habeat episcopum.* Es de notar que ni aun este entendido escritor, juzgando á los demas, y corrigiendo de propósito sus errores ó falta de precision, es el mismo exacto; lo uno porque no solo *regio dyademati*; sino tambien *sacræ thiaræ*, compete el crear ciudades; no en términos absolutos á cada una, sino cada una en su sentido y esfera de accion: segundo, porque no solo no es modo comun de hablar llamar solo ciudad á la que tiene obispo; sino que lo comun es el llamar ciudad á la que lo es civilmente, prescindiendo de que tenga, ó no, silla episcopal: y por último, porque no solo no es comun tampoco, el que cada *ciudad tenga su obispo*; sino que lo es lo contrario; que es mucho mayor el número de ciudades que no lo tienen; y el mismo Ferraris lo asienta asi en el lugar citado, con la interposicion solo de algunas líneas, como se vé en el texto antes inserto: *de facto passim videmus plures civitates non habentes episcopum.* Benedicto XIV, en el lugar indicado espone la misma doctrina, esto es, la peculiar facultad de la potestad temporal y de la eclesiástica para crear ciudades, pero lo hace con la precision y exactitud, que le son tan propias. Cada una de estas potestades, segun él, crea ciudades para su fin respectivo, conforme los fines de la sociedad, á cuya cabeza se encuentran: y el Papa mismo como soberano temporal crea ciudades sin obispo, ó para fines puramente seculares; citando al efecto la ereccion en ciudades en este concepto de Rosellon y de Pergula.

Pero, ¿cuáles son los efectos eclesiásticos en la creacion de ciudades, y de dónde viene el orígen de la contienda y confusion de que venimos haciendo mérito? Eso es lo que nos proponemos esponer sucintamente.

Para ello es necesario recordar lo que hemos espuesto en el artículo CIUDAD, esto es, que en los tiempos de la república, como en los primeros del imperio, *ciudad* no significaba realmente lo que hoy: es hoy una poblacion, que en su organizacion local no se distingue de las villas; sino en el título de honor; pero en los tiempos mencionados se diferenciaba realmente, no de las *villas*, en el sentido y organizacion con que hoy se conocen, pues entonces no las habia en este concepto; sino de las *aldeas y caseríos*; pequeñas poblaciones, sin organizacion especial é independiente; sino subordinadas á la *ciudad*: asi entonces ciudad, espresaba poblacion independiente, *poblacion con curia y magistratura de justicia*; poblacion, en fin, por escelencia, y por tanto poblacion principal, ó notable: lo que son hoy las ciudades y villas actuales respecto de sus *arrabales, caseríos, granjas, lugares, ó aldeas* anejas, eso era entonces la *ciudad* respecto de los *lugares*, y caseríos, de la poblacion rural (*vicus et villæ*). Por eso hemos dicho en el artículo CIUDAD que, bien apreciadas las cosas, nuestras *villas* de hoy, las principales sobre todo, hubieran sido ciudades en la antigüedad, salvo el título únicamente. Asi veremos que habia *ciudades grandes y pequeñas*; pero siempre con la denominacion de *ciudades*; ó lo que es lo mismo toda poblablacion con *curia y magistratura de justicia* era ciudad; pues fuera de ellas no habia mas que caseríos y lugares, la poblacion rural dependiente. Siendo esto asi ¿qué habia de ordenarse en los primeros tiempos de la Iglesia, sino que las sillas episcopales no se estableciesen en lugares, caseríos, granjas, castillos, (*vicis, villis, castellis*)

y sí solo en las ciudades? Pero es bien de reparar que estas ciudades no son las de hoy, desde la dinastía goda en adelante, segun dejamos espuesto en el artículo CIUDAD; siendo bien notable el error de los autores en este punto, cuando llevados del sonido solo de las palabras, han asentado en los siglos, diez al diez y nueve, como pudieron haberlo hecho, y se hizo en los siglos primeros de la Iglesia, que *conforme á los cánones solo puede establecerse cátedra episcopal en las ciudades.* La mayor demostracion del error, que siendo solo filológico, ha pasado á ser doctrinal, es en primer lugar, que muchas veces se ha establecido nuevo obispado en *villas* meramente, elevándolas luego á ciudades en sentido eclesiástico, *para salvar el principio*: y en segundo, que seria muy difícil, si no era absurdo, sostener, que en Madrid, Bilbao, y villas al modo no pudiera hoy establecerse catedra episcopal: á lo que se llega que en el Concordato de 1851, se establece obispo en Madrid, sin escepcionarse cosa alguna por ser meramente *villa*; si bien al erigirla de hecho en obispado, se salvará regularmente el principio, elevándola á ciudad, á lo menos *episcopal ó eclesiástica.*

Debe notarse en segundo lugar, que aunque al establecimiento del cristianismo no habia en el imperio otras poblaciones notables, que las *ciudades*, estas eran *grandes* y *pequeñas*: que como era natural, las autoridades provinciales, ó generales se establecian en las primeras: y que la Iglesia, acomodando en esta parte su division territorial á la division territorial política, por razones de conveniencia y utilidad espiritual, empezó á establecer sus obispos allí donde era mas empeñada la lucha contra el gentilismo, donde era mayor la necesidad, y mayores tambien las ventajas, los recursos, en las ciudades capitales por tanto. Así vemos desde luego á los Apóstoles establecer sus sillas en grandes poblaciones; y á San Pedro su cátedra, primero en Antioquía, luego en Roma, en la capital del orbe.

Lo que empezó por *razones de conveniencia*, y de actualidad, se erigió fácilmente en *consejo*, y despues en *precepto y regla de disciplina*, llevada por los autores, como hemos visto, á un estremo, que ni los tiempos, ni la verdad de las cosas permiten sostener.

Y ciertamente: muy al principio del siglo II de la Iglesia, el Papa Anacleto (elevado al pontificado en 103), cap. 3.° de su epístola segunda, inculcaba que los obispos *non in castellis, aut modicis civitatibus debent constitui; sed presbyteri per castella et modicas civitates, atque villas, debent ab episcopis ordinari, et poni.* Esta prevencion pontificia pasó luego á ser precepto canónico, como se vé en el cap. 3.°, dist. 80, del Decreto de Graciano. Desde luego se nota cuánto dista esta disposicion canónica de la doctrina de los autores, que han venido sosteniendo, que solo era ciudad la que tenia obispo; pues que en ella misma se habla de *ciudades pequeñas*: se ordena que no en estas, sino en las grandes se estableciesen obispos; lo que demuestra que antes de este acto pontificio, antes de la creacion de obispados, *las ciudades eran tales*; habia ciudades chicas y grandes, que lo eran ya, si bien en el órden civil. Lo propio veremos en las ulteriores disposiciones canónicas, que á continuacion reseñamos.

Antes de Anacleto, al finalizar el siglo I, el Papa Clemente, *epist. 1.ª ad Jacobum*, prevenia: *In illis verò civitatibus, in quibus olim apud Ethnicos primi Flamines eorum, atque primi legis doctores erant, episcoporum primates poni, vel patriarchas. B. Petrus præcepit, qui reliquorum episcoporum causas et majora, quoties necesse foret, negotia in fide agitarent. In illis autem civitatibus, in quibus dudum apud prædictos erant archiflamines, quos tamen minores tenebant, quam memoratos primates, archiepiscopos instituí præcepit. In singulis verò reliquis civitatibus singulos, et non binos, vel ternos aut plures, episcopos constituí præcepit, qui non primatum, aut archiepiscoporum, aut metropolitanorum nomine, quia matres civitatum non tenent; sed episcoporum tantum vocabulo potirentur; quoniam nec inter ipsos Apostolos par institutio fuit, sed unus omnibus præfuit* (1).

Muy pocos años despues el Papa Evaristo,

(1) Cap. 2, Dist. 80, id.

elevado á esta dignidad en 112, decia asi bien en su epístola 2.ª, *quia alibi episcopi constitui non possunt, nisi in civitatibus non mínimis* (1).

Urbes, et loca, decia el Papa Lucio I, elevado al sólio pontificio en 255, *quibus primates præsidére debent, non à modernis; sed etiam multis ante adventum Christi, sunt statutæ temporibus: quarum primates, etiam gentiles, pro majoribus etiam negotiis appellabant. In ipsis verò urbibus post Christi adventum Apostoli, et successores eorum, patriarchas, et primates possuerunt, ad quos episcoporum negotia (salva in omnibus apostolica auctoritate), et majores causæ post apostolicam sedem sunt referendæ* (2).

En 347 los PP. del Concilio de Sárdica, cán. 6, ordenaban: «Si repentinamente una aldea, ó *ciudad pequeña*, á la que basta un presbítero, quisiere que se ordenase para ella un obispo, *de modo que se envilezca el nombre y autoridad de tal*, no deben los invitados de dicha provincia ordenarle, *á no ser que sea para aquellas ciudades que ya los han tenido, ó si es para alguna ciudad ó pueblo tan considerables, ó de tanta poblacion, que merezcan tener obispo.*»

A fines del siglo IV el concilio de Laodicea establecia asi bien en su cánon 57: «No conviene consagrar obispos para *aldeas ó villas* (*in vicis et villis*); sino que han de establecerse visitadores, y *los que hasta el presente se encuentren ordenados*, no deben hacer nada sin conocimiento del obispo de la ciudad.»

A mitad del siglo V decia el Papa Leon, escribiendo á los obispos de Africa, epíst. 85, cap. 2.º: «*Illud sané, quod ad sacerdotalem pertinet dignitatem, inter omnia volumus canonum statuta servari*, ut non in quibuslibet locis, neque quibuslibet castellis, et ubi ante non fuerunt, *episcopi consecrentur: cum ubi minores sunt plebes, minoresque conventus, presbyterorum cura sufficiat: episcopalia autem gubernacula non nisi* majoribus populis, *et frecuentioribus civitatibus oportet præsidere: ne, quod sanctorum patrum divinitus inspirata decreta vetuerunt, viculis et possessionibus, vel obscuris et solitariis municipiis, tribuatur sacerdotale fastigium.*»

Poco tiempo despues el concilio de Calcedonia declaró en su cánon 12: «Hemos llegado á saber, que algunos, en contra de lo dispuesto por los cánones, y apoyados en una pragmática imperial, dividen la provincia en dos, de modo que se encuentran en una dos metropolitanos: establece, pues, el sínodo, que ningun obispo se atreva en adelante á obrar así, y que el que no obedeciere, sea privado de su grado. Y si antes algunas ciudades, mediante la misma pragmática imperial, habian adquirido el honor de metropolitanas, séanlo *tan solo en el nombre*, y el que rige su iglesia, esto es, su obispo, reservará el privilegio de metropolitano verdadero al obispo propio, que por derecho le corresponde.»

En el siglo XIV, por último, el Papa Juan XXII, teniendo en consideracion que la diócesis de Tolosa, en Francia, era estensa por demás: que las rentas y emolumentos sufragaban para mas de una diócesis: y que podian ser elevadas á este rango algunas villas considerables, comprendidas en dicha diócesis, establecia: «*Ex certa nostra scientia, de fratrum nostrorum consilio concordi, et Apostolicæ plenitudine potestatis, ad laudem Dei, exaltationem Ecclesiæ, fideliumque salutem, episcopatum ipsum dictamque diœcesim tholosanam, Apostolica auctoritate dividimus in quinque diœceses, quas per certos distingui limites faciemus: Volentes ac decernentes quod, præter civitatem Tholosanam, quæ suam propriam et distinctam habebit diœcesim, certis finibus limitandam, subscriptæ* quatuor villæ, *quarum quamlibet, eisdem consilio et auctoritate*, in civitatem erigimus, et civitatis vocabulo insignímus.....»

Preciso es inferir de estas disposiciones canónicas la inexactitud, ya demostrada, de los autores antes indicados: que ni en la letra ni en el espíritu los cánones exigian otra cosa que el que los obispos se estableciesen *en poblaciones notables, populosas*: que esta es la índole y cualidad esencial de la *ciudad episcopal*: y que si una villa se erige hoy en cabeza de diócesis, declararla el Papa *ciu-*

(1) Decreto de Graciano, Cap. 4, cuestion 2, causa 3.
(2) Cap. 1. Distincion 80, id.

dad, es declararla *poblacion notable*, ó *canónicamente capaz de tener obispo*: declaracion, que, para salvar el principio, no se omite, aunque dicha poblacion fuera antes ciudad en sentido civil, como vemos en la creccion citada del obispado de Arequipa, que siendo antes ciudad por concesion ó ereccion del Monarca, todavía Paulo V dice, *la erige en ciudad, y quiere que así se llame.* Véase OBISPO.

CIUDADES HANSEÁTICAS. Esta liga ó asociacion, puramente mercantil, de ciudades libres y no libres de Europa, llegó á ser una *federacion*, un Estado político, que trataba de igual á igual con los soberanos de los diversos Estados, formando así parte sus actos de soberanía del derecho internacional, por cuyo motivo, aunque ya casi únicamente como un hecho histórico, consignamos algunas indicaciones relativas á dicha federacion.

En la actualidad se dá el nombre de ciudades hanseáticas, á Hamburgo, Bremen y Lubeck, ciudades libres de Alemania, que son las únicas que continuan formando la antigua *hansa teutónica*, establecida para proteger el comercio de las que pertenecian á la confederacion.

No están acordes los autores sobre la etimología de la palabra *hanseáticas*. Unos quieren que se escriba *Anseáticas*, y derivan esta voz de *Aan-zu*, palabra alemana que significa *á orillas del mar*, fundándose en que casi todos los pueblos que componian la primitiva liga, se hallaban situados en las costas del Báltico, ó en las del Océano, ó junto á los rios. Otros pretenden que debe escribirse *Hanseáticas*, como derivacion del antiguo verbo aleman *Hansen*, asociar, ó del sustantivo *hanse*, asociacion, alianza ó impuesto comercial. Esta opinion parece mucho mas probable, ya consideremos la propiedad y exactitud con que la palabra primitiva manifiesta la idea ó pensamiento que se quiere espresar por la derivada; ya atendamos á que, siendo aquella voz de orígen aleman, como lo es la asociacion que designa, los mismos alemanes han escrito y escriben todavía *hansestadte* para denotar las ciudades hanseáticas. La palabra *hansestadte* se compone de *hanse*, liga, y *stadte*, ciudades. En los tratados de comercio la liga se denomina *hansa* ó *teutónica*; y las ciudades *hanseáticas*.

Tambien se dividen las opiniones respecto al orígen de esta confederacion. Unos afirman que Bremen, ciudad de la Sajonia baja, fué la que la estableció en 1164: otros quieren que tenga su principio en la alianza de Hamburgo y Lubeck en 1241: otros por fin sostienen que no se sabe cómo, ni en qué época se formó, puesto que los nombres *hansa teutónica* ó *liga hanseática* no aparecen en ningun escrito hasta el año 1315.

Se ignora igualmente cuántas y cuáles fueron las ciudades que al principio se contaban en la asociacion, y solo se sabe que su número se aumentó poco á poco en términos, que en 1360 ya pertenecian á la confederacion Lubeck, Hamburgo, Stada, Brumen, Weismar, Rostock, Estralsund, Greiffswald, Anklam, Demmin, Estetin, Colberg, Kel, Neuffgard, Culm, Torn, Elbing, Dantzick, Konigsberg, Brunsberg, Landiberg, Riga, Dorpt, Reval, Pernau, Colonia, Dortmund, Post, Munster, Cosfeld, Osnabruck, Brunswick, Magdemburgo, Hildesheim, Hanover, Luneburgo, Utrech, Zwoll, Ileselt, Deventer, Zutphen, Ziriksie, Brille, Midelburgo, Dordrecht, Amsterdam, Campen, Groeningen, Arnemaydem, Ardewick, Estabern y Wisby en la isla de Gotland. Posteriormente fueron admitidas en la confederacion Brujas, Bergen, Novogorot, Lóndres, Dunkerke, Amberes, Ostende, Rotterdan, encontrándose tambien en las antiguas listas Calés, Ruan, San Malo, Burdeos, Bayona, Marsella, Mesina, Nápoles, Lisboa, Barcelona, Sevilla y Cádiz. Estas no fueron aun las únicas poblaciones que contó la hansa, puesto que en la asamblea general celebrada en Colonia en 1369 se hallaban representadas ciento diez y siete ciudades.

El principal objeto de la liga fué proteger y defender el comercio de las ciudades confederadas, que en aquella época sufria frecuentes quebrantos; ya por los muchos piratas que infestaban los mares, ya por los innumerables ladrones que interceptaban los caminos; ya en fin por las arbitrariedades de

los príncipes y barones que vejaban hasta á los mismos náufragos, apoderándose de los efectos que estos infelices habian salvado de su desgracia. Despues se propusieron estender el comercio esterior: ejercerle esclusivamente en los mercados que frecuentaban, y terminar sus diferencias por arbitraje. Para ser admitidos en la liga se presentaba solicitud, la cual se discutia préviamente, y caso de accederse á ella, se participaba á todos los paises en que el hansa gozaba privilegios, á fin de que los disfrutasen los nuevos confederados. Desde este momento la ciudad admitida venia obligada á contribuir con su contingente de hombres, bajeles y dineros; pero no todas obtenian las mismas ventajas, pues las condiciones variaban segun el carácter y la posicion de cada una, si bien las que primeramente formaron la asociacion, establecieron entre sí la mas rigorosa igualdad. La liga se dividió al principio en tres secciones, que despues ascendieron á cuatro, cuyas capitales fueron Lubeck, Colonia, Brunswick y Dantzick. En cada una de ellas celebraban anualmente su asamblea particular los diputados de la seccion, y cada trienio se reunia la general, á no ser que circunstancias urgentes obligasen á tener reuniones estraordinarias. Las asambleas generales se celebraban ordinariamente en Lubeck, que era la ciudad principal de la confederacion, donde estaban los caudales destinados á los gastos comunes. Habia varias causas por las cuales se escluía de la liga á una ciudad confederada. Tales eran, la rebelion de los ciudadanos contra sus magistrados; la connivencia con los enemigos del *hansa*, y el recurrir á tribunales que no fuesen de la liga.

A fines del siglo XV el hansa se hallaba en un estado tan floreciente, que pudo proponerse grandes empresas, y hasta conseguir su independencia; pero satisfecha con sus privilegios, y ambicionando únicamente crecidas ganancias y el esclusivismo comercial, solo fijó sus miras en una economía minuciosa, falta de esperiencia y limitada á lo presente, sin procurarse solidez y estabilidad para lo futuro.

Entretanto acontecimientos inesperados iban á dar nuevo aspecto al mundo; á producir un cambio estraordinario en los diferentes ramos del comercio, y preparar la decadencia de la confederacion hanseática. La completa conquista de las islas Canarias, y el descubrimiento de América, llamaron pronto nuestra marina mercante y la de otras naciones hácia las costas de Guinea y del Nuevo Mundo, disminuyendo de este modo la navegacion del Báltico y la importancia de la liga: los ingleses hallaron el medio de llegar á Arcángel por el mar Blanco, evitando asi la necesidad de atravesar el peligroso estrecho del Sund para continuar su comercio con aquella parte de Rusia, lo cual produjo muchos perjuicios á la confederacion; y los soberanos de España, Francia, Inglaterra y otros estados de Europa, deseando emancipar á sus vasallos de la opresion mercantil que el hansa ejercia sobre ellos, favorecieron el comercio con los paises recien conquistados ó nuevamente descubiertos, formando al efecto compañías particulares en sus respectivos reinos, y anulando todos los privilegios que en los mismos disfrutaba la liga hanseática. Tambien los anularon varios príncipes alemanes; pero el hansa opuso á sus decretos una tenaz resistencia la cual ellos consideraron, atentatoria á su soberanía. Esto produjo una guerra que ocasionó inmensos gastos á la confederacion y fué otra de las causas de su decadencia, porque muchas de las ciudades, no queriendo ó no pudiendo satisfacer sus contingentes, se retiraron de la asociacion, de la cual ya no podian prometerse ganancias, sino pérdidas y desazones.

Todos estos acontecimientos verificados en poco tiempo, disminuyeron rápidamente el comercio de la liga de tal modo, que á mediados del siglo XVI se hallaba ya en su mayor decadencia. En vano se hicieron esfuerzos en 1560, 1571 y 1579 para sacarla de su abatimiento: en vano fué reformada bajo un nuevo plan en 1604, y se publicó á los diez años el código de las leyes náuticas y comerciales que debian regirla: todo fué inútil, porque su prosperidad estaba basada en los privilegios

y el monopolio, y aquellos se habian anulado por los monarcas, mientras este era mirado con horror por la mayor parte del comercio que ya comprendia sus perniciosos efectos. Asi llegó aquella poderosa asociacion á quedar reducida á algunas ciudades de la parte septentrional de Alemania, y últimamente á las de Hamburgo, Bremen y Lubeck, que hoy son otras tantas repúblicas de la Confederacion Germánica.

La antigua capital de la liga, la opulenta Lubeck, fué la que mas sintió los efectos de la decadencia hanseática. Situada en punto mas desventajoso para el comercio que las otras dos ciudades, no ha podido recobrar su antiguo esplendor; Bremen continúa en un estado floreciente, debido á sus muchas fábricas y á sus importantes especulaciones; y Hamburgo se reputa por una de las primeras plazas comerciales de Europa. Esta última ciudad es la que mas constantemente ha seguido sus relaciones mercantiles con España, si bien fueron interrumpidas en 1751 á consecuencia de un tratado que hizo con los moros en perjuicio de nuestra patria. El resultado de este convenio fué la prohibicion de admitir sus buques y géneros en los puertos y dominios españoles, decretada en 19 de octubre del mismo año; pero las satisfacciones que dieron los hamburgueses obligaron á suspender los efectos de esta dirposicion en 2 de julio de 1752. Anulado por fin aquel tratado, se decretó en 14 de noviembre siguiente que volviesen á admitirse en los mismos términos que antes, desde cuya época siguen frecuentando nuestras costas. La alianza que en el dia une á Hamburgo, Bremen y Lubeck, es solo un remedo de la antigua liga; pero ya no existe aquella union íntima, ni aquellas fuerzas respetables que la hacian temible hasta á los mismos soberanos del Norte.

Hemos dicho que esta federacion llegó á ser soberana, tratando de igual á igual con los soberanos de los demas Estados: formaba alianzas y celebraba tratados: declaraba y hacia la guerra: en cada ciudad federada tenia senadores y el conjunto de todos formaba el Senado ó Dieta general: tenia cónsules, procónsules, procuradores, diputados y oradores: y enviaba y recibia embajadores ordinarios y estraordinarios.

Hé aquí en confirmacion el preámbulo del tratado de comercio de 1607 entre dichas ciudades y Felipe III, Rey de España; pero como Rey de Portugal: «Sea notorio y manifiesto á todos en general, y á cada uno en particular, que habiendo enviado las Ciudades de la Confederacion de la hansa teutónica los meses passados por sus Embaxadores á los Señores Juan Dommato, Doctor en ambos Derechos, su Síndico y Orador, Henrico Broques, Senador de Lubeck, Hieronimo Bogler, Senador de Amburgo, y Arnoldo Wanholten, Senador de Danzik, al Rey nuestro Señor, para que en primer lugar diessen la enhorabuena á su Magestad, assi de la felize entrada, y continuacion en el Gobierno de sus Reynos, como del nacimiento de la Real Sucession; y para que juntamente renovasen los Pactos, y Confederaciones de la antigua amistad, pidiendo la confirmacion, y aumento de los Privilegios antiguos, de que han gozado en los Reynos de Portugal, y que siendo posible, se estendiessen á los de Castilla: su Magestad, despues de haber recivido y oido á los dichos Embaxadores, graciosa, y amigablemente, y hecho examinar en su Supremo Consejo de Estado lo que los dichos Embaxadores, assi de palabra, como por diferentes escritos han propuesto, y representado, y lo que sobre todo de una, y otra parte se ha replicado; mirando todo con prudente y maduro consejo, usando de su acostumbrada benignidad, y clemencia, y particularmente movido del amor que siempre ha tenido á las dichas Ciudades, con desearles todo bien y aumento: ha sido servido de mandar, convenir, assentar, y concertar con los dichos Embaxadores, en nombre de las dichas ciudades, lo siguiente... etc.»

Las ciudades no libres continuaban sujetas á sus respectivos soberanos, salvo en cuanto á las franquicias concedidas por estos mismos á la federacion ó Hansa Teutónica. Con el tiempo dichos Soberanos prescribieron á las ciudades de sus dominios separarse de la liga.

Los privilegios de esta eran inmensos. Hé aquí una indicacion de los principales de ellos en la Corona de España.

Estendiendo Felipe III á las provincias de Castilla y Andalucía el tratado de 1607, aprobado para Portugal en el mismo año (28 de setiembre), concedió entre otras cosas á los hanseáticos:

1.° Libre arribo á los puertos de España sin pasaporte ni licencia, en navíos propios ó ajenos.

2.° Exencion de visita para sus buques....

4.° Facultad de depositar las mercancías en los reales almacenes por un año y un dia....

6.° Libertad de derechos del oro, plata, trigo, y de las maderas de construccion, utensilios y armamento de sus buques.

7.° Libertad de alcabalas de los artículos de consumo, y vestidos de su uso.....

10. Libre tránsito por el reino comprando y vendiendo, pudiendo verificar el trasporte en caballos, mulas ó carros.

11 Libertad de posturas á sus mercaderías, y de vender á cuanto mas pudieren.

12. Libertad de valerse ó no de corredores.

13. Libertad de vender á quien quisieren sin sujecion ó tanteo, ni otra restriccion.....

17. Preferencias sobre otros en hacer labrar y reducir á moneda el oro ó plata de su propiedad.

18. Exencion de toda jurisdiccion civil y criminal, salvo de su juez especial conservador.

19. Solo este, y no otro juez, ni magistrado podria registrar sus casas.....

22. Siendo hanseáticos los colitigantes en juicio civil ó criminal, las apelaciones irian á la Hansa Teutónica; siendo hanseática solo una de las partes, ante el Consejo civil de Sevilla...

24. Exencion de todo cargo, ú oficio patrimonial ó personal, tutela, pension, tributo ordinario ó extraordinario, y del servicio militar de mar y tierra.

30. De sus abintestatos conoceria solo el cónsul y juez conservador.....

37. En caso de guerra podrían retirarse del reino con sus mercaderías, debiendo ser requeridos con anticipacion de año y dia.

38. Exencion de embargos y represalias para sus buques.....

43. El Hansa podia constituir uno ó mas cónsules, para defensa de sus privilegios en union del juez conservador.

44. Facultad de nombrar un encargado con entrada franca en el Palacio real, para tratar de sus privilegios.

45. Facultad de edificar dentro de Sevilla, y erigir casa pública del Hansa, y lonja.

En 26 de enero de 1648 Felipe IV confirmó las prerogativas y tratados anteriores con el Hansa Teutónica, añadiendo todavía:

1.° Que pudieran establecer casas de contratacion en estos reynos.

2.° Que asimismo pudiesen establecer consulado en todos los puertos.

3.° Tener agente en la Corte.....

6.° Libertad de embargo y aposentamiento de los edificios en que morasen....

15. El juez conservador que tuviesen en Sevilla podia dictar sentencia sin apelacion hasta en cantidad de diez mil maravedises...

18. Que al viajar por el reino se les facilitase posada y mantenimientos por su justo precio.....

20. El juez conservador podria multar hasta cincuenta ducados á los que quebrantasen los privilegios de los hanseáticos.....

27. No procederia apelacion de sentencia definitiva no excediendo de cien ducados el valor de lo litigado.....

29. Solo el juez conservador podria ejecutar sus sentencias, y las dadas por los jueces de apelacion.....

31. En caso de naufragio, ni el fisco, ni los particulares podrian apoderarse de los efectos que se salvasen.....

33. Caso de necesitar interpretacion los privilegios de los hanseáticos, aquella *seria siempre en favor de estos.*

Los tratados y confirmaciones citadas pueden verse en las colecciones diplomáticas de Abreu y de Dumont, en los años y fechas correspondientes.

CIUDADES DE VOTO EN CORTES. Véase **CORTES.**

ERRATAS IMPORTANTES.

PÁG.	COL.	LIN.	DICE.	LÉASE.
63	1.ª	7	**CATEGNESIS** (1).	**CATEQUESIS.**
153	1.ª	40	en 118	en 418
261	2.ª	14	*una con una*	*uno con una*
306	2.ª	13	quito	quinto
307	2.ª	8	abogado	abogando
348	2.ª	33	**alcatorios**	**alcatorios.**
358	1.ª	27	pravidad	pravedad.
365	1.ª	6	precedentes	procedentes
366	2.ª	19	vencidos	vendidos
394	2.ª	29	puede dividir	puede no dividir
394	2.ª	31	contratados.	contra todos.
497	2.ª	41	apopeya	epopeya
574	2.ª	23	pedia	podia
620	1.ª	21	**ARCHIVO**	**ARCHIVO**
648	1.ª	23	criminales	tribunales
666	1.ª	24	atenuante:	agravante:
691	2.ª	9	á los que siguiesen	á los que no siguiesen
693	1.ª	14	y por la causa	y son la causa
696	1.ª	4	Trosinó	Zósimo
697	1.ª	35	esplorarlos	esplotarlos
702	2.ª	21	Wornis	Worms
706	2.ª	35	Amador	Amadeo
723	1.ª	37	*sen*	*seu*

(1) Por yerro de imprenta se ha cometido igual errata al hacer uso de esta voz en el artículo al que sirve de epígrafe, y en los de CATECISMO, CATECÚMENO, CATEQUISMO, CATEQUISTA Y CATEQUIZAR; de modo que cuantas veces dice *categnesis*, debe leerse *catéquesis*.